INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

DOCTORADO EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
RVOE 2006481

LA LEGALIDAD Y RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN CONTRATACIONES PÚBLICAS FEDERALES. APLICACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN.

TESIS
QUE PARA OBTENER EL GRADO
DE DOCTOR EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

PRESENTA

JOSÉ MANUEL ARCINIEGA RENDÓN

DIRECTOR:

DR. SERGIO RICARDO MÁRQUEZ RÁBAGO

Ciudad de México Noviembre 2017

Dedicatoria

A mi familia por haberme cedido gustosamente su tiempo para la realización de este sueño.

A Los servidores públicos responsables de las áreas de contrataciones públicas que a pesar de la selva jurídico-administrativa en la que se arriesgan todos los días, proporcionan, invariablemente los insumos y servicios necesarios para que funcione el Estado mexicano.

Agradecimientos

A mis sinodales, los distinguidos doctores:

Director de tesis:

- *Sergio R. Márquez Rábago*

Lectores:

- *José Juan Sánchez González*
- *Roberto Moreno Espinosa*

Revisores:

- *Patricia Villasana Rangel*
- *Ricardo Jesús Sepúlveda Iguíniz*

Por su gran compromiso intelectual con la Administración Pública Mexicana que los llevó a participar en la construcción y revisar con detenimiento más de 1000 cuartillas de la tesis y sus anexos hasta lograr un documento de uso diario en las áreas de contrataciones públicas.

A María del Carmen Bacallao Tafoya, por su inteligencia y compromiso en el desarrollo de esta tesis.

RECONOCIMIENTOS

A Fernando Gómez de Lara, destacado docente, abogado, consultor y capacitador en materia de contrataciones públicas, además de ser el autor de la obra "Comentarios a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público" que con su tercera edición es la más completa y las más consultada, tanto por los servidores públicos que realizan los procedimientos de contratación como por las empresas que proveen bienes o servicios a los entes públicos.

A Sergio Eduardo Huacuja Bentacour, destacado jurista reconocido como el mejor especialista, tanto en lo académico como en el litigio, relacionado con el régimen de contrataciones públicas y responsabilidades administrativas de los servidores públicos.

ÍNDICE

ABREVIATURAS Y SIGLAS UTILIZADAS I

INTRODUCCIÓN III

CAPÍTULO I

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: ANTECEDENTES DE LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS Y SUS ORGANISMOS INTERNACIONALES.

1. Nota introductoria 1

2. Administración pública 2

A) Definiciones 3

B) Estudio del objeto de la Administración Pública 7

C) Objeto de estudio de la Administración Pública 9

3. Adquisiciones Públicas en la antigüedad 13

4. Evolución del artículo 134 constitucional en México 16

5. Legislación básica de 1917 a la fecha, en materia de contrataciones públicas 18

6. Evolución de la Ley de Adquisiciones de 1965 a la fecha 23

7. Mejores prácticas en licitaciones públicas 30

8. Organismos internacionales y adquisiciones públicas 31

A) Fondo Monetario Internacional 32

B) Banco Interamericano de Desarrollo 33

C) Banco Mundial 37

9. Red Interamericana de Compras Gubernamentales 40

CAPÍTULO II

TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN EN CONTRATACIONES PÚBLICAS.

1. Nota introductoria 49

2. Consideraciones fundamentales de las adquisiciones: 52
A) Transparencia 53
a) Principio doctrinal 53
b) Marco normativo 57
i) Fundamento constitucional 58
ii) Leyes reglamentarias 60
c) Organismo garante 64
d) Aplicación a las contrataciones públicas 65
e) Sistema Nacional de Transparencia 67
B) Rendición de cuentas 72
a) Principio doctrinal 72
b) Marco normativo 76
i) Fundamento constitucional 76
ii) Leyes reglamentarias 80
c) Organismo coadyuvante de la Cámara de Diputados 82
d) Aplicación a las contrataciones públicas 83
e) Sistema Nacional de Fiscalización 86
C) Combate a la corrupción 89
a) Principio doctrinal 89
b) Marco normativo 100
i) Fundamento constitucional 100
ii) Leyes reglamentarias 101
c) Órganos de aplicación 104
d) Aplicación a las contrataciones públicas 107
e) Sistema Nacional Anticorrupción 110

i) Leyes que integran al Sistema Nacional Anticorrupción 112
ii) Órganos competentes 114
iii) Aplicación en las contrataciones públicas 116
3. Cuadros resumen 119
A) Transparencia 119
B) Sistema Nacional Transparencia 120
C) Rendición de cuentas 122
D) Sistema Nacional de Fiscalización 124
E) Combate a la corrupción 125
F) Sistema Nacional Anticorrupción 126

CAPÍTULO III

LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS, SU MARCO NORMATIVO Y SU PROFESIONALIZACIÓN.

1. Nota introductoria 127
2. Procedimientos de contratación pública 128
A) La contratación pública como contrato administrativo 129
B) Procedimientos a seleccionar 131
a) Licitación pública 131
b) Licitación privada o invitación a cuando menos tres personas 135
c) Adjudicación directa 136
3. Marco normativo de las licitaciones públicas 137
A) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 137
B) Tratados internacionales de libre comercio 139
C) Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y

Servicios del Sector Público 143

D) Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 144

E) Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 147

F) Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 149

a) Marco normativo del Manual Administrativo 150

G) Marco normativo y criterios jurisprudenciales del régimen de adquisiciones públicas correlacionado 155

4. Causales de inconformidad 206

A) La convocatoria a la licitación y las juntas de aclaraciones 206

B) La invitación a cuando menos tres personas 214

C) El acto de presentación y apertura de proposiciones 214

D) El fallo 218

E) La cancelación de la licitación 219

F) La falta de formalización del contrato 220

5. Profesionalización en contrataciones públicas 223

A) Principios doctrinales 223

B) Marco normativo 227

a) Fundamento constitucional 227

b) Leyes reglamentarias 228

C) Órganos de ejecución 229

D) Aplicación a las contrataciones públicas 231

CAPÍTULO IV

DEFENSA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN SU CARÁCTER DE LICITANTE O PROVEEDOR.

1. Nota introductoria 237

2. La relación administración-administrado 238

A) La relación jurídico-administrativa 244

B) Los derechos públicos subjetivos del estado y del gobernado 245

C) Derechos y obligaciones administrativas 246

3. Medios de impugnación aplicables a las contrataciones públicas 246

A) El control jurisdiccional 247

a) La justicia administrativa 247

B) La instancia y el recurso administrativo 248

a) Reformas a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en materia de solución de controversias 250

i) La instancia de inconformidad 252

ii) El procedimiento de conciliación 255

iii) El arbitraje y otros mecanismos de solución de controversias y competencia judicial 256

b) El recurso de revisión 259

C) El juicio contencioso administrativo 260

a) El Tribunal Federal de Justicia Administrativa 261

i) El procedimiento contencioso administrativo (juicio de nulidad) 262

D) El juicio de amparo 263

a) Juicio de amparo indirecto 266

b) Juicio de amparo directo.....267

CAPÍTULO V

HERMENÉUTICA JURÍDICA. ARGUMENTACIÓN Y DIVERSOS MÉTODOS DE INTERPRETACIÓN JURISDICCIONAL

1. Nota introductoria.....271

2. Hermenéutica jurídica.....272

A) Aproximación a la hermenéutica.....273

3. Argumentación jurídica.....278

4. Métodos de interpretación usados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.....282

A) Método gramatical o literal.....284

B) Método histórico e histórico progresivo.....286

C) Método lógico.....287

D) Método sistemático, integral o armónico.....287

E) Método genético- teleológico.....288

F) Método funcional.....289

G) Método doctrinal.....289

H) Método legal.....290

I) Método de interpretación auténtica.....291

J) Método de interpretación jurídica.....291

CAPÍTULO VI

RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN MATERIA DE ADQUISICIONES PÚBLICAS.

1. Nota introductoria.....295

2. Suprema Corte de Justicia de la Nación.....296

A) Antecedentes 297
3. Catálogo de Voces 299
4. Desarrollo del Catálogo de Voces de la LAASSP 300
A) Acto administrativo 302
i) Contradicción de Tesis: C.T. 17/2005-PL 302
B) Acuerdos comerciales. Comunidad Europea 309
i) Amparo en Revisión: A.R. 1725/2004 309
ii) Amparo en Revisión: A.R. 1091/2007 315
C) Adjudicación directa 322
i) Controversia Constitucional: C.C. 54/2003 322
D) Artículos de la Ley de la materia 326
a) Artículo 59 de la LAASSP 326
i) Amparo en Revisión: A.R. 89/2012 326
ii) Amparo en Revisión: A.R. 851/2006 330
b) Artículo 60 de la LAASSP 337
i) Amparo en Revisión: A.R. 316/2006 337
c) Artículo 65 de la LAASSP 342
i) Amparo en Revisión: A.R. 967/2006 342
d) Artículo 69 de la LAOP 344
i) Contradicción de Tesis: C.T. 86/2007-PS 344
e) Artículo 95 de la LAOP 350
i) Amparo en Revisión: A.R. 219/2001 350
E) Comunidad Europea 353
F) Contratos 353
a) Contrato administrativo 353

i) Amparo en Revisión: A.R. 159/2000 353

ii) Amparo en Revisión: A.R. 225/99 363

b) Contrato de adquisiciones con entidades de la Administración Pública Federal 371

i) Amparo en Revisión: A.R. 460/2001 371

c) Contrato de adquisiciones. Naturaleza jurídica. Incumplimiento cláusulas esenciales 377

d) Contrato de obra pública 377

e) Gastos financieros por incumplimiento contractual. Cláusulas esenciales, naturales e incidentales 377

f) Pacto comisorio expreso (rescisión) 377

g) Rescisión de 377

G) Extranjeros participación de. En licitaciones 377

i) Amparo en Revisión: A.R. 1520/2004 377

H) Fianzas 379

i) Contradicción de Tesis: C.T. 29/2005-PS 379

a) Fianza de empresa (afianzadora) 383

b) Exigibilidad de la fianza 383

I) Garantías 383

a) De audiencia 383

i) Amparo en Revisión: A.R. 626/2010 383

ii) Amparo en Revisión: A.R. 587/2011 385

iii) Amparo en Revisión: A.R. 169/2001 390

b) De equidad 396

c) De seguridad jurídica 396

J) Inhabilitación temporal de participantes en licitaciones públicas (art. 60 LAASSP) 396

i) Contradicción de Tesis: C.T. 279/2010 396

ii) Amparo en Revisión: A.R. 984/2007 398

iii) Amparo en Revisión: A.R. 1389/2006 402

K) Juicio de amparo indirecto en materia de adquisiciones 405

i) Contradicción de Tesis: C.T. 162/2015 405

ii) Contradicción de Tesis: C.T. 409/2010 409

a) Jurisprudencia de la Quinta Época 411

b) Suspensión del acto reclamado 411

L) Junta de aclaraciones 411

M) Legislatura local 411

N) Leyes 411

a) Congreso de la Unión 412

i) Amparo en Revisión: A.R. 489/2007 412

b) Estatales 419

c) Exposición de motivos (no conlleva inconstitucionalidad) 419

d) Garantía de legalidad 419

e) Leyes privativas 419

O) Libertad, garantía de. 419

a) De trabajo 419

i) Amparo en Revisión: A.R. 1441/98 419

b) De competencia económica 427

P) Licitación 427

a) Convocatoria a la licitación 427

b) Licitación pública internacional 427
c) Naturaleza jurídica de la 427
Q) Licitante 427
a) Reasignación de licitante ganador primario 427
R) Monopolios 427
S) Recursos 427
a) Recurso de inconformidad 427
b) Recurso de revisión 428
T) Sanción por infracciones a la LAASSP 428
a) Multas a licitantes 428
b) Sanciones impugnadas (sub júdice) 428
c) Pago de gastos financieros 428
d) Sanción trascendente 428
U) Salarios mínimos, Comisión Nacional de los 428
V) Tratados de libre comercio 428
W) Penas vs sanción administrativa 428
X) Precio conveniente 428
CONCLUSIONES 431
FUENTES DE INFORMACIÓN 437

ABREVIATURAS Y SIGLAS UTILIZADAS

A.R.	Amparo revisión
AELC	Asociación Europea de Libre Comercio
AH	Accountability Horizontal
AIF	Asociación Internacional de Fomento
ALADI	Asociación Latinoamericana de Integración
APF	Administración Pública Federal
Art.	Artículo
ASF	Auditoría Superior de la Federación
BID	Banco Interamericano de Desarrollo
BIRF	Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
BM	Banco Mundial
C.C.	Controversia Constitucional
C.T.	Contradicción de Tesis
CAD/DAC	Comité de Ayuda al Desarrollo
CAP	Comité de Adquisiciones de Proyectos
CFE	Comisión Federal de Electricidad
COFEPRIS	Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios
COMAIP	Consejo Méxicano para el Acceso a la Información Publica
CONEVAL	Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
CP	Contratación Pública
CPEUM	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
DIF	Desarrollo Integral de la Familia
DOF	Diario Oficial de la Federación
FECC	Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción
FMI	Fondo Monetario Internacional
FMP	Oficina de Servicios de Gestión Financiera y Adquisiciones para Operaciones
GATT	Acuerdo General sobre Comercio y Aranceles
IFAI	Instituto Federal de Acceso a la Información Pública
IMSS	Instituto Mexicano del Seguro Social
INAI	Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales
INCOP	Instituto Nacional de Contratación Pública
IPC	Índice de Percepción de la Corrupción
J.	Jurisprudencia
LAASSP	Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
LAOP	Ley de Adquisiciones y Obras Públicas.
LFPCA	Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo
LFPRH	Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
LFRSP	Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos

LGTAIP	Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública.
LIL	Licitación Internacional Limitada
LOPSRM	Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas
LPI	Licitación Pública Internacional
MDB	Multilateral Bancos de Desarrollo
MIPYMES	Micro, Pequeña y Mediana Empresas
OCDE	Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
OEA	Organización de los Estados Americanos
OIC's	Órganos Internos de Control
ONU	Naciones Unidas
OSCE	Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
PEMEX	Petróleos Mexicanos
PGR	Procuraduría General de la República
PIB	Producto Interno Bruto
PL	Pleno
PNT	Plataforma Nacional de Transparencia
POBALINES	Políticas, bases y lineamientos
PRI	Partido Revolucionario Institucional
PS	Primera Sala
PVEM	Partido Verde Ecologista de México
RAE	Real Academia Española
RICG	Red Interamericana de Compras Gubernamentales
SAT	Servicio de Administración Tributaria
SCJN	Suprema Corte de Justicia de la Nación
SECODAM	Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo
SERCOP	Servicio Nacional de Contratación Pública
SFP	Secretaría de la Función Pública
SHCP	Secretaría de Hacienda y Crédito Público
SJF	Semanario Judicial de la Federación
SNA	Sistema Nacional Anticorrupción
SNF	Sistema Nacional de Fiscalización
SNT	Sistema Nacional de Transparencia
SPC	Servicio Profesional de Carrea
T.A.	Tesis Aislada
T.C.C.	Tribunal Colegiado de Circuito
TFJA	Tribunal Federal de Justicia Administrativa
TFJFA	Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa
TICs	Tecnologías de la Información y la Comunicación
UE	Unión Europea
UNCAC	Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción
UNODC	Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
USHAY	Módulo Facilitador de la Contratación Pública
VPC	Vicepresidencia de Países

INTRODUCCIÓN

El porcentaje del gasto público que los Estados destinan a adquirir bienes, servicios y obras pública, que les van a ser indispensables para el pleno desarrollo de su actividad, cubriendo necesidades colectivas y diversos programas de gobierno, alcanza un 10 a 12% de su gasto, esto los convierte en el principal comprador de su país y por ende en los promotores centrales de la economía interna; por ejemplo México en 2017 tuvo un presupuesto de egresos de $4.9 billones de pesos, siendo el agente económico fundamental.

Lo anterior provoca que la política pública, fije reglas de destino del gasto, a fin de ser un promotor más de la adecuada distribución de la riqueza en el país; por ejemplo el 50% de los contratos excepcionados de la licitación pública y regulados por la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), deben dirigirse a las MYPIMES, siendo un factor de desarrollo nacional; de allí la gran relevancia del Estado comprador como regulador del desarrollo económico, político y social.

Las compras públicas en cada Estado, están inmersas en políticas públicas, así por ejemplo, se compra a todo el mundo (compras internacionales), o solo a nacionales; existen también las adjudicaciones directas por cuestiones de seguridad pública (aeronaves, armamento, etc.,) y las licitaciones solo nacionales, a fin de fomentar a la clase empresarial de los propios países.

Con la experiencia de casi 30 años en procesos licitatorios, he tenido la oportunidad de estar relacionado con el tema de las adquisiciones, desde diversas posiciones: en principio como autoridad, en el gobierno estatal de Guerrero del año 1987 a 2000, en su Oficialía Mayor y Secretaría de Finanzas y Planeación, principalmente, donde me encontré con dificultades en el desempeño de mis actividades, como el obstáculo de obtener el marco normativo federal o del propio Estado, pues no había accesibilidad a la información por diversos motivos: la desconocían, no tenían la existencia física de la misma o simplemente no la compartían, para conservar su coto de poder, en donde la normatividad y su enfoque fluían según los intereses del tenedor; en reiteradas ocasiones hice los requerimientos debidos a los funcionarios responsables de los procesos licitatorios y de la Contraloría General del Estado obteniendo como resultado una compilación normativa, fruto del esfuerzo personal, más no institucional; en ese tiempo al no disponer de la facilidad de los medios electrónicos con los que ahora contamos, (como el internet) la legislación se convertía en una ínsula de poder basada en el conocimiento, para las personas que la tenían en sus manos.

A principios de los años 90´s del siglo pasado, se presumía la existencia de más de 500 ordenamientos jurídicos complementarios y supletorios en materia de adquisiciones, que formaban el marco normativo de las licitaciones públicas, incluidos decretos, acuerdos, manuales, reglas, lineamientos, entre otros, resultando difícil su localización,

tanto en las entonces Secretaría de Contraloría General de la Federación (SECOGEF)[1] como en la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo (SECODAM)[2], con el mismo resultado, negando la dotación de reglas al 100% o proporcionándoles de manera incompleta, inconexa e incluso contradictoria.

Con el paso de los años, tuve la oportunidad de ver el proceso licitatorio, desde el otro lado del mostrador, me dediqué a licitar para empresas líderes de sus ramos con cobertura nacional e internacional, sorprendiéndome que en diversas dependencias federales y estatales el conocimiento de los funcionarios a cargo del proceso de contratación, en una escala del 1 al 10, no pasaba a más de 5, por lo regular tenían un conocimiento pobre de la *Ley de Adquisiciones* vigente y en cuanto al reglamento, lo percibían de manera vaga, y la diversa normatividad complementaría (decretos, acuerdos, circulares, y demás disposiciones.) y supletoria (Código Civil Federal y el Código Federal de Procedimientos Civiles, entre otros) era prácticamente desconocida para ellos; los sujetos que conducían dichos procesos, por profesión formativa al ser biólogos, arquitectos, contadores, entre otras profesiones, carecían de criterio jurídico, resultando ser gente inexperta en la interpretación de la normatividad jurídico-administrativa, lo cual en si conllevaba implícitamente una indebida aplicación en perjuicio tanto de la Administración Pública como de los participantes en las contrataciones públicas.

Otra causa de opacidad en los procesos de contratación pública era el marco normativo aplicable por parte de las autoridades, que acusaban de incumplimiento frecuentemente a los licitantes, de normas de diversas jerarquías contenidas en sus compendios y que muy a menudo sólo ellos dominaban pues algunas de las disposiciones no eran conocidas por los participantes en tanto según la autoridad no era obligatoria su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Una nueva responsabilidad me integró como Director de Legislación, y posteriormente, como Director de Asuntos Jurídicos de la Universidad Autónoma Metropolitana, dependiente de la Rectoría General, cambiando de posición en los procesos de compra, pero observando el mismo fenómeno. Las contrataciones públicas contenían un marco normativo de excepción, incompleto, con lagunas que permitían el manejo a conveniencia y, sin aplicar los criterios básicos de las leyes reglamentarias del

[1] El 29 de diciembre de 1982 se aprueba y publica en el Diario Oficial de la Federación el decreto que da origen, a partir del 10 de enero de 1983, a la Secretaría de la Contraloría General de la Federación. Más adelante, el 19 de enero de 1983, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría General de la Federación

[2] Con el Decreto que reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el 28 de diciembre de 1994, la Secretaría de la Contraloría General de la Federación cambia de nombre a Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo y el reglamento interno se publica el 12 de abril de 1995, con una nueva estructura orgánica y el 10 de abril de 2003 con la publicación de la Ley del Servicio Profesional de carrera en la Administración Pública Federal, cambia la denominación de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo a Secretaría de la Función Pública.

artículo 134 Constitucional y mucho menos las tesis de la Suprema Corte sobre la materia. El papel de la universidad, como contraparte en los juicios, también se veía afectado al no tener un marco jurídico completo, y advertía que las autoridades al resolver litigios en los que la universidad era parte, tenían resoluciones parciales por ignorancia, por falta de profesionalización y por temas de corrupción, en tanto como universidad, estábamos impedidos para *motivar* con estímulos económicos a los servidores públicos de los órganos jurisdiccionales y administrativos a fin de impartir de manera pronta la justicia para nuestra institución.

Por último, en este camino me he percatado que la oscuridad, la falta de transparencia y el control del conocimiento generan opacidad en la actuación, tanto de los servidores públicos que contratan, como de los participantes y de aquellos que resuelven los medios de impugnación; motivo por el cual con esta investigación se busca poner al alcance de los particulares que participan en procesos licitatorios, así como de las autoridades que los regulan, el marco normativo integral de las contrataciones públicas, sus principales correlaciones, errores de interpretación por parte de las autoridades y los criterios de los jueces para resolver los conflictos que se presentan.

El objetivo general de la presente investigación es elaborar un estudio en el cual se analice el papel de las adquisiciones en la Administración Pública, investigando la evolución histórica, de la normatividad en México en sus diversas jerarquías: Constitución, tratados y leyes primordialmente, la influencia de los organismos financieros internacionales en el combate a la corrupción (Capítulo I) así como su participación transversal en los sistemas nacionales de transparencia, de fiscalización y anticorrupción, determinando su impacto en las contrataciones públicas reguladas por la LAASSP (Capítulo II); analizar el marco normativo y proponer una sistematización exhaustiva del mismo en materia de adquisiciones, incluyendo resoluciones de la Suprema Corte que permitan a los participantes en licitaciones públicas, autoridades administrativas y jurisdiccionales una interpretación sistemática, integral y armónica de los criterios de resolución (Capítulo III) basada en la búsqueda del fortalecimiento institucional vía la profesionalización de los servidores públicos; así como analizar las posibilidades de defensa jurídica del gobernado en su carácter de licitante o proveedor cuando se vean vulnerados sus derechos públicos subjetivos (Capítulo IV).

En la investigación se realiza un estudio de aplicabilidad por parte de las autoridades judiciales, al resolver planteamientos de ilegalidad e inconstitucionalidad de los licitantes soportados en el marco teórico conceptual de la Hermenéutica Jurídica, la argumentación jurídica y los métodos de interpretación utilizados por la SCJN (Capítulo V) a partir del año 2000 en que se publicó la actual LAASSP, para atender los argumentos de los litigantes al formular conceptos de violación, reclamos, argumentos de porque se viola en su perjuicio la ley y así conocer las tendencias de nuestro máximo tribunal, y que sirvan en futuras controversias a los participantes (Capítulo VI).

Como objetivos particulares, me fijo el definir a la Administración Pública y exponer la evolución histórica de las adquisiciones como instrumento básico de aquella para realizar sus funciones, así como la trayectoria del artículo 134 constitucional y de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP) en el plano local y al mismo tiempo cual es el papel de los organismos internacionales como Fondo Monetario Internacional, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, Red Interamericana de Compras Gubernamentales, en el combate a la corrupción y la búsqueda del fortalecimiento institucional que permita la aplicación de las mejores prácticas; determinar cuáles son las principales causas jurídicas, sociales y políticas por las que el licitante o proveedor interpone los medios de impugnación en los distintos actos del procedimiento de licitación pública o de invitación a cuando menos tres personas, con base en el análisis de las causas que dieron origen a los Sistemas Nacionales de: Transparencia, de Fiscalización y Anticorrupción; establecer cuál es el marco jurídico sistematizado que debe conocer el servidor público, como base de su profesionalización, respecto de los procedimientos de contratación pública previstos en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para resolver dentro del espíritu del marco legal integral la instancia de inconformidad, el recurso de revisión, el juicio de nulidad y el amparo.

Adicionalmente y como conocimiento previo a los derechos del gobernado, se pretendió hacer un estudio de la relación administración-administrado, con la finalidad de que el servidor público adquiera un conocimiento teórico básico de porque el *Estado de Derecho* reconoce a los particulares derechos públicos subjetivos y les otorga instrumentos legales para la defensa de los mismos; definir a la hermenéutica jurídica a la argumentación jurídica, así como a los métodos de investigación utilizados por la SCJN; realizar un análisis minucioso de las resoluciones de la SCJN relacionadas con la LAASSP, a fin de establecer los *alcances del contenido de la resolución* o catálogo de voces que implican un llamado a los principales conceptos que ha resuelto nuestra máximo tribunal, al atender los diversos argumentos que los litigantes han puesto a su consideración al formular conceptos de violación. Así como conocer los métodos de interpretación utilizados por la Corte para cada resolución, en los últimos 16 años, sirviéndole dicho conocimiento al licitante o proveedor para buscar repetir argumentos favorables, y en caso contrario, diversos argumentos hermenéuticos buscando un resultado diferente, de ahí la relevancia de la investigación. Asimismo, este conocimiento lo debe dominar el Órgano Interno de Control de cada dependencia o entidad y, en su caso, la Dirección General de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas de la Secretaría de la Función Pública, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, los tribunales colegiados de circuito y juzgados de distrito para resolver asuntos similares en el mismo sentido. El capítulo Sexto de la tesis se convierte en documento guía, para emitir resoluciones apegadas a derecho.

En virtud de lo anterior me permito formular como hipótesis de investigación doctoral, que mientras el servidor público desconozca el marco teórico conceptual e histórico normativo de la Administración Pública, y no sea sensible al descontento social provocado por la corrupción e impunidad y omita su profesionalización, los sistemas nacionales de transparencia, fiscalización y anticorrupción, solo serán una simulación, aun cuando signifiquen un gran avance normativo que estandariza las recomendaciones de los organismos financieros internacionales (como el FMI, BID y BM), en materia de combate a la corrupción y fortalecimiento institucional de *"estados débiles",* y retoman de manera muy importante las recomendaciones de la ONU a través de la UNODC (Estudio sobre la Transparencia, Objetividad y Competencia en las Contrataciones Públicas); de Transparencia Internacional (Índice de Percepción de la Corrupción); del Foro Económico Mundial (Índice de Competitividad Global) y; el clamor de la sociedad civil mexicana vía *México Evalúa, Instituto Mexicano para la Competitividad* (IMCO), *Transparencia Mexicana, Mexicanos Unidos contra la Corrupción y la Impunidad* (MUCCI), Mexicanos Primero, entre otros; el impulso de instituciones de educación superior como el CIDE, ITAM, ITESM, UNAM, entre los más participativos, además de las exigencias de organismos empresariales como COPARMEX, Consejo Coordinador Empresarial y CONCANACO.

Las autoridades que contratan, así como las que deben de resolver las impugnaciones, desconocen la bastedad de la normatividad aplicable a las contrataciones públicas, con más de 90 ordenamientos jurídicos: Constitución, tratados, leyes, códigos, reglamentos, decretos, acuerdos, entre otros, y más de 90 criterios emitidos por la SCJN, en jurisprudencia y tesis aisladas, que pueden tener diversas interpretaciones hermenéuticas y, como consecuencia, al emitir la correspondiente resolución, lo hacen de manera arbitraria y parcial; sin embargo, al tener una sistematización de todo el marco normativo les permitirá, como parte de un sistema nacional de profesionalización en contrataciones públicas, ampliar sus conocimientos en la materia y resolver apegadas a derecho, de manera integral, sistemática y armónica, respetando los derechos públicos subjetivos del gobernado y dejando atrás el concepto *patrimonialista* de los responsables de las contrataciones públicas, con lo cual impactará positivamente a la Administración Pública Federal y en última instancia a la sociedad.

Hasta que los servidores públicos encargados de llevar a cabo los procedimientos de contratación y los que resuelven los medios de impugnación administrativos y jurisdiccionales, como parte de su profesionalización conozcan los métodos de interpretación utilizados por la SCJN y puedan acceder a un estudio que les sirva de guía para conocer cuáles son las principales causas por las que el licitante o proveedor recurren a la Suprema Corte, tanto en juicios de amparo, juicios de controversia constitucional y expedientes en contradicción de tesis jurisprudenciales, sabrán cuáles son sus fallas más recurrentes dentro de la contratación pública y podrán analizarlas para darles una solución correcta, y así los medios de impugnación aplicables a las

contrataciones públicas disminuyan como consecuencia de haber mejorado los procedimientos efectivos de defensa.

El aporte que pretendo entregar a la comunidad INAP, a la Administración Pública Mexicana y a los licitantes o proveedores en materia de adquisiciones públicas, con esta investigación es variado:

- El avance histórico de la Administración Pública, y sus pendientes en materia de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción en materia de contrataciones públicas.
- Dar a conocer el marco normativo completo, integral correlacionado, en sus diversas jerarquías, de las adquisiciones públicas;
- Dejar patente y accesible a los licitantes su marco de defensa jurídica, ante posibles actos ilegales de la autoridad administrativa que participe en las contrataciones públicas.
- Informar sobre los diversos métodos hermenéuticos utilizados por la Suprema Corte para resolver en última instancia sobre controversias derivadas de procesos licitatorios para lograr una mejor defensa de los gobernados.

La relevancia de la investigación se justifica en virtud de que en nuestro medio no existe un documento que compile la normatividad en materia de adquisiciones ni siquiera un intento, de manera completa como esta investigación y su anexo 1, cercano a las 500 cuartillas acompañándose por separado.

Las áreas de contrataciones públicas tanto en las dependencias como en las entidades carecen de estudios sobre el alcance de la interpretación judicial en materia de controversias resueltas por la SCJN, por lo cual la desatienden al participar en los procedimientos respectivos.

CAPÍTULO I

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: ANTECEDENTES DE LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS Y SUS ORGANISMOS INTERNACIONALES.

S U M A R I O:

1. Nota introductoria. 2. Administración pública. A) Definiciones. B) Estudio del objeto de la Administración Pública. C) Objeto de estudio de la Administración Pública. 3. Adquisiciones Públicas en la antigüedad. 4. Evolución del artículo 134 constitucional en México. 5. Legislación básica de 1917 a la fecha, en materia de contrataciones públicas. 6. Evolución de la Ley de Adquisiciones de 1965 a la fecha. 7. Mejores prácticas en licitaciones públicas. 8. Organismos internacionales y adquisiciones públicas. A) Fondo Monetario Internacional. B) Banco Interamericano de Desarrollo. C) Banco Mundial. 9. Red Interamericana de Compras Gubernamentales.

1. Nota introductoria.

A través del tiempo la administración pública ha sido explicada por definiciones de distintos autores, como Charles Jean Bonnin, Roberto von Mohl, Lorenzo von Stein, Karl Marx, Woodrow Wilson, Frank Goodnow, Gladden, entre otros.

El estudio del objeto es la actividad que realiza el gobierno para servir a los ciudadanos y el objeto de estudio es la materia, que puede ser: el Estado, el gobierno, el poder, el poder ejecutivo, los tres poderes, la burocracia, la organización, gerencia pública, políticas públicas, gobernanza, entre los más importantes.

Las contrataciones públicas forman parte de la administración pública y se han realizado desde la antigüedad, en las grandes civilizaciones, ya sea, egipcia, babilónica, china, romana, entre otras. En nuestro país José Pedro López-Elías considera que la primera licitación pública, se dio en 1767, con la ejecución de la obra pública del desagüe de la Ciudad de México.

Hay organismos internacionales como Transparencia Internacional, OCDE, ONUDC, UNCAC, RICG, entre otros, que juegan un papel relevante y fundamental en la transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción, pero también algunos reconocen y premian a las mejores prácticas.

Tenemos organismos financieros internacionales como FMI, BID y BM (BIRF), encargados de erradicar la pobreza, corrupción y demás lastres que perjudican a los

países miembros. Desarrollan políticas, programas y diversos lineamientos anticorrupción, como requisitos para acceder a sus fondos.

2. Administración Pública.

Los primeros estudios de la Administración Pública comienzan en Francia, desarrollando dos tendencias señaladas por Mariano Baena del Alcázar:

- Ciencia de la *policía*[1], que tiene como finalidad conseguir la felicidad del súbdito en cuanto sea conciliable con el interés general.
- Ciencias camerales, eran funcionarios de la cámara que escribían sobre las materias de su competencia, posteriormente abarcaban, a todas las disciplinas aplicativas útiles.

El arte del gobierno se transformó en la Ciencia de la Administración Pública, tal como lo sugiere Roberto Moreno, la historia de este proceso es descrita por el autor, de la siguiente forma:

- *La labor de los cameralistas y de los teóricos de la ciencia de la policía no cameral fue determinante para perfilar el mero estudio del arte del gobierno hacia las ciencias del Estado, y ciencias de la administración del Estado absolutista; la ciencia de la administración del moderno Estado burgués de derecho, tiene su cuna en la Francia de finales del siglo XVIII y principios del XIX, coincide así, con la caída del Estado absolutista y advenimiento del genéricamente denominado Estado de derecho. Corresponde a Charles Jean Bonnin, la tarea de abstraer y analizar desde el lente de la acción gubernamental y de las nuevas condiciones de la naciente sociedad burguesa a la ciencia de la administración.*
- *Posteriormente a la labor de Bonnin y con la consolidación del Estado de derecho, en otras latitudes, se inicia el cultivo de la ciencia de la administración tal es el caso de los países como España en donde tiene lugar un genuino boom, durante la primera mitad del siglo XIX; Italia –caso al que no hacemos referencia en el presente-, también participa de dicho cultivo, habiendo sido permeado el pensamiento italiano por la corriente alemana; el caso alemán acusa características relevantes, en tanto que en su seno se desarrollaron las ciencias camerales y la ciencia de la administración más elaborada del siglo antepasado, sintetizada en la obra de Lorenzo von Stein.*
- *El Derecho Administrativo se desarrolla en paralelo al Estado de derecho y sienta sus reales al subsumir y eclipsar el estudio de la ciencia de la administración, es hasta la segunda mitad del siglo pasado cuando el estudio de la ciencia de la administración retoma su "segunda oleada", fenómeno que también es característico de nuestro país.*

[1] La voz policía tenía entonces un significado distinto del actual y era una transposición del griego *politeia,* es decir, se refiere a la cosa pública en general y de *polis,* de la ciudad.

- *En torno al objeto y método de la ciencia de la administración no existe un consenso, lo que, evidencia lo inacabado de la misma, para algunos autores al inscribirse ésta en el territorio de las ciencias sociales, participa de su misma racionalidad metodológica, supeditando por tanto, el objeto al método –el objeto no preexiste a la ciencia- se afirma, en tanto que para otros, es la excepción a la regla, o sea que "tiene lugar un predominio del objeto sobre el método*.[2]

La evolución ha sido notable para entender de forma integral a la Administración Pública, realizando esfuerzos desde el siglo XVIII, conforme pasa el tiempo, se ha ido actualizando su estudio y objeto para mejorar la estructura y funcionamiento del Estado a fin de satisfacer las necesidades de los ciudadanos de cada época; para concluir lo anterior Mariano Baena señala a estudiosos de la Administración Pública, como Von Stein, Wilson, Gulik, Money y Riley y Max Weber, entre otros.

La Administración Pública contempla un campo de estudio amplio por su misma naturaleza, diversos tratadistas de la materia han realizado esfuerzos, para un esclarecimiento de la misma. Existen distintas definiciones, sin embargo, todas llegan al punto de definirla como la *organización de la actividad del Estado*, así Mariano Baena menciona que la Administración Pública al ser un elemento del Estado, constituye parte de la creación del mismo. La definición de Administración Pública ha evolucionado de manera considerable desde el Estado absolutista hasta la fecha, siendo afectadas por las circunstancia de cada época.

A) Definiciones.

El término administración resulta complejo para definir, por lo que durante su desarrollo se puede perder la claridad del mismo, como lo explica Waldo:

> *El efecto inmediato de las definiciones compuestas de una sola frase o de un solo párrafo cuando afectan al tema de la administración pública es que producen más una parálisis mental que un esclarecimiento o una estimulación. Ello se debe a que una definición de éste término ha de contener inevitablemente algunas frases o palabras abstractas, difuminándose y a veces hasta perdiéndose la claridad del significado a medida que se va desarrollando este proceso.*[3]

Existen dos tipos de definiciones de *Administración Pública*, amplia y estricta, para un entendimiento óptimo de la organización que se lleva en los actos públicos, señalando José Juan Sánchez que la amplia admite el uso de todas las fuentes de conocimiento

---

[2] Moreno Espinosa, Roberto, ***"***El estudio de la ciencia de la Administración Pública", *Antología sobre la Teoría de la Administración Pública,* en Martínez Anzures, Luis Miguel (coord.), México, INAP, 2002, pp. 122-123.

[3] Sánchez González, José Juan, *La Administración Pública como ciencia. Su objeto y su estudio,* México, Plaza y Valdés editores, 2001, p. 101.

que pueden servir para comprender y llevar a la práctica la vida organizativa en la actuación pública, y la estricta limita la disciplina a los trabajos teóricos y los prácticos que estudian el cumplimiento de los programas gubernamentales.

La palabra Administración proviene del latín y significa *ad* hacia y *ministrar* servir o cuidar, se entiende que basta con la administración para describir las funciones que desarrollaba el Estado para servir a los ciudadanos de esas épocas, sin embargo con el paso del tiempo, en el sector privado se desarrollaba su organización interna, por lo que fue necesario agregar el término de pública, como lo señala Sánchez González, en su obra citada y precisa que en Grecia de ella derivó la palabra polis, misma que dio origen a la palabra política; en Roma la raíz *pul* inspiró la palabra *populus* (pueblo), adjetivado en públicos (público). Ambas palabras, política y pública entonces, ostentan una significación de identidad por cuanto que tienen ambas una referencia a lo colectivo, común o conjunto. Es muy significativo que las dos grandes culturas de la antigüedad, Grecia y Roma, dieran el mismo sentido a su concepto de Estado: *polis* entre los griegos y *res publica* (república) entre los romanos.

La Administración Pública, en el aspecto etimológico, significa servir a los ciudadanos, satisfaciendo las necesidades colectivas a las que se enfrentan día con día los diferentes grupos que integran al pueblo.

Otros autores la denominan la ciencia de la administración siendo el fundador Bonnin en Francia, asimismo encontramos a más autores con diversas definiciones, donde se fija el objeto de estudio de la administración pública:

- Lorenzo von Stein, su principal aportación fue identificar el objeto de estudio de la ciencia de la administración, al indicar que residía en la actividad de los órganos estatales, constituyendo la vida exterior del Estado.
- Bonnin la define como una potencia para arreglar, mejorar y corregir lo existente, dando una dirección más conveniente a la organización que repercute en el progreso de la estructura del Estado.
- Florentino González describe a *"la administración pública es la acción de las autoridades sobre los intereses y negocios sociales, que tengan el carácter público, ejercida conforme a las reglas que se hayan establecido para mejorarlos."*[4]
- Javier Burgos expresa que es la más variada, útil y vasta de las ciencias morales y dirige la máquina social, acelerando o moderando la acción, modifica o arregla, conserva y mejora el interés público.
- Roberto von Mohl define a la ciencia de la administración como *"…la exposición sistemática de los principios relativos al empleo de las instituciones auxiliares individuales del Estado, para vencer a los eternos obstáculo prepotentes."*[5]

[4] González, Florentino, *apud* Sánchez, González, José Juan, *La Administración Pública*…, *cit*., p. 105.
[5] Sánchez González, José Juan, *La Administración Pública*…, c*it*., p. 105.

- Bluntschi la define a partir de diferenciarla: *"la administración pública y la administración privada no producen los mismos efectos ni tienen las mismas cualidades. La una es esencialmente general, extendiéndose uniformemente sobre todas las clases de la sociedad y el territorio, o al menos sobre sus divisiones orgánicas: provincias, distritos, municipios, que tienen sus normas legales y sus ordenanzas magistrales. La otra, por el contrario, es ordinariamente local, ligada al domicilio de las personas que de ellas se ocupan, solo excepcionalmente extiende sus ramificaciones por la asociación por la cual es muy variada. Cada cual puede elegir el método que mejor le cuadre, sin que haya generalmente decisiones autoritarias que la sujeten, dejándose todo a la previsión y a la voluntad del interesado."*[6]
- Otto Mayer, señala Sánchez González, puntualiza a la misma como *el Estado es un pueblo organizado bajo un poder soberano para la consecución de sus intereses. La administración es la actividad del Estado para el cumplimiento de sus fines. Así comprendida, ella se opone a la Constitución, que no hace sino preparar esta actividad; la administración implica la existencia del poder soberano mediante el cual el Estado llega a ser capaz de obrar.*
- Carl Marx explica *"…en última instancia, todos los Estados buscan la causa de las deficiencias accidentales o intencionales, de la administración. ¿Por qué? Precisamente porque la administración pública es la actividad organizada del Estado."*[7]

En variadas definiciones de la *Administración Pública*, describen el objeto de estudio como la actividad que realiza el gobierno, el Estado, el poder ejecutivo, los tres poderes, entre otros.

Woodrow Wilson, identifica el gobierno, el Poder Ejecutivo y la Administración Pública, precisando que es el lado práctico o comercial del gobierno, por su finalidad de que los negocios públicos se realicen eficientemente y de acuerdo con los deseos del público como sea posible.

Para Frank Goodnow, *la administración* se utiliza para indicar una función de gobierno, se encuentra sólo en el trabajo de las autoridades ejecutivas o administrativas.

Leonard White en 1950, remarca el carácter instrumental de la administración pública y la define en términos amplios como todas las operaciones que tienen de propósito la observancia o ejecución obligatoria de la política del Estado.

Simon, Smithburg y Thompson citados en la obra de José Juan Sánchez en el mismo año, señalan que:

[6] *Ibídem,* p. 106.
[7] Sánchez González, José Juan, *La Administración Pública*…, c*it*., p. 106.

Por administración pública se entiende, en el uso común, las actividades de las ramas ejecutivas de los gobiernos nacionales, de los estados y locales; la de las juntas y comisiones independientes creadas por el Congreso y por las legislaturas estatales; las de las sociedades mercantiles gubernamentales; y las de ciertos organismos de carácter especializado. Están concretamente excluidos dentro del gobierno los cuerpos judiciales y legislativos, y la administración no gubernamental.[8]

Marshall E. Dimock, delimita el campo de estudio, definiendo:

…la administración se refiere al "qué" y al "cómo" del gobierno. El "qué" es la sustancia, el conocimiento técnico de un campo, que capacita al administrador para llevar a cabo su tarea. El "cómo" son las técnicas de gerencia, los principios que llevan al éxito los programas cooperativos. Cada uno de estos dos elementos es indispensable; juntos forman la síntesis que se llama administración.

…

La administración pública ocupa el centro de una red compuesta por las diversas y recíprocas relaciones de los ciudadanos, del Estado, de la sociedad y sus valores, de la economía y su desarrollo, etcétera… Mandar y servir son las dos principales funciones del gobierno; ambas conciernen a los ciudadanos y a la administración pública.[9]

Fritz Morstein Marx, menciona que la administración pública es un instrumento importante del gobierno e inherente a la función del mismo, cobrando gran importancia para el éxito del gobierno. Por lo que José Juan Sánchez comenta que la burocracia es su tema central.

W. H. Moreland, explica a la administración pública con las diferencias respecto a la ciencia política, la segunda decide los objetivos a alcanzar y la primera establece la política de ejecución para cumplirlos. Así la ciencia política trata con los métodos que formula la política pública; la administración pública empieza cuando termina la política.

Una de las principales fuentes que aportan a fin de desarrollar a la Administración Púbica, es el estudio comparado de estas en el mundo y su evolución en el tiempo.

Gladden señala que a la Administración Pública es importante estudiarla desde su aspecto histórico, pues no ha sido atendida por el historiador general. Al admitir la guía de la historia universal, debemos relacionar aquellos incidentes administrativos específicos con el sistema de gobierno del cual han sido coparticipes.

León Cortina-Peláez establece las siguientes limitaciones:

- *Es una comunidad superior a, y diversa de, las administraciones privadas.*
- *Está constituida por una organización de agentes públicos, subordinada al poder político, democrático y social.*

[8] *Ibídem*, p. 109.
[9] Dimock, Marshall *apud* Sánchez González, José Juan, *La Administración Pública*…, *cit*., p. 109.

- *Tiene por fines la quiebra de la dominación deformante y explotadora que es causa de la causación circular acumulativa del desarrollo, y la realización del Estado democrático y social de Derecho.*
- *Se propone, para ello, la promoción integral del Hombre en sociedad, para lo cual considera primordial su participación dominante en la ampliación, intensificación y perfeccionamiento técnico-gerencial de los servicios prestacionales del poder público.*[10]

Así las variadas definiciones de la Administración Pública, se dan en enfoques diferentes, sin embargo todas cuentan con el mismo objetivo a alcanzar y es un mejor funcionamiento de la sociedad, mediante políticas públicas, impuestas por el propio Estado para su regulación, mediante la satisfacción del interés general, la utilidad pública, teniendo grandes diferencias entre la administración pública que es de carácter general y la administración privada para un grupo de personas que se encuentran establecidos en un domicilio, y se amplía a través de las asociaciones de las mismas.

B) Estudio del objeto de la Administración Pública.

Existe la duda de considerar a la Administración Pública como una ciencia, por carecer de principios y leyes aplicables al Estado, asimismo por las aportaciones de otras ciencias sociales para su estudio.

La *Administración Pública* es considerada como arte, filosofía, profesión y ciencia. Entendiéndose por arte la definición de Ordway Tead:

> *Desde luego, tan penetrante en influencia, tan valiosa, tan correctamente constituida es esa la habilidad, que merece ser reconocida como una de las bellas artes… Constituye desde luego un arte de la más elevada categoría, lograr la más fructífera colaboración posible en un mundo en el que el esfuerzo combinado es la típica expresión de individuos que tratan de hacer su vida productiva.*[11]

Por lo tanto, nace como arte por la aplicación de sus técnicas, debido a su experiencia del ensayo y error, pero ello no quiere decir, que con el paso del tiempo no se pueda convertir en una ciencia.

La Administración Pública como filosofía tiene el principio de servir al hombre, tanto individual como en forma grupal. Marshall Dimock enlista lo siguiente:

- Las instituciones determinan en gran parte la clase de vida que la sociedad va a llevar y los administradores, como clase, determinan en gran parte la calidad de las instituciones.

[10] Cortiñas-Peláez, León *apud* Sánchez González, José Juan, *op. cit*., p. 114.
[11] Ted, Ordway, *apud* Sánchez González, José Juan, *op. cit*., p. 127.

- Los administradores deben ser individuos y no engranajes, porque el secreto del éxito es individual.
- La clave de la administración es el conocimiento del desarrollo y de la decadencia, debido a que la actual insistencia en formar categorías y dividirlo todo en pequeños y ordenados compartimientos causa su propia derrota.
- Como piedras angulares de la filosofía administrativa se encuentran los factores de desarrollo, equilibrio, estrategia, dirección y motivación. La motivación debe tener un fundamento ético, no de conveniencia.

La Administración Pública se ha definido, donde el punto de vista del servidor y el servicio público, como:

> *El creciente empleo de profesionistas y científicos ejerce un efecto dominante sobre el servicio público y sobre las condiciones bajo las cuales se realizan sus tareas. La creciente proporción de servidores civiles capacitados profesionalmente mejora el prestigio y la reputación del servicio público. Propicia un medio favorable para el reconocimiento de administradores públicos permanentes no políticos, especialmente capacitados. De esta manera, la administración pública se convierte en una profesión.*[12]

El estudio del objeto de la administración pública se refiere a su actividad en los procesos de gobierno en donde sus servidores públicos buscan profesionalizarse para un mejor desarrollo.

Por último, como ciencia, diversos autores sugieren que no tiene el alcance por la inexistencia del marco teórico, otros indican que se encuentra en gestión de ser ciencia y por último los que la consideran como un arte elevado.

En 1947 Dahl precisó las limitaciones de la *Administración Pública* para ser ciencia:

- *Las generalizaciones derivadas de las operaciones de la administración pública, es un Estado en particular, no se puede ni universalizar ni aplicar a la administración pública de otros Estados. Añade que un buen principio puede ser aplicable en diferentes medios nacionales, pero en atención a estudios previos a los mismos.*
- *No existen generalizaciones universales verdaderas acerca de la administración pública, sin que previamente haya un estudio profundo de las características nacionales. En suma, o hay principios universales o éstos son aplicables a un medio nacional o internacional específico.*
- *El estudio de la administración pública "se convertiría inevitablemente en una disciplina, con bases mucho más amplias, apoyada no en el conocimiento estrechamente definido de técnicas y procesos, sino ampliado hacia los factores*

[12] Follett, Mary Parker, *apud* Sánchez González, José Juan, *La Administración Pública*… *cit*., p. 132.

condicionantes, variables históricas, sociológicas, económicas y que dan a la administración pública de cada país su sello."[13]

La *Administración Pública* no puede ser generalizada por una definición, sin embargo, se describe como una actividad, disciplina o una mezcla de las dos. En nuestra posición la Administración Pública es una ciencia ya que cuenta con un objeto de estudio (actividad) y un estudio del objeto (disciplina).

C) Objeto de estudio de la Administración Pública.

El objeto de estudio de la Administración Pública se refiere a su materia, descrita por diversos autores como:

Cuadro No. 1. Objetos de estudio de la Administración Pública.

Objetos de estudio.	Representantes.	Caracterización.
Estado	Lorenzo von Stein, Jean Charles Bonnin, Von Mohl, Bluntschli, Otto Mayer, V. E. Orlando y Carlos Marx.	La Administración Pública es la actividad organizada del Estado. El Estado es el objeto de estudio de la disciplina, pero uno de sus instrumentos más importantes es la administración pública. Puede afirmarse que este es el primer objeto de estudio de la administración pública, como parte de la herencia histórica del cameralismo.
Gobierno	Woodrow Wilson, Frank Goodnow, Guillermo Willoughby, Richard Rose.	Estos autores realizan una mayor delimitación del objeto de estudio de la administración pública. Wilson ha dicho que la administración pública es tan antigua como el propio gobierno. Consideran estos

[13] Sánchez González, José Juan, *La Administración Pública*…, *cit*., p. 135.

		autores que el Estado como objeto de estudio implica la concurrencia interdisciplinaria; con el gobierno la disciplina tiene un objeto más definido.
Poder	Omar Guerrero	Esta interpretación considera al poder como objeto de estudio de la administración pública, debido a que el gobierno cumple funciones de poder (dominación) y tutelares (administrativas). Para la ciencia política, su objeto es el gobierno en sus dimensiones políticas y de dominación estatal, mientras que para la administración pública, el gobierno es su dimensión administrativa y la dominación efectiva.
Poder Ejecutivo	Woodrow Wilson, Omar Guerrero	El poder ejecutivo ha llegado a ser el centro del poder superior del Estado, debido a la decadencia del parlamentarismo como centro de poder de las clases. Un poder ejecutivo fuerte es, por tanto, producto de un Estado fortalecido sobre la sociedad. Esta posición es la que mayor grado de aceptación general tiene.
Poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial)	Félix Nigro	Este autor considera que el objeto de estudio para

		identificar a la administración pública es su conexión con las tres ramas tradicionales del poder: la ejecutiva, la legislativa y la judicial. Esta corriente es marginal dentro de la disciplina.
Burocracia	Max Weber, Laski, L. von Misses, Fritz Marx, M. Crozier, Guy Peters, entre otros.	Para la administración pública es esencial el papel de la burocracia en el fortalecimiento de los gobiernos contemporáneos, por lo que alguno estudiosos la consideraron un objeto de estudio por largo tiempo.
Organización	Herbert Simon, March, R. Merton, Selznick, Blau, Crozier, E. Mayo,Roehlisberger, Dickson, Barry Bozeman, entre otros.	La administración pública debe ser nuevamente pensada y con ella la naturaleza y funciones del Estado, así como las formas de organización que caracterizan a la sociedad. El estudio de la administración pública puede ser dimensionado desde la teoría de la organización, pero no como campo interdisciplinario, sino como espacio plural de reflexión en el que pueda conformarse una base paradigmática lo suficientemente sólida desde la cual abordar la diversidad y multiplicidad de la organización.

Public management (gerencia o gestión pública)	F. Taylor, C. Merriam, Luther Gulick, Marshall Dimock, M. Messenet, Roman Laufer y Alain Burland, Michael Barzelay, C. Hood, Barry Bozeman, entre otros.	El *management* público está constituido por un campo de intersección dominado por un conjunto de disciplinas diversas, tales como el *management* y las ciencias de la organización, por un lado, y las ciencias administrativas y las ciencias políticas, por el otro. El *management* público es una metodología de definición del sector público diversa del Derecho y de la perspectiva institucional, definición que encara la crisis y separación de los sectores público y privado que el *management* resuelve.
Public policy (políticas públicas)	Harold Stein, Harold D. Lasswell, Charles Lindblom, Yehezkel Dror, Peter de Leon, May y Wildavsky, Luis F. Aguilar Villanueva, entre otros.	Una de las mayores aportaciones de las políticas públicas a la administración pública es su renovado enfoque político, que vuelve a descubrir el carácter político de la disciplina. Es un objeto de estudio reciente, innovador y con contribuciones esenciales para entender la forma en que opera el gobierno en la actualidad.
Governance (gobernanza, gobernabilidad y gobernancia)	Renate Maynetz, Marco Meneguzzo, Amadeu Sola, Luis F. Aguilar Villanueva, Manuel Alcantara, Claus Offe,	La *governance* es una herramienta útil que permite comprender la naturaleza política de la gestión pública. Esto es así, debido a que regresa la mirada del

	Guy Peters, Luciano y Tomassini, entre otros.	gobierno a los actores que se suponía eran aliados naturales de la actividad gubernativa. Cuando en realidad dichos actores (ONG, organizaciones de voluntarios y ciudadanos) requieren ser consultados, incluidos y representados en las políticas públicas que tendrán impacto en su vida cotidiana.

Fuente: Elaboración del autor Sánchez González, José Juan. *Estudio de la ciencia de la administración,* México, INAP, 2007, pp. 56-69.

La *Administración Pública*, pese a sus diversos objetos de estudio, está enfocada principalmente en la actividad de organización del Estado, delimitándolo de esta manera, el padre de la *Administración Pública* moderna, Woodrow Wilson quien explica que el objeto de la misma se enfoca en las actividades que puede realizar de manera eficiente y posteriormente realizarlas con costos bajos y el mínimo de energía.

El sistema de la *Administración Pública* está integrado por leyes, reglamentos, relaciones, costumbres, entre otros, correspondientes a sus ámbitos material, personal, temporal y territorial para la ejecución de la política del Estado.

3. Adquisiciones Públicas en la antigüedad.

Las adquisiciones del Estado son un tema especializado, por la naturaleza de la administración pública, y para entenderla existen diversas disciplinas envolventes y vinculantes que nos explican su origen y evolución tales como: la historia, antropología cultural, sociología, ciencia política y otras ciencias sociales. La sociología, por ejemplo, nos da a conocer los antecedentes del origen del Estado:

> *La convivencia es pues inherente a la condición humana y se pone de manifiesto desde la antigüedad en la formación de los colectivos primitivos, dentro de los cuales pueden mencionarse a: la familia, la horda, el clan, la tribu. Dichos colectivos conforman categorías de análisis sociológico y se consideran bajo este enfoque, colectividades pre- estatales.* [14]

[14] Uribe Villegas, Oscar *apud* Enríquez Rubio, Ernesto (Coord.). *Administración de Recursos Materiales en el Sector Público*, México, INAP, 2002, p. 5.

De ahí se han expuesto distintos conceptos respecto a éste, siendo común el siguiente:

La palabra Estado, señala Ernesto Enríquez, en su obra antes citada, proviene del vocablo latino status, término con el que designaba al conjunto de derechos y obligaciones que tenía una persona, respecto de ella misma, su familia y la ciudad.

La sociedad se origina, debido a que el ser humano es social por naturaleza desde su origen, y por ello se establecía en diferentes grupos, mismos que por sus necesidades de organización dieron inicio al Estado y este a la Administración Pública, Alejandro Carrillo menciona que inicia con el proceso evolutivo de adaptaciones físicas que hicieron posible la aparición del lenguaje y la fabricación con el empleo de utensilios, así como determinadas adaptaciones sociales que presentan la condición sin la cual la especie humana no hubiera podido sobrevivir.

Como consecuencia de lo anterior, la Administración Pública ha tenido una evolución notable, estudiada por diversos autores, tal como la señala Alejandro Carrillo:

> *En el antiguo Egipto y en Babilonia ya es posible encontrar poderosas burocracias de escribas, jerarquizadas por los sacerdotes. Si podemos considerar a la estadística y al impuesto como "signos de un sistema administrativo altamente centralizado y estructurado", ya en la época de la quinta dinastía egipcia (2 500 a 2 350 A.C.), hallamos estos factores. También en los valles del Indo y del Ganges florecieron imperios regidos con ayuda de una administración cuya eficiencia puede aún apreciarse en las ruinas que han quedado de los sistemas de canales, las urbes y otros vestigios. El Imperio Romano también dependió, en gran medida, de un riguroso sistema de administración. La burocracia tradicional china ha merecido estudios especiales por parte de diversos expertos.*
>
> *Tras del paréntesis que significó para Occidente la Edad Media, el nacimiento de los modernos Estados nacionales se caracterizó por el resurgimiento de la centralización y la jerarquización de las funciones burocráticas.*
>
> *Ya en la época moderna, en el siglo XVIII aparecieron, primero en Francia y después en Prusia, los teóricos de la administración que adoptaron el nombre de cameralistas. Este grupo, además de haber incorporado a la administración civil conceptos de origen militar, como "Plana Mayor" (staff) o "jerarquía", hizo el primer intento por definir la administración pública como una estructura burocrática formal.*[15]

Dentro de los elementos con los que desarrolla su efectividad la *Administración Pública*, se encuentra el tema de las adquisiciones, lo que el Estado ha de adquirir para poder prestar el servicio de utilidad pública requerido, ha evolucionado históricamente de la misma manera que el estado, el gobierno y la sociedad, así en nuestro país encontramos los siguientes antecedentes:

[15] Carrillo Castro, Alejandro, *La reforma administrativa en México*, México, INAP, 1973, pp. 26- 27.

México, las referencias más remotas de los contratos administrativos —en específico, de la licitación pública— se hallan en la época prehispánica, sobre todo en cuanto a la ejecución de obras públicas. En épocas posteriores, autores como José Pedro López-Elías consideraron que la primera licitación pública, como tal, se efectuó en 1767, con la ejecución de la obra pública del desagüe de la Ciudad de México.

(…)

A partir del siglo XIX se comenzó a utilizar la licitación (en aquel entonces llamada remate o subasta), para la adjudicación de las obras públicas, sin embargo, la figura que más se usaba era la concesión , en especial para la construcción de caminos, para ello el Gobierno y el Congreso emitieron una serie de disposiciones relativas a la materia, como: el Decreto del 9 de Octubre de 1826, autorizando al gobierno para contratar la apertura y arreglo de los caminos nacionales; el Decreto de Santa Anna de 24 de septiembre de 1843 que daba reglas generales sobre los caminos, etc.

Con posterioridad estas disposiciones sobre caminos fueron reguladas dentro de la Constitución de 1857 y encuentran su fundamento legal que otorga facultades al Congreso para realizar dichas obras.[16]

En la materia de adquisiciones públicas, se cuenta con poca información como lo señala la obra *Las Compras, Principios y Aplicaciones* de Salvador Mercado, por la razón de que fue apartada de las funciones principales de la administración; William A. Messner, menciona que las compras son una profesión antigua ya que en la Biblia se cuenta la historia de José, quien siendo agente de compras del faraón, acumuló el excedente de cereales durante los siete años de abundancia para aprovisionar de alimentos durante los años siguientes de escasez.

En la Revolución Industrial (Reino Unido, en la segunda mitad del siglo XVIII), las compras surgen como una actividad formal, siendo encaminadas para abastecer y aprovisionar los materiales necesarios en la realización de los procesos productivos. A principios del siglo XX las compras se separaron del área de producción.

Después de la Segunda Guerra Mundial, se consideró que las compras las debían realizar personas especializadas en la materia, a comparación de los años anteriores, donde solo se tomaba en cuenta su apariencia honesta.

En la actualidad, la materia de adquisiciones de bienes y la contratación de servicios, es una función administrativa que establece los mecanismos, instrumentos y procedimientos administrativos y de responsabilidades para optimizarla, con la obtención de las mejores condiciones de precio, calidad, oportunidad y financiamiento, de acuerdo con las especificaciones. Y con la utilización de medios y programas electrónicos más modernos.

[16] Arciniega Rendón, José Manuel, *Sistematización del Régimen Jurídico Mexicano en Materia de Adquisiciones del Gobierno Federal,* México, 2003, pp. 1 y 11.

Las compras públicas han sido reguladas por la importancia que tienen en la sociedad, que las empresas privadas o públicas necesitan satisfacer necesidades de un gran valor comercial. Las compras de mayor magnitud se realizan en el sector público, en tanto requieren gran cantidad de bienes y servicios. En consecuencia regulan de manera más precisa los procedimientos de adquisiciones, en la búsqueda de reducir costos y generar mayores beneficios directos e indirectos.

4. Evolución del artículo 134 constitucional en México.

La base constitucional de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se ubica en el artículo 134, que ha sufrido distintas reformas con el paso del tiempo, conforme a la importancia que se le ha dado en las distintas etapas de nuestra historia, así la Constitución Política de 1917, señalaba que los contratos que el Gobierno tuviera que celebrar para la ejecución de las obras públicas, serían adjudicados en subasta, mediante convocatoria, y para que se presentaran proposiciones en sobre cerrado, que sería abierto en junta pública; señala que únicamente quedaban incluidos los contratos de obras públicas, excluyéndose a cualquier otro contrato.

Lo referente a la ejecución de obra pública, permite analizar las diferencias entre la Constitución de 1857 y la de 1917 en la que se percibe un cambio radical, dado que ya no se usa la concesión como figura principal y se instaura la *subasta* como el mecanismo para adjudicar; también se da un avance significativo en lo referente al procedimiento (antecedente del actual procedimiento de *licitación pública*), mediante el cual se realizan dichas adjudicaciones. Cabe aclarar que si bien estas disposiciones no se refieren de manera explícita a las adquisiciones del sector público, constituyen los antecedentes modernos y el eje principal de los contratos administrativos y, por ende, el origen y la fuente de inspiración de la normatividad sobre adquisiciones del actual orden jurídico.

El artículo 134 de la Constitución Política, ha tenido cuatro reformas:

1° Reforma del 28 de diciembre de 1982

En esta se sentaron las bases de lo que conocemos actualmente como las licitaciones, además de establecer los principios de eficiencia eficacia, economía, transparencia y honradez bajo los cuales se guiarán los procedimientos. El cambio radical consistió en sustituir el término *subasta* por el de *licitación*, como el procedimiento bajo el cual se llevan a cabo las contrataciones de la Administración Pública Federal. Se dio en el marco del cambio de paradigma de la responsabilidad de los servidores públicos.

2° Reforma del 13 de noviembre de 2007

Esencialmente fue una novedad de carácter electoral en la cual se agregaron los tres últimos párrafos, que por carecer de interés para nuestra materia de estudio, no citaremos.

3° Reforma del 7 de mayo de 2008

En el primer párrafo comienza por dejar asentados en forma clara y precisa los ámbitos material y personal, así como los principios por los que se deben administrar los recursos económicos de los diversos niveles del Gobierno. De acuerdo con Daniel Ramos Torres[17], la eficiencia se refiere al ejercicio del presupuesto de egresos en tiempo y forma en los periodos que marca la legislación positiva. La eficacia es un concepto relativo a lograr en el ejercicio fiscal los objetivos y las metas de los programas anuales de adquisiciones, arrendamientos y servicios de las dependencias y entidades. La economía se orienta en dos sentidos: uno de carácter procedimental, encaminado a obtener de las autoridades administrativas sus decisiones en el menor tiempo posible, el segundo destinado a la gratuidad de procedimiento, en tanto que implica que la tramitación del procedimiento administrativo no debe estar sujeta a pago alguno del administrado. La transparencia significa el cumplimiento de una efectiva rendición de cuentas a la sociedad mexicana y a los organismos fiscalizadores sobre la forma en que se lleva a cabo la contratación pública. La honradez significa la correcta administración del presupuesto público en la contratación administrativa y el cumplimiento puntual de las obligaciones de los servidores públicos encargados de tramitar la contratación.

Como es sabido, toda actuación administrativa debe ser supervisada y tiene su fundamento en el párrafo segundo; así en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal se encuentran los órganos internos de control que se encargan de observar la correcta utilización del presupuesto asignado. En materia de contratación de adquisiciones, arrendamientos y servicios, la dependencia encargada de supervisar dicha actuación es la Secretaría de la Función Pública, así como las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Economía, con base en sus respectivas facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Adicionalmente, se prevé que los resultados obtenidos a través de los ejercicios de los recursos públicos sean evaluados por instancias técnicas, con el objeto de que dichas evaluaciones sean la base de un efectivo sistema de rendición de cuentas.

Por otro lado, se propone establecer que los recursos federales que sean ejercidos por órdenes de Gobierno distintos al federal, observen las bases establecidas en esta reforma.

---

[17]Ramos Torres, Daniel, *Los Contratos Administrativos de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios*, México*, Public Management* de México S.C., México, 2012, pp. XVIII y XIX.

Lo anterior, como se señala en la exposición de motivos, es fundamental al considerar que el gasto público federal que ejercen las entidades federativas y los municipios representa más de la mitad del presupuesto del gasto programable; por lo tanto es indispensable que dicho gasto sea evaluado en cuanto a los resultados obtenidos al igual que los demás recursos federales. Lo anterior, con pleno respeto a la soberanía de las entidades federativas y a la autonomía de sus municipios y sin interferir de modo alguno en la administración y ejercicio de los recursos federales por los ámbitos locales.

Las leyes reglamentarias a las que se refiere este párrafo son, en materia federal: la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; en materia estatal: las leyes que cada entidad federativa emita, las cuales deberán tener por objeto reglamentar la aplicación del artículo 134 Constitucional en el ámbito de su competencia para los recursos de origen estatal, y en su caso municipal. Asimismo, el ejercicio y gasto de los recursos públicos será supervisado y vigilado por las contralorías estatales y los órganos técnicos de fiscalización, en materia local, y en materia federal por la Secretaría de la Función Pública, así como por las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Economía, además de la Auditoría Superior de la Federación.

4° Reformas del 29 de enero del 2016

La última reforma fue el 29 de enero de 2016, motivada por el cambio de naturaleza jurídico-político de la ciudad capital y el texto *“el Distrito Federal y los órganos políticos administrativos de sus demarcaciones territoriales”* por *“las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México”.*

La evolución del artículo 134, denota que si bien desde el año de 1917, no se encontraban reguladas las adquisiciones de una forma explícita (solo trataba lo referente a contratos de obra pública que se adjudicaba en subasta), conforme el Estado crecía en población, en necesidades y recursos se vio obligado a establecer una regulación puntual por el gran volumen y presupuesto que se maneja en las contrataciones públicas, que son un motor importante del desarrollo económico del país.

5. Legislación básica de 1917 a la fecha, en materia de contrataciones públicas.

La Constitución de 1917, regulaba exclusivamente el contrato de obra pública, y no las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios; dentro de la normatividad anterior a la reforma de 1982 de nuestra Carta Magna, se encuentran distintas normas, que sirven para conformar el marco normativo, Héctor Infante, respecto de la Administración Pública Federal, identifica las siguientes legislaciones:

1. *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (DOF: 5/II/17)*
2. *Ley de Secretarías de Estado. (DOF: 31/XII/17)*

3. *Ley Orgánica del Departamento de Aprovisionamientos Generales. (DOF: 26/I/18)*
4. *Instructivo para la Formulación de Inventarios de Bienes Muebles e Inmuebles. (DOF: 18/XII/23).*
5. *Ley Orgánica del Departamento de Contraloría de la Federación. (DOF: 1/III/26)*
6. *Ley Orgánica del Departamento de Presupuesto de la Federación. (DOF: 8/VI/28).*
7. *Decreto por el que se constituyó la Comisión Coordinadora de Compras. (DOF: 21/II/35).*
8. *Ley Orgánica del Presupuesto de Egresos de la Federación. (DOF: 31/XII/35).*
9. *Instructivo para Actos de Inspección Fiscal en las Compras de las Dependencias del Ejecutivo Federal. (DOF: 30/III/44).*
10. *Reglamento Interior de la Comisión Coordinadora de Compras. (DOF: 24/VI/44).*
11. *Ley de Secretarías y Departamentos de Estado. (DOF: 13/XII/46).*
12. *Reglamento de Control de Adquisiciones destinadas a los Servicios del Gobierno Federal. (DOF: 4/VI/47).*
13. *Acuerdo que dispuso que las Dependencias del Gobierno Federal debían presentar su Plan Anual de Compras ante la Secretaría de Bienes Nacionales e Inspección Administrativa. (DOF: 2/XI/49).*
14. *Ley de Secretarías y Departamentos de Estado. (DOF: 24/XII/58)*
15. *Ley Orgánica del Presupuesto de Egresos de la Federación. (DOF: 6/XI/64)*
16. *Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. (DOF: 29/XII/76).*
17. *Acuerdo que fija los Lineamientos para la Integración y Funcionamiento de los Comités de Compras y de las Comisiones Consultivas Mixtas de Abastecimiento de la Administración Pública Federal. (DOF: 13/V/80).*
18. *Normas de Concursos para las Adquisiciones de Mercancías, Materias Primas y Bienes Muebles. (DOF: 15/X/80).*
19. *Normas Generales para la Administración de los Almacenes de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal. (DOF: 26/XI/82)*
20. *Normas Generales para las Adquisiciones de Mercancías, Materias Primas y Bienes Muebles que realicen las Dependencias y Entidades de la Administración Pública federal. (DOF: 29/XI/82)*

Hay autores, como Daniel Ramos que agrega más:

1. Decreto por el cual se suprime el Departamento de Aprovisionamientos Generales (DOF: 22/I/1925). Reservó a cada una de las Secretarías y Departamentos atribuciones para comprar o fabricar por cuenta propia sus bienes.
2. Ley Orgánica de la Tesorería de la Federación (DOF: 1/III/1926). Estableció la obligación de intervenir en la administración de fondos, valores o bienes, sin perjuicio de las facultades del Departamento de Contraloría.
3. Modificación a la Ley de Secretarías de Estados (DOF: 29/XII/1932). Eliminó el Departamento de Contraloría de la Federación.
4. Circular Administrativa No. 11-9-146 (DOF: 26/VIII/1935). Precisó la competencia de algunas dependencias de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que intervendrían en el manejo de bienes muebles.

5. Ley del Servicio de Inspección Fiscal (DOF: 13/IV/1936) y su Reglamento (DOF: 4/IX/1936). Vigilaban la gestión administrativa y el adecuado gasto de recursos federales, entre los que se encuentran las adquisiciones.

6. Ley General de Bienes Nacionales (DOF: 3/VII/1942)

7. Acuerdo por el que se estableció una Comisión Intersecretarial de carácter permanente (DOF: 7/XII/1943). Su finalidad era mejorar el rendimiento de los recursos materiales y de gasto público, y velaría por economizar en el abasto gubernamental.

8. Decreto que reglamenta las compras para las dependencias del Ejecutivo Federal (DOF: 2/II/1944). Este antecedente resulta de especial importancia, ya que por primera vez se habla de concursos, así como de su convocatoria y publicación. Asimismo se señalaban que las cotizaciones debían presentarse en un sobre cerrado y lacrado haciendo de su apertura un acto solemne. También establece una garantía de cumplimiento del contrato adjudicada y divide las compras en 3 categorías, obedeciendo a su monto.

9. Instructivo número 7 para actos de inspección Fiscal en las compras que hagan las dependencias del Ejecutivo Federal (DOF: 20/III/1944). Redunda en la vigilancia de las adquisiciones y en éste se expresa por primera vez la idea de los concursos desiertos.

10. Reglamento del Control de Adquisiciones destinadas a los Servicios del Gobierno Federal (DOF: 4/IV/1947). Previó mecanismos de financiamiento para el pronto pago y la catalogación y normalización de mercancías de consumo recurrente, independientemente de que contempló la celebración de contratos en la materia.

11. Acuerdo por el que instauró la Comisión Nacional de Importaciones y Exportaciones (DOF: 11/III/1950). Se estableció con la finalidad de que se propusieran los artículos susceptibles de importación.

12. Decreto para que las Dependencias de Gobierno Federal formulen pedidos bajo su propia responsabilidad (DOF: 16/II/1959). Su objetivo era descentralizar funciones.[18]

Por otra parte, en mí tesis de maestría adicionó justificadamente, otras 17 disposiciones para un total de 49 regulaciones históricas en la materia:

1. *Ley Orgánica del Departamento de Contraloría (DOF: 25/01/1918). La importancia de esta ley es esencial pues buscó atacar de raíz la enorme corrupción que en un momento imperó a través del uso de las concesiones, se comenzó a dar importancia a la supervisión de las actividades de la Administración Pública, y en este caso a las compras o fabricación de los suministros necesarios, que realizaba el Departamento de Aprovisionamientos Generales.*
2. *Ley Orgánica de la Tesorería de la Federación (DOF: 31/XII/1932). Se le otorgaron facultades para llevar la glosa de las cuentas de las oficinas con manejo de valores; la contabilidad del Erario y, en general, de la Hacienda Pública; señalar las responsabilidades, registrarlas y hacerlas efectivas, en favor o en contra de la Federación; formular la cuenta pública anual; actividades de inspección y vigilancia,*

[18] Ramos Torres, Daniel, o*p. cit.,* pp. 80-86.

con todas las medidas que facilitaban esa actividad y la facultad de establecer los requisitos y documentación necesarios para justificar y comprobar todas las operaciones.

3. *Reglamento para la Autorización de Créditos en contra de la Federación y de Contratos en que la misma sea parte (DOF: 23/I/1933). En este Reglamento, en primer término, se establece la facultad de intervención de la Secretaría de Hacienda en los contratos a celebrar y que impliquen el gasto de fondos públicos. Dentro de este mismo Reglamento, en su Capítulo II De las compras en general, se determinan las reglas y el procedimiento a las cuales estarán sujetas las adquisiciones del gobierno federal y la adjudicación de los contratos.*
4. *Ley Orgánica de la Contaduría de la Federación (DOF: 1/I/1935). Suprime la intervención de la Tesorería de la Federación en los aspectos contables, delegándoselos a la Contaduría de la Federación, con dependencia directa de la Secretaría de Hacienda al igual que la glosa de los ingresos y egresos federales, la contabilidad de la Federación y todas las funciones relativas a estas facultades.*
5. *Ley de Secretarias y Departamentos de Estado (DOF: 31/XII/1935). En relación con la abrogada Ley de Secretarías de 1917, las funciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ya atribuidas por leyes y reglamentos anteriores, son ya más definidas, sobre todo en materia de control interno de los contratos administrativos.*
6. *Ley de Secretarias y Departamentos de Estado (DOF: 30/XII/1939). Es significativo el análisis de la evolución de esta Ley, porque se observa la manera paulatina, en que se ha conformado la Administración Pública Federal, así como la evolución de la facultad de adquisiciones de las dependencias o entidades que la integran actualmente.*
7. *Ley General de Bienes Nacionales (DOF: 26/VIII/1944). En materia de adquisiciones de bienes inmuebles se le facultó en su artículo 25, para que; cuando una Secretaría o Departamento creyese necesaria su adquisición para uso público o común, emitiese su opinión al respecto sobre las posibilidades de adquirirlo, quedando a su cargo la gestión y registro de la compra.*
8. *Ley para el Control por parte del Gobierno Federal, de los Organismos Descentralizados y Empresas de Participación Estatal (DOF: 31/XII/1947). En su artículo 2°, definió de manera deficiente a dichos organismos y empresas, y en relación con los contratos administrativos; encargó su control administrativo y supervisión financiera a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y a la Secretaría de Bienes Nacionales e Inspección Administrativa, que las sometía a un control financiero, programático, presupuestal y contable; y a una vigilancia en sus contratos de obras, adquisiciones y de las enajenaciones de sus bienes inmuebles y derechos.*
9. *Reglamento de las Subastas a que se refiere la Ley General de Bienes Nacionales (DOF: 4/III/1949). establecía la normatividad para llevar a cabo estos procedimientos administrativos cuando se trataba de la enajenación de bienes de la nación a los particulares, que en materia de contratos administrativos resulta interesante, ya que también regula la baja de un bien cuando ya no se requiere su uso.*

10. *Ley Orgánica de la Tesorería de la Federación (DOF: 24/XII/1959). mediante este se otorgó a la TESOFE el ejercicio del procedimiento administrativo de ejecución para hacer efectivos los créditos de toda clase, constituidos en favor del Gobierno Federal o cuyo cobro le esté encomendado; se concentra en esta dependencia, como aprovechamiento del Erario Federal, toda cantidad que se obtenga a título de bonificación o descuento que concedan los proveedores o contratistas sobre los precios autorizados para las adquisiciones, servicios y demás obras por cuenta del Gobierno Federal.*
11. *Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto de Egresos de la Federación (DOF: 6/XI/1964). determinó que las adquisiciones estuvieran incluidas en programas de distribución de gastos, estableciendo un capítulo específico de compras y de contratos; todo esto como una forma de que fuera más eficiente el manejo del gasto público.*
12. *Ley para el Control por parte del Gobierno Federal, de los Organismos Descentralizados y Empresas de Participación Estatal (DOF: 4/I/1966). en su contenido incrementó la lista de organismos descentralizados y empresas de participación estatal que estaban exentas del control y vigilancia del Ejecutivo Federal; dividió a las entidades paraestatales en tres grupos: 1) instituciones del sector bancario y de crédito, incluidos los fideicomisos públicos y las empresas cuya mayoría accionaria estuviera en poder de las mismas; 2) las instituciones docentes y culturales; y 3) el resto de las entidades paraestatales.*
13. *Ley General de Bienes Nacionales (DOF: 30/I/1969). contenía esencialmente las mismas disposiciones de la que abroga de 1944, salvo que impuso a las entidades paraestatales la obligación de proveer a la Secretaría del Patrimonio Nacional, los informes referentes a los bienes y recursos de las mismas, para contenerlos en el Catálogo y en el Inventario General de los Bienes y Recursos de la Nación; se le da participación a la mencionada Secretaría en la venta, donación gravamen o afectación de bienes muebles de su propiedad y en los contratos que repercutan en los mismos.*
14. *Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal (DOF: 30/XII/1977). se encuentra dentro de los ordenamientos legales que le son aplicables a todos los contratos administrativos, debido al hecho de que toda celebración, cumplimiento e incumplimiento de un contrato administrativo repercute en el presupuesto y gasto público federal. De este modo, en su artículo 30 regula que en casos excepcionales la Secretaría de Programación y Presupuesto podrá autorizar la celebración de contratos de obras o de adquisiciones que rebasen las asignaciones presupuestales aprobadas para el año.*
15. *Ley General de Bienes Nacionales (DOF: 8/I/1982). Amplió el catálogo de los bienes del dominio público y privado; sin embargo, quedó prácticamente igual a su homónima de 1969.*
16. *Ley Federal de Entidades Paraestatales (DOF: 14/V/1986). actualmente en vigor, abrogó la Ley para el Control por parte del Gobierno Federal, de los Organismos Descentralizados y Empresas de Participación Estatal de 1970. Señala la conformación y regulación del sector paraestatal, disponiendo que formularán sus*

presupuestos anuales con base en los lineamientos generales que establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sin embargo la entidad manejará y erogará sus recursos propios por medio de sus órganos, todo esto incluyendo los contratos de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios que realicen, lo que se tradujo como un cambio sustancial, ya que les otorga autonomía de gestión y operación.

17. *Oficio Circular que fija las normas a que se sujetará la administración de los bienes muebles y el manejo de almacenes (DOF: 21/VI/1988). dejó sin efecto las Normas Generales para la Administración de los Almacenes de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, con fecha 26 de noviembre de 1982. Establecía que las dependencias y entidades debían contar con manuales para la administración de bienes muebles y el manejo de almacenes, y contendrían como mínimo la descripción de actividades, procedimientos, formatos e instructivos que se requirieran en cada caso, precisando dentro de sus objetivos y metas, así como los criterios que permitan el eficiente y racional aprovechamiento de los recursos materiales con que cuenten.*[19]

En materia de contrataciones públicas encontramos una gran diversidad de disposiciones legales a través de la historia que fueron utilizadas para regular las mismas, atendiendo a las necesidades del momento de su creación, tomando en cuenta el marco legal de las adquisiciones para guardar la congruencia y la consistencia necesarias.

6. Evolución de la Ley de Adquisiciones de 1965 a la fecha.

La Ley de Adquisiciones ha tenido una evolución notoria a partir de los antecedentes mencionados. La Ley de Inspección de Adquisiciones de 1965 es un progreso importante en la vigilancia e inspección, además de establecer *"que las adquisiciones se adjudicarían únicamente a los proveedores inscritos en el Padrón de Proveedores del Gobierno Federal, se fijaron los requisitos para inscribirse a dicho Padrón y la obligación a la Administración Pública de registrar previamente a su celebración los pedidos y contratos de adquisiciones".*

La Ley de Inspección de Adquisiciones, publicada el 6 de mayo de 1972, tuvo entre sus características el propósito de regular la consolidación y programación de las adquisiciones, así como ordenar Comités de Compras en las Dependencias.

La Ley sobre Adquisiciones, Arrendamientos y Almacenes de la Administración Pública Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1979, que se definió de orden público e interés social, extendió su competencia al arrendamiento de bienes muebles, detalló el Padrón de Proveedores de la Administración

[19] Arciniega Rendón, José Manuel, o*p. cit*., pp. 16-44.

Pública Federal, estableció facultades a favor de la Secretaría de Comercio y entre otras novedades, reguló el recurso de revocación.

La Norma de concurso para la Adquisición de Mercancías, Materias Primas y Bienes Muebles, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de octubre de 1980, buscó regular cada una de las figuras de la licitación pública, incluyendo los recursos de inconformidad, además de establecer modelos para una fácil evaluación de las ofertas y adjudicación de contratos.

Las Normas Complementarias sobre Adquisiciones y Almacenes, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 11 de julio de 1983, contienen puntos que las distinguen como: contenido de la convocatoria, criterios de evaluación, plazos de las etapas y los montos para los concursos mayores y menores.

La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 de febrero de 1985, facultaba a las Secretarías de: Programación y Presupuesto, Contraloría General de la Federación y Comercio y Fomento Industrial.

La misma ley regulaba las acciones de programación, presupuestación, planeación y control en las adquisiciones de las dependencias. En esta se determinó que las contrataciones debían ser por licitación pública y celebrarse con proveedores que estuvieran inscritos en el Padrón de Proveedores de la Administración Pública Federal. Además de que estableció el contenido de las bases y los lineamientos para la elaboración de las convocatorias.

El Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con Bienes Muebles, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de febrero de 1986, acotó las competencias de las dependencias normativas y eliminó la multiplicidad de normas generales y específicas para simplificar la operación de las adquisiciones.

En la Ley de Adquisiciones y Obra Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 1993, se regularon los contratos de adquisiciones, arrendamientos y servicios en conjunto con los contratos de obra pública.

Elimina el Padrón de Proveedores de la Administración Pública, retoma la licitación pública, la invitación restringida cuando menos a tres proveedores y la adjudicación directa, como procedimientos administrativos tanto nacionales como internacionales. Además de establecer los contenidos para la convocatoria, obligaciones, garantías, sanciones y bases para la licitación, incluye el derecho de los licitantes de inconformarse.

El 5 de noviembre de 1998, el Ejecutivo Federal presentó ante el Pleno de la H. Cámara de Diputados una iniciativa mediante la cual propuso separar e integrar en ordenamientos distintos la materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, y la de

obra pública, debido a que hasta ese momento se encontraban inmersas en un mismo documento.

El 4 de enero de 2000 es publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la cual abrogó a la Ley de Adquisiciones y Obras Publicas que se había emitido en 1993. La Ley del 2000, como la anterior, estableció que su objeto era el de regular las acciones relativas a la planeación, programación, presupuestación, contratación, gasto y control de las adquisiciones y arrendamientos de bienes muebles y la prestación de servicios de cualquier naturaleza, que realizaran las dependencias y entidades federales.[20]

Esta ley tenía como finalidad dar al país un régimen jurídico moderno en materia de adquisiciones y prestación de servicios, que actualizara e hiciera énfasis en la transparencia y simplificación administrativa de los procedimientos de contratación, dando equilibrio contractual y reciprocidad entre la Administración Pública y los licitantes, por lo cual era necesario realizar la separación de la materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, de la de obra pública.

La separación se concretó debido a que la convergencia de ambas materias en un solo ordenamiento generó frecuentes equívocos que impactaban la aplicación de procedimientos y reglas de contratación propios de cada materia, así la separación de materias y, en el caso que aquí ocupa, regular en un solo ordenamiento adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público permitió sistematizar las disposiciones de manera funcional y especializada, llenar las lagunas existentes y aclarar las confusiones que se suscitaban al reunir en un solo ordenamientos ambas materias.

La separación de las materias en esta nueva ley buscó: 1) Transparencia y eficiencia al uso de los recursos públicos, 2) Marco jurídico de reglas claras y manejo práctico para los servidores públicos, proveedores y prestadores de servicios que permitiera el desarrollo y competitividad de las empresas, así como 3) Generar una actualización del esquema normativo congruente con los diversos ordenamientos legales, para alinearlo bajo los principios del artículo 134 constitucional, al tiempo de que garantice al Estado las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad, y también les permita a las empresas desarrollarse y cumplir con los compromisos pactados.

Los puntos a destacar de la nueva ley, son los siguientes:

- La Ley Federal de Procedimiento Administrativo actuará como un instrumento supletorio de esta Ley.

[20] Infante Meléndez, Héctor Mateo, *Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios del Sector Público,* Instituto Nacional de Administración Pública, A.C., México, 2011, p. 56.

- En el ámbito de aplicación de la ley, se incluye la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y los fideicomisos en los cuales el Gobierno Federal o alguna entidad paraestatal sea el fideicomitente.
- Cuando los bienes o servicios sean utilizados o prestados en el país, las licitaciones o los contratos que deriven de éstas deberán celebrarse dentro del territorio nacional.
- En procedimientos de contratación de carácter internacional se dará preferencia a la adquisición y arrendamiento de bienes producidos en el país que cuenten con un porcentaje de contenido nacional.
- El titular de la dependencia o entidad podrá, sin la intervención del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, dictaminar sobre la procedencia de no celebrar licitaciones públicas.
- Los interesados podrán consultar la base de datos de esta dependencia, con el fin de obtener información relativa a licitaciones públicas. Los participantes en licitaciones podrán enviar sus propuestas a través del servicio postal o de mensajería, o por medios remotos de comunicación electrónica.
- La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial queda facultada para determinar el carácter de los procedimientos de contratación, atendiendo a las reservas, medidas de transición u otros supuestos establecidos en los tratados.
- Los medios de identificación electrónica, cuando se trate de propuestas enviadas a través de medios remotos de comunicación electrónica, surtirán los mismos efectos jurídicos que los documentos firmados autógrafamente.
- Establece un nuevo supuesto para celebrar licitaciones internacionales: cuando realizada una de carácter nacional no se presenten propuestas, o bien los bienes a adquirir no sean producidos en el país, o bien no cumplan con el grado de contenido nacional.
- En licitaciones internacionales, los proveedores nacionales podrán cotizar en moneda extranjera, siempre que el pago que efectúen en territorio nacional lo realicen en moneda nacional al tipo de cambio vigente en el momento del pago.
- En los criterios de adjudicación se podrán utilizar mecanismos por puntos, y de costo-beneficio, siempre que se demuestre su conveniencia y se observen los lineamientos que establezca la Secretaría respectiva.
- Se podrá cancelar una licitación por caso fortuito o fuerza mayor, o bien cuando existan circunstancias que extingan la necesidad de contratar la adquisición, el arrendamiento o la prestación de servicios, y que de continuarse con el procedimiento de contratación pudiera ocasionar un daño o perjuicio a la dependencia o entidad de que se trate.
- Se incluyen como supuestos para contratar a través de los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa, los casos en que el objeto del contrato sea el diseño y fabricación de un bien que sirva como

prototipo, o bien cuando se trate de sustancias y materiales para ser utilizados en actividades experimentales requeridas en proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico, y la adquisición de bienes o la prestación de servicios se realice mediante la figura de dación en pago.

- Quedan establecidos los elementos mínimos que deberán contener los contratos de adquisiciones, arrendamientos y servicios.
- Se establece la inhabilitación temporal para participar en procedimientos de contratación o celebrar contratos, como una sanción.
- Las inconformidades podrán ser presentadas a través de medios remotos de comunicación, empleando asimismo medios de identificación electrónica, conforme a los lineamientos que expida la Secretaría respectiva.
- Mediante la interposición de una queja, puede realizarse un procedimiento de conciliación para dirimir, a través de convenios, controversias respecto al incumplimiento de los contratos.

La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público se ha modificado en los últimos años, teniendo un total de 14 reformas entre las cuales cabe destacar las de 2005 y 2009. En las del año 2005, Daniel Ramos señala los aspectos relevantes tanto en la ley como en su reglamento:

- *El acto de presentación y apertura de proposiciones se lleva a cabo en un solo acto y no en dos etapas, como lo establecía anteriormente la LAASSP.*
- *Las proposiciones, técnica y económica, deben presentarse en un solo sobre cerrado.*
- *El procedimiento de licitación pública termina con la firma del contrato adjudicado y no con la emisión del fallo respectivo, como lo ordenaba anteriormente la LAASSP. Así pues la firma del contrato o pedido, ahora, es parte del procedimiento de licitación pública.*
- *Se establecen requisitos cuyo incumplimiento no afecta la solvencia de las proposiciones presentadas.*
- *En materia de Inconformidades, se reduce de 10 a 5 días hábiles, el plazo con que cuentan las Dependencias y Entidades para presentar la información que solicita la Secretaría de la Función Pública.*
- *Se ordena que previo a la emisión de la convocatoria, las bases de licitación cuyo presupuesto en conjunto represente al menos el cincuenta por ciento del monto total a licitarse por la Dependencia o Entidad en cada ejercicio fiscal deban ser difundidas a través de su página en Internet o en CompraNet, durante el plazo mínimo de 5 días hábiles. A esta publicación se le denomina las prebases de licitación, y a partir del día siguiente al de su difusión, las Dependencias y Entidades recibirán los comentarios respectivos en la dirección electrónica que para tal fin se señale o bien, invitarán a los interesados, profesionales, cámaras o asociados empresariales del ramo, para participar en su revisión y opinión; quedando a juicio de las convocantes incorporar o no dichos comentarios a las bases de licitación definitivas.*

- *Se establece la preferencia para contratar a las empresas que cuenten con personal con discapacidad en una proporción del cinco por ciento cuando menos de la totalidad de su planta de empleados, cuya antigüedad no sea inferior a seis meses; antigüedad que se comprueba con el aviso de alta al régimen obligatorio del IMSS.*[21]

La reforma de 2009, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 28 de mayo del mismo año, su nuevo reglamento el 28 de julio de 2010 y el nuevo Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el 9 de agosto de 2010, destacando las siguientes novedades:

- *Se ordena que la LAASSP tiene como objeto reglamentar la aplicación del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de las adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y prestación de servicios de cualquier naturaleza.*
- *Se define a* ***CompraNet****, se establece que su administración está a cargo de la SFP, y se indican sus finalidades.*
- *Se definen a la investigación de mercado, al precio no aceptable y al precio conveniente.*
- *Se deroga la división del Título Segundo y Capítulo Único. El nuevo Título Segundo se reubica a partir del artículo 26.*
- *Los procedimientos de licitación pública e invitación a cuando menos tres personas ahora terminan con la emisión del fallo o, en su caso, con la cancelación del procedimiento respectivo y no con la firma del contrato adjudicado, como lo ordenaba anteriormente la LAASSP. Así pues, la firma del contrato o pedido, ahora, ya no es parte de los procedimientos de licitación pública e invitación a cuando menos tres personas. .*
- *Se establecen tres nuevas modalidades de licitación pública: presencial, electrónica y mixta.*
- *Se incorpora la participación de los testigos sociales en aquellas licitaciones públicas cuyo monto rebase el equivalente a cinco millones de días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal y en aquellos casos que determine la SFP.*
- *La convocatoria que llama a licitación pública ahora contiene las bases en que se desarrolla el procedimiento y en las cuales se describen los requisitos de participación.*
- *Se derogan las bases de licitación y su venta, así como su impugnación.*
- *Se agregaron nuevas reglas para que los licitantes puedan solicitar aclaración a sus dudas en las juntas de aclaraciones.*
- *Se establece que la utilización del criterio de evaluación binario, mediante el cual sólo se adjudica a quien cumpla los requisitos establecidos por la convocante y*

[21] Ramos Torres, Daniel, o*p. cit.,* pp. 90 - 91.

oferte el precio más bajo, será aplicable cuando no sea posible utilizar los criterios de puntos y porcentajes o de costo beneficio.

- *Se ordena que cuando las Dependencias y Entidades requieran obtener bienes, arrendamientos o servicios que conlleven el uso de características de alta especialidad técnica o de innovación tecnología, deberán utilizar el criterio de evaluación de puntos y porcentajes o de costo beneficio.*
- *Se define lo que debe contener el fallo, y la posibilidad de hacer correcciones al mismo.*
- *Se ordena que en los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas o adjudicación directa se propongan los nombres de las personas invitadas o el nombre de la persona a quien se pretende contratar, acompañando la investigación de mercado que sustenta su selección.*
- *Se agregan nuevos elementos como parte integrante de los contratos.*
- *Se agregan nuevas prácticas en el perfeccionamiento de los contratos consistentes en que se obliga a la dependencia o entidad y a la persona a quien se haya adjudicado, a firmar el contrato en la fecha, hora y lugar previstos en el propio fallo, o bien en la convocatoria a la licitación pública y en defecto de tales presiones, dentro de los quince días naturales siguientes al de la citada notificación.*
- *Se establece el sistema integral de información, el cual contará con un Registro Único de Proveedores.*
- *Se mejora notablemente la tramitación de las Inconformidades incorporando un nuevo catálogo de causales de sobreseimiento; se propone un nuevo catálogo de actos susceptibles de ser notificados; se aclara la naturaleza, efectos y condiciones para conceder la suspensión de los actos impugnados; se estructura la instrucción del procedimiento de trámite; y se establecen los efectos de las resoluciones, introduciendo nuevas figuras a incluir en las mismas.*
- *Para la solución de controversias se establecen el arbitraje, otros mecanismos de solución de controversias que regule la SFP, y la competencia judicial.*[22]

Como se puede observar, las reformas de los años 2009 y 2010, entre otras, trascienden de forma significativa en la actualidad, en aspectos que nos sitúan a la vanguardia mundial del cambio.

La reforma de junio de 2011 al artículo 18 es referente a la planeación de las contrataciones. En enero de 2012, se reforman los artículos 28, fracciones II y III, inciso a), y el párrafo tercero (clasificación de las licitaciones públicas de acuerdo con su carácter); 42, quinto párrafo (excepción a la licitación por montos máximos); 43, último párrafo (requisitos de las invitaciones a cuando menos tres personas); 80, primer párrafo (del arbitraje para los proyectos de prestación de servicios), y 84 (otros medios alternativos para la solución de controversias); se adiciona un párrafo segundo a la fracción III del artículo 43 (permitir que el área responsable declare desierto el procedimiento o lo continúe sin tener las tres proposiciones e incluso proceda a la

[22] Ramos Torres, Daniel, o*p. cit.,* pp. 91-93.

adjudicación directa), y se derogan los incisos a) y b), de la fracción II, del artículo 28 (se modifica este párrafo dejando una sola hipótesis para realizar procedimientos internacionales bajo tratados), todos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

En agosto de 2014, se modifican el párrafo tercero del artículo 1 que contribuye al establecimiento de la materia y sujetos de la Ley y en noviembre de 2014 el segundo párrafo del artículo 14 respecto al margen de preferencia.

7. Mejores prácticas en licitaciones públicas.

Las mejores prácticas se pueden definir como el conjunto de acciones que han obtenido un resultado excelente o bueno en el contexto aplicado de las licitaciones públicas. En México es la SFP, a través de la Unidad de Política de Contrataciones Públicas, la que reconoce tal carácter, así ha concedido, por ejemplo, a la Comisión Federal de Electricidad, las siguientes precisiones:

- A los procedimientos de licitación pública bajo la modalidad de Oferta Subsecuente de Descuento, en tanto se cumplieron las condiciones necesarias en el mercado nacional e internacional, produciendo un ahorro considerable para el año 2011.
- No cuenta con una gran cantidad de inconformidades, comparada con el resto de la Administración Pública Federal entre 2007 a 2010.
- Se adecuó el Sistema de Adquisiciones por Internet, para que ahí mismo se realicen compras por adjudicación directa, cuyo monto sea inferior a los 300 salarios mínimos en el año 2011.
- Para comprar se debe de obtener la clave de agente comprador.
- La CFE rebaso la meta para la contratación de MiPYMES, establecida por la Secretaría de Economía en 2011.
- La promoción de transparencia en el abastecimiento institucional, utilizando la capacitación permanente, cuenta con la participación de testigos sociales a partir del 2011, y la revisión previa de bases de la licitación, entre otras.
- Cuenta con un código de conducta para promover la cultura de la legalidad.

Otro ejemplo reconocido son las estrategias de contrataciones de la Secretaría de la Función Pública, destacando entre documentos los siguientes: la Política General de Contrataciones Públicas, las modificaciones a los Lineamientos para la Aplicación del Criterio de Evaluación de Proposiciones a través del Mecanismo de Puntos y Porcentajes en los Procedimientos de Contratación, la Actualización de la Nota Metodológica para el Cálculo de Ahorros Derivados de la Implantación de Estrategias de Contratación Pública

y la encuesta de percepción sobre la eficiencia del sistema de contrataciones públicas en México.

En el ámbito internacional se cuenta con diferentes organismos encargados de determinar y definir ganadores para incentivar las mejores prácticas tanto en la Administración Pública, como en las contrataciones públicas, de los países que cada año, realizan esfuerzos para lograr los más altos objetivos.

8. Organismos internacionales y adquisiciones públicas.

Los antecedentes de los organismos internacionales, se remontan a los proyectos para los fines comunes y evitar las guerras, tal como el de Pierre Dubois de 1306, titulado *"De Recuperatione Terrae Santa", que "trataba sobre la necesidad de una confederación de las entidades políticas de su tiempo para preservar la paz y liberar los lugares santos."*[23]

Otro de los proyectos es la firma del Tratado de Westfalia en 1648, el cual buscaba el equilibrio de los poderes entre los estados europeos. Posteriormente en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 señalaba la inalienabilidad de la soberanía de las naciones. En el Congreso de Viena se crearon diversos documentos para lograr la paz, a través de la Santa Alianza, teniendo éxito de 1815 a 1870.

En el *Tratado de París* de 1856, fijaron los límites en el comercio marítimo internacional y se admite a un país no cristiano en la firma de un Tratado europeo, marcando la pauta para la admisión de países de nuestro continente.

En seguida, en la Conferencia de La Haya en 1899 y 1907 buscaban regular el uso desmedido de la fuerza en los conflictos internacionales mediante sanciones.

Con los antecedentes mencionados anteriormente se mantuvo la paz hasta el asesinato del Archiduque Francisco Fernando del Imperio Austrohúngaro en junio de 1914, provocando así la primera guerra mundial, concluyendo en 1918. Un año después se firma el *Tratado de Versalles*, que da fin a la esta guerra, estableciendo la primera organización internacional con vocación universal, para preservar la paz, denominada Sociedades Unidas.

La segunda guerra mundial se dio de 1939 a 1945, debido a diversos conflictos generados por las grandes potencias hacia las más débiles. Las Sociedades Unidas en su intento de frenar las agresiones, aplicaban sanciones económicas, posteriormente tuvo un gran fracaso al permitir la entrada de las tropas alemanas en la zona

[23] Carrillo Suaréz, Agustín Eduardo. *Los organismos internacionales*, http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/9/4056/5.pdf.

desmilitarizada del Rhin en 1936, entre otros conflictos que fueron encaminando a la guerra, cesando sus funciones en 1946.

El resentimiento que se tuvo para las Sociedades Unidas fue utilizado por Adolfo Hitler para ascender al poder y que el pueblo alemán renunciará al tratado en conjunto con los países extranjeros.

Un hecho importante para que concluyera la guerra fue el desembarco en Normandía de las fuerzas aliadas en 1944, para romper la línea defensiva alemana y tomar Berlín.

En 1944 se origina el Fondo Monetario Internacional (FMI) y al Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo (BIRD), gracias a la conferencia de Bretton Woods, siendo un gran acontecimiento para las reuniones posteriores de las Conferencias de las Naciones Unidas.

Las Organización de las Naciones Unidas, es creada el 24 de octubre de 1945 por China, Francia, la Unión Soviética, Reino Unido, Estados Unidos y países signatarios; fue definida por Agustín Carrillo como un espacio de discusión y reflexión que ofrece a los países la posibilidad de hacer oír su voz; e instancia para dilucidar diplomáticamente las rivalidades; es un punto de encuentro de los Estados débiles, para unir fuerzas y fortalecerse en la defensa de sus intereses conjuntos frente a las grandes potencias. Realizan estudios y se difunde el conocimiento de la problemática mundial; es un instrumento político, puesto que también han tratado de utilizarla las grandes potencias como instrumento legitimador de sus acciones, unilaterales; mientras que las potencias medianas y pequeñas han depositado esperanzas a menudo desproporcionadas a los medios con que cuenta.

Para la Organización de las Naciones Unidas su principal función es la de mantener la paz internacional proporcionando derechos y obligaciones que se convierten en instrumentos para lograr mejores resultados en la convivencia mundial.

A) Fondo Monetario Internacional.

El Fondo Monetario Internacional fue creado en 1944 en la conferencia de las Naciones Unidas, celebrada en Bretton Woods, para evitar una depresión como en los años treinta, acordándolo así los 44 países fundadores para establecer un marco de cooperación económica, actualmente cuenta con 189 países miembros.

La responsabilidad del FMI, como ellos lo indican, es asegurar la estabilidad del sistema monetario internacional, que implica el sistema de pagos internacionales y tipos de cambio que permite a los países efectuar transacciones entre sí. Y en 2012 añadió

cubrir toda la problemática de la macroeconomía y del sector financiero que incide en la estabilidad mundial.

Por lo anterior revisa las políticas económicas, la situación económica y financiera nacional, regional y mundial a través de un sistema formal de supervisión, recomendando políticas. También publica informes de evaluaciones regulares a fin de generar perspectivas de la economía mundial, de los mercados financieros en su *Global Financial Stability Report* y sobre la evolución de las finanzas públicas en Fiscal Monitor.

Otorga asistencia financiera a los 189 países miembros con la finalidad de corregir los problemas de la balanza de pagos, apoyados por las autoridades nacionales responsables de los programas de ajuste. En la asistencia técnica se deben de fortalecer las capacidades de concepción y de ejecución de políticas eficaces.

Los Derechos Especiales de Giro, fueron creados en 1969 como una reserva internacional que pueden complementar los activos de la reserva de los países miembros.

El Fondo Monetario Internacional rinde cuenta a los gobiernos de los países miembros. La Junta de Gobernadores se ubica dentro de su estructura como la jerarquía máxima, estando compuesta por un gobernador y su suplente por cada uno de los países miembros que se reúnen una vez al año en las Reuniones Anuales del FMI y del Banco Mundial.

Las reuniones con el Banco Mundial se realizan en la sede que se ubica en Washington, por dos años consecutivos y al tercero se celebra en un país miembro.

B) Banco Interamericano de Desarrollo.

El Banco Interamericano de Desarrollo desempeña diversas funciones, que explica de la siguiente manera:

> *…trabajamos para mejorar la calidad de vida en América Latina y el Caribe. Ayudamos a mejorar la salud, la educación y la infraestructura a través del apoyo financiero y técnico a los países que trabajan para reducir la pobreza y la desigualdad. Nuestro objetivo es alcanzar el desarrollo de una manera sostenible y respetuosa con el clima. Con una historia que se remonta a 1959, hoy somos la principal fuente de financiamiento para el desarrollo para América Latina y el Caribe. Ofrecemos préstamos, donaciones y asistencia técnica; y realizamos amplias investigaciones. Mantenemos un firme compromiso con la consecución de resultados medibles y los más altos estándares de integridad, transparencia y rendición de cuentas.*[24]

[24] Banco Interamericano de Desarrollo en http://www.iadb.org/es/acerca-de-nosotros/acerca-del-banco-interamericano-de-desarrollo,5995.htmlconsultada el 8 de marzo de 2016, a las 4:40 p.m.

El portal del BID cuenta con apartados en materia de adquisiciones, el primero es *"Oportunidades en adquisición",* en el cual se nos explican las políticas que ellos imparten, garantizando la transparencia, la competencia, la igualdad de oportunidades y los principios de economía, eficiencia e integridad en las adquisiciones de proyectos financiados por el BID; igualmente nos indica que los países puedan utilizar sus sistemas nacionales en la realización de los procesos de adquisiciones, en los proyectos que el BID financia, con excepción de las Licitaciones Públicas Internacionales seguirán los procesos indicados en las Políticas de Adquisiciones del Banco.

El uso de los sistemas nacionales de compras públicas de los países que han sido validados, se dividen en dos rubros principalmente:

- *Uso avanzado de sistemas nacionales de adquisiciones, hace referencia a la validación completa por parte del BID del sistema de compras Públicas del país, que cumplen con las buenas prácticas internacionales, para su uso por debajo de los umbrales para Licitación Pública Internacional tal y como se especifica en la Guía de Aprobación de Sistemas Nacionales.*
- *Uso parcial de sistemas nacionales de adquisiciones, hace referencia a la validación por parte del BID de algunos subsistemas de compras que cumplen con las buenas prácticas internacionales, para su uso en proyectos por debajo de los umbrales para Licitación Pública Internacional tal y como se especifica en la Guía de Aprobación de Sistemas Nacionales.*[25]

México se localiza en el rubro de *uso avanzado,* ahora bien, su alcance es en: Sistema Informático en la Web, bienes y servicios diferentes de consultoría conformado por Licitación Pública Nacional, Subsistemas de Subasta Inversa, Subsistema de Convenio Marco y Subsistema de Comparación de Precios, y el rubro de obras que la integran, Licitación Pública Nacional y Subsistema de Comparación de Precios.

El alcance en el cual México no se encuentra es el de Consultoría conformado por Consultoría de individuos.

Los países como Brasil, Ecuador se encuentran en uso avanzado de los sistemas nacionales de compras, abarcando todos los rubros mencionados anteriormente incluyendo el que no tiene México.

Chile se encuentra en la misma categoría que Brasil, Ecuador y México, es decir, en uso avanzado, a excepción que no cuenta con el subrubro de obras en Licitación Pública Internacional.

Los países que se encuentran en la categoría de uso parcial son: Argentina, Bolivia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panamá, Paraguay,

[25] *Ídem.*

Perú, República Dominicana y Uruguay. Señalando que estos mismos países cuentan con pocos subrubros, a comparación de Brasil, Ecuador, Chile y México.

La validación de los sistemas nacionales de compras se define en la *"Guía de aprobación de Sistemas Nacionales",* que establece los requisitos y metodologías para cumplirlos. Así como, la organización del proceso de decisión y análisis para aceptar el uso de los Sistemas de Adquisiciones.

En la Guía se nos describe la necesidad de leer otros documentos para comprenderla mejor, los cuales son:

- *"Metodología para la evaluación de los Sistemas de Adquisiciones de la OECD (OCDE)/DAC (Comité de Ayuda al Desarrollo)"*
- "*Guía para la aplicación de la metodología OECD/DAC en los Diagnósticos de los Sistemas de Adquisiciones Públicas"*
- "*E-Tendering Requirements for MDB Financed Procurement"*

El proceso de Aceptación se detalla en cuatro fases principalmente:

1. Planificación.
2. Ejecución.
3. Decisión Técnica.
4. Decisión Gerencial.

La planificación, se integra por *"Diálogo y Solicitud del País"* y *"Coordinación del Proceso"*. La primera consiste en que los países soliciten al banco la aceptación de sus Sistemas de Adquisiciones en las operaciones que éste financia; y por su parte el diálogo se estructura de la siguiente manera:

> *Los Representantes del Banco en los países, con el apoyo de los especialistas de adquisiciones, serán responsables de adelantar el diálogo con las autoridades nacionales en esta materia, discutiendo los siguientes temas: (i) los intereses mutuos y beneficios de iniciar un proceso de uso y fortalecimiento de su Sistema de Adquisiciones; (ii) la estrategia del Banco en esta materia; (iii) las posibilidades del país de solicitar la aceptación total de su Sistema o bien de alguno de sus subsistemas; (iv) los procedimientos y requisitos necesarios para su aceptación; (v) las Entidades y Organismos del Gobierno que debieran participar; (vi) los tiempos de ejecución y; (vii) los elementos básicos del informe de resultados que se emitirá.*[26]

En la segunda parte de *"Coordinación del Proceso"*, se designa que VPC (Vicepresidencia de Países) y FMP (Oficina de Servicios de Gestión Financiera y

[26] Guía para la Aceptación del uso de los Sistemas Nacionales de Adquisiciones, pp. 7 y 8, http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=35225025

Adquisiciones para Operaciones), tendrán a su cargo la coordinación de todo el proceso para la aceptación del Sistema de Adquisiciones en algún país.

La etapa de Ejecución, se conforma por el *Trabajo de Análisis Técnico*, *Confirmación con el Gobierno* e *Informe de los resultados.*

Respecto al Trabajo de Análisis Técnico, principalmente está dedicado para el cumplimiento de los requerimientos establecidos en la Guía, realizando diferentes actividades como, establecer un plan de trabajo y coordinarse con el Gobierno, entre otras.

En *Confirmación con el Gobierno*, el Equipo Técnico del Banco presentará sus resultados a su contraparte y pedirá su retroalimentación y confirmación de los hallazgos para la aceptación.

El *Informe de Resultados*, se da una vez que se tiene la confirmación de los resultados con el Gobierno, y así se escriben las conclusiones del Equipo Técnico, determinando la factibilidad del uso total del Sistema o subsistemas.

La *Decisión Técnica*, se integra por el *Control de Calidad* y la *Resolución Técnica*; en *Control de Calidad*, se realiza la verificación CAP (Comité de Adquisiciones de Proyectos), con las recomendaciones que emita. En la *Resolución Técnica*, en la cual se emite por parte del CAP su confirmación del Equipo técnico o no, así como sus recomendaciones.

La *Decisión Gerencial*, debe de ser sometida, a través de sus organismos de decisión, a la resolución técnica del CAP.

Una vez concluido todo el proceso, se procede a la Aprobación del Directorio y Publicidad de los Resultados, en un Informe para la Aceptación del Uso del Sistema Nacional, para ser aprobado por el Directorio Ejecutivo del Banco.

Las políticas que establece el BID para la Adquisición de Bienes y Obras, los cuales definen los procedimientos aplicables para las adquisiciones de bienes, obras y servicios diferentes a consultoría; siendo fijada la fecha en el momento de su aprobación:

- GN-2349-9 para operaciones aprobadas con posterioridad a marzo 2011.
- GN-2349-7 para operaciones aprobadas después de julio de 2006 y antes de marzo de 2011.
- GN-2349-6 para operaciones aprobadas después de febrero y antes de julio de 2006.
- GN-2349-4 para operaciones aprobadas después de enero de 2005 y antes de febrero de 2006.
- GP-118-23 para operaciones aprobadas desde 1995 y antes de enero de 2005.

El segundo apartado con que cuenta el BID es el de *Adquisiciones Corporativas*, definida por ellos como la compra de amplia variedad de bienes y servicios para satisfacer sus necesidades internas a través de su División de Servicios Administrativos y Adquisiciones Institucionales. Los principios de transparencia, equidad, capacidad de respuesta, mejor valor y responsabilidad rigen las actividades de Adquisiciones Institucionales del Banco, y son parte de la Política de adquisición corporativa.

C) Banco Mundial.

El Banco Mundial fue creado en 1944 y cuenta con una sede en Washington y se encuentra constituido por cinco instituciones:

1. *El Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. Que otorga préstamos a Gobiernos de países de ingreso mediano y de ingreso bajo con capacidad de pago.*
2. *La Asociación Internacional de Fomento. Que concede préstamos sin interés, o créditos, así como donaciones a Gobiernos de los países más pobres.*
3. *La Corporación Financiera Internacional. Es la mayor institución internacional de desarrollo dedicada exclusivamente al sector privado. Ayudamos a los países en desarrollo a lograr un crecimiento sostenible, financiando inversiones, movilizando capitales en los mercados financieros internacionales y la prestación de servicios de asesoramiento a empresas y gobiernos.*
4. *El Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones. Fue creado en 1988 para promover la inversión extranjera directa en los países en desarrollo, apoyar el crecimiento económico, reducir la pobreza y mejorar la vida de las personas. MIGA cumple este mandato ofreciendo seguros contra riesgos políticos (garantías) a inversores.*
5. *El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones. Presta servicios internacionales de conciliación y arbitraje para ayudar a resolver disputas sobre inversiones.*[27]

El Banco Mundial establece las políticas y programas para el financiamiento, principalmente para alcanzar sus objetivos de terminar con la pobreza extrema y promover la prosperidad compartida, con las siguientes metas:

- *Para acabar con la pobreza extrema, la meta del Banco es disminuir el porcentaje de las personas que viven con menos de $1,90 USD al día al 3% antes de fines de 2030.*

[27] Banco Mundial en http://www.bancomundial.org/es/about consultada el 4 de mayo de 2016, a las 5:32 p.m.

- *Para fomentar la prosperidad compartida, la meta es promover el crecimiento de los ingresos de la población de todos los países que se sitúa en el 40% inferior de la distribución del ingreso.*[28]

Además ofrece la oportunidad de ser asesorados sobre las políticas, asistencia técnica, investigación y análisis. Con la finalidad de garantizar mejores conocimientos especializados a nivel mundial y generar conocimientos vanguardistas, resaltando primordialmente:

> *Resultados: Definición permanente del enfoque para ayudar a los países en desarrollo a producir resultados medibles*
> *Reforma: Esfuerzo por mejorar todos los aspectos de la labor, lo que incluye el diseño de los proyectos, la disponibilidad de la información (Acceso a información) y el acercamiento de las operaciones a las comunidades y Gobiernos clientes.*
> *Desarrollo abierto (i): Incluye una gama cada vez mayor de herramientas, investigación y conocimientos (i) gratuitos y de libre acceso que permiten a las personas abordar los desafíos planetarios en materia de desarrollo. Por ejemplo, el sitio web Datos de libre acceso permite acceder a indicadores completos acerca del desarrollo en los distintos países que se pueden descargar en Internet. También existe el Foro Abierto –una serie de debates en vivo en que pueden participar personas de todo el mundo-, y que es parte clave de las Reuniones Anuales y de Primavera, realizadas conjuntamente con el Fondo Monetario Internacional (FMI).*[29]

Para la materia de adquisiciones de los proyectos y programas financiados, se exige que se hagan conforme a su Convenio Constitutivo, contiene los importes de los préstamos, donaciones o créditos condicionados a destinarse únicamente para los fines que fueron concedidos.

En la misma página del Banco se nos explican las normas en materia de adquisiciones, entre otras:

- Normas Adquisiciones con Préstamos del BIRF y Créditos de la AIF de enero de 1996.
- Normas Contrataciones con préstamos del BIRF y créditos de la AIF de mayo 2004, con revisiones en octubre de 2006 y mayo de 2010.
- Normas Adquisiciones de Bienes, Obras y Servicios Distintos a los de Consultoría con Préstamos del BIRF, créditos de la AIF y donaciones por prestatarios del banco mundial de enero de 2011.

[28] Banco Mundial en http://www.bancomundial.org/es/about/what-we-do consultada el 5 de mayo de 2016, a la 1:05 p.m.
[29] *Ídem.*

El objeto de estas es el siguiente:

> *Estas Normas tienen por objeto informar a los encargados de la ejecución de un proyecto financiado en su totalidad o en parte por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), un crédito o donación de la Asociación Internacional de Fomento (AIF), un adelanto para la preparación de un proyecto (PPAs), una donación del Banco, o un fondo fiduciario administrado por el Banco y ejecutado por el beneficiario acerca de las políticas que rigen la adquisición de los bienes, de las obras y servicios distintos a los de consultoría necesarios para el proyecto. Las relaciones legales entre el Prestatario y el Banco se rigen por el Convenio de Préstamo, y la aplicabilidad de estas Normas para la adquisición de bienes, obras y servicios distintos a los de consultoría se estipula en dicho convenio. Los derechos y las obligaciones del Prestatario y de los proveedores de bienes, obras y servicios distintos a los de consultoría para el proyecto se rigen por los documentos de licitación, y por los contratos firmados por el Prestatario con tales proveedores y no por las presentes Normas ni por el Convenio de Préstamo. Ninguna entidad distinta de las que suscriben el Convenio de Préstamo podrá obtener derecho alguno del mismo ni reclamar título alguno sobre el importe del préstamo.*

En el apartado *Otros métodos de adquisición*, ubicado en las normas establecen la posibilidad de mecanismos para adquirir, mencionando los siguientes:

- Licitación Internacional Limitada.
- Licitación Pública Nacional.
- Comparación de Precios
- Contratación Directa.
- Construcción por Administración.
- Contrataciones a través de Agencias de las Naciones Unidas.
- Agentes de Contrataciones y Administradores de Contratos de Construcción.
- Servicios de Inspección.
- Contrataciones en Préstamos a Intermediarios y Entidades Financieras.
- Contrataciones por Acuerdos de Asociación Público-Privada.
- Contratación basada en Desempeño.
- Contrataciones con Préstamos Garantizados por el Banco.
- Participación de la Comunidad en las Contrataciones.
- Uso de Sistemas de País.

Cabe destacar la *Licitación Internacional Limitada (LIL)*, es prácticamente una Licitación Pública Internacional convocada mediante invitación directa y sin anuncio público. La LIL puede ser un método adecuado de contratación en los casos en que haya

solamente un número reducido de proveedores, o haya otras razones excepcionales que puedan justificar el empleo cabal de procedimientos distintos de los de una LPI.

La *Licitación Pública Nacional*, es el método de licitación competitiva que se emplea normalmente en las contrataciones públicas en el país del Prestatario, y puede constituir la forma más eficiente y económica de adquirir bienes o ejecutar obras cuando, dadas sus características y alcance, no es probable que se atraiga la competencia internacional.

Dentro del portal de Banco Mundial se tiene la opción de *"Datos libres de acceso"*, en el cual se cuenta con un buscador que limita bien lo que se requiere, y México se encuentra en varios proyectos de licitación, con anuncios como por ejemplo:

- Elaboración de los trabajos de consolidación necesarios para que sociedades del sector de ahorro y crédito popular y cooperativo soliciten el apoyo del Fideicomiso que administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores (Fideicomiso Pago), con el método de selección basada en la calidad y el costo, con fecha del 4 de mayo de 2016.
- Fuente de información estratégica del sector de tecnologías de la información línea base, con el método de selección basada en la calidad y el costo, con fecha del 11 de noviembre de 2015.

El Banco Mundial divulga la información de sus operaciones, entre ellas las adquisiciones, para poder realizar los procedimientos de contratación de una manera eficiente, eficaz y como ellos lo señalan, de manera transparente.

9. Red Interamericana de Compras Gubernamentales.

Se creó en 2004, la Red Interamericana de E-Compras Gubernamentales, cambiando el nombre en 2005, ahora denominada Red Interamericana de Compras Gubernamentales, su punto de encuentro se da a partir de las conferencias que se tenían desde 2003 con los responsables de oficinas nacionales y programas de modernización de compras gubernamentales en las Américas.

En su información pública electrónica se dice que está constituida como un mecanismo de cooperación técnica regional, integrada por instituciones gubernamentales, en donde los directores nacionales, tienen la máxima responsabilidad relacionada con la regulación, gestión y modernización de las compras públicas en 32 países de América Latina y el Caribe, que manejan del 10 al 20% del PIB de sus países.

Los miembros de la Red Interamericana de Compras Gubernamentales, son los siguientes:

- Directores nacionales de los 32 países de América latina y el Caribe.
- Organización de los Estados Americanos.
- Banco Interamericano de Desarrollo.
- Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo.

La Red Interamericana de Compras Gubernamentales otorga premios a los países, dependiendo de los logros obtenidos en la materia, principalmente reconocen el liderazgo y la innovación.

Otorgan el premio al liderazgo *"Joseph Francois Robert Marcello",* denominado así en honor al ex Coordinador Nacional de Compras Públicas del Gobierno de Haití.

El objetivo principal es reconocer y apoyar a los países líderes de las compras públicas, así como incentivar a los directores para fortalecer su liderazgo. Los criterios que se consideran para la elección, son:

- *El premio está dirigido a reconocer a las personas y no al país.*
- *Debe atenderse a los atributos de la persona como líder para conducir los procesos de reforma y modernización de las compras de gobierno. Para dichos efectos se reconocerá al representante del país que haya logrado cambios significativos para la modernización y mejora de su sistema de compras públicas.*
- *Para efectos del análisis de las candidaturas se evaluará la gestión realizada en los doce meses previos a la nominación.*
- *El jurado evaluará los méritos de los candidatos con respecto a los siguientes atributos:*
  - *Innovación: Implementación de nuevas soluciones para mejorar los sistemas de compras públicas.*
  - *Liderazgo: Habilidad para posicionar y obtener apoyo para las reformas en compras públicas.*
  - *Visión de Largo Plazo: Destreza en la formulación de Planes Estratégicos e impulso de nuevas iniciativas.*
  - *Capacidad Gerencial: Creación de equipos de trabajo, productividad y orientación a resultados.*
  - *Generación de conocimiento: Distinguida contribución en materia de compras y contratación medible a través de la publicación de documentos relevantes y/o participación en eventos internacionales en los que se aporten idean novedosas para la resolución de problemáticas en compras públicas.*
  - *Cooperación con otros Países: Elevada disponibilidad en compartir conocimientos y entregar herramientas de sus sistemas de compras*

públicas. Puede ser medible a través del intercambio bilateral que la persona ha tenido apoyando a otros países.

- *Contribución en la RICG: Destacada voluntad de servicio, iniciativa y participación, en las diversas iniciativas lideradas por la Red.*[30]

El jurado está compuesto por un representante del BID y otro de la OEA, recibiendo el ganador el diploma y el trofeo en la Conferencia Anual de la RICG, una beca de hasta $5,000 USD para realizar estudios de actualización de un tema de interés referente a las compras públicas y una colección digital de libros sobre contratación pública.

El ganador del premio en 2010, fue Jorge Luis González, Director del INCOP de Ecuador, por su esfuerzo de dirigir la creación de la institucionalidad del ente rector de la contratación pública del Ecuador y del sistema electrónico oficial del mismo, la rapidez de su implantación y los resultados eficaces y de transparencia.

En 2011 el premio fue para Shirley Gayle, Directora de Compras Gubernamentales de Jamaica, en la VII Conferencia anual de la Red Interamericana de Compras Gubernamentales, bajo los criterios de generación de conocimiento, manejo político, visión de largo plazo, capacidad gerencial, innovación, visión de largo plazo y cooperación con otros países.

En 2012 el premio se otorgó a Javier Dávila, Titular de la Unidad de Política en Contrataciones Públicas de México, por transformar en información útil y accesible los datos de CompraNet, promoviendo la transparencia y rendición de cuentas. Es un sistema electrónico de información pública gubernamental sobre adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras públicas y servicios relacionados con las mismas convirtiéndose en una herramienta completamente transaccional que permite llevar a cabo procedimientos de contratación 100% electrónicos y cuyos montos sean superiores a la cantidad equivalente a trescientas veces el salario mínimo general diario vigente para la Ciudad de México.

En CompraNet se tiene el Módulo de Información e Inteligencia de Mercado para las Contrataciones Públicas, que ayuda a la investigación de mercado para llevar con mayor eficiencia, eficacia, economía y transparencia, los procesos de contratación.

Recordemos que el sistema CompraNet existe desde 1996, con el objetivo de disminuir el índice de corrupción, evitando el contacto directo entre los servidores públicos y los empresarios. Los primeros en utilizarlo fueron PEMEX Exploración y Producción, PEMEX Refinación, Comisión Federal de Electricidad, IMSS, SHCP y la Secretaría de Contraloría.

[30] Premio al liderazgo “Joseph Francois Robert Marcello” en compras públicas, Red Interamericana de Compras Gubernamentales, *http://www.ricg.org/criterios-de-elegibilidad/contenido/234/es/* consultada el 10 de mayo de 2016, a las 4:11 p.m.

Este sistema recibió el premio de *"Reto Global Bangemann"* en 1999, en Suecia, considerando la creatividad, tecnología, impacto y beneficio del proyecto hacia la sociedad.

En 2013 el premio *"Joseph François Robert Marcello"* se concedió al Dr. José María Saravia Cruz, Director General de Contrataciones Públicas de Nicaragua, por ser el principal actor del sistema de compras públicas de su país y por el apoyo para la creación del Programa Virtual de Formación Superior en Compras Públicas, realizado en la Universidad Nacional de San Martín de Argentina y la Universidad Santo Tomás de Chile.

En 2014 el premio fue para Yokasta Guzmán, Directora General de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, por los siguientes motivos:

- *Por su promoción a las reformas de los sistemas nacionales de compras públicas para impulsar el acceso y participación de las micro, pequeñas y medianas empresas.*
- *Por el impulso de la transparencia en las compras de gobierno, a través del establecimiento de comisiones de veeduría y del Observatorio Ciudadano de las Compras Públicas.*
- *Por la generación de espacios de discusión y diálogo, en los que ha sido manifiesto el fructífero intercambio de experiencias y conocimiento entre países de la región, así como el posicionamiento de temas nacionales y regionales vinculados a las contrataciones públicas en otros foros internacionales.*
- *Por su importante contribución al proceso de reforma de la Administración Pública, particularmente la creación del marco normativo de las Compras en el Estado, que han permitido sentar las bases para el desarrollo de un Sistema de Compras Públicas con mayor eficiencia y transparencia.*
- *Por la eficacia y el éxito alcanzado en la implantación de las mejoras puntuales al sistema de compras y contrataciones públicas, en temas tales como el registro de proveedores, las consultas, denuncias e impugnaciones.*
- *Por el liderazgo y efectividad en la implantación de un plan estratégico de contrataciones públicas basado en la adopción de un Sistema de Adquisiciones Único, la creación de un portal transaccional, la participación social y empoderamiento ciudadano, y el fortalecimiento institucional de la autoridad encargada de la regulación de las compras públicas.*
- *Por el desarrollo e implementación de una estrategia de comunicación efectiva para posicionar a las contrataciones públicas en el marco de una cultura organizacional basada en una Gestión por Resultados y un Sistema de Gestión del Desempeño Institucional; y*
- *Por haber colocado a las compras públicas en la agenda estratégica nacional.*[31]

[31] Red Interamericana de Compras Gubernamentales en http://www.ricg.org/edicion-no-5-2014/contenido/352/es/ consultada el 10 de mayo de 2016, a las 4:31 p.m.

En 2015 el premio reconoció a Magali Rojas, Presidenta Ejecutiva del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) de la República del Perú, siendo un organismo técnico especializado, encargo del cumplimiento de las normas en la contratación pública peruana, además de atender las demandas presentadas por los ciudadanos, lograr un mejor manejo de los recursos y satisfacer las necesidades de la población.

Las políticas impartidas por la Presidencia Ejecutiva, ponen a disposición documentos normativos a los funcionarios públicos, que se encuentran estandarizados, también impulsa la certificación de funcionarios de los órganos de contratación de las entidades públicas, y entre otros, ha promovido e intensificado el Programa de Acompañamiento y Seguimiento a diversas entidades públicas a nivel nacional.

Otro premio que otorga la Red Interamericana de Compras Gubernamentales, se denomina *Premio a la Innovación*, compuesto de dos categorías que contienen sus criterios generales de participación y de elegibilidad:

- Primera. Innovación en la implementación de nuevas tecnologías de la información en compras gubernamentales: uso de tecnología que genere impacto en la modernización de los sistemas electrónicos de compras gubernamentales. Se otorgará un solo premio en esta categoría.
- Segunda. Innovación en reformas institucionales y/o marco regulatorio que se destaque por la incidencia del apoyo y del marco institucional en donde se desarrolló. Se otorgará un solo premio en esta categoría.

Criterios generales de participación:

- El premio está dirigido a entidades nacionales y subnacionales de los países miembros de la RICG.
- Sólo se admitirán iniciativas implementadas y en funcionamiento. No se aceptarán soluciones proyectadas o planificadas para ser implementadas en el futuro.
- Debe proveerse información suficiente para poder valorar claramente su impacto y los demás aspectos que se solicitan en el formulario de aplicación.
- Se podrán presentar proyectos en asociación entre entidades de un mismo país. Para este caso, se debe designar un líder como responsable de la postulación de la iniciativa y administrador del premio recibido en caso de ser uno de los ganadores.
- La participación implica la aceptación de estas bases y la resolución de cualquier aspecto no incluido en las mismas será responsabilidad del jurado.

Criterios de elegibilidad:

- *Innovación: implementación de nuevas soluciones para mejorar los sistemas de compras gubernamentales.*
- *Impacto: Demostración del impacto y mejora de las falencias[32]que motivaron la reforma del Sistema.*
- *Beneficiarios: Descripción de los beneficiarios y del impacto logrado sobre los mismos.*
- *Sostenibilidad: Perdurabilidad de la iniciativa a mediano y largo plazo.[33]*

El premio es de hasta $2,500.00 USD para cualquiera de las categorías, así como la entrega de un diploma durante la ceremonia, el jurado puede reservarse el derecho de declarar desierto el premio en cualquier categoría.

En 2012 se otorgó al Departamento de Logística y Servicios Generales de la Secretaría de Logística y Tecnología de la Información del Ministerio de Planeamiento, Organización y Gestión de Brasil, el premio a la Innovación por el alto impacto en las compras gubernamentales de la región con su iniciativa Compras Públicas Sustentables.

Se otorgó en esa ceremonia, mención de honor a la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas de Chile, a través de la Directora Sra. Trinidad Inostroza por el proyecto *"Aplicación Gestión de Contratos electrónicos en Mercado Público".*

En 2013, el "Premio regional fue otorgado a la Unidad de Política de Contrataciones Públicas de la Secretaría de la Función Pública de México por su iniciativa CompraNet-Inteligencia de Mercado, dentro de la categoría sobre innovación en la implementación de nuevas tecnologías de la información en compras gubernamentales por su alto impacto y aporte en las compras gubernamentales. Recibido por Javier Dávila Pérez, Titular de la Unidad.

Se otorgó el premio dentro de la categoría sobre Reformas institucionales y/o marco normativo a los siguientes países:

- Panamá por la Región de Centroamérica con su iniciativa en Convenios Marco de pasajes Aéreos Internacionales, recibido por María Teresa Jaen, Coordinadora de Convenios Marco (Oficina de Administración y Monitoreo de Pasajes Aéreos) Dirección General de Contrataciones Públicas de Panamá.

[32] *Engaño* o error según el Diccionario de la lengua española. Real Academia Española, en http://dle.rae.es/?id=HXFDqkJ el 10 de mayo de 2016, a las 8:00 p.m.

[33] Red Interamericana de Compras Gubernamentales en http://www.ricg.org/criterios-del-premio/contenido/233/es/ consultada el 10 de mayo de 2016, a las 5:45 p.m.

- Perú por la Región de Suramérica con su iniciativa en Récord Arbitral, recibido por Magali Rojas, Presidenta ejecutiva del Organismo Supervisor de Contrataciones Estatales (OSCE).

En 2014, durante la X Conferencia Anual de la RICG, se reconocieron a los ganadores del premio a la Innovación, ubicados en las siguientes categorías:

> *Categoría 1: Innovación en la implementación de nuevas tecnologías de la información en compras gubernamentales: uso de tecnología que genere impacto en la modernización de los sistemas electrónicos de compras gubernamentales.*
> *Mención de honor: Servicio Nacional de Contratación Pública– SERCOP de Ecuador con la iniciativa Módulo Facilitador de la Contratación Pública-"USHAY".*
> *Ganador de la primera categoría: Dirección de Compras y Contratación Pública de Chile con la iniciativa Observatorio ChileCompra.*
> *Categoría 2: Innovación en reformas institucionales y/o marco regulatorio: que se destaque por la incidencia del apoyo político y del marco institucional donde se desarrolló.*
> *Mención de honor: Dirección Nacional de Contrataciones Públicas de Paraguay, con la iniciativa Proceso Simplificado para la adquisición de productos agropecuarios de la agricultura familiar.*
> *Ganador de la segunda categoría: Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) de Perú, con la iniciativa Participación de Aliados Estratégicos en el Desarrollo de Capacidades de los actores del Sistema de Contrataciones Estatal.*[34]

En 2015 el ganador de la primera categoría fue a la Dirección ChileCompra, representada por su Directora, Trinidad Inostroza, por su iniciativa *Política de Datos Abiertos*, por la innovación en la implementación de nuevas tecnologías de la información en compras gubernamentales.

Como se explicó con anterioridad las Naciones Unidas se crearon para mantener la paz, sin embargo, a través de los años, se va complementando su intervención en otros aspectos que resultan relevantes a nivel internacional.

Los Premios de las Naciones Unidas a la Administración Pública, tienen por objeto, según su página:

- Descubrir innovaciones en la gobernanza.
- Recompensar la excelencia del Estado.
- Motivar a los funcionarios públicos para promover la innovación.
- Mejorar la profesionalidad de la Administración Pública, elevar la imagen de servicio público, aumentar la confianza en el gobierno, y recoger y difundir las prácticas que han tenido éxito para su posible aplicación.

[34] *Ídem.*

En los premios otorgados a México, fueron desde 2003, al DIF en la categoría *Mejorando la calidad del proceso de los servicios públicos,* con el proyecto *Atender las necesidades de grupos vulnerables, mediante la integración de servicios.*

En el año 2005, la Secretaría de la Función Pública ganó el primer lugar en la categoría *Aplicación de TICs en el gobierno,* con el proyecto Aumentando la transparencia y la rendición de cuentas por medio de la tecnología- La Estrategia de Gobierno Digital.

En 2011, ganó el primer lugar la Secretaría de la Función Pública, en la categoría *Promoviendo la participación en las decisiones en política pública mediante mecanismo innovadores,* con el proyecto *Convocatoria Ciudadana para Identificar el Trámite Más Inútil.* Al mismo tiempo, ganó el primer lugar en la categoría *Previniendo y combatiendo la corrupción en el servicio público,* con el proyecto *Regulación Base Cero Administrativa-Nueve Manuales Administrativos de Aplicación General.*

En 2012, la Secretaría de la Función Pública ganó el primer lugar en la categoría *Previniendo y combatiendo la corrupción en el servicio público,* con el proyecto *Nuevo Modelo de Control y Auditoría de Obra Pública*, y el segundo lugar con el proyecto *"Sistema Nacional de Contrataciones Públicas.*

La ONU también premio en 2007 a Chile por el sistema que se desarrolló llamado ChileCompra, siendo un lugar de encuentro entre los proveedores y compradores, en igualdad de oportunidad para los diferentes tipos de empresa, siendo justo para todos.

La Administración Pública normalmente no es un tema relevante para los historiadores, pero la adecuada satisfacción de necesidades colectivas, bienes y servicios socialmente necesarios, es la base para el desarrollo de la sociedad, a través del tiempo se han conocido a diversos autores que tratan de definirla, así como a su objeto de estudio y el estudio del objeto.

Las contrataciones públicas forman parte de la Administración Pública, con raíces desde las grandes civilizaciones de la antigüedad y de ahí hasta la actualidad en busca de mejores políticas de compras siempre son desarrolladas así como eliminar la corrupción dentro de las mismas.

Organismos internacionales como Transparencia Internacional, la OCDE, la ONU, la RICG, entre otros, realizan estudios tanto para emitir recomendaciones, como para incentivar un buen desempeño de los servidores públicos. La preocupación surge ya que México cuenta con un índice alto en materia de corrupción e impunidad, provocando descontento en la población y desconfianza de la comunidad internacional, por lo que dentro de la Administración Pública se necesita un sano desarrollo y aplicación del SNA recientemente aprobado, así como un servicio profesional de carrera, eficiente y eficaz,

para que los servidores públicos se sientan honrados de servir a su país y si no, a los que realicen actos ilegales, separarlos y castigarlos mediante procedimientos legales.

La materia de contrataciones públicas se ve afectada por la misma problemática, aun contando con reconocimientos y premios internacionales, por lo que es fundamental fortalecer nuestro sistema bajo tres consideraciones fundamentales, que son la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción, las cuales estudiaremos a continuación.

Las compras que hace el gobierno para estar en condiciones de prestar las satisfacciones necesarias a las necesidades colectivas, frecuentemente se encuentran entorpecidas por corrupción, el mal social más difícil de erradicar en este campo.

Desde la antigüedad el duro castigo a servidores públicos corruptos se puede plasmar con la pintura de Gérard David del siglo XVI “El Despellejamiento de Sisamnes”, óleo que personifica a un juez corrupto sometido a muerte por sus desviaciones en el servicio público.

Con una visión moderna de la Administración Pública, la transparencia, rendición de cuentas y el combate a la corrupción, tienen un papel muy relevante en las adquisiciones públicas y a lo cual se destinada la siguiente porción de esta investigación.

CAPÍTULO II

TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN EN CONTRATACIONES PÚBLICAS.

S U M A R I O:

1. Nota introductoria. 2. Consideraciones fundamentales de las adquisiciones: A) Transparencia. a) Principio doctrinal. b) Marco normativo. i) Fundamento constitucional. ii) Leyes reglamentarias. c) Organismo garante. d) Aplicación a las contrataciones públicas. e) Sistema Nacional de Transparencia. B) Rendición de cuentas. a) Principio doctrinal. b) Marco normativo. i)Fundamento constitucional. ii) Leyes reglamentarias. c) Organismo coadyuvante de la Cámara de Diputados. d) Aplicación a las contrataciones públicas. e) Sistema Nacional de Fiscalización. C) Combate a la corrupción. a) Principio doctrinal. b) Marco normativo. i) Fundamento constitucional. ii) Leyes reglamentarias. c) Órganos de aplicación. d) Aplicación a las contrataciones públicas. e) Sistema Nacional Anticorrupción. i) Leyes que integran al Sistema Nacional Anticorrupción. ii) Órganos competentes. iii) Aplicación en las contrataciones públicas. 3. Cuadros resumen. A) Transparencia. B) Sistema Nacional de Transparencia. C) Rendición de cuentas. D) Sistema Nacional de Fiscalización. E) Combate a la corrupción. F) Sistema Nacional Anticorrupción.

1. Nota introductoria.

La materia de adquisiciones, al utilizar recursos públicos, para su ejecución, necesariamente debe sujetarse a los principios fundamentales de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción. Estos tres elementos son esenciales en una democracia moderna y en una economía que forma parte del G-20.

La transparencia está fundamentada en el artículo 6° de la Constitución, y en sus leyes reglamentarias como la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, siendo su organismo garante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

En la LAASSP y su reglamento, está referida principalmente en el sistema *sistema electrónico de información pública gubernamental sobre adquisiciones, arrendamientos y servicios* y la figura de los testigos sociales, pero protegiendo siempre los datos personales de los sujetos que intervienen. Se establece el Sistema Nacional de Transparencia en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, quedando pendiente la aprobación de la Ley General de Datos Personales y la Ley

General de Archivos para que el sistema tenga completitud. La primera ya fue aprobada por el Poder Legislativo, mientras que la segunda espera ser aprobada en el año 2017.

La rendición de cuentas tiene su fundamento constitucional en los artículos 73, fracciones XXIV, XXVIII y XXIX-W, 74, fracciones II, IV y VI y 79, y sus leyes reglamentarias: Primero, la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria publicada el 30 de marzo de 2006 con una modificación fundamental el 30 de diciembre de 2015. Segundo, se reformaron por decreto del 18 de julio de 2016 la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, fortalece el control externo o parlamentario y es aplicada por la Auditoría Superior de la Federación, la Ley de Coordinación Fiscal del 27 de diciembre de 1978 y, la Ley de General de Contabilidad Gubernamental creada el 31 de diciembre de 2008. En la LAASSP es obligatoria la fiscalización tanto en la planeación, programación, presupuestación, el gasto y la rendición de informes, de manera específica en su Título Cuarto. *De la Información y Verificación*, señala las facultades de control de las dependencias competentes.

La Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación cuenta con 109 artículos, donde destacan las acciones y recomendaciones derivadas de la fiscalización, de recursos federales administrados o ejercidos por órdenes de gobierno locales y por particulares, así como de los participaciones federales, de la determinación de daños y perjuicios y del fincamiento de responsabilidades, las funciones de la Cámara de Diputados en la fiscalización de la Cuenta Pública, así como de la organización de la Auditoría Superior de la Federación.

El combate a la corrupción y la responsabilidad de los servidores públicos, se establece en los artículos 108 al 114 de la Constitución, y dentro de las leyes reglamentarias tenemos: Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos (abrogada) y la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas (abrogada), aplicadas, en su caso, por la Auditoría Superior de la Federación y los Órganos Internos de Control de la SFP.

En la LAASSP hay un rubro específico que es el *Título Quinto. De las Infracciones y Sanciones* que regula las mismas a proveedores, a servidores públicos y establece su independencia de las de orden civil, penal o de cualquier otra índole que puedan derivar de la comisión de los mismos hechos.

El Sistema Nacional Anticorrupción se regula en el artículo 113 constitucional y está formado por la creación de cuatro leyes: la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Con reformas a otras tres leyes: al Código Penal, a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y a la Ley Orgánica de la Procuraduría

General de la República y la abrogación de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; lo anterior mediante Decreto publicado en el D.O.F. del 18 de julio de 2016, con la condicionante de que entre en vigencia la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Aplicando en materia de Adquisiciones, todos los objetivos del propio sistema para erradicar las causales por motivo de corrupción.

La Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción en su artículo 2°, establece en 10 fracciones sus atribuciones:

> ***Artículo 2.*** *Son objetivos de esta Ley:*
> *I. Establecer mecanismos de coordinación entre los diversos órganos de combate a la corrupción en la Federación, las entidades federativas, los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México;*
> *II. Establecer las bases mínimas para la prevención de hechos de corrupción y faltas administrativas;*
> *III. Establecer las bases para la emisión de políticas públicas integrales en el combate a la corrupción, así como en la fiscalización y control de los recursos públicos;*
> *IV. Establecer las directrices básicas que definan la coordinación de las autoridades competentes para la generación de políticas públicas en materia de prevención, detección, control, sanción, disuasión y combate a la corrupción;*
> *V. Regular la organización y funcionamiento del Sistema Nacional, su Comité Coordinador y su Secretaría Ejecutiva, así como establecer las bases de coordinación entre sus integrantes;*
> *VI. Establecer las bases, principios y procedimientos para la organización y funcionamiento del Comité de Participación Ciudadana;*
> *VII. Establecer las bases y políticas para la promoción, fomento y difusión de la cultura de integridad en el servicio público, así como de la rendición de cuentas, de la transparencia, de la fiscalización y del control de los recursos públicos;*
> *VIII. Establecer las acciones permanentes que aseguren la integridad y el comportamiento ético de los Servidores públicos, así como crear las bases mínimas para que todo órgano del Estado mexicano establezca políticas eficaces de ética pública y responsabilidad en el servicio público;*
> *IX. Establecer las bases del Sistema Nacional de Fiscalización, y*
> *X. Establecer las bases mínimas para crear e implementar sistemas electrónicos para el suministro, intercambio, sistematización y actualización de la información que generen las instituciones competentes de los órdenes de gobierno.*

Con la construcción constitucional que se propone, los servidores públicos y los particulares deberán observar los mandatos que sobre este tema se prevean en la legislación general y, a partir de lo que ésta disponga, se generarán las disposiciones federales y locales aplicables. La concurrencia que se propone en los términos planteados, parte de reconocer que la emisión de una ley general de esta naturaleza representa un reto mayor en términos de los principios que rigen el Derecho

Administrativo sancionador dada la similitud que guarda la pena administrativa con la sanción penal. Ello en razón de la complejidad de codificar en un solo ordenamiento las conductas que constituyen responsabilidades administrativas y que, en tal virtud, son susceptibles de sanción.

2. Consideraciones fundamentales de las adquisiciones:

Las adquisiciones son una materia especializada por lo que se requiere de un estudio detallado para su comprensión y poder prevenir las deficiencias en que incurren los servidores públicos encargados de su ejecución, entre otros se han realizado diversos estudios, referentes a tres problemas existentes en nuestra sociedad: transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción, mismos que a la fecha presentan diversos grados de avance.

En la actualidad México cuenta con una transparencia opaca, ya que se abusa del derecho a la privacidad por parte de la Administración Pública, para realizar diversos trámites, gestiones o contrataciones con la burocracia, los cuales resultan ineficientes e ineficaces en su realización, por consecuencia, la población muestra su inconformidad.

Debido a que México no es transparente, respecto a las funciones de la Administración Pública, se provoca en la población desconfianza hacia los servidores públicos, en el desempeño de su cargo.

La rendición de cuentas, es complementaria a la transparencia, es decir, la Administración Pública al no contar con alguna sanción real en caso de omisión, no se siente obligada a informar de una manera clara al pueblo, provocando en este incertidumbre e inconformidad, ya que no muestra los resultados necesarios y reales al compromiso hecho hacia ellos.

Por lo que respecta al combate a la corrupción, México se encuentra a nivel internacional, según Transparencia Internacional, dentro de los niveles de mínima o nula atención a este tema, resultados que se ven reflejados en la actualidad en la inseguridad, la colusión del gobierno con la delincuencia y cuyas imágenes más recientes son: los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala, los millones de mexicanos que aún viven en la pobreza extrema y una estructura política tendiente a la impunidad como sistema.

Por lo cual este estudio resulta relevante para entender que la corrupción frena el desarrollo económico, social y político del país afectando principalmente a los sectores de menos ingresos.

Antes de la votación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), el Senado recibió una tarjeta informativa, elaborada el 28 de abril de 2016, para que tuvieran un conocimiento sobre los costos económicos, políticos y sociales de la corrupción en

nuestro país. Solo algunos datos: las inversiones caen hasta el 5.0% en los países con mayor corrupción y que consume el 2.0% del Producto Interno Bruto, porque entre otros factores, el 14% del ingreso promedio en cada hogar mexicano tiene que destinarse a pagos "extraoficiales" como se le conoce a la corrupción. De acuerdo con el Latinobarómetro, sólo el 19% de los mexicanos están satisfechos de vivir en un país democrático. Además, el INEGI dio a conocer su *Tercera Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental*, en la que señala que 60 millones de mexicanos consideran a la corrupción como el segundo problema que les preocupa y casi 40 millones tuvieron incidentes relacionados con la corrupción. Adicionalmente, alrededor de 15 millones fueron víctimas de un acto corrupto

A) Transparencia.

En este apartado se describe la base doctrinal de la transparencia, el marco jurídico mexicano, incluyendo el fundamento constitucional y las leyes reglamentarias, el organismo garante de la transparencia y su aplicación a las contrataciones públicas, objeto de esta investigación.

a) Principio doctrinal.

Existen diversos autores que explican la importancia del tema de transparencia expresando sus análisis al respecto como Jonathan Fox, citado por José Sosa en su carácter de compilador que señala:

> *(...) la transparencia se refiere a la existencia o no de información- y de sistemas que la producen- sobre lo que son, hacen, utilizan y producen las dependencias de gobierno o, incluso, sobre actos o productos de actores privados (es el caso de las informaciones sobre el uso privado de recursos públicos, sobre la generación de riesgos potenciales a la salud y el medio ambiente o sobre las características de bienes y servicios y su efecto en quienes los consumen, las etiquetas de prevención). Es en esencia, el acceso público a datos o información.*[35]

De forma general, afirma J. Fox que existen dos tipos de transparencia: *"opaca"* y *"clara"*.

> *La transparencia "opaca" ocurre cuando la información que las organizaciones producen y ofrecen no describe cómo trabaja realmente, o cómo se adoptan decisiones en su interior, o cómo manejan y se adaptan a los efectos de ellas.*[36]

[35] Fox, Jonathan*, apud* Sosa, José (Com.), *Transparencia y rendición de cuentas,* No. 14, México, ed. Siglo XXI, 2011, p. 22.
[36] *Ídem.*

Por su parte la transparencia clara, según el autor citado, se conforma por:

> *(…) políticas de acceso a la información como a programas que revelan información confiable acerca del desempeño institucional, señalando las responsabilidades de cada funcionario, así como el destino final de los fondos públicos. La transparencia clara arroja luz sobre el comportamiento institucional, lo que permite que los actores interesados en ese desempeño (como diseñadores de políticas públicas, líderes de opinión y beneficiarios de los programas) puedan definir y desarrollar estrategias de mejora o cambio constructivo*[37]*.*

Así, se puede afirmar indudablemente que la transparencia es la información generada por dependencias de gobierno y el acceso que tiene el público a ellas. Se pueden dar en forma clara y opaca, radicando la diferencia en que en la primera se revelan los datos de información de manera confiable sobre el desempeño de las instituciones y, por otra parte, la transparencia opaca no describe el funcionamiento real de las mismas.

Adicionalmente, Ferreiro señala en la misma obra compilada por José Sosa que la transparencia de la función pública es profundamente democrática. Es un acto notable consecuencia (sic) con la noción de una democracia al servicio de las personas, y en la que quienes ejercen funciones públicas son primero servidores que autoridades, y los ciudadanos son antes mandantes y titulares de derechos que súbditos pasivos e indolentes (…). La democracia del futuro, probablemente, será aquella que sea capaz de poner a disposición de las personas el conocimiento e información que permita el ejercicio pleno de la ciudadanía. Donde esté la información estará el poder. La democracia del mañana será tal sólo si las personas fundamentan, ejercen y potencian sus derechos ciudadanos a partir del acceso oportuno a la información relevante del quehacer estatal. Si, por el contrario, la información –y en especial la relativa a la cosa pública- se hace impenetrable a los ojos de la sociedad y se mantiene concentrada en unos pocos, no sólo la ética pública, sino la propia democracia enfrentarán grave amenaza.

Precisa la existencia de dos alternativas de la transparencia: *activa* y *pasiva,* las cuales define como:

Activa: se trata de la obligación impuesta a los órganos del Estado para que con la periodicidad que la norma le señale, publique toda la información que sea necesaria para una evaluación social de su desempeño. Esta información comprende, entre otras, la explicitación de las funciones, actividades, dotación, presupuesto, objetivos, indicadores de gestión, sistemas de atención al público, etcétera, y debe estructurarse de modo que permita la comparación entre un ejercicio y otro.

[37]Sosa, José (Com.), *op. cit.,* p. 23.

Pasiva (…) a que debe someterse el Estado para conceder, a los ciudadanos que lo requieran, acceso oportuno a la información que obre en poder de los órganos públicos, salvo que medie razón legalmente establecida e imparcialmente acreditada, para justificar la reserva o secreto de determinado tipo de información (seguridad nacional, derechos de terceros, procedimientos en trámite cuya revelación anticipada perjudique el cumplimiento de una función pública, etcétera).

Por lo descrito, se determina que la transparencia no sólo puede existir de manera opaca y clara, sino también en forma pasiva y activa. Pasiva se puede definir como la información que da el Estado al público que lo requiera, reservándose cierto tipo de información. La transparencia activa es la publicación de la información periódica para su evaluación social.

La transparencia puede ser vista desde distintos aspectos como lo señala José Juan Sánchez: *"La transparencia en sentido político y público forma parte de los cambios institucionales que se impulsan para revalorar la importancia del Estado en los procesos de desarrollo económico y social por cuanto a los incentivos que aplica, las políticas que implementa y los resultados que consigue en relación a la sociedad, los mercados, la economía y la vida política."*[38]

A partir de lo señalado por Sánchez, agregaríamos que un país carente de procesos transparentes por la corrupción existente en esa nación, no obtendrá un aumento en la participación ciudadana ni en su nivel económico ni social.

A esta altura, se han mencionado algunos conceptos de transparencia, sin embargo, ¿cómo se origina la transparencia? Jorge Abdó nos menciona al respecto:

> *El concepto de transparencia, con su sigla original en idioma inglés Clear, es dado a conocer por primera vez en enero de 2001, a través del Índice de Opacidad, el cual calcula en qué medida cinco factores claves favorecen o limitan la transparencia de los mercados de capitales y el ambiente económico general. Estos factores son:*
> *1) El nivel de Corrupción percibida.*
> *2) El sistema Legal.*
> *3) La política Económica gubernamental.*
> *4) Las normas contables y de información.*
> *5) Los regímenes Reguladores.*[39]

Los estudios sobre transparencia se originaron por la falta de valores, de ética y por la corrupción de la Administración Pública, lo cual tiene una repercusión en la ciudadanía

---

[38] Sánchez González, José Juan. "Usos de la accountability en la Administración Pública". *Revista Venezolana de Gerencia*. Vol. 19, (Núm. 68), Octubre-diciembre 2014, p. 626.
[39] Jorge Abdón. "Transparencia y acceso a la información gubernamental", en Caballero, José A., et al., (eds.). *El acceso a la información judicial en México: una visión comparada, México*, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2005, pp. 218, en http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/4/1646/17.pdf el 5 de febrero de 2016, a las 5:45 p.m.

y en los países de manera económica, social, política y cultural, frenando el desarrollo de los mismos.

Por lo expuesto anteriormente, se concluye que la transparencia tiene muchos significados, en distintas vertientes, así como la existencia de diferentes tipos de transparencia, tenemos la opaca y clara, además de la activa y pasiva, por lo que puede tener sentidos político y público y se puede medir a través de índices de opacidad.

Cabe resaltar que también se le denomina Derecho de Acceso a la Información, y para efectos de nuestro tema de estudio, existe dentro de la misma el Derecho de Acceso a la Información Pública, siendo las dos diferentes, ya que la primera es en *lato sensu*, y la segunda en *stricto sensu*.

En lato sensu, el derecho a la información, contiene cuatro vertientes:

- *La libertad de opinión.*
- *La libertad de expresión.*
- *La libertad de prensa.*
- *La libertad de información.*[40]

Cabe señalar que la transparencia conlleva diversas consecuencias, una de ellas es que no se puede lesionar el *Derecho a la Privacidad*, por ser un derecho humano fundamental, por lo que no puede darse de manera absoluta, pero si puede manejarse como un instrumento para el ejercicio de la democracia y, por lo tanto, del bien común. La necesidad de regular el tema de la transparencia en México se da ya que:

> *(…) durante mucho tiempo la Administración Pública se caracterizó por la presencia de una gran cantidad de trámites engorrosos, en los cuales prevaleció la discreción por parte de los servidores públicos —y la ausencia de una cultura de rendición de cuentas—, lo que derivó en una nefasta tramititis burocrática.*
>
> *En este orden de ideas, la transparencia aplicada a lo público —a la administración de la cosa pública— es decir, a la Administración Pública, se refiere —por lo que hace a la función pública, al gobernante—, a la honestidad, a las cuentas claras, y por el otro lado —por lo que hace al gobernado—, a la participación ciudadana y al respeto de las reglas.*[41]

En el estudio de la transparencia se deben observar diversos factores, como la cultura, sobre este concepto, señala Cortés Ontiveros, corresponde crear un amplio espacio de la cultura in genere que consiste en el conocimiento profundo, por parte del gobernante, de la claridad, de lo diáfano, de lo honesto, del buen obrar, del buen hacer, de la entrega de resultados, de la rectitud en la intención, para lograr una buena opinión

[40] Cortés Ontiveros, Ricardo, "La transparencia en México: Razón, origen y consecuencias", En *Revista de la Facultad de Derecho de México*, México, No. 244, 2005, p. 14.
[41] Cortés Ontiveros, Ricardo. *Op. cit.,* pp. 20-21.

y fama en favor de la Administración Pública. Todo lo cual se verá traducido, por parte del gobernado, en una amplia participación ciudadana, en el respeto a las reglas establecidas, en confianza en las instituciones, escenario que irá, gradualmente, acrecentando el perfeccionamiento de la propia cultura de la transparencia.

En tanto, los costos sociales y políticos de no cultivarla, señala Ignacio Burgoa:

> *(…) la ausencia de tal cultura, provoca actitudes negativas que provienen del alejamiento de ese conocimiento diáfano, claro, transparente en el actuar del servidor público; o bien —lo que aún, sería más grave—, de su falta de vocación en el servicio público. Al respecto, resulta menester recordar que la simulación en general, es la acción de fingir o imitar lo que no es.*
> *En el caso concreto, el servidor público simulador, hace de su vida, de su actuar, una farsa, una comedia. Su personalidad psíquica envuelve muchos vicios como la vanidad, la egolatría, la megalomanía, la mentira, el engaño, el fraude, la falsedad, la mediocridad, la corrupción.*[42]

Otro factor a estudiar es la burocracia en México, la cual ha sido un impedimento para la transparencia, como lo ha señalado Ricardo Cortés. México cuenta con un problema importante, estudiado por el mismo autor, que es la cultura del secreto, sobre el particular, señala en este orden de ideas, el Estado mexicano se ha propuesto erradicar la cultura del secreto —conducta que lamentablemente existe en sus instituciones—, con base en la cual —argumentando: “razones de Estado”, “riesgo a la Soberanía”, “riesgo a la paz pública”, “por Seguridad Nacional”, “interés Nacional”, “confidencialidad”, y otros muchos calificativos más—, el gobernante niega la difusión y entrega de información pública al gobernado.

Con ello concluimos que la necesidad de regular la transparencia en México, se debió a la cultura que se tenía en los trámites burocráticos, que dio como resultado una Administración Pública ineficaz e ineficiente, haciendo ineludible que la *cultura del secreto* deba desaparecer en gran medida, para obtener mejores resultados. La transparencia es un valor de la democracia, que no puede negarse a los ciudadanos, ya que la información pública es propiedad de ellos.

b) Marco normativo.

El marco jurídico de la transparencia es descrito en relación con el fundamento de la Carta Magna, en su artículo 6°; y sus leyes reglamentarias más importantes.

[42] Burgoa, Ignacio *apud* Cortés Ontiveros, Ricardo, *op.cit.*, pp. 14-15.

i) Fundamento constitucional.

El origen de la transparencia, de acuerdo a los estudios, se desarrolla de la siguiente manera:

> *(…) la larga campaña por la transparencia y la responsabilidad gubernamentales (...) empezó en los años setenta, con esfuerzos para reformar la Constitución Mexicana y así regular el derecho a la información como garantía constitucional del pueblo. La nueva redacción del artículo 6° de la Constitución se aprobó en 1977.*[43]

Para un mejor entendimiento de la evolución histórica del concepto nos remontamos al artículo 6° de la Constitución de 1917, que expresa:

> ***Art. 6º.*** *La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito, o perturbe el orden público.*

Como se puede observar la redacción original del artículo, no garantiza el acceso a la información, impone una actitud omisiva de la autoridad, no impedir manifestar ideas, pero no dar información, sino hasta la reforma del año 1977, que a la letra dice:

> ***Art. 6º.*** *La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho a la información será garantizado por el Estado.*

Este artículo es el origen de la materia de transparencia, y es el fundamento constitucional que se da para el derecho a la información, consecuentemente años después se expide en el Diario Oficial de la Federación del 11 de junio de 2002, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que fue en buena medida el resultado de las directrices de organismos como la OCDE y el Banco Mundial, entre otros, que presionaron a los países miembros para que fueran transparentes en la información.

Existen más reformas posteriores, resultando 6 en total, desde el año de 1977, entre las cuales destacan las de los años 2007, 2013, 2014 y 2016. Las publicadas el 11 de junio de 2013, se distinguen en tanto el avance progresivo en el derecho a la libertad de expresión y de difusión, exige la actualización de lo dispuesto en el artículo 6° de la Constitución. Se hace imprescindible garantizar el acceso a la información veraz, plural y oportuna, así como buscar recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. Con el objeto de regular en un apartado A el derecho a la

[43] Doyle, Kate *apud* Cortés Ontiveros, Ricardo, *op. cit.,* p. 17.

información pública y la protección de datos personales, y establecer en el apartado B, las disposiciones en materia de radiodifusión y telecomunicaciones que tiene por meta garantizar a la población su integración a la sociedad de la información y el conocimiento, y que son medios trascendentales para el ejercicio de los derechos referidos.

De manera sustancial el artículo 6°, recibe su transformación más significativa el 7 de febrero de 2014, en su inciso A. fracciones I, IV, V y VIII, al precisar que:

> *(…) la modificación a la ley fundamental obedeció al propósito central de renovar los mecanismos de acceso a la información pública y protección de datos personales, a través de la implementación de un sistema integral en la materia que garantice, homogéneamente, los alcances de dichos derechos en México.*
> *Entre otras cuestiones, derivado de dicha modificación se amplió considerablemente el catálogo de sujetos obligados en la materia, quedando comprendidos toda autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal.*
> *Asimismo, se transformó en el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos al otorgársele autonomía constitucional, así como a los órganos garantes en las entidades federativas. Respecto del primero, se aumentó el número de comisionados, pasando de cinco a siete, y se amplió de manera importante su ámbito competencial, ya que a partir de la reforma puede conocer de los asuntos relacionados con los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo que forme parte de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, con excepción de aquellos asuntos jurisdiccionales que correspondan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.*[44]

Además, se establecieron dos mecanismos adicionales para prever la garantía y tutela efectiva del derecho, pues se otorgó al mismo Instituto la facultad para conocer, en segunda instancia, de los recursos que interpongan los particulares respecto de las resoluciones de los organismos autónomos especializados de las entidades federativas que determinen la reserva, confidencialidad, inexistencia o negativa de la información previamente solicitada.

Por otra parte, pero en este mismo contexto el Instituto obtuvo la atribución para conocer, de oficio o a petición fundada del organismo garante equivalente de las entidades federativas, los recursos de revisión que por su interés y trascendencia así lo ameriten.

---

[44] INAI en http://inicio.ifai.org.mx/nuevo/Propuesta%20%20de%20Ley%20General%20de%20TAI%20PDF.pdf consultada el 6 de junio de 2016, a las 4:38 p.m.

Finalmente, la referida reforma constitucional prevé que el Congreso de la Unión expida una ley general reglamentaria del artículo 6º constitucional, en la que se desarrollen los principios y bases generales en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados.

La última reforma fue el 29 de enero de 2016, señaló en su exposición de motivos que la propuesta de reformas a la Constitución cumple con el anhelo histórico de consolidar a la Ciudad de México como una entidad federativa integrante del pacto federal, manteniendo su carácter de sede de los Poderes Federales y Capital de la República, con los derechos y obligaciones que le corresponden. El objetivo de la propuesta es dotar de autonomía a la Ciudad de México en su régimen interior, reconociendo derechos políticos plenos a sus habitantes, en el marco de su carácter de sede de los poderes y capital de los Estados Unidos Mexicanos.

De lo anterior, se concluye que el derecho a la información es el primer gran paso que se dio para la transparencia en México, regulado en la Constitución a partir de 1977, y reformado constantemente en la búsqueda de una mejor transparencia y rendición de cuentas en la Administración Pública.

ii) Leyes reglamentarias.

Las reformas del 7 de febrero de 2014 al artículo 6° constitucional, son el fundamento para la creación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el 4 de mayo de 2015, la cual tiene por objeto de acuerdo con el artículo 1°, el establecer los principios, bases generales y procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad de la Federación, las Entidades Federativas y los municipios.

En la exposición de motivos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública de 2015, se estableció que sus fines son:

1. *La armonización de la naturaleza jurídica de los organismos garantes del orden federal, estatal y del Distrito Federal, y fortalecer su papel como organismos protectores de derechos fundamentales, es decir acceso a la información y protección de datos personales.*
2. *El establecimiento de nuevos mecanismos de defensa en favor del gobernado.*
3. *La armonización de las bases, los principios y los procedimientos en el ejercicio del derecho.*
4. *Una nueva relación de coordinación y cooperación entre los órganos garantes de transparencia de la Federación, los Estados y el distrito Federal, para constituir y*

operar un "Sistema Nacional de Transparencia y Acceso a la Información", a fin de construir, organizar y operar una política pública nacional en las materias.[45]

Posteriormente se expidió la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el 9 de mayo de 2016, y que tiene como propósito fundamental:

> ***Artículo 1.*** *La presente Ley es de orden público y tiene por objeto proveer lo necesario en el ámbito federal, para garantizar el derecho de acceso a la Información Pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos federales o realice actos de autoridad, en los términos previstos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.*

Las principales novedades que encontramos en la ley son:

- **Estructura orgánica del instituto en su calidad de órgano garante a nivel Federal.**

La iniciativa plantea la estructura orgánica mínima, no limitativa, al instituto para el cumplimiento de sus obligaciones, ya que se establece que para la ampliación de ésta, se realizará a propuesta del comisionado presidente, con la aprobación del pleno. Lo anterior con fundamento en la recién adquirida autonomía constitucional.

- **Definición de obligaciones de transparencia detalladas para los sujetos obligados del orden Federal.**

Una vez realizado el análisis correspondiente a las facultades, funciones y competencias de los órganos autónomos en el ámbito federal, se construyeron las obligaciones específicas que cobran particular importancia para que la ciudadanía pueda conocer claramente cuáles son sus principales actividades en ejercicio de sus funciones y se interesen en su desarrollo para fomentar el seguimiento y la evaluación ciudadana.

- **Plazos del procedimiento de acceso.**

En relación al procedimiento de acceso a la información, se considera necesario, con base en la experiencia en el tema a nivel federal, establecer términos más cortos que benefician la celeridad a favor del ciudadano. Se pretende que esta medida incentive

[45] INAI en http://inicio.ifai.org.mx/nuevo/Propuesta%20%20de%20Ley%20General%20de%20TAI%20PDF.pdf consultada el 24 de mayo de 2016, a las 11:32 p.m.

que las legislaciones locales busquen que su procedimiento de acceso beneficie al particular.

- **Clasificación de la información.**

Se establecen claros límites a los supuestos de excepción de publicidad de la información, que junto con la prueba de daño e interés público justificarían la reserva de información y acota los plazos de reserva privilegiando el principio de máxima publicidad, conforme a los principios y estándares internacionales.

- **Igualdad sustantiva.**

La inclusión de este principio persigue el objetivo de promover la realización y ejecución de políticas públicas enfocadas al acceso a la información, la transparencia y la redición de cuentas no sólo en el ámbito tanto formal; sino también en las bases materiales de las relaciones sociales, políticas e institucionales para la construcción de políticas públicas en materia de transparencia que nos permitan eliminar las desigualdades históricas y culturales entre mujeres y hombres.

Por igualdad sustantiva, debemos entender como el acceso al mismo trato y oportunidades, para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales entre hombres y mujeres.

En suma, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública es un instrumento con mayores fines y medios para propiciar una mejor transparencia y rendición de cuentas de los gobernantes hacia sus gobernados.

La Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de enero de 2017, como lo señala la exposición de motivos, tuvo como base las reformas constituciones del 2014, las cuales contemplaron la ampliación de los sujetos obligados en materia de protección de los datos personales.

La ley en su capítulo I hace referencia a las definiciones, si bien similares a las de la Ley Federal de Protección de datos Personales en Posesión de los Particulares, sin embargo, otras se modificaron y complementaron con elementos adicionales para adecuarlas al contexto del sector público. Destacan la de datos personales, establecida en sentido amplio, la de datos personales sensibles que conlleva en la práctica la distinción entre diferentes categorías de datos, siendo de suma importancia su protección para evitar situaciones y consecuencias no deseadas para los titulares.

Se incluye una referencia al principio del interés superior del menor, para constituirlo en el eje rector que oriente las determinaciones de los sujetos regulados para cualquier tratamiento de datos que tenga que ver con menores de edad y adolescentes.

En el Capítulo II se establecen las bases para el Sistema Nacional de Transparencia. Se incluyen el objeto del Sistema y la elaboración de un programa nacional de protección de datos personales que tendrá por objeto, coadyuvar en la definición de políticas públicas, estrategias, acciones y metas para promover una cultura del derecho a la protección de datos personales.

Se reconocieron los siguientes principios:

- Licitud. Precisa el deber que tiene el responsable de llevar a cabo el tratamiento de los datos personales conforme a las facultades o atribuciones que la normatividad le confiere.
- Consentimiento. Obliga al responsable a obtener el consentimiento del titular de manera libre, específica e informada.
- Calidad. Conlleva el deber a cargo del responsable de adoptar medidas necesarias para mantener exactos, correctos y actualizados los datos personales que se encuentren en su posesión.
- Finalidad. Constriñe al responsable a efectuar el tratamiento de datos personales únicamente cuando dicho tratamiento se encuentre justificado por finalidades concretas, lícitas, explícitas y legítimas, en relación con las atribuciones que la normatividad aplicable le confiera.
- Lealtad. El responsable no deberá obtener datos personales a través de medios engañosos o fraudulentos.
- Proporcionalidad. Exige que cualquier tratamiento no vaya más allá de lo necesario para alcanzar sus objetivos. Así, se establece el deber de tratar los datos personales que resulten adecuados, relevantes y estrictamente necesarios para la finalidad que justifica su tratamiento.
- Información. Consiste en el deber de comunicar al titular de los datos información suficiente acerca de la existencia y características principales del tratamiento al que serán sometidos los datos personales, a través del aviso de privacidad.
- Responsabilidad. Impone al responsable la obligación de implementar mecanismos necesarios para acreditar el cumplimiento de los principios, deberes y obligaciones establecidos en esta ley, así como el deber de rendir cuentas al titular con relación al tratamiento de los datos personales que estén en su posesión.

Dichos principios son ejes rectores a partir de los cuales se desprenden obligaciones concretas para el responsable del tratamiento y son similares a los previstos en los Estándares Internacionales y a los principios plasmados en el anteproyecto COMAIP (Consejo Mexicano para el Acceso a la Información Pública).

c) Organismo garante.

El Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), se creó mediante decreto del 24 de diciembre de 2002, este organismo posteriormente se transformó en el órgano constitucional autónomo denominado Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), siendo el encargado de regular que se cumpla con este Derecho. Sus objetivos van en concordancia con su misión y visión, que busca:

1º. Facilitar y garantizar el acceso de las personas a la información pública y el acceso y protección de los datos personales, así como contribuir a la organización de los archivos nacionales.
2º. Promover la cultura de la transparencia en la gestión pública y la rendición de cuentas del gobierno a la sociedad, así como el ejercicio de los derechos de los gobernados en materia de acceso a la información y protección de datos personales.
3º. Contribuir en los procesos de análisis, deliberación, diseño y expedición de las normas jurídicas necesarias en materia de archivos y datos personales, así como en los procedimientos legislativos dirigidos a perfeccionar y consolidar el marco normativo e institucional en materia de transparencia y acceso a la información pública.

Con el INAI se hizo una reestructuración orgánica, creándose dos nuevas Coordinaciones, cuatro Direcciones Generales y la figura de *Jefe de Ponencia*, que tiene el equivalente salarial de Director General, actualmente el organigrama comprende:

- Pleno.
  - Comisionada presidenta.
  - Seis comisionados.
  - Coordinación Ejecutiva.
  - Coordinación Técnica del Pleno.
  - Coordinación de Acceso a la Información.
  - Coordinación de Protección de Datos Personales.
  - Coordinación del Secretariado Ejecutivo del SNT.
  - Contraloría.
  - Dirección General de Administración.
  - Dirección General de Asuntos Jurídicos.
  - Dirección General de Comunicación Social y Difusión.
  - Dirección General de Planeación y Desempeño Institucional.

El INAI, dentro de sus principales funciones tiene las de, *“garantizar el derecho de los ciudadanos a la información pública gubernamental y a la privacidad de sus datos*

personales, así como para promover en la sociedad y en el gobierno la cultura del acceso a la información, la rendición de cuentas y el derecho a la privacidad."[46]

d) Aplicación a las contrataciones públicas.

La Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en sus reformas de mayo de 2009, se debieron básicamente a recomendaciones del Banco Interamericano de Desarrollo y Banco Mundial, en materia de transparencia, así como para alcanzar el cumplimiento de los principios del 134 constitucional, relativos a la eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, señalando que la normatividad: *requiere modernización, simplificación y más flexibilidad para responder a las condiciones de rápido cambio que presenta el mercado.* El sistema debe ser más abierto y competitivo, y concentrarse menos en el cumplimiento y control. Para alinear los sistemas de contrataciones con los objetivos del Gobierno y generar ahorros sustanciales mediante menores costos transaccionales y precios de mercado más bajos, así como mejorar la transparencia, certeza y confianza del público en el sistema.

Hace unos años en materia de adquisiciones no se tenía presente la transparencia en los procesos de contratación, justificándose con las palabras *es información del Estado*. Con las reformas realizadas, se busca que no solamente el gobernado tenga el derecho de exigir la información, sino que exista la obligación de informar y transparentar su actuación sea del Estado, a través de mecanismos como CompraNet.

Para los efectos de la Ley, se entiende por *Compranet* al sistema electrónico de información pública gubernamental sobre adquisiciones, arrendamientos y servicios, integrado entre otra información, por los programas anuales en la materia, de las dependencias y entidades; el registro único de proveedores; el padrón de testigos sociales; el registro de proveedores sancionados; las convocatorias a la licitación y sus modificaciones; las invitaciones a cuando menos tres personas; las actas de las juntas de aclaraciones, del acto de presentación y apertura de proposiciones y de fallo; los testimonios delos testigos sociales; los datos de los contratos y los convenios modificatorios; las adjudicaciones directas; las resoluciones de la instancia de inconformidad que hayan causado estado, y las notificaciones y avisos correspondientes.

Dicho sistema será de consulta gratuita y constituirá un medio por el cual se desarrollarán procedimientos de contratación; el sistema estará a cargo de la Secretaría de la Función Pública, a través de la unidad administrativa que se determine en el Reglamento, la que establecen los controles necesarios para garantizar la inalterabilidad y conservación de la información que contenga (artículo 2° LAASSP).

[46] INAI en http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/misionViosionObjetivos.aspx consultada el 6 de junio de 2016, a las 5:48 p.m.

De los trece mecanismos de transparencia que maneja el sistema *CompraNet*, en cuatro se hace referencia expresa a la Ley Federal de Transparencia, como podemos observar:

> ***Artículo 21.*** *Las dependencias y entidades pondrán a disposición del público en general, a través de CompraNet y de su página en Internet, a más tardar el 31 de enero de cada año, su programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios correspondiente al ejercicio fiscal de que se trate, con excepción de aquella información que, de conformidad con las disposiciones aplicables, sea de naturaleza reservada o confidencial, en los términos establecidos en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.*
> ***Artículo 41.*** *Las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán contratar adquisiciones, arrendamientos y servicios, sin sujetarse al procedimiento de licitación pública, a través de los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa, cuando:*
> *X (…)*
> *Sólo podrá autorizarse la contratación mediante adjudicación directa, cuando la información que se tenga que proporcionar a los licitantes para la elaboración de su proposición, se encuentre reservada en los términos establecidos en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental;*
> ***Artículo 56.*** *La forma y términos en que las dependencias y entidades deberán remitir a la Secretaría de la Función Pública, a la Secretaría y a la Secretaría de Economía, la información relativa a los actos y los contratos materia de esta Ley, serán establecidos por dichas Secretarías, en el ámbito de sus respectivas atribuciones.*
> *(…)*
> *II. Propiciar la transparencia y seguimiento de las adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, y*
> *III. Generar la información necesaria que permita la adecuada planeación, programación y presupuestación de las contrataciones públicas, así como su evaluación integral.*
> *Dicho sistema contendrá por lo menos, la siguiente información, la cual deberá verificarse que se encuentra actualizada por lo menos cada tres meses:*
> *(…)*
> *f) Los datos de los contratos suscritos, a que se refiere el artículo 7 fracción XIII, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental;*
> ***Artículo 56 Bis.*** *El sistema integral de información contará, en los términos del Reglamento de esta Ley, con un registro único de proveedores, el cual los clasificará de acuerdo, entre otros aspectos, por su actividad, datos generales, nacionalidad e historial en materia de contrataciones y su cumplimiento.*
> *Este registro deberá ser permanente y estar a disposición de cualquier interesado, salvo en aquellos casos que se trate de información de naturaleza reservada, en los términos establecidos en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.*

Asimismo, en el reglamento de la LAASSP, en sus artículos 19, 65 y 67 nuevamente hay citas expresas de la Ley Federal de Transparencia en ellas se establece que:

El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios estará integrado con un máximo de siete vocales titulares con derecho a voz y voto; habrá un testigo social

Una vez designado el testigo social por la Secretaría de la Función Pública, éste será contratado por las dependencias y entidades conforme a lo dispuesto por la Ley y el Reglamento.

Deberán las dependencias y entidades proporcionar las facilidades para permitir el acceso a toda la documentación que soliciten los testigos sociales, quienes estarán obligados a guardar la debida reserva y confidencialidad en caso de que tengan acceso a información clasificada con ese carácter.

Adicionalmente, en el artículo 72 permite la adjudicación directa en estudios de consultorías, asesorías, estudios e investigaciones cuando la información a proporcionar a los licitantes este clasificada como reservada o confidencial.

Las reformas a la LAASSP y su Reglamento fortalecieron la transparencia, tanto para la autoridad, el proveedor y los ciudadanos en general, en tanto el gasto público se hace a cargo de los ingresos que obtiene el Estado y que recauda de la sociedad, siendo en consecuencia dinero público.

Lo que este marco legal no ha podido evitar, es la colusión de servidores públicos y particulares para favorecer a determinados participantes, lo que propicia un “círculo de corrupción” en materia de licitaciones y contrataciones gubernamentales.

e) Sistema Nacional de Transparencia.

El Sistema Nacional de Transparencia se encuentra regulado dentro de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en los siguientes términos:

> ***Artículo 28.*** *El Sistema Nacional se integra por el conjunto orgánico y articulado de sus miembros, procedimientos, instrumentos y políticas, con el objeto de fortalecer la rendición de cuentas del Estado mexicano. Tiene como finalidad coordinar y evaluar las acciones relativas a la política pública transversal de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, así como establecer e implementar los criterios y lineamientos, de conformidad con lo señalado en la presente Ley y demás normatividad aplicable.*

En la exposición de motivos se definen:

- ***Alcance del Sistema.*** *Dicho Sistema Nacional debe ser entendido como la arena de intercambio de ideas, de reflexiones plurales, como el espacio de la discusión, del consenso: para construir política pública, para la armonización y la efectivización uniforme, armónica o pareja del ejercicio del derecho de acceso a la información.*
- ***Objeto del sistema.*** *Se propone prever que el objeto del Sistema Nacional será el de garantizar el efectivo ejercicio y respeto del derecho de acceso a la información y promover y fomentar la educación y una cultura cívica de transparencia y acceso a la información en todo el territorio nacional, para lo cual funcionará con los instrumentos, políticas y acciones que se desarrollen acorde a los principios, bases y prerrogativas que rigen este derecho fundamental.*
- ***Instrumento de Cooperación.*** *El fin del Sistema Nacional es la organización de los esfuerzos de cooperación, colaboración, promoción, difusión y articulación permanente en materia de transparencia y acceso a la información.*
- ***Programa Nacional de Transparencia.*** *Se plantea prever que el Sistema Nacional deberá diseñar, ejecutar y evaluar un Programa Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública que defina la política pública y establezca, como mínimo, objetivos, estrategias, acciones y metas.*
- ***Instancia rectora del Sistema.*** *El Consejo Nacional será la instancia rectora del Sistema Nacional, el cual tendrá por objeto la organización efectiva y eficaz de los esfuerzos de coordinación, cooperación, colaboración, promoción y difusión en materia de transparencia y acceso a la información. Por lo que la coordinación entre los integrantes, será el eje rector articulador del Sistema Nacional.*[47]

El Sistema Nacional está integrado por las siguientes instancias:

- El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
- Los Organismos garantes de las Entidades Federativas.
- La Auditoría Superior de la Federación.
- El Archivo General de la Nación.
- El Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Sus facultades se encuentran señaladas en el artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que a la letra dice:

> ***Artículo 31.*** *El Sistema Nacional tiene como funciones:*
> *I. Establecer lineamientos, instrumentos, objetivos, indicadores, metas, estrategias, códigos de buenas prácticas, modelos y políticas integrales, sistemáticas, continuas y evaluables, tendientes a cumplir con los objetivos de la presente Ley;*

[47] INAI en http://inicio.ifai.org.mx/nuevo/Propuesta%20%20de%20Ley%20General%20de%20TAI%20PDF.pdf consultada el 23 de mayo de 2016, a las 5:35 p.m.

II. Promover e implementar acciones para garantizar condiciones de accesibilidad para que los grupos vulnerables puedan ejercer, en igualdad de condiciones, el derecho de acceso a la información;
III. Desarrollar y establecer programas comunes de alcance nacional, para la promoción, investigación, diagnóstico y difusión en materias de transparencia, acceso a la información, protección de datos personales y apertura gubernamental en el país;
IV. Establecer los criterios para la publicación de los indicadores que permitan a los sujetos obligados rendir cuentas del cumplimiento de sus objetivos y resultados obtenidos;
V. Coadyuvar en la elaboración, fomento y difusión entre los sujetos obligados de los criterios para la sistematización y conservación de archivos que permitan localizar eficientemente la información pública de acuerdo a la normatividad en la materia;
VI. Establecer lineamientos para la implementación de la Plataforma Nacional de Transparencia de conformidad con lo señalado en la presente Ley;
VII. Establecer políticas en cuanto a la digitalización de la información pública en posesión de los sujetos obligados y el uso de tecnologías de información y la implementación de Ajustes Razonables, que garanticen el pleno acceso a ésta;
VIII. Diseñar e implementar políticas en materia de generación, actualización, organización, clasificación, publicación, difusión, conservación y accesibilidad de la información pública de conformidad con la normatividad aplicable;
IX. Promover la participación ciudadana a través de mecanismos eficaces en la planeación, implementación y evaluación de políticas en la materia;
X. Establecer programas de profesionalización, actualización y capacitación de los Servidores Públicos e integrantes de los sujetos obligados en materia de transparencia, acceso a la información pública, así como de protección de datos personales;
XI. Emitir acuerdos y resoluciones generales para el funcionamiento del Sistema Nacional;
XII. Aprobar, ejecutar y evaluar el Programa Nacional de Transparencia y Acceso a la Información;
XIII. Promover el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en toda la República mexicana;
XIV. Promover la coordinación efectiva de las instancias que integran el Sistema Nacional y dar seguimiento a las acciones que para tal efecto se establezcan, y
XV. Las demás que se desprendan de esta Ley.

El marco normativo del Sistema Nacional de Transparencia está conformado por:

1º. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (art. 6°).
2º. Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
3º. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
4º. Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
5º. Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.

6º. Acuerdo mediante el cual el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, establece las bases de interpretación y aplicación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
7º. Reglamento del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.
8º. Lineamientos para la organización, coordinación y funcionamiento de las instancias de los integrantes del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.
9º. Lineamientos para determinar los catálogos y publicación de información de interés público; y para la emisión y evaluación de políticas de transparencia proactiva.
10º. Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.
11º. Lineamientos para la organización y conservación de los archivos.
12º. Lineamientos para la elaboración, ejecución y evaluación del Programa Nacional de Transparencia y Acceso a la Información.
13º. Lineamientos para la implementación y operación de la Plataforma Nacional de Transparencia.
14º. Lineamientos que deberán observar los sujetos obligados para la atención de requerimientos, observaciones, recomendaciones y criterios que emita el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.
15º. Lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el título quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia.
16º. Modificaciones a los artículos 16, 23, 24, 59, 62 y 72 de los Lineamientos para la organización, coordinación y funcionamiento de las instancias de los integrantes del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.
17º. Criterios para que los sujetos obligados garanticen condiciones de accesibilidad que permitan el ejercicio de los derechos humanos de acceso a la información y protección de datos personales a grupos vulnerables.[48]

[48] Existen modificaciones a los lineamientos, para más información, consultar en http://www.snt.org.mx/index.php/home/marco-norm

Es de tomar en consideración que existe una iniciativa de la ley para complementar el Sistema Nacional de Transparencia, y que es la siguiente:

- *Ley General de Archivos (establecida en el artículo 6°, fracción V de la Constitución).* [49] Se encuentra en proceso de aprobación y está prevista su ratificación en el año 2017.

Recientemente se aprobó la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el 9 de mayo de 2016 y la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados publicada el 26 de enero de 2017, reglamentaria de los artículos 6°, Base A y 16, segundo párrafo.

Enfrentamos problemas en la transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción, un ejemplo es la Plataforma Nacional de Transparencia en México establecida en su Título Tercero. Plataforma Nacional de Transparencia, de los artículos 49 al 52 perteneciente a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

> ***Artículo 49.*** *Los Organismos garantes desarrollarán, administrarán, implementarán y pondrán en funcionamiento la plataforma electrónica que permita cumplir con los procedimientos, obligaciones y disposiciones señaladas en la presente Ley para los sujetos obligados y Organismos garantes, de conformidad con la normatividad que establezca el Sistema Nacional, atendiendo a las necesidades de accesibilidad de los usuarios.*

Problemas de implementación.

La Plataforma Nacional de Transparencia es una propuesta para garantizar el derecho de acceso a la información, sin embargo, el resultado de la misma no cumplió con los objetivos, presentando diversas fallas en su implementación:

- No se pueden enviar solicitudes de información a más de un sujeto obligado.
- No se puede acceder a la Plataforma con las cuentas del anterior sistema Infomex, lo que impide acceder al historial de solicitudes.
- Si no se llenan todos los registros solicitados, entre los que se encuentran nombre y dirección del usuario, no se pueden enviar solicitudes de información, lo cual viola el derecho a no acreditar personalidad para ejercer el derecho al acceso a la información.
- No es posible enviar solicitudes que en su descripción contengan signos como dos puntos, punto y coma o guiones.
- No se emiten acuses de recibido, lo cual impide saber si la solicitud fue enviada o no.

[49]Martínez, Martha. “Anticorrupción: Sistema que no nace”. *Revista R.* (Núm. 122), 10 de abril 2016, p. 12.

- Las solicitudes de información realizadas no se registran en el apartado “historial de solicitudes”.[50]

Por las fallas se vio obligada a dejar de funcionar y se establecen de nueva cuenta, los portales de cada Estado que cerraron por el funcionamiento de la PNT. Causando indignación en las entidades por la presión que se ejerció para el adherirse a la misma y al momento de subir la información se tuvieron fallas.

Los especialistas comentan respecto a la inversión de 21 millones 26 mil pesos para poner en marcha la PNT:

> Lo que sí nos llama la atención es que, para ese precio, sea quien sea quien haya hecho el proyecto, el resultado debió ser impecable, y no lo es, dejan mucho que desear las empresas que estuvieron involucradas. Y sí necesitamos saber, a nivel de rendición de cuentas, cómo es que se gastó ese presupuesto, por qué se asignaron a esas empresas y cómo fue el proceso de revisión de cada una de las etapas. [51]

B) Rendición de cuentas.

En este segundo apartado, se describe a la rendición de cuentas desde su fundamento doctrinal, el marco jurídico que le da sustento, tanto a nivel constitucional como sus leyes reglamentarias, así como el organismo coadyuvante de la Cámara de Diputados y su aplicación a las contrataciones públicas.

a) Principio doctrinal.

“Por lo que toca a la rendición de cuentas, su presencia histórica es igualmente significativa o incluso mayor que la de la transparencia. La idea de que quienes gobiernan pueden ser llamados a cuentas se ubica en gran parte de los textos políticos desde fines del siglo XVIII y en la mayoría de las constituciones de inspiración liberal y democrática que han sido promulgadas desde entonces.”[52]

El término de rendición de cuentas ha sido motivo de diversas opiniones, incluso algunas encontradas de varios autores, que han escrito sobre la materia, ya que se tiende a utilizar como transparencia. Sin embargo, existen doctrinarios que relacionan estos temas, resaltando sus diferencias.

José Juan Sánchez analizó el término *accountability,* realizando estudios para una definición, ya que no se tiene una traducción en específico de la palabra, por lo que al

[50] Martínez, Martha. “Transparencia en retroceso”. *Revista R.* (Núm. 133), 26 de junio 2016, p. 13.
[51] *Ibídem* p. 15.
[52] Sosa, José, *op. cit.,* p. 25.

inicio nos dice que se toma como rendición de cuentas y transparencia. La importancia de la *"accountability"* radica en tres argumentos centrales:

> ***Primero.*** *Las contribuciones que desde la transparencia y la rendición de cuentas, han recibido los conceptos decimonónicos de democracia, de buen gobierno y de derechos individuales.*
> ***Segundo.*** *La transparencia y la rendición de cuentas han adquirido en poco tiempo una presencia fundamental en todo lo que tiene que ver con el entramado jurídico que norman las relaciones existentes entre las autoridades públicas y el resto de los componentes del Estado contemporáneo.*
> ***Tercero.*** *La transparencia y la rendición de cuentas son, actualmente, asuntos que condicionan y afectan los procesos de trabajo al interior de las organizaciones gubernamentales.*[53]

De esta manera Villanueva explica ampliamente el asunto de la *accountability* como rendición de cuentas:

> *La rendición de cuentas es una traducción exacta de la palabra accountability, que en su significado original se conceptúa como "ser sujeto a la obligación de reportar, explicar, justificar algo; ser responsable ante alguien de algo". De esta manera la rendición de cuentas se define como la obligación permanente de los mandatarios para informar a sus mandantes, de los actos que llevan a cabo como resultado de una delegación de autoridad que se realiza mediante un contrato formal o informal y que implica sanciones en caso de incumplimiento.*[54]

En este contexto *accountability*, es la rendición de cuentas, de forma obligatoria para los funcionarios que deben justificar e informar sobre sus acciones a la ciudadanía. Ciertamente la característica que distingue a la transparencia y rendición de cuentas, es la obligatoriedad en la segunda, agregando un elemento más que señala el autor Ugalde y es la *sanción* por el incumplimiento, que podría tomarse como una rendición de cuentas dura, que se explicará más adelante.

Schedler menciona sobre el aspecto de rendir cuentas, la necesidad de restringir al poder y abarcar tres dimensiones para la obtención de resultados positivos:

> *(…) la rendición de cuentas forma parte del lenguaje político cotidiano de la comunidad internacional, que expresa la preocupación continua por controles y contrapesos, por la supervisión y la restricción del poder. La rendición de*

[53] Sánchez González, José Juan, *"Usos de la…cit.,* p. 619.
[54] Villanueva Villanueva, Ernesto, *apud* Sánchez González, José Juan. *"Usos de la… cit.*, p. 623.

cuentas se ha vuelto entonces una exigencia ubicua en el mundo de la política democrática (…)
Debe abarcar tres dimensiones: información oportuna al público; justificación de las decisiones tomadas; y sanciones a los funcionarios-efectivos o no- que no trabajen satisfactoriamente.[55]

Expone el autor tres pilares de la rendición de cuentas, que son: información, justificación y sanción. En relación a los primeros dos, explica que pueden pedir a los funcionarios públicos que informen sobre sus decisiones o les pueden pedir que expliquen sus decisiones. Pueden preguntar por hechos (la dimensión informativa de la rendición de cuentas) o por razones (la dimensión argumentativa de la rendición de cuentas). La rendición de cuentas involucra, por tanto, el derecho a recibir información y la obligación correspondiente de divulgar todos los datos necesarios. Pero también implica el derecho a recibir una explicación y el deber correspondiente de justificar el ejercicio del poder.

La sanción es el tercer pilar de la rendición de cuentas y es *"hacer valer la ley, si es necesario por la fuerza. Lo que nos importa aquí es su aspecto impositivo, el esfuerzo por asegurar el cumplimiento con las normas por medio de la imposición de sanciones."*

Mientras que la definición de Peschard respecto al tema en desarrollo, es:

La rendición de cuentas se refiere a la obligación que tiene el poder de responder, en primer lugar a los ciudadanos que son su fuente última de sustentación y legitimidad. Por supuesto, la rendición de cuentas tiene que estar reglamentada, tener la fuerza de la ley, pero también tiene una connotación simbólica, porque es importante no sólo que el poder sea responsable ante los ciudadanos porque cumple ciertas tareas determinadas por la ley, sino que los ciudadanos tengan la percepción de que efectivamente los gobernantes hacen lo que están obligados a hacer.[56]

Por lo que se concluye que *accountability,* en su traducción más acertada para la Administración Pública es, rendición de cuentas, ya que, *"es un arte y precisa de un alto conocimiento legal y formación técnica digna de lo público."*[57]

Jonathan Fox nos menciona que se distinguen dos tipos de interacciones: la rendición *"suave"* o ligera y la "dura" o estricta.

La diferencia entre una y otra pasa por la existencia y uso efectivo de mecanismos de sanción. En el caso de la "rendición suave", la relación entre gobernantes y gobernados se configura como interacciones en las que no cabe la posibilidad de castigo hacia las instituciones o sus funcionarios; si bien implican la necesaria presentación de cuentas y su justificación por parte de quienes están obligados a

[55] Scheldler, Andreas, *apud* Sánchez González, José Juan. *"Usos de la… cit.,* pp. 623-624.
[56] Peschard, Jacqueline *apud* Sánchez González, José Juan, *Usos de la…, cit.,* p. 624.
[57] Sánchez González, José Juan, *Usos de la…, cit,* p. 633.

hacerlo. La "rendición dura" se concibe a partir de la posibilidad efectiva de que, a juicio de quienes reciben las cuentas presentadas, se puedan aplicar acciones correctivas, disciplinarias y de otro orden por los resultados presentados o por las evidencias ofrecidas. [58]

Acertadamente la rendición de cuentas, puede ser concebida como suave o dura. La rendición de cuentas suave se da por la falta de mecanismos para castigar el incumplimiento de los funcionarios del Estado, en cambio, la rendición de cuentas dura, debe de ser efectiva, llegando a esta meta a través de sanciones que se les aplican.

Por su parte, José Sosa distingue la rendición de cuentas vertical y horizontal; la rendición de cuentas vertical descrita por Przeworsky, Stokes, Manin y Emmerich como aquella que involucra a dos o más actores vinculados por la cesión de un poder o mandato. Su expresión más común es la ocupación de un cargo público por elección popular y se extiende hasta abarcar la idea de "formar gobierno" y de "ejercicio del poder", en el poderoso sentido que la ciencia política y el derecho constitucional atribuyen a ambos conceptos.

Schelder sobre del mismo tema señala que la rendición de cuentas vertical describe una relación entre desiguales, entre superiores y subordinados, entre principales y agentes. En las democracias representativas, encuentra sus dos expresiones cardinales en los controles electorales y societales. La rendición de cuentas electoral descansa en la capacidad de los votantes para premiar o castigar el desempeño de sus representantes a través de elecciones periódicas. La rendición de cuentas societal se basa en la capacidad de los ciudadanos, asociaciones cívicas y medios de comunicación para vigilar, interpelar y sancionar a políticos y funcionarios. Utilizan la idea de los mecanismos verticales únicamente para analizar los controles *electorales* y *societales* que ejerce la sociedad civil hacia el Estado (lo que también excluye, dicho sea de paso, las exigencias de cuentas que formula el Estado hacia miembros de la sociedad civil). Delimitar la *verticalidad* en la rendición de cuentas de manera tan estrecha no es una decisión lógica, dictada por la semántica, sino simplemente una cuestión de convenciones lingüísticas.

Por lo que corresponde a la rendición de cuentas horizontal o *accountability horizontal,* O´Donnell menciona que, "es producto y consecuencia de las limitaciones y defectos de la democracia indirecta."[59] La imposibilidad práctica de que los ciudadanos vigilen efectivamente a cada autoridad hace necesario que alguien más se dedique a esta importante función.

El autor establece que existen interacciones para la rendición de cuentas horizontal (*accountability horizontal*) son emprendidas por una institución estatal con el propósito explícito de prevenir, cancelar, reparar y/o castigar acciones (o eventualmente

[58] Fox, Jonathan, *apud* Sosa, José, *op. cit.,* p. 22.
[59] O'Donnell, Guillermo, *apud* Sosa, José (Com.), *op. cit.,* p. 36.

inacciones) de otra institución o agente estatal que se presuman ilegales, tanto bajo los supuestos de transgresión como de corrupción. Este concepto de AH delimita un tipo específico de interacción entre instituciones estatales, más estrecho que el conjunto de controles e intercambios entre ellas. En todos los casos de AH, una institución estatal dada, directamente o a través de la movilización de otra (a menudo un juzgado) se dirige a otra institución estatal, invocando normas legales, respecto de acciones (o inacciones) presumiblemente ilegales por parte de ésta.

Schelder nos menciona que es un control horizontal, sugiere que el actor que exige cuentas está *a la altura de los ojos* de quien rinde cuentas, que los dos están en posiciones de poder equiparables. En la teoría democrática, la expresión paradigmática de una relación horizontal de este tipo es la clásica división de poderes. En teoría los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial se limitan y controlan mutuamente en un sistema balanceado de pesos y contrapesos.

Se busca que el funcionario acorde a sus responsabilidades actúe y cumpla sus deberes cabalmente, en caso de incumplimiento, se sancionará, obligándolo a desempeñar debidamente su cargo, pasando por la existencia o no del uso efectivo de mecanismos de sanción y dependiendo de relaciones entre superiores y subordinados o entre poderes equiparables.

La *accountability* la definen varios autores como la rendición de cuentas “dura”, por su efectividad, ya que cuenta con la sanción. La *accountability* como rendición de cuentas busca aplicar la premisa societal: que los gobernantes informen y rindan cuenta de sus actos a sus gobernados, los cuales pueden y deben exigir explicaciones de sus actuaciones.

b) Marco normativo.

El marco jurídico de la rendición de cuentas se encuentra contemplado en su fundamento constitucional, las diversas modificaciones constitucionales y las leyes reglamentarias respectivas.

i) Fundamento constitucional.

Se necesitaba una ley que regulara a la autoridad para la rendición de cuentas, por lo que a finales del siglo pasado se realizaron las reformas a la Constitución el 30 de julio de 1999, que afectaron, entre otros, los artículos 73, 74 y 79, que fueron el soporte constitucional de la rendición de cuentas y en su momento dieron origen a la creación de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación publicada el 29 de diciembre de 2000.

Por lo que respecta al artículo 73, correspondiente a las facultades del Congreso, existen varias reformas, con un total de 76, desde el año de 1921 hasta febrero de 2017, y las fracciones relacionadas con la rendición de cuentas son: VIII, en materia de deuda pública; XXIV, para expedir la ley general que establezca las bases de coordinación del Sistema Nacional Anticorrupción a que se refiere el artículo 113 de la Constitución; y XXVIII, para expedir leyes en materia de contabilidad gubernamental.

En el mismo orden de ideas, con la última reforma de mayo de 2015 a nuestra Carta Magna, el artículo 74, relativo a las facultades de la Cámara de Diputados, cuenta con un total de 17 reformas, de las cuales, en la fracción II se le faculta para coordinar y evaluar a la ASF y en la fracción VI, para revisar la Cuenta Pública.

Por último, el artículo 79 de nuestra Constitución da vida a la Auditoría Superior de la Federación, que es el órgano encargado de la rendición de cuentas o fiscalización y contando con las reformas de enero de 2016, son 15 las modificaciones al artículo antes mencionado. En la exposición de motivos de las reformas de 2008 a los artículos 73, 74 y 79 de la Carta Magna, se indica que la iniciativa del Ejecutivo Federal propuso una adición al artículo 73 constitucional con el fin de mejorar la transparencia de la información contable, facultando al Congreso de la Unión para expedir leyes que normarían la contabilidad gubernamental, armonizarían los sistemas contables públicos, y se presentaría de forma homogénea la información financiera, presupuestaria y patrimonial en los tres niveles de gobierno.

En la misma exposición de motivos prevé una adición al artículo 74, fracción IV constitucional, dotando de facultades a la Cámara de Diputados para autorizar erogaciones para proyectos de inversión en infraestructura que abarcarían más de un ejercicio fiscal, señalando que las asignaciones correspondientes deberían incluirse en los subsecuentes Presupuestos de Egresos de la Federación, con el objeto de otorgar mayor certidumbre a la inversión pública al contar con asignaciones de gasto garantizadas durante la vida del proyecto de infraestructura respectivo, reduciendo así los costos de dichos proyectos en beneficio de las finanzas públicas.

Por último, nos indica lo relativo al tema de la rendición de cuentas, propuso en los artículos 74, fracción VI, y 79 constitucionales, adelantar las fechas de presentación de la Cuenta Pública y del Informe del Resultado, así como el fortalecimiento de la Auditoría Superior de la Federación, precisando su competencia para llevar a cabo sus funciones de fiscalización, en particular, con atribuciones para fiscalizar recursos federales ejercidos por entes públicos no federales, incluyendo a los particulares cuando los recursos públicos fuesen destinados a fideicomisos privados, fondos o instrumentos similares que ejercieran recursos públicos. La iniciativa también propuso obligar a los sujetos mencionados a proporcionar a la Auditoría Superior de la Federación toda la información que ésta les requiriera. Y, en lo concerniente a la fiscalización, la iniciativa introdujo un procedimiento para el desahogo de las observaciones y recomendaciones

de la Auditoría Superior de la Federación, incluyendo plazos y métodos para la atención de las mismas y, en su caso, para su impugnación.

La exposición de motivos de las reformas del 26 de mayo de 2015, a los artículos antes referidos, señala que las funciones de la Secretaría de la Función Pública equivalen a las de un órgano anticorrupción, excepto porque carece de independencia política, al estar conformada como una Secretaría de la Administración Pública Federal; debe desempeñar un papel importante para prevenir y combatir la corrupción y fortalecer la rendición de cuentas en el ámbito federal.

También indica que la Auditoría Superior de la Federación, pese a su corta edad y limitadas capacidades presupuestarias, ha acreditado eficacia en el desempeño de su actividad, adquiriendo un papel cada vez más importante en el control de la discrecionalidad de los recursos públicos federales, se encuentra ubicada como un órgano de la Cámara de Diputados, se diseñó para que tuviese autonomía técnica y de gestión, evitando con ello directrices e injerencias por parte del poder político.

Y finalmente señala que en forma paulatina se han creado cuerpos legales en los últimos tres decenios, encaminados a establecer una normatividad para implementar políticas públicas en la materia, a saber: Ley de Fiscalización Superior, Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos (abrogada), Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley de Asociaciones Público Privadas, Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, Convenciones Internacionales y demás.

El 15 de noviembre de 2012, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) presentaron dos iniciativas para modificar el orden jurídico relacionado con la rendición de cuentas en el ejercicio de las funciones públicas: la primera buscaba crear la Comisión Nacional Anticorrupción, y la otra modificar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con el objetivo de transformar la estructura de la Administración Pública Federal (APF)

La Cámara de Diputados incorporó un artículo transitorio, en el cual se estableció que en tanto no existiera la base constitucional y legal del nuevo órgano anticorrupción propuesto por el Presidente electo Enrique Peña Nieto, la Secretaría de la Función Pública desaparecería al momento de la creación de la Comisión Nacional Anticorrupción, y mientras tanto continuaría funcionando normalmente.

La reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal se aprobó en el Congreso de la Unión el 13 de diciembre de 2012, y se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013.

Por otro lado, el 13 de diciembre de 2013, la Cámara de Senadores aprobó el dictamen en materia de combate a la corrupción, cuyo objetivo principal es la creación del órgano de combate a la corrupción, mismo que se recibió como minuta en la Cámara de Diputados el 4 de febrero de 2014. La reforma constitucional a varias entidades en la materia se dio el 27 de mayo de 2015 y a la denominación del Título Cuarto para quedar como: De las Responsabilidades de los Servidores Públicos, Particulares Vinculados con faltas administrativas graves o hechos de corrupción, y Patrimonial del Estado.

El artículo 134 constitucional también ha sido de relevancia para el tema de rendición de cuentas con sus reformas del 13 de noviembre de 2007, expresando en la exposición de motivos lo siguiente: El primer objetivo es disminuir en forma significativa el gasto en campañas electorales, lo que se propone alcanzar mediante la reducción del financiamiento público, destinado a tal propósito: en un setenta por ciento en las elecciones en que solamente se renueva la Cámara de Diputados, y del cincuenta por ciento en las elecciones en que se renuevan el Poder Ejecutivo y las dos Cámaras del H. Congreso de la Unión.

El segundo objetivo es el fortalecimiento de las atribuciones y facultades de las autoridades electorales federales a fin de superar las limitaciones que han enfrentado en su actuación. De esta manera, el Instituto Federal Electoral vería fortalecida su capacidad para desempeñar su papel de árbitro en la contienda, mientras que al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Iniciativa propone perfeccionar su facultad para decidir la no aplicación de leyes electorales contrarias a la Constitución Federal, en armonía con la calidad de Tribunal Constitucional que la propia Constitución reserva para la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Y el tercer objetivo es de importancia destacada: impedir que actores ajenos al proceso electoral incidan en las campañas electorales y sus resultados a través de los medios de comunicación; elevar a rango de norma constitucional las regulaciones a que debe sujetarse la propaganda gubernamental, de todo tipo, tanto durante las campañas electorales como en periodos no electorales.

Como es de notarse en las contrataciones públicas se busca una rendición de cuentas total para devolver la confianza a la población, pues es un recurso que ella paga.

ii) Leyes reglamentarias.

El 18 de julio de 2016, se expide la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, que abroga a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación del 29 de mayo de 2009, y cuyo origen fue la Ley de Fiscalización Superior de la Federación del 29 de diciembre de 2000.

En los boletines de prensa de la Cámara de Diputados, hacen referencia a los comentarios del diputado Maldonado Venegas, presidente colegiado del grupo de trabajo, encabeza la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, y quien hizo ver las novedades de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación: el objetivo de esta ley es transformar, ampliar y fortalecer las facultades de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), prioritariamente la función fiscalizadora, que es exclusiva de la Cámara de Diputados. Permitirá a la ASF fiscalizar en tiempo real el ejercicio de los recursos públicos, y en coadyuvancia con otros niveles de gobierno, intervenir en la evaluación de las participaciones del gasto federalizado; además, le conferirá una facultad investigadora, de análisis y dictamen que no tenía.

Y otros aspectos encaminados a una mejor rendición de cuentas, establecer acceso a mecanismos de fiscalización y se homologuen todas las normas a nivel nacional, para que todas las auditorías de los estados estén articuladas y cuenten con un referente de cómo, en qué tiempo y en qué forma trabajen, para que en un esquema de coordinación participen en la fiscalización de los recursos públicos.

Esta ley, que supera a la de 2009, como lo menciona en su exposición de motivos forma parte del Sistema Nacional Anticorrupción, que propuso un paquete legislativo, tanto en la creación de nuevas leyes, como en la adición, modificación, derogación y abrogación de otras, dando origen a las instituciones novedosas que lo integran. Así como el fortalecimiento del control parlamentario para vigilar al poder ejecutivo.

La Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación publicada el 18 de julio de 2016, establece el fortalecimiento de las atribuciones de la Auditoría Superior de la Federación, al señalar:

> ***Artículo 10.*** *La Auditoría Superior de la Federación podrá imponer multas, conforme a lo siguiente:*
> *I. Cuando los servidores públicos y las personas físicas no atiendan los requerimientos a que refiere el artículo precedente, salvo que exista disposición legal o mandato judicial que se los impida, o por causas ajenas a su responsabilidad, la Auditoría Superior de la Federación podrán imponerles una multa mínima de ciento cincuenta a una máxima de dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización;*

II. En el caso de personas morales, públicas o privadas, la multa consistirá en un mínimo de seiscientas cincuenta a diez mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización;
III. Se aplicarán las multas previstas en este artículo a los terceros que hubieran firmado contratos para explotación de bienes públicos o recibido en concesión o subcontratado obra pública, administración de bienes o prestación de servicios mediante cualquier título legal con las entidades fiscalizadas, cuando no entreguen la documentación e información que les requiera la Auditoría Superior de la Federación;
IV. La reincidencia se sancionará con una multa hasta del doble de la impuesta anteriormente, sin perjuicio de que persista la obligación de atender el requerimiento respectivo;
V. Las multas establecidas en esta Ley tendrán el carácter de créditos fiscales y se fijarán en cantidad líquida. El Servicio de Administración Tributaria se encargará de hacer efectivo su cobro en términos del Código Fiscal de la Federación y de las demás disposiciones aplicables;
VI. Para imponer la multa que corresponda, la Auditoría Superior de la Federación debe oír previamente al presunto infractor y tener en cuenta sus condiciones económicas, así como la gravedad de la infracción cometida y en su caso, elementos atenuantes, su nivel jerárquico y la necesidad de evitar prácticas tendientes a contravenir las disposiciones contenidas en esta Ley, y
VII. Las multas que se impongan en términos de este artículo son independientes de las sanciones administrativas y penales que, en términos de las leyes en dichas materias, resulten aplicables por la negativa a entregar información a la Auditoría Superior de la Federación, así como por los actos de simulación que se presenten para entorpecer y obstaculizar la actividad fiscalizadora o la entrega de información falsa.

En el decreto para la creación de dicha ley de 2016, se modificaron otras leyes como la Ley de Coordinación Fiscal en su artículo 49 y la Ley General de Contabilidad Gubernamental en su artículo 70, teniendo por objeto adecuar dichas disposiciones a la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción.

Se reformó el artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal para ampliar las facultades de la Auditoría Superior de la Federación, asimismo en la exposición de motivos se señala que se ajusta para establecer que al tratarse de recursos federales que serán fiscalizados directamente por las autoridades federales, la regulación para su ejercicio podrá seguir siendo la legislación local no contraviniendo las disposiciones federales. Asimismo, se prevé que se seguirán registrando dichos recursos en las leyes de ingresos locales para dar plena transparencia sobre su ejercicio a nivel local pero enfatizando que, por su carácter federal, quedan sujetos a la fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación y por último se especifica que las sanciones por las responsabilidades administrativas se finquen derivado de la fiscalización, se impondrán en términos de la legislación federal por las mismas autoridades.

El artículo 70 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental se reforma de igual manera para estar en sincronía con la Constitución y la Ley de Coordinación Fiscal.

Respecto a las últimas reformas a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, señala el boletín no. 521 del año 2015 emitido por la Cámara de Diputados, que su objetivo es establecer que el Ejecutivo federal estará a cargo de la programación, presupuestación, evaluación y control presupuestario del gasto público federal correspondiente a las dependencias y entidades, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para fortalecer el presupuesto basado en resultados, y la necesaria concentración de las atribuciones en materia de regulación y operación del sistema de evaluación del desempeño en una sola dependencia (Secretaría de Hacienda y Crédito Público).

c) Organismo coadyuvante de la Cámara de Diputados.

Haciendo historia, la Constitución Federal de 1824 en su artículo 50, inciso 8°, tiene el antecedente remoto de la Contaduría Mayor de Hacienda, en el cual facultaba al Congreso para *fijar los gastos generales, establezca las contribuciones necesarias para cubrirlos, arreglar su recaudación, determinar su inversión, y tomar anualmente cuentas al gobierno*; en la Constitución de 1857 se repitió el nombre y el texto en general de la CPEUM, en 1917 también, teniendo modificaciones en el siglo XIX, a través de decretos y su reconstitución a su denominación inicial. En 1836 en la Ley Tercera, art. 52, fracción I, por primera vez se utiliza el nombre de Contaduría Mayor. En 1896, se creó su Ley Orgánica, recordando que este ordenamiento fue la primera legislación reglamentaria en el país, respondiendo a las necesidades de su época.

En el siglo XX, las reformas constitucionales de 1904, 1936 y 1978, fueron el soporte jurídico para la vigencia de la fiscalización superior. Durante la LVII Legislatura (1997-2000) del Congreso de la Unión, se dio origen a un nuevo ordenamiento jurídico para sustituir a la Contaduría Mayor de Hacienda, resultando la Ley de Fiscalización Superior de la Federación publicada el 29 de diciembre de 2000, con el fin de fortalecer la transparencia y rendición de cuentas y para intensificar la calidad del gasto, creándose la Auditoría Superior de la Federación.

La misión de la Auditoría Superior de la Federación es *"fiscalizar la Cuenta Pública mediante auditorías que se efectúan a los tres Poderes de la Unión, a los órganos constitucionalmente autónomos, a las entidades federativas y municipios del país, así como a todo ente que ejerza recursos públicos federales, incluyendo a los particulares."*[60]

[60] Auditoría Superior de la Federación en http://www.asf.gob.mx/Publication/22_Mision_y_Vision consultada el 7 de junio de 2016, a las 11:53 a.m.

La estructura de la Auditoría Superior de la Federación, se compone por:

- Secretaría técnica de la ASF.
- Coordinación de Análisis y Seguimiento de la Gestión.
- Coordinación de planeación y programación.
- Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero.
- Auditoría Especial de Desempeño.
- Auditoría Especial de Tecnología de Información, Comunicaciones y Control.
- Auditoría especial del Gasto Federalizado.
- Unidad de Asuntos Jurídicos.
- Unidad General de Administración.
- Unidad de Sistemas e Información.

Es un órgano especializado de la Cámara de Diputados, con autonomía técnica y de gestión *"para decidir sobre su organización interna, funcionamiento, resoluciones y manejo de los recursos presupuestales que le son asignados. Su actuación se rige por un conjunto de disposiciones jurídicas, técnicas y éticas."*[61]

d) Aplicación a las contrataciones públicas.

La rendición de cuentas en la materia de adquisiciones, se ha perfeccionado con las reformas hechas a partir del 28 de mayo de 2009. Se ha visto reflejada en la simplificación de los procedimientos de contratación, señalados en la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público y con las excepciones dispuestas en su artículo 1°, fracción VI, no quedan comprendidos para la aplicación de la presente Ley los fondos previstos en el Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal.

En el capítulo primero generalidades, dispone:

Las funciones de los comités de adquisiciones, arrendamientos y servicios, como son el dictaminar la procedencia de la excepción a la licitación pública y analizar trimestralmente el informe de la conclusión y resultados generales de las contrataciones que se realicen. (art. 22, fracciones II y IV)

La planeación, programación, presupuestación y el gasto de las adquisiciones, arrendamientos y servicios se sujetará a las disposiciones específicas del Presupuesto de Egresos de la Federación, así como a lo previsto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y demás disposiciones aplicables y los recursos destinados

[61] Auditoría Superior de la Federación en http://www.asf.gob.mx/Publication/23_Marco_de_Actuacion consultada el 7 de junio de 2016, a las 12:16 p.m.

a ese fin se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia, honradez e imparcialidad para satisfacer los objetivos a los que fueren destinados.(art.24)

En casos excepcionales, previo a la autorización de su presupuesto, las dependencias y entidades podrán solicitar a la Secretaría su aprobación para convocar, adjudicar y formalizar contratos cuya vigencia inicie en el ejercicio fiscal siguiente de aquél en el que se formalizan. Los referidos contratos estarán sujetos a la disponibilidad presupuestaria del año en el que se prevé el inicio de su vigencia, por lo que sus efectos estarán condicionados a la existencia de los recursos presupuestarios respectivos, sin que la no realización de la referida condición suspensiva origine responsabilidad alguna para las partes. Cualquier pacto en contrario a lo dispuesto en este párrafo se considerará nulo. (art. 25)

En el caso del artículo 41, el titular del área responsable de la contratación, a más tardar el último día hábil de cada mes, enviará al órgano interno de control en la dependencia o entidad de que se trate, un informe relativo a los contratos formalizados durante el mes calendario inmediato anterior, acompañando copia del escrito aludido en este artículo y de un dictamen en el que se hará constar el análisis de la o las proposiciones y las razones para la adjudicación del contrato. No será necesario rendir este informe en las operaciones que se realicen al amparo del artículo 41 fracciones IV y XII, de este ordenamiento. (art. 40)

En los supuestos que prevé el artículo 41 de esta Ley, las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán optar por no llevar a cabo el procedimiento de licitación pública y celebrar contratos a través de los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa.

Complementario al párrafo anterior, el artículo 42 regula la adjudicación directa o invitación a cuando menos tres personas, cuando no se rebasan los montos establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

En el Reglamento de la LAASSP, en su artículo 23 fracciones I y II, señala los aspectos que debe contener el informe trimestral al comité de adquisiciones, arrendamientos y servicios, como la síntesis de la conclusión y resultados generales de las contrataciones realizadas con fundamento en los artículo 41 y 42 de la ley, así como la relación de los contratos que tuvieron alguna incidencia.

En las reformas de la LAASSP del 28 de mayo de 2009, la *SFP* expuso la existencia de un conjunto de inhibidores que obstaculizan las contrataciones, como una inadecuada planeación, programación y presupuestación; excesiva normatividad interna de las dependencias y entidades; requisitos excesivos e inadecuados en las bases de licitación; complejidad de los contratos que dificultan su cumplimiento; interpretación inadecuada de las disposiciones que regulan las contrataciones públicas; deficiencias y limitaciones en los sistemas de información (CompraNet); ausencia de un sistema de evaluación

integral; legislación inadecuada para la aplicación de nuevos esquemas de contratación, poca flexibilidad de las disposiciones que regulan el procedimiento de adjudicación y ejecución de contratos. Aunado a lo anterior, los procedimientos de resolución de controversias y sanciones a proveedores y contratistas, señalaron como premisa que generaban incentivos perversos que tienen como resultado una gran cantidad de litigios que entorpecen la eficiencia de las obras y la entrega oportuna de los bienes y servicios. Todo ello, acompañado de una valoración negativa de la sociedad sobre la corrupción en las contrataciones.

En cuanto a la planeación, programación y presupuestación, señala que las leyes de la materia no prevén disposiciones armónicas y criterios precisos para formular programas anuales en materia de adquisiciones y obras públicas, lo cual actúa en detrimento de su calidad y de su uso como herramienta para la evaluación. La consecuencia de ello es que el acento de la verificación de los resultados se centra en revisiones *ex post* a partir de criterios formalistas, es decir, de medición del grado de apego de las contrataciones a procedimientos legales, bases y contratos, por lo que la evaluación de resultados es prácticamente inexistente, de modo que resulta imposible saber si las compras y las obras públicas cumplen no sólo con la presupuestación realizada, sino con los propósitos de la política de adquisiciones y contratación de obras del Gobierno Federal. La problemática concreta puede observarse, en el caso del desarrollo de infraestructura, en la falta de estudios y proyectos, atrasos de liberación del derecho de vía y las autorizaciones de autoridad en materia ambiental.

Con el ánimo de reformar la normatividad vigente a favor de la eficiencia y eficacia en la erogación del gasto público y consecuentemente en el bienestar social, se incluyó el precepto a favor de los proveedores y contratistas, de que las condiciones cuyo propósito sea facilitar la presentación de las propuestas y agilizar la conducción de los actos de la licitación, así como cualquier otro requisito cuyo incumplimiento, por sí mismo, o deficiencia en su contenido no afecte la solvencia de las propuestas, no serán objeto de evaluación, y se tendrán por no establecidas.

Las facultades de verificación de las dependencias involucradas en las contrataciones públicas, se desarrollaron a través de:

La Secretaría de la Función Pública, en el ejercicio de sus facultades, podrá verificar, en cualquier tiempo, que las adquisiciones, arrendamientos y servicios se realicen conforme a lo establecido en esta Ley o en otras disposiciones aplicables.

La Secretaría de Economía, atento a sus facultades y atribuciones podrá verificar que los bienes cumplan con los requisitos relativos al grado de contenido nacional o a las reglas de origen o mercado y, en caso de que éstos no cumplan con dichos requisitos, informará a la Secretaría de la Función Pública.

La Secretaría de la Función Pública podrá realizar las visitas e inspecciones que estime pertinentes a las dependencias y entidades que realicen adquisiciones, arrendamientos y servicios, e igualmente podrá solicitar a los servidores públicos y a los proveedores que participen en ellas todos los datos e informes relacionados con los actos de que se trate.

La Secretaría de la Función Pública podrá verificar la calidad de los bienes muebles a través de la propia dependencia o entidad de que se trate, o mediante las personas acreditadas en los términos que establece la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

El resultado de las comprobaciones se hará constar en un dictamen que será firmado por quien haya hecho la comprobación, así como por el proveedor y el representante de la dependencia o entidad respectiva, si hubieren intervenido. La falta de firma del proveedor no invalidará dicho dictamen. (arts. 57 y 58)

En la exposición de motivos del 28 de mayo de 2009, se expresa que uno de los fines esenciales a perseguir por todo instrumento jurídico es dotar de certeza jurídica a los destinatarios de la norma, ya sea autoridades o ciudadanos; para ello se propone fortalecer y clarificar aquellos casos en los cuales la vaguedad o ambigüedad de las normas jurídicas vigentes han dado lugar a innumerables litigios, ya sea en el ámbito del poder judicial o aquellos marcados por las normas del derecho administrativo, en detrimento de un pulcro ejercicio del gasto público y del combate a la corrupción.

Los procedimientos de contrataciones públicas, están sujetos a la rendición de cuentas, por lo que deben cumplir con lo dispuesto en la materia, con el fin de lograr un apego a la ley, dar certeza jurídica a los proveedores y combatir cualquier forma de corrupción; también para que los ciudadanos puedan conocer los procesos de contrataciones públicas, los participantes, las condiciones y los ganadores de las mismas.

e) Sistema Nacional de Fiscalización.

Desde el gobierno panista del año 2000, empezaron a tomar fuerza el combate a la corrupción y la rendición de cuentas, respecto a la última, México tenía sistemas aislados como lo comenta Miguel Gutiérrez en su estudio de 2014, la creación de un sistema armónico de fiscalización, impulsado por las reformas constitucionales de 1999, originaron a la ASF, como se menciona anteriormente, que generó la promulgación de la Ley de Fiscalización Superior de 2000, actualmente abrogada; la expedición de la Ley General de Desarrollo Social (2004), en la cual se precisaron las obligaciones del gobierno y se definen los principios de la política pública y creó el Consejo Nacional para

la Evaluación de la Política Social (CONEVAL)[62]; las modificaciones a la Constitución de 2007 y 2008 en los temas de presupuesto, gasto público y fiscalización, fueron el origen de la armonización para la creación de la Ley General de Contabilidad publicada en el Diario Oficial de la Federación en el año 2008, formando el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) para la implementación del Sistema de Contabilidad Gubernamental; adicionalmente las modificaciones a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria de 2008 y la creación de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación de 2009; la implementación del Sistema de Evaluación del Desempeño de 2008; y por último el Sistema Nacional de Fiscalización en 2012, *"con los cuales se ha buscado contar tanto con una valoración más objetiva del desempeño de los programas gubernamentales, como con una mejora en la coordinación entre todos los órganos gubernamentales de fiscalización en el país, con el fin de trabajar, en lo posible, bajo una misma visión profesional, con similares estándares, valores y capacidades."*[63]

El SNF tuvo sus orígenes el 17 de febrero de 2010, durante la presentación del Informe del Resultado de Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2008 ante la Cámara de Diputados teniendo durante seis años reuniones plenarias.

En 2015, en el marco del proceso legislativo que daría origen al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), se reconoció al SNF en el *"Dictamen en Sentido Positivo a las Iniciativas con Proyecto de Decreto por el que se Reforman, Adicionan y Derogan diversas Disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en Materia del Sistema Nacional Anticorrupción"*, que a la letra señaló:

> *"El Sistema Nacional de Fiscalización, en términos del Proyecto, se inscribe como un subsistema consolidado y autónomo pero funcionando como eje central y pilar fundamental del Sistema Nacional Anticorrupción, de forma tal que las acciones emprendidas por el Estado para prevenir y sancionar la corrupción, no se llevarán a cabo en forma aislada o fragmentada, sino como un sistema integral articulado para prevenir y sancionar las responsabilidades administrativas y los hechos de corrupción, sea que éstas deriven del ejercicio indebido de los recursos públicos, o*

[62] Es una institución reconocida por su credibilidad y rigor técnico para generar información objetiva y útil que contribuye a la mejora de la Política de Desarrollo Social en CONEVAL http://www.coneval.org.mx/quienessomos/Paginas/misionvision.aspx el 18 de enero de 2017 a las 4:13 p.m.

[63] Gutiérrez Salazar, Miguel Ángel, 2014. "La importancia de construir un Sistema Nacional de Rendición de Cuentas en México". *Hechos y Derechos*, núm. 19, enero, en https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/hechos-y-derechos/article/view/6913/8849 el 18 de enero de 2017 a las 11:26 p.m.

bien del incumplimiento de responsabilidades públicas que no se vinculan necesariamente con la hacienda pública."[64]

La Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción lo define como el conjunto de mecanismos interinstitucionales de coordinación entre los órganos responsables de las tareas de auditoría gubernamental en los distintos órdenes de gobierno, con el objetivo de maximizar la cobertura y el impacto de la fiscalización en todo el país, con base en una visión estratégica, la aplicación de estándares profesionales similares, la creación de capacidades y el intercambio efectivo de información, sin incurrir en duplicidades u omisiones (art. 3, fracción XII).

El objetivo del mismo sistema se encuentra establecido en los artículos 37 y 38 con la creación de un sistema electrónico que permita ampliar su campo de actuación e impacto de la fiscalización en cuanto a los recursos federales y locales, construyendo un modelo de coordinación de las entidades federativas, municipios y alcaldías de la Ciudad de México e información al comité coordinador de los avances de la fiscalización de los mismos recursos siendo apoyados por todos los entes públicos fiscalizadores y fiscalizados.

Los integrantes del SNF se encuentran señalados en el artículo 37 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y son:

- La Auditoría Superior de la Federación;
- La Secretaría de la Función Pública;
- Las entidades de fiscalización superiores locales, y
- Las secretarías o instancias homólogas encargadas del control interno en las entidades federativas.

Contará con un Comité Coordinador el cual tendrá las funciones de emitir un informe anual que contenga los avances y resultados del ejercicio de sus funciones y de la aplicación de políticas y programas en la materia; emitirá recomendaciones públicas no vinculantes ante las autoridades respectivas y les dará seguimiento y; establecerá una Plataforma Digital Nacional que integre y conecte los diversos sistemas electrónicos que posean datos e información necesaria para que las autoridades competentes tengan acceso a los sistemas, entre otros.

La Plataforma Digital Nacional es un proyecto a largo plazo que contendrá la compilación de los perfiles y labores de todas las entidades de auditoría gubernamental,

[64] Cámara de Diputados, Dictamen en Sentido Positivo a las Iniciativas con Proyecto de Decreto por el que se Reforman, Adicionan y Derogan Diversas Disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia del Sistema Nacional Anticorrupción, Gaceta Parlamentaria, [en línea], LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, México, 26 de febrero de 2015, Número 4223-III, Año XVIII, en dirección URL: http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/62/2015/feb/20150226-III.pdf el 10 de junio de 2016 a las 5:03 p.m.

poniéndola en disposición de la ciudadanía y proporcionando información de las auditorías.

C) Combate a la corrupción.

El tercer apartado se refiere al combate a la corrupción que junto con la transparencia y la rendición de cuentas son efectivos instrumentos para una adecuada y pertinente contratación en materia de adquisiciones o de obra pública.

a) Principio doctrinal.

No es nuevo como lo menciona José Juan Sánchez en su libro, ya que, *"la corrupción se ha transformado actualmente en un tema común en los círculos internacionales. No se trata de un tema nuevo, lejos de eso, la corrupción ha existido desde que el gobierno existe. Pero, el mundo ha decidido que este problema ha llegado finalmente a ser disfuncional para el desarrollo global de manera que es necesario enfrentarlo."*[65]

La corrupción en el virreinato, se intentó controlar con Juicios de Residencia, Visitas (General y Particular) y Fianza, como mecanismos internos y por otra parte, el mecanismo externo a cargo del Tribunal Mayor de Cuentas, ambos resultaron ineficientes para frenar la corrupción. Como lo señala J. J. Sánchez:

> *En el periodo de Reforma, se inicia la primera etapa de moralización de la Administración Pública mexicana en el siglo XIX con la expedición de la Ley de Delitos Oficiales de los Altos Funcionarios (1870) –primera ley específica de responsabilidad de servidores públicos-, así como las sanciones penales establecidas en el Código Penal (1872). No hay cambios en el control externo o parlamentario en ese momento, pero de haberse contado con una estabilidad política y económica, es posible que los resultados de combate a la corrupción administrativa hubieran sido mayores y más efectivos.*[66]

Los datos históricos reafirman que la corrupción existe desde tiempos muy antiguos, sin embargo, las medidas implementadas para combatirla, han resultado ineficientes, inadecuados y no alcanzaron el objetivo de controlar la corrupción.

Los estudiosos del tema, como Gerard E. Caiden, citado por el José Juan Sánchez identifican diversas formas de corrupción, teniendo entre otras:

- Traición. La subversión, transacciones ilegales en el extranjero, contrabando.

[65] Sánchez González, José Juan, *La corrupción administrativa en México*, ed. IAPEM, México, 2012, p. 43.
[66] *Ibídem,* pp. 31-32.

- Cleptocracía. Privatización de los fondos públicos, robo y hurto.
- Malversación. Falsificación y desfalcos, cuentas abultadas, sustracción y mal uso de los fondos.
- Abuso de poder. Intimidación, tortura, indulto y perdón no merecidos.
- Engaño y fraude. Aseveración falsa, trampas y estafas, chantaje.
- Perversión de la justicia. Comportamiento criminal, falsas pruebas, detención ilícita, acusación fraudulenta.
- Incumplimiento de los deberes. Deserción, parasitismo.
- Soborno y malversación. Extorción, imposiciones ilegales, comisión ilícita.
- Manipulación de las elecciones. Arreglo fraudulento de los votos, demarcación arbitraria de los distritos electorales.
- Mal uso de conocimiento interno. Mal uso de información confidencial, falsificación de registración.
- Venta no autorizada de oficinas. Venta no autorizada de bienes públicos y licencias públicas.
- Manipulación de las regulaciones. Manipulación de compras, suministros, contratos públicos y préstamos.
- Evasión de impuestos. Acaparamiento abusivo.
- Aceptación de obsequios inapropiados. Honorarios, dinero por agilización de gestiones, agasajos, viajes con fondos públicos.
- Nexos con el delito organizado. Operaciones en el mercado negro.
- Compadrazgo. Encubrimiento, amiguismo.
- Vigilancia ilegal. Mal uso de telecomunicaciones y correo, y otros medios de difusión.
- Mal uso de sellos. Mal uso de papel membrete, residencia y privilegios oficiales.

El mismo autor citando a diversos doctrinaros, define y abunda en distintos autores que definen la corrupción, como:

- Eduardo Wills. El uso de funciones y atribuciones para obtener o conceder beneficios particulares, en contravención de las disposiciones legales normativas existentes en un momento histórico dado. De manera más general, es el uso indebido del poder de los recursos públicos para el beneficio personal o el beneficio político particular.
- Banco Mundial. El abuso de un funcionario público en beneficio privado en el entendido que ese beneficio puede darse ya sea que el funcionario acepte el soborno o extorsione al perjudicado.
- Joseph Nay. Comportamiento que se aparta de las obligaciones morales de la función pública por motivos privados (la familia, el entorno cercano),

pecuniarios o de incremento de estatus. También sostiene que ésta implica una conducta que se desvía de las obligaciones del orden público normales debido a intereses personales o beneficios monetarios o de orden social; o lo que viola normas respecto al uso de cierto tipo de influencias con fines personales

- Jorge Malen. Se pueden definir los actos de corrupción como aquellos que constituyen la violación, activa o pasiva, de un deber marco de discreción (sic) con objeto de obtener un beneficio extraposicional.
- Jesús González Pérez. La corrupción consiste en la utilización de las potestades públicas para intereses particulares cualesquiera que sea la forma de manifestarse, sea en beneficio propio o de un tercero o de un partido político, sea por razón de amistad o por dinero o por otras prestaciones.
- Francisco Laporta. La corrupción significa que un servidor público abusa de su autoridad para obtener un ingreso extra de caudal público. Conducta que se desvía de los deberes formales de un cargo público a causa de ganancias (pecuniarias o de status) de tipo privado (personal, familiar o de grupo).
- Van Klaveren. Un funcionario público corrupto considera su cargo como un negocio del cual buscará maximizar los ingresos. Por ello, el nivel de sus entradas dependerá de "la situación de mercado" y de su talento para encontrar el punto de máxima ganancia a costa de la demanda pública
- Carlos Cubillo. La corrupción es todo el conjunto de acciones u omisiones generadoras de una conducta ilícita y dolosa, desarrollada clandestinamente por los titulares de las competencias necesarias para el ejercicio de determinadas funciones públicas y que provoca un beneficio injustificado –económico o de otra índole- a favor de la autoridad o empleado público que actúa, o de otras personas elegidas por él mismo, y todo ello en perjuicio de la integridad de los poderes públicos.[67]
- José Juan Sánchez González. Las definiciones que existen van desde términos legales estrictos, que describen este fenómeno como un mero acto de soborno que involucra al menos a un servidor público y una transferencia de recursos, hasta las explicaciones económicas que la perciben como impuesto regresivo y una forma de renta adicional.

La corrupción normalmente es observada en el servidor público, que con acciones u omisiones origina una conducta ilícita al realizar las potestades públicas para un beneficio propio o de un tercero, y con ello perjudica la integridad de los poderes públicos. Entre sus diferentes acepciones, la del ámbito jurídico señala que:

[67] Sánchez González, José Juan, *La corrupción*…, *cit.,* pp. 48-49.

(…) para el Derecho sería corrupta toda acción de un sujeto público o privado que incumpla las normas jurídicas y viole las obligaciones del cargo con la finalidad de obtener beneficios privados, personales o para un grupo del que forma parte el corrupto. Esta corrupción puede ser pública o privada. Para una distinción definitiva, la clave está en el sujeto que actúa y en calidad de qué actúa.[68]

Existen diversas causas para la aparición de la corrupción, entre ellas están: causas genéricas, siendo el conjunto de circunstancias sociales y económicas muy abstractas que parecen favorecer la aparición de la corrupción:

1. *Rápido crecimiento económico y modernización.*
2. *Incremento sensible de las oportunidades políticas en relación con las oportunidades económicas. La política es un medio de promoción profesional y social.*
3. *Cambio en el marco en el que se desarrolla la actividad económica.*
4. *Desequilibrio institucional entre el protagonismo de algunos agentes y los recursos necesarios para desempeñar su papel.*[69]

Existen diversas clasificaciones de la corrupción entre ellas, la corrupción negra, gris y blanca:

- ***Negra.*** *Se trata de una corrupción que tanto las masas como la elite consideran corrupta.*
- ***Gris.*** *Consiste en actos que una minoría considera corruptos, pero que para una mayoría son ambivalentes.*
- ***Blanca.*** *Ni la élite, ni las masas exigen un castigo para sus perpetradores.*[70]

Otra clasificación, es señalada por Castillo en el 2001, estudiada por los economistas, estableciendo dos variantes:

- Corrupción con robo. Ocurre cuando un individuo soborna a un servidor público para obtener un contrato, pero no lograr manufacturar la obra final, que puede ser un puente seguro, un sistema de irrigación o un servicio eficiente.
- Corrupción sin robo. Ocurre cuando los que reciben la concesión pagan un soborno y fabrican el producto.[71]

Los tipos de corrupción, se integran distintos por elementos, entre ellos destaca para efectos de nuestra investigación, la corrupción de Estado:

Es la concepción más común de corrupción y se identifica como aquella que involucra a funcionarios, agencias y organismos del Estado, ya sea a nivel centralizado

[68] *Ibídem,* p. 78.
[69] *Ibídem,* p. 61.
[70] *Ibídem,* pp. 66-67.
[71] *Ibídem,* p. 67.

(ministerios) o descentralizados (empresas públicas). Los fenómenos de corrupción también pueden afectar, en ocasiones, a otros poderes de un Estado, y no sólo a la rama ejecutiva. [72]

La corrupción es un gran problema para el mundo, como se mencionó anteriormente, por lo que Latinoamérica no está exento de la situación. Como lo señala Emmerich: *"América Latina es una de las regiones del mundo que tiene mayores índices de corrupción pública, entendida como la utilización del poder y los recursos públicos para beneficio personal o de grupo."*[73]

En la actualidad se han tomado diversas acciones para el combate a la corrupción, por la afectación a la población, ya sea económica y socialmente, a las empresas establecidas, teniendo como consecuencia, el estancamiento del desarrollo de las mismas.

Adicional a lo anterior, también se ve amenazada la confianza en las instituciones democráticas donde se vive la corrupción, como lo dice Ferreiro, *"quien fue secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Ética Pública de su país, apunta que el mayor costo político de la corrupción es el daño que provoca a la confianza pública en las instituciones y representantes, soporte fundamental de todo sistema político democrático."*[74]

Los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción sirven de apoyo para la opinión de Federico Reyes Heroles, quien señala:

(…) los países más desarrollados son a la par los menos corruptos o, a la inversa, los países más corruptos son los menos desarrollados.
La corrupción podría estar determinando, desde el silencio o la clandestinidad, el éxito o fracaso de muchas otras políticas económicas y sociales[75]

Transparencia internacional, es una organización con amplia trayectoria, ya que empezó desde la década de 1990, en tanto no existía ninguna convención global que pudiera frenar la corrupción, creándose junto con nueve aliados, en 1993 y estableciéndose en la ciudad de Berlín, logrando un gran impacto derivado del trabajo hecho en África.

Posteriormente se incorporaron 26 naciones y comenzó la publicación del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), que utiliza a 45 países para medir su percepción del nivel de corrupción en el sector público, alcanzando así su prominencia en el tema. Transparencia Internacional se involucró para crear la Conferencia Internacional

---

[72] *Ibídem,* p. 69.
[73] Emmerich Isaac, Gustavo Ernesto, *Transparencia, rendición de cuentas, responsabilidad gubernamental y participación ciudadana*, en Sosa, José (Com.), *op. cit*., p. 110.
[74] *Ibídem* p. 113.
[75] *Ibídem* p. 110.

Anticorrupción, con una concurrencia de más de 1,500 activistas, que apoyan esta causa. Se busca, como ellos lo expresan:

> *A medida que nuestro movimiento ha crecido, hemos buscado continuamente nuevas maneras de involucrar a la gente en la lucha contra la corrupción en todas sus formas. Todo el mundo puede jugar un papel en hacer de la corrupción una cosa del pasado.*
> *Al cumplir nuestros primeros 20 años, esperamos un nuevo impulso a la lucha contra la corrupción. Con su ayuda, podemos desafiar a la corrupción y forzarla a salir de las sombras (…)*
> *Vamos todos a trabajar por un mundo libre de corrupción.*[76]

En su "Reporte de Avance de 2015: Evaluación de la aplicación de la Convención de la OCDE para Combatir el Soborno Transnacional" se nos explica cómo el G20 ratifica su compromiso para acabar con el soborno y su posible adhesión a la Convención de la OCDE contra el soborno. De igual forma está a favor de tipificar como delito la solicitud de sobornos.

Adicionalmente, también se recomienda la continuación del programa de seguimiento de la OCDE, siendo este de suma importancia, para revisar el cumplimiento de las recomendaciones. Nos menciona lo siguiente:

> *Aproximadamente la mitad de los países de la Convención han fracasado al enjuiciar casos de soborno transnacional desde que se unieron a la Convención. La inactividad de estos países viola sus obligaciones derivadas de la Convención. Entendemos que la Reunión Ministerial de la OCDE que tendrá lugar en marzo de 2016 examinará la aplicación efectiva de la Convención.*
> *Formularemos propuestas sobre las medidas que deben adoptarse para abordar este problema.*[77]

Asimismo, Transparencia Internacional da una clasificación de los países de acuerdo a su grado de involucramiento en la lucha contra el soborno internacional, con los siguientes resultados:

> ***Aplicación Activa**: Cuatro países que representan el 22,8 % de las exportaciones mundiales – Estados Unidos, Alemania, el Reino Unido y Suiza.*
> ***Aplicación Moderada:** Seis países que representan el 8,9 % de las exportaciones mundiales – Italia, Canadá, Australia, Austria, Noruega y Finlandia.*
> ***Aplicación Limitada:** Nueve países que representan el 12,6 % de las exportaciones mundiales: Francia, Países Bajos, Corea del Sur, Suecia, Hungría, Sudáfrica, Portugal, Grecia y Nueva Zelanda.*

[76] Transparencia Internacional, http://www.transparency.org/whoweare/history a las 12:43, el 2 de marzo de 2016 a las 4:20 p.m.
[77] *Exportar corrupción. Reporte de Avance de 2015: Evaluación de la aplicación de la Convención de la OCDE para Combatir el Soborno Transnacional. Transparency Internacional*. 2015.

Aplicación Mínima o Nula: *Veinte países que representan el 20,5 % de las exportaciones mundiales: Japón, Rusia, España, Bélgica, México, Brasil, Irlanda, Polonia, Turquía, Dinamarca, la República Checa, Luxemburgo, Argentina, Chile, Israel, la República Eslovaca, Colombia, Eslovenia, Bulgaria y Estonia.* [78]

La *"Aplicación Moderada y Aplicación Limitada indican fases de progreso, pero se considera que no constituyen un factor disuasorio suficiente. En los casos de Aplicación Mínima o Nula, no existe el factor disuasorio."*[79]

Se aprecia que México está en la Aplicación Mínima o Nula, aun teniendo organismos especializados, por lo que el avance concluye que se debe precisar de más recurso financiero para los mismos.

Una observación más que realizada por Transparencia Internacional, es la ubicación de México en la responsabilidad penal de las entidades jurídicas, la cual no se tiene prevista de manera adecuada en su legislación de la materia. Asimismo señaló la deficiencia que tiene en la recopilación de información y la publicación de la clasificación que obtiene por su grado de Aplicación.

La metodología que se aplica para obtener la clasificación se basa en tres factores:

- ***Período de tiempo cubierto.*** *Es el comprendido de 2011 a 2014.*
- ***Porcentaje de exportaciones mundiales.*** *"La hipótesis subyacente establece que la prevalencia del soborno transnacional es proporcional a la actividad de la exportación, y que se pueden realizar comparaciones entre países exportadores."*[80]
- ***Sistema de ponderación por puntos para las diferentes medidas de aplicación.*** *"La ponderación utilizada es la siguiente: un punto por abrir investigaciones, dos puntos por abrir casos, cuatro puntos por cada apertura de un caso importante o por cerrar casos con imposición de sanciones, y 10 puntos por cerrar casos importantes con sanciones significativas.* [81]

Por lo que podemos concluir que México cuenta con un sistema de combate a la corrupción con serias deficiencias, lo cual genera que ocupe reiteradamente los últimos lugares de los países miembros de la OCDE, en consecuencia, al tener esa posición en organismos internacionales, genera desconfianza en las instituciones, impidiendo un desarrollo económico-social a la altura de las necesidades del país.

La OCDE ha realizado convenciones internacionales en las cuales se clasifica a México, su grado de corrupción, como en la *"Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales"* efectuada

[78] *Ibídem,* p. 7.
[79] *Ibídem,* p. 12.
[80] *Ibídem*, p. 16.
[81] *Ídem.*

en 1997. En materia de adquisiciones, la OCDE recomendó que se introduzcan o exijan disposiciones anticorrupción para regular las adquisiciones financiadas con ayuda bilateral. Este trabajo debe efectuarse en coordinación con otras medidas emprendidas en la OCDE y en otros sitios para eliminar la corrupción, y en colaboración con los países beneficiarios.

El CAD recomendó que sus miembros trabajen para garantizar la aplicación adecuada de sus disposiciones anticorrupción y que señalen a la atención de las instituciones internacionales de desarrollo a las cuales pertenezcan, la importancia de la aplicación adecuada de las disposiciones anticorrupción contempladas en sus normas de operación.

El CAD verifica si la recomendación se ha hecho efectiva dentro de un año y los miembros de la misma trabajarán en estrecha colaboración con los asociados del desarrollo en todas las tareas de cooperación para el desarrollo.

Otro organismo que ayuda al combate de la corrupción se llama UNODC (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito), *"es un líder mundial en la lucha contra las drogas ilícitas y la delincuencia internacional. Establecida en 1997 a través de una fusión entre el Programa de Control de Drogas de las Naciones Unidas y el Centro para la Prevención Internacional del Delito, UNODC opera en todas las regiones del mundo a través de una extensa red de oficinas sobre el terreno. La UNODC depende de contribuciones voluntarias, principalmente de los gobiernos, que aportan el 90 por ciento de su presupuesto."*[82]

La UNODC no menciona un enfoque en la corrupción, sin embargo en el menú de sus servicios se nos comenta referente al tema que *"es un impedimento importante para el desarrollo económico y social, los socios de la UNODC con los sectores públicos y privados, así como la sociedad civil, deberán actuar de manera activa y urgente para aflojar el agarre que tienen los corruptos en el gobierno, tanto dentro de las fronteras nacionales como en los canales comerciales. En los últimos años, la Oficina ha intensificado sus esfuerzos para ayudar a los Estados a recuperar los activos robados por funcionarios corruptos."*[83]

Para combatir la corrupción la UNODC realiza cursos cuyo objetivo es mejorar la comprensión de los alumnos de las disposiciones de la UNCAC (Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción), además que estos se encuentran diseñados por expertos en esta materia y en el estudio de la delincuencia económica para la prevención de la corrupción.

---

[82] ONU, https://www.unodc.org/unodc/en/about-unodc/index.html?ref=menutop, el 1 de marzo de 2016 a las 1:54 p.m.
[83] *Ídem.*

El curso consta de dos módulos, el primero se titula “Introducción a la lucha contra la corrupción”, para proporcionarles un mejor entendimiento del significado de la corrupción y de sus consecuencias socio-económicas. El segundo módulo se titula “Curso avanzado Anti-Corrupción: Prevención de la Corrupción”, que ayuda a un conocimiento más exhaustivo del capítulo II de la UNCAC referente a las medidas de prevención en el proceso de adquisiciones entre otras.

Otras de las medidas que ha puesto en marcha es un portal en contra de la corrupción conocido como TRACK, el cual contiene una biblioteca legal de la UNCAC, con datos en forma electrónica de las jurisprudencias y legislaciones de los 175 Estados sistematizados de acuerdo con los requisitos de la Convención. En TRACK, se encuentra la legislación mexicana, señalando la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos (abrogada), la Ley Orgánica de la Administración Pública, Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servidores del Sector Público, y el Acuerdo por el que se modifica el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Otro objetivo del portal es que se origine una comunidad con intercambio de información y programar eventos, para ser una comunidad de práctica.

La corrupción es un tema delicado, por la afectación en el aspecto económico y social que tiene el pueblo que lo vive, el más pobre normalmente es el que sufre más corrupción, en consecuencia, diversas organizaciones buscan informar y prevenir, para evitar que el problema siga creciendo en el mundo.

En los estudios realizados por la OCDE, en conjunto con el seguimiento de Transparencia Internacional, ubican a México dentro del IPC, con un 35 de 100, siendo 0 el país más corrupto y 100 la ausencia de corrupción; resultando nuestro país actualmente dentro de los más corruptos, por lo que se originó en México en 2012 la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas.

Esta ley se encuentra acorde al principio del artículo 23 de nuestra Constitución, en el sentido de que una persona no puede ser juzgada dos veces por el mismo delito, toda vez que la naturaleza de las sanciones impuestas en la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas son administrativas, independientemente de las civiles, penales o de cualquier otra naturaleza, haciendo esta recomendación Transparencia Internacional y la OCDE.

Otro artículo de nuestra legislación fundamento de esta ley es el 134 constitucional que establece los principios a que están sujetas las contrataciones públicas con cargo a recursos económicos federales.

En el gobierno del presidente Vicente Fox del Partido Acción Nacional (PAN), se expide la Ley de Responsabilidades Administrativas publicada el 13 de marzo de 2002, así como la puesta en marcha del primer Programa de Combate a la Corrupción del 1 de diciembre de 2000 al 30 de noviembre de 2006, en la historia, y se estableció la Ley del Servicio Profesional de Carrera, publicada el 10 de abril de 2003. Como control externo se expide la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, publicada el 29 de diciembre de 2000 y el Reglamento Interior de la Contaduría Mayor de Hacienda, publicado el 10 de agosto de 2000 por la ASF.

Respecto a lo anterior, concluimos que México no ha obtenido los resultados esperados desde 1997, se han hecho diversos intentos, principalmente en el sexenio de Vicente Fox y posteriormente en la gestión de Felipe Calderón, en los cuales se propusieron iniciativas de leyes que combatieran la corrupción, pero estas no continuaron con el proceso legislativo para su aprobación.

Este tema en México ha tenido fuertes críticas de expertos en la materia, como María Amparo Casar quien en su investigación denominada “México: Anatomía de la Corrupción”, al revisar el IPC del año 2014, descubre que nos ubicamos en el lugar 127, dejándonos entre los países más corruptos. Hace un razonamiento del cual se deriva que si México se mantiene constante en su actitud actual de simulación y combate a medias de la corrupción, tardaríamos aproximadamente 40 años para salir de esta clasificación.

Amparo Casar, analiza más clasificaciones de corrupción, donde nuestro país, se encuentra en los últimos lugares, es decir, es de lo más corruptos. Y como si esto no fuera lo suficientemente grave, nos encontramos en retroceso en las evaluaciones a nivel internacional, en lugar de mejorar.

Todo esto origina un descontento social, económico y político, y como se menciona en los textos anteriores, en México se ha deteriorado la confianza por parte de la población en sus instituciones, y más aún cuando vemos que a nivel internacional estamos muy mal posicionados. Al continuar con el análisis nos dice:

> *México ha sido constante y sistemático en el mal puntaje que obtiene en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional desde hace 20años: 35 sobre 100.Noobstante, ha descendido drásticamente en el ranking mundial hasta ocupar el lugar 103 de 176 países. Esto se debe en parte a que cada año Transparencia Internacional añade más países al ranking mundial pero principalmente a que los países que han dejado atrás a México se han empleado más a fondo en el combate a la corrupción.*[84]

Una aportación importante de Casar, se da cuando señala que no solo el gobierno tiene toda la responsabilidad en la corrupción, en tanto es un problema que también nos

[84] Casar Pérez, María Amparo, *México: Anatomía de la Corrupción,* México, CIDE, 2015. p. 21.

involucra como ciudadanos, como empresas y se resume en la cultura de la legalidad que sociológicamente aceptamos y nos distingue como país. Una de las anotaciones importantes que realizó Casar al estudiar el funcionamiento de la OCDE, es:

> *La OCDE reconoce tres tipos de modelos en el ámbito internacional cuyo éxito ha dependido más del compromiso asumido y su puesta en marcha que del diseño mismo. El primero es el de la agencia única (multi-propósito) que concentra prácticamente todas las tareas y autoridad en materia de corrupción (Hong Kong o Singapur) aunque mantiene la función judicial en un órgano distinto. Otros concentran la autoridad para investigar, perseguir y sancionar las conductas tipificadas como corrupción en un organismo (fiscalía especializada) pero dispersan el resto de las funciones (España, Bélgica Alemania). Finalmente están los países que han elegido por agencias múltiples desconcentradas y descentralizadas que se coordinan en la práctica y que asumen diversas funciones como investigación, evaluación, capacitación, diseño de códigos de ética o preparación de legislación (Francia o EE.UU.).*[85]

Adicionalmente, Amparo Casar identifica las agencias en México de la siguiente manera:

> *Los esfuerzos institucionales para combatir la corrupción en México han sido tibios y poco efectivos. En 1982 se estableció, durante el gobierno de Miguel de la Madrid, la Secretaría dela Contraloría General de la Federación (SECOGEF) que en 1994, bajo la administración de Ernesto Zedillo, adoptó el nombre de Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (SECODAM) para convertirse en 2003, durante el gobierno de Vicente Fox, en la Secretaría de la Función Pública (SFP). En los tres casos se trata de organismos dependientes el titular del Poder Ejecutivo. Se ha avanzado también en la formación de órganos de control externo o inter-orgánico como la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión (1999), el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) en 2002 y la Fiscalía Especial para el Combate a la Corrupción en el Servicio Público Federal de la PGR. En el plano legislativo se introdujeron dos leyes relevantes: la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos de 2002 y la Ley Federal de Anticorrupción en Contrataciones Públicas de 2012. La Comisión Nacional Anticorrupción, propuesta por Enrique Peña Nieto en 2012 para sustituir a la SFP como un órgano de control autónomo y reformulada por los partidos políticos, está todavía pendiente.*[86]

Concluye que desgraciadamente no se cuenta con estadísticas o información que permitan evaluar la eficacia delas normas, la efectividad del marco institucional y los resultados de las acciones anticorrupción. El avance más importante ha sido sin duda el derecho a la información y la creación del IFAI, ahora INAI que es el instrumento ciudadano para hacerlo valer, junto con la Ley de Transparencia se han multiplicado

[85] OCDE, *apud* Casar Pérez, María Amparo, o*p. cit.,* p. 47.
[86] Casar Pérez, María Amparo, o*p. cit.,* pp. 49-50.

también el monitoreo y las investigaciones sobre corrupción llevadas a cabo por la academia, la prensa, los *think tanks* y las organizaciones de la sociedad civil.

b) Marco normativo:

El marco jurídico para combatir la corrupción, se encuentra establecido en la fundamentación constitucional y en las leyes reglamentarias aprobadas para crear el Sistema Nacional Anticorrupción.

i) Fundamento constitucional.

En nuestro país, se estipula en la Constitución, en su Título Cuarto, *"De las Responsabilidades de los Servidores Públicos, Particulares Vinculados con Faltas Administrativas Graves o Hechos de Corrupción, y Patrimonial del Estado",* las medidas que se están tomando para el combate a la corrupción el esquema y responsabilidades, y van de los artículos 108 al 114, y contienen las reformas del 27 de mayo de 2015, instrumentadas con motivo de la integración del Sistema Nacional Anticorrupción.

Las causas aducidas en la exposición de motivos, por las modificaciones del 2015 a la Constitución, se menciona que l*a* corrupción tiene consecuencias altamente negativas en todos los aspectos de la vida cotidiana de los mexicanos por lo que se exige combatirla en el ejercicio de las funciones públicas; su erradicación es la única forma de fortalecer las instituciones democráticas, evitar distorsiones de la economía, vicios en la gestión pública y el deterioro del orden social.

En el sector privado, la corrupción incrementa el coste de los negocios y actividades empresariales, ya que a éste hay que sumar el precio de los propios desembolsos ilícitos, el costo del manejo de las negociaciones con los funcionarios públicos y el riesgo de incumplimiento de los acuerdos. También se generan distorsiones en el sector público, al desviarse inversiones públicas a proyectos de capital en los que los sobornos y mordidas son más abundantes. Los funcionarios incrementan la complejidad de los proyectos para ocultar o allanar el camino para tales tratos, distorsionando la inversión. La corrupción también hace descender el cumplimiento de las regulaciones relacionadas con la construcción, el medio ambiente u otras, reduce la calidad de los servicios e infraestructura gubernamentales e incrementa las presiones presupuestarias sobre el gobierno.

El objetivo era desarrollar un sistema de rendición de cuentas "horizontal", de contrapesos, diseñado para que todos los órganos públicos, en sus tres niveles, y los servidores públicos que los integran, sean responsables entre ellos y exista una real

rendición de cuentas. De esta forma, el Sistema podrá manejar los conflictos de intereses en el sector público, dispersando eficazmente el poder.

El Sistema Nacional Anticorrupción, busca crear un esquema en el que se impongan límites y se vigile a los servidores públicos y a los particulares, en su caso, estableciendo las bases necesarias para la exitosa coordinación de las instituciones responsables de combatir la corrupción; y señala que el combate a la corrupción tiene que ver con decisiones estructurales, sobre la base de procedimientos eficaces, basados en la prevención de conductas relacionadas con actos de corrupción, de la participación ciudadana, la observancia de las leyes y la racionalidad de las sanciones, por señalar algunos aspectos.

El problema de la corrupción no es únicamente originado por los servidores públicos, sino que es un problema multifactorial, que debe ser abordado por la sociedad en su conjunto, debido a que sus consecuencias pueden ser variadas y afectan a todos los sectores.

ii) Leyes reglamentarias.

Derivado del fundamento constitucional, se tienen las leyes reglamentarias para el cumplimiento de lo impuesto en el Título Cuarto de la Constitución:

- Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
- Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos (ley abrogada a partir del 19 de julio de 2017).
- Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas (ley abrogada a partir del 19 de julio de 2017).
- Ley General de Responsabilidades Administrativas (texto vigente a partir del 19 de julio de 2017)

La Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, expedida el 31 de diciembre de 1982, tuvo su última reforma el 18 de julio de 2016 y establece dentro de la misma ley, en su artículo 1°, que su objeto es reglamentar el Título Cuarto Constitucional en materia de:

1º. Los sujetos de responsabilidad en el servicio público;
2º. Las obligaciones en el servicio público;
3º. Las responsabilidades y sanciones administrativas en el servicio público, así como las que se deban resolver mediante juicio político;
4º. Las autoridades competentes y los procedimientos para aplicar dichas sanciones;
5º. Las autoridades competentes y los procedimientos para declarar la procedencia del procesamiento penal de los servidores públicos que gozan de fuero y,
6º. El registro patrimonial de los servidores públicos.

En la exposición de motivos, para la creación de la ley de 1982, se propuso establecer las bases de la responsabilidad administrativa, en la que se incurre por actos u omisiones que afecten los criterios de legalidad, honradez, imparcialidad, economía y eficacia, que orientan la Administración Pública y que garantizan el buen servicio público. Instituir un sistema nuevo que tenga bases sólidas y efectividad creciente. El procedimiento administrativo propuesto es autónomo del político y del penal, como lo establece la propuesta de reforma al Artículo 109; ofrece el inculpado las garantías constitucionales de los artículos 14 y 16 y sus resultados no prevén la privación de la libertad del responsable, por tratarse de una sanción que sólo puede imponerse por el juez penal.

Se busca implantar una vía más expedita para prevenir y sancionar las faltas administrativas las cuales, según el caso, también podrían ser sancionadas conforme a la legislación penal. Las responsabilidades consecuentes pueden exigirse por cualquiera de las dos vías, pero siempre respetando de que no se podrá castigar dos veces una misma conducta con sanciones de la misma naturaleza.

La Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, expedida el 13 de marzo de 2002, y cuya última reforma es del 18 de diciembre de 2015, se abrogó el 19 de julio de 2017 por decreto del 18 de julio de 2016, tiene por objeto reglamentar el Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en su redacción original determinaba:

1º. Los sujetos de responsabilidad administrativa en el servicio público;
2º. Las obligaciones en el servicio público;
3º. Las responsabilidades y sanciones administrativas en el servicio público;
Las autoridades competentes y el procedimiento para aplicar dichas sanciones, y
4º. El registro patrimonial de los servidores públicos.

Como lo señala el autor Víctor Martínez Bullé Goyri:

> *En su exposición de motivos se reconoció la necesidad de renovar el régimen de responsabilidades de los servidores públicos, a fin de facilitar los procedimientos para que los afectados puedan exigir de manera fácil, práctica y eficaz el cumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, así como para hacer exigibles dichas responsabilidades de manera acorde con el Estado de derecho.*[87]

En materia de responsabilidades de los servidores públicos, se expone introducir en el texto constitucional una distinción entre las responsabilidades administrativas graves y las no graves. Por una parte, se prevé que las responsabilidades administrativas graves,

[87] Martínez Bullé Goyri, Víctor M., *"La responsabilidad administrativa de los servidores públicos y el medio ambiente"*, *http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/1/141/5.pdf* 3 de marzo de 2016 a las 4:30 p.m.

serán investigadas y substanciadas por la Auditoría Superior de la Federación y los órganos internos de control, y su sanción corresponderá al Tribunal Federal de Justicia Administrativa y a sus homólogos en las entidades federativas. Por otra parte, aquéllas que la ley determine como no graves serán investigadas, sustanciadas y resueltas por los órganos internos de control.

La Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2012, se abrogará el 19 de julio de 2017 por decreto del 18 de julio de 2016, esta ley tiene como finalidad: establecer las responsabilidades y sanciones que deban imponerse a las personas físicas y morales, de nacionalidad mexicana y extranjeras, por las infracciones en que incurran con motivo de su participación en las contrataciones públicas de carácter federal previstas en esta Ley, así como aquéllas que deban imponerse a las personas físicas y morales de nacionalidad mexicana, por las infracciones en que incurran en las transacciones comerciales internacionales previstas en esta Ley; y regular el procedimiento para determinar las responsabilidades y aplicar sanciones; y, establecer las autoridades federales competentes para interpretar y aplicar esta Ley.

Señala la exposición de motivos, en concordancia con los compromisos internacionales asumidos por nuestro país en la Convención Anticohecho de la OCDE y Convención Anticorrupción de la ONU, también se prevé que el ordenamiento sea aplicable para aquéllos actos de corrupción que realicen los particulares de nacionalidad mexicana en el ámbito de las transacciones comerciales internacionales.

Es importante recalcar que en términos de la iniciativa que se presenta, las sanciones previstas en las mismas serían aplicables a las personas –físicas o morales- por lo comisión de las conductas irregulares en que se acredite su responsabilidad, con independencia de las que proceda imponer a los intermediarios que hayan participado en la realización de dichas conductas.

El objeto de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, se fija así:

1º. *Establecer los principios y obligaciones que rigen la actuación de los Servidores Públicos;*
2º. *Establecer las Faltas administrativas graves y no graves de los Servidores Públicos, las sanciones aplicables a las mismas, así como los procedimientos para su aplicación y las facultades de las autoridades competentes para tal efecto;*
3º. *Establecer las sanciones por la comisión de Faltas de particulares, así como los procedimientos para su aplicación y las facultades de las autoridades competentes para tal efecto;*
4º. *Determinar los mecanismos para la prevención, corrección e investigación de responsabilidades administrativas, y*
5º. *Crear las bases para que todo Ente público establezca políticas eficaces de ética pública y responsabilidad en el servicio público.*

c) Órganos de aplicación.

Juicio Político

La Cámara de Diputados sustanciará el procedimiento del juicio político, actuando como órgano instructor y de acusación; la Cámara de Senadores fungirá como jurado de sentencia.

Como lo señala la cámara es procedente el juicio político cuando los actos u omisiones de los servidores públicos señalados por el artículo 110 de la Constitución redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho (Art. 6 de la Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos, en adelante LFRSP). Es oportuno dejar claro que no procede el juicio político por la mera expresión de ideas (Art. 7 LFRSP).

Los actos que motivan el ejercicio del juicio político, son aquellos que redundan en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y de su buen despacho, y que la Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos enumera de la siguiente manera:

- El ataque a las instituciones democráticas;
- El ataque a la forma de gobierno republicano, representativo, federal;
- Las violaciones graves y sistemáticas a las garantías individuales o sociales;
- El ataque a la libertad de sufragio;
- La usurpación de atribuciones;
- Cualquier infracción a la Constitución o a las leyes federales cuando cause perjuicios graves a la Federación, a uno o varios estados de la misma o de la sociedad, o motive algún trastorno en el funcionamiento normal de las instituciones;
- Las omisiones de carácter grave, en los términos de la fracción anterior; y
- Las violaciones sistemáticas o graves a los planes, programas y presupuestos de la administración pública federal o del Distrito Federal y a las leyes que determinan el manejo de los recursos económicos federales y del Distrito Federal. (Art. 7 LFRSP).

En el artículo 110 de la constitución nos explica los sujetos del juicio político, podrán ser los senadores y diputados al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los consejeros de la Judicatura Federal, los secretarios de Despacho, el Fiscal General de la República, los magistrados de Circuito y jueces de Distrito, el consejero Presidente, los consejeros electorales y el secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, los magistrados del Tribunal Electoral, los integrantes de los órganos constitucionales autónomos, los directores generales y sus equivalentes de los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos públicos.

Los ejecutivos de las entidades federativas, Diputados locales, Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, así como los miembros de los organismos a los que las Constituciones Locales les otorgue autonomía, sólo podrán ser sujetos de juicio político en los términos de este Título por violaciones graves a esta Constitución y a las leyes federales que de ella emanen, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales, pero en este caso la resolución será únicamente declarativa y se comunicará a las Legislaturas Locales para que, en ejercicio de sus atribuciones, procedan como corresponda.

Las sanciones consistirán en la destitución del servidor público y en su inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público.

Para la aplicación de las sanciones a que se refiere este precepto, la Cámara de Diputados procederá a la acusación respectiva ante la Cámara de Senadores, previa declaración de la mayoría absoluta del número de los miembros presentes en sesión de aquella Cámara, después de haber sustanciado el procedimiento respectivo y con audiencia del inculpado.

Conociendo de la acusación la Cámara de Senadores, erigida en Jurado de sentencia, aplicará la sanción correspondiente mediante resolución de las dos terceras partes de los miembros presentes en sesión, una vez practicadas las diligencias correspondientes y con audiencia del acusado.

Las declaraciones y resoluciones de las Cámaras de Diputados y Senadores son inatacables.

Sanciones administrativas

Las Instituciones que aplican las sanciones administrativas, se encuentran señaladas en el artículo109, fracción III de la Constitución, que a la letra dice:

> ***Artículo 109.*** *Los servidores públicos y particulares que incurran en responsabilidad frente al Estado, serán sancionados conforme a lo siguiente:*
> *III (…)*
> *Las faltas administrativas graves serán investigadas y substanciadas por la Auditoría Superior de la Federación y los órganos internos de control, o por sus homólogos en las entidades federativas, según corresponda, y serán resueltas por el Tribunal de Justicia Administrativa que resulte competente. Las demás faltas y sanciones administrativas, serán conocidas y resueltas por los órganos internos de control.*

Así los encargados de regular el combate a la corrupción son la ASF de la que ya hablamos ampliamente en el inciso *B) Rendición de cuenta*, de esta investigación y los Órganos Internos de Control; el objetivo de los OIC's "*es mejorar la efectividad de la*

Administración Pública Federal; reducir los niveles de corrupción en la Administración Pública Federal; consolidar la transparencia y la rendición de cuentas en los asuntos públicos; y vigilar que la actuación de la Administración Pública Federal se apegue a la legalidad."[88]

Conforme a la propuesta del SNA, a los órganos de control interno les corresponde conocer, investigar y sustanciar las faltas administrativas en que incurran los servidores públicos por actos u omisiones que afecten los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia con que deben desempeñarse. Corresponderá a la ley en la materia precisar la distinción entre faltas administrativas no graves y faltas administrativas graves. Las primeras serán responsabilidad de los órganos de control interno y las segundas también serán de su competencia, sin demérito de la competencia que también corresponderá a la Auditoría Superior de la Federación en su investigación y substanciación, así como aquellas que sean dirigidas hacia el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Mientras que los Órganos Internos de Control, funcionan con la siguiente estructura básica:

- Titular del Órgano Interno de Control.
- Titular de Responsabilidades.
- Titular de Auditoría.
- Titular de Quejas.

Las facultades de los Órganos Internos de Control, se encuentran en el Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, en su artículo 79 que establece: Los titulares de los órganos internos de control tendrán, en el ámbito de la dependencia, de sus órganos desconcentrados o entidad de la Administración Pública Federal en la que sean designados o de la Procuraduría, las siguientes facultades:

1. Recibir quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos y darles seguimiento; investigar y fincar las responsabilidades a que haya lugar e imponer las sanciones respectivas, en los términos del ordenamiento legal en materia de responsabilidades, con excepción de las que conozca la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial; determinar la suspensión temporal del presunto responsable de su empleo, cargo o comisión, si así conviene a la conducción o continuación de las investigaciones, de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento aludido y, en su caso, llevar a cabo las acciones que procedan conforme a la ley de la materia, a fin de estar en condiciones de promover el cobro de las sanciones

[88] OAS en http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_mex_OIC.pdf consultada el 7 de junio de 2016, a las 4:40 p.m.

económicas que se lleguen a imponer a los servidores públicos con motivo de la infracción cometida;
2. Recibir las quejas, sugerencias, reconocimientos y solicitudes sobre los trámites y servicios federales que presente la ciudadanía, turnarlos para su atención a la autoridad competente y darles seguimiento hasta su conclusión, así como recomendar cuando así proceda, la implementación de mejoras en las dependencias, las entidades o la Procuraduría…

Los Órganos Internos de Control son instrumentos fundamentales para combatir la corrupción en la función pública, pero como se encuentran ahora y con sus medios actuales no logran combatir adecuadamente la corrupción administrativa.

d) Aplicación a las contrataciones públicas.

En la exposición de motivos de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas destacaron que esta disposición constitucional (134) también sienta las bases de los procedimientos de contratación pública al disponer que las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que se realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

También subraya que los actos de corrupción cometidos por los particulares en los procedimientos de contratación pública atentan contra los principios tutelados por el citado dispositivo constitucional, un acto indebido en el desarrollo de dichos procedimientos tiene como repercusión que no se aseguren al Estado las mejores condiciones de contratación y que el manejo de los recursos públicos inmersos en esos procedimientos se administren en contravención a los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. Por lo anterior el Congreso de la Unión deberá establecer, a través del ordenamiento legal que se propone, las conductas irregulares que en el ámbito de las contrataciones públicas sean consideradas como faltas a la Federación.

Adicional a lo anterior, la misma exposición nos señala otro de los aspectos importantes que deben considerarse para emitir el ordenamiento legal, este se encuentra en los diversos compromisos asumidos por nuestro país en términos de las convenciones internacionales, anticorrupción, en las cuales México ha tenido una participación activa en su suscripción, ratificación, implementación y evaluación.

Los instrumentos que ha suscrito el estado mexicano, mencionados en la exposición de motivos, y cuyo principal objetivo consiste en combatir y disuadir el fenómeno de la corrupción, son:

- La Convención Interamericana contra la Corrupción de la Organización de los Estados Americanos, firmada por México el 26 de marzo de1996 y ratificada por el Senado el 2 de junio de 1997, considerada como el primer instrumentos jurídico internacional en materia de prevención y combate a la corrupción, cuyo objeto consiste en comprometer a los Estados Parte a emprender acciones jurídicas y a implementar políticas públicas tendientes a crear y fortalecer mecanismos necesarios para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción.
- La Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internaciones de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos firmada por México el 21 de noviembre de1997 y ratificada por el Senado el 27 de mayo de 1999 (Convención Anticohecho de la OCDE), instrumento jurídico que prevé obligaciones para los gobiernos, las empresas y la sociedad civil de los Estados Parte, consistentes en la implementación de mecanismos para prevenir, detectar y sancionar a los servidores públicos, personas, empresas y profesionistas, que en materia de transacciones comerciales internacionales, ofrezcan, prometan o den un soborno o cualquier tipo de beneficio a un servidor público extranjero para que actúe o se abstenga de actuar, en relación con el ejercicio de sus atribuciones para mantener u obtener una ventaja, contrato o licitación pública.
- La Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción, firmada por México el 9 de diciembre de 2003 y ratificada por el Senado el 29 de abril de 2004 (Convención Anticorrupción de la ONU), considerada a la fecha como el instrumento más completo e integral en la materia, ya que promueve y aborda desde una visión integral los aspectos de la corrupción y considera el papel que deben desempeñar los diferentes actores que participan en su erradicación.

Los tratados internacionales constituyen, de conformidad con el artículo 133 constitucional, Ley Suprema de toda la Unión y contienen en su mayoría un apartado relativo a la prevención de la corrupción en las contrataciones públicas.

La Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, cita además en su exposición de motivos, el estudio realizado por Transparencia Internacional, titulado “Contrataciones Públicas en América Latina: nueve informes de países que miden el riesgo de corrupción”, el cual menciona que, “las irregularidades en la contratación pública conducen a la distorsión de una justa competencia empresarial, al malgasto de

recursos escasos, al abandono de las necesidades básicas, a la perpetuación de la pobreza y desigualdad” .[89]

En el mismo documento se dice que, el Foro Económico Mundial estimó el costo de la corrupción en México entre el 7% y 9% del PIB, y las empresas destinan entre un 5% y 10% de sus ingresos al soborno.

Lo que buscaba era inhibir las prácticas ilegales actuales en tanto los ordenamientos legales vigentes en materia de contrataciones públicas estaban orientados fundamentalmente hacia la corrección de las conductas indebidas cometidas por los servidores públicos y, en caso de los particulares, las sanciones previstas estaban dirigidas principalmente a incumplimientos contractuales con el Estado, por lo que dichos ordenamientos no habían resultado del todo efectivos cuando se trata de inhibir la práctica de conductas que se realizaban por los particulares para obtener una ventaja o beneficio indebidos en los actos o procedimientos relacionados con las contrataciones públicas.

Además de exhibir la falta de alcance y efectividad de las sanciones pecuniarias con la siguiente reflexión:

> *Por ejemplo, tanto la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público como la Ley de Obras Públicas y servicios Relacionados con las Mismas, contemplan la imposición de sanciones a particulares por incurrir, entre otros, en los siguientes supuestos:*
>
> - *No formalizar el contrato.*
> - *Acumular dos rescisiones contractuales en un lapso de dos años*
> - *Incumplimiento contractual que cause daños o perjuicios graves.*
> - *Promover inconformidades para retrasar o entorpecer una contratación.*
>
> *Asimismo, no se debe perder de vista que bajo el esquema previsto en estas leyes, las sanciones que se imponen están limitadas en cuanto a su alcance y efectividad, toda vez que el monto de las multas que se pueden llegar a imponer no rebasa los dos millones de pesos, cantidad que en muchos casos no corresponde a los beneficios económicos que pudieron haberse obtenido por la adjudicación de un contrato.*[90]

Dentro de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y el Reglamento de la misma, en su Título Quinto. De las Infracciones y Sanciones, establece los casos para imponer las penas a los licitantes o proveedores, que quebranten la ley, indicando en la exposición de motivos que su propósito es propiciar que los proveedores y contratistas cumplan cabalmente con sus obligaciones contractuales, se prevé la inhabilitación a los que se hubiera rescindido un contrato en

[89] Cámara de Diputados en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/proceso/lxi/252_DOF_11jun12.pdf consultada el 28 de mayo de 2015 a la 2:19 p.m.
[90] *Ídem.*

dos o más dependencias o entidades, en un plazo de tres años y a efecto de no imponer multas excesivas a los proveedores de bienes y servicios, que dejen de formalizar contratos de muy bajo monto, se prevé una multa proporcional a la gravedad de su conducta, con lo cual se asegura el respeto irrestricto a la garantía establecida en el artículo 22 constitucional.

Estas sanciones se refieren en forma genérica a las infracciones, buscando inhibir la corrupción, por lo tanto, son aplicables para el tema en estudio.

También están previsto en el artículo 75 en el desacato de las convocantes a las resoluciones y acuerdos que emita la Secretaría de la Función Pública en los procedimientos de inconformidad será sancionado de acuerdo a lo previsto en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

En el reglamento de la LAASSP, en su artículo 115 cuando la Secretaría de la Función Pública tenga conocimiento de actos o hechos posiblemente constitutivos de infracción y se adviertan posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos, se dará vista a la autoridad de la Secretaría de la Función Pública competente en esa materia para que resuelva lo conducente.

Podemos concluir que aún con todas las acciones realizadas, nos falta un largo camino que recorrer. Contamos con recomendaciones de organismos internacionales, programas de seguimiento de los mismos, así como el monitoreo, instituciones y leyes mexicanas especializadas, sin embargo, seguimos en retroceso al combatir a la corrupción, tanto en la Administración Pública, vista de manera general, como en nuestra materia de contrataciones públicas.

e) Sistema Nacional Anticorrupción.

El SNA implica la modificación constitucional en sendos apartados sobre el Sistema Nacional Anticorrupción, incluidas las atribuciones legislativas del Congreso; el fortalecimiento de la Auditoría Superior de la Federación; los órganos internos de control de los Poderes y de los organismos constitucionalmente autónomos; el surgimiento del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a partir del actual Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; el régimen de responsabilidades, que no sólo comprende a servidores públicos sino también a particulares; la ratificación del titular de la Secretaría de la Función Pública; la ampliación del plazo para la prescripción de faltas administrativas graves; y el régimen transitorio de la reforma.

La implementación del Sistema Nacional Anticorrupción involucró distintas reformas a la Constitución en sus artículos 22, 28, 41, 73, 74, 76, 79, 104, 108, 109, 113, 114, 116

y 122, derivado de las reformas del 27 de mayo de 2015, cuyo sustento jurídico se encuentra en el artículo 113 constitucional que estatuye:

> ***Artículo 113.*** *El Sistema Nacional Anticorrupción es la instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos.*

Se menciona por los organismos internacionales ya citados anteriormente que México es uno de los países más corruptos del mundo, por lo que el Sistema Nacional Anticorrupción, es resultado por una parte de las recomendaciones de la OCDE, desde hace más de 20 años, y demás convenciones que México ha firmado y ratificado, y por otra, por las presiones sociales y políticas derivadas del profundo descredito del aparato de gobierno frente a la ciudadanía.

Los grandes objetivos del Sistema Nacional Anticorrupción, son:

- *Coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno.*
- *Prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas.*
- *Combatir los hechos de corrupción*
- *Fiscalización*
- *Control de recursos públicos.* [91]

Asimismo cuenta con un Comité Coordinador integrado por la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación, la nueva Fiscalía de Combate a la Corrupción, el INAI, el representante del Consejo de la Judicatura y un representante del Comité de Participación Ciudadana, establecido en el artículo 113 de la Constitución. Las atribuciones del Comité Coordinador, establecidas en el artículo 113, en su fracción III, son:

> *III. Corresponderá al Comité Coordinador del Sistema, en los términos que determine la Ley:*
> *a) El establecimiento de mecanismos de coordinación con los sistemas locales;*
> *b) El diseño y promoción de políticas integrales en materia de fiscalización y control de recursos públicos, de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción, en especial sobre las causas que los generan;*
> *c) La determinación de los mecanismos de suministro, intercambio, sistematización y actualización de la información que sobre estas materias generen las instituciones competentes de los órdenes de gobierno;*
> *d) El establecimiento de bases y principios para la efectiva coordinación de las autoridades de los órdenes de gobierno en materia de fiscalización y control de los recursos públicos;*

[91] Romero Gudiño, Alejandro, *Visión integral del Sistema Nacional de Combate a la Corrupción*, INACIPE, México, 2015, p. 91.

e) La elaboración de un informe anual que contenga los avances y resultados del ejercicio de sus funciones y de la aplicación de políticas y programas en la materia. Derivado de este informe, podrá emitir recomendaciones no vinculantes a las autoridades, con el objeto de que adopten medidas dirigidas al fortalecimiento institucional para la prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como al mejoramiento de su desempeño y del control interno. Las autoridades destinatarias de las recomendaciones informarán al Comité sobre la atención que brinden a las mismas.

Las entidades federativas establecerán sistemas locales anticorrupción con el objeto de coordinar a las autoridades locales competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción.

También, el Sistema Nacional Anticorrupción cuenta con un Comité de Participación Ciudadana integrado por cinco ciudadanos que hayan contribuido de manera importante a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción y serán designados en los términos que establezca la ley.

El SNA se integrará por las instancias administrativas y jurisdiccionales encargadas de la identificación, prevención, supervisión, investigación y sanción de hechos, no sólo del servidor público o particular que realice hechos conocidos o identificados como de corrupción en contra de la Administración Pública, sino también en aquellos casos en que su función o cargo o comisión las realice en contra de los principios mencionados con anterioridad.

i) Leyes que integran al Sistema Nacional Anticorrupción.

Las principales leyes que se reformaron, para la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, son:

- Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Designa a la Secretaría de la Función Pública como autoridad encargada del control interno de la Administración Pública Federal y le ordena mantener estrecha colaboración con el Sistema Nacional Anticorrupción y el Sistema Nacional de Fiscalización.
- La Ley Orgánica de la PGR. Establece las competencias, facultades y límites de la fiscalía especializada en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción.
- Código Penal Federal. Tipifica y endurece penas (hasta con 18 años de cárcel) en delitos como: gestión de recursos a cambio de una comisión, dádiva o contraprestación siendo funcionario o legislador (“moches”); ejercicio ilícito del servicio público; coalición de servidores públicos; uso ilícito de facultades y

atribuciones; enriquecimiento ilícito; tráfico de influencias; desvío de recursos públicos e; intimidación (...)[92]

Expertos en la materia nos mencionan otras novedades significativas de las mismas disposiciones:

- Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. La Secretaría de la Función Pública se integra a los Sistemas Nacionales de Anticorrupción y Fiscalización con facultades para coordinarse en materia de control interno y entre otras, se propone una estrategia de homologación en materia de contrataciones de la normatividad de los Poderes de la Unión, órganos constitucionales autónomos y otras entidades públicas, salvo las empresas productivas del Estado.[93]
- La Ley Orgánica de la PGR. Se adiciona la Fiscalía Anticorrupción en la estructura orgánica de la PGR, como medida transitoria para que funcione el Sistema Nacional Anticorrupción en lo que se consolida la Fiscalía General de la República.[94]
- Código Penal Federal. Establece como sanciones la destitución y la inhabilitación para desempeñar un cargo público, y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, concesiones, por un plazo de uno a veinte años, a los responsables de actos de corrupción y entre otras, señala al delito de coalición de servidores públicos como el hecho de que varios servidores públicos se coaliguen para tomar medidas contrarias a una ley, reglamento o disposición de carácter general, cuando se contratan obras públicas, adquisiciones, arrendamientos, enajenaciones de bienes o servicios, con recursos públicos, contrate deuda o realice colocaciones de fondos y valores con recursos públicos.[95]

Adicionalmente, para alcanzar los objetivos del SNA, se crearon las siguientes leyes cuyas características principales según, Ernesto Núñez, articulista de la revista R (no. 132) son:

- Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. Crea el mecanismo de coordinación entre los diversos órganos de combate a la corrupción de la Federación, las entidades federativas y los municipios, con cuatro instancias básicas.
- Ley General de Responsabilidades Administrativas. Establece las obligaciones de los servidores públicos y las sanciones por actos u omisiones a funcionarios y particulares que incurran en faltas administrativas graves. Incluye la obligación de los funcionarios públicos de publicar sus declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses.

[92] Núñez, Ernesto. “La reforma anticorrupción aún no ha concluido”. *Revista R.* (Núm. 132), 19 de junio de 2016, pp. 14-15.
[93] Matute González, Carlos Fernando (Noviembre de 2016), “2° Mesa de análisis del SNA”.
[94] Campos López, Adriana (Noviembre de 2016), “2° Mesa de análisis del SNA”.
[95] Peralta Saucedo, Ricardo (Noviembre de 2016), “2° Mesa de análisis del SNA”.

- Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Faculta al Tribunal para conocer de las responsabilidades administrativas de los servidores públicos y particulares vinculados con faltas graves, promovidas por la Secretaría de la Función Pública y los órganos internos de control de los entes públicos federales, o por la Auditoría Superior de la Federación. Se crea una Sección Tercera de la Sala Superior del Tribunal para resolver recursos de apelación en contra de sus resoluciones.

Por su parte, Víctor Manuel Andrade, Director Jurídico de la ASF, expresó en la primera mesa de análisis del SNA en el senado, que respecto de la:

- Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. Se quitan los principios de anualidad y posterioridad, se otorga un mayor plazo para la fiscalización de la cuenta pública y una mayor oportunidad para presentar los resultados de la cuenta pública, entre otros.

El senado, a través de sus boletines de prensa informó que el proyecto establece que la ASF, fiscalizará las operaciones que involucren recursos públicos federales o participaciones federales, a través de contrataciones, subsidios, transferencias, donativos, fideicomisos, fondos, mandatos, asociaciones público-privadas o cualquier otra figura jurídica, y el otorgamiento de garantías sobre empréstitos de entidades y municipios. Entre las nuevas atribuciones de la ASF está la de fiscalizar, en coordinación con las entidades locales de fiscalización o de manera directa, las participaciones federales que reciben las entidades federativas.

ii) Órganos competentes.

El SNA estará conformado por cuatro pilares: la Secretaría de la Función Pública (SFP); la Auditoría Superior de la Federación (ASF); la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC); y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA). Como punto de unión de estos cuatro pilares destaca la creación de un Comité Coordinador compuesto por los cuatro titulares de las instituciones de combate a la corrupción, así como del titular del INAI, un representante del Consejo de la Judicatura y uno del Comité de Participación Ciudadana. Sus facultades consistirán en el diseño y promoción de políticas públicas para fiscalizar y controlar recursos públicos y prevenir, controlar y disuadir faltas administrativas y actos de corrupción.

El Sistema Nacional Anticorrupción, está conformado de acuerdo a Martha Martínez:

- *Comité coordinador. Cuya integración y atribuciones ya se enumeraron anteriormente en el punto D) Sistema Nacional Anticorrupción.*

- *Comité de participación ciudadana. Instancia para coordinar y encauzar de manera permanente los esfuerzos de la sociedad civil en el combate a la corrupción y la rendición de cuentas.*
- *Auditoría Superior de la Federación. Será competente para fiscalizar la Cuenta Pública y promover acciones de responsabilidad cuando, derivado de las auditorías, detecte daños o perjuicios a las cuentas públicas federal, local o municipal.*
- *Secretaría del ejecutivo responsable del control interno. Entre sus responsabilidades se encuentran vigilar el desempeño de los servidores públicos, en coordinación con los órganos internos de control iniciar y resolver procedimientos sancionatorios de faltas no graves, presentar el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción ante faltas graves, y llevar el Registro Patrimonial de Servidores Públicos y de Intereses a través del sistema que se establezca para procesar dicha información*
- *Órganos Internos de Control. Serán competentes para iniciar y resolver procedimientos sancionatorios previstos en la ley ante faltas no graves. Ante faltas graves, podrán presentar el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.*
- *Fiscalía especializada en combate a la corrupción. Adscrita a la PGR, tendrá como asignación la investigación de los presuntos hechos de corrupción reportados por la ASF y los órganos internos de control. El Senado mantiene en vilo el nombramiento de su titular desde diciembre de 2014.*
- *Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Será el órgano competente para imponer sanciones a los servidores públicos de los tres Poderes, organismos autónomos, entidades federativas y municipios por las responsabilidades que la ley determine como graves. Fincará el pago de indemnizaciones y sanciones pecuniarias.*[96]

Manuel L. Hallivis Pelayo, señala que el Sistema Nacional Anticorrupción tiene cuatro ejes principales:

- *El fortalecimiento de la Auditoría Superior de la Federación.*
- *El reforzamiento de la Secretaría de la Función Pública.*
- *La transformación del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.*
- *Creación de la Fiscalía Especializada.*[97]

¿Representa el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) el entramado institucional para combatir a la corrupción administrativa de forma efectiva y sistemática? Esta respuesta es muy compleja y requiere de diversas circunstancias para que pueda responder a la magnitud del problema: que el sistema institucional de dependencias funcione de manera coordinada; que la ley reglamentaria defina claramente el tipo de delitos, la clasificación de graves y no graves; en la etapa de sanciones se apliquen de manera escrupulosa y sin distingos; y que el personal

[96] Martínez, Martha. "Anticorrupción: Sistema que no nace". *Revista R.* (Núm. 122), 10 de abril 2016, p. 12.
[97] Hallivis Pelayo, Manuel, (Octubre de 2016), "1° Mesa de análisis del SNA".

encargado del control interno, externo y fiscalizador cuente con el perfil profesional necesario para estas funciones y muestre una conducta integra en el momento de su actuación pública.

iii) Aplicación en las contrataciones públicas.

Con la creación de este Sistema Nacional Anticorrupción, se presentarán diversos retos, como lo señala el ex titular Virgilio Andrade, para la Secretaría de la Función Pública:

- *Consolidar las oficinas de control interno de las dependencias y entidades a cargo de la Secretaría, para contribuir a cumplir los diversos objetivos de la Administración Pública Federal;*
- *Reforzar y consolidar el área de responsabilidades , en armonía con las nuevas obligaciones derivadas del Sistema Nacional Anticorrupción;*
- *Reorganizar el área de modernización administrativa para afirmar el cumplimiento del Programa para un Gobierno Cercano y Moderno y garantizar la labor del Ejecutivo Federal en armonía con las obligaciones derivadas del Sistema Nacional de Transparencia;*
- *Consolidar el servicio profesional de carrera, el servicio de carrera propio de las oficinas de control interno y el desarrollo ético y profesional de todo el personal de la Administración Pública Federal en su conjunto;*
- *Contribuir con información e investigación sobre los posibles sucesos que eventualmente ameriten ser investigados y sancionados.*
- *Perfeccionar las capacidades de investigación sobre los posibles hechos de corrupción detectados por cualquiera de las vías previstas en el Sistema Nacional Anticorrupción.*
- *Contribuir con las medidas disciplinarias de los funcionarios públicos, pero en el entendido de que su principal labor no debe ser punitiva sino organizacional.*
- *Renovación y fortalecimiento del área central de responsabilidades.*
- *Representar al Ejecutivo Federal en los juicios que se presenten ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y coadyuvar, en su caso, con la Fiscalía Especializa en materia de Combate a la Corrupción cuando se presuma la comisión de un delito en este ámbito.*
- *Investigar desviaciones dolosas y hechos de corrupción relacionados con redes de intereses que actúan en contra de los intereses públicos, formadas entre servidores públicos o entre éstos y particulares; cuya actuación genere un daño patrimonial al Estado.*
- *Realizar las investigaciones iniciadas a partir de las denuncias y los indicios que acrediten la existencia de esas redes de corrupción.*
- *Desarrollo humano, ético y profesional de la Administración Pública Federal:*
    1. *Sistemas profesionales acordes a las nuevas funciones que asumirá en el Sistema Nacional Anticorrupción.*

2. *Impulsar un nuevo Código de Ética y Reglas de Integridad Comités de Ética y Prevención de Conflictos de Interés en toda la Administración Pública.* [98]

El nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, tanto en su diseño institucional como en su posible operación, tendrá implicaciones en las contrataciones públicas en donde desde los servidores públicos hasta los particulares podrían ser sancionados en el caso de actos de corrupción.

Coincidimos con la opinión de Eduardo Bohórquez, Director Ejecutivo de Transparencia Mexicana quien teme que los políticos den por terminada la tarea luego de haber aprobado siete leyes del Sistema Nacional Anticorrupción, y queden congeladas las múltiples leyes que aún deben reformarse para que el Sistema opere plenamente.

El ciclo reformador anticorrupción aún no termina, llevaría más de una década hacer que el sistema funcione verdaderamente. Algunos faltantes serían: el Registro Público de la Propiedad, la Ley de Obra Pública, la Ley de Adquisiciones, los ajustes en competencia económica para evitar que prácticas de colusión generen espacios de corrupción, la Ley de Responsabilidad Fiscal y los asuntos vinculados al tema tributario.

El SNA, aún cuenta con deficiencias pues faltarían crear o modificar más de 20 leyes, para que nuestro sistema jurídico tenga carácter integral y sistemático y el gran riesgo es que los poderes ejecutivo y legislativo den por terminado su trabajo en la materia.

El Estado necesita de nuevas instituciones requiere de presupuesto y para capacitar a los servidores públicos para un funcionamiento eficaz y eficiente del nuevo sistema, volviendo de forma obligatoria el Código de Ética que tiene tan rezagado se encuentra en cumplimiento.

El pueblo con el paso de los años, se ha percatado de la ineficiencia de los servidores públicos, no se explica, o lo hace muy bien. El origen de fortunas impresionantes de los servidores públicos, a la que sería imposible acceder sólo con sus ingresos públicos (nadie puede ahorrar para comprar una casa de 5 millones de dólares con un sueldo de 100 mil pesos mensuales), preguntándose los gobernados donde queda el dinero que aportan, a los caudales públicos, en respuesta, han exigido la transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción, esto último tomó mayor fuerza en 2016, con la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción, poniendo en puerta un futuro prometedor para la solución de los conflictos sociales que vive el país.

Las consideraciones fundamentales de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción, son importantes para la autoridad y para el pueblo, siendo pilares para una mejor Administración Pública. En la actualidad, se han impulsado

[98]Andrade, Virgilio *apud* Romero Gudiño, Alejandro, o*p. cit*., pp. 95-96.

diversas disposiciones para la creación de los respectivos sistemas, para dar respuesta a la inconformidad de la población ante la osadía de los funcionarios públicos, sin mencionar la presión internacional a la que es sometido el gobierno mexicano para implantar medidas, que no solamente frenen la corrupción, sino que también la prevengan.

En las contrataciones públicas, se tienen las normas necesarias para cumplir con la transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción, con instrumentos como el sistema C*ompraNet*, que ha tenido premios y reconocimientos a nivel internacional, sin tener el éxito necesario en su aplicación, aun teniendo los mejores mecanismos y marcos normativos, pues se necesita mayor compromiso institucional para que la operación le corresponda a la vanguardia de nuestra legislación.

En el siguiente capítulo se describe la legislación de las contrataciones públicas, así como su sistematización que busca lograr un mayor conocimiento para las autoridades administrativas y judiciales y para las personas que participen en dichos procedimientos.

Adicionalmente se analizará la profesionalización en contrataciones públicas como mecanismo que ayude a conectar la excelencia del marco normativo con la operación en tanto son los servidores públicos quienes pervierten los principios constitucionales de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, consagrados en la Constitución, así como el ejercicio de la instancia de inconformidad en las licitaciones públicas pues los licitantes o preveedores y sus abogados la ven como una pérdida de tiempo, en tanto los órganos encargados de su atención, generalmente ratifican las ilegalidades cometidas pues forman parte o se coaligan con la mafia en el poder

3. CUADROS RESUMEN

A) Transparencia				
Principio doctrinal	**Marco jurídico**		**Organismo garante.**	**Aplicación a las contrataciones públicas.**
	Fundamento constitucional	**Leyes reglamentarias.**		
La transparencia se refiere a la existencia o no de información- y de sistemas que la producen- sobre lo que son, hacen, utilizan y producen las dependencias de gobierno o, incluso, sobre actos o productos de actores privados (es el caso de las informaciones sobre el uso privado de recursos públicos, sobre la generación de riesgos potenciales a la salud y el medio ambiente o sobre las características de bienes y servicios y su efecto en quienes los consumen, las etiquetas de prevención). Jonathan Fox.	**Artículo 6° (…)** El derecho a la información será garantizado por el Estado. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación de éstos. **Artículo 134 (primer párrafo).** Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, **transparencia** y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.	• Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública. • Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. • Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.	Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI)	**LAASSP:** Artículos 2 fracción II, 21, 40 segundo párrafo, 41 fracción X, 56 fracciones II, III inciso f) y 56 Bis. **Reglamento de la LAASSP:** Artículos 19, 65 fracción VI, 67 y 72 fracción VIII. Todos ellos relativos de manera específica a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, imponiendo restricciones particularmente para aquellas actividades públicas que contienen información que se encuentra reservada o protege datos personales de ciertos actores.

3. CUADROS RESUMEN

B) Sistema Nacional de Transparencia		
Definición legal.	**Marco normativo.**	**Instancias que lo integran.**
Artículo 28 de la LGTAIP. El Sistema Nacional se integra por el conjunto orgánico y articulado de sus miembros, procedimientos, instrumentos y políticas, con el objeto de fortalecer la rendición de cuentas del Estado mexicano. Tiene como finalidad coordinar y evaluar las acciones relativas a la política pública transversal de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, así como establecer e implementar los criterios y lineamientos, de conformidad con lo señalado en la presente Ley y demás normatividad aplicable.	• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. • Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. • Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. • Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. • Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. • Acuerdo mediante el cual el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, establece las bases de interpretación y aplicación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. • Reglamento del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. • Lineamientos para la organización, coordinación y funcionamiento de las instancias de los integrantes del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. • Lineamientos para determinar los catálogos y publicación de información de interés público; y para la emisión y evaluación de políticas de transparencia proactiva. • Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas. • Lineamientos para la organización y conservación de los archivos.	• El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. • Los Organismos garantes de las Entidades Federativas. • La Auditoría Superior de la Federación. • El Archivo General de la Nación. • El Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

3. CUADROS RESUMEN

	• Lineamientos para la elaboración, ejecución y evaluación del Programa Nacional de Transparencia y Acceso a la Información. • Lineamientos para la implementación y operación de la Plataforma Nacional de Transparencia. • Lineamientos que deberán observar los sujetos obligados para la atención de requerimientos, observaciones, recomendaciones y criterios que emita el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. • Lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el título quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia. • Modificaciones a los artículos 16, 23, 24, 59, 62 y 72 de los Lineamientos para la organización, coordinación y funcionamiento de las instancias de los integrantes del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. • Criterios para que los sujetos obligados garanticen condiciones de accesibilidad que permitan el ejercicio de los derechos humanos de acceso a la información y protección de datos personales a grupos vulnerables.	

3. CUADROS RESUMEN

C) Rendición de cuentas.

Principio doctrinal	Marco jurídico		Organismo coadyuvante de la Cámara de Diputados.	Aplicación a las contrataciones públicas.
	Fundamento constitucional	**Leyes reglamentarias.**		
La rendición de cuentas es una traducción exacta de la palabra accountability, que en su significado original se conceptúa como "ser sujeto a la obligación de reportar, explicar, justificar algo; ser responsable ante alguien de algo". De esta manera la rendición de cuentas se define como la obligación permanente de los mandatarios para informar a sus mandantes, de los actos que llevan a cabo como resultado de una delegación de autoridad que se realiza mediante un contrato formal o informal y que implica sanciones en caso de	**Artículo 73**. El Congreso tiene facultad: … XXIV. Para expedir las leyes que regulen la organización y facultades de la Auditoría Superior de la Federación y las demás que normen la gestión, control y evaluación de los Poderes de la 113 de esta Constitución; y de los entes públicos federales; así como para expedir la ley general que establezca XXVIII. Para expedir leyes en materia de contabilidad gubernamental que regirán la contabilidad pública y la presentación homogénea de información financiera, de ingresos y egresos, así como patrimonial, para la Federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, a fin de garantizar su armonización a nivel nacional; **Artículo 74**. Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados: I… II. Coordinar y evaluar, sin perjuicio de su autonomía técnica y de gestión, el desempeño de las funciones de la Auditoría Superior de la Federación, en los términos que disponga la ley; IV. Aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, previo examen, discusión y, en su caso, modificación del Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal, una vez aprobadas las contribuciones que, a su juicio, deben decretarse para cubrirlo. Asimismo, podrá autorizar en dicho Presupuesto las erogaciones	• Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. • Ley de Coordinación Fiscal. • Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. • Ley de General Contabilidad Gubernamental.	Auditoría Superior de la Federación	**LAASSP:** **Artículo 1, fracción VI…** No quedan comprendidos para la aplicación de la presente Ley los fondos previstos en el Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal **Artículo 24.** Ejercicio del gasto público sujeto al PEF y LFPRH. **Artículo 25.** Contratos plurianuales observando el artículo 50 LFPRH. **Artículo 40 (cuarto párrafo).** Requisitos para contratar, optando por la excepción a la licitación. **Artículo 41.** Supuestos de excepción al procedimiento de licitación pública. **Artículo 42.** Se realizará adjudicación directa o invitación cuando menos a tres personas, sin rebasar los montos establecidos en el PEF. **Artículo 57.** Señala las facultades de verificación visitas e inspección de la SFP y la Secretaría de Economía.

incumplimiento. Ernesto Villanueva.	plurianuales para aquellos proyectos de inversión en infraestructura que se determinen conforme a lo dispuesto en la ley reglamentaria; las erogaciones correspondientes deberán incluirse en los subsecuentes Presupuestos de Egresos. VI. Revisar la Cuenta Pública del año anterior, con el objeto de evaluar los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados por el Presupuesto y verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas. **Artículo 79.** La Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, tendrá autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que disponga la ley. La función de fiscalización será ejercida conforme a los principios de legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad. **Artículo 134 (segundo y quinto párrafos).** Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las instancias técnicas que establezcan, respectivamente, la Federación y las entidades federativas, con el objeto de propiciar que los recursos económicos se asignen en los respectivos presupuestos en los términos del párrafo precedente. Lo anterior, sin menoscabo de lo dispuesto en los artículos 26, Apartado C, 74, fracción VI y 79 de esta Constitución. … El manejo de recursos económicos federales por parte de las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se sujetará a las bases de este artículo y a las leyes reglamentarias. La evaluación sobre el ejercicio de dichos recursos se realizará por las instancias técnicas de las entidades federativas a que se refiere el párrafo segundo de este artículo.			**Artículo 58.** Verificación de la calidad de los bienes por la SFP. **Reglamento de la LAASSP:** **Artículo 23, fracciones I y II:** Indica el contenido del informe trimestral que se presenta al comité de adquisiciones, arrendamientos y servicios.

3. CUADROS RESUMEN

D) Sistema Nacional de Fiscalización		
Definición legal.	**Integrantes.**	**Órgano que lo integra.**
Artículo 3, fracción XII de la LGSNA.- El Sistema Nacional de Fiscalización es el conjunto de mecanismos interinstitucionales de coordinación entre los órganos responsables de las tareas de auditoría gubernamental en los distintos órdenes de gobierno, con el objetivo de maximizar la cobertura y el impacto de la fiscalización en todo el país, con base en una visión estratégica, la aplicación de estándares profesionales similares, la creación de capacidades y el intercambio efectivo de información, sin incurrir en duplicidades u omisiones.	• La Auditoría Superior de la Federación; • La Secretaría de la Función Pública; • Las entidades de fiscalización superiores locales, y • Las secretarías o instancias homólogas encargadas del control interno en las entidades federativas.	Contará con un Comité Coordinador el cual tendrá las funciones de emitir un informe anual que contenga los avances y resultados del ejercicio de sus funciones y de la aplicación de políticas y programas en la materia; emitirá recomendaciones públicas no vinculantes ante las autoridades respectivas y les dará seguimiento y; establecerá una Plataforma Digital Nacional que integre y conecte los diversos sistemas electrónicos

3. CUADROS RESUMEN

E) Combate a la Corrupción				
Principio doctrinal	**Marco jurídico**		**Órganos de aplicación.**	**Aplicación a las contrataciones públicas.**
	Fundamento constitucional	**Leyes reglamentarias.**		
Las definiciones que existen van desde términos legales estrictos, que describen este fenómeno como un mero acto de soborno que involucra al menos a un servidor público y una transferencia de recursos, hasta las explicaciones económicas que la perciben como impuesto regresivo y una forma de renta adicional. José Juan Sánchez González.	Título Cuarto, "De las Responsabilidades de los Servidores Públicos, Particulares Vinculados con Faltas Administrativas Graves o Hechos de Corrupción, y Patrimonial del Estado", las medidas que se están tomando para el combate a la corrupción y van de los artículos 108 al 114.	• Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. • Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. (Ley abrogada a partir del 19 de julio de 2017 por Decreto del DOF 18 de julio de 2016). • Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas. (Ley abrogada a partir del 19 de julio de 2017 por Decreto del DOF 18 de julio de 2016). • Ley General de Responsabilidades Administrativas (texto vigente a partir del 19 de julio de 2017).	• Cámara de Diputados y Senadores. • Auditoria Superior de la Federación. • Órganos Internos de Control. • Tribunal de Justicia Administrativa.	**LAASSP.** **Título Quinto.** De las Infracciones y Sanciones, establece los casos para imponer sanciones a los licitantes o proveedores, servidores públicos y sus excepciones, que quebranten la ley y va de los artículos 59 al 64. **Artículo 75**. El desacato de las convocantes a las resoluciones y acuerdos que emita la Secretaría de la Función Pública en los procedimientos de inconformidad será sancionado de acuerdo a lo previsto en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. **Reglamento de la LAASSP.** **Artículo 115 (último párrafo).** Cuando de las actuaciones previstas en este artículo se adviertan posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos, se dará vista a la autoridad de la Secretaría de la Función Pública competente en esa materia para que resuelva lo conducente.

3. CUADROS RESUMEN

F) Sistema Nacional Anticorrupción			
Fundamento constitucional.	**Leyes que integran al Sistema Nacional Anticorrupción.**	**Órganos competentes.**	**Aplicación a las contrataciones públicas. SFP**
Artículo 113. El Sistema Nacional Anticorrupción es la instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos **Artículo 73.** El Congreso tiene facultad: … XXIV… así como para expedir la ley general que establezca las bases de coordinación del Sistema Nacional Anticorrupción a que se refiere el artículo 113 de esta Constitución;	• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. • Ley Orgánica de la PGR. • Código Penal Federal. • Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. • Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. • Ley General de Responsabilidades Administrativas. • Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.	• Comité coordinador. • Comité de participación ciudadana. • Auditoría Superior de la Federación. • Secretaría del ejecutivo responsable del control interno. • Órganos Internos de Control. • Fiscalía especializada en combate a la corrupción. • Tribunal Federal de Justicia Administrativa.	• Consolidar las oficinas de control interno de las dependencias y entidades a cargo de la Secretaría. • Reforzar y consolidar el área de responsabilidades, en armonía con las nuevas obligaciones derivadas del Sistema Nacional Anticorrupción. • Consolidar el servicio profesional de carrera por parte de la SFP.[99]

[99] Para un listado de los 12 puntos, consultar el inciso e) Sistema Nacional Anticorrupción, iii) Aplicación en las contrataciones públicas.

CAPÍTULO III

LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS, SU MARCO NORMATIVO Y SU PROFESIONALIZACIÓN

S U M A R I O:

1. Nota introductoria. 2. Procedimientos de contratación pública. A) La contratación pública como contrato administrativo. B) Procedimientos a seleccionar. a) Licitación pública. b) Licitación privada o invitación a cuando menos tres personas. c) Adjudicación directa. 3. Marco normativo de las licitaciones públicas. A) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. B) Tratados internacionales de libre comercio. C) Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. D) Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. E) Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. F) Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. a) Marco normativo del Manual Administrativo. G) Marco normativo y criterios jurisprudenciales del régimen de adquisiciones públicas correlacionado. 4. Causales de inconformidad. A) La convocatoria a la licitación y las juntas de aclaraciones. B) La invitación a cuando menos tres personas. C) El acto de presentación y apertura de proposiciones. D) El fallo. E) La cancelación de la licitación. F) La falta de formalización del contrato. 5. Profesionalización en contrataciones públicas. A) Principios doctrinales. B) Marco normativo. a) Fundamento constitucional. b) Leyes reglamentarias. C) Órganos de ejecución. D) Aplicación a las contrataciones públicas.

1. Nota introductoria.

El Estado para realizar eficientemente su actividad obtiene de particulares prestaciones voluntarias de bienes o de servicios de carácter personal, por lo que adquiere inmuebles; arrienda bienes; encarga construcciones de obras públicas; obtiene prestamos; enajena y arrienda una serie de bienes propios, entre otras, por lo que para su regulación se necesita de los contratos administrativos, como los define Gabino Fraga: *"Son aquellos que celebra la administración a efecto de cumplir con un fin público, que por cuyo medio se pretende satisfacer una necesidad pública".*[100]

Los procedimientos a seleccionar para contratar son la licitación pública, invitación a cuando menos tres personas, o adjudicación directa, contando con características peculiares para su aplicación.

[100] Fraga, Gabino, *op. cit.*, p. 121.

En el marco normativo de las contrataciones encontramos en el vértice al artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, seguida de tratados internacionales, leyes, códigos, reglamentos, decretos, acuerdos, reglas, lineamientos, circulares, oficios, disposiciones generales, guías e instructivos entre otros.

Dentro de la legislación específica para regular las contrataciones públicas se encuentra la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su reglamento, sus lineamientos específicos, el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

El marco normativo de las adquisiciones resulta amplio, con más de 90 disposiciones legales y más de 90 criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mismo que se correlaciona con la LAASSP y su reglamento para lograr una interpretación sistemática e integral.

Se exponen la causales de inconformidad y al respecto Daniel Ramos Torres, nos dice que la inconformidad no es un recurso, fundando su afirmación con la cita de Ismael Amaya, *"en tanto se tramita como un procedimiento de impugnación de actos administrativos irregulares derivados de licitaciones públicas o de invitaciones a cuando menos tres personas, llevados a cabo por servidores públicos de las Dependencias y Entidades, un sector de la doctrina considerada que la inconformidad es un recurso administrativo"*[101]. Respecto a esta discrepancia la SCJN ha definido a la inconformidad como una instancia administrativa y no como un recurso.

Se necesita el capital humano basado en un sistema de profesionalización, que parte del artículo 123, apartado B) de la Constitución, para su aplicación se tiene la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de manera específica la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública. Su organismo de aplicación es la Secretaría de la Función Pública. En la materia de adquisiciones la LAASSP, faculta a la SFP para determinar los perfiles de puesto y capacitación de los servidores públicos, responsables de las contrataciones.

2. Procedimientos de contratación pública.

El Estado para el óptimo desarrollo de su actividad obtiene de particulares prestaciones voluntarias de bienes o de servicios de carácter personal. De esta forma adquiere inmuebles y equipo para sus oficinas; arrendando bienes; encargando construcciones de obras públicas; obteniendo prestamos; conviniendo en materia de correspondencia, mercancías; expidiendo giros telegráficos y postales; enajenando y arrendando una serie de bienes propios, asociándose con particulares en empresas mercantiles, etc.

[101] Amaya Barón, Ismael M, *Los medios de impugnación en los procedimientos de contratación del Estado*, Ángel editor, México, 2008, p. 143.

A) La contratación pública como contrato administrativo.

Por ese tipo de relaciones mencionadas en el párrafo anterior, corresponde regular los tipos de contratos usuales, en las relaciones entre particulares y el Estado. Sin embargo, en México no existe una ley que regule en forma sistemática y de carácter unitaria, ni a los contratos que celebra la Administración, ni a los contratos administrativos, aunque no se puede negar la existencia de disposiciones aisladas, lo que complica la problemática de analizar cuando se está en presencia de un contrato sujeto a Derecho privado y cuándo frente a un contrato administrativo sujeto a Derecho público.

En comentarios de Miguel Acosta Romero:

> *La práctica administrativa mexicana frecuentemente nos da ejemplos de multiplicidad de contratos que la Administración Pública celebra con los particulares y en los cuales se sujeta al Derecho Privado. Aun cuando la doctrina ha discutido mucho sobre el particular, creemos que en la actualidad sí se aceptan teóricamente esta clase de contratos, y se explica la intervención del Estado, en vista de una autolimitación a su soberanía y a su poder de mando, en función de los objetivos que persigue con la celebración del contrato y son los de cumplir con sus cometidos.*[102]

La doctrina reconoce la procedencia de la celebración de contratos administrativos. Allan R. Brewer Carias, afirma que:

> *"Los contratos de la Administración se presentan bajo dos formas distintas. Por una parte, la Administración puede realizar sus negocios jurídicos con los particulares, bajo la forma de contrato de Derecho Privado, es decir, contratos idénticos a aquellos de los particulares, tal como están regidos en el Código Civil. En efecto, la Administración del dominio privado del Estado; puede dar en arrendamiento o arrendar amigablemente un inmueble, etc. La Administración recurre muy frecuentemente a este tipo de contrato; ello es la regla en el campo de dominio industrial y comercial del Estado. Pero la Administración Pública puede realizar también actos bilaterales, que, si bien tienen naturaleza contractual, como consecuencia de su contenido, la relación jurídica que surge de ellos es una relación de Derecho Administrativo y, por tanto, estarán sometidos a normas jurídicas autónomas, alguna de las cuales distintas de las de Derecho Privado. Estos contratos forman, dentro de los contratos de la Administración, la categoría particular de los contratos administrativos."(Como se cita en Acosta, 1998, p. 277)*

La igualdad de las partes en este tipo de contratos, no es posible afirmar que sea absoluta, pues aunque la Administración Pública se sujeta a normas de Derecho Privado, no deja de formar parte del Estado y éste no pierde su personalidad de Derecho Público, por tal no pueden aplicarse los procedimientos de apremio y ejecución, que se otorgan entre particulares; no obstante esto se explica, ya que a

[102] Acosta Romero, Miguel*, Derecho Administrativo Especial,* Volumen I, Ed. Porrúa, México, 1998, pp. 626-627.

través de estos contratos el Estado cumple con parte de sus cometidos y sin actuar con intereses de índole particular.

Relacionado a lo anterior podemos decir que es indudable que el Estado no se encuentra obligado a intervenir en todos los casos imponiendo su voluntad a los particulares. En ocasiones pueden obtener la colaboración voluntaria de éstos y lograr de ellos un arreglo consensual la prestación de bienes o servicios personales.

Gabino Fraga en su libro *"Derecho Administrativo"*, señala que, los contratos administrativos; *"Son aquellos que celebra la administración a efecto de cumplir con un fin público que por cuyo medio se pretende satisfacer una necesidad pública".*[103] Afirmando con la anterior la existencia de los contratos administrativos, mediante la siguiente clasificación:

a) *Contratos sujetos a derecho privado que celebra la Administración Pública.* No existe obstáculo alguno para qué la Administración Pública celebre cualquier tipo de contrato o convenio, entre algunos los sujetos al derecho privado.
b) *Contrato de arrendamiento.* Tiene por objeto los bienes de dominio privado de la Federación; o en situación contraria bienes que los particulares arriendan al Estado. En este la Federación debe acatar ciertas normas dictadas en materia de arrendamiento y por lo tanto, el arrendatario queda sujeto a dichas disposiciones de derecho público.
c) *Contratos de prestación de servicios profesionales.* Figura del derecho civil recurrida por las dependencias y entidades de la Administración Pública cuando un profesionista va a realizar alguna actividad para ellas.
d) *Contratos comodato y donación.* Contratos celebrados por el poder público cuando desean hacer entrega de bienes a instituciones de interés social y de carácter no lucrativo.
e) *Adquisiciones.* Se recurre a esta figura para realizar la compra de objetos de escaso valor y de forma excepcional, sujetándose la administración a los ordenamientos jurídicos correspondientes.
f) *Contratos de derecho mercantil.* El Estado en su intensa labor puede celebrar cualquier tipo de contratos, sin excepcionar los de derecho mercantil.
g) *Emisión de títulos de crédito unitarios y en serie.* Incluyen la emisión de títulos de crédito como parte de los contratos celebrados por el Estado.
h) *Contratos de sociedad.* Referentes a la constitución de sociedades mercantiles del Estado. La expresión contratos de sociedad, es utilizada, para designar a los celebrados con el fin de desarrollar parte de su actividad.
i) *Contrato de derecho administrativo.* Afirmando que dentro de la actividad contractual del Estado, existen determinados actos celebrados por la Administración Pública a los cuales la doctrina los considera no sujetos a las reglas de derecho privado.

[103] Fraga, Gabino, *op. cit.*, p. 121.

j) *Contratos administrativos.* Tradicionalmente se consideraba que los contratos administrativos típicos son el de obra pública y el de suministro.

La anterior clasificación podría resultar un tanto obsoleta, por la época en que se realiza, sin embargo es reconocida doctrinalmente como una forma clara de división de los contratos administrativos.

Los contratos que regulados por el Derecho Privado celebra la Administración Pública, en si se regula por este, pero la presencia del Estado, por el sujeto le adiciona reglas especiales, como por ejemplo que en una controversia judicial no garantiza cumplimientos con fianza u otra figura similar.

B) Procedimientos a seleccionar.

Sobre esta particular la LAASSP dispone en su artículo 26 lo siguiente:

Las dependencias y entidades seleccionarán de entre los procedimientos que a continuación se detallan, aquél que de acuerdo con la naturaleza de la contratación asegure al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

1º. Licitación pública;
2º. Invitación a cuando menos tres personas, o
3º. Adjudicación directa.

a) Licitación pública.

La palabra *"licitación"* dentro del campo del Derecho Administrativo se aparta de su concepción etimológica y gramatical, para de esta forma asumir una acepción propia del derecho que la regula.

Daniel Ramos Torres define la licitación pública como un *"Procedimiento administrativo, al tratarse de un conjunto de actos por el cual la Administración Pública selecciona o elige como contratante a aquel licitador que le ofrece las condiciones más ventajosas o convenientes".*[104]

La licitación pública presenta características, como:

> *Ser un procedimiento administrativo, dado que se compone de un conjunto de actos regulados por normas jurídico-administrativas.*
> *Un procedimiento que tiene como finalidad la de escoger a la persona física o jurídica, con la cual la Administración Pública habrá de celebrar un contrato determinado.*

[104] Ramos Torres, Daniel, *op. cit.* p. 130.

La adjudicación de contrato recae en el licitador que haya ofrecido las condiciones más ventajosas o convenientes para la Administración Pública.

En cuanto a la naturaleza jurídica de la licitación, es relevante señalar que es un acto administrativo, parte del llamado que la Administración Pública hace a los particulares, de manera impersonal, para que formulen sus ofertas a fin de llevar a cabo la contratación. De lo anterior, deducimos que la Administración Pública no hace ninguna propuesta, sino las recibe de los licitadores, razón por la cual aclara Bercaitz que:

…derivan dos consecuencias de la naturaleza jurídica de la licitación: 1) Quien se presenta y formula una oferta, debe ajustarse estrictamente a las condiciones fijadas en el llamado, quedando obligado a su mantenimiento durante el plazo que aquél establezca a las normas que lo rijan; 2) La Administración puede aceptar o rechazar las ofertas que se le hagan, sin responsabilidad alguna de su parte.[105]

Por lo anterior, se entiende que los oferentes tienen el deber de presentar sus propuestas con seriedad y, en segundo término, la Administración cuenta con facultades para aceptar y resolver cual es la oferta que asegure al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad, eficiencia, eficacia y honradez; aspectos integrantes de la moralidad administrativa.

Los Tipos de Licitación.

En el procedimiento de la licitación pública conforme a los medios que se utilicen, podrá ser:

1º. Presencial, en la cual los licitantes exclusivamente podrán presentar sus proposiciones en forma documental y por escrito, en sobre cerrado, durante el acto de presentación y apertura de proposiciones, o bien, si así se prevé en la convocatoria a la licitación, mediante el uso del servicio postal o de mensajería.

La o las juntas de aclaraciones, el acto de presentación y apertura de proposiciones y el acto de fallo, se realizarán de manera presencial, a los cuales podrán asistir los licitantes, sin perjuicio de que el fallo pueda notificarse por escrito conforme a lo dispuesto por el artículo 37 de esta Ley;

2º. Electrónica, en la cual exclusivamente se permitirá la participación de los licitantes a través de CompraNet, se utilizarán medios de identificación electrónica, las comunicaciones producirán los efectos que señala el artículo 27 de esta Ley.

La o las juntas de aclaraciones, el acto de presentación y apertura de proposiciones y el acto de fallo, sólo se realizarán a través de CompraNet y sin la presencia de los licitantes en dichos actos, y

[105] Bercaitz, Miguel Ángel, *Teoría general de los contratos administrativos,* Depalma, Buenos Aires, 1952, p. 322.

3º. **Mixta,** en la cual los licitantes, a su elección, podrán participar en forma presencial o electrónica en la o las juntas de aclaraciones, el acto de presentación y apertura de proposiciones y el acto de fallo.

El Carácter de la Licitación.

La licitación de acuerdo al artículo 28, de la ya citada LAASSP, puede ser:

1º. **Nacional,** en la cual únicamente podrán participar personas de nacionalidad mexicana y los bienes a adquirir sean producidos en el país y cuenten, por lo menos, con un cincuenta por ciento de contenido nacional, el que se determinará tomando en cuenta la mano de obra, insumos de los bienes y demás aspectos que determine la Secretaría de Economía mediante reglas de carácter general, o bien, por encontrarse debajo de los umbrales previstos en los tratados, o cuando habiéndose rebasado éstos, se haya realizado la reserva correspondiente.

   La Secretaría de Economía mediante reglas de carácter general establecerá los casos de excepción correspondientes a dicho contenido, así como un procedimiento expedito para determinar el porcentaje del mismo, previa opinión de la Secretaría y de la Secretaría de la Función Pública.

   Tratándose de la contratación de arrendamientos y servicios, únicamente podrán participar personas de nacionalidad mexicana.

2º. **Internacional bajo la cobertura de tratados**, en la que sólo podrán participar licitantes mexicanos y extranjeros de países con los que nuestro país tenga celebrado un tratado de libre comercio con capítulo de compras gubernamentales, cuando resulte obligatorio conforme a lo establecido en los tratados de libre comercio, que contengan disposiciones en materia de compras del sector público y bajo cuya cobertura expresa se haya convocado la licitación, de acuerdo a las reglas de origen que prevean los tratados y las reglas de carácter general, para bienes nacionales que emita la Secretaría de Economía, previa opinión de la Secretaría de la Función Pública, e

3º. **Internacionales abiertas,** en las que podrán participar licitantes mexicanos y extranjeros, cualquiera que sea el origen de los bienes a adquirir o arrendar y de los servicios a contratar, cuando:

   a) Se haya realizado una de carácter nacional que se declaró desierta, o

   b) Así se estipule para las contrataciones financiadas con créditos externos otorgados al gobierno federal o con su aval.

   En las licitaciones previstas en esta fracción, para determinar la conveniencia de precio de los bienes, arrendamientos o servicios, se considerará un margen hasta del quince por ciento a favor del precio más

bajo prevaleciente en el mercado nacional, en igualdad de condiciones, respecto de los precios de bienes, arrendamientos o servicios de procedencia extranjera que resulten de la investigación de mercado correspondiente.

En los supuestos de licitación previstos en las fracciones II y III de este artículo, la Secretaría de Economía, mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación, determinará los casos en que los participantes deban manifestar ante la convocante que los precios que presentan en su propuesta económica no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminación de precios o subsidios.

En los casos en que una licitación pública nacional haya sido declarada desierta y siempre que la contratación no se encuentre sujeta al ámbito de cobertura de los tratados, las dependencias y entidades podrán optar, indistintamente, por realizar una licitación internacional bajo la cobertura de tratados o una internacional abierta.

Cuando en los procedimientos de contratación de servicios, se incluya el suministro de bienes muebles y el valor de éstos sea igual o superior al cincuenta por ciento del valor total de la contratación, la operación se considerará como adquisición de bienes muebles. Para efectos de lo anterior, en el concepto de suministro de bienes muebles, sólo se considerarán los bienes que formarán parte del inventario de las dependencias o entidades convocantes.

En las licitaciones públicas se podrá utilizar la modalidad de ofertas subsecuentes de descuentos para la adquisición de bienes muebles o servicios cuya descripción y características técnicas puedan ser objetivamente definidas y la evaluación legal y técnica de las proposiciones de los licitantes se pueda realizar en forma inmediata, al concluir la celebración del acto de presentación y apertura de proposiciones, conforme a los lineamientos que expida la Secretaría de la Función Pública, siempre que las dependencias o entidades convocantes justifiquen debidamente el uso de dicha modalidad y que constaten que existe competitividad suficiente de conformidad con la investigación de mercado correspondiente.

Tratándose de licitaciones públicas en las que participen de manera individual micro, pequeñas y medianas empresas nacionales, no se aplicará la modalidad de ofertas subsecuentes de descuento.

Para Jorge Fernández Ruiz, en su libro *Derecho Administrativo. Contratos*, las modalidades de la licitación públicas pueden ser abierta o restringida, según se convoque a todo interesado o sólo a quienes satisfagan, según se convoque a todo interesado o sólo a quienes satisfagan determinados requisitos. En razón de la

nacionalidad de los aspirantes, las licitaciones públicas pueden ser nacionales o internacionales; en las primeras sólo pueden contender los nacionales, en tanto que en las internacionales pueden participar tanto nacionales como extranjeros.

b) Licitación privada o invitación a cuando menos tres personas.

La licitación privada, o en nuestro país regulada como *"invitación a cuando menos tres personas",* se concibe como un sistema restringido de selección del co-contratante, consiste en un procedimiento de naturaleza cerrada a través del cual se invita a personas físicas o jurídicas previamente seleccionadas para que presenten sus ofertas, ante el órgano que convoca, de las cuales se analizara y elegirá la más conveniente para el Estado. Por lo anterior, podemos decir que: *"La licitación privada, es basada en un esquema de invitaciones personalizadas directas"*[106]*.*

Jorge Fernández Ruiz, precisa que la licitación cerrada viene a ser un procedimiento administrativo de excepción, sujeto a un régimen de derecho público, mediante el cual se elige de entre un conjunto de aspirantes que responden a una invitación directa de la Administración Pública, a su co-contratante en un contrato administrativo, por considerarlo como el que mejor le asegura la obtención de todos los beneficios que permitan la justicia y la equidad, bajo principios de concurrencia, igualdad, competencia y transparencia.

Es un tipo de licitación caracterizada por constituir un procedimiento cerrado, en cuanto que como su nombre lo dice, el número de licitadores invitados a participar en ella son debidamente determinados. Lo anterior constituye una diferencia con la licitación pública, en esta se emplea un procedimiento abierto, en donde el llamado se hace a personas indeterminadas, pudiendo concurrir todo interesado que satisfaga los requisitos legales.

A la licitación privada le son aplicables los principios y normas de la licitación pública, en todo lo que no se oponga a las diferencias específicas entre ambas. Por ejemplo, en la licitación privada el llamado no se hace públicamente, sin embargo, esa facultad que tienen los órganos administrativos, no es absoluta. Es decir, deben cumplir requisitos, de manera que no sea caprichosa la entrega de la invitación.

La invitación deberá otorgarse a personas que reconocidamente se consideren como las más capaces para cumplir con los requerimientos o la prestación de servicios, Jorge Héctor Escola, refiere que: *"La licitación privada no debe ser una oposición entre personas sin aptitud o competencia, sino entre quienes reúnan esas condiciones, para que entre ellas se elijan la mejor oferta"*[107]*.*

Los principios rectores de la licitación privada, que explica Jorge H. Escola, son:

---

[106] *Ibídem*, p. 202.
[107] Escola, Héctor Jorge, *Tratado integral para los contratos administrativos*, Depalma, Buenos Aires, 1989, p. 348.

1º. El principio de concurrencia. Se aplica en forma limitada, toda vez que sólo se presentan en cuanto a límite de personas llamadas a licitar, así que el llamado debe existir y ser razonable, ya que no es admisible que se invité a un único ofertante.
2º. El principio de igualdad. Tiene plena aplicación, ya que los participantes en una licitación pública o privada, deben encontrarse en igualdad de condiciones, sin otorgar ventaja alguna, ya sea frente a la Administración Pública o a los demás licitadores.
3º. El principio de publicidad. Se aplicará plenamente, ya que como su naturaleza lo señala, en la licitación privada no existe un llamado público a los licitadores, sin embargo el proceso debe estar cubierto por una publicidad adecuada que lo haga insospechado y correcto. La publicidad es un principio aplicable a todo procedimiento administrativo, pues implica un respeto al *debido proceso legal*, establecido en el artículo 14 constitucional.
4º. Principio de oposición. Tiene plena aplicación, en cuanto debe otorgarse a los participantes la posibilidad de ser parte de las controversias que se susciten en el procedimiento.

c) Adjudicación directa.

La contratación directa o adjudicación directa de un contrato administrativo, se entiende por la designación del co-contratante por la Administración Pública sin mediar una licitación pública o privada de la que se deduzca de manera directa el co-contratante. En su obra *"Compendio de Derecho Administrativo", Luis H, G. Y Manuel Lucero E., la definen como: "Procedimiento que realiza la Administración Pública, mediante el cual de manera directa y discrecional elige a una determinada persona, física o jurídica para su contratación, sin la existencia de concurrencia y oposición de oferente alguno".*[108]

En palabras del profesor uruguayo Carlos E. Delpiazzo, en su libro *Contratación Administrativa*, la contratación directa es también una manifestación del sistema de restricción, porque está regulada y prefigurada como un mecanismo excepcional; sólo puede verificarse en determinadas hipótesis, que son las que prevé expresamente la ley.

Entendemos que la adjudicación directa de los contratos administrativos se aduce a la posibilidad de celebrarlos con oportunidad, por obviarse trámites burocráticos, que impiden la toma de decisiones rápidas y oportunas, donde sustituye la concurrencia y competencia de potenciales contendientes mediante el uso de estudios de mercado, sondeo y consultas. Sin embargo, en nuestro país se argumenta

[108] Delgadillo Gutiérrez, Luis Humberto y Lucero Espinosa, Manuel, *Compendio de Derecho Administrativo, Primer y Segundo Curso*, Ed. Porrúa, México, 2008. p. 348.

la corrupción, mediante la discrecionalidad de otorgarlo y el encarecimiento del precio derivado de la ausencia de contienda.

La contratación directa, se considera como un sistema restrictivo, por lo cual la selección del co-contratante no debe hacerse de manera caprichosa, la Administración Pública deberá elegir, de manera razonable, al individuo que considere más idóneo y capaz de cumplir con la contratación. Por lo anterior deducimos que es ejercicio de la Administración conforme a sus facultades de contratación.

Esta figura se presenta y regula con motivo, entre otros, de haber fracasado una licitación, realizada sobre las condiciones estipuladas en las bases o pliegos elaborados para la licitación, ya que de lo contrario no sería la misma contratación, se consideraría una diversa.

3. Marco normativo de las licitaciones públicas.

A) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El antecedente de la licitación pública y sus respectivos contratos, se encuentran en el artículo 134 de la Constitución de 1917, cuya evolución y contenido se explican de manera amplia en el Capítulo I de esta investigación.

A partir de 1917 la regulación de las adquisiciones en México fue imprecisa, ya que no unificaba los criterios para la elaboración de contratos, si bien trataba de regularlos, era ambigua y llena de lagunas; sin embargo, hay que tener en cuenta que después de la revolución y el establecimiento del nuevo régimen, fue difícil instituir un nuevo orden jurídico y administrativo eficaz y eficiente. Como consecuencia de lo anterior, su normatividad también ha evolucionado, hasta volverse cada vez más precisa, eficiente y eficaz.

Jorge Fernández Ruiz, en su libro *Derecho Administrativo. Contratos*, señala que en el siglo XX se inicia con una regulación del contrato administrativo vaga e imprecisa, inserta en un derecho administrativo incipiente, claudicante del dominio y de la soberanía nacional; mientras que, al convertirse en Gobierno la revolución, orientado por los principios solidarios del Estado de bienestar, se torna reivindicatorio de los intereses de la nación; aun cuando, en las dos últimas décadas, esta rama del derecho se vea avasallada, lo mismo por la deuda pública externa que por la corriente neoliberal y globalizadora, la cual, a nivel planetario, bajo la divisa: “el mejor Estado es el menor Estado”, sacrifica el interés público en aras de las empresas trasnacionales, so pretexto del progreso y la modernidad.

Así llegamos a la versión final del artículo 134 constitucional, que es el eje alrededor del cual gira esta investigación, al dar a conocer cómo interpreta la SCJN su ley reglamentaria en materia de adquisiciones:

> ***Artículo 134.-*** *Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la*

Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las instancias técnicas que establezcan, respectivamente, la Federación y las entidades federativas, con el objeto de propiciar que los recursos económicos se asignen en los respectivos presupuestos en los términos del párrafo precedente. Lo anterior, sin menoscabo de lo dispuesto en los artículos 26, Apartado C, 74, fracción VI y 79 de esta Constitución.

Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

Cuando las licitaciones a que hace referencia el párrafo anterior no sean idóneas para asegurar dichas condiciones, las leyes establecerán las bases, procedimientos, reglas, requisitos y demás elementos para acreditar la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado.

El manejo de recursos económicos federales por parte de las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se sujetará a las bases de este artículo y a las leyes reglamentarias. La evaluación sobre el ejercicio de dichos recursos se realizará por las instancias técnicas de las entidades federativas a que se refiere el párrafo segundo de este artículo.

Los servidores públicos serán responsables del cumplimiento de estas bases en los términos del Título Cuarto de esta Constitución.

Los servidores públicos de la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.

La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la Administración Pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.

Las leyes, en sus respectivos ámbitos de aplicación, garantizarán el estricto cumplimiento de lo previsto en los dos párrafos anteriores, incluyendo el régimen de sanciones a que haya lugar.

B) Tratados internacionales de libre comercio.

Un tratado comercial es un acuerdo entre países para considerar determinados beneficios mercantiles en forma mutua. Se pueden distinguir tres tipos de tratados comerciales: zona de libre comercio, unión aduanera y unión económica. De los tres, el que es relevante para el presente estudio es la zona de libre comercio.

Víctor Manuel Rojas Amandi, comenta que *"El concepto de zonas de libre comercio es relativamente moderno. Fue introducido como tal en las negociaciones de la Carta de La Habana y del General Agreement on Tarifs an Trade (GATT) y alcanzó validez universal con la entrada en vigor de este último".*[109]

El párrafo 8 del artículo XXIV, inciso b) del GATT define las zonas de libre comercio, como:

> *b)… Un grupo de dos o más territorios aduaneros entre los cuales se eliminen los derechos de aduana y las demás reglamentaciones comerciales restrictivas, con respecto a lo esencial de los intercambios comerciales de los productos originarios de los territorios constitutivos de dicha zona de libre comercio.*

Sobre cómo se establece una zona de libre comercio Rosario Alejandra Sulser Valdés, en su obra *"Tratados Comerciales Internacionales"*, precisa:

> *… mediante un tratado comercial entre varias naciones, en donde los países firmantes se comprometen a anular entre si los aranceles a ciertos productos al cruzar sus fronteras. Es decir, entre los países firmantes del tratado los precios de todos los productos comercializados entre ellos, serán los mismos para todos los habitantes de la zona, de forma tal que un país no pueda aumentar (mediante aranceles a la importación) el precio de los bienes producidos en otro país que forme parte de la zona de libre comercio.*[110]

La licitación pública internacional se sitúa bajo la cobertura de tratados, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 28, fracción II, de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público, siendo aquélla en la que sólo podrán participar licitantes mexicanos y extranjeros de países con los que México tenga celebrado un tratado de libre comercio con capítulo de compras gubernamentales, cuando resulte obligatorio conforme a lo establecido en los propios tratados y bajo cuya cobertura expresa se haya convocado la licitación, de acuerdo con las reglas de origen que prevean los tratados y las reglas de carácter general, para los bienes nacionales que emite la Secretaría de Economía, previa opinión de la Secretaría de la Función Pública.

---

[109] Rojas Amandi, Víctor Manuel. *La zona de libre comercio de América del Norte, el inicio*, Universidad Iberoamericana, 2009, articulo consultado en http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/indice.htm?r=jurid&n=39

[110] Sulser Valdés, Rosario Alejandra, *Tratados Comerciales Internacionales*, Ediciones Fiscales ISEF, México, 2010, p. 15.

Para lo anterior, se tendrá que realizar este tipo de procedimiento licitatorio cuando se cumplan tres requisitos señalados en los tratados de libre comercio, mismos que se exponen a continuación:

a) Sea llevado a cabo por una dependencia o entidad sujeta.

b) Que el bien, servicio u obra de que se trate esté considerado en la cobertura.

c) Que el valor del procedimiento iguale o supere el monto de los umbrales.

Son nueve los tratados de libre comercio firmados por México, los cuales incluyen el capítulo de compras con el sector público, lo cuales son:

1. **Tratado de Libre Comercio de América del Norte (México, Estados Unidos de Norteamérica y Canadá).**

Este tratado es un conjunto de reglas que los tres países acuerdan para vender y comprar productos y servicios en América del Norte, se incluyó en su nombre la noción de Libre Comercio porque justamente estas reglas son las que definen cómo y cuándo se eliminarán las barreras al libre paso de los productos y servicios entre las tres naciones; esto es, cómo y cuándo se eliminarán los permisos, las cuotas y las licencias, y particularmente las tarifas y aranceles, es decir, los impuestos que se cobran por importar una mercancía.

2. **Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Costa Rica.**

Primero en su género que se formaliza entre México y Centroamérica, entró en vigor el diez de enero de 1995. En materia de compras del sector público se establece: 1) el acceso a las licitaciones públicas con un trato nacional y transparencia en los procedimientos, 2) la prohibición de exigir requisitos como transferencia de tecnología, 3) la inclusión de porcentajes de contenido nacional o de representación o presencia local para la adjudicación de contratos, 4) la promoción de actividades relacionadas con la identificación de oportunidades para la pequeña y mediana empresa, obteniendo beneficios mediante su participación en esquemas conjuntos, es decir, que las partes establecerán el comité de la micro, pequeña y mediana industria, integrado por representantes de cada parte. El comité se reunirá por acuerdo mutuo de las partes, pero no menos de una vez al año, e informará anualmente a la comisión sobre los esfuerzos de las partes para promover oportunidades en compras del sector público para sus micros, pequeñas y medianas industrias.

3. **Tratado de Libre Comercio México- Colombia. (antes Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos, la República de Colombia y la República de Venezuela).**

El Tratado del Grupo de los Tres (G-3), integrado por México, Colombia y Venezuela se firmó en junio de 1994 y entró en vigor el 1 de enero de 1995. El capítulo de compras del sector público determina 1) la existencia de un mercado de compras gubernamentales de más de 20 mil millones de dólares anuales, 2) el establecimiento

de principios de trato no discriminatorio, transparencia en los procedimientos de licitación y un recurso de revisión para inconformarse respecto a los procedimientos de licitación que afecten intereses de proveedores, 3) el establecimiento de reservas por 10 años a compromisos de trato nacional y no discriminatorio, 4) la creación de un comité de la micro, pequeña y mediana industria, para la promoción de oportunidades y 5) el otorgamiento de trato no discriminatorio en la venta de bienes y en la prestación de servicios para operaciones comerciales similares de empresas del Estado.

4. **Tratado de Libre Comercio entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno de la República de Nicaragua.**

El Tratado de Libre Comercio entre Nicaragua y México que entró en vigor el 1 de julio de 1998 dejó sin efectos al acuerdo de alcance parcial suscrito entre México y Nicaragua en el marco de ALADI (Asociación Latinoamericana de Integración). En materia de compras del sector público establece el acceso preferencial e inmediato a proveedores y productos mexicanos, la participación en licitaciones para la adquisición de bienes, la contratación de servicios y de obra pública no discriminatoria, así como la incorporación gradual de un mayor número de adquisiciones gubernamentales.

5. **Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y el Estado de Israel.**

Tratado firmado el 10 de abril del año 2000, y entró en vigor el 1 de julio del mismo año. En materia de compras del sector público se dispuso 1) el acceso a adquisiciones por cualquier medio contractual, incluyendo aquéllas por concepto de compra, arrendamiento o alquiler, con o sin opción de compra, así como cualquier combinación de bienes y servicios, 2) el otorgamiento de trato nacional y no discriminatorio, 3) la prohibición de aplicar reglas de origen a bienes importados que sean diferentes a las aplicadas en operaciones comerciales normales. Además, se reguló 4) la solución de reclamaciones mediante consultas con la entidad contratante, misma que debe actuar de forma imparcial y oportuna, sin perjuicio de obtener medidas correctivas, de conformidad con el sistema de impugnación y la posibilidad de impugnar presuntas infracciones ante alguna instancia revisora distinta de un tribunal, cuyas actuaciones están sujetas a revisión judicial.

6. **Tratado de Libre Comercio México-Chile.**

Firmado el 17 de abril de 1998 y entró en vigor el 1 de agosto de 1999; sin embargo, el protocolo de adición del capítulo de compras fue firmado hasta el 28 de agosto de 2007. Capítulo que cuenta con un texto normativo que desglosa en general las disciplinas que ambos países han incorporado por su parte en otros tratados comerciales; entre éstas destacan el principio de trato nacional, la definición de criterios que deben aplicarse en los procedimientos de licitación, así como las reglas para presentar y atender las posibles inconformidades que pudieran presentarse durante los procedimientos de compra.

7. **Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación entre los Estados Unidos Mexicanos y la Comunidad Europea y sus Estados miembros.**

Entró en vigor el 1 de julio de 2000, y es uno de los más importantes y ambiciosos instrumentos de política exterior que México ha celebrado, en sus tres vertientes: diálogo político, cooperación y liberación comercial. En materia de compras del sector público se dispone el otorgamiento de mejores condiciones de acceso al mercado comercial de la Unión Europea, la consolidación del grado de apertura vigente y la no modificación de la legislación del sector.

En los países de la Unión Europea (UE) y México, las compras que realizan los Gobiernos son una parte importante de sus economías. Los sistemas públicos de adquisiciones en los 15 países comunitarios constituyen mercados muy amplios que ofrecen a los exportadores mexicanos oportunidades de ampliar las escalas de operación en un gran número de sectores.

8. **Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y los estados de la Asociación Europea de Libre Comercio.**

La Asociación Europea de Libre Comercio (AELC), compuesta por la República de Islandia, el Principado de Liechtenstein, el Reino de Noruega y la Confederación Suiza, negoció con los Estados Unidos Mexicanos un Tratado de Libre Comercio que finalmente fue firmado en la Ciudad de México el 27 de noviembre de 2000. Los instrumentos de ratificación de México, de la Confederación Suiza y del Reino de Noruega fueron depositados durante el mes de junio de 2001, y la promulgación hecha por México consta en el Diario Oficial de la Federación del 29 de junio de 2001. Para los citados Estados que suscribieron y ratificaron dicho tratado, rige desde el 1 de julio de 2001.

La estructura básica del capítulo de compras del sector público se basa en los principios de trato nacional, la denegación de beneficios y la impugnación. En lo que se refiere a los procedimientos de compra y rectificaciones o modificaciones a las listas de entidades cubiertas por este capítulo, México aplicará los procedimientos establecidos en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y los miembros del Asociación Europea de Libre Comercio utilizarán aquéllos sobre contratación pública de la Organización Mundial del Comercio.

9. **Acuerdo para el fortalecimiento de la Asociación Económica entre los Estados Unidos Mexicanos y el Japón.**

Acuerdo que entró en vigor el 1 de abril de 2005. En su capítulo de compras del sector público garantiza que el acceso de los bienes, servicios y proveedores mexicanos y japoneses a los mercados de compras gubernamentales del otro país, se realice en condiciones de trato nacional. El Acuerdo coloca a México entre los

pocos países en el mundo que gozan de acceso seguro y no discriminatorio al gran mercado de compras gubernamentales japonés.

Con base a lo anterior, podemos ver que el capítulo denominado “Compras del sector público”, tiene como objetivo central la apertura de los mercados de compras gubernamentales entre los países que lo celebran, mediante el establecimiento de procedimientos claros, precisos, transparentes y predecibles, que aseguren un trato justo, no discriminatorio a todos los proveedores de la zona establecida y, por consiguiente, una base de igualdad en las condiciones de acceso a las oportunidades derivadas de los requerimientos de abasto de las áreas compradores de los países suscriptores.

Tratado de Asociación del Transpacífico.

Fue firmado por el Ejecutivo Federal, pero no ha sido ratificado por el poder legislativo, sin embargo se espera que se ratifique a “finales de 2016”.[111] Los Estados Partes del tratado son: Australia, Brunéi Darussalam, Canadá, Chile, Estados Unidos, Japón Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietman. Con el tratado se busca la eliminación o disminución de aranceles, favorecer a la producción, impulsar la innovación, competencia y productividad.

Sin embargo el Presidente recién electo de los Estados Unidos ofreció que una de sus primeras acciones será retirarse del Tratado de Asociación del Transpacífico, por lo que Estados Unidos podría quedar fuera del tratado, lo que ya sucedió.

El tratado en cuanto a su apartado de compras de Gobierno, busca que los Estados parte puedan participar para ser proveedores del estado en las mismas condiciones que los proveedores locales poseen. Es decir, que gozaran de igualdad, oportunidad, imparcialidad, protección a sus datos personales, y certeza jurídica. Además, se comprometen a tener procesos de selección con criterios técnicos, objetivos y justos, así como también se comprometen a tener procesos por los cuales manifestar quejas o inconformidades.

C) Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Esta ley es importante en la investigación, descrita detalladamente en el capítulo I, desde sus antecedentes y las 14 reformas que ha tenido desde su creación en el 2000.

[111] El Financiero http://www.elfinanciero.com.mx/economia/mexico-ratificara-el-tpp-a-finales-de-2016-guajardo.html consultada el 13 de diciembre de 2016, a las 1:53 p.m.

D) Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Después de un año de publicadas las reformas a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se expide su nuevo Reglamento, mismo que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de julio de 2010, el cual abrogó el reglamento de fecha 20 de agosto del año 2001, con la finalidad de impulsar la creación de procedimientos más ágiles a través de la eliminación de requisitos, y más transparentes, en lo que refiere al ejercicio del presupuesto público; así mismo, busca establecer las bases para la contratación con los organismos públicos no considerados paraestatales, definiendo en cada caso las responsabilidades y la organización de los mismos, en relación con la preparación y formalización de la contratación pública.

Este nuevo reglamento destaca los puntos siguientes:

a) Faculta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaría de Economía y a la Secretaría de la Función Pública no solo para interpretar el reglamento, sino también interpretar para efectos administrativos a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Tales, serán obligatorias únicamente para las dependencias y entidades.
b) Se establece que las interpretaciones que, respecto a las leyes y sus reglamentos lleven a cabo la Secretarías señaladas, no tendrán carácter de interpretación de aplicación general y sólo podrán considerarse para el caso concreto a que se refiera la consulta.
c) Se incorporan nuevas definiciones que permiten una interpretación más adecuada de las leyes correspondientes, haciendo una diferenciación entre área contratante, área requirente y área técnica, e incorporando términos y regulación en relación con la participación de micros, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES).

   Se establecen numerosos apoyos en relación con la participación de MIPYMES, ya sea directamente o a través de la subcontratación, como son:

   - La posibilidad de que las dependencias o entidades realicen procedimientos de contratación en los que únicamente puedan participar MIPYMES, siempre y cuando el monto de la contratación sea menor a los establecidos en los ordenamientos que cuenten con un capítulo de compras del sector público.
   - Para la aplicación de la modalidad de ofertas subsecuentes de descuentos se debe acreditar que existe competencia suficiente de acuerdo con la investigación de mercado, que las MIPYMES participantes individualmente no se encuentren en desventaja y que el volumen de bienes o servicios a adquirir resulte conveniente para obtener economías en escala.

- Las MIPYMES pueden participar en los procesos regulados por la ley y el reglamento si se acredita que cuentan con ese carácter mediante un documento que puede expedir la autoridad competente o por medio de un escrito en el que así se manifiesta bajo protesta de decir verdad.

d) Se publican reglas de contratación para el caso de fideicomisos públicos no considerados como entidades paraestatales.
e) Se especifica la información que debe verificarse a través de la investigación. de mercado, así como la obligatoriedad de consultar la base electrónica de *CompraNet* y una fuente adicional a elegir entre la investigación vía internet o telefónica o por cualquier otro medio (siempre y cuando se lleven los registros correspondientes y sea verificable) o por información proporcionada por las cámaras, asociaciones o agrupaciones del ramo correspondiente.
f) Se simplifican los elementos que deben considerarse en las políticas, bases y lineamientos ("POBALINES") que emitan los titulares de las dependencias y los órganos de Gobierno de las entidades, además de establecer la obligación de las dependencias y entidades de divulgar y mantener actualizada la información. En ese sentido, los POBALINES deben señalar lo siguiente:

    - Las áreas de la dependencia o entidad que apliquen las disposiciones de la ley y el reglamento.
    - Los niveles jerárquicos de los servidores públicos que atienden y se responsabilizan de los procedimientos de contratación.
    - La forma en que las dependencias y entidades deben cumplir con los términos o plazos a que hacen referencia la ley y el reglamento.
    - Los aspectos que se determinen en los lineamientos generales que emita la Secretaría de la Función Pública.

g) En los casos de licitaciones públicas e invitaciones a cuando menos tres personas de carácter nacional, los licitantes, previo a la firma del contrato, deben acreditar que son mexicanos mediante la entrega de un escrito en el que el licitante manifieste que es de nacionalidad mexicana bajo protesta de decir verdad.
h) Se establecen nuevos requisitos que debe contener la convocatoria, invitación de al menos tres personas y la solicitud de cotización, donde se destaque la enumeración de los requisitos que deben cumplir los licitantes, con la precisión de mencionar cuáles son indispensables y, en caso de incumplimiento, cuáles afectan la solvencia de las proposiciones.
i) Se detallan algunos requisitos que deben cumplir las convocatorias publicadas por las dependencias y entidades, donde se especifica que dichas convocatorias no pueden establecer requisitos que limiten la libre participación de los interesados. Igualmente, se establece que desde la convocatoria se debe señalar la fecha y hora para la primera junta de aclaraciones.

j) Se contiene la obligación para el área requirente de indicar en la convocatoria la invitación a cuando menos tres personas o solicitud de cotización, las normas oficiales mexicanas, normas mexicanas o, en su caso, normas internacionales que serán obligatorias.
k) Tratándose de adquisiciones, arrendamientos y servicios, el área requirente puede exigir que los licitantes cuenten con un sistema de control de calidad en la producción de bienes o servicios, siempre y cuando en el mercado existan por lo menos tres proveedores que tengan dicho sistema, lo que se demostrará mediante la investigación de mercado y que en la convocatoria o invitación se publiquen los datos de identificación de las normas requeridas de gestión de calidad.
l) Respecto al acto de presentación y apertura de proposiciones, se especifican las características en las que se debe llevar a cabo dicho acto, donde se establecen los documentos que tiene que entregar el licitante con el sobre cerrado, así como la forma para presentar su proposición.
m) Se considera la posibilidad de que los licitantes se encuentren inscritos en el Registro Único de Proveedores, con lo que se evita la presentación de documentos repetitivos en cada licitación, así como la necesidad de acreditar su experiencia.
n) En los casos de empate en la evaluación de las proposiciones, se da preferencia para la adjudicación del contrato, en primer término a las microempresas.
o) Se modifican los casos en los que puede declararse desierta una licitación pública.
p) Se especifican los servicios que no resulten sujetos a las leyes respectivas y se regulan con mayor detalle las excepciones en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios para el caso de las sociedades nacionales de crédito, servicios bancarios y de intermediación bursátil, entre otros.
q) Se determinan nuevas reglas para la consolidación de adquisiciones, arrendamientos o servicios de varias dependencias o entidades, así como la regulación de los contratos marco.
r) En los casos de consultorías, asesorías, estudios o investigaciones, se otorga la posibilidad de pactar un precio por hora de servicio; asimismo, en el caso de servicios en materia jurídica que se contraten para la atención de asuntos en litigio, se puede establecer, además, una comisión por resultado favorable sin que exceda de 5% del monto del asunto.
s) El capítulo de las Infracciones y Sanciones se modifica al destacar la posibilidad de sancionar con inhabilitación y multa al inconforme, que haya promovido algún recurso que sea sobreseído o resuelto como infundado, y del que se determine que fue promovido para retrasar o entorpecer la contratación.

E) Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Con las reformas realizadas a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público con fecha 28 de mayo de 2009, se estableció la obligación por parte de la Secretaría de la Función Pública para que emita diversos lineamientos que regulen, de manera específica, algunos aspectos importantes de la ley, por lo que el 09 de septiembre de 2010 publicó el Acuerdo por el que se emiten diversos lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, y de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, Acuerdo cuyo objetivo es contribuir a garantizar que en los procedimientos de contratación pública a cargo de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal se obtengan las mejores condiciones para el Estado en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, así como a propiciar que se lleven a cabo bajo criterios de transparencia, certeza jurídica e imparcialidad.

De los Lineamientos Generales para la Expedición de Políticas, Bases y Lineamientos.

Señalan los lineamientos que deberán observar las dependencias y entidades de la APF para elaborar sus políticas, bases y lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, y de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, las cuales deberán contener, al menos, las obligaciones y responsabilidades específicas de cada área de la dependencia o entidad, así como de los servidores públicos que intervienen en las diferentes etapas de la contratación: desde a) la planeación o elaboración del requerimiento, hasta b) la recepción de los bienes adquiridos o arrendados, de los servicios prestados, de las obras ejecutadas o de los servicios prestados relacionados con las mismas, así como c) el establecimiento de los criterios que deberán ser empleados para el estudio de factibilidad para determinar la conveniencia de la adquisición, el arrendamiento sin opción a compra de bienes o el que sí la contemple, así como qué porcentaje menor al utilizado será necesario para determinar el precio no aceptable, asimismo, d) los criterios conforme a los cuales se podrán otorgar anticipos, e) el establecimiento de los porcentajes de éstos y las condiciones para su amortización, f) asimismo, bases, forma y porcentajes a los que deberán sujetarse las garantías que deban constituirse por los anticipos otorgados y el cumplimiento de los contratos, g) así como, los aspectos a considerar para la determinación de los términos, las condiciones y el procedimiento, a efecto de aplicar las penas convencionales, las deducciones, los descuentos, las retenciones económicas, entre otros puntos.

De los Lineamientos para la Aplicación del Criterio de Evaluación de Proposiciones a través del Mecanismo de Puntos o Porcentajes en los Procedimientos de Contratación.

Los lineamientos señalan lo siguiente: en la convocatoria y la invitación para contratar la adquisición o arrendamiento de bienes muebles, la prestación de

servicios, la ejecución de obras o la prestación de servicios relacionados con obras, y siempre y cuando se utilicen puntos o porcentajes, la convocante deberá señalar los rubros y subrubros que, de acuerdo con las características, la complejidad, la magnitud y el monto de cada contratación, se deberán incluir en las propuestas técnica y económica que integran la proposición, así como la puntuación o unidades porcentuales que los licitantes pueden alcanzar u obtener en cada uno de ellos, el mínimo de puntuación o unidades porcentuales requeridas para que su propuesta técnica sea considerada solvente y la forma en que los licitantes deberán acreditar en cada caso la obtención de puntuación o unidades porcentuales; según corresponda, la convocante realizará en primer término la evaluación de las propuestas técnicas y posteriormente la evaluación de las propuestas económicas.

De los Lineamientos para la Reducción de los Montos de Garantías de Cumplimiento que deben Constituir los Proveedores y los Contratistas.

Este apartado dispone que para la reducción de los montos de las garantías de cumplimiento de los contratos, dependencias y entidades deberán considerar la información sobre el historial de cumplimiento favorable de los proveedores y contratistas que contengan los registros conforme a las disposiciones emitidas por la Secretaría de la Función Pública; la reducción se determinará en función del grado de cumplimiento de contrataciones que asignen los registros para los proveedores y contratistas conforme a las disposiciones emitidas.

De los Lineamientos para la Utilización de la Modalidad de Ofertas Subsecuentes de Descuento en las Licitaciones Públicas Electrónicas.

Estos lineamientos refieren que la dependencia o entidad convocante deberá dejar constancia en el expediente de contratación respectivo para justificar la conveniencia de utilizar la modalidad de ofertas subsecuentes de descuentos. A su vez, la Secretaría de la Función Pública, a través de la Unidad de Política de Contrataciones Públicas, realizará las acciones que correspondan para la preparación y operación de programas de capacitación y actualización de los servidores públicos de las dependencias y entidades convocantes en el uso de los sistemas disponibles en el portal de CompraNet, los cuales permitan la adecuada utilización de la modalidad de ofertas subsecuentes de descuentos.

De los Lineamientos para Promover la Agilización del Pago de Proveedores.

Estos lineamientos disponen que el plazo máximo que deberá mediar entre la fecha en que el proveedor acredite la entrega de los bienes muebles, o en su caso la prestación del servicio, y la fecha de pago correspondiente, será de treinta días naturales; a su vez, la devolución o rechazo de los bienes muebles o el incumplimiento en la prestación de los servicios deberán ser comunicados al proveedor a más tardar el día hábil siguiente a aquél en que éstos se determinen, señalando las razones que los motivaron, las cuales deberán estar vinculadas con las condiciones establecidas en el contrato, indicando el plazo para su reposición o corrección. Los proveedores podrán consultar la información relativa a sus pagos y hacer el seguimiento de los

mismos, a través del Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C.; por su parte, las dependencias y entidades podrán establecer plazos menores a los señalados a efecto de agilizar el pago a proveedores, etc.

F) Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de agosto del 2010, en el comunicado de prensa del 31 de agosto del 2010, la Secretaría de la Función Pública señala que se emiten los nuevos manuales administrativos de aplicación general que buscan consolidar la eficiencia administrativa y ahorros para el Gobierno en materia de Adquisiciones Gubernamentales, Auditoría, Control Interno, Obra Pública, Recursos Financieros, Recursos Humanos, Recursos Materiales, Tecnologías de la Información, así como de Comunicación y Transparencia.

El Gobierno federal pretende cumplir tres objetivos centrales: primero, transparentar la normatividad vigente; segundo, eliminar todas aquellas reglas que se duplican o generan costos innecesarios al Gobierno o a los ciudadanos; y, tercero, contener la emisión de nuevas reglas que no se justifiquen. Lo anterior, busca fortalecer la transparencia en el Gobierno, pues al existir menos normas, éste se simplifica y es más accesible para los ciudadanos.

Los objetivos de este manual son:

General:

- Incrementar la eficiencia de los procesos y procedimientos en materia de adquisición y arrendamiento de bienes muebles y contratación de servicios de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, a fin de mejorar la calidad en el abasto y provisión de bienes y servicios, a la vez que garantizar a los ciudadanos servicios de calidad en la materia.

Específicos:

- Estandarizar los procesos y subprocesos en materia de adquisiciones y arrendamiento de bienes muebles y contratación de servicios.
- Homologar las prácticas administrativas en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios.
- Ofrecer a las dependencias y entidades recomendaciones generales e información útil en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios para la toma de decisiones y la mejora institucional.
- Fortalecer la transparencia y rendición de cuentas en los procedimientos de contratación pública de las dependencias y entidades.
- Eliminar requisitos innecesarios en los procesos, subprocesos, trámites y servicios relacionados con las contrataciones públicas.

- Contribuir a la mejora y modernización de los trámites y servicios del Gobierno federal, mediante la estandarización de procesos.
- Coadyuvar al reordenamiento normativo derivado de la regulación base cero propuesta por el Ejecutivo Federal.

Los ejes de política pública sobre los que se articula el manual, establecen acciones transversales en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público para lograr los objetivos. En este sentido, el manual tiene una visión de procesos y está estructurado de la forma siguiente:

- Plantean un macroproceso y quince subprocesos implícitamente agrupados en tres procesos diferenciados: planeación, contratación y administración del contrato.
- El objetivo del macroproceso de adquisiciones es planear y efectuar la contratación de los bienes y servicios requeridos por las dependencias y entidades para el cumplimiento de sus atribuciones, así como el desarrollo de los diferentes proyectos y programas sustantivos que se vinculen con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo (PND).

Las actividades del manual están orientadas al logro de los resultados previstos o esperados en cada uno de los subprocesos. La identificación de las áreas encargadas de las diversas actividades, en el nivel de generalidad que corresponde al manual es consistente con lo establecido en la Ley y su Reglamento, así como en los Lineamientos Generales para la expedición de políticas, bases y lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, y de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, emitidos mediante el Acuerdo por el que a su vez se emiten diversos lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, y de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de septiembre de 2010.

El lenguaje que emplea el manual no busca generar ninguna clase de discriminación, ni marcar diferencias entre hombres y mujeres, por lo que las referencias o alusiones hechas al género masculino representan siempre a todos/as, hombres y mujeres, abarcando claramente ambos sexos.

a) Marco normativo del Manual Administrativo.

Este marco jurídico, cuenta entre otras, con las siguientes disposiciones en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Tratados

- Decreto de Promulgación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 1993.

- Decreto de promulgación del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos, la República de Colombia y la República de Venezuela, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 1995. Sin efectos para ésta última a partir del 19 de noviembre de 2006.
- Decreto de promulgación del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Costa Rica, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de enero de 1995.
- Decreto Promulgatorio del Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Nicaragua, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de julio de 1998.
- Decreto Promulgatorio del Acuerdo de Asociación Económica, concertación Política y Cooperación entre los Estados Unidos Mexicanos y la Comunidad Europea y sus Estados Miembros, la Decisión del Consejo Conjunto de dicho Acuerdo; y la Decisión del Consejo Conjunto del Acuerdo Interino sobre Comercio y Cuestiones Relacionadas con el Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la Comunidad Europea, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de junio de 2000.
- Decreto Promulgatorio del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y el Estado de Israel, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de junio de 2000.
- Decreto Promulgatorio del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados de la Asociación Europea de Libre Comercio, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de junio de 2001.
- Decreto Promulgatorio del Acuerdo para el Fortalecimiento de la Asociación Económica entre los Estados Unidos Mexicanos y el Japón, y de su Acuerdo de Implementación, hechos en la Ciudad de México el diecisiete de septiembre de dos mil cuatro, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo de 2005.
- Decreto Promulgatorio del Tratado de Libre Comercio entre la República de Chile y los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de octubre de 2008.

Leyes

- Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
- Ley Federal de las Entidades Paraestatales.
- Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
- Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
- Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

- Ley del Servicio de Tesorería de la Federación.
- Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
- Ley Reglamentaria del artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo.
- Ley de Ciencia y Tecnología.
- Ley Federal sobre Metrología y Normalización.
- Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos.
- Ley Federal de Competencia Económica.
- Ley General de Contabilidad Gubernamental.
- Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
- Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Códigos

- Código Fiscal de la Federación.
- Código Civil Federal.
- Código Federal de Procedimientos Civiles.

Reglamentos

- Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.
- Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
- Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
- Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública.
- Reglamento de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación.

Decretos

- Presupuesto de Egresos de la Federación vigente.
- Decreto por el que se establecen diversas medidas en materia de adquisiciones, uso de papel y de la certificación de manejo sustentable de bosques por la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de septiembre de 2007.
- Decreto que establece las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la Administración

Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2012.

Acuerdos

- Acuerdo por el que se crea con carácter permanente la Comisión Intersecretarial de Compras y Obras de la Administración Pública Federal a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2009.
- Acuerdo por el que se establece la estratificación de las micro, pequeñas y medianas empresas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de junio de 2009.
- Acuerdo por el que se emiten diversos lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios y de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de septiembre de 2010.
- Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado CompraNet, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de junio de 2011.
- Acuerdo relativo al establecimiento de los lineamientos generales para las campañas de comunicación social de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (se publica anualmente en el Diario Oficial de la Federación).

Reglas

- Reglas para la determinación, acreditación y verificación del contenido nacional de los bienes que se ofertan y entregan en los procedimientos de contratación, así como para la aplicación del requisito de contenido nacional en la contratación de obras públicas, que celebren las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 14 de octubre de 2010.
- Reglas para la celebración de licitaciones públicas internacionales bajo la cobertura de tratados de libre comercio suscritos por los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 2010.
- Reglas para la aplicación del margen de preferencia en el precio de los bienes de origen nacional, respecto del precio de los bienes de importación, en los procedimientos de contratación de carácter internacional abierto que realizan las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 2010.

- Reglas para la aplicación de las reservas contenidas en los capítulos o títulos de compras del sector público de los tratados de libre comercio suscritos por los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 2010.

Lineamientos

- Lineamientos para las adquisiciones de papel para uso de oficina por parte de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de octubre de 2009.
- Lineamientos para la aplicación y seguimiento de las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la Administración Pública Federal, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 30 de enero de 2013.

Circulares

- Circular que contiene los Lineamientos generales relativos a los aspectos de sustentabilidad ambiental para las adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de octubre de 2007.

Oficios

- Oficio Circular No. UNAOPSPF/309/0743/2008. emitido por la Titular de la Unidad de Normatividad de Adquisiciones, Obras Públicas, Servicios y Patrimonio Federal por el que se establece el procedimiento que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y las entidades federativas que realicen contrataciones con recursos federales, previo a la formalización de los contratos o pedidos que sean celebrados bajo el ámbito de las leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para verificar que los proveedores o contratistas están al corriente en sus obligaciones fiscales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de septiembre de 2008.
- Oficio Circular UPCP/308/0323/2009 Procedimiento de Captura y Envío de los Programas Anuales a la Secretaría de la Función Pública, emitido el 3 de diciembre de 2009 por el Titular de la Unidad de Política de Contrataciones Públicas de la citada Secretaría.
- Oficio Circular 307-A.-0917 que da a conocer el Programa Nacional de Reducción de Gasto Público, emitido por el Titular de la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el 12 de marzo de 2010.

Disposiciones Generales

- Disposiciones Generales a las que deberán sujetarse las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para su incorporación al Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C. Institución de Banca de Desarrollo, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 28 de febrero de 2007. (Modificaciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 6 de abril de 2009 y el 25 de junio de 2010).

Disposiciones Normativas

Guías

- Guía para la calificación, aceptación y remisión de las garantías para su efectividad a la Tesorería de la Federación, emitida por la Tesorería de la Federación en septiembre del 2009, así como sus actualizaciones, disponible en al siguiente liga:

http://www.hacienda.gob.mx/sitioTESOFE/Guias/guia_efectividad_garantias.pdf.

Instructivo

- Instructivo para la elaboración de la Liquidación de Adeudo y Acta Administrativa de Incumplimiento de Obligaciones emitido por la Tesorería de la Federación, mediante oficio 401-T-2754 del 21 de enero de 2010 y que como anexo forma parte de la Guía para la calificación, aceptación y remisión de las garantías para su efectividad a la Tesorería de la Federación.

G) Marco normativo y criterios jurisprudenciales del régimen de adquisiciones públicas correlacionado.

A continuación se desarrolla la correlación del Marco Normativo de las Adquisiciones Públicas, señalando primeramente a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ubicada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el vértice superior del orden jurídico nacional, a continuación tenemos los tratados internacionales, para pasar a un tercer nivel con las leyes federales y locales, en un mismo nivel jerárquico y finalmente la normatividad administrativa, integrada por reglamentos de leyes, acuerdos, decretos, circulares y otras reglas obligatorias.

Para ello se analizaron más de 6000 fojas útiles correspondientes a las disposiciones legales del marco normativo del régimen de adquisiciones públicas como se puede apreciar en el siguiente cuadro, se interrelacionaron 186 normas y criterios de interpretación de la SCJN aplicables a la materia:

Disposiciones	Número
Leyes	35
Códigos	5
Reglamentos	6
Decretos	5
Acuerdos	12
Manuales	2
Reglas	6
Lineamientos	3
Criterios normativos	8
Circular	1
Oficio circular	5
Disposiciones generales	1
Guía	2
Instructivo	1
Otras disposiciones	2
SUBTOTAL	94
Criterios emitidos por la SCJN	92
GRAN TOTAL	186

Habiéndolas resumido y correlacionado en una versión ejecutiva en las siguientes páginas y adicionalmente se elaboró una versión amplia, que como anexo 1 acompaña a esta investigación, compuesta por cerca de 500 páginas en donde de manera detallada el servidor público o el licitante podrán encontrar que disposiciones legales están relacionadas con la LAASSP.

Nota: Para atender al **marco normativo del régimen de adquisiciones públicas correlacionado,** acudir al anexo 1 de esta investigación.

G) Marco normativo y criterios jurisprudenciales del régimen de adquisiciones públicas correlacionado.

NORMATIVIDAD	LAASSP
1.- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 5 de febrero de 1917. Artículo 134 (primer y segundo párrafos).	Artículo 1.
Artículo 43.	Artículo 1 (fracción VI).
Artículos 3 (fracciones VII y IX), 6 (apartado A, fracción VIII), 26 (apartado B y C), 27 (fracción XIX), 28 (octavo, sexto, décimo cuarto y décimo sexto párrafos), 41 (fracción V, apartado A), 73 (fracción XXIX-H), 79 y 102 (apartado A, primer párrafo y apartado B, quinto párrafo).	Artículo 1 (segundo párrafo).
Artículo 134 (cuarto párrafo).	Artículos 1 (cuarto y quinto párrafos) y 2 (fracción IX).
Artículo 134 (tercer párrafo).	Artículo 26 (segundo párrafo).

- **LEYES GENERALES**

2.- Ley General de Contabilidad Gubernamental. 31 de diciembre de 2008. Última reforma publicada el 18 de junio de 2016. Artículos 1 (primer y segundo párrafos), 23, 67 (primer y tercer párrafos) y 79.	Artículos 1, 2 (fracción II) y 21.
Artículo 23.	Artículo 3 (fracción III).
Artículo 44.	Artículo 9.
Artículo 2 (segundo párrafo).	Artículo 18.
Artículo 23.	Artículo 20 (fracciones III y VIII).
Artículos 23 (fracción III), 1 (primer y segundo párrafos).	Artículo 23 (fracción I).
Artículo 52 (primer y segundo párrafo).	Artículo 22 (fracción IV).
Artículos 2 (primer párrafo) y 52 (primer párrafo).	Artículo 24.
Artículo 2 (segundo párrafo).	Artículo 32 (último párrafo).
Artículo 67 (segundo párrafo).	Artículo 51.
Artículo 23.	Artículo 55.
Artículo 2 (segundo párrafo).	Artículo 56 (tercer párrafo, fracción III).
Artículo 84.	Artículo 62.
Artículo 66.	Artículo 20 (fracción III).

G) Marco normativo y criterios jurisprudenciales del régimen de adquisiciones públicas correlacionado.

3.- Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Nueva ley publicada en el D.O.F el 26 de enero de 2017. Artículo 9.	Artículo 11 (primer párrafo).
Artículos 1 (primer, tercer, cuarto y quinto párrafos), 2, 3 (fracciones IX, X y XI), 10, 31 y 42.	Artículos 21 (primer párrafo), 37 (tercer párrafo), 41 (fracción X, segundo párrafo), 56, (segundo y tercer párrafos, fracciones II, III; cuarto párrafo, inciso f) y 56 Bis (primer y segundo párrafos).
Artículos 165 y 167.	Artículo 61, 62 y 63
Artículo 65.	Artículo 71 (segundo párrafo).
4.- ⇒Ley General de Responsabilidades Administrativas. Nueva Ley publicada en el D.O.F 18 de julio de 2016 Artículo 10.	Artículo 1 (segundo párrafo).
Artículos 21, 26, 43, 44 y 46.	Artículos 2 (fracciones II, VI y VII) y 21.
Artículo 7 (fracción I).	
Artículo 25 (fracción V).	Artículos 7 (último párrafo), 11 y 15.
Artículo 7 (fracción V).	Artículos 18 y 20 (fracción II).
Artículo 2 (fracción V).	Artículo 22 (fracción III).
Artículo 2 (fracción I), 7 (fracción VI).	Artículo 24.
Artículo 7 (fracción VII).#	Artículo 26 (primero y segundo párrafos).
Artículo 25 (fracción V, VI y VII).	Artículo 26 Ter (fracción III, inciso g y fracción IV, inciso a).
Artículo 7.	Artículo 29 (fracción V).
Artículos 7 (fracción IV), 21 y 25 (fracciones I y II).	Artículos 29 (segundo párrafo) y 39 (primer párrafo).
Artículos 3 (fracción VI), 7 (fracciones II y III), 45, 47, 52, 53, 57, 58, 66, 68 y 72.	Artículo 50 (primer párrafo, fracción I).
Artículos 24 y 70 (último párrafo).	Artículo 50 (primer párrafo, fracciones VII, VIII, IX, X, XI, XII, y XIV y segundo párrafo).
Artículo 25 (fracciones VI y VII).	Artículo 56 (tercer párrafo, fracción II).

⇒ Forma parte de las siete leyes que integran el Sistema Nacional Anticorrupción.

En las tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, enunciados en esta correlación se determina que el contenido de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector, correctamente aplicado, respeta los principios de la Constitución en materia de Derechos Humanos.

G) Marco normativo y criterios jurisprudenciales del régimen de adquisiciones públicas correlacionado.

Artículos 1, 2 (fracción II, III y V), 3 (fracción XIV), 59, 67, 81 (fracción I, inciso b y fracción II inciso b), 84 (fracción II), 88 y 89 (fracción I).	Artículos 59 y 60 (primer párrafo, fracciones I, II, III).
Artículo 69.	Artículo 60 (primer párrafo, fracción IV).
Artículos 226 y 227.	Artículo 60 (segundo párrafo).
Artículos 2 (fracción IV) y 3 (fracciones XV y XVI).	Artículo 61 (primer párrafo).
Artículos 3 (fracción XVII), 4, 49 (fracción IX), 75 (primer párrafo) y TRANSITORIO TERCERO (párrafos quinto y séptimo).	Artículo 62.
Artículos 2 (fracción II), 78 y 84 (fracción II).	Artículos 63 y 64.
Artículo 25 (fracción II).	Artículo 74 (penúltimo párrafo).
TRANSITORIO TERCERO (quinto y séptimo párrafos).	Artículo 75 (sexto párrafo).
5.- Ley General de Sociedades Mercantiles. 4 de agosto de 1934. Artículo 73.	Artículo 50 (fracción VII).
6.- Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Nueva ley publicada el 4 de mayo de 2015. Artículos 1, 2 (fracciones VII y VIII), 70 (fracciones XXIII, XXVIII, XXXI, XXXII) y 77 (fracción VIII).	Artículo 2 (fracción II).
Artículos 4, 5, 20, 100, 107, 113 y 116.	Artículos 21 (primer párrafo), 26 Ter (penúltimo párrafo), 27 (segundo párrafo), 34 (primer párrafo), 37 (tercer párrafo) y 56 Bis (segundo párrafo).
Artículo 23.	Artículos 56, (segundo y tercer párrafos, fracciones II, III; cuarto párrafo, inciso f) y 56 Bis (segundo párrafo).
Artículo 208.	Artículo 63.
7.- ⇒Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. Nueva Ley publicada en el D.O.F. el 18 de julio de 2016. Artículos 51 y 52.	Artículos 2 (fracción II) y 21.
Artículo 2.	Artículo 27 (segundo, tercero y cuarto párrafos).
Artículo 51.	Artículos 56 (segundo párrafo) y 56 Bis.

⇒ Forma parte de las siete leyes que integran el Sistema Nacional Anticorrupción.

G) Marco normativo y criterios jurisprudenciales del régimen de adquisiciones públicas correlacionado.

Artículos 1, 3 (fracción VI), 4, 5, 37, 49 y Transitorio Tercero (séptimo párrafo).	Artículos 59 y 60 (fracciones I, II y III).
Artículos 53 y 56	Artículos 61, 62, 63, 64 y 65.
8.- Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. 30 de mayo de 2011 Artículo 2 (fracciones IX y XXI).	Artículo 14 (segundo párrafo).

- **LEYES FEDERALES**

9.- Ley de Ciencia y Tecnología. 5 de junio de 2002. Artículos 47 y 50.	Artículo 1 (cuarto párrafo).
10.- Ley de Comercio Exterior. 27 de julio de 1993. Artículo 28.	Artículo 53 (último párrafo).
11.- Ley de Coordinación Fiscal. 27 de diciembre de 1978. Capítulo V. De los Fondos de Aportaciones Federales. Artículo 25.	Artículo 1 (fracción VI).
12.- Ley de Firma Electrónica Avanzada. 11 de enero de 2012. Artículos 1 y 2 (fracciones IX y XII).	Artículos 27 (tercer y último párrafos).
Artículos 23, 24, 25, 26 y 27.	Artículos 45 (último párrafo) y 66 (sexto párrafo).
13.- ⇒Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. Nueva ley publicada en el D.O.F. el 18 de julio de 2016. Artículos 14 (fracción I, inciso b) y 17 (fracción VII).	Artículo 1 (primer y segundo párrafos).
Artículo 4 (fracciones III, IV y XXIV).	Artículo 1 (tercer párrafo).
Artículo 14 (fracción I, inciso a).	Artículo 3 (fracción VI).
Artículo 57.	Artículo 10.
Artículo 7.	Artículo 11.
Artículo 3.	Artículo 16 (último párrafo).
Artículos 2, 14 (fracción I, inciso a) y 47.	Artículo 18.
Artículos 1 y 59.	Artículo 20.
Artículo 47 (primer párrafo).	Artículo 21.
Artículo 2 (fracción I).	Artículo 22 (fracciones I y IV).

⇒ Forma parte de las siete leyes que integran el Sistema Nacional Anticorrupción.

G) Marco normativo y criterios jurisprudenciales del régimen de adquisiciones públicas correlacionado.

Artículos 3, 2 y 6.	Artículos 24, 25, 26 Ter (fracción IV) y 40 (segundo párrafo).
Artículos 6 y 10 (fracciones I, II y III).	Artículo 59.
Artículos 4 (fracción XIII) y 74.	Artículo 61.
Artículo 1 (último párrafo).	Artículo 62.
Artículo 66.	Artículo 63.
Artículo 104 (fracción IX).	Artículo 65.
Artículo 3.	Artículos 69 (fracción I, inciso d), 70 (tercer, quinto y sexto párrafos), 71 (tercer párrafo) y 76 (primer párrafo).
14.- Ley de Ingresos de la Federación. 15 de noviembre de 2016. Artículo 8 (fracción II).	Artículo 51 (segundo párrafo).
15.- Ley de Instituciones de Crédito. 18 de julio de 1990. Artículo 134 Bis 4 (derogado el 10/01/2014) Tiene su equivalente en el artículo 125.	Artículo 1 (fracción V).
16.- Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas. 4 de abril de 2013. Artículos 1, 270, 282 y 283.	Artículos 5 y 45 (fracción XI).
17.- Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 4 de enero del 2000. Artículos 39 y 78.	Artículos 37 (fracción I), 50 (fracción IV) y 60.
18.- Ley de Petróleos Mexicanos. 11 de agosto de 2014. Artículos 60 y 75.	Artículo 1 (tercer párrafo).
19.- Ley de Tesorería de la Federación 30 de diciembre de 2015.	Artículo 22 (fracción II).
Artículo 21 (tercer párrafo).	Artículos 41 (fracción XVIII) y 51 (tercer párrafo).
20.- Ley del Diario Oficial de la Federación y Gacetas Gubernamentales. 24 de diciembre de 1986. Artículo 2.	Artículo 30.
21.- Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas. 11 de junio de 2012. Última reforma publicada	

G) Marco normativo y criterios jurisprudenciales del régimen de adquisiciones públicas correlacionado.

Ley abrogada a partir del 19 de julio de 2017 por Decreto del DOF 18 de julio de 2016. Artículos 2 y 8 (fracción VIII).	Artículo 60 (fracciones I, II, III y IV).
Artículo 10.	Artículo 60 (cuarto párrafo).
Artículo 28.	Artículo 61.
Artículo 1.	Artículo 62 (primer párrafo).
Artículo 11.	Artículo 62 (segundo párrafo).
Artículo 7.	Artículo 63.
22.- Ley Federal de Competencia Económica. 23 de mayo de 2014. Artículo 12 (fracción XIX).	Artículos 26 (quinto párrafo) y 29 (segundo párrafo).
Artículo 53 (fracción IV).	Artículo 34 (sexto párrafo).
Artículos 9, 12 (fracciones XVII y XXVII) y 49 (fracción III).	Artículo 39 (primer párrafo).
23.- Ley Federal de las Entidades Paraestatales. 14 de mayo de 1986. Artículos 2, 4, 12, 14, 28 y 40.	Artículo 1 (fracciones IV y V).
24.- Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 30 de marzo de 2006. Artículo 1.	Artículo 1 (primer párrafo)
Artículo 4.	Artículo 1 (fracciones I, II y II).
Artículos 8 y 9.	Artículo 1 (fracción V).
Artículos 82 y 83.	Artículo 1 (fracción VI).
Artículo 5.	Artículo 1 (segundo párrafo).
Artículo 2 (fracciones XI, XII y XXXV.).	Artículo 1 (cuarto párrafo).
Artículo 50.	Artículo 3 (fracción VI).
Artículo 62.	Artículos 3 (fracción VIII) y 41 (fracciones X).
Artículo 63 (fracción II).	Artículo 3 (fracción IX).
Artículo 3.	Artículo 7 (primer párrafo).
Artículo 61 (fracción VI).	Artículo 9 (primer párrafo).
Artículo 36.	Artículo 10.
Artículo 63 (fracción III).	Artículo 17 (primer párrafo).
Artículo 64 (fracción III).	Artículo 17 (cuarto párrafo).
Artículo 42 (fracciones V y VI).	Artículo 20.
Artículo 44.	Artículo 20 (fracción III).
Artículo 106.	Artículo 21 (primer párrafo).
Artículos 24, 25 y 42 (fracción VII).	Artículos 14 (segundo párrafo), 24 y 26 (primer y segundo párrafos).

G) Marco normativo y criterios jurisprudenciales del régimen de adquisiciones públicas correlacionado.

Artículo 23.	Artículo 25 (primer párrafo).
Artículos 35 y 44.	Artículo 25 (segundo párrafo).
Artículos 32, 35 y 50.	Artículos 25 (último párrafo) y 29 (fracción XI).
Artículo 49.	Artículo 41 (fracción IV).
Artículos 55 y 56.	Artículos 48 (fracciones I y II) y 49 (fracciones I y II).
Artículo 116.	Artículo 59 (primer párrafo).
Artículo 115.	Artículo 61 (fracciones I, II, III y IV).
Artículos 112 y 114 (fracción VIII).	Artículos 62 (primer párrafo) y 75 (sexto párrafo).
Artículos 117 y 118.	Artículo 63.
25.- Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 4 de agosto de 1994. Artículos 28 (primer párrafo), 35-39.	Artículos 54 (fracciones I y II) y 60 (último párrafo).
Artículos 70, 70-A, 71-80.	Artículo 61 (último párrafo).
Artículos 83-96.	Artículos 74 (último párrafo) y 75 (primer y quinto párrafos).
Artículo 15.	Artículo 77.
26.- Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 13 de marzo de 2002. Artículo 8 (fracciones XI y XX).	Artículo 50 (fracción I).
Artículos 14 y 17 Bis.	Artículo 61.
Artículos 3, 11, 12, 13, 17, 19, 20, 21, 25, 30 y 31.	Artículo 62 (primer párrafo).
Artículo 7.	Artículo 63 (primer párrafo).
Artículo 32.	Artículo 75 (sexto párrafo).
27.- Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Título Cuarto. Información clasificada de los artículos 97 al 120. 9 de mayo de 2016. Artículos 97 y 110.	Artículos 19 (penúltimo y último párrafo), 21 (primer párrafo), 37 (tercer párrafo), 41 (fracción X, segundo párrafo), 56 (segundo y tercer párrafos, fracciones II, III; cuarto párrafo, inciso f) y 56 Bis (segundo párrafo).
28.- Ley Federal del Derecho de Autor. 24 de diciembre de 1996. Artículos 5 (segundo párrafo), 18 y 83.	Artículos 41 (fracción I) y 45 (fracción XX).
29.- Ley Federal sobre Metrología y Normalización. 1 de julio de 1992	

G) Marco normativo y criterios jurisprudenciales del régimen de adquisiciones públicas correlacionado.

Artículos 3 (fracciones X y X-A), 40, 49, 51-A, 52, 53, 54 y 67.	Artículos 20 (fracción VII) y 29 (fracción X).
Artículo 3 (fracciones IV-A y XV-A).	Artículo 58 (primer párrafo).
30.- Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, 27 de julio de 1931. Artículos 1, 2, 3, 7 y 8.	Artículo 45 (fracción XIII).
31.- ⇒Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 29 de diciembre de 1976. Artículos 1, 2 (fracciones I y II), 4, 6, 7, 8, 17 y 17 Bis.	Artículo 1 (fracciones I, II, III).
Artículos 3 (fracción I) y 45.	Artículo 1 (fracción IV).
Artículos 3 (fracciones II y III), 46 y 47.	Artículo 1 (fracción V).
Artículos 37 (fracciones I, II, IV, VII, IX, XIII, XIV, XXII, XXIV, XXV y XXVII) y 44.	Artículo 1 (segundo párrafo).
Artículo 31 (fracciones XXIV, XXIX y XXX).	Artículo 3 (fracciones III y VII).
Artículos 19, 31 (fracción XXXIV), 37 (fracciones VI, VII y XXI) y 50 (primer párrafo).	Artículo 7.
Artículo 37 (fracciones VI y XXVI).	Artículo 9 (primer párrafo).
Artículo 37 (fracción V) y 50 (primer párrafo).	Artículo 18 y 24.
Artículos 19, 37 (fracciones I, II, IV, IX, XIII, XIV, XXII, XXIV, XV y XXVII) y 44.	Artículo 22 (fracción VI).
Artículo 19.	Artículo 23 (fracción VIII).
Artículo 37 (fracción XXIII).	Artículo 40 (segundo párrafo).
Artículos 37 (fracciones I, II, IV, VII, IX, XIII, XIV, XXII, XXIV, XV y XXVII) y 44.	Artículos 26 Ter (segundo párrafo), 36 Bis (último párrafo), 37 (penúltimo y último párrafos), 40 (cuarto párrafo) y 43 (fracción II).
Artículo 37 (fracciones III y XI).	Artículo 55 (primer párrafo).
Artículos 37 (fracciones VII y XXIII) y 50 (primer párrafo).	Artículo 56 (primer y tercer párrafo, fracciones II y III).
Artículos 31 (fracción XII), 34 (fracción XXVI) y 37 (fracción VIII).	Artículos 57 y 58.
Artículo 37 (fracciones XVI, XVIII y XIX).	Artículo 62.
Artículo 37 (fracción XV).	Artículo 63.

⇒ Forma parte de las siete leyes que integran el Sistema Nacional Anticorrupción.

G) Marco normativo y criterios jurisprudenciales del régimen de adquisiciones públicas correlacionado.

Artículo 37 (fracción XVII).	Artículo 65 (primer párrafo).
32.- ⇒Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. 29 de mayo de 2009. Artículos 1, 9 (segundo párrafo) y 10 (fracción I BIS).	Artículo 1 (fracción III y penúltimo párrafo).
Artículos 10 Ter (fracciones IV, V y VI), 10 Quáter, 13 (fracción I, segundo párrafo) y 61 (fracción I).	Artículo 7 (tercer párrafo).
Artículo 10 Ter (fracciones XIII, XVII, XVIII y XIX).	Artículo 9 (primer párrafo).
Artículo 77.	Artículo 11.
Artículo 10 Bis (penúltimo y último párrafo).	Artículo 18 (fracción II).
Artículos 6 y 10 Bis (quinto párrafo).	Artículo 21 (primer párrafo).
Artículo 10 Ter (fracción XII).	Artículo 23 (fracción I).
Artículo 5 (fracción IX) y 10 Ter (fracción XV).	Artículo 56 (primer y segundo párrafos).
Artículo 10 Ter (fracciones XIV y XVI).	Artículo 57 (primer párrafo).
Artículos 10 Bis (sexto párrafo), 10 Ter (fracciones I, II y III), 21 (párrafo quinto), 67, 68, 69, 70, 73, 80 y 82.	Artículo 62.
Artículos 3, 10 Bis (primero, segundo, tercer y cuarto párrafos) y 10 Ter (fracciones VII, VIII, IX, X y XI).	Artículo 63.
33.- ⇒Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Nueva Ley publicada en el D.O.F.18 de julio de 2016. Artículos 23 (fracción XXV) y 38 (inciso B), fracción I)	Artículos 9 y 15.
Artículos 3 (fracción XII) y 38 (inciso B, fracciones II y IV).	Artículos 26 (octavo párrafo), 37 (séptimo párrafo) y 38.
Artículos 3 (fracción VIII) y 35 (fracción I).	Artículos 44 y 45.
Artículo 20.	Artículo 48 (fracción II).
Artículo 38 (inciso B, fracción I).	Artículos 53 Bis, 54 (primer y antepenúltimo párrafos), 59, y 60 (primer párrafo, fracciones I, II, III, IV y V).
Artículo 14.	Artículo 61.

⇒ Forma parte de las siete leyes que integran el Sistema Nacional Anticorrupción.

⇒ Forma parte de las siete leyes que integran el Sistema Nacional Anticorrupción.

G) Marco normativo y criterios jurisprudenciales del régimen de adquisiciones públicas correlacionado.

Artículos 4, 13, 16 (fracción XI), 37 y 38 (incisos A y B, fracción III).	Artículo 62.
Artículo 3 (fracción VIII).	Artículo 65 (fracciones III y V).
Artículo 3 (fracción X).	Artículo 70 (noveno párrafo).
Artículos 35 (fracciones I, II y IV), 38 (inciso B, fracciones III y IV) y 3 (fracciones XII y XIII).	Artículos 72, 73, 74 y 75.
Artículo 38 (inciso B, fracción I).	Artículos 80 y 84.
Artículos 1 y 3 (fracciones IV y XVI).	Artículo 85.
34.- Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 30 de diciembre de 2002. Artículo 10 (fracción IX).	Artículos 8 (primer párrafo), 13 (segundo párrafo), 14 (segundo párrafo) y 36 Bis (segundo párrafo).
35.- Ley sobre el Contrato de Seguro. 31 de agosto de 1935. Artículos 14, 21, 66-70, 72-75, 78, 79- 80.	Artículo 5.

- **CODIGOS**

36.- Código Civil Federal en cuatro partes los días 26 de mayo, 14 de julio, 3 y 31 de agosto de 1928. CAPITULO II. De los Bienes Muebles (artículos 752 al 763). Artículos 752, 753, 754 y 763.	Artículo 3 (fracción I).
Artículo 16.	Artículos 11 (primer párrafo), 12 Bis, 41 (fracción IX, segundo párrafo) y 61 (último párrafo).
37.- Código de Comercio. 13 de diciembre de 1889. LIBRO QUINTO. De los Juicios Mercantiles. Título Cuarto. Del Arbitraje Comercial. (Artículos 1415 al 1480). Artículos 1416 (fracción I) y 1423.	Artículos 80 (primer párrafo) y 81.
38.- Código Federal de Procedimientos Civiles. 24 de febrero de 1943. Libro segundo. Contención. Título Primero. Juicio. Capítulo I. Demanda (artículos 322 al 326).	

G) Marco normativo y criterios jurisprudenciales del régimen de adquisiciones públicas correlacionado.

Capítulo II. Emplazamiento (artículos 327 al 328). Capítulo III. Contestación de la demanda (artículos 329 al 336). Capítulo IV. Término probatorio (artículo 337 al 340). Capítulo V. Audiencia final de juicio (artículos 341 al 344). Capítulo VI. Sentencia (artículos 345 al 353). Capítulo VII. Sentencia ejecutoria (artículo 354 al 357).	Artículos 11 (primer párrafo) y 61 (último párrafo).
39.- Código Fiscal de la Federación. 31 de diciembre de 1981. Artículo 32- D.	Artículo 7 (primer y segundo párrafo).
40.- ⇒Código Penal Federal. 14 de agosto de 1931• Artículo 212 (primer párrafo).	Artículo 1 (primer, segundo y tercer párrafos).
Artículo 223 (fracciones II, III, tercer y cuarto párrafo).	Artículo 24.
Artículo 217 (fracción III).	Artículo 25 (primer párrafo).
Artículos 217 (fracción I, inciso B), 220 (fracción I, penúltimo y último párrafos), 222 (fracciones I y II) y 223 (fracción I).	Artículo 50 (fracciones I, II y XII).
Artículos 221 (fracción IV y último párrafo), Artículo 222 (fracción III, segundo, cuarto y quinto párrafos) y artículo 224.	Artículo 50 (fracción XII).
Artículo 214 (fracción III).	
Artículos 212 (quinto párrafo) y 217 Bis.	Artículo 60 (primer, segundo y tercer párrafos).
Artículo 215 (fracción XI).	Artículos 60 (último párrafo) y 61.
Artículos 213, 212 (tercer, cuarto, sexto y séptimo párrafos), 213-Bis, 215 (fracción IX), 216, 217 (fracción I, inciso D), I bis, incisos A) y B), 218 (cuarto y quinto párrafos) y 219 (fracción I).	Artículos 62 y 63.
Artículos 216 y 219 (fracción I).	Artículo 75 (sexto párrafo).

⇒ Forma parte de las siete leyes que integran el Sistema Nacional Anticorrupción.

• Las reformas publicadas en el decreto del 18 de julio de 2016, para la entrada en vigor del Sistema Nacional Anticorrupción, modifican el Título Décimo. Delitos por hechos de corrupción.

G) Marco normativo y criterios jurisprudenciales del régimen de adquisiciones públicas correlacionado.

- **REGLAMENTOS**

41.- Reglamento de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación. 15 de marzo de 1999. Artículos 17, 50, 137, 139, 142, 143 y 144.	Artículos 41 (fracción XVIII) y 45 (fracción XI).
Artículos 84, 93 y 136.	Artículos 48 (párrafo segundo), 49 y 51 (tercer párrafo).
42.- Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. 26 de enero de 1990. CAPITULO I Disposiciones Generales. (Artículos 1 al 4). CAPITULO II De la Constitución y Extinción de las Entidades. (Artículos 5 al 13). CAPITULO III De los Titulares de las Entidades. (Artículos 14 al 15). CAPITULO IV Del Órgano de Gobierno. (Artículos 16 al 21). CAPITULO V De la Operación de las Entidades. (Artículos 22 al 28). CAPITULO VI De la Vigilancia, Control y Evaluación de las Entidades. (Artículos 29 al 34). CAPÍTULO VII Del Registro Público de Organismos Descentralizados. (Artículos 35 al 46).	Artículo 1 (fracciones IV y V).
43.- Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 28 de junio de 2006. Artículos 8 C, 8 G, 215, 217, 221, 56 (fracción IV, inciso d), 223, 224, 226, y 60.	Artículo 1 (primer y segundo párrafos).
Artículo 147 (fracción I) y 300.	Artículo 3 (fracción VI).
Artículo 30.	Artículo 3 (fracción y IX).
Artículo 3.	Artículo 7 (primer párrafo).
Artículos 54, 55, 159, 160, 161, 162, 164, 165, 166, 167, 168 y 169.	Artículos 10 y 28 (fracción III, inciso b).
Artículo 149.	Artículo 12.
Artículo 130 (segundo párrafo).	Artículo 17 (último párrafo).

G) Marco normativo y criterios jurisprudenciales del régimen de adquisiciones públicas correlacionado.

Artículo 21.	Artículo 18.
Artículo 61.	Artículo 20 (fracción III).
Artículo 25 (fracción IV, inciso a y b).	Artículo 24.
Artículo 8 (fracción II).	Artículo 25 (primer párrafo).
Artículo 146.	Artículo 25 (segundo párrafo).
Artículos 5 (fracción IV), 146 (segundo párrafo), 147 (fracción I) y 148.	Artículo 25 (tercer párrafo).
Artículo 66.	Artículos 38 (último párrafo) y 46 (tercer párrafo).
Artículo 212.	Artículo 41 (fracciones IV y X, segundo párrafo).
Artículo 58.	Artículo 42 (primer, segundo y último párrafos).
Artículos 54 (primer párrafo), 78, 61 A (tercer párrafo), 131 (párrafo primero fracción V) y 163.	Artículo 45 (fracción XIII).
Artículo 79 (fracción IV).	Artículos 1 (penúltimo párrafo), 38 (segundo párrafo), 48 (fracción II y segundo párrafo), 49, 50 (fracción XIII) y 81.
Artículo 77.	Artículos 53 (primero párrafo) y 53 Bis.
Artículo 305.	Artículo 57 (primer y último párrafos).
Artículo 311 (fracción VI y último párrafo).	Artículos 62 (primer párrafo) y 63.
44.- Reglamento de la Oficina de la Presidencia de la República. 02 de abril de 2013. Artículo 10 (fracción V).	Artículo 1 (fracción I).
45.- Reglamento del artículo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas para el cobro de fianzas otorgadas a favor de la Federación, del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios, distintas de las que garantizan obligaciones fiscales Federales a cargo de terceros. 15 de enero de 1991 Artículo 1.	Artículo 48 (párrafo segundo).
46.- Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública. 15 de abril de 2009. Artículos 1, 3 (apartado A fracciones IX, X XIII, XVI, XVII XXI, XXII, XXIII, 1, B, C, D y E), 34, 36, 37 y 38.	Artículos 2 (fracción II, segundo párrafo), 7, 9 (primer párrafo) y 56 (segundo párrafo).

G) Marco normativo y criterios jurisprudenciales del régimen de adquisiciones públicas correlacionado.

- **DECRETOS**

47.- DECRETO por el que se establecen diversas medidas en materia de adquisiciones, uso de papel y de la certificación de manejo sustentable de bosques por la Administración Pública Federal. 5 de septiembre de 2007.	Artículo 26 (segundo, tercer y cuarto párrafos).
48.- DECRETO que establece las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la Administración Pública Federal. 10 de diciembre de 2012. 49.- DECRETO por el que se modifica el diverso que establece las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la Administración Pública Federal. 30 de diciembre de 2013. Artículos 21 y 22.	Artículos 1 (primer y último párrafos), 9 (primer párrafo), 18 (fracción II), 24 y 40 (segundo párrafo).
50.- DECRETO que tiene por objeto establecer la estructura, el funcionamiento y el control de los organismos subsidiarios de Petróleos Mexicanos. 21 de marzo de 2012.	Artículo 1 (tercer párrafo).
51.- Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017. 30 de diciembre de 2016.	Artículos 18 (fracción II), 24 y 42 (primer y cuarto párrafos).

- **ACUERDOS**

52.- ACUERDO por el que se crea con carácter permanente la Comisión Intersecretarial de Compras y Obras de la	

G) Marco normativo y criterios jurisprudenciales del régimen de adquisiciones públicas correlacionado.

Administración Pública Federal a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 15 de enero de 2009.	Artículo 8.
53.- ACUERDO por el que se dan a conocer las Reglas para la aplicación de las reservas de compras del sector público establecidas en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y para la determinación del contenido nacional en los procedimientos de contratación de obras públicas. 28 de septiembre de 2000	Artículos 14, 26 (último párrafo) y 28 (fracción II).
54.- ACUERDO por el que se emiten diversos lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios y de obras públicas y servicios relacionados con las mismas 09 de septiembre de 2010.	
a. De los Lineamientos Generales para la Expedición de Políticas, Bases y Lineamientos (Capítulo Primero)	Artículo 1 (penúltimo párrafo).
b. De los Lineamientos para la Aplicación del Criterio de Evaluación de Proposiciones a través del Mecanismo de Puntos o Porcentajes en los Procedimientos de Contratación (Capítulo Segundo)	Artículo 36 (segundo y tercer párrafos).
c. De los Lineamientos para la Reducción de los Montos de Garantías de Cumplimiento que deban Constituir los Proveedores y Contratistas (Capítulo Tercero)	Artículo 48 (párrafo segundo).
d. De los Lineamientos para la Utilización de la Modalidad de Ofertas Subsecuentes de Descuentos en las Licitaciones Públicas Electrónicas (Capítulo Cuarto)	Artículos 2 (fracción VIII), 28 (quinto y sexto párrafos), 35 (último párrafo) y 36 Bis (fracción III).

G) Marco normativo y criterios jurisprudenciales del régimen de adquisiciones públicas correlacionado.

e. De los Lineamientos para Promover la Agilización del Pago a Proveedores (Capítulo Quinto)	Artículos 45 (fracciones VI, XIV y XXII) y 51 (primer y segundo párrafos).
55.- ACUERDO por el que se establece la estratificación de las micro, pequeñas y medianas empresas. 30 de junio de 2009.	Artículo 8.
56.- ACUERDO por el que se establecen las disposiciones en Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales. 16 de julio de 2010. 57.- ACUERDO por el que se modifica el diverso por el que se establecen las disposiciones en Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales, publicado el 16 de julio de 2010. 20 de julio de 2011 con modificaciones el 14 de enero de 2015.	Artículos 3 (fracción V) y 5.
58.- ACUERDO por el que se establecen las disposiciones para el uso de medios remotos de comunicación electrónica, en el envío de propuestas dentro de las licitaciones públicas que celebren las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como en la presentación de las inconformidades por la misma vía. 09 de Agosto de 2000.	Artículos 2, (fracción II), 26 Bis (fracción II), 27 (primer y tercer párrafos) y 30.
59.- ACUERDO por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado CompraNet. 28 de junio de 2011.	Artículos 2 (fracción II), 26 Bis (fracción II), 27 (primer y tercer párrafos), 30, 37 Bis, 56 (segundo y penúltimo párrafos) y 66 (sexto y séptimo párrafos).
60.- ACUERDO por el que se establecen las Reglas para la realización de proyectos de prestación de servicios. 9 de abril de 2004.	Artículo 3 (fracción VI).

G) Marco normativo y criterios jurisprudenciales del régimen de adquisiciones públicas correlacionado.

61.- ACUERDO por el que se establecen los Lineamientos Generales para las Campañas de Comunicación Social de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para el ejercicio fiscal 2015. 31 de diciembre de 2014.	Artículos 3 (fracción IX) y 13 (último párrafo).
Artículo 3 (fracciones XII y XVII).	Artículos 25 y 56.
62.- ACUERDO por el que se expide el protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas, otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones. 20 de agosto de 2015.	Artículos 1 (cuarto párrafo), 16 (último párrafo), 24, 40 (segundo párrafo).
63.- ACUERDO que tiene por objeto emitir el Código de Ética de los servidores públicos del Gobierno Federal, las Reglas de Integridad para el ejercicio de la función pública, y los Lineamientos generales para propiciar la integridad de los servidores públicos y para implementar acciones permanentes que favorezcan su comportamiento ético, a través de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés. 20 de septiembre de 2015.	Artículos 1 (cuarto párrafo), 16 (último párrafo), 24, 40 (segundo párrafo).

- **MANUALES**

64.- Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 9 de agosto de 2010 con reformas del 03 de febrero de 2016.	Título primero. (Artículos 1 al 25). Título segundo (Derogado).
4.2 Contratación.	Título segundo. Capítulo I. (Artículos 26 y 27). Capítulo II. (Artículos 28 al 39). Capítulo III. (Artículo 40 al 43).

G) Marco normativo y criterios jurisprudenciales del régimen de adquisiciones públicas correlacionado.

65.- Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales. 16 de julio de 2010.	Artículos 3 (fracciones IV y V), 5, 20 (fracción VIII), 41 (fracción XV), 55 (primer párrafo).

- **REGLAS**

66.- Reglas de Operación del Comité Técnico del Consejo de Seguridad Nacional. 10 de mayo de 2008 con reformas el 18 de mayo de 2011.	Artículos 26 Ter (penúltimo párrafo), 40 (cuarto párrafo) y 41 (fracción IV).
67.- Reglas para la aplicación de las reservas contenidas en los capítulos o títulos de compras del sector público de los tratados de libre comercio suscritos por los Estados Unidos Mexicanos. 28 de diciembre 2010.	Artículos 4, 26 (último párrafo) y 28 (fracción II, inciso a).
68.- Reglas para la aplicación del margen de preferencia en el precio de los bienes de origen nacional, respecto del precio de los bienes de importación, en los procedimientos de contratación de carácter internacional abierto que realizan las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 28 de diciembre de 2010.	Artículos 14 (primer párrafo), 26 (último párrafo), 28 (fracción I) y 40 (último párrafo).
69.- Reglas para la celebración de licitaciones públicas internacionales bajo la cobertura de tratados de libre comercio suscritos por los Estados Unidos Mexicanos. 28 de diciembre de 2010.	Artículos 2 (fracción V), 4, 15 (segundo párrafo) y 28 (fracción II, inciso a).
70.- Reglas para la determinación, acreditación y verificación del contenido nacional de los bienes que se ofertan y entregan en los procedimientos de contratación, así como para la aplicación del requisito de contenido nacional en la contratación de obras públicas, que celebren las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 14 de octubre de 2010.	Artículo 28 (fracción I, segundo párrafo).

G) Marco normativo y criterios jurisprudenciales del régimen de adquisiciones públicas correlacionado.

71.- Reglas para la obtención de la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social. 27 de febrero de 2015.	Artículo 7 (primer y segundo párrafo).

- **LINEAMIENTOS**

72.- Lineamientos para la aplicación y seguimiento de las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la Administración Pública Federal. 30 de enero de 2013. 20. Disminuir costo.	Artículos 9 (primer párrafo) y 17 (primer párrafo).
3. Responsabilidades de los OM	Artículo 24.
1. Establecer criterios	Artículo 40 (segundo párrafo)
2. Excepción a los lineamientos	Artículo 41 (fracción IV).
73.- Lineamientos para la contratación de los servicios de telefonía a larga distancia por parte de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 07 de mayo de 1997.	Artículos 3 (fracción IX).
74.- Lineamientos para las adquisiciones de papel para uso de oficina por parte de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 2 de octubre de 2009.	Artículo 26 (cuarto párrafo).

- **CRITERIOS NORMATIVOS**

75.- Cálculo y determinación del porcentaje del treinta por ciento a que se refiere el artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (AD-01/2011). Noviembre de 2001, actualizado en enero de 2011.	Artículo 42 (cuarto párrafo).
76.- Criterio de interpretación de los artículos 22 fracción VI de la LAASSP y 19	

de su Reglamento, para la Integración del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. (AD-10/2010) noviembre de 2010	Artículo 22 (fracción VI).
77.- Criterios generales para determinar la normatividad aplicable en los proyectos sujetos al programa para la modernización de los organismos operadores de agua (PROMAGUA) y otros similares apoyados con recursos de fondos federales para el desarrollo de infraestructura. OP/01/2008. Agosto de 2008	Artículo 3 (fracción VI).
78- Determinación y asignación de la puntuación o unidades porcentuales en diversos rubros y subrubros, así como valoración de su acreditación, previstos en los Lineamientos para la aplicación del criterio de evaluación de proposiciones a través del mecanismo de puntos o porcentajes en los procedimientos de contratación regulados por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 9 de enero de 2012.	Artículo 36 (segundo y tercer párrafos).
79.- Divisibilidad o indivisibilidad de las obligaciones contractuales y aplicación total o proporcional de la garantía de cumplimiento de los contratos sujetos a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. (AD-02/2011) Mayo de 2011	Artículos 45 (fracción XI) y 48 (fracción II).
80.- Garantía de Cumplimiento - Improcedencia de Requerirla a Instituciones de Seguros (AD-2/2010) Noviembre de 2001, actualizado en diciembre de 2010.	Artículos 3 (fracción IX), 45 (fracción XI) y 48 (fracción II).
81.- Incrementos en Contratos Abiertos (AD-03/2010). Octubre de 2008 y actualizado en diciembre de 2010.	Artículos 47 (fracción II, segundo párrafo) y 52.

G) Marco normativo y criterios jurisprudenciales del régimen de adquisiciones públicas correlacionado.

82.- Penas Convencionales (AD-05/2010) Octubre de 2008 y actualizado en diciembre de 2010.	Artículos 45 (fracción XIX) y 53 (primer párrafo).

- **CIRCULAR**

83.- Circular que contiene los lineamientos generales relativos a los aspectos de sustentabilidad ambiental para las adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público. 31 de octubre de 2007.	Artículo 26 (segundo, tercer y cuarto párrafos).

- **OFICIO-CIRCULAR**

84.- Oficio Circular dirigido a los Oficiales Mayores de las Dependencias y Homólogos de las Entidades Paraestatales, por medio del cual se les dan a conocer los formatos para la expedición de las garantías de cumplimiento, anticipo y demás aplicables a las adquisiciones, arrendamientos y servicios.	Artículo 48.
85.- Oficio - Circular No. SACN/300/148/2003. Relativo a la difusión de lineamientos de la Convención contra el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). 3 de septiembre de 2003.	Artículos 62 (primer párrafo) y 63.
86.- Oficio Circular No. SRACP/300/091/2012. Relativo a la participación de la Unidad de Normatividad de Contrataciones Públicas en los Comités (Participación a petición expresa del OIC como asesor en los comités, no así en comisiones consultivas mixtas de abastecimiento). 14 de marzo de 2012.	Artículo 22 (fracción VI, inciso d y último párrafo).

G) Marco normativo y criterios jurisprudenciales del régimen de adquisiciones públicas correlacionado.

87.- Oficio Circular No. UNAOPSPF/309/0743/2008. Emitido por la Titular de la Unidad de Normatividad de Adquisiciones, Obras Públicas, Servicios y Patrimonio Federal por el que se establece el procedimiento que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y las entidades federativas que realicen contrataciones con recursos federales, previo a la formalización de los contratos o pedidos que sean celebrados bajo el ámbito de las leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para verificar que los proveedores o contratistas están al corriente en sus obligaciones fiscales.	Artículo 7 (primer y segundo párrafo).
88.- Oficio Circular UPCP/308/0323/2009. Procedimiento de Captura y Envío de los Programas Anuales a la Secretaría de la Función Pública, emitido el 3 de diciembre de 2009 por el Titular de la Unidad de Política de Contrataciones Públicas de la citada Secretaría.	Artículos 20 y 21 (primer párrafo).

- **DISPOSICIONES GENERALES**

89.- Disposiciones Generales a las que deberán sujetarse las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para su incorporación al Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C. Institución de Banca de Desarrollo. 25 de junio de 2010.	Artículos 45 (fracción XIV) y 51 (primer y segundo párrafos).

- **GUÍAS**

90.- Guía General que regula el programa de acompañamiento preventivo en las contrataciones que realicen las	

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.	Artículo 7 (segundo párrafo).
91.- Guía para la calificación, aceptación y remisión de las garantías para su efectividad a la Tesorería de la Federación. Septiembre de 2009.	Artículo 49.

- **INSTRUCTIVO**

92.- Instructivo para la elaboración de la liquidación de Adeudo y Acta Administrativa de incumplimiento de Obligaciones emitido por la Tesorería de la Federación, mediante oficio 401-T-2754 del 21 de enero de 2010 y que como anexo forma parte de la Guía para la calificación, aceptación y remisión de las garantías para su efectividad a la Tesorería de la Federación. 21 de enero de 2010.	Artículo 49.

- **OTRAS DISPOSICIONES**

93.- Miscelánea Fiscal para 2017, artículo 32-D. 23 de diciembre de 2016. Incluye modificaciones de la Tercera Resolución de modificaciones a la Miscelánea Fiscal para 2017 y sus anexos 1-A y 3, publicadas en el DOF el 21 de septiembre de 2017.	Artículo 7 (primer y segundo párrafo).
94.- Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.	Artículo 18 (fracción I).

- **JURISPRUDENCIAS Y TESIS AISLADAS**

1.- Acto de autoridad para los efectos del amparo. Lo constituye la resolución que declara la nulidad de una licitación pública nacional dentro del recurso de inconformidad emitida por el Instituto Mexicano del Seguro Social. No. Registro: 177389. Localización: 9ª. Época; T.C.C.;	

G) Marco normativo y criterios jurisprudenciales del régimen de adquisiciones públicas correlacionado.

S.J.F. y su Gaceta; XXII, Septiembre de 2005; Pág. 1404; [T.A.]	Artículo 74 (primer párrafo fracción IV y último párrafo).
2.- Adjudicación directa. Hipótesis que deben actualizarse para que una dependencia o entidad de la Administración Pública Federal pueda optar por ese procedimiento de contratación (legislación vigente en 2008). [TA]; 10ª. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 3; Pág. 1903; No. de registro: 2002951	Artículos 22 (fracción II), 40 (primer párrafo), 41 (fracción I) y 42.
3.- Adjudicación por convenio o transacción judicial, efectos de la. Registro: 203544. Localización: 9ª. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; II, Diciembre de 1995; Pág. 488; [T.A.]	Artículo 41 (fracción XVIII).
4.- Adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público. El artículo 2o., fracción XII, de la ley relativa, no genera inseguridad jurídica al no conocerse, de antemano, cuál será el precio conveniente en una licitación pública. Época: Décima Época; Registro: 160718; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Libro II, Noviembre de 2011, Tomo 1; Materia(s): Constitucional; Tesis: 1a. CCXX/2011 (9a.); Página: 190 5.- Adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público. El artículo 2o., fracción XII, de la ley relativa, que prevé el procedimiento para determinar el precio conveniente en una licitación pública, respeta la garantía de seguridad jurídica. Época: Décima Época; Registro: 160717; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Libro II, Noviembre de 2011, Tomo 1; Materia(s): Constitucional; Tesis: 1a. CCXIX/2011 (9a.); Página: 190.	Artículo 2 (fracción XII).

G) Marco normativo y criterios jurisprudenciales del régimen de adquisiciones públicas correlacionado.

6.- Adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público. El artículo 36 bis, fracción II, de la ley relativa, al disponer que el precio ofertado no debe ser menor al precio conveniente, no viola la garantía de seguridad jurídica. Época: Décima; Registro: 160716; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Libro II, Noviembre de 2011, Tomo 1; Materia(s): Constitucional; Tesis: 1a. CCXXI/2011 (9a.); Página: 191.	Artículo 36 Bis (fracción II).
7.- Adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público. El artículo 50, fracción VI, de la ley relativa, publicada en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de enero de dos mil, no transgrede la garantía de libertad de trabajo prevista en el artículo 5o. De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Época: Novena Época; Registro: 188894; Instancia: Segunda Sala; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XIV, Septiembre de 2001; Materia(s): Constitucional, Administrativa; Tesis: 2a. CLXXIV/2001; Página: 516.	Artículo 50 (fracción VI). Texto de la ley con las reformas del 4 de enero de 2000: Artículo 50 (fracción VI).
8.- Adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público. El artículo 59 de la ley relativa no permite a la autoridad administrativa determinar en forma discrecional las conductas que deben considerarse como infracciones y, por tanto, no viola el artículo 22 constitucional. Época: Novena Época; Registro: 171252; Instancia: Segunda Sala; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XXVI, Octubre de 2007; Materia(s): Constitucional, Administrativa; Tesis: 2a. CXLV/2007; Página: 439.	

G) Marco normativo y criterios jurisprudenciales del régimen de adquisiciones públicas correlacionado.

9.- Adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público. El artículo 59 de la ley relativa no viola el numeral 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Época: Novena Época; Registro: 171251; Instancia: Segunda Sala; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XXVI, Octubre de 2007; Materia(s): Constitucional, Administrativa; Tesis: 2a. CXLVI/2007; Página: 440. 10.- Adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público. El artículo 59 de la ley relativa no viola las garantías de legalidad y seguridad jurídica (legislación vigente a partir del 8 de julio de 2005). Época: Novena Época; Registro: 170563; Instancia: Segunda Sala; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XXVII, Enero de 2008; Materia(s): Constitucional, Administrativa; Tesis: 2a. CCIV/2007; Página: 571 11.- Adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público. El artículo 59, en relación con el 60, fracción IV, y 61 de la ley relativa, al prever la imposición de una multa a los licitantes o proveedores que hayan proporcionado información falsa en algún procedimiento de contratación, no violan las garantías de seguridad jurídica y legalidad. Época: Novena Época; Registro: 171551; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XXVI, Septiembre de 2007; Materia(s): Constitucional, Administrativa; Tesis: 1a. CCVII/2007; Página: 373.	Artículo 59. Texto de la ley con las reformas del 7 de julio de 2005: Artículos 59, 60 (fracción IV) y 61 (primer párrafo).

G) Marco normativo y criterios jurisprudenciales del régimen de adquisiciones públicas correlacionado.

12.- Adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público. El Artículo 60, antepenúltimo párrafo, de la Ley relativa no viola la garantía de seguridad jurídica. Registro: 170141. Localización: 9ª. Época; 2ª. Sala; S.J.F. y su Gaceta; XXVII, Marzo de 2008; Pág. 277; [T.A.]	Artículo 60 (antepenúltimo párrafo).
13.- Adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público. El artículo 60 de la ley relativa es congruente con el artículo 134 de la Constitución Federal (legislación vigente hasta el 7 de julio de 2005). Época: Novena; Registro: 175161; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XXIII, Mayo de 2006; Materia(s): Constitucional, Administrativa; Tesis: 1a. XCI/2006; Página: 266. 14.- Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. El artículo 60 de la ley relativa es congruente con el artículo 5o. de la Constitución Federal (legislación vigente hasta el 7 de julio de 2005). Época: Novena; Registro: 175160; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XXIII, Mayo de 2006; Materia(s): Constitucional, Administrativa; Tesis: 1a. LXXXIX/2006; Página: 265. 15.- Adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público. El artículo 60 de la ley relativa no transgrede la garantía de audiencia (legislación vigente hasta el 7 de julio de 2005). Época: Novena; Registro: 175159; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la	Artículo 60 (fracción IV y antepenúltimo párrafo).

G) Marco normativo y criterios jurisprudenciales del régimen de adquisiciones públicas correlacionado.

Federación y su Gaceta; Tomo XXIII, Mayo de 2006; Materia(s): Constitucional, Administrativa; Tesis: 1a. XC/2006; Página: 266	Texto de la ley con las reformas del 7 de julio de 2005: Artículo 60.
16.- Adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público. El artículo 60, fracción IV, de la ley relativa no viola el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (legislación vigente a partir del 8 de julio de 2005). Época: Novena Época; Registro: 170562; Instancia: Segunda Sala; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XXVII, Enero de 2008; Materia(s): Constitucional, Administrativa; Tesis: 2a. CCV/2007; Página: 572. 17.- Adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público. El artículo 60, fracción IV, de la ley relativa no viola la garantía de libertad de trabajo (legislación vigente a partir del 8 de julio de 2005). Época: Novena Época; Registro: 170561; Instancia: Segunda Sala; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XXVII, Enero de 2008; Materia(s): Constitucional, Administrativa; Tesis: 2a. CCVI/2007; Página: 572.	Artículo 60 (fracción IV). Texto de la ley con las reformas del 7 de julio de 2005: Artículo 60 (fracción IV).
18.- Adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público. El artículo 60, primer párrafo y fracción IV, de la ley relativa no transgrede el artículo 21 de la Constitución Federal. Época: Novena Época; Registro: 173632; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XXV, Enero de 2007; Materia(s): Constitucional, Administrativa; Tesis: 1a. V/2007; Página: 471.	Artículo 60 (fracción IV).

G) Marco normativo y criterios jurisprudenciales del régimen de adquisiciones públicas correlacionado.

19.- Adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público. El artículo 65 de la ley relativa, al condicionar la procedencia del recurso de inconformidad a que el licitante asista a la junta de aclaraciones, viola la garantía de audiencia (texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de mayo de 2009). Registro: 163700. Localización: 9ª. Época; 2ª. Sala; S.J.F. y su Gaceta; XXXII, Marzo de 2010; XXXII Pág. 377 [TA]	Artículos 33 Bis, 65, 67 (fracción I) y 71 (primer párrafo).
20.- Adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público. El artículo 65 de la ley relativa, al obligar al licitante a que en el momento de la celebración de la junta de aclaraciones objete fundadamente los actos que considere ilícitos, viola el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Época: Novena Época; Registro: 170983; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XXVI, Noviembre de 2007; Materia(s): Constitucional, Administrativa; Tesis: 1a./J. 154/2007; Página: 5.	Artículo 65 (fracción I). Texto de la ley con las reformas del 7 de julio de 2005: Artículo 65 (fracción I).
21.- Adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público. La inconformidad prevista en el Artículo 65 de la Ley relativa no procede contra actos emitidos dentro del procedimiento de contratación por adjudicación directa (legislación vigente del 8 de julio de 2005 al 26 de junio de 2009). [J]; 9ª. Época; 2ª. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXX, Noviembre de 2009; Pág. 421; Registro: 166036	Artículos 33 Bis, 65, 67 (fracción I) y 71 (primer párrafo).
22.- Adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público. La multa e inhabilitación temporal para licitantes ganadores previstas en los	

G) Marco normativo y criterios jurisprudenciales del régimen de adquisiciones públicas correlacionado.

artículos 59 y 60, fracción I, de la ley relativa, son sanciones razonables. [TA]; 10ª. Época; 1ª. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 1; Pág. 477; No. de registro: 2001222	Artículos 59 y 60.
23.- Adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público. La rescisión de un contrato administrativo decretada con fundamento en el Artículo 54 de la ley relativa, constituye un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, con independencia de que esa contratación haya tenido su origen en una licitación pública, invitación a cuando menos tres personas o adjudicación directa. Registro: 166035. Localización: 9ª. Época; T.C.C.; S.J.F. y su gaceta; XXX, noviembre de 2009; Pág. 875; [T.A]	Artículos 26, 41, 45 (fracción XVI) y 54.
24.- Adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público. Los artículos 2o., fracción XII y 36 Bis, fracción II, de la ley relativa, no violan la garantía de audiencia. Época: Décima Época; Registro: 160715; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Libro II, Noviembre de 2011, Tomo 1; Materia(s): Constitucional; Tesis: 1a. CCXXII/2011 (9a.); Página: 192.	Artículos 2 (fracción XII) y 36 Bis (fracción II).
25.- Adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público. Los artículos 59 y 60, fracción I, de la ley relativa que prevén multa e inhabilitación temporal para licitantes ganadores, no transgreden el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Época: Décima Época; Registro: 2001223; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 1; Materia(s):	

G) Marco normativo y criterios jurisprudenciales del régimen de adquisiciones públicas correlacionado.

Constitucional, Administrativa; Tesis: 1a. CXLIII/2012 (10a.); Página: 477.	Artículos 46, 59 y 60.
26.- Adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público. Los artículos 59 y 60, primer párrafo y fracción IV de este último, de la ley relativa respetan el principio de división de poderes. Época: Novena Época; Registro: 173631; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XXV, Enero de 2007; Materia(s): Constitucional, Administrativa; Tesis: 1a. IV/2007; Página: 472.	Artículos 59 y 60 (fracción IV).
27.- Adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público. Para efectos de la adjudicación directa de un contrato celebrado sin sujetarse al procedimiento de licitación pública, conforme al supuesto previsto en el artículo 41, fracción I, de la ley relativa, es necesario que el particular acredite fehacientemente ante la autoridad correspondiente que posee la titularidad o licencia exclusiva de patentes, derechos de autor u otros derechos exclusivos, mediante la comprobación de su registro ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. [TA]; 9ª. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXXII, Agosto de 2010; Pág. 2201; Registro: 164182	Artículos 40 (párrafo primero) y 41 (fracción I).
28.- Adquisiciones y obras públicas. Los artículos 41, fracciones VI, VII Y XII y 88 de la ley relativa, que impiden que las dependencias reciban propuestas o celebren contratos con personas físicas o morales, o que éstas las realicen, cuando hubieran proporcionado información que resulte falsa, o que hayan actuado con dolo o mala fe en algún proceso para la adjudicación o celebración de un contrato o que se haya efectuado en contravención a la ley, no violan la garantía de libertad de	

G) Marco normativo y criterios jurisprudenciales del régimen de adquisiciones públicas correlacionado.

trabajo consagrada en el artículo 5o. de la Constitución Federal. Época: Novena Época; Registro: 190614; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XII, Diciembre de 2000; Materia(s): Constitucional, Administrativa; Tesis: 1a. XLIX/2000; Página: 238	Artículo 60 (fracción IV y segundo párrafo). Texto de la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas del 30 de diciembre de 1993. Artículo 41 (fracciones VI, VII y XII).
29.- Adquisiciones y obras públicas. Los artículos 87, 90 y 91 de la ley relativa, que prevén la imposición de una multa por la infracción a las disposiciones contenidas en ella, no violan el artículo 22 de la Constitución Federal. Época: Novena; Registro: 190621; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XII, Diciembre de 2000; Materia(s): Constitucional, Administrativa; Tesis: 1a. LI/2000; Página: 239	Artículos 59 (primer párrafo), 61 y 64. Texto de la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas del 30 de diciembre de 1993. Artículos 87, 90 y 91.
30.- Autoridades administrativas, facultades de las. [TA]; 5ª. Época; 2ª. Sala; S.J.F.; Tomo XXIX; Pág. 669, No. de registro: 337926.	Artículos 13 (último párrafo), 22 (último párrafo), 54 (fracción II), 73 y 74 (fracciones I, II y III).
31.- Cesión de derechos de crédito. Si fue precedida de un proceso de licitación, lo que debe notificarse legalmente al deudor es aquélla. No. Registro: 166228. Localización: 9° Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; XXX, Octubre de 2009. Pág. 1375. [T.A.]	Artículo 46 (último párrafo).
32.- Comercio y cuestiones relacionadas con el comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la Comunidad Europea. El artículo 25 de la decisión 2/2000 del Consejo Conjunto del Acuerdo Interino relativo no viola el artículo 134 de la Constitución Federal. Época: Novena; Registro: 175366; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la	

G) Marco normativo y criterios jurisprudenciales del régimen de adquisiciones públicas correlacionado.

Federación y su Gaceta; Tomo XXIII, Abril de 2006; Materia(s): Constitucional, Administrativa; Tesis: 1a. LXXVIII/2006; Página: 151	Artículos 14 y 26 (primer párrafo, fracción I y segundo párrafo).
33.- Competencia. Solo deriva de la ley no de un contrato. [TA]; 8ª. Época; T.C.C.; S.J.F.; Tomo III, Segunda Parte-2, Enero-Junio de 1989; Pág. 991; Registro: 229439. 34.- Competencia concurrente. La opción ejercida por el actor es irrevocable. Registro: 240063. 7a. Época; 3a. Sala; S.J.F.; Volumen 199-204, Cuarta Parte; Pág. 11. Tesis aislada (materia común). Competencia 102/84. Jueces Segundo de Distrito en el estado de Tabasco y Segundo de Primera Instancia de lo Civil de Villahermosa, Tabasco; 8 de julio de 1985. 5 votos; Ponente: Jorge Olivera Toro; Secretaría: Gilda Rincón Orta. Informe 1985, Tercer Sala; precedente que no constituye jurisprudencia; págs. 16- 17	Artículos 7, 85 y 86.
35.- Contratos. Interpretación de los. [J]; 6ª. Época; 3ª. Sala; Ap. 2000; Tomo IV, Civil, Jurisprudencia SCJN; Pág. 133. 163; Registro: 913105.	Artículos 45, 80 (primer párrafo), 84 y 85.
36.- Contratos administrativos. [TA]; 5a. Época; 2a. Sala; S.J.F.; Tomo XXVIII; Pág. 1187; Registro: 338 114. Es evidente que el contratante no puede invocar lesión de sus derechos, porque la autoridad rescinda el contrato, sin forma de juicio.	Artículo 54.
37.- Contratos administrativos. El artículo 1º., antepenúltimo párrafo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (publicada en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de enero de dos mil), en cuanto excluye de su ámbito de aplicación a los celebrados por las dependencias con las entidades, o entre entidades de la propia	

Administración Pública Federal o con alguna perteneciente a la Administración Pública Estatal, es violatorio del Artículo 134 de la Constitución Federal. [TA]; 9ª. Época; 2ª. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XV, Abril de 2002; Pág. 579; Registro: 187274	Artículo 1 (antepenúltimo párrafo).
38.- Contratos administrativos. La circunstancia de que se haya concedido un amparo respecto de la abrogada Ley de Adquisiciones y Obras Públicas (Diario Oficial de la Federación de treinta de diciembre de mil novecientos noventa y tres), así como de los lineamientos que deberán observar las dependencias y entidades de la administración pública federal en los procedimientos de contratación de seguros de bienes patrimoniales y de personas, no impide jurídicamente que éstos puedan ser impugnados nuevamente por el mismo quejoso, pero como normatividad reglamentaria y dependiente de la vigente Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (Diario Oficial de la Federación de cuatro de enero de dos mil). Época: Novena; Registro: 187273; Instancia: Segunda Sala; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XV, Abril de 2002; Materia(s): Administrativa; Tesis: 2a. XL/2002; Página: 580 39.- Contratos administrativos. Los lineamientos que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en los procedimientos de contratación de seguros de bienes patrimoniales y de personas (Diario Oficial de la Federación de cuatro de agosto de mil novecientos noventa y siete), originalmente creados	

como normatividad dependiente de la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas, de treinta de diciembre de mil novecientos noventa y tres, deben considerarse también como disposiciones "reglamentarias" de la vigente Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (Diario Oficial de la Federación de cuatro de enero de dos mil). Época: novena; Registro: 187272; Instancia: Segunda Sala; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XV, Abril de 2002; Materia(s): Administrativa; Tesis: 2a. XLI/2002; Página: 581	Artículos 3 (fracción IX), 5, 17 (último párrafo) y TRANSITORIO (TERCERO).
40.- Contratos administrativos. Se distinguen por su finalidad de orden público y por el régimen exorbitante del Derecho Civil a que están sujetos. [TA]; 9ª. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XIII, Abril de 2001; Pág. 324; No. de registro: 189995	Artículos 1 (primer párrafo) y 45.
41.- Contratos administrativos. [TA]; 5a. Época; 2a. Sala; S.J.F.; Tomo XXVIII; Pág. 1188; Registro: 338 116. Si la autoridad contratante, sin forma de juicio, declara rescindido el contrato, no puede alegarse como improcedencia del amparo, que el contratante puede ocurrir ante los tribunales para exigir el cumplimiento del contrato o su rescisión.	Artículo 54.
42.- Contratos administrativos de obra pública. El artículo 40, primer párrafo, de la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas (abrogada por el artículo segundo transitorio de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de enero de 2000), que faculta a las dependencias y entidades de la administración pública federal para declarar su rescisión, no viola la garantía de audiencia.	

G) Marco normativo y criterios jurisprudenciales del régimen de adquisiciones públicas correlacionado.

Época: Novena; Registro: 189495; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XIII, Junio de 2001; Materia(s): Constitucional, Administrativa; Tesis: 1a. XLIX/2001; Página: 232	Artículos 54 y 61 (último párrafo).
43.- Contratos administrativos de obra pública. El artículo 40, párrafo primero, de la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas (abrogada por el artículo segundo transitorio de la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, publicada en el diario oficial de la federación el 4 de enero de 2000), que faculta a las dependencias y entidades para rescindirlos, no es una ley privativa. Época: Novena Época; Registro: 189496; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XIII, Junio de 2001; Materia(s): Constitucional, Administrativa; Tesis: 1a. LI/2001; Página: 231. 44.- Contratos administrativos de obra pública. El artículo 40, primer párrafo, de la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas (abrogada por el artículo segundo transitorio de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de enero de 2000), que faculta a las dependencias y entidades para rescindirlos, no viola la garantía de acceso a la administración de justicia. Época: Novena. Registro: 189494; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XIII, Junio de 2001; Materia(s): Constitucional, Administrativa; Tesis: 1a. XLVIII/2001; Página: 233.	Artículos 54 (primer y último párrafos) y TRANSITORIO (SEGUNDO). Texto de la Ley de Adquisiciones y Obra Pública: Artículo 40.

G) Marco normativo y criterios jurisprudenciales del régimen de adquisiciones públicas correlacionado.

45.- Contratos administrativos, rescisión de los. [J]; 5a. Época; Pleno; Ap. 1995; Tomo III, Parte SCJN; Pág. 32. 43; Registro: 390 933.	Artículo 54.
46.- Contratos, voluntad de las partes en los. [TA]; 5ª. Época; 3ª. Sala; S.J.F.; Tomo XXXV; Pág. 1237; Registro: 362802. 12 de julio de 1932. Tiene dos limitaciones forzosas, ineludibles: la primera, que se deriva del interés público que está por encima de la voluntad individual, y la segunda de la técnica jurídica, sobre la que tampoco puede prevalecer el capricho de los contratantes.	Artículos 45, 80 (primer párrafo), 84 y 85.
47.- Controversia constitucional. Adquisiciones, arrendamientos, servicios y almacenes del estado de Nayarit. El artículo 34, fracción I, de la ley relativa, al excluir como participantes en las licitaciones públicas que realicen los órganos autorizados en la citada entidad a quienes estén relacionados con los servidores públicos que intervienen directa o indirectamente en los procedimientos de adquisición de bienes o servicios para el sector público, no contraviene el artículo 5o. de la Constitución Federal. Época: Novena; Registro: 178492; Instancia: Pleno; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXI, Mayo de 2005; Materia(s): Constitucional; Tesis: P./J. 22/2005; Página: 1003.	Artículo 50 (fracción I).
48.- Dependencias y entidades de la administración pública. La facultad rescisoria contenida en el artículo 40, primer párrafo, de la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas (abrogada por el artículo segundo transitorio de la Ley de	

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, publicada en el diario oficial de la federación el 4 de enero de 2000), no les otorga la calidad de tribunales especiales prohibidos por el artículo 13 de la Constitución Federal. Época: Novena; Registro: 189479; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XIII, Junio de 2001; Materia(s): Constitucional, Administrativa; Tesis: 1a. L/2001; Página: 235.	Artículos 54 (primer y último párrafos) y TRANSITORIO (SEGUNDO). Texto de la Ley de Adquisiciones y Obra Pública: Artículo 40.
49.- Empresas de participación estatal. No son parte integrante de la federación. [TA]; 7ª. Época; T.C.C.; S.J.F.; Volumen 193-198, Sexta Parte; Pág. 202; Registro: 248 784. 50.- Empresa de participación estatal mayoritaria de la Administración Pública Federal. No es persona moral oficial porque su patrimonio no es exclusivo del estado. [TA]; 10ª. Época; T.C.C.; S.J.F.; Volumen 11, Pág. 2847; No. de registro: 2007601. Libro 11, Octubre de 2014, Tomo III.	Artículo 1 (fracción V).
51.- Fianzas otorgadas en contratos de obra pública. Son exigibles aun cuando en el medio impugnativo correspondiente no se haya reconocido, por resolución firme, la validez de la rescisión decretada por incumplimiento del obligado principal, salvo cuando el deudor principal obtenga la suspensión o cuando en la póliza se pacte lo contrario y la ley permita convenir sobre ese aspecto. Época: Novena; Registro: 176708; Instancia: Segunda Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XXII, Noviembre de 2005;	

G) Marco normativo y criterios jurisprudenciales del régimen de adquisiciones públicas correlacionado.

Materia(s): Administrativa; Tesis: 2a./J. 136/2005; Página: 49 52.- Fianzas para garantizar obligaciones derivadas de contratos de obra pública. Su caducidad debe computarse a partir de que la autoridad administrativa notifica la rescisión por causas imputables al contratista. Época: Novena; Registro: 177001; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XXII, Octubre de 2005; Materia(s): Civil; Tesis: 1a./J. 94/2005; Página: 254	Artículo 48 (primer párrafo, fracción II) y 54 (primer párrafo).
53.- Fundamentación y motivación. [J]; 7ª. Época; 2ª. Sala; Ap. 1995; Tomo VI, Parte SCJN; Pág. 175. 260; Registro: 394216 54.- Fundamentación y motivación. Deben constar en el cuerpo de la resolución y no en documento distinto. [J]; 7ª. Época; 2ª. Sala; Ap. 1995; Tomo VI, Parte SCJN; Pág. 177. 262; Registro: 394 218.	Artículos 13 (último párrafo), 22 (último párrafo), 54 (fracción II), 73 y 74 (fracciones I, II y III).
55.- Fundamentación y motivación de los actos administrativos. Registro: 216534. Localización: Octava Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito: Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 64, Abril de 1993. Página 43, Tesis: VI. 2°, J/248. Jurisprudencias. Materia (S): Administrativa.	Artículo 73.
56.- Fundamentación y motivación. [J]; 9ª. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo III, Marzo de 1996; Pág. 769. VI.2º. J/43; Registro: 203 143. 57.- Fundamentación y motivación. Violación formal y material.	

G) Marco normativo y criterios jurisprudenciales del régimen de adquisiciones públicas correlacionado.

[J]; 7ª. Época; T.C.C.; Ap. 1995; Tomo III, Parte TCC; Pág. 493.674; No. de registro: 391 564	Artículos 13 (último párrafo), 22 (último párrafo), 54 (fracción II), 73 y 74 (fracciones I, II y III).
58.- Gastos financieros. Es procedente condenar al pago de los mismos si se acredita el incumplimiento de los pagos de estimaciones y ajustes de costos, aun cuando las partes no lo hayan pactado expresamente en el contrato de obra pública (interpretación del artículo 69 de la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas). Época: Novena; Registro: 170937; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XXVI, Noviembre de 2007; Materia(s): Administrativa; Tesis: 1a./J. 144/2007; Página: 118	Artículo 51 (segundo párrafo).
59.- Inconformidad. El Artículo 65, Fracciones I y III, tercer párrafo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público no viola la garantía de acceso a la justicia (legislación vigente a partir del 8 de julio de 2005). Registro: 174454. Localización: 9ª. Época; 2ª. Sala; S.J.F. y su Gaceta; XXIV, Agosto de 2006; Pág. 403; [T.A.]	Artículo 65 (fracciones I y V).
60.- Inconformidad. La prevista en el artículo 95 de la abrogada Ley de Adquisiciones y Obras Públicas constituye un recurso en sede administrativa y no simplemente una denuncia de hechos. Época: Novena; Registro: 189081; Instancia: Segunda Sala; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XIV, Agosto de 2001; Materia(s): Administrativa; Tesis: 2a. CXXXVII/2001; Página: 235	Artículos 65-67.
61.- Inconformidad prevista en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Contra su resolución procede el juicio de amparo indirecto.	

G) Marco normativo y criterios jurisprudenciales del régimen de adquisiciones públicas correlacionado.

Época: Novena Época; Registro: 162815; Instancia: Segunda Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XXXIII, Febrero de 2011; Materia(s): Común; Tesis: 2a./J. 28/2011; Página: 726.	Artículo 65.
62.- Inhabilitación temporal de licitantes o proveedores. El artículo 60, fracción IV, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público que prevé dicha sanción, no pugna con el artículo 134 de la Constitución Federal (legislación vigente a partir del 8 de julio de 2005). Época: Novena; Registro: 172010; Instancia: Segunda Sala; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XXVI, Julio de 2007; Materia(s): Constitucional, Administrativa; Tesis: 2a. LXXIII/2007; Página: 377.	Artículo 60 (fracción IV). Texto de la ley con las reformas del 7 de julio de 2005: Artículo 60 (fracción IV).
63.- Inhabilitación temporal de proveedores o licitantes. El artículo 60, fracción IV, y antepenúltimo párrafo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que prevé dicha sanción, no viola el artículo 21, primer párrafo, de la Constitución Federal, por ser distinta a la multa o arresto (legislación vigente a partir del 8 de julio de 2005). Época: Novena; Registro: 174893; Instancia: Segunda Sala; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XXIII, Junio de 2006; Materia(s): Constitucional, Administrativa; Tesis: 2a. LI/2006; Página: 322 64.- Inhabilitación temporal de proveedores o licitantes. El artículo 60, fracción IV, y antepenúltimo párrafo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y	

Servicios del Sector Público no prevé una pena sino una sanción administrativa, por lo que no viola el artículo 21, primer párrafo, de la Constitución Federal (legislación vigente a partir del 8 de julio de 2005). Época: Novena; Registro: 174894; Instancia: Segunda Sala; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XXIII, Junio de 2006; Materia(s): Constitucional, Administrativa; Tesis: 2a. L/2006; Página: 321. 65.- Inhabilitación temporal de proveedores o licitantes. La prevista en el artículo 60, fracción IV, y antepenúltimo párrafo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público no es una pena y, por ende, no se rige por el artículo 22, primer párrafo, de la Constitución Federal (legislación vigente a partir del 8 de julio de 2005). Época: Novena; Registro: 174892; Instancia: Segunda Sala; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XXIII, Junio de 2006; Materia(s): Constitucional, Administrativa; Tesis: 2a. LII/2006; Página: 323.	Artículo 60 (fracción IV y antepenúltimo párrafo). Texto de la ley con las reformas del 7 de julio de 2005: Artículo 60.
66.- Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. La rescisión de los contratos de obra pública que declare con fundamento en el artículo 40 de la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas (abrogada por el artículo segundo transitorio de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, publicada en el diario oficial de la federación el 4 de enero de 2000), tiene el carácter de acto de	

autoridad para efectos del juicio de amparo.26 Época: Novena; Registro: 189452; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XIII, Junio de 2001; Materia(s): Administrativa; Tesis: 1a. LII/2001; Página: 240	Artículos 54 (primer y último párrafos) y TRANSITORIO (SEGUNDO). Texto de la Ley de Adquisiciones y Obra Pública: Artículo 40.
67.- Interés jurídico. Sus acepciones tratándose de recursos e instancias administrativas. No. Registro: 225766. Localización: 8ª. Época; T.C.C.; S.J.F.; V, Segunda parte-1, Enero a Junio de 1990; Pág. 264; [T.A.].	Artículos 65, 70 (primer y segundo párrafos), 74 (último párrafo) y 75 (primer y antepenúltimo párrafos).
68.- Interés jurídico en el amparo. Carece de él quien reclama actos llevados a cabo durante las etapas del procedimiento de licitación pública, si expresamente renunció a continuar participando en él antes de dictarse el fallo de adjudicación respectivo. Registro: 172006, Localización: 9ª. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; XXVI, Julio de 2007; Pág. 2556; [T.A.]	Artículos 28-39.
69.- Licitación. La falta de firmas de las autoridades que fungieron como “invitadas” al proceso respectivo, no genera su nulidad. Registro: 183024. Localización: 9ª. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; XVIII, Octubre de 2003; Pág. 1044; [T.A.]	Artículo 43 (fracción II).
70.- Licitación pública. El cumplimiento de sus bases es requisito indispensable para analizar las ofertas y adjudicar el contrato respectivo. Registro. 911970. Tesis Aislada. Materia (s): Administrativa. Octava Época. Instancia: Tribunales Colegiados de circuito. Fuente: Apéndice 2000. Tomo III, Administrativa, P. R. T. CC. Tesis: 405. Página 382. Genealogía: Semanario Judicial de la Federación. Octava Época. Tomo XIV. Octubre de 1994. Página 318.	

G) Marco normativo y criterios jurisprudenciales del régimen de adquisiciones públicas correlacionado.

Tribunales Colegiados de Circuitos, Tesis I.3º.A.372.A. 71.- Licitación pública. El cumplimiento de sus bases es requisito indispensable para analizar las ofertas y adjudicar el contrato respectivo. Registro: 210243. Localización: 8ª, Época; T.C.C.; S.J.F.; XIV. Octubre de 1994; Pág. 318; [T.A.]	Artículo 29.
72.- Licitación pública, etapas del procedimiento administrativo respectivo en su desarrollo cronológico. Registro: 171994. Localización: 9ª. Época. T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; XXVI, Julio de 2007. Pág. 2651. [T.A.]	Artículos 26 (octavo párrafo), 32 (primer párrafo), 37 (sexto párrafo), 38 (cuarto párrafo) y 46 (primer párrafo).
73.- Licitación pública principios esenciales que rigen el procedimiento administrativo respectivo. Registro: 171993. Localización; 9ª. Época. T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; XXVI, Julio de 2007. Pág. 2652; [T.A.] 74.- Licitación pública, su naturaleza jurídica. Registro: 171992. Localización: 9ª. Época. T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; XXVI, Julio de 2007. Pág. 2653. [T.A.]	Artículos 24, 26 (primero, segundo, quinto, sexto, séptimo y octavo párrafos) y 29 (fracción V).
75.- Licitaciones públicas. Derechos que derivan a favor de los particulares que participan en ellas. Época: Novena; Registro: 189052; Instancia: Segunda Sala; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XIV, Agosto de 2001; Materia(s): Administrativa; Tesis: 2a. CXXXVIII/2001; Página: 240.	Artículo 29 (fracción V) y 65.
76.- Licitaciones públicas. El Artículo 31, Fracción V, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, al disponer que los anexos técnicos y folletos que se adjunten a las propuestas técnica o económica pueden	

presentarse en el idioma del país de origen de los bienes o servicios, acompañados de una traducción simple al español e imponer esa carga a los licitantes en la elaboración de las bases, no contraviene el Artículo 134 de la Constitución Federal. Registro: 181931. Localización: 9ª. Época. T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; XIX, Marzo de 2004; Pág. 1576; [T.A.]	Artículo 29.
77.- Licitaciones públicas. Facultades que el artículo 134 de la Constitución Federal otorga a las entidades y dependencias para convocar a aquéllas. Época: Novena; Registro: 175297; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XXIII, Abril de 2006; Materia(s): Constitucional, Administrativa; Tesis: 1a. LXXVII/2006; Página: 157.	Artículos 14 y 26 (primer párrafo, fracción I y segundo párrafo).
78.- Licitaciones públicas. Las autoridades administrativas que llevan a cabo los procedimientos relativos en los que el gobierno federal y el del Distrito Federal realicen adquisiciones, arrendamientos y enajenación de bienes, deben conceder a los licitantes afectados la garantía de audiencia. Época: Novena; Registro: 189051; Instancia: Segunda Sala; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XIV, Agosto de 2001; Materia(s): Constitucional, Administrativa; Tesis: 2a. CXXXIX/2001; Página: 241	Artículo 29 (fracción V) y 65.
79.- Licitación pública internacional. El artículo 28, último párrafo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, al establecer que podrá negarse la participación a extranjeros cuando con el país del cual sean nacionales no se tenga celebrado un	

tratado y aquél no conceda un trato recíproco a los licitantes, proveedores, bienes o servicios mexicanos, no transgrede el artículo 5o. De la Constitución Federal. Época: Novena; Registro: 179274; Instancia: Segunda Sala; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XXI, Febrero de 2005; Materia(s): Constitucional, Administrativa; Tesis: 2a. XXII/2005; Página: 346	Artículo 28 (fracción II y último párrafo). Texto de la ley con las reformas del 13 de junio de 2003: Artículo 28 (último párrafo).
80.- Licitación pública internacional. El artículo 28, último párrafo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, al establecer que podrá negarse la participación a extranjeros cuando con el país del cual sean nacionales no se tenga celebrado un tratado y aquél no conceda un trato recíproco a los licitantes, proveedores, bienes o servicios mexicanos, no trasgrede el artículo 134 de la Constitución Federal. Registro. 179273. Localización: 9ª. Época; 2ª. Sala; S.J.F. y su Gaceta; XXI, Febrero de 2005; Pág. 347; [T.A.]	Artículos 4, 26 (último párrafo) y 28 (fracción II, segundo párrafo).
81.- Nulidad, juicio de. Carga probatoria. [TA]; 8ª. Época; T.C.C.; S.J.F.; Tomo XIV, Diciembre de 1994; Pág. 411. II. 3º. 86 A; Registro: 209 787 Que el acto administrativo sea perfecto, significa que puede producir efectos, a menos que se demuestre su ilegalidad, a través de los medios de defensa previstos en la propia ley, porque adolezca de vicios.	Artículo 74 (fracciones III, IV y V).
82.- Obras públicas. Los artículos 40 de la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas y 52, fracción II, de su reglamento, que facultan a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para declarar la rescisión de los contratos relativos, no violan los artículos 14 y 17 de la Constitución General de la República.	

G) Marco normativo y criterios jurisprudenciales del régimen de adquisiciones públicas correlacionado.

Época: Novena; Registro: 190295; Instancia: Segunda Sala; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XIII, Febrero de 2001; Materia(s): Constitucional, Administrativa; Tesis: 2a. IV/2001; Página: 292	Artículo 54 (primer y último párrafos).
83.- Pacto comisorio. [TA]; 6ª. Época; 3ª. Sala; S.J.F.; Volumen I, Cuarta Parte; Pág. 119; No. de registro: 273 118 El pacto comisorio expreso es legítimo y en virtud de él y diversamente a lo que acontece con el tácito en que en el incumplimiento se requiere la declaración judicial para lograr la rescisión, el contrato se resuelve automáticamente por el solo efecto del incumplimiento y sin intervención de los tribunales…	Artículo 54.
84.- Principio de definitividad. Es innecesario agotar la inconformidad prevista en el artículo 65 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público previo a promover el juicio de amparo indirecto, al actualizarse una excepción al citado principio. Época: Décima; Registro: 2010357; Instancia: Segunda Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo II; Materia(s): Común; Tesis: 2a./J. 144/2015 (10a.); Página: 1113.	Artículos 65-67.
85.- Prueba, los tratados internacionales. No están sujetos a. Registro: 224632; Tesis Aislada. Materia (s): Administrativa, Constitucional. Octava Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: VI, Segunda Parte-1, Julio a Diciembre de 1990. Página 236.	Artículo 15 (último párrafo).
86.- Revisión en sede administrativa. El artículo 83 de la Ley Federal de	

G) Marco normativo y criterios jurisprudenciales del régimen de adquisiciones públicas correlacionado.

Procedimiento Administrativo establece la opción de impugnar los actos que se rigen por tal ordenamiento a través de ese recurso o mediante el juicio seguido ante el Tribunal Fiscal de la Federación. [J]; 9a. Época; 2a. Sala; Ap. Act. 2001; Tomo III, Administrativa, Jurisprudencia SCJN; Pág. 25. 16; Registro: 920 362.	Artículo 74 (último párrafo).
87.- Suspensión. La prevista en el Artículo 99 de la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas, no obliga a la autoridad de amparo. Registro: 197648, Localización: 9ª. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; VI, Octubre de 1997; pág. 799; [T.A.]	Artículo 70.
88.- Suspensión. Noción de orden público y su finalidad. [TA]; 10ª. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 2; Pág. 1575; No. de registro: 2002421.	Artículos 70 (primer y último párrafos) y 76 (tercer párrafo).
89.- Suspensión en el amparo. Al concederla respecto de la inhabilitación temporal a una persona para participar en procedimientos de licitación y celebrar contratos con la administración pública, no debe confundirse ni equipararse la afectación al orden público y al interés social con la relativa al interés de la Administración Pública. Registro: 173162; Localización: 9ª. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; XXV, Febrero de 2007; Pág. 1898; [T.A.]	Artículo 60.
90.- Suspensión en el amparo. Debe negarse contra los efectos y consecuencias de la inhabilitación temporal para participar en procedimientos de licitación o para celebrar contratos públicos. Época: Novena; Registro: 162971; Instancia: Segunda Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta;	

G) Marco normativo y criterios jurisprudenciales del régimen de adquisiciones públicas correlacionado.

Tomo XXXIII, Enero de 2011; Materia(s): Común; Tesis: 2a./J. 157/2010; Página: 1402.	Artículos 59 (primer párrafo) y 60 (primer y último párrafos).
91.- Suspensión en el amparo. Procede concederla respecto de la inhabilitación temporal a una persona para participar en procedimientos de licitación y celebrar contratos con la Administración Pública, ya que al diferir su ejecución se evitan los daños y perjuicios de imposible reparación que pudieran ocasionarse con ella. No. Registro: 173160. Localización: Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXV. Febrero de 2007. Página 1900. Tesis: I.4°.A.555 A. Tesis Aislada. Materia (s): Administrativa.	Artículos 59 y 60.
92.- Tratados internacionales: Se ubican jerárquicamente por encima de las Leyes Federales y en segundo plano respecto de la Constitución Federal. Registro: 192867. Tesis Aislada. Materia (s): Constitucional. Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: X, Noviembre de 1999. Tesis: P.LXXVII/99. Página 46.	Artículos 4, 26 (último párrafo) y 28 (fracción II, segundo párrafo).

Los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se encuentran subrayados y en cursivas, tienen sus engroses estudiados y detallados en el capítulo VI

4. Causales de inconformidad.

En palabras de Daniel Ramos Torres, la inconformidad *no es un recurso* fundando su afirmación con la cita de Ismael Amaya, que señala, que no es un recurso, *"en tanto se tramita como un procedimiento de impugnación de actos administrativos irregulares derivados de licitaciones públicas o de invitaciones a cuando menos tres personas, llevados a cabo por servidores públicos de las Dependencias y Entidades, un sector de la doctrina considerada que la inconformidad es un recurso administrativo"*[112].

> *Resulta pertinente señalar que la inconformidad como medio de defensa de los particulares no revista la naturaleza jurídica de un recurso, en tanto éstos están destinado a combatir actos de autoridad, y no actos de una Dependencia o Entidad Federal cuya actuación se encuentra despojada de la facultad de imperio, al tratarse de una persona moral cuyo objeto es el realizar una contratación bajo las mejores condiciones de conformidad con el artículo 134 de la Constitución Política*[113].

El objeto de la inconformidad es una pretensión de anulación por parte del licitador, basada en el control de la legalidad del órgano convocante, para que este emita un acto administrativo conforme a derecho.

Por lo anterior Daniel Ramos, nos dice que la inconformidad es:

> *… un medio de defensa previsto en la LAASSP, con el que cuentan los particulares cuando se sienten afectados en sus derechos o intereses por actos presuntamente ilegales, que se consideran llevados a cabo por servidores públicos de las dependencias y entidades, en contravención a las disposiciones que rigen los procedimientos de contratación denominados licitación pública e invitación a cuando menos tres personas. Por lo tanto el objeto de la inconformidad es que la SFP y los órganos internos de control, revisen la legalidad del procedimiento o de los actos administrativos que lo componen.*[114]

A) La convocatoria a la licitación y las juntas de aclaraciones.

Este apartado, lo dedicaremos al estudio de la licitación, por tratarse de una condición exigible en una serie de contratos administrativos, cuyo cumplimiento debe realizarse previamente a la celebración de los mismos.

---

[112] Amaya Barón, Ismael M, *Los medios de impugnación en los procedimientos de contratación del Estado*, Ángel editor, México, 2008, p. 143.
[113] Ramos Torres, Daniel, *op. cit.* p. 325.
[114] *Ibídem,* p. 327.

Es importante señalar que el procedimiento de licitación pública se desarrollara mediante una serie de etapas cronológicas, contenidas en la normatividad jurídica, así se crea un documento al cual se le resta menor importancia por ser un facultad de la autoridad, antes denominado “Elaboración de las bases de licitación”; conocido anteriormente como pliego de condiciones y en síntesis es la base sobre la cual se plantea la licitación, sirviendo a la Administración Pública para que determine su objeto, el procedimiento de licitación y las pautas o cláusulas que regirán el contrato correspondiente.

Enrique Sayagués Laso citado por José Pedro López-Elías, nos explica que el pliego de condiciones es:

> *Un conjunto de cláusulas redactadas por la Administración Pública, especificando el suministro, obra o servicio que se licita, estableciendo las condiciones del contrato a celebrarse y determinando el trámite a seguir en los procedimientos de licitación*[115].

José Pedro López Elías en su libro *Aspectos jurídicos de la licitación pública en México*, nos explica los cuatro puntos que comprenden el previo a la convocatoria, los cuales son:

1º. *La planeación. Es la actividad organizacional que necesita determinar un curso de acciones, iniciando con la determinación de metas, esta etapa se fundamenta en el artículo 18 de la LAASSP, que establece lo siguiente:*
   En la planeación de las adquisiciones, arrendamientos y servicio deberán sujetarse a:
   I. Los objetivos y prioridades del Plan Nacional de Desarrollo y los programas sectoriales institucionales, regionales y especiales que correspondan, así como a las previsiones contenidas en sus programas anuales, y
   II. Los objetivos, metas y previsiones de recursos establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación o, en su caso, al presupuesto destinado a las contrataciones que los fideicomisos públicos no considerados entidades paraestatales prevean para el ejercicio correspondiente.
2º. *La prestación de servicios. Esta etapa, no es un tema que desarrollaremos ampliamente, por la naturaleza de nuestro trabajo, por lo tanto podemos decir de manera general, que se trata de una previa, relativa a la contratación de prestación de servicios, en este punto las dependencias y entidades deberán de revisar si el estudio o proyecto satisface los requerimientos de la entidad o dependencia, para proceder a la contratación.*
3º. *La autorización del comité de adquisiciones. La encontramos en el artículo 23 de la LAASSP, la cual establece que será la Secretaría de la Función Pública (SFP), mediante conducto del Ejecutivo Federal, quien determinará que dependencias y entidades deberán instalar comisiones consultivas mixtas de abastecimiento, algunas de sus funciones, establecidas en el artículo 22 de la LAASSP, son las siguientes:*

[115] López-Elías, José Pedro, *op. cit*., p. 114.

a) *Revisar el programa y el presupuesto de adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como sus modificaciones, y formular las observaciones y recomendaciones convenientes;*
b) *Determinar previamente a la iniciación del procedimiento, sobre la procedencia de la excepción a la licitación pública […]*
c) *Determinar los proyectos de políticas, bases y lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios que le presenten […]*

Podemos decir que la ley en estudio, señala, la obligatoriedad de las dependencias, para establecer comités de adquisiciones, arrendamientos y servicios, que en cuanto a sus funciones, su establecimiento favorece, al realizar la toma de decisiones de manera democrática, por su composición de órgano colegido, en donde se da la participación de áreas relacionadas con el proceso de la contratación administrativa, dando seguridad jurídica a los ciudadanos, mediante la transparencia.

Como podemos observar el desarrollo del punto anterior, se encuentra rebasado en determinados aspectos que vamos a analizar, como lo es la participación del Comité de Adquisiciones, que actualmente se contiene en el artículo 22 de la LAASSP y algunas de sus funciones son las siguientes:

1°. Revisar el programa y el presupuesto de adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como sus modificaciones, y formular las observaciones y recomendaciones convenientes;
2°. Dictaminar previamente a la iniciación del procedimiento, sobre la procedencia de la excepción a la licitación pública por encontrarse en alguno de los supuestos a que se refieren las fracciones I, III, VIII, IX segundo párrafo, X, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII y XIX del artículo 41 de esta ley. Dicha función también podrá ser ejercida directamente por el titular de la dependencia o entidad, o aquel servidor público en quien éste delegue dicha función. En ningún caso la delegación podrá recaer en servidor público con nivel inferior al de director general en las dependencias o su equivalente en las entidades;
3°. Dictaminar los proyectos de políticas, bases y lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios que le presenten, así como someterlas a la consideración del titular de la dependencia o el órgano de gobierno de las entidades; en su caso, autorizar los supuestos no previstos en las mismas.

Será el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de la Función Pública (SFP), quien determinará que dependencias y entidades deberán instalar comisiones consultivas mixtas de abastecimiento, algunas de sus funciones, establecidas en el artículo 23 de la LAASSP, son las siguientes:

1°. Propiciar y fortalecer la comunicación de las propias dependencias y entidades con los proveedores, a fin de lograr una mejor planeación de las adquisiciones, arrendamientos y servicios;
2°. Colaborar en la instrumentación de programas de desarrollo de proveedores nacionales;

3°. Promover y acordar programas de sustitución eficiente de importaciones, así como de simplificación interna de trámites administrativos que realicen las dependencias o entidades relacionados con las adquisiciones, arrendamientos y servicios.
4°. Emitir recomendaciones sobre metas de utilización de las reservas de compras pactadas con otros países;
5°. Promover acciones que propicien la proveeduría con micro, pequeñas y medianas empresas, así como el consumo por parte de otras empresas de los bienes o servicios que produzcan o presten aquéllas;
6°. Difundir y fomentar la utilización de los diversos estímulos del gobierno federal y de los programas de financiamiento para apoyar la fabricación de bienes;
7°. Informar a los comités de adquisiciones, arrendamientos y servicios las recomendaciones planteadas en el seno de las comisiones;
8°. Elaborar y aprobar el manual de integración y funcionamiento de la comisión, conforme a las bases que expida la Secretaría de la Función Pública, y
9°. Conocer y opinar sobre los programas de licitaciones internacionales de la dependencia o entidad de que se trate.

El presupuesto. Para iniciar con esta etapa, es necesario definirlo, entendido por Eusebio González García (1993) como; *"El acto por el cual son previstos y autorizados los gastos anuales del Estado que las leyes sometan a las mismas reglas*[116]*.*

La reglamentación relativa al Presupuesto de Egresos de la Federación, se encuentra contenida, de manera sustancial, en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (2006); la palabra presupuesto es el participio pasado del verbo *presuponer*, *suponer antes* o *por anticipado* alguna cosa.

Gonzalo Martínez, en su obra *Planeación y presupuesto por programas*, concibe al presupuesto del sector público como la herramienta fundamental de la Administración Pública. En él se registran las órdenes de prioridad establecidas por el gobierno con respecto a las distintas funciones que debe cumplir, las que contarán con las partidas presupuestarias para su efectiva prestación, descartando todas aquellas consideradas como no prioritarias. Al mismo tiempo, se establece el monto y origen de los recursos con que se ha de disponer para hacer frente a tales erogaciones, identificando, de esta forma, los impuestos que se han de utilizar para generar los recursos, y su incidencia sobre los distintos sectores de la población.

Conociendo el significado de presupuesto, resulta trascendente establecer que es el presupuesto de egresos, en la Enciclopedia Universal Ilustrada, se define, como: *"El cálculo anticipado de los gastos y de los ingresos".*

[116] López Elías, José Pedro, *op. cit*., p.104.

Alberto Bianchi (1990) señala que la existencia de una partida presupuestaria se vuelve requisito ineludible para celebrar una licitación pública, esto por ser un eje rector, la anticipación del gasto.

En cuanto a la etapa de la convocatoria, es importante señalar que las adquisiciones, arrendamientos y servicios se adjudicarán, por regla general, a través de licitaciones públicas, mediante convocatoria pública, para que libremente se presenten proposiciones, solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto al precio, calidad, financiamiento, oportunidad, crecimiento económico, generación de empleo, eficiencia energética, uso responsable del agua, optimización y uso sustentable de los recursos, así como la protección al medio ambiente y demás circunstancias pertinentes, de acuerdo con lo que establece la presente Ley (art. 26 LAASSP).

De lo anterior podemos apreciar la importancia de la convocatoria pública como eje rector de la licitación, y algunos autores la definen como; *el aviso público que realizan las dependencias y entidades para dar conocimiento del inicio de un determinado procedimiento de contratación en el cual se especifican los datos esenciales para permitir la libre participación de los interesados, así como, el plazo y la fecha para obtener la convocatoria a la licitación pública.*

En cuanto a la estructura de la convocatoria a la licitación pública, la ley en estudio, nos determina el contenido de la misma; y debe contener, encontrándolo en el artículo 29 de la LAASSP, que nos señala:

Artículo 29

…

1º. El nombre, denominación o razón social de la dependencia o entidad convocante;

2º. La descripción detallada de los bienes, arrendamientos o servicios, así como los aspectos que la convocante considere necesarios para determinar el objeto y alcance de la contratación;

3º. La fecha, hora y lugar de celebración de la primera junta de aclaración a la convocatoria a la licitación, del acto de presentación y apertura de proposiciones y de aquella en la que se dará a conocer el fallo, de la firma del contrato, en su caso, la reducción del plazo, y si la licitación será presencial, electrónica o mixta y el señalamiento de la forma en la que se deberán presentar las proposiciones;

4º. El carácter de la licitación y el idioma o idiomas, además del español, en que podrán presentarse las proposiciones. Los anexos técnicos y folletos en el o los idiomas que determine la convocante;

5º. Los requisitos que deberán cumplir los interesados en participar en el procedimiento, los cuales no deberán limitar la libre participación, concurrencia y competencia económica;

6º. El señalamiento de que para intervenir en el acto de presentación y apertura de proposiciones, bastará que los licitantes presenten un escrito en el que su firmante

manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, sin que resulte necesario acreditar su personalidad jurídica;

7º. La forma en que los licitantes deberán acreditar su existencia legal y personalidad jurídica, para efectos de la suscripción de las proposiciones, y, en su caso, firma del contrato. Asimismo, la indicación de que el licitante deberá proporcionar una dirección de correo electrónico, en caso de contar con él;

8º. Precisar que será requisito el que los licitantes entreguen junto con el sobre cerrado una declaración escrita, bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos por los artículos 50 y 60 penúltimo párrafo, de esta Ley;

9º. Precisar que será requisito el que los licitantes presenten una declaración de integridad, en la que manifiesten, bajo protesta de decir verdad, que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas, para que los servidores públicos de la dependencia o entidad, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes;

10º. Si para verificar el cumplimiento de las especificaciones solicitadas se requiere de la realización de pruebas, se precisará el método para ejecutarlas y el resultado mínimo que deba obtenerse, de acuerdo con la Ley Federal sobre Metrología y Normalización;

11º. La indicación respecto a si la contratación abarcará uno o más ejercicios fiscales, si será contrato abierto, y en su caso, la justificación para no aceptar proposiciones conjuntas;

12º. La indicación de si la totalidad de los bienes o servicios objeto de la licitación, o bien, de cada partida o concepto de los mismos, serán adjudicados a un solo licitante, o si la adjudicación se hará mediante el procedimiento de abastecimiento simultáneo, en cuyo caso deberá precisarse el número de fuentes de abastecimiento requeridas, los porcentajes que se asignarán a cada una y el porcentaje diferencial en precio que se considerará;

13º. Los criterios específicos que se utilizarán para la evaluación de las proposiciones y adjudicación de los contratos, debiéndose utilizar preferentemente los criterios de puntos y porcentajes, o el de costo beneficio;

14º. El domicilio de las oficinas de la Secretaría de la Función Pública o de los gobiernos de las entidades federativas, o en su caso el medio electrónico en que podrán presentarse inconformidades, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 66 de la presente Ley;

15º. Señalamiento de las causas expresas de desechamiento, que afecten directamente la solvencia de las proposiciones, entre las que se incluirá la comprobación de que algún licitante ha acordado con otro u otros elevar el costo de los trabajos, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes, y

16º. *Modelo de contrato al que para la licitación de que se trate se sujetarán las partes, el cual deberá contener los requisitos a que se refiere el artículo 45 de esta Ley.*

Para la participación, adjudicación o contratación de adquisiciones, arrendamientos o servicios no se podrán establecer requisitos que tengan por objeto o efecto limitar el proceso de competencia y libre concurrencia. En ningún caso se deberán establecer requisitos o condiciones imposibles de cumplir. La dependencia o entidad convocante tomará en cuenta las recomendaciones previas que, en su caso, emita la Comisión Federal de Competencia Económica en términos de la Ley Federal de Competencia Económica.

Previo a la publicación de la convocatoria de licitación pública, las dependencias y entidades podrán difundir el proyecto de la misma a través de CompraNet, al menos durante diez días hábiles, lapso durante el cual éstas recibirán los comentarios pertinentes en la dirección electrónica que para tal fin se señale.

Los comentarios y opiniones que se reciban al proyecto de convocatoria, serán analizados por las dependencias y entidades a efecto de, en su caso, considerarlas para enriquecer el proyecto.

Asimismo el numeral que cumple la disposición constitucional de la publicidad, es el artículo 30 de la ley en estudio, el cual nos señala lo siguiente:

La publicación de la convocatoria a la licitación pública se realiza a través de CompraNet y su obtención será gratuita. Además, simultáneamente se enviará para su publicación en el Diario Oficial de la Federación, un resumen de la convocatoria a la licitación que deberá contener, entre otros elementos, el objeto de la licitación, el volumen a adquirir, el número de licitación, las fechas previstas para llevar a cabo el procedimiento de contratación y cuando se publicó en CompraNet y, asimismo, la convocante podrá a disposiciones de los licitantes copia del texto de la convocatoria.

Una vez elaborada y aprobada la convocatoria, un elemento importante que merece la pena estudiar es la publicación de la misma. En lo que atañe a la etapa de publicación de la convocatoria, debemos tener presente, que es una parte esencial en la licitación pública, la cual deberá anunciarse, en el órgano, periódico o boletín de comunicación oficial, para conocimiento de todos los interesados que satisfagan los requisitos; lo anterior con fundamento en el artículo 134 constitucional, que señala que las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública.

En relación a lo anterior vertido, podemos decir que la publicación es la etapa que da inicio formal a la licitación pública y, en el caso de invitación, cuando la primera sea entregada con éxito.

La publicación de la convocatoria, se realizará a través de CompraNet y en el Diario Oficial de la Federación, en forma de resumen conteniendo la fecha de publicación en CompraNet, señalando el objeto de la licitación, el volumen a adquirir, el número de licitación y las fechas previstas para llevar a cabo el procedimiento de contratación.

De lo establecido en el artículo 32 de la LAASSP, la publicación de la convocatoria se debe de dar dentro de los quince días naturales anteriores, a la presentación y apertura de proposiciones, con la excepción del cumplimiento del plazo, por razones justificadas, reduciendo el plazo a cuando menos diez días naturales, esto respecto a las licitaciones nacionales. En cuanto a las licitaciones internacionales el plazo no podrá ser inferior a veinte días naturales, contados a partir de la fecha de publicación de la convocatoria.

La publicación de la convocatoria a la licitación y, en su caso, sus modificaciones, deberán realizarse o subirse a CompraNet en días y horas hábiles, siendo CompraNet el medio oficial para dar a conocer todo tipo de solicitudes de compra, como las licitaciones públicas, invitaciones cuando menos a tres personas y adjudicaciones directas.

La gratuidad de las convocatorias a la licitación pública tiene como propósito permitir la participación de un mayor número de licitantes, con el objeto de conseguir mejores condiciones de contratación para el Estado.

Respecto a las juntas de aclaraciones conforme se establece por ley, deberá realizar la convocante al menos una, dejando la asistencia a la misma de manera optativa.

Es un acto presidido por un servidor público designado por la convocante, asistido por un representante del área técnica o usuario de los bienes o servicios objeto de la contratación, con la finalidad de resolver de forma clara las dudas y planteamientos entregados personalmente por escrito o enviadas a través del CompraNet en el lapso de 24 horas anteriores a la celebración de la misma, relacionados con los aspectos contenidos en la convocatoria.

Por lo anterior, el servidor público que preside el acto es la máxima autoridad, y por lo tanto a él le compete resolver todos los aspectos que se presenten en este momento del procedimiento; siempre acompañado de una persona que conozca los aspectos técnicos de la contratación.

Al concluir la *Junta de Aclaraciones*, se podrán señalar la celebración de posteriores, dando fecha y hora para las mismas, considerando que entre la última y el acto de presentación y apertura de proposiciones no deberá existir un plazo menor a 6 días naturales. En el supuesto de que se deba posponer el acto de presentación y apertura de proposiciones a consecuencia de que se haya llevado más tiempo realizar la junta de aclaraciones o se decida ulteriores, siempre se debe respetar el plazo de seis días naturales entre estos dos momentos del procedimiento de contratación, por ello su

notificación debe hacerse a más tardar el séptimo día previo el acto de presentación y apertura de ofertas.

De cada *Junta de Aclaraciones* se levantará acta en la cual se harán constar los cuestionamientos formulados y la respuesta de la convocante. En el acta correspondiente a la última junta de aclaraciones se indicará expresamente esta circunstancia.

Así una vez que se hayan contestado todas las preguntas, es conveniente asentar en el acta que se ha dado contestación a todas ellas y se procede a la siguiente etapa de preguntas o aclaración a las respuestas dadas por la convocante. En este momento, los licitantes tienen la oportunidad de formular preguntas respecto las respuestas que proporcionó la convocante y el servidor que preside o lleva el acto, pero no debe aceptar nuevos cuestionamientos.

B) La invitación a cuando menos tres personas.

En el titulo sexto de la LAASSP, denominado *De la solución de Controversias*, Capítulo primero*. De la instancia de inconformidad*, en su articulado se mencionan los actos contra los cuales se puede interponer una inconformidad, entre las cuales encontramos como causal, la invitación a cuando menos tres personas.

En el supuesto del párrafo anterior, solo estará legitimado para inconformarse quien haya recibido invitación, así que por el simple hecho de recibir la invitación, el licitante se puede inconformar contra los actos que determina el artículo 65 de la LAASSP.

C) El acto de presentación y apertura de proposiciones.

Después de publicada la convocatoria, los interesados en ser co-contratantes de la Administración Pública en un contrato administrativo, pondrán presentar sus ofertas. Se convierten en licitantes, cuando los interesados satisfacen los requisitos, establecidos en la normatividad vigente, y presentan proposiciones u ofertas.

La licitación pública va dirigida a todos los posibles interesados en contratar con la Administración Pública, que cumplan con las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por el órgano convocante.

Los requisitos para la presentación de proposiciones los encontramos establecidos el artículo 34, de manera precisa la entrega de proposiciones se hará en sobre cerrado que contendrá la oferta técnica y económica. En el caso de las proposiciones presentadas a través de CompraNet, los sobres serán generados mediante el uso de tecnologías que resguarden la confidencialidad de la información de tal forma que sean inviolables,

conforme a las disposiciones técnicas que al efecto establezca la Secretaría de la Función Pública.

La documentación distinta a la proposición podrá entregarse, a elección del licitante, dentro o fuera del sobre que la contenga.

Previo al acto de presentación y apertura de proposiciones, la convocante podrá efectuar el registro de participantes, así como realizar revisiones preliminares a la documentación distinta a la proposición. Lo anterior será optativo para los licitantes, por lo que no se podrá impedir el acceso a quién decida presentar su documentación y proposiciones en la fecha, hora y lugar establecido para la celebración del acto citado.

El artículo 2° fracción XI del RLAASSP define el término *sobre cerrado* como aquel que contiene la proposición, sin importar el medio de que se trate, y qué sólo permite conocer su contenido en el acto de presentación y apertura de proposiciones.

Solo podrán hacer una proposición los licitantes en cada procedimiento de contratación; una vez iniciado el acto de presentación y apertura de proposiciones, no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto.

Cabe aclarar que Luis Humberto Delgadillo G. y Manuel Lucero E., en su *Compendio de Derecho Administrativo*, hacen el estudio de la figura de la oferta, que en la legislación vigente adopta el nombre de proposición, por lo que en los siguientes párrafos el termino se entiende de manera indistinta, así las características de la presentación de las oferta son:

1º. Secreta, su entrega será en sobre cerrado;
2º. En el lugar, hora y día previamente establecido;
3º. Realizada por el oferente o persona debidamente autorizada;
4º. Cumplir las condiciones establecidas en el pliego para la licitación;
5º. Inalterable, y
6º. Obligación de mantenerla durante el plazo fijado en las bases.

Los licitantes que reunieron los requisitos establecidos, adquieren un derecho subjetivo, un interés jurídico en la licitación en manera parcial, para participar en el procedimiento y así presentar sus ofertas, por lo que si el órgano administrativo se negara a recibir la oferta, el licitador tiene medios de impugnación regulados en la ley para la defensa de este derecho o si admite a otros proponentes ofertas desapegadas a la ley. La existencia del derecho subjetivo que se otorga para poder participar en la licitación no trasciende a que lo tenga para ser adjudicatario del contrato, ya que solo posee interés legítimo, por ser la adjudicación solo una expectativa.

Retomando su *Compendio de Derecho Administrativo*, consideran que la oferta debe contener determinados requisitos jurídicos, clasificados en tres categorías; *a) subjetivos; b) objetivos y c) formales.*

Subjetivos, son los requisitos referentes a los sujetos o personas que pueden presentar ofertas. Es decir quiénes pueden ser oferentes, licitadores o proponentes. Los oferentes pueden ser personas físicas o morales, privadas o públicas, que cumplan los requisitos establecidos en las disposiciones jurídicas. Por ejemplo los sujetos que participen deberán poseer plena capacidad jurídica que les permite celebrar contratos.

Al emitir ofertas los terceros en representación, deberán formularlas conforme a los términos del contrato de mandato. El mandato podrá ser general o especial, para actos de dominio o administración; en tanto al relativo para pleitos y cobranzas no se considera idóneo en una licitación.

Objetivos, se consideran los requisitos referentes al contenido de la oferta, clasificados en dos categorías: a) del objeto y b) del precio.

Del objeto. Se vincula al contenido de la entrega o prestación de bienes o servicios que se ofrecen, ajustando la oferta a las condiciones requeridas por la convocante, plasmadas en la convocatoria y demás normas legales y reglamentarias.

Del precio. Requisito que consiste en la contraprestación solicitada por el oferente a la licitante, por el servicio, arrendamiento o suministro a contratar. Los requisitos que debe cumplir el precio en la oferta son: a. En dinero; b. Cierto e incondicionado.

a) En dinero. La contraprestación exigida con la oferta debe ser en dinero, por tanto que el contrato que se efectuará implica la erogación de fondos públicos que tienen incidencia en el presupuesto de egresos. La cotización en dinero se efectúa en moneda nacional, también se puede realizar en moneda extranjera, ya que no existe prohibición.

b) Cierto e incondicional. Refiriendo que el precio ofertado debe reunir los requisitos de incondicionalidad y certeza; cuando se presenta de manera indeterminada, no es claro, no es preciso o bien se condiciona, se debe rechazar la propuesta. Se considera que es un precio indeterminado cuando no se fije claramente. El precio se considera condicionado cuando el oferente establece condiciones a cargo de la convocante o terceros.

Requisitos formales de la presentación de ofertas, para Dromi dichos requisitos son:

a) Oferta escrita. Como lo establece nuestro sistema jurídico positivo la presentación se hará por escrito. Este requisito desprendido de los ordenamientos jurídicos que prevén que las ofertas se presentarán en sobre cerrado, y los requisitos a satisfacer que debe satisfacer la proposición y a la lectura que se hará de ellas en el actos de apertura, lo cual implica que necesariamente dichas ofertas se deben presentar por escrito.

   La oferta puede presentarse de forma escrita a máquina o manuscrita. En cuanto al idioma español, y en caso que sea presentada en idioma extranjero, tendrá

que acompañarse con la respectiva traducción al idioma nacional; conforme lo establecido en el artículo 271 del Código Federal de Procedimientos Civiles.

b) Firmada. La firma es un requisito formal de todo acto jurídico, ya que se considera que a través de ella es como se exterioriza la voluntad de su autor. Por lo anterior la oferta debe ser firmada por el oferente, o por su representante legal, la ausencia de esta dará lugar al rechazo de la oferta.
c) Clara e incondicionada. No debe contener abreviaturas, raspaduras, ni enmendaduras. De contener frases equivocadas deberán ser salvadas en el mismo cuerpo de la oferta, con una línea delgada sobre el error, corrigiéndolo con toda precisión, según lo prevé el artículo 272 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que se aplica de forma supletoria. La oferta no podrá presentarse condicionada.
d) Secreta. Se presenta en sobre cerrado y lacrado, el cual se abrirá públicamente.
e) Lugar y fecha de presentación. La oferta se entregará el día y lugar en que tendrá verificativo el acto de presentación y apertura, fijados en la convocatoria.

Apertura de ofertas.

Vencido el plazo de *admisión de ofertas*, en sesión de carácter público, con día y hora previamente señalados en la convocatoria, la convocante procederá a la apertura de las ofertas. Se levantara acta que servirá de constancia de la celebración del acto de presentación y apertura de las proposiciones, en la que se hará constar el importe de cada una de ellas.

Dromi, citado por Luis H. Delgadillo y Lucero Espinosa, señala que la apertura de los sobres y la lectura de las propuestas, traducen una operación material y un acto de trámite de la administración, respectivamente, por el que se permite a los oferentes tener conocimiento de todas ellas, vigilar el proceso, verificar su legalidad y asegurar la imparcialidad del licitante y su trato igualitario. El acto es verbal y actuado, porque las leyes imponen el levantamiento de un acta que refleja todo lo acontecido durante su desarrollo.

El acta circunstanciada, que deberá levantarse dejará constancia de todo lo actuado, y se incluirán las observaciones que merezca cualquier irregularidad del acto, será firmada por los servidores públicos que hayan intervenido, así como por los oferentes que quieran hacerlo, señalando fecha y hora en que se dará a conocer el fallo de las licitaciones, fecha que debe quedar comprendida dentro de veinte días naturales siguientes.

D) El fallo.

El fallo es la representación del punto culminante de la licitación y es el que genera derechos definitivos de venta aunque también, puede producirse en el sentido de declararla desierta, cuando a juicio de la convocante, las proposiciones presentadas en tiempo no reúnan los requisitos de la convocatoria de la licitación o sus precios no resulten aceptables o convenientes: o declarar la adjudicación del contrato respectivo en favor de quien, reúna las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante y garantice de manera satisfactoria el cumplimiento de las obligaciones y, en igualdad de condiciones presente la oferta de precio más bajo.

El fallo podemos decir, es un solo documento que debe contener la información para conocer cómo se llegó a determinar qué licitante o licitantes fueron desechados y por qué, cuál o cuáles son los adjudicados y en qué se sustenta tal hecho, o en su defecto, se le deja de adjudicar, por qué el precio es no aceptable o inconveniente, y qué servidores públicos son responsables de esa decisión. Cualquiera que sea el sentido del fallo, deberá fundamentarse en la evaluación de las proposiciones.

Contra el fallo procederá la inconformidad en términos del Título sexto, capitulo primero de la LAASSP.

Con el fallo se adjudica el contrato y por lo mismo conviene entrar al estudio doctrinario de la adjudicación, aun cuando en la LAASSP no tenga autonomía, como figura jurídica, en los siguientes términos:

Adjudicación deriva del verbo adjudicar *implica el concepto de una asignación o atribución, efectuada por una autoridad pública o persona competente a favor de un sujeto de derecho.*[117] Equivale en una acepción general, a otorgar, conceder, entregar por autoridad pública al mejor postor o licitador, la posesión o propiedad de un bien mueble o inmueble, mediante subasta pública.

Otra connotación de adjudicar es la realizada por el Diccionario jurídico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el cual señala que: *Adjudicar. Declarar el juez de viva voz o por escrito a uno la pertenencia de una cosa.*

José Roberto Dromi afirma que l*a* adjudicación es el acto por el cual el licitante determina, reconoce, declara y acepta la propuesta más ventajosa, poniendo fin al procedimiento administrativos pre-contractual.

El camino que la Administración Pública sigue se encuentra perfectamente definido para la elección del oferente, siempre habrá de aceptar la oferta que contiene las

[117] Diccionario Jurídico Omeba, Buenos aires, Driskill S.A., 1990, p. 480.

condiciones más ventajosas para el Estado, así los criterios de la adjudicación son los criterios cuantitativos u objetivos y los cualitativos o subjetivos.

Los cuantitativos, se emplean para determinar la mejor oferta conforme al precio, tiempo, peso, dimensión, utilización de maquinaria, adquisición de materiales y utilización de personal. Asimismo los subjetivos son empleados para determinar la experiencia, la especialidad del oferente para el objeto del contrato y la prestación de asistencia técnica.

Este acto de adjudicación es constitutivo del fallo, última fase del procedimiento licitatorio, efectuado para la preparación de la voluntad contractual administrativa y produce los efectos siguientes:

1º. Liberar de obligaciones a los licitadores cuyas ofertas se desestimaron, otorgando el derecho a retirar documentación y garantías;
2º. Notificada la adjudicación al beneficiario, es concertada la contratación, con independencia de la formalización en el instrumento respectivo, naciendo el derecho del adjudicatario de ser indemnizado por daños o perjuicios en el supuesto de que la Administración se niegue a llegar a realizar el contrato;
3º. Constituye el punto de partida conforme al cual comienzan a generarse los derechos y las obligaciones de los contratantes:
4º. Crea un derecho subjetivo al adjudicatario;
5º. Establece un deber jurídico correlativo del licitante, de contratar con el adjudicatario;
6º. Obliga a mantener inalterables las bases de licitación;
7º. Obliga al adjudicatario a integrar la garantía del cumplimiento del contrato.

Así, podemos decir que la adjudicación como parte del fallo es un acto unilateral de la licitante, del cual surgen derechos y obligaciones recíprocas entre las partes que intervienen en el procedimiento de licitación. Asimismo es expresado en uso de sus facultades discrecionales, limitadas por la emisión con arreglo de lo previsto en la convocatoria de la licitación, en las disposiciones jurídicas aplicables y en la oferta que resulte más conveniente.

E) La cancelación de la licitación.

La cancelación de una licitación como lo señalan Fernando Gómez de Lara y Alejandro Sosa en sus comentarios a la ley, es la otra forma, junto con la declaración de licitación desierta que la LAASSP prevé para dar por terminado un procedimiento licitatorio; se debe de dar alguna de las siguientes tres hipótesis:

1°. Que se presente caso fortuito o fuerza mayor que impidan continuar con el procedimiento;

2°. Que después de publicada la convocatoria a la licitación se presenten circunstancias justificadas que conlleven a la dependencia o entidad a ya no requerir los bienes o servicios que se tenían previsto contratar;
3°. Que si se continúa con el procedimiento se puedan ocasionar daños o perjuicios a la convocante.

En cuanto a la cancelación de la licitación, la LAASSP, en su artículo 38 señala que las dependencias y entidades podrán cancelar una licitación, partidas o conceptos incluidos en éstas, cuando se presente caso fortuito; fuerza mayor; existan circunstancias justificadas que extingan la necesidad para adquirir los bienes, arrendamientos o servicios, o que de continuarse con el procedimiento se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a la propia dependencia o entidad. La determinación de dar por cancelada la licitación, partidas o conceptos, deberá precisar el acontecimiento que motiva la decisión, la cual se hará del conocimiento de los licitantes, y no será procedente contra ella recurso alguno, sin embargo podrán interponer la inconformidad en términos del Título Sexto, Capítulo Primero de esta Ley. Salvo en las cancelaciones por caso fortuito y fuerza mayor, la dependencia o entidad cubrirá a los licitantes los gastos no recuperables que, en su caso, procedan en términos de lo dispuesto por el Reglamento de esta Ley.

Salvo en las cancelaciones por caso fortuito y fuerza mayor, la dependencia o entidad cubrirá a los licitantes los gastos no recuperables que, en su caso, procedan en términos de lo dispuesto por el Reglamento de esta ley.

F) La falta de formalización del contrato.

En palabras de Daniel Ramos, es una lástima que ni la LAASSP o su reglamento, ni las disposiciones administrativas vigentes contengan definición alguna sobre los *Contratos de adquisiones, arrendamientos y servicios al sector*. Asimismo nos comparte su concepto de contrato administrativo.

> *El concepto contrato administrativo remite a la idea de una relación bilateral entre el órgano administrativo en su carácter de contratante y el particular, generadora de derechos y obligaciones entre las partes que lo celebran, que contiene clausulas exorbitantes del derecho privado que protegen el interés público, además de establecer una ecuación financiera que protege al co-contratante, y que esá regulado por normas de derecho público como son las leyes sobre contratación pública; en caso de controversia entre las partes se pueden establecer como métodos de solución de controversias la jurisdicción de tribunales administrativos federales y de los tribunales administrativos del poder judicial federal, la conciliación y el arbitraje.*[118]

[118] Ramos Torres, Daniel, o*p. cit*., p. 27.

También Ramos Torres, nos otorga definiciones de algunos ejemplos de contratos de adquisiciones, arrendamientos y servicios al sector público, como lo son:

1. Contrato de adquisición de bienes muebles.

   El contrato administrativo de adquisición de bienes muebles, es un acuerdo de voluntades celebrado por las Dependencias y Entidades Federales con un proveedor o suministrador, para que éstos últimos transfieran a aquellas en propiedad bienes muebles, para el ejercicio de su función administrativa, a cambio de un precio cierto. El contrato satisface el interés público y está sujeto al Derecho de la Contratación Pública. En caso de controversía, su resolución está a cargo de la jurisdicción contencioso-administrativa[119]

2. Contrato de arrendamiento ordinario de bienes muebles.

   El contrato administrativo de arrendamiento ordinario de bienes muebles, es aquel acuerdo de voluntades celebrado por las dependencias y Entidades Federales con uno o varios particulares, en ejercicio de función administrativa, mediante el cual ambas partes se obligan recíprocamente, una a conceder el uso o goce temporal de un bien mueble, y la otra al pago por ese uso o goce, mediante un precio cierto, para satisfacer el interés público y que está sujeto al Derecho de la Contratación Pública. En ese caso de controversia, su resolucion está a cargo de la jurisdicción contencioso-administrativa.[120]

3. Contrato de prestación de servicios.

   Podemos definir al contrato administrativo de prestación de servicios como aquel contrato celebrado por las Dependencias y Entidades Federales, con una persona física o moral, para que ésta última realice trabajos de recontrucción, mantenimiento preventivo, correctivo, predictivo y maquila de bienes muebles, servicios domésticos como transporte de bienes muebles y personas, la limpieza y vigilancia, así como servicios de aseguramiento y caución, mediante el pago de una remuneración de dinero y que está sujeto al Derecho de la Contratación Pública. En caso de controversia, su resolución está a cargo de la jurisdicción contensioso-administrativo.[121]

4. Contrato de prestación de servicios profesionales.

   El contrato de prestación de servicios profesionales es aquel contrato celebrado por las Dependencias y entidades Federales, con una persona física o moral, para que ésta última realice estudios, investigaciones, asesorías, asistencias y consultorías, sirven para resolver problemáticas internas de la Administración Pública o de la sociedad y que está sujeto al Derecho de la Contratación Pública. Es caso de

[119] *Ibídem*, p. 27.
[120] *Ibídem,* p. 28.
[121] *Ibídem*, p. 29.

controversía su resolución está a cargo de la jurisdicción contencioso-administrativa.[122]

La administración manifiesta su voluntad y presta su consentimiento en un contrato, al pasar previamente por un procedimiento de selección del licitante por cuanto la voluntad estatal siempre debe exteriorizarse según las formas especiales que el Derecho Público prevé y son las legislaciones de adquisiciones y obras públicas las que señalan a la licitación pública como procedimiento que regla los contratos administrativos.

Efectuado el fallo debe notificarse al oferente seleccionado, notificación que en algunos casos llega a constituir el perfeccionamiento del contrato y así la Administración se encuentra en posibilidad de efectuar el pedido del bien, servicio u obra solicitada. En consecuencia, se considera que el contrato se perfecciona con el otorgamiento del fallo, una vez dado el acto, se perfecciona el acuerdo de voluntades al aceptar, la dependencia o entidad, la oferta propuesta por el licitante que se considera ha conseguido las mejores condiciones para el Estado.

La importancia de la licitación es tal que no solo regula el comienzo del contrato sino que su normativa se proyecta durante todo el desarrollo de la vinculación contractual, pues las bases de la licitación, el pliego de condiciones y toda la documentación rigen a lo largo de la ejecución contractual. En materia contractual, la actividad preparatoria de la voluntad de la administración transcurre a través de las formalidades de un procedimiento de selección, que en este caso es la licitación pública.

Dentro de las características de los Contratos de adquisiciones, arrendamientos y servicios se encuentran:

1º. **Las prerrogativas contractuales de la Administración Pública.** En este tipo de contratos existe una relación de subordinación del particular, con relación a la Administración Pública, toda vez que ésta se encuentra investida de una superioridad jurídica, la cual permite actuar en algunos supuestos unilateralmente, siempre bajo el principio del interés público.

2º. **Derechos y obligaciones de las partes.** Estos contratos se caracterizan por contener derechos y obligaciones comunes para las partes que los convienen.

3º. **El carácter *Intuito Personae*.** Se refiere a que el contratante, en principio, no puede hacer ejecutar el contrato por otro sujeto, es decir, no puede subcontratar ni ceder sus derechos y obligaciones a otros.

La inconformidad por la falta de formalización del contrato se señala en el artículo 65 de la LAASSP, en su fracción V:

[122] *Ídem.*

Artículo 65. *La Secretaria de la Función Pública conocerá de las inconformidades que se promuevan contra los actos de los procedimientos de licitación pública o invitación a cuando menos tres personas que se indican a continuación:*

…

V. Los actos y omisiones por parte de la convocante que impidan la formalización del contrato en los términos establecidos en la convocatoria a la licitación o en esta ley. En esta hipótesis, la inconformidad sólo podrá presentarse por quien haya resultado adjudicado, dentro de los seis días hábiles posteriores a aquél en que hubiere vencido el plazo establecido en el fallo para la formalización del contrato o, en su defecto, el plazo legal…

5. Profesionalización en contrataciones públicas.

En este apartado se describe la importancia de la profesionalización de las contrataciones públicas, mediante una formación integral tanto a servidores públicos como a proveedores, para que estas sean realizadas de forma oportuna, apegadas a la normatividad y se eviten conductas de corrupción, buscando que el estudio del marco normativo que se menciona con anterioridad, sea exhaustivo como base de su formación.

A) Principios doctrinales.

La Administración Pública en México, pese a los mecanismos implementados a través de la historia, ha generado una fuerte inconformidad por parte de los ciudadanos, por una percepción de ineficiencia e ineficacia en el combate a la inseguridad, por sus pobres resultados y por la percepción de la corrupción de los servidores y funcionarios públicos, generado principalmente por la falta de aptitud y capacidad para ejercer el cargo, como parte de un contexto global.

Rafael Martínez Puón en su libro *La profesionalización de la Administración Pública en México. Dilemas y perspectivas indica que* el Estado mexicano enfrenta principalmente cuatro grandes retos en relación con su reforma institucional vía consolidación democrática: 1) Un desarrollo económico sustentable respaldado por una infraestructura agroindustrial altamente competitiva en los mercados internacionales, acompañado de justicia social, traducida en mejores oportunidades de empleo, mejor distribución del ingreso y en elevar el nivel de vida de la sociedad. 2) La configuración de un nuevo sistema político que posibilite la creación de una nueva Constitución, el redescubrimiento de la división de poderes, la publicitación de las decisiones políticas, una competencia justa entre partidos políticos, el fortalecimiento del federalismo, la sustancial mejoría del sistema electoral a través del perfeccionamiento de sus instrumentos legales y jurídicos, así como el uso de nuevas tecnologías, pero sobre todo la creación de instrumentos y fórmulas de participación ciudadana; todo esto con la idea

de que se edifique la existencia y aplicación de un Estado de Derecho. 3) La reforma institucional del gobierno y la Administración Pública, que posibilite el perfeccionamiento y utilización de procesos como la descentralización administrativa, las políticas públicas, las tecnologías gerenciales, la gestión pública, la transparencia en el manejo de los recursos, la rendición de cuentas, la ética en el servicio público, el establecimiento de un servicio civil de carrera y la creación de nuevos mecanismos e instrumentos que permitan un mejor trato y diálogo con los ciudadanos. 4) El fortalecimiento de la sociedad civil y sus diferentes vertientes de organización a través de la implementación de canales de comunicación con el Estado en un esquema de corresponsabilidad y complementariedad.

Como lo indica Rafael Martínez Puón, ubica en los retos de las reformas administrativas, el establecimiento de un servicio civil de carrera, principalmente por los resultados que arroja la Encuesta Mundial de Valores México 2000, mostrando claramente en los resultados la confianza que tiene la ciudadanía en la Administración Pública, ubicándola por debajo del 35%, siendo el ejército de los más confiables.

Este mismo autor refiere la urgencia de tomar medidas para el fortalecimiento de la Administración en México, sugiriendo la necesidad de fortalecer y completar a las instituciones con otros procesos que respondan a la lógica de los regímenes democráticos, como la transparencia en el manejo de los recursos, el mérito, la rendición de cuentas, la toma de decisiones compartida, la competitividad, la calidad en los servicios y la profesionalización de los servidores públicos. Resultando importante este aspecto pues el Estado mexicano y la Administración Pública enfrentan un doble dilema, por una parte, redescubrir y consolidar instituciones administrativas propias del modelo burocrático weberiano (Administración Pública tradicional), como el establecimiento de un servicio civil de carrera y, por la otra, avanzar hacia los dictados de la Nueva Gestión Pública.

Actualmente en México, entre otras discrepancias por parte del pueblo con el gobierno, tenemos la elección de los funcionarios públicos por el Poder Ejecutivo Federal, dicho de otra manera, por el Presidente de la República, lo cual provoca gran inconformidad en la ciudadanía por los resultados ineficientes de la Administración Pública Federal.

Diversos estudiosos, entre otros, José Luis Méndez propone un servicio civil de carrera para regular la entrada y promoción de los funcionarios públicos con base en el mérito y la capacidad profesional y no en los vínculos partidarios o personales. Incluir los principios de seguridad laboral y de que a igual nivel o función, igual categoría y salario. Debe proteger a los funcionarios de las evaluaciones de tipo político, darles seguridad en el empleo y posibilidades de promoción profesional. Atraer a los candidatos calificados, desarrollar una memoria administrativa y políticas de más largo plazo, así como implantar estructuras de incentivos monetarios y profesionales, dirigidas a que los servidores públicos cumplan sus labores de una manera profesional y justa.

En materia de profesionalización de los servidores públicos, se avanza en dos senderos: uno dirigido hacia la profesionalización a través de las nuevas técnicas de la gestión pública, y el otro, hacia la institucionalización, de un servicio civil de carrera para toda la Administración Pública, tanto a nivel central como local.

El servicio civil busca la construcción de un sistema de mérito, y dejar atrás el sistema de patronazgo, contando con antecedentes en México que datan desde 1761 con las políticas en la materia de profesionalización y permanencia de los funcionarios públicos.

> *Las acciones encaminadas para implantar un servicio profesional de carrera en la Administración Pública federal (de aquí en adelante APF) no se iniciaron con la publicación de la Ley del Servicio. Así tenemos que el 12 de abril de 1934 se publicó en el Diario Oficial el Acuerdo sobre Organización y Funcionamiento del Servicio Civil. Varios años después apareció el 29 de junio de 1983 el Acuerdo por el que se Crea la Comisión Intersecretarial del Servicio Civil como un Instrumento de Coordinación y Asesoría del Ejecutivo Federal para la Instauración del Servicio Civil de Carrera en la Administración Pública Federal, y posteriormente el 19 de junio del año siguiente se publica el Reglamento Interior de la Comisión Intersecretarial del Servicio Civil.*[123]

María del Carmen Pardo, realiza los estudios comparativos del servicio civil de carrera con los países de Francia, Estados Unidos, Gran Bretaña, entre otros. Los resultados de estos estudios dejan ver la importancia de implementarlos en México por las deficiencias que tenemos y se debiera incorporar como un propósito explícito dentro de las reformas estructurales del país.

En la Administración Pública Federal, resulta importante la implementación del servicio profesional, siendo actualmente un elemento central en los objetivos de nuestro gobierno democrático.

> *Un servicio profesional es un sistema de gestión de personal que, involucra el ingreso, formación, promoción, evaluación, sanción y planeación del personal del sector público. No obstante, por sus implicaciones dista mucho de ser un mero instrumento administrativo, ya que, sin duda, su aplicación tiene importantes efectos en la manera en que el gobierno cumple su función básica, que es generar, resguardar y distribuir bienes públicos entre sus integrantes, a través de servicios y políticas públicas.*[124]

Para el servicio profesional como lo señala Mauricio Dessauge y José Méndez, se requieren valores de mérito e igualdad, entendiéndose por mérito, garantizar el ingreso de las personas seleccionada en los cursos que han mostrado sus habilidades y que son

---

[123] Zárate Castillo, Arturo. "La Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal." *Revista Mexicana de Derecho Constitucional.* Núm. 9, julio-diciembre 2003.

[124] Dessauge Laguna, Mauricio I. y Méndez, José Luis, "*El servicio profesional: una introducción general"*, en Méndez, José Luis, o*p. cit*. p. 18.

aptas para el puesto a desempeñar. Así como el valor de igualdad reflejada en las mismas oportunidades para todos.

Un tercer valor señalado por Dessauge es el *Principio de Certidumbre* en el puesto, de acuerdo con ciertas reglas, más que estabilidad o permanencia laboral. Por último se tiene el valor de neutralidad política, señala el autor: aunque está sujeto a diversas interpretaciones, al establecer reglas claras para la gestión meritocrática de los recursos humanos- y, particularmente, condiciones específicas bajo las cuales, un servidor público de carrera puede permanecer o ser separado de su puesto- los servicios profesionales intentan asegurar la existencia de una asesoría técnica apartidista para las políticas públicas, así como la capacidad de los servidores públicos para ejecutar distintas políticas en función del gobierno en turno.

Para el ingreso de los servidores públicos, normalmente se involucran los criterios de reclutamiento y selección del personal de carrera; en la formación se expone la capacitación o desarrollo académico; la promoción son los mecanismos o condiciones que se necesitan para su cambio de puesto, ya sea de manera horizontal o ascendente; la evaluación, sirve para valorar el desempeño del personal; los incentivos son premios al personal por su desempeño o experiencia en el cargo y; la sanción contempla mecanismos, tanto para tomar medidas disciplinarias en caso de anomalías o incumplimientos por parte de los funcionarios públicos, así como la defensa ante estas medidas o sanciones impuestas a los mismos.

Existe el servicio profesional de carrera o cerrada, se describe como aquel basado en la antigüedad y experiencia, iniciando desde el rango más bajo, presentando las ventajas de promover el valor de lealtad y honestidad institucional y con ello conseguir un panorama amplio de las funciones de la institución. Asimismo tiene la desventaja de no generar competencia para los puestos, ni la entrada de nuevos talentos, contando con la experiencia e inteligencia para ocupar los cargos, resultando la reducción de más beneficiarios.

Por otro lado, en el servicio profesional de empleo o abierto, a diferencia del mencionado anteriormente, se tiene la posibilidad de ingresar en cualquier cargo, desde el rango bajo, hasta el más alto. Las ventajas que presenta son aprovechar las nuevas experiencias y talentos, sin tener la necesidad de pasar por todos los niveles. Las desventajas son, la carencia de los valores de lealtad y honestidad, además de las limitaciones del personal para ser promovido.

Miguel Ángel Centeno precisa importantes datos como que una de las pocas investigaciones empíricas sobre la carrera administrativa en México (si no es que la única) concluye que sólo alrededor de 20% de subsecretarios y directores generales obtuvo su puesto de manera clara por amiguismo en lugar de capacidad. Por otro lado, Centeno ha mostrado que un número creciente de funcionarios no pertenece al PRI o cuando menos

no participa activamente en él y datos de Camp revelan una clara falta de confianza en el gobierno (la mitad de la que se tiene en Estados Unidos o Canadá). En 1992, 56% de los mexicanos no favorecía partido alguno. En 1991 sólo uno de cada cinco expresó tener confianza en el gobierno y sólo 12% dijo respetar el proceso político. En 1987, 81% y 78% de los mexicanos creyeron que el gobierno era mal administrador y deshonesto, respectivamente. Además, al menos con Salinas, hubo programas públicos frecuentemente acusados de excesiva centralización y discrecionalidad por parte del presidente. En un estudio reciente, México aparece como uno de los 10 países con mayor grado de corrupción en el mundo.

En México, así como en varios países en desarrollo se creó el sistema profesional de carrera, sin embargo, hay desconfianza en la población hacia los servidores públicos, como se ve reflejado en las investigaciones empíricas y de organizaciones públicas y privadas. Por lo anterior, se requiere un servicio profesional en licitaciones gubernamentales que conjuntamente con otras medidas como el Sistema Nacional Anticorrupción, rescaten la confianza de la ciudadanía con base en el buen manejo de los recursos públicos.

B) Marco normativo.

El marco jurídico de la profesionalización tiene fundamentos constitucionales y leyes reglamentarias, como opciones para mejorar las contrataciones públicas y los procesos de licitaciones.

a) Fundamento constitucional.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 123, apartado B, con un total de 26 reformas a la fecha, nos establece las bases para regular las relaciones de Estado con sus trabajadores y, en consecuencia, le da soporte al servicio profesional de carrera, otorgando el derecho de tener un trabajo digno y socialmente útil, promoviendo la creación de empleos y la organización social de trabajo.

Fue en el gobierno de Adolfo López Mateos, que se presentó el 7 de diciembre de 1959, la iniciativa a la Cámara de Senadores de reconocer las garantías sociales a los trabajadores del Estado, tomando en consideración que la relación jurídica que une a los trabajadores en general con sus respectivos patrones, es de distinta naturaleza de la que liga a los servidores públicos con el Estado. Pero también es cierto que el trabajo no es una simple mercancía, sino que forma parte esencial de la dignidad del hombre; de allí que deba ser siempre legalmente tutelado. De lo anterior se desprende la necesidad de comprender la labor de los servidores públicos dentro de las garantías al trabajo que

consigna el antes citado artículo 123, con las diferencias que naturalmente se derivan de la diversidad de situaciones jurídicas. La adición que se propone al texto constitucional comprende la enumeración de los derechos de los trabajadores y consagra las bases mínimas de previsión social que aseguren, en lo posible, tanto su tranquilidad y bienestar personal, como la de sus familiares: jornada máxima, tanto diurna como nocturna, descansos semanales, vacaciones, salarios, permanencia en el trabajo, escalafón para los ascensos, derecho para asociarse, uso del derecho de huelga, protección en casos de accidentes y enfermedades, así profesionales como no profesionales, jubilación, protección en caso de invalidez, vejez y muerte, centros vacacionales y de recuperación, habitaciones baratas, en arrendamiento o venta, así como las medidas protectoras indispensables para las mujeres durante el período de la gestación, en el alumbramiento y durante la lactancia.

b) Leyes reglamentarias.

La Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, se publicó el 28 de diciembre de 1963 y su función es garantizar los derechos laborales a los trabajadores del Estado.

La iniciativa de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública, se presentó a la Cámara de Diputados el 24 de octubre del año 2000 y fue publicada el 10 de abril de 2003, y posteriormente la iniciativa de las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley de Planeación y la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, Omar Guerrero escribió, respecto a estas dos iniciativas:

- Objeto: sentar las bases legales para impulsar un servicio público renovado, profesional, eficaz y eficiente, que dé cabal respuesta a las demandas de la ciudadanía.
- La actuación eficiente y eficaz del gobierno para atender las necesidades de la sociedad es exigida por los usuarios de los bienes y servicios públicos, a través del servicio profesional de carrera.
- Retomar el concepto, ya clásico, de servicio civil de la ONU que lo define como el cuerpo apolítico y permanente de funcionarios que forma la espina dorsal de una Administración Pública Nacional, cuyos elementos medulares son: una ley básica de administración de personal de servicio civil y un organismo responsable de su aplicación.

La exposición de motivos precisa que la Ley para el Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, implica un proceso de profesionalización del servicio público donde se establecerán requisitos para el ingreso, permanencia,

promoción e incluso la separación, con base en el mérito de igualdad de condiciones, todo ello verificado mediante evaluaciones. Estos procedimientos se refuerzan con la formación continua, donde el desempeño a evaluarse es apoyado por una capacitación permanente que le permitirá la mejora en el desarrollo de sus funciones. Tomando en consideración las aportaciones en lo individual de senadores expertos en la materia y recomendaciones nacionales como internacionales. Se invitaron a expertos como David Osborne, de Estados Unidos, Janice Charette del gobierno de Canadá y Eusebio Arroyo Jiménez, del Ministerio de Administraciones Públicas de España. Con la información de las comisiones se aportó un diseño orgánico y funcional que permitirá fundar la institución necesaria bajo el nombre de “Servicio Profesional de Carrera.

La iniciativa, presentada por el PRI, señala que se debe de dar certidumbre y continuidad en las políticas públicas del gobierno federal, al tiempo de garantizar los derechos de los servidores públicos en el desempeño de sus funciones. Además de la creación de un sistema permanente e imparcial de evaluación y capacitación y se regula el ingreso y promoción de los cuadros de la Administración Pública, con base en criterios verificables de equidad, transparencia y acordes con los intereses nacionales.

C) Órganos de ejecución.

La misma Ley de Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, lo define en su artículo 2°como un mecanismo para garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública con base en el mérito y con el fin de impulsar el desarrollo de la función pública para beneficio de la sociedad, dependiente del titular del Poder Ejecutivo Federal y contando con los principios de la legalidad, eficiencia, objetividad, calidad, imparcialidad, equidad, competencia por mérito y equidad de género.

La SFP coordina cursos para la capacitación de los servidores público, a fin de proporcionarles los conocimientos para su desarrollo, de acuerdo a lo establecido en la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal.

El Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, se define como el órgano de impartición de justicia laboral competente para dar solución a los conflictos laborales individuales y colectivos que se suscitan entre las dependencias de la Administración Pública Federal, de la Ciudad de México, sus trabajadores y organizaciones sindicales.

Con la nueva reforma en impartición de justicia laboral impulsada por el ejecutivo federal, se modificará el artículo 123 en su apartado A, lo que producirá la desaparición de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, sustituyéndolas por un nuevo órgano que dependerá del poder judicial, así como también la creación de los Centros de Conciliación, mientras que el apartado B del artículo antes mencionado no sufrirá ningún

tipo de modificación en cuanto a la autoridad con jurisdicción en la materia. La reforma esta programada *"para ser publicada en diciembre de 2016."*[125]

De acuerdo al Ejecutivo Federal, esta modificación fue necesaria porque los cambios introducidos en la justicia laboral se sustentaron fundamentalmente en el establecimiento de mecanismos para eficientar los procedimientos acortando tiempos para que la justicia sea una realidad, y en la profesionalización del personal encargado de impartirla. No obstante, después de tres años y como resultado de concienzudas evaluaciones y análisis presentados en diversos foros, se arriba a la conclusión que se requieren transformaciones cualitativas para que la justicia laboral cumpla su propósito.

Por lo anterior, se puede entender que se creara otro órgano que dependerá del Poder Judicial. Así como la creación de un organismo para realizar la conciliación entre el patrón y el trabajador.

Siguiendo la exposición de motivos la transición será de la siguiente forma:

1º. Las Juntas de Conciliación y Arbitraje, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social o las autoridades locales, según corresponda, continuarán atendiendo las diferencias o conflictos entre el capital y trabajo y sobre el registro de los contratos colectivos de trabajo y de organizaciones sindicales.

2º. Los Tribunales Colegiados de Circuito del Poder Judicial de la Federación, continuarán conociendo de los amparos interpuestos en contra de laudos emitidos por las Juntas de Conciliación y Arbitraje.

3º. Los asuntos que estuvieren en trámite al momento de iniciar sus funciones los juzgados o tribunales laborales, Centros de Conciliación y el organismo descentralizado, serán resueltos de conformidad con las disposiciones aplicables al momento de su inicio.

4º. En su oportunidad, las autoridades competentes y las Juntas de Conciliación y Arbitraje, deberán transferir los procedimientos, expedientes y documentación que tengan bajo su atención o resguardo a las nuevas instancias que se encargarán de resolver las diferencias y conflictos entre trabajadores y patrones, así como al organismo que llevará la atención de los asuntos relacionados con el registro de contratos colectivos de trabajo y organizaciones sindicales.

5º. Se respetarán conforme a la ley, los derechos de los trabajadores que actualmente tienen a su cargo la atención de las diferencias o conflictos entre capital y trabajo y sobre el registro de los contratos colectivos de trabajo y de organizaciones sindicales.[126]

Las reformas correspondientes se harán el año siguiente a la entrada en vigor del decreto. Mientras tanto las Juntas seguirán llevando los asuntos que surgen por los

[125] El Financiero http://www.elfinanciero.com.mx/economia/reforma-de-justicia-laboral-seria-promulgada-este-ano.html consultada el 14 de noviembre de 2016, a las 5:20 p.m.

[126] https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/87471/JUSTICIA_LABORAL__CONSTITUCIONAL_.pdf consultada del 15 de noviembre de 2016 a las 3:51 p.m.

conflictos o diferencias de los trabajadores y patrones, en cuanto se creen los nuevos organismos, las juntas transmitirán los expedientes, documentación y procedimientos que tengan a su resguardo.

D) Aplicación a las contrataciones públicas.

Dentro de la LAASSP, se encuentra regulada, parte de la profesionalización, la Secretaría de la Función Pública, en el ámbito de sus atribuciones está encargada de establecer las directrices conforme a las cuales se determinarán los perfiles de puesto de los servidores públicos correspondientes en materia de contrataciones públicas, así como las relativas a la capacitación para el adecuado desempeño de sus funciones en las materias a que alude esta Ley (art. 7°).

La Secretaría de la Función Pública (SFP) es la encarga de la profesionalización en la Administración Pública Federal, implementando programas a las instituciones y, evaluando los reportes de avances. Se considera el ingreso de las personas para ocupar un lugar en la Administración, cuantos fueron rechazados, así como su capacitación, desarrollo y evaluación del desempeño.

En materia de contrataciones públicas, la SFP y COFEPRIS, en el año 2014, inician el curso de capacitación para los servidores públicos encargados de las adquisiciones o arrendamientos con recursos públicos. Este curso constaba de 18 horas divididas en cuatro sesiones, entre los principales temas destacan el marco jurídico aplicable a las contrataciones públicas en términos de la LAASSP; la planeación de las contrataciones, los procedimientos y la extinción de las obligaciones contractuales, el régimen de infracciones y sanciones, así como la importancia de la ética y moralidad en los procedimientos de contratación pública.

El curso fue impartido por la Unidad de Normatividad de Contrataciones Públicas de la SFP. Ahora bien, la Unidad de Política de Contrataciones Públicas, cuenta con el *"Programa de Profesionalización de Servidores Públicos, Perfil de Responsables. Unidades Compradoras Registradas en CompraNet",* hecho en el 2012. Y el *"Programa de Profesionalización de Servidores Públicos. Mapa Curricular Especialización y Maestría"* del mismo año.

La Unidad de Normatividad de Contrataciones Públicas, establece capacitaciones en adquisiciones, enunciando las siguientes:

1º. Curso general. Contratación de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.
2º. Cursos específicos. Investigación de mercado en la LAASSP; Criterios de la evaluación de propuestas en la LAASSP y; Modificación de contratos en la LAASSP.

3º. Entorno normativo de los bienes muebles de la APF (servidores públicos que intervengan en contrataciones públicas).
4º. Aparte de estos existen otros 30 cursos más que se pueden consultar en el anexo 2.

La Red Interamericana de Compras Gubernamentales, apoya al desarrollo de la profesionalización en las contrataciones públicas, considerándolo de la máxima relevancia al señalar:

> *Es importante crear, promover y fortalecer un sistema regional de profesionalización que integre en una cadena de valor los distintos elementos necesarios para producir los resultados deseados, y que a su vez suministre un marco de referencia regional que genere eficiencia al evitar duplicaciones innecesarias en aspectos donde las situaciones de los países son coincidentes, considere e incluya las diferentes perspectivas existentes, en atención a diferentes realidades y orientaciones de los países de la región.*[127]

Los miembros de la RICG, en las Conferencias Anuales y Talleres/Seminarios, exponen sus mejores prácticas y propuestas:

En el año 2012, Oscar Chinea de los Estados Unidos Americanos, analiza la certificación y acreditación de funcionarios públicos en compras gubernamentales, encontrando los siguientes obstáculos:

- La región carece de sistemas consolidados de capacitación en Contratación Pública (CP).
- Existen experiencias aisladas de establecer sistemas de capacitación en CP, casi exclusivamente centradas en los aspectos normativos y en la interacción con los sistemas electrónicos de contratación pública.
- Cuando se incluyen contenidos distintos, suelen limitarse a elementos administrativo-burocráticos (elaboración de especificaciones técnicas, elaboración de documentos de licitación, administración de contratos, etc.).
- La oferta de capacitación reproduce la evolución de la percepción de las competencias requeridas para operar los procesos de adquisiciones (Ingeniería-Abogacía-Informática), pero difícilmente incorporan la más reciente percepción de competencias de Economía.

Por lo que él propone para subsanar estas vicisitudes, tomando en consideración las experiencias de Honduras, Nicaragua, Perú, Chile y Colombia, lo siguiente:

- *Es recomendable que la estrategia de Capacitación contenga Programas de Difusión e Información, así como Programas de Capacitación Especializada.*

[127] Red Interamericana de Compras Gubernamentales en http://ricg.org/profesionalizacion-en-compras-publicas/contenido/459/es/ consultada el 23 de junio de 2016, a las 7:13 p.m.

- *El contenido debe ser integral, comprendiendo aspectos doctrinarios, normativa, teoría económica aplicada, herramientas de gestión, herramientas gerenciales, prácticas y ética.*
- *Debe promoverse y facilitarse el surgimiento de un mercado competitivo de capacitación en Contratación Pública.*
- *La capacitación debe cobrarse a los participantes o a sus instituciones. En un principio, puede ser necesario subsidiar parcialmente la capacitación, para favorecer y fortalecer la demanda necesaria para el surgimiento del mercado.*
- *Los costos deben ser accesibles.*
- *La capacitación debe partir de un enfoque basado en competencias y de gestión para resultados.*[128]

En el mismo año, Magali Rojas de Perú, menciona que el desarrollo de capacidades se basa en el liderazgo y titularidad interna, asimismo en las estrategias relevantes dentro de un contexto y específicas para el mismo, con intervenciones complementarias y, entre otras, el compromiso con inversiones a largo plazo, mientras se trabaja para conseguir logros a corto plazo.

Posteriormente, Tomás Campero de Chile, señala que las reformas macro de su país dejan pendiente la profesionalización de compradores públicos, que debe buscar como objetivo el impacto y calidad en sistemas integrales y la sostenibilidad.

Continuando, en el mismo año, ChileCompra establece el Proceso de Acreditación de Competencias Técnicas, definiéndolo como un procedimiento implementado por la Dirección de Compras y Contratación Pública, para medir los conocimientos técnicos relativos al sistema de compras públicas de los usuarios del sistema de carácter obligatorio. Este proceso consta de dos etapas:

- *Prueba Presencial: que consta de 60 preguntas distribuidas en tres secciones: verdadero y falso, selección múltiple y casos de decisión.*
- *Monitoreo del Comportamiento: que consiste en medir 3 indicadores de gestión en el sistema de los usuarios.*[129]

Actualmente en México, contamos con la Unidad de Política de Recursos Humanos de la Administración Pública Federal, adscrita a la Secretaría de la Función Pública, encargada de programar, dirigir, coordinar, evaluar y dar seguimiento a la operación y funcionamiento del Sistema de Servicio Profesional de Carrera.

Las funciones de la UPRHP se encuentran en el artículo 19 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, entre otras, se encarga de promover, dirigir y coordinar la implantación de políticas y estrategias en materia de planeación,

[128] Taller Subregional de Centroamérica sobre Compras Gubernamentales, México 2012, en http://ricg.org/profesionalizacion-en-compras-publicas/contenido/459/es/
[129] *Ídem.*

administración y organización de los recursos humanos de las dependencias, entidades y la Procuraduría para el desarrollo integral y la profesionalización de la función pública;

Cuenta con un Centro de Atención y Asesoría Técnica, para brindar una mejor atención en los diferentes procesos del Sistema del Servicio Profesional de Carrea, tales como:

- Red de capacitación.
- Red de capacidades
- Red de desarrollo profesional.
- Red de recursos humanos
- Evaluaciones de capacidades estratégicas de recursos humanos.
- Curso de evaluación de desempeño.
- Planeación, organización y compensaciones.
- Pruebas CENEVAL.
- Excepciones al SPC.

Se ha mencionado anteriormente la importancia de los procesos de contratación pública, pues el Estado obtiene, vía impositiva, aportaciones del gobernado lo cual le permite que pueda adquirir, arrendar bienes y contratar servicios, así como construcción de obras.

Los procedimientos de contratación son fundamentales de conocer para la autoridad y personas que participan en las licitaciones públicas, adjudicaciones directas o invitaciones a cuando menos tres personas.

La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, tiene correlación con más de 180 disposiciones, tanto legales como con criterios de interpretación de la SCJN y en la mayoría de los casos, no se tiene conocimiento de su existencia o relación con la ley de la materia, cometiendo grandes errores. Ello provoca un mal funcionamiento de las contrataciones públicas, incumpliendo los principios que la rigen.

En consecuencia el gobernado tiene que inconformarse dentro de los mismos procedimientos, por la deficiencia del gobierno para la resolución de conflictos. Resulta trascendental conocer la defensa jurídica del gobernado en su carácter de licitante o proveedor, la relación administración y administrado, conociendo los derechos y obligaciones, así como la explicación más detallada de los mecanismos para inconformarse.

En México tenemos un marco normativo adecuado a las licitaciones públicas, pero falta una capacitación a fondo para que lo conozcan los funcionarios públicos que participan en los procedimientos, pues hay cursos pero no una profesionalización que

implicaría educación, permanencia en el trabajo y remuneraciones adecuadas a la responsabilidad.

Cuando en los procesos licitatorios las autoridades que intervienen, en ejercicio de sus facultades, llevan a cabo actos que pudieran a consideración del participante, no estar apegados a derecho, este tiene cuatro opciones de defensa de sus derechos públicos subjetivos, descritos en los siguientes incisos: a) La instancia de inconformidad; b) El recurso de revisión; c) El juicio contencioso administrativo, e; d) El juicio de amparo. Del estudio de la defensa jurídica del gobernado se ocupa el siguiente capítulo.

CAPÍTULO IV

DEFENSA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN SU CARÁCTER DE LICITANTE O PROVEEDOR.

S U M A R I O:

1. Nota introductoria. 2. La relación administración-administrado. A) La relación jurídico-administrativa. B) Los derechos públicos subjetivos del estado y del gobernado. C) Derechos y obligaciones administrativas. 3. Medios de impugnación aplicables a las contrataciones públicas. A) El control jurisdiccional. a) La justicia administrativa. B) La instancia y el recurso administrativo. a) Reformas a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en materia de solución de controversias. i) La instancia de inconformidad. ii) El procedimiento de conciliación. iii) El arbitraje y otros mecanismos de solución de controversias y competencia judicial. b) El recurso de revisión. C) El juicio contencioso administrativo. a) El Tribunal Federal de Justicia Administrativa. i) El procedimiento contencioso administrativo (juicio de nulidad). D) El juicio de amparo. a) Juicio de amparo indirecto. b) Juicio de amparo directo.

1. Nota introductoria.

Los fundamentos imprescindibles de la actividad del Estado, para que sea justa y recta son: *El Estado de Derecho* y el *Principio de Legalidad*; siguiendo el enfoque de José Ramón Cossio, podemos decir que el *Estado de Derecho* es un modelo, un formato o un esquema dentro del que deben darse las formas de actuación de los componentes públicos y privados de una sociedad, sean respecto a sí mismos o a sus integrantes, o al otro componente. Con ello, podemos decir que el modelo determina las tareas del poder público y de los gobernados, como las relaciones surgidas entre ellos.

Complementando lo anterior Gabino Fraga explica que el principio de legalidad "*consiste en que ningún órgano del Estado puede tomar una decisión individual que no sea conforme a una disposición general anteriormente dictada"*.[130]

Como producto de la relación jurídico-administrativa, surge la noción de Derecho Público Subjetivo, y así *"… frente a la facultad del Estado de exigir el cumplimiento de una obligación, existen a favor de los gobernados una serie de protecciones consideradas*

[130] Fraga, Gabino, o*p. cit*., p. 99.

como límites a la actividad de aquél, las que a su vez constituyen los derechos públicos subjetivos de los gobernados"[131]*.*

(…) esa facultad de exigencia a la Administración se encuentra protegida, en los sistemas jurídicos, por un recurso administrativo o por una acción jurisdiccional, ante tribunales administrativos o judiciales, según sea el caso.[132]

La justicia administrativa es el conjunto de instrumentos jurídicos mediante los cuales se pretende dar oportunidad a los particulares para impugnar los actos de la Administración Pública que lesionan o afectan sus intereses, abarcando no sólo los medios procesales, sino también los medios jurídicos dentro de la misma Administración Pública para su control de legalidad.

Los medios de impugnación con que cuenta el participante para controvertir actos ilegales desplegados por servidores públicos de las Dependencias y Entidades en los procedimientos de contratación son: la inconformidad, el recurso de revisión, el juicio de nulidad y el juicio de amparo.

2. La relación administración-administrado.

Dos son los fundamentos esenciales de la actividad del Estado[133], para que ésta no sea arbitraria: el *Estado de Derecho* y el *Principio de Legalidad*: *"El Estado de derecho implica la sumisión de todos los funcionarios públicos a las normas jurídicas que regulan su actuación, y la organización centralizada debe proveer a que el principio de la legalidad sea en todos los casos respetado."*[134]

Por su parte, el *Principio de Legalidad "es la institucionalización de procedimientos y recursos jurídicos para garantizar tanto la permanencia de las decisiones políticas fundamentales, como el respeto a las garantías individuales y sociales del gobernado frente a los actos de autoridad",*[135] podemos decir que implica que todas las actividades estatales deben ser sustentadas en normas jurídicas que le otorguen validez y que al gobernado no se le prohíba realizar salvo lo que la propia ley disponga. Derivado de lo anterior, el sistema jurídico coloca al Estado en una relación

---

[131] Lucero Espinosa, Manuel, *op. cit.* p. 5.

[132] Lucero Espinosa, Manuel. La licitación pública, Porrúa, México, 1993. p. 6.

[133] La actividad del Estado es el conjunto de actos materiales y jurídicos, operaciones y tareas que realiza en virtud de las atribuciones que la legislación positiva le otorga. El otorgamiento de dichas atribuciones obedece a la necesidad de crear jurídicamente los medios adecuados para alcanzar los fines estatales. Gabino, Fraga. Derecho Administrativo. 40 ed., Porrúa, México, 2000, p. 13.

[134] *Ibídem*, p. 171.

[135] En este sentido se pueden ver las opiniones de Moreno Rodríguez. Rodrigo, *La Administración Pública Federal en México*, Tesis Doctoral. UNAM, México 1979. p. 18.

jurídica de la que resultan, para uno, poderes, competencias o prerrogativas; y para otro, derechos y garantías.

Para Gabino Fraga, el principio de legalidad "*consiste en que ningún órgano del Estado puede tomar una decisión individual que no sea conforme a una disposición general anteriormente dictada"*.[136]

El término *Estado de Derecho* es un concepto cuyo inicio de utilización es ubicado por los doctrinarios hacia la irrupción de la revolución liberal francesa de finales del siglo XVII, aunque señala Pablo Lucas Verdú que, previo a ello: *"(…) en la Edad Media cristiana las controversias sobre el constitutivo formal de la ley entre voluntaristas e intelectualistas contribuyen a perfilar las características de la racionalidad de la ley frente a los caprichos de la voluntad despótica (...)"*[137]*.*

El mismo autor señala que las asociaciones remotas de lo que se debe entender por *estados*, pretendieron regir su desarrollo bajo la vigencia plena del imperio de la ley, y señala que la antigüedad griega mantuvo el ideal del dominio de la ley sobre el poder despótico, aunque esto no llegó a institucionalizarse.

Otros autores identifican el origen del *Estado de Derecho* en la Gran Bretaña. El conjunto de principios que forman los requisitos fundamentales para una vida social en orden y con libertad deriva de la experiencia inicial del mundo anglosajón. Es por ello que al conjunto de principios se les conoce como *Rule of Law*, concepto que no tiene una real traducción al castellano, y la más cercana a éste es la de *Estado de Derecho.*

Para los autores, el que se viva una situación ideal de *Estado de Derecho* implica una serie de requisitos *sine qua non,* se podría vivir en un país aspirando vivir en el *Estado de Derecho*, pero el cumplir con la ley solo ofrece una simple definición del *Estado de Legalidad* (sin importar la calidad y acatamiento de las normas).

Para José Ramón Cossio, el *Estado de Derecho "como un modelo que cumple con ciertas funciones que tienen el propósito de postular como deben darse ciertas formas de actuación de los componentes sociales"*[138]*.*

En cuanto al enfoque proporcionado por el Dr. Cossio, podemos decir que es un modelo, un formato o un esquema dentro del que deben darse las formas de actuación de los componentes públicos y privados de una sociedad, sean respecto a sí mismos o a sus integrantes, o al otro componente. Con ello, podemos decir que el modelo determina

---

[136] Fraga, Gabino, *op. cit*., p. 99.

[137] Lucas Verdú, Pablo, *Estado liberal de Derecho y Estado social de Derecho, Acta Salmanticensia, Salamanca*, 1955, pp. 8-9.

[138] Cossio, José Ramón, "Estado de Derecho, Concepto, Funciones y Límite", *Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional* ISSN 1138-4824, núm. 11, Madrid, 2007, p. 52.

las tareas del poder público y de los gobernados, como las relaciones surgidas entre ellos.

En cuanto a Elías Díaz, en su libro *Estado de Derecho y Sociedad Democrática*, ubica los elementos necesarios al Estado de Derecho en 4 requisitos:

1º. Imperio de la ley: ley como expresión de la voluntad general.
2º. División de poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial.
3º. Legalidad de la administración: actuación según ley y suficiente control judicial.
4º. Derechos y libertades fundamentales: garantía jurídico formal.

Para este autor es imprescindible la presencia de esos cuatro elementos a los cuales califica de "esenciales".

1º. Imperio de la ley: Ley como expresión de la voluntad general.

Precisa que la *Rule of Law* (regla de derecho), antes mencionada, es la nota primaria y fundamental del Estado de Derecho, y explica que el contexto ideológico-político-histórico arranca del liberalismo y culmina en la democracia y el socialismo. Por ley se debe entender la producida formalmente por el órgano popular representativo, ya sea Parlamento o Asamblea Nacional (Congreso, en el caso de México), y ésta debe entenderse como la concretización racional de la voluntad popular; la ley ordinaria se conexiona y subordina a la ley fundamental (Constitución), y el control de constitucionalidad de las leyes[139] asegura precisamente esa conexión y subordinación. Pero el imperio de la ley no se alcanza simplemente por su emisión por el Legislador, las mismas deben cumplir con dos condiciones imprescindibles, que la ley sea legítima y que la misma este legitimada.

1º. Ley Legítima

El que la ley sea legítima implica que ésta emane del órgano competente constitucional y legalmente para crear leyes, atendiendo a las diversas formalidades, y a los diferentes procesos legislativos.

2° Ley Legitimada

La otra condición para que se dé el *Imperio de la Ley*es que ésta sea eficaz, legitimada, que sea cumplida por el gobernado, acatada. Hans Kelsen en su obra *Derecho y Paz en las Relaciones Internacionales señala que la eficacia "es el hecho de que en efecto las normas sean obedecidas y aplicadas […] un juicio concerniente a la eficacia es un juicio sobre lo que*

[139] En el actual sistema de control constitucional de leyes, ello se realiza mediante el Amparo Contra Leyes, la Acción de Inconstitucionalidad y la Controversia Constitucional, con diversos órganos legitimados, diversa forma de substanciación de los juicios respectivos, procedencias normativas y alcances de la resolución.

es, una declaración acerca de la realidad natural". La eficacia se debe encontrar en todo el sistema jurídico, en un cuerpo normativo o en una ley en especial. Leticia Bonifaz señala que la obediencia y aplicación serán elementos que lleven presuponer la eficacia de la norma; entendiendo como obediencia el acatamiento al cumplimiento de la norma por parte del gobernado y el gobernante, quien debe ser el más celoso del cumplimiento de la ley. El concepto de aplicación se refiere a la forma en que el gobernante hace cumplir la norma cuando el particular se rehusare a cumplirla voluntariamente, hace uso de la coacción.

Alfredo Cruz Prados, cita que "La ley debe estar por encima de todo, y los magistrados y la república deben decidir únicamente de los casos particulares".[140]

2º. División de poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

Una real vivencia de la clásica división del Poder Público en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que sea, verdadera y eficaz división de poderes, alejando el control de nombramiento o presupuestal de un poder a otro. Como es conocido, el poder corrompe, pero el poder total corrompe totalmente (tal como lo refiere Lord Acton), por eso es que la ideología liberal resolvió que el poder es el que debe controlar al poder; es necesario fortalecer la independencia de los poderes tanto en nombramiento como en la asignación presupuestal, pues ésta constituye una de las primeras formas de dependencia efectiva entre poderes.

Fix-Zamudio, señala que el principio de división de poderes *"ha jugado un papel importante como parte de los instrumentos protectores de la Constitución, que son aquellos encaminados a la propia limitación del poder y al sometimiento de quienes lo detentan, al conjunto normativo de la Constitución y que junto con los instrumentos económicos, sociales y de técnica jurídica integran uno de los grandes sectores de la defensa constitucional"*[141]*.*

3º. Legalidad de la administración: actuación según ley y suficiente control judicial.

Actuación según ley y suficiente control judicial. El Principio de Legalidad garantiza la eficacia del Estado de Derecho, y se resume en un aforismo jurídico: el órgano de poder público (la autoridad) sólo puede hacer aquello que la ley le faculta; el gobernado todo aquello que no se le prohíba.

---

[140] "Sería, al parecer, crítica razonable pretender que una democracia de este tipo no tiene nada de Constitución, ya que, allí donde no reinan las leyes, no hay Constitución. En efecto, el imperio de la ley debe extenderse a todos, y los casos particulares ajustarse únicamente a la decisión de los magistrados y del cuerpo de ciudadanos". Los fundamentos de la democracia (*Problémes de la démocratie grecque*), De Romilly, Jacqueline. Cupsa, Madrid, 1977, p. 151.

[141] Fix-Zamudio, Héctor, *Justicia constitucional, ombudsman y derechos humanos*, CNDH, México, 1993, p. 259.

Todo acto de autoridad que en un momento pueda afectar limitando o extinguiendo un derecho del gobernado se puede calificar como un:

> *Acto de molestia (suspende temporalmente un derecho del gobernado).*
> *Por acto de molestia se debe considerar toda afectación que se haga de la esfera jurídica del gobernado. La jurisprudencia define a estos como aquellos que "sólo restringen de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos"[142].*
> *Acto de privación (elimina definitivamente un derecho del gobernado, nunca regresará a su pleno ejercicio).*
> *La Suprema Corte de Justicia de la Nación señala que "son aquellos que producen como efecto la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado, los autoriza solamente a través del cumplimiento de determinados requisitos precisados en el artículo 14, como son, la existencia de un juicio seguido ante un tribunal previamente establecido, que cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento y en el que se apliquen las leyes expedidas con anterioridad al hecho juzgado"[143]*

Por su trascendencia, la limitación del ejercicio de derechos y libertades de los gobernados, la actuación de la autoridad está sujeta a requisitos contenidos en la ley suprema (la CPEUM); para ambos, existen requisitos constitucionales:

Acto de Molestia: Artículo 16, párrafo primero de la CPEUM.

> *Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.*

El dispositivo señala los bienes tutelados formalmente por la Constitución para llevar a cabo actos de molestia:

1. La persona.
2. La familia.
3. El domicilio.
4. Los papeles.
5. Las posesiones.

Posteriormente, fija los requisitos que deberá cumplir la autoridad para molestar los derechos del gobernado:

1. En virtud de mandamiento escrito

[142] Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 9ª Época, Tesis Jurisprudencial P./J. 40/96, Tomo IV, julio de 1996, p. 5.
[143] *Ibídem.*

2. De autoridad competente

3. Que funde

4. Que motive la causa legal del procedimiento

Acto de Privación[144]: Artículo 16, párrafo segundo y tercero de la CPEUM:

> *Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros.*
> *No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión.*

Aquí la normativa señala los bienes tutelados formalmente por la Constitución para llevar a cabo actos de privación (ya no se regula la privación de la vida, por reforma constitucional y por la cual queda proscrita la pena de muerte en México):

1. La libertad

2. La propiedad

3. La posesión

4. Los derechos

Por ser un acto definitivo, los requisitos constitucionales son más exigentes:

1. Mediante juicio

2. Seguido ante los tribunales previamente establecidos

3. Que se cumplan con las formalidades esenciales del procedimiento

4. Conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho

Todo acto de molestia o privación debe motivarse y fundarse en ley (Principio de Fundamentabilidad Constitucional). Si la autoridad va a afectar la esfera jurídica del gobernado de manera temporal o definitiva, deberá cumplir rigurosamente con los requisitos constitucionales, ya que de no ser así, el gobernado tendrá la oportunidad de impugnar el acto jurisdiccionalmente y llevarlo a la invalidez por declaratoria judicial.

[144] Por reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2005, se eliminó la posibilidad de la privación de la vida, proscribiendo de iure (de derecho) la pena de muerte.

El principio de legalidad administrativa entraña que lo administrativo debe ceñir su actuar a lo que disponga la ley. Para Garrido Falla supone, además:

> *el respeto absoluto en la producción de las normas administrativas al orden escalonado exigido por la jerarquía de las fuentes, y finalmente, la sumisión de los actos concretos de una autoridad administrativa a las disposiciones de carácter general previamente dictadas por esa misma autoridad, o incluso, por autoridad de grado inferior siempre que actúe en el ámbito de su competencia*[145].

4° Derechos y libertades fundamentales: garantía jurídico formal.

Para un derecho no respetado al gobernado, deben existir tribunales que hagan efectivos los mismos de legalidad (ordinario o federales) de constitucionalidad (amparo) o incluso, existen en el país comisiones de derechos humanos en cada entidad federativa, y en el Distrito Federal y una Comisión Nacional, que mediante procedimientos varios hagan efectivos sus derechos y por ende el *Estado de Derecho.*

A) La relación jurídico-administrativa.

> *La relación jurídica es el vínculo que une a dos o más sujetos de derecho, por el cual uno de ellos (acreedor), titular de un derecho subjetivo, puede exigir el otro (deudor) el cumplimiento de una obligación. Es una relación bilateral que establece obligaciones y derechos.*

En palabras de Jorge Enrique Calafell, *"en la relación jurídico administrativa existió en primer lugar un sujeto activo, que en este caso es el órgano administrativo creador del acto y uno o más sujetos pasivos, que son aquellos a quien va dirigido o ejecutan el acto administrativo"*[146]

> *En el campo del Derecho Administrativo la aplicación de la relación jurídica tiene lugar con el surgimiento del Estado de Derecho, con el cual se transformó al individuo de un sujeto de poder a un sujeto de derecho, al someter al derecho la actuación de Estado y proteger los derechos públicos subjetivos de los gobernados.*[147]

Al ser uno de los sujetos, la Administración Pública se transforma en jurídico-administrativa, siempre y cuando los derechos y obligaciones estén regulados bajo el Derecho Administrativo, ya que a través de esta relación se tutelan y garantizan los derechos y deberes de la Administración y los administrados; ahora bien, cabe aclarar que al originarse dicha relación es necesario establecer la situación jurídica que implica una

---

[145] García de Enterría, E. y Fernández, T. R., *Curso de derecho administrativo I,* 10a. ed., Editorial Civitas, Madrid, 2001, p. 439.
[146] Calafell, Jorge Enrique, *Teoría del Acto Administrativo*, Jurídica. Anuario del Departamento de Derecho de la Universidad, Iberoamericana, núm. 24, México, 1995, p.126.
[147] Lucero Espinosa, Manuel, *op. cit.,* p. 2.

obligación de dar, hacer o no hacer de un sujeto hacia el otro, y deriva en el tipo de protección jurídica del gobernado en tanto el derecho tutelado sea un derecho subjetivo, un interés legítimo o un interés simple, de ahí se determinará el tipo de defensa que el agraviado deberá interponer de acuerdo con los que establezca el orden jurídico específico.

B) Los derechos públicos subjetivos del estado y del gobernado.

Un derecho subjetivo es la facultad que tiene un sujeto de exigir de otro determinada conducta de dar, hacer o no hacer, cuando los individuos se colocan en situaciones específicas y suponen la manifestación de una relación jurídica concreta entre dos sujetos.

Para Edgardo Peniche López el Derecho Subjetivo es:

> *La facultad que tiene el sujeto activo de exigir el cumplimiento de la norma jurídica; es decir, el precepto atribuye su contenido a un titular denominado "derecho–habiente" quien tiene el reconocimiento suficiente para obtener del obligado la satisfacción que corre a cargo del último*[148].

Al entender este concepto, y como producto de la relación jurídico-administrativa, surge la noción de Derecho Público Subjetivo, y así *"… frente a la facultad del Estado de exigir el cumplimiento de una obligación, existen a favor de los gobernados una serie de protecciones consideradas como límites a la actividad de aquél, las que a su vez constituyen los derechos públicos subjetivos de los gobernados"*[149].

> *…los derechos públicos subjetivos de los gobernados se consideran como la facultad de un particular para exigir de la Administración una determinada conducta que se traduce en un hacer, o en dar o en un no hacer, protegida por el derecho objetivo en forma directa…*
> *… esa facultad de exigencia a la Administración se encuentra protegida, en los sistemas jurídicos, por un recurso administrativo o por una acción jurisdiccional, ante tribunales administrativos o judiciales, según sea el caso.*[150]

Max Weber en su libro ¿Qué es la burocracia?, argumenta que:

> *Sólo la burocratización del Estado, y de la ley en general, brinda una posibilidad determinada de diferenciar drástica y conceptualmente un orden legal "objetivo" de los "derechos subjetivos" del individuo garantizado por aquél: separar el derecho "público" del derecho "privado". El derecho público regla las interrelaciones de la*

[148] Peniche López, Edgardo. *Introducción al Derecho y Lecciones de Derecho Civil*, Porrúa, México, 2010, p. 120.
[149] Lucero Espinosa, Manuel, *op. cit.* p. 5.
[150] *Ibídem,* p. 6.

autoridad pública y sus relaciones con los "gobernados"; el derecho privado regula las relaciones mutuas de los gobernados. Esta separación conceptual implica la separación conceptual del "Estado", como depositario abstracto de derechos soberanos y productor de "normas legales", de toda "autoridad" personal de los particulares. Estas figuras conceptuales están muy apartadas del carácter de las estructuras autoritarias preburocráticas, y particularmente de la patrimonial y feudal.

C) Derechos y obligaciones administrativas.

Como se puede deducir, la relación jurídico-administrativa se conforma de derechos y obligaciones a favor del Estado oponibles a los gobernados y viceversa: *"Los derechos que integran la relación jurídico-administrativa reciben el nombre de derechos públicos subjetivos en razón de la naturaleza de la relación, puesto que siempre participara en ella un ente público, regulada por normas de derecho público…"*[151].

Estos derechos pueden emanar de la Constitución y la ley, sin que sea precisa la ejecución de un acto jurídico, ya que su existencia es *ipso jure* (es una expresión latina que puede traducirse como *"por virtud del Derecho"* o *"de pleno Derecho");* de un acto administrativo, de cuya existencia depende la actuación de la autoridad en la determinación unilateral de una situación jurídica concreta; y de contratos administrativos, en el establecimiento de un acuerdo de voluntades.

3. Medios de impugnación aplicables a las contrataciones públicas.

Para Alcalá-Zamora, los medios de impugnación *"son actos procesales de las partes dirigidos a obtener un nuevo examen, total o limitado a determinados extremos, y un nuevo proveimiento acerca de una resolución judicial que el impugnador no estima apegada a Derecho, en el fondo o en la forma, o que reputa errónea en cuanto a la fijación de los hechos"*[152]

Los medios de impugnación con que cuenta el licitador para impugnar actos ilegales desplegados por servidores públicos de las Dependencias y Entidades en los procedimientos de contratación, son la inconformidad, el recurso de revisión, el juicio de nulidad y el juicio de amparo.

En la inconformidad existe una pretensión de anulación del licitador; en el recurso de revisión el licitador pretende una revisión por el superior jerárquico de quién emitió la resolución combatida; en el juicio de nulidad existe una pretensión anulatoria del acto

[151] *Ibídem*, p. 14.

[152] Alcalá-Zamora y Castillo, Niceto, y Levene Ricardo, *Derecho procesal penal*, ed. G. Kraft, Buenos Aires, 1945, t. III, p. 259.

reclamado por parte del licitador y en el juicio de amparo, existe la pretensión de que se considere al acto combatido como inconstitucional[153].

A) El control jurisdiccional.

La fórmula esencial de todo Estado de Derecho radica en que el Estado ha de someterse al derecho generado por él mismo, y que los poderes públicos sólo pueden actuar dentro de las atribuciones que el orden jurídico les concede, haciendo uso para tal efecto de los procedimientos establecidos en el mismo y respetando la libertad de los gobernados no limitada por la ley; ha de tener en cuenta que sólo es posible hablar de él cuando se ha logrado estructurar un sistema de justicia eficaz que garantice la sujeción del propio Estado de Derecho. *"El control es pues, un sistema de vigilancia que asegura la observancia del sistema jurídico"*[154]

Éste se da por conducto de una Administración Pública cuya esfera de acción se ha ido extendiendo y cuya complejidad organizativa puede lesionar la esfera jurídica de los gobernados, conculcando su propia legitimación para actuar como conductor social.

Los actos de la Administración Pública tienen que cumplir con los requisitos que les impone el principio de legalidad…Cuando no se cumplen, en el caso de que el administrado así lo considere, podrá interponer los medios de defensa, que de proceder, obliguen a la autoridad a que tomen su cauce legal en los casos procedentes, a estos se les conoce como sistemas de control de legalidad del acto administrativo[155].
La ley establece diversos medios para la protección de los derechos de los particulares y se pueden clasificar, según las autoridades que deben intervenir, en remedios o recursos administrativos, y en recursos o acciones jurisdiccionales[156].

a) La justicia administrativa.

Es el conjunto de instrumentos jurídicos mediante los cuales se pretende dar oportunidad a los particulares para impugnar los actos de la Administración Pública que lesionan o afectan sus intereses, abarcando no sólo los medios procesales sino también los medios jurídicos dentro de la misma Administración Pública para su control de legalidad.

---

153 Ramos Torres, Daniel, *Los Contratos Administrativos de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. En el Marco de la Doctrina del Derecho de la Contratación Pública, su Legislación Vigente y la Jurisprudencia*, Editorial Public Management de México S.C., México, 2012. p. 324.

154 Márquez Rábago Sergio, *Estado de derecho en México*, p. 29, consultado en: http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/6/2749/5.pdf

155 Arvizu Tovar, Laura y Márquez Rábago, Sergio Ricardo, *Marco Legal de la Medicina Veterinaria*, Editorial El Manual Moderno, México, 2008, p. 79.

156 *Ibídem*, p. 80.

La jurisdicción administrativa es la potestad del Estado para resolver controversias jurídicas de forma imparcial e imperativa, aplicando el derecho al caso concreto, en este contexto a los actos de la Administración Pública.

B) La instancia y el recurso administrativo.

Daniel Ramos nos señala que la inconformidad no es un recurso, ya que son características de los recursos el que se enderecen en contra de actos de autoridad, pretendiendo su revocación o modificación, y la inconformidad no está encaminada a controvertir un acto de autoridad, ni tiene como objeto revocarlo o modificarlo.

> *Una diferencia importante entre el recurso administrativo y la inconformidad consiste en que es necesario que la autoridad ante quien se presente el recurso, sea la misma que dictó el acto o la jerárquica superior de aquella. Mientras que la inconformidad no respeta el principio lineal de jerarquía del recurso, puesto que su presentación se realiza ante un tercero, en este caso la SFP o los órganos internos de control en las Dependencias y Entidades, lo que implica una relación tripartita que se asemeja a un proceso judicial.*
> *Otra diferencia importante entre la inconformidad y el recuso administrativo se funda en el hecho de que, a diferencia del recurso administrativo, la inconformidad puede ser interpuesta para cualquier acto irregular del procedimiento, sin que necesariamente se trate de un acto de carácter definitivo.*[157]

La SFP, sostiene que la inconformidad es una instancia, no un recurso, y que sirve como medio de control y verificación para la correcta aplicación de las leyes que regulan el procedimiento de contratación de la Administración Pública Federal.

El recurso administrativo es:

> *El medio de defensa administrativo con que cuenta el particular es conocido como recurso, entendiéndolo como la oportunidad que tiene la Administración Pública Federal de reconocer y corregir un error en su actuar con base a la petición que haga algún particular con fundamento en la propia ley administrativa que se aplique o del Derecho de Petición, plasmado en el art. 8° de la Constitución Política*[158]*.*

Tendríamos la definición del eminente tratadista español Jesús González Pérez, quien considera al recurso administrativo como *"la impugnación de un acto administrativo ante un órgano de este carácter"*[159]*.* Coincidente a esta definición es la del *ius* administrativista argentino Agustín A. Gordillo, quien dice que los recursos administrativos son *"los remedios o medios de protección al alcance del administrado para impugnar los actos y hechos*

[157] Ramos Torres, Daniel, o*p. cit*., p. 326.
[158] Arvizu Tovar y Márquez Rábago, Sergio, *op. cit*., p. 80.
[159] González Pérez, Jesús, *Los recursos administrativos*, Boletín Oficial del Estado, Madrid, 1969, p. 34.

administrativos ilegítimos y en general para defender sus derechos respecto de la Administración Pública"[160]*.*

En la doctrina mexicana, el profesor Gonzalo Armienta Hernández se une a este concepto del recurso como "*instrumento jurídico de impugnación"* [161] . El recurso administrativo es una defensa de los intereses del promovente ante el Estado, por lo que no se trata de un litigio de partes en conflicto, en el que la Administración Pública tiene como función la realización de un nuevo examen del acto impugnado, que bien puede hacerlo ante los imperativos de la norma legal o ante la realidad de los hechos, para ajustarlo a ellos.

Alberto Fernández Madrazo en su obra *"El derecho procesal administrativo";* nos señala que *"el recurso de inconformidad tendrá por objeto que el superior jerárquico de la autoridad emisora confirme, modifique, revoque o anule el acto administrativo recurrido"*[162]*.*

En términos de ley, este recurso debe hacerse valer ante la autoridad cuya resolución o actos se pretenden impugnar con el mismo; se busca motivar a la responsable que conoció a efecto emitir diversa resolución, que según el promovente se ajuste a derecho y, consecuentemente, le libere de la situación en que la autoridad lo ha puesto. El recurso administrativo tiene diversas denominaciones según su propia ley: revisión, inconformidad, revocación, etc.

Sin embargo existe una excepción, por tanto, se estima que en aras de garantizar los principios de seguridad jurídica y efectivo acceso a la justicia, al no existir claridad en torno al plazo en que la responsable habrá de pronunciarse respecto de la suspensión provisional, consideró la Segunda Sala que no es necesario agotar la inconformidad a que se refiere el artículo 65 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, previo a la presentación del juicio de Amparo, y por ello se actualiza uno de los supuestos de excepción para la procedencia del juicio constitucional.

---

[160] Gordillo, Agustín A., *Procedimiento y recursos administrativos*, Jorge Álvarez, editor, Buenos Aires, 1964, p. 71.
[161] Armienta Hernández, Gonzalo, *Tratado teórico práctico de los recursos administrativos*, Ed. Porrúa, México, 1999, p. 57.
[162] Fernández Madrazo, Alberto, *El derecho procesal administrativo*, Semanario de derecho administrativo, UNAM, México, Abril 2011, p. 38.

a) Reformas a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en materia de solución de controversias.

A fin de hacer más transparente y ágil la instancia de inconformidad y el arbitraje, así como otorgar un marco adecuado de protección legal para los participantes en licitaciones públicas el Ejecutivo Federal propuso el 26 de marzo de 2009 (publicadas el 28 mayo del mismo año) reformas a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en materia de solución de controversias para licitantes.

De acuerdo a su exposición de motivos, los cambios más importantes son: en materia de supletoriedad, substanciación del procedimiento y cumplimiento de resoluciones.

Se dota a la figura de normas procesales particulares con el fin de reducir la aplicación supletoria de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el Código Federal de Procedimientos Civiles, cuya naturaleza no siempre resulta compatible con los fines de la contratación pública, lo que se ha traducido en la práctica actual en dilaciones y disparidad de criterios para tramitar y resolver los asuntos.

Se introduce una importante reducción de los diversos plazos procesales: de diez a seis días para la interposición de la inconformidad; las prevenciones pasan de cinco a tres días; la posibilidad de ampliar la inconformidad (figura no expresamente prevista en la actual ley pero que se ha venido aplicando por tesis del Poder Judicial Federal) se reduce de diez a tres días después de rendido el informe de la convocante y la respuesta de ésta y del tercero a dicha ampliación será también en tres días, en lugar de seis; los alegatos pasan de cinco a tres días y la autoridad tendrá ya solo quince días para resolver, en lugar de los veinte días actuales.

Se establece que el cumplimiento de las resoluciones derivadas de las inconformidades debe darse en un plazo máximo de seis días, contra los diez que actualmente se conceden. También se crea un expedito incidente de verificación del adecuado acatamiento de las resoluciones, lo que evitará la perniciosa práctica actual de tenerse que ventilar nuevas inconformidades contra la reposición de actos, cuando se estima que éstos se emitieron en exceso o defecto de lo ordenado por la autoridad.

Se aclara que las inconformidades deben presentarse directamente en la Secretaría de la Función Pública o a través de CompraNet para evitar retrasos, ya que la Ley Federal de Procedimiento Administrativo prevé la interrupción de los plazos cuando se promueve ante autoridad incompetente.

La reforma permite facilidades a la autoridad para la práctica de notificaciones que, en muchos casos, dilataban la pronta atención de los procedimientos, estableciendo a los particulares la obligación de señalar domicilio en el lugar donde se ventila la inconformidad, así como la regulación de la figura del rotulón y de las notificaciones electrónicas.

El acto de recepción y apertura de propuestas se impugnará junto con el fallo, eliminándose así un supuesto de inconformidad que sólo entorpecía los procedimientos de contratación.

La iniciativa incluye una regulación particular respecto de la suspensión de los actos de la licitación pública como medida cautelar durante la sustanciación de las inconformidades, la cual tiende a asegurar, por una parte, el que no se ejecuten actos posiblemente viciados, y por la otra, que se otorguen garantías p contractuales, cuando las inconformidades no resultan fundadas.

Se incorporan las figuras de la improcedencia y el sobreseimiento, estableciéndose una serie de hipótesis para que operen.

Se fortalece la seguridad jurídica, clarificando la naturaleza, regulación y alcances de la instancia de inconformidad como remedio procesal para reencauzar a la legalidad las posibles desviaciones de la Administración Pública, y con ello se garantice su imparcial y honrada actuación.

Se especifica que la inconformidad deberá operar a instancia de parte que demuestre contar con interés legítimo, soportando la carga de probar los motivos de su impugnación, para lo cual la autoridad no podrá suplir deficiencias en la expresión de su queja. De esta suerte, se elimina la facultad de la Secretaría de la Función Pública de realizar investigaciones de oficio en una inconformidad, sin perjuicio de sus facultades de verificación, que se regulan como procedimiento diverso.

Se precisa el contenido formal y material de las resoluciones que emite la Secretaría de la Función Pública en los procedimientos de inconformidad, con lo cual se clarifican sus facultades. Entre otras cuestiones, se define que podrá declarar que los motivos de impugnación resultan inoperantes para decretar la nulidad del acto combatido, cuando las violaciones alegadas no resulten suficientes para afectar su contenido. De esta suerte, las resoluciones deberán apartarse de un análisis meramente formalista en el cumplimiento de la ley, para revisar de fondo los casos planteados a fin de determinar si las irregularidades detectadas verdaderamente trascienden y afectan la validez de los actos del procedimiento de contratación.

Se dan los elementos que deben contener las directrices que se dicten en las resoluciones. De manera especial, destaca la consecuencia que tendrán las nulidades cuando se desecharon injustificadamente las ofertas de los inconformes, lo que abonará a la seguridad jurídica del sistema y evitará el indebido proceder de los servidores públicos. De igual manera, a la vez que se crea a favor de los particulares una instancia de control de legalidad más clara y eficaz, también se establecen los incentivos para el responsable ejercicio del legítimo derecho a la impugnación. Para ello, se regula de mejor manera la facultad de sancionar a los licitantes que ejercen abusivamente su derecho a inconformarse.

Se fortalece el procedimiento de conciliación, previendo que se inicie a través de una simple solicitud y no con una queja, dotando a las dependencias y entidades para que puedan acudir a esta instancia de amigable composición, dejando atrás los enfrentamientos ríspidos, que eventualmente derivan en una "judicialización'' del proceso de contratación; asimismo, se otorga la posibilidad de que las partes en los contratos convengan el arbitraje y otros medios alternos de solución de controversias atendiendo a la experiencia positiva que éstos han tenido en otros países.

i) La instancia de inconformidad.

Se precisa que la inconformidad podrá promoverse en licitaciones e invitaciones a cuando menos tres personas, dejando fuera que pueda interponerse por adjudicaciones directas. Se exige ahora el que se demuestre *interés jurídico,* soportándolo en términos del artículo 33 bis de la ley, en el cual se pide a las personas que pretendan solicitar aclaraciones, presentar un escrito en el que expresen su interés en participar en la licitación; para el caso de licitación por invitación a tres personas, sólo estará legitimado para inconformarse quien haya recibido invitación y quien hubiere presentado proposición; se precisa para el caso de licitantes que hayan presentado proposición conjunta, que su inconformidad sólo será procedente si se promueve conjuntamente por todos los integrantes de la misma.

Define la reforma que la inconformidad se debe presentar por escrito, directamente en las oficinas de la Secretaría de la Función Pública o a través de "CompraNet o en las entidades Federativas en los términos previstos por el Artículo 1, fracción VI, de la Ley siempre y cuando se haya celebrado el convenio de coordinación correspondiente". La interposición de la inconformidad en forma o ante autoridad diversa a la Secretaría de Función Pública no interrumpirá el plazo para su oportuna presentación.

El artículo 66, fracciones I a V, señala los elementos con que deberá contar el escrito de inconformidad; todo el procedimiento de inconformidad se agiliza, reduciendo el término de presentación del recurso de 10 a 6 días, y todos los términos se ven acotados.

Con la reforma se adiciona un supuesto de inconformidad, que es la posibilidad de impugnar el acto de cancelación de la licitación, en lo referente a su legalidad.

Los artículos 67 y 68 establecen causales de improcedencia y sobreseimiento del recurso intentado, lo cual anteriormente no contemplaba la ley.

Se regula por primera vez la revisión de la legalidad de las notificaciones en la propia ley, estableciendo las personales, las realizadas por rotulón y las que podrán ser por oficio (Artículo 69).

Se elimina como procedencia para conceder la suspensión la relativa a que, *"de continuarse con el procedimiento de contratación pudieran producirse daños o perjuicios a la dependencia o entidad de que se trate";* se establece la suspensión provisional y definitiva previa audiencia a las partes, incluye suspensión de oficio por la autoridad.

De acuerdo con el actual marco, se precisa cuál debe ser el contenido del informe circunstanciado por parte de la autoridad convocante, e igualmente se regula la intervención que debe darse a quien tenga el carácter de *tercero interesado* (otros participantes en la licitación), a fin de satisfacer la garantía de audiencia, por los recurrentes fallos en contrario del Poder Judicial Federal. Se incluye a favor del inconforme la posibilidad de *ampliar su demanda de inconformidad* dentro de los tres días hábiles siguientes a aquél en que se tenga por recibido el informe circunstanciado; propone además nuevos motivos de impugnación, cuando del informe aparezcan elementos que no conocía.

El procedimiento de inconformidad se encontraba ilegalmente regulado, ello en virtud de que no otorgaba al participante la posibilidad de *alegar*[163];en virtud de ello, se dispone que desahogadas las pruebas se pondrán las actuaciones a disposición del inconforme y tercero interesado, a efecto de que dentro del plazo de tres días hábiles formulen sus alegatos por escrito. Por primera vez se regulan de manera específica los requisitos formales que deberá contener la resolución, ya que en regulación anterior se establecían sólo los efectos de la misma.

En lo que hace a la resolución de la inconformidad se precisan sus *Principios Generales* que debe atender, tales como la congruencia que deben guardar y la exhaustividad en el análisis de las propuestas de las partes; se reitera el *estricto derecho* (atender sólo lo propuesto, la no suplencia de la queja deficiente); se determinan los elementos que deben contener las directrices que se dicten para la reposición de los actos, a fin de dar certidumbre a los entes contratantes, así como a los particulares.

De manera especial, se destaca la consecuencia que tendrán las nulidades cuando se desecharon injustificadamente las ofertas de los inconformes, lo que abonará de manera importante a la seguridad jurídica del sistema y evitará el indebido proceder de los servidores públicos.

Se deberá publicar en *CompraNet* la resolución que ponga fin a la inconformidad una vez que cause estado (es decir que haya transcurrido el plazo para impugnarla y no lo hayan realizado) o hasta la ejecutoría de amparo directo.

[163] Los alegatos son argumentaciones al juzgador para hacer patente que con las pruebas ofrecidas en el procedimiento se confirma lo demandado, y que las pruebas de la contraparte no sirvieron para demostrar su derecho; además dejar claro el derecho a una resolución favorable.

La resolución de la inconformidad por la autoridad podría tener cuatro sentidos anteriormente: declarar a) la nulidad del acto o actos irregulares estableciendo, cuando proceda, las directrices necesarias para que el mismo se reponga, b) la nulidad total del procedimiento, c) la declaración relativa a lo infundado de la inconformidad o d) las directrices para que el contrato se firme. Con la modificación legal se amplían los alcances de la resolución:

a) Sobreseer en la instancia
b) Declarar infundada la inconformidad
c) Declarar que los motivos de inconformidad resultan inoperantes para decretar la nulidad del acto impugnado, cuando las violaciones alegadas no resulten suficientes para afectar su contenido
d) Decretar la nulidad total del procedimiento de contratación
e) Decretar la nulidad del acto impugnado, para efectos de su reposición, subsistiendo la validez del procedimiento o acto en la parte que no fue materia de la declaratoria de nulidad
f) Ordenar la firma del contrato, cuando haya resultado fundada la inconformidad promovida en términos del artículo 65, fracción V, de la Ley.

Cuando se determine que la inconformidad se promovió con el propósito de retrasar o entorpecer la contratación, existe la posibilidad de sancionar al inconforme, previo procedimiento, con multa o inhabilitación, la cual no será menor de tres meses ni mayor de cinco años.

La resolución que ponga fin a la instancia de inconformidad o, en su caso, a la intervención de oficio, podrá impugnarse por el inconforme o tercero interesado mediante el recurso de revisión previsto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, o bien, cuando proceda, ante las instancias jurisdiccionales competentes.

Se fortalece de manera significativa la búsqueda del cumplimiento de las resoluciones de inconformidad: La autoridad administrativa convocante acatará la resolución que ponga fin a la inconformidad en un plazo no mayor de seis días hábiles (antes diez). Sólo podrá suspenderse la ejecución de las resoluciones mediante determinación de autoridad administrativa o judicial competente.

El inconforme y el tercero interesado, dentro de los tres días hábiles posteriores a que tengan conocimiento del cumplimiento que haya dado la convocante a la resolución, o bien que haya transcurrido el plazo legal para tal efecto y no se haya acatado, podrán hacer del conocimiento de la autoridad resolutora, en vía incidental, la repetición, los defectos, los excesos u omisiones en que haya incurrido la convocante (figura tomada del juicio de amparo: *repetición del acto reclamado y queja por exceso o defecto*).

Con el escrito que se presente en los términos del párrafo anterior, se requerirá a la convocante para que rinda un informe en el plazo de tres días hábiles y dará vista al

tercero interesado o al inconforme, según corresponda, para que en el mismo plazo manifieste lo que a su interés convenga. La resolución que ponga fin al incidente referido podrá impugnarse por el inconforme o tercero interesado mediante el recurso de revisión previsto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, o bien, cuando proceda, ante las instancias jurisdiccionales competentes.

Si se acredita que la resolución no fue cumplimentada según las directrices fijadas, la autoridad resolutora dejará insubsistente el acto respectivo y ordenará a la convocante su reposición en un plazo de tres días hábiles, de acuerdo con lo ordenado en la resolución que puso fin a la inconformidad. Si resultare que hubo una omisión total, requerirá a la convocante el acatamiento inmediato. El desacato de las convocantes a las resoluciones y acuerdos que emita la Secretaría de la Función Pública en los procedimientos de inconformidad será sancionado de acuerdo con lo previsto en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

En los casos en que existan contratos derivados de los actos declarados nulos, dichos acuerdos serán válidos y exigibles hasta en tanto se da cumplimiento a la resolución, pero será necesario terminarlos anticipadamente cuando la reposición de actos implique que debe adjudicarse a un licitante diverso, deba declararse desierto el procedimiento o se haya decretado su nulidad total.

ii) El procedimiento de conciliación.

Este procedimiento lo pueden presentar los proveedores o las Dependencias y Entidades por desavenencias derivadas del cumplimiento de pedidos o contratos en cualquier momento, ante la Secretaría de la Función Pública y mediante solicitud. En palabras de Osvaldo Alfredo Gozaíni, conciliar *"supone avenimiento entre intereses contrapuestos, es armonía establecida ente dos o más personas con posiciones disidentes. El verbo proviene del latín conciliatio que significa composición de ánimos en diferencia"*[164]

Etapas del procedimiento:

a) Audiencia de Conciliación. Una vez recibida la solicitud la Secretaría de la Función Pública, señala día y hora para la audiencia que deberá tener verificativo dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha de recepción, citando a las partes bajo las siguientes reglas:

a1) Asistencia obligatoria a la audiencia de conciliación.

[164] Gozaíni, Osvaldo Alfredo, *Notas y estudios sobre el proceso civil*, UNAM, México, 1994, p. 44.

a2) La inasistencia del proveedor traerá como consecuencia tener por no presentada la solicitud.

b) Exhorto a las partes para conciliar sus intereses. Se da una vez que la Secretaría de la Función Pública, determina los elementos comunes y los puntos de controversia conforme a la Ley sin prejuzgar sobre el conflicto planteado.

c) Acuerdo de conciliación. En el supuesto de llegar a él, obligará a las partes y su cumplimiento puede ser demandado por la vía judicial. La Secretaría de la Función Pública, le dará seguimiento basándose en los informes de avances de cumplimiento que remitan las Dependencias y Entidades.

Cuando las partes no lleguen a un acuerdo de voluntades pueden optar por cualquier vía de solución para resolver su controversia.

iii) El arbitraje y otros mecanismos de solución de controversias y competencia judicial.

El concepto de arbitraje establecido por tesis aislada de los Tribunales Colegiados de Circuito determina que:

"Un laudo arbitral es la decisión de un órgano no estatal, así convenida por las partes, para resolver una contienda, ya sea presente o futura; así, para efectos de la instancia ordinaria queda a la exclusiva potestad de la decisión del tribunal de arbitraje y pasa a ser una extensión de esa voluntad, que por ser un acto de particulares, en cuanto a su sentido, no se encuentra sujeto a revisión constitucional; sin embargo, tal revisión constitucional sí se puede dar respecto a la resolución de homologación emitida por un órgano judicial estatal, la que, desde luego, se limitará al resultado del análisis de la debida composición del tribunal de arbitraje, del debido procedimiento, de la manifestación de voluntad de las partes de someterse al arbitraje, de la materia del mismo y de los demás supuestos contemplados en el artículo 1462 del Código de Comercio, supuestos que, como se advierte, contemplan únicamente cuestiones de forma y no de fondo, y, una vez dada la homologación, de los actos de ejecución con que el Juez auxilia al cumplimiento del laudo; por lo que en la vía de amparo únicamente se podrán alegar esas cuestiones y no las relativas al fondo y sentido del laudo. Lo anterior se robustece con el criterio sostenido por la Tercera Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo XXXVIII, página 801, de rubro: "ARBITRAJE.", en la que considera que el arbitraje es una convención que la ley reconoce, lo que constituye una renuncia de los particulares para que la autoridad judicial conozca de una controversia, por lo que tiene una importancia procesal negativa, en cuanto que las partes confían la decisión de sus conflictos a uno o más particulares, llamados árbitros; sin embargo, éstos no son funcionarios del Estado ni tienen jurisdicción propia o delegada, y sus facultades derivan únicamente de la voluntad de las partes, expresada de acuerdo a la ley, y si

bien el laudo arbitral no puede revocarse a voluntad de uno de los interesados, no es ejecutivo en sí mismo, ya que sólo puede considerársele como una obra de la lógica jurídica que es acogida por el Estado, por lo que sólo puede ejecutarse a través de un acto realizado por un órgano jurisdiccional que, sin quitarle su naturaleza privada, asume su contenido, y es entonces que se equipara a un acto jurisdiccional. Sin embargo, los Jueces no están autorizados para revisar los laudos de manera integral, ya que de lo contrario podrían nulificarlos…"[165]

En la LAASSP, se dan los lineamientos necesarios para hacer efectiva la posibilidad del *arbitraje* como solución alternativa de controversias en materia de licitaciones. Se adiciona un Capítulo Tercero: *Del Arbitraje, Otros Mecanismos de Solución de Controversias y Competencia Judicial*, para el efecto.

Se dispone que podrá convenirse compromiso arbitral respecto de aquellas controversias que surjan entre las partes por interpretación a las cláusulas de los contratos de prestación de servicios de largo plazo previstos en la fracción VI del artículo 3 de la ley, o por cuestiones derivadas de su ejecución, en términos de lo dispuesto en el Título Cuarto del Libro Quinto del Código de Comercio.

No será posible el arbitraje respecto de la rescisión administrativa, la terminación anticipada de los contratos, así como aquellos casos que disponga el Reglamento de la Ley. El arbitraje tiene carácter de voluntario y podrá preverse en cláusula expresa en el contrato o por convenio escrito posterior a su celebración. En las políticas, bases y lineamientos deberá establecerse el área o servidor público responsable para determinar la conveniencia de incluir dicha cláusula o firmar el convenio correspondiente. Los costos y honorarios del arbitraje correrán por cuenta de las partes contratantes, salvo determinación contraria en el laudo arbitral.

El procedimiento arbitral culmina con el laudo, y podrá considerarse para efectos de solventar observaciones formuladas por quienes tengan facultades para efectuarlas sobre las materias objeto de dicho laudo.

La resolución arbitral no podrá ser impugnada vía juicio de amparo, ello en virtud de ser un medio de defensa voluntario; al respecto, se cita la siguiente tesis aislada:

Registro No. 166501; Instancia: Primera Sala; Tesis: 1ª. CLXVI/2009.

ARBITRAJE VOLUNTARIO. SU CONCEPCIÓN JURÍDICA. *El arbitraje voluntario o contractual se determina por la libre voluntad con que se fija al árbitro o árbitros, a las reglas procesales para la solución del conflicto y en ocasiones el derecho sustantivo aplicable al caso; a diferencia del forzoso, donde el árbitro,*

[165] **LAUDO ARBITRAL. SU HOMOLOGACIÓN POR AUTORIDAD JUDICIAL ORDINARIA Y EL ANÁLISIS DE ÉSTA, EN AMPARO, NO PERMITE EL ESTUDIO DE SU SENTIDO EN CUANTO AL FONDO.** (9ª Época; Registro: 186229; Instancia: T.C.C.; Tipo de Tesis: Aislada; Tesis: XV.1o.50 C.)

el proceso y el derecho sustantivo son regulados de antemano por las normas estatales. Ahora bien, el arbitraje voluntario tiene origen en el compromiso arbitral o "cláusula compromisoria" que se instala en el momento de la concertación, la cual implica renuncia al conocimiento de una controversia por la autoridad judicial, a grado tal que si una de las partes citase a la otra ante el juez, la demandada podría solicitar que éste se abstenga del estudio de fondo en virtud de la "excepción de compromiso en árbitros", que no es de incompetencia o litispendencia, sino materialmente de renuncia pactada al procedimiento judicial, de manera que las partes prácticamente sustituyen al proceso y optan por arreglarse conforme a la decisión de un árbitro, quien no será funcionario del Estado ni tendrá jurisdicción propia o delegada, sino que sus facultades derivarán de la voluntad de las partes expresadas "de conformidad" con la ley; su decisión será irrevocable por voluntad, pero no ejecutiva por no ser públicamente exigible hasta en tanto no sea homologada por la autoridad judicial. Así, la exclusión del juez en la arbitración puramente voluntaria representa una consecuencia importante porque la resolución que dirime el conflicto no será una sentencia sino un acto privado denominado laudo, el cual intrínsecamente no compromete al derecho subjetivo o las acciones judiciales, pues aun con el laudo dictado, las partes podrían convenir el sometimiento con reservas e insistir en la promoción del problema ante la justicia estatal, siendo ésta una peculiaridad que evita caer en el equívoco de que el arbitraje permite integrar la voluntad privada en los aspectos que no fueron tenidos en cuenta al convenir, ni tampoco implica que la voluntad de un tercero concurra para determinar la voluntad privada, ya que la única relevante en una decisión arbitral será la proveniente de las partes, quienes se arreglarán mediante resolución adoptada por ellas mismas a través de su propio representante, es decir, el árbitro o tribunal arbitral. Resulta importante señalar también que los árbitros deben resolver imparcialmente las cuestiones sometidas a su potestad y no deben derivar u orientar sus funciones ni sus decisiones por el común consentimiento de las partes (salvo que se exprese como transacción para finiquitar el proceso arbitral), porque dicho consentimiento sólo opera en el momento inicial del arbitraje —que es el compromiso—, pero después será irrelevante; tan es así que incluso el procedimiento puede ser revisado posteriormente por la autoridad jurisdiccional a fin de corroborar la imparcialidad del árbitro, de ahí que sea válido afirmar que los árbitros poseen "autoridad" pero les falta "potestad", la cual es atributo exclusivo del Estado y por ello podrán realizar todos aquellos actos para los que baste la simple autoridad, y deberán solicitar la cooperación de los tribunales respecto de aquellos otros que requieran la potestad, como ocurre por ejemplo en materia de medidas o providencias cautelares y de ejecución en donde se requiere del auxilio de la jurisdicción estatal para lograr dichas medidas mediante procedimientos que (por la forma como se debatirán los intereses) serán contenciosos. Los árbitros voluntarios no integran organización estatal alguna pues no son auxiliares de la justicia ni servidores públicos, ya que la posibilidad del arbitraje se materializa por el principio de libertad y disposición de las partes

para elegir la vía para resolver sus diferencias y conflictos. Asimismo, cabe agregar que el arbitraje voluntario puede dar origen al denominado arbitraje ad hoc o casuístico, en donde las partes someten la decisión a una tercera persona con base en un procedimiento elaborado por ellas mismas para el caso concreto. El arbitraje privado en ocasiones puede ser institucional, el cual es una submodalidad del arbitraje voluntario en donde las partes someten la controversia mediante libre compromiso ante una institución especializada —nacional o internacional, pública o privada— que organiza y asiste en la conducción del procedimiento arbitral, el cual puede realizarse según sus propias reglas.

Otros Mecanismos de Solución de Controversias. Las partes podrán convenirlos para resolver sus discrepancias sobre la interpretación o ejecución de los contratos de prestación de servicios de largo plazo previstos en la fracción VI del Artículo 3 de la Ley, siempre que su procedimiento esté reconocido en las disposiciones que al efecto emita la Secretaría de la Función Pública.

Tribunales Federales. Las controversias que se susciten con motivo de la interpretación o aplicación de los contratos celebrados con base en la Ley serán resueltas por los tribunales federales, en los casos en que no se haya pactado cláusula arbitral o medio alterno de solución de controversias, o éstas no resulten aplicables. Lo anterior aplica a las Entidades, sólo cuando sus leyes no regulen de manera expresa la forma en que podrán resolver sus controversias.

b) El recurso de revisión.

Establecido en el Título Sexto de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, y de aplicación supletoria a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, prevé este recurso, como medio de impugnación cuando la resolución de la inconformidad no soluciona el acto que ha lesionado el interés del promovente. Según Nava Negrete, el recurso administrativo "es un medio legal que reparte por igual una defensa a quien lo promueve y una oportunidad de rectificación para el que lo resuelve"[166]

Existen elementos esenciales para que pueda darse la figura de Recurso Administrativo, cuyo cumplimiento es indispensable:

1° Ley que establece el recurso. Esto dice que el Recurso Administrativo debe estar establecido en una norma jurídica emanada del poder Legislativo, que dé seguridad al administrado para inconformarse de un acto emitido por la autoridad; permite que las inconformidades del gobernado no sean simples peticiones, sino que representan

[166] Nava Negrete, Alfonso y Quiroz Acosta, Enrique, *Recurso administrativo*, UNAM-Porrúa, México, 2003, p. 225.

la obligación de la administración en ajustarse a la legalidad que se consagra el principio de legalidad plasmado en el artículo 16 de la Carta Magna.

2° *Acto administrativo. Esto significa que todo acto administrativo debe fundarse en derecho (y la ley en la CPEUM), y emanar de autoridad y funcionarios competentes, y cuando incurren en omisiones, errores, pueden ser impugnados por el particular y solicitar el examen del mismo. Es de mencionar que estos actos pueden derivarse también de facultades discrecionales, que por el mismo precepto legal si lesionan derechos del particular pueden presentar la impugnación correspondiente.*

3° *Lesión a un derecho. Se refiere a que la autoridad emite acto ilegal y lesiona los intereses de particulares. También puede suceder que la autoridad o Administración Pública dicte un acto legal para cumplir con sus obligaciones de bien común; sin embargo, puede lesionar intereses legítimos de terceros, por lo que éstos podrán interponer el recurso administrativo para que la autoridad deje de intervenir en su vida jurídica lesionada, ya sea modificando o revocando el acto administrativo lesionado.*

4° *Autoridad competente ante quien se interpone el recurso. Puede ser que sea la misma autoridad que dictó el acto u otra diferente, cuando es distinta la autoridad que conoce y decide sobre la impugnación del acto deberá sujetar su intervención a los agravios señalados en el escrito que impugne el acto. Si es la autoridad quien emitió el acto, la que conoce de la impugnación tendrá más elementos para realizar el examen.*[167]

De acuerdo con lo establecido por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en su Artículo 74, contra la resolución emitida en la instancia de inconformidad, procede la interposición del recurso, juicio de nulidad, que establece la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, en su Título Sexto, cuyo Artículo 83 determina qué será el Recurso de Revisión.

C) El juicio contencioso administrativo.

Juan Palomar de Miguel lo define como *el que tiene por objeto anular una resolución en que se impone una carga fiscal*[168]. Por otro lado, Quintana Valtierra, nos dice: “el juicio fiscal es un proceso de partes y no un proceso oficioso, ya que formaliza una relación procesal que se caracteriza por la igualdad del contribuyente y el fisco, y su subordinación a la autoridad jurisdiccional, con la cual debe cooperar por el esclarecimiento de la verdad. Cabe destacar, que el procedimiento para la tramitación de los juicios de nulidad ante TFJFA, está estructurado por los principios de un juicio y no como los de un recurso”[169].

[167] Arvizu Tovar y Márquez Rábago Sergio, *op. cit.* p. 83.
[168] Palomar de Miguel, Juan. *Diccionario para juristas*, Ed. Porrúa, México, 2010, p. 876.
[169] Quintana Valtierra, Jesús, y Rojas Yáñez, Jorge, *Derecho tributario mexicano*, Editorial Trillas, México, 1988, p. 261.

a) El Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

"Artículo 73, fracción XXIX de la Constitución. Es un tribunal de lo contencioso-administrativo, dotado de plena autonomía para dictar sus fallos, encargado de dirimir las controversias jurídicas que se susciten entre la Administración Pública Federal y los particulares".

Los Tribunales Administrativos se clasifican de la siguiente manera:

1. Tribunales Administrativos de Jurisdicción Retenida, caracterizados porque los dictámenes emitidos por ellos debían someterse a la consideración del jefe de Estado para su decisión final. Este tipo de tribunales no gozaban de la autonomía necesaria para dictar sus fallos, ya que estaban sujetos a la voluntad del jefe de Estado, quien en ocasiones resolvía movido más por intereses de carácter político que jurídico (en México fue utilizado en materia agraria).

2. Tribunales Administrativos de Jurisdicción Delegada, aquellos que, aun y cuando orgánicamente pertenecen o se encuentran dentro del Poder Ejecutivo, cuentan con plena independencia para dictar sus fallos (actuales tribunales agrarios y TFJA). En este tipo de tribunales, ya no tiene injerencia el jefe de Estado, salvo en la designación y ratificación de magistrados, lo cual repercute en una mayor imparcialidad para decidir los asuntos sometidos a su jurisdicción.

3. Tribunales Contenciosos Administrativos Mixtos (de Anulación y de Plena Jurisdicción),este tipo de tribunales no sólo tienen como objetivo declarar la nulidad del acto impugnado sino que también están atribuidos para decidir sobre la reparación del derecho subjetivo violado, fijando los derechos del inconforme y, previa evaluación del accionar de la autoridad, le condenan a acatar la ley y, en su caso, restablecer y hacer efectivos los derechos del gobernado.

Actualmente, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa se ubica en este tipo de tribunales, como se corrobora con la tesis de jurisprudencia a continuación transcrita:

> *No. Registro: 174159; Instancia: T.C.C.; Jurisprudencia; Tesis: I.4º.A. J/45.*
> ***TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. MODELO DE JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO MIXTO****. El Código Fiscal de la Federación actualmente adopta un modelo de jurisdicción contencioso administrativo mixto, a saber: a) Objetivo o de mera anulación; y, b) Subjetivo o de plena jurisdicción. El primero tiene la finalidad de controlar la legalidad del acto y restablecer el orden jurídico violado, teniendo como propósito tutelar el derecho objetivo, esto es, su fin es evaluar la legalidad de un acto administrativo y resolver sobre su validez o nulidad. En el segundo modelo, el tribunal está obligado a decidir la reparación del derecho subjetivo, teniendo la sentencia el alcance no sólo de anular el acto, sino también de fijar los derechos del inconforme y condenar a la administración a restablecer y hacer efectivos tales derechos, es decir, en estos casos será materia de la decisión la conducta de una autoridad*

administrativa a efecto de declarar y condenarla, en su caso, al cumplimiento de una obligación preterida[170] *o indebidamente no reconocida en favor del administrado.*

El Tribunal Federal de Justicia Administrativa fue creado en el año de 1936, con el nombre de Tribunal Fiscal de la Federación. Corresponde a un Tribunal Administrativo de Jurisdicción Delegada y Mixta, como se acotó con anterioridad, siguiendo el modelo francés y su competencia, en un principio, se limitaba al conocimiento de los conflictos suscitados entre los particulares y el fisco federal, por ello se le denominó como Tribunal Fiscal y no como un tribunal contencioso administrativo, tal como lo es actualmente, con sus atribuciones jurisdiccionales ampliadas.

i) El procedimiento contencioso administrativo (juicio de nulidad).

El procedimiento contencioso administrativo consiste en la resolución de una controversia legítima, por violación o desconocimiento de un derecho, entre los particulares y las autoridades hacendarias, o de un carácter administrativo distinto ante un órgano de naturaleza jurisdiccional pero adscrito al Poder Ejecutivo, el cual determinará a quién le asiste la razón y el derecho, mediante la acción que marca la ley.

El Magistrado Sergio Martínez Rosaslanda, nos señala que la nulidad es; *"El juicio que se tramita ante el Tribunal Fiscal de la Federación –expresión máxima en nuestro medio del contencioso-administrativo, de influencia francesa- se caracteriza fundamentalmente por la desigualdad procesal, derivada de la presunción de legalidad de los actos de las autoridades administrativas y la diversidad de medios de defensa con que cuentan las partes para impugnar los actos que las agravian"*[171].

Según lo estable la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo en su artículo 1:

Los juicios que se promuevan ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se regirán por las disposiciones de esta Ley, sin perjuicio de lo dispuesto por los tratados internacionales de que México sea parte. A falta de disposición expresa se aplicará supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles, siempre que la disposición de este último ordenamiento no contravenga las que regulan el juicio contencioso administrativo federal que establece esta Ley.
Cuando la resolución recaída a un recurso administrativo, no satisfaga el interés jurídico del recurrente, y éste la controvierta en el juicio contencioso administrativo federal, se

[170] De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, *Preterir* significa: (Del lat. *praeterīre,* pasar adelante).1. *tr. defect*. Hacer caso omiso de alguien o algo., 2. *tr. defect*. Der. Omitir en la institución de herederos a los que son forzosos, sin desheredarlos expresamente en el testamento.

[171] Martínez Rosaslanda, Sergio, "El recurso de revisión como medio para impugnar las resoluciones del Tribunal Fiscal de la Federación", en *Jurídica. Anuario del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana,* Número 20, México 1990, p. 531.

entenderá que simultáneamente impugna la resolución recurrida en la parte que continúa afectándolo, pudiendo hacer valer conceptos de impugnación no planteados en el recurso.
Asimismo, cuando la resolución a un recurso administrativo declare por no interpuesto o lo deseche por improcedente, siempre que la Sala Regional competente determine la procedencia del mismo, el juicio contencioso administrativo procederá en contra de la resolución objeto del recurso, pudiendo en todo caso hacer valer conceptos de impugnación no planteados en el recurso.

El proceso al que se refiere es el denominado Juicio de Nulidad, ahora Juicio Contencioso Administrativo Federal, regulado por la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo (LFPCA) y por la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Casos en los que se presenta. Procede contra las resoluciones administrativas que establece la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en su artículo 3:

Artículo 3. *El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación:*
(…)
VIII. Las que se originen por fallos en licitaciones públicas y la interpretación y cumplimiento de contratos públicos, de obra pública, adquisiciones, arrendamientos y servicios celebrados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal centralizada y paraestatal, y las empresas productivas del Estado; así como, las que estén bajo responsabilidad de los entes públicos federales cuando las leyes señalen expresamente la competencia del tribunal;
(…)
XII. Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo;

D) El juicio de amparo.

Contra la resolución del juicio de nulidad por cuestión de ilegalidad, si es contrario a los intereses del gobernado procede el juicio de Amparo Directo, en revisión de constitucionalidad del anterior.

Como medio de control constitucional, los artículos 103 y 107 de la Constitución, en relación con lo dispuesto por el Artículo 1 de la Ley de Amparo, conceptualizan al juicio de amparo como:

El procedimiento por medio del cual el gobernado que se considera afectado con una ley o acto de autoridad, por considerarlo contrario a los postulados constitucionales, solicita

al órgano jurisdiccional para que éste declare la inconstitucionalidad correspondiente, con el objeto de que la autoridad que incurrió en esta transgresión al régimen constitucional repare su actuación arbitraria e ilegal, deje sin efecto la misma y vuelva las cosas al estado en el que se encontraban antes de la violación, con lo que restituye al quejoso en el goce y disfrute de la garantía individual[172].

El amparo puede definirse como:

… un juicio extraordinario, de constitucionalidad a solicitud de un gobernado, que procede por afectaciones de autoridad consumadas o inminentes a sus derechos, el cual procede, de manera regular, después de haber intentado defensas de legalidad y el cual se resuelve por los tribunales federales según lo planteado, o por suplencia, con efectos individuales de sus resoluciones, sólo a favor de quien promueve[173].

En palabras de José R. Padilla, el amparo es *un juicio o proceso que tiene por objeto proteger las garantías individuales de los particulares contra actos de autoridad*[174]. Las autoridades competentes para conocer en relación al amparo son: los Jueces de Distrito, Tribunales Unitarios, Tribunales Colegiados y la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El amparo está regido por una serie de principios constitucionales, como son:

- ***EL PRINCIPIO DE INSTANCIA DE PARTE AGRAVIADA:*** es uno de los requisitos fundamentales de procedencia en el juicio de amparo, se encuentra establecido en el artículo 107 fracción I constitucional y el artículo 6º de la Ley de Amparo, donde instituye que el amparo únicamente puede promoverse: por la parte a quien afecte el acto reclamado, por sí o por su representante; por su defensor (causa criminal); por medio de algún pariente o persona extraña en los casos en que la ley lo permita expresamente. Lo anterior con la excepción de que sólo podrá seguirse por el agraviado, por su representante legal o por su defensor. Este principio no tiene excepciones;
- ***PRINCIPIO DE RELATIVIDAD DE LA SENTENCIA O FÓRMULA OTERO:*** que establece que la sentencia de amparo únicamente protegerá a aquél perjudicado que interpuso el juicio de defensa constitucional. Este principio tiene como excepción la declaratoria general de inconstitucionalidad, contenido en el artículo 107 fracción II, párrafos segundo y tercero constitucionales y los artículos 231 a 235 de la Ley de Amparo;
- ***PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD:*** que refiere que antes de proceder con la interposición del juicio, se deberán agotar previamente todos los recursos que establezca la ley. Tiene excepciones constitucionales, legales y jurisprudenciales. Las constitucionales están en su artículo 107 fracción IV indica que el amparo en materia administrativa opera ante actos u omisiones que provengan de

[172] *Ibídem*, p. 68.
[173] Arvizu Tovar y Márquez Rábago, Sergio, *op. cit*., p. 97.
[174] Padilla, José, *Sinopsis de Amparo*, Ed. Porrúa, México, 2007, p. 1.

autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o de trabajo, y que causen un agravio no reparable mediante un medio de defensa legal, y se precisa en su segundo párrafo que no existe obligación de agotar recursos previos si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando se aleguen violaciones directas a la Constitución.

Las legales están en el artículo 61, fracción XX, párrafo tercero, en el cual establece que si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado operará la excepción al principio de definitividad.

Las jurisprudenciales se encuentran en jurisprudencia y tesis aisladas de la SCJN y de los tribunales colegiados de circuito, como ejemplo:

PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, ES INNECESARIO AGOTAR LA INCONFORMIDAD PREVISTA EN EL ARTÍCULO 65 DE LA LAASSP PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, AL ACTUALIZARSE UNA EXCEPCIÓN AL CITADO PRINCIPIO. (No. de Registro 2010,357; Décima Época; Perteneciente a: Segunda Sala; Jurisprudencia; Tesis número: 2ª./J. 144/2015).

Es decir, existe una excepción al principio de definitividad, señalado por la Segunda Sala pues estima que la salvedad se debe dar para garantizar los principios de seguridad jurídica y efectivo acceso a la justicia, en tanto no existe con claridad el plazo en que la autoridad responsable habrá de pronunciarse respecto de la suspensión provisional, por lo expuesto no es necesario agotar la inconformidad a que se refiere el artículo 65 de la LAASSP, previo a la presentación del juicio de amparo.

- ***PRINCIPIO DE ESTRICTO DERECHO:*** significa que la resolución que recaiga al juicio deberá estar motivada y fundamentada únicamente en la resolución de los actos reclamados y en los conceptos de violación que se expresan en la demanda.

  La excepción a este principio se tiene en la figura de *Suplencia de la Queja,* esta excepción también es de carácter legal o jurisprudencial, a ello porque la propia Constitución refiere a la Ley de Amparo en el artículo 107 fracción II párrafo quinto, la Ley de Amparo señala en su artículo 79, siete fracciones de los casos en que deberá suplirse es decirse mejorar la queja realizada, en particular en materia administrativa le son aplicables las fracciones I, VI y VII, que disponen:

  I*. En cualquier materia, cuando el acto reclamado se funde en normas generales que han sido consideradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los Plenos de Circuito. La jurisprudencia de los Plenos de Circuito sólo obligará a suplir la deficiencia de los conceptos de violación y agravios a los juzgados y tribunales del circuito correspondiente.*

  …

  VI. En otras materias, cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular recurrente una violación evidente de la ley que lo haya dejado sin defensa por afectar los derechos previstos en el artículo 1o de esta Ley. En este

caso la suplencia sólo operará en lo que se refiere a la controversia en el amparo, sin poder afectar situaciones procesales resueltas en el procedimiento en el que se dictó la resolución reclamada; y

VII. En cualquier materia, en favor de quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para su defensa en el juicio.

La jurisprudencial se encuentra en jurisprudencia y tesis asiladas de la SCJN y de los tribunales colegiados de circuito, como ejemplo:

SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA AGRARIA. NO SÓLO PROCEDE A FAVOR DE EJIDATARIOS Y COMUNEROS EN PARTICULAR, SINO TAMBIÉN DE LOS AVECINDADOS. (No. de Registro: 2010,289; Décima Época; Perteneciente a: Segunda Sala; Tesis Aislada; Tesis: 2ª. CXIX/2015).

- ***PRINCIPIO DE AGRAVIO PERSONAL DIRECTO***: significa que la persona física o moral que ejercita la acción de amparo debe ser a quien le afecte personal y directamente el acto reclamado, es decir, quien estima que le causa molestia por la privación de algún derecho, posesión o propiedad, de manera directa, ya sea que sus efectos hayan concluido, se realicen al momento de promover el amparo o aun cuando no hayan aparecido, exista presunción de la inminencia de que se llegará a producir. Este principio tiene su excepción en el interés legítimo, que se satisface cuando el demandante alega ser titular de algún derecho subjetivo en sentido amplio y reclama normas, actos u omisiones autoritarios que afecta a su esfera jurídica directa o indirectamente, es decir basta con cierta afectación real y actual aun de manera indirecta, según la situación especial del gobernado frente al orden jurídico.

Para otros autores existe un sexto principio:

- ***PRINCIPIO DE PROSECUCIÓN JUDICIAL***: que implica que el juicio debe desarrollarse con todas las formalidades jurídicas del procedimiento jurisdiccional.

Las personas morales también pueden solicitar el amparo mediante sus funcionarios o representantes legalmente designados cuando se afecten sus intereses patrimoniales.

a) Juicio de amparo indirecto.

En palabras de Ignacio Burgoa el amparo indirecto es *el juicio que procede ante un Juez de Distrito, aunque ponga fin al procedimiento respectivo*[175]*.*

A este juicio también se le denomina amparo bi-instancial, debido a que tiene dos instancias: la primera (de instrucción), que se tramita ante Jueces de Distrito, y la segunda

[175] Burgoa O. Ignacio, *op. cit*, p. 686.

(de revisión), tramitado ante los Tribunales Colegiados de Circuito o la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En materia de adquisiciones, la procedencia del juicio de amparo se deriva de lo establecido en la Ley de Amparo en su artículo 107, el cual determina:

> *Artículo 107. El amparo indirecto procede:*
> *I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso. Para los efectos de esta Ley, se entiende por normas generales, entre otras, las siguientes:*
> *a) Los tratados internacionales…*
> *b) Las leyes federales;*
> *…*
> *e) Los reglamentos federales;*
> *…*
> *g) Los decretos, acuerdos y todo tipo de resoluciones de observancia general;*
> *II. Contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo;*
> *III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de:*
> *…*
> *IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido.*
> *…*
> *V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;*
> *VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas;*
> *…*
> *VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, y*
> *…*

b) Juicio de amparo directo.

El autor Carlos Arellano, hace referencia a que a este amparo, se le da el nombre de amparo directo "*por la forma en que llega de manera inmediata a la Suprema Corte de Justicia o a los Tribunales Colegiados de Circuito, situación diferente a la del amparo indirecto, en donde el acceso a la Corte o a los Tribunales Colegiados de Circuito se produce a través de la interposición del recurso de revisión"*[176].

[176] Arrellano García, Carlos*, El juicio de Amparo*, 2ª edición, Ed. Porrúa, México 1983, p. 755.

Este tipo de amparo de única instancia procede contra sentencias dictadas por tribunales constituidos en ley, con plena independencia para dictar sus fallos:

> *El juicio de amparo directo es competencia del Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente y procede contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por Tribunales Judiciales, Administrativos o del Trabajo, respecto de los cuales no procede ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificados o revocados, ya sea que la violación se cometa en ellos, o sea cometida durante el procedimiento y afecte a las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo y por violaciones de garantías cometidas en las propias sentencias, laudos o resoluciones indicados*[177]*.*

En materia de adquisiciones la procedencia del juicio de amparo directo se deriva de lo establecido en la Ley de Amparo en su artículo 170, el cual determina:

> *Artículo 170. El juicio de amparo directo procede:*
> *I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo.*
> *…*
> *II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas.*
> *…*

Suspensión del acto reclamado. En sentencias definitivas o de resoluciones, dictadas en juicios de orden civil o administrativo, la suspensión se decretara solo a instancia del agraviado y siempre que se cumplan los requisitos que establece el artículo 128 de la Ley de Amparo; surtirá efecto con el otorgamiento de caución suficiente para responder de los daños y perjuicios que ocasione a terceros.

Las sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o de los Tribunales Colegiados de Circuito no comprenderán más cuestiones que las legales propuestas en la demanda de amparo (principio de estricto derecho) y deben apoyarse en el texto constitucional de cuya aplicación se trate, además de expresar en sus proposiciones resolutivas el acto o actos contra los cuales se conceda el amparo.

Las sentencias dictadas en amparo directo tienen el carácter de ejecutorias, es decir, no son revisables. Un caso excepcional, es que quedara pendiente una declaratoria de constitucionalidad de leyes, en el cual pasaría a resolución por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y solo para ese efecto.

[177] Arvizu Tovar y Márquez Rábago, Sergio, *op. cit*., p. 104.

Como se observa en este capítulo la autoridad actúa bajo el principio fundamental de legalidad, que trata de tomar siempre decisiones conforme a una disposición legal expresa, pero muchas veces el desconocimiento de las disposiciones supletorias y correlacionadas, provoca una injusticia administrativa, induciendo que el licitante o proveedor acuda a otras instancias para impugnar.

Como se menciona no es necesario agotar la inconformidad que señala la LAASSP para poder ir a un juicio de amparo, por la deficiencia que la ley presenta. En este caso se da origen a una excepción al principio de definitividad y, como consecuencia, a la procedencia del juicio de amparo.

Cuando la Suprema Corte de Justicia es competente, resuelve mediante diversos métodos de interpretación apoyándose en la hermenéutica y la argumentación jurídicas, esto se estudiará en el siguiente capítulo para comprender los razonamientos de la SCJN.

Entender los métodos de interpretación de la SCJN, relacionados con la LAASSP, es indispensable para los funcionarios que administran los procesos licitatorios y el recurso de revisión, para los jueces que desahogan el procedimiento contencioso administrativo (juicio de nulidad) y desde luego para los miembros del Poder Judicial Federal competentes en el desarrollo del juicio de amparo. Es por ello que en el siguiente capítulo se estudian cuáles son estos métodos interpretativos.

CAPÍTULO V

HERMENÉUTICA JURÍDICA. ARGUMENTACIÓN Y DIVERSOS MÉTODOS DE INTERPRETACIÓN JURISDICCIONAL

S U M A R I O:

1. Nota introductoria. 2. Hermenéutica jurídica. A) Aproximación a la hermenéutica. 3. Argumentación jurídica. 4. Métodos de interpretación usados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A) Método gramatical o literal. B) Método histórico e histórico progresivo. C) Método lógico. D) Método sistemático, integral o armónico. E) Método genético- teleológico. F) Método funcional. G) Método doctrinal. H) Método legal. I) Método de interpretación auténtica. J) Método de interpretación jurídica.

1. Nota introductoria.

En palabras de Eduardo García Máynez *"la **finalidad** de las tareas hermenéuticas es conocer el **sentido** de las normas que se pretende aplicar a situaciones particulares. El medio que a tal fin conduce es la **interpretación** de las **expresiones** que utilizaron los órganos creadores de aquellas reglas. Lo que hay que interpretar no son, pues, las **reglas** mismas, sino las formas de que tales órganos se han servido para expresarlas.*[178]

Así Linares Quintana define a la hermenéutica jurídica como:

> *"La disciplina científica cuyo objeto es el estudio y la sistematización de los principios y métodos interpretativos. De donde queda en evidencia el error en que incurren quienes pretenden sustituir el término interpretación por el de hermenéutica o viceversa."*[179]

En este orden de ideas la argumentación jurídica tiene sus inicios desde la antigua Grecia con la retórica, fue evolucionando hasta lo que hoy conocemos como la argumentación jurídica. Manuel Atienza indica que es *a finales de los años 70's cuando se elabora el núcleo conceptual de lo que puede considerarse como **"la teoría estándar de la***

[178] García Máynez, Eduardo, *Misión y límites de la Hermenéutica Jurídica,* Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM en: http://dianoia.filosoficas.unam.mx/files/6213/7021/0433/DIA62_Garcia_Maynez.pdf, el 26 de agosto de 2016 a las 12:24 p.m.

[179] Linares Quintana *apud* Márquez Rábago, Sergio Ricardo, *Interpretación constitucional*. Lectura del curso *Hermenéutica Jurídica,* Doctorado en Administración Pública del INAP, curso 2015.

argumentación jurídica" *que aparece expuesta en diversos trabajos de Wróblewski, Alexy, Mac Cormick, Peczenik y Aarnio (…)*[180]

La *Argumentación Jurídica* ha evolucionado desde mediados del siglo XX y ha sido establecida positivamente, entre otros, en el Código Civil que contiene varios de los principios que se han interpretado para persuadir al auditorio, en tanto, argumentar es, en términos del Diccionario de la lengua española (RAE), un *razonamiento que se emplea para probar o demostrar una proposición, o bien para convencer a otro de aquello que se afirma o se niega*.

Según Atienza la argumentación jurídica se debe de integrar por la concepción formal que son las reglas de deducción; concepción material, teniendo el ejemplo de las teorías científicas, entre otras y; la concepción dialéctica o reglas del juego aceptadas previamente.

En cuanto a los métodos de interpretación usados por la SCJN, debemos señalar que la interpretación constitucional es fundamental para dar alcance al sentido adecuado de la ley, así cuando la Corte ejerce la interpretación jurisdiccional, esta adquiere la mayor relevancia, en tanto "*se trata del significado constitucional, pues es la única que de manera imperativa y coercible es utilizada para resolver las controversias que se presenten a nuestros juzgadores; es por dicha relevancia que el juzgador se acerca necesariamente a la hermenéutica jurídica."*[181] Analizada esta como disciplina científica, cuyo objeto es el estudio y la sistematización de los principios y métodos interpretativos utilizados por SCJN y que ella misma ha señalado en diversas tesis, tales como: el gramatical, histórico, lógico, sistemático, genético-teleológico, funcional, doctrinal, legal, interpretación auténtica y de interpretación jurídica.

2. Hermenéutica jurídica.

Para entender la importancia de este concepto, es necesario acudir a la Filosofía del Derecho, comenzaremos con la siguiente reflexión del Ministro en retiro Juan Díaz Romero:

> *En una ocasión manifesté en la Suprema Corte de Justicia la utilidad tan notoria que representaría a la judicatura en general que se acercaran a todos los jueces, así como a los jóvenes profesionistas que van por camino, los temas más relevantes de la*

[180] Atienza Manuel *apud* Romero Díaz, Juan, *Imagen elemental de la hermenéutica jurídica,* México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2012, p. XIX.
[181] *Ídem.*

Filosofía del Derecho, no para que se convirtieran en jusfilósofos, sino sólo para allegarles la más básica información.[182]

De la Filosofía del Derecho es relevante desarrollar los conceptos de *hermenéutica, interpretación y argumentación* de la norma en tanto es un campo no suficientemente entendido a cabalidad, como lo menciona el ministro Díaz en su obra, teniendo una repercusión muy delicada sobre la calidad del trabajo de los juristas.

A) Aproximación a la hermenéutica.

Existe la hermenéutica y la hermenéutica jurídica, para un mejor análisis partimos de la etimología de la primera:

La palabra *"hermenéutica"* viene del término griego *"hermeneia"* que se equipara al vocablo latino *"elocutio",* traducible como *"elocución"* o *"expresión"* y que algunos desarrollan como *"exégesis"* (explicación, interpretación).[183]

Para diversos autores la hermenéutica es referente a la interpretación, existiendo diferentes tipos de la misma, entre ellas se encuentran la *"interpretación común y la interpretación hermenéutica"*[184], básicamente la diferencia radica en el límite y los elementos que intervienen:

> *En el tipo de interpretación ordinaria hay un sujeto que interpreta, el que recibe el nombre de lector o intérprete, que se enfrenta a un* ***objeto*** *por interpretar, que puede ser un texto, un signo, un mensaje, un acontecimiento, una obra de arte, etcétera, existiendo también un* ***contacto*** *entre sujeto y objeto, así como un* ***vehículo*** *o código común entre ambos que es un lenguaje comunicante…*
> *La interpretación hermenéutica.*
> *El* ***lector,*** *que también puede llamarse hermeneuta, ya no se topa con el* ***texto****, como si fuera una meta terminal, un confín extremo, sino más bien como un pórtico de acceso que le pone en comunicación con el* ***autor****; por tanto, el* ***contacto*** *del lector ya no opera propiamente con el texto que solo se convierte en un conjunto de signos, esto es, un medio a través del cual se llega al autor, con quien entabla –metafóricamente- un diálogo o una sesión de preguntas y respuestas, valiéndose de un código o vehículo común, que es el* ***lenguaje****.*[185]

En la hermenéutica jurídica buscando una aproximación a su definición, como lo señala Juan Díaz Romero, se va más allá de la interpretación de un texto, ya que mediante su ejercicio una persona **(lector)** trata de **comprender** lo que otra persona

---

[182] Romero Díaz, Juan, o*p. cit*., p. 59.
[183] Ferraris, Maurizio *apud* Romero Díaz Juan, o*p. cit.,* p. 3.
[184] *Ibídem,* p. 4.
[185] *Ibídem,* pp. 4-7.

(autor) pensó, sintió, especuló, reflexionó, ponderó, ordenó, etc., partiendo de los signos (texto) que dejó.

En esta materia existen diversos autores que profundizan en su estudio y comprensión, exponiendo diferentes opiniones:

- **Maurizio Ferraris:** Se trata de modificaciones del significado fundamental de *"conducir a la comprensión"*, de *"mediar en la comprensión"*, respecto de los diferentes modos de plantearse el problema del comprender…
- **Beuchot:** El objetivo final del acto interpretativo; en el acto interpretativo nos damos a la tarea de comprender y contextuar el texto que nos hemos enfrentado y; la naturaleza de la hermenéutica es ser un arte y ciencia de la interpretación cuyo objeto es la comprensión del texto merced a cierta sutileza y penetración.
- **Francesco Viola y Giuseppe Zaccaria:** Mientras el entender implica –como dice Wittggenstein- un *"dirigirse hacia alguien",* o sea, captar las intenciones ajenas, el comprender entra en juego cuando nos damos cuenta de que éstas pertenecen a un contexto más amplio, del que reciben un sentido; que el centro filosófico de la hermenéutica no se encuentra en el interpretar, sino en el comprender.
- **Pedro Serna** señala que: Comprender es poner en correspondencia una experiencia intelectual (**del autor**) captada a través de sus signos (**texto**), con la experiencia propia (**del lector**) con el objeto de atribuirle un significado, un sentido.

Roscoe Pound, defendió los métodos hermenéuticos de su país (E. U. A.) y demostró la ineficiencia de la hermenéutica tradicional, como lo menciona Alipio Silveira *"los enormes problemas que surgen en los umbrales de la hermenéutica jurídica, se refunden en uno: el del propio derecho. Hay una relación profunda entre los conceptos fundamentales del derecho positivo y los principios que deben gobernar su interpretación."*[186]

Se consideraba que la interpretación debía de ser con rigor y los jueces hacían valer a la ley sin importar las nuevas situaciones, esta figura en Alemania se denominó *"jurisprudencia de los conceptos"* como lo explica Pound: un cierto número de puntos de vista legales para el raciocinio jurídico, y un cierto número de categorías legales, en las cuales los hechos relativos a los casos particulares debían ser de cualquier modo encajados por el raciocinio jurídico, eran considerados como suficientes para la decisión de cualquier caso inimaginable. Nuevas situaciones de hecho no podían

[186] Silveira, Alipio, "Roscoe Pound y su influencia sobre la hermenéutica jurídica", Revista de la Facultad de Derecho en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM en http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/facdermx/cont/13/dtr/dtr7.pdf el 26 de agosto del 2016 a las 10:22 p.m.

hacer otra cosa sino solicitar aplicación lógica de los principios legales o clasificación lógica dentro de las categorías establecidas. Todas las nuevas situaciones debían ser resueltas por deducción, de una concepción tradicional prefijada. La alternativa era el establecimiento de un nuevo precepto por vía legislativa.

Una concepción analítica de *jurisprudence* es tradicionalmente la Ciencia del Derecho por lo que está vinculada con el método analítico o mecánico.

Para la escuela analítica, una regla respaldada por los órganos judiciales es Derecho y el mismo será un conjunto de reglas; también tomaban los preceptos formales tal cual, analizaban las instituciones y concepciones jurídicas a fin de alcanzar una ciencia universal del Derecho.

Eduardo García Máynez parte de la contradicción de la ley contra una de mayor altura siendo o no aplicable al hecho donde su conocimiento y la interpretación de forma expresa son establecidas por la finalidad y el medio:

> *La **finalidad** de las tareas hermenéuticas es conocer el **sentido** de las normas que se pretende aplicar a situaciones particulares. El medio que a tal fin conduce es la **interpretación** de las **expresiones** que utilizaron los órganos creadores de aquellas reglas. Lo que hay que interpretar no son, pues, las **reglas** mismas, sino las formas de que tales órganos se han servido para expresarlas.*[187]

Interpretar consiste en descubrir los elementos integrantes de cualquier expresión. Edmund Husserl señala, aspectos importantes de esta:

> *a) El aspecto físico de las mismas, la materialidad de los signos o, en otras palabras, lo sensorialmente perceptible: articulación de sonidos en el lenguaje hablado; caracteres impresos en el papel, si de escritura se trata; líneas o figuras en la expresión gráfica; señales luminosas o auditivas, etc.*
> *b) La significación, es decir el sentido de cada expresión, lo expresado o significado por ella.*
> c) *El objeto, o sea, aquello a que la expresión se refiere.*[188]

Existen diversas expresiones que no concuerdan con lo señalado por Husserl, pues todas ellas tienen sentido pero carecen de objetivo. Lo que se concluye es que todas las expresiones jurídicas se deben de interpretar ya sea las cláusulas, puntos resolutorios de las sentencias o cualquier expresión normativa, sin limitarse al texto legal.

---

[187] García Maynez, Eduardo, *Misión y límites de la Hermenéutica Jurídica,* Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM en http://dianoia.filosoficas.unam.mx/files/6213/7021/0433/DIA62_Garcia_Maynez.pdf el 26 de agosto de 2016 a las 12:24 p.m.
[188] *Ídem.*

Para la interpretación los jueces utilizan el hecho y las acciones para dictar la sentencia. En el Diccionario Jurídico la han definido como:

> ***Interpretación.*** *La explicación o declaración del sentido de alguna cosa que parece obscura o dudosa. Puede haber duda u obscuridad en las leyes, en las demandas y contestaciones, en las sentencias, en las convenciones o contratos, en los testamentos y en los hechos, y así es que tenemos que recurrir con mucha frecuencia a la interpretación.*
> ***Interpretación de las leyes.*** *La conveniente aclaración del texto y espíritu de la ley para conocer el verdadero sentido que el legislador quiso darle, o sea, la verdadera receta y provechosa inteligencia de la ley, según la letra y la razón.*[189]

En Derecho se busca establecer o clarificar el significado de algo, además de interpretar a la ley, están los enunciados normativos, es decir la Constitución, leyes, reglamentos, testamentos, sentencias, entre otros, poseedores de problemas distintos.

Como lo señala Juan Antonio García Amado, existen problemas interpretativos cuando la solución es dependiente de alternativas de uno o varios enunciados jurídicos, como:

> *a) Cuál de dos o más normas se aplica al caso. Así, en Derecho Penal español del conjunto total de los homicidios el legislador individualiza el conjunto de los asesinatos, siendo asesinato aquel homicidio en que concurre al menos uno de los siguientes elementos: alevosía; precio, recompensa o promesa; o ensañamientos…*
> *b) Qué consecuencia se sigue de la norma aplicable para el caso. Sentado ya que la norma aplicable sea una determinada, la consecuencia precisa que de ella se derive para el caso dependerá del modo como sean interpretados los términos de aquélla, siempre que para los mismo haya al menos dos alternativas interpretativas.*[190]

Para la interpretación judicial el autor Javier Arturo Campos Silva, en su trabajo explica las diversas teorías:

Teoría.	**Descripción.**
Cognitiva o formalista.	Esta teoría sostiene que la interpretación es una actividad cognoscitiva, por lo que interpretar es verificar de manera empírica el significado de la norma jurídica y la intención de su autor; parte de la idea de que el sistema jurídico de un Estado es completamente coherente y no tiene lagunas

[189] Escriche, Joaquín, *Diccionario razonado de legislación y jurisprudencia,* Instituto de Investigaciones Jurídicas en http://bibliohistorico.juridicas.unam.mx/libros/1/364/22.pdf el 23 de agosto de 2016 a las 4:19 p.m.
[190] García Amado, Juan Antonio. *Interpretar, argumentar, decidir*, en https://www.unifr.ch/ddp1/derechopenal/anuario/an_2005_05.pdf el 23 de agosto de 2016 a las 5:13 p.m.

	o antinomias, por lo que no hay espacio para la discrecionalidad judicial.
Escéptica.	Sostiene que la interpretación es una actividad no de conocimiento sino de valoración y de decisión. Esta teoría se funda sobre la opinión de que no existe algo así como el significado propio de las palabras, ya que toda palabra puede tener, o el significado que le ha incorporado el emitente, o el significado del que la usa, y la coincidencia entre uno y otro no está garantizada.
Intermedia.	Esta teoría sostiene que la interpretación es una actividad de conocimiento y una actividad discrecional del que interpreta, esto dependerá del texto normativo que es objeto de interpretación, parte de la idea de que existen *casos fáciles* en los que no existe duda o controversia sobre la norma, sin embargo también existen *casos difíciles* entre los que se requiere una decisión entre al menos dos soluciones alternativas.

Fuente: La interpretación judicial de Javier Arturo Campos Silva en http://www.miguelcarbonell.com/docencia/La_Interpretaci_n_Jur_dica.shtml el 24 de septiembre de 2016.

La diferencia entre la hermenéutica y la hermenéutica jurídica radica en que en la segunda el autor es el instituto legislador, el texto hace alusión a la regla jurídica respaldada por el autor, el contexto nos da una visión mejor de la intención del legislador, el lenguaje es perteneciente a la materia legal, el elemento de contacto hace referencia a la regla jurídica, con el creador de la misma y también entra el contexto.

El ministro en retiro Juan Díaz Romero nos menciona que se encuentra otro elemento más de la hermenéutica jurídica que es:

> *La práctica jurídica es una incesante labor de mediación entre mundos diferentes, el de aquellos en que el texto legal (u otro equivalente) tiene su origen y el de sus actuales usuarios, es decir, de aquellos que se sirven de ella para llevar a cabo la tarea de coordinación de las acciones sociales. El intérprete es tradicionalmente un mediador y un traductor. No se trata solamente de poner en comunicación culturas diferentes, sino también situaciones diversas, eventos históricos lejanos en el tiempo y expectativas opuestas. Esto requiere no sólo la capacidad de participar en un*

particular juego lingüístico, sino también la de saber captar lo que una particular forma de vida puede comunicar a otra diferente y que ésta puede recibir del pasado.[191]

Para Linares Quintana, *"La Hermenéutica jurídica es la disciplina científica cuyo objeto es el estudio y la sistematización de los principios y métodos interpretativos. De donde queda en evidencia el error en que incurren quienes pretenden sustituir el término interpretación por el de hermenéutica o viceversa."*[192]

Por lo que concluimos, que la hermenéutica jurídica es la manera de cómo se hace uso de los métodos interpretativos aplicables a la normatividad por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la *litis* planteada en los juicios sujetos a su resolución, para efectos de nuestra investigación, a partir de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, con el conveniente conocimiento del particular que plantea una inconformidad conociendo la forma en que resolverá el juzgador.

3. Argumentación jurídica.

La argumentación jurídica tiene sus antecedentes desde la antigua Grecia, con los logógrafos, encargados de realizar los discursos, ya que en esos tiempos no existían los abogados y la población se defendía a través de ellos en los litigios, resultando práctico para las personas con dificultad al hablar en público.

Se formaron las asambleas y se volvió necesario aprender la persuasión en otro nivel, los nobles se tenían que actualizar en su habilidad para la retórica, consecuencia de los cambios dentro de la estructura del Estado, encontrando un lenguaje entendible para las partes, como lo describe Graciela Fernández:

… los jurados ante los cuales tenían que hablar no eran ya los mismos, pues día con día aumentaba el número de jueces pertenecientes a las clases bajas de la burguesía. Los miembros de tales clases –como se ha dicho anteriormente- no tenían una educación muy esmerada y, por lo tanto, carecían de la capacidad necesaria para seguir una demostración jurídica complicada.[193]

La misma autora señala a dos principales sofistas enfocados a la enseñanza de la retórica, recordando que ellos eran personas que cobraban por las mismas,

---

191 Viola, Franceso y Zacaria *apud* Romero Díaz Juan, o*p. cit., p.* 42.
192 Linares Quintana *apud* Márquez Rábago, Sergio Ricardo, *Interpretación constitucional* Lectura del curso *Hermenéutica Jurídica.* Doctorado en Administración Pública del INAP, curso 2015.
193 Fernández Ruiz, Graciela, *Argumentación y lenguaje jurídico. Aplicación al análisis de una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,* México, UNAM, 2011, p. 77 en http://bibliohistorico.juridicas.unam.mx/libros/7/3016/3.pdf el 26 de agosto de 2016 a las 5:33 p.m.

contrarios a los físicos, siendo mal vistos en un principio, Protágoras de Abdera y Gorgias de Leontini.

> *…el método usado por Protágoras era el de la antilogía, que consiste, fundamentalmente, en la capacidad para defender con igual destreza cualquier proposición dada, lo mismo que su contraria. Protágoras se preciaba de poder presentar con igual fuerza persuasiva lo mismo la proposición "buena" que la "mala", la verdadera que la falsa; decía contar con la posibilidad de defender con el mismo éxito la postura más convincente y la menos convincente, logrando así "transformar la peor razón en la mejor", como diría él mismo en su obra Las antilogías…*
> *…Lo más característico de este autor [Gorgias] fue haber introducido en la retórica elementos de los que tradicionalmente se servía la poética; por ejemplo: el uso de palabras no comunes en el lenguaje cotidiano, adorno excesivo y lenguaje figurado, etcétera. Con la aportación de recursos poéticos al servicio de la retórica, inicia Gorgias una nueva etapa en la oratoria ateniense…*
> *Georgias expuso sus teorías retóricas en un Arte donde se contenían preceptos y enseñanzas como, por ejemplo, el manejo del ridículo dentro del discurso.*[194]

Analizando las aportaciones de los sofistas encontramos que la retórica se encuentra en una posición desleal ya que tiene la posibilidad de que todo lo bueno se convierte en algo malo y viceversa, cometiendo injusticias; el segundo autor nos enseña como instrumentar una burla, primeramente simplemente se ríe y posteriormente emite un razonamiento para ridiculizar.

Platón, pone el ejemplo más claro de una retórica injusta cuando Sócrates es condenado a muerte y lo plasma en su *Apología:*

> *No tengo ningún resentimiento contra mis acusadores ni contra los que me han condenado, aun cuando no haya sido su intención hacerme un bien, sino, por el contrario, un mal, lo que sería un motivo para quejarme de ellos. Pero sólo una gracia tengo que pedirles. Cuando mis hijos sean mayores, os suplico los hostiguéis, los atormentéis como yo os he atormentado a vosotros, si veis que prefieren las riquezas a la virtud y que se creen algo cuando no son nada; no dejéis de sacarlos a la vergüenza si no se aplican a lo que deben aplicarse y si creen ser lo que no son; porque así es como he obrado con vosotros. Si me concedéis esta gracia, lo mismo que mis hijos no podremos menos de alabar vuestra justicia. Pero ya es tiempo de que nos retiremos de aquí, yo para morir, vosotros para vivir. ¿Entre vosotros y yo, quién lleva la mejor parte? Esto es lo que nadie sabe, excepto Dios.*[195]

Aristóteles fue discípulo de Platón, uno de los más brillantes filósofos, una de sus aportaciones fue la sistematización de la retórica, la cual divide en tres: deliberativa, judicial y la demostrativa.

---

[194] Fernández Ruiz, Graciela, o*p. cit.,* p. 79-80.
[195] *Ibídem,* pp. 32-83.

Para establecer su distinción, la estagirita utiliza como criterio el papel que juega el oyente en cada caso, esto es, cuando se pronuncia un discurso (o se da a conocer de cualquier otro modo) el oyente puede actuar de dos maneras: como árbitro puede hacerse aún otra distinción, que será la decisiva para indicar de cuál género de retórica se trata: si aquello de lo que juzga del oyente son cosas pasadas, entonces ese es un caso de retórica judicial o forense, pero si aquello sobre lo que tiene que juzgar se refiere a cosas futuras, entonces se habla de retórica deliberativa. En cambio, cuando el papel del oyente es el de simple espectador, el género del discurso es el demostrativo.[196]

La retórica demostrativa ya no toma tanta relevancia conforme pasa el tiempo, e inclusive desde ese entonces, la retórica judicial, es antecedente de la argumentación que actualmente se ejerce.

El desarrollo de la argumentación se ubica, señala Juan Díaz Romero, a finales de los años 70's cuando se elabora el núcleo conceptual de lo que puede considerarse como **"la teoría estándar de la argumentación jurídica"** que aparece expuesta en diversos trabajos de Wróblewski, Alexy, Mac Cormick, Peczenik y Aarnio. Por esa época se publican también trabajos de Dworkin, Summers y Razqye han influido decisivamente en la manera de entender el discurso justificativo de carácter judicial.

Como se describe la *Argumentación Jurídica* ha evolucionado desde mediados del siglo XX y ha sido establecida positivamente, entre otras, en el Código Civil que contiene varios de los principios que se han interpretado para persuadir al auditorio. La confrontación entre el juez y el auditorio, expresa Pedro Serna, se percibe en *"la teoría de la argumentación de Robert Alexy (que) constituye una proyección corregida al campo específico del derecho, de la Teoría del discurso de J. Habermas. De hecho, la primera parte de la misma (el discurso racional práctico general) está fuertemente influida por la teoría consensual de la verdad de Habermas."*[197]

Argumentar según el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua de 1992 es un *"razonamiento que se emplea para probar o demostrar una proposición, o bien para convencer a otro de aquello que se afirma o se niega."*[198]

La materia de la argumentación son las premisas y la conclusión, estudiando la lógica material para encontrar la verdad de las cosas, existen diversas teorías de la verdad como son:

- ***Teoría de la verdad como consenso.*** *La teoría consensual de la verdad sostiene, a muy grandes rasgos, que una proposición es verdadera si*

[196] *Ibídem,* p. 84.
[197] Serna Pedro *apud* Romero Díaz, Juan, *op. cit*., p. 62.
[198] Real Academia Española *apud* Fernández Ruiz, Graciela, o*p cit.,* p. 1.

acerca de ella hay acuerdo o consenso en todo el grupo de sujetos con los cuales, actual o potencialmente, se establece un diálogo al respecto.

- ***Teorías coherentistas de la verdad.*** *Sostienen que una proposición es verdadera siempre y cuando sea coherente con el resto de las proposiciones o creencias que integran el sistema o conjunto al cual ella pertenece.*
- ***Teorías pragmáticas de la verdad.*** *Son aquellas teorías para las cuales una proposición es verdadera si resulta útil en la práctica. Por supuesto que lo más "práctico" o "útil" que puede haber es que los hechos o cosas sucedan tal y como la proposición indica.*
- ***Teoría de la verdad como correspondencia.*** *La teoría más ampliamente extendida sobre la verdad es la que la entiende como una correspondencia entre lo que se dice (o se piensa) y las cosas, es decir, entre el lenguaje y el mundo.*[199]

Existen diferentes tipos de argumentación de acuerdo con Graciela Fernández:

- ***Fuerte:*** *Se tienen las proposiciones y la que se deriva de ellas es necesaria.*
- ***Débil:*** *La proposición derivada es probable, es decir no necesaria.*

Santo Tomás da una clasificación más de los argumentos:

- ***Argumentos dialécticos.*** *La razón se inclina totalmente a una parte de la contradicción, aunque con cierto resquemor hacia la otra.*
- ***Argumentos retóricos.*** *El grado de probabilidad o de certeza alcanzado es todavía menor, pues en él no se da una completa creencia u opinión sino cierta sospecha, porque la razón no se inclina totalmente a una parte de la contradicción, aunque se incline más hacia ésta que hacia aquella.*
- ***Argumentos poéticos.*** *La llamada lógica inventiva o tópica… a veces la sola estimación se inclina hacia una de las partes de la contradicción por alguna representación, al modo que el hombre rechaza algún alimento si se le representa bajo la semejanza de algo abominable. Y a esto se ordena la poética, pues propio del poeta es inducir algunas cualidades por alguna representación apropiada.*[200]

Por otro lado Manuel Atienza al analizar el trabajo de Cristina Redondo señala que existen distinciones para la reconstrucción del concepto de razonamiento y razonamiento jurídico, siendo cuestionable el contenido de todos los elementos y si se niega la unidad entre ellos, a lo que el mismo responde:

[199] Fernández Ruiz, Graciela, o*p. cit.,* pp. 3-5.
[200] *Ibídem,* p. 9.

…en primer lugar, que la distinción se hace precisamente para no ocuparse de esos procesos; y en segundo –y fundamental- lugar, que esa práctica no consiste meramente en un fenómeno psicológico individual, sino que es también- que ha de verse también –que ha de verse como- una práctica social.

Respecto a la segunda pregunta… lo que desencadena la argumentación es, en los tres casos, un problema, aunque de naturaleza distinta: formal, sustantivo (teórico o práctico y, en este segundo caso, de carácter técnico o moral) y político (puesto que de lo que se trata en el tercer supuesto es de dirimir una controversia mediante una decisión).

Además en segundo lugar, en los tres casos cabe hablar de premisas y de conclusiones, esto es, de aquello de lo que se parte y aquello a donde se llega, y del paso de un lugar a otro.[201]

El mismo autor defiende que en la argumentación jurídica se deben de integrar la concepción formal que son las reglas de deducción; concepción material, teniendo el ejemplo de las teorías científicas, entre otras y; la concepción dialéctica o reglas del juego aceptadas previamente.

4. Métodos de interpretación usados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La interpretación constitucional, es fundamental para dar alcance al sentido adecuado de la ley, sirve para dar sentido a una ley obscura, que no se entiende o que de plano se omitió una regulación, en este aspecto el autor Sergio Márquez, la divide en: interpretación popular, académica, administrativa, legislativa y jurisdiccional.

Interpretación popular*… esta la hace el pueblo, la hace el gobernado cuando de la lectura de la Constitución pretende darle efectos prácticos… La interpretación popularmente coincide de manera recurrente con el alcance literal, puesto que pocas posibilidades tienen los gobernados de acceder a los alcances ontológicos, teleológicos o axiológicos de la norma.*[202]

La siguiente clasificación es la **interpretación académica** como se ve se refiere, por lo general a situaciones de las que no se ha ocupado el Poder Judicial, en virtud de que no ha recibido el planteamiento respectivo, aborda temas hipotéticos, que eventualmente serán hechos fácticos y son interpretados por los doctrinarios y académicos en instituciones educativas.

[201] Atienza Rodríguez, Manuel, *A propósito de la argumentación jurídica*, p.42.

[202] Márquez Rábago, Sergio, *Interpretación constitucional*. Lectura del curso *Hermenéutica Jurídica.* Doctorado en Administración Pública del INAP, curso 2015, p.1.

El gobierno cuenta con la Administración Pública para el desempeño de sus funciones por lo que los servidores públicos deben de interpretar las leyes para alcanzar su objetivo, de aquí surge la:

Interpretación administrativa. Es la que los titulares de los diversos órganos de la Administración Pública, auxiliares del ejecutivo, realizan al aplicar la normatividad general a situaciones individuales y concretas, a fin de llevar un negocio del orden administrativo a la esfera jurídica de los particulares. Toda actividad de la Administración cuando concreta un acto administrativo interpreta la ley, y en ocasiones, incluso la Constitución.

Las Cámaras de Diputados y Senadores, tienen una función importante en el gobierno, pues tienen la facultad para la creación de una ley. Generándose así la *"**interpretación legislativa**. Por supuesto que también corresponde a los legisladores federales interpretar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto lo hacen al llevar a cabo su función sustantiva: hacer leyes ordinarias federales."*[203]

La interpretación del legislador se denomina también ***interpretación auténtica***, el Poder Legislativo puede interpretar a través de decretos las normas emanadas por ellos mismos.

Por último, se encuentra de manera por demás importante la ***interpretación jurisdiccional*** que *"adquiere la mayor relevancia cuando se trata de significado constitucional, pues es la única que de manera imperativa y coercible es utilizada para resolver las controversias que se presenten a nuestros juzgadores; es por dicha relevancia que el juzgador se acerca necesariamente a la Hermenéutica jurídica."*[204]

Los métodos más frecuentes de interpretación son:

A) Método gramatical o literal.
B) Método histórico e histórico progresivo.
C) Método lógico.
D) Método sistemático, integral o armónico.
E) Método genético- teleológico.
F) Método de interpretación auténtica.
G) Método de interpretación jurídica.

[203] *Ibídem, p.10.*
[204] *Ibídem, p.12.*

A) Método gramatical o literal.

Este método es el estudio y entendimiento de las palabras del legislador en su sentido natural y el significado de la norma a partir de su literalidad.

Ignacio Burgoa expresa:

> *…Gramatical, o literal, toma el significado de las palabras utilizadas por el legislador en la redacción de la norma escrita, este es el menos adecuado para buscar el alcance del Derecho y solo es aconsejable cuando la literalidad del Derecho es suficientemente clara que no deje lugar a dudas acerca de la ratio legis. El verdadero sentido de las disposiciones constitucionales debe ser desentrañado, sobre todo cuando impliquen alguna declaración fundamental de contenido político, social, económico o cultural, que exprese el espíritu del ordenamiento supremo. Consiste en la averiguación y determinación de todos los factores, elementos, circunstancias causas o fines que en un momento dado en la vida de un pueblo hayan originado la proclamación de postulados o de principios básicos que forman el contexto esencial del ordenamientos constitucional, responde a las preguntas del ¿Por qué? ¿Y para qué? Ubicándola dentro del contexto.*[205]

Este método de interpretación se encuentra fundamentado, para la materia civil en el artículo 14, párrafo cuarto de la Constitución:

> "*En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho."*

Si este método es suficiente la interpretación se hará como señala la letra, pero si no resulta clara o precisa, se puede utilizar un diverso método interpretativo; la siguiente tesis aislada lo precisa:

> ***INTERPRETACIÓN DE LA LEY. SI SU TEXTO ES OSCURO O INCOMPLETO Y NO BASTA EL EXAMEN GRAMATICAL, EL JUZGADOR PODRÁ UTILIZAR EL MÉTODO QUE CONFORME A SU CRITERIO SEA EL MÁS ADECUADO PARA RESOLVER EL CASO CONCRETO…*** *En este sentido, los juzgadores no están obligados a aplicar un método de interpretación específico, por lo que válidamente pueden utilizar el que acorde con su criterio sea el más adecuado para resolver el caso concreto. Sin embargo, en principio deberá utilizarse el literal, pues como lo establece el propio precepto constitucional, los fallos judiciales deberán dictarse "conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley", con lo que se constriñe al juzgador a buscar la solución del problema que se le presente, considerando en*

[205] *Ídem.*

primer lugar lo dispuesto expresamente en el ordenamiento jurídico correspondiente.[206]

La posibilidad de utilizar diversos métodos por la SCJN además del método gramatical, de la manera adecuada, se menciona en las siguientes tesis aisladas:

INTERPRETACIÓN DE LA LEY. INSTRUMENTOS AL ALCANCE DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL PARA HACERLA. *La labor de interpretación de una norma no puede realizarse atendiendo únicamente a la letra del precepto (método gramatical) o significado estrictamente técnico de la expresión (como el proporcionado por los peritos al desahogar el cuestionario de la actora).Por lo tanto, cuando se plantea un conflicto sobre la significación que debe asignarse a un término o palabra empleada en alguna disposición legal, de la que no exista una interpretación auténtica, es decir, elaborada por el propio legislador, es deber del tribunal servirse de todos los métodos -gramatical, lógico, sistemático o histórico- reconocidos por nuestro sistema jurídico, en cuanto le puedan servir en su tarea-.*[207]

LEY INTERPRETACIÓN DE LA. *De acuerdo con Baudry Lacantinerie, la primera de las reglas de la interpretación de la ley crea la exigencia de que aquélla está regida, en primer lugar, por la interpretación gramatical del texto, ya que sólo cuando la redacción del precepto que el operador del derecho se ve constreñido a verificar, es oscuro o dudoso, atenderá para su interpretación a los principios de la lógica y en último extremo, a los principios generales del derecho.*[208]

REVISIÓN FISCAL. CUANDO SE ESTÁ EN EL SUPUESTO DE INTERPRETACIÓN DE LA LEY, PARA LA PROCEDENCIA DEL RECURSO DE *(...) Por tanto, si la a quo, al tratar de delimitar la real dimensión del precepto aplicado (artículo 46 del Código Fiscal de la Federación), acudió al contenido del artículo 16 constitucional buscando la armonía de ambos preceptos, y, además, determinó que la expresión literal del primero de dichos numerales no admitía otro sentido que el gramatical de la norma, ello implica tarea de interpretación, pues dicha Sala, para resolver la controversia ante ella planteada acudió a la interpretación contextual y literal del precepto legal cuestionado.*[209]

Se aprecia que hay una regla en donde un solo método no es suficiente, para poder resolver las controversias que se presentan en la Suprema Corte de Justicia de la Nación,

---

[206] Época: Novena Época; Registro: 181320; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XIX, Junio de 2004; Materia(s): Común; Tesis: 1a. LXXII/2004; Página: 234.

[207] Época: Séptima Época; Registro: 246971; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación; Volumen 217-228, Sexta Parte; Materia(s): Común; Página: 353.

[208] Época: Quinta Época; Registro: 298124; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación; Tomo CXI; Materia(s): Común; Página: 2244.

[209] Época: Novena Época; Registro: 203302; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo III, Febrero de 1996; Materia(s): Administrativa; Tesis: III.1o.A.9 A; Página: 480.

como Tribunal Supremo para una mejor impartición de justicia hacia los ciudadanos, debe de atenerse a uno diverso.

B) Método histórico e histórico progresivo.

Estos métodos hacen referencia a interpretar las leyes buscando sus antecedentes de creación, como la exposición de motivos, entendiéndose que debe de tomarse en cuenta porque no se pueden eximir de sus precedentes históricos. La SCJN menciona las interpretaciones, histórica tradicional y la histórica progresiva.

Se precisa que para fijar el justo alcance de una disposición contenida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ante la insuficiencia de elementos que derivan de su análisis literal, sistemático, causal y teleológico, es posible que nuestro Máximo Tribunal, acuda tanto a su interpretación *histórica tradicional* como *histórica progresiva.*

La interpretación *Histórico tradicional* se da con el fin de averiguar los propósitos que tuvo el Constituyente para establecer una determinada norma constitucional, y resulta necesario analizar los antecedentes legislativos que reflejan con mayor claridad *en qué términos se reguló anteriormente una situación análoga y cuál fue el objeto de tales disposiciones,* lo que se busca es si existe una conexión entre la ley vigente y la anterior; máxime, si a través de los diversos métodos de interpretación del precepto constitucional en estudio se advierte que fue intención de su creador plasmar en él un principio regulado en una disposición antes vigente, pues en tales circunstancias, la verdadera intención del Constituyente se puede ubicar en el mantenimiento del criterio que se sostenía en el ayer, ya que todo aquello que la nueva regulación no varía o suprime de lo que entonces era dado, conlleva la voluntad de mantener su vigencia. De resultar insuficientes los elementos que derivan de esta interpretación tradicional, será posible acudir a la diversa *histórica progresiva,* en la cual deben tomarse en cuenta tanto las condiciones y necesidades existentes al momento de la creación del precepto constitucional, como las que se advierten al llevar a cabo su interpretación y aplicación, *ya que toda Norma Fundamental constituye un instrumento permanente de gobierno, cuyos preceptos aseguran la estabilidad y certeza necesarias para la existencia del Estado y del orden jurídico.*

Por tanto, concluye la tesis de la SCJN:

> "*…ante un precepto constitucional que por su redacción permite la adecuación de su sentido a determinadas circunstancias, ya sea jurídicas, o de otra índole, para fijar su alcance, sin imprimirle un cambio sustancial, debe atenderse precisamente a la estabilidad o modificación que han sufrido esas circunstancias, sin que con ello sea*

válido desconocer o desnaturalizar los propósitos que llevaron al Constituyente a establecer la disposición en estudio.[210]

En el método ***histórico tradicional*** se busca entender el propósito del constituyente, analizando los antecedentes legislativos de la resolución de asuntos análogos y en el método histórico progresivo, se toman en cuenta las condiciones y necesidades existentes al crear la norma, como las que se advierten al llevar acabo su interpretación y aplicación.

C) Método lógico.

Consiste en *"considerar que el texto legal tiene una significación propia e independiente de la voluntad real o presunta de sus autores."*[211] El método lógico, implica apartarse del alcance gramatical de una palabra o frase, y encontrar un entorno al que necesariamente nos lleva esta. Por ejemplo la prohibición de subirse a un autobús con un perro, no implica que sólo ese animal, sino cualquiera que pueda molestar o poner en riesgo a los pasajeros del mismo tiene el impedimento y no es necesario hacer una lista exhaustiva de todo animal que pueda resultar molesto.

En ocasiones la interpretación lógica corrobora a la literal como este ejemplo de tesis aislada:

> ***SUSPENSIÓN, MODIFICACIÓN DE LA GARANTÍA MEDIANTE LA CUAL SE CONCEDE.*** *Por lo demás, la interpretación gramatical queda corroborada con la interpretación lógica de la disposición legal mencionada, pues el recurso de modificación y revocación que instituye, tiene por objeto ajustar la situación jurídica creada por la resolución que se dicte en el incidente de suspensión, a los nuevos hechos o circunstancias que influyan en los actos materia de la queja, bien sea ampliando la protección provisional concedida, para poner a cubierto de todo peligro los derechos que son materia del amparo, u otorgando el beneficio que había sido negado, o revocando la suspensión que se concedió…*[212]

D) Método sistemático, integral o armónico.

Tomemos en cuenta que el Derecho *es un sistema* por lo cual su interpretación conlleva:

---

[210] ***INTERPRETACIÓN HISTÓRICA TRADICIONAL E HISTÓRICA PROGRESIVA DE LA CONSTITUCIÓN.*** Novena Época; Registro: 191673; Tesis: P./J. 61/2000.

[211] Márquez Rábago, Sergio, *Interpretación constitucional*. Lectura del curso *Hermenéutica Jurídica.* Doctorado en Administración Pública del INAP, curso 2015.

[212] Época: Quinta Época; Registro: 329549; Instancia: Segunda Sala; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación; Tomo LXIII; Materia(s): Común; Página: 1999.

- Saber a qué institución jurídica pertenece la normativa en estudio.
- Localizar los preceptos que regulan dicha institución.
- Desentrañar el sentido del precepto, de manera conjunta y no asilada.

Estos pasos se siguen con la finalidad de que éste armonice con las demás disposiciones que integran la propia institución.

La interpretación o *método sistemático*, señala que el entendimiento y sentido de las normas debe determinarse en concordancia con el contexto al cual pertenecen, pues fraccionar el contexto (Capítulo, Título, Libro), de un ordenamiento jurídico para interpretar los artículos que lo configuran en forma aislada y literal, sólo trae como resultado, en muchos casos, la inaplicabilidad de unos en relación con otros, porque el legislador al elaborar las leyes puede emplear la técnica de la llamada *regla general y de los casos especiales* y en estas condiciones al interpretar un artículo que contenga un caso especial en relación con la regla general, podría traer como consecuencia la inoperancia de la misma o viceversa; así lo señala la SCJN[213]; un ejemplo de *regla general* lo tenemos en el Art. 5º de la CPEUM, *a nadie podrá impedirse que se dedique a la profesión de su preferencia siendo lícita*, sin embargo, tiene varias excepciones como en el caso de los ministros quienes una vez que salgan del ejercicio no podrán durante dos años posteriores dedicarse a la abogacía. Para resolver un cuestionamiento específico ¿Puede impedirse a un ministro en retiro ejercer la abogacía? La respuesta debe tomar en cuenta ambas técnicas de elaboración de normas.

Existen autores que ubican la interpretación armónica o sistemática con la siguiente definición: "Sistemática *o de interpretación armónica: para establecer el sentido y alcance del precepto analizado en relación con las otras disposiciones de la ley, como parte de un todo."*[214]

E) Método genético- teleológico.

Se considera como un elemento para este tipo de interpretación a la finalidad de la regulación frecuentemente expuesta en la *exposición de motivos,* ello para entender las causas de creación de la norma, en esta por lo general encontramos razonamientos y argumentos dados por los legisladores de lo que pretenden con la creación normativa. La SCJN emite en su tesis aislada, con registro 187613 este método como *el método genético-teleológico el cual permite, al analizar la exposición de motivos de*

[213] ***INTERPRETACIÓN GRAMATICAL DE LAS LEYES. DEBE REALIZARSE EN RELACIÓN CON EL MÉTODO SISTEMÁTICO.*** Tesis con registro 228584.

[214] SCJN, UNAM y el Instituto de investigaciones Jurídicas de la UNAM. Interpretación de la ley y el principio de legalidad tributaria en https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2534/5.pdf el 26 de noviembre del 2016 a las 2:47 p.m.

determinada ley, descubrir las causas que generaron la norma y por otro lado, también señala que el método genético-teleológico permite, al analizar la exposición de motivos de determinada iniciativa de reforma constitucional, y estudiar los dictámenes de las Comisiones del Congreso de la Unión y el propio debate, *descubrir las causas que generaron determinada enmienda al Código Político*, así como la finalidad de su inclusión, lo que constituye un método que puede utilizarse al analizar un artículo de la Constitución, ya que, concluye el criterio del Pleno de la SCJN; en ella se cristalizan los más altos principios y valores de la vida democrática y republicana reconocidos en nuestro sistema jurídico.

El rubro de la tesis en cita es: ***INTERPRETACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN. ANTE LA OSCURIDAD O INSUFICIENCIA DE SU LETRA DEBE ACUDIRSE A LOS MECANISMOS QUE PERMITAN CONOCER LOS VALORES O INSTITUCIONES QUE SE PRETENDIERON SALVAGUARDAR POR EL CONSTITUYENTE O EL PODER REVISOR.***[215]

F) Método funcional.

En la interpretación funcional se busca que la autoridad en su aplicación alcance el objetivo de la norma, lo que se pretende es que el significado que se atribuya al enunciado normativo permita la realización del objetivo perseguido, por las autoridades que intervengan en la aplicación de la norma, cada autoridad debe realizar lo que la norma espera de él. Al respecto, y como ejemplo, debe tenerse presente que el verdadero sentido del artículo 17 constitucional es la administración de justicia por los tribunales, (función de los jueces), en el entendido de que la real justicia es la que se imparte con miras a estar más cerca de la verdad.

Así lo confirma la SCJN en su tesis de rubro ***PRUEBA PERICIAL. SU REGULACIÓN EN MATERIA FAMILIAR NO LIMITA LOS PODERES PROBATORIOS DEL JUZGADOR,*** *con* Registro: 162752 y número de Tesis: I.4º.C.306 C.

G) Método doctrinal.

Aunque la doctrina no sea obligatoria, los jueces suelen utilizarla para fundar sus resoluciones o al emitir su criterio, esto cuando la ley no es clara o no existe jurisprudencia al respecto; entonces, los jueces para decidir toman en cuenta los Principios Generales del Derecho y la opinión de académicos prestigiados como Rojina Villegas en materia civil, Jorge Carpizo en materia Constitucional, Gabino Fraga en

[215] Registro. 196,537, Tesis: P. XVIII/98, p. 117.

materia administrativa, etc. Algunos ejemplos donde pusieron en práctica este método son:

- *Una doctrinal interpretación del numeral 2871 del Código Civil del Estado de Jalisco, lleva al convencimiento de que siendo la transacción en juicio, por su propia naturaleza, un acuerdo de voluntades cuya finalidad es que las partes celebrantes, puedan, al través de concesiones mutuas, evitar una controversia venidera o concluir una actual…*[216]

  La interpretación auténtica radica, de una manera absoluta y exclusiva, en los propósitos del legislador, manifestados en "la exposición de motivos", que es la expresión oficial, clara, concreta y expresa de la voluntad del órgano creados de la ley; y aunque es cierto que algunos de los más ilustres creadores del Código Penal de 1931, han expresado con posterioridad a su promulgación, cual es el contenido jurídico, sociológico y ético que quisieron dar al artículo 310 en relación con la fracción III del 15, a las opiniones de ese distinguidísimo grupo de juristas, no puede ni debe reconocerse el rango supremo de interpretaciones auténticas de la ley, sino que su interpretación es doctrinal.[217]

H) Método legal.

En este método se establecen diversas fuentes para su aplicación, a falta de una de las fuentes se usará la que le continúa, considerando la existencia de la jerarquía de las leyes, los contenidos de las leyes, con una aproximación literal, pero que se convierte en legal, debe hacerse por orden prioritario de las cuatro grandes fuentes de la interpretación o método legal:

- **Fuente "auténtica",** que es aquélla en donde el legislador expresa de manera concreta su pensamiento y su voluntad;
- **Fuente "coordinadora",** buscando una tesis que haga posible la vigencia concomitante y sin contradicciones de los preceptos en posible antítesis;
- **Fuente "jerárquica",** en donde, al definirse el rango superior, ético, social y jerárquico, de una ley sobre la otra, se estructura, de acuerdo con aquélla, la solución integral del problema;
- **Fuente doctrinal** que define cual de las disposiciones a debate ha de conservar la vigencia, por su adecuación a los principios generales del

[216] ***CONVENIO JUDICIAL, EFECTOS PROCESALES DEL.*** 8a Época; Reg.221,644; Tribunales Colegiados de Circuito; Tesis: Aislada; SJF; Tomo VIII, Oct. 1991; Materia(s): Civil; p. 156.

[217] ***LEGITIMA DEFENSA DE HONOR Y UXORICIDIO (INTERPRETACION AUTENTICA DEL CODIGO PENAL).*** Época: Quinta Época; Registro: 301,702; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación; Tomo XCVIII; Materia(s): Penal; Página: 2039.

derecho, a la filosofía y a las corrientes del pensamiento contemporáneo jurídico-penal.[218]

I) Método de interpretación auténtica.

Deriva de los razonamientos propios del autor del ordenamiento y posteriormente se interpreta, el proceso demanda que alguna de las elecciones interpretativas estén dentro del texto que se analiza y con ello se omite el faltar al sentido del texto original, en la tesis con número de registro 1011615, se establecen dos limitaciones:

1. Se toman de manera aislada las posibilidades de semántica, produciendo una serie de alternativas jurídicamente viables para interpretar
2. Esas posibilidades se contrastan con el sentido sistemático del orden jurídico a aplicar en el caso concreto, tomando en cuenta no solo las disposiciones que se encuentran de manera horizontal a la interpretada.

J) Método de interpretación jurídica.

Ricardo Guastini menciona que la interpretación textual, o gramatical, además de tener una interpretación legal, puede tener otra denominada jurídica; esta pertenece al género de la interpretación textual. Interpretar, como ya se dijo, denota a grandes rasgos, la actividad de averiguar o decidir el significado de algún documento o texto jurídico, o bien el resultado o producto de esa actividad: el significado mismo, expuesto por un experto en el tema a quien se le reconoce ese carácter. Que la interpretación sea una actividad de averiguación o de decisión es una cuestión controvertida, a la que las diversas teorías de la interpretación ofrecen respuestas diferentes.

La SCJN resuelve respecto a la interpretación jurídica lo siguiente:

> ***ACUMULACIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL QUE SE EJERCITA EN CONTRA DE DIVERSOS ACTOS DESVINCULADOS JURÍDICAMENTE ENTRE SI…****la interpretación jurídica de esos preceptos, a la luz del espíritu de la última de las disposiciones citadas nos conduce a asegurar que es posible tramitar acumuladamente la acción constitucional que hacen valer las mismas personas, en contra de las mismas autoridades, a pesar de que los actos reclamados no sean exactamente los mismos, siempre y cuando dichos*

[218] ***INTERPRETACIÓN DE LA LEY, REGLAS DE LA.*** 5ª Época; Reg. 301,701; 1a Sala; Tesis: Aislada; SJF; Tomo XCVII; Materia(s): Penal; p. 2038.

actos guarden entre sí algún vínculo jurídico que produzca la conveniencia de resolverlos conjuntamente…[219]

REVISIÓN FISCAL. DEBE DESECHARSE SI LA SENTENCIA NO RESUELVE SOBRE INTERPRETACIÓN DE LEYES. *Si en la sentencia materia del juicio fiscal interpuesto, el órgano contencioso administrativo no resuelve acerca de la interpretación de un precepto invocado en la demanda de nulidad, sino sólo determina la aplicación de éste, dicho recurso debe desecharse, por no darse los supuestos requeridos para su procedencia, toda vez que la interpretación de una norma legal, ocurre cuando su texto no es suficientemente claro y admite inquirir su contenido gramatical y jurídico y entonces, el juzgador busca o emplea palabras semejantes que se equiparen a la situación no prevista en la ley, o amplía su contenido para dar un significado no pensado ni pretendido por el legislador; es decir, desentraña o hace la reconstrucción de su espíritu, pensamiento y voluntad para obtener los motivos predominantes que originaron la norma, los fines a que tiende y, así, determinar el alcance y significado de las expresiones que integran su texto.*[220]

La hermenéutica es una forma de pensamiento profundo, la hermenéutica jurídica se distingue por buscar el sentido de las normas en la aplicación de situaciones particulares.

Los métodos de interpretación nos dan un panorama respecto de la diversidad que tienen los ministros a su disposición para dar solución a las controversias, sin embargo, no se les capacita para formular este tipo de razonamientos, por lo que existe la posibilidad de deficiencias en la resolución de las mismas controversias.

Al realizar una investigación amplia de las resoluciones de la SCJN, en particular en controversias de la LAASSP, arrojan resultados importantes para la autoridad y gobernado, pues nos da luz sobre la forma de pensar de los ministros que resuelven de acuerdo a su época y a la suma de los intereses de los factores reales de poder.

Que el gobernado conozca los métodos interpretativos que usan los jueces, les da pauta para realizar su propia aplicación de normas y exigirla a las autoridades en tal sentido. Ahora bien, si el alcance que da un juez hoy a la ley no nos es conveniente, estamos habilitados para argumentar a la autoridad judicial sobre una nueva interpretación ya sea por *abandono de criterio* (deja de tener valor una jurisprudencia y se establece una con nuevo alcance*),* o por tener libertad para influir en la *ratio decidendi* (la razón para decidir o resolver).

---

[219] Época: Octava Época; Registro: 209,664; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación; Tomo XIV, Diciembre de 1994; Materia(s): Común; Tesis: IX. 2o. 46 K; Página: 326.

[220] Época: Novena Época; Registro: 199,415; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo V, Febrero de 1997; Materia(s): Administrativa; Tesis: IV.1o. J/1; Página: 665.

Ya que conocemos los diversos métodos interpretativos, en el capítulo final de la investigación se analizan conflictos judiciales en materia de aplicación de la LAASSP, exponiendo los casos concretos, su resolución y métodos utilizados, lo que capacita de manera superlativa al licitante a ejercer plenamente sus derechos y a la autoridad administrativa o judicial para respetárselos.

CAPÍTULO VI

RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN MATERIA DE ADQUISICIONES PÚBLICAS

S U M A R I O:

1. Nota introductoria. 2. Suprema Corte de Justicia de la Nación. A) Antecedentes. 3. Catálogo de Voces. 4. Desarrollo del Catálogo de Voces de la LAASSP. A) Acto administrativo. B) Acuerdos comerciales. Comunidad Europea. C) Adjudicación directa. D) Artículos de la Ley de la materia. E) Comunidad Europea. F) Contratos. G) Extranjeros participación de. En licitaciones. H) Fianzas. I) Garantías. J) Inhabilitación temporal de participantes en licitaciones públicas (art. 60 LAASSP). K) Juicio de amparo indirecto en materia de adquisiciones. L) Junta de aclaraciones. M) Legislatura local. N) Leyes. O) Libertad, garantía de. P) Licitación. Q) Licitante. R) Monopolios. S) Recursos. T) Sanción por infracciones a la LAASSP. U) Salarios Mínimos, Comisión Nacional de los. V) Tratados de libre comercio. W) Penas vs sanción administrativa. X) Precio conveniente.

1. Nota introductoria.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, desde su creación tuvo como eje rector definir sus atribuciones y hacer valer la jerarquía de las leyes, prevaleciendo la supremacía constitucional; para ello ha contado con diversos ministros a través de su historia, tales como: Andrés Quintana Roo, Benito Juárez, Ignacio L. Vallarta, Vicente Riva Palacios, Ezequiel Montes, Justo Sierra, Gabino Fraga Magaña, Felipe Tena Ramírez, Rafael Rojina Villegas, Mariano Azuela Rivera, María Cristina Salmorán de Tamayo, por la defensa de los derechos de las mujeres, Juan Díaz Romero, Jorge Carpizo McGregor, José de Jesús, Gudiño Pelayo, entre otros. Comprometidos a respetar los principios rectores de la máxima instancia de la función judicial, buscando no dejarse influenciar por corrientes políticas que atentan en contra de la independencia judicial. De los más recientes fueron el ministro José de Jesús Gudiño Pelayo considerado un ministro liberal por la despenalización del aborto en la Ciudad de México y Juan Díaz Romero que se opuso a la cadena perpetua, entre otros.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de su Segunda Sala, que atiende asuntos en materia administrativa, ha resuelto cientos de asuntos en materia de adquisiciones y licitaciones públicas, que interpretan el alcance de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en estos expedientes se forman *"engroses"*, es decir, la versión final de la sentencia que resuelve la controversia

después de pasar por discusión en pleno de los 5 ministros de la Sala. Una de las características que tienen las sentencias que emite la SCJN a través de su Segunda Sala en la materia, es que son sentencias firmes, de última instancia ya contienen el principio de *Certeza Jurídica* también conocidas como “cosa juzgada”, por el carácter del órgano jurisdiccional que la emite. La importancia que tiene para el sector de la población que participa en licitaciones públicas, es conocer de antemano, cuando tenga un conflicto por su participación en una licitación pública, el criterio que ha aplicado nuestro Máximo Tribunal en los últimos 16 años para resolver los conflictos entre los gobernados y la Administración Pública, para utilizar dicha ventaja a favor de sus intereses, y si el criterio no le es benéfico, buscar diversos argumentos hermenéuticos que no ha resuelto la SCJN, para así con un argumento diverso, buscar un resultado diferente, de allí la relevancia de la investigación.

Por ello a continuación se desarrolla, después del estudio de la totalidad de los asuntos resueltos en estos 16 años que han llegado a la Suprema Corte, relativos a la materia de adquisiciones y que generan un criterio jurisprudencial, sistematizado, un *Catálogo de Voces* que implica la reunión de asuntos y la resolución de los principales planteamientos realizados por los quejosos, quienes interponen el juicio de amparo, y que obliga a los tribunales inferiores, tribunales colegiados de circuito y juzgados de distrito a resolver asuntos similares en el mismo sentido. La *voz* aglutina varias quejas sobre una misma materia: extranjeros y licitaciones, libertad de trabajo e inhabilitación, entre otras.

2. Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Es el Máximo Tribunal Constitucional del país y cabeza del Poder Judicial de la Federación. Se destaca por:

- Defender las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
- Mantener el equilibrio entre los poderes.
- No hay autoridad que se encuentre por encima de ella o recurso legal contra sus resoluciones.

Su estructura básica es:

- Ministro presidente.
  - ♦ Secretaría General de Acuerdos.
  - ♦ Secretaría General de la Presidencia.
  - ♦ Secretaría Jurídica de la Presidencia.
  - ♦ Oficialía Mayor.

- ♦ Contraloría.
- Primera Sala (Penal y Civil) con cinco ministros.
- Segunda Sala (Administrativa y Laboral) con cinco ministros.

A) Antecedentes.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, tuvo sus antecedentes en el siglo XIX, donde diversos ministros marcaron la historia de la misma, recordemos que en esos años el país estaba en proceso de establecer las atribuciones y jerarquización de las leyes.

Los principios que se delegaron a la SCJN a causa de la independencia fueron los siguientes: igualdad jurídica, separación de poderes y supremacía constitucional.

En el periodo de 1825 a 1847 hubo 25 ministros de la Corte Suprema, como Francisco Antonio Tarrazo, que renunció, Miguel Domínguez duró seis años en su cargo hasta que murió en 1830, Ignacio Godoy, renunció a su cargo.

Otros más duraron más de 25 años, trascendiendo hasta después de 1847 como Manuel de la Peña y Peña siendo ministro de 1824 a 1850, dejando de ejercer su cargo debido a su muerte, Andrés Quintana Roo, con su aportación en el discurso de independencia de 1845, con una postura liberal al comparar la cultura española con la inglesa, Juan José Flores Alatorre fue ministro de 1824 a 1835 terminando el cargo jubilándose, entre otros. Otros ministros destacados fueron Pedro Vélez, Juan Nepomuceno Gómez Navarrete, José Joaquín Avilés y Quiroz, Antonio Méndez y Juan Bautista Morales.

Los ministros mencionados anteriormente eran humanistas y liberales gracias a la publicación de Tocqueville[221] . El sistema norteamericano influenció al sistema judicial y sentencias de la Suprema Corte, del año 1840 en adelante pues antes de esta fecha la influencia era nula. La excepción es Juan Nepomuceno con tendencias conservadoras y clasificado así por los estudiosos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

Los ministros de la Suprema aun teniendo sus preferencias políticas, no las reflejaban en la Suprema Corte, existen estudios del instituto de Investigaciones Jurídicas realizando una recopilación de algunos ministros y corrientes, recordando que en ese momento los presidentes de la SCJN también eran considerados para ser presidentes interinos, por sustitución constitucional.

En 1857 Benito Juárez fue presidente de la Suprema Corte con tendencias liberales, posteriormente José Ignacio Pavón. De los años de 1870 al 1900, estuvieron Ignacio Luis Vallarta, Vicente Riva Palacios y Ezequiel Montes, con tendencias liberales frente al

[221] Es un pensador, jurista, político e historiador francés, precursor de la sociología clásica y uno de los más importantes ideólogos del liberalismo.

conservador Sebastián Lerdo de Tejada. Posteriormente el *Vallartismo (liberal)* quería ser destruido por Manuel González, ex presidente de México y Porfirio Díaz. Justo Sierra con tendencia liberal, fue influido por las obras de Edouard de Laboulaye quien contribuyó al liberalismo conservador en el que vivía México.

Hay ministros destacados por épocas, como Salvador Urbina, Alfonso Guzmán Neyra, Octavio Marciano Trigo, Gabino Fraga Magaña, Hilario Medina, Felipe Tena Ramírez y Rafael Rojina Villegas, pertenecientes a la Quinta Época que duró cuarenta años desde 1917 a 1957. Cada uno de ellos dejó una aportación significativa, tal es el caso que resolvió la expropiación petrolera a cargo de Alfredo Iñárritu, Salomón González Hermilio López y Octavio Marciano.

La Sexta Época fue de 1957 a 1968 en la que destacan, María Cristina Salmorán de Tamayo, primera ministra que defendió los derechos de las mujeres, tras su jubilación fueron designadas Irma Cué Sarquis de Duarte, Clementina Gil Guillén de Lester, Olga María del Carmen Sánchez Cordero de García Villegas y Margarita Beatriz Luna Ramos.

En la Séptima Época, que abarca del año 1969 al 1988, se encontraron distinguidos personajes como; Carlos del Río Rodríguez, José Ramón Palacios Vargas, Agustín Téllez, Arturo Serrano Robles, Julio Sánchez Vargas, Guillermo Guzmán Orozco, Mariano Azuela Rivera y Juan Díaz Romero. Este último participó en asuntos como la despenalización del aborto, votó en contra del anatocismo, se opuso a la aplicación de la cadena perpetua, entre otros asuntos.

Ya en la Octava Época que abarca de 1988 a 1995, se desarrolla con destacados juristas como Jorge Carpizo McGregor, José Trinidad Lanz Cárdenas y Diego Valadés Ríos. La Novena Época de 1995 al 2011, permanecieron, pese a la disminución de ministros Mariano Azuela Güitrón y Díaz Romero, iniciaron José Vicente Aguinaco Alemán, Sergio Salvador Anguiano, Juventino V. Castro y Castro, Genaro David Góngora Pimentel, José de Jesús Gudiño Pelayo, Humberto Román Palacios, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Olga María del Carmen Sánchez Cordero de García Villegas y Juan N. Silva Meza.

La Novena y Décima épocas se vieron influidas por el fallecimiento de Román Palacios en 2004, por Gudiño Pelayo considerado un ministro liberal por la despenalización del aborto en la Ciudad de México en 2010 y Sergio Valls Hernández que aporto diversas publicaciones como el libro “Seguridad Social y Derecho”, entre otros, en 2014. Otros más se fueron al retiro; la plantilla quedó integrada por: José Fernando Franco González Salas, Luis María Aguilar Morales, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Eduardo Medina-Mora Icaza. En 2012, tomaron posesión Alberto Pérez Dayán y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. En 2015, se nombraron a Norma Lucía Piña Hernández y Javier Laynez Potisek, la primera funcionaria judicial, el segundo proveniente de la Administración Pública.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación en la actualidad está integra por: Luis María Aguilar Morales como el presidente de la SCJN, siendo defensor de los derechos humanos.

La Primera Sala formada por Norma Lucia Piña Hernández; José Ramón Cossío Díaz, involucrado en el caso de discriminación de los transexuales; Alfredo Gutiérrez Ortiz Maena, intervino en el caso de Florence Cassez; Jorge Mario Pardo Rebolledo; y Arturo Zaldivar Lelo de Larrea, ponente de criterios garantistas. La Segunda Sala constituida por Eduardo Tomás Medina Mora Izaca, José Fernando Franco González Salas, Javier Laynez Potisek, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán.

Los críticos han puesto en duda el nombramiento del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena por haber sido titular del Sistema de Administración Tributaria (SAT), al cual se le pretendía adscribir a la Segunda Sala, pero por el incontable número de impedimentos y excusas que se daban se prefirió enviarlo a las materias civil y penal. Un caso conocido a partir de su nombramiento fue la negativa de la SCJN a otorgar el amparo a la empresa sueca Ericsson para la devolución de 220 millones de pesos, por concepto de pago del impuesto sobre la renta. En este caso, el ministro se excusó por incurrir en conflicto de interés, sin embargo su ausencia redujo las posibilidades de anular una ley que para la mayoría de los ministros pudiera llegar a ser inconstitucional.

Los ministros denotaban desacuerdo en su momento con la designación de Eduardo Tomás Medina Mora Icaza por su trayectoria política y financiera, así como la de sus familiares que estaban involucrados en asuntos que generan conflicto de interés, por lo cual tendría que excusarse reiteradamente.

El ministro Javier Laynez Potisek, tuvo criticas fuertes de los senadores para su nombramiento expresando preocupación por su fidelidad hacia las personas con las que trabajó en el Poder Ejecutivo por 25 años y su posible tendencia a defender las reformas que elaboró en la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República algunas tan delicadas como el régimen temporal de ocupación de tierras que permitieron a transnacionales petroleras apropiarse de terrenos ejidales e indígenas.

En el año 2015, la primera sala era considerada *progresista*, por sus integrantes Arturo Zaldivar, Olga Sánchez Cordero y José Ramón Cossío que son identificados como liberales, mientras que Jorge Pardo Rebolledo es conservador y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena no tiene una tendencia clara.

3. Catálogo de voces.

El catálogo de voces implica un llamado a los principales conceptos que ha resuelto la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al atender los diversos argumentos que los litigantes han puesto a su consideración, al formular conceptos de violación –en el juicio de amparo- o de invalidez –en el juicio de controversia constitucional relativos, a fin de resolver los conflictos más frecuentes entre los participantes en las licitaciones públicas y la Administración Pública Federal. Para llegar a esta lista se estudió el total de jurisprudencias

y tesis aisladas relativas al tema de licitaciones públicas, adquisiciones y en algunos casos de obra pública pues de manera indirecta las aborda la propia ley por tratarse de conceptos comunes a las dos materias, durante los 16 años de vigencia de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público, publicada en el D.O.F. el 4 de enero del año 2000.

4. Desarrollo del Catálogo de Voces de la LAASSP.

Después de una lectura exhaustiva de las diversas sentencias dictadas por la SCJN, se concluye que las voces o llamados más trascendentes en materia de licitaciones públicas son las siguientes:

CATÁLOGO DE VOCES/ EXPEDIENTES.

A) Acto administrativo ..... C.T. 17/2005-PL, p. 302

B) Acuerdos comerciales A.R. 1725/2004, p. 309;
Comunidad europea ..... A.R. 1091/2007, p. 315

C) Adjudicación directa ..... C.C. 54/2003, p. 322

D) Artículos de la Ley de la materia

a) Artículo 59 de la LAASSP..... A.R. 89/2012, p. 326; A.R. 851/2006, p. 330
b) Artículo 60 de la LAASSP ..... A.R. 89/2012, p. 326; A.R. 316/2006, p. 337
c) Artículo 65 de la LAASSP..... A.R. 967/2006, p. 342
d) Artículo 69 de la LAOP..... C.T. 86/2007-PS, p. 344
e) Artículo 95 de la LAOP..... A.R. 967/2006, p. 342; A.R. 219/2001, p. 350

E) Comunidad Europea..... A.R. 1725/2004, p. 309

F) Contratos

a) Contrato administrativo ..... A.R.219/2001, p. 350; A.R. 159/2000, p. 353
A.R. 225/99, p. 363

b) Contrato de adquisiciones con entidades
de la Administración Pública Federal..... A.R. 460/2001, p. 371

c) Contrato de adquisiciones.
Naturaleza jurídica. Incumplimiento C.T. 86/2007-PS, p. 344; A.R. 851/2006, p. 330
cláusulas esenciales.....A.R. 219/2001, p. 350

d) Contrato de obra pública..... A.R. 225/99, p. 363

e) Gastos financieros por incumplimiento
contractual. Cláusulas esenciales, naturales
e incidentales .....C.T. 86/2007-PS, p. 344

f) Pacto comisorio expreso (rescisión)..... A.R. 159/2000, p. 353

g) Rescisión de..... C.T. 17/2005-PL, p. 302; A.R.159/2000, p. 353
A.R. 225/99, p. 363

G) Extranjeros participación de.
En licitaciones..... A.R. 1725/2004, p. 309; A.R. 1520/2004, p. 377

H) Fianzas..... C.T. 17/2005-PL, p. 302; C.T. 29/2005-PS, p. 379

a) Fianza de empresa (afianzadora)..... C.T. 17/2005-PL, p. 302

b) Exigibilidad de la fianza..... C.T. 17/2005-PL, p. 302

I) Garantías

a) De audiencia..... A. R. 626/2010, p. 383; A.R. 967/2006, p. 342
A.R. 587/2011, p. 385; A.R. 169/2001, p. 390
A.R.159/2000, p. 353
b) De equidad.....A.R. 967/2006, p. 342; A.R. 1725/2004, p. 309

c) De seguridad jurídica.....A.R. 587/2011, p. 385

J) Inhabilitación temporal de participantes
en licitaciones públicas (art. 60 LAASSP) ..... A.R. 89/2012, p. 326; C.T. 279/2010, p. 396
A.R. 1091/2007, p. 315; A.R. 984/2007, p. 398
A.R. 851/2006, p. 330; A.R. 1389/2006, p. 402
A.R. 316/2006, p. 337

K) Juicio de amparo indirecto en
materia de adquisiciones..... C.T. 162/2015, p. 405; C.T. 409/2010, p. 409

a) Jurisprudencia de la Quinta Época..... A.R. 159/2000, p. 353

b) Suspensión del acto reclamado ..... C.T. 162/2015, p. 405

L) Junta de aclaraciones..... A. R. 626/2010, p. 383; A.R. 967/2006, p. 342

M) Legislatura local ..... C.C. 54/2003, p. 322

N) Leyes

a) Congreso de la Unión ..... A.R. 489/2007, p. 412
b) Estatales ..... C.C. 54/2003, p. 322
c) Exposición de motivos (no conlleva inconstitucionalidad) .....A.R. 460/2001, p. 371
d) Garantía de legalidad ..... A.R. 169/2001, p. 390
e) Leyes privativas ..... A.R. 159/2000, p. 353

O) Libertad, garantía de.

a) De trabajo..... A.R. 316/2006, p. 337; A.R. 1725/2004, p. 309
A.R. 1520/2004, p. 377; A.R. 169/2001, p. 390
A.R. 1441/98, p. 419

b) De competencia económica ..... A.R. 489/2007, p. 412

P) Licitación..... A.R. 967/2006, p. 342; C.C. 54/2003, p. 322

a) Convocatoria a licitación ..... A.R. 1725/2004, p. 309
b) Licitación pública internacional ..... A.R. 1520/2004, p. 377; A.R. 1725/2004, p. 309
c) Naturaleza jurídica de la..... A.R. 219/2001, p. 350

Q) Licitante

a) Reasignación de licitante ganador primario..... A.R. 89/2012, p. 326

R) Monopolios ..... A.R. 984/2007, p. 398

S) Recursos

a) Recurso de inconformidad .....A.R. 219/2001, p. 350
b) Recurso de revisión.....C.T. 409/2010, p. 409

T) Sanción por infracciones a la LAASSP .....A.R. 851/2006, p. 330

a) Multas a licitantes..... A.R. 89/2012, p. 326; A.R. 984/2007, p. 398
A.R. 1389/2006, p. 402

b) Sanciones impugnadas (sub júdice)..... A.R. 1091/2007, p. 315

c) Pago de gastos financieros .....C.T. 86/2007-PS, p. 344

d) Sanción trascendente .....A.R. 851/2006, p. 330

U) Salarios Mínimos, Comisión Nacional de los ..... A.R. 489/2007, p. 412

V) Tratados de libre comercio..... A.R. 1725/2004, p. 309

W) Penas vs sanción administrativa ..... A.R. 851/2006, p. 330; A.R. 1441/98, p. 419

X) Precio conveniente ..... A.R. 587/2011, p. 385

A) ACTO ADMINISTRATIVO.

i) CONTRADICCIÓN DE TESIS: C.T. 17/2005-PL

ALCANCES DEL CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN.
FIANZA. Su carácter accesorio y de excusión. **FIANZA DE EMPRESA.** Afianzadoras reguladas en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas.

EXIGIBILIDAD DE LA FIANZA. En cualquier momento a menos que se tenga una suspensión ordenada por autoridad que revise un medio de impugnación.

RESCISIÓN DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. Constituye un acto administrativo y, como tal, participa de las características de este último**.**

C O N S I D E R A N D O:

SEXTO…

Consecuentemente, **el punto de contradicción se circunscribe a determinar, si en el caso de fianzas otorgadas para garantizar el cumplimiento de obligaciones en contratos de obra pública, donde además, la rescisión del contrato principal declarada en base al incumplimiento del obligado principal (fiado) es cuestionada por este último, a través de los medios impugnativos correspondientes, la exigibilidad de la fianza surge:**

1) en el momento en que la entidad de la Administración Pública declara el incumplimiento del fiado, a través de la rescisión del contrato, aunque ésta sea combatida por los medios de defensa atinentes; o,
2) hasta que la autoridad judicial o administrativa competente determine, por resolución firme, la validez de la rescisión administrativa, al confirmar la existencia del incumplimiento atribuido al fiado.

Con el propósito de determinar la tesis que al respecto debe imperar, es preciso analizar la naturaleza jurídica del contrato de fianza, los efectos de la rescisión administrativa y la normatividad que al respecto prevé nuestra legislación…

La fianza constituye una obligación accesoria, pues supone necesariamente otra obligación principal que aquélla garantiza; el fiador no se obliga como deudor principal con respecto al acreedor, sino sólo en previsión de que el deudor principal incumpla.

El carácter accesorio de la fianza deriva de lo dispuesto en el artículo 2794 ya transcrito y de los diversos 2797 y 2842, todos del Código Civil Federal. Estos últimos disponen, respectivamente, que "La fianza no puede existir sin una obligación válida" y que "La obligación del fiador se extingue al mismo tiempo que la del deudor y por las mismas causas que las demás obligaciones"…

FIANZA, EXIGIBILIDAD DE LA. DEBE ATENDERSE AL CARÁCTER ACCESORIO QUE GUARDA RESPECTO DE LA OBLIGACIÓN PRINCIPAL.

La naturaleza accesoria de la fianza acarrea diversas consecuencias importantes, como son: la extinción de la obligación principal conlleva la extinción de la fianza; la prescripción de la obligación principal hace que, al mismo tiempo, prescriba

la acción del acreedor contra el fiador; el carácter accesorio de la fianza determina también, que el fiador no pueda obligarse en términos más gravosos que el deudor principal.

Por lo que hace al beneficio de excusión que caracteriza a la fianza, el Diccionario de la Lengua Española citado define a la excusión como "el derecho o beneficio de los fiadores para no ser compelidos, por regla general, al pago mientras tenga bienes suficientes el obligado principal o preferente"… Este beneficio es conocido también como de orden, porque establece precisamente un orden para exigir el cumplimiento de las obligaciones, primero al deudor principal y, después, si éste no tiene bienes suficientes para el pago de la deuda, al fiador…

Para el objeto de estudio de la presente ejecutoria, el interés debe centrarse en la conocida como "fianza de empresa".

Esta clase de fianzas está regulada en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas y se puede definir como la garantía otorgada por una sociedad anónima, autorizada por el Gobierno para otorgar todo tipo de fianzas y cobrar por este servicio, la cual puede comercializar sus ventas por agentes comisionistas, operar bajo normas técnicas y apegadas a leyes y reglamentos; además que debe tener capacidad de asumir responsabilidades por su solvencia económica y su técnica operacional.

Los elementos contenidos en la definición se encuentran en la propia Ley Federal de Instituciones de Fianzas, según se observa en sus artículos 1°, 2°, 3°, 5°, 12 y 15, que en lo conducente son del tenor siguiente: …

Como se ve, la fianza regulada por la Ley Federal de Instituciones de Fianzas tiene características propias, distintas a las de la fianza civil.

Ahora bien, como los casos que los Tribunales Colegiados contendientes analizaron, están relacionados con fianzas otorgadas conforme a la Ley de Instituciones de Fianzas, para garantizar el cumplimiento de obligaciones contraídas en contratos de obra pública, resulta oportuno estudiar algunos aspectos y la naturaleza jurídica de este tipo de contratos.

En conformidad con lo dispuesto en el artículo 134 constitucional, que ordena que las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de bienes, prestaciones de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública; el Estado celebra contratos para ejecutar obras públicas, así como para adquirir, arrendar o reparar bienes inmuebles, de acuerdo a la regulación específica que al respecto determina el legislador en los ordenamientos correspondientes.

Tales contratos son de naturaleza administrativa, ya que el Estado interviene en

su función de persona de Derecho Público, soberana, en situación de supraordinación respecto del particular, con el propósito de satisfacer necesidades colectivas y proporcionar beneficios sociales. Debido a esta naturaleza, los contratos de obra pública presentan características distintas a los contratos celebrados entre particulares…

Conforme a los ordenamientos referidos, el contratista asume diversas obligaciones, entre ellas, principalmente la de ejecutar la obra objeto del contrato. Como consecuencia de esta obligación, se generan otras, a saber:

a) Garantizar el cumplimiento de la obligación principal (artículo 59, tercer párrafo, de la derogada Ley de Adquisiciones y Obras Públicas, y 48 de la Ley de Obras Públicas vigente).

b) Cumplir con los reglamentos de construcción (artículo 79 bis de la derogada Ley de Adquisiciones y Obras Públicas, y 67 de la Ley de Obras Públicas vigente).

c) Responder por los vicios ocultos (artículo 75 de la derogada Ley de Adquisiciones y Obras Públicas, y 66 de la Ley de Obras Públicas vigente).

No obstante la accesoriedad de la fianza, tal característica no provoca que las fianzas otorgadas en relación con contratos de obra pública participen de la misma naturaleza de la obligación principal, ya que esta última deriva de un contrato administrativo, mientras que la fianza es mercantil, por disposición expresa de la Ley de Instituciones de Fianzas en su artículo 2°, con la precisión de que a la fianza “de obra”, la propia ley la incluye en la que denomina “fianza administrativa”; por tanto, la relación entre el beneficiario y el fiado se rige por la ley de obras públicas correspondiente, mientras que la relación entre fiador y la entidad beneficiaria se rige por la Ley de Instituciones de Fianzas.

En efecto, la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, en su artículo 2°, dispone que las fianzas que dicho ordenamiento regula son de naturaleza mercantil. El precepto invocado es del tenor siguiente:…

Sin embargo, la propia ley de la materia, cuando se refiere en forma particular a las autorizaciones que otorga la Secretaría de Hacienda a las afianzadoras, en el artículo 5°, fracción III, inciso a), califica a las “de obra” como fianzas “administrativas”, en los siguientes términos: …

De ahí que, aun cuando las fianzas reguladas por la Ley Federal de Instituciones de Fianzas son actos mercantiles, la misma ley califica a las fianzas otorgadas para garantizar obligaciones en contratos de obra pública, como administrativas.

Ahora bien, en cuanto a la rescisión administrativa, la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas, derogada en lo relativo a la materia de obra pública, en sus artículos

40, 72, fracción II, y 73 señalaba:…

Por su parte, en términos similares, la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, actualmente vigente, publicada en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de enero de dos mil, en sus artículos 61, 62, fracción II, y 63 dispone lo siguiente:…

El texto transcrito de la ley vigente que rigió otros contratos de los cuales conocieron también los órganos Colegiados contendientes, al igual que lo ordenaba la derogada Ley de Adquisiciones y Obras Públicas, la dependencia o entidad de la Administración Pública están facultadas para declarar la rescisión por incumplimiento del contratista, la cual debe ser debidamente comunicada al contratista. La diferencia estriba en que ahora, la ley ordena que para que la dependencia o entidad puedan hacer efectivas las garantías, deben otorgar el finiquito que proceda por la rescisión del contrato…

Sin embargo, la rescisión a la cual las entidades de la Administración Pública están facultadas a realizar, en relación con los contratos de obra pública que celebren con particulares, constituye una forma de dar por terminado el contrato, exclusivamente por la decisión unilateral de la autoridad. Esa modalidad de la rescisión constituye un acto administrativo y, como tal, participa de las características de este último…

Esta Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido que los actos administrativos gozan de la presunción de validez o legitimidad. Así se observa en la jurisprudencia 2a./J. 45/98, publicada en la página doscientos noventa y nueve, Tomo VIII, agosto de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que es del tenor siguiente:

> ***DOCUMENTOS CERTIFICADOS OFRECIDOS POR EL TITULAR DE UNA DEPENDENCIA EN EL JUICIO LABORAL BUROCRÁTICO. LA RELACIÓN DE SUBORDINACIÓN QUE EXISTA ENTRE DICHO TITULAR Y EL EMISOR DE TALES DOCUMENTOS NO AFECTA LA EFICACIA PROBATORIA DE ÉSTOS…***

Ahora bien, la eficacia del acto administrativo cesa definitivamente, entre otros casos, cuando el acto se extingue naturalmente por su total cumplimento, o cuando se produce la anulación o revocación del acto…

Como se ve, el acto administrativo que se declare jurídicamente nulo será inválido y tal declaración de nulidad producirá efectos retroactivos, lo cual, por cierto, es acorde con lo dispuesto en el artículo 2226 del Código Civil Federal, de aplicación supletoria conforme al artículo 113 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas. Este precepto del código civil citado dispone, que la nulidad absoluta, por regla general, no impide que el acto produzca provisionalmente

sus efectos, los cuales serán destruidos retroactivamente cuando el juez pronuncie la nulidad.

Lo anterior permite concluir, que dada la presunción de legalidad y validez de que gozan los actos administrativos y en conformidad con lo dispuesto en los artículos 8º y 9º de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, aquellos actos son eficaces y exigibles, a partir de que surta efectos la notificación legalmente efectuada; asimismo, cuando tales actos son impugnados, en algunos casos sus efectos son susceptibles de suspenderse…

El panorama descrito refuerza la conclusión establecida en líneas precedentes, en el sentido de que, ante la presunción de legalidad y validez de la que gozan los actos administrativos, éstos son eficaces y exigibles, a partir de que surta efectos la notificación legalmente efectuada, aunque cuando son impugnados, en ocasiones su ejecución puede suspenderse, si se surten los presupuestos legales atinentes; asimismo, que ese tipo de actos son plenamente válidos, mientras no se declare su invalidez por autoridad administrativa o jurisdiccional, según sea el caso, y que, en caso de que lleguen a invalidarse, la determinación de nulidad produce efectos retroactivos, es decir, provoca que el estado de las situaciones jurídicas afectadas vuelvan al estado que guardaban antes la emisión del acto anulado…

***Sin embargo, en la presente contradicción lo que se discute es si en los casos en que el incumplimiento decretado en la indicada rescisión es cuestionado por el obligado principal, a través de los medios impugnativos correspondientes, que tiendan a invalidar la rescisión, mientras esta situación se encuentre sub júdice porque esté pendiente de emitirse la determinación firme que la resuelva, la fianza puede considerarse exigible o no (...*)**

Conforme a los artículos 40, 72, fracción II, y 73, de la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas (abrogada por el artículo segundo transitorio de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; y derogada por el artículo segundo transitorio de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en lo relativo a la materia de obra pública, ambos ordenamientos publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de enero de dos mil) y los diversos 61, 62 y 63 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, las entidades de la Administración Pública están facultadas para declarar la rescisión del contrato de obra pública, en caso de incumplimiento del contratista. Una vez que esa rescisión administrativa sea debidamente notificada, las entidades pueden exigir el pago de las garantías otorgadas, con la salvedad de que en el caso de la ley vigente, debe otorgarse previamente el finiquito respectivo.

Lo dispuesto en los artículos 8º, 9º y 10 de la Ley Federal de Procedimiento

Administrativo patentiza, que el acto administrativo legalmente emitido goza de la presunción de legalidad y validez *iuris tantum*, mientras no se determine lo contrario por autoridad competente. Conforme a esta presunción, todo acto administrativo que se impugna por vicios de validez surte plenamente sus efectos, mientras no se declare su invalidez.

En conformidad con lo previsto en los artículos 83 y 87 de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, al impugnar el acto correspondiente es posible que el recurrente obtenga la suspensión de sus efectos, siempre que se satisfagan los presupuestos que prevé la ley, entre ellos, que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público.

De igual forma, el artículo 208 bis del Código Fiscal de la Federación permite al particular, obtener la suspensión de la ejecución del acto impugnado, cuando se cumplan los requisitos que el propio ordenamiento prevé y no exista la posibilidad de que con la suspensión se puedan ocasionar perjuicios al interés general.

Ahora bien, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 6º. de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, la declaración de nulidad del acto administrativo produce efectos retroactivos…

De ahí que al ser la fianza un contrato accesorio, cuando el contrato principal de obra pública es rescindido por la entidad de la Administración Pública correspondiente, ante el incumplimiento del fiado, la fianza se vuelve también exigible, porque es una consecuencia de la rescisión, la cual, se reitera, surte plenamente sus efectos mientras no se declare su invalidez; sin que tal exigibilidad se vea afectada por el hecho de que aquella declaración de incumplimiento esté sub júdice, salvo que el impugnante obtenga la suspensión de la ejecución del acto rescisorio, porque en tal evento, por regla general el acto suspensivo abarcará todos los efectos de la rescisión.

Asimismo, en atención a la retroactividad de los efectos de la declaración de invalidez de la rescisión administrativa, la fiadora que (por no haberse suspendido los efectos de la rescisión) haya pagado determinado monto, con cargo a la fianza respecto de la cual se establezca, por resolución firme, que no existió el incumplimiento del obligado principal, tendrá derecho a la devolución de la erogación relativa…

No es obstáculo a lo anterior, lo dispuesto en la fracción VIII del artículo 94 y en el 118 bis, segundo párrafo, ambos preceptos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas…

Asimismo, toda vez que la anulación de la rescisión produce efectos retroactivos, la institución afianzadora que haya pagado determinada cantidad con cargo a la fianza relativa (en los casos en que el fiado no haya obtenido la suspensión de los efectos de

la rescisión) tendrá derecho a que la entidad de la Administración Pública beneficiaria le devuelva el pago efectuado.

En este orden de ideas, el criterio que debe prevalecer con el carácter de jurisprudencia, es el siguiente.

> ***FIANZAS OTORGADAS EN CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA. SON EXIGIBLES AUN CUANDO EN EL MEDIO IMPUGNATIVO CORRESPONDIENTE NO SE HAYA RECONOCIDO, POR RESOLUCIÓN FIRME, LA VALIDEZ DE LA RESCISIÓN DECRETADA POR INCUMPLIMIENTO DEL OBLIGADO PRINCIPAL, SALVO CUANDO EL DEUDOR PRINCIPAL OBTENGA LA SUSPENSIÓN O CUANDO EN LA PÓLIZA SE PACTE LO CONTRARIO Y LA LEY PERMITA CONVENIR SOBRE ESE ASPECTO…***

MÉTODOS DE INTERPRETACIÓN UTILIZADOS POR LA SCJN
FUNCIONAL. La fianza será exigible a menos que se haya ordenado suspensión por la autoridad que estudie un medio de impugnación. **SISTEMÁTICO.** Interpreta de manera conjunta los artículos 40, 72, fracción II, y 73, de la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas (abrogada por el artículo segundo transitorio de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; y derogada por el artículo segundo transitorio de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en lo relativo a la materia de obra pública, ambos ordenamientos publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de enero de dos mil) y los diversos 61, 62 y 63 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; artículos 8, 9 y 10 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; artículos 83 y 87 de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo; artículo 208 bis del Código Fiscal de la Federación; artículo 6 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; la fracción VIII del artículo 94 y en el 118 bis, segundo párrafo, ambos preceptos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas.

B) ACUERDOS COMERCIALES.
COMUNIDAD EUROPEA..... A.R. 1725/2004, p. 309**;** A.R. 1091/2007, p. 315

i) AMPARO EN REVISIÓN: A.R. 1725/2004.

ALCANCES DEL CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN
GARANTÍA DE EQUIDAD. No se viola por no dar trato igual a productos farmacéuticos provenientes de la Comunidad Europea y los de un país no perteneciente a ésta, ya que no se encuentran en igualdad de condiciones, porque

aquéllos se rigen por un específico tratado comercial, que tal vez no exista en el caso de los productos provenientes de otro país o que si existe probablemente tengan otras condiciones.

PARTICIPACIÓN DE EXTRANJEROS EN LICITACIONES PÚBLICAS INTERNACIONALES. La licitación pública internacional, no va dirigida a una persona o personas en específico, sino a una sociedad que forma parte primeramente de una nación y en segundo orden de un tratado de libre comercio de un grupo de países… al darse la libertad de que sean agentes económicos nacionales o extranjeros los que participen en las licitaciones públicas internacionales, no se limita de forma alguna a que lo hagan determinados sujetos dentro del comercio internacional respecto de productos específicos.

LIBERTAD DE TRABAJO. Art. 5º CPEUM. No se viola, al darse la libertad de que sean agentes económicos nacionales o extranjeros los que participen en las licitaciones públicas internacionales, no se limita de forma alguna a que lo hagan determinados sujetos dentro del comercio internacional respecto de productos específicos. Las disposiciones referidas establecen que podrá negarse la participación a extranjeros en licitaciones internacionales, cuando con el país del cual sean nacionales no se tenga celebrado un tratado y ese país no conceda un trato recíproco a los licitantes, proveedores, bienes o servicios mexicanos.

ACUERDOS COMERCIALES CON LA COMUNIDAD EUROPEA.

ARTÍCULO 25 DE LA DECISIÓN 2/2000 NO ES INCONSTITUCIONAL. ***El Estado a fin de cuidar el cumplimiento de las obligaciones adquiridas a través de un Tratado, está facultado para emitir las disposiciones necesarias que lleven al éxito de sus objetivos, ello para mejor proveer respecto de las normas jurídicas, lo que de ninguna manera puede traducirse en violación al artículo 134 Constitucional.***

La licitación pública internacional, no va dirigida a una persona o personas en específico, sino a una sociedad que forma parte primeramente de una nación y en segundo orden de un tratado de libre comercio de un grupo de países, por lo que el Estado para la adquisición de todo tipo de bienes y servicios, y contratación de obra se realizará por licitaciones públicas, en donde los participantes exhibirán sus proposiciones en sobre cerrado, que será abierto públicamente, quedando al arbitrio de éste fijar las reglas de los participantes, con el fin de asegurar las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, como son que el producto o servicio que sea objeto de la licitación, sea de origen nacional o de países con los que México tenga celebrado un tratado internacional de libre comercio, y que en el caso que nos ocupa, no existe

exclusividad alguna, ni por la condicionante que debe cumplir el producto o servicio objeto de licitar, ni mucho menos porque los productos o servicios no gozan de ninguna exclusividad otorgada ni por el gobierno nacional ni muchos menos por el gobierno extranjero, de tal forma que, al darse la libertad de que sean agentes económicos nacionales o extranjeros los que participen en las licitaciones públicas internacionales, no se limita de forma alguna a que lo hagan determinados sujetos dentro del comercio internacional respecto de productos específicos.

Por otra parte, refiere que la finalidad de las licitaciones públicas internacionales, no es otorgar a determinados agentes económicos la exclusividad sobre un bien o producto, sino que su finalidad, es establecer las reglas que deberán observar las dependencias y entidades sujetas para la celebración de las licitaciones públicas internacionales.

Por su parte, podemos señalar conforme a lo que establece el artículo 134 de la Constitución. Qué este precepto constitucional consagra los principios que deben regir el manejo de los recursos públicos del Gobierno Federal y del Distrito Federal, a saber, eficiencia, eficacia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

Asimismo, la norma suprema establece la regla general consistente en que las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que se realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes y, por último, establece como excepción que cuando las licitaciones no sean idóneas para asegurar dichas condiciones, las leyes establecerán las bases, procedimientos, reglas, requisitos y demás elementos para acreditar la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que también aseguren las mejores condiciones para el Estado.

El texto original del numeral constitucional en estudio establecía: ***Artículo 134.- (...)***

De la anterior transcripción se desprende que desde la redacción original del artículo 134 del Código Supremo se contemplaban las disposiciones respecto a la forma en la que el Estado debía contratar, esto es, a través de licitaciones públicas. El Constituyente tuvo la preocupación de llevar al más alto nivel normativo los principios de la actuación de los servidores públicos y, en general, del Estado, al contratar, estableciendo que se debería llevar a cabo por medio de subastas públicas.

En el dictamen de la Comisión de Constitución se destaca que la teleología del precepto es la de evitar los fraudes y favoritismos del antiguo régimen para así garantizar al Gobierno al contratar, las mejores condiciones posibles.

Como puede advertirse, las normas transcritas establecen que la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público es de orden público y tiene por objeto regular las acciones relativas a la planeación, programación, presupuestación, contratación, gasto y control de las adquisiciones y arrendamientos de bienes muebles y la prestación de servicios de cualquier naturaleza, que realicen las entidades y dependencias públicas que se precisan.

Las normas transcritas establecen que la aplicación de la Ley de la materia será sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados; que en los procedimientos de contratación de carácter internacional, las dependencias optarán, en igualdad de condiciones, por el empleo de los recursos humanos del país y por la adquisición y arrendamiento de bienes producidos en el país y que cuenten con por lo menos con un cincuenta por ciento de contenido nacional, los que, además, deberán contener, en la comparación económica de las propuestas, con un margen hasta del diez por ciento de preferencia en el precio respecto de los bienes de importación, conforme a las reglas que establezca la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, hoy Secretaria de Economía; que en la planeación de las adquisiciones, arrendamientos y servicios, las dependencias y entidades deberán ajustarse a los objetivos y prioridades del Plan Nacional de Desarrollo y de los programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales que correspondan, así como a las previsiones contenidas en sus programas anuales y a los objetivos, metas y previsiones de recursos establecidos en los presupuestos de egresos de la Federación o de las entidades respectivas; que las adquisiciones, arrendamientos y servicios se adjudicarán, por regla general, a través de licitaciones públicas, mediante convocatoria pública, para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

Específicamente, los preceptos de la ley secundaria establecen que las licitaciones públicas podrán ser nacionales o internacionales; que las primeras son aquellas en las que sólo pueden participar personas de nacionalidad mexicana y los bienes a adquirir sean producidos en el país y cuenten por lo menos con el cincuenta por ciento de contenido nacional; que en las licitaciones internacionales pueden participar tanto personas de nacionalidad mexicana como extranjera y los bienes a adquirir pueden ser de origen nacional o extranjero; que únicamente se harán licitaciones internacionales cuando resulte obligatorio conforme a lo establecido en los tratados; cuando, previa investigación de mercado, no exista oferta de proveedores nacionales respecto de bienes o servicios en cantidad y calidad requeridas, o sea

conveniente en términos de precios; cuando habiéndose realizado una licitación nacional, no se presente alguna propuesta o ninguna cumpla con los requisitos legales; y cuando así se estipule en las contrataciones financiadas con créditos externos otorgados al Gobierno Federal o con su aval.

Además, la norma precisa que tratándose de licitaciones internacionales, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación, determinará los casos en que los participantes deban manifestar ante la convocante que los precios que presentan en su propuesta económica no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminación de precios o subsidios.

Por último, ***las disposiciones referidas establecen que podrá negarse la participación a extranjeros en licitaciones internacionales, cuando con el país del cual sean nacionales no se tenga celebrado un tratado y ese país no conceda un trato recíproco a los licitantes, proveedores, bienes o servicios mexicanos.***

Por otro lado, ***la norma reclamada tampoco viola la garantía de libertad de profesión, industria, comercio o trabajo consagrada en el artículo 5° constitucional, pues como con anterioridad se razonó, esta libertad no se prevé de manera irrestricta e ilimitada, sino que se requiere que se trate de una actividad lícita y que no se afecten derechos de tercero ni los derechos de la sociedad en general, lo que se comprende en tanto que existe un valor que pondera y asegura el derecho positivo mexicano, que se traduce en la convivencia y bienestar social en todos sus aspectos, lo que exige que se proteja el interés de la sociedad por encima del interés particular, de suerte tal que cuando este último puede lesionar el del primero afectando dichos valores, en aras de ese interés mayor se limita o condiciona el individual cuando con éste puede afectar a aquél en una proporción mayor del beneficio que en lo particular obtendría un solo individuo.***

Ahora bien, al disponer la norma combatida que en las licitaciones públicas internacionales podrá negarse la participación a los extranjeros cuando con el país de que sean nacionales no se tenga celebrado tratado y ese país no conceda un trato recíproco a los licitantes, proveedores, bienes o servicios mexicanos, ***no se viola la garantía consagrada por el artículo 5° constitucional, en la medida que no se impide de manera absoluta el ejercicio de alguna profesión, industria, comercio o trabajo, sino que únicamente se autoriza a las dependencias y entidades convocantes de una licitación pública para negar la participación de los extranjeros en los supuestos referidos, lo que se justifica plenamente pues frente al interés meramente individual se encuentra el interés público que exige que el Estado busque las condiciones que más favorezcan al desarrollo económico de la nación.***

Por consiguiente, el artículo 25 de la decisión número 2/2000 del Consejo Conjunto del Acuerdo Interino sobre Comercio y cuestiones relacionadas con el Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos, por una parte y la Comunidad Europea, por otra, relativa al Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación entre los Estados Unidos Mexicanos y la Comunidad Europea, en específico lo referente al Anexo XI, Notas Generales, Sección Primera, Disposiciones Transitorias en concreto la marcada con el número 6, relativa a que no se aplicará dicho título hasta el primero de enero del octavo año a partir de la entrada en vigor, a las compras de medicamentos efectuadas por la Secretaría de Salud, el Instituto Mexicanos del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina que no estén actualmente patentados en México o cuyas patentes mexicanas hayan expirado. Nada en este párrafo menoscabará la protección de los derechos de propiedad intelectual, así como el ACUERDO INTERINO SOBRE COMERCIO Y CUESTIONES RELACIONADAS CON EL COMERCIO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, POR UNA PARTE, Y LA COMUNIDAD EUROPEA, no resultan violatorios de los artículos 5° y 134 Constitucional.

Como ha quedado precisado, el artículo 25 de la Decisión No. 2/2000 y el Acuerdo de Asociación antes referidos, al establecer una reserva o condición a los productos de la Comunidad Europea para participar en las licitaciones del IMSS, de que tengan patente vigente en México, proviene de un pacto celebrado entre dicha Comunidad y nuestro país, del que deriva que las relaciones comerciales entre sujetos de ambas partes contratantes, se rigen por lo dispuesto por éstas.

Ahora bien, aun cuando el artículo 134 constitucional no establezca la limitante que nos ocupa para participar en licitaciones públicas, lo cierto es que la misma válidamente puede establecerse en la ley.

Así las cosas, no se puede estimar que se viola la garantía de equidad por no dar trato igual a productos farmacéuticos provenientes de la Comunidad Europea y los de un país no perteneciente a ésta, ya que no se encuentran en igualdad de condiciones, porque aquéllos se rigen por un específico tratado comercial, que tal vez no exista en el caso de los productos provenientes de otro país o que si existe probablemente tengan otras condiciones.

MÉTODOS DE INTERPRETACIÓN UTILIZADOS POR LA SCJN
LÓGICO-FUNCIONAL. Los tratados internacionales producen tratos diferentes a relaciones comerciales entre países.

Las restricciones impuestas a extranjeros, no les limita el participar con otros sujetos en adquisiciones en el mundo. **GENÉTICO-TELEOLÓGICO.** Toma en cuenta la evolución de la norma, en este caso a partir del texto original del numeral constitucional en estudio (Art. 134 CPEUM), y su finalidad: ante el interés individual debe prevalecer el interés social.

ii) <u>AMPARO EN REVISIÓN: A.R. 1091/2007.</u>

ALCANCES DEL CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN
SANCIÓN DE INHABILITACIÓN TEMPORAL EN LA LAASSP CON RESOLUCIÓN IMPUGNADA (NO FIRME). Es legal y válida pues su ejecución inmediata es de interés general. **DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL ACTO ADMINISTRATIVO.**

C O N S I D E R A N D O:

CUARTO. Es **fundado pero inoperante** el agravio que la recurrente identifica con la letra “A”.

En efecto, es cierto que la Juez de Distrito no analizó correctamente el concepto de violación planteado respecto de la inconstitucionalidad del artículo 60, antepenúltimo párrafo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público, pues la quejosa adujo en su concepto de violación, en esencia, que el artículo reclamado vulnera los diversos preceptos 14 y 16 de la Constitución Federal porque permite la ejecución de la resolución administrativa emitida por la Secretaría de la Función Pública, en la que se impone una inhabilitación temporal, con independencia de que el gobernado tenga la posibilidad de impugnar aquella determinación a través de un medio de defensa; sin embargo, ***el A quo concluye que el numeral reclamado no es inconstitucional porque la resolución de inhabilitación deviene de un procedimiento en el que el gobernado tuvo la posibilidad de defensa, sin que haga declaración expresa del porqué el precepto reclamado es constitucional al permitir la ejecución inmediata de la resolución administrativa que concluye el procedimiento.***

Sin embargo, el agravio **es inoperante** en razón de que la imprecisión de la Juez de Distrito no conlleva a revocar la sentencia recurrida, pues no le asiste la razón a la quejosa en lo alegado en su concepto de violación.

Se afirma lo anterior, en atención a que la quejosa, ahora recurrente, en su concepto de violación refiere que el artículo 60, antepenúltimo párrafo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de julio de dos mil cinco, ***es violatorio de los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, en la medida de que faculta a la autoridad administrativa a ejecutar inmediatamente una resolución de inhabilitación para participar en procedimientos de contratación o celebrar contratos regulados por dicha Ley, con independencia de que no es una determinación firme…***

De conformidad con los diversos criterios emitidos por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, dicha garantía que en su expresión genérica prevén los artículos 14 y 16 antes transcritos, se respeta por las autoridades legislativas cuando las disposiciones de observancia general que crean, por un lado, generan suficiente certidumbre a los gobernados sobre las consecuencias jurídicas de su conducta y, por otro, tratándose de normas que confieren facultades a una autoridad, las acotan en la medida necesaria y razonable, en forma tal que se les impida actuar de manera arbitraria o caprichosa.

Asimismo, se ha sostenido la postura de que la garantía en comento no implica que en la ley se deba detallar minuciosamente el procedimiento regulador de las relaciones entabladas entre autoridades y particulares, cuando éste se encuentre definido de manera sencilla para evidenciar la forma en que debe hacerse valer el derecho por el particular, así como las facultades y obligaciones que le corresponden a la autoridad. Es suficiente con que el ordenamiento legal contenga los elementos mínimos para hacer valer el derecho del gobernado y para que, sobre este aspecto, la autoridad no incurra en arbitrariedades.

Al respecto, es aplicable la jurisprudencia número 2a./J. 144/2006, emitida por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 351, tomo XXIV, correspondiente al mes de octubre de 2006, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguiente:

“GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA. SUS ALCANCES…”

Por otro lado, dentro la garantía de seguridad jurídica se encuentra la denominada garantía de audiencia, misma que consiste en que previo al acto privativo la autoridad debe observar las formalidades esenciales del procedimiento, las que, en forma genérica, se traducen en:…

Al respecto es aplicable la jurisprudencia número P./J. 47/95, emitida por el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 133, tomo II, correspondiente al mes de diciembre de 1995, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes:

"FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO."

Establecido lo anterior, la quejosa aduce en su concepto de violación que el artículo 60, antepenúltimo párrafo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, vulnera la garantía de seguridad jurídica antes descrita, por ello para dar contestación a tal argumento es necesario transcribir el precepto reclamado, el cual estatuye:

Del artículo transcrito se advierte que ***el plazo para el cómputo de la inhabilitación impuesta por la Secretaría de la Función Pública se empezará a computar a partir de que se haga del conocimiento de las dependencias y entidades, a través de la publicación de tal determinación en el Diario Oficial de la Federación, es decir, existe la posibilidad de que tal determinación se ejecute inmediatamente después de haberse dictado, con independencia de que sea recurrible.***

Ahora bien, toda vez que ***la resolución que condena a la inhabilitación constituye un acto administrativo, previamente al estudio constitucional del precepto reclamado se debe analizar la aplicabilidad de la garantía de seguridad jurídica a los actos administrativos, pues éstos, en cuanto a su eficacia y exigibilidad, tienen características diversas a otros actos.***

Teóricamente, se ha concebido al acto administrativo como la declaración unilateral y concreta del órgano ejecutivo que produce efectos jurídicos directos e inmediatos; ***así por acto administrativo se entiende toda declaración jurídica unilateral y ejecutiva en virtud de la cual, la administración tiende a crear, reconocer, modificar o extinguir situaciones jurídicas concretas.***

A diferencia del derecho privado, el Estado impone unilateralmente obligaciones y cargas a los particulares; además, dispone de los medios efectivos para cumplirlas, al mismo tiempo que es un creador de derechos. La función administrativa se concreta en actos jurídicos, consistentes en una declaración de voluntad del ejercicio de la potestad pública, en beneficio del interés público.

Las características del acto administrativo son: a) es un acto jurídico; b) de derecho público; c) lo emite la Administración Pública, o algún otro órgano estatal en ejercicio de la función administrativa, y d) persigue, de manera directa o indirecta, mediata o inmediata, el interés público.

Es importante destacar que para que exista el acto administrativo, la declaración de voluntad debe provenir de un órgano formalmente administrativo, pues se trata de actos que integran la función administrativa, formal y materialmente considerada; ello,

porque si el acto, aunque sea materialmente administrativo, es generado por un órgano perteneciente a un poder distinto, ya sea legislativo o judicial, no entra en la clasificación de los actos administrativos y, por tanto, no será materia del derecho administrativo.

Los elementos descritos se observan en el artículo 3° de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, que es del tenor siguiente:

La entidad u órgano de la Administración Pública define derechos y crea obligaciones de forma unilateral y ejecutoria, a través del acto administrativo. Sus decisiones son inmediatamente eficaces y crean en el destinatario de ellas, una obligación de cumplimiento inmediato, todo ello con independencia de su validez intrínseca.

Es así, porque una característica del acto administrativo es que tiene la presunción de legalidad y validez *iuris tantum*, que opera hasta en tanto no se declare, por determinación firme de autoridad competente, la invalidez del acto.

Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido que los actos administrativos gozan de la presunción de validez o legitimidad, pues así se advierte de la jurisprudencia número 2a./J. 45/98, visible en la página 299, tomo VIII, agosto de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes:

> ***"DOCUMENTOS CERTIFICADOS OFRECIDOS POR EL TITULAR DE UNA DEPENDENCIA EN EL JUICIO LABORAL BUROCRÁTICO. LA RELACIÓN DE SUBORDINACIÓN QUE EXISTA ENTRE DICHO TITULAR Y EL EMISOR DE TALES DOCUMENTOS NO AFECTA LA EFICACIA PROBATORIA DE ÉSTOS…"***

En efecto, el acto administrativo se presume legítimo en la medida en que emana de una autoridad que también lo es. Por tanto, cuando queda evidenciado que procede de autoridad ilegítima, entonces desaparece la base de la presunción legal.

La presunción de legalidad y validez del acto administrativo se observa de lo dispuesto en el artículo 8° de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, que contiene el principio atinente a que todo acto administrativo que se impugna por un vicio de validez surte todos sus efectos, mientras no se declare su invalidez, dicho dispositivo es del tenor literal siguiente:…

Por su parte el artículo 10 de la citada Ley establece que determinados actos requieren de la aprobación de distintos órganos a los que se emitan para que tengan eficacia; sin embargo, tal requisito no afecta en absoluto a la perfección ni a la validez del acto inferior. El acto en sí mismo es perfecto y plenamente válido, pero no produce efectos, en tanto no sea aprobado por la autoridad superior. El citado artículo textualmente establece lo siguiente:…

La presunción de legalidad y validez del acto administrativo es la base de sustento de su ejecutoriedad; tal previsión normativa deviene indispensable pues, de no consignarse expresamente esa posibilidad, el ente administrativo no podrá ejecutarlo sino hasta después de haber obtenido resolución judicial favorable que se lo permita.

La suposición de que, por principio, todo acto administrativo se encuentra emitido conforme a Derecho, es una circunstancia que obedece, indudablemente, a un postulado de índole práctico, pues de no operar tal presunción, la actividad jurídica de la administración sería inicialmente no ejecutable, requiriéndose entonces de otro acto de autoridad que, en forma previa, validara el actuar público.

Así, la ejecutividad del acto administrativo deriva de su carácter público, esto es, se traduce en la posibilidad de que la Administración Pública misma provea a la realización de sus propias decisiones, siempre y cuando el orden jurídico le haya conferido expresamente tal atribución. Esta característica se constituye en una virtual potestad imperativa o de mando, con que se halla investido todo órgano administrativo público; su apoyo radica, básicamente, en el hecho de que en la acción ejecutiva busca satisfacer las necesidades de interés general de la colectividad, cuya realización no admite demora.

El acto administrativo produce efectos a partir del momento en que ha quedado formado y una vez que se cumplan ciertos requisitos que las leyes pueden establecer para que el propio acto sea exigible.

Por lo anterior se concluye que tratándose de actos administrativos, dada su naturaleza, no es necesario que éstos tengan el carácter de firmes para que se puedan ejecutar, sin que con ello se vulnere la garantía de audiencia.

Se expone tal aserto habida cuenta que la presunción de legalidad y validez del acto administrativo establecida en el artículo 8° de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, es la base de sustento de su ejecutividad, pues lleva inmersa la posibilidad de que la Administración Pública misma provea a la realización de sus propias decisiones, siempre y cuando el orden jurídico le haya conferido expresamente tal atribución, característica que se constituye en una potestad imperativa o de mando, con que se halla investido todo órgano administrativo público y cuyo apoyo radica, básicamente, en el hecho de que en la acción ejecutiva busca satisfacer las necesidades de interés general de la colectividad, cuya realización no admite demora.

En concordancia con estas consideraciones, el artículo 60, antepenúltimo párrafo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público al establecer que la resolución administrativa de inhabilitación será exigible una vez que sea notificada a las dependencias y entidades, a través de la publicación en el Diario Oficial de la Federación no vulnera la garantía de

seguridad jurídica, toda vez que dicha determinación, al ser un acto administrativo, goza de la presunción de que es legal y válida.

La conclusión antes anotada es acorde con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual estatuye:..

El precepto constitucional transcrito establece que los recursos económicos de que disponga el Gobierno Federal y el Gobierno del Distrito Federal, se administrarán con eficiencia, eficacia y honradez, para satisfacer los objetivos a los que están destinados; que las adquisiciones, arrendamientos y enajenación de todo tipo de bienes, se adjudicarán a través de licitaciones públicas, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes; y que cuando tales licitaciones no sean idóneas para esos efectos, las leyes establecerán las bases, procedimientos, reglas, requisitos y demás elementos para acreditar la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado.

De lo anterior puede concluirse, en principio, que en congruencia con el señalado artículo 134 constitucional, cuyo fin es el de asegurar que las adquisiciones, arrendamientos y enajenación de todo tipo de bienes, sean idóneas para conseguir las mejores condiciones posibles para el Estado, el legislador ordinario se encuentra obligado a establecer en las leyes las bases, procedimientos, reglas, requisitos y demás elementos para acreditar la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren dichas condiciones, por tanto, el precepto impugnado al permitir que la inhabilitación se ejecute de inmediato, cumple con el citado fin, pues asegura que las licitaciones se lleven en las mejores condiciones para el Estado, tutelando así el interés colectivo.

Lo anterior es así, pues debe tenerse en cuenta que en los procedimientos de contratación administrativa o en los contratos en sí, el particular tiene un simple interés económico y la Administración Pública tiene la representación del interés público que el contrato compromete o pueda comprometer, por lo que en ese tenor, esta última no puede subordinarse al primero, sino por el contrario, ese particular debe subordinarse a la segunda.

Así, la sanción de inhabilitación temporal prevista en la disposición reclamada tiende fundamentalmente a salvaguardar la honradez en los procedimientos de contratación, previniendo que en casos futuros los mismos participantes puedan infringir nuevamente el principio substancial de honradez que rige en los procedimientos de contratación, al tenor de lo dispuesto en el mencionado artículo 134 de la Constitución Federal; por ello, la ejecución

inmediata es de interés general, pues con tal actuar se pretende evitar que el Estado otorgue una licitación a favor de alguna persona, respecto de la cual existe sospecha sobre su honradez, en detrimento del interés colectivo que debe tutelar.

Finalmente, en el agravio identificado con la letra "B", la recurrente aduce que es incorrecta la conclusión del Juez de Distrito al determinar la constitucionalidad del precepto reclamado con base en la interpretación que realiza del artículo 9º de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo que, según refirió, permite la ejecución inmediata de los actos administrativos; sin embargo, contrario a lo afirmado por el A quo, la resolución por la cual se inhabilita a una persona, en términos del artículo reclamado, no encuadra en ningún supuesto previsto en el citado artículo 9º, puesto que no es una determinación en la que se otorgue algún beneficio, ni tampoco un acto de inspección, investigación o vigilancia conforme a las disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y otras leyes.

Así también, en el agravio que identifica con la letra "C", la recurrente aduce: **"…** ***C. Atendiendo a lo anterior, y en virtud de que se ha demostrado la ilegalidad de la sentencia recurrida al haberse resuelto que no resulta inconstitucional el antepenúltimo párrafo del artículo 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, igualmente resulta ilegal la sentencia recurrida, por cuanto el A quo concluye que*** *'…resulta inoperante, el argumento que aduce la impetrante de amparo En su segundo concepto de violación, en el que considera que el artículo 60 antepenúltimo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público transgredí en su perjuicio el artículo 133 de la Constitución Federal, pues el mismo ordena a todas las autoridades que si ninguna manera hagan y ejecuten leyes que estén en contraposición con la misma, en atención a que lo hace depender de las argumentaciones antes expuestas, al considerar que resulta trasgresor de los artículos 14 y 16 constitucionales'.****- - - Lo anterior, en la medida en que, como se ha demostrado en los apartados anteriores, la negativa del amparo respecto de la inconstitucionalidad del antepenúltimo párrafo del artículo 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público se basó en un indeficiente análisis de los conceptos de violación formulados por mi mandante.- - - Atendiendo a lo anterior, al ser ilegal la sentencia recurrida, procede revocarse y, en su lugar, dictarse otra en la que se conceda el amparo y la protección de la Justicia Federal a mi mandante"…*

MÉTODOS DE INTERPRETACIÓN UTILIZADOS POR LA SCJN
FUNCIONAL. No es necesario que los actos administrativos tengan el carácter de firmes para que se puedan ejecutar. Por lo autoridad administrativa en ejercicio de sus atribuciones legales. **TELEOLÓGICO.** Los recursos económicos de que disponga el Gobierno Federal y el Gobierno del Distrito Federal, se administrarán con eficiencia, eficacia y honradez.

C) ADJUDICACIÓN DIRECTA.

i) <u>CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL: C.C. 54/2003.</u>

ALCANCES DEL CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN.
NORMATIVIDAD ESTATAL RELATIVA A ADQUISICIONES Y REGLAMENTACIÓN CONSTITUCIONAL. La legislatura estatal esta atribuida para regular en la ley la manera de dar cumplimiento a los principios constitucionales de las licitaciones públicas. **ADJUDICACIÓN DIRECTA.** El que el Congreso haya establecido como supuesto de procedencia de las adjudicaciones directas, la previa autorización del Comité de Adquisiciones, no contraviene ninguna disposición constitucional, sino que garantiza la exacta aplicación de la Ley;

C O N S I D E R A N D O:

CONTROVERSIA.- Lo impugnado en la presente controversia constitucional es el Decreto “8484”, que contiene la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit, concretamente en lo que se refiere a sus artículos 34, fracción I, 39 y 51, fracción I…

Ahora bien, y relacionada con el artículo 1° de la Ley, de este numeral se desprende que la citada ley es de orden público y por ende de observancia obligatoria, entre otros, para los Poderes del Estado, como resulta ser el Ejecutivo local, por lo que en principio, por esa circunstancia, el Poder Ejecutivo actor cuenta con el interés legítimo para promover la presente controversia constitucional.

LA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE UN ACTO LEGISLATIVO.

Debe entenderse satisfecho cuando el Congreso que expida la Ley está constitucionalmente facultado para ello y las leyes que emite se refieren a relaciones sociales que reclaman ser jurídicamente reguladas.

Criterio que se contiene en la jurisprudencia ciento cuarenta y seis, publicada en la página ciento cuarenta y nueve, Tomo I, materia constitucional, Tribunal Pleno, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, mil novecientos diecisiete–mil novecientos noventa y cuatro, que dice:

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD LEGISLATIVA (…)

En el caso, la fundamentación de la expedición de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit, se encuentra debidamente satisfecha, atendiendo a que la facultad del Congreso de la Entidad para expedir la norma general impugnada deriva del artículo 47, fracción I, de la Constitución local que establece:

ARTÍCULO 47 (...)

EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD. Toda vez que el artículo 34, fracción I, de la Ley de Adquisiciones impugnada, excluye de poder participar en las licitaciones, a los servidores públicos que intervengan en cualquier etapa de contratación, a los superiores jerárquicos e inclusive al titular del Poder o Ente Público, con lo que además se les coarta su derecho de ser partícipes en la realización de una actividad lícita, contraviniendo lo dispuesto por el artículo 5° de la Constitución Federal.

Que el artículo 39 obliga a que las convocatorias de licitación se publiquen en un diario de circulación nacional, imponiendo además el deber, en su fracción III, de anotar si la licitación es estatal o nacional, de acuerdo a los montos que para tal efecto expida el Congreso de la Entidad, lo que agrava los costos de licitación y burocratiza el procedimiento, pues este se sujeta a la voluntad del Congreso del Estado, sin que tenga facultades para tal evento.

Que el artículo 51, fracción I, párrafo segundo, limita a los órganos usuarios, porque respecto a las adjudicaciones directas las sujeta a la autorización expresa del Comité de Adquisiciones.

A efecto de dar contestación a los argumentos anteriores, es necesario referenciar las siguientes disposiciones legales:

Los artículos 5° y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los preceptos anteriores se prevé, por una parte, que a ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode,

siendo lícitos, lo cual únicamente puede ser vedado en su ejercicio cuando se ataquen derechos de terceros o cuando se ofendan los derechos de la sociedad, y por otra, que nadie puede ser molestado en su familia, papeles, domicilio o posesiones, si no es por mandamiento escrito de autoridad competente fundado y motivado.

Ahora bien, en términos de lo dispuesto por la Constitución de la Entidad, cabe concluir que el artículo 34, fracción I, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit no resulta inconstitucional, por virtud de que, precisamente, con la exclusión como participantes en las licitaciones de quienes de manera directa o indirecta tienen que ver con los procedimientos de adquisición de bienes o servicios para el sector público, se cumple con los principios de imparcialidad y honradez que consagran los referidos preceptos constitucionales, pues si se admitiera su participación se podría fomentar discriminaciones o exclusivismo entre los participantes; además de que no se garantizaría que efectivamente, los recursos económicos del Estado se administren en las mejores condiciones posibles, en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

Por otra parte, el que el citado artículo 34, fracción I, de la Ley de Adquisiciones impugnada, impida que las personas físicas o morales que ahí se mencionan puedan participar en las licitaciones públicas que lleven a cabo los entes autorizados en la Entidad, de forma alguna transgrede el artículo 5° de la Constitución Federal, ya que no les coarta el derecho que tienen para dedicarse a la profesión, industria, comercio o trabajo que más les acomode, puesto que se trata de una disposición de orden público e interés social dirigida a las dependencias y organismos públicos de la Entidad, cuyo objeto es garantizar que la adquisición de bienes o servicios por parte del Estado se realice en las mejores condiciones posibles; además, las personas en mención pueden continuar efectuando el comercio de sus productos o servicios con personas físicas o morales particulares, e incluso con personas morales oficiales que no se ubiquen dentro del supuesto normativo, por lo que no se restringe, de manera absoluta, el ejercicio de la referida garantía constitucional, lo que lleva a reconocer la validez del artículo 34, fracción I, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit.

Conforme al anterior, las convocatorias de licitaciones públicas se deberán publicar en el Periódico Oficial de la Entidad, en los medios de comunicación del ente público respectivo y en un diario de circulación nacional y local según el caso, en la que se deberá indicar si la licitación es estatal o nacional, conforme a los montos que al efecto expida el Congreso del Estado.

En efecto, como se señaló, el artículo 133 de la Constitución local establece que los recursos económicos de que dispongan el Gobierno del Estado y sus Municipios y órganos paraestatales, se administrarán con eficiencia, eficacia y honradez para satisfacer los objetivos propios de su finalidad, que para la adquisición de bienes y

servicios que realice el Estado, ***se llevará a cabo a través de licitaciones públicas, pero cuando éstas no sean idóneas para garantizar las mejores condiciones al Estado, será en las leyes donde se establecerán las bases, procedimientos, reglas, requisitos y demás elementos para acreditar la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez en la aplicación de dichos recursos, es decir la excepción a la regla general que es la licitación pública, se contendrá en las leyes.***

Las adjudicaciones directas que lleven a cabo los entes públicos del Estado, deberán ser autorizadas por el Comité de Adquisiciones, aspecto que no se considera contrario a lo dispuesto por el artículo 133 de la Constitución Estatal, y por ende al 16 de la Constitución Federal, ya que, el Congreso Estatal está facultado, como se ha visto para establecer las bases, procedimientos, reglas, requisitos y demás elementos para acreditar la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado y sus Municipios.

Por tanto, el que el Congreso haya establecido como supuesto de procedencia de las adjudicaciones directas, la previa autorización del Comité de Adquisiciones, no contraviene ninguna disposición constitucional, sino que garantiza la exacta aplicación de la Ley; además, tampoco limita a los órganos usuarios a llevar a cabo las adjudicaciones correspondientes, dado que las podrán realizar una vez obtenida la autorización referida, pues no debe pasarse por alto que la correcta aplicación de los recursos económicos del Estado por ser una cuestión de orden público e interés social, está por encima de cualquier tiempo o prontitud con que pueda llevarse a cabo una adjudicación directa, por lo que debe reconocerse la validez del artículo 51, fracción I, de la Ley de Adquisiciones impugnado, en términos de este considerando, con la salvedad apuntada en el considerando sexto de esta resolución.

MÉTODO DE INTERPRETACIÓN UTILIZADO POR LA SCJN.
TELEOLÓGICO. A través de la ley local se busca dar cumplimiento a los principios constitucionales que deben regir en las licitaciones públicas tanto federales como locales y se garantiza el exacto cumplimiento de la ley, garantizando la finalidad que es la adquisición de bienes y servicios por el Estado en las mejores condiciones posibles.

D) ARTÍCULOS DE LA LEY DE LA MATERIA.

a) Artículo 59 de la LAASSP ..... A.R. 89/2012, p. 326; A.R. 851/2006, p. 330

i) AMPARO EN REVISIÓN: A.R. 89/2012.

ALCANCES DEL CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN
REASIGNACIÓN DE LICITANTE GANADOR DIVERSO PRIMARIO POR SU INCUMPLIMIENTO. NO ES UNA SANCIÓN. Es clara la inoperancia del concepto de violación, pues parte de una premisa falsa, También es inoperante lo argumentado en el sentido de que al no establecerse en la Constitución que se sancionará al licitante ganador se viola el derecho de seguridad jurídica previsto en sus artículos 14 y 16, pues se trata de una afirmación sin fundamento. **SANCIONES PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 59, Y 60 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.** Consistente en multa e inhabilitación temporal, tienen como objeto que los licitantes participen con seriedad en los procedimientos así como desalentar la práctica de conductas infractoras.

C O N S I D E R A N D O:

SÉPTIMO. Estudio del fondo del asunto. Son inoperantes e infundados los conceptos de violación, en virtud de las consideraciones siguientes:

Es inoperante lo alegado por la quejosa, en el sentido de que el artículo 46 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público viola el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que éste precepto constitucional no faculta a sancionar a quienes cumplan con las condiciones de la licitación, es decir, de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez.

En efecto, el artículo reclamado dice: Artículo 46…

De la transcripción anterior destaca que cuando el participante ganador de la licitación no firme el contrato por causas imputables al mismo, la dependencia o entidad, sin necesidad de un nuevo procedimiento, deberá adjudicar el contrato al participante que haya presentado la siguiente proposición solvente más baja, siempre que se cumpla con los requisitos ahí enumerados.

En este sentido, ***el artículo 46 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público no establece una sanción, pues se trata de una***

manera de cubrir la necesidad que tiene el Estado de satisfacer el objeto de la licitación, ya que resulta sumamente costoso implementar un proceso de licitación que al final por una causa no imputable a la dependencia o entidad no se obtuviera el resultado esperado, por lo que se establece que en ese caso deberá tomarse en cuenta la propuesta solvente más baja.

Por tanto, ***si de lo que se duele la quejosa es de la existencia de una sanción que contraviene el artículo 134 constitucional y el artículo reclamado no establece una sanción sino una forma de satisfacer la necesidad de cubrir el objeto de la licitación, es clara la inoperancia del concepto de violación, pues parte de una premisa falsa.***

También es inoperante lo argumentado en el sentido de que al no establecerse en la Constitución que se sancionará al licitante ganador se viola el derecho de seguridad jurídica previsto en sus artículos 14 y 16, pues se trata de una afirmación sin fundamento.

Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 81/2002, cuyo rubro dice:

> ***"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO."***[222]

En otra parte, asegura la quejosa que los artículos 59 y 60, fracción I, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público violan lo dispuesto por el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que éste precepto constitucional no faculta a sancionar a quienes cumplan con las condiciones de la licitación, es decir, de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez.

El artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dice:

> ***134. Los recursos económicos de que dispongan la Federación…***

Del precepto constitucional transcrito, se desprende, entre otras cosas, que las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza se adjudicarán a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que se abrirá en forma pública, con el propósito de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

---

[222] Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVI, Diciembre de 2002.

Cuando esas licitaciones no sean idóneas para asegurar dichas condiciones, las leyes establecerán las bases, procedimientos, reglas, requisitos y demás elementos para acreditar la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado.

En este sentido, los principios constitucionales que rigen a todo procedimiento licitatorio y que deben siempre procurarse son:

a) eficiencia,

b) eficacia,

c) economía,

d) imparcialidad y

e) honradez

De lo anterior se advierte que ***las sanciones previstas en el artículo 59, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, consistente en multa y la establecida en el artículo 60, fracción I de la ley en comento, relativa a inhabilitación temporal, tienen como objeto que los licitantes participen con seriedad en los procedimientos así como desalentar la práctica de conductas infractoras, lo que es acorde al mandato establecido en el artículo 134 constitucional.***

En efecto, por disposición constitucional las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza deben adjudicarse, por regla general, a través de licitaciones públicas a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, y cuando esas licitaciones no sean idóneas para asegurar dichas condiciones, son las leyes las que deben establecer las bases, procedimientos, reglas, requisitos y demás elementos para acreditar la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado.

En este sentido, el legislador federal al establecer en los artículos 59 y 60, fracción I, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, ***las sanciones consistentes en multa e inhabilitación temporal para participar en procedimientos de contratación o celebración de contratos regulados por esa Ley, cuando injustificadamente y por causas imputables al licitante ganador no formalice el contrato adjudicado, está implementando las reglas necesarias para acreditar la eficiencia, eficacia y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado.***

Ciertamente, con las sanciones referidas se establecen reglas para asegurar las mejores condiciones para el Estado, en específico, la **eficiencia** pues así se pretende evitar que participen en los procedimientos de licitación pública personas que impidan alcanzar los fines propuestos con el uso más racional posible de los medios existentes, esto es, a menor costo; la **eficacia** con el propósito de impedir que participen en esos procedimientos personas que no permitan obtener el fin práctico deseado; y finalmente, la **honradez** con el objeto de que participen exclusivamente personas que actúen con seriedad en los procedimientos, lo que implica una rectitud de ánimo e integridad en su obrar al cumplir con escrúpulos sus deberes profesionales.

Luego, no le asiste la razón a la recurrente cuando afirma que el artículo 134 constitucional no faculta al legislador a imponer sanciones al licitante ganador, pues ***los preceptos reclamados no están sancionando a ese licitante por haber ganado, sino por no haber formalizado el contrato, por una razón injustificada y por causas imputables a él, lo que obstaculiza, evidentemente, el poder obtener las mejores condiciones para el Estado en la adquisición, arrendamientos y servicios del sector público.***

Por tanto, los artículos 59 y 60, fracción I, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, no transgreden lo previsto en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues es correcto que el legislador, como ya se dijo, haya previsto la imposición de las sanciones en comento, ya que de esa forma se crean reglas para acreditar, entre otros principios, la eficiencia, eficacia y honradez que aseguran las mejores condiciones para el Estado, cuando las licitaciones no son idóneas para ello.

Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la tesis 1a. XCI/2006, emitida por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIII, Mayo de 2006, página: 266, que dice:

> ***ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY RELATIVA ES CONGRUENTE CON EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 7 DE JULIO DE 2005)…***

Tampoco le asiste la razón a la quejosa cuando afirma que al establecer el artículo 46 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público que si no se llegara a formalizar el contrato con el licitante ganador, se hará con el siguiente en la lista, no hay razón que justifique las sanciones previstas en los artículos 59 y 60, fracción I de la ley citada, de inhabilitación temporal y multa, cuando se asegura al Estado las mejores condiciones.

En efecto, las sanciones previstas en los artículos 59 y 60, fracción I, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, consistentes en multa e inhabilitación temporal para participar en procedimientos de contratación o celebrar contratos regulados por la citada Ley, ***sí es razonable, pues al no formalizarse el contrato con el licitante ganador y tenerse que llevar a cabo con el que quedó en segundo lugar, en el mejor de los casos, no se está cumpliendo con el objeto de la licitación pública, esto es, asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, pues se trata de la segunda mejor opción.***

Entonces, las sanciones en comento sí encuentran justificación, pues si el legislador las implementó fue como consecuencia de no haberse cumplido con el objeto de la licitación pública y con el fin de asegurar las mejores condiciones para el Estado en la adquisición, arrendamiento y contratación de servicios públicos, por lo que con el propósito de subsanar esa situación se crean reglas para asegurar que en lo futuro no participen personas que no puedan cumplir con esa formalidad y con ello, preservar los principios de eficiencia, eficacia y honradez que deben regir en todo procedimiento licitatorio.

En este orden de ideas, al resultar inoperantes e infundados los conceptos de violación, lo procedente es confirmar la sentencia recurrida en la materia de la revisión y negar el amparo y protección de la Justicia Federal por los artículos 46, 59 y 60, fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

MÉTODO DE INTERPRETACIÓN UTILIZADO POR LA SCJN
GENÉTICO-TELEOLÓGICO*.* Toma en cuenta la evolución del artículo 134 constitucional y los fines que busca la implantación de principios constitucionales para las licitaciones públicas, que buscan que el Estado asegurar al Estado obtenga las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

ii) <u>AMPARO EN REVISIÓN: A.R. 851/2006.</u>

ALCANCES DEL CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN
IMPOSICIÓN DE PENAS. Atribución exclusiva de la autoridad judicial. Dimana de un proceso penal o criminal y puede traer como consecuencia la privación coactiva de la libertad del individuo por un plazo que puede exceder las treinta y seis horas.

Las sanciones administrativas se relacionan con las infracciones de normas administrativas y son impuestas por autoridad distinta a la judicial, la que desarrolla un procedimiento, no así un juicio.

INHABILITACIÓN. No es exclusiva o propia de las penas, porque existen otros tipos de inhabilitaciones que sólo tienden a restringir o limitar la capacidad de los gobernados para ejercitar cargos públicos, derechos civiles o políticos o participar en actos administrativos.

SANCIÓN TRASCENDENTE. Los efectos de la sanción administrativa han sido sostenidos por la SCJN en el sentido de que si la sanción no tiene la calidad de pena en sí misma, no puede ser analizada de trascendental. No recaen en la esfera jurídica de persona distinta que no sea la del sancionado, es decir, no van más allá de ese ámbito, porque como se vio, responde a las necesidades públicas del Estado previstas en el artículo 134 de la Constitución Federal, y a los fines que persigue su propia función sancionadora.

C O N S I D E R A N D O:

TERCERO. De esa manera, resulta oportuno señalar que el artículo 21, párrafo primero, de la Constitución Federal, dispone:

Para fijar los alcances de la norma constitucional transcrita, es básico tener en cuenta lo que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó al resolver, en sesión del veinticuatro de abril de mil novecientos setenta y tres, el amparo en revisión 2209/70, promovido por **********:… De acuerdo con la anterior interpretación del artículo 21 de la Constitución Federal, ***las autoridades administrativas carecen de competencia para imponer penas a los particulares, dado que es una atribución exclusiva de la autoridad judicial,*** en comunión con otras disposiciones constitucionales, que establecen:

ARTÍCULOS 14, 16, 18, 19 y 20.

El enlace de las disposiciones supremas pone en evidencia que el concepto de ‘pena’ debe ser interpretado en sentido estricto, no como una sanción en general, porque para identificar si tiene esa calidad es menester ponderar la infracción, el procedimiento y el órgano que fue facultado legalmente para imponerla, dado que estos matices se desprenden expresamente de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, siendo tales características las que enseguida se precisan:

1. La pena deriva de una conducta delictiva o criminal de la persona y la infracción cometida se prevé exactamente como delito en una ley.

2. La pena dimana de un proceso penal o criminal.

3. La pena se impone exclusivamente por autoridad judicial y puede traer como normal consecuencia la privación coactiva de la libertad del individuo por un plazo que puede exceder de las treinta y seis horas.

En tal virtud, ***la propia Constitución Federal distingue entre las penas en sentido estricto y las sanciones administrativas, porque estas últimas tienen relación con la infracción al cumplimiento de las normas administrativas, y son impuestas por una autoridad que es distinta de la judicial, la que desarrolla un procedimiento, no así un juicio, para calificar la conducta ilícita del individuo, en tanto que lo relevante para determinar constitucionalmente si se trata de una pena o una sanción en general, no es atendiendo al tipo de la conducta, a la gravedad de la infracción, al bien jurídicamente tutelado o al fin de carácter represivo, preventivo o retributivo, aspectos que por cierto han sido ampliamente estudiados en la doctrina, sino la infracción, el juicio o procedimiento y el órgano que fue facultado legalmente para imponerla.***

Ahora bien, conviene precisar que el artículo 60, fracción IV, y antepenúltimo párrafo, de la mencionada Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, vigente a partir del ocho de julio de dos mil cinco, se aplicó a la empresa quejosa en la resolución dictada el veintiuno de septiembre de dos mil cinco, que en lo conducente, establece:

En ese sentido, es importante traer al contexto el contenido de la disposición reclamada en la demanda de garantías, así como los artículos relacionados con ella:

ARTÍCULOS 59 Y 60.

Las disposiciones legales transcritas prevén que la Secretaría de la Función Pública sancionará a los licitantes o proveedores que infrinjan las disposiciones relativas, con multa y inhabilitación para participar en procedimientos de contratación o celebrar contratos si proporcionaron información falsa o actuaron con dolo o mala fe en alguno de dichos actos, o en la presentación o desahogo de una audiencia de conciliación o inconformidad. La inhabilitación que es temporal se hace del conocimiento a las dependencias y entidades mediante la publicación de la circular respectiva en el Diario Oficial de la Federación.

De estas notas se advierte que la sanción de mérito deriva de proporcionar información falsa o dolosa dentro de un procedimiento de contratación como la licitación pública, adjudicación directa o la invitación a cuando menos tres personas, según el artículo 26 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que dice:

ARTÍCULO 26.

En relación con este tema, el tratadista Gabino Fraga precisa que ***"es un hecho indiscutible que el Estado en el desarrollo de sus actividades obtiene de los particulares prestaciones voluntarias de bienes o servicios personales; compra inmuebles y equipos para oficina y servicios, encarga a particulares la construcción de obras públicas, obtiene préstamos, conviene con empresas de transporte la conducción de correspondencia, bultos postales y mercancías; enajena y arrenda bienes propios etcétera, celebrando con estos motivos contratos con los particulares."*** (Derecho Administrativo, Editorial Porrúa, México, 1980, página 395).

Por su parte, Manuel María Diez destaca que el contrato de suministro es ***"…un contrato administrativo realizado entre el Estado y un particular en virtud del cual éste se encarga, por cuenta y riesgo y mediante una remuneración pagada por el ente contratante de suministrar a éste prestaciones mobiliarias previstas en el documento contractual***." (Contratos Administrativos, Editorial Bibliográfica Omeba, Argentina 1967, página 139).

En los procedimientos de contratación administrativa o en los contratos en sí, el particular tiene un simple interés económico y la Administración Pública tiene la representación del interés público que el contrato compromete o pueda comprometer, por tanto, esta última no puede subordinarse al primero, sino por el contrario, ese particular debe subordinarse a la segunda.

De esta subordinación nace para la Administración Pública su atribución de sancionar a los particulares, entre otros motivos, cuando en los procedimientos de contratación falten al principio de honradez previsto en el artículo 134 de la Constitución Federal, el que se edifica en la premisa de que los participantes o proveedores deben actuar con rectitud de ánimo, integridad al obrar o probidad en cada una de las etapas de ese procedimiento administrativo, lo cual no se cumple si proporcionan información falsa o actúan con dolo o mala fe.

Entonces, la sanción de inhabilitación temporal prevista en la disposición reclamada tiende fundamentalmente a salvaguardar la honradez en los procedimientos de contratación, previniendo que en casos futuros los mismos participantes o proveedores puedan infringir nuevamente el principio substancial de honradez que rige en los procedimientos de contratación, al tenor de lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Federal, que dice:

ARTÍCULO 134…

Además, para calificar esa conducta de los participantes en tales procedimientos de contratación, la Secretaría de la Función Pública desarrolla un procedimiento en términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, según el artículo 61, última

parte, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, como se advierte de las siguientes disposiciones:

ARTÍCULOS 72, 73, 74 y 78.

Las transcritas normas forman convicción de que la sanción de inhabilitación temporal para participar en los procedimientos de contratación o para celebrar cualquier contrato administrativo, no puede considerarse constitucionalmente como una pena en sentido estricto, porque deriva de la infracción al principio de honradez en los procedimientos de contratación, no por conductas delictivas de los participantes, aunado a que no la impone una autoridad judicial, sino un órgano administrativo denominado Secretaría de la Función Pública que no realiza una real función jurisdiccional; que para tal efecto desarrolla un procedimiento, no un juicio del orden penal.

Tal postura se corrobora si se tiene en cuenta que la figura de la inhabilitación, como someramente se advierte del artículo 78 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, puede preverse en los ordenamientos jurídicos como una sanción administrativa o como una pena en sí misma, ya que en su concepto se designa a un género dentro del cual se comprenden diversas especies.

El Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española establece que el vocablo inhabilitación significa pena o castigo que priva de algunos derechos o declarar a alguien inhábil o incapaz de obtener o ejercer cargos públicos, o de ejercer derechos civiles o políticos, esto es, imposibilitarlos para algo.

Este significado gramatical no es distinto de su connotación jurídica, tanto es así que en el Diccionario Jurídico Elemental de Guillermo Cabarellas, Edición corregida y aumentada, Argentina, 1994, se dice:

ACCIÓN O EFECTO DE INHABILITAR O INCAPACITAR.

De igual forma, es ilustrativa la tesis aislada LXI/96 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación…

INHABILITACIÓN COMO SANCIÓN ADMINISTRATIVA Y COMO PENA. ..

En consecuencia, ***la inhabilitación no es exclusiva o propia de las penas, porque existen otros tipos de inhabilitaciones que sólo tienden a restringir o limitar la capacidad de los gobernados para ejercitar cargos públicos, derechos civiles o políticos o participar en actos administrativos,*** por estimarse no aptos para ese fin, como sucede en la disposición reclamada que prevé una inhabilitación administrativa, que contrariamente a lo expuesto por la recurrente, no es reveladora de particularidades que la identifiquen con las penas en el ámbito criminal y, por ende, la Secretaría de la Función Pública, en los supuestos normativos en análisis, no impone

penas a los licitantes, participantes o proveedores de los procedimientos de contratación, sino sanciones administrativas.

Por otra parte, para dar respuesta al argumento identificado con el inciso **b)**, tiene capital importancia transcribir, en principio, el artículo 112, fracción II, de la Constitución Federal de 1824, el cual disponía:

ARTÍCULO 112… De lo anterior se desprende que por primera vez se facultó a una autoridad administrativa a imponer arresto a personas, y para tal efecto se impuso como limitación que dentro de las cuarenta y ocho siguientes se pusieran a disposición del juez competente. ***A diferencia de dicha disposición, el artículo 21 de la Constitución Federal de 1857 previó con mayor claridad la competencia de las autoridades administrativas para imponer sanciones, ya que decía:***

"ARTÍCULO 21. …"

La anterior transcripción revela que se facultó a la autoridad política o administrativa para imponer 'sólo' como sanciones la multa y la reclusión en los términos indicados, lo que significaba, de acuerdo con su interpretación literal, que no podían imponer otro tipo de sanciones administrativas, siendo que el vocablo 'sólo' al promulgarse la Constitución Federal de 1917, se cambió por el de 'únicamente', al señalar el artículo 21 originalmente aprobado por el Congreso Constituyente, lo siguiente: "ARTÍCULO 21. …"

La circunstancia de que el artículo transcrito establezca que el castigo de las infracciones administrativas 'únicamente' podrá consistir en multa o arresto, no significa una limitación al legislador ordinario para establecer otro tipo de sanciones, porque esa redacción, como se vio, deriva de la prevista en el mismo artículo 21 de la Constitución Federal de 1857; sin embargo, el espíritu del Congreso Constituyente de 1916, no fue acotar las sanciones que podían imponer las autoridades administrativas a los particulares, antes bien, en diversos documentos legislativos se reconoce que la multa o el arresto no son las únicas sanciones que pueden llegar a actualizarse en el ámbito legal, pues en el mensaje y proyecto de Constitución de Venustiano Carranza del primero de diciembre de 1916, se estableció:"…"

Por su parte, en el dictamen leído en la 27ª sesión ordinaria del Congreso Constituyente del dos de enero de 1917, se dijo: "…"

Cabe aclarar que se presentó un nuevo dictamen en la 39ª sesión ordinaria del Congreso Constituyente del doce de enero de 1917, pero no implica que se haya cambiado la postura del primero en relación con el reconocimiento de que se podían imponer otro tipo de sanciones administrativas que no fueran la multa o arresto, ya que por su transcendencia dineraria o personal de este tipo de sanciones, el Poder

Constituyente puso especial énfasis en prever limitaciones en su aplicación, pero no en el sentido de que fueran las únicas.

Bajo esa óptica jurídica, resulta innegable que la redacción del artículo 21 de la actual Constitución General de la República, no debe interpretarse en el sentido de que prevé una limitación a la autoridad administrativa para imponer 'sólo' las sanciones de multa o arresto, ya que en comunión con el espíritu del Congreso Constituyente, el legislador ordinario puede establecer en la esfera administrativa otro tipo de sanciones, como la prevista en el artículo reclamado consistente en la inhabilitación temporal para participar en procedimientos de contratación o en la celebración de contratos, tanto es así, que en el artículo 73, fracción XXI, constitucional, se establece, sin restricción, la facultad del Congreso de la Unión para legislar sobre las faltas contra la Federación y fijar los castigos que por ellas deben imponerse, como lo sostuvo el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia, al resolver en sesión del quince de abril de mil novecientos noventa y siete, el amparo en revisión 164/95, que en lo conducente, dispone:"…"

En ese contexto, el artículo 60, fracción IV, y antepenúltimo párrafo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, vigente a partir del ocho de julio de dos mil cinco, no viola el artículo 21, párrafo primero, de la Constitución Federal.

Por otro lado, debe decirse que los argumentos sintetizados en los incisos **d)** y **e)**, son jurídicamente ineficaces para revocar la sentencia recurrida, porque si la disposición reclamada no regula una pena en sí misma, sino una sanción administrativa, no pueden aplicársele las prevenciones del artículo 22, párrafo primero, de la Constitución Federal, que dispone: "ARTÍCULO 22.

En tales condiciones, es evidente que no pueden prosperar los argumentos en estudio, porque esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que si la sanción no tiene la calidad de pena en sí misma, no puede ser analizada de trascendental, en las tesis aisladas que llevan por rubro, texto y datos de identificación, los siguientes:

> ***PENA TRASCENDENTAL… FICHAS SIGNALÉTICAS, FORMACIÓN DE. IDENTIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE PROCESADOS…***
> ***MONEDA EXTRANJERA. LOS ARTÍCULOS 8o., 9o. Y 4o. TRANSITORIO DE LA LEY MONETARIA, QUE REGULAN LA FORMA EN QUE SE DEBEN LIQUIDAR EN EL TERRITORIO NACIONAL LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS EN AQUÉLLA, NO VIOLAN EL ARTÍCULO 22 CONSTITUCIONAL.***
> ***AGENTE ADUANAL. LA CANCELACIÓN DE SU PATENTE NO CONSTITUYE UNA PENA EN SENTIDO ESTRICTO, POR LO QUE NO PUEDE CALIFICARSE A LA LUZ DEL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL (...)***

Por estas razones, la sanción de inhabilitación temporal para participar en procedimientos de contratación o celebrar contratos previstos en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, no puede ser estimada trascendental, máxime que el fin de su publicación en el Diario Oficial de la Federación es que las dependencias o entidades tengan conocimiento directo de que los licitantes o proveedores no podrán participar en próximos procedimientos de contratación debido a la sanción impuesta, pero no busca hacer pública la conducta ilícita de las personas, como lo expone la quejosa recurrente, situación que pone de relieve que los efectos de dicha sanción administrativa no recaen en la esfera jurídica de persona distinta que no sea la del sancionado, es decir, no van más allá de ese ámbito, porque como se vio, responde a las necesidades públicas del Estado previstas en el artículo 134 de la Constitución Federal, y a los fines que persigue su propia función sancionadora.

MÉTODOS DE INTERPRETACIÓN UTILIZADOS POR LA SCJN
GENÉTICO-TELEOLÓGICO. Estudia el artículo 21 de la CPEUM desde su evolución en la Constitución de 1857 hasta su actual redacción. **LÓGICO.** El fin de la publicación en el Diario Oficial de la Federación de licitantes inhabilitados, es que las dependencias o entidades tengan conocimiento directo de que los licitantes o proveedores no podrán participar en próximos procedimientos de contratación debido a la sanción impuesta, pero no busca hacer pública la conducta ilícita de las personas, y definitivamente no recaen en la esfera jurídica de persona distinta que no sea la del sancionado por lo que no es sanción inusitada.

b) Artículo 60 de la LAASSP ..... A.R. 89/2012, p. 326; A.R. 316/2006, p. 337

i) AMPARO EN REVISIÓN: A.R. 316/2006.

ALCANCES DEL CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN
LIBERTAD DE TRABAJO. Es inexacto que el citado artículo 60 de la ley de adquisiciones impugnada, transgreda el artículo 5° de la Constitución Federal, ya que no les coarta el derecho que tienen para dedicarse a la profesión, industria, comercio o trabajo que más les acomode.

La libertad de profesión, industria, comercio o trabajo no se prevé de manera irrestricta e ilimitada, sino que se condiciona a la satisfacción de

determinados presupuestos fundamentales, a saber: a) que no se trate de una actividad ilícita, b) que no se afecten derechos de terceros y c) que no se afecten derechos de la sociedad en general.

La restricción relativa que impone el artículo impugnado, encuentra su justificación en **evitar que se ofendan derechos de la sociedad,** en términos del artículo 5º constitucional y por otra parte, establecer reglas para procurar que las adquisiciones, arrendamientos y enajenación de todo tipo de bienes, que se adjudiquen a través de licitaciones públicas, sean idóneas para asegurar al Estado las mejores condiciones posibles.

1. GARANTÍA DE AUDIENCIA. Tratándose de la impugnación de los actos de autoridad emitidos por la Administración Pública Federal centralizada, así como por organismos descentralizados de la Administración Pública Federal paraestatal, respecto a sus actos de autoridad, a los servicios que el Estado preste de manera exclusiva, y a los contratos que los particulares sólo puedan celebrar con el mismo, la propia Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en su artículo 11, nos remite a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, en lo no previsto por la normatividad citada en primer término.

El artículo 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, establece una sanción consistente en que se inhabilite temporalmente a los particulares a participar en procedimientos de contratación o celebración de contratos regulados por la ley impugnada, sin que se dé la posibilidad a los particulares a defenderse, resulta violatorio a la garantía de audiencia a que se refiere el artículo 14 constitucional.

En las relatadas condiciones, es evidente que el artículo 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, no es violatorio de la garantía de audiencia.

2. LA CONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 60 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. El artículo 60 de LAASSP, dicho precepto impide a los particulares dedicarse a la industria o profesión que mejor les parezca, en el momento que la autoridad administrativa lo decida, debe decirse que dicho planteamiento resulta infundado, toda vez que la Juzgadora Federal sí atendió dicho planteamiento, como se verá a continuación.

La libertad de profesión, industria, comercio o trabajo no se prevé de manera irrestricta e ilimitada, sino que se condiciona a la satisfacción de determinados presupuestos fundamentales, a saber: a) que no se trate de una actividad ilícita, b) que no se afecten derechos de terceros y c) que no se afecten derechos de la sociedad en general.

La libertad de industria, profesión, comercio o trabajo, no es irrestricta y su ejercicio debe darse sin perjuicio de la sujeción a las diversas disposiciones que dicten las autoridades legislativas para reglamentar su realización y proteger el interés público, por lo que concluyó que el artículo 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, no resulta inconstitucional, en virtud de que al sancionar a los licitantes que proporcionen información falsa en la celebración del contrato o durante su vigencia, se cumple con los principios que consagra el referido precepto constitucional, pues si se permitiera la participación de la quejosa y su actitud pasara inadvertida, no se garantizaría que efectivamente los recursos económicos del Estado se administren en las mejores condiciones posibles, además de que se pasaría por alto el que los particulares incumplieran con las obligaciones que tienen frente al Estado.

Es inexacto que el citado artículo 60 de la Ley de Adquisiciones impugnada, transgreda el artículo 5° de la Constitución Federal, ya que no les coarta el derecho que tienen para dedicarse a la profesión, industria, comercio o trabajo que más les acomode, puesto que se trata de una disposición de orden público e interés social dirigida a las dependencias y organismos públicos federales, cuyo objeto es garantizar que la adquisición de bienes o servicios por parte del Estado se realice en las mejores condiciones posibles, además se dijo que las personas en mención, pueden continuar efectuando el comercio de sus productos o servicios con personas físicas o morales particulares, e incluso con personas morales oficiales que no se ubiquen dentro del supuesto normativo, por lo que no se restringe, de manera absoluta, el ejercicio de la referida garantía constitucional, lo que lleva a reconocer la legalidad del artículo 60, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Se plantea que viola el artículo 5º constitucional, ya que ***se sanciona al particular sin que tenga derecho a defender sus intereses y que aún cuando la ley permita acudir a distintos medios de defensa, la sanción no se suspende por la interposición del medio de defensa, sino que el particular deberá interponer el incidente respectivo.***

En el caso del artículo 60 de la LAASSP, la sanción surte efectos desde luego, sin otorgar al particular un plazo para la interposición del juicio o recurso correspondiente, e incluso, podrá encontrarse en litigio la procedencia de la sanción y ésta estará corriendo para que de tal manera, cuando se resuelva el medio de defensa, la sanción habrá surtido efecto, causando perjuicios de imposible reparación, sin que en la ley se prevea la manera de resarcir los daños causados.

La garantía de libertad de trabajo consiste en la libertad que tiene una persona de dedicarse a la profesión, industria, comercio o trabajo que más le acomode, siendo

lícitos, el propio dispositivo de la Carta Fundamental, establece los casos y condiciones en que dicha libertad puede ser restringida.

En efecto, si bien el principio constitucional garantiza el ejercicio de las actividades indicadas, no puede estimarse que ***la libertad de trabajo sea ilimitada, pues el propio texto del precepto constitucional en cita, dispone con claridad que el ejercicio de la citada garantía, sólo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero, o por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad.***

En virtud de lo anterior, no puede afirmarse que la regulación de las actividades constituya una transgresión a la libertad ocupacional, pues en términos del propio texto constitucional, existe esa posibilidad con el objeto de que el ejercicio ilimitado de la libertad de trabajo, no lesione el interés general y el de los propios particulares.

Así, tenemos que la LAASSP, en su artículo 60 dispone la inhabilitación temporal para participar en procedimientos de contratación o celebrar contratos regulados por la propia ley en cita, a los licitantes que injustificadamente y por causas imputables a los mismos no formalicen el contrato adjudicado por la convocante; a los proveedores que respecto de dos o más dependencias o entidades y por causas imputables a los propios proveedores mismos, dichas dependencias o entidades convocantes les hubiere rescindido administrativamente más de un contrato, dentro de un lapso de dos años calendario contados a partir de la notificación de la primera rescisión; los proveedores que no cumplan con sus obligaciones contractuales por causas imputables a ellos y que, como consecuencia, causen daños o perjuicios graves a la dependencia o entidad de que se trate; así como, aquéllos que entreguen bienes con especificaciones distintas de las convenidas y a los licitantes o proveedores que proporcionen información falsa o actúen con dolo o mala fe en algún procedimiento de contratación, en la celebración del contrato o durante su vigencia, o bien, en la presentación o desahogo de una queja en una audiencia de conciliación o de una inconformidad.

Por otra parte, debe decirse que la restricción relativa que impone el artículo impugnado, encuentra su justificación en **evitar que se ofendan derechos de la sociedad,** en términos del artículo 5º constitucional y por otra parte, establecer reglas para procurar que las adquisiciones, arrendamientos y enajenación de todo tipo de bienes, que se adjudiquen a través de licitaciones públicas, sean idóneas para asegurar al Estado las mejores condiciones posibles.

Por ello, la inhabilitación a que se refiere el artículo combatido, se encuentra plenamente justificada, porque no sólo resulta congruente con el texto del

artículo 5º constitucional, que como se vio, autoriza al legislador a imponer limitaciones a la garantía de libertad de trabajo, cuando se pretenda evitar que se ofendan los derechos de la sociedad, sino también resulta coherente con los términos del artículo 134 de la propia Constitución General de la República.

En ese sentido, en el artículo que se combate, el legislador determinó necesario inhabilitar temporalmente, para participar en procedimientos de contratación o celebrar contratos regulados por la propia ley en cita, a los licitantes que injustificadamente y por causas imputables a los mismos, no formalicen el contrato adjudicado por la convocante; a los proveedores que respecto de dos o más dependencias o entidades y por causas imputables a ellos, dichas dependencias o entidades convocantes les hubiere rescindido administrativamente más de un contrato, dentro de un lapso de dos años calendario contados a partir de la notificación de la primera rescisión; los proveedores que no cumplan con sus obligaciones ***contractuales por causas imputables a ellos y que, como consecuencia, causen daños o perjuicios graves a la dependencia o entidad de que se trate; así como, aquéllos que entreguen bienes con especificaciones distintas de las convenidas y a los licitantes o proveedores que proporcionen información falsa o actúen con dolo o mala fe en algún procedimiento de contratación, en la celebración del contrato o durante su vigencia, o bien, en la presentación o desahogo de una queja en una audiencia de conciliación o de una inconformidad, lo cual se reitera, se encuentra apegado a las disposiciones constitucionales.***

MÉTODOS DE INTERPRETACIÓN UTILIZADOS POR LA SCJN.
TELEOLÓGICO. La libertad de trabajo no es absoluta y tampoco lo es la prohibición de participar en licitaciones del Estado, en tanto los licitantes sancionados pueden continuar efectuando el comercio a otros consumidores, de igual forma protege el orden público y el interés social en preferencia a los particulares, se trata de evitar perjuicios a la sociedad con licitantes incumplidos. **SISTEMÁTICO.** Considera de manera integral la relación que existe entre los preceptos constitucionales y la LAASSP.

c) Artículo 65 de la LAASSP..... A.R. 967/2006, p. 342

i) AMPARO EN REVISIÓN: A.R. 967/2006.

ALCANCES DEL CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN.
LICITACIÓN PÚBLICA. No es contrato, sino un procedimiento administrativo preparatorio de la voluntad contractual. **GARANTÍA DE AUDIENCIA/FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO: ART. 65 DE LA LAASSP, FRACCIÓN I Y DEL PÁRRAFO OCTAVO, VIGENTE EN JULIO DE DOS MIL CINCO.** No puede sostenerse que con el otorgamiento de un plazo de diez días contados a partir de la celebración de la junta de aclaraciones para inconformarse se respeten las formalidades esenciales del procedimiento si se establece como presupuesto de procedencia la objeción fundada en el mismo momento en que ocurre el acto reclamado. Y, en consecuencia, como lo señaló el *A quo*, ***la Junta de Aclaraciones no puede ser el momento procesal oportuno para objetar los actos que se consideren ilegales.***

La licitación no es un contrato, ni tampoco un acto, sino un conjunto de actos, un procedimiento administrativo preparatorio de la voluntad contractual. Ese procedimiento administrativo está integrado por una diversidad de actos administrativos y simples actos de la Administración, como formas jurídicas preparatorias de la actividad administrativa contractual.

En esta parte, importa establecer cuáles son los derechos si es que asiste alguno a los particulares participantes en la licitación que no resultaron ganadores, pues si bien la administración no está obligada a efectuar la adjudicación a ninguno de los proponentes, aun cuando sus ofertas fueran admisibles, lo cierto es que ***todo aquel participante en una licitación adquiere el derecho no a la adjudicación, sino a la participación en una competencia justa; por tanto, jurídicamente el oferente tiene derecho subjetivo a participar en la comparación de ofertas, e interés legítimo en llegar a ser adjudicatario.***

En otro orden de ideas, se puede considerar al recurso administrativo como todo medio de defensa al alcance de los particulares para impugnar, ante la Administración Pública, los actos y resoluciones, por ella dictados en perjuicio de los propios particulares, por violación al ordenamiento aplicado o falta de aplicación de la disposición debida.

Para corroborar la naturaleza de recurso administrativo de la inconformidad prevista en el artículo 95 de la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas, precisa

reproducir su texto y el de diversos preceptos del mismo cuerpo legal que aduce el recurrente ***deben interpretarse de manera armónica, y otros más, que permiten desentrañar el punto a debate.***

El texto de los artículos 65 a 70 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público vigente establece el mismo recurso de inconformidad, aunque con algunas diferencias en su regulación tales como la determinación de los actos específicos dentro del procedimiento de licitación contra los que procede su interposición y los momentos a partir de los cuales debe contarse el plazo para su interposición; la posibilidad de presentarla a través de medios remotos de comunicación electrónica; la descentralización de funciones otorgando facultades a las Contralorías estatales y del Distrito Federal; la imposición de multas; la disminución de los plazos de investigación y resolución; la disminución de los plazos que las dependencias y entidades tienen para remitir información solicitada por la Secretaría de la Función Pública; la notificación a terceros que pudieran resultar afectados y el término para que manifiesten lo que a su interés convenga; plazos, fianza, procedencia y efectos de la suspensión; algunas variaciones en los efectos de la resolución respectiva; y la determinación de los medios de impugnación; todo lo anterior de la siguiente manera:

Procedimiento. En relación con las formalidades esenciales del procedimiento y la garantía de audiencia el artículo 14 constitucional establece… Si el procedimiento de inconformidad impide al particular defenderse contra el acto administrativo y fundar la ilegalidad de éste, entonces se aparta de los principios o requisitos que permiten el respeto a la garantía de audiencia.

El artículo 65 impugnado establece el derecho de los particulares a promover inconformidades en contra de la convocatoria, las bases de licitación y la junta de aclaraciones, y otorga un plazo para su presentación de diez días hábiles siguientes a la celebración de la junta de aclaraciones; sin embargo, también establece diversos requisitos o condiciones que el licitante debe cumplir para poder interponer dicho recurso que son: Adquirir las bases de licitación; Asistir a la junta de aclaraciones; Manifestar su objeción en dicha junta respecto de actos que presuntamente contravengan las disposiciones de la ley impugnada; Fundar su objeción en argumentos y razones jurídicas.

De esta manera, se otorga un plazo de diez días para interponer la inconformidad. ***Sin embargo, dicho plazo se hace nugatorio, tal como lo estableció el A quo, porque es en el momento mismo de la celebración de la junta de aclaraciones en que el licitante tendrá que objetar los actos que considere ilícitos dando los argumentos y razones jurídicas que funden su objeción, es decir, la oportunidad para imponerse del acto y preparar los elementos para sostener la ilegalidad de***

los actos impugnados se ciñe al momento en que se celebra la junta de aclaraciones en que el licitante tendrá que objetarla fundadamente.

Por lo tanto, no puede sostenerse que con el otorgamiento de un plazo de diez días contados a partir de la celebración de la junta de aclaraciones para inconformarse se respeten las formalidades esenciales del procedimiento si se establece como presupuesto de procedencia la objeción fundada en el mismo momento en que ocurre el acto reclamado. Y, en consecuencia, como lo señaló el A quo, la junta de aclaraciones no puede ser el momento procesal oportuno para objetar los actos que se consideren ilegales.

MÉTODOS DE INTERPRETACIÓN UTILIZADOS POR LA SCJN
SISTEMÁTICO. Interpreta de manera conjunta el texto de los artículos 65 a 70 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público vigente que establece el mismo recurso de inconformidad previsto en el artículo 95 de la LAOP (derogada). **FUNCIONAL.** A fin de dar oportunidad a una defensa adecuada se debe dar tiempo suficiente para esta, lo que no otorga el art. 65 de la LAASSP.

d) Artículo 69 de la LAOP..... C.T. 86/2007-PS, p. 344

i) CONTRADICCIÓN DE TESIS: C.T. 86/2007-PS.

ALCANCES DEL CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN
PAGO DE LOS GASTOS FINANCIEROS COMO CONSECUENCIA DE INCUMPLIMIENTOS CONTRACTUALES. Las partes no pueden eximir o renunciar a su cumplimiento ni modificar o alterar su contenido, ya sea por omisión o pacto expreso en el contrato de obra pública. **GASTOS FINANCIEROS.** Es procedente condenar al pago de los mismos si se acredita el incumplimiento de los pagos de estimaciones y ajustes de costos, aun cuando las partes no lo hayan pactado expresamente en el contrato de obra pública (interpretación del artículo 69 de la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas). **CONSECUENCIAS LEGALES DE INCUMPLIR CLÁUSULAS ESENCIALES, NATURALES E INCIDENTALES DEL CONTRATO.**

SILENCIO. En el derecho, el que calla, no otorga; el silencio no es ninguna forma de manifestación de la voluntad. El que guarda silencio simplemente se abstiene de manifestar su voluntad; no lo hace ni en forma expresa, ni en forma tácita, y el derecho no puede deducir consecuencias del simple silencio de las partes.

C O N S I D E R A N D O:

QUINTO. DETERMINACIÓN DEL CRITERIO QUE DEBE PREVALECER.

Con la finalidad de brindar mayor seguridad jurídica y determinar cuál es el criterio que debe prevalecer en el presente asunto, conviene transcribir los artículos **1º**, **13**, **61**, **68** y **69** de la **Ley de Adquisiciones y Obras Públicas**, que establecen:… De los preceptos legales antes transcritos se tiene por cierto lo siguiente:… Las **consecuencias legales** antes referidas son, en esencia, las siguientes: …

Como se dijo, en el presente asunto, únicamente nos enfocaremos a examinar lo siguiente: ¿qué ocurre cuando en los contratos de obra pública, se incumple con los pagos de estimaciones y ajustes de costos, y las partes no pactan expresamente en los mismos el pago de los gastos financieros como consecuencia de dicho incumplimiento?

En principio, los artículos **1796** y **1839** del **Código Civil Federal** –legislación supletoria de la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas–, prevén al respecto lo siguiente:

En este orden de ideas, puede afirmarse que las partes no sólo están obligadas al cumplimiento de las cláusulas que pacten expresamente en los contratos de obra pública, sino también a las que derivan de su propio régimen legal, es decir, la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas.

No obstante ello, surge la cuestión siguiente: ***¿puede válidamente afirmarse que el pago de gastos financieros constituye una cláusula que debe cumplirse conforme a la ley, aun cuando las partes no la hayan pactado de manera expresa en los contratos de obra pública?***

Para dar respuesta a la cuestión planteada, previamente debemos identificar cuáles son las ***cláusulas que deben cumplirse conforme a la ley, sin importar que las partes las pacten o no de manera expresa en los contratos respectivos, es decir, que no obstante el silencio de los contratantes, deban tenerse por puestas, ya sea por ser esenciales, o bien, consecuencia del propio ordenamiento legal.***

En términos generales, las cláusulas son las disposiciones que rigen un contrato, tratado, testamento o cualquier otro documento análogo, público o privado. La doctrina

ha distinguido tres clases de cláusulas en el contrato: esenciales, naturales y accidentales.

En esta resolución y dada la materia del presente asunto, sólo nos limitaremos a precisar lo relativo a las cláusulas esenciales y naturales de los contratos, por ser éstas las únicas que, aun ante el silencio de las partes, deben tenerse por puestas; no así las accidentales.

Las cláusulas esenciales son las que dan su calificación jurídica al acto que se celebra y sin las cuales no se puede concebir la existencia del contrato, o bien en su ausencia, el contrato tendrá una denominación jurídica diversa.[223] Estas cláusulas deben cumplirse por ser su propio régimen legal el que las determina, de modo que las plasmen o no las partes, se requieren éstas para la existencia misma del acto.

En cambio, las cláusulas naturales son las que sin ser esenciales a la vida del acto, también ***derivan de su propio ordenamiento legal, no obstante que las partes nada hayan dicho al respecto;*** éstas a diferencia de las primeras pueden excluirse por acuerdo expreso de las partes[224], en otras palabras, son las que resultan del propio contenido de la ley y, por tanto, deben cumplirse, aun cuando las partes ***hayan guardado silencio, siempre y cuando las partes no renuncien a ellas*** expresamente.

El maestro Rojina Villegas señala en su libro "Compendio de Derecho Civil" que efectivamente existe un problema en determinar si el silencio es o no una forma de manifestación de la voluntad, que pueda tener válidamente consecuencias de derecho. Y sostiene que: *"este problema se ha suscitado aplicando aquél adagio de que el que calla otorga, y que, por lo tanto, cuando un contratante calla, otorga, es decir, da su conformidad. Sin embargo, esto no es cierto jurídicamente.* ***En el derecho, el que calla, no otorga; el silencio no es ninguna forma de manifestación de la voluntad. El que guarda silencio simplemente se abstiene de manifestar su voluntad; no lo hace ni en forma expresa, ni en forma tácita, y el derecho no puede deducir consecuencias del simple silencio de las partes"[225].***

Sin perjuicio de lo anterior, debe señalarse en esta resolución que en algunos casos excepcionales la ley expresamente le atribuye efectos al silencio, lo cual no

---

[223] Rojina Villegas, Rafael, *Compendio de Derecho Civil, Teoría General de las Obligaciones.* México, Distrito Federal, Editorial Porrúa, S.A. 1981, p. 365.
[224] *Ibídem*, pp. 366-367.
[225] Rojina Villegas, Rafael, *Compendio de Derecho Civil, Teoría General de las Obligaciones*. México, Distrito Federal. Editorial Porrúa, S.A. 1981, pp. 94-95.

ocurre en el caso que se analiza, por no establecerlo así el artículo 69 de la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas.

Además, los artículos **6**, **7** y **8** del **Código Civil Federal** establecen lo siguiente:

En este sentido, se afirma que ***los particulares no pueden excusar el cumplimiento de la ley, y que sólo pueden renunciar a sus derechos estrictamente privados, haciéndolo de una manera clara y precisa, de modo tal que no quede duda de cuál es el derecho al que se renuncia, siempre y cuando la renuncia no afecte derechos que emanen de leyes de interés público, tal y como es el caso de la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas; por ello, las partes no pueden eximir o renunciar a su cumplimiento ni modificar o alterar su contenido, ya sea por omisión o pacto expreso en el contrato de obra pública.***

Robustece lo anterior la tesis emitida por la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "LEYES DE ORDEN PÚBLICO, RENUNCIA DE LAS (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL). **En los artículos 6o, 15 y 1309 del Código Civil de 1884, se encuentra, respectivamente, la ineficacia de la renuncia de las leyes de interés público,** la prohibición de ser alteradas por convenio entre particulares y el tenerse por no hecha la misma renuncia[226]**".**

En efecto, en la especie, toma suma relevancia que la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas sea de ***orden público e interés social, pues, como se dijo, resulta evidente que las partes no pueden eximir o renunciar a su cumplimiento ni modificar o alterar su contenido, ya sea por omisión o pacto expreso en el contrato de obra pública.***

Por otra parte, el artículo 61 de la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas señala <u>explícitamente</u> cuáles son las cláusulas que deben contener, como mínimo, los contratos de obra pública, entre las que se encuentran las relativas al pago de estimaciones y ajustes de costos.

De esta manera, el artículo **69** del mismo ordenamiento jurídico advierte claramente cuáles son las **consecuencias legales** que resultan en caso de infringir este tipo de cláusulas, derivando así por causa de su incumplimiento las sanciones siguientes: 1) que cuando se incumpla en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, la dependencia **deberá pagar gastos financieros** y 2) que cuando el contratista reciba pagos en exceso, éste deberá reintegrar tales cantidades, más los intereses correspondientes, ambas conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación.

[226] Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Cuarta Sala, tomo LXX, Tesis aislada, página 1195.

Sin embargo, para comprender aún más la obligatoriedad de dichas consecuencias, se hace necesario responder lo siguiente: ¿cómo debe interpretarse el término "deber" cuando éste se encuentra contenido en una norma jurídica?

El Diccionario de la Real Academia Española define el término "deber" como: a) Hacer algo **obligado por la ley** divina, natural o **positiva**; b)La **obligación** de corresponder a alguien en lo moral, y c)Cumplir con las **obligaciones** nacidas de respeto, gratitud u otros motivos.

Sin embargo, es evidente que las definiciones proporcionadas no responden debidamente la cuestión jurídica planteada, es decir, no resultan suficientes para determinar cómo debe interpretarse el término "deber jurídico".

Por el contrario, el Diccionario Jurídico Mexicano señala que "deber jurídico" proviene del latín *debere*, a su vez de *habere* y de: **"tener que"**, **"ser necesario"**, **"tener la obligación"**, **"deber"**. Al respecto, manifiesta que: *"en el lenguaje ordinario 'deber' indica el comportamiento al que un individuo **está obligado de conformidad con una regla o precepto** (religioso, moral, **jurídico**). De ahí que'debido'(de 'debitum': el comportamiento conforme a la regla o precepto)sea entendido como "lo correcto", "lo bueno", "lo justo", "lo lícito".* Asimismo sostiene que *"deber" no indica necesidad, sino obligación*.

De esta manera, el diccionario de derecho explica que por "deber jurídico" debemos entender *"el comportamiento requerido por el derecho, **la conducta obligada de conformidad con una norma de orden jurídico histórico** (nacional o internacional). **Todo aquello que es jurídicamente obligatorio constituye un deber jurídico.** De acuerdo con lo anterior, se puede caracterizar el deber jurídico como la conducta prescrita por el derecho, el comportamiento que debe observarse. La imposición de deberes ha constituido uno de los rasgos más característicos del derecho: 'La característica más general y relevante del derecho en todo tiempo y lugar, es que **su presencia indica que cierta conducta humana deja de ser optativa, convirtiéndose, así, en obligatoria**' (H.L.A. Hart)".*[227]

Luego entonces, **el término "deber jurídico" debe interpretarse como la obligación de hacer u omitir legalmente algo**, en otras palabras, es la conducta obligada que en la norma jurídica muchas veces se indica con los vocablos: "debe", "es debido" o "es obligatorio". De modo que las consecuencias legales establecidas en el artículo 69 de la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas constituyen en sentido estricto deberes jurídicos y, por lo tanto, su cumplimiento no puede ser optativo para

[227] Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. *"Diccionario Jurídico Mexicano".* México, 2001. Porrúa, pp. 815-817.

las partes, pues, como se dijo, jurídicamente, son una obligación y la observancia de las leyes no puede ser eximida por la voluntad de los particulares de acuerdo con el artículo 6° del Código Civil Federal.

Además, debe insistirse que el silencio no es ninguna forma de manifestación de la voluntad y que jurídicamente no pueden producirse consecuencias jurídicas por la simple omisión de los contratantes; **menos aún, cuando se trata de una legislación de orden público**, tal y como es el caso de la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas, pues, como ya se dijo en repetidas ocasiones, **las partes no pueden eximir o renunciar a su cumplimiento ni modificar o alterar su contenido, ya sea por omisión o pacto expreso en el contrato de obra pública**.

Por las razones expuestas, **puede concluirse que sí es procedente condenar al pago de gastos financieros, aun cuando las partes no lo hayan pactado expresamente en los contratos de obra pública**, por ser una consecuencia legal del incumplimiento a los pagos de estimaciones y ajustes de costos.

Es importante precisar que la condena a los gastos financieros no **debe ser oficiosa**, esto es, para que se pueda condenar al pago de tal prestación será necesario que se reclame expresamente como prestación en la demanda, pues si bien, como ya se dijo, es una consecuencia legal del incumplimiento de las obligaciones señaladas en el propio texto normativo, esa obligatoriedad sólo opera cuando se demanda esa prestación, pues de lo contrario, el juez no deberá pronunciarse sobre algo que no fue pedido expresamente por el actor.

Consecuentemente, debe prevalecer con carácter de jurisprudencia, en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo, el criterio que sustenta esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a continuación:

> **GASTOS FINANCIEROS. ES PROCEDENTE CONDENAR AL PAGO DE LOS MISMOS SI SE ACREDITA EL INCUMPLIMIENTO DE LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y AJUSTES DE COSTOS, AUN CUANDO LAS PARTES NO LO HAYAN PACTADO EXPRESAMENTE EN EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 69 DE LA LEY DE ADQUISICIONES Y OBRAS PÚBLICAS).**

MÉTODOS DE INTERPRETACIÓN UTILIZADOS POR LA SCJN
DOCTRINAL. La doctrina ha distinguido tres clases de cláusulas en el contrato: esenciales, naturales y accidentales. El maestro Rojina Villegas señala en su libro “Compendio de Derecho Civil” que efectivamente existe un problema en determinar si el silencio es o no una forma de

manifestación de la voluntad, que pueda tener válidamente consecuencias de derecho. Y sostiene que: “este problema se ha suscitado aplicando aquél adagio de que el que calla otorga, y que, por lo tanto, cuando un contratante calla, otorga, es decir, da su conformidad. Sin embargo, esto no es cierto jurídicamente.

TELEOLÓGICO. Se debe de preservar un orden adecuado para la debida contratación y culminación de la obra pública, incluyendo gastos financieros en que se incurra por responsabilidades.

e) Artículo 95 de la LAOP ..... A.R. 967/2006, p. 342; A.R. 219/2001, p. 350

i) AMPARO EN REVISIÓN: A.R. 219/2001.

ALCANCES DEL CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN.
RECURSO DE INCONFORMIDAD PREVISTO EN EL ARTÍCULO 95 DE LA LEY DE ADQUISICIONES Y OBRAS PÚBLICAS (AHORA ABROGADA), SÍ CONSTITUYE UN RECURSO EN SEDE ADMINISTRATIVA. Los efectos del fallo que se emita en el mismo son indicativos de ello y no como lo afirma la recurrente que se trate únicamente de una denuncia de hechos. **CONTRATO ADMINISTRATIVO.** Lo es una licitación pública. **NATURALEZA JURÍDICA DE LA LICITACIÓN.** La licitación no es un contrato, ni tampoco un acto, sino un conjunto de actos, un procedimiento administrativo preparatoria de la voluntad contractual

C O N S I D E R A N D O:

CONSTITUCIÓN. Es cierto que la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas, hoy abrogada, que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación de treinta de diciembre de mil novecientos noventa y tres, es reglamentaria del artículo 134 constitucional que preceptúa que los recursos económicos de que dispongan los Gobiernos Federal y del Distrito Federal, se administraran con eficacia y honradez para satisfacer los objetivos a que están destinados. Las adquisiciones, arrendamientos y enajenación de todo tipo de bienes se adjudicarán a través de licitaciones públicas, y cuando éstas no sean idóneas para asegurar al Estado las mejores condiciones posibles, las leyes establecerán las bases, procedimientos, reglas, requisitos y demás elementos para acreditar la economía, eficacia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones del Estado.

El texto del precepto constitucional en comento no se sigue como lo pretende el inconforme que en los procedimientos seguidos ante las autoridades administrativas relativos a las licitaciones públicas, cuando se vean afectados los derechos de los particulares participantes por alguna irregularidad en dicho procedimiento, les esté vedada la garantía de audiencia, ya que la autoridad a través de los recursos o medios de defensa que en sede administrativa establezca la ley, debe procurar su respeto, máxime que el precepto constitucional en cuestión reserva a la ley el establecimiento de las bases, procedimientos, reglas, requisitos y demás elementos para acreditar entre otros elementos la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado; por ende, la legislación debe establecer los mecanismos de defensa necesarios para lograr aquellos objetivos del Estado a través del establecimiento de recursos en sede administrativa.

NATURALEZA JURÍDICA DE LA LICITACIÓN. <u>"algunos autores la licitación es una etapa preliminar del contrato, por el que se determina el co-contratante. Nosotros, siguiendo a Sayagués Laso y Bercaitz, entendemos que</u> es un procedimiento que hace a la forma de celebración de ciertos contratos; un conjunto de actos del que surge el vínculo contractual al finalizar el procedimiento, con la resolución administrativa de adjudicación notificada al interesado. El encuentro de las voluntades se produce con la aceptación de la oferta, o sea la adjudicación notificada al interesado. Es en este momento que surge el vínculo contractual, salvo que texto expreso establezca una solución distinta."

En cuanto al alcance de la adjudicación el citado autor considera que tiene un doble alcance, a saber, por un lado, determina cuál es la oferta más ventajosa; y, por otro, la declara aceptada y agrega que: ***"(...) la circunstancia de que en ciertos países existan órganos permanentes para estudiar las ofertas y determinar cuál es la más ventajosa, adjudicando la licitación, pero debiendo elevar los antecedentes a otro órgano para que la apruebe, no autoriza a disociar el procedimiento y fraccionar la voluntad administrativa (Sayagués Laso)"*** y concluye que: ***"No puede disociarse la licitación del contrato, porque el contrato nace dentro de la licitación".***

La licitación pública es efectivamente un procedimiento que hace a la forma de contratación. Un contrato administrativo llevado a cabo sin licitación, cuando ésta es requerida, es un contrato nulo por vicio de forma, no de competencia.

En consecuencia, la licitación no es un contrato, ni tampoco un acto, sino un conjunto de actos, un procedimiento administrativo preparatorio de la voluntad contractual. Ese procedimiento administrativo está integrado por una diversidad de actos administrativos y simples actos de la Administración, como formas jurídicas preparatorias de la actividad administrativa contractual. La licitación es una

formalidad previa de los contratos del Estado como procedimiento de garantía para el interés público y su incumplimiento cuando ella es requerida por mandato legal constituye uno de los casos de nulidad por defecto de forma.

Para corroborar la naturaleza de recurso administrativo de la inconformidad prevista en el artículo 95 de la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas, precisa relacionar su texto y el de los preceptos 15, 46, 95 a 98 del mismo cuerpo legal que aduce el recurrente deben interpretarse de manera armónica, y otros más, que permiten desentrañar el punto a debate.

La síntesis del contenido de los preceptos legales anteriores, lleva a esta Segunda Sala a la conclusión de que la inconformidad prevista en el artículo 95 de la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas (ahora abrogada), sí constituye un recurso en sede administrativa porque los efectos del fallo que se emita en la misma precisados en el artículo 97, consistentes en: la nulidad del procedimiento a partir del acto o actos irregulares, estableciendo las directrices necesarias para que el mismo se realice conforme a la Ley; la nulidad total del procedimiento, o la declaración de improcedencia de la inconformidad, son indicativos de ello y no como lo afirma la autoridad recurrente que se trate únicamente de la denuncia hechos que dará lugar a que ella lleve a cabo una investigación con repercusión exclusiva en la responsabilidad del servidor público de acreditarse que actuó contra la ley.

En esa medida, y como del análisis armónico y no aislado de los preceptos que integran la ley en que se contiene el reclamado, se llega a la conclusión de que la naturaleza jurídica de que la inconformidad prevista por el artículo 95 de la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas la constituye un recurso en sede administrativa y no simplemente una denuncia como lo asevera el recurrente, es dable concluir en lo infundado de los agravios que expresa en el sentido de que el quejoso carece de interés jurídico para acudir a la vía de amparo por no constituir un acto de autoridad aquel a través del cual desechó sin previo requerimiento el multicitado recurso que interpuso el quejoso contra el fallo que declaró ganador de la licitación a la empresa tercera perjudicada, de ahí que como no aduce argumentos diversos que combatan las consideraciones en que se apoyó la Juez federal para declarar la inconstitucionalidad del precepto reclamado por infringir la garantía de audiencia, y como no se está en el caso de suplir la queja deficiente, se impone, en la materia de la revisión confirmar la sentencia que se revisa en la se concedió el amparo para el efecto de que: ***"la titular de Inconformidades de la Contraloría Interna en la Comisión Federal de Electricidad, deje sin efectos la resolución 18/164/CFE/CI/SCI/1169/0618/99 de fecha treinta y uno de agosto de mil novecientos noventa y nueve en la que se aplicó el artículo 98 de la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas, cuya inconstitucionalidad fue declarada, y en***

su lugar dicte un nuevo acto en el que siguiendo los lineamientos de este fallo, y con fundamento en el artículo 325 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al 13 de la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas, requiera al promovente del recurso de inconformidad, para que otorgue la protesta de decir verdad a que se refiere el artículo 98 del citado ordenamiento."

MÉTODOS DE INTERPRETACIÓN UTILIZADOS POR LA SCJN
DOCTRINAL. Para algunos autores la licitación es una etapa preliminar del contrato, por el que se determina el co-contratante (...) a Sayagués Laso y Bercaitz (…)
SISTEMÁTICO. El artículo 95 de la LAOP precisa relacionar su texto y el de los preceptos 15, 46, 95 a 98 de la misma, debiendo interpretarse de manera armónica.

E) COMUNIDAD EUROPEA..... A.R. 1725/2004, p. 309

F) CONTRATOS

a) Contrato administrativo ..... A.R.219/2001, p. 350; A.R. 159/2000, p. 353
A.R. 225/99, p. 363

i) AMPARO EN REVISIÓN: A.R. 159/2000.

ALCANCES DEL CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN
RESCISIÓN DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. Privilegio especial de los órganos de la Administración Pública, que los colocan en una situación distinta y más favorable de la que rige para los particulares, impera la potestad exorbitante del derecho común, esto es, un régimen contractual excepcional de la administración, que no disfrutan los sujetos que celebran un contrato de derecho privado.
JURISPRUDENCIA DE LA QUINTA ÉPOCA. Sólo corresponde a los tribunales, no resulta idónea para resolver problemáticas actuales.
GARANTÍA DE AUDIENCIA. Al rescindir un contrato la Administración Pública no se hace justicia por propia mano ni violenta este principio.

LEYES PRIVATIVAS. El artículo 40, primer párrafo, de la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas, no es una ley privativa.

PACTO COMISORIO EXPRESO. Es una figura jurídica similar a la rescisión administrativa.

CONTRATO ADMINISTRATIVO. RESCISIÓN DE. No contraviene el artículo 17 constitucional.

C O N S I D E R A N D O:

QUINTO.-… Esta Primera Sala estima que debe considerarse y delimitarse el alcance de la jurisprudencia transcrita pues es la base fundamental en que se apoyó el Juez de Distrito para declarar la inconstitucionalidad del artículo impugnado, en atención a que la autoridad responsable aduce su inaplicabilidad, entre otras razones, por la generalidad de su contenido.

En efecto, se trata de una jurisprudencia antigua, integrada con ejecutorias pronunciadas en el segundo decenio de este siglo, que corresponde a la Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo contenido específico es imprescindible analizar para estar en aptitud de conocer las razones (si se dieron) por las cuales la Suprema Corte de Justicia estableció que ***la facultad de rescindir los contratos administrativos sólo corresponde a los tribunales y no a las entidades de la Administración Pública, que intervinieron en el contrato respectivo y determinar si tal conclusión es aplicable en el caso concreto o si por el contrario dada su generalidad, como lo aduce la recurrente, hace insostenible su aplicación al presente asunto, por sus específicas características.***

Por ende, a continuación se analizan las ejecutorias que dieron lugar a la jurisprudencia examinada, en el orden cronológico en que fueron pronunciadas por el Alto Tribunal.

1) Ejecutoria pronunciada por la Suprema Corte de Justicia el 6-agosto-1920… amparo en revisión promovido por Eusebio Montiel… 2) Ejecutoria de 19 de agosto de 1920… 3) En el juicio de amparo en revisión 152/22 promovido por Federico Zorrilla… 4) Sentencia pronunciada el 30 de enero de 1923 …,5) Ejecutoria de 27 de marzo de 1924, emitida en el juicio de amparo en revisión 138/22 promovido por Compañía de Tranvías, Luz y Fuerza de Monterrey…

El examen particular de las ejecutorias mencionadas, que pronunció la Suprema Corte, permite advertir que la nota común en ellas es que las autoridades responsables celebraron con los quejosos contratos de índole administrativa, que desconocieron al rescindirlos, sin que tales autoridades contaran con facultades legales para hacerlo,

por sí mismas, pues tal atribución, declaró la Suprema Corte, corresponde a los tribunales judiciales.

Como se ve, los argumentos descansan en un aspecto de estricta legalidad, ya que no se discutió la constitucionalidad de una norma legal, porque en los cinco asuntos resueltos quedó establecido que no había fundamento legal para que las autoridades administrativas rescindieran, los contratos administrativos en que fungieron como parte.

Esta característica permite advertir una diferencia entre lo resuelto en ellas y el asunto que ahora se resuelve, pues en el presente caso no se suscita la controversia, en primer lugar, sobre una cuestión de estricta legalidad (como la que fue materia de las ejecutorias relativas), sino un problema de constitucionalidad de leyes; y, en segundo término, la declaración, expresa o implícita, de la rescisión administrativa llevada a cabo por las autoridades responsables en aquellos precedentes, sin fundamento alguno, no opera igual en el asunto que se analiza, en el cual está establecida expresamente en una disposición legal la facultad de la Administración Pública para rescindir unilateralmente los contratos administrativos, en que funja como parte.

Luego, es incuestionable que como lo señala la recurrente ese criterio jurisprudencial en que apoyó básicamente el a quo la concesión del amparo respecto del artículo 40, primer párrafo, de la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas resulta general y no es idóneo por no referirse exactamente a las características que invisten los actos reclamados por la quejosa.

Resta, por tanto, decidir si es constitucional o no la facultad que el precepto reclamado atribuye a la Administración Pública para rescindir los contratos administrativos en que intervenga, haciendo a un lado el criterio jurisprudencial citado. La responsable recurrente señala que los contratistas proveedores tienen la posibilidad de acudir a los Tribunales Federales en la vía ordinaria federal, sin que el artículo 40 citado haga nugatorio ese derecho, por lo que no se contraviene el contenido del artículo 17 constitucional.

Esta Primera Sala considera que el agravio propuesto por la autoridad recurrente es esencialmente fundado, en virtud de que ***el artículo 40 de la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas no contraviene el artículo 17 constitucional, al permitir que una dependencia o entidad administrativa que interviene en la concertación de un contrato administrativo con un particular, pueda declarar la rescisión de un acto jurídico de esa naturaleza, pues ni en el artículo indicado, ni en algún otro precepto constitucional, está previsto que la rescisión de un contrato administrativo sólo pueda decretarse por un tribunal, judicial o administrativo.***

En cambio, lo que realmente se advierte es que ***la potestad rescisoria examinada es una atribución exclusiva de las entidades y dependencias públicas, la que ha sido reconocida como un privilegio especial de los órganos de la Administración Pública, que los colocan en una situación distinta y más favorable de la que rige para los particulares que con ella contratan, característica propia de los contratos administrativos, en donde impera la potestad exorbitante del derecho común, esto es, un régimen contractual excepcional de la administración, que no disfrutan los sujetos que celebran un contrato de derecho privado.***

Al respecto, es importante tomar en cuenta que en la doctrina se considera que ***"el régimen excepcional de los contratos administrativos permite considerar como válidas ciertas estipulaciones que no podrían tener efecto en el régimen de contratación civil. Dentro de este último serían contrarias al orden público y, por lo tanto, estarían viciadas de invalidez las cláusulas que invistieran a uno de los contratantes de facultades para imponer de propia autoridad a su contraparte la ejecución forzada de sus obligaciones, las sanciones estipuladas en el contrato o la extinción misma de éste."***

En el mismo orden de ideas, es trascendente lo siguiente: ***"Por el contrario, esas mismas estipulaciones en favor de la Administración dentro de los contratos administrativos se consideran como perfectamente regulares, porque ellas salvaguardan el eficaz cumplimiento de las atribuciones estatales, que de otro modo quedaría impedido si el Estado no dispusiera de medios rápidos y efectivos para poder satisfacer las necesidades colectivas. Y es que el Estado, como ya hemos dicho antes, no puede prescindir de su carácter de poder público aun en las relaciones contractuales, y "si no impone como Poder el contrato, impone al que quiere contratar con él condiciones que dejan a salvo ese Poder."***

En la misma línea de pensamiento se ubican diversos tratadistas para quien la figura de la rescisión administrativa no es un derecho de la administración, sino un verdadero poder, una potestad administrativa.

Al respecto, conviene mencionar los criterios sustentados por la anterior Tercera Sala, cuyo criterio comparte esta Primera Sala en la que definió los límites y aplicación relativos al pacto comisorio expreso, figura jurídica similar a la rescisión administrativa, que en seguida se transcriben:

> ***COMPRAVENTA A PLAZOS, PACTO COMISORIO TÁCITO INOPERANTE POR MORA EN EL PAGO DE INTERESES CONVENIDOS EN LA. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE COLIMA Y DEL DISTRITO FEDERAL)…***
> ***Sexta Época; Instancia: Tercera Sala; Tomo: I, Cuarta Parte; P. 119***
> ***PACTO COMISORIO…***

El poder de la administración se manifiesta en el hecho de que la rescisión no está sujeta a que el órgano contratante acuda a los tribunales para pedir su declaración, sino que se decreta en el mismo ámbito administrativo, como lo explica la doctrina: "Por tales razones, y aun cuando no esté prevista en el contrato, tal rescisión puede ser dispuesta unilateralmente por la Administración Pública, sin necesidad de que deba verse obligada a recurrir para ello a la instancia judicial."

Así, la rescisión del contrato administrativo como facultad otorgada a las dependencias y entidades de la Administración Pública resulta constitucional en la medida de que deriva de una facultad conferida legalmente a la Administración Pública, que ya se reconoció está ajustada a la Constitución General de la República.

Por tanto, el Estado no actúa como particular en una relación bilateral y de igualdad de condiciones, regida por el derecho civil común, pues dicho contrato es de carácter administrativo y en la relación establecida entre la dependencia o ente de la Administración Pública y el particular, no existe igualdad ya que aquéllos se colocan en una situación distinta y más favorable de la que rige a quienes con ellos contratan, poseyendo la atribución de rescindir administrativamente el contrato, rescisión que, por ende, constituye un acto de autoridad administrativa ajeno a una mera relación entre particulares, de suerte tal que ***la rescisión no se traduce en autorización para hacerse justicia por sí mismo y para privar al particular contratante de sus derechos sin haber sido oído y vencido en juicio, sino únicamente en el ejercicio de una facultad legal cuyo establecimiento no contraviene alguna norma de la Constitución pues no impide el acceso a la administración de justicia.***

Ahora bien, el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece:

Sentado lo anterior, es inconcuso que ***al ejercer la facultad o potestad de rescisión, no se restringe ni se priva al particular que contrató con la Administración Pública, del derecho constitucional de acceso a la administración de justicia impartida por los tribunales, como lo indica la autoridad recurrente, pues el particular afectado, titular de este derecho, dispone de los instrumentos procesales previstos en la ley mediante los cuales puede impugnar oficiosamente el acto jurídico-administrativo de la rescisión contractual, como a continuación se explica.***

En efecto, el artículo 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establece:

Y el artículo 15 de la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas, prevé lo siguiente:

En apoyo de la argumentación expuesta, cabe señalar que la anterior integración del Tribunal Pleno estableció el criterio, que la actual integración reitera, de que en casos similares al que se estudia, ***la rescisión de un contrato administrativo decidida por la propia entidad contratante, en cumplimiento de una disposición legal que prevé una medida de esta naturaleza, es un acto administrativo de autoridad, impugnable ante los tribunales de la Federación, como una cuestión que pertenece a la jurisdicción contenciosa administrativa del orden federal, que compete a los Jueces de Distrito. El criterio aludido está contenido en la jurisprudencia conducente:***

> ***Octava Época; Tesis: P./J. 20/94…***
> ***CONTRATO DE OBRA PÚBLICA. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL CONFLICTO SUSCITADO POR SU RESCISIÓN, PROVENIENTE DE UN ACTO ADMINISTRATIVO DE AUTORIDAD, CORRESPONDE A UN JUZGADO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA…***
> ***Tesis: P. CI/99***
> ***REVOCACIÓN. EL ARTÍCULO 126 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, AL ESTABLECER LA IMPROCEDENCIA DE ESE RECURSO ADMINISTRATIVO CONTRA LOS ACTOS TENDIENTES A HACER EFECTIVAS FIANZAS OTORGADAS PARA GARANTIZAR OBLIGACIONES FISCALES A CARGO DE "TERCEROS, NO VIOLA EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN…***

SEXTO.- La quejosa en su demanda de garantías, además de la violación al artículo 17 Constitucional que ya fue estudiado, señaló en síntesis como conceptos de violación los siguientes:…

La parte quejosa cuestiona la tramitación de un procedimiento de rescisión de contrato de obra pública seguido por una autoridad administrativa, cuya conclusión puede estribar en la decisión de que por rescindir el contrato relativo se haga efectiva la garantía que fue dada; esto es, se trata de un acto de privación, sujeto a lo dispuesto en el artículo 14, segundo párrafo, de la Ley Fundamental, y no de un acto de molestia, sometido a la garantía de legalidad genérica, prevista en el párrafo primero del artículo 16 constitucional. Es cierto que en ambos casos el problema de la competencia está inmerso en dichos preceptos; en el primero, como parte de la garantía de audiencia prevista en el artículo 14, y en el segundo, como requisito fundamental expreso de los actos de autoridad que impliquen molestia; sin embargo, en atención a que el acto de aplicación está encaminado a la emisión de un acto privativo, y éste (la rescisión administrativa), en opinión de la parte agraviada, sólo puede ser declarada por un tribunal judicial, la proposición de la quejosa debe examinarse bajo la perspectiva del artículo 14.

Acerca de la distinción apuntada, son ilustrativas la jurisprudencia del Tribunal Pleno y la tesis de la anterior integración de la Segunda Sala, esta última, que esta Primera Sala hace suya, las cuales a continuación se transcriben:

> ***Tesis: P./J. 40/1996…***
> ***ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA. ORIGEN Y EFECTOS DE LA DISTINCIÓN.***
> ***7ª Época; 2ª Sala; S.J.F.; Tomo: 81 Tercera Parte; Página: 15***
> ***AUDIENCIA Y SEGURIDAD JURÍDICA, GARANTÍAS DE. ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA DE BIENES O DERECHOS. DISTINCIÓN. ARTÍCULOS 14 Y 16 CONSTITUCIONALES…***

Los argumentos expuestos reflejan, además, que ***el artículo 40, de la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas, no infringe la garantía de audiencia, porque ésta se respeta en la medida de que en el juicio ordinario al que se alude, el particular puede ejercer el cúmulo de derechos procesales, de carácter fundamental o secundarios, que en ellos se prevén, sin que sea el caso de que en este fallo proceda analizarlos, pues esto sólo puede ocurrir cuando tal proceso se inicie y desarrolle.***

Asimismo, debe tenerse presente lo dispuesto por el artículo 92 de la propia Ley de Adquisiciones y Obras Públicas:

Como se advierte, a través del procedimiento previsto en el artículo transcrito, aplicable a las rescisiones administrativas que llevan a cabo las dependencias y entidades por causas imputables a los contratistas, se da cumplimiento a la garantía de audiencia previa al acto privativo, conforme al alcance que a esta garantía ha dado esta Suprema Corte, al delimitar con precisión cuáles son las formalidades esenciales del procedimiento, con el rubro y texto siguientes:

> ***Tesis: P./J. 47/95…***
> ***FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO…***

La confrontación entre ***las formalidades esenciales del procedimiento que establece el artículo 14, segundo párrafo, de la Constitución Federal, con las que el artículo 92 de la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas, que otorga a quienes tienen el carácter de contratistas, a fin de declarar la rescisión del contrato de obra pública respectivo, lleva a la conclusión de que se da cabal cumplimiento a los mismos, en virtud de que al particular contratante se le reconoce expresamente el derecho que se le comunique por escrito los hechos motivo de inicio del procedimiento de rescisión; a que exponga lo que a su derecho***

convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes dentro de un término que no será menor de diez días hábiles; y a que se dicte la resolución debidamente fundada y motivada, misma que deberá comunicarse por escrito.

Por último respecto del concepto de violación relativo a que el artículo 40 de la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas viola la garantía de igualdad contenida en el artículo 13 constitucional, es necesario anotar que la igualdad jurídica parte de la idea de que frente a una situación jurídica determinada todos los gobernados puedan asumir los mismos deberes y derechos dentro de las garantías que consagra la Ley Fundamental.

El artículo 13 de la Constitución General de la República, que contiene diversas garantías de igualdad, establece textualmente:

El precepto fundamental transcrito contiene las siguientes garantías de igualdad:

a) Nadie puede ser juzgado por leyes privativas.
b) Nadie puede ser juzgado por tribunales especiales.
c) Ninguna persona o corporación puede tener fuero.
d) Ninguna persona o corporación puede gozar de más emolumentos que los que sean compensación de servicios públicos y estén fijados por la ley.
e) Los Tribunales Militares en ningún caso y bajo ninguna circunstancia pueden extender su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al Ejército.
f) Cuando en un delito o falta del orden militar estuviese complicado un paisano, conocerá del caso la autoridad civil que corresponda.

En torno al tema de las leyes privativas a que se refiere el inciso a), la Suprema Corte ha integrado jurisprudencia definida que es del tenor siguiente:

6ª Época; Pleno; Apéndice de 1995; Tomo I, Parte SCJN; Tesis: 222; Página: 211. LEYES PRIVATIVAS…

Asimismo, es relevante el siguiente precedente, cuyo criterio comparte esta Primera Sala:

7ª Época; Sala Auxiliar; Informes; Informe 1969; Página: 58. LEYES PRIVATIVAS, CONCEPTO CONSTITUCIONAL DE.

De acuerdo con las tesis transcritas ***una ley es privativa cuando se dirige a un individuo o individuos en lo particular y, por lo mismo, no sobrevive a su aplicación, es decir, está dirigida a determinada persona, se aplica a un previsto caso y determinado con anterioridad, rige en un caso específico y para cierto individuo o bien para un grupo de personas individualmente determinados, y una vez que cumple su contenido desaparece por haberse extinguido el objeto para al que fue creado.***

Debe distinguirse de las leyes especiales pues éstas a diferencia de aquéllas aun cuando se aplican a una o varias categorías de personas relacionadas con hechos situaciones o actividades específicas, sí se encuentran investidas de las características de generalidad, abstracción y permanencia, dado que se aplicaron a todas las personas que se colocan dentro de las hipótesis que prevén y no están dirigidas a una persona o grupo de éstos individualmente determinado, además de que su vigencia jurídica pervive después de aplicarse a un caso concreto para regular los casos posteriores en que se actualicen los supuestos contenidos en ellos.

Así lo ha sostenido el Tribunal Pleno en la Tesis siguiente:

Tesis: P./J. 18/98
LEYES PRIVATIVAS. SU DIFERENCIA CON LAS LEYES ESPECIALES.

De lo que deriva que el artículo 40, primer párrafo, de la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas, cuya constitucionalidad se controvierte en esta vía, no es una ley privativa, en virtud de que establece supuestos normativos que aplican a todos los gobernados que se encuentren en la situación de realizar un contrato de obra pública con las entidades y dependencias señaladas en el artículo 1° de esa ley; ordenamiento que se aplicó a todos los demás gobernados que durante su vigencia se colocaron en la misma hipótesis.

Sentado lo anterior, debe decirse que respecto de la garantía de igualdad consagrada en el artículo 13 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos relativa a que nadie puede ser juzgado por tribunales especiales, es preciso señalar que del contenido del artículo 40, primer párrafo de la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas, se advierte que otorga facultades a las dependencias y entidades a que alude el artículo primero de esa ley, para rescindir administrativamente los contratos en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo del proveedor o contratista…

Así mismo, por tribunales especiales se entiende aquéllos órganos jurisdiccionales creados exclusivamente para conocer de determinados hechos y personas, por lo que, una vez que realizan el juzgamiento que les ha sido encomendado, se extinguen. Son tribunales que no son creados por la ley con carácter permanente y que no han sido establecidos previamente a que ocurran los hechos materia de su competencia; es decir, son los llamados tribunales por comisión, extraordinarios o *ex post factum*.

En consecuencia, es inexacto que la facultad rescisoria a que alude el precepto reclamado otorgue a las dependencias y entidades de la Administración Pública la calidad de tribunales especiales, pues al rescindir el contrato respectivo solo emiten un acto administrativo, sin que se constituya en un tribunal, pues como ya se vio, el diverso artículo 15 de la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas citados, expresamente

señala que las controversias que se susciten con motivo de la interpretación o aplicación de esa ley o de los contratos celebrados con base en ella, serán resueltos por los tribunales federales. Al respecto conviene citar las siguientes tesis aisladas, cuyo criterio comparte esta Primera Sala:

> ***Tesis: 2a. XCIX/99***
> ***…PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE AMPARO…***
> ***7ª Época; Pleno; SJF; Tomo: 205-216 Primera Parte; Página: 20***
> ***ARRENDAMIENTO INMOBILIARIO. ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO DEL DECRETO DE REFORMAS Y ADICIONES A DIVERSAS DISPOSICIONES RELACIONADAS CON INMUEBLES EN ARRENDAMIENTO, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL SIETE DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO. NO ES VIOLATORIO DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL…***

En esas condiciones, contrariamente a lo afirmado por la parte quejosa, el hecho de que el artículo 40, primer párrafo de la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas autorice a la autoridad administrativa contratante para rescindir el contrato de obra pública y servicios, no constituye un trato discriminatorio contrario al principio de igualdad.

En efecto, el trato igual a los iguales se manifiesta estableciendo un mismo procedimiento para todos los gobernados que estén en el supuesto de la quejosa, que realiza contratos con las entidades y dependencias federales; de esta suerte, se insiste, el artículo citado no es privativo, en virtud de que contiene supuestos normativos que no están dirigidos a una persona o grupo de personas considerados individualmente ni desaparece con su aplicación a un caso, por lo que no puede afirmarse que dicho precepto sea violatorio de la garantía de igualdad, contenida en el artículo 13 constitucional.

MÉTODOS DE INTERPRETACIÓN UTILIZADOS POR LA SCJN
FUNCIONAL. La rescisión de un contrato administrativo es un privilegio especial de los órganos de la Administración Pública, que los colocan en una situación distinta y más favorable de la que rige para los particulares que con ella contratan, característica propia de los contratos administrativos, en donde impera la potestad exorbitante del derecho común, esto es, un régimen contractual excepcional de la administración, que no disfrutan los sujetos que celebran un contrato de derecho privado.

SISTEMÁTICO. Interpreta de manera conjunta los artículos 14, segundo párrafo de la Constitución y el 92 de la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas.

DOCTRINAL. La doctrina considera que “el régimen excepcional de los contratos administrativos permite considerar como válidas ciertas estipulaciones que no podrían tener efecto en el régimen de contratación civil”.

ii) AMPARO EN REVISIÓN: A.R. 225/99

ALCANCES DEL CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN
RESCISIÓN DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. Con un particular, la autoridad administrativa puede declarar por sí misma la rescisión de un acto jurídico de esa naturaleza, pues ni las normas supremas citadas ni ningún otro precepto constitucional, disponen que la rescisión de un contrato administrativo sólo pueda decretarse por un tribunal, judicial o administrativo. • No priva del derecho de acceso a la justicia. **CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA PÚBLICA.** Es inexacto que derive de un acto que realiza el estado, a través de la dependencia o entidad administrativa, actuando como ente de derecho privado, en una relación de estricta igualdad entre las partes y regido exclusivamente por el derecho civil común.

CONSIDERANDO:

CUARTO.- En los tres primeros agravios combate la parte recurrente las consideraciones por las que la A Quo estima que los preceptos legales reclamados no violan los artículos 14 y 17 de la Constitución, aduciendo, en esencia, lo siguiente:…

Este Órgano Colegiado estima infundados los agravios aludidos, en atención a los siguientes razonamientos:

El criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a que alude la A Quo consistente en que sólo los tribunales de justicia pueden declarar la rescisión de los contratos administrativos celebrados entre los particulares y los organismos descentralizados, que estima inaplicable al caso en que las autoridades contratantes actúan en virtud de facultad expresa otorgada en una ley, se contiene en la jurisprudencia formada por la anterior integración del Tribunal Pleno, visible en la página 32, Tomo III, Materia Administrativa, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo sumario es del siguiente tenor: ***"CONTRATOS***

ADMINISTRATIVOS, RESCISIÓN DE LOS. Sólo los tribunales de justicia pueden, mediante el juicio correspondiente, declararlos rescindidos".

Sobre el particular, se precisa que se trata de una jurisprudencia antigua, integrada con ejecutorias pronunciadas en el segundo decenio de este siglo, que corresponde a la Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo conocimiento específico es imprescindible conocer para estar en aptitud de conocer las razones por las cuales la Suprema Corte de Justicia estableció que la facultad de rescindir los contratos administrativos sólo corresponde a los tribunales y no a las entidades de la Administración Pública, que intervinieron en el contrato respectivo.

Por ende, a continuación se analizan las ejecutorias que dieron lugar a la jurisprudencia examinada, en el orden cronológico en que fueron pronunciadas por el Alto Tribunal.

El examen particular de las ejecutorias mencionadas, que pronunció con anterioridad la Suprema Corte, permite advertir que la nota común en ellas, con excepción de la última, es que las autoridades responsables celebraron contratos de índole administrativa con los quejosos, respectivamente, que desconocieron al emitir los actos reclamados, mediante el ejercicio de la rescisión, sin que en ninguno de esos casos las autoridades administrativas respectivas contaran con facultades legales para hacerlo por sí mismas, pues tal atribución, declaró la Suprema Corte, corresponde a los tribunales judiciales.

Como se ve, el argumento que apoya, esencialmente, los criterios que sostuvo la anterior integración del Tribunal Pleno, descansan en un aspecto de estricta legalidad, ya que en ellos no se discutió la constitucionalidad de una norma, legal o reglamentaria, simplemente porque en los cinco asuntos resueltos quedó establecido que no había fundamento legal para que las autoridades administrativas, por lo menos a las que se atribuyeron los actos reclamados, rescindieran, por sí, los contratos administrativos en que fungieron como parte.

La característica anotada, que incide en las cinco resoluciones aludidas, permite distinguir con claridad la diferencia entre lo resuelto en ellas y el asunto que ahora se resuelve, pues en el presente caso no se suscita la controversia, en primer lugar, sobre una cuestión de estricta legalidad como la que fue materia de las ejecutorias relativas, sino en relación a un problema de constitucionalidad de leyes; y, en segundo término, la declaración, expresa o implícita, de la rescisión administrativa llevada a cabo por las autoridades responsables en aquellos precedentes, sin fundamento alguno, no opera igual en el asunto que se analiza, en el cual está establecida expresamente en una disposición legal y reiterada en un reglamento, la facultad de la administración para rescindir unilateralmente los contratos administrativos, en que funja como parte.

Luego, es incuestionable que la jurisprudencia referida no es idónea para fundar la inconstitucionalidad de las normas legales reclamadas, tal como lo estimó la A Quo y, asimismo, no basta que una autoridad administrativa esté facultada por una norma legal para rescindir administrativamente un contrato para de ello concluir que no existe violación a los artículos 14 y 17 de la Constitución.

Ahora bien, los artículos 40, primer párrafo, de la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas y 52, fracción II, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas, disponen:…

Como se advierte, las disposiciones transcritas constituyen la base legal para que los órganos de la Administración Pública puedan rescindir los contratos administrativos que celebren con particulares.

La facultad rescisoria aludida tiene como antecedente lo dispuesto en los artículos 43 de la Ley de Obras Públicas y 48 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles, pues en ellos se incorporó a la legislación administrativa federal la potestad rescisoria de la Administración Pública, en los contratos de esa naturaleza que celebraran con los particulares. …

Es conveniente recordar que al expedirse la actual Ley de Adquisiciones y Obras Públicas, se abrogaron la Ley de Obras Públicas y la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles, en términos del artículo primero transitorio de la ley citada en primer lugar, que dispone:…

Es decir, en la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas el legislador reglamentó lo que antes se encontraba regulado en los dos ordenamientos abrogados, incluyendo lo relativo a la facultad unilateral de rescisión de los contratos administrativos. Es por ello que resulta válido invocar, para entender en sus orígenes el artículo 40 de la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas, lo que se dijo al respecto en la exposición de motivos de la abrogada Ley de Obras Públicas, cuyo texto literal es el siguiente: ***“También, como innovación, la iniciativa propone que las dependencias y entidades puedan suspender por causa justificada o rescindir administrativamente los contratos por razones de interés general o por contravenir las disposiciones de la Ley, las que de ella se deriven, o los términos del contrato, lo cual dotará a la Administración Pública de la facultad de actuar con mayor oportunidad y eficiencia, cuando las circunstancias hagan patente la necesidad de salvaguardar el interés público o de evitar su detrimento”***.

Asimismo, los artículos 14 y 17 de la Constitución General de la República establecen: …

Este Órgano Colegiado considera que los artículos 40 de la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas y 52, fracción II, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas no contravienen los artículos 14 y 17 constitucionales, al permitir que una dependencia o entidad administrativa, que interviene en la concertación de un contrato administrativo con un particular, pueda declarar por sí misma la rescisión de un acto jurídico de esa naturaleza, pues ni las normas supremas citadas ni ningún otro precepto constitucional, disponen que la rescisión de un contrato administrativo sólo pueda decretarse por un tribunal, judicial o administrativo.

Es inexacto lo afirmado por la recurrente respecto a que el contrato administrativo de obra pública derive de un acto que realiza el Estado, a través de la dependencia o entidad administrativa, actuando como ente de derecho privado, en una relación de estricta igualdad entre las partes y regido exclusivamente por el Derecho Civil común, ya que de los preceptos reclamados se advierte que la potestad rescisoria examinada es una atribución exclusiva de las entidades y dependencias públicas, que ha sido reconocida como un privilegio especial de los órganos de la Administración Pública, que los colocan en una situación distinta y más favorable de la que rige para los particulares que con ella contratan, característica propia de los contratos administrativos, en donde impera la potestad exorbitante del derecho común, esto es, un régimen contractual excepcional de la Administración, que no disfrutan los sujetos que celebran un contrato de derecho privado.

Al respecto, es importante tomar en cuenta la opinión de Gabino Fraga, quien considera que ***"el régimen excepcional de los contratos administrativos permite considerar como válidas ciertas estipulaciones que no podrían tener efecto en el régimen de contratación civil. Dentro de este último serían contrarias al orden público y, por lo tanto, estarían viciadas de invalidez las cláusulas que invistieran a uno de los contratantes de facultades para imponer de propia autoridad a su contraparte la ejecución forzada de sus obligaciones, las sanciones estipuladas en el contrato o la extinción misma de éste."***

En el mismo orden de ideas, el citado autor reitera lo siguiente: ***"Por el contrario, esas mismas estipulaciones en favor de la Administración dentro de los contratos administrativos se consideran como perfectamente regulares, porque ellas salvaguardan el eficaz cumplimiento de las atribuciones estatales, que de otro modo quedaría impedido si el Estado no dispusiera de medios rápidos y efectivos para poder satisfacer las necesidades colectivas. Y es que el Estado, como ya hemos dicho antes, no puede prescindir de su carácter de poder público aun en las relaciones contractuales, y si no impone como Poder el contrato, impone al que quiere contratar con él condiciones que dejan a salvo ese Poder".***

En la misma línea de pensamiento se encuentra Héctor Jorge Escola, para quien la figura de la rescisión administrativa no es un derecho de la administración, sino un verdadero poder, una potestad administrativa; al respecto, el citado autor señala: …

El reconocimiento de la potestad o facultad de la rescisión administrativa encuentra plena justificación, por la circunstancia de que si en el ámbito civil, donde prevalece como regla general el interés privado, existe la previsión legal de que los contratantes sujetos a este régimen pueden, bajo determinadas condiciones, rescindir motu proprio los contratos bilaterales en que intervengan, sin necesidad de acudir a los tribunales, es lógico que tratándose de la esfera administrativa, en la cual imperan razones superiores, vinculadas al interés general, esa misma facultad pueda ser ejercida por los órganos de autoridad, cuando celebren contratos con particulares, pues con ello la Administración Pública persigue la posibilidad de actuar con mayor oportunidad y eficiencia.

Al respecto, conviene mencionar los criterios sustentados por la anterior Tercera Sala, en la que definió los límites y aplicación relativos al pacto comisorio expreso, figura jurídica similar a la rescisión administrativa, que en seguida se transcriben:

> ***COMPRAVENTA A PLAZOS, PACTO COMISORIO TÁCITO INOPERANTE POR MORA EN EL PAGO DE INTERESES CONVENIDOS EN LA. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE COLIMA Y DEL DISTRITO FEDERAL).***

El poder de la Administración se manifiesta en el hecho de que la rescisión no está sujeta a que el órgano contratante acuda a los tribunales para pedir su declaración, sino que se decreta en el mismo ámbito administrativo, como lo explica el autor citado en último lugar: ***"Por tales razones, y aun cuando no esté prevista en el contrato, tal rescisión puede ser dispuesta unilateralmente por la Administración Pública, sin necesidad de que deba verse obligada a recurrir para ello a la instancia judicial."*** (Páginas 678-679, Compendio de Derecho Administrativo, volumen II; Ediciones Depalma, 1984).

Así, la rescisión del contrato administrativo como facultad otorgada a las dependencias y entidades de la Administración Pública resulta constitucional en la medida de que deriva de una facultad conferida legalmente a la Administración Pública, que ya se reconoció está ajustada a la Constitución General de la República.

Por tanto, si la violación a las garantías protegidas por los artículos 14 y 17 de la Constitución la basa la recurrente en su dicho respecto a que el contrato de obra pública es de naturaleza privada porque en él el Estado actúa como particular en una relación bilateral y de igualdad de condiciones, regida por el derecho civil común, y si como antes se determinó, ello no es así pues dicho contrato es de carácter administrativo y en la relación establecida entre la dependencia o ente de la

Administración Pública y el particular, no existe igualdad ya que aquéllos se colocan en una situación distinta y más favorable de la que rige a quienes con ellos contratan, poseyendo la atribución de rescindir administrativamente el contrato, rescisión que, por ende, constituye un acto de autoridad administrativa ajeno a una mera relación entre particulares, de suerte tal que la rescisión no se traduce en autorización para hacerse justicia por sí mismo y para privar al particular contratante de sus derechos sin haber sido oído y vencido en juicio, sino únicamente en el ejercicio de una facultad legal cuyo establecimiento no contraviene alguna norma de la Constitución pues no impide el acceso a la administración de justicia.

Efectivamente, al ejercer la autoridad administrativa la facultad o potestad de rescisión, no se restringe ni se priva al particular que contrató con la Administración Pública, del derecho constitucional de acceso a la administración de justicia impartida por los tribunales, pues el particular afectado, titular de este derecho, dispone de los instrumentos procesales, previstos en la ley, mediante los cuales puede impugnar eficazmente el acto jurídico-administrativo de la rescisión contractual, como a continuación se explica.

En efecto, el artículo 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establece: ***…***

Asimismo, el artículo 15 de la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas, prevé lo siguiente:…

En apoyo de la argumentación expuesta, cabe señalar que la anterior integración del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte estableció el criterio consistente en que en casos similares al que se estudia, la rescisión de un contrato administrativo decidida por la propia entidad contratante, en cumplimiento de una disposición legal que prevé una medida de esta naturaleza, es un acto administrativo de autoridad, impugnable ante los Tribunales de la Federación, como una cuestión que pertenece a la jurisdicción contenciosa administrativa del orden federal, que compete a los Jueces de Distrito. El criterio aludido está contenido en la jurisprudencia visible en la página 18 de la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación número 78, correspondiente al mes de junio de 1994, con el rubro y texto siguientes:

> ***CONTRATO DE OBRA PÚBLICA. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL CONFLICTO SUSCITADO POR SU RESCISIÓN, PROVENIENTE DE UN ACTO ADMINISTRATIVO DE AUTORIDAD, CORRESPONDE A UN JUZGADO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA…***

Es manifiesta la aplicabilidad de la jurisprudencia transcrita al presente caso, si se atiende a la circunstancia de que aquélla se integró con motivo de conflictos de competencia en materia de amparo, y que en las cinco ejecutorias que la integraron

se trató de contratos de obra pública, celebrados con apoyo en la ley federal de la materia; además, en las ejecutorias correspondientes se hizo mención particular acerca de la naturaleza jurídica de la rescisión administrativa, que es similar a la que en el caso se tomó con fundamento en el precepto reclamado, pues al efecto debe recordarse que la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas substituyó, entre otras, a la Ley de Obras Públicas, incluso en lo que toca a la potestad rescisoria.

Para mayor claridad de lo expuesto, conviene transcribir la parte conducente de la ejecutoria pronunciada por el Tribunal Pleno en la competencia 104/93, el día 11 de abril de 1994, con la cual se formó la jurisprudencia referida; al respecto, se sostuvo:…

Luego, es evidente que los afectados con la declaración de rescisión de un contrato administrativo, pueden promover en contra de la entidad o dependencia que la decretó, el juicio ordinario administrativo federal correspondiente ante un Juez de Distrito, en su caso especializado en materia administrativa, con fundamento en el artículo 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, lo cual satisface plenamente la garantía de acceso a la jurisdicción, tutelada por el artículo 17 de la Constitución Federal, pues no existe obstáculo o restricción alguno para que el particular, como titular de ese derecho público subjetivo, lo haga valer libremente dentro de los plazos respectivos en el juicio contencioso mencionado, y con ese motivo provoque la intervención del tribunal correspondiente, si lo estimara necesario y fuere afectado con la medida rescisoria del contrato administrativo de obra pública en el que intervino.

Los argumentos expuestos reflejan, además, que los artículos reclamados no infringen la garantía de audiencia, porque ésta se respeta en la medida de que en el juicio ordinario al que se alude, el particular puede ejercer el cúmulo de derechos procesales, de carácter fundamental o secundarios, que en ellos se prevén, sin que sea el caso de que en este fallo proceda analizarlos, pues esto sólo puede ocurrir cuando tal proceso se inicie y desarrolle.

Asimismo, debe tenerse presente lo dispuesto por el artículo 92 de la propia Ley de Adquisiciones y Obras Públicas:

Como se advierte, a través del procedimiento previsto en el artículo transcrito, aplicable a las rescisiones administrativas que llevan a cabo las dependencias y entidades por causas imputables a los contratistas, se da cumplimiento a la garantía de audiencia previa al acto privativo, conforme al alcance que a esta garantía ha dado esta Suprema Corte de Justicia de la Nación al delimitar con precisión las formalidades esenciales del procedimiento. Este criterio aparece en la jurisprudencia plenaria publicada en las páginas 133 y 134, Tomo II, correspondiente a diciembre de mil novecientos noventa y cinco, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el siguiente rubro y texto:

FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO…

La confrontación entre las formalidades esenciales del procedimiento que establece el artículo 14, segundo párrafo, de la Constitución Federal, con las que el artículo 92 de la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas, otorga a quienes tienen el carácter de contratistas, a fin de declarar la rescisión del contrato de obra pública respectivo, lleva a la conclusión de que se da cabal cumplimiento a las mismas, en virtud de que al particular contratante se le reconoce expresamente el derecho a que se le comuniquen por escrito los hechos motivo del inicio del procedimiento de rescisión; a que exponga lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes dentro de un término que no será menor de diez días hábiles; y a que se dicte la resolución debidamente fundada y motivada, misma que deberá comunicársele por escrito.

Por último, debe señalarse que habiéndose ya determinado que los artículos 40 de la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas y 52, fracción II, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas, no violan las garantías protegidas por los artículos 14 y 17 de la Carta Magna, resulta innecesario el examen de los planteamientos de la recurrente respecto a la inaplicabilidad de las tesis en que funda la A Quo sus afirmaciones respecto a que a través del contrato de obra pública se presta un servicio público y que cuando éste es contrario a la ley no engendra derechos ni produce consecuencias jurídicas, ya que cualquiera que fuera el resultado del examen de esos pronunciamientos, cuando mucho podría llegarse a concluir que la juzgadora hace afirmaciones inexactas, incorrectas, o bien, que no se comporten, pero no podría alterarse la conclusión ya alcanzada en relación a la constitucionalidad de las normas legales combatidas.

MÉTODOS DE INTERPRETACIÓN UTILIZADO POR LA SCJN
FUNCIONAL. La autoridad administrativa, puede decretar la rescisión de contrato administrativo con un particular, pues ni las normas supremas citadas ni ningún otro precepto constitucional, disponen que la rescisión de un contrato administrativo sólo pueda decretarse por un tribunal, judicial o administrativo. **TELEOLÓGICO.** En el contrato administrativo de obra pública, el estado protege el interés social, el licitante solo tiene interés económico. El contratante con la Administración Pública ante una rescisión tiene el derecho de acudir a defenderse ante tribunales.

b) Contrato de adquisiciones con entidades de la Administración Pública Federal.

i) AMPARO EN REVISIÓN: A.R. 460/2001.

ALCANCES DEL CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. APARTARSE DE SU ALCANCE NO CONLLEVA INCONSTITUCIONALIDAD. **CONTRATO DE ADQUISICIONES, ENTRE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y ENTRE ESTAS ÚLTIMAS.** No pueden ser exentos de las licitaciones públicas al no estar permitido por el artículo 134 constitucional, por lo tanto se estima que el antepenúltimo párrafo del artículo 1° de la LAASSP es inconstitucional.

C O N S I D E R A N D O:

SÉPTIMO. Los agravios resumidos en el considerando anterior resultan infundados por las razones que a continuación se detallarán.

Es infundado el primer agravio esgrimido por las responsables recurrentes, relativo a que el ***Juez de amparo debió estudiar la exposición de motivos del artículo 134 constitucional, para llegar a la conclusión de que los procedimientos de licitación buscan evitar la proliferación de la corrupción en la contratación pública.***

En dicho agravio, las responsables recurrentes parten de premisas inexactas que las llevan a conclusiones equivocadas, porque en principio, debe decirse que si el artículo 134 constitucional precisa claramente que los procedimientos de licitación pretenden asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles de contratación, en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad, y demás circunstancias pertinentes, entonces es innecesario recurrir a la Exposición de Motivos para llegar a las supuestas conclusiones que invocan las responsables, pues tal estudio implica una interpretación de la ley, y la ley sólo se interpreta cuando no es clara, lo que no ocurre en la especie.

A mayor abundamiento sobre este punto, es de tomarse en consideración que suele ocurrir que ***las Exposiciones de Motivos se aparten del sentido verdadero del texto legal y por ello, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha concluido que si una ley se aparta de lo previsto en su Exposición de Motivos, ello no importa su inconstitucionalidad.***

Robustece la anterior consideración la tesis P./J. 15/1992 de la Octava Época, Pleno, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 52, abril de 1992, página 11 que dice:

LEYES. NO SON INCONSTITUCIONALES PORQUE SE APARTEN DE LA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LAS INICIATIVAS QUE LES DAN ORIGEN…

Sobre tales bases, el agravio de las responsables carece de sentido pues es irrelevante el análisis de la Exposición de Motivos en los tiempos actuales.

De la misma forma, el segundo agravio sintetizado en el considerando sexto de esta sentencia, es infundado de conformidad con lo siguiente:

Las responsables, con abundantes razonamientos, insisten en la constitucionalidad del antepenúltimo párrafo del artículo 1° de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y en que el estudio del Juez de Distrito fue incorrecto.

Se destaca que dicho artículo, en la parte combatida es de contenido substancialmente igual al último párrafo del diverso artículo 1° de la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el treinta de noviembre de mil novecientos noventa y tres, hoy abrogada, y para demostrarlo, a continuación se transcriben ambos preceptos.

La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público señala en su primer artículo lo siguiente:

ARTÍCULO 1° (…)

A su vez, el último párrafo del artículo 1° de la abrogada Ley de Adquisiciones y Obras Públicas, en la parte relativa sustancialmente establecía lo mismo que la disposición anterior, sólo que en los siguientes términos:

ARTÍCULO 1° (...)

Demostrado que los dos artículos transcritos, en la parte combatida son substancialmente iguales, al margen de las consideraciones del Juez, y en contestación de los argumentos resumidos en el segundo punto del considerando sexto de esta sentencia, se destaca que esta Segunda Sala, al resolver los amparos en revisión que a continuación se precisan, se ha pronunciado por la inconstitucionalidad del último párrafo del artículo 1° de la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas, substancialmente igual al aquí reclamado…

Pues bien, con base en las consideraciones apuntadas, en aquéllos asuntos invocados como precedentes, que son sustancialmente iguales al presente, en cuanto al contenido jurídico del precepto reclamado y temas tratados, ***esta Segunda Sala***

declara la inconstitucionalidad del antepenúltimo párrafo del artículo 1° de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, modificando en lo conducente las consideración del Juez A quo, en ejercicio de su facultad de plena jurisdicción con respecto al Juez Federal de primer grado, además, provocando con este pronunciamiento que se declare infundado el segundo agravio.

Las consideraciones del asunto que constituyó el primer precedente se insertan a continuación para ilustrar y regir el pronunciamiento de esta sentencia.

EN SESIÓN DE SEIS DE OCTUBRE DE DOS MIL, ESTA SEGUNDA SALA RESOLVIÓ, EL AMPARO EN REVISIÓN 3443/97, ANTES REFERIDO, DICIENDO TEXTUALMENTE LO QUE SIGUE:

> ***QUINTO…*** La lectura de las disposiciones legales anteriormente invocadas permite evidenciar que la disposición contenida en el último párrafo del artículo primero de la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas ***resulta inconstitucional, dado que excluye de la aplicación de la ley los contratos que se celebren entre dependencias y entidades de la Administración Pública y entre éstas últimas, lo que no está permitido por el artículo 134 constitucional, ya que es precisamente esta ley la que reglamenta el precepto constitucional, estableciendo la forma en que se deberán de llevar a cabo las licitaciones y las excepciones a este mecanismo de adjudicación de adquisiciones y obras públicas. --- En efecto, de la invocación que se hizo precedentemente de algunos artículos de la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas se advierte que en este ordenamiento se reglamentan las normas consagradas en el artículo 134 constitucional al disponer la forma en que deberán llevarse a cabo las licitaciones públicas para la adquisición de bienes o realización de obras, los tipos de licitaciones, los requisitos de las convocatorias, los derechos de los concursantes, los casos en que podrán modificarse los aspectos incluidos en una convocatoria, la manera que deberán entregarse las proposiciones, la publicación del ganador, los requisitos de la proposición, las garantías, la posibilidad de rescindir el contrato, las causales para no recibir proposiciones, el acto de apertura de proposiciones, los parámetros de valuación, condiciones de pago, anticipos, los ajustes de costos, etcétera. --- En los artículos 80 a 83 se establecen los supuestos en los que se autoriza no contratar a través del procedimiento de licitación pública, por medio de lo que la ley llama invitación restringida, así como las bases, procedimientos, reglas, requisitos y demás elementos para acreditar la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores***

condiciones para el Estado. --- Así, la exclusión que hace el precepto combatido transgrede lo ordenado por el artículo 134 constitucional, al excluir a determinados contratos del procedimiento de licitación pública sin satisfacer los lineamientos también fijados por el precepto constitucional para los supuestos en los que no se llevará a cabo el procedimiento de licitación pública. --- No es óbice a la conclusión expuesta que se argumente que al tratarse de dependencias y entidades de la propia Administración Pública Federal no es necesario que se realicen las licitaciones correspondientes, ya que en todo caso se trata en última instancia de la propia Administración. Lo anterior no es válido, en primer lugar porque el propio dispositivo constitucional no establece la distinción de que las disposiciones contenidas en su texto no son aplicables a los contratos celebrados entre dependencias y entidades o entre entidades y, por otro lado, es la propia ley impugnada la que establece los mecanismos de supervisión y vigilancia que permiten asegurar que los contratos del Gobierno Federal y del Distrito Federal se celebren con estricto apego a los principios de honradez, eficiencia y eficacia ordenados por el artículo 134 constitucional. De los antecedentes expuestos de este precepto fundamental se desprende que se busca que el Estado obtenga en todo caso las mejores condiciones al contratar, lo que en principio sólo se otorga a través del procedimiento de licitación pública, por lo que no basta para justificar la exclusión que hace el precepto combatido que se trate de entidades y dependencias de la Administración Pública Federal. No debe perderse de vista que en el propio artículo 134 constitucional se establece que el desempeño de la función pública deberá hacerse buscando la eficiencia, la eficacia y la honradez, estableciéndose como mecanismo idóneo para satisfacer estas pautas la celebración de licitaciones públicas, lo que desde luego involucra que también la Administración Pública, tanto centralizada o paraestatal está obligada a participar en ellas, precisamente para satisfacer plenamente la finalidad del numeral 134 del Código Supremo, que es la de buscar siempre las mejores condiciones para el Estado.

Así las cosas, por las razones jurídicas antes transcritas, se estima que el antepenúltimo párrafo del artículo 1° de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público es inconstitucional, y que es infundado el segundo agravio esgrimido por las responsables.

El último argumento que falta por contestar es el que se sintetiza con el número 3, en el considerando sexto de esta resolución, el cual resulta infundado de conformidad con lo siguiente.

Para responder el argumento de las responsables, conviene transcribir el párrafo de la demanda de amparo al que aluden en la parte final de sus agravios…

De la lectura anterior, resulta evidente que nuevamente las autoridades parten de una premisa equivocada, que a partir de ella realizan un razonamiento confuso, y que llegan a conclusiones incorrectas.

En efecto, en su demanda de amparo, la quejosa hizo referencia a los artículos 41, 42 y 43 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para decir que en ellos se establecen y regulan los casos de excepción a la licitación pública, a los que se hace referencia en el tercer párrafo del artículo 134 constitucional, sin que ello implique, en modo alguno, sometimiento al mandato de ley que impugna.

En efecto, los preceptos antes referidos establecen, con abundantes especificaciones y detalles, los procedimientos que deben cumplirse en las contrataciones en las que las dependencias y entidades de la Administración Pública sean parte, cuando no se realicen a través de licitación, lo cual es indispensable para cumplir con lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 134 constitucional, pues es menester garantizar al Estado, óptimas condiciones de contratación, y el hecho de que la quejosa los haya referido en su demanda de amparo, no implica en forma alguna, que se haya sometido al mandato de la norma que ataca.

Así las cosas, este último agravio esgrimido por las autoridades responsables, Presidente de la República y Secretario de la Contraloría y Servicios Administrativas, debe declararse infundado, al otorgar a las afirmaciones y manifestaciones de la parte quejosa, alcances diferentes a los que en realidad pretende, pues no es posible aceptar que en el caso se dio un "sometimiento al mandato de la ley", y mucho menos un "consentimiento" de la norma impugnada, pues el argumento relativo parece envolver aquella figura que anula la posibilidad del estudio de fondo en amparo, de una ley o de un acto de autoridad, supuesto que no se actualiza en este asunto.

Por último, no pasa inadvertido para esta Segunda Sala, que existe sentencia previa, de ella misma, dictada el diecisiete de noviembre del dos mil, en el expediente de revisión número 590/2000, relativo al juicio de amparo promovido por la misma quejosa, Seguros Comercial América, sociedad anónima de capital variable, en la que se declaró la inconstitucionalidad del último párrafo del artículo primero de la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta de diciembre de mil novecientos noventa y tres, hoy abrogada, inconstitucionalidad que hizo extensiva a los “Lineamientos que Deberán Observar las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal en los Procedimientos de Contratación de Seguros de Bienes Patrimoniales y de Personas”, emitidos por el Secretario de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, el veintiocho de julio de mil novecientos noventa y siete, especialmente en lo que se refiere al lineamiento quinto.

Ahora, si bien es cierto que los lineamientos mencionados no tienen vida propia, sino que fueron expedidos como dependientes de la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas, mencionada en el párrafo que antecede, también lo es que al día de hoy mantienen su vigencia, aunque referidos ahora a otro ordenamiento, como lo es la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, publicada en el Diario Oficial de la Federación del cuatro de enero de dos mil, en razón de lo dispuesto en el artículo tercero transitorio de esta ley, que dice: ***"TERCERO. Las disposiciones administrativas expedidas en esta materia, vigentes al momento de la publicación de este ordenamiento, se seguirán aplicando en todo lo que no se opongan a la presente ley, en tanto se expiden las que deban sustituirlas."***

Por lo anterior, resulta que los "Lineamientos que Deberán Observar las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal en los Procedimientos de Contratación de Seguros de Bienes Patrimoniales y de Personas", emitidos por el Secretario de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, el veintiocho de julio de mil novecientos noventa y siete, son nuevamente impugnables en amparo, lo que se hizo en el presente juicio de garantías; y en razón de haberse declarado la inconstitucionalidad de la ley de la que ahora dependen, aquí se vuelve a declarar, pero ahora como "reglamentarios" y "dependientes" de la nueva norma***…***

MÉTODOS DE INTERPRETACIÓN UTILIZADOS POR LA SCJN
SISTEMÁTICO. Los preceptos antes referidos establecen, con abundantes especificaciones y detalles, los procedimientos que deben cumplirse en las contrataciones en las que las dependencias y entidades de la Administración Pública sean parte, cuando no se realicen a través de licitación, lo cual es indispensable para cumplir con lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 134 constitucional. **FUNCIONAL.** La exposición de motivos no forma parte de la normatividad positiva constitucional. **TELEOLÓGICO.** No debe perderse de vista que en el propio artículo 134 constitucional se establece que el desempeño de la función pública deberá hacerse buscando la eficiencia, la eficacia y la honradez, estableciéndose como mecanismo idóneo para satisfacer estas pautas la celebración de licitaciones públicas, lo que desde luego involucra que también la Administración Pública, tanto centralizada o paraestatal está obligada a participar en ellas, precisamente para satisfacer plenamente la finalidad del numeral 134 del código supremo, que es la de buscar siempre las mejores condiciones para el estado.

c) Contrato de adquisiciones.
Naturaleza jurídica.
Incumplimiento
cláusulas esenciales ..... C.T. 86/2007-PS, p. 344; A.R. 851/2006, p. 330; A.R. 219/2001, p. 350

d) Contrato de obra pública.....A.R. 225/99, p. 363

e) Gastos financieros por incumplimiento
contractual. Cláusulas esenciales, naturales
e incidentales ..... C.T. 86/2007-PS, p. 344

f) Pacto comisorio expreso (rescisión).....A.R. 159/2000, p. 353

g) Rescisión de ..... C.T. 17/2005-PL, p. 302; A.R.159/2000, p. 353 A.R. 225/99, p. 363

G) EXTRANJEROS PARTICIPACIÓN DE.
EN LICITACIONES..... A.R. 1725/2004, p. 309; A.R. 1520/2004, p. 377

i) AMPARO EN REVISIÓN: A.R. 1520/2004.

ALCANCES DEL CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN
EXCLUSIÓN DE EXTRANJEROS EN LICITACIONES PÚBLICAS. El artículo 28 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, establece que en las licitaciones internacionales podrá negarse la participación a extranjeros, cuando con el país del cual sean nacionales no se tenga celebrado un tratado y ese país no conceda un trato recíproco a los licitantes. **LIBERTAD DE TRABAJO.** Artículo 28, último párrafo de la LAASSP, **NO VIOLA LOS ARTS. 5° y 134 CONSTITUCIONALES.** El artículo 5° de la Constitución Federal, que consagra la garantía de libertad de profesión, industria, comercio o trabajo, no es irrestricta y su ejercicio debe darse sin perjuicio de la sujeción a las diversas disposiciones que dicten las autoridades legislativas para reglamentar su realización y proteger el interés público. Cuando no exista una obligación derivada de instrumentos internacionales o de principios de reciprocidad internacional, no se transgreden los postulados contenidos en el artículo 134 de la Constitución.

C O N S I D E R A N D O :

A fin de estar en posibilidad de determinar si la norma reclamada viola los artículos 5° y 134 de la Constitución, resulta pertinente referirse al contenido de estas disposiciones supremas, así como a las garantías que en ellas se contienen. no se impide que los recursos económicos de los Gobiernos Federal y del Distrito Federal se administren con eficiencia, eficacia y honradez para satisfacer los objetivos a que están destinados, ni mucho menos que el Estado pueda asegurar las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes al realizar las licitaciones públicas internacionales.

El artículo 5° de la Constitución Federal, que consagra la garantía de libertad de profesión, industria, comercio o trabajo, no es irrestricta y su ejercicio debe darse sin perjuicio de la sujeción a las diversas disposiciones que dicten las autoridades legislativas para reglamentar su realización y proteger el interés público.

El texto original del numeral constitucional en estudio establecía:

“Artículo 134 (...)”

De la anterior transcripción se desprende que desde la redacción original del artículo 134 del Código Supremo se contemplaban las disposiciones respecto a la forma en la que el Estado debía contratar, esto es, a través de licitaciones públicas. En el dictamen de la Comisión de Constitución se destaca que la teleología del precepto es la de evitar los fraudes y favoritismos del antiguo régimen para así garantizar al Gobierno al contratar, las mejores condiciones posibles.

Específicamente, el art. 28 de la LAASSP establece los tipos de licitaciones públicas que podrán efectuarse, a saber, nacionales e internacionales; las primeras cuando sólo puedan participar personas de nacionalidad mexicana y los bienes a que se refieran sean producidos en el país y cuenten por lo menos con un cincuenta por ciento de contenido nacional, mientras que ***en las licitaciones internacionales pueden participar tanto personas de nacionalidad mexicana como extranjera y los bienes a adquirir sean de origen nacional o extranjero; el último párrafo de la disposición legal impugnada que en las licitaciones internacionales señala que podrá negarse la participación de extranjeros cuando con el país del cual sean nacionales no se tenga celebrado un tratado y ese país no conceda un trato recíproco a los licitantes, proveedores, bienes o servicios mexicanos, esto es, cuando no exista una obligación derivada de instrumentos internacionales o de principios de reciprocidad internacional, no se transgreden los postulados contenidos en el artículo 134 de la Constitución, dado que al otorgarse a la dependencia o entidad la facultad discrecional de determinar si en las***

licitaciones públicas internacionales que convoquen se permitirá o no la participación a los extranjeros cuando no exista obligación de permitir su participación por virtud de la existencia de tratados internacionales o trato de reciprocidad internacional, no se impide que los recursos económicos de los Gobiernos Federal y del Distrito Federal se administren con eficiencia, eficacia y honradez para satisfacer los objetivos a que están destinados, ni mucho menos que el Estado pueda asegurar las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes al realizar las licitaciones públicas internacionales.

MÉTODOS DE INTERPRETACIÓN UTILIZADOS POR LA SCJN
GENÉTICO. Estudia la evolución del art. 134 Constitucional. **TELEOLÓGICO.** Toma en cuenta la teleología del precepto: evitar los fraudes y favoritismos del antiguo régimen para así garantizar al Gobierno al contratar, las mejores condiciones posibles.

H) FIANZAS..... C.T. 17/2005-PL, p. 302; C.T. 29/2005-PS, p. 379

i) CONTRADICCIÓN DE TESIS: C.T. 29/2005-PS.

ALCANCES DEL CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN
CADUCIDAD DE LAS FIANZAS REGIDAS POR LA LEY DE ADQUISICIONES ABROGADA. La exigibilidad del pago de garantías, en los casos regidos por la ley que se analiza, y en el supuesto de que las autoridades administrativas hubieran declarado la rescisión administrativa de un contrato de obra pública, debe considerarse a partir precisamente de la notificación de esta declaración al fiado y no del momento en que se realizó el acto de incumplimiento por parte del contratista. **TÉRMINO PARA LA CADUCIDAD.** Los plazos, deben computarse a partir de que se notifique al fiado la resolución de rescisión que prevé el artículo 72, fracción II, de dicha ley, en el caso de que la autoridad contratante hubiera ejercido dicha facultad.

C O N S I D E R A N D O:

SEXTO. En relación con la materia de la contradicción de tesis, resulta indispensable en primer término establecer algunos lineamientos generales acerca de la naturaleza de los contratos de obra pública…

En los contratos de obra pública, el contratista asume diversas obligaciones, entre ellas se encuentra, como obligación principal, la de ejecutar la obra objeto del contrato; y como consecuencia de esta obligación se generan otras, como son:

a) Garantizar el cumplimiento de la obligación principal (artículo 59, tercer párrafo, de la Ley).

b) Cumplir con los reglamentos de construcción (artículo 79 bis de la Ley).

c) Responder por los vicios ocultos (artículo 75 de la Ley).

Ahora bien, en relación con el contrato de fianza, el artículo 113 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas establece:…

En este orden de ideas, jurídicamente es apropiado analizar la naturaleza del contrato de fianza y la exigibilidad de las obligaciones que de él se derivan a la luz de lo dispuesto en el Código Civil Federal, que en sus artículos 2794, 2797, 2190 y 2080, establece:…

De lo anterior se advierte que el contrato de fianza es de naturaleza accesoria, pues su vida jurídica depende de la existencia de un diverso en el que el deudor adquiere una obligación con el acreedor; siendo precisamente la falta de cumplimiento de esta obligación la materia de regulación en el contrato de fianza, que se traduce en la obligación que adquiere la afianzadora de pagar al acreedor en caso de que el deudor no cumpliera con la obligación adquirida.

Ahora bien, conforme a los preceptos transcritos, la exigibilidad del pago se dará en función de la imposibilidad jurídica de rehusarlo, es decir, cuando exista certeza jurídica en relación al incumplimiento en que ha incurrido el deudor.

En este orden de ideas, al ser el contrato de fianza un contrato accesorio, en el presente caso, al de obra pública, no puede desvincularse de la naturaleza de éste, es decir, de su naturaleza de acto administrativo, así como tampoco de las disposiciones que lo regulan, pues, como se ha mencionado, la voluntad del Estado de obligarse se encuentra regida precisamente por dichas disposiciones.

Los contratos de obra pública, de los que emanan los contratos de fianza analizados por los Tribunales Colegiados contendientes se regían por la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas (abrogada por el artículo segundo transitorio de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; y derogada por el

artículo segundo transitorio de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en lo relativo a la materia de obra pública, ambos ordenamientos publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de enero de dos mil), la cual en sus artículos 40, 72, fracción II, y 73 señalaba:…

Precisado lo anterior, debe puntualizarse que el artículo 120 de la Ley de Instituciones de Fianzas establece:…

En los dos primeros párrafos del precepto transcrito el legislador establece tres hipótesis:

1. Cuando la institución de fianzas se hubiere obligado por tiempo determinado, quedará libre de su obligación por caducidad si el beneficiario no presenta la reclamación de fianza dentro del plazo que se haya estipulado en la póliza.

2. Cuando la institución de fianzas se hubiere obligado por tiempo determinado, quedará libre de su obligación por caducidad si el beneficiario no presenta la reclamación de fianza dentro de los ciento ochenta días naturales siguientes a la expiración de la vigencia de la fianza.

3. Cuando la institución de fianzas se hubiere obligado por tiempo indeterminado, quedará libre de su obligación por caducidad si el beneficiario no presenta la reclamación de fianza dentro de los ciento ochenta días naturales siguientes a partir de la fecha en que la obligación garantizada se vuelva exigible, por incumplimiento del fiado.

Tratándose de las hipótesis previstas en los puntos 1 y 3 anteriores, el legislador establece a favor del beneficiario, el derecho de hacer efectiva la fianza, no a partir de un momento determinado, sino a partir de la exigibilidad de la obligación en ella garantizada, de acuerdo a las circunstancias propias del caso concreto, sea dentro del plazo estipulado en el contrato, sea en el término de ciento ochenta días, dependiendo de si se trata de un contrato de póliza a tiempo determinado o indeterminado.

Sin embargo, tratándose de contratos de obra pública, regidos por la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas (abrogada por el artículo segundo transitorio de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; y derogada por el artículo segundo transitorio de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en lo relativo a la materia de obra pública, ambos ordenamientos publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de enero de dos mil), que ***otorgaba la facultad a la Entidad contratante de resolver sobre la rescisión del contrato, impidiéndole, para el caso, hacer exigible cualquier garantía hasta en tanto no fuera declarada dicha rescisión, debe darse una interpretación congruente*** con esto al mencionado artículo 120 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas; pues, como ya se dijo, ***la voluntad del Estado no es autónoma y, por tanto,***

no puede considerarse únicamente al contrato como expresión de la misma, ya que de ser así cualquier requerimiento de pago de garantías previo a la declaración de rescisión, resultaría contrario al texto legal que regía los contratos de obra pública.

En este panorama jurídico, resulta claro que si en los casos analizados por los Tribunales Colegiados contendientes, las autoridades que fueron parte en los contratos de obra pública, al advertir el incumplimiento por parte del contratista ejercieron su facultad de declararlos rescindidos, legalmente se encontraban impedidas para exigir el pago de garantía alguna previamente a que esa declaración fuera notificada, pues la voluntad estatal, en este sentido se encuentra regida en los términos legales precisados y no era necesario que se reiterara en el acto administrativo correspondiente.

Por tanto, la exigibilidad del pago de garantías, en los casos regidos por la ley que se analiza, y en el supuesto de que las autoridades administrativas hubieran declarado la rescisión administrativa de un contrato de obra pública, debe considerarse a partir precisamente de la notificación de esta declaración al fiado y no del momento en que se realizó el acto de incumplimiento por parte del contratista, pues legalmente dichas autoridades, en este último momento, se encontraban impedidas legalmente para exigir a la afianzadora que cubriera el monto correspondiente.

Por tanto, tratándose de contratos de obra pública regidos por la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas, (abrogada por el artículo segundo transitorio de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Sector Público, y derogada por el artículo segundo transitorio de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en lo relativo a la materia de obra pública, ambos ordenamientos publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de enero de dos mil), ***los plazos que se prevén en el artículo 120 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, para que se configure la caducidad, de acuerdo al que se "haya estipulado en la póliza" (cuando la institución de fianzas se hubiere obligado por tiempo determinado) o de ciento ochenta días (cuando lo hubiera hecho por tiempo indeterminado) deben computarse a partir de que se notifique al fiado la resolución de rescisión que prevé el artículo 72, fracción II, de dicha ley, en el caso de que la autoridad contratante hubiera ejercido dicha facultad.***

En este orden de ideas, el criterio que debe prevalecer con el carácter de jurisprudencia, es el siguiente.

FIANZAS PARA GARANTIZAR OBLIGACIONES DERIVADAS DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA. SU CADUCIDAD DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE QUE LA

AUTORIDAD ADMINISTRATIVA NOTIFICA LA RESCISIÓN POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA.

MÉTODOS DE INTERPRETACIÓN UTILIZADOS POR LA SCJN
FUNCIONAL. Las autoridades administrativas pueden declarar la rescisión administrativa de un contrato de obra pública, a partir precisamente de la notificación de esta declaración al fiado y no del momento en que se realizó el acto de incumplimiento por parte del contratista. **SISTEMÁTICO.** Interpretó de manera conjunta los artículos 120 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, y el artículo 72, fracción II, de dicha ley.

a) Fianza de empresa (afianzadora) .....C.T. 17/2005-PL, p. 302

b) Exigibilidad de la fianza .....C.T. 17/2005-PL, p. 302

I) GARANTÍAS.

a) De audiencia..... A. R. 626/2010, p. 383; A.R. 967/2006, p. 342
A.R. 587/2011, p. 385; A.R. 169/2001, p. 390
A.R.159/2000, p. 353

i) AMPARO EN REVISIÓN: A.R. 626/2010.

ALCANCES DEL CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN
LICITANTE Y JUNTA DE ACLARACIONES. El requisito de asistir a la junta de aclaraciones, para que los interesados puedan impugnar posteriormente, mediante la interposición de la inconformidad, los actos relacionados con las bases de licitación o la junta de aclaraciones, pues de lo contrario, se desechará dicho recurso; tampoco tiene justificación constitucional. **GARANTÍA DE AUDIENCIA.** Tampoco tiene justificación constitucional, al igual que sucede con el diverso de asistir a esa junta para formular objeciones, porque aquella tiene como fin evidente el dilucidar las dudas que tuvieran los participantes sobre la licitación pública, de modo que los que no tuviesen dudas tendrán la opción de asistir a ellas, pero no significa que pierdan interés jurídico para impugnar las modificaciones hechas a las bases de licitación si no asisten, pues de ser así sería contrario a la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 de la Constitución Federal.

La Primera Sala señaló que la junta de aclaraciones no puede ser el momento procesal oportuno para objetar algunos actos del procedimiento de licitación, lo cual se explica tomando en cuenta los numerales 31, fracción II, y 33, fracciones II y III, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como el artículo 27 de su reglamento.

C O N S I D E R A N D O:

1. LICITANTE ASISTA A LA JUNTA DE ACLARACIONES. Para dar respuesta a los agravios, la autoridad recurrente aduce que el artículo 65 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, distinta a la aplicada de la quejosa, dejó de asistir a la junta de aclaraciones y el criterio de inconstitucionalidad está encauzado a los participantes que precisamente asisten a ella, pero omiten plantear objeciones a las bases de licitación o sus modificaciones, por lo que es patente que el problema jurídico planteado radica en determinar si es aplicable una jurisprudencia a un caso distinto, para concluir si es inconstitucional o no otro apartado de ese precepto legal.

2. GARANTÍA DE AUDIENCIA. Artículos 31, fracción II, y 33, fracción II y III de la LAASSP. La Primera Sala señaló que la junta de aclaraciones no puede ser el momento procesal oportuno para objetar algunos actos del procedimiento de licitación, lo cual se explica tomando en cuenta que los numerales 31, fracción III, y 33, fracciones II y III, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como en el 27 de su reglamento, disponen:

"ARTÍCULO 31. I, II", "ARTÍCULO 33. I, II y III", "ARTÍCULO 27 (...)"

Las anteriores consideraciones forman convicción de que el requisito de asistir a la junta de aclaraciones, para que los interesados puedan impugnar posteriormente, mediante la interposición de la inconformidad, los actos relacionados con las bases de licitación o la junta de aclaraciones, pues de lo contrario, se desechará dicho recurso; tampoco tiene justificación constitucional, al igual que sucede con el diverso de asistir a esa junta para formular objeciones, porque aquella tienen como fin evidente el dilucidar las dudas que tuvieran los participantes sobre la licitación pública, de modo que los que no tuviesen dudas tendrán la opción de asistir a ellas, pero no significa que pierdan interés jurídico para impugnar las modificaciones hechas a las bases de licitación si no asisten, ya que puede acontecer que el órgano licitador haga cambios en esas bases que beneficien a un asistente en perjuicio de los restantes participantes que dejaron de asistir –por no tener dudas–, en notorio detrimento del principio de imparcialidad.

Bajo esa óptica jurídica, resulta innegable que los requisitos de mérito y el consecuente desechamiento de la inconformidad si no se cumplen aquéllos, son contrarios a la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 de la Constitución Federal, pues los términos fijados por el legislador para tramitar y resolver dicho recurso son injustificados al desconocer que los interesados pueden optar por no asistir a las juntas de aclaraciones, ya que constituye una prerrogativa para ellos si no tienen dudas sobre las bases de la licitación, y no por eso pierden el derecho a impugnar los actos dictados durante el procedimiento relativo que les afecten, por estimarlos que transgreden el principio de imparcialidad previsto en el artículo 134 de la Carta Fundamental.

Por estas razones, son infundados los agravios de la parte recurrente en el sentido de que el artículo 65, fracciones I y III, párrafo tercero, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, no vulnera la garantía de audiencia establecida en el artículo 14 de la Constitución Federal, al afirmar que la jurisprudencia 154/2007 de la Primera Sala de este Alto Tribunal no resulta aplicable al requisito legal de asistir a la junta de aclaraciones dentro del proceso de licitación pública para estar en posibilidad de que se admita la inconformidad, pues quedó en evidencia que tampoco tiene justificación válida.

MÉTODOS DE INTERPRETACIÓN UTILIZADOS POR LA SCJN
SISTEMÁTICO. Porque analiza en conjunto los artículos 31 y 33 de la ley, así como el 27 de su reglamento. **LÓGICO.** Asistir a la junta de aclaraciones es una prerrogativa pues puede no asistir por no requerir aclaración el licitante, sin perder el interés jurídico para impugnar.

ii) AMPARO EN REVISIÓN: A.R. 587/2011.

ALCANCES DEL CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN
PRECIO CONVENIENTE. Su fijación por autoridad administrativa, no es un acto arbitrario de la administración. • El porcentaje fijado en las políticas, bases y lineamientos de las dependencias y entidades, a fin de descontarlo del promedio de los precios preponderantes, no podrá ser inferior al cuarenta por ciento. **GARANTÍA DE AUDIENCIA.** No se violenta por la autoridad al designar el precio conveniente, en tanto, resulta imposible jurídicamente exigirle al legislador que realice el cálculo de los precios preponderantes con base en el previo anuncio de

los precios ofertados por todos los competidores o bien, con apoyo en alguna tarifa registrada, pues ello sí tornaría inconstitucional el procedimiento.

GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA. Si el propio sistema normativo en materia de licitaciones públicas establece tanto las reglas para la determinación del precio conveniente como los límites del ejercicio de la facultad discrecional de la entidad licitante para fijar el porcentaje que podrá descontar del promedio de los precios preponderantes, entonces no se está en presencia de una facultad arbitraria que genere incertidumbre en el licitante y, por tanto, se respeta la garantía de seguridad jurídica prevista en el artículo 16 constitucional.

C O N S I D E R A N D O:

CUARTO.- … La parte quejosa aduce en su primer concepto de violación que los preceptos reclamados violan la garantía de seguridad jurídica contenida en el artículo 16 constitucional[228], pues conceden a la autoridad licitante una facultad arbitraria para determinar el precio conveniente, lo que le dificulta proponer en la licitación pública el precio adecuado.

Al respecto, la garantía de seguridad jurídica contenida en el artículo 16 constitucional se respeta por las autoridades legislativas cuando las disposiciones de observancia general generan certidumbre a los gobernados sobre las consecuencias jurídicas de sus actos y tratándose de normas que confieren alguna facultad a una autoridad, cuando acotan en la medida necesaria y razonable tal atribución, en forma tal que se impida a la respectiva autoridad actuar de manera arbitraria o caprichosa, en atención a las normas a que debe sujetarse al ejercer dicha facultad.

En este orden de ideas, puede afirmarse que el motivo de inconstitucionalidad en estudio es infundado, por dos razones fundamentales: (i) si se revisa el sistema normativo relacionado con la licitación pública, se advierte que es claro el proceso de determinación del precio conveniente; y, (ii) se trata de un procedimiento de interés público, por lo que no es factible prevalerse de un interés privado para impugnarlo. Todo ello se demuestra a continuación.

De la lectura del artículo 2º, fracción XII impugnado se desprende cuál es el procedimiento a seguir para determinar cuál será el precio conveniente, mismo que consiste en obtener el promedio de los precios preponderantes que resulten de las

[228] "Art. 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. (….)"

proposiciones aceptadas técnicamente en la licitación, y a éste se le resta el porcentaje que determine la dependencia o entidad en sus políticas, bases y lineamientos.

Si bien es cierto que la ley no dispone cuál será el referido porcentaje a descontar, o bien, los parámetros para determinarlo, el Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público sí lo hace en su artículo 51, apartado B:…

Según se aprecia, si bien la ley y el reglamento remiten al porcentaje fijado en las políticas, bases y lineamientos de las dependencias y entidades, a fin de descontarlo del promedio de los precios preponderantes, también es cierto que el propio reglamento establece que dicho porcentaje no podrá ser inferior al cuarenta por ciento, sin que sobre este tópico la Constitución Federal prevea una reserva de ley.

En este aspecto, es cierto que la ley reconoce un cierto margen de libertad para la autoridad administrativa a fin de determinar cuál será el porcentaje que habrá de sustraer del promedio de los precios preponderantes, sin embargo, también se le establecen directrices en el reglamento que desarrolla o pormenoriza a la ley, mismas que se deberán respetar durante el procedimiento de licitación.

De ahí que si el propio sistema normativo en materia de licitaciones públicas establece tanto las reglas para la determinación del precio conveniente como los límites del ejercicio de la facultad discrecional de la entidad licitante para fijar el porcentaje que podrá descontar del promedio de los precios preponderantes, entonces no se está en presencia de una facultad arbitraria que genere incertidumbre en el licitante y, por tanto, se respeta la garantía de seguridad jurídica prevista en el artículo 16 constitucional.

En cuanto a la afectación material de la que se prevale la quejosa, ya se ha dicho que de acuerdo con el numeral 134 de la Constitución Federal, en las licitaciones públicas se convoca a los participantes para que libremente presenten proposiciones en *sobre cerrado*, que será abierto públicamente, *a fin de asegurar al Estado* las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. ***Por tanto, es una exigencia constitucional que ninguno de los participantes pueda conocer, antes de la apertura de las proposiciones económicas, cuáles son los precios ofertados por los licitantes*** y, por ende, cuál será al final del día el precio conveniente. Este sistema tiene un propósito de interés público, que consiste en el manejo de los recursos con eficiencia, eficacia y honradez, a fin de asegurar las mejores condiciones de contratación para el Estado, principio que debe prevalecer sobre el interés privado de

la quejosa, que se traduce tener la certeza de que resultar vencedora y se le adjudique el contrato.

En síntesis, si el Constituyente exige que las propuestas de precio no se conozcan de antemano, y el legislador ha establecido las reglas para determinar cuál será, en definitiva y en cada caso concreto, el precio conveniente, ello no puede traer consigo inseguridad jurídica al gobernado en términos del artículo 16 constitucional y, en consecuencia, el artículo 2º, fracción XII impugnado sí se apega a la Carta Magna.

La quejosa también se duele de que una de las condiciones para resultar vencedor en la licitación pública consiste en que el precio ofertado no debe ser menor al precio conveniente, pues a su juicio no es razonable esta disposición, prevista de manera particular en el artículo 36 bis, fracción II, de la ley impugnada.

Este argumento es infundado. Como ya se precisó, el artículo 134 constitucional exige que la entidad convocante lleve a cabo el estudio de las propuestas de prestación del servicio a contratar al tenor de los principios rectores de eficiencia, eficacia y honradez, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

Corresponde al legislador establecer las bases conforme a las cuales podrá determinarse cuál será el mejor precio para el Estado, y así surge el concepto de "precio conveniente", el cual es producto del promedio de los precios preponderantes y de la resta de un porcentaje. No se trata, pues, de un precio de mercado cualquiera, sino de aquél que garantizará al Estado condiciones de contratación favorables no sólo desde un punto de vista monetario, sino también en términos de eficacia y eficiencia.

Ahora bien, el mecanismo de evaluación al que se refieren los preceptos impugnados es el denominado "precio más bajo", de ahí que por cuestiones de eficiencia y eficacia en el tipo de servicio que se pretende obtener y evitar así posibles incumplimientos por parte del prestador, sea necesario establecer un tope mínimo del precio de contratación. ***De otro modo, se fomentaría la práctica de ofrecer precios sumamente bajos que no garantizarían la obtención de un buen servicio y, por lo tanto, la satisfacción de las necesidades del ente convocante.***

Lo anterior se puede refrendar de la propia exposición de motivos de las reformas a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día veintiocho de mayo de dos mil nueve.

De ahí que las previsiones contenidas en las normas impugnadas no sean arbitrarias o caprichosas, sino que respondan a necesidades de orden público elevadas a rango constitucional, como son la eficacia y eficiencia en la prestación del servicio, y no de manera aislada a la consideración de que se trata del precio más bajo. Por lo tanto, desde ese punto de vista, las normas

impugnadas no violan la garantía de seguridad jurídica prevista en el artículo 16 constitucional.

En el mismo concepto de violación, la quejosa hace depender la inconstitucionalidad del artículo 36 bis, fracción II, de su contradicción con el artículo 2º, fracción XII, al tenor de un criterio aislado de esta Primera Sala que exige una contradicción entre las dos normas de igual jerarquía, a fin de generar inseguridad jurídica. Dicho criterio es el siguiente:

> ***Novena Época; Instancia: Primera Sala; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; XXXI, Febrero de 2010; Tesis: 1a. XI/2010; Pág: 109***
>
> ***AMPARO CONTRA LEYES. LA INCONSTITUCIONALIDAD DE ÉSTAS PUEDE DERIVAR DE LA CONTRADICCIÓN CON OTRAS DE IGUAL JERARQUÍA, CUANDO SE DEMUESTRE VIOLACIÓN A LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA.***

En el caso concreto, de los conceptos de violación no se advierte cuál es la supuesta incongruencia que existe entre las dos normas impugnadas susceptible de generar, *per se*, inseguridad jurídica, y por otro lado, no ha quedado demostrado que las reglas de licitación a que se refieren los numerales en estudio transgredan de modo alguno la garantía de seguridad jurídica, por tal motivo debe declararse inoperante esta porción del concepto de violación.

En cuanto a su segundo concepto de violación, éste también debe declararse infundado. En efecto, la garantía de audiencia prevista en el segundo párrafo del artículo 14 constitucional consiste en el derecho de ser oído y vencido previamente en juicio antes de ser privado de un derecho, respetándose las formalidades esenciales del procedimiento, tales como el emplazamiento o notificación del proceso o procedimiento, la apertura de un periodo de pruebas y alegatos, así como sentencia o resolución definitiva.[229]

Si bien es cierto que la garantía de audiencia presupone la necesidad de que los hechos y datos en los que la autoridad se basa para iniciar un procedimiento que puede culminar con privación de derechos, sean del conocimiento del particular a través del acto de notificación, lo cierto es que el perjuicio que invoca se relaciona con el hecho de que no está en condiciones de conocer los precios preponderantes para calcular el precio conveniente y así obtener la adjudicación del contrato, siendo que como ya quedó demostrado en líneas anteriores, es el propio constituyente quien exige que los licitantes

[229] En cuanto al contenido y alcances de la garantía de audiencia, resulta ilustrativo el contenido de la siguiente jurisprudencia: **AUDIENCIA, RESPETO A LA GARANTÍA DE. DEBEN DARSE A CONOCER AL PARTICULAR LOS HECHOS Y MOTIVOS QUE ORIGINAN EL PROCEDIMIENTO QUE SE INICIE EN SU CONTRA…**

realicen sus propuestas de manera confidencial, en sobre cerrado, a fin de garantizar las mejores condiciones para el Estado. De ahí que resulta imposible jurídicamente exigirle al legislador que realice el cálculo de los precios preponderantes con base en el previo anuncio de los precios ofertados por todos los competidores o bien, con apoyo en alguna tarifa registrada, pues ello sí tornaría inconstitucional el procedimiento.

Lo anterior sin menoscabo de que los licitantes no tienen derecho alguno a resultar vencedores, en virtud de que la licitación pública es un procedimiento previo a la contratación, cuya finalidad es determinar quién es la persona que ofrece las condiciones más ventajosas para el Estado, previa valoración de las mejores condiciones de precio, calidad, financiamiento, la oportunidad, entre otras, de ahí que tampoco pueda sostenerse que se les ha privado de un derecho sin ser previamente oídos y vencidos en juicio. Lo anterior permite concluir que los preceptos reclamados no transgreden la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 constitucional.

En estas condiciones, al ser infundados por una parte y por otra inoperantes los conceptos de violación expuestos por el recurrente, y estar en presencia de un asunto de estricto derecho, lo procedente es, en la materia de la revisión, confirmar la sentencia recurrida y negar el amparo solicitado.

MÉTODOS DE INTERPRETACIÓN UTILIZADOS POR LA SCJN
TELEOLÓGICO. Las leyes señalan la manera de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. **FUNCIONAL.** La autoridad administrativa está cumpliendo con su obligación de que el precio conveniente se fije para garantizar la observancia de los principios constitucionales que rigen en materia de licitación pública y que no se conozcan previamente los precios a ofertar.

iii) <u>AMPARO EN REVISIÓN: A.R. 169/2001.</u>

ALCANCES DEL CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN
GARANTÍA DE AUDIENCIA. No opera para empresas en suspensión de pagos, previa a derechos licitatorios. **LIBERTAD DE TRABAJO.** No es irrestricta, debe cumplir los términos de ley.

GARANTÍA DE LEGALIDAD EN MATERIA DE PROCESOS LEGISLATIVOS. NO SE INFRINGE EN LA CREACIÓN DE LA LAASSP. La ley debe estar redactada de tal forma, que los términos mediante los cuales especifique los elementos normativos respectivos, sean claros, precisos y exactos; esto es, que la autoridad legislativa no puede sustraerse al deber constitucional de consignar en las leyes que expide expresiones y conceptos claros y precisos, de manera que cualquier persona de entendimiento ordinario pueda saber a qué atenerse respecto de las obligaciones que deriven de la norma.

C O N S I D E R A N D O S:

Es infundado el concepto de violación.

El primer párrafo del artículo 5° constitucional que la quejosa estima violado, dispone:…

Pues bien, el precepto que reclama la promovente no puede considerarse como violatorio de la garantía de libertad de trabajo contenida en este numeral.

En efecto, tal garantía consiste en la libertad que tiene una persona de dedicarse a la profesión, industria, comercio o trabajo que más le acomode, siendo lícitos; y el propio dispositivo establece los casos y condiciones en que dicha libertad puede ser restringida. En este sentido, ***si bien el principio constitucional garantiza el ejercicio de las actividades indicadas, no puede estimarse que la libertad de trabajo es ilimitada, pues ello significaría desconocer la facultad que la propia Constitución otorga al Poder Público para regular su ejercicio. En otras palabras, debe entenderse que se viola esta garantía cuando de manera absoluta se impide al particular el ejercicio de cierta actividad, o bien cuando a través del establecimiento de ciertos requisitos o condiciones se le prohíba dicho ejercicio, sin embargo, no puede decirse que la regulación de las actividades constituya una transgresión a ese derecho, pues en términos del propio texto constitucional existe esa posibilidad con el objeto de que el ejercicio ilimitado de la libertad de trabajo no lesione el interés general y el de los propios particulares.***

Así, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, interpretando el alcance de la libertad de trabajo, ha considerado que el ejercicio de las actividades que contempla el artículo 5°, constitucional, puede ser regulado a través de una ley; esto es, reconoce la posibilidad de que dentro de ciertos límites, una ley establezca las condiciones concretas del ejercicio de dicha libertad, sin que ello signifique la vulneración del indicado numeral…

El artículo 50, fracción VI, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público impide a las dependencias recibir propuestas o celebrar contratos

con personas físicas o morales, cuando éstas hayan sido declaradas en suspensión de pagos, lo que se explica en virtud de que los que se ubican en esta situación no constituyen empresas que garanticen al Estado el cumplimiento oportuno y cabal de las obligaciones que contraigan con éste, lo que puede traducirse en la afectación de sus actividades que, están encaminadas a satisfacer el bien común y preservar el orden público, como se demostrará más adelante.

Por tales motivos, este dispositivo no es violatorio del artículo 5° constitucional, ya que se trata de normas de orden público y de interés social y que tiene por objeto que la adquisición de bienes por parte del Gobierno Federal, se haga en las mejores condiciones disponibles para el Estado, en cuanto a economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez, tal como lo ordena el artículo 134 constitucional.

La circunstancia de que a las quejosas se les impida presentar propuestas y celebrar contratos sobre la materia de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, no puede considerarse como violatorio de la libertad de trabajo, toda vez que este impedimento se realiza en beneficio de la colectividad, a través del desarrollo económico del país y su fortalecimiento, además de que nada le impide ejercer el comercio de sus productos con personas físicas o morales particulares (...)

Es aplicable al caso la tesis cuyo rubro, texto y datos de identificación son los siguientes:

> ***ADQUISICIONES Y OBRAS PÚBLICAS. LOS ARTÍCULOS 41, FRACCIONES VI, VII Y XII Y 88 DE LA LEY RELATIVA, QUE IMPIDEN QUE LAS DEPENDENCIAS RECIBAN PROPUESTAS O CELEBREN CONTRATOS CON PERSONAS FÍSICAS O MORALES, O QUE ÉSTAS LAS REALICEN, CUANDO HUBIERAN PROPORCIONADO INFORMACIÓN QUE RESULTE FALSA, O QUE HAYAN ACTUADO CON DOLO O MALA FE EN ALGÚN PROCESO PARA LA ADJUDICACIÓN O CELEBRACIÓN DE UN CONTRATO O QUE SE HAYA EFECTUADO EN CONTRAVENCIÓN A LA LEY, NO VIOLAN LA GARANTÍA DE LIBERTAD DE TRABAJO CONSAGRADA EN EL ARTÍCULO 5o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL… Tesis: 1a. XLIX/2000***

Como consecuencia de lo anterior es que tampoco se contravienen las disposiciones contenidas en los artículos 25 y 26 constitucionales, relativos a la rectoría del Estado respecto al Desarrollo Nacional, para garantizar que éste sea integral y sustentable, fortaleciendo la Soberanía de la Nación y su régimen democrático mediante el fomento del crecimiento económico, el empleo y una justa distribución del ingreso; a través de la planeación democrática del mismo. Pues como ya se mencionó, el precepto impugnado únicamente busca procurar las mejores

condiciones, en los contratos que celebra la Administración Pública, para la salvaguarda de los recursos económicos del Gobierno Federal….

Por otro lado, es igualmente infundada la argumentación relativa a que la norma combatida viola la garantía de audiencia de las inconformes, porque a su juicio se les impide, total y absolutamente y sin procedimiento de defensa, demostrar ante las autoridades que su actividad es lícita, que no se afectan derechos de terceros ni de la sociedad en general, para poder calificar en los procesos de adquisición como cualquier otra empresa que esté en suspensión de pagos.

En efecto, si bien conforme a la tesis sustentada por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 23, Tomo 157-162 Primera Parte del Semanario Judicial de la Federación, que dice:

AUDIENCIA, GARANTÍA DE. OBLIGACIONES DEL PODER LEGISLATIVO FRENTE A LOS PARTICULARES (…)

Las autoridades legislativas están obligadas a instituir en las leyes los procedimientos necesarios para que se conceda a los gobernados la oportunidad de ser escuchados en su defensa, también es verdad que al establecer el artículo 14 constitucional que "nadie puede ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos sino mediante juicio seguido ante los Tribunales previamente establecidos (...)", resulta incuestionable que tal obligación sólo es necesario que se cumpla cuando las autoridades encargadas de aplicar la ley de que se trate realicen actos autorizados por la misma, a través de los cuales se prive a los gobernados de cualquiera de los bienes jurídicos tutelados por la referida norma constitucional.

En otras palabras, la obligación a cargo del Poder Legislativo de consignar en las leyes los procedimientos para que los particulares sean escuchados y tengan oportunidad de defensa, está condicionada al requisito sine qua non de que exista un derecho del cual se pueda privar a los gobernados, lo que lógicamente implica que cuando estos no tienen derechos sobre el particular no puede haber violación a la garantía de audiencia aun cuando no se hubieran instituido en las leyes tales procedimientos, porque entonces falta el supuesto que condiciona la vigencia de esa garantía y, en el caso concreto, es incuestionable que al establecer la norma impugnada que las dependencias y entidades del sector público no pueden celebrar contratos de adquisición de bienes, arrendamientos y servicios, con particulares que hayan sido declarados en suspensión de pagos, no se está afectando un derecho de éstos y por ello, tampoco existe la correlativa obligación de establecer un procedimiento para escuchar a aquellos que se encuentran impedidos para contratar con el sector público.

Tampoco existe disposición constitucional que obligue al legislador para que previo a la expedición de una ley, que en su caso pudiera privar de un derecho que existía con anterioridad, escuche a los gobernados; además, al ser categórico el legislador no se requiere desarrollar un procedimiento para demostrar que no se afecta a la sociedad, pues con independencia de ello, el propio legislador y por lo que hace al caso concreto, ya excluyó de la posibilidad de contratar con la Administración Pública a aquéllas personas, físicas o morales, que hayan sido declaradas en suspensión de pagos.

En efecto, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que la autoridad legislativa está obligada, según el artículo 14 constitucional, a establecer en las leyes un procedimiento para que los particulares afectados puedan impugnar los actos de aplicación; pero de esto no debe desprenderse que previo a la expedición de la Ley, el Congreso deba oír en defensa a los gobernados, pues como ya se mencionó, en el proceso de formación de leyes y reglamentos no pueden intervenir los particulares, pues la expedición de una ley es un acto de soberanía del Estado, en cuya formación sólo interviene el Poder Público, conforme a lo dispuesto en los artículos 71, 72, 73 y 89, fracción I, de la Constitución Federal.

Son aplicables al caso las tesis cuyo rubro, texto y datos de identificación se citan enseguida:

AUDIENCIA, GARANTÍA DE, FRENTE A LAS LEYES AUTOAPLICATIVAS…
AUDIENCIA, GARANTÍA DE. OBLIGACIONES DEL PODER LEGISLATIVO FRENTE A LOS PARTICULARES…
EMPLEADOS PÚBLICOS DE BASE. EL LEGISLADOR ORDINARIO PUEDE MODIFICAR SU CATEGORÍA POR LA DE CONFIANZA, SIN ESTABLECER UN PROCEDIMIENTO DE AUDIENCIA PARA LOS AFECTADOS…
PAVIMENTACIÓN, LEY DE, PUBLICADA POR DECRETO NÚMERO 54 DE 29 DE MAYO DE 1945 Y PROMULGADA POR LA LEGISLACIÓN DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA. GARANTÍA DE AUDIENCIA…

Por otro lado, resulta inoperante el argumento relativo a que el artículo 50, fracción VI, de la Ley Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, infringe la garantía de legalidad en materia de procesos legislativos, porque a juicio de las quejosas se desconoce injustificadamente y deja de aplicar el imperativo de fundamentación y motivación que obliga al órgano que expide la ley y obviamente, a la ley misma, a referirse sólo a relaciones sociales que reclamen ser públicamente reguladas; que dicho principio se infringe al “constituir la figura de suspensión de pagos en un elemento prohibitivo”, cuando dicha figura únicamente establece relaciones entre particulares y porque del contexto de la ley no se obtiene que su objeto y finalidad sea la de ordenar las relaciones derivadas de un estado de suspensión de pagos.

La inoperancia de dichos argumentos atiende a que el principio de legalidad que consagra el artículo 14 constitucional, referido a las obligaciones del Poder Legislativo, establece que la ley debe estar redactada de tal forma, que los términos mediante los cuales especifique los elementos normativos respectivos, sean claros, precisos y exactos; esto es, que la autoridad legislativa no puede sustraerse al deber constitucional de consignar en las leyes que expide expresiones y conceptos claros y precisos, de manera que cualquier persona de entendimiento ordinario pueda saber a qué atenerse respecto de las obligaciones que deriven de la norma; presupuesto que satisface la norma impugnada al señalar de manera clara y, a contrario sensu, cuáles son los requisitos que deben satisfacer los particulares que deseen contratar con órganos del sector público.

Como consecuencia de lo anterior, es que tampoco se da la violación a las garantías de fundamentación y motivación que prevé el artículo 16 constitucional, pues como de manera reiterada lo ha sostenido el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, la fundamentación y motivación de un acto legislativo consiste en que el Congreso que expide una ley se encuentre constitucionalmente facultado para ello y cuando las leyes que emite se refieren a relaciones sociales que reclaman ser jurídicamente reguladas, como sucede en el caso, en tanto que la relación contractual entre los órganos del Estado y los particulares es, indudablemente una relación de naturaleza social, que debe ser regulada por el derecho positivo.

Son aplicables al caso, las tesis cuyo rubro, texto y datos de identificación se citan enseguida:

LEGALIDAD TRIBUTARIA. DICHA GARANTÍA NO EXIGE QUE EL LEGISLADOR ESTE OBLIGADO A DEFINIR TODOS LOS TÉRMINOS Y PALABRAS USADAS EN LA LEY (...)
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD LEGISLATIVA (…)

Es igualmente inoperante, por inatendible el motivo de inconformidad relativo a que el artículo combatido viole el artículo primero de la Constitución Federal, al impedir, restringir y suspender a las quejosas el pleno goce de las garantías a que se refieren los capítulos anteriores; pues dicho argumento no se hizo valer ante el Juez de Distrito y por ello, no puede formar parte de la *litis* en esta instancia.

MÉTODOS DE INTERPRETACIÓN UTILIZADOS POR LA SCJN
LÓGICO. La libertad de trabajo no es absoluta y tampoco lo es la prohibición de participar en licitaciones al Estado, pero no así a otros consumidores, de igual

forma protege intereses sociales en preferencia a los particulares, se trata de evitar perjuicios a la sociedad con licitantes incumplidos.

FUNCIONAL. La autoridad legislativa no puede sustraerse a su función constitucional de consignar en las leyes que expide expresiones y conceptos claros y precisos, de manera que cualquier persona de entendimiento ordinario pueda saber a qué atenerse respecto de las obligaciones que deriven de la norma.

SISTEMÁTICO. En el proceso de formación de leyes y reglamentos no pueden intervenir los particulares, pues la expedición de una ley es un acto de soberanía del Estado, en cuya formación sólo interviene el Poder Público, conforme a lo dispuesto en los artículos 71, 72, 73 y 89, fracción I, de la Constitución Federal.

b) De equidad ..... A.R. 967/2006, p. 342; A.R. 1725/2004, p. 309

c) De seguridad jurídica……A.R. 587/2011, p. 385

J) INHABILITACIÓN TEMPORAL DE PARTICIPANTES EN LICITACIONES PÚBLICAS (ART. 60 LAASSP)..... A.R. 89/2012, p. 326; C.T. 279/2010, p. 396
A.R. 1091/2007, p. 315; A.R. 984/2007, p. 398
A.R. 851/2006, p. 330; A.R. 1389/2006, p. 402
A.R. 316/2006, p. 337

i) CONTRADICCIÓN DE TESIS: C.T. 279/2010.

ALCANCES DEL CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN
SUSPENSIÓN DE LA MEDIDA CAUTELAR DE INHABILITACIÓN TEMPORAL. Suspender la medida cautelar en contra de la sanción de inhabilitación temporal para participar en licitaciones o en la celebración de contratos de obra pública, contravendría disposiciones de orden público.

C O N S I D E R A N D O:

QUINTO. Estudio de fondo. Debe prevalecer el criterio que sienta esta Segunda Sala al tenor de las consideraciones que enseguida se anotan.

Esta Sala estima que la solución a la divergencia encontrada es similar al criterio sostenido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, como a continuación se justifica.

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

En el terreno en el que surge la presente contradicción, se aplicó la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público para sancionar a los quejosos con la inhabilitación temporal para intervenir en licitaciones y celebrar contratos públicos.

Para el presente asunto importa destacar lo que señalan los artículos 1, 26, 35, 36, 36 Bis, 37, 45, 46, 59 y 60 de dicha ley, de los que se desprende lo siguiente:

Como se advierte, los procedimientos de licitación inician con la convocatoria respectiva y culminan con la emisión del fallo correspondiente, para después realizar la firma del contrato público, es decir, que la licitación es concerniente al procedimiento y, a su vez, el contrato público es el acto por virtud del cual se pactan definitivamente con el licitante ganador los términos de la obra, adquisición, arrendamiento o servicio licitado, debiendo este último garantizar el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Requisito establecido en la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo, que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público.

Como se advierte, la sanción de inhabilitación temporal para participar en procedimientos de contratación o celebrar contratos regulados por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se funda en una cuestión de orden público e interés social, pues desarrolla las bases y principios del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo concerniente las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra.

En este sentido, se considera indudable que la concesión de la medida cautelar en contra de la sanción de inhabilitación temporal para participar en licitaciones o en la celebración de contratos de obra pública, contravendría disposiciones de orden público que tienen como fin ***regular y vigilar que las acciones relativas a las adquisiciones y arrendamientos de bienes así como la prestación de servicios de cualquier naturaleza llevados a cabo por la Federación, las Entidades Federativas, los Municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se encuentren conforme a las políticas, bases y lineamientos de la indicada ley, administrándose los recursos públicos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos para los que están destinados, situaciones respecto de las cuales la sociedad está interesada en que se proteja, de ahí que en caso de concederse la medida suspensional igualmente se seguiría perjuicio al interés social.***

Inclusive, esta Sala ya ha establecido que la ejecución inmediata de la resolución de inhabilitación temporal para participar en procedimientos de contratación o celebrar contratos públicos, es una cuestión de interés general, pues con tal actuar se pretende evitar que el Estado otorgue una licitación a favor de alguna persona respecto de la cual existe sospecha sobre su falta de honradez. El asunto en el que se estableció esta situación, es el **A.R 1091/2007**, resuelto por unanimidad de cinco votos, en sesión de veintisiete de febrero de dos mil ocho, que en lo que interesa, señala:

Con apoyo en lo anteriormente desarrollado, esa dable concluir que debe negarse la suspensión en el juicio de amparo contra los efectos y consecuencias de la inhabilitación temporal para participar en procedimientos de licitación o celebración de contratos públicos, en términos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en virtud de que con su concesión se sigue perjuicio al interés social y se contravienen disposiciones de orden público.

Como corolario de lo expuesto, la tesis cuyo criterio debe prevalecer con el carácter de jurisprudencia en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo, es la siguiente:

> ***SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. DEBE NEGARSE CONTRA LOS EFECTOS Y CONSECUENCIAS DE LA INHABILITACIÓN TEMPORAL PARA PARTICIPAR EN PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN O PARA CELEBRAR CONTRATOS PÚBLICOS…***

MÉTODOS DE INTERPRETACIÓN UTILIZADOS POR LA SCJN
SISTEMÁTICO. Interpreta todos los alcances jurídicos de la suspensión en los procedimientos de licitación pública y lo hace con el estudio de la ley: en sus artículos 1, 26, 35, 36, 36 Bis, 37, 45, 46, 59 y 60. **TELEOLÓGICO**. Se da un valor superior al cumplimento del principio constitucional de las licitaciones públicas del interés general y no al interés particular del licitante.

ii) <u>AMPARO EN REVISIÓN: A.R. 984/2007.</u>

ALCANCES DEL CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN
MULTA FIJADA EN RELACIÓN AL SALARIO MÍNIMO. No es obstáculo para ello que sea establecida por una Comisión Nacional integrada por representantes de los trabajadores, de los patrones y del gobierno, pues no significa que el legislador haya dejado de establecer todos los elementos necesarios que permitan al

gobernado conocer con certeza la pena aplicable por la comisión de las conductas tipificadas como contrarias al derecho

ARTÍCULO 60, FRACCIÓN IV, DE LA LAASSP, INHABILITACIÓN TEMPORAL DE PROVEEDORES. La garantía de libertad de trabajo (art. 5º CPEUM), no es absoluta, irrestricta e ilimitada, ya que la Carta Fundamental permite al Poder Legislativo regular, a través de una ley condiciones concretas del ejercicio de esa libertad, por lo que la sanción de inhabilitación consagrada en dicha norma, al contemplar una restricción de esa naturaleza, no trastoca la referida garantía, por impedir que el Estado celebre contratos con personas físicas o morales inhabilitadas, ya que se trata de una disposición de orden público e interés social dirigida a las Dependencias del Estado que les impide celebrar convenios con sujetos que han vulnerado la ley con motivo de su incumplimiento; de ahí que, esté justificada esa limitante, puesto que el particular podrá realizar operaciones comerciales con otro tipo de contratantes ajenos al Estado.

MONOPOLIOS. NO SE PROPICIAN. No se propicia, la creación de monopolios prohibidos por el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que sólo se restringe la contratación de servicios, arrendamientos y adquisición de bienes, con personas físicas o morales a quienes se les haya aplicado la sanción de inhabilitación, por vulnerar las reglas que regulan la contratación de esa naturaleza.

C O N S I D E R A N D O:

La parte recurrente, propone la inconstitucionalidad del artículo 59 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, por permitir aplicar una multa atendiendo al salario mínimo, pues toma en consideración un indicador económico en lugar de la unidad de valor que es el peso aprobado por el legislador, lo que vulnera el artículo 73, fracción XVIII, de la Constitución.

El precepto transcrito establece una de las atribuciones del Congreso de la Unión para legislar en lo relativo a las casas de moneda, dictar las reglas que se deben aplicar para determinar el valor de la moneda extranjera y adoptar un sistema general de pesas y medidas, sin que de dicho precepto se advierta restricción alguna para el legislador que le impida establecer multas con apoyo en el salario mínimo establecido.

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que es acorde a la Carta Magna la aplicación del salario mínimo general vigente en el Distrito Federal para fijar el monto de las multas que prevé el Código Penal Federal, sin que sea obstáculo para ello que sea establecido por una Comisión Nacional integrada por representantes de los trabajadores, de los patrones y del gobierno, pues no significa

que el legislador haya dejado de establecer todos los elementos necesarios que permitan al gobernado conocer con certeza la pena aplicable por la comisión de las conductas tipificadas como contrarias al derecho, ya que el particular se encuentra en todo momento en posibilidad de conocer el monto a que asciende el salario mínimo en la fecha de la comisión del delito, en virtud de que dicho dato se encuentra publicado en el Diario Oficial de la Federación; además el salario mínimo opera, simplemente como un factor de actualización que permite mantener vigente el valor real de la multa, según se desprende de la circunstancia de que sus fluctuaciones tienden a reflejar el valor adquisitivo de la moneda.

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, trastoca el artículo 73, fracción XVIII, de la Constitución, por permitir la aplicación de la multa prevista en dicho precepto, sustentada en salarios mínimos y no en la moneda de curso legal…

Así mismo, ***la Suprema Corte al interpretar la libertad de trabajo consagrada en el artículo 5º de la Constitución, ya determinó que esa garantía no es absoluta, irrestricta e ilimitada, puesto que la Carta Fundamental permite al Poder Legislativo regular, a través de una ley, el ejercicio de las actividades de los gobernados, es decir, reconoció la posibilidad de que, dentro de ciertos límites, la ley establezca condiciones concretas del ejercicio de esa libertad, por lo que el impedimento consagrado en el artículo 50, fracción VI, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que contempla una restricción de esa naturaleza, no trastoca la referida garantía, por impedir que el Estado celebre contratos con personas físicas o morales, cuando éstas hayan sido declaradas en suspensión de pagos***, sirve de apoyo al anterior argumento el criterio sustentado por esta Sala, en la tesis aislada 2a. CLXXIV/2001, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, Septiembre de 2001…

Finalmente, debe destacarse que ***el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que prohíbe es la constitución de monopolios, sin que pueda considerarse como una garantía constitucional, que autorice a los particulares a exigir, en vía de amparo, que para cumplir con tales encomiendas constitucionales el Estado deba adoptar ciertas medidas y seguir determinadas direcciones, puesto que sólo tiene como objetivo la rectoría económica del Estado para garantizar el crecimiento económico del país, que se cumple, en los términos previstos en los propios preceptos constitucionales, mediante diversas acciones en que el Estado alienta la producción, concede subsidios, otorga facilidades a empresas de nueva creación, estimula la exportación de sus productos y concede facilidades para la importación de materias primas.***

En ese sentido, ***resulta claro que el artículo 60, fracción IV, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, no trastoca la garantía de libertad de trabajo, puesto que ésta no es absoluta, irrestricta e ilimitada, ya que la Carta Fundamental permite al Poder Legislativo regular, a través de una ley, el ejercicio de las actividades de los gobernados, es decir, reconoció la posibilidad de que, dentro de ciertos límites, la ley establezca condiciones concretas del ejercicio de esa libertad, por lo que la sanción de inhabilitación consagrada en dicha norma, al contemplar una restricción de esa naturaleza, no trastoca la referida garantía, por impedir que el Estado celebre contratos con personas físicas o morales inhabilitadas, ya que se trata de una disposición de orden público e interés social dirigida a las Dependencias del Estado que les impide celebrar convenios con sujetos que han vulnerado la ley con motivo de su incumplimiento; de ahí que, esté justificada esa limitante, puesto que el particular podrá realizar operaciones comerciales con otro tipo de contratantes ajenos al Estado.***

Tampoco se propicia con ese precepto, la creación de monopolios prohibidos por el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que sólo se restringe la contratación de servicios, arrendamientos y adquisición de bienes, con personas físicas o morales a quienes se les haya aplicado la sanción de inhabilitación, por vulnerar las reglas que regulan la contratación de esa naturaleza, sin que impida que el resto de proveedores o licitantes participen en las adjudicaciones que conceda el Estado, con lo que se respetan los principios que regulan esos convenios, relativos a asegurar las mejores condiciones de contratación para el Estado en aras de prevenir que en casos futuros los mismos participantes o proveedores puedan infringirlo.

MÉTODOS DE INTERPRETACIÓN UTILIZADOS POR LA SCJN
TELEOLÓGICO. Busca mantener actualizado el valor real de la multa. **LÓGICO.** La libertad de trabajo no es absoluta y tampoco lo es la prohibición de participar en licitaciones del Estado, además el particular podrá realizar operaciones comerciales con otro tipo de contratantes ajenos al Estado. • La prohibición de participación solo aplica a solicitantes de licitaciones inhabilitados no a los que no han cometido faltas a la LAASSP, con lo cual no se propicia la creación de monopolios.

iii) AMPARO EN REVISIÓN: A.R. 1389/2006.

ALCANCES DEL CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN
INHABILITACIÓN TEMPORAL DE TRABAJO A LICITANTES. No se viola la libertad de trabajo del art. 5º CPEUM, pues sólo sería si de manera absoluta –solo no se puede vender al gobierno- se le impide al particular el ejercicio de cierta actividad, o bien cuando a través del establecimiento de ciertos requisitos o condiciones se le prohíba dicho ejercicio. **INHABILITACIÓN TEMPORAL DE TRABAJO POR AUTORIDAD ADMINISTRATIVA.** No implica invasión de la División de Poderes del Ejecutivo al Legislativo. El ejercicio de las actividades que contempla el artículo 5° constitucional, puede ser regulado a través de una ley; esto es, reconoce la posibilidad de que dentro de ciertos límites, una ley establezca las condiciones concretas del ejercicio de dicha actividad, sin que ello signifique la vulneración del indicado numeral. **SANCIÓN DE AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DIVERSA A MULTA O ARRESTO SEGÚN EL ART. 21 DE LA CPEUM. ES CONSTITUCIONAL.** La Constitución dispone que sólo pueden imponer sanciones consistentes en multas y arresto, la disposición no debe interpretarse literalmente, para concluir que el precepto prohíbe a la autoridad administrativa imponer otro tipo de sanciones por violación a leyes administrativas, como en el presente caso, en que la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público estatuye como sanción administrativa la inhabilitación temporal cuando existe suficiente razón para ello.

C O N S I D E R A N D O:

El recurrente señala que: contrariamente a lo estimado por la Juez de Distrito, los numerales 59 y 60, primer párrafo y fracción IV de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, sí resultan violatorios del artículo 5° de la Constitución Federal, en virtud de que facultan a las autoridades administrativas a inhabilitar en el ejercicio de una actividad lícita a los proveedores que en su concepto han proporcionado información falsa, entre otras cuestiones, no obstante que se trate de una actividad lícita que no afecte los derechos de terceros ni de la sociedad en general.

Dichos preceptos indebidamente otorgan a la autoridad administrativa la facultad de limitar la actividad de los particulares, fuera de las condiciones que se establecen en la norma constitucional referida. Pues bien, los preceptos que reclama la

promovente no pueden considerarse como violatorios de la garantía de ocupación, contenida en este numeral. En efecto, tal garantía consiste en la libertad que tiene una persona de dedicarse a la profesión, industria, comercio o trabajo que más le acomode siendo lícitos; siendo que el propio dispositivo establece los casos y condiciones en que dicha libertad puede ser restringida.

En este sentido, si bien el principio constitucional garantiza el ejercicio de las actividades indicadas, no puede estimarse que la libertad ocupacional o de trabajo es ilimitada, pues ello significaría desconocer la facultad que la propia Constitución otorga al Poder Público para regular su ejercicio. En otras palabras, debe entenderse que se viola esta garantía cuando de manera absoluta se impide al particular el ejercicio de cierta actividad, o bien cuando a través del establecimiento de ciertos requisitos o condiciones se le prohíba dicho ejercicio; sin embargo, no puede decirse que la regulación de actividades constituya una transgresión a ese derecho, pues en términos del propio texto constitucional las limitaciones que contempla tienen una justificación razonable y ellas son para evitar que el ejercicio ilimitado de la referida libertad lesione el interés general y el de los propios particulares.

Así, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, interpretando el alcance de la libertad de trabajo, ha considerado que el ejercicio de las actividades que contempla el artículo 5° constitucional, puede ser regulado a través de una ley; esto es, reconoce la posibilidad de que dentro de ciertos límites, una ley establezca las condiciones concretas del ejercicio de dicha autoridad, sin que ello signifique la vulneración del indicado numeral. En el caso concreto, los artículos impugnados impiden a las dependencias recibir propuestas o celebrar contratos con personas físicas o morales, cuando éstas hubieran proporcionado información que resulte falsa, entre otras hipótesis.

Contrariamente a lo alegado por la recurrente, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación advierte que en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en los numerales impugnados, ***no existe una delegación encubierta de facultades, y por ende, se respeta el principio de división de poderes,*** por lo siguiente:

El párrafo tercero del numeral 134, constitucional en consecuencia, faculta al legislador para determinar los supuestos en que pueden verificarse dichos actos, así como los referentes a los casos de incumplimiento o infracción a las mencionadas disposiciones dentro de las que se encuentran las relativas a las sanciones a las que se hacen acreedores quienes las quebrantan, específicamente los licitantes o proveedores.

Así en materia federal, ***el Congreso de la Unión en ejercicio de la facultad constitucional antes referida, al aprobar los preceptos legales cuestionados, determina los supuestos legales en los que se deben ubicar los mencionados sujetos para hacerse acreedores a las sanciones administrativas en ellos contempladas.***

La Secretaría de la Función Pública es una dependencia administrativa auxiliar del Poder Ejecutivo Federal como se desprende del numeral 90 constitucional. Ciertamente dentro de dicha atribución que la Constitución Federal confiere al Poder Ejecutivo Federal se encuentra la facultad de la administración para ejecutar sus propias determinaciones sin intervención de ningún otro poder.

Lo anterior es así porque sostenerse un criterio distinto, es decir, que la ejecución de los actos administrativos dentro de los cuales se encuentra la imposición de sanciones administrativas, sólo puede hacerse por medio del Poder Judicial, como lo pretende la quejosa, implicaría un desacierto, porque ello implicaría reconocer en este poder una facultad de la que constitucionalmente carece, con la consiguiente paralización de la actuación de otro poder como es el administrativo, al convertirse en letra muerta la facultad atribuida al Ejecutivo para ejecutar la ley y para proveer en la esfera administrativa a su exacta observancia.

En esa circunstancia, si los numerales impugnados confieren a la Secretaría de la Función Pública que es una dependencia administrativa auxiliar del Poder Ejecutivo Federal, la facultad de imponer una sanción a los licitantes y proveedores que las infringen, no pueden estimarse como violatorios del principio de división de poderes, razón por la que debe declararse infundado el agravio propuesto por la recurrente.

Pues bien, los preceptos que reclama la promovente no pueden considerarse como violatorios de los artículos 21 y 49 constitucionales.

Se obtiene la anterior conclusión confrontando el contenido de los preceptos combatidos y lo dispuesto en el artículo constitucional, el cual determina, en la primera parte, que la imposición de las penas es propia y exclusiva de la autoridad judicial y que la persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público y a la Policía Judicial, la cual estará bajo la autoridad y mando de aquél y, en la segunda parte, que compete a la autoridad administrativa el castigo de las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, con las sanciones de multa o arresto hasta por treinta y seis horas y para el caso de que el infractor no pagare la multa con arresto que no exceda de quince días.

No obstante que ***al referirse a la competencia de las autoridades administrativas la Constitución dispone que sólo pueden imponer sanciones consistentes en multas y arresto, la disposición no debe interpretarse literalmente, para concluir que el precepto prohíbe a la autoridad administrativa imponer otro tipo de sanciones por violación a leyes administrativas. En efecto, no es jurídicamente posible decir que sólo las sanciones administrativas contempladas en el artículo 21 mencionado, multa o arresto, sean las únicas que pueden ser aplicadas por autoridades administrativas, ya que el campo de acción de éstas es muy amplio y no se limita a esos dos casos, pues en el orden jurídico mexicano también pueden imponerse sanciones por violación a leyes administrativas, como en el presente caso, en que la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público estatuye como sanción administrativa la inhabilitación temporal cuando existe suficiente razón para ello.***

MÉTODOS DE INTERPRETACIÓN UTILIZADOS POR LA SCJN
LÓGICO. Pues no se impide de manera absoluta la libertad de trabajo, la cual mantiene, a excepción de venderle al Gobierno Federal.
TELEOLÓGICO Y FUNCIONAL. El Poder Legislativo hace la ley, el Ejecutivo la aplica, si no faltarían a sus deberes constitucionales.
TELEOLÓGICO, SISTEMÁTICO. La ley autoriza a la autoridad administrativa a establecer una diversa sanción (Inhabilitación, pues garantiza los mejores términos de compra al Gobierno en próximas licitaciones en las que no participen infractores a la ley); toma en cuenta los artículos 21 y 49.

K) JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA DE ADQUISICIONES ..... C.T. 162/2015, p. 405; C.T. 409/2010, p. 409

i) CONTRADICCIÓN DE TESIS: C.T. 162/2015.

ALCANCES DEL CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN
JUICIO DE AMPARO. PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. EXCEPCIÓN AL. No es necesario agotar previamente la inconformidad cuando el acto reclamado carezca de fundamentación y motivación, o bien cuando se aleguen violaciones directas a la Constitución.
SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Esta Segunda Sala estima que efectivamente la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, no establece un plazo determinado para el otorgamiento de la medida

cautelar solicitada lo que implica que no se tenga la certeza de que la suspensión provisional solicitada ante la autoridad responsable será acordada en un plazo igual o menor que el de veinte cuatro horas que al efecto establece la ley de amparo.

C O N S I D E R A N D O:

QUINTO… En consecuencia, el punto de contradicción a resolver consiste en determinar si previamente a la promoción del juicio de amparo debe agotarse o no el recurso de inconformidad a que se refiere el artículo 65 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, dado que el diverso artículo 70 no establece un plazo para que la autoridad que conozca de la inconformidad se pronuncie respecto de la suspensión provisional.

SEXTO. Estudio. Precisada así la existencia de la contradicción y el punto a dilucidar, esta Segunda Sala se avoca a su resolución, determinando que ***debe prevalecer con carácter jurisprudencial el criterio consistente en que no es obligatorio agotar el recurso de inconformidad previsto en el artículo 65 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, ya que en dicha ley no se establece un plazo específico en el que la autoridad deberá pronunciarse respecto de la suspensión solicitada, lo que implica que al quedar al arbitrio de la misma, no se tiene la certeza de que la suspensión sea otorgada en un plazo menor al de veinticuatro horas que al efecto establece tanto la Ley de Amparo como la propia Constitución Federal en su artículo 107, fracción IV.***

Al respecto, el artículo 61 de la Ley de Amparo, prevé los supuestos en que será improcedente el juicio de amparo, y de manera específica, en la fracción XX, establece que no procederá su tramitación, contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos, ya sea de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa de que se trate, con los mismos alcances que los que prevé la propia Ley de Amparo y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni un plazo mayor que el que se establece para la suspensión provisional, con independencia de que el acto en sí mismo considerado, sea o no susceptible de ser suspendido.

Cabe precisar que esa disposición guarda relación con lo dispuesto en el artículo 128 de la Ley de Amparo, en cuanto establece los requisitos para que sea otorgada la suspensión, siempre y cuando no deba ser decretada de oficio, para lo cual deberá ser solicitada por la parte quejosa, y que no se siga perjuicio al interés social ni se

contravengan disposiciones de orden público. Asimismo, es relevante tener en cuenta lo dispuesto por el artículo 112 de la ley de la materia, en el que se establece el plazo para que el órgano jurisdiccional resuelva si desecha, previene o admite la demanda, lo cual deberá efectuar dentro del término de veinticuatro horas, plazo en el que además habrá de pronunciarse en torno a la suspensión provisional solicitada.

Como ha quedado apuntado, en la Ley de Amparo, se establece que el órgano jurisdiccional al que corresponda conocer de la demanda, deberá pronunciarse en torno a su admisión en un plazo máximo de veinticuatro horas, con lo cual se garantiza y se da plena certeza de que la resolución que se llegue a dictar en torno a la suspensión que hubiera sido solicitada, ocurrirá a más tardar dentro de ese lapso.

Ahora, las excepciones a que se refiere la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, tienen por objeto garantizar la procedencia del juicio cuando en la ley del acto entre otros aspectos, se establezca un plazo mayor que el previsto por la propia Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión provisional, cuya substanciación logra impedir los actos de ejecución que ya no podrían ser reparados aun con la concesión del amparo, garantizando así el acceso a un recurso efectivo a través del cual se puedan paralizar los actos reclamados. Por otra parte, los artículos 65 y 70 de la LAASSP disponen…

Los artículos transcritos establecen, el primero de ellos, la procedencia de la inconformidad que se promueva contra los actos de los procedimientos de licitación pública o invitación a cuando menos tres personas en el que será factible solicitar la suspensión de los actos impugnados. En tanto que, de la lectura del artículo 70, de la propia ley, se desprende:

Precisado lo anterior, esta Segunda Sala estima que efectivamente la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, no establece un plazo determinado para el otorgamiento de la medida cautelar solicitada, lo que implica que no se tenga la certeza de que la suspensión provisional solicitada ante la autoridad responsable será acordada en un plazo igual o menor que el de veinticuatro horas que al efecto establece la Ley de Amparo.

Es importante tener en cuenta que en la especie nos encontramos ante un presupuesto establecido en la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la que en su artículo 107, fracción IV, dispone lo siguiente:

De la lectura del precepto constitucional transcrito, se desprende que tiene por objeto garantizar a los gobernados la posibilidad de combatir los actos de autoridades diversas a los tribunales judiciales administrativos o del trabajo que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal; asimismo, se advierte que el texto constitucional estableció determinados presupuestos para la procedencia del juicio de

amparo, entre los que se encuentra el agotar los medios de defensa ordinarios, siempre y cuando conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos, o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, se pueda anular, revocar o modificar el acto, con los mismos alcances que los que prevé la Ley de Amparo y sin exigir mayores requisitos que los que consigna para conceder la suspensión definitiva, ***ni plazo mayor que el que se establece para el otorgamiento de la suspensión provisional,*** independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley; de igual forma dispone que no será necesario agotar los medios de defensa ordinarios, cuando el acto reclamado carezca de fundamentación y motivación, o bien cuando se aleguen violaciones directas a la Constitución.

Por tanto, esta Segunda Sala estima que en aras de garantizar los principios de seguridad jurídica y efectivo acceso a la justicia, al no existir claridad en torno al plazo en que la autoridad responsable habrá de pronunciarse respecto de la suspensión provisional, se considera que no es necesario agotar la inconformidad a que se refiere el artículo 65 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, previo a la presentación del juicio de amparo, y por ello se actualiza uno de los supuestos de excepción para la procedencia del juicio de amparo.

Debe prevalecer con carácter jurisprudencial, en términos de lo dispuesto en los artículos 218 y 225 de la Ley de Amparo, queda redactado bajo los siguientes rubro y texto:

> ***PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. ES INNECESARIO AGOTAR LA INCONFORMIDAD PREVISTA EN EL ARTÍCULO 65 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, AL ACTUALIZARSE UNA EXCEPCIÓN AL CITADO PRINCIPIO.***

MÉTODO DE INTERPRETACIÓN UTILIZADO POR LA SCJN
FUNCIONAL. La medida cautelar para ser efectiva debe operar antes de las 24 horas de solicitada, si no sería ineficaz para garantizar los principios de seguridad jurídica y de efectivo acceso a la justicia.

ii) CONTRADICCIÓN DE TESIS: C.T. 409/2010.

ALCANCES DEL CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN
RECURSO DE REVISIÓN. Resulta innecesario el análisis de los requisitos que consagra la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo que rige el recurso de revisión, para la procedencia de la suspensión del acto recurrido, pues independientemente de lo que arroje tal análisis, lo cierto es que no es obligatorio para los particulares agotar ese recurso, antes de acudir al juicio contencioso administrativo en la vía ordinaria, y si respecto de este último. **PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. EXCEPCIÓN AL.** Se ha establecido por la Segunda Sala que no es necesario agotarlo antes de promover el juicio de garantías, tampoco puede ser obligatorio el agotamiento del recurso administrativo optativo. **INCONFORMIDAD.** Inconformidad prevista en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Contra su resolución procede el juicio de amparo indirecto.

C O N S I D E R A N D O :

Consecuentemente, el punto jurídico sujeto a estudio en la presente contradicción de tesis, radica en dilucidar si en contra de la resolución que resuelve el recurso de inconformidad previsto en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público procede el juicio de amparo indirecto o es necesario agotar los medios de impugnación que prevé el artículo 74 del ordenamiento en comento, esto es, el recurso de revisión previsto en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, o bien el juicio contencioso administrativo.

SÉPTIMO. Estudio de fondo. Debe prevalecer con el carácter de jurisprudencia el criterio de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a continuación se desarrolla, de acuerdo con los siguientes razonamientos.

En primer lugar, el artículo 65 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público establece la procedencia de la inconformidad, que se podrá promover en contra de los procedimientos de licitación pública o invitación en los siguientes supuestos: Artículo 65.-…

Ahora bien, en contra de las resoluciones emitidas como consecuencia de dicha inconformidad, el artículo 74 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público establece lo siguiente: Artículo 74.-…

Del precepto transcrito se desprende que en contra de la resolución que pone fin al recurso de inconformidad o en su caso la intervención de oficio, el inconforme o el tercero interesado **podrán** interponer recurso de revisión o bien intentar la vía jurisdiccional que corresponda, entendiendo por esta el juicio contencioso administrativo.

En razón de lo anterior, se estima que el artículo 74 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público de ningún modo establece una obligación de interponer el recurso de revisión previamente al juicio correspondiente, pues lógicamente ***los medios de impugnación que las leyes respectivas ponen al alcance de los particulares, son un beneficio para éstos, quienes pueden optar por hacerlos valer o no, salvo que de manera expresa los ordenamientos legales determinen que hasta en tanto no se agoten, no puede intentarse alguna otra vía por parte del afectado, o salvo que el precepto en cuestión hubiere señalado en forma expresa, que no es el caso, que el recurso de revisión debía agotarse previamente a la instancia jurisdiccional….***

Sirven de apoyo a lo anterior las jurisprudencias 2a./J.99/2004, 2a./J.124/2007 y 2a./J.229/2007 emitidas por esta Segunda Sala de este Alto Tribunal cuyos rubros son los siguientes:

> ***"INCONFORMIDAD. COMO EL RECURSO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 108 DE LA LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL, ES UN MEDIO DE DEFENSA OPCIONAL, NO ES NECESARIO AGOTARLO ANTES DE PROMOVER EL AMPARO."***
> ***"RECURSO DE REVISIÓN CONTRA ACTOS EMITIDOS POR LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA. NO ES NECESARIO AGOTARLO PREVIAMENTE AL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO."***
> ***"RECURSO DE REVISIÓN. EL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 99 DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS, ES DE CARÁCTER OPCIONAL Y NO OBLIGATORIO (LEGISLACIÓN VIGENTE DEL 18 DE ENERO DE 1999 AL 6 DE JUNIO DE 2006)."***

Por otro lado, por cuanto hace al juicio contencioso administrativo, esta Segunda Sala, al resolver la contradicción de tesis 39/2007-SS, estableció que no es necesario agotar dicho medio de impugnación antes de acudir al juicio de garantías, al ser una excepción al principio de definitividad, pues el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo prevé mayores requisitos para conceder la suspensión que los previstos en la Ley de Amparo, criterio que se advierte de la jurisprudencia 2a./J. 56/2007 cuyo rubro y texto es:…

En este sentido, ya que, el recurso de revisión constituye un medio de defensa opcional en la vía ordinaria, que puede agotarse o no, previamente al juicio contencioso administrativo, y dado que la promoción de este último no es

necesaria previamente a la promoción del juicio de amparo, por surtirse una excepción al principio de definitividad, en consecuencia, resulta procedente el juicio de garantías.

Así, debe concluirse que resulta innecesario el análisis de los requisitos que consagra la ley que rige el recurso de revisión, para la procedencia de la suspensión del acto recurrido, pues independientemente de lo que arroje tal análisis, lo cierto es que no es obligatorio para los particulares agotar ese recurso, antes de acudir al juicio contencioso administrativo en la vía ordinaria, y si respecto de este último se ha establecido por esta Segunda Sala que no es necesario agotarlo antes de promover el juicio de garantías, entonces es claro que tampoco puede ser obligatorio el agotamiento del recurso administrativo optativo.

Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 109/2008 emitida por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuyo rubro y texto es el siguiente:

> ***RECURSO DE REVISIÓN. NO ES NECESARIO AGOTAR EL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 83 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.***

Atento a los argumentos expresados, debe prevalecer el criterio que sostiene esta Segunda Sala, el que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 195, de la Ley de Amparo, debe regir con carácter de jurisprudencia, en los siguientes términos:

> ***INCONFORMIDAD PREVISTA EN LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. CONTRA SU RESOLUCIÓN PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.***

MÉTODO DE INTERPRETACIÓN UTILIZADO POR LA SCJN
LÓGICO. En virtud de que la autoridad le concede cualquiera de las dos rutas, la administrativa y la jurisdiccional, para que el gobernado decida libremente.

a) Jurisprudencia de la Quinta Época..... A.R. 159/2000, p. 353
b) Suspensión del acto reclamado ..... C.T. 162/2015, p. 405

L) JUNTA DE ACLARACIONES..... A. R. 626/2010, p. 383; A.R. 967/2006, p. 342

M) LEGISLATURA LOCAL .....C.C. 54/2003, p. 322

N) LEYES.

a) Congreso de la Unión.

i) AMPARO EN REVISIÓN: A.R. 489/2007.

ALCANCES DEL CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN
COMISIÓN NACIONAL DE LOS SALARIOS MÍNIMOS. No establece la moneda de curso legal, al fijar el salario mínimo. **CONGRESO DE LA UNIÓN.** No determina el salario mínimo para efecto de las multas a aplicar por infracciones a la LAASSP. **PRINCIPIO DE LIBRE COMPETENCIA ECONÓMICA.** No se impide por la inhabilitación temporal de participantes o proveedores en licitaciones públicas pues no provoca distorsiones en el mercado ni impide que éste siga funcionando bajo los parámetros de la libre concurrencia.

C O N S I D E R A N D O:

CUARTO. Toda vez que el Tribunal Colegiado de Circuito del conocimiento, revocó el sobreseimiento, por lo que es materia de la revisión ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación con los artículos 59 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, con fundamento en el artículo 91, fracción III, de la Ley de Amparo, procede analizar los conceptos de violación segundo y tercero hechos valer en la demanda de amparo por la parte quejosa, en relación con dichos numerales.

Pues bien, en la primera parte del segundo concepto de violación, estima que el artículo 59 de la ley reclamada, que fija el salario mínimo como base del cálculo para la sanción, es inconstitucional, por contrariar lo dispuesto por el artículo 73, fracción XVIII de la Constitución Federal, así como lo establecido en la Ley Monetaria, toda vez que el salario mínimo, es sólo un indicador económico fijado por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos ***"autoridad no facultada para establecer la moneda de curso legal en el país".*** Por otro lado, aduce en la segunda parte de su argumento, que la ***"… Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, fija un monto mínimo y máximo en salarios mínimos, impidiendo fijar un mínimo de 1.5 o 1.7 salarios o un máximo de 35.456 salarios, obligando a la autoridad a realizar un examen tan absurdo como el que contiene la resolución en que se basa, tomando como base para la individualización de la sanción un arbitrario***

porcentaje … ” Además de, establecer una sanción en base a indicadores económicos que no reflejan la capacidad contributiva del quejoso.

Asimismo estima, que el artículo 59 en comento, establece un sistema de sanciones fijas, que no dan bases a la autoridad administrativa para individualizar esa sanción, conforme a las cuales la autoridad que la impone pueda individualizarla. Tampoco existe otro precepto legal dentro de la ley que obliga a la autoridad administrativa a razonar la imposición de las sanciones, ni cómo éstas deben ser impuestas, tomando en cuenta cuestiones como la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor, el perjuicio causado a la colectividad, etc…

En suma señala, que el legislador, no otorgó a la autoridad administrativa, la facultad “discrecional” de cuantificar las multas.

En efecto, considera, que el artículo 59 reclamado, no permite que la autoridad determine ***“… discrecionalmente cuáles son las conductas que se deben ser (sic) consideradas infracciones, así como el sistema para valorar la gravedad de cada una de ellas, transgrediendo la seguridad jurídica …”*** de la quejosa, pues permite a la autoridad administrativa, la imposición arbitraria de una multa de la cual no puede precisarse la conducta sancionada, ni la definición del tiempo y elementos de aquello que a juicio de la autoridad encuadra en el supuesto de la infracción en la ley.

Pues bien, respecto al primer argumento, esta Segunda Sala estima que para estar en posibilidad de resolverlo, es necesario tener en cuenta, lo dispuesto por el artículo 73 fracción XVIII de la Constitución Federal, para posteriormente analizar si el artículo 59 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, lo transgrede, siendo necesario precisar, por otro lado, que es ineficaz lo señalado por la parte quejosa en el sentido de que el artículo 59 referido, también viola la Ley Monetaria, pues el estudio de la constitucionalidad de un artículo es a la luz de preceptos constitucionales y no de leyes ordinarias, tal como se advierte de la siguiente tesis de jurisprudencia y que tiene como datos de identificación, rubro y texto, los siguientes:

> **(No. Registro: 192,289. --- Jurisprudencia. --- Materia(s): Constitucional. --- Novena Época. --- Instancia: Pleno. --- Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.--- XI, marzo de 2000. --- Tesis: P./J. 25 /2000. --- Página: 38)**

El artículo 73, fracción XVIII de la Constitución Federal, dispone que:

Del artículo antes transcrito, se advierte la facultad del Congreso de la Unión para establecer casas de moneda, fijar las condiciones que ésta deba tener, dictar reglas para determinar el valor relativo de la moneda extranjera y adoptar un sistema general de pesas y medidas.

Por su parte, el artículo 59 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en su texto vigente antes de las reformas, publicadas en el Diario Oficial de la Federación de siete de julio de dos mil cinco, reclamado por la parte quejosa, dispone que:

El numeral reclamado, en la parte que interesa, establece que la multa impuesta a los licitantes o proveedores que infrinjan la ley, serán sancionados en función del salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal.

Contrario a lo aducido por la gobernada, el hecho de que el artículo en estudio fije la multa en función del salario mínimo, no transgrede el artículo 73, fracción XVIII de la Constitución Federal, pues este numeral sólo contempla en la **parte que interesa**, que es facultad del Congreso de la Unión fijar las condiciones que la moneda deba tener y adoptar un sistema general de pesas y medidas y no faculta –en ese artículo constitucional- al Congreso para determinar el salario mínimo mediante una Comisión, pues esto está regulado por un diverso precepto constitucional, de la misma jerarquía que el artículo 73 referido, que es el artículo 123, apartado A, que obliga al Congreso de la Unión, a expedir leyes sobre el trabajo, que respeten dicho numeral, cuya fracción VI, párrafo tercero, refiere al salario mínimo **y su determinación**, al señalar, que serán fijados (determinados) por una Comisión Nacional integrada por representantes de los trabajadores, de los patrones y del gobierno, la que podrá auxiliarse de las comisiones especiales de carácter consultivo que considere indispensables para el mejor desempeño de sus funciones.

De manera que, si es la propia Constitución la que hace alusión a la forma cómo se fijará el salario mínimo, es claro que el artículo 59 de la ley reclamada respeta el principio de supremacía constitucional, de allí que, contrario a lo señalado por la quejosa, no sólo no controvierte el artículo 73, fracción XVIII que nada señala respecto a la determinación del salario mínimo, sino que acata el diverso 123, fracción VI, párrafo tercero de la Carta Fundamental, que se reitera, se refiere que el salario mínimo será fijado por una Comisión, del tal suerte, que si por mandato constitucional, se establece la forma en la que se fijará el salario referido, no puede una ley ordinaria ser inconstitucional por referirse al salario mínimo que fija una Comisión, con base en la legislación laboral emanada del Congreso de la Unión…

Por lo tanto, también es ineficaz, el argumento de la quejosa en el sentido de que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos es una ***“autoridad no facultada para establecer la moneda de curso legal en el país”,*** porque de la lectura de los artículos antes transcritos, no se desprende en momento alguno, que la referida Comisión, esté estableciendo la moneda de curso legal en el país, sino que sólo acata la exigencia del artículo 123, segundo párrafo, así como fracción VI, tercer párrafo de la Constitución Federal, al fijar el salario mínimo a través de la Comisión, salario que se

toma en cuenta en el precepto reclamado para la determinación de la sanción aplicable por incumplimiento de la ley.

Por otro lado, respecto al argumento en el que aduce que el artículo 59 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, es inconstitucional, porque establece una sanción en base a indicadores económicos que no reflejan la capacidad contributiva del quejoso, esta Segunda Sala estima, que si bien es cierto, la multa se fija con base en un salario mínimo, hace las veces de factor de actualización para que la multa no pierda su valor real, lo que no la torna inconstitucional, pues no hay precepto constitucional alguno, que impida que las multas tomen algún parámetro económico que las pueda actualizar. Al contrario, esto evita innecesarias reformas legislativas, para actualizar las cifras que al paso del tiempo y en función de la inflación podrían ser irrisorias, por no tener valor real alguno, al haber perdido las cifras nominales establecidas en la ley, parte o todo su poder adquisitivo, situación que se presenta, sobre todo en países en los que existe el fenómeno económico de la inflación, es decir, del crecimiento sostenido de los precios en un lapso de tiempo, como ha sido hasta este momento, el caso de la economía mexicana.

En suma, el artículo en estudio al fijar la sanción aplicable tomando como base el salario mínimo, la actualiza para que no pierda su valor real, cuestión que no prohíbe la Constitución, ni tampoco evita que se tome en cuenta la capacidad contributiva de la quejosa, porque simplemente opera como un factor de actualización que permite mantener vigente el valor real de la multa, en virtud de que sus fluctuaciones tienden a reflejar el valor adquisitivo de la moneda, de ahí lo infundado del argumento.

Respecto al argumento en el que señala, que el artículo 59 reclamado, no permite que la autoridad determine ***"… discrecionalmente cuáles son las conductas que se deben ser (sic) consideradas infracciones, así como el sistema para valorar la gravedad de cada una de ellas, transgrediendo la seguridad jurídica …"*** de la quejosa, pues permite a la autoridad administrativa, la imposición arbitraria de una multa de la cual no puede precisarse la conducta sancionada, ni la definición del tiempo y elementos de aquello que a juicio de la autoridad encuadra en el supuesto de la infracción de la ley, esta Segunda Sala estima que, hay una contradicción en el argumento de la quejosa, pues por un lado, señala que la ley no permite que la autoridad administrativa fije ***"discrecionalmente"*** las conductas que deben ser consideradas infracciones y por el otro, que permite la imposición de multas en forma arbitraria, lo que implica que, en su argumento, por una parte, pretende que el artículo sea inconstitucional porque no permite a la autoridad ser discrecional (dejar a su arbitrio la determinación de las infracciones) y, por el otro, que el artículo 59 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público es inconstitucional

por no establecer cuáles son las infracciones que se sancionan, por lo que la autoridad sería arbitraria en su actuar.

Sin embargo, al margen de la contradicción argumentativa de la quejosa, atendiendo a la causa de pedir, se estima que tampoco le asiste la razón, porque ***el artículo 59 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, no permite en forma discrecional a la autoridad administrativa determinar cuáles son las conductas que deben ser consideradas infracciones, pues claramente señala que las conductas sancionables corresponden a las infracciones de la ley, al considerar que: "Los licitantes o proveedores que infrinjan las disposiciones de esta ley, serán sancionados por la Contraloría …" por lo que el quejoso, sí conoce qué conductas serán sancionadas. Pero además, contrario a lo aducido, la forma de individualizar la sanción y valorar la gravedad de cada conducta, se encuentra en el artículo 61 de la misma ley, que dispone que:***

De lo anterior se advierte, que contrario a lo señalado por la quejosa, la autoridad administrativa que imponga las sanciones, por transgresiones a la ley, sí puede individualizar las multas fijadas en el artículo 59 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, pues esto lo hace con base en el diverso artículo 61 del mismo ordenamiento legal, sin que pueda ser válido el argumento en el sentido de que el propio artículo 59, no contempla la forma como se individualizan las sanciones aplicables, pues la ley se debe interpretar armónicamente y no en forma fragmentada y parcial.

Por otro lado, respecto a la violación al artículo 22 de la Constitución Federal, también atendiendo a la causa de pedir, el artículo reclamado, no transgrede en su perjuicio dicho numeral, pues la autoridad impositora de la sancionadora, sí la puede individualizar ***al contemplar el artículo 59, tantas veces citado, mínimos y máximos de la multa aplicable, de allí que no corresponda a una multa fija de las prohibidas por el artículo constitucional referido, tal como se precisará en los siguientes párrafos.***

En efecto, en la tesis de jurisprudencia número P./J. 10/95 de rubro, texto y datos de identificación siguientes: "MULTAS FIJAS. LAS LEYES QUE LAS ESTABLECEN SON INCONSTITUCIONALES…

Asimismo, en la diversa tesis de jurisprudencia P./J. 102/99, con datos de identificación, rubro y texto siguientes: "MULTAS. LAS LEYES QUE LAS ESTABLECEN EN PORCENTAJES DETERMINADOS ENTRE UN MÍNIMO Y UN MÁXIMO, NO SON INCONSTITUCIONALES.

Este Alto Tribunal, consideró, que no son fijas las multas cuando en el precepto respectivo se señala un mínimo y un máximo, pues tal circunstancia permite a la

autoridad facultada para imponerlas determinar su monto de acuerdo con las circunstancias personales del infractor, que permitan su individualización en cada caso concreto.

En congruencia con dichos criterios se concluye, que el artículo 59 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que dispone que los licitantes o proveedores que infrinjan sus disposiciones serán sancionados con un multa equivalente a la cantidad de cincuenta hasta mil veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal elevado al mes, no transgrede el artículo 22 de la Constitución Federal, pues no establece una multa fija, en la que la autoridad no pueda individualizarla, sino que establece los parámetros dentro de los cuales puede aplicar la Contraloría la sanción al particular, con lo que le concede a esta autoridad administrativa facultades para individualizarla, por lo tanto, no le asiste la razón a la quejosa en ese sentido.

QUINTO. En relación con el tercer concepto de violación, estima la quejosa en esencia, que el artículo 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, transgrede en su perjuicio, el derecho a la libre competencia, porque ***"permite a las autoridades administrativas coartar el principio de libre competencia apoyándose en una norma secundaria que excepciona una garantía individual"***, lo que sólo compete a la Comisión Federal de Competencia, pues es la autoridad que aplica la Ley Federal de la Competencia Económica, que es la ley reglamentaria del artículo 28 constitucional, ley que ***"tiene por objeto proteger el proceso de competencia y la libre concurrencia y amplía los espacios para la actualización de los particulares en el ámbito económico mediante la prevención y eliminación de estancos, monopolios, prácticas monopólicas y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados de bienes y servicios (producción, procesamiento, distribución y comercialización). Permite la acción correctiva del estado para evitar el abuso monopólico; el surgimiento de las barreras artificiales a la entrada de nuevos competidores, y fusiones de empresas que desemboquen en prácticas monopólicas. Adecua a las necesidades actuales la legislación reglamentaria del artículo 28 constitucional en materia de monopolios, para promover la eficiencia económica, protege el proceso competitivo y la libre concurrencia, de los particulares en las actividades económicas, reiterando la ilegalidad de las prácticas monopólicas y sancionándolas severamente…"***

Ciertamente, el gobernado podrá reclamar que las leyes o actos impiden que disfrute de las consecuencias del libre mercado, es decir, que cuente con mayor variedad de productos y con un precio de equilibrio (menor a aquél que arrojan los mercados monopólicos u oligopólicos), pero de ninguna manera podrá aducir que tienen el derecho a la libre concurrencia, se insiste, tienen el derecho a los beneficios

de ésta, pero no a la libre concurrencia, pues este precepto está destinado por una parte, a los agentes económicos que participen de cualquier forma en la actividad económica y, por otra, a los consumidores de bienes y servicios, quienes se insiste solo se benefician de los resultados del mercado que actúa bajo las fuerzas de la libre concurrencia.

Sirve de apoyo **por analogía,** a la anterior consideración, la tesis asilada siguiente, con los datos de identificación, rubro y texto que a continuación se transcriben: "RECTORÍA ECONÓMICA DEL ESTADO EN EL DESARROLLO NACIONAL. LOS ARTÍCULOS 25 Y 28 CONSTITUCIONALES QUE ESTABLECEN LOS PRINCIPIOS RELATIVOS, NO OTORGAN DERECHOS A LOS GOBERNADOS, TUTELABLES A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO, PARA OBLIGAR A LAS AUTORIDADES A ADOPTAR DETERMINADAS MEDIDAS.

Por lo tanto, al estar basado el argumento de la parte quejosa en una premisa falsa, el mismo deviene infundado. Pero además, el artículo 60 de la ley reclamada vigente antes de las reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación de siete de julio de dos mil cinco, que dispone lo siguiente:

No impide a los agentes económicos producir bajo las reglas de la libre concurrencia establecidas en el artículo 28 de la Constitución Federal, pues el hecho de que se inhabilite temporalmente para participar en procedimientos de contratación o celebrar contratos regulados por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, a algún licitante o proveedor que la hubiere infringido, no provoca distorsiones en el mercado ni impide que éste siga funcionando bajo los parámetros de la libre concurrencia o competencia económica, es decir, que los precios y cantidades del mercado, se sigan arrojando a través de las libres fuerzas del mercado, esto es, tanto de la demanda como de la oferta, ni tampoco deja de imponer la obligación a los agentes económicos de actuar en ese sentido, pues el único que no puede participar es el licitante inhabilitado pero el mercado sigue funcionando. Por eso, no se restringe el derecho de los consumidores de beneficiarse de los citados precios y cantidades de equilibrio arrojados por el mercado competitivo.

Por lo tanto, tampoco en este sentido le asiste la razón a la parte quejosa.

Finalmente, esta Segunda Sala estima, que tanto el primer concepto de violación hecho valer por la quejosa, en relación con la constitucionalidad del artículo 67, fracción I, Apartado 5, del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, así como los diversos agravios respecto de las cuestiones de legalidad resueltas por la juez A quo, al no ser su estudio, competencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, procede reservar jurisdicción al Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, para su conocimiento.

MÉTODOS DE INTERPRETACIÓN UTILIZADOS POR LA SCJN
LITERAL, GRAMATICAL. La Comisión no está autorizada en la Ley Monetaria para señalar la moneda de curso legal. •El Congreso de la Unión no fija el Salario mínimo para efecto de las multas a aplicar por infracciones a la LAASSP. **SISTEMÁTICO.** El Principio de Libre Competencia Económica, no se impide por la inhabilitación temporal de participantes o proveedores en licitaciones públicas derivado de la interpretación conjunta de los artículos 60 de la LAASSP y 28 de la CPEUM.

b) Estatales.....C.C. 54/2003, p. 322

c) Exposición de motivos
(no conlleva inconstitucionalidad)..... A.R. 460/2001, p. 371

d) Garantía de legalidad .....A.R. 169/2001, p**.** 390

e) Leyes privativas .....A.R. 159/2000, p. 353

O) LIBERTAD, GARANTÍA DE

a) De trabajo ..... A.R. 316/2006, p. 337, A.R. 1725/2004, p. 309
A.R. 1520/2004, p. 377; A.R. 169/2001, p. 390
A.R. 1441/98, p. 419

i) AMPARO EN REVISIÓN: A.R. 1441/98.

ALCANCES DEL CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN
LIBERTAD DE TRABAJO. No es irrestricta y puede ser regulada por el legislador. **PENAS INFAMANTES, INUSITADAS O TRASCENDENTALES.** Prohibidas en el artículo 22 constitucional, no lo son las de la LAOP (art. 88). En efecto, el artículo 22, en su primer párrafo, dispone: "Quedan prohibidas las penas de mutilación y de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualesquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales…" La interpretación estrictamente literal de este precepto, particularmente en la parte transcrita, podría conducir a sostener que establece una prohibición

comprendida exclusivamente dentro del ámbito del derecho penal. Impedir que la quejosa participe en licitaciones públicas y realice contratos de acuerdo con la Ley de la Materia, no es una pena, sino una sanción de carácter administrativo…

C O N S I D E R A N D O:

QUINTO.-…

De conformidad con el tratadista Gabino Fraga, es un hecho indiscutible que el Estado en el desarrollo de sus actividades obtiene de los particulares prestaciones voluntarias de bienes o servicios personales. Compra inmuebles y equipos para oficina y servicios, encarga a particulares la construcción de obras públicas, obtiene préstamos, conviene con empresas de transporte la conducción de correspondencia, bultos postales y mercancías; enajena y arrenda bienes propios etcétera, celebrando con estos motivos contratos con los particulares. (Derecho Administrativo, Editorial Porrúa, México, 1980, página 395).

Entre este tipo de contratos que celebra la Administración Pública tenemos los de adquisiciones o suministros.

Para Manuel María Diez el contrato de suministro es: "…un contrato administrativo realizado ente el Estado y un particular en virtud del cual éste se encarga, por cuenta y riesgo y mediante una remuneración pagada por el ente contratante de suministrar a éste prestaciones mobiliarias establecidas en el documento contractual."

(Contratos Administrativos, Editorial Bibliográfica Omeba, Argentina 1967, página 139).

En los contratos administrativos el particular tiene en el contrato únicamente un interés económico; la Administración Pública tiene la representación del interés público que el contrato compromete o pueda comprometer. El último no puede subordinarse al primero, sino al contrario, el primero debe subordinarse al segundo.

De esta subordinación nace para la Administración Pública su atribución de sancionar a los particulares, cuando estos no cumplan con las obligaciones nacidas del contrato.

El artículo 134 constitucional preceptúa que los recursos económicos de que disponga el Gobierno Federal y el Gobierno del Distrito Federal, se administrarán con eficiencia, eficacia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados. Las adquisiciones, arrendamientos y enajenación de

todo tipo de bienes se adjudicarán a través de licitaciones públicas, y cuando éstas no sean idóneas para asegurar al Estado las mejores condiciones posibles, las leyes establecerán las bases, procedimientos, reglas, requisitos y demás elementos para acreditar la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que <u>aseguren las mejores condiciones para el Estado.</u>

El texto del precepto constitucional comentado es el siguiente:

"Art. 134.-…

SEXTO.- Esta Primera Sala se avoca en primer lugar, al concepto de violación señalado con el inciso b), en el que medularmente ***sostiene la quejosa que los artículos controvertidos violan el artículo 5° constitucional, ya que prevén la sanción de impedirle que participe en licitaciones y celebrar contratos de acuerdo con el objeto de la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas.***

Es infundado el concepto de violación.

El primer párrafo del artículo 5° constitucional que la quejosa estima violado, dispone:…

Pues bien, los preceptos que reclama la promovente no pueden considerarse como violatorios de la garantía de libertad de trabajo contenida en este numeral. En efecto, tal garantía consiste en la libertad que tiene una persona de dedicarse a la profesión, industria, comercio o trabajo que más le acomode, siendo lícitos; y el propio dispositivo establece los casos y condiciones en que dicha libertad puede ser restringida.

En este sentido, ***si bien el principio constitucional garantiza el ejercicio de las actividades indicadas, no puede estimarse que la libertad de trabajo es ilimitada, pues ello significaría desconocer la facultad que la propia Constitución otorga al Poder Público para regular su ejercicio. En otras palabras, debe entenderse que se viola esta garantía cuando de manera absoluta se impide al particular el ejercicio de cierta actividad, o bien cuando a través del establecimiento de ciertos requisitos o condiciones se le prohíba dicho ejercicio, sin embargo, no puede decirse que la regulación de las actividades constituya una transgresión a ese derecho, pues en términos del propio texto constitucional existe esa posibilidad con el objeto de que el ejercicio ilimitado de la libertad de trabajo no lesione el interés general y el de los propios particulares…***

En el caso concreto, el legislador ordinario reglamentó el artículo 134 Constitucional mediante la expedición de la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas, que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, correspondiente al treinta de diciembre de mil novecientos noventa y tres, abrogando a la anterior Ley de Obras

Públicas de 1980 y a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles de mil novecientos ochenta y cinco.

Los artículos 41, fracciones VI, VII y XII, de la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas impiden a las dependencias recibir propuestas o celebrar contratos con personas físicas o morales, cuando éstas hubieran proporcionado información que resulte falsa, o que hayan actuado con dolo o mala fe en algún proceso para la adjudicación o celebración de un contrato o que se haya celebrado en contravención de la ley.

Por tales motivos, estos dispositivos no son violatorios del artículo 5° constitucional, ya que se trata de normas de orden público y de interés social y que tienen por objeto que la adquisición de bienes por parte del Gobierno Federal y del Gobierno del Distrito Federal, se haga en las mejores condiciones disponibles para el Estado, en cuanto a economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez, tal como lo ordena el artículo 134 Constitucional…

El propio artículo 5° constitucional dispone que la libertad de trabajo sólo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de terceros o por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad.

Tal dispositivo jurídico permite que por resolución gubernativa se impida el ejercicio de determinada actividad, cuando se afecte el interés público o el de terceros, como sucede en el presente caso, cuando no se asegura de manera adecuada la celebración de licitaciones públicas.…

Sostiene la quejosa en sus agravios C) y D) que la ley controvertida otorga facultades a la Secretaría de la Controlaría, reservadas al poder judicial, como lo es de privar del derecho a los particulares para que celebren contratos o presenten ofertas en licitaciones públicas violando los artículos 14 y 16 constitucionales, además de que violan el artículo 21 Constitucional por tratarse de una pena privativa (...)

Además de lo anterior, cabe decir que aun cuando es cierto que el artículo 21 de la Constitución Federal dispone también que corresponde a la autoridad administrativa el castigo de las infracciones a los reglamentos gubernativos y de policía, castigo que sólo puede consistir en multa o arresto, la disposición debe interpretarse en el sentido de que delimita en términos generales la esfera de acción de las autoridades judicial y administrativa, disponiendo que la autoridad judicial es el órgano estatal con atribución privativa para aplicar penas por hechos delictuosos y que la autoridad administrativa no puede imponer castigos por delitos, sino sólo por faltas administrativas.

No obstante que al referirse a la competencia de las autoridades administrativas la Constitución dispone que sólo puede imponer sanciones consistentes en multas y arrestos, ***la disposición no debe interpretarse literalmente, para concluir que el precepto prohíbe a la autoridad administrativa imponer otro tipo de sanciones por violación a las leyes administrativas. En efecto, no es posible jurídicamente decir que sólo las sanciones administrativas contempladas en el artículo 21 mencionado, multa o arresto, sean las únicas que pueden ser aplicadas por autoridades administrativas, ya que el campo de acción de éstas es muy amplio y no se limita a esos dos casos, pues en el orden jurídico mexicano también es posible imponer sanciones por violación a leyes administrativas, como en el presente caso, en que la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas estatuye como sanción administrativa entre otras, impedir que los particulares presenten propuestas y celebren contratos respecto de las materias objeto de esta Ley, así como la imposición de*** multas.

Se debe insistir en que este impedimento, así como la multa no es una pena, porque la infracción que la motiva no es un ilícito tipificado en leyes penales, sino que el legislador contempla como falta o infracción administrativa el proporcionar información que resulte falsa en algún proceso para la adjudicación o celebración de un contrato de naturaleza administrativa.

A lo anterior es aplicable, en lo conducente, la tesis del Tribunal Pleno, con el rubro y texto siguientes: "Séptima Época; Pleno; SJF; "Tomo: 52 Primera Parte; Página: 55; Genealogía: Informe 1973, Primera Parte, Pleno, pág. 377.

> ***PESCA. DECOMISO DE PRODUCTOS DE, OBTENIDOS SIN LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE, LOS ARTÍCULOS 58, FRACCIÓN III, Y 61 DE LA LEY DE PESCA, NO VIOLAN EL ARTÍCULO 21 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL…***

Sostiene la impetrante que el artículo 88 de la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas viola el artículo 22 Constitucional, porque prevé una pena infamante *consistente en la privación del derecho de presentar ofertas en licitaciones y contratar las materias objeto de esta ley, haciéndolo saber a las entidades y dependencias de la Administración Pública, lo que desde luego* ***implica una limitación a una libre contratación, pero además una publicidad que se traduce en una deshonra y un descrédito.***

Con base en lo explicado con antelación, esta Primera Sala considera que este precepto combatido no establece como sanción administrativa el impedimento que se menciona, pues la fijación de ella en los preceptos reclamados no pugna con la garantía prevista en el artículo 22 constitucional, ya que no se trata, en el caso, de una pena infamante, inusitada o trascendental.

En efecto, el artículo 22, en su primer párrafo, dispone: ***"Quedan prohibidas las penas de mutilación y de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualesquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales…"***

La interpretación estrictamente literal de este precepto, particularmente en la parte transcrita, podría conducir a sostener que e***stablece una prohibición comprendida exclusivamente dentro del ámbito del derecho penal, en la medida de que la pena es la sanción específica aplicable por la comisión de un delito. De aceptar este criterio, obviamente la pretensión de la quejosa resultaría a todas luces inoperante, si se considera que impedir que participe en licitaciones públicas y realice contratos de acuerdo con la Ley de la Materia, no es una pena, sino una sanción de carácter administrativo…***

Tampoco son castigos infamantes, inusitados ni trascendentales como indica la peticionaria de garantías, las sanciones que en materia administrativa le impusieron.

Es indudable que el impedimento para participar en las licitaciones públicas y celebrar contratos de esta naturaleza no constituye una sanción inusitada o trascendental, habida cuenta de que no coincide con los elementos que esta Suprema Corte de Justicia le ha atribuido a ambos conceptos (entresacados de su finalidad penalista), pues en lo que atañe a la sanción inusitada, se ha entendido que es aquella que ha sido abolida por inhumana, cruel, infamante, excesiva, porque no corresponde a los fines que persigue su sancionabilidad, porque no llene las características de una eficaz sanción, como las de ser moral, personal, divisible, popular, tranquilizadora, reparable y, en cierta forma ejemplar, o bien aquellas sanciones que, aun cuando no hayan existido, sean de la misma naturaleza o índole de las citadas. Y en cuanto al concepto de trascendentales, no significa que las sanciones causen un mal más o menos grave en la persona del sancionado, sino que los efectos de la misma afecten a los parientes del afectado. Es claro que la sanción administrativa referida no participa de tales características, y por ello no es factible considerarla como inusitada o trascendental.

Tampoco la sanción administrativa que le impusieron a la quejosa es infamante, toda vez que no se deshonra o desacredita a la quejosa ante la sociedad con la imposición de la sanción administrativa, únicamente le impide contratar con la Administración Pública.

Esta Primera Sala sostiene el siguiente criterio (si bien aplicando los principios enunciados a la sanción en general, y no a la pena en particular), que a la letra dice:

5ª Época; 1ª Sala; SJF; Tomo: XL; Página: 2398
PENAS INUSITADAS Y TRASCENDENTALES, QUÉ "SE ENTIENDE POR.

Es infundado el concepto anterior.

De los puntos resolutivos de la resolución que se controvierte, se aprecia que a la quejosa le aplicaron una multa por la cantidad de $156,618.00 (CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS 00/100 M.N), con apoyo en lo dispuesto por el artículo 87, de la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas.

Los artículos 87, 90 y 91 de esta ley establecen:…

El Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que para que una multa no sea contraria al texto constitucional que se menciona, debe establecerse en la ley que la autoridad facultada para imponerla, tenga posibilidad, en cada caso, de determinar su monto o cuantía, tomando en cuenta la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor, la reincidencia en su caso de éste, en la comisión del hecho que la motiva, o cualquier otro elemento del que pueda inferirse la gravedad o levedad del hecho infractor, para así determinar individualizadamente la multa que corresponda.

De la lectura de los preceptos transcritos se aprecia que la multa establecida cumple con estos requisitos, además de que prevé la no imposición de sanciones o multas cuando se haya incurrido en la infracción por causas de fuerza mayor o de caso fortuito, o cuando se observe de forma espontánea el precepto que se hubiese dejado de cumplir.

Tampoco debe considerarse excesiva la multa por la sola circunstancia de que la ley contemple mínimos o máximos, toda vez que lo que estableció el legislador fue establecer una sanción a los infractores de la ley con el carácter de restitutoria y ejemplificativa, dentro de determinados parámetros, y la circunstancia de que la sanción de multa impuesta a la quejosa la considere excesiva, porque se le imponga un mínimo de cincuenta veces como salario mínimo general vigente en el Distrito Federal elevado al mes, es una apreciación de carácter subjetivo ya que no señala en base a qué elementos considera que la multa mínima es excesiva y que afecta realmente a sus posibilidades económicas.

Por tales motivos la multa impuesta a la quejosa no es excesiva y por tanto, contraria al artículo 22 constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia que enseguida se transcribe: 9ª Época; …Tesis: P./J. 9/95…

MULTA EXCESIVA. CONCEPTO DE…

Afirma la agraviada en su concepto de violación marcado con la letra g), que los artículos controvertidos violan la garantía de audiencia consagrada en el artículo 14 constitucional, ya que no existe un procedimiento para resolver sobre la aplicación de sanciones.

Resulta igualmente infundado dicho concepto de violación.

Contrariamente a lo afirmado por la peticionaria de garantías, las sanciones administrativas impuestas al quejoso, no violan la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 constitucional, toda vez que la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas sí establece un procedimiento para la aplicación de las sanciones, permitiendo al gobernado la oportunidad de defenderse, cumpliéndose con las formalidades esenciales del procedimiento.

Los artículos 92, 95 y 99 de la ley comentada establecen: …

De la lectura de los preceptos transcritos se colige que el legislador respetó la garantía de audiencia en el artículo 87 de la ley que se controvierte al cumplir con las formalidades esenciales del procedimiento como son: comunicar por escrito al presunto infractor los hechos constitutivos de la infracción; otorgar un término hasta de diez días hábiles para que exponga lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes; y transcurrido el término anterior, se emitirá resolución debidamente fundada y motivada y se comunicará por escrito al afectado.

Por otra parte, estableció una inconformidad que podrá hacerse valer ante la Contraloría, por los actos que contravengan las disposiciones de la Ley de la materia (artículo 95); así como el recurso de revocación que resulta procedente en contra de las resoluciones que dicte la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Contraloría (artículo 99).

Por lo expuesto, la ley controvertida sí cumple con las formalidades esenciales del procedimiento, respetando la garantía de audiencia, cuando la autoridad administrativa impone las sanciones previstas en la propia ley.

Apoya esta consideración la tesis de jurisprudencia P./J. 47/95…

FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO…

MÉTODOS DE INTERPRETACIÓN UTILIZADOS POR LA SCJN
DOCTRINAL. De conformidad con el tratadista Gabino Fraga, es un hecho indiscutible que el estado en el desarrollo de sus actividades obtiene de los particulares prestaciones voluntarias de bienes o servicios personales. compra inmuebles y equipos para oficina y servicios, encarga a particulares la construcción de obras públicas, obtiene préstamos, conviene con empresas de transporte la conducción de correspondencia, bultos postales y mercancías; enajena y arrenda

bienes propios etcétera, celebrando con estos motivos contratos con los particulares. (Derecho Administrativo, editorial Porrúa, México, 1980, página 395). Para Manuel María Diez el contrato de suministro es:…

LITERAL. En efecto, el artículo 22, en su primer párrafo, dispone: "Quedan prohibidas las penas de mutilación y de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualesquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales…"

La interpretación estrictamente literal de este precepto, particularmente en la parte transcrita, podría conducir a sostener que establece una prohibición comprendida exclusivamente dentro del ámbito del derecho penal

LÓGICO. Si bien el principio constitucional garantiza el ejercicio de las actividades indicadas, no puede estimarse que la libertad de trabajo es ilimitada, la propia Constitución otorga al poder público facultad para regular su ejercicio a fin de que no se lesione el interés general y el de los propios particulares.se viola esta garantía cuando de manera absoluta se impide al particular el ejercicio de cierta actividad, o bien cuando a través del establecimiento de ciertos requisitos o condiciones se le prohíba dicho ejercicio.

FUNCIONAL. La autoridad judicial es el órgano estatal con atribución privativa para aplicar penas por hechos delictuosos y la autoridad administrativa no puede imponer castigos por delitos, sino sólo por faltas administrativas.

SISTEMÁTICO. Los artículos 92, 95 Y 99 de la ley comentada, establecen:…

b) De competencia económica ..... A.R. 489/2007, p. 412

P) LICITACIÓN ..... A.R. 967/2006, p. 342; C.C. 54/2003, p. 322

a) Convocatoria a la licitación ..... A.R. 1725/2004, p. 309

b) Licitación pública internacional ..... A.R. 1520/2004, p. 377
A.R. 1725/2004, p. 309

c) Naturaleza jurídica de la..... A.R. 219/2001, p. 350

Q) LICITANTE.

a) Reasignación de licitante ganador primario ..... A.R. 89/2012, p. 326

R) MONOPOLIOS..... A.R. 984/2007, p. 398

S) RECURSOS.

a) Recurso de inconformidad ..... A.R. 219/2001, p. 350

b) Recurso de revisión ..... A.R. 409/210, p. 408

T) SANCIÓN POR INFRACCIONES A LA LAASSP ..... A.R. 851/2006, p. 330

a) Multas a licitantes ..... A.R. 89/2012, p. 326; A.R. 984/2007, p. 398
A.R. 1389/2006, p. 402

b) Sanciones impugnadas (sub júdice) ..... A.R. 1091/2007, p. 315

c) Pago de gastos financieros .....C.T. 86/2007-PS, p. 344

d) Sanción trascendente ..... A.R. 851/2006, p. 330

U) SALARIOS MÍNIMOS, COMISIÓN NACIONAL DE LOS..... A.R. 489/2007, p. 412

V) TRATADOS DE LIBRE COMERCIO ..... A.R. 1725/2004, p. 309

W) PENAS VS SANCIÓN ADMIISTRATIVA ..... A.R. 851/2006, p. 330
A.R. 1441/78, p. 419

X) PRECIO CONVENIENTE..... A.R. 587/2011, p. 385

En este capítulo se llevó a cabo el estudio casuístico de 25 engroses de sentencias emitidas por nuestro Más Alto Tribunal, que se resolvieron en juicios identificados debidamente en tres vías: juicios de amparo, juicio de controversia constitucional y expedientes de contradicción de tesis jurisprudenciales[230] en materia de interpretación de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que data del 4 de enero del año 2000, es decir se han producido en ya casi 17 años, así el estudio realizado es sobre el total de tesis aisladas y de jurisprudencia que recogen el trabajo jurisdiccional.

Se produjeron 65 “voces” es decir identificadores al común concepto de violación que implican los argumentos de inconstitucionalidad o ilegalidad reclamados por los accionantes de juicios de amparo, o de controversia constitucional en que tuvo verificativo la creación del criterio de nuestros jueces.

Conocer para un promovente la manera como se ha resuelto previamente un argumento de agravio, es decir, de lesión a nuestros derechos por parte de una

[230] Por diferentes criterios al resolver los jueces inferiores esperan la emisión de una resolución para futuros casos por el órgano jurisdiccional superior, p. e., la Segunda Sala de la SCJN, respecto de tribunales colegiados de circuito.

autoridad que interviene en procesos licitatorios, implica una incuestionable ventaja: si el argumento tomado en cuenta ha sido resuelto a favor del gobernado, la respuesta es sencilla: hay que repetirlo y reiterar el criterio fijado anteriormente por el juzgador, si resulta que es inconveniente, dará pauta a que desarrollemos más nuestra imaginación y propongamos nuevos conceptos de violación de acuerdo con nuestros derechos constitucionales.

Después de concluido el arduo trabajo de analizar 1,900 fojas útiles con las que cuenta dicho material jurisdiccional al que tuvimos acceso a través de la página de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se aprecia que los métodos interpretativos se utilizaron como sigue:

Método utilizado por la SCJN	Número de veces utilizado:
Teleológico	13
Funcional	12
Sistemático	11
Lógico	7
Doctrinal	4
Genético	2
Literal	2
TOTAL	51

Existen más métodos que expedientes pues al resolver un asunto, la Suprema Corte resuelva frecuentemente más de un alcance de nuestra Ley de Adquisiciones por diversos argumentos propuestos.

La presente investigación no tiene diverso estudio en la materia, es la primera vez que se aproxima a la comunidad interesada el estudio, desenvolvimiento y resolución de controversias administrativas entre los particulares licitantes y la Administración Pública en México, sobre la resolución de los conflictos derivados de adquisiciones públicas y resueltos definitivamente por la vía jurisdiccional, de allí su gran relevancia.

CONCLUSIONES

PRIMERA.- Para diversos historiadores resulta de poca relevancia estudiar los antecedentes de la Administración Pública, pero es necesario conocer los métodos y sistemas organizativos, utilizados en diversas épocas para la adecuada satisfacción de las necesidades de bienes y servicios indispensables, en la atención de los requerimientos de la sociedad. Los funcionarios públicos, encargados de licitaciones públicas, frecuentemente carecen del marco conceptual del objeto de estudio y el estudio del objeto de la Administración Pública, originándose la ineficiencia, por lo que la SFP, dentro de sus atribuciones, deberá instrumentar la formación teórica mínima de cada nivel de responsabilidad.

Es notoria la presencia de las contrataciones públicas desde la antigüedad y su impacto en las tareas del gobierno, en nuestro país se contempla su regulación en el artículo 134 constitucional y se establece la Ley de Adquisiciones desde 1965, resultando la base para las contrataciones en la actualidad. Es de suma importancia su estudio para una aplicación oportuna a las tareas sustantivas del gobierno, así como conocer el marco conceptual de la Administración Pública y entender el papel de los organismos internacionales que incentivan para innovar o apoyar al desarrollo de los países, entre otros rubros, en contrataciones públicas, incluso como parte del fortalecimiento de estados débiles.

SEGUNDA.- En cuanto a mi hipótesis de investigación, se propone que el poder Ejecutivo y el Legislativo se han visto obligados a escuchar a la sociedad civil harta de la corrupción e impunidad, creando el Sistema Nacional de Transparencia, el Sistema Nacional de Fiscalización y el Sistema Nacional Anticorrupción; para originar estos sistemas y garantizar los derechos y obligaciones, se reformaron la Constitución, algunas de sus leyes, así como la generación de otras, además de lineamientos, decretos, entre otros, para consolidar el marco normativo. Sin embargo, las instituciones que aplican las disposiciones legales, no se reforzaron, presupuestal y estructuralmente como era esperado, denotando la falta de voluntad política del Ejecutivo y Legislativo que pueden acarrear la ineficiencia e ineficacia de los mismos sistemas.

El Sistema Nacional Anticorrupción ha provocado polémica desde antes de su creación e implementación por las barreras políticas para ponerlo en marcha, aun siendo una petición determinante por parte de la sociedad y recomendada por parte de los organismos internacionales, hace más de 20 años. El reto apenas inicia con la implementación, la batalla que continúa será la que determine el éxito de su funcionamiento, se requiere impulsar la notable participación ciudadana,

mantener las presiones académicas y de la sociedad civil a pesar de las incomodidades por la poca preparación de los funcionarios públicos que no están acostumbrados a ser acotados en sus actividades, reforzar el marco normativo con la creación de leyes y la profesionalización de los servidores público, entre otras.

TERCERA.- El desconocimiento integral, sistemático y armónico de la normatividad en materia de adquisiciones públicas se comprueba al revisar las principales causas de inconformidad de las cerca de 1000 que se promueven cada año, pues con frecuencia se actúa de manera arbitraria y parcial por parte de los servidores públicos encargados de llevar a cabo los procedimientos de contratación pública. Para mejorar los procesos de contratación, los actores deben de tener acceso a la correlación del marco normativo con la LAASSP, a fin de reducir inconformidades y ahorrar procedimientos por aplicación incorrecta de las disposiciones legales. Asimismo, los licitantes o proveedores también deben de conocer el mismo marco para tener una participación libre de vicios y así evitar una mala actuación en el procedimiento.

CUARTA.- La defensa jurídica del gobernado se da cuando el licitante o proveedor, se ve obstaculizado por parte de la autoridad de manera ilegal y recurre a las instancias pertinentes para alegar a lo que su derecho corresponda. La mayoría de estos asuntos se pueden evitar con el conocimiento del marco normativo y su correcta aplicación, como se mencionó anteriormente, tanto de la autoridad como del proveedor, así se llegaría al principio de economía procesal por parte del Estado e incluso evitaría que inicie el proceso. Por otra parte el proveedor al conocer todo el marco, evita incurrir en infracciones y así puede ejercer en su máxima expresión el principio de competitividad en los procedimientos de contratación pública.

QUINTA.- La bastedad de la normatividad aplicable a las contrataciones públicas es amplia, entre ellas están por nivel jerárquico la Constitución, tratados, leyes, códigos, reglamentos, decretos, acuerdos y más de 90 criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre otras. El marco normativo puede tener diversas interpretaciones hermenéuticas, que en reiteradas ocasiones los actores que resuelven impugnaciones las desconocen, así como los métodos interpretativos utilizados por la SCJN, y en consecuencia, al emitir la correspondiente resolución la realizan de manera arbitraria y parcial, sin embargo al tener la sistematización del marco normativo y ser parte del Sistema Nacional de Profesionalización, permitiría ampliar los conocimientos en la materia y resolver las controversias apegadas a derecho, provocando un impacto positivo en la Administración Pública Federal.

La duda es que a pesar de contar con premios y reconocimientos a nivel internacional, no se ha tenido el resultado operativo buscado, debido a la corrupción e impunidad institucionalizadas, haciendo que las leyes se tuerzan a favor de los intereses de los funcionarios que aplican el marco normativo lo que lleva necesariamente a una mala interpretación del mismo, impulsada por un ánimo perverso del grupo en el poder para hacerse de recursos que cubran al gasto político fuera de la legalidad en las contiendas electorales, así como el enriquecimiento personal de los actores.

SEXTA.- Existe el temor a inconformarse por parte de los particulares, ya que sienten que pueden ser excluidos en próximas licitaciones, sin embargo, ante la escandalosa corrupción e impunidad reinante en la Administración Pública Federal, la sociedad civil, las universidades y líderes de opinión han presionado al sistema político para aprobar el Sistema Nacional Anticorrupción, el cual debe ser el marco normativo que le de soporte y confianza al gobernado para instrumentar su defensa jurídica cuando la Administración Pública vulnere sus derechos públicos subjetivos, es decir, el temor a ser reprimido, debiera dejar de ser un obstáculo para la aplicación de la ley, siempre y cuando el SNA no sea una simulación y el gobernado comience a ver que sus impugnaciones tienen un resultado objetivo, sin que se le margine, como venganza en las contrataciones públicas. Un ejemplo del miedo impuesto por el Estado, es el caso de *Infraiber* a quien han hostigado con procesos penales, auditorias, incluso la PGR ha detenido a los directivos, cateando sus oficinas, decomisando sus computadoras y sus archivos. El SAT los audita tendenciosamente buscando perjudicarlos, entre otros abusos del poder que castiga severamente, hasta el exterminio, a quien se atreve a denunciarlo.

SÉPTIMA.- Los aportes de la tesis de doctorado se cumplieron de la siguiente manera:

A) Se determinaron los muy valiosos avances en materia normativa que tuvo el país al establecer el Sistema Nacional de Transparencia, el Sistema Nacional de Fiscalización y el Sistema Nacional Anticorrupción, pero también se esclarecen los pendientes normativos y políticos al señalar que los jueces se pliegan indebidamente a los intereses del Poder Ejecutivo y de los empresarios que saquean al erario federal, es decir, toda la maquinaria del Estado va en contra de quien se atreve a denunciar. En consecuencia, lo que se debe de hacer para que no exista el temor a inconformarse es dar vigencia al Estado de Derecho, es decir, que las siete leyes del SNA se apliquen sin restricción alguna, entendiéndolas como una forma de contener a los intereses ilegales de un grupo en el poder, fortalecer a las instituciones que aplican las leyes

y su independencia del ejecutivo, para que puedan cumplir sus funciones y responsabilidades, evitando ser fácil objeto de las presiones políticas.

El reto apenas inicia al implementar el Sistema Nacional Anticorrupción, como señala Eduardo Bohórquez, Director Ejecutivo de Transparencia Mexicana pues faltarían reformar y crear más de 20 leyes para que tenga un carácter integral y sistemático, como la Ley de Responsabilidad Fiscal y el Registro Público de la Propiedad, entre otras.

El PAN en el Senado menciona las reformas pendientes en materia anticorrupción y exige que el fiscal sea independiente:

- Modificar el artículo 102 Constitucional, relativo al Fiscal General de la República.
- Ley de la Fiscalía General de la República.
- Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
- Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados.
- Ley de Asociaciones Público Privadas.
- Ley del Servicio Profesional de Carrera.
- Regulación del procedimiento de nombramiento de los titulares de los Órganos Internos de Control.

Es importante señalar que para complementar el Sistema Nacional de Transparencia es necesario expedir la Ley General de Archivos.

B) Se realizó la correlación del marco normativo, integrado por más de 90 disposiciones legales y más de 90 resoluciones de la corte, ni siquiera la SFP que es la encargada de llevar a cabo la normatividad de la materia a través de la Dirección General Adjunta de Normatividad de Adquisiciones ofrecen esta correlación, ni tampoco los académicos o doctrinarios del Derecho Administrativo. El anexo I cubre una terrible omisión informativa a la comunidad ofreciendo un marco normativo completo e integral de las adquisiciones públicas, no accesible antes de esta tesis.
C) Se determinó con exactitud el marco normativo de la defensa jurídica del gobernado en su carácter de licitante o proveedor ante los agravios de la autoridad administrativa que opera las contrataciones públicas: a) la instancia de inconformidad; b) el recurso de revisión; c) el juicio contencioso administrativo y d) el juicio de amparo.
D) Se dan a conocer los criterios de interpretación utilizados por la SCJN de tal manera que el licitante o proveedor así como los funcionarios conozcan el debido significado del marco normativo, pues así

evitaríamos muchos errores de la autoridad al resolver los medios de impugnación aplicables a las contrataciones públicas y, que el gobernado evite recurrir a situaciones que no le favorecen o, en su caso, busque nuevas vías, no rechazadas por la Corte para hacer valer sus derechos.

OCTAVA.- Comparto con los especialistas del país que la corrupción abre la puerta a un Estado paralelo. Las mafias controlan los presupuestos públicos, los congresos locales y también las instituciones de fiscalización y procuración de justicia, por lo que el gran reto del país es que las elites del poder ejerzan su función de podar lo podrido del sistema para darle la oportunidad a la Nación y a los grupos de poder de superar los lastres y entrar a una etapa de desarrollo social y económico más justo, equitativo y duradero.

NOVENA.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto cientos de asuntos de juicios de amparo, de controversia constitucional y de acciones de inconstitucionalidad, relativos a la interpretación de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como contradicciones de criterios jurisprudenciales por tribunales inferiores.

En dichos asuntos los métodos hermenéuticos utilizados por nuestro Máximo Tribunal más frecuentes son el teleológico, que privilegia el fin que buscó el legislador al crear la norma jurídica; el funcional, que implica atender a las atribuciones legales de la autoridad administrativa en el proceso de contratación; y, el sistemático que conlleva el análisis integral de las instituciones administrativas, en este caso las contrataciones públicas.

Por lo anterior el gobernado al formular argumentos de violación al principio de Legalidad, señalando violación a la ley en los procedimientos de contratación deberá atender primordialmente a tres cuestiones:

A) El fin que buscó el legislador al crear la norma jurídica que regula el procedimiento administrativo de contratación pública;
B) El régimen de distribución de competencias y atribuciones de las autoridades administrativas que participan en este proceso y;
C) El análisis exhaustivo de la institución de la contratación pública y la interpretación conjunta de las reglas jurídicas que la regulan, evitando una interpretación parcial.

Con ello, el grado de probabilidad de éxito en su reclamación se incrementará notablemente.

FUENTES DE INFORMACIÓN

OBRAS

- Abdón, Jorge *"Transparencia y acceso a la información gubernamental"*, en Caballero, José A., et al. El acceso a la información judicial en México: una visión comparada, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2005, 5 de febrero de 2016 en http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/4/1646/17.pdf
- Acosta Romero, Miguel. *Teoría general del derecho administrativo*, Quinta Edición, Editorial Porrúa, México, 1983.
- Alcalá-Zamora y Castillo, Niceto, y Levene Ricardo. *Derecho procesal penal*, Editorial G. Kraft, Buenos Aires, 1945.
- Alchourrón, Carlos E. y Bulygin, Eugenio. *Introducción a la metodología de las ciencias jurídicas y sociales*, Astrea, Buenos Aires, Argentina, 1974.
- Alfeln Da Silva, Kelly Susane. *Hermenéutica jurídica y concreción judicial*, Editorial Temis, Bogotá, Colombia, 2006.
- Amaya Barón, Ismael M. *Los medios de impugnación en los procedimientos de contratación del Estado*, Editorial Angel editor, México, 2008.
- Andrade Sánchez, Eduardo. *Comentarios al artículo 134 constitucional, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos*, Editorial UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, 1985.
- Arciniega Rendón, José Manuel. *Sistematización del régimen jurídico mexicano en materia de adquisiciones del gobierno federal*, Tesis para obtener el grado de Maestro en Administración Pública, México, 2013.
- Armienta Hernández, Gonzalo. *Tratado teórico práctico de los recursos administrativos,* Editorial Porrúa, México, 1999.
- Arrellano Garcia, Carlos. *El juicio de Amparo*, Segunda edición, ed. Porrúa, México, 1983.
- Arvizu Tovar, Laura y Márquez Rábago, Sergio Ricardo. *Marco legal de la medicina veterinaria*, Editorial El Manual Moderno, México, 2008.
- Baena del Alcázar, Mariano. *Curso de ciencia de la administración,* volumen primero, ed. 4ª. Editorial Tecnos, Madrid, 2000.
- Bercaitz, Miguel Ángel. *Teoría general de los contratos administrativos*. Editorial Depalma, Buenos Aires, 1952.
- Burgoa, Ignacio. *El juicio de amparo*, ed. 40a. Editorial Porrúa, México, 2009.
- Calafell, Jorge Enrique, *Teoría del acto administrativo*, *Jurídica. Anuario del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana*, núm. 24, México, 1995.

- Carbonell Sánchez, Miguel*. Legislación sobre adquisiciones y obras públicas, Federal y del Distrito Federal*, Editorial Porrúa, México, 2007.
- Carrillo Castro, Alejandro. *La reforma administrativa en México*, INAP, México, 1973.
- Casar Pérez, María Amparo. *México: Anatomía de la Corrupción.* 2° edición, Editorial Mexicanos contra la corrupción y la impunidad (MCCI), México, 2016.
- Cossio, José Ramón, *Estado de derecho, concepto, funciones y límite*, Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional ISSN 1138-4824, núm. 11, Madrid, 2007.
- Delgadillo Gutiérrez, Luis Humberto y Lucero Espinosa, Manuel. *Compendio de derecho administrativo, Primer y Segundo Curso*, Editorial Porrúa, México, 2008.
- Delpiazzo, Carlos E., *Contratación administrativa*, Universidad de Montevideo, Montevideo, 1999.
- Díaz, Elías. *Estado de derecho y sociedad democrática*, 8° Ed., Taurus Ediciones, S.A., Madrid, 1981.
- Dromi, José Roberto. *Licitación pública, administración y contratación*. Imprenta Paresco, Argentina, 1999.
- Enríquez Rubio, Ernesto (Coord.). *Administración de recursos materiales en el sector público*, INAP, México, 2002.
- Escola, Héctor Jorge, *Tratado integral para los contratos administrativos*. Editorial Depalma, Buenos Aires, 1989.
- Farro Fara, Gerardo y Huacuja Betancourt, Sergio. *La regulación del proceso de las adquisiciones del gobierno federal*, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1989.
- Fernández Madrazo, Alberto. *El derecho procesal administrativo*, Semanario de derecho administrativo, UNAM, México, Abril 2011.
- Fernández Ruiz, Jorge. *Derecho administrativo-contratos*, Editorial Porrúa, México, 2000.
- Fix-Zamudio, Héctor. *La Constitución y su defensa*, CNDH, México, 1993.
- Fraga Mouret, Gabino. Revisada y actualizada por Fraga, Manuel. *Derecho Administrativo,* Cuadragésima Segunda Edición, Editorial Porrúa, México, 2002.
- Frossini, Vittorio. *Prolegómenos a la interpretación jurídica*, en Teoría de la Interpretación Jurídica, Temis, Bogotá, 1991.
- García Amado, Juan Antonio. *Criterio y conducta*, Suprema Corte de Justicia de la Nación, México, D.F., 2008.
- García Amado, Juan Antonio. *Filosofía hermenéutica y derecho*, en Ensayos de Filosofía Jurídica, Temis, Bogotá, 2005.

- García Amado, Juan Antonio. *Sobre la interpretación constitucional*, en Ensayos de Filosofía Jurídica, Temis, Bogotá, 2003.
- García de Enterría, E. y Fernández, T. R., *Curso de derecho administrativo I*, 10a. ed., Editorial Civitas, Madrid, 2001,
- Gómez de Lara, Fernando. *Comentarios a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público*, Editorial Novum, México, 2012.
- Gordillo, Agustín A., *Procedimiento y recursos administrativos,* Jorge Álvarez editor, Buenos Aires, 1964.
- Gordillo, Agustín. *Tratado de derecho administrativo y obras selectas*, Editorial Función del derecho administrativo, Buenos Aires, 2013.
- Gozaíni, Osvaldo Alfredo. *Notas y estudios sobre el proceso civil*, UNAM, México, 1994,
- Hoyos, Arturo. *La interpretación constitucional*, Editorial Temis, Bogotá, 1984.
- Infante Meléndez, Héctor Mateo. *Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios del Sector Público*, Instituto Nacional de Administración Pública, A.C., México, 2011.
- López Veneroni, Felipe. *La inevitabilidad de la hermenéutica en las ciencias sociales,* en La Administración Pública en el Debate Contemporáneo de las
- Ciencias Sociales, Fernando Castañeda Sabido y Rina Marissa Aguilera Hintelholher (coordinadores), coedición, Universidad Autónoma de México y ediciones La Biblioteca, S.A. de C.V., México, 2015.
- López-Elías, Pedro José. *Aspectos jurídicos de la licitación pública en México*, Editorial UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, 1999.
- Lucas Verdú, Pablo. *Estado liberal de derecho y estado social de derecho. Editorial Acta Salmanticensia*, Salamanca, 1955.
- Lucero Espinosa, Manuel*. La licitación pública*, Editorial Porrúa, México, 1993.
- Lucero Espinoso, Manuel. *Teoría y práctica del contencioso administrativo Federal*, Novena Edición, Editorial Porrúa, México, 2006.
- Márquez Rábago, Sergio Ricardo. Interpretación constitucional, Lectura del curso Hermenéutica Jurídica. Doctorado en Administración Pública del INAP, curso 2015
- Martínez Alfaro, Joaquín. *Los contratos derivados del artículo 134 constitucional*, Segunda Edición, Editorial Porrúa, México, 1993.
- Martínez Anzures, Luis Miguel. A*ntología sobre la teoría de la Administración Pública(coordinador),* INAP, México, 2002.
- Martínez Muñoz, Gonzalo. *Planeación y presupuesto por programas*, 1ª edición, Editorial Siglo XXI, México, 1967
- Martínez Puón, Rafael. *La profesionalización de la Administración Pública en México. Dilemas y perspectivas,* INAP, Madrid, 2003.

- Méndez Martínez, José Luis (Com.), *Servicio profesional de carrera*, vol. 11, Editorial Siglo XXI, México, 2011.
- Méndez Martínez, José Luis. *Servicio profesional de carrera,* Siglo XXI, México, 2011.
- Moreno Rodríguez, Rodrigo. *La Administración Pública Federal en México, Tesis Doctoral.* UNAM, México 1979.
- Nava Negrete, Alfonso y Quiroz Acosta, Enrique. *Recurso administrativo*, editorial UNAM-Porrúa, México, 2003.
- Padilla, Jose R., *Sinopsis de amparo*, Editorial Porrúa, México, 2007.
- Palacios Prieto, Jana. *Rendición de cuentas y compras de gobierno. Cuaderno sobre rendición de cuentas 5*, Secretaría de la Función Pública, 2012.
- Palomar de Miguel, Juan. *Diccionario para juristas*, Porrúa, México, 2010.
- Peniche López, Edgardo. *Introducción al derecho y lecciones de derecho civil*, Editorial Porrúa, México 2010.
- Peralta, Ramón. *La interpretación del ordenamiento jurídico conforme a la norma fundamental del Estado,* Editorial Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 1994.
- Picontó Novales, Teresa. *Teoría general de la interpretación y hermenéutica jurídica: Betti y Gadamer*, Anuario De Filosofía del Derecho IX, Chile, 1992.
- Quintana Valtierra, Jesús, y Rojas Yáñez, Jorge. *Derecho tributario mexicano*, Editorial Trillas, México, 1988.
- Ramos Torres, Daniel*. Los contratos administrativos de adquisiciones, arrendamientos y servicios. En el marco de la doctrina del derecho de la contratación pública, su legislación vigente y la jurisprudencia*, Editorial Public Management de México S.C., México, 2012.
- Romero Díaz, Juan. *Imagen elemental de la hermenéutica jurídica*, México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2012.
- Romero Gudiño, Alejandro. *Visión integral del Sistema Nacional de Combate a la Corrupción,* Editorial INACIPE, México, 2015.
- Romilly, Jacqueline. *Los fundamentos de la democracia (Problémes de la démocratie grecque),* Cupsa, Madrid, 1977.
- Sánchez Gómez, Narciso. *Segundo curso de derecho administrativo,* Editorial Porrúa, México, 1998.
- Sánchez González, José Juan. *La Administración Pública como ciencia. Su objeto y su estudio,* Plaza y Valdés editores, México, 2001.
- Sánchez González, José Juan. *La corrupción administrativa en México*, Editorial IAPEM, México, 2012.
- Sayagués Laso, Enrique*. Tratado de derecho administrativo, Tomo I*, Editorial Fundación de Cultura Universitaria, Montevideo, 2010.

- Sosa López, José de Jesús (Comp.), *Transparencia y rendición de cuentas,* No. 14, Editorial siglo XXI, México 2011.
- Suárez Salazar, Carlos. *Ley de Adquisiciones y Obras Públicas: comentada y actualizada*, Segunda Edición, Editorial Limusa, México, 1997.
- Sulser Valdés, Rosario Alejandra, *Tratados Comerciales Internacionales*, Editorial Ediciones Fiscales ISEF, México 2010.
- Velasco Gómez. Ambrosio. *Hermenéutica y ciencias sociales, en Tratado de metodología de las ciencias sociales: perspectivas actuales, Enrique de la Garza Toledo y Gustavo Leyva (coordinadores),* coedición, Fondo de Cultura Económica y Universidad Autónoma Metropolitana, México, 2012.
- Wroblewski, Jerzy. *¿Instituciones y funciones de la interpretación constitucional?*, en Constitución y Teoría general de la interpretación jurídica. Traducción de Arantxa Azura. Editorial Civitas, Madrid, 1985.

LEGISLACIÓN

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_240217.pdf
- Ley General de Contabilidad Gubernamental en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGCG_180716.pdf
- Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGPDPPSO.pdf
- Ley General de Responsabilidades Administrativas en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGRA.pdf
- Ley General de Sociedades Mercantiles en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/144_140316.pdf
- Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGTAIP.pdf
- Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGSNA.pdf
- Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIPD_171215.pdf
- Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFACP_180716.pdf
- Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGTAIP.pdf
- Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGPDPPSO.pdf
- Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFACP_180716.pdf

- Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/111.pdf
- Ley Federal de Procedimiento Administrativo en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/112_020517.pdf
- Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPCA_270117.pdf
- Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFRPE.pdf
- Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/240_180716.pdf
- Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/115_180716.pdf (Ley abrogada a partir del 19 de julio de 2017 por Decreto del DOF 18 de julio de 2016).
- Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFTAIP_270117.pdf
- Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPRH_301215.pdf
- Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFACP_180716.pdf (Ley abrogada a partir del 19 de julio de 2017 por Decreto del DOF 18 de julio de 2016).
- Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/14_101114.pdf
- Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFRCF.pdf
- Ley de Coordinación Fiscal en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/31_180716.pdf
- Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LAmp_170616.pdf
- Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFRCF.pdf
- Ley del Diario Oficial de la Federación y Gacetas Gubernamentales en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/75.pdf
- Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/260.pdf
- Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LOPGR_180716.pdf
- Código Civil Federal en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/2_241213.pdf

- Código Federal de Procedimientos Civiles en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/6.pdf
- Código Penal Federal en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/6.pdf
- Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LAASSP.pdf
- Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública en http://www.gob.mx/sfp/documentos/reglamento-interior-de-la-sfp

HEMEROGRAFIA

- Cortés Ontiveros, Ricardo. "La transparencia en México: Razón, origen y consecuencias", En Revista de la Facultad de Derecho de México, México, No. 244, 2005.
- Gaceta Parlamentaria, [en línea], LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, Declaratoria de Publicidad de los dictámenes, Anexo III, México, 26 de febrero de 2015, Número 4223-III, Año XVIII, en http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/62/2015/feb/20150226-III.pdf
- Gutiérrez Salazar, Miguel Ángel. "La importancia de construir un Sistema Nacional de Rendición de Cuentas en México". Hechos y Derechos, núm. 19, enero 2014, en https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/hechos-y-derechos/article/view/6913/8849
- Martínez, Martha. "Anticorrupción: Sistema que no nace". Revista R. (Núm. 122), 10 de abril 2016.
- Martínez Rosaslanda, Sergio. "El recurso de revisión como medio para impugnar las resoluciones del Tribunal Fiscal de la Federación". Jurídica. Anuario del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, número 20, México, 1990, en http://historico.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/jurid/cont/20/pr/pr26.pdf
- Núñez, Ernesto. "La reforma anticorrupción aún no ha concluido". Revista R. (Núm. 132), 19 de junio de 2016.
- Sánchez González, José Juan. "Usos de la accountability en la administración pública". Revista Venezolana de Gerencia. Vol. 19, (Núm. 68), Octubre-diciembre 2014.
- Silveira, Alipio, "Roscoe Pound y su influencia sobre la hermenéutica jurídica", Revista de la Facultad de Derecho en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, No. 13, 1954 en http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/facdermx/cont/13/dtr/dtr7.pdf
- Zárate Castillo, Arturo. La Ley del Servicio Profesional de carrera en la Administración Pública Federal. Revista Mexicana de Derecho Constitucional. Núm. 9, julio-diciembre 2003.

MESOGRAFÍA

- Decreto por el que se expide la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, Cámara de Diputados, última visita el 28 de mayo de 2015 en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/proceso/lxi/252_DOF_11jun12.pdf
- Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Sobre la UNODC, última visita el 1 de marzo de 2016 en https://www.unodc.org/unodc/en/about-unodc/index.html?ref=menutop
- Rojas Amandi, Víctor Manuel. La zona de libre comercio de América del Norte, el inicio, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, última visita el 1 de marzo de 2016 en http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/indice.htm?r=jurid&n=39
- Transparencia Internacional, Historia, última visita el 2 de marzo de 2016 en http://www.transparency.org/whoweare/
- Martínez Bullé Goyri, Víctor M., La responsabilidad administrativa de los servidores públicos y el medio ambiente, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, última visita el 3 de marzo de 2016 en http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/1/141/5.pdf
- Banco Interamericano de Desarrollo (2013), Guía para la Aceptación del uso de los sistemas nacionales de adquisiciones, última visita el 4 de mayo de 2016 en http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=35225025
- Banco Mundial, Quienes somos, última visita el 4 de mayo de 2016 en http://www.bancomundial.org/es/about
- Banco Mundial, Actividades, última visita el 5 de mayo de 2016 en http://www.bancomundial.org/es/about/what-we-do
- Red Interamericana de Compras Gubernamentales, Premio al liderazgo “Joseph Francois Robert Marcello” en compras públicas, última visita el 10 de mayo de 2016 en http://www.ricg.org/criterios-de-elegibilidad/contenido/234/es/
- Red Interamericana de Compras Gubernamentales, X Conferencia Anual de Compras Gubernamentales en las Américas, llevada a cabo del 28 al 30 de Octubre de 2014 en Asunción, Paraguay, última visita el 10 de mayo de 2016 en http://www.ricg.org/edicion-no-5-2014/contenido/352/es/
- Real Academia Española, Diccionario de la Lengua Española, última visita el 10 de mayo de 2016 http://dle.rae.es/?id=HXFDqkJ
- Red Interamericana de Compras Gubernamentales, Criterios del Premio "Innovación en las Compras Gubernamentales", última visita el 10 de mayo de 2016 en http://www.ricg.org/criterios-del-premio/contenido/233/es/

- Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Propuesta de Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, última visita el 6 de junio de 2016 en http://inicio.ifai.org.mx/nuevo/Propuesta%20%20de%20Ley%20General%20de%20TAI%20PDF.pdf
- Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Misión, visión y objetivos, última visita el 6 de junio de 2016 en http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/misionViosionObjetivos.aspx
- Auditoría Superior de la Federación, Misión y visión, última visita el 7 de junio de 2016 en http://www.asf.gob.mx/Publication/22_Mision_y_Vision
- Auditoría Superior de la Federación, Marco de Actuación, última visita el 7 de junio de 2016 en http://www.asf.gob.mx/Publication/23_Marco_de_Actuacion
- Organización de los Estados Americanos, Secretaria de la Función Pública - Órganos Internos de Control, última visita el 7 de junio de 2016 en http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_mex_OIC.pdf
- Red Interamericana de Compras Gubernamentales, Profesionalización en Compras Públicas, última visita el 23 de junio de 2016 en http://ricg.org/profesionalizacion-en-compras-publicas/contenido/459/es/
- Escriche, Joaquín, Diccionario razonado de legislación y jurisprudencia, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, última visita el 23 de agosto de 2016 en http://bibliohistorico.juridicas.unam.mx/libros/1/364/22.pdf
- Fernández Ruiz, Graciela, Argumentación y lenguaje jurídico. Aplicación al análisis de una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, México, UNAM, última visita el 26 de agosto de 2016 en http://bibliohistorico.juridicas.unam.mx/libros/7/3016/3.pdf
- García Máynez, Eduardo, Misión y límites de la hermenéutica jurídica, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, última visita el 26 de agosto de 2016 en http://dianoia.filosoficas.unam.mx/files/6213/7021/0433/DIA62_Garcia_Maynez.pdf
- El financiero, Reforma de justicia laboral sería promulgada este año, última visita el 14 de noviembre de 2016 en http://www.elfinanciero.com.mx/economia/reforma-de-justicia-laboral-seria-promulgada-este-ano.html
- El financiero, México ratificará el TPP a finales de este año, anticipa el secretario de Economía, última visita el 13 de diciembre de 2016 en http://www.elfinanciero.com.mx/economia/mexico-ratificara-el-tpp-a-finales-de-2016-guajardo.html

- Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Misión y visión, última visita el 18 de enero de 2017 en http://www.coneval.org.mx/quienessomos/Paginas/misionvision.aspx
- Sistema Nacional de Transparencia, Marco normativo, última visita el 27 de abril de 2017 en http://www.snt.org.mx/index.php/home/marco-norm

CONFERENCIAS:

- Presentación del libro “Visión integral del Sistema Nacional de Combate a la Corrupción” de Romero Gudiño, Alejandro, Senado de la República en abril de 2016.
- Primer Congreso Académico de Derecho, del 9 al 11 de noviembre de 2016, Universidad Westhill.
    - Análisis del Sistema Nacional Anticorrupción por: Mtro. Enrique Sumuano Cancino (Director General de Responsabilidades de la Contraloría del PJF), Dr. Armando Martínez Gómez (Rector de la Universidad del Pedregal) y la Dra. Nicandra Castro Escarpulli (TCA CDMX).
    - Conferencia Magistral 6 “Sistema Nacional Anticorrupción” por el Lic. Marino Castillo Vallejo (Contralor del PJF).
    - Conferencia Magistral 8 “Sistema Nacional Anticorrupción” por el Dr. Mauricio Merino Huerta (Investigador del CIDE).
- 1era. Mesa de Análisis de las 7 Leyes del Sistema Nacional Anticorrupción, 20 de octubre de 2016, INAP, sede principal.
- 2da. Mesa de Análisis de las 7 Leyes del Sistema Nacional Anticorrupción, 3 de noviembre de 2016, INAP, sede principal.

INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

DOCTORADO EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
RVOE 2006481

LA LEGALIDAD Y RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN CONTRATACIONES PÚBLICAS FEDERALES. APLICACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN.

ANEXOS

TESIS
QUE PARA OBTENER EL GRADO
DE DOCTOR EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

PRESENTA:

JOSÉ MANUEL ARCINIEGA RENDÓN

DIRECTOR:

DR. SERGIO RICARDO MÁRQUEZ RÁBAGO

Ciudad de México Noviembre 2017

ÍNDICE

ABREVIATURAS Y SIGLAS UTILIZADAS I

ANEXO 1. CORRELACIÓN DE LA LAASSP Y SU REGLAMENTO III

A) MARCO NORMATIVO COMPLEMENTARIO Y SUPLETORIO.

1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 1

LEYES GENERALES.

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental 6

3. Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 17

4. Ley General de Responsabilidades Administrativas (Forma parte de las siete leyes que integran el Sistema Nacional Anticorrupción) 26

5. Ley General de Sociedades Mercantiles 68

6. Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 69

7. Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción (Forma parte de las siete leyes que integran el Sistema Nacional Anticorrupción) 80

8. Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad 95

LEYES FEDERALES.

9. Ley de Ciencia y Tecnología 96

10. Ley de Comercio Exterior 96

11. Ley de Coordinación Fiscal 97

12. Ley de Firma Electrónica Avanzada 97

13. Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación (Forma parte de las siete leyes que integran el Sistema Nacional Anticorrupción) 98

14. Ley de Ingresos de la Federación 116
15. Ley de Instituciones de Crédito 117
16. Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas 117
17. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 119
18. Ley de Petróleos Mexicanos 120
19. Ley de Tesorería de la Federación 120
20. Ley del Diario Oficial de la Federación y Gacetas Gubernamentales 121
21. Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas 122
22. Ley Federal de Competencia Económica 128
23. Ley Federal de las Entidades Paraestatales 131
24. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 132
25. Ley Federal de Procedimiento Administrativo 146
26. Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 155
27. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 163
28. Ley Federal del Derecho de Autor 169
29. Ley Federal sobre Metrología y Normalización 170
30. Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos 173
31. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (Forma parte de las siete leyes que integran el Sistema Nacional Anticorrupción) 175
32. Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República (Forma parte de las siete leyes que integran el Sistema Nacional Anticorrupción) 214
33. Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (Forma parte de las siete leyes que integran el Sistema Nacional Anticorrupción) 232
34. Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 253
35. Ley sobre el Contrato de Seguro 256

CÓDIGOS.

36. Código Civil Federal 260
37. Código de Comercio 261
38. Código Federal de Procedimientos Civiles 262
39. Código Fiscal de la Federación 263
40. Código Penal Federal (Forma parte de las siete leyes que integran el Sistema Nacional Anticorrupción) 264

REGLAMENTOS.

41. Reglamento de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación 284
42. Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales 290
43. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 291
44. Reglamento de la Oficina de la Presidencia de la República 317
45. Reglamento del artículo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas para el cobro de fianzas otorgadas a favor de la Federación, del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios, distintas de las que garantizan obligaciones fiscales federales a cargo de terceros 318
46. Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública 318

DECRETOS.

47. DECRETO por el que se establecen diversas medidas en materia de adquisiciones, uso de papel y de la certificación de manejo sustentable de bosques por la Administración Pública Federal 320
48. DECRETO que establece las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la Administración Pública Federal 321
49. DECRETO por el que se modifica el diverso que establece las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la Administración Pública Federal 321

50. DECRETO que tiene por objeto establecer la estructura, el funcionamiento y el control de los organismos subsidiarios de Petróleos Mexicanos 325

51. Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017 325

ACUERDOS.

52. ACUERDO por el que se crea con carácter permanente la Comisión Intersecretarial de Compras y Obras de la Administración Pública Federal a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 326

53. ACUERDO por el que se dan a conocer las Reglas para la aplicación de las reservas de compras del sector público establecidas en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y para la determinación del contenido nacional en los procedimientos de contratación de obras públicas 328

54. ACUERDO por el que se emiten diversos lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios y de obras públicas y servicios relacionados con las mismas 330

55. ACUERDO por el que se establece la estratificación de las micro, pequeñas y medianas empresas 337

56. ACUERDO por el que se establecen las disposiciones en Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales 338

57. ACUERDO por el que se modifica el diverso por el que se establecen las disposiciones en Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales, publicado el 16 de julio de 2010 338

58. ACUERDO por el que se establecen las disposiciones para el uso de medios remotos de comunicación electrónica, en el envío de propuestas dentro de las licitaciones públicas que celebren las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como en la presentación de las inconformidades por la misma vía 339

59. ACUERDO por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental

denominado CompraNet 341

60. ACUERDO por el que se establecen las Reglas para la realización de proyectos de prestación de servicios 344

61. ACUERDO por el que se establecen los Lineamientos Generales para las Campañas de Comunicación Social de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para el ejercicio fiscal 2015 345

62. ACUERDO por el que se expide el protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas, otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones 346

63. ACUERDO que tiene por objeto emitir el Código de Ética de los servidores públicos del Gobierno Federal, las Reglas de Integridad para el ejercicio de la función pública, y los Lineamientos generales para propiciar la integridad de los servidores públicos y para implementar acciones permanentes que favorezcan su comportamiento ético, a través de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés 348

MANUALES.

64. Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 350

65. Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Recursos Materiales y Servicios Generales 350

REGLAS.

66. Reglas de Operación del Comité Técnico del Consejo de Seguridad Nacional 352

67. Reglas para la aplicación de las reservas contenidas en los capítulos o títulos de compras del sector público de los tratados de libre comercio suscritos por los Estados Unidos Mexicanos 354

68. Reglas para la aplicación del margen de preferencia en el precio de los bienes de origen nacional, respecto del precio de los bienes de importación, en los procedimientos de contratación de carácter internacional abierto que realizan las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal 355

69. Reglas para la celebración de licitaciones públicas internacionales bajo la cobertura de tratados de libre comercio suscritos por los Estados Unidos Mexicanos 356

70. Reglas para la determinación, acreditación y verificación del contenido nacional de los bienes que se ofertan y entregan en los procedimientos de contratación, así como para la aplicación del requisito de contenido nacional en la contratación de obras públicas, que celebren las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal 358

71. Reglas para la obtención de la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social 358

LINEAMIENTOS.

72. Lineamientos para la aplicación y seguimiento de las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la Administración Pública Federal 359

73. Lineamientos para la contratación de los servicios de telefonía a larga distancia por parte de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal 361

74. Lineamientos para las adquisiciones de papel para uso de oficina por parte de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal 361

CRITERIOS NORMATIVOS.

75. Cálculo y determinación del porcentaje del treinta por ciento a que se refiere el artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 362

76. Criterio de interpretación de los artículos 22 fracción VI de la LAASSP y 19 de su Reglamento, para la Integración del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 362

77. Criterios generales para determinar la normatividad aplicable en los proyectos sujetos al programa para la modernización de los organismos operadores de agua (PROMAGUA) y otros similares apoyados con recursos de fondos federales para el desarrollo de infraestructura 363

78. Determinación y asignación de la puntuación o unidades porcentuales en diversos rubros y subrubros, así como valoración de su acreditación, previstos en los Lineamientos para la aplicación del criterio de evaluación de proposiciones a través del mecanismo de puntos o porcentajes en los procedimientos de contratación regulados por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 363

79. Divisibilidad o indivisibilidad de las obligaciones contractuales y aplicación total o proporcional de la garantía de cumplimiento de los contratos sujetos a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 364

80. Garantía de Cumplimiento - Improcedencia de Requerirla a Instituciones de Seguros (AD-2/2010) 366

81. Incrementos en Contratos Abiertos (AD-03/2010) 367

82. Penas Convencionales (AD-05/2010) 368

CIRCULAR.

83. CIRCULAR que contiene los lineamientos generales relativos a los aspectos de sustentabilidad ambiental para las adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público 372

OFICIO-CIRCULAR.

84. Oficio circular dirigido a los Oficiales Mayores de las Dependencias y Homólogos de las Entidades Paraestatales, por medio del cual se les dan a conocer los formatos para la expedición de las garantías de cumplimiento, anticipo y demás aplicables a las adquisiciones, arrendamientos y servicios 373

85. Oficio-Circular No. SACN/300/148/2003. Relativo a la difusión de lineamientos de la Convención contra el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 374

86. Oficio Circular No. SRACP/300/091/2012. Relativo a la participación de la Unidad de Normatividad de Contrataciones Públicas en los Comités 375

87. Oficio Circular No. UNAOPSPF/309/0743/2008. Emitido por la Titular de la Unidad de Normatividad de Adquisiciones, Obras Públicas, Servicios y Patrimonio Federal por el que se establece el procedimiento que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y las entidades federativas que realicen contrataciones con recursos federales, previo a la formalización de los contratos o pedidos que sean celebrados bajo el ámbito de las leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para verificar que los proveedores o contratistas están al corriente en sus obligaciones fiscales 375

88. Oficio Circular UPCP/308/0323/2009. Procedimiento de Captura y Envío de los Programas Anuales a la Secretaría de la Función Pública emitido el 3 de diciembre de 2009 por el Titular de la Unidad de Política de Contrataciones Públicas de la citada Secretaría 376

DISPOSICIONES GENERALES.

89. Disposiciones Generales a las que deberán sujetarse las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para su incorporación al Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C. Institución de Banca de Desarrollo 377

GUÍA.

90. Guía General que regula el programa de acompañamiento preventivo en las contrataciones que realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal 379

91. Guía para la calificación, aceptación y remisión de las garantías para su efectividad a la Tesorería de la Federación 379

INSTRUCTIVO.

92. Instructivo para la elaboración de la Liquidación de Adeudo y Acta Administrativa de Incumplimiento de Obligaciones emitido por la Tesorería de la Federación, mediante oficio 401-T-2754 del 21 de enero de 2010 y que como anexo forma parte de la Guía para la calificación, aceptación y remisión de las garantías para su efectividad a la Tesorería de la Federación 380

OTRAS DISPOSICIONES.

93. Miscelánea Fiscal para 2017, artículo 32-D 381

94. Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 382

B) JURISPRUDENCIAS Y TESIS AISLADAS AFINES

1. Acto de autoridad para los efectos del amparo. Lo constituye la resolución que declara la nulidad de una licitación pública nacional dentro del recurso de inconformidad emitida por el Instituto Mexicano del Seguro Social. *No. Registro: 177389*..... 383

2. Adjudicación directa. Hipótesis que deben actualizarse para que una dependencia o entidad de la Administración Pública Federal pueda optar por ese procedimiento de contratación. *No. Registro: 2002951*..... 383

3. Adjudicación por convenio o transacción judicial, efectos de la. *No. Registro: 203544*..... 385

4. Adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público. El artículo 2o., fracción XII, de la ley relativa, no genera inseguridad jurídica al no conocerse, de antemano, cuál será el precio conveniente en una licitación pública. *No. Registro: 160718*..... 386

5. Adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público. El artículo 2o., fracción XII, de la ley relativa, que prevé el procedimiento para determinar el precio conveniente en una licitación pública, respeta la garantía de seguridad jurídica. *No. Registro: 160717*..... 386

6. Adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público. El artículo 36 bis, fracción II, de la ley relativa, al disponer que el precio ofertado no debe ser menor al precio conveniente, no viola la garantía de seguridad jurídica. *No. Registro: 160716*..... 387

7. Adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público. El artículo 50, fracción VI, de la ley relativa, publicada en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de enero de dos mil, no transgrede la garantía de libertad de trabajo prevista en el artículo 5o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. *Registro: 188894*..... 388

8. Adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público. El artículo 59 de la

ley relativa no permite a la autoridad administrativa determinar en forma discrecional las conductas que deben considerarse como infracciones y, por tanto, no viola el artículo 22 constitucional. *Registro: 171252* 388

9. Adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público. El artículo 59 de la ley relativa no viola el numeral 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. *Registro: 171251* 389

10. Adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público. El artículo 59 de la ley relativa no viola las garantías de legalidad y seguridad jurídica (legislación vigente a partir del 8 de julio de 2005). *Registro: 170563* 390

11. Adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público. El artículo 59, en relación con el 60, fracción IV, y 61 de la ley relativa, al prever la imposición de una multa a los licitantes o proveedores que hayan proporcionado información falsa en algún procedimiento de contratación, no violan las garantías de seguridad jurídica y legalidad. *Registro: 171551* 390

12. Adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público. El artículo 60, antepenúltimo párrafo, de la ley relativa no viola la garantía de seguridad jurídica. *Registro: 170141* 391

13. Adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público. El artículo 60 de la ley relativa es congruente con el artículo 134 de la Constitución Federal (legislación vigente hasta el 7 de julio de 2005). *Registro: 175161* 392

14. Adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público. El artículo 60 de la ley relativa es congruente con el artículo 5o. de la Constitución Federal (legislación vigente hasta el 7 de julio de 2005). *Registro: 175160* 392

15. Adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público. El artículo 60 de la ley relativa no transgrede la garantía de audiencia (legislación vigente hasta el 7 de julio de 2005). *Registro: 175159* 393

16. Adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público. El artículo 60, fracción IV, de la ley relativa no viola el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (legislación vigente a partir del 8 de julio de 2005). *Registro: 170562* 394

17. Adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público. El artículo 60, fracción IV, de la ley relativa no viola la garantía de libertad de trabajo (legislación vigente a partir del 8 de

julio de 2005). *Registro: 170561* 395

18. Adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público. El artículo 60, primer párrafo y fracción IV, de la ley relativa no transgrede el artículo 21 de la Constitución Federal. *Registro: 173632* 396

19. Adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público. El artículo 65 de la ley relativa, al condicionar la procedencia del recurso de inconformidad a que el licitante asista a la junta de aclaraciones, viola la garantía de audiencia (texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de mayo de 2009). *Registro: 163700* 396

20. Adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público. El artículo 65 de la ley relativa, al obligar al licitante a que en el momento de la celebración de la junta de aclaraciones objete fundadamente los actos que considere ilícitos, viola el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. *Registro: 170983* 398

21. Adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público. La inconformidad prevista en el Artículo 65 de la ley relativa no procede contra actos emitidos dentro del procedimiento de contratación por adjudicación directa (legislación vigente del 8 de julio de 2005 al 26 de junio de 2009). *Registro: 166036* 398

22. Adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público. La multa e inhabilitación temporal para licitantes ganadores previstas en los artículos 59 y 60, fracción I, de la ley relativa, son sanciones razonables. *Registro: 2001222* 400

23. Adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público. La rescisión de un contrato administrativo decretada con fundamento en el artículo 54 de la ley relativa, constituye un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, con independencia de que esa contratación haya tenido su origen en una licitación pública, invitación a cuando menos tres personas o adjudicación directa. *Registro: 166035* 401

24. Adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público. Los artículos 2o., fracción XII y 36 Bis, fracción II, de la ley relativa, no violan la garantía de audiencia. *Registro: 160715* 403

25. Adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público. Los artículos 59 y 60, fracción I, de la ley relativa que prevén multa e inhabilitación temporal para licitantes ganadores, no transgreden el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos. *Registro: 2001223* 403

26. Adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público. Los artículos 59 y 60, primer párrafo y fracción IV de este último, de la ley relativa respetan el principio de división de poderes. *Registro: 173631* 405

27. Adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público. Para efectos de la adjudicación directa de un contrato celebrado sin sujetarse al procedimiento de licitación pública, conforme al supuesto previsto en el artículo 41, fracción I, de la ley relativa, es necesario que el particular acredite fehacientemente ante la autoridad correspondiente que posee la titularidad o licencia exclusiva de patentes, derechos de autor u otros derechos exclusivos, mediante la comprobación de su registro ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. *Registro: 164182* 407

28. Adquisiciones y obras públicas. Los artículos 41, fracciones VI, VII Y XII y 88 de la ley relativa, que impiden que las dependencias reciban propuestas o celebren contratos con personas físicas o morales, o que éstas las realicen, cuando hubieran proporcionado información que resulte falsa, o que hayan actuado con dolo o mala fe en algún proceso para la adjudicación o celebración de un contrato o que se haya efectuado en contravención a la ley, no violan la garantía de libertad de trabajo consagrada en el artículo 5o. de la Constitución Federal. *Registro: 190614* 408

29. Adquisiciones y obras públicas. Los artículos 87, 90 y 91 de la ley relativa, que prevén la imposición de una multa por la infracción a las disposiciones contenidas en ella, no violan el artículo 22 de la Constitución Federal. *Registro: 190621* 409

30. Autoridades administrativas, facultades de las. *Registro: 337 926* 411

31. Cesión de derechos de crédito. Si fue precedida de un proceso de licitación, lo que debe notificarse legalmente al deudor es aquélla. *Registro: 166228* 413

32. Comercio y cuestiones relacionadas con el comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la Comunidad Europea. El artículo 25 de la decisión 2/2000 del Consejo Conjunto del Acuerdo Interino relativo no viola el artículo 134 de la Constitución Federal. *Registro: 175366* 413

33. Competencia. Solo deriva de la ley no de un contrato. *Registro: 229439* 415

34. Competencia concurrente. La opción ejercida por el actor es irrevocable. *Registro: 240063*..... 415

35. Contratos. Interpretación de los. *Registro: 913 105*..... 416

36. Contratos administrativos.
Es evidente que el contratante no puede invocar lesión de sus derechos,
porque la autoridad rescinda el contrato, sin forma de juicio. *Registro: 338 114.*..... 417

37. Contratos administrativos. El artículo 1o., antepenúltimo párrafo, de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público (publicada en el Diario Oficial de la Federación
el cuatro de enero de dos mil), en cuanto excluye de su ámbito de aplicación a los celebrados por
las dependencias con las entidades, o entre entidades de la propia Administración Pública federal o
con alguna perteneciente a la Administración Pública estatal, es violatorio del artículo 134
de la Constitución Federal. *Registro: 187274* 419

38. Contratos administrativos. La circunstancia de que se haya concedido un amparo
respecto de la abrogada Ley de Adquisiciones y Obras Públicas (Diario Oficial de la
Federación de treinta de diciembre de mil novecientos noventa y tres), así como de los
lineamientos que deberán observar las dependencias y entidades de la administración
pública federal en los procedimientos de contratación de seguros de bienes patrimoniales
y de personas, no impide jurídicamente que éstos puedan ser impugnados nuevamente
por el mismo quejoso, pero como normatividad reglamentaria y dependiente de la vigente
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (Diario Oficial de la
Federación de cuatro de enero de dos mil). *Registro: 187273*..... 420

39. Contratos administrativos. Los lineamientos que deberán observar las dependencias y
entidades de la Administración Pública Federal en los procedimientos de contratación de
seguros de bienes patrimoniales y de personas (Diario Oficial de la Federación de cuatro
de agosto de mil novecientos noventa y siete), originalmente creados como normatividad
dependiente de la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas, de treinta de diciembre de mil novecientos
noventa y tres, deben considerarse también como disposiciones "reglamentarias" de la vigente
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (Diario Oficial de la Federación
de cuatro de enero de dos mil). *Registro: 187272* 421

40. Contratos administrativos. Se distinguen por su finalidad de orden público y
por el régimen exorbitante del Derecho Civil a que están sujetos. *Registro: 189995*..... 422

41. Contratos administrativos.
Si la autoridad contratante, sin forma de juicio, declara rescindido el contrato, no puede alegarse como improcedencia del amparo, que el contratante puede ocurrir ante los tribunales para exigir el cumplimiento del contrato o su rescisión. *Registro: 338 116*. 425

42. Contratos administrativos de obra pública. El artículo 40, primer párrafo, de la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas (abrogada por el artículo segundo transitorio de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de enero de 2000), que faculta a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para declarar su rescisión, no viola la garantía de audiencia. *Registro: 189495* 426

43. Contratos administrativos de obra pública. El artículo 40, párrafo primero, de la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas (abrogada por el artículo segundo transitorio de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de enero de 2000), que faculta a las dependencias y entidades para rescindirlos, no es una ley privativa. *Registro: 189496* 428

44. Contratos administrativos de obra pública. El artículo 40, primer párrafo, de la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas (abrogada por el artículo segundo transitorio de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de enero de 2000), que faculta a las dependencias y entidades para rescindirlos, no viola la garantía de acceso a la administración de justicia. *Registro: 189494* 429

45. Contratos administrativos, rescisión de los. *Registro: 390 933.* 430

46. Contratos, voluntad de las partes en los.
Tiene dos limitaciones forzosas, ineludibles: la primera, que se deriva del interés público que está por encima de la voluntad individual, y la segunda de la técnica jurídica, sobre la que tampoco puede prevalecer el capricho de los contratantes. *Registro: 362802* 431

47. Controversia constitucional. Adquisiciones, arrendamientos, servicios y almacenes del Estado de Nayarit. El artículo 34, fracción I, de la ley relativa, al excluir como participantes en las licitaciones públicas que realicen los órganos autorizados en la citada entidad a quienes

estén relacionados con los servidores públicos que intervienen directa o indirectamente en los procedimientos de adquisición de bienes o servicios para el sector público, no contraviene el artículo 5o. de la Constitución Federal. *Registro: 178492* 433

48. Dependencias y entidades de la administración pública. La facultad rescisoria contenida en el artículo 40, primer párrafo, de la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas (abrogada por el artículo segundo transitorio de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de enero de 2000), no les otorga la calidad de tribunales especiales prohibidos por el artículo 13 de la Constitución Federal. *Registro: 189479* 434

49. Empresas de participación estatal. No son parte integrante de la Federación. *Registro: 248784* 435

50. Empresa de participación estatal mayoritaria de la Administración Pública Federal. No es persona moral oficial porque su patrimonio no es exclusivo del Estado. *Registro: 2007601* 436

51. Fianzas otorgadas en contratos de obra pública. Son exigibles aun cuando en el medio impugnativo correspondiente no se haya reconocido, por resolución firme, la validez de la rescisión decretada por incumplimiento del obligado principal, salvo cuando el deudor principal obtenga la suspensión o cuando en la póliza se pacte lo contrario y la ley permita convenir sobre ese aspecto. *Registro: 176708* 436

52. Fianzas para garantizar obligaciones derivadas de contratos de obra pública. Su caducidad debe computarse a partir de que la autoridad administrativa notifica la rescisión por causas imputables al contratista. *Registro: 177001* 437

53. Fundamentación y motivación. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso… *Registro: 394 216* 440

54. Fundamentación y motivación. Deben constar en el cuerpo de la resolución y no en documento distinto. *Registro: 394 218* 440

55. Fundamentación y motivación de los actos administrativos. De acuerdo con el artículo 16 constitucional, todo acto de autoridad

debe estar suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y por lo segundo, que también deben señalarse con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto. *Registro: 216534.* 441

56. Fundamentación y motivación. La debida fundamentación y motivación legal, deben entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo segundo, las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento. *Registro: 203 143.* 442

57. Fundamentación y motivación. Violación formal y material. Cuando el artículo 16 constitucional establece la obligación para las autoridades de fundar y motivar sus actos, dicha obligación se satisface, desde el punto de vista formal, cuando se expresan las normas legales aplicables, y los hechos que hacen que el caso encaje en las hipótesis normativas… *Registro: 391564* 442

58. Gastos financieros. Es procedente condenar al pago de los mismos si se acredita el incumplimiento de los pagos de estimaciones y ajustes de costos, aun cuando las partes no lo hayan pactado expresamente en el contrato de obra pública (interpretación del artículo 69 de la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas). *Registro: 170937* 443

59. Inconformidad. El artículo 65, fracciones I y III, tercer párrafo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público no viola la garantía de acceso a la justicia (legislación vigente a partir del 8 de julio de 2005). *Registro: 174454* 444

60. Inconformidad. La prevista en el artículo 95 de la abrogada Ley de Adquisiciones y Obras Públicas constituye un recurso en sede administrativa y no simplemente una denuncia de hechos. *Registro: 189081*..... 445

61. Inconformidad prevista en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Contra su resolución procede el juicio de amparo indirecto. *Registro: 162815* 447

62. Inhabilitación temporal de licitantes o proveedores. El artículo 60, fracción IV, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público que prevé dicha sanción, no pugna con el artículo 134 de la Constitución Federal (legislación vigente a partir del 8 de julio

de 2005). *Registro: 172010* 448

63. Inhabilitación temporal de proveedores o licitantes. El artículo 60, fracción IV, y antepenúltimo párrafo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que prevé dicha sanción, no viola el artículo 21, primer párrafo, de la Constitución Federal, por ser distinta a la multa o arresto (legislación vigente a partir del 8 de julio de 2005). *Registro: 174893* 449

64. Inhabilitación temporal de proveedores o licitantes. El artículo 60, fracción IV, y antepenúltimo párrafo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público no prevé una pena sino una sanción administrativa, por lo que no viola el artículo 21, primer párrafo, de la Constitución Federal (legislación vigente a partir del 8 de julio de 2005). *Registro: 174894* 450

65. Inhabilitación temporal de proveedores o licitantes. La prevista en el artículo 60, fracción IV, y antepenúltimo párrafo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público no es una pena y, por ende, no se rige por el artículo 22, primer párrafo, de la Constitución Federal (legislación vigente a partir del 8 de julio de 2005). *Registro: 174892* 451

66. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. La rescisión de los contratos de obra pública que declare con fundamento en el artículo 40 de la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas (abrogada por el artículo segundo transitorio de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de enero de 2000), tiene el carácter de acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. *Registro: 189452* 452

67. Interés jurídico. Sus acepciones tratándose de recursos e instancias Administrativas. *Registro: 225766* 453

68. Interés jurídico en el amparo. Carece de él quien reclama actos llevados a cabo durante las etapas del procedimiento de licitación pública, si expresamente renunció a continuar participando en él antes de dictarse el fallo de adjudicación respectivo. *Registro: 172006* 455

69. Licitación. La falta de firmas de las autoridades que fungieron como “invitadas” al proceso respectivo, no genera su nulidad. *Registro: 183024* 457

70. Licitación pública. El cumplimiento de sus bases es requisito indispensable para analizar las ofertas y adjudicar el contrato respectivo. *Registro. 911970* 457

71. Licitación pública. El cumplimiento de sus bases es requisito indispensable para analizar las ofertas y adjudicar el contrato respectivo. *Registro: 210243* 458

72. Licitación pública. Etapas del procedimiento administrativo respectivo en su desarrollo cronológico. *Registro: 171994* 458

73. Licitación pública. Principios esenciales que rigen el procedimiento administrativo respectivo. *Registro: 171993* 460

74. Licitación pública. Su naturaleza jurídica. *Registro: 171992* 461

75. Licitaciones públicas. Derechos que derivan a favor de los particulares que participan en ellas. *Registro: 189052* 465

76. Licitaciones públicas. El Artículo 31, Fracción V, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, al disponer que los anexos técnicos y folletos que se adjunten a las propuestas técnica o económica pueden presentarse en el idioma del país de origen de los bienes o servicios, acompañados de una traducción simple al español e imponer esa carga a los licitantes en la elaboración de las bases, no contraviene el artículo 134 de la Constitución Federal. *Registro: 181931* 465

77. Licitaciones públicas. Facultades que el artículo 134 de la Constitución Federal otorga a las entidades y dependencias para convocar a aquéllas. *Registro: 175297* 466

78. Licitaciones públicas. Las autoridades administrativas que llevan a cabo los procedimientos relativos en los que el gobierno federal y el del Distrito Federal realicen adquisiciones, arrendamientos y enajenación de bienes, deben conceder a los licitantes afectados la garantía de audiencia. *Registro: 189051* 468

79. Licitación pública internacional. El artículo 28, último párrafo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, al establecer que podrá negarse la participación a extranjeros cuando con el país del cual sean nacionales no se tenga celebrado un tratado y aquél no conceda un trato recíproco a los licitantes, proveedores, bienes o servicios mexicanos, no transgrede el artículo 5o. De la Constitución Federal. *Registro: 179274* 469

80. Licitación pública internacional. El artículo 28, último párrafo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, al establecer que podrá negarse la participación a extranjeros cuando con el país del cual sean nacionales no se tenga celebrado un tratado y aquél no conceda un trato recíproco a los licitantes, proveedores, bienes o servicios mexicanos, no trasgrede el artículo 134 de la Constitución Federal. *Registro. 179273* 470

81. Nulidad, juicio de. Carga probatoria.
Que el acto administrativo sea perfecto, significa que puede producir efectos, a menos que se demuestre su ilegalidad, a través de los medios de defensa previstos en la propia ley, porque adolezca de vicios. *Registro: 209 787* 471

82. Obras públicas. Los artículos 40 de la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas y 52, fracción II, de su reglamento, que facultan a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para declarar la rescisión de los contratos relativos, no violan los artículos 14 y 17 de la Constitución General de la República. *Registro: 190295* 472

83. Pacto comisorio
El pacto comisorio expreso es legítimo y en virtud de él y diversamente a lo que acontece con el tácito en que en el incumplimiento se requiere la declaración judicial para lograr la rescisión, el contrato se resuelve automáticamente por el solo efecto del incumplimiento y sin intervención de los tribunales. *Registro: 273118* 473

84. Principio de definitividad. Es innecesario agotar la inconformidad prevista en el artículo 65 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público previo a promover el juicio de amparo indirecto, al actualizarse una excepción al citado principio. *Registro: 2010357* 474

85. Prueba, los tratados internacionales. No están sujetos a. *Registro: 224632* 475

86. Revisión en sede administrativa. El artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo establece la opción de impugnar los actos que se rigen por tal ordenamiento a través de ese recurso o mediante el juicio seguido ante el Tribunal Fiscal de la Federación. *Registro: 920362.* 476

87. Suspensión. La prevista en el artículo 99 de la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas, no obliga a la autoridad de amparo. *Registro: 197648* 476

88. Suspensión. Noción de orden público y su finalidad. *Registro: 2002421.* 477

89. Suspensión en el amparo. Al concederla respecto de la inhabilitación temporal a una persona para participar en procedimientos de licitación y celebrar contratos con la administración pública, no debe confundirse ni equipararse la afectación al orden público y al interés social con la relativa al interés de la Administración Pública. *Registro: 173162* 477

90. Suspensión en el amparo. Debe negarse contra los efectos y consecuencias de la inhabilitación temporal para participar en procedimientos de licitación o para celebrar contratos públicos. *Registro: 162971* 479

91. Suspensión en el amparo. Procede concederla respecto de la inhabilitación temporal a una persona para participar en procedimientos de licitación y celebrar contratos con la Administración Pública, ya que al diferir su ejecución se evitan los daños y perjuicios de imposible reparación que pudieran ocasionarse con ella. *Registro: 173160* 481

92. Tratados internacionales: Se ubican jerárquicamente por encima de las leyes federales y en segundo plano respecto de la Constitución Federal. *Registro: 192867* 482

ANEXO 2. PROFESIONALIZACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS. 485

ABREVIATURAS Y SIGLAS UTILIZADAS

Ap.	Apéndice
APF	Administración Pública Federal
A.R.	Amparo en Revisión
C.C.	Controversia Constitucional
C.T.	Contradicción de Tesis
CFF	Código Fiscal de la Federación
COFECE	Comisión Federal de Competencia Económica
CPEUM	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
DOF	Diario Oficial de la Federación
FIEL	Firma Electrónica Avanzada
J	Jurisprudencia
LAASSP	Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público
LFEP	Ley Federal de Entidades Paraestatales.
LFTAIP	Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
LFTAIPG	Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
LI	Ley de Ingresos
LOAPF	Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
MIPYMES	Micro, Pequeña y Mediana Empresas
MP	Ministerio Público
PEF	Presupuesto de Egresos de la Federación
PGR	Procuraduría General de la República
PL	Pleno
PND	Plan Nacional de Desarrollo
PPS	Proyectos para prestación de servicios
PS	Primera Sala
RLAASSP	Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público
SAT	Servicio de Administración Tributaria
SCJN	Suprema Corte de Justicia de la Nación
SE	Secretaría de Economía
SFP	Secretaría de la Función Pública

SHCP	Secretaría de Hacienda y Crédito Público
S.J.F.	Semanario Judicial de la Federación
T.A.	Tesis Aislada
TCC	Tribunal Colegiado de Circuito
TESOFE	Tesorería de la Federación

ANEXO 1. CORRELACIÓN DE LA LAASSP Y SU REGLAMENTO

Utilidad.

Es herramienta indispensable para:

- El trabajo preventivo de los que contratan todos los días al tener el marco normativo completo.
- La Secretaría de la Función Pública al tener la herramienta básica para la profesionalización de los servidores públicos.
- La introducción del servidor público en el marco normativo de las adquisiciones con más de 90 normas y más de 90 tesis y jurisprudencias.
- Profesionalizar, en tanto ahorraríamos el 90% de las impugnaciones.
- Las autoridades administrativas y judiciales que resuelven la inconformidad, la revisión y el juicio de amparo.
- Cursos a los interesados en participar en las contrataciones públicas, reduciendo problemas y temas de inconformidad, al tener también los particulares un conocimiento detallado del marco normativo.

A) MARCO NORMATIVO COMPLEMENTARIO Y SUPLETORIO.

Funcionamiento.

1.- El cuadro consta de tres columnas: la primera es *Normatividad complementaria o supletoria*, la segunda es la *LAASSP* (Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público), y la tercera Reglamento de la *LAASSP*.

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
Ley Federal sobre Metrología y Normalización. *1 de julio de 1992* **Artículo 3 (fracciones X y X-A).-** Se entenderá por: …	**Artículo 20 (fracción VII).-** Las dependencias y entidades formularán sus programas anuales de adquisiciones	**Artículo 31 (primer, segundo y último párrafos).-** En los procedimientos de contratación que realicen las personas las

2.- Se tomó como base la *Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público* (LAASSP), ubicada en la parte central de la tabla, relacionándola con la columna de *Reglamento de la LAASSP* y *Normatividad complementaria o supletoria*.

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
Ley Federal sobre Metrología y Normalización. *1 de julio de 1992* **Artículo 3 (fracciones X y X-A).-** Se entenderá por: … X. Norma mexicana: la que elabore un organismo nacional de normalización, o la Secretaría, en los términos de esta Ley, que prevé para un uso común y repetido reglas, especificaciones, atributos, métodos de prueba, directrices, características o prescripciones aplicables a un producto, proceso, instalación, sistema, actividad, servicio o método de producción u operación, así como aquellas relativas a terminología, simbología, embalaje, marcado o etiquetado; X-A. Norma o lineamiento internacional: la norma, lineamiento o documento normativo que emite un organismo internacional de normalización u otro organismo internacional relacionado con la materia, reconocido por el gobierno	**Artículo 20 (fracción VII).-** Las dependencias y entidades formularán sus programas anuales de adquisiciones, arrendamientos y servicios, y los que abarquen más de un ejercicio presupuestal, así como sus respectivos presupuestos, considerando: … VII. Las normas aplicables conforme a la **Ley Federal sobre Metrología y Normalización** o, a falta de éstas, las **normas internacionales**;	**Artículo 31 (primer, segundo y último párrafos).-** En los procedimientos de contratación que realicen las personas las dependencias y entidades, deben exigir el cumplimiento de las **normas mexicanas** y a falta de estas las **internacionales**, de conformidad con la **Ley Federal sobre Metrología y Normalización.** Si las normas a que se refiere el párrafo anterior no cubren los requerimientos técnicos, o bien, si sus especificaciones resultan inaplicables u obsoletas, la convocante podrá solicitar el cumplimiento de las normas de referencia o especificaciones a que se refiere el artículo 67 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, siempre que se acredite, en los términos del presente Reglamento, que no se limita la libre participación de los licitantes. … Tratándose de bienes de inversión, en la convocatoria a la licitación pública podrá requerirse que los licitantes entreguen copia simple del certificado expedido por las

mexicano en los términos del derecho internacional;		personas acreditadas, conforme a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

3.- La *Normatividad complementaria o supletoria,* se divide en:

1. Constitución.
2. Leyes.
3. Códigos.
4. Reglamentos.
5. Decretos.
6. Acuerdos.
7. Manuales.
8. Reglas.
9. Lineamientos.
10. Criterios normativos.
11. Circular.
12. Oficio-circular.
13. Disposiciones generales.
14. Guía.
15. Instructivo.
16. Otras disposiciones.

A su vez el Poder Judicial Federal emite interpretaciones de la normatividad a través de jurisprudencias y tesis aisladas.

B) JURISPRUDENCIAS Y TESIS AISLADAS AFINES

1.- El índice esta ordenado alfabéticamente, para facilitar su consulta.

B) JURISPRUDENCIAS Y TESIS AISLADAS AFINES

1. Acto de autoridad para los efectos del amparo. Lo constituye la resolución que declara la nulidad de una licitación pública nacional dentro del recurso de inconformidad emitida por el Instituto Mexicano del Seguro Social. *No. Registro: 177389* .....

2. Adjudicación directa. Hipótesis que deben actualizarse para que una dependencia o entidad de la Administración Pública Federal pueda optar por ese procedimiento de contratación *No. Registro: 2002951* .....

3. Adjudicación por convenio o transacción judicial, efectos de la. *No. Registro: 203544* .....

4. Adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público. El artículo 2o., fracción XII, de la ley relativa, no genera inseguridad jurídica al no conocerse, de antemano, cuál será el precio conveniente en una licitación pública. *No. Registro: 160718* .....

5. Adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público. El artículo 2o., fracción XII, de la ley relativa, que prevé el procedimiento para determinar el precio conveniente en una licitación pública, respeta la garantía de seguridad jurídica. *No. Registro: 160717* .....

2.- En la sección de las jurisprudencias y tesis aisladas, es importante señalar los datos que las integran:

A. Rubro de la tesis, a veces contiene una breve de explicación de la jurisprudencia o tesis aislada, como en este caso, o después de los datos de localización o, incluso, no tenerla.
B. Datos de localización (Época, **registro**, instancia, tipo de tesis, la fuente, materia, número de tesis).

	JURISPRUDENCIAS Y TESIS AISLADAS	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
A	[16]***Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. El artículo 2o., fracción XII, de la ley relativa, no genera inseguridad jurídica al no conocerse, de antemano, cuál será el precio conveniente en una licitación pública.***	**Artículo 2 (fracción XII).-** Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por: … XII. **Precio conveniente**: es aquel que se determina a partir de obtener el promedio de los precios preponderantes que resulten de las proposiciones aceptadas técnicamente en la licitación, y a éste se le resta el porcentaje que determine la dependencia o entidad en sus políticas, bases y lineamientos.	**Artículo 51 (apartado B, fracción III y último párrafo).-** Los criterios para evaluar la solvencia de las proposiciones, deberán guardar relación con los requisitos y especificaciones señalados en la convocatoria a la licitación pública para la integración de las propuestas técnicas y económicas. … B. El cálculo del **precio conveniente** únicamente se llevará a cabo cuando se requiera acreditar que un precio ofertado se desecha porque se encuentra por debajo del precio determinado conforme a la fracción XII del artículo 2 de la Ley. Para calcular cuándo un precio es conveniente, los responsables de hacer la evaluación económica aplicarán la siguiente operación: … III. Al promedio señalado en la fracción anterior se le restará el porcentaje fijado en las políticas, bases y lineamientos de las dependencias y entidades, el cual no podrá ser inferior al cuarenta por ciento, y …
B	*Época: Décima Época; Registro: 160718; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Libro II, Noviembre de 2011, Tomo 1; Materia(s): Constitucional; Tesis: 1a. CCXX/2011 (9a.); Página: 190*		

3. Las notas al pie de página en las jurisprudencias y tesis aisladas, nos indican tres aspectos:

A. Artículos constitucionales que fueron motivo del amparo
B. Jurisprudencias y tesis aisladas desarrolladas con mayor detalle en el capítulo VI de la tesis.
C. Aclaraciones del investigador.

JURISPRUDENCIAS Y TESIS AISLADAS	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
[21]***Suspensión en el amparo. Debe negarse contra los efectos y consecuencias de la inhabilitación temporal para participar en procedimientos de licitación o para celebrar contratos públicos.***[◊] *Época: Novena Época; Registro: 162971; Instancia: Segunda Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XXXIII, Enero de 2011; Materia(s): Común; Tesis: 2a./J. 157/2010; Página: 1402.*[*]	**Artículo 60 (fracción I).-** La Secretaría de la Función Pública, además de la sanción a que se refiere el primer párrafo del artículo anterior, **inhabilitará temporalmente** para participar de manera directa o por interpósita persona en procedimientos de contratación o celebrar contratos regulados por esta Ley, a las personas que se encuentren en alguno de los supuestos siguientes: I. Los licitantes que injustificadamente y por causas imputables a los mismos **no formalicen dos o más contratos** que les haya adjudicado cualquier dependencia o entidad en el plazo de dos años calendario, contados a partir del día en	**Artículo 109 (segundo párrafo).-** Los licitantes que injustificadamente y por causas imputables a ellos **no formalicen dos o más contratos** con cualquier dependencia o entidad, dentro del plazo de dos años, serán sancionados en términos del primer párrafo

A[21] Tesis Aisladas relacionadas con números de registro; 172010, 175161, 175297, 2001223 y 175366, en cuanto al artículo 134 constitucional, párrafo primero, no violan los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.

B[◊] Esta tesis corresponde al engrose C.T. 279/2010, que se encuentra desarrollado en el inciso J) i, del Capítulo VI de la Tesis.

C[*] En el criterio menciona el artículo 134 constitucional: Debe negarse la suspensión solicitada en el amparo contra los efectos y consecuencias de la inhabilitación temporal para participar en procedimientos de licitación o para celebrar contratos públicos en términos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, pues de concederse se contravendrían las disposiciones de orden público que desarrollan las bases y principios establecidos en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

A continuación expondremos la correlación de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su reglamento, con su marco normativo complementario y supletorio, bajo el siguiente:

A) Marco normativo complementario y supletorio.

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
1.- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos *5 de febrero de 1917.* **Artículo 134 (primer y segundo párrafos).-** Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las instancias técnicas que establezcan, respectivamente, la Federación y las entidades federativas.	**Artículo 1 (fracción VI, segundo, cuarto y quinto párrafos).-** La presente Ley es de orden público y tiene por objeto reglamentar la aplicación del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de las adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y prestación de servicios de cualquier naturaleza, que realicen: …	**Artículo 1.-** El presente Reglamento tiene por objeto establecer las disposiciones que propicien el oportuno y estricto cumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Artículo 43.- Las partes integrantes de la Federación son los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila de Zaragoza, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas;	VI. Las entidades federativas, los municipios y los entes públicos de unas y otros, con cargo total o parcial a recursos federales, conforme a los convenios que celebren con el Ejecutivo Federal. No quedan comprendidos para la aplicación de la presente Ley los fondos previstos en el Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal.	**Artículo 2 (segundo y tercer párrafos).-** Para efecto de lo previsto en la fracción VI del artículo 1 de la Ley, se considerará que existe convenio entre las entidades federativas, los municipios y los entes públicos de unas y otros con el Ejecutivo Federal, cuando aquéllos acepten y reciban, por cualquier medio y concepto, de las dependencias y entidades recursos federales a cuyo cargo, total o parcial, llevarán a cabo la adquisición o arrendamiento de bienes o la contratación de la prestación de servicios de cualquier naturaleza. Las menciones que se hagan en el presente Reglamento a las dependencias y entidades se entenderán hechas, en lo conducente, a las entidades federativas, los municipios y los entes públicos de

A) Marco normativo complementario y supletorio.

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
así como la Ciudad de México. **Artículo 44.-** La Ciudad de México es la entidad federativa sede de los Poderes de la Unión y Capital de los Estados Unidos Mexicanos; se compondrá del territorio que actualmente tiene y, en caso de que los poderes federales se trasladen a otro lugar, se erigirá en un Estado de la Unión con la denominación de Ciudad de México.		unas y otros, cuando éstos se ubiquen en el supuesto a que se refiere la fracción VI del artículo 1 de la Ley.
Artículo 3 (fracciones VII y IX).-… VII. Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad de gobernarse a sí mismas (UNAM, UAM, UAC, UAAAN). … IX. El INEE será un organismo público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio. **Artículo 6 (apartado A, fracción VIII).-…** VIII. La federación contará con un organismo autónomo responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública (INAI). **Artículo 26 (apartado B y C).-…**	Las personas de derecho público de carácter federal con autonomía derivada de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como las entidades que cuenten con un régimen específico en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, aplicarán los criterios y procedimientos previstos en esta Ley, sólo en lo no previsto en los ordenamientos que los rigen y siempre que no se contrapongan con los mismos, sujetándose a sus propios órganos de control.	**Artículo 4.-** Se consideran comprendidas en el quinto párrafo del artículo 1 de la Ley, las contrataciones que realicen las dependencias y entidades con las personas de derecho público de carácter federal con autonomía derivada de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos…

A) Marco normativo complementario y supletorio.

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
B. La responsabilidad de normar y coordinar el SNIEG estará a cargo de un organismo con autonomía técnica y de gestión (INEGI). C. El Estado contará con un CONEVAL, que será un órgano autónomo. **Artículo 27 (fracción XIX).-**… XIX. Para la administración de justicia agraria, la ley instituirá tribunales dotados de autonomía y plena jurisdicción (Tribunales agrarios). **Artículo 28 (octavo, sexto, décimo cuarto y décimo sexto párrafos).-…** El Estado tendrá un banco central que será autónomo (BANXICO). El Poder Ejecutivo contará con los órganos reguladores coordinados en materia energética, denominados CNH y CRE. El Estado contará con una COFECE, que será un órgano autónomo. El IFT es un órgano autónomo. **Artículo 41 (fracción V, apartado A).-** El INE es un organismo público autónomo. **Artículo 73 (fracción XXIX-H).-** El Tribunal Federal de Justicia Administrativa, dotado de plena autonomía para dictar sus fallos.		

A) Marco normativo complementario y supletorio.

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
Artículo 79.- La ASF de la Cámara de Diputados, tendrá autonomía técnica y de gestión. **Artículo 102 (apartado A, primer párrafo).-** El Ministerio Público de la Federación se organizará en una Fiscalía General de la República como órgano público autónomo. **Artículo 102 (apartado B, quinto párrafo).-** La CNDH contará con autonomía de gestión y presupuestaria.		
Artículo 134 (cuarto párrafo).- Cuando las licitaciones a que hace referencia el párrafo anterior no sean idóneas para asegurar dichas condiciones, las leyes establecerán las bases, procedimientos, reglas, requisitos y demás elementos para acreditar la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado.	Las adquisiciones, arrendamientos y servicios que se realicen por los Centros Públicos de Investigación con los recursos autogenerados de sus Fondos de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico previstos en la Ley de Ciencia y Tecnología, se regirán conforme a las reglas de operación de dichos fondos, a los criterios y procedimientos que en estas materias expidan los órganos de gobierno de estos Centros, así como a las disposiciones administrativas que, en su caso estime necesario expedir la Secretaría de la Función Pública o la Secretaría, en el ámbito de sus respectivas competencias, administrando dichos recursos con eficiencia, eficacia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados y asegurar al centro las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.	

A) Marco normativo complementario y supletorio.

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
	Los contratos que celebren las dependencias con las entidades, o entre entidades, y los actos jurídicos que se celebren entre dependencias, o bien los que se lleven a cabo entre alguna dependencia o entidad de la Administración Pública Federal con alguna perteneciente a la administración pública de una entidad federativa, no estarán dentro del ámbito de aplicación de esta Ley; no obstante, dichos actos quedarán sujetos a este ordenamiento, cuando la dependencia o entidad obligada a entregar el bien o prestar el servicio, no tenga capacidad para hacerlo por sí misma y contrate un tercero para su realización. **Artículo 2 (fracción IX).-** Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por: … IX. Entidades federativas: los Estados de la Federación y el Distrito Federal, conforme al artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;	
Artículo 134 (tercer párrafo).- Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad,	**Artículo 26 (segundo párrafo).-** Las adquisiciones, arrendamientos y servicios se adjudicarán, por regla general, a través de licitaciones públicas, mediante convocatoria pública, para que libremente se presenten proposiciones, solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad, crecimiento económico, generación de empleo, eficiencia energética, uso responsable del agua, optimización y uso sustentable de los recursos, así como la protección al medio ambiente y demás circunstancias pertinentes, de acuerdo con lo que establece la presente Ley.	**Artículo 2 (fracción XI).-** Adicionalmente a las definiciones contenidas en el artículo 2 de la Ley, para los efectos de este Reglamento se entenderá por: … XI. Sobre cerrado: cualquier medio que contenga la proposición del licitante, cuyo contenido sólo puede ser conocido en el acto de presentación y apertura de proposiciones en términos de la Ley.

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.		

- **LEYES GENERALES**

2.- Ley General de Contabilidad Gubernamental. *31 de diciembre de 2008.* *Última reforma publicada el 18 de junio de 2016.* **Artículo 1 (primer y segundo párrafos).-** La presente Ley es de orden público y tiene como objeto establecer los criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera de los entes públicos, con el fin de lograr su adecuada armonización. La presente Ley es de observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación, los estados y el Distrito Federal; los ayuntamientos de los municipios; los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; las entidades de la administración pública paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales y los órganos autónomos federales	**Artículo 1.** La presente Ley es de orden público y tiene por objeto reglamentar la aplicación del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de las adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y prestación de servicios de cualquier naturaleza, que realicen: I. Las unidades administrativas de la Presidencia de la República; II. Las Secretarías de Estado y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal; III. La Procuraduría General de la República; IV. Los organismos descentralizados; V. Las empresas de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos en los que el fideicomitente sea el gobierno federal o una entidad paraestatal, y VI. Las entidades federativas, los municipios y los entes públicos de unas y otros, con cargo total o parcial a recursos federales, conforme a los convenios que celebren con el Ejecutivo Federal. No quedan comprendidos para la aplicación de la presente Ley los fondos previstos en el Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal. Las personas de derecho público de carácter federal con autonomía derivada de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como las entidades que cuenten con un régimen específico en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, aplicarán los criterios y procedimientos previstos en esta Ley, sólo en lo no previsto en los ordenamientos que los rigen y siempre que no se contrapongan con los mismos, sujetándose a sus propios órganos de	**Artículo 1.-** El presente Reglamento tiene por objeto establecer las disposiciones que propicien el oportuno y estricto cumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
y estatales. **Artículo 23.-** Los entes públicos deberán registrar en su contabilidad los bienes muebles e inmuebles siguientes: I. Los inmuebles destinados a un servicio público conforme a la normativa aplicable; excepto los considerados como monumentos arqueológicos, artísticos o históricos conforme a la Ley de la materia; II. Mobiliario y equipo, incluido el de cómputo, vehículos y demás bienes muebles al servicio de los entes públicos, y III. Cualesquiera otros bienes muebles e inmuebles que el consejo determine que deban registrarse. Asimismo, en la cuenta pública incluirán la relación de los bienes que componen su patrimonio conforme a los formatos electrónicos que apruebe el consejo. **Artículo 67 (primer y tercer párrafos).-** Los entes públicos deberán registrar en los sistemas respectivos, los documentos justificativos y comprobatorios que correspondan y demás información asociada a los momentos contables del gasto	control. Las adquisiciones, arrendamientos y servicios que contraten las empresas productivas del Estado y sus empresas productivas subsidiarias quedan excluidos de la aplicación de este ordenamiento. Las adquisiciones, arrendamientos y servicios que se realicen por los Centros Públicos de Investigación con los recursos autogenerados de sus Fondos de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico previstos en la Ley de Ciencia y Tecnología, se regirán conforme a las reglas de operación de dichos fondos, a los criterios y procedimientos que en estas materias expidan los órganos de gobierno de estos Centros, así como a las disposiciones administrativas que, en su caso estime necesario expedir la Secretaría de la Función Pública o la Secretaría, en el ámbito de sus respectivas competencias, administrando dichos recursos con eficiencia, eficacia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados y asegurar al centro las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. Los contratos que celebren las dependencias con las entidades, o entre entidades, y los actos jurídicos que se celebren entre dependencias, o bien los que se lleven a cabo entre alguna dependencia o entidad de la Administración Pública Federal con alguna perteneciente a la administración pública de una entidad federativa, no estarán dentro del ámbito de aplicación de esta Ley; no obstante, dichos actos quedarán sujetos a este ordenamiento, cuando la dependencia o entidad obligada a entregar el bien o prestar el servicio, no tenga capacidad para hacerlo por sí misma y contrate un tercero para su realización. Los titulares de las dependencias y los órganos de gobierno de las entidades emitirán, bajo su	

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
comprometido y devengado, en términos de las disposiciones que emita el consejo. Los entes públicos publicarán en Internet la información sobre los montos pagados durante el periodo por concepto de ayudas y subsidios a los sectores económicos y sociales, identificando el nombre del beneficiario, y en lo posible la Clave Única de Registro de Población cuando el beneficiario sea persona física o el Registro Federal de Contribuyentes con Homoclave cuando sea persona moral o persona física con actividad empresarial y profesional, y el monto recibido. **Artículo 79.-** Los entes públicos deberán publicar en sus páginas de Internet a más tardar el último día hábil de abril su programa anual de evaluaciones, así como las metodologías e indicadores de desempeño. Los entes públicos deberán publicar a más tardar a los 30 días posteriores a la conclusión de las evaluaciones, los resultados de las mismas e informar	responsabilidad y de conformidad con este mismo ordenamiento y los lineamientos generales que al efecto emita la Secretaría de la Función Pública, las políticas, bases y lineamientos para las materias a que se refiere este artículo. Las dependencias y entidades se abstendrán de crear fideicomisos, otorgar mandatos o celebrar actos o cualquier tipo de contratos, que evadan lo previsto en este ordenamiento. **Artículo 2 (fracción II).-** Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por: ... II. CompraNet: el sistema electrónico de información pública gubernamental sobre adquisiciones, arrendamientos y servicios, integrado entre otra información, por los programas anuales en la materia, de las dependencias y entidades;… **Artículo 21.-** Las dependencias y entidades pondrán a disposición del público en general, a través de CompraNet y de su página en Internet, a más tardar el 31 de enero de cada año, su programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios correspondiente al ejercicio fiscal de que se trate, con excepción de aquella información que, de conformidad con las disposiciones aplicables, sea de naturaleza reservada o confidencial, en los términos establecidos en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Las adquisiciones, arrendamientos y servicios contenidas en el citado programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la dependencia o entidad de que se trate, debiendo informar de ello a la Secretaría de la Función Pública y actualizar en forma mensual el programa en CompraNet.	**Artículo 17.-** Los programas anuales de adquisiciones, arrendamientos y servicios deberán actualizarse, cuando proceda, durante los últimos cinco días hábiles de cada mes.

A) Marco normativo complementario y supletorio.

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
sobre las personas que realizaron dichas evaluaciones.		
Artículo 23.- Los entes públicos deberán registrar en su contabilidad los bienes muebles e inmuebles siguientes: I. Los inmuebles destinados a un servicio público conforme a la normativa aplicable; excepto los considerados como monumentos arqueológicos, artísticos o históricos conforme a la Ley de la materia; II. Mobiliario y equipo, incluido el de cómputo, vehículos y demás bienes muebles al servicio de los entes públicos, y III. Cualesquiera otros bienes muebles e inmuebles que el consejo determine que deban registrarse. Asimismo, en la cuenta pública incluirán la relación de los bienes que componen su patrimonio conforme a los formatos electrónicos que apruebe el consejo.	**Artículo 3 (fracción III).-** Para los efectos de esta Ley, entre las adquisiciones, arrendamientos y servicios, quedan comprendidos: … III. Las adquisiciones de bienes muebles que incluyan la instalación, por parte del proveedor, en inmuebles que se encuentren bajo la responsabilidad de las dependencias y entidades, cuando su precio sea superior al de su instalación; …	
Artículo 44.- Los estados financieros y la información emanada de la contabilidad deberán sujetarse a criterios de utilidad, confiabilidad, relevancia, comprensibilidad y de comparación, así como a	**Artículo 9.-** En materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, los titulares de las dependencias y los órganos de gobierno de las entidades serán los responsables de que, en la adopción e instrumentación de las acciones que deban llevar a cabo en cumplimiento de esta Ley, se observen criterios que promuevan la modernización y	

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
otros atributos asociados a cada uno de ellos, como oportunidad, veracidad, representatividad, objetividad, suficiencia, posibilidad de predicción e importancia relativa, con el fin de alcanzar la modernización y armonización que la Ley determina.	desarrollo administrativo, la descentralización de funciones y la efectiva delegación de facultades. Las facultades conferidas por esta Ley a los titulares de las dependencias podrán ser ejercidas por los titulares de sus órganos desconcentrados, previo acuerdo delegatorio.	
Artículo 2 (segundo párrafo).- Los entes públicos deberán seguir las mejores prácticas contables nacionales e internacionales en apoyo a las tareas de planeación financiera, control de recursos, análisis y fiscalización.	**Artículo 18.-** En la planeación de las adquisiciones, arrendamientos y servicios que pretendan realizar sujetos a que se refiere las fracciones I a VI del artículo 1 de esta Ley, deberá ajustarse a: I. Los objetivos y prioridades del Plan Nacional de Desarrollo y de los programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales que correspondan, así como a las previsiones contenidas en sus programas anuales, y II. Los objetivos, metas y previsiones de recursos establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación o, en su caso, al presupuesto destinado a las contrataciones que los fideicomisos públicos no considerados entidades paraestatales prevean para el ejercicio correspondiente.	**Artículo 11.-** El porcentaje del anticipo a otorgar a las MIPYMES, en el supuesto a que hace referencia el segundo párrafo del artículo 13 de la Ley, deberá ser previsto por la dependencia o entidad en la convocatoria a la licitación pública, en la invitación a cuando menos tres personas o en la solicitud de cotización, para lo cual atenderán, entre otros factores, al monto de la contratación, al costo financiero del mercado y al tiempo de fabricación del bien de que se trate, procurando en todos los casos dar el mayor porcentaje posible.
Artículo 23.- Los entes públicos deberán registrar en su contabilidad los bienes muebles e inmuebles siguientes: I. Los inmuebles destinados a un servicio público conforme a la normativa aplicable; excepto los considerados como monumentos arqueológicos, artísticos o históricos conforme a la Ley de la materia;	**Artículo 20 (fracciones III y VIII).-** Las dependencias y entidades formularán sus programas anuales de adquisiciones, arrendamientos y servicios, y los que abarquen más de un ejercicio presupuestal, así como sus respectivos presupuestos, considerando: … III. La calendarización física y financiera de los recursos necesarios; … VIII. Los requerimientos de mantenimiento de los bienes muebles a su cargo, y …	**Artículo 16.-** Para efectos de lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley, los titulares de las dependencias y entidades, o bien los oficiales mayores o equivalentes, aprobarán el programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios. La planeación e integración de dicho programa y, en su caso, su presentación ante los titulares de las dependencias y entidades para su aprobación, será responsabilidad de los oficiales mayores o equivalentes, a partir de la información que les proporcionen las áreas requirentes, y deberá contener, como mínimo, la descripción y monto de

A) Marco normativo complementario y supletorio.

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
II. Mobiliario y equipo, incluido el de cómputo, vehículos y demás bienes muebles al servicio de los entes públicos, y III. Cualesquiera otros bienes muebles e inmuebles que el consejo determine que deban registrarse. **Artículo 1 (primer y segundo párrafos).-** La presente Ley es de orden público y tiene como objeto establecer los criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera de los entes públicos, con el fin de lograr su adecuada armonización. La presente Ley es de observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación, los estados y el Distrito Federal; los ayuntamientos de los municipios; los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; las entidades de la administración pública paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales y los órganos autónomos federales y estatales.	**Artículo 23 (fracción I).-** El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de la Función Pública, determinará las dependencias y entidades que deberán instalar comisiones consultivas mixtas de abastecimiento, en función del volumen, características e importancia de las adquisiciones, arrendamientos y servicios que contraten. Dichas comisiones tendrán por objeto: I. Propiciar y fortalecer la comunicación de las propias dependencias y entidades con los proveedores, a fin de lograr una mejor planeación de las adquisiciones, arrendamientos y servicios; …	los bienes, arrendamientos y servicios que representen por lo menos el ochenta por ciento del presupuesto total estimado, así como el monto aproximado de los bienes, arrendamientos y servicios que integran el porcentaje restante.
Artículo 52 (primer y segundo párrafo).- Los	**Artículo 22 (fracción IV).-** Las dependencias y entidades deberán establecer comités de	**Artículo 23.-** El informe trimestral a que se refiere la fracción IV del artículo 22 de la Ley, se suscribirá y

A) Marco normativo complementario y supletorio.

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
estados financieros y demás información presupuestaria, programática y contable que emanen de los registros de los entes públicos, serán la base para la emisión de informes periódicos y para la formulación de la cuenta pública anual. Los entes públicos deberán elaborar los estados de conformidad con las disposiciones normativas y técnicas que emanen de esta Ley o que emita el consejo.	adquisiciones, arrendamientos y servicios que tendrán las siguientes funciones: … IV. Analizar trimestralmente el informe de la conclusión y resultados generales de las contrataciones que se realicen y, en su caso, recomendar las medidas necesarias para verificar que el programa y presupuesto de adquisiciones, arrendamientos y servicios, se ejecuten en tiempo y forma, así como proponer medidas tendientes a mejorar o corregir sus procesos de contratación y ejecución; …	presentará por el presidente del Comité en la sesión ordinaria inmediata posterior a la conclusión del trimestre de que se trate, el cual contendrá los siguientes aspectos: I. Una síntesis sobre la conclusión y los resultados generales de las contrataciones realizadas con fundamento en los artículos 41 y 42 de la Ley, así como de las derivadas de licitaciones públicas; II. Una relación de los siguientes contratos: a) Aquéllos en los que los proveedores entregaron con atraso los bienes adquiridos o prestaron con atraso los servicios contratados; b) Los que tengan autorizado diferimiento del plazo de entrega de bienes adquiridos o prestación de los servicios contratados; c) Aquéllos en los que se les haya aplicado alguna penalización; d) Aquéllos en que se hubiere agotado el monto máximo de penalización previsto en las políticas, bases y lineamientos, detallando el estado actual en que se encuentren dichos contratos a la fecha de elaboración del informe; e) Los que hayan sido rescindidos, concluidos anticipadamente o suspendidos temporalmente, y f) Los que se encuentren terminados sin que se hayan finiquitado y extinguido los derechos y obligaciones de las partes; III. Una relación de las inconformidades presentadas, precisando los argumentos expresados por los inconformes y, en su caso, el sentido de la resolución emitida; IV. El estado que guardan las acciones para la ejecución de las garantías por la rescisión de los contratos, por la falta de reintegro de anticipos o por los defectos y vicios ocultos de los bienes o de la calidad de los servicios, así como en el caso de las dependencias, el estado que guarda el trámite para

A) Marco normativo complementario y supletorio.

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
		hacer efectivas las garantías correspondientes en términos de los artículos 143 y 144 del Reglamento de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación, y V. El porcentaje acumulado de las contrataciones formalizadas de acuerdo con los procedimientos de contratación a que se refiere el artículo 42 de la Ley, y de las que se hayan adjudicado a las MIPYMES, sin que sea necesario detallar las contrataciones que integran los respectivos porcentajes.
Artículo 2 (primer párrafo).- Los entes públicos aplicarán la contabilidad gubernamental para facilitar el registro y la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos y, en general, contribuir a medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingresos públicos, la administración de la deuda pública, incluyendo las obligaciones contingentes y el patrimonio del Estado. **Artículo 52 (primer párrafo).-** Los estados financieros y demás información presupuestaria, programática y contable que emanen de los registros de los entes públicos…	**Artículo 24.-** La planeación, programación, presupuestación y el gasto de las adquisiciones, arrendamientos y servicios se sujetará a las disposiciones específicas del Presupuesto de Egresos de la Federación, así como a lo previsto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y demás disposiciones aplicables y los recursos destinados a ese fin se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia, honradez e imparcialidad para satisfacer los objetivos a los que fueren destinados.	
Artículo 2 (segundo párrafo).- Los entes públicos deberán seguir las mejores prácticas contables nacionales e internacionales en apoyo a las tareas de planeación	**Artículo 32 (último párrafo).-** El plazo para la presentación y apertura de proposiciones de las licitaciones internacionales no podrá ser inferior a veinte días naturales, contados a partir de la fecha de publicación de la convocatoria en CompraNet. …	

A) Marco normativo complementario y supletorio.

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
financiera, control de recursos, análisis y fiscalización.	La determinación de estos plazos y sus cambios, deberán ser acordes con la planeación y programación previamente establecida.	
Artículo 67 (segundo párrafo).- Los entes públicos implementarán programas para que los pagos se hagan directamente en forma electrónica, mediante abono en cuenta de los beneficiarios, salvo en las localidades donde no haya disponibilidad de servicios bancarios.	**Artículo 51.-** La fecha de pago al proveedor estipulada en los contratos quedará sujeta a las condiciones que establezcan las mismas; sin embargo, no podrá exceder de veinte días naturales contados a partir de la entrega de la factura respectiva, previa entrega de los bienes o prestación de los servicios en los términos del contrato. En caso de incumplimiento en los pagos a que se refiere el párrafo anterior, la dependencia o entidad, a solicitud del proveedor, deberá pagar gastos financieros conforme a la tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales desde que se venció el plazo pactado, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición del proveedor. Tratándose de pagos en exceso que haya recibido el proveedor, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el párrafo anterior. Los intereses se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de la dependencia o entidad. En caso de rescisión del contrato, el proveedor deberá reintegrar el anticipo y, en su caso, los pagos progresivos que haya recibido más los intereses correspondientes, conforme a lo indicado en este artículo. Los intereses se calcularán sobre el monto del anticipo no amortizado y pagos progresivos	**Artículo 89 (primer o segundo párrafo).-** Para efectos de contabilizar el plazo a que hace referencia el primer párrafo del artículo 51 de la Ley, se tendrá como recibida la factura o el documento que reúna los requisitos fiscales correspondientes, a partir de que el proveedor los entregue a la dependencia o entidad junto con el bien o al momento de concluir la prestación total o parcial del servicio conforme a los términos del contrato celebrado y la dependencia o entidad los reciba a satisfacción en los términos de los lineamientos que emita la Secretaría de la Función Pública para promover la agilización del pago. Dentro del plazo mencionado en el párrafo anterior, la dependencia o entidad deberá requerir, en su caso, al proveedor la corrección de errores o deficiencias contenidos en la factura o en el documento que reúna los requisitos fiscales correspondientes; tramitar el pago de dicha factura o documento y realizar el pago al proveedor. Las dependencias y entidades que estén en posibilidad de realizar el pago a proveedores por medios electrónicos, deberán dar al proveedor la opción de recibirlos por dichos medios.

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
	efectuados y se computarán por días naturales desde la fecha de su entrega hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de la dependencia o entidad. Las dependencias y entidades podrán establecer en sus políticas, bases y lineamientos, preferentemente el pago a proveedores a través de medios de comunicación electrónica.	
Artículo 23.- Los entes públicos deberán registrar en su contabilidad los bienes muebles e inmuebles siguientes: I. Los inmuebles destinados a un servicio público conforme a la normativa aplicable; excepto los considerados como monumentos arqueológicos, artísticos o históricos conforme a la Ley de la materia; II. Mobiliario y equipo, incluido el de cómputo, vehículos y demás bienes muebles al servicio de los entes públicos, y III. Cualesquiera otros bienes muebles e inmuebles que el consejo determine que deban registrarse. Asimismo, en la cuenta pública incluirán la relación de los bienes que componen su patrimonio conforme a los formatos electrónicos que apruebe el consejo.	**Artículo 55.-** Las dependencias y entidades estarán obligadas a mantener los bienes adquiridos o arrendados en condiciones apropiadas de operación y mantenimiento, así como vigilar que los mismos se destinen al cumplimiento de los programas y acciones previamente determinados. Para los efectos del párrafo anterior, las dependencias y entidades en los contratos de adquisiciones, arrendamientos o servicios, deberán estipular las condiciones que garanticen su correcta operación y funcionamiento; en su caso, la obtención de una póliza de seguro por parte del proveedor, que garantice la integridad de los bienes hasta el momento de su entrega y, de ser necesario, la capacitación del personal que operará los equipos. La adquisición de materiales cuyo consumo haga necesaria invariablemente la utilización de equipo propiedad del proveedor podrá realizarse siempre y cuando en la convocatoria a la licitación se establezca que a quien se adjudique el contrato deberá proporcionar el citado equipo sin costo alguno para la dependencia o entidad durante el tiempo requerido para el consumo de los materiales.	
Artículo 2 (segundo párrafo).- Los entes públicos	**Artículo 56 (tercer párrafo, fracción III).-** El sistema a que se refiere el párrafo anterior, tendrá los	

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
deberán seguir las mejores prácticas contables nacionales e internacionales en apoyo a las tareas de planeación financiera, control de recursos, análisis y fiscalización.	siguientes fines: … III. Generar la información necesaria que permita la adecuada planeación, programación y presupuestación de las contrataciones públicas, así como su evaluación integral. …	
Artículo 84.- Los actos u omisiones que impliquen el incumplimiento a los preceptos establecidos en la presente Ley y demás disposiciones aplicables en la materia, serán sancionados de conformidad con lo previsto en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; las leyes equivalentes de las entidades federativas, y las demás disposiciones aplicables en términos del Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de las constituciones de los estados y del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. Las responsabilidades administrativas se fincarán, a quienes directamente hayan ejecutado los actos o incurran en las omisiones que las originaron y, subsidiariamente, a los que, por la naturaleza de sus funciones, hayan omitido la revisión o autorizado tales actos por causas que	**Artículo 62.-** La Secretaría de la Función Pública aplicará las sanciones que procedan a quienes infrinjan las disposiciones de este ordenamiento, conforme a lo dispuesto por la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. La Secretaría de la Función Pública, en uso de las atribuciones que le confiere la Ley citada en el párrafo anterior, podrá abstenerse de iniciar los procedimientos previstos en ella, cuando de las investigaciones o revisiones practicadas se advierta que el acto u omisión no es grave, o no implica la probable comisión de algún delito o perjuicio patrimonial a la dependencia o entidad, o que el acto u omisión fue corregido o subsanado de manera espontánea por el servidor público o implique error manifiesto y en cualquiera de estos supuestos, los efectos que, en su caso, hubieren producido, desaparecieron o se hayan resarcido.	

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
impliquen dolo, culpa, mala fe o negligencia por parte de los mismos.		
Artículo 66.- La Secretaría de Hacienda publicará en el Diario Oficial de la Federación los calendarios de ingresos y de presupuesto de egresos en los términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Las secretarías de finanzas o sus equivalentes de las entidades federativas, así como las tesorerías de los municipios deberán publicar en Internet, los calendarios de ingresos así como los calendarios de presupuesto de egresos con base mensual, en los formatos y plazos que determine el consejo.	**Artículo 20 (fracción III).-** Las dependencias y entidades formularán sus programas anuales de adquisiciones, arrendamientos y servicios, y los que abarquen más de un ejercicio presupuestal, así como sus respectivos presupuestos, considerando: … III. La calendarización física y financiera de los recursos necesarios; …	**Artículo 16.-** Para efectos de lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley, los titulares de las dependencias y entidades, o bien los oficiales mayores o equivalentes, aprobarán el programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios. La planeación e integración de dicho programa y, en su caso, su presentación ante los titulares de las dependencias y entidades para su aprobación, será responsabilidad de los oficiales mayores o equivalentes, a partir de la información que les proporcionen las áreas requirentes, y deberá contener, como mínimo, la descripción y monto de los bienes, arrendamientos y servicios que representen por lo menos el ochenta por ciento del presupuesto total estimado, así como el monto aproximado de los bienes, arrendamientos y servicios que integran el porcentaje restante. **Artículo 27.-** Las requisiciones que formule el Área requirente para adquirir o arrendar bienes, deberán indicar la no existencia de bienes de las mismas características o, en su caso, el nivel de inventario de los mismos que haga necesario adquirir o arrendar dichos bienes. La constancia que acredite lo anterior, deberá emitirse con respecto al almacén de la zona geográfica de influencia del Área requirente y será responsabilidad de ésta tramitarla y anexarla a la requisición; en caso de que el requerimiento esté destinado a un proyecto o consumo específico, se deberá establecer el programa al cual se destinará y el plazo máximo para proceder a su utilización.
3.- Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de	**Artículo 11 (primer párrafo).-** Serán supletorias de esta Ley y de las demás disposiciones que de ella se deriven, en lo que corresponda, el Código Civil	

A) Marco normativo complementario y supletorio.

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
Sujetos Obligados. *Nueva ley publicada en el D.O.F el 26 de enero de 2017.* **Artículo 9.-** A falta de disposición expresa en la presente Ley, se aplicarán de manera supletoria las disposiciones del Código Federal de Procedimientos Civiles y de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Las leyes de las Entidades Federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán determinar las disposiciones que les resulten aplicables en materia supletoria a los Organismos garantes en la aplicación e interpretación de esta Ley.	Federal, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el Código Federal de Procedimientos Civiles.	
Artículo 1 (primer, tercer, cuarto y quinto párrafos).- La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la República, reglamentaria de los artículos 6o., Base A y 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados. … El Instituto ejercerá las atribuciones y facultades que le otorga esta Ley,	**Artículo 21 (primer párrafo).-** Las dependencias y entidades pondrán a disposición del público en general, a través de CompraNet y de su página en Internet, a más tardar el 31 de enero de cada año, su programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios correspondiente al ejercicio fiscal de que se trate, con excepción de aquella información que, de conformidad con las disposiciones aplicables, sea de naturaleza reservada o confidencial, en los términos establecidos en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. **Artículo 37 (tercer párrafo).-** En el fallo no se deberá incluir información reservada o confidencial, en los términos de las disposiciones aplicables. **Artículo 41 (fracción X, segundo párrafo).-** Las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán contratar adquisiciones, arrendamientos y	**Artículo 72 (fracción VIII).-** Para los efectos de lo establecido en el artículo 41 de la Ley deberá considerarse, respecto de las fracciones de dicho

A) Marco normativo complementario y supletorio.

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
independientemente de las otorgadas en las demás disposiciones aplicables. Tiene por objeto establecer las bases, principios y procedimientos para garantizar el derecho que tiene toda persona a la protección de sus datos personales, en posesión de sujetos obligados. Son sujetos obligados por esta Ley, en el ámbito federal, estatal y municipal, cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos. **Artículo 2.-** Son objetivos de la presente Ley: I. Distribuir competencias entre los Organismos garantes de la Federación y las Entidades Federativas, en materia de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados; II. Establecer las bases mínimas y condiciones homogéneas que regirán el tratamiento de los datos personales y el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante procedimientos sencillos y	servicios, sin sujetarse al procedimiento de licitación pública, a través de los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa, cuando: … X. Se trate de servicios de consultorías, asesorías, estudios o investigaciones… Sólo podrá autorizarse la contratación mediante adjudicación directa, cuando la información que se tenga que proporcionar a los licitantes para la elaboración de su proposición, se encuentre reservada en los términos establecidos en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; …	precepto legal, lo que se cita a continuación: … VIII. Se entenderá por servicios de consultorías, asesorías, estudios o investigaciones a que se refiere la fracción X, los siguientes: a) Estandarizados: los que impliquen el desarrollo de soluciones o metodologías eficientes para resolver problemas comunes, recurrentes o de complejidad menor que se presentan en la Administración Pública Federal; b) Personalizados o a la medida: los que desarrollan soluciones o metodologías eficientes diseñadas o creadas ex profeso para resolver problemas específicos no comunes en la Administración Pública Federal, y c) Especializados: los relativos a trabajos que requieran alta especialización y se relacionen con un determinado sector o área del conocimiento, para desarrollar soluciones o metodologías eficientes que permitan resolver problemas complejos y que pueden tener un alto impacto social o económico. …
	Artículo 56, (segundo y tercer párrafos, fracciones II, III; cuarto párrafo, inciso f).-… La administración del sistema electrónico de información pública gubernamental sobre adquisiciones, arrendamientos y servicios, estará a cargo de la Secretaría de la Función Pública, a través de la unidad administrativa que determine su Reglamento, en el cual las dependencias, entidades y los demás sujetos de esta Ley, deberán incorporar la información que ésta les requiera. El sistema a que se refiere el párrafo anterior, tendrá los siguientes fines: … II. Propiciar la transparencia y seguimiento de las adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector	

A) Marco normativo complementario y supletorio.

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
expeditos; III. Regular la organización y operación del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales a que se refieren esta Ley y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en lo relativo a sus funciones para la protección de datos personales en posesión de sujetos obligados; IV. Garantizar la observancia de los principios de protección de datos personales previstos en la presente Ley y demás disposiciones que resulten aplicables en la materia; V. Proteger los datos personales en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, de la Federación, las Entidades Federativas y los municipios, con la finalidad de regular su debido tratamiento; VI. Garantizar que toda persona pueda ejercer el derecho a la protección de los datos personales; VII. Promover, fomentar y	público, y III. Generar la información necesaria que permita la adecuada planeación, programación y presupuestación de las contrataciones públicas, así como su evaluación integral. … f) Los datos de los contratos suscritos, a que se refiere el artículo 7 fracción XIII, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; **Artículo 56 Bis (primer y segundo párrafos).-** El sistema integral de información contará, en los términos del Reglamento de esta Ley, con un registro único de proveedores, el cual los clasificará de acuerdo, entre otros aspectos, por su actividad, datos generales, nacionalidad e historial en materia de contrataciones y su cumplimiento. Este registro deberá ser permanente y estar a disposición de cualquier interesado, salvo en aquellos casos que se trate de información de naturaleza reservada, en los términos establecidos en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.	**Artículo 105 (primer párrafo).-** El registro único de proveedores señalado en el artículo 56 Bis de la Ley, que forma parte de CompraNet, se integrará con la información que proporcionen los proveedores, así como con aquélla que incorporen los sujetos a que se refieren las fracciones I a VI del artículo 1 de la Ley, derivada de los procedimientos de contratación que lleven a cabo conforme a la Ley.

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
difundir una cultura de protección de datos personales; VIII. Establecer los mecanismos para garantizar el cumplimiento y la efectiva aplicación de las medidas de apremio que correspondan para aquellas conductas que contravengan las disposiciones previstas en esta Ley, y IX. Regular los medios de impugnación y procedimientos para la interposición de acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales por parte de los Organismos garantes locales y de la Federación; de conformidad con sus facultades respectivas. **Artículo 3 (fracciones IX, X y XI).-** Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: … IX. Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable. Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse directa o indirectamente a través de		

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
cualquier información; X. Datos personales sensibles: Aquellos que se refieran a la esfera más íntima de su titular, o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste. De manera enunciativa más no limitativa, se consideran sensibles los datos personales que puedan revelar aspectos como origen racial o étnico, estado de salud presente o futuro, información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, opiniones políticas y preferencia sexual; XI. Derechos ARCO: Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de datos personales; **Artículo 10.-** El Sistema Nacional se conformará de acuerdo con lo establecido en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En materia de protección de datos personales, dicho Sistema tiene como función coordinar y evaluar las acciones relativas a la política pública transversal de protección de datos personales, así como establecer e implementar		

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
criterios y lineamientos en la materia, de conformidad con lo señalado en la presente Ley, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y demás normatividad aplicable. **Artículo 31.-** Con independencia del tipo de sistema en el que se encuentren los datos personales o el tipo de tratamiento que se efectúe, el responsable deberá establecer y mantener las medidas de seguridad de carácter administrativo, físico y técnico para la protección de los datos personales, que permitan protegerlos contra daño, pérdida, alteración, destrucción o su uso, acceso o tratamiento no autorizado, así como garantizar su confidencialidad, integridad y disponibilidad. **Artículo 42.-** El responsable deberá establecer controles o mecanismos que tengan por objeto que todas aquellas personas que intervengan en cualquier fase del tratamiento de los datos personales, guarden confidencialidad respecto de éstos, obligación que subsistirá aún después de finalizar sus relaciones con el		

A) Marco normativo complementario y supletorio.

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
mismo. Lo anterior, sin menoscabo de lo establecido en las disposiciones de acceso a la información pública.		
Artículo 165.- Las responsabilidades que resulten de los procedimientos administrativos correspondientes, derivados de la violación a lo dispuesto por el artículo 163 de esta Ley, son independientes de las del orden civil, penal o de cualquier otro tipo que se puedan derivar de los mismos hechos. Dichas responsabilidades se determinarán, en forma autónoma, a través de los procedimientos previstos en las leyes aplicables y las sanciones que, en su caso, se impongan por las autoridades competentes, también se ejecutarán de manera independiente. Para tales efectos, el Instituto o los organismos garantes podrán denunciar ante las autoridades competentes cualquier acto u omisión violatoria de esta Ley y aportar las pruebas que consideren pertinentes, en los términos de las leyes aplicables. **Artículo 167.-** En aquellos	**Artículo 61.-** La Secretaría de la Función Pública impondrá las sanciones considerando: I. Los daños o perjuicios que se hubieren producido con motivo de la infracción; II. El carácter intencional o no de la acción u omisión constitutiva de la infracción; III. La gravedad de la infracción, y IV. Las condiciones del infractor. En la tramitación del procedimiento para imponer las sanciones a que se refiere este Título, la Secretaría de la Función Pública deberá observar lo dispuesto por el Título Cuarto y demás aplicables de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, aplicando supletoriamente tanto el Código Civil Federal, como el Código Federal de Procedimientos Civiles. **Artículo 62.-** La Secretaría de la Función Pública aplicará las sanciones que procedan a quienes infrinjan las disposiciones de este ordenamiento, conforme a lo dispuesto por la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. La Secretaría de la Función Pública, en uso de las atribuciones que le confiere la Ley citada en el párrafo anterior, podrá abstenerse de iniciar los procedimientos previstos en ella, cuando de las investigaciones o revisiones practicadas se advierta que el acto u omisión no es grave, o no implica la probable comisión de algún delito o perjuicio patrimonial a la dependencia o entidad, o que el acto u omisión fue corregido o subsanado de manera espontánea por el servidor público o implique error manifiesto y en cualquiera de estos supuestos, los	**Artículo 46 (fracción V).-** La junta de aclaraciones, se llevará a cabo conforme a lo siguiente: … V. Será responsabilidad del titular del Área requirente y del titular del Área técnica, o bien sólo el de esta última cuando también tenga el carácter de Área requirente, que asista un representante de las mismas, con los conocimientos técnicos suficientes que permitan dar respuesta clara y precisa a los planteamientos de los licitantes, a las juntas de aclaraciones a los que fueron convocados. En caso de inasistencia del representante del Área técnica o del Área requirente, el servidor público que presida la junta de aclaraciones lo hará del conocimiento del titular del área de responsabilidades del órgano interno de control en la dependencia o entidad de que se trate.

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
casos en que el presunto infractor tenga la calidad de servidor público, el Instituto o el organismo garante, deberá remitir a la autoridad competente, junto con la denuncia correspondiente, un Expediente en que se contengan todos los elementos que sustenten la presunta responsabilidad administrativa. La autoridad que conozca del asunto, deberá informar de la conclusión del procedimiento y, en su caso, de la ejecución de la sanción al Instituto o al organismo garante, según corresponda. A efecto de sustanciar el procedimiento citado en este artículo, el Instituto, o el organismo garante que corresponda, deberá elaborar una denuncia dirigida a la contraloría, órgano interno de control o equivalente, con la descripción precisa de los actos u omisiones que, a su consideración, repercuten en la adecuada aplicación de la presente Ley y que pudieran constituir una posible responsabilidad. Asimismo, deberá elaborar un expediente que contenga todos aquellos elementos de	efectos que, en su caso, hubieren producido, desaparecieron o se hayan resarcido. **Artículo 63.-** Las responsabilidades y las sanciones a que se refiere la presente Ley serán independientes de las de orden civil, penal o de cualquier otra índole que puedan derivar de la comisión de los mismos hechos.	… **Artículo 130 (segundo párrafo).-** A los servidores públicos facultados para representar a las dependencias y entidades que, sin causa justificada, omitan dar contestación a la solicitud de conciliación o no asistan a las sesiones respectivas, se les prevendrá de la responsabilidad en que incurren, en términos del primer párrafo del artículo 62 de la Ley. La autoridad que conozca del caso deberá citar a una siguiente audiencia de conciliación.

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
prueba que considere pertinentes para sustentar la existencia de la posible responsabilidad. Para tal efecto, se deberá acreditar el nexo causal existente entre los hechos controvertidos y las pruebas presentadas. La denuncia y el Expediente deberán remitirse a la contraloría, órgano interno de control o equivalente dentro de los quince días siguientes a partir de que el Instituto o el organismo garante correspondiente tenga conocimiento de los hechos.		
Artículo 65.- Toda transferencia de datos personales, sea ésta nacional o internacional, se encuentra sujeta al consentimiento de su titular, salvo las excepciones previstas en los artículos 22, 66 y 70 de esta Ley.	**Artículo 71 (segundo párrafo).-** Recibida la inconformidad, se requerirá a la convocante que rinda en el plazo de dos días hábiles un informe previo en el que manifieste los datos generales del procedimiento de contratación y del tercero interesado, y pronuncie las razones por las que estime que la suspensión resulta o no procedente.	
4.- ⇒Ley General de Responsabilidades Administrativas. *Nueva Ley publicada en el D.O.F 18 de julio de 2016* **Artículo 10.-** Las Secretarías y los Órganos internos de control, y sus homólogas en las entidades federativas tendrán a su cargo, en el	**Artículo 1 (segundo párrafo).-** Las personas de derecho público de carácter federal con autonomía derivada de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como las entidades que cuenten con un régimen específico en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, aplicarán los criterios y procedimientos previstos en esta Ley, sólo en lo no previsto en los ordenamientos que los rigen y siempre que no se contrapongan con los mismos, sujetándose a sus propios órganos de	**Artículo 1.-** El presente Reglamento tiene por objeto establecer las disposiciones que propicien el oportuno y estricto cumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. **Artículo 7 (fracción III).-** Para los efectos de los actos y actividades reguladas en la Ley que se realicen a través de los fideicomisos públicos no considerados como entidad paraestatal, deberá observarse lo siguiente:

⇒ Forma parte de las siete leyes que integran el Sistema Nacional Anticorrupción.

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
ámbito de su competencia, la investigación, substanciación y calificación de las Faltas administrativas. Tratándose de actos u omisiones que hayan sido calificados como Faltas administrativas no graves, las Secretarías y los Órganos internos de control serán competentes para iniciar, substanciar y resolver los procedimientos de responsabilidad administrativa en los términos previstos en esta Ley. En el supuesto de que las autoridades investigadoras determinen en su calificación la existencia de Faltas administrativas, así como la presunta responsabilidad del infractor, deberán elaborar el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa y presentarlo a la Autoridad substanciadora para que proceda en los términos previstos en esta Ley. Además de las atribuciones señaladas con anterioridad, los Órganos internos de control serán competentes para: I. Implementar los mecanismos internos que	control.	… III. La información relativa a las contrataciones que corresponda enviar a la Secretaría de la Función Pública o a los órganos internos de control, será remitida por conducto de la dependencia que coordine la operación del fideicomiso; por la dependencia que con cargo a su presupuesto se hubieren aportado los recursos; por aquélla cuyos programas y proyectos se vean beneficiados, o por la entidad que funja como fideicomitente, de manera individual por cada fideicomiso. **Artículo 67 (fracción V y cuarto párrafo).-** Para el debido ejercicio de las funciones señaladas en la fracción IV del artículo 26 Ter de la Ley, los testigos sociales deberán: … V. Atender y responder en forma oportuna y expedita cualquier requerimiento de información que, respecto del procedimiento de contratación que atestigua, les sea formulado por la Secretaría de la Función Pública o por los órganos internos de control, y … La participación del testigo social en los procedimientos de contratación será sin perjuicio del ejercicio de las facultades de inspección, vigilancia y fiscalización que tienen conferidas la Secretaría de la Función Pública, los órganos internos de control y la Auditoría Superior de la Federación. **Artículo 107.-** De conformidad con lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley, la Secretaría de la Función Pública y los órganos internos de control, con motivo de las auditorías, visitas o inspecciones que practiquen, podrán solicitar a los proveedores información y documentación relacionada con los contratos. Para estos efectos, en el contrato respectivo deberá indicarse que los licitantes

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
prevengan actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas, en los términos establecidos por el Sistema Nacional Anticorrupción; II. Revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos federales y participaciones federales, así como de recursos públicos locales, según corresponda en el ámbito de su competencia, y III. Presentar denuncias por hechos que las leyes señalen como delitos ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción o en su caso ante sus homólogos en el ámbito local.		ganadores deberán proporcionar la información que en su momento se requiera. Las solicitudes de información y documentación que requiera la Secretaría de la Función Pública o los órganos internos de control a los servidores públicos y a los proveedores deberán formularse mediante oficio, señalando el plazo que se otorga para su entrega, el cual se determinará considerando la naturaleza y la cantidad de fojas de dicha información y documentación, sin que en ningún caso pueda ser inferior a cinco días naturales. En el supuesto de que los servidores públicos o los proveedores consideren que el plazo otorgado es insuficiente, podrán solicitar la ampliación del mismo, señalando las razones que lo justifiquen. **Artículo 132 (segundo párrafo).-** Los convenios celebrados en los procedimientos de conciliación podrán servir para efectos de solventar las observaciones de los órganos de control y fiscalización.
Artículo 26.- La Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, llevará el sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal, a través de la Plataforma digital nacional que al efecto se establezca, de conformidad con lo previsto en la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, así como las bases, principios y lineamientos que apruebe el Comité Coordinador del	**Artículo 2 (fracción II).-** Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por: … II. CompraNet: el sistema electrónico de información pública gubernamental sobre adquisiciones, arrendamientos y servicios, integrado entre otra información, por los programas anuales en la materia, de las dependencias y entidades; el registro único de proveedores; el padrón de testigos sociales; el registro de proveedores sancionados; las convocatorias a la licitación y sus modificaciones; las invitaciones a cuando menos tres personas; las actas de las juntas de aclaraciones, del acto de presentación y apertura de proposiciones y de fallo; los testimonios de los testigos sociales; los datos de los contratos y los convenios modificatorios; las	**Artículo 105.-** El registro único de proveedores señalado en el artículo 56 Bis de la Ley, que forma parte de CompraNet, se integrará con la información que proporcionen los proveedores, así como con aquélla que incorporen los sujetos a que se refieren las fracciones I a VI del artículo 1 de la Ley, derivada de los procedimientos de contratación que lleven a cabo conforme a la Ley. Los proveedores solicitarán su inscripción en el registro único de proveedores, a las dependencias y entidades las cuales, previa validación de la información presentada por el proveedor a través de la documentación respectiva que proporcione, llevarán a cabo la inscripción correspondiente. Las dependencias y entidades podrán inscribir en dicho registro a los proveedores cuando adviertan que

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
Sistema Nacional Anticorrupción. **Artículo 43.-** La Plataforma digital nacional incluirá, en un sistema específico, los nombres y adscripción de los Servidores Públicos que intervengan en procedimientos para contrataciones públicas, ya sea en la tramitación, atención y resolución para la adjudicación de un contrato, otorgamiento de una concesión, licencia, permiso o autorización y sus prórrogas, así como la enajenación de bienes muebles y aquellos que dictaminan en materia de avalúos, el cual será actualizado quincenalmente. Los formatos y mecanismos para registrar la información serán determinados por el Comité Coordinador. La información a que se refiere el presente artículo deberá ser puesta a disposición de todo público a través de un portal de Internet. **Artículo 44.-** El Comité Coordinador expedirá el protocolo de actuación que las Secretarías y los Órganos internos de control implementarán. Dicho protocolo de actuación deberá ser cumplido por los	adjudicaciones directas; las resoluciones de la instancia de inconformidad que hayan causado estado, y las notificaciones y avisos correspondientes. Dicho sistema será de consulta gratuita y constituirá un medio por el cual se desarrollarán procedimientos de contratación.	éstos no se encuentran inscritos; asimismo, la Secretaría de la Función Pública podrá incluir en el citado registro la información con la que cuente y que sea materia del mismo. La información contenida en el registro único de proveedores tiene como propósito, entre otros, facilitar los procedimientos de contratación de las dependencias y entidades, sin perjuicio de la presentación de los documentos que se requieran en cualquier procedimiento de contratación, en términos de la Ley, de este Reglamento y demás disposiciones aplicables. El registro único de proveedores clasificará la información de los proveedores de acuerdo con su actividad; datos generales; nacionalidad; experiencia; especialidad; capacidad técnica, económica y financiera, e historial respecto de contratos celebrados con los sujetos a que se refiere el párrafo primero de este artículo y de su cumplimiento en tiempo y en monto. El citado registro será diseñado y administrado por la Secretaría de la Función Pública y contendrá cuando menos: I. Nombre o razón social, nacionalidad y domicilio del proveedor; II. Información relativa al número de escritura constitutiva, sus reformas y datos de su inscripción en el Registro Público correspondiente; III. Relación de socios, conforme a lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción VII del artículo 50 de la Ley y el artículo 73 de la Ley General de Sociedades Mercantiles; IV. Nombre de los representantes legales del proveedor, así como la información relativa a los documentos públicos que los acrediten como tales y sus datos de inscripción en el Registro Público de Comercio;

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
Servidores Públicos inscritos en el sistema específico de la Plataforma digital nacional a que se refiere el presente Capítulo y, en su caso, aplicarán los formatos que se utilizarán para que los particulares formulen un manifiesto de vínculos o relaciones de negocios, personales o familiares, así como de posibles Conflictos de Interés, bajo el principio de máxima publicidad y en los términos de la normatividad aplicable en materia de transparencia. El sistema específico de la Plataforma digital nacional a que se refiere el presente Capítulo incluirá la relación de particulares, personas físicas y morales, que se encuentren inhabilitados para celebrar contratos con los entes públicos derivado de procedimientos administrativos diversos a los previstos por esta Ley. **Artículo 46.-** Se encuentran obligados a presentar declaración de intereses todos los Servidores Públicos que deban presentar la declaración patrimonial en términos de esta Ley. Al efecto, las Secretarías y los		V. Especialidad del proveedor y la información relativa a los contratos de adquisiciones, arrendamientos o servicios que lo acrediten; VI. Experiencia del proveedor y la información de los contratos de adquisiciones, arrendamientos o servicios que la acreditan; VII. Información referente a la capacidad técnica, económica y financiera del proveedor, y VIII. Historial del proveedor en materia de contrataciones y su cumplimiento, el cual contendrá la información de los contratos de adquisiciones, arrendamientos y servicios, formalizados con las dependencias y entidades, así como la relativa a rescisiones, aplicación de penas convencionales y deductivas, ejecución de garantías y sanciones impuestas por la Secretaría de la Función Pública. Asimismo, se incluirá el grado de cumplimiento de cada proveedor conforme a su historial. La Secretaría de la Función Pública, como responsable de la administración del registro único de proveedores, tendrá las siguientes funciones: a) Proporcionar a las dependencias y entidades las claves y contraseñas de acceso para capturar y validar la información en el registro; b) Administrar la información contenida en el registro; c) Atender las solicitudes y consultas relacionadas con el registro, y d) Definir estándares y procedimientos de calidad y seguridad de la información contenida en el registro, que garanticen su inalterabilidad y conservación. Los antecedentes que obren en el registro único de proveedores serán los que las dependencias y entidades deben considerar para determinar la reducción de montos de la garantía de cumplimiento a que hace referencia el segundo párrafo del artículo 48 de la Ley, atendiendo a los lineamientos que al

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
Órganos internos de control se encargarán de que las declaraciones sean integradas al sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal. **Artículo 21.-** Las Secretarías podrán suscribir convenios de colaboración con las personas físicas o morales que participen en contrataciones públicas, así como con las cámaras empresariales u organizaciones industriales o de comercio, con la finalidad de orientarlas en el establecimiento de mecanismos de autorregulación que incluyan la instrumentación de controles internos y un programa de integridad que les permita asegurar el desarrollo de una cultura ética	**Artículo 21.-** Las dependencias y entidades pondrán a disposición del público en general, a través de CompraNet y de su página en Internet, a más tardar el 31 de enero de cada año, su programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios correspondiente al ejercicio fiscal de que se trate, con excepción de aquella información que, de conformidad con las disposiciones aplicables, sea de naturaleza reservada o confidencial, en los términos establecidos en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Las adquisiciones, arrendamientos y servicios contenidas en el citado programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la dependencia o entidad de que se trate, debiendo informar de ello a la Secretaría de la Función Pública y actualizar en forma mensual el programa en CompraNet. **Artículo 2 (fracción VI y VII).-**… … VI. Proveedor: la persona que celebre contratos de adquisiciones, arrendamientos o servicios; VII. Licitante: la persona que participe en cualquier procedimiento de licitación pública o bien de invitación a cuando menos tres personas, y …	efecto emita la Secretaría de la Función Pública. **Artículo 17.-** Los programas anuales de adquisiciones, arrendamientos y servicios deberán actualizarse, cuando proceda, durante los últimos cinco días hábiles de cada mes.

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
en su organización.		
Artículo 7 (fracción I).- Los Servidores Públicos observarán en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público. Para la efectiva aplicación de dichos principios, los Servidores Públicos observarán las siguientes directrices: I. Actuar conforme a lo que las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas les atribuyen a su empleo, cargo o comisión, por lo que deben conocer y cumplir las disposiciones que regulan el ejercicio de sus funciones, facultades y atribuciones;		**Artículo 3.-** Las políticas, bases y lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios a que se refiere el penúltimo párrafo del artículo 1 de la Ley, sólo deberán prever lo siguiente: I. Las áreas de la dependencia o entidad que aplicarán las disposiciones previstas en la Ley y el presente Reglamento; II. Los niveles jerárquicos de los servidores públicos que atenderán y se responsabilizarán de los diversos actos relacionados con los procedimientos de contratación a que hacen referencia la Ley y este Reglamento; III. La forma en que las dependencias y entidades deberán cumplir con los términos o plazos a que hacen referencia la Ley y este Reglamento, y IV. Los aspectos que se determinen en los lineamientos generales que emita la Secretaría de la Función Pública. Las dependencias y entidades divulgarán y mantendrán en forma permanente y actualizada en sus páginas de Internet, las políticas, bases y lineamientos a que se refiere este artículo. Las entidades que no cuenten con la infraestructura técnica necesaria para los efectos señalados, deberán hacerlo a través de la dependencia que funja como su coordinadora de sector. **Artículo 4.-** Se consideran comprendidas en el quinto párrafo del artículo 1 de la Ley, las contrataciones que realicen las dependencias y entidades con las personas de derecho público de carácter federal con autonomía derivada de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o con las asociaciones y sociedades civiles asimiladas a que se refiere el último párrafo del artículo 46 de la Ley Orgánica de la

A) Marco normativo complementario y supletorio.

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
		Administración Pública Federal, así como con municipios y órganos paramunicipales, cuando dichas personas funjan como proveedores. Para los efectos del quinto párrafo del artículo 1 de la Ley, se considerará que una dependencia, entidad o persona de derecho público que funja como proveedor, tiene capacidad para entregar un bien o prestar un servicio por sí misma, cuando para cumplir con el contrato no requiera celebrar otro contrato con terceros, o bien, de requerirlo, éste no exceda del cuarenta y nueve por ciento del importe total del contrato celebrado con el ente público. Si el contrato se integra por varias partidas, el porcentaje se aplicará para cada una de ellas. En el supuesto a que se refiere el párrafo anterior, los procedimientos de contratación con terceros y la ejecución de los contratos celebrados con éstos, se rigen por las disposiciones de la Ley y del presente Reglamento. Para la asignación del contrato bajo el supuesto del párrafo segundo de este artículo, el Área contratante deberá solicitar a la dependencia, entidad o persona que funja como proveedor, la documentación que acredite que cuenta con la capacidad técnica, material y humana para la realización del objeto del contrato y que, por ello, no requerirá de la contratación con terceros en un porcentaje mayor al señalado. Dicha documentación deberá ser entregada antes de la firma del contrato y deberá formar parte del expediente respectivo bajo la responsabilidad del Área contratante.
Artículo 25 (fracción V).- En la determinación de la responsabilidad de las personas morales a que se refiere la presente Ley, se valorará si cuentan con una	**Artículo 7 (último párrafo).-** La Secretaría de la Función Pública, en el ámbito de sus atribuciones, estará encargada de establecer las directrices conforme a las cuales se determinarán los perfiles de puesto de los servidores públicos correspondientes en materia de contrataciones públicas, así como las	**Artículo 62 (fracción VII).-** Para los efectos de lo dispuesto en la fracción II del artículo 26 Ter de la Ley, la Secretaría de la Función Pública emitirá la convocatoria correspondiente a través de CompraNet, con la finalidad de que los interesados presenten solicitud con los requisitos establecidos en

A) Marco normativo complementario y supletorio.

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
política de integridad. Para los efectos de esta Ley, se considerará una política de integridad aquella que cuenta con, al menos, los siguientes elementos: … V. Sistemas y procesos adecuados de entrenamiento y capacitación respecto de las medidas de integridad que contiene este artículo;	relativas a la capacitación para el adecuado desempeño de sus funciones en las materias a que alude esta Ley. **Artículo 11.-** Serán supletorias de esta Ley y de las demás disposiciones que de ella se deriven, en lo que corresponda, el Código Civil Federal, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el Código Federal de Procedimientos Civiles. Lo anterior sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 61 de la presente Ley. **Artículo 15.-** Los actos, contratos y convenios que las dependencias y entidades realicen o celebren en contravención a lo dispuesto por esta Ley, serán nulos previa determinación de la autoridad competente. La solución de las controversias se sujetará a lo previsto por el Título Sexto de esta Ley, sin perjuicio	la Ley y participen en el proceso de selección para su registro en el padrón público de testigos sociales. Los interesados acreditarán los requisitos mencionados en el párrafo anterior, con la documentación que en el mismo orden en que se describe en la fracción III del artículo 26 Ter de la Ley, se indica a continuación: … VII. Las constancias de haber participado en los cursos de capacitación en materia de contrataciones públicas objeto de la Ley y los Tratados correspondientes, que imparta la Secretaría de la Función Pública por sí o a través de terceros que ésta determine, y **Artículo 67 (fracción VI).-** Para el debido ejercicio de las funciones señaladas en la fracción IV del artículo 26 Ter de la Ley, los testigos sociales deberán: … VI. Acreditar los cursos de capacitación que determine la Secretaría de la Función Pública para actualizar sus conocimientos en la aplicación de la Ley y los Tratados.

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
	de lo establecido en los tratados de que México sea parte.	
Artículo 7 (fracción V).- Los Servidores Públicos observarán en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público. Para la efectiva aplicación de dichos principios, los Servidores Públicos observarán las siguientes directrices: … V. Actuar conforme a una cultura de servicio orientada al logro de resultados, procurando en todo momento un mejor desempeño de sus funciones a fin de alcanzar las metas institucionales según sus responsabilidades;	**Artículo 18.-** En la planeación de las adquisiciones, arrendamientos y servicios que pretendan realizar sujetos a que se refiere las fracciones I a VI del artículo 1 de esta Ley, deberá ajustarse a: I. Los objetivos y prioridades del Plan Nacional de Desarrollo y de los programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales que correspondan, así como a las previsiones contenidas en sus programas anuales, y II. Los objetivos, metas y previsiones de recursos establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación o, en su caso, al presupuesto destinado a las contrataciones que los fideicomisos públicos no considerados entidades paraestatales prevean para el ejercicio correspondiente.	
	Artículo 20 (fracción II).- Las dependencias y entidades formularán sus programas anuales de adquisiciones, arrendamientos y servicios, y los que abarquen más de un ejercicio presupuestal, así como sus respectivos presupuestos, considerando: … II. Los objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo; …	**Artículo 16.-** Para efectos de lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley, los titulares de las dependencias y entidades, o bien los oficiales mayores o equivalentes, aprobarán el programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios. La planeación e integración de dicho programa y, en su caso, su presentación ante los titulares de las dependencias y entidades para su aprobación, será responsabilidad de los oficiales mayores o equivalentes, a partir de la información que les proporcionen las áreas requirentes, y deberá contener, como mínimo, la descripción y monto de los bienes, arrendamientos y servicios que representen por lo menos el ochenta por ciento del presupuesto total estimado, así como el monto aproximado de los bienes, arrendamientos y servicios que integran el porcentaje restante.
Artículo 2 (fracción V).- Son objeto de la presente Ley: …	**Artículo 22 (fracción III).-** Las dependencias y entidades deberán establecer comités de adquisiciones, arrendamientos y servicios que tendrán	**Artículo 3.-** Las políticas, bases y lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios a que se refiere el penúltimo

A) Marco normativo complementario y supletorio.

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
V. Crear las bases para que todo Ente público establezca políticas eficaces de ética pública y responsabilidad en el servicio público.	las siguientes funciones: … III. Dictaminar los proyectos de políticas, bases y lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios que le presenten, así como someterlas a la consideración del titular de la dependencia o el órgano de gobierno de las entidades; en su caso, autorizar los supuestos no previstos en las mismas. Los comités establecerán en dichas políticas, bases y lineamientos, los aspectos de sustentabilidad ambiental, incluyendo la evaluación de las tecnologías que permitan la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero y la eficiencia energética, que deberán observarse en las adquisiciones, arrendamientos y servicios, con el objeto de optimizar y utilizar de forma sustentable los recursos para disminuir costos financieros y ambientales;	párrafo del artículo 1 de la Ley, sólo deberán prever lo siguiente: I. Las áreas de la dependencia o entidad que aplicarán las disposiciones previstas en la Ley y el presente Reglamento; II. Los niveles jerárquicos de los servidores públicos que atenderán y se responsabilizarán de los diversos actos relacionados con los procedimientos de contratación a que hacen referencia la Ley y este Reglamento; III. La forma en que las dependencias y entidades deberán cumplir con los términos o plazos a que hacen referencia la Ley y este Reglamento, y IV. Los aspectos que se determinen en los lineamientos generales que emita la Secretaría de la Función Pública. Las dependencias y entidades divulgarán y mantendrán en forma permanente y actualizada en sus páginas de Internet, las políticas, bases y lineamientos a que se refiere este artículo. Las entidades que no cuenten con la infraestructura técnica necesaria para los efectos señalados, deberán hacerlo a través de la dependencia que funja como su coordinadora de sector**.** **Artículo 21 (fracción V).-** Para el ejercicio de sus funciones el Comité deberá: … V. Recibir por conducto del secretario técnico, las propuestas de modificación a las políticas, bases y lineamientos formuladas por las áreas contratantes y requirentes, así como dictaminar sobre su procedencia y, en su caso, someterlas a la autorización del titular de la dependencia u órgano de gobierno correspondiente.
Artículo 2 (fracción I).- Son objeto de la presente Ley: …	**Artículo 24.-** La planeación, programación, presupuestación y el gasto de las adquisiciones, arrendamientos y servicios se sujetará a las	

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
I. Establecer los principios y obligaciones que rigen la actuación de los Servidores Públicos; **Artículo 7 (fracción VI).-** Los Servidores Públicos observarán en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público. Para la efectiva aplicación de dichos principios, los Servidores Públicos observarán las siguientes directrices: … VI. Administrar los recursos públicos que estén bajo su responsabilidad, sujetándose a los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados;	disposiciones específicas del Presupuesto de Egresos de la Federación, así como a lo previsto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y demás disposiciones aplicables y los recursos destinados a ese fin se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia, honradez e imparcialidad para satisfacer los objetivos a los que fueren destinados.	
Artículo 7 (fracción VII).- Los Servidores Públicos observarán en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad,	**Artículo 26 (primero y segundo párrafos).-** Las dependencias y entidades seleccionarán de entre los procedimientos que a continuación se señalan, aquél que de acuerdo con la naturaleza de la contratación asegure al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes:	**Artículo 2 (fracción XI).-** Adicionalmente a las definiciones contenidas en el artículo 2 de la Ley, para los efectos de este Reglamento se entenderá por: … XI. Sobre cerrado: cualquier medio que contenga la proposición del licitante, cuyo contenido sólo puede ser conocido en el acto de presentación y apertura

A) Marco normativo complementario y supletorio.

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público. Para la efectiva aplicación de dichos principios, los Servidores Públicos observarán las siguientes directrices: … VII. Promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos establecidos en la Constitución[#]	I. Licitación pública; II. Invitación a cuando menos tres personas, o III. Adjudicación directa. Las adquisiciones, arrendamientos y servicios se adjudicarán, por regla general, a través de licitaciones públicas, mediante convocatoria pública, para que libremente se presenten proposiciones, solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad, crecimiento económico, generación de empleo, eficiencia energética, uso responsable del agua, optimización y uso sustentable de los recursos, así como la protección al medio ambiente y demás circunstancias pertinentes, de acuerdo con lo que establece la presente Ley.	de proposiciones en términos de la Ley.
Artículo 25 (fracción V, VI y VII).- En la determinación de la responsabilidad de las personas morales a que se refiere la presente Ley, se valorará si cuentan con una política de integridad. Para los efectos de esta Ley, se considerará una política de integridad aquella que cuenta con, al menos, los siguientes elementos: … V. Sistemas y procesos adecuados de entrenamiento y capacitación respecto de las medidas de integridad que	**Artículo 26 Ter (fracción III, inciso g y fracción IV, inciso a).-** En las licitaciones públicas, cuyo monto rebase el equivalente a cinco millones de días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal y en aquellos casos que determine la Secretaría de la Función Pública atendiendo al impacto que la contratación tenga en los programas sustantivos de la dependencia o entidad, participarán testigos sociales conforme a lo siguiente: … III. La Secretaría de la Función Pública, acreditará como testigos sociales a aquéllas personas que cumplan con los siguientes requisitos: … g) Asistir a los cursos de capacitación que imparte la Secretaría de la Función Pública sobre esta Ley y Tratados, y	**Artículo 69 (fracciones II y IV).-** La Secretaría de la Función Pública evaluará la actuación de los testigos sociales en los procedimientos de contratación conforme a lo siguiente: … IV. Se considerarán los resultados de los exámenes que se apliquen a los testigos sociales en los cursos de capacitación que se impartan para actualizar sus conocimientos sobre la aplicación de la Ley y los Tratados.

[#] En las tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, enunciados en esta correlación se determina que el contenido de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector, correctamente aplicado, respeta los principios de la Constitución en materia de Derechos Humanos.

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
contiene este artículo; VI. Políticas de recursos humanos tendientes a evitar la incorporación de personas que puedan generar un riesgo a la integridad de la corporación. Estas políticas en ningún caso autorizarán la discriminación de persona alguna motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas, y• VII. Mecanismos que aseguren en todo momento la transparencia y publicidad de sus intereses.	… IV. Los testigos sociales tendrán las funciones siguientes: a) Proponer a las dependencias, entidades y a la Secretaría de la Función Pública mejoras para fortalecer la transparencia, imparcialidad y las disposiciones legales en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios;	II. Se podrán realizar encuestas entre los licitantes, sobre la percepción de si la participación de los testigos sociales contribuye a promover la libre participación, inhibir actos de corrupción y fomentar la transparencia;
Artículo 7 (fracción IV).- Los Servidores Públicos observarán en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad,	**Artículo 29 (fracciones V y IX y segundo párrafo).-** La convocatoria a la licitación pública, en la cual se establecerán las bases en que se desarrollará el procedimiento y en las cuales se describirán los requisitos de participación, deberá contener: … V. Los requisitos que deberán cumplir los interesados en participar en el procedimiento, los cuales no deberán limitar la libre participación, concurrencia y	

• Se determina que el contenido de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su reglamento no viola los contenidos de la Constitución como se puede observar en el rubro de “Jurisprudencias y tesis aisladas” de este anexo.

A) Marco normativo complementario y supletorio.

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público. Para la efectiva aplicación de dichos principios, los Servidores Públicos observarán las siguientes directrices: … IV. Dar a las personas en general el mismo trato, por lo que no concederán privilegios o preferencias a organizaciones o personas, ni permitirán que influencias, intereses o prejuicios indebidos afecten su compromiso para tomar decisiones o ejercer sus funciones de manera objetiva; **Artículo 21.-** Las Secretarías podrán suscribir convenios de colaboración con las personas físicas o morales que participen en contrataciones públicas, así como con las ***cámaras empresariales*** u organizaciones industriales o de comercio, con la finalidad de orientarlas en el establecimiento de mecanismos de autorregulación que incluyan la instrumentación de controles internos y un programa de ***integridad*** que les permita asegurar el desarrollo de una cultura ***ética***	competencia económica; … **(Segundo párrafo).-** Para la participación, adjudicación o contratación de adquisiciones, arrendamientos o servicios no se podrán establecer requisitos que tengan por objeto o efecto limitar el proceso de competencia y libre concurrencia. En ningún caso se deberán establecer requisitos o condiciones imposibles de cumplir. La dependencia o entidad convocante tomará en cuenta las recomendaciones previas que, en su caso, emita la Comisión Federal de Competencia en términos de la Ley Federal de Competencia Económica. IX. Precisar que será requisito el que los licitantes presenten una declaración de ***integridad,*** en la que manifiesten, bajo protesta de decir verdad, que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas, para que los servidores públicos de la dependencia o entidad, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes;	**Artículo 39 (fracción VI, inciso f).-** La convocatoria a la licitación pública y, cuando proceda, el Proyecto de convocatoria deberán contener los requisitos que señala el artículo 29 de la Ley y se elaborarán conforme al orden, apartados e información que a continuación se indican: … VI. Documentos y datos que deben presentar los licitantes, entre los que se encuentran los siguientes: … f) La declaración de ***integridad***, en la que el licitante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que se abstendrá, por sí o a través de interpósita persona, de adoptar conductas para que los servidores públicos de la dependencia o entidad, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento u otros aspectos que le puedan otorgar condiciones más ventajosas con

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
en su organización. **Artículo 25 (fracciones I y II).-** En la determinación de la responsabilidad de las personas morales a que se refiere la presente Ley, se valorará si cuentan con una política de integridad. Para los efectos de esta Ley, se considerará una política de integridad aquella que cuenta con, al menos, los siguientes elementos: I. Un manual de organización y procedimientos que sea claro y completo, en el que se delimiten las funciones y responsabilidades de cada una de sus áreas, y que especifique claramente las distintas cadenas de mando y de liderazgo en toda la estructura; II. Un código de conducta debidamente publicado y socializado entre todos los miembros de la organización, que cuente con sistemas y mecanismos de aplicación real;		relación a los demás participantes; **Artículo 48 (fracción VIII, inciso b).-** Durante el desarrollo del acto de presentación y apertura de proposiciones se observará lo siguiente: … VIII. Se requerirá a los licitantes que entreguen junto con el Sobre cerrado, los escritos siguientes: … b) La declaración de ***integridad*** a que hace referencia la fracción IX del artículo 29 de la Ley; … **Artículo 67 (fracción I).-** Para el debido ejercicio de las funciones señaladas en la fracción IV del artículo 26 Ter de la Ley, los testigos sociales deberán: … I. Conducirse de manera objetiva, independiente, imparcial, honesta y ***ética***; **Artículo 28 (fracción II).-** Para efectos de lo dispuesto en el sexto párrafo del artículo 26 de la Ley, la investigación de mercado que realicen las dependencias y entidades deberá integrarse, de acuerdo con las características del bien o servicio a contratar, con información obtenida de cuando menos dos de las fuentes siguientes: … II. La obtenida de organismos especializados; de ***cámaras***, asociaciones o agrupaciones industriales, comerciales o de servicios, o bien de fabricantes, proveedores, distribuidores o comercializadores del ramo correspondiente, y **Artículo 61 (segundo párrafo).-** El Comité de Testigos Sociales estará integrado por cinco servidores públicos de la Secretaría de la Función Pública y, a invitación de ésta, por cinco representantes de las ***cámaras***, asociaciones ***empresariales*** o colegios de profesionales. La designación de sus integrantes corresponderá al

A) Marco normativo complementario y supletorio.

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
	Artículo 39 (primer párrafo).- Las dependencias y entidades podrán utilizar el abastecimiento simultáneo a efecto de distribuir entre dos o más proveedores las partidas de bienes o servicios, cuando así lo hayan establecido en la convocatoria a la licitación, siempre que con ello no restrinjan la libre participación. La dependencia o entidad convocante tomará en cuenta las recomendaciones previas que, en su caso, emita la Comisión Federal de Competencia, en términos de la Ley Federal de Competencia Económica.	Titular de la Secretaría de la Función Pública, de entre los cuales determinará al servidor público que lo presidirá, quien tendrá voto de calidad en caso de empate. Los miembros del Comité de Testigos Sociales podrán designar a su respectivo suplente, quien sólo podrá participar en ausencia del titular. **Artículo 114 (fracción III).-** La Secretaría de la Función Pública tomará conocimiento de los actos o hechos presuntamente constitutivos de infracciones que cometan los licitantes o proveedores a través, entre otros, de los medios siguientes: … III. Vista de cualquier otra autoridad mediante la cual informe de actos o hechos posiblemente constitutivos de infracción, agregando la documentación comprobatoria con que se cuente para acreditar la conducta irregular, y **Artículo 31 (segundo y tercer párrafos).-** Si las normas a que se refiere el párrafo anterior no cubren los requerimientos técnicos, o bien, si sus especificaciones resultan inaplicables u obsoletas, la convocante podrá solicitar el cumplimiento de las normas de referencia o especificaciones a que se refiere el artículo 67 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, siempre que se acredite, en los términos del presente Reglamento, que no se limita la libre participación de los licitantes. El titular del Área requirente deberá indicar en la convocatoria a la licitación pública, invitación a cuando menos tres personas o solicitud de cotización, según corresponda, el nombre y los datos de identificación de la o las normas que deben cumplirse en el procedimiento de contratación respectivo, así como verificar que la inclusión de las normas o especificaciones señalados en el párrafo anterior no limita la libre participación y concurrencia de los interesados.

A) Marco normativo complementario y supletorio.

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
		Artículo 39 (fracción II, incisos b) y e).- La convocatoria a la licitación pública y, cuando proceda, el Proyecto de convocatoria deberán contener los requisitos que señala el artículo 29 de la Ley y se elaborarán conforme al orden, apartados e información que a continuación se indican: … II. Objeto y alcance de la licitación pública, precisando: … b) La indicación, en su caso, de que los bienes o servicios se agruparán en partidas, siempre y cuando no se limite la libre participación de cualquier interesado. Se entenderá que no se limita la libre participación, cuando con la investigación de mercado correspondiente al procedimiento de contratación, se constate la existencia de al menos cinco probables proveedores que pudieran cumplir integralmente con el agrupamiento a que se refiere el párrafo anterior; … e) Para el caso previsto en la fracción X del artículo 29 de la Ley, se deberá especificar el método que se utilizará para realizar las pruebas que permitan verificar el cumplimiento de las especificaciones de los bienes a adquirir o arrendar o servicios a contratar; la institución pública o privada que las realizará y el momento para efectuarlas, así como la unidad de medida con la cual se determinará el resultado mínimo que deberá obtenerse en las pruebas señaladas. Será responsabilidad del Área técnica determinar que los niveles de aceptación sean los adecuados para la dependencia o entidad y no se constituyan en un requisito que limite la libre participación de los interesados; **Artículo 40 (primer párrafo).-** Las dependencias y entidades no podrán establecer en la convocatoria a

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
		la licitación pública requisitos que limiten la libre participación de los interesados… **Artículo 44 (último párrafo).-** Cuando existan causas justificadas para no aceptar la presentación de proposiciones conjuntas, se requerirá la autorización escrita del titular del Área requirente, en la cual deberán precisarse las razones para ello, particularmente los aspectos relativos a que con tal determinación no se limita la libre participación. Dicha autorización deberá formar parte del expediente de contratación respectivo. **Artículo 69 (fracción II).-** La Secretaría de la Función Pública evaluará la actuación de los testigos sociales en los procedimientos de contratación conforme a lo siguiente: … II. Se podrán realizar encuestas entre los licitantes, sobre la percepción de si la participación de los testigos sociales contribuye a promover la libre participación, inhibir actos de corrupción y fomentar la transparencia;
Artículo 3 (fracción VI).- Para efectos de esta Ley se entenderá por: … VI. Conflicto de Interés: La posible afectación del desempeño imparcial y objetivo de las funciones de los Servidores Públicos en razón de intereses personales, familiares o de negocios; **Artículo 45.-** Las Secretarías o los Órganos internos de control deberán supervisar la ejecución de los procedimientos de	**Artículo 50 (primer párrafo, fracciones I, VII, VIII, IX, X, XI, XII, y XIV y segundo párrafo).-** Las dependencias y entidades se abstendrán de recibir proposiciones o adjudicar contrato alguno en las materias a que se refiere esta Ley, con las personas siguientes: I. Aquéllas en que el servidor público que intervenga en cualquier etapa del procedimiento de contratación tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquéllas de las que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o sus parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado	

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
contratación pública por parte de los contratantes para garantizar que se lleva a cabo en los términos de las disposiciones en la materia, llevando a cabo las verificaciones procedentes si descubren anomalías. **Artículo 47.-** Para efectos del artículo anterior habrá Conflicto de Interés en los casos a los que se refiere la fracción VI del artículo 3 de esta Ley. La declaración de intereses tendrá por objeto informar y determinar el conjunto de intereses de un servidor público a fin de delimitar cuándo éstos entran en conflicto con su función. **Artículo 68.-** Incurrirá en tráfico de influencias para inducir a la autoridad el particular que use su influencia, poder económico o político, real o ficticio, sobre cualquier servidor público, con el propósito de obtener para sí o para un tercero un beneficio o ventaja, o para causar perjuicio a alguna persona o al servicio público, con independencia de la aceptación del servidor o de los Servidores Públicos o del resultado obtenido.	parte durante los dos años previos a la fecha de celebración del procedimiento de contratación de que se trate;	

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
Artículo 66.- Incurrirá en soborno el particular que prometa, ofrezca o entregue cualquier beneficio indebido a que se refiere el artículo 52 de esta Ley a uno o varios Servidores Públicos, directamente o a través de terceros, a cambio de que dichos Servidores Públicos realicen o se abstengan de realizar un acto relacionado con sus funciones o con las de otro servidor público, o bien, abusen de su influencia real o supuesta, con el propósito de obtener o mantener, para sí mismo o para un tercero, un beneficio o ventaja, con independencia de la aceptación o recepción del beneficio o del resultado obtenido. **Artículo 72.-** Será responsable de contratación indebida de ex Servidores Públicos el particular que contrate a quien haya sido servidor público durante el año previo, que posea información privilegiada que directamente haya adquirido con motivo de su empleo, cargo o comisión en el servicio público, y directamente permita que el contratante se beneficie en el mercado o se coloque en		

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
situación ventajosa frente a sus competidores. En este supuesto también será sancionado el ex servidor público contratado. **Artículo 57.-** Incurrirá en abuso de funciones el servidor público que ejerza atribuciones que no tenga conferidas o se valga de las que tenga, para realizar o inducir actos u omisiones arbitrarios, para generar un beneficio para sí o para las personas a las que se refiere el artículo 52 de esta Ley o para causar perjuicio a alguna persona o al servicio público. **Artículo 52.-** Incurrirá en cohecho el servidor público que exija, acepte, obtenga o pretenda obtener, por sí o a través de terceros, con motivo de sus funciones, cualquier beneficio no comprendido en su remuneración como servidor público, que podría consistir en dinero; valores; bienes muebles o inmuebles, incluso mediante enajenación en precio notoriamente inferior al que se tenga en el mercado; donaciones; servicios; empleos y demás beneficios indebidos para sí o para su cónyuge, parientes consanguíneos, parientes		

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
civiles o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen parte. **Artículo 53.-** Cometerá peculado el servidor público que autorice, solicite o realice actos para el uso o apropiación para sí o para las personas a las que se refiere el artículo anterior, de recursos públicos, sean materiales, humanos o financieros, sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables. **Artículo 58.**- Incurre en actuación bajo Conflicto de Interés el servidor público que intervenga por motivo de su empleo, cargo o comisión en cualquier forma, en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga Conflicto de Interés o impedimento legal. … **Artículo 60.-** Incurrirá en enriquecimiento oculto u ocultamiento de Conflicto de Interés el servidor público que falte a la veracidad en la presentación de las declaraciones de situación		

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
patrimonial o de intereses, que tenga como fin ocultar, respectivamente, el incremento en su patrimonio o el uso y disfrute de bienes o servicios que no sea explicable o justificable, o un Conflicto de Interés. **Artículo 7 (fracciones II y III).-** Los Servidores Públicos observarán en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público. … II. Conducirse con rectitud sin utilizar su empleo, cargo o comisión para obtener o pretender obtener algún beneficio, provecho o ventaja personal o a favor de terceros, ni buscar o aceptar compensaciones, prestaciones, dádivas, obsequios o regalos de cualquier persona u organización; III. Satisfacer el interés superior de las necesidades colectivas por encima de intereses particulares,		

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
personales o ajenos al interés general y bienestar de la población; **Artículo 24.-** Las personas morales serán sancionadas en los términos de esta Ley cuando los actos vinculados con faltas administrativas graves sean realizados por personas físicas que actúen a su nombre o representación de la persona moral y pretendan obtener mediante tales conductas beneficios para dicha persona moral. **Artículo 70 (último párrafo).-** Incurrirá en colusión el particular que ejecute con uno o más sujetos particulares, en materia de contrataciones públicas, acciones que impliquen o tengan por objeto o efecto obtener un beneficio o ventaja indebidos en las contrataciones públicas de carácter federal, local o municipal. … Para efectos de este artículo se entienden como transacciones comerciales internacionales, los actos y procedimientos relacionados con la contratación, ejecución y cumplimiento de contratos en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios de	VII. Aquellas que presenten proposiciones en una misma partida de un bien o servicio en un procedimiento de contratación que se encuentren vinculadas entre sí por algún socio o asociado común. Se entenderá que es socio o asociado común, aquella persona física o moral que en el mismo procedimiento de contratación es reconocida como tal en las actas constitutivas, estatutos o en sus reformas o modificaciones de dos o más empresas licitantes, por tener una participación accionaria en el capital social, que le otorgue el derecho de intervenir en la toma de decisiones o en la administración de dichas personas morales; VIII. Las que pretendan participar en un procedimiento de contratación y previamente hayan realizado o se encuentren realizando, por sí o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, en virtud de otro contrato, trabajos de análisis y control de calidad, preparación de especificaciones, presupuesto o la elaboración de cualquier documento vinculado con el procedimiento en que se encuentran interesadas en participar, cuando con motivo de la realización de dichos trabajos hubiera tenido acceso a información privilegiada que no se dará a conocer a los licitantes para la elaboración de sus proposiciones; IX. Aquellas que por sí o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial pretendan ser contratadas para elaboración de dictámenes, peritajes y avalúos, cuando éstos hayan de ser utilizados para resolver discrepancias derivadas de los contratos en los que dichas personas o empresas sean parte; X. Las que celebren contratos sobre las materias	

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
cualquier naturaleza, obra pública y servicios relacionados con la misma; los actos y procedimientos relativos al otorgamiento y prórroga de permisos o concesiones, así como cualquier otra autorización o trámite relacionados con dichas transacciones, que lleve a cabo cualquier organismo u organización públicos de un estado extranjero o que involucre la participación de un servidor público extranjero y en cuyo desarrollo participen, de manera directa o indirecta, personas físicas o morales de nacionalidad mexicana.	reguladas por esta Ley sin estar facultadas para hacer uso de derechos de propiedad intelectual, y XI. Las que hayan utilizado información privilegiada, proporcionada indebidamente por servidores públicos o sus familiares por parentesco consanguíneo y, por afinidad hasta el cuarto grado, o civil; XII. Las que contraten servicios de asesoría, consultoría y apoyo de cualquier tipo de personas en materia de contrataciones gubernamentales, si se comprueba que todo o parte de las contraprestaciones pagadas al prestador del servicio, a su vez, son recibidas por servidores públicos por sí o por interpósita persona, con independencia de que quienes las reciban tengan o no relación con la contratación; … XIV. Las demás que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por disposición de Ley. Las políticas, bases y lineamientos a que alude el artículo 1 de esta Ley, que emitan las dependencias y entidades cuyo objeto comprenda la prestación de servicios de salud, podrán establecer que las hipótesis previstas en las fracciones III y V de este artículo, se encuentren referidas solamente a cada una de sus áreas facultadas para llevar a cabo procedimientos de contratación, de tal manera que el impedimento de una de éstas para contratar en dichos casos, no se hará aplicable a las demás. El oficial mayor o su equivalente de la dependencia o entidad, deberá llevar el registro, control y difusión de las personas con las que se encuentren impedidas de contratar, el cual será difundido a través de CompraNet.	
Artículo 25 (fracciones VI y VII).- En la determinación de la responsabilidad de las	**Artículo 56 (tercer párrafo, fracción II).-** La administración del sistema electrónico de información pública gubernamental sobre adquisiciones,	

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
personas morales a que se refiere la presente Ley, se valorará si cuentan con una política de integridad. Para los efectos de esta Ley, se considerará una política de integridad aquella que cuenta con, al menos, los siguientes elementos: … VI. Políticas de recursos humanos tendientes a evitar la incorporación de personas que puedan generar un riesgo a la integridad de la corporación. Estas políticas en ningún caso autorizarán la discriminación de persona alguna motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas, y VII. Mecanismos que aseguren en todo momento la transparencia y publicidad de sus intereses.	arrendamientos y servicios, estará a cargo de la Secretaría de la Función Pública, a través de la unidad administrativa que determine su Reglamento, en el cual las dependencias, entidades y los demás sujetos de esta Ley, deberán incorporar la información que ésta les requiera. El sistema a que se refiere el párrafo anterior, tendrá los siguientes fines: … II. Propiciar la transparencia y seguimiento de las adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, y	
Artículo 1.- La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la	**Artículo 59.-** Los licitantes o proveedores que infrinjan las disposiciones de esta Ley, serán sancionados por la Secretaría de la Función Pública	**Artículo 109.-** Se sancionará en términos del primer párrafo del artículo 59 de la Ley, a los licitantes que injustificadamente y por causas imputables a los

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
República, y tiene por objeto distribuir competencias entre los órdenes de gobierno para establecer las responsabilidades administrativas de los Servidores Públicos, sus obligaciones, las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que estos incurran y las que correspondan a los particulares vinculados con faltas administrativas graves, así como los procedimientos para su aplicación. **Artículo 2 (fracción II, III y V).-** Son objeto de la presente Ley: … II. Establecer las Faltas administrativas graves y no graves de los Servidores Públicos, las sanciones aplicables a las mismas, así como los procedimientos para su aplicación y las facultades de las autoridades competentes para tal efecto; III. Establecer las sanciones por la comisión de Faltas de particulares, así como los procedimientos para su aplicación y las facultades de las autoridades competentes para tal efecto; …	con multa equivalente a la cantidad de cincuenta hasta mil veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal elevado al mes, en la fecha de la infracción. Cuando los licitantes, injustificadamente y por causas imputables a los mismos, no formalicen contratos cuyo monto no exceda de cincuenta veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal elevado al mes, serán sancionados con multa equivalente a la cantidad de diez hasta cuarenta y cinco veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal elevado al mes, en la fecha de la infracción. **Artículo 60 (primer párrafo, fracciones I, II, III y IV y segundo párrafo).-** La Secretaría de la Función Pública, además de la sanción a que se refiere el primer párrafo del artículo anterior, inhabilitará temporalmente para participar de manera directa o por interpósita persona en procedimientos de contratación o celebrar contratos regulados por esta Ley, a las personas que se encuentren en alguno de los supuestos siguientes: I. Los licitantes que injustificadamente y por causas imputables a los mismos no formalicen dos o más	mismos se abstengan de firmar contratos según lo previsto por el segundo párrafo del artículo 46 de dicho ordenamiento, cuando el monto de éstos exceda de cincuenta veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal elevado al mes. Los licitantes que injustificadamente y por causas imputables a ellos no formalicen dos o más contratos con cualquier dependencia o entidad, dentro del plazo de dos años, serán sancionados en términos del primer párrafo del artículo 59 de la Ley por lo que respecta al segundo y sucesivos contratos no firmados, y se les inhabilitará conforme a lo dispuesto por la fracción I del artículo 60 de la Ley. Se presumirá que la falta de firma del contrato por parte del licitante a quien se le adjudicó el mismo le es imputable a éste, salvo prueba en contrario que aporte durante el procedimiento administrativo sancionador con la que justifique dicha omisión. **Artículo 110.-** Cuando una instancia de inconformidad sea sobreseída o resuelta como infundada y en la misma se determine que se promovió para retrasar o entorpecer la contratación, se sancionará al inconforme con inhabilitación en términos de la fracción IV del artículo 60 de la Ley y multa de acuerdo con el primer párrafo del artículo 59 de la Ley. **Artículo 88 (fracción III).-** Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley, respecto de las fracciones y párrafos de dicho precepto legal que a continuación se señalan, deberá considerarse lo siguiente: … III. Las proposiciones de las personas que se ubiquen en el supuesto a que se refiere la fracción VII, serán desechadas de la partida en la que se presentaron, debiendo comunicar lo anterior al órgano interno de control para efectos de determinar

A) Marco normativo complementario y supletorio.

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
V. Crear las bases para que todo Ente público establezca políticas eficaces de ética pública y responsabilidad en el servicio público. **Artículo 3 (fracción XIV).-** Para efectos de esta Ley se entenderá por: … XIV. Faltas administrativas: Las Faltas administrativas graves, las Faltas administrativas no graves; así como las Faltas de particulares, conforme a lo dispuesto en esta Ley; **Artículo 67.-** Incurrirá en participación ilícita en procedimientos administrativos el particular que realice actos u omisiones para participar en los mismos sean federales, locales o municipales, no obstante que por disposición de ley o resolución de autoridad competente se encuentren impedido o inhabilitado para ello. También se considera participación ilícita en procedimientos administrativos, cuando un particular intervenga en nombre propio pero en interés de otra u otras personas que se encuentren impedidas o inhabilitadas para participar en	contratos que les haya adjudicado cualquier dependencia o entidad en el plazo de dos años calendario, contados a partir del día en que haya fenecido el término para la formalización del primer contrato no formalizado; II. Los proveedores a los que se les haya rescindido administrativamente un contrato en dos o más dependencias o entidades en un plazo de tres años; III. Los proveedores que no cumplan con sus obligaciones contractuales por causas imputables a ellos y que, como consecuencia, causen daños o perjuicios graves a la dependencia o entidad de que se trate; así como, aquellos que entreguen bienes o servicios con especificaciones distintas de las convenidas;	si se actualiza lo dispuesto por la fracción IV del artículo 60 de la Ley, y **Artículo 111.-** La publicación de la circular a que se refiere el párrafo segundo del artículo 60 de la Ley deberá realizarse en CompraNet y simultáneamente enviarse al Diario Oficial de la Federación para los mismos efectos. La inhabilitación surtirá efectos a partir de la publicación de la circular correspondiente en CompraNet. **Artículo 112.-** Cuando la Secretaría de la Función Pública haya inhabilitado a un proveedor con posterioridad a la emisión de un fallo en el que se le adjudicó un contrato, las dependencias y entidades formalizarán el contrato respectivo. **Artículo 113.-** Para efectos de lo dispuesto por el tercer párrafo del artículo 60 de la Ley, el licitante o proveedor acreditará que ha pagado la multa que se le impuso, presentando a la Secretaría de la Función Pública el documento comprobatorio del pago correspondiente, a fin de que se publique en CompraNet que la inhabilitación ha dejado de surtir efectos. En defecto de lo señalado en el párrafo anterior, los licitantes deberán agregar a sus proposiciones copia simple del documento comprobatorio de pago referido en el citado párrafo, el cual será tomado en consideración por la dependencia o entidad convocante durante la evaluación de las proposiciones. **Artículo 114.-** La Secretaría de la Función Pública tomará conocimiento de los actos o hechos presuntamente constitutivos de infracciones que cometan los licitantes o proveedores a través, entre otros, de los medios siguientes: I. CompraNet, para lo cual las dependencias y entidades deberán registrar la falta de formalización de los contratos y las rescisiones de los mismos en

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
procedimientos administrativos federales, locales o municipales, con la finalidad de que ésta o éstas últimas obtengan, total o parcialmente, los beneficios derivados de dichos procedimientos. Ambos particulares serán sancionados en términos de esta Ley. **Artículo 81 (fracción I, inciso b y fracción II inciso b).-** Las sanciones administrativas que deban imponerse por Faltas de particulares por comisión de alguna de las conductas previstas en los Capítulos III y IV del Título Tercero de esta Ley, consistirán en: … I. Tratándose de personas físicas: … b) Inhabilitación temporal para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, según corresponda, por un periodo que no será menor de tres meses ni mayor de ocho años; … II. Tratándose de personas morales: … b) Inhabilitación temporal para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u		un plazo máximo de diez días naturales contados a partir de la fecha en que se debió haber realizado la formalización correspondiente o de aquélla en que haya concluido la substanciación del procedimiento de rescisión, de conformidad con el artículo 54 de la Ley; II. Denuncia de las dependencias y entidades contratantes, en términos del párrafo cuarto del artículo 60 de la Ley, en los casos no comprendidos en la fracción anterior. En el supuesto de la fracción III del precepto invocado, dentro de la documentación comprobatoria que remitan, deberá encontrarse, en su caso, la que acredite el monto de los daños o perjuicios causados con motivo de la presunta infracción, haciendo el desglose y especificación de los conceptos de afectación de que se trate; III. Vista de cualquier otra autoridad mediante la cual informe de actos o hechos posiblemente constitutivos de infracción, agregando la documentación comprobatoria con que se cuente para acreditar la conducta irregular, y IV. Denuncia de particulares, en la que señalen bajo protesta de decir verdad los actos o hechos presuntamente sancionables. La manifestación de actos o hechos falsos será sancionada en términos de la legislación penal aplicable. **Artículo 115.-** Una vez que la Secretaría de la Función Pública tenga conocimiento de actos o hechos posiblemente constitutivos de infracción, según lo previsto en el artículo anterior, realizará las investigaciones y actuaciones que correspondan a fin de sustentar la imputación, para lo cual podrá requerir a las dependencias y entidades, a las autoridades que corresponda, a los particulares o, en su caso, solicitar a los licitantes o proveedores que aporten mayores elementos para su análisis.

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
obras públicas, por un periodo que no será menor de tres meses ni mayor de diez años; **Artículo 84 (fracción II).-** Para la imposición de las sanciones por faltas administrativas graves y Faltas de particulares, se observarán las siguientes reglas: … II. La inhabilitación temporal para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, será impuesta por el Tribunal y ejecutada en los términos de la resolución dictada, y … **Artículo 88.-** La persona que haya realizado alguna de las Faltas administrativas graves o Faltas de particulares, o bien, se encuentre participando en su realización, podrá confesar su responsabilidad con el objeto de acogerse al beneficio de reducción de sanciones que se establece en el artículo siguiente. Esta confesión se podrá hacer ante la Autoridad investigadora. **Artículo 89 (fracción I).-** La aplicación del beneficio a que hace referencia el artículo		Las notificaciones relativas al procedimiento de sanción, así como aquéllas vinculadas con las investigaciones a que se refiere el párrafo anterior, podrán realizarse de acuerdo con lo previsto por el artículo 118 del presente Reglamento. Si desahogadas las investigaciones se concluye que existen elementos suficientes para sustentar la imputación al licitante o proveedor, se iniciará el procedimiento para imponer sanciones previsto en el Título Quinto de la Ley; de lo contrario, se acordará la improcedencia y el archivo del expediente. Cuando de las actuaciones previstas en este artículo se adviertan posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos, se dará vista a la autoridad de la Secretaría de la Función Pública competente en esa materia para que resuelva lo conducente.

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
anterior, tendrá por efecto una reducción de entre el cincuenta y el setenta por ciento del monto de las sanciones que se impongan al responsable, y de hasta el total, tratándose de la inhabilitación temporal para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, por Faltas de particulares… I. Que no se haya notificado a ninguno de los presuntos infractores el inicio del procedimiento de responsabilidad administrativa; **Artículo 59.-** Será responsable de contratación indebida el servidor público que autorice cualquier tipo de contratación, así como la selección, nombramiento o designación, de quien se encuentre impedido por disposición legal o inhabilitado por resolución de autoridad competente para ocupar un empleo, cargo o comisión en el servicio público o inhabilitado para realizar contrataciones con los entes públicos, siempre que en el caso de las inhabilitaciones, al momento de la autorización, éstas se encuentren inscritas en el sistema nacional de		

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
servidores públicos y particulares sancionados de la Plataforma digital nacional.		
Artículo 69.- Será responsable de utilización de información falsa el particular que presente documentación o información falsa o alterada, o simulen el cumplimiento de requisitos o reglas establecidos en los procedimientos administrativos, con el propósito de lograr una autorización, un beneficio, una ventaja o de perjudicar a persona alguna. Asimismo, incurrirán en obstrucción de facultades de investigación el particular que, teniendo información vinculada con una investigación de Faltas administrativas, proporcione información falsa, retrase deliberada e injustificadamente la entrega de la misma, o no dé respuesta alguna a los requerimientos o resoluciones de autoridades investigadoras, substanciadoras o resolutoras, siempre y cuando le hayan sido impuestas previamente medidas de apremio conforme a las disposiciones aplicables.	IV. Las que proporcionen información falsa o que actúen con dolo o mala fe en algún procedimiento de contratación, en la celebración del contrato o durante su vigencia, o bien, en la presentación o desahogo de una solicitud de conciliación o de una inconformidad;	

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
Artículo 226. Cuando haya causado ejecutoria una sentencia en la que se determine la comisión de Faltas de particulares, el Tribunal, sin que sea necesario que medie petición de parte y sin demora alguna, girará oficio por el que comunicará la sentencia respectiva así como los puntos resolutivos de esta para su cumplimiento, de conformidad con las siguientes reglas: I. Cuando el particular haya sido inhabilitado para participar con cualquier carácter en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, el Tribunal ordenará su publicación al Director del Diario Oficial de la Federación, así como a los directores de los periódicos oficiales de las entidades federativas, y **Artículo 227.-** Cuando el particular tenga carácter de persona moral, sin perjuicio de lo establecido en el artículo que antecede, el Tribunal girará oficio por el que comunicará la sentencia respectiva así como los puntos resolutivos de ésta para su cumplimiento, de conformidad con las siguientes reglas:	La inhabilitación que se imponga no será menor de tres meses ni mayor de cinco años, plazo que comenzará a contarse a partir del día siguiente a la fecha en que la Secretaría de la Función Pública la haga del conocimiento de las dependencias y entidades, mediante la publicación de la circular respectiva en el Diario Oficial de la Federación y en CompraNet.	

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
I. Cuando se decrete la suspensión de actividades de la sociedad respectiva, se dará vista a la Secretaría de Economía, y al Servicio de Administración Tributaria, se inscribirá en el Registro Público de Comercio y se hará publicar un extracto de la sentencia que decrete esta medida, en el Diario Oficial de la Federación y en uno de los diarios de mayor circulación en la localidad donde tenga su domicilio fiscal el particular, y II. Cuando se decrete la disolución de la sociedad respectiva, los responsables procederán de conformidad con la Ley General de Sociedades Mercantiles en materia de disolución y liquidación de las sociedades, o en su caso, conforme a los Códigos sustantivos en materia civil federal o de las entidades federativas, según corresponda, y las demás disposiciones aplicables.		
Artículo 2 (fracción IV).- Son objeto de la presente Ley: … II. Establecer las Faltas administrativas graves y no graves de los Servidores Públicos, las sanciones aplicables a las mismas, así	**Artículo 61 (primer párrafo).-** La Secretaría de la Función Pública impondrá las sanciones considerando: I. Los daños o perjuicios que se hubieren producido con motivo de la infracción; II. El carácter intencional o no de la acción u omisión constitutiva de la infracción; III. La gravedad de la infracción, y	

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
como los procedimientos para su aplicación y las facultades de las autoridades competentes para tal efecto; … IV. Determinar los mecanismos para la prevención, corrección e investigación de responsabilidades administrativas, y **Artículo 3 (fracciones XV, XVI y XVII).-** Para efectos de esta Ley se entenderá por: … XV. Falta administrativa no grave: Las faltas administrativas de los Servidores Públicos en los términos de la presente Ley, cuya sanción corresponde a las Secretarías y a los Órganos internos de control; XVI. Falta administrativa grave: Las faltas administrativas de los Servidores Públicos catalogadas como graves en los términos de la presente Ley, cuya sanción corresponde al Tribunal Federal de Justicia Administrativa y sus homólogos en las entidades federativas; XVII. Faltas de particulares: Los actos de personas físicas	IV. Las condiciones del infractor. **Artículo 62.-** La Secretaría de la Función Pública aplicará las sanciones que procedan a quienes	**Artículo 46 (fracción V).-** La junta de aclaraciones, se llevará a cabo conforme a lo siguiente:

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
o morales privadas que estén vinculados con faltas administrativas graves a que se refieren los Capítulos III y IV del Título Tercero de esta Ley, cuya sanción corresponde al Tribunal en los términos de la misma; **Artículo 4.-** Son sujetos de esta Ley: I. Los Servidores Públicos; II. Aquellas personas que habiendo fungido como Servidores Públicos se ubiquen en los supuestos a que se refiere la presente Ley, y III. Los particulares vinculados con faltas administrativas graves. **Artículo 49 (fracción IX).-** Incurrirá en Falta administrativa no grave el servidor público cuyos actos u omisiones incumplan o transgredan lo contenido en las obligaciones siguientes: … IX. Cerciorarse, antes de la celebración de contratos de adquisiciones, arrendamientos o para la enajenación de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza o la contratación de obra pública o servicios relacionados con ésta, que el	infrinjan las disposiciones de este ordenamiento, conforme a lo dispuesto por la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. La Secretaría de la Función Pública, en uso de las atribuciones que le confiere la Ley citada en el párrafo anterior, podrá abstenerse de iniciar los procedimientos previstos en ella, cuando de las investigaciones o revisiones practicadas se advierta que el acto u omisión no es grave, o no implica la probable comisión de algún delito o perjuicio patrimonial a la dependencia o entidad, o que el acto u omisión fue corregido o subsanado de manera espontánea por el servidor público o implique error manifiesto y en cualquiera de estos supuestos, los efectos que, en su caso, hubieren producido, desaparecieron o se hayan resarcido.	… V. Será responsabilidad del titular del Área requirente y del titular del Área técnica, o bien sólo el de esta última cuando también tenga el carácter de Área requirente, que asista un representante de las mismas, con los conocimientos técnicos suficientes que permitan dar respuesta clara y precisa a los planteamientos de los licitantes, a las juntas de aclaraciones a los que fueron convocados. En caso de inasistencia del representante del Área técnica o del Área requirente, el servidor público que presida la junta de aclaraciones lo hará del conocimiento del titular del área de responsabilidades del órgano interno de control en la dependencia o entidad de que se trate. … **Artículo 130 (segundo párrafo).-** A los servidores públicos facultados para representar a las dependencias y entidades que, sin causa justificada, omitan dar contestación a la solicitud de conciliación o no asistan a las sesiones respectivas, se les prevendrá de la responsabilidad en que incurren, en términos del primer párrafo del artículo 62 de la Ley. La autoridad que conozca del caso deberá citar a una siguiente audiencia de conciliación.

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
particular manifieste bajo protesta de decir verdad que no desempeña empleo, cargo o comisión en el servicio público o, en su caso, que a pesar de desempeñarlo, con la formalización del contrato correspondiente no se actualiza un Conflicto de Interés. Las manifestaciones respectivas deberán constar por escrito y hacerse del conocimiento del Órgano interno de control, previo a la celebración del acto en cuestión. En caso de que el contratista sea persona moral, dichas manifestaciones deberán presentarse respecto a los socios o accionistas que ejerzan control sobre la sociedad. **Artículo 75 (primer párrafo).-** En los casos de responsabilidades administrativas distintas a las que son competencia del Tribunal, la Secretaría o los Órganos internos de control impondrán las sanciones administrativas siguientes: I. Amonestación pública o privada; II. Suspensión del empleo, cargo o comisión; III. Destitución de su empleo, cargo o comisión, y		

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
IV. Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas. **TRANSITORIO TERCERO (párrafos quinto y séptimo).-** … A la fecha de entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, todas las menciones a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos previstas en las leyes federales y locales así como en cualquier disposición jurídica, se entenderán referidas a la Ley General de Responsabilidades Administrativas. … Con la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas quedarán abrogadas la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, y se derogarán los Títulos Primero, Tercero y Cuarto de la Ley		

A) Marco normativo complementario y supletorio.

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, así como todas aquellas disposiciones que se opongan a lo previsto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. **Artículo 2 (fracción II).-** Son objeto de la presente Ley: … II. Establecer las Faltas administrativas graves y no graves de los Servidores Públicos, las sanciones aplicables a las mismas, así como los procedimientos para su aplicación y las facultades de las autoridades competentes para tal efecto; … **Artículo 78.-** Las sanciones administrativas que imponga el Tribunal a los Servidores Públicos, derivado de los procedimientos por la comisión de faltas administrativas graves, consistirán en: I. Suspensión del empleo, cargo o comisión; II. Destitución del empleo, cargo o comisión; III. Sanción económica, y IV. Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y para participar en adquisiciones,	**Artículo 63.-** Las responsabilidades y las sanciones a que se refiere la presente Ley serán independientes de las de orden civil, penal o de cualquier otra índole que puedan derivar de la comisión de los mismos hechos. **Artículo 64.-** No se impondrán sanciones cuando se haya incurrido en la infracción por causa de fuerza mayor o de caso fortuito, o cuando se observe en forma espontánea el precepto que se hubiese dejado de cumplir. No se considerará que el cumplimiento es espontáneo cuando la omisión sea descubierta por las autoridades o medie requerimiento, visita, excitativa o cualquier otra gestión efectuada por las mismas, así como en el supuesto de la fracción IV del artículo 60 de esta Ley.	

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
arrendamientos, servicios u obras públicas. A juicio del Tribunal, podrán ser impuestas al infractor una o más de las sanciones señaladas, siempre y cuando sean compatibles entre ellas y de acuerdo a la gravedad de la Falta administrativa grave. La suspensión del empleo, cargo o comisión que se imponga podrá ser de treinta a noventa días naturales. En caso de que se determine la inhabilitación, ésta será de uno hasta diez años si el monto de la afectación de la Falta administrativa grave no excede de doscientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, y de diez a veinte años si dicho monto excede de dicho límite. Cuando no se cause daños o perjuicios, ni exista beneficio o lucro alguno, se podrán imponer de tres meses a un año de inhabilitación. **Artículo 84 (fracción II).-** Para la imposición de las sanciones por faltas administrativas graves y Faltas de particulares, se observarán las siguientes reglas: … II. La inhabilitación temporal para desempeñar un empleo,		

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
cargo o comisión en el servicio público, y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, será impuesta por el Tribunal y ejecutada en los términos de la resolución dictada, y …		
Artículo 25 (fracción II).- En la determinación de la responsabilidad de las personas morales a que se refiere la presente Ley, se valorará si cuentan con una política de integridad. Para los efectos de esta Ley, se considerará una política de integridad aquella que cuenta con, al menos, los siguientes elementos: … II. Un código de conducta debidamente publicado y socializado entre todos los miembros de la organización, que cuente con sistemas y mecanismos de aplicación real;	**Artículo 74 (penúltimo párrafo).-** En los casos de las fracciones I y II, cuando se determine que la inconformidad se promovió con el propósito de retrasar o entorpecer la contratación, se sancionará al inconforme, previo procedimiento, con multa en términos del artículo 59 de la presente Ley. Para ese efecto, podrá tomarse en consideración la conducta de los licitantes en anteriores procedimientos de contratación o de inconformidad.	
TRANSITORIO TERCERO (quinto y séptimo párrafos).-… A la fecha de entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, todas las	**Artículo 75 (sexto párrafo).-** El desacato de las convocantes a las resoluciones y acuerdos que emita la Secretaría de la Función Pública en los procedimientos de inconformidad será sancionado de acuerdo a lo previsto en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.	

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
menciones a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos previstas en las leyes federales y locales así como en cualquier disposición jurídica, se entenderán referidas a la Ley General de Responsabilidades Administrativas. … Con la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas quedarán abrogadas la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, y se derogarán los Títulos Primero, Tercero y Cuarto de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, así como todas aquellas disposiciones que se opongan a lo previsto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.		
5.- Ley General de Sociedades Mercantiles. *4 de agosto de 1934.* **Artículo 73.-** La sociedad llevará un libro especial de los socios, en el cual se inscribirá el nombre y el domicilio de	**Artículo 50 (fracción VII).-** Las dependencias y entidades se abstendrán de recibir proposiciones o adjudicar contrato alguno en las materias a que se refiere esta Ley, con las personas siguientes: … VII. Aquellas que presenten proposiciones en una misma partida de un bien o servicio en un	**Artículo 105 (cuarto párrafo, fracción III).-** El registro único de proveedores clasificará la información de los proveedores de acuerdo con su actividad; datos generales; nacionalidad; experiencia; especialidad; capacidad técnica, económica y financiera, e historial respecto de contratos celebrados con los sujetos a que se refiere

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
cada uno, con indicación de sus aportaciones, y la transmisión de las partes sociales. Esta no surtirá efectos respecto de terceros sino después de la inscripción. Cualquiera persona que compruebe un interés legítimo tendrá la facultad de consultar este libro, que estará al cuidado de los administradores, quienes responderán personal y solidariamente de su existencia regular y de la exactitud de sus datos.	procedimiento de contratación que se encuentren vinculadas entre sí por algún socio o asociado común. Se entenderá que es socio o asociado común, aquella persona física o moral que en el mismo procedimiento de contratación es reconocida como tal en las actas constitutivas, estatutos o en sus reformas o modificaciones de dos o más empresas licitantes, por tener una participación accionaria en el capital social, que le otorgue el derecho de intervenir en la toma de decisiones o en la administración de dichas personas morales;	el párrafo primero de este artículo y de su cumplimiento en tiempo y en monto. El citado registro será diseñado y administrado por la Secretaría de la Función Pública y contendrá cuando menos: … III. Relación de socios, conforme a lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción VII del artículo 50 de la Ley y el artículo 73 de la Ley General de Sociedades Mercantiles; **Artículo 88 (fracción III).-** Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley, respecto de las fracciones y párrafos de dicho precepto legal que a continuación se señalan, deberá considerarse lo siguiente: … III. Las proposiciones de las personas que se ubiquen en el supuesto a que se refiere la fracción VII, serán desechadas de la partida en la que se presentaron, debiendo comunicar lo anterior al órgano interno de control para efectos de determinar si se actualiza lo dispuesto por la fracción IV del artículo 60 de la Ley, y
6.- Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. *Nueva ley publicada el 4 de mayo de 2015.* **Artículo 1.-** La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la República, es reglamentaria del artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de transparencia y acceso a la información.	**Artículo 2 (fracción II).-** Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por: … II. CompraNet: el sistema electrónico de información pública gubernamental sobre adquisiciones, arrendamientos y servicios, integrado entre otra información, por los programas anuales en la materia, de las dependencias y entidades; el registro único de proveedores; el padrón de testigos sociales; el registro de proveedores sancionados; las convocatorias a la licitación y sus modificaciones; las invitaciones a cuando menos tres personas; las actas de las juntas de aclaraciones, del acto de presentación y apertura de proposiciones y de fallo;	

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
Tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad de la Federación, las Entidades Federativas y los municipios. **Artículo 2 (fracciones VII y VIII).-** Son objetivos de esta Ley: … VII. Promover, fomentar y difundir la cultura de la transparencia en el ejercicio de la función pública, el acceso a la información, la participación ciudadana, así como la rendición de cuentas, a través del establecimiento de políticas públicas y mecanismos que garanticen la publicidad de información oportuna, verificable, comprensible, actualizada y completa, que se difunda en los formatos más adecuados y accesibles para todo el público	los testimonios de los testigos sociales; los datos de los contratos y los convenios modificatorios; las adjudicaciones directas; las resoluciones de la instancia de inconformidad que hayan causado estado, y las notificaciones y avisos correspondientes. Dicho sistema será de consulta gratuita y constituirá un medio por el cual se desarrollarán procedimientos de contratación. El sistema estará a cargo de la Secretaría de la Función Pública, a través de la unidad administrativa que se determine en su Reglamento, la que establecerá los controles necesarios para garantizar la inalterabilidad y conservación de la información que contenga;	

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
y atendiendo en todo momento las condiciones sociales, económicas y culturales de cada región; VIII. Propiciar la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas a fin de contribuir a la consolidación de la democracia, y **Artículo 70 (fracciones XXIII, XXVIII, XXXI, XXXII).-** En la Ley Federal y de las Entidades Federativas se contemplará que los sujetos obligados pongan a disposición del público y mantengan actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan: … XXIII. Los montos destinados a gastos relativos a comunicación social y publicidad oficial desglosada por tipo de medio, proveedores, número de contrato y concepto o campaña; … XXVIII. La información sobre los resultados sobre		

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la Versión Pública del Expediente respectivo y de los contratos celebrados, que deberá contener, por lo menos, lo siguiente: a) De licitaciones públicas o procedimientos de invitación restringida: … b) De las adjudicaciones directas: … XXXI. Informe de avances programáticos o presupuestales, balances generales y su estado financiero; XXXII. Padrón de proveedores y contratistas; **Artículo 77 (fracción VIII).-** Además de lo señalado en el artículo 70 de la presente Ley, los fideicomisos, fondos públicos, mandatos o cualquier contrato análogo, deberán poner a disposición del público y mantener actualizada y accesible, en lo que resulte aplicable a cada contrato, la siguiente información: … VIII. Los contratos de obras, adquisiciones y servicios que		

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
involucren recursos públicos del fideicomiso, así como los honorarios derivados de los servicios y operaciones que realice la institución de crédito o la fiduciaria.		
Artículo 4.- El derecho humano de acceso a la información comprende solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información. Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que se establezcan en la presente Ley, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, la Ley Federal, las leyes de las Entidades Federativas y la normatividad aplicable en sus respectivas competencias; sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos dispuestos por esta Ley. **Artículo 5.-** No podrá clasificarse como reservada aquella información que esté relacionada con violaciones	**Artículo 21 (primer párrafo).-** Las dependencias y entidades pondrán a disposición del público en general, a través de CompraNet y de su página en Internet, a más tardar el 31 de enero de cada año, su programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios correspondiente al ejercicio fiscal de que se trate, con excepción de aquella información que, de conformidad con las disposiciones aplicables, sea de naturaleza reservada o confidencial, en los términos establecidos en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. **Artículo 26 Ter (penúltimo párrafo).-** Se podrá exceptuar la participación de los testigos sociales en aquéllos casos en que los procedimientos de contrataciones contengan información clasificada como reservada que pongan en riesgo la seguridad nacional, pública o la defensa nacional en los términos de las disposiciones legales aplicables. **Artículo 27 (segundo párrafo).-** La Secretaría de la Función Pública operará y se encargará del sistema de certificación de los medios de identificación electrónica que utilicen las dependencias, entidades o los licitantes y será responsable de ejercer el control de estos medios, salvaguardando la confidencialidad de la información que se remita por esta vía. **Artículo 34 (primer párrafo).-** La entrega de proposiciones se hará en sobre cerrado que contendrá la oferta técnica y económica. En el caso de las proposiciones presentadas a través de CompraNet, los sobres serán generados mediante el uso de tecnologías que resguarden la	**Artículo 19 (antepenúltimo párrafo).-** Los invitados a que se refiere el párrafo anterior suscribirán un documento en el que se obliguen a guardar la debida reserva y confidencialidad, en caso de que durante su participación tengan acceso a información clasificada con tal carácter en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. **Artículo 65 (segundo párrafo, fracción VI).-** El contrato con el testigo social será abierto y deberá contener, además de lo previsto en el artículo 45 de la Ley, los siguientes aspectos: … VI. La obligación del testigo social para guardar la debida reserva y confidencialidad en caso de que durante su participación tenga acceso a información clasificada con tal carácter en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, sin perjuicio de lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 26 Ter de la Ley, y … **Artículo 67 (tercer párrafo).-** Las dependencias y entidades proporcionarán las facilidades para permitir el acceso a toda la documentación que soliciten los testigos sociales, quienes estarán obligados a guardar la debida reserva y confidencialidad en caso de que tengan acceso a información clasificada con ese carácter en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad, de conformidad con el derecho nacional o los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Ninguna persona será objeto de inquisición judicial o administrativa con el objeto del ejercicio del derecho de acceso a la información, ni se podrá restringir este derecho por vías o medios directos e indirectos. **Artículo 20.-** Ante la negativa del acceso a la información o su inexistencia, el sujeto obligado deberá demostrar que la información solicitada está prevista en alguna de las excepciones contenidas en esta Ley o, en su caso, demostrar que la información no se refiere a alguna de sus facultades, competencias o funciones. **Artículo 100.-** La clasificación es el proceso mediante el cual el sujeto obligado determina que la información en su poder actualiza alguno de los supuestos de reserva o confidencialidad, de conformidad con lo dispuesto en el presente Título. Los supuestos de reserva o confidencialidad previstos en	confidencialidad de la información de tal forma que sean inviolables, conforme a las disposiciones técnicas que al efecto establezca la Secretaría de la Función Pública. **Artículo 37 (tercer párrafo).-** En el fallo no se deberá incluir información reservada o confidencial, en los términos de las disposiciones aplicables. **Artículo 41 (fracción X, segundo párrafo).-** Las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán contratar adquisiciones, arrendamientos y servicios, sin sujetarse al procedimiento de licitación pública, a través de los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa, cuando: … X. Se trate de servicios de consultorías, asesorías, estudios o investigaciones… Sólo podrá autorizarse la contratación mediante adjudicación directa, cuando la información que se tenga que proporcionar a los licitantes para la elaboración de su proposición, se encuentre reservada en los términos establecidos en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; … **Artículo 56 Bis (segundo párrafo).-** Este registro deberá ser permanente y estar a disposición de cualquier interesado, salvo en aquellos casos que se trate de información de naturaleza reservada, en los términos establecidos en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.	**Artículo 72 (fracción VIII, segundo párrafo, numeral 1 y 2).-** Para los efectos de lo establecido en el artículo 41 de la Ley deberá considerarse, respecto de las fracciones de dicho precepto legal, lo que se cita a continuación: … VIII… La contratación de los servicios señalados se podrá realizar mediante el procedimiento de adjudicación directa sólo cuando la información que se tenga que proporcionar a los licitantes para la elaboración de su proposición esté clasificada como reservada o confidencial en los términos establecidos en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, para lo cual deberá observarse lo siguiente: 1. El titular del Área requirente identificará los documentos clasificados como reservados o confidenciales que estime necesarios para elaborar la proposición; 2. A la solicitud de adjudicación directa deberá adjuntarse copia de las carátulas o leyendas elaboradas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y las demás disposiciones aplicables, firmadas por el servidor público respectivo, mediante las cuales se acredite que la información correspondiente se encuentra clasificada como reservada o confidencial, y …

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
las leyes deberán ser acordes con las bases, principios y disposiciones establecidos en esta Ley y, en ningún caso, podrán contravenirla. Los titulares de las Áreas de los sujetos obligados serán los responsables de clasificar la información, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley, la Ley Federal y de las Entidades Federativas. **Artículo 107.-** Los Documentos clasificados parcial o totalmente deberán llevar una leyenda que indique tal carácter, la fecha de la clasificación, el fundamento legal y, en su caso, el periodo de reserva. **Artículo 113.-** Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: I. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un propósito genuino y un efecto demostrable; II. Pueda menoscabar la conducción de las negociaciones y relaciones internacionales; III. Se entregue al Estado mexicano expresamente con ese carácter o el de confidencial por otro u otros		

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
sujetos de derecho internacional, excepto cuando se trate de violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad de conformidad con el derecho internacional; IV. Pueda afectar la efectividad de las medidas adoptadas en relación con las políticas en materia monetaria, cambiaria o del sistema financiero del país; pueda poner en riesgo la estabilidad de las instituciones financieras susceptibles de ser consideradas de riesgo sistémico o del sistema financiero del país, pueda comprometer la seguridad en la provisión de moneda nacional al país, o pueda incrementar el costo de operaciones financieras que realicen los sujetos obligados del sector público federal; V. Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física; VI. Obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al cumplimiento de las leyes o afecte la recaudación de contribuciones; VII. Obstruya la prevención o persecución de los delitos;		

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
VIII. La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada; IX. Obstruya los procedimientos para fincar responsabilidad a los Servidores Públicos, en tanto no se haya dictado la resolución administrativa; X. Afecte los derechos del debido proceso; XI. Vulnere la conducción de los Expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado; XII. Se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como delitos y se tramiten ante el Ministerio Público, y XIII. Las que por disposición expresa de una ley tengan tal carácter, siempre que sean acordes con las bases, principios y disposiciones establecidos en esta Ley y no la contravengan; así como las previstas en tratados internacionales.		

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
Artículo 116.- Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable. La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello. Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos. Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales.		
Artículo 23.- Son sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a su información y proteger los datos personales que obren en su poder: cualquier autoridad,	**Artículo 56, (segundo y tercer párrafos, fracciones II, III; cuarto párrafo, inciso f).-…** La administración del sistema electrónico de información pública gubernamental sobre adquisiciones, arrendamientos y servicios, estará a cargo de la Secretaría de la Función Pública, a través	**Artículo 17.-** Los programas anuales de adquisiciones, arrendamientos y servicios deberán actualizarse, cuando proceda, durante los últimos cinco días hábiles de cada mes. **Artículo 49 (segundo párrafo).-** Las notificaciones a los licitantes respecto de los actos del

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos federal, de las Entidades Federativas y municipal.	de la unidad administrativa que determine su Reglamento, en el cual las dependencias, entidades y los demás sujetos de esta Ley, deberán incorporar la información que ésta les requiera. El sistema a que se refiere el párrafo anterior, tendrá los siguientes fines: … II. Propiciar la transparencia y seguimiento de las adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, y III. Generar la información necesaria que permita la adecuada planeación, programación y presupuestación de las contrataciones públicas, así como su evaluación integral. … f) Los datos de los contratos suscritos, a que se refiere el artículo 7 fracción XIII, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; **Artículo 56 Bis (segundo párrafo).-** El sistema integral de información contará, en los términos del Reglamento de esta Ley, con un registro único de proveedores, el cual los clasificará de acuerdo, entre otros aspectos, por su actividad, datos generales, nacionalidad e historial en materia de contrataciones y su cumplimiento. Este registro deberá ser permanente y estar a disposición de cualquier interesado, salvo en aquellos casos que se trate de información de naturaleza reservada, en los términos establecidos en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.	procedimiento de contratación se realizarán a través de CompraNet. **Artículo 105 (primer párrafo).-** El registro único de proveedores señalado en el artículo 56 Bis de la Ley, que forma parte de CompraNet, se integrará con la información que proporcionen los proveedores, así como con aquélla que incorporen los sujetos a que se refieren las fracciones I a VI del artículo 1 de la Ley, derivada de los procedimientos de contratación que lleven a cabo conforme a la Ley.
Artículo 208.- Las responsabilidades que resulten de los procedimientos administrativos correspondientes derivados de	**Artículo 63.-** Las responsabilidades y las sanciones a que se refiere la presente Ley serán independientes de las de orden civil, penal o de cualquier otra índole que puedan derivar de la comisión de los mismos hechos.	

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
la violación a lo dispuesto por el artículo 206 de esta Ley, son independientes de las del orden civil, penal o de cualquier otro tipo que se puedan derivar de los mismos hechos. Dichas responsabilidades se determinarán, en forma autónoma, a través de los procedimientos previstos en las leyes aplicables y las sanciones que, en su caso, se impongan por las autoridades competentes, también se ejecutarán de manera independiente. Para tales efectos, el Instituto o los Organismos garantes podrán denunciar ante las autoridades competentes cualquier acto u omisión violatoria de esta Ley y aportar las pruebas que consideren pertinentes, en los términos de las leyes aplicables.		
7.- ⇒Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. *Nueva Ley publicada en el D.O.F. el 18 de julio de 2016.* **Artículo 51.-** Los sistemas de evolución patrimonial y de declaración de intereses, así como de los Servidores públicos que intervengan en	**Artículo 2 (fracción II).-** Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por: … II. CompraNet: el sistema electrónico de información pública gubernamental sobre adquisiciones, arrendamientos y servicios, integrado entre otra información, por los programas anuales en la materia, de las dependencias y entidades; el registro único de proveedores; el padrón de testigos sociales; el	**Artículo 105.-** El registro único de proveedores señalado en el artículo 56 Bis de la Ley, que forma parte de CompraNet, se integrará con la información que proporcionen los proveedores, así como con aquélla que incorporen los sujetos a que se refieren las fracciones I a VI del artículo 1 de la Ley, derivada de los procedimientos de contratación que lleven a cabo conforme a la Ley. Los proveedores solicitarán su inscripción en el

⇒ Forma parte de las siete leyes que integran el Sistema Nacional Anticorrupción.

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
procedimientos de contrataciones públicas, operarán en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. El Sistema de Información Pública de Contrataciones contará con la información pública que remitan las autoridades competentes al Comité Coordinador a solicitud de éste, para el ejercicio de sus funciones y los objetivos de esta Ley. **Artículo 52.-** El sistema nacional de Servidores públicos y particulares sancionados tiene como finalidad que las sanciones impuestas a Servidores públicos y particulares por la comisión de faltas administrativas en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y hechos de corrupción en términos de la legislación penal, queden inscritas dentro del mismo y su consulta deberá estar al alcance de las autoridades cuya competencia lo requiera.	registro de proveedores sancionados; las convocatorias a la licitación y sus modificaciones; las invitaciones a cuando menos tres personas; las actas de las juntas de aclaraciones, del acto de presentación y apertura de proposiciones y de fallo; los testimonios de los testigos sociales; los datos de los contratos y los convenios modificatorios; las adjudicaciones directas; las resoluciones de la instancia de inconformidad que hayan causado estado, y las notificaciones y avisos correspondientes. Dicho sistema será de consulta gratuita y constituirá un medio por el cual se desarrollarán procedimientos de contratación.	registro único de proveedores, a las dependencias y entidades las cuales, previa validación de la información presentada por el proveedor a través de la documentación respectiva que proporcione, llevarán a cabo la inscripción correspondiente. Las dependencias y entidades podrán inscribir en dicho registro a los proveedores cuando adviertan que éstos no se encuentran inscritos; asimismo, la Secretaría de la Función Pública podrá incluir en el citado registro la información con la que cuente y que sea materia del mismo. La información contenida en el registro único de proveedores tiene como propósito, entre otros, facilitar los procedimientos de contratación de las dependencias y entidades, sin perjuicio de la presentación de los documentos que se requieran en cualquier procedimiento de contratación, en términos de la Ley, de este Reglamento y demás disposiciones aplicables. El registro único de proveedores clasificará la información de los proveedores de acuerdo con su actividad; datos generales; nacionalidad; experiencia; especialidad; capacidad técnica, económica y financiera, e historial respecto de contratos celebrados con los sujetos a que se refiere el párrafo primero de este artículo y de su cumplimiento en tiempo y en monto. El citado registro será diseñado y administrado por la Secretaría de la Función Pública y contendrá cuando menos: I. Nombre o razón social, nacionalidad y domicilio del proveedor; II. Información relativa al número de escritura constitutiva, sus reformas y datos de su inscripción en el Registro Público correspondiente; III. Relación de socios, conforme a lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción VII del artículo 50 de la Ley y

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
		el artículo 73 de la Ley General de Sociedades Mercantiles; IV. Nombre de los representantes legales del proveedor, así como la información relativa a los documentos públicos que los acrediten como tales y sus datos de inscripción en el Registro Público de Comercio; V. Especialidad del proveedor y la información relativa a los contratos de adquisiciones, arrendamientos o servicios que lo acrediten; VI. Experiencia del proveedor y la información de los contratos de adquisiciones, arrendamientos o servicios que la acreditan; VII. Información referente a la capacidad técnica, económica y financiera del proveedor, y VIII. Historial del proveedor en materia de contrataciones y su cumplimiento, el cual contendrá la información de los contratos de adquisiciones, arrendamientos y servicios, formalizados con las dependencias y entidades, así como la relativa a rescisiones, aplicación de penas convencionales y deductivas, ejecución de garantías y sanciones impuestas por la Secretaría de la Función Pública. Asimismo, se incluirá el grado de cumplimiento de cada proveedor conforme a su historial. La Secretaría de la Función Pública, como responsable de la administración del registro único de proveedores, tendrá las siguientes funciones: a) Proporcionar a las dependencias y entidades las claves y contraseñas de acceso para capturar y validar la información en el registro; b) Administrar la información contenida en el registro; c) Atender las solicitudes y consultas relacionadas con el registro, y d) Definir estándares y procedimientos de calidad y seguridad de la información contenida en el registro,

A) Marco normativo complementario y supletorio.

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
	Artículo 21.- Las dependencias y entidades pondrán a disposición del público en general, a través de CompraNet y de su página en Internet, a más tardar el 31 de enero de cada año, su programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios correspondiente al ejercicio fiscal de que se trate, con excepción de aquella información que, de conformidad con las disposiciones aplicables, sea de naturaleza reservada o confidencial, en los términos establecidos en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Las adquisiciones, arrendamientos y servicios contenidas en el citado programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la dependencia o entidad de que se trate, debiendo informar de ello a la Secretaría de la Función Pública y actualizar en forma mensual el programa en CompraNet .	que garanticen su inalterabilidad y conservación. Los antecedentes que obren en el registro único de proveedores serán los que las dependencias y entidades deben considerar para determinar la reducción de montos de la garantía de cumplimiento a que hace referencia el segundo párrafo del artículo 48 de la Ley, atendiendo a los lineamientos que al efecto emita la Secretaría de la Función Pública. **Artículo 17.-** Los programas anuales de adquisiciones, arrendamientos y servicios deberán actualizarse, cuando proceda, durante los últimos cinco días hábiles de cada mes.
Artículo 2.- Son objetivos de esta Ley: I. Establecer mecanismos de coordinación entre los diversos órganos de combate a la corrupción en la Federación, las entidades federativas, los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México; II. Establecer las bases mínimas para la prevención de	**Artículo 27 (segundo, tercero y cuarto párrafos).-** La Secretaría de la Función Pública operará y se encargará del sistema de certificación de los medios de identificación electrónica que utilicen las dependencias, entidades o los licitantes y será responsable de ejercer el control de estos medios, salvaguardando la confidencialidad de la información que se remita por esta vía. La Secretaría de la Función Pública podrá aceptar la certificación o identificación electrónica que otorguen las dependencias y entidades, las entidades	

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
hechos de corrupción y faltas administrativas; III. Establecer las bases para la emisión de políticas públicas integrales en el combate a la corrupción, así como en la fiscalización y control de los recursos públicos; IV. Establecer las directrices básicas que definan la coordinación de las autoridades competentes para la generación de políticas públicas en materia de prevención, detección, control, sanción, disuasión y combate a la corrupción; V. Regular la organización y funcionamiento del Sistema Nacional, su Comité Coordinador y su Secretaría Ejecutiva, así como establecer las bases de coordinación entre sus integrantes; VI. Establecer las bases, principios y procedimientos para la organización y funcionamiento del Comité de Participación Ciudadana; VII. Establecer las bases y políticas para la promoción, fomento y difusión de la cultura de integridad en el servicio público, así como de la rendición de cuentas, de la transparencia, de la fiscalización y del control de	federativas, municipios y los entes públicos de unas y otros, así como terceros facultados por autoridad competente en la materia, cuando los sistemas de certificación empleados se ajusten a las disposiciones que emita la Secretaría de la Función Pública. El sobre que contenga la proposición de los licitantes deberá entregarse en la forma y medios que prevea la convocatoria a la licitación.	**Artículo 2 (fracción XI).-** Adicionalmente a las definiciones contenidas en el artículo 2 de la Ley, para los efectos de este Reglamento se entenderá por: … XI. Sobre cerrado: cualquier medio que contenga la proposición del licitante, cuyo contenido sólo puede ser conocido en el acto de presentación y apertura de proposiciones en términos de la Ley.

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
los recursos públicos; VIII. Establecer las acciones permanentes que aseguren la integridad y el comportamiento ético de los Servidores públicos, así como crear las bases mínimas para que todo órgano del Estado mexicano establezca políticas eficaces de ética pública y responsabilidad en el servicio público; IX. Establecer las bases del Sistema Nacional de Fiscalización, y X. Establecer las bases mínimas para crear e implementar sistemas electrónicos para el suministro, intercambio, sistematización y actualización de la información que generen las instituciones competentes de los órdenes de gobierno.		
Artículo 51.- Los sistemas de evolución patrimonial y de declaración de intereses, así como de los Servidores públicos que intervengan en procedimientos de contrataciones públicas, operarán en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. El Sistema de Información Pública de Contrataciones contará con la	**Artículo 56 (segundo párrafo).-** La administración del sistema electrónico de información pública gubernamental sobre adquisiciones, arrendamientos y servicios, estará a cargo de la Secretaría de la Función Pública, a través de la unidad administrativa que determine su Reglamento, en el cual las dependencias, entidades y los demás sujetos de esta Ley, deberán incorporar la información que ésta les requiera. **Artículo 56 Bis.** El sistema integral de información contará, en los términos del Reglamento de esta Ley, con un registro único de proveedores, el cual los clasificará de acuerdo, entre otros aspectos, por su	**Artículo 105.-** El registro único de proveedores señalado en el artículo 56 Bis de la Ley, que forma parte de CompraNet, se integrará con la información que proporcionen los proveedores, así como con

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
información pública que remitan las autoridades competentes al Comité Coordinador a solicitud de éste, para el ejercicio de sus funciones y los objetivos de esta Ley.	actividad, datos generales, nacionalidad e historial en materia de contrataciones y su cumplimiento. Este registro deberá ser permanente y estar a disposición de cualquier interesado, salvo en aquellos casos que se trate de información de naturaleza reservada, en los términos establecidos en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Dicho registro tendrá únicamente efectos declarativos respecto de la inscripción de proveedores, sin que dé lugar a efectos constitutivos de derechos u obligaciones.	aquélla que incorporen los sujetos a que se refieren las fracciones I a VI del artículo 1 de la Ley, derivada de los procedimientos de contratación que lleven a cabo conforme a la Ley. Los proveedores solicitarán su inscripción en el registro único de proveedores, a las dependencias y entidades las cuales, previa validación de la información presentada por el proveedor a través de la documentación respectiva que proporcione, llevarán a cabo la inscripción correspondiente. Las dependencias y entidades podrán inscribir en dicho registro a los proveedores cuando adviertan que éstos no se encuentran inscritos; asimismo, la Secretaría de la Función Pública podrá incluir en el citado registro la información con la que cuente y que sea materia del mismo. La información contenida en el registro único de proveedores tiene como propósito, entre otros, facilitar los procedimientos de contratación de las dependencias y entidades, sin perjuicio de la presentación de los documentos que se requieran en cualquier procedimiento de contratación, en términos de la Ley, de este Reglamento y demás disposiciones aplicables. El registro único de proveedores clasificará la información de los proveedores de acuerdo con su actividad; datos generales; nacionalidad; experiencia; especialidad; capacidad técnica, económica y financiera, e historial respecto de contratos celebrados con los sujetos a que se refiere el párrafo primero de este artículo y de su cumplimiento en tiempo y en monto. El citado registro será diseñado y administrado por la Secretaría de la Función Pública y contendrá cuando menos: I. Nombre o razón social, nacionalidad y domicilio del proveedor;

A) Marco normativo complementario y supletorio.

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
		II. Información relativa al número de escritura constitutiva, sus reformas y datos de su inscripción en el Registro Público correspondiente; III. Relación de socios, conforme a lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción VII del artículo 50 de la Ley y el artículo 73 de la Ley General de Sociedades Mercantiles; IV. Nombre de los representantes legales del proveedor, así como la información relativa a los documentos públicos que los acrediten como tales y sus datos de inscripción en el Registro Público de Comercio; V. Especialidad del proveedor y la información relativa a los contratos de adquisiciones, arrendamientos o servicios que lo acrediten; VI. Experiencia del proveedor y la información de los contratos de adquisiciones, arrendamientos o servicios que la acreditan; VII. Información referente a la capacidad técnica, económica y financiera del proveedor, y VIII. Historial del proveedor en materia de contrataciones y su cumplimiento, el cual contendrá la información de los contratos de adquisiciones, arrendamientos y servicios, formalizados con las dependencias y entidades, así como la relativa a rescisiones, aplicación de penas convencionales y deductivas, ejecución de garantías y sanciones impuestas por la Secretaría de la Función Pública. Asimismo, se incluirá el grado de cumplimiento de cada proveedor conforme a su historial. La Secretaría de la Función Pública, como responsable de la administración del registro único de proveedores, tendrá las siguientes funciones: a) Proporcionar a las dependencias y entidades las claves y contraseñas de acceso para capturar y validar la información en el registro; b) Administrar la información contenida en el

A) Marco normativo complementario y supletorio.

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
		registro; c) Atender las solicitudes y consultas relacionadas con el registro, y d) Definir estándares y procedimientos de calidad y seguridad de la información contenida en el registro, que garanticen su inalterabilidad y conservación. Los antecedentes que obren en el registro único de proveedores serán los que las dependencias y entidades deben considerar para determinar la reducción de montos de la garantía de cumplimiento a que hace referencia el segundo párrafo del artículo 48 de la Ley, atendiendo a los lineamientos que al efecto emita la Secretaría de la Función Pública.
Artículo 1.- La presente Ley es de orden público, de observancia general en todo el territorio nacional y tiene por objeto establecer las bases de coordinación entre la Federación, las entidades federativas, los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México, para el funcionamiento del Sistema Nacional previsto en el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que las autoridades competentes prevengan, investiguen y sancionen las faltas administrativas y los hechos de corrupción. **Artículo 3 (fracción VI).-** Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: …	**Artículo 59.-** Los licitantes o proveedores que infrinjan las disposiciones de esta Ley, serán sancionados por la Secretaría de la Función Pública con multa equivalente a la cantidad de cincuenta hasta mil veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal elevado al mes, en la fecha de la infracción. Cuando los licitantes, injustificadamente y por causas imputables a los mismos, no formalicen contratos cuyo monto no exceda de cincuenta veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal elevado	**Artículo 109.-** Se sancionará en términos del primer párrafo del artículo 59 de la Ley, a los licitantes que injustificadamente y por causas imputables a los mismos se abstengan de firmar contratos según lo previsto por el segundo párrafo del artículo 46 de dicho ordenamiento, cuando el monto de éstos exceda de cincuenta veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal elevado al mes. … **Artículo 110.-** Cuando una instancia de inconformidad sea sobreseída o resuelta como infundada y en la misma se determine que se promovió para retrasar o entorpecer la contratación, se sancionará al inconforme con inhabilitación en términos de la fracción IV del artículo 60 de la Ley y multa de acuerdo con el primer párrafo del artículo 59 de la Ley. **Artículo 82.-** Las dependencias y entidades, en contrataciones iguales o superiores al equivalente a trescientas veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal, deberán formalizar las adquisiciones, arrendamientos y servicios a través de contratos, los cuales deberán contener, en lo aplicable, los elementos a que se refiere el artículo

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
VI. Entes públicos: los Poderes Legislativo y Judicial, los organismos constitucionales autónomos, las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y sus homólogos de las entidades federativas; los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México y sus dependencias y entidades; la Procuraduría General de la República y las fiscalías o procuradurías locales; los órganos jurisdiccionales que no formen parte de los poderes judiciales; las empresas productivas del Estado, así como cualquier otro ente sobre el que tenga control cualquiera de los poderes y órganos públicos antes citados de los tres órdenes de gobierno; **Artículo 4.-** Son sujetos de la presente Ley, los Entes públicos que integran el Sistema Nacional. **Artículo 5.-** Son principios rectores que rigen el servicio público los siguientes: legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad y competencia por	al mes, serán sancionados con multa equivalente a la cantidad de diez hasta cuarenta y cinco veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal elevado al mes, en la fecha de la infracción. **Artículo 60 (fracciones I, II y III).-** La Secretaría de la Función Pública, además de la sanción a que se refiere el primer párrafo del artículo anterior, inhabilitará temporalmente para participar de manera directa o por interpósita persona en procedimientos de contratación o celebrar contratos regulados por esta Ley, a las personas que se encuentren en alguno de los supuestos siguientes: I. Los licitantes que injustificadamente y por causas imputables a los mismos no formalicen dos o más contratos que les haya adjudicado cualquier dependencia o entidad en el plazo de dos años calendario, contados a partir del día en que haya fenecido el término para la formalización del primer contrato no formalizado; II. Los proveedores a los que se les haya rescindido administrativamente un contrato en dos o más dependencias o entidades en un plazo de tres años; III. Los proveedores que no cumplan con sus obligaciones contractuales por causas imputables a ellos y que, como consecuencia, causen daños o perjuicios graves a la dependencia o entidad de que se trate; así como, aquellos que entreguen bienes o servicios con especificaciones distintas de las convenidas; …	45 de la Ley y lo previsto en el artículo 81 de este Reglamento, debiendo considerar el contenido de la convocatoria a la licitación pública, de la invitación a cuando menos tres personas o de la solicitud de cotización y, en su caso, de sus modificaciones. Las dependencias y entidades deberán llevar el registro, control y comprobación de las contrataciones adjudicadas en forma directa en los términos del artículo 42 de la Ley, que no requieran la formalización de contratos, de conformidad con las disposiciones presupuestarias aplicables. **Artículo 99.-** Concluido el procedimiento de rescisión de un contrato se formulará y notificará el finiquito correspondiente, dentro de los veinte días naturales siguientes a la fecha en que se notifique la rescisión, a efecto de hacer constar los pagos que deban efectuarse y demás circunstancias del caso. Al efecto, deberá considerarse lo dispuesto en el inciso b) de la fracción I y en la fracción III del

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
mérito. Los Entes públicos están obligados a crear y mantener condiciones estructurales y normativas que permitan el adecuado funcionamiento del Estado en su conjunto, y la actuación ética y responsable de cada servidor público. **Artículo 37.-** El Sistema Nacional de Fiscalización tiene por objeto establecer acciones y mecanismos de coordinación entre los integrantes del mismo, en el ámbito de sus respectivas competencias, promoverán el intercambio de información, ideas y experiencias encaminadas a avanzar en el desarrollo de la fiscalización de los recursos públicos. Son integrantes del Sistema Nacional de Fiscalización: I. La Auditoría Superior de la Federación; II. La Secretaría de la Función Pública; III. Las entidades de fiscalización superiores locales, y IV. Las secretarías o instancias homólogas encargadas del control interno en las entidades federativas. **Artículo 49.-** La Plataforma Digital Nacional del Sistema		artículo 103 del presente Reglamento, ello sin perjuicio de lo dispuesto en la fracción III del artículo 60 de la Ley. **Artículo 88 (fracción III).-** Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley, respecto de las fracciones y párrafos de dicho precepto legal que a continuación se señalan, deberá considerarse lo siguiente: … III. Las proposiciones de las personas que se ubiquen en el supuesto a que se refiere la fracción VII, serán desechadas de la partida en la que se presentaron, debiendo comunicar lo anterior al órgano interno de control para efectos de determinar si se actualiza lo dispuesto por la fracción IV del artículo 60 de la Ley, y **Artículo 111.-** La publicación de la circular a que se refiere el párrafo segundo del artículo 60 de la Ley deberá realizarse en CompraNet y simultáneamente enviarse al Diario Oficial de la Federación para los mismos efectos. La inhabilitación surtirá efectos a partir de la publicación de la circular correspondiente en CompraNet. **Artículo 113.-** Para efectos de lo dispuesto por el tercer párrafo del artículo 60 de la Ley, el licitante o proveedor acreditará que ha pagado la multa que se le impuso, presentando a la Secretaría de la Función Pública el documento comprobatorio del pago correspondiente, a fin de que se publique en CompraNet que la inhabilitación ha dejado de surtir efectos. En defecto de lo señalado en el párrafo anterior, los licitantes deberán agregar a sus proposiciones copia simple del documento comprobatorio de pago referido en el citado párrafo, el cual será tomado en consideración por la dependencia o entidad convocante durante la evaluación de las

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
Nacional estará conformada por la información que a ella incorporen las autoridades integrantes del Sistema Nacional y contará, al menos, con los siguientes sistemas electrónicos: I. Sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal; II. Sistema de los Servidores públicos que intervengan en procedimientos de contrataciones públicas; III. Sistema nacional de Servidores públicos y particulares sancionados; IV. Sistema de información y comunicación del Sistema Nacional y del Sistema Nacional de Fiscalización; V. Sistema de denuncias públicas de faltas administrativas y hechos de corrupción, y VI. Sistema de Información Pública de Contrataciones. **Transitorio Tercero (séptimo párrafo).-** Con la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas quedarán abrogadas la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los		proposiciones. **Artículo 114.-** La Secretaría de la Función Pública tomará conocimiento de los actos o hechos presuntamente constitutivos de infracciones que cometan los licitantes o proveedores a través, entre otros, de los medios siguientes: I. CompraNet, para lo cual las dependencias y entidades deberán registrar la falta de formalización de los contratos y las rescisiones de los mismos en un plazo máximo de diez días naturales contados a partir de la fecha en que se debió haber realizado la formalización correspondiente o de aquélla en que haya concluido la substanciación del procedimiento de rescisión, de conformidad con el artículo 54 de la Ley; II. Denuncia de las dependencias y entidades contratantes, en términos del párrafo cuarto del artículo 60 de la Ley, en los casos no comprendidos en la fracción anterior. En el supuesto de la fracción III del precepto invocado, dentro de la documentación comprobatoria que remitan, deberá encontrarse, en su caso, la que acredite el monto de los daños o perjuicios causados con motivo de la presunta infracción, haciendo el desglose y especificación de los conceptos de afectación de que se trate; … **Artículo 115.-** Una vez que la Secretaría de la Función Pública tenga conocimiento de actos o hechos posiblemente constitutivos de infracción, según lo previsto en el artículo anterior, realizará las investigaciones y actuaciones que correspondan a fin de sustentar la imputación, para lo cual podrá requerir a las dependencias y entidades, a las autoridades que corresponda, a los particulares o, en su caso, solicitar a los licitantes o proveedores que aporten mayores elementos para su análisis.

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
Servidores Públicos, la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, y se derogarán los Títulos Primero, Tercero y Cuarto de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, así como todas aquellas disposiciones que se opongan a lo previsto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.		… **Artículo 48 (fracción VI).-** Durante el desarrollo del acto de presentación y apertura de proposiciones se observará lo siguiente: … VI. Se indicará que previo a la firma del contrato, el licitante ganador deberá presentar original o copia certificada para su cotejo de los documentos con los que se acredite su existencia legal y las facultades de su representante para suscribir el contrato correspondiente. En el caso de proveedores extranjeros, la información requerida en esta fracción deberá contar con la legalización o apostillado correspondiente de la autoridad competente en el país de que se trate, misma que tendrá que presentarse redactada en español, o acompañada de la traducción correspondiente. En el caso de que el licitante se encuentre inscrito en el registro único de proveedores no será necesario presentar la información a que se refiere esta fracción, bastando únicamente exhibir la constancia o citar el número de su inscripción y manifestar bajo protesta de decir verdad que en el citado registro la información se encuentra completa y actualizada;
Artículo 53.- Las sanciones impuestas por faltas administrativas graves serán del conocimiento público cuando éstas contengan impedimentos o inhabilitaciones para ser contratados como Servidores públicos o como prestadores de servicios o contratistas del sector público, en términos de la Ley General de	**Artículo 61.-** La Secretaría de la Función Pública impondrá las sanciones considerando: I. Los daños o perjuicios que se hubieren producido con motivo de la infracción; II. El carácter intencional o no de la acción u omisión constitutiva de la infracción; III. La gravedad de la infracción, y IV. Las condiciones del infractor. En la tramitación del procedimiento para imponer las sanciones a que se refiere este Título, la Secretaría de la Función Pública deberá observar lo dispuesto por el Título Cuarto y demás aplicables de la Ley	

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
Responsabilidades Administrativas. Los registros de las sanciones relativas a responsabilidades administrativas no graves, quedarán registradas para efectos de eventual reincidencia, pero no serán públicas. **Artículo 56.-** El sistema de denuncias públicas de faltas administrativas y hechos de corrupción será establecido de acuerdo a lo que determine el Comité Coordinador y será implementado por las autoridades competentes.	Federal de Procedimiento Administrativo, aplicando supletoriamente tanto el Código Civil Federal, como el Código Federal de Procedimientos Civiles. **Artículo 62.-** La Secretaría de la Función Pública aplicará las sanciones que procedan a quienes infrinjan las disposiciones de este ordenamiento, conforme a lo dispuesto por la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. La Secretaría de la Función Pública, en uso de las atribuciones que le confiere la Ley citada en el párrafo anterior, podrá abstenerse de iniciar los procedimientos previstos en ella, cuando de las investigaciones o revisiones practicadas se advierta que el acto u omisión no es grave, o no implica la probable comisión de algún delito o perjuicio patrimonial a la dependencia o entidad, o que el acto u omisión fue corregido o subsanado de manera espontánea por el servidor público o implique error manifiesto y en cualquiera de estos supuestos, los efectos que, en su caso, hubieren producido, desaparecieron o se hayan resarcido. **Artículo 63.-** Las responsabilidades y las sanciones a que se refiere la presente Ley serán independientes de las de orden civil, penal o de cualquier otra índole que puedan derivar de la comisión de los mismos hechos. **Artículo 64.-** No se impondrán sanciones cuando se haya incurrido en la infracción por causa de fuerza mayor o de caso fortuito, o cuando se observe en forma espontánea el precepto que se hubiese dejado de cumplir. No se considerará que el cumplimiento es espontáneo cuando la omisión sea descubierta por las autoridades o medie requerimiento, visita, excitativa o cualquier otra gestión efectuada por las mismas, así como en el supuesto de la fracción IV del artículo 60 de esta Ley.	

A) Marco normativo complementario y supletorio.

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
	Artículo 65.- La Secretaría de la Función Pública conocerá de las inconformidades que se promuevan contra los actos de los procedimientos de licitación pública o invitación a cuando menos tres personas que se indican a continuación: I. La convocatoria a la licitación, y las juntas de aclaraciones. En este supuesto, la inconformidad sólo podrá presentarse por el interesado que haya manifestado su interés por participar en el procedimiento según lo establecido en el artículo 33 Bis de esta Ley, dentro de los seis días hábiles siguientes a la celebración de la última junta de aclaraciones; II. La invitación a cuando menos tres personas. Sólo estará legitimado para inconformarse quien haya recibido invitación, dentro de los seis días hábiles siguientes; III. El acto de presentación y apertura de proposiciones, y el fallo. En este caso, la inconformidad sólo podrá presentarse por quien hubiere presentado proposición, dentro de los seis días hábiles siguientes a la celebración de la junta pública en la que se dé a conocer el fallo, o de que se le haya notificado al licitante en los casos en que no se celebre junta pública; IV. La cancelación de la licitación. En este supuesto, la inconformidad sólo podrá presentarse por el licitante que hubiere presentado proposición, dentro de los seis días hábiles siguientes a su notificación, y	**Artículo 116.-** Al escrito inicial de las inconformidades a que se refiere la fracción I del artículo 65 de la Ley, deberá acompañarse la manifestación a que se refiere el tercer párrafo del artículo 33 Bis de la Ley, con el acuse de recibo o sello de la dependencia o entidad correspondiente, o bien, la constancia que se obtenga de su envío en forma electrónica, a través de CompraNet. La omisión de exhibir el documento referido en el párrafo anterior será motivo de prevención en términos de lo dispuesto por el penúltimo párrafo del artículo 66 de la Ley. **Artículo 77.-** En todo lo no previsto para los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas, le serán aplicables, en lo procedente, las disposiciones que prevé este Reglamento para la licitación pública. Para efectos de lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 40 de la Ley, la selección de participantes podrá hacerse de entre los proveedores que se encuentren inscritos en el registro único de proveedores y los supuestos señalados en dicho artículo podrán acreditarse con la información contenida en el citado registro referente a la experiencia, especialidad, capacidad técnica e historial de cumplimiento respecto de contratos que los proveedores de que se trate tengan celebrados con las dependencias o entidades, así como si su domicilio se encuentra cerca de la zona donde se pretendan utilizar los bienes o prestar los servicios.

A) Marco normativo complementario y supletorio.

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
	V. Los actos y omisiones por parte de la convocante que impidan la formalización del contrato en los términos establecidos en la convocatoria a la licitación o en esta Ley. En esta hipótesis, la inconformidad sólo podrá presentarse por quien haya resultado adjudicado, dentro de los seis días hábiles posteriores a aquél en que hubiere vencido el plazo establecido en el fallo para la formalización del contrato o, en su defecto, el plazo legal . En todos los casos en que se trate de licitantes que hayan presentado proposición conjunta, la inconformidad sólo será procedente si se promueve conjuntamente por todos los integrantes de la misma.	…
8.- Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. *30 de mayo de 2011* **Artículo 2 (fracciones IX y XXI).-** Para los efectos de esta Ley se entenderá por: … IX. Discriminación por motivos de discapacidad. Se entenderá cualquier distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar, menoscabar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de otro tipo. Incluye	**Artículo 14 (segundo párrafo).-** En el caso de licitación pública para la adquisición de bienes, arrendamientos o servicios que utilicen la evaluación de puntos y porcentajes, se otorgarán puntos en los términos de esta Ley, a personas con discapacidad o a la empresa que cuente con trabajadores con discapacidad en una proporción del cinco por ciento cuando menos de la totalidad de su planta de empleados, cuya antigüedad no sea inferior a seis meses, misma que se comprobará con el aviso de alta al régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social…	**Artículo 39, (fracción VI, inciso g).-** La convocatoria a la licitación pública y, cuando proceda, el Proyecto de convocatoria deberán contener los requisitos que señala el artículo 29 de la Ley y se elaborarán conforme al orden, apartados e información que a continuación se indican: … VI. Documentos y datos que deben presentar los licitantes, entre los que se encuentran los siguientes: … g) En el supuesto previsto en el segundo párrafo del artículo 14 de la Ley, la manifestación del licitante en la que se indique bajo protesta de decir verdad, que es un persona física con discapacidad, o bien tratándose de empresas que cuenten con trabajadores con discapacidad en la proporción que establece dicho precepto legal, el aviso de alta de tales trabajadores al régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social y una constancia que acredite que dichos trabajadores son personas con discapacidad en términos de lo previsto por la fracción IX del artículo 2 de la Ley General de las Personas con Discapacidad;

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
todas las formas de discriminación, entre ellas, la denegación de ajustes razonables; … XXI. Persona con Discapacidad. Toda persona que por razón congénita o adquirida presenta una o más deficiencias de carácter físico, mental, intelectual o sensorial, ya sea permanente o temporal.		

- **LEYES FEDERALES**

9.- Ley de Ciencia y Tecnología. *5 de junio de 2002.* **Artículo 47.-** Serán considerados como centros públicos de investigación las entidades paraestatales de la APF que tengan como objeto realizar actividades de investigación científica y tecnológica bajo ciertos requisitos. **Artículo 50.-** Bases del establecimiento y operación de los Fondos de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico.	**Artículo 1 (cuarto párrafo).-** Las adquisiciones, arrendamientos y servicios que se realicen por los Centros Públicos de Investigación con los recursos autogenerados de sus Fondos de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico previstos en la Ley de Ciencia y Tecnología, se regirán conforme a las reglas de operación de dichos fondos…	
10.- Ley de Comercio Exterior. *27 de julio de 1993.* **Artículo 28.-** Las personas	**Artículo 53 (último párrafo).-** Los proveedores cubrirán las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, pudiere estar sujeta la importación de bienes objeto de un contrato, y en	

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
físicas o morales que importen mercancías en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional estarán obligadas al pago de una cuota compensatoria conforme a lo dispuesto en esta Ley.	estos casos no procederán incrementos a los precios pactados, ni cualquier otra modificación al contrato.	**Artículo 81 (fracción III).-** Además de lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley, el contrato deberá: … III. Establecer que el proveedor será el responsable de entregar los bienes y, en caso de ser de procedencia extranjera, se deberá indicar cuál de las partes asumirá la responsabilidad de efectuar los trámites de importación y pagar los impuestos y derechos que se generen con motivo de la misma;
11.- Ley de Coordinación Fiscal. *27 de diciembre de 1978.* Capítulo V. De los Fondos de Aportaciones Federales. **Artículo 25.-** Se establecen las aportaciones federales, como recursos que la Federación transfiere a las haciendas públicas de los Estados, Distrito Federal, y en su caso, de los Municipios, condicionando su gasto a la consecución y cumplimiento de los objetivos que para cada tipo de aportación establece esta Ley.	**Artículo 1 (fracción VI).-…** VI. Las entidades federativas, los municipios y los entes públicos de unas y otros, con cargo total o parcial a recursos federales, conforme a los convenios que celebren con el Ejecutivo Federal. No quedan comprendidos para la aplicación de la presente Ley los fondos previstos en el Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal.	
12.- Ley de Firma Electrónica Avanzada. *11 de enero de 2012.* **Artículo 1.-** El objeto de la ley. I. Es el uso de la firma electrónica avanzada en los actos previstos en esta ley. II. Los servicios relacionados con la FIEL. III. La homologación de la FIEL.	**Artículo 27 (tercer y último párrafos).-** La Secretaría de la Función Pública podrá aceptar la certificación o identificación electrónica que otorguen las dependencias y entidades, las entidades federativas, municipios y los entes públicos de unas y otros, así como terceros facultados por autoridad competente en la materia, cuando los sistemas de certificación empleados se ajusten a las disposiciones que emita la Secretaría de la Función Pública. Las proposiciones presentadas deberán ser firmadas	**Artículo 50 (primer párrafo).-** La proposición deberá ser firmada autógrafamente por la persona facultada para ello en la última hoja de cada uno de los documentos que forman parte de la misma, por lo que no podrá desecharse cuando las demás hojas que la integran o sus anexos carezcan de firma o rúbrica. En las proposiciones enviadas a través de medios remotos de comunicación electrónica, en sustitución de la firma autógrafa, se emplearán los medios de identificación electrónica que establezca la Secretaría

A) Marco normativo complementario y supletorio.

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
Artículo 2 (fracciones IX y XII).- Se entenderá por: … IX. Dependencia: las secretarias de Estado, entre otras. … XII. Entidades: los órganos públicos descentralizados, entre otros.	autógrafamente por los licitantes o sus apoderados; en el caso de que éstas sean enviadas a través de medios remotos de comunicación electrónica, se emplearán medios de identificación electrónica, los cuales producirán los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes y, en consecuencia, tendrán el mismo valor probatorio.	de la Función Pública.
Artículo 23.- Las autoridades certificadoras son la SFP, SE y el SAT. **Artículo 24.-** Requisitos para tener el carácter de autoridad certificadora. **Artículo 25.-** Las atribuciones de las autoridades certificadoras. **Artículo 26.-** Pierden el carácter de autoridades certificadoras cuando incumplan con las obligaciones de la ley o en los supuestos del reglamento de la misma ley. **Artículo 27.-** La SFP, la SE y la SAT podrán acordar y definir estándares, entre otros, que se deberán sujetar las autoridades certificadoras.	**Artículo 45 (último párrafo).**- En la formalización de los contratos, podrán utilizarse los medios de comunicación electrónica que al efecto autorice la Secretaría de la Función Pública. **Artículo 66 (sexto párrafo).-** En las inconformidades deberán presentarse a través de CompraNet y utilizarse medios de identificación electrónica en sustitución de la firma autógrafa.	**Artículo 84 (segundo párrafo).-** La utilización de los medios remotos de comunicación electrónica que autorice la Secretaría de la Función Pública en la formalización de los contratos se llevará a cabo conforme a las disposiciones administrativas que al efecto expida esa Dependencia.
13.- ⇒Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. *Nueva ley publicada en el D.O.F. el 18 de julio de 2016.*		

⇒ Forma parte de las siete leyes que integran el Sistema Nacional Anticorrupción.

A) Marco normativo complementario y supletorio.

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
Artículo 14 (fracción I, inciso b).- La fiscalización de la Cuenta Pública tiene por objeto: I. Evaluar los resultados de la gestión financiera: … b) Si se cumplió con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de sistemas de registro y contabilidad gubernamental; contratación de servicios, obra pública, adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles; almacenes y demás activos; recursos materiales, y demás normatividad aplicable al ejercicio del gasto público; **Artículo 17 (fracción VII).-** Para la fiscalización de la Cuenta Pública, la Auditoría Superior de la Federación tendrá las atribuciones siguientes: … VII. Verificar que las operaciones que realicen las entidades fiscalizadas sean acordes con la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos y se efectúen con apego a las disposiciones respectivas del Código Fiscal de la Federación y leyes fiscales sustantivas; las	**Artículo 1 (primer, segundo y tercer párrafos).-** La presente Ley es de orden público y tiene por objeto reglamentar la aplicación del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de las adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y prestación de servicios de cualquier naturaleza, que realicen: I. Las unidades administrativas de la Presidencia de la República; II. Las Secretarías de Estado y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal; III. La Procuraduría General de la República; IV. Los organismos descentralizados; V. Las empresas de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos en los que el fideicomitente sea el gobierno federal o una entidad paraestatal, y VI. Las entidades federativas, los municipios y los entes públicos de unas y otros, con cargo total o parcial a recursos federales, conforme a los convenios que celebren con el Ejecutivo Federal. No quedan comprendidos para la aplicación de la presente Ley los fondos previstos en el Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal.	

A) Marco normativo complementario y supletorio.

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
leyes Federal de Deuda Pública, General de Partidos Políticos; Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, orgánicas del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, de la Administración Pública Federal, del Poder Judicial de la Federación; de Asociaciones Público Privadas, de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad y de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, las correspondientes a obras públicas y adquisiciones de las entidades federativas, y demás disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables a estas materias;		
Artículo 4 (fracciones III, IV y XXIV).- Para efectos de esta Ley, se entenderá por: … XXIV. Órgano constitucional autónomo: son los órganos creados inmediata y fundamentalmente en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en las constituciones de las entidades federativas y que no se adscriben a los poderes del Estado, y que cuentan con	Las personas de derecho público de carácter federal con autonomía derivada de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como las entidades que cuenten con un régimen específico en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, aplicarán los criterios y procedimientos previstos en esta Ley, sólo en lo no previsto en los ordenamientos que los rigen y siempre que no se contrapongan con los mismos, sujetándose a sus propios órganos de control.	**Artículo 4 (primer párrafo).-** Se consideran comprendidas en el quinto párrafo del artículo 1 de la Ley, las contrataciones que realicen las dependencias y entidades con las personas de derecho público de carácter federal con autonomía derivada de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o con las asociaciones y sociedades civiles asimiladas a que se refiere el último párrafo del artículo 46 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así como con municipios y órganos paramunicipales, cuando dichas personas funjan como proveedores**.**

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
autonomía e independencia funcional y financiera; … III. Autonomía de gestión: la facultad de la Auditoría Superior de la Federación para decidir sobre su organización interna, estructura y funcionamiento, así como la administración de sus recursos humanos, materiales y financieros que utilice para la ejecución de sus atribuciones, en los términos contenidos en la Constitución y esta Ley; IV. Autonomía técnica: la facultad de la Auditoría Superior de la Federación para decidir sobre la planeación, programación, ejecución, informe y seguimiento en el proceso de la fiscalización superior;		
Artículo 14 (fracción I, inciso a).- La fiscalización de la Cuenta Pública tiene por objeto: I. Evaluar los resultados de la gestión financiera: a) La ejecución de la Ley de Ingresos y el ejercicio del Presupuesto de Egresos para verificar la forma y términos en que los ingresos fueron recaudados, obtenidos, captados y administrados; constatar que los recursos provenientes de financiamientos y otras	**Artículo 3 (fracción VI).-** Para los efectos de esta Ley, entre las adquisiciones, arrendamientos y servicios, quedan comprendidos: … VI. La prestación de servicios de largo plazo que involucren recursos de varios ejercicios fiscales, a cargo de un inversionista proveedor, el cual se obliga a proporcionarlos con los activos que provea por sí o a través de un tercero, de conformidad con un proyecto para la prestación de dichos servicios;	

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
obligaciones y empréstitos se contrataron, recibieron y aplicaron de conformidad con lo aprobado; y revisar que los egresos se ejercieron en los conceptos y partidas autorizados, incluidos, entre otros aspectos, la contratación de servicios y obra pública, las adquisiciones, arrendamientos, subsidios, aportaciones, donativos, transferencias, aportaciones a fondos, fideicomisos y demás instrumentos financieros, así como cualquier esquema o instrumento de pago a largo plazo;		
Artículo 57.- La Auditoría Superior de la Federación, verificará y fiscalizará la instrumentación, ejecución y resultados de las estrategias de ajuste convenidas para fortalecer las finanzas públicas de las Entidades Federativas y los municipios, con base en la Ley de la materia y en los convenios que para ese efecto se suscriban con las Entidades Federativas y los municipios, para la obtención de la garantía del Gobierno Federal.	**Artículo 10.-** En los casos de adquisiciones, arrendamientos o servicios financiados con fondos provenientes de créditos externos otorgados al gobierno federal o con su garantía por organismos financieros regionales o multilaterales, los procedimientos, requisitos y demás disposiciones para su contratación serán establecidos, con la opinión de la Secretaría, por la Secretaría de la Función Pública aplicando en lo procedente lo dispuesto por esta Ley y deberán precisarse en las convocatorias, invitaciones y contratos correspondientes.	**Artículo 9.-** Las disposiciones, procedimientos y requisitos que emita la Secretaría de la Función Pública de conformidad con el artículo 10 de la Ley, se difundirán a través de CompraNet y se aplicarán, con apoyo de los agentes financieros designados como tales por la Secretaría, por las dependencias y entidades responsables de ejercer recursos otorgados al Gobierno Federal o con su garantía por organismos financieros regionales o multilaterales.
Artículo 7.- A falta de disposición expresa en esta Ley, se aplicarán en forma supletoria y en lo conducente,	**Artículo 11.-** Serán supletorias de esta Ley y de las demás disposiciones que de ella se deriven, en lo que corresponda, el Código Civil Federal, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el Código Federal	

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; la Ley General de Contabilidad Gubernamental; la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; la Ley de Coordinación Fiscal; la Ley de Ingresos; el Código Fiscal de la Federación; la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; la Ley General de Responsabilidades Administrativas; Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, y el Presupuesto de Egresos, así como las disposiciones relativas del derecho común federal, sustantivo y procesal, en ese orden.	de Procedimientos Civiles. Lo anterior sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 61 de la presente Ley.	
Artículo 3.- La fiscalización de la Cuenta Pública tiene el objeto establecido en esta Ley y se llevará a cabo conforme a los principios de legalidad, definitividad, ***imparcialidad*** y confiabilidad.	**Artículo 16 (último párrafo).-** En los supuestos previstos en los párrafos primero y tercero de este artículo, para acreditar la aplicación de los principios dispuestos por esta Ley, tanto la justificación de la selección del proveedor, como de los bienes, arrendamientos y servicios a contratar y el precio de los mismos, según las circunstancias que concurran en cada caso, deberá motivarse en criterios de economía, eficacia, eficiencia, ***imparcialidad***, honradez y transparencia que aseguren las mejores condiciones para el Estado, lo cual constará en un escrito firmado por el titular del área usuaria o requirente, y el dictamen de procedencia de la contratación será autorizado por el titular de la dependencia o entidad, o aquel servidor público en quien éste delegue dicha función. En ningún caso la	

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
	delegación podrá recaer en servidor público con nivel inferior al de director general en las dependencias o su equivalente en las entidades.	
Artículo 2.- La fiscalización de la Cuenta Pública comprende: I. La fiscalización de la gestión financiera de las entidades fiscalizadas para comprobar el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, y demás disposiciones legales aplicables, en cuanto a los ingresos y gastos públicos, así como la deuda pública, incluyendo la revisión del manejo, la custodia y la aplicación de recursos públicos federales, así como de la demás información financiera, contable, patrimonial, presupuestaria y programática que las entidades fiscalizadas deban incluir en dicho documento, conforme a las disposiciones aplicables, y II. La práctica de auditorías sobre el desempeño para verificar el grado de cumplimiento de los objetivos de los programas federales. **Artículo 14 (fracción I, inciso a).-** La fiscalización de la Cuenta Pública tiene por objeto: I. Evaluar los resultados de la gestión financiera: a) La ejecución de la Ley de	**Artículo 18.-** En la planeación de las adquisiciones, arrendamientos y servicios que pretendan realizar sujetos a que se refiere las fracciones I a VI del artículo 1 de esta Ley, deberá ajustarse a: I. Los objetivos y prioridades del Plan Nacional de Desarrollo y de los programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales que correspondan, así como a las previsiones contenidas en sus programas anuales, y II. Los objetivos, metas y previsiones de recursos establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación o, en su caso, al presupuesto destinado a las contrataciones que los fideicomisos públicos no considerados entidades paraestatales prevean para el ejercicio correspondiente.	**Artículo 7.-** Para los efectos de los actos y actividades reguladas en la Ley que se realicen a través de los fideicomisos públicos no considerados como entidad paraestatal, deberá observarse lo siguiente: I. Sus políticas, bases y lineamientos serán elaboradas y aprobadas por su comité técnico. A falta de éste, por la dependencia con cargo a cuyo presupuesto se aporten los recursos presupuestarios o que coordine la operación del fideicomiso o, en su defecto, por la entidad que funja como fideicomitente; II. La fiduciaria será responsable de llevar a cabo los procedimientos de contratación regulados por la Ley, así como suscribir invariablemente los contratos correspondientes, aún tratándose de los casos previstos en los párrafos segundo y tercero de esta fracción. En el contrato de fideicomiso respectivo, podrá estipularse que los procedimientos de contratación regulados por la Ley se llevarán a cabo por la dependencia con cargo a cuyo presupuesto se aportaron los recursos; por la que coordina la operación del fideicomiso; por aquélla cuyos programas y proyectos se vean beneficiados, o bien, por la entidad que funja como fideicomitente. En estos supuestos la dependencia o entidad podrá utilizar sus políticas, bases y lineamientos. Si la fiduciaria es una persona moral de derecho privado, los procedimientos de contratación regulados por la Ley se realizarán por la dependencia con cargo a cuyo presupuesto se hayan aportado los recursos; por la que coordine su operación, o por la entidad que funja como fideicomitente. Para efectos del penúltimo párrafo del artículo 41 de la Ley, la procedencia de las contrataciones que realice la fiduciaria que se ubiquen

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
Ingresos y el ejercicio del Presupuesto de Egresos para verificar la forma y términos en que los ingresos fueron recaudados, obtenidos, captados y administrados; constatar que los recursos provenientes de financiamientos y otras obligaciones y empréstitos se contrataron, recibieron y aplicaron de conformidad con lo aprobado; y revisar que los egresos se ejercieron en los conceptos y partidas autorizados, incluidos, entre otros aspectos, la contratación de servicios y obra pública, las adquisiciones, arrendamientos, subsidios, aportaciones, donativos, transferencias, aportaciones a fondos, fideicomisos y demás instrumentos financieros, así como cualquier esquema o instrumento de pago a largo plazo; **Artículo 47.-** La Auditoría Superior de la Federación fiscalizará, conforme al programa anual de auditoría que deberá aprobar y publicar en el Diario Oficial de la Federación, directamente los recursos federales que administren o ejerzan las entidades federativas, los		en alguno de los supuestos contenidos en las fracciones II, IV, V, VI, VII, IX, primer párrafo, XI, XII y XX de dicho precepto, se dictaminará por la persona que se señale en las políticas, bases y lineamientos del fideicomiso, o bien, por el Área contratante, cuando el procedimiento de contratación se realice por las dependencias o entidades a que se refiere la fracción I de este artículo, y III. La información relativa a las contrataciones que corresponda enviar a la Secretaría de la Función Pública o a los órganos internos de control, será remitida por conducto de la dependencia que coordine la operación del fideicomiso; por la dependencia que con cargo a su presupuesto se hubieren aportado los recursos; por aquélla cuyos programas y proyectos se vean beneficiados, o por la entidad que funja como fideicomitente, de manera individual por cada fideicomiso.

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
municipios y las alcaldías de la Ciudad de México; asimismo, fiscalizará directamente los recursos federales que se destinen y se ejerzan por cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, y los transferidos a fideicomisos, mandatos, fondos o cualquier otra figura jurídica, sin perjuicio de la competencia de otras autoridades y de los derechos de los usuarios del sistema financiero.		
Artículo 1.- La presente Ley es de orden público y tiene por objeto reglamentar los artículos 73 fracción XXIV, 74, fracciones II y VI, y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de revisión y fiscalización de: I. La Cuenta Pública; II. Las situaciones irregulares que se denuncien en términos de esta Ley, respecto al ejercicio fiscal en curso o a ejercicios anteriores distintos al de la Cuenta Pública en revisión; III. La aplicación de las fórmulas de distribución, ministración y ejercicio de las participaciones federales, y IV. El destino y ejercicio de los recursos provenientes de financiamientos contratados por	**Artículo 20.-** Las dependencias y entidades formularán sus programas anuales de adquisiciones, arrendamientos y servicios, y los que abarquen más de un ejercicio presupuestal, así como sus respectivos presupuestos, considerando: I. Las acciones previas, durante y posteriores a la realización de dichas operaciones; II. Los objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo; III. La calendarización física y financiera de los recursos necesarios; IV. Las unidades responsables de su instrumentación; V. Sus programas sustantivos, de apoyo administrativo y de inversiones, así como, en su caso, aquéllos relativos a la adquisición de bienes para su posterior comercialización, incluyendo los que habrán de sujetarse a procesos productivos; VI. La existencia en cantidad suficiente de los bienes; los plazos estimados de suministro; los avances tecnológicos incorporados en los bienes, y en su caso los planos, proyectos y especificaciones; VII. Las normas aplicables conforme a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización o, a falta de éstas,	**Artículo 16.-** Para efectos de lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley, los titulares de las dependencias y entidades, o bien los oficiales mayores o equivalentes, aprobarán el programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios. La planeación e integración de dicho programa y, en su caso, su presentación ante los titulares de las dependencias y entidades para su aprobación, será responsabilidad de los oficiales mayores o equivalentes, a partir de la información que les proporcionen las áreas requirentes, y deberá contener, como mínimo, la descripción y monto de los bienes, arrendamientos y servicios que representen por lo menos el ochenta por ciento del presupuesto total estimado, así como el monto aproximado de los bienes, arrendamientos y servicios que integran el porcentaje restante.

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
los estados y municipios, que cuenten con la garantía de la Federación. Para efectos de este artículo, la Auditoría Superior de la Federación podrá fiscalizar las operaciones que involucren recursos públicos federales o participaciones federales a través de contrataciones, subsidios, transferencias, donativos, fideicomisos, fondos, mandatos, asociaciones público privadas o cualquier otra figura jurídica y el otorgamiento de garantías sobre empréstitos de Estados y Municipios, entre otras operaciones. **Artículo 59.-** Para los efectos de lo previsto en el párrafo quinto de la fracción I, del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cualquier persona podrá presentar denuncias fundadas cuando se presuma el manejo, aplicación o custodia irregular de recursos públicos federales, o de su desvío, en los supuestos previstos en esta Ley, la Auditoría Superior de la Federación, previa autorización de su Titular, podrá revisar la gestión financiera de las entidades fiscalizadas, durante el ejercicio fiscal en curso, así como respecto a ejercicios	las normas internacionales; VIII. Los requerimientos de mantenimiento de los bienes muebles a su cargo, y IX. Las demás previsiones que deban tomarse en cuenta según la naturaleza y características de las adquisiciones, arrendamientos o servicios.	**Artículo 48 (fracción IV).-** Durante el desarrollo del acto de presentación y apertura de proposiciones se observará lo siguiente: **…** IV. Aún y cuando existan denuncias o presunción de falsedad en relación con la información presentada por un licitante, su proposición no deberá desecharse. El servidor público que presida el acto, cuando tenga conocimiento del hecho, lo comunicará al órgano interno de control que corresponda, conforme a lo dispuesto por el penúltimo párrafo del artículo 60 de la Ley. Si al licitante de que se trate se le adjudica el contrato correspondiente y de manera previa a la formalización del mismo la autoridad competente determina la falsedad de su información, la convocante deberá abstenerse de suscribir el citado contrato; **Artículo 114 (fracciones II y IV).-** La Secretaría de la Función Pública tomará conocimiento de los actos o hechos presuntamente constitutivos de infracciones que cometan los licitantes o proveedores a través, entre otros, de los medios siguientes: … II. Denuncia de las dependencias y entidades contratantes, en términos del párrafo cuarto del artículo 60 de la Ley, en los casos no comprendidos en la fracción anterior. En el supuesto de la fracción III del precepto invocado, dentro de la documentación comprobatoria que remitan, deberá encontrarse, en su caso, la que acredite el monto de los daños o perjuicios causados con motivo de la presunta

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
fiscales distintos al de la Cuenta Pública en revisión. Las denuncias podrán presentarse a la Cámara, a la Comisión o directamente a la Auditoría Superior de la Federación.		infracción, haciendo el desglose y especificación de los conceptos de afectación de que se trate; … IV. Denuncia de particulares, en la que señalen bajo protesta de decir verdad los actos o hechos presuntamente sancionables. La manifestación de actos o hechos falsos será sancionada en términos de la legislación penal aplicable.
Artículo 47 (primer párrafo).- La Auditoría Superior de la Federación fiscalizará, conforme al programa anual de auditoría que deberá aprobar y publicar en el Diario Oficial de la Federación, directamente los recursos federales que administren o ejerzan las entidades federativas, los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México; asimismo, fiscalizará directamente los recursos federales que se destinen y se ejerzan por cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, y los transferidos a fideicomisos, mandatos, fondos o cualquier otra figura jurídica, sin perjuicio de la competencia de otras autoridades y de los derechos de los usuarios del sistema financiero.	**Artículo 21.-** Las dependencias y entidades pondrán a disposición del público en general, a través de CompraNet y de su página en Internet, a más tardar el 31 de enero de cada año, su programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios correspondiente al ejercicio fiscal de que se trate, con excepción de aquella información que, de conformidad con las disposiciones aplicables, sea de naturaleza reservada o confidencial, en los términos establecidos en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Las adquisiciones, arrendamientos y servicios contenidas en el citado programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la dependencia o entidad de que se trate, debiendo informar de ello a la Secretaría de la Función Pública y actualizar en forma mensual el programa en CompraNet.	**Artículo 17.-** Los programas anuales de adquisiciones, arrendamientos y servicios deberán actualizarse, cuando proceda, durante los últimos cinco días hábiles de cada mes.
Artículo 2 (fracción I).- La fiscalización de la Cuenta Pública comprende: I. La fiscalización de la gestión financiera de las entidades	**Artículo 22 (fracciones I y IV).-** Las dependencias y entidades deberán establecer comités de adquisiciones, arrendamientos y servicios que tendrán las siguientes funciones: I. Revisar el programa y el presupuesto de	

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
fiscalizadas para comprobar el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, y demás disposiciones legales aplicables, en cuanto a los ingresos y gastos públicos, así como la deuda pública, incluyendo la revisión del manejo, la custodia y la aplicación de recursos públicos federales, así como de la demás información financiera, contable, patrimonial, presupuestaria y programática que las entidades fiscalizadas deban incluir en dicho documento, conforme a las disposiciones aplicables, y	adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como sus modificaciones, y formular las observaciones y recomendaciones convenientes; … IV. Analizar trimestralmente el informe de la conclusión y resultados generales de las contrataciones que se realicen y, en su caso, recomendar las medidas necesarias para verificar que el programa y presupuesto de adquisiciones, arrendamientos y servicios, se ejecuten en tiempo y forma, así como proponer medidas tendientes a mejorar o corregir sus procesos de contratación y ejecución;	
Artículo 3.- La fiscalización de la Cuenta Pública tiene el objeto establecido en esta Ley y se llevará a cabo conforme a los principios de legalidad, definitividad, ***imparcialidad*** y confiabilidad. **Artículo 2.-** La fiscalización de la Cuenta Pública comprende: I. La fiscalización de la gestión financiera de las entidades fiscalizadas para comprobar el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, y demás disposiciones legales aplicables, en cuanto a los ingresos y gastos públicos, así	**Artículo 24.-** La ***planeación***, programación, presupuestación y el gasto de las adquisiciones, arrendamientos y servicios se sujetará a las disposiciones específicas del Presupuesto de Egresos de la Federación, así como a lo previsto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y demás disposiciones aplicables y los recursos destinados a ese fin se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia, honradez e ***imparcialidad*** para satisfacer los objetivos a los que fueren destinados. **Artículo 25.-** Las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán convocar, adjudicar o contratar adquisiciones, arrendamientos y servicios, con cargo a su presupuesto autorizado y sujetándose al calendario de gasto correspondiente. En casos excepcionales, previo a la autorización de su presupuesto, las dependencias y entidades podrán	**Artículo 14 (segundo párrafo).-** La celebración de los contratos marco no estará sujeta a los procedimientos de contratación previstos en la Ley. En dicha celebración, se atenderán los principios de economía, eficacia, eficiencia, ***imparcialidad*** y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado, mismos que deberán reflejarse en los contratos específicos señalados en el párrafo anterior. **Artículo 63 (último párrafo).-** A efecto de que los testigos sociales cumplan adecuadamente sus funciones, su participación en los procedimientos de contratación deberá comenzar a partir de los actos previos a que se refieren los incisos a) y b) de la fracción II del artículo 67 de este Reglamento, de tal manera que su actuación incida en mayor medida a la transparencia e ***imparcialidad*** de dichos procedimientos… **Artículo 67 (fracción III).-** Para el debido ejercicio de

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
como la deuda pública, incluyendo la revisión del manejo, la custodia y la aplicación de recursos públicos federales, así como de la demás información financiera, contable, patrimonial, presupuestaria y programática que las entidades fiscalizadas deban incluir en dicho documento, conforme a las disposiciones aplicables, y II. La práctica de auditorías sobre el desempeño para verificar el grado de cumplimiento de los objetivos de los programas federales. **Artículo 6.-** La fiscalización de la Cuenta Pública que realiza la Auditoría Superior de la Federación se lleva a cabo de manera posterior al término de cada ejercicio fiscal, una vez que el programa anual de auditoría esté aprobado y publicado en su página de internet; tiene carácter externo y por lo tanto se efectúa de manera independiente y autónoma de cualquier otra forma de control o fiscalización que realicen los órganos internos de control.	solicitar a la Secretaría su aprobación para convocar, adjudicar y formalizar contratos cuya vigencia inicie en el ejercicio fiscal siguiente de aquél en el que se formalizan. Los referidos contratos estarán sujetos a la disponibilidad presupuestaria del año en el que se prevé el inicio de su vigencia, por lo que sus efectos estarán condicionados a la existencia de los recursos presupuestarios respectivos, sin que la no realización de la referida condición suspensiva origine responsabilidad alguna para las partes. Cualquier pacto en contrario a lo dispuesto en este párrafo se considerará nulo. En las adquisiciones, arrendamientos y servicios, cuya vigencia rebase un ejercicio presupuestario, las dependencias o entidades deberán determinar tanto el presupuesto total como el relativo a los ejercicios de que se trate; en la formulación de los presupuestos de los ejercicios subsecuentes se considerarán los costos que, en su momento, se encuentren vigentes, y se dará prioridad a las previsiones para el cumplimiento de las obligaciones contraídas en ejercicios anteriores. Para los efectos del párrafo anterior, las dependencias y entidades observarán lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. La información sobre estos contratos se difundirá a través de CompraNet. **Artículo 26 Ter (fracción IV).-** En las licitaciones públicas, cuyo monto rebase el equivalente a cinco millones de días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal y en aquellos casos que determine la Secretaría de la Función Pública atendiendo al impacto que la contratación tenga en los programas sustantivos de la dependencia o entidad, participarán testigos sociales conforme a lo siguiente: … IV. Los testigos sociales tendrán las funciones	las funciones señaladas en la fracción IV del artículo 26 Ter de la Ley, los testigos sociales deberán: … III. Proponer de acuerdo con su experiencia y considerando las disposiciones legales o administrativas vigentes, los aspectos que mejoren la igualdad de condiciones entre los licitantes, la calidad de las contrataciones, así como las acciones que promuevan la eficiencia, eficacia, ***imparcialidad***, transparencia y el combate a la corrupción en las mismas; **Artículo 68 (segundo párrafo, fracción V).-** Al final de su participación en el procedimiento de contratación el testigo social emitirá el testimonio correspondiente, el cual será un documento público y deberá contener lo siguiente: … V. Sus conclusiones sobre el apego a las disposiciones jurídicas aplicables, la transparencia y la ***imparcialidad*** del procedimiento de contratación. **Artículo 80 (segundo párrafo, fracción IV).-** Cuando en los contratos se requiera pactar incrementos o decrementos en los precios, de conformidad con lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 44 de la Ley, la dependencia o entidad establecerá en la convocatoria a la licitación pública y en las invitaciones a cuando menos tres personas, una fórmula o mecanismo de ajuste para todos los licitantes. Para aplicar la fórmula o mecanismo de ajuste mencionado en el párrafo anterior, las dependencias y entidades deberán considerar lo siguiente: … IV. Los índices de precios o de referencia de los componentes aplicables para el cálculo del ajuste, los cuales deberán provenir de publicaciones elegidas con criterios de oportunidad, confiabilidad,

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
	siguientes: a) Proponer a las dependencias, entidades y a la Secretaría de la Función Pública mejoras para fortalecer la transparencia, ***imparcialidad*** y las disposiciones legales en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios; b) Dar seguimiento al establecimiento de las acciones que se recomendaron derivadas de su participación en las contrataciones, y c) Emitir al final de su participación el testimonio correspondiente del cual entregarán un ejemplar a la Secretaría de la Función Pública. Dicho testimonio deberá ser publicado dentro de los diez días naturales siguientes a su participación en la página de Internet de la dependencia o entidad que corresponda. **Artículo 40 (segundo párrafo).-** La selección del procedimiento de excepción que realicen las dependencias y entidades deberá fundarse y motivarse, según las circunstancias que concurran en cada caso, en criterios de economía, eficacia, eficiencia, ***imparcialidad***, honradez y transparencia que resulten procedentes para obtener las mejores condiciones para el Estado. El acreditamiento del o los criterios en los que se funda; así como la justificación de las razones en las que se sustente el ejercicio de la opción, deberán constar por escrito y ser firmado por el titular del área usuaria o requirente de los bienes o servicios.	i***mparcialidad*** y disponibilidad, debiéndose indicar en forma expresa el nombre de los índices y de la publicación en que se difundan los mismos.
Artículo 6.- La fiscalización de la Cuenta Pública que realiza la Auditoría Superior de la Federación se lleva a cabo de manera posterior al término de cada ejercicio fiscal, una vez que el programa anual de auditoría esté aprobado y	**Artículo 59.-** Los licitantes o proveedores que infrinjan las disposiciones de esta Ley, serán sancionados por la Secretaría de la Función Pública con multa equivalente a la cantidad de cincuenta hasta mil veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal elevado al mes, en la fecha de la infracción.	**Artículo 109.-** Se sancionará en términos del primer párrafo del artículo 59 de la Ley, a los licitantes que injustificadamente y por causas imputables a los mismos se abstengan de firmar contratos según lo previsto por el segundo párrafo del artículo 46 de dicho ordenamiento, cuando el monto de éstos exceda de cincuenta veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal elevado al mes.

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
publicado en su página de internet; tiene carácter externo y por lo tanto se efectúa de manera independiente y autónoma de cualquier otra forma de control o fiscalización que realicen los órganos internos de control. **Artículo 10 (fracciones I, II y III).-** La Auditoría Superior de la Federación podrá imponer multas, conforme a lo siguiente: I. Cuando los servidores públicos y las personas físicas no atiendan los requerimientos a que refiere el artículo precedente, salvo que exista disposición legal o mandato judicial que se los impida, o por causas ajenas a su responsabilidad, la Auditoría Superior de la Federación podrán imponerles una multa mínima de ciento cincuenta a una máxima de dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización; II. En el caso de personas morales, públicas o privadas, la multa consistirá en un mínimo de seiscientas cincuenta a diez mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización; III. Se aplicarán las multas previstas en este artículo a los terceros que hubieran firmado	Cuando los licitantes, injustificadamente y por causas imputables a los mismos, no formalicen contratos cuyo monto no exceda de cincuenta veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal elevado al mes, serán sancionados con multa equivalente a la cantidad de diez hasta cuarenta y cinco veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal elevado al mes, en la fecha de la infracción.	… **Artículo 110.-** Cuando una instancia de inconformidad sea sobreseída o resuelta como infundada y en la misma se determine que se promovió para retrasar o entorpecer la contratación, se sancionará al inconforme con inhabilitación en términos de la fracción IV del artículo 60 de la Ley y multa de acuerdo con el primer párrafo del artículo 59 de la Ley. **Artículo 82.-** Las dependencias y entidades, en contrataciones iguales o superiores al equivalente a trescientas veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal, deberán formalizar las adquisiciones, arrendamientos y servicios a través de contratos, los cuales deberán contener, en lo aplicable, los elementos a que se refiere el artículo 45 de la Ley y lo previsto en el artículo 81 de este Reglamento, debiendo considerar el contenido de la convocatoria a la licitación pública, de la invitación a cuando menos tres personas o de la solicitud de cotización y, en su caso, de sus modificaciones. Las dependencias y entidades deberán llevar el registro, control y comprobación de las contrataciones adjudicadas en forma directa en los términos del artículo 42 de la Ley, que no requieran la formalización de contratos, de conformidad con las disposiciones presupuestarias aplicables.

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
contratos para explotación de bienes públicos o recibido en concesión o subcontratado obra pública, administración de bienes o prestación de servicios mediante cualquier título legal con las entidades fiscalizadas, cuando no entreguen la documentación e información que les requiera la Auditoría Superior de la Federación;		
Artículo 4 (fracción XIII).- Para efectos de esta Ley, se entenderá por: … XIII. Faltas administrativas graves: las así señaladas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas; … **Artículo 74.-** La Auditoría Superior de la Federación, en los términos de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, incluirá en la plataforma nacional digital establecida en dicha ley, la información relativa a los servidores públicos y particulares sancionados por resolución definitiva firme, por la comisión de faltas administrativas graves o actos vinculados a éstas a que hace referencia el presente Capítulo.	**Artículo 61.-** La Secretaría de la Función Pública impondrá las sanciones considerando: I. Los daños o perjuicios que se hubieren producido con motivo de la infracción; II. El carácter intencional o no de la acción u omisión constitutiva de la infracción; III. La gravedad de la infracción, y IV. Las condiciones del infractor. En la tramitación del procedimiento para imponer las sanciones a que se refiere este Título, la Secretaría de la Función Pública deberá observar lo dispuesto por el Título Cuarto y demás aplicables de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, aplicando supletoriamente tanto el Código Civil Federal, como el Código Federal de Procedimientos Civiles.	
Artículo 1 (último párrafo).- La	**Artículo 62.-** La Secretaría de la Función Pública	

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
presente Ley es de orden público y tiene por objeto reglamentar los artículos 73 fracción XXIV, 74, fracciones II y VI, y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de revisión y fiscalización de: … Adicionalmente, la presente Ley establece la organización de la Auditoría Superior de la Federación, sus atribuciones, incluyendo aquéllas para conocer, investigar y substanciar la comisión de faltas administrativas que detecte en sus funciones de fiscalización, en términos de esta Ley y la Ley General de Responsabilidades Administrativas; así como su evaluación, control y vigilancia por parte de la Cámara de Diputados.	aplicará las sanciones que procedan a quienes infrinjan las disposiciones de este ordenamiento, conforme a lo dispuesto por la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. La Secretaría de la Función Pública, en uso de las atribuciones que le confiere la Ley citada en el párrafo anterior, podrá abstenerse de iniciar los procedimientos previstos en ella, cuando de las investigaciones o revisiones practicadas se advierta que el acto u omisión no es grave, o no implica la probable comisión de algún delito o perjuicio patrimonial a la dependencia o entidad, o que el acto u omisión fue corregido o subsanado de manera espontánea por el servidor público o implique error manifiesto y en cualquiera de estos supuestos, los efectos que, en su caso, hubieren producido, desaparecieron o se hayan resarcido.	
Artículo 66.- Lo dispuesto en el presente Capítulo, no excluye la imposición de las sanciones que conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas procedan ni de otras que se deriven de la revisión de la Cuenta Pública.	**Artículo 63.-** Las responsabilidades y las sanciones a que se refiere la presente Ley serán independientes de las de orden civil, penal o de cualquier otra índole que puedan derivar de la comisión de los mismos hechos.	
Artículo 104 (fracción IX).- La Unidad tendrá las siguientes atribuciones: …	**Artículo 65.-** La Secretaría de la Función Pública conocerá de las inconformidades que se promuevan contra los actos de los procedimientos de licitación pública o invitación a cuando menos tres personas	**Artículo 116.-** Al escrito inicial de las inconformidades a que se refiere la fracción I del artículo 65 de la Ley, deberá acompañarse la manifestación a que se refiere el tercer párrafo del artículo 33 Bis de la Ley,

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
IX. Conocer y resolver de las inconformidades que presenten los proveedores o contratistas, por el incumplimiento de las disposiciones aplicables para la Auditoría Superior de la Federación en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, así como de obras públicas y servicios relacionados con las mismas. Igualmente participará con voz, pero sin voto, en los comités de obras y de adquisiciones de la Auditoría Superior de la Federación, establecidos en las disposiciones aplicables para la Auditoría Superior de la Federación en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, así como de obras públicas y servicios relacionados con las mismas;	que se indican a continuación: I. La convocatoria a la licitación, y las juntas de aclaraciones. … II. La invitación a cuando menos tres personas. … III. El acto de presentación y apertura de proposiciones, y el fallo. … IV. La cancelación de la licitación. … V. Los actos y omisiones por parte de la convocante que impidan la formalización del contrato en los términos establecidos en la convocatoria a la licitación o en esta Ley. … En todos los casos en que se trate de licitantes que hayan presentado proposición conjunta, la inconformidad sólo será procedente si se promueve conjuntamente por todos los integrantes de la misma.	con el acuse de recibo o sello de la dependencia o entidad correspondiente, o bien, la constancia que se obtenga de su envío en forma electrónica, a través de CompraNet. La omisión de exhibir el documento referido en el párrafo anterior será motivo de prevención en términos de lo dispuesto por el penúltimo párrafo del artículo 66 de la Ley. **Artículo 117.-** Tratándose de licitaciones públicas internacionales bajo la cobertura de tratados, conforme a lo dispuesto por el artículo 4 de la Ley, el plazo para promover la inconformidad será de diez días hábiles. En los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas en las que se celebre junta de aclaraciones, el plazo para promover la inconformidad comenzará a partir del día siguiente al de la celebración de la última junta. En caso de que no se realice la junta de aclaraciones, el plazo se computará a partir del día siguiente al de la recepción de la invitación.
Artículo 3.- La fiscalización de la Cuenta Pública tiene el objeto establecido en esta Ley y se llevará a cabo conforme a los principios de ***legalidad***, ***definitividad***, imparcialidad y confiabilidad.	**Artículo 69 (fracción I, inciso d).-** Las notificaciones se harán: I. En forma personal, para el inconforme y el tercero interesado: … d) La resolución ***definitiva***, y **Artículo 70 (tercer, quinto y sexto párrafos).-** Solicitada la suspensión correspondiente, la autoridad que conozca de la inconformidad deberá acordar lo siguiente: I. Concederá o negará provisionalmente la suspensión; en el primer caso, fijará las condiciones y	**Artículo 120 (primer párrafo).-** En los casos en que se conceda la suspensión ***definitiva*** del acto impugnado en la inconformidad, dentro de los tres días hábiles siguientes al de la notificación del acuerdo respectivo, el inconforme garantizará los posibles daños y perjuicios que se puedan ocasionar con motivo de la suspensión, en alguna de las formas que establece el artículo 137 del Reglamento de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación.

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
	efectos de la medida, y II. Dentro de los tres días hábiles siguientes a que se haya recibido el informe previo de la convocante, se pronunciará respecto de la suspensión ***definitiva***. … En caso de resultar procedente la suspensión ***definitiva***, se deberá precisar la situación en que habrán de quedar las cosas y se tomarán las medidas pertinentes para conservar la materia del asunto hasta el dictado de la resolución que ponga fin a la inconformidad. En todo caso, la suspensión ***definitiva*** quedará sujeta a que el solicitante, dentro de los tres días hábiles siguientes a la notificación del acuerdo relativo, garantice los daños y perjuicios que pudiera ocasionar, según los términos que se señalen en el Reglamento. **Artículo 71 (tercer párrafo).-** Se requerirá también a la convocante que rinda en el plazo de seis días hábiles un informe circunstanciado, en el que se expondrán las razones y fundamentos para sostener la improcedencia de la inconformidad así como la validez o ***legalidad*** del acto impugnado y se acompañará, en su caso, copia autorizada de las constancias necesarias para apoyarlo, así como aquéllas a que se refiere la fracción IV del artículo 66. **Artículo 76 (primer párrafo).-** A partir de la información que conozca la Secretaría de la Función Pública derivada del ejercicio de sus facultades de verificación podrá realizar intervenciones de oficio a fin de revisar la ***legalidad*** de los actos a que se refiere el artículo 65 de esta Ley.	**Artículo 122 (primer párrafo**).- En el informe circunstanciado que rinda la convocante, deberá indicar las razones y fundamentos para hacer valer, en su caso, la improcedencia o sobreseimiento de la instancia de inconformidad, así como las razones y fundamentos para sostener la ***legalidad*** del acto impugnado, debiendo contestar todos los motivos de inconformidad planteados en el escrito inicial o en la ampliación.
14.- Ley de Ingresos de la Federación. *15 de noviembre de 2016.* **Artículo 8 (fracción II).-** En los casos de prórroga para el pago	**Artículo 51 (segundo párrafo).-** En caso de incumplimiento en los pagos a que se refiere el párrafo anterior, la dependencia o entidad, a solicitud del proveedor, deberá pagar gastos financieros conforme a la tasa que será igual a la establecida por	**Artículo 96 (último párrafo).-** Sin perjuicio de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 51 de la Ley, en ningún caso se aceptará la estipulación de penas convencionales a cargo de las dependencias y entidades.

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
de créditos fiscales, se causarán recargos. … II. De conformidad con el CFF cuando se autorice el pago a plazos se aplicará la tasa de recargos según corresponda a los saldos y durante el período de que se trate.	la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales…	
15.- Ley de Instituciones de Crédito, artículo 134 Bis 4 (derogado el 10/01/2014)[1] *18 de julio de 1990.* **Artículo 125.-** La SHCP señalará los fideicomisos públicos que tengan el carácter de entidades paraestatales y que formen parte del Sistema Bancario Mexicano.	**Artículo 1 (fracción V).-** La presente Ley es de orden público y tiene por objeto reglamentar la aplicación del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de las adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y prestación de servicios de cualquier naturaleza, que realicen: … V. Las empresas de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos en los que el fideicomitente sea el gobierno federal o una entidad paraestatal, y	**Artículo 5.-** Conforme a lo dispuesto por la fracción IX del artículo 3 de la Ley, no resultan sujetos de la misma, los siguientes servicios: … IV. Los contratados por las sociedades nacionales de crédito, cuando tengan como finalidad el cumplimiento de su objeto y se realicen de acuerdo con la Ley de Instituciones de Crédito, incluidas aquellas operaciones y servicios que deban efectuar para cubrir los riesgos que deriven de las mismas y se eroguen con recursos a cargo de las propias operaciones y servicios que presten.
16.- Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas. *4 de abril de 2013.*	**Artículo 5.** Será responsabilidad de las dependencias y entidades contratar los servicios correspondientes para mantener adecuada y satisfactoriamente	**Artículo 6 (primer párrafo).-** En caso de pérdida total de un bien asegurado, como consecuencia de un siniestro, la dependencia o entidad deberá solicitar a

[1] Sustituido por el artículo 125 adicionado en la misma fecha.

A) Marco normativo complementario y supletorio.

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
Artículo 1.- Tiene por objeto regular la organización, operación y funcionamiento de las Instituciones de Seguros, Instituciones de Fianzas y Sociedades Mutualistas de Seguros; las actividades y operaciones que las mismas podrán realizar, así como de los agentes de seguros y de fianzas. **Artículo 270.-** La cesión de la cartera de una Institución de Seguros a otra, o bien la cesión de las obligaciones y derechos correspondientes al otorgamiento de fianzas de una Institución a otra, requerirá la autorización previa de la Comisión, con acuerdo de su Junta de Gobierno **Artículo 282.-** Las fianzas que las Instituciones otorguen a favor de la Federación, del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios, se harán efectivas, a elección del beneficiario, siguiendo los procedimientos establecidos en el artículo 279 de esta Ley, o bien, de acuerdo con las disposiciones que a continuación se señalan y de conformidad con las bases que fije el Reglamento de este artículo, excepto las que se	asegurados los bienes con que cuenten. Lo dispuesto en el párrafo anterior no será aplicable cuando por razón de la naturaleza de los bienes o el tipo de riesgos a los que están expuestos, el costo de aseguramiento represente una erogación que no guarde relación directa con el beneficio que pudiera obtenerse o bien, se constate que no exista oferta de seguros en el mercado para los bienes de que se trate. La Secretaría autorizará previamente la aplicación de la excepción. **Artículo 45 (fracción XI).-** El contrato o pedido contendrá, en lo aplicable, lo siguiente: … XI. Forma, términos y porcentaje para garantizar los anticipos y el cumplimiento del contrato;	la institución aseguradora, en los términos de las disposiciones aplicables, la reposición o recuperación o, en su caso, el pago respectivo, según convenga a la dependencia o entidad. **Artículo 103 (segundo párrafo, fracción I, inciso d y fracción IV).-** Los proveedores podrán otorgar las garantías a que se refiere la Ley y este Reglamento, en alguna de las formas previstas en el artículo 137 del Reglamento de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación en el caso de dependencias, o en las disposiciones aplicables tratándose de entidades. Cuando la forma de garantía sea mediante fianza, se observará lo siguiente: I. La póliza de la fianza deberá contener, como mínimo, las siguientes previsiones: … d) Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas para la efectividad de las fianzas, aún para el caso de que proceda el cobro de indemnización por mora, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida. Tratándose de dependencias, el procedimiento de ejecución será el previsto en el artículo 95 de la citada Ley, debiéndose atender para el cobro de indemnización por mora lo dispuesto en el artículo 95 Bis de dicha Ley; … IV. Cuando se requiera hacer efectivas las fianzas, las dependencias deberán remitir a la Tesorería de la Federación, dentro del plazo a que hace referencia el artículo 143 del Reglamento de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación, la solicitud donde se precise la información necesaria para identificar la obligación o crédito que se garantiza y los sujetos que se vinculan con la fianza, debiendo acompañar los documentos que soporten y justifiquen el cobro,

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
otorguen a favor de la Federación para garantizar obligaciones fiscales a cargo de Terceros y los casos en que se estará a lo dispuesto por el CFF. **Artículo 283.-** Si una Institución no cumple con las obligaciones asumidas en la póliza de fianza dentro de los plazos con que cuenta legalmente para su cumplimiento, deberá pagar al acreedor una indemnización por mora.[2]		de conformidad con lo dispuesto por el Reglamento del Artículo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, para el Cobro de Fianzas Otorgadas a Favor de la Federación, del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios Distintas de las que Garantizan Obligaciones Fiscales Federales a cargo de Terceros; tratándose de entidades la solicitud se remitirá al área correspondiente de la propia entidad. Las modificaciones a las fianzas deberán formalizarse con la participación que corresponda a la afianzadora, en términos de las disposiciones aplicables.
17.- Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. *4 de enero del 2000.* **Artículo 39.-** Contenido del fallo que emitirá la convocante. **Artículo 78.-** Supuestos en los que la SFP inhabilitará temporalmente para participar de manera directa o por interpósita persona en procedimientos de contratación.	**Artículo 37 (fracción I).-** La convocante emitirá un fallo, el cual deberá contener lo siguiente: I. La relación de licitantes cuyas proposiciones se desecharon, expresando todas las razones legales, técnicas o económicas que sustentan tal determinación e indicando los puntos de la convocatoria que en cada caso se incumpla; … **Artículo 50 (fracción IV).-** Las dependencias y entidades se abstendrán de recibir proposiciones o adjudicar contrato alguno en las materias a que se refiere esta Ley, con las personas siguientes: … IV. Las que se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública en los términos del Título Quinto de este ordenamiento y Título Sexto de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; **Artículo 60.-** La Secretaría de la Función Pública, además de la sanción a que se refiere el primer párrafo del artículo anterior, inhabilitará	**Artículo 70 (fracción VII).-** La cancelación de la inscripción en el padrón público de testigos sociales, procederá cuando los testigos sociales: … VII. Sean sancionados en términos del Título Quinto de la Ley y del Título Sexto de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

[2] Los artículos 282 y 283 son equivalentes a los artículos 95 y 95 Bis de la Ley federal de Instituciones de Fianzas.

A) Marco normativo complementario y supletorio.

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
	temporalmente para participar de manera directa o por interpósita persona en procedimientos de contratación o celebrar contratos regulados por esta Ley, a las personas que se encuentren en alguno de los supuestos siguientes: …	
18.- Ley de Petróleos Mexicanos. *11 de agosto de 2014.* **Artículo 60.-** Las empresas productivas subsidiarias son empresas productivas del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propio. **Artículo 75.-** Petróleos mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias realizaran las adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras sujetándose a los principios del 134 de la CPEUM.	**Artículo 1 (tercer párrafo).-** Las adquisiciones, arrendamientos y servicios que contraten las empresas productivas del Estado y sus empresas productivas subsidiarias quedan excluidos de la aplicación de este ordenamiento.	
19.- Ley de Tesorería de la Federación *30 de diciembre de 2015.*	**Artículo 22 (fracción II).-** Las dependencias y entidades deberán establecer comités de adquisiciones, arrendamientos y servicios que tendrán las siguientes funciones: … II. Dictaminar previamente a la iniciación del procedimiento, sobre la procedencia de la excepción a la licitación pública por encontrarse en alguno de los supuestos a que se refieren las fracciones I, III, VIII, IX segundo párrafo, X, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII y XIX del artículo 41 de esta Ley...	**Artículo 21 (segundo párrafo).-** El Comité no dictaminará los siguientes asuntos: I. La procedencia de la contratación en los casos de excepción a que se refiere el penúltimo párrafo del artículo 41 de la Ley; II. Los procedimientos de contratación por monto que se fundamenten en el artículo 42 de la Ley, y III. Los asuntos cuyos procedimientos de contratación se hayan iniciado sin dictamen previo del Comité. **Artículo 71 (fracción V).-** El documento suscrito por el titular del Área requirente señalado en el segundo párrafo del artículo 40 de la Ley, que se someta a consideración del Comité o del titular de la dependencia o entidad, o al servidor público en quien éste delegue la función para dictaminar sobre la

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
		procedencia de la excepción a la licitación pública, deberá contener como mínimo la información que a continuación se indica en el orden siguiente: … V. El monto estimado de la contratación y forma de pago propuesta; …
Artículo 21 (tercer párrafo).- Bienes que pasen a propiedad del fisco federal conforme a las disposiciones fiscales.	**Artículo 41 (fracción XVIII).-** Las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán contratar adquisiciones, arrendamientos y servicios, sin sujetarse al procedimiento de licitación pública, a través de los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa, cuando: … XVIII. Se acepte la adquisición de bienes o la prestación de servicios a título de dación en pago, en los términos de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación;	
20.- Ley del Diario Oficial de la Federación y Gacetas Gubernamentales. *24 de diciembre de 1986.* **ARTICULO 2o.-** El DOF es el órgano del Gobierno Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, cuya función consiste en publicar en el territorio nacional, las leyes, decretos, reglamentos, acuerdos, circulares, órdenes y demás actos, expedidos por los Poderes de la Federación en sus respectivos ámbitos de competencia, a fin de que éstos sean aplicados y observados debidamente.	**Artículo 30.-** La publicación de la convocatoria a la licitación pública se realizará a través de CompraNet y su obtención será gratuita. Además, simultáneamente se enviará para su publicación en el Diario Oficial de la Federación…	**Artículo 42 (segundo párrafo).-** El mismo día en que se publique en CompraNet la convocatoria a la licitación pública, la convocante deberá enviar al Diario Oficial de la Federación para su publicación un resumen de la misma, que deberá contener lo siguiente: …

A) Marco normativo complementario y supletorio.

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
21.- Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas. *11 de junio de 2012.* *Última reforma publicada* *Ley abrogada a partir del 19 de julio de 2017 por Decreto del DOF 18 de julio de 2016.* ***Artículo 2.-*** Son sujetos de la presente Ley: I. Las personas físicas o morales, de nacionalidad mexicana o extranjeras, que participen en las contrataciones públicas de carácter federal, en su calidad de interesados, licitantes, invitados, proveedores, adjudicados, contratistas, permisionarios, concesionarios o análogos; II. Las personas físicas o morales, de nacionalidad mexicana o extranjeras, que en su calidad de accionistas, socios, asociados, representantes, mandantes o mandatarios, apoderados, comisionistas, agentes, gestores, asesores, consultores, subcontratistas, empleados o que con cualquier otro carácter intervengan en las contrataciones públicas materia de la presente Ley a nombre, por cuenta o en interés de las personas a que se refiere la fracción anterior;	**Artículo 60 (fracciones I, II, III y IV y cuarto párrafo).-** La Secretaría de la Función Pública, además de la sanción a que se refiere el primer párrafo del artículo anterior, inhabilitará temporalmente para participar de manera directa o por interpósita persona en procedimientos de contratación o celebrar contratos regulados por esta Ley, a las personas que se encuentren en alguno de los supuestos siguientes: I. Los licitantes que injustificadamente y por causas imputables a los mismos no formalicen dos o más contratos que les haya adjudicado cualquier dependencia o entidad en el plazo de dos años calendario, contados a partir del día en que haya fenecido el término para la formalización del primer contrato no formalizado; II. Los proveedores a los que se les haya rescindido administrativamente un contrato en dos o más dependencias o entidades en un plazo de tres años; III. Los proveedores que no cumplan con sus obligaciones contractuales por causas imputables a ellos y que, como consecuencia, causen daños o perjuicios graves a la dependencia o entidad de que se trate; así como, aquellos que entreguen bienes o servicios con especificaciones distintas de las convenidas;	

A) Marco normativo complementario y supletorio.

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
III. Las personas físicas o morales de nacionalidad mexicana que participen, de manera directa o indirecta, en el desarrollo de transacciones comerciales internacionales en los términos previstos en la presente Ley, y IV. Los servidores públicos que participen, directa o indirectamente, en las contrataciones públicas de carácter federal, quienes estarán sujetos a responsabilidad en términos del Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. **Artículo 8 (fracción VIII).-** Cualquiera de los sujetos a que se refieren las fracciones I y II del artículo 2 de esta Ley, incurrirá en responsabilidad cuando en las contrataciones públicas de carácter federal, directa o indirectamente, realice alguna o algunas de las infracciones siguientes: … VIII. Presente documentación o información falsa o alterada con el propósito de lograr un beneficio o ventaja.	IV. Las que proporcionen información falsa o que actúen con dolo o mala fe en algún procedimiento de contratación, en la celebración del contrato o durante su vigencia, o bien, en la presentación o desahogo de una solicitud de conciliación o de una inconformidad;	
Artículo 10.- La investigación que precede al procedimiento administrativo sancionador iniciará de oficio o por	Las dependencias y entidades dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha en que tengan conocimiento de alguna infracción a las disposiciones de esta Ley, remitirán a la Secretaría de la Función	**Artículo 114.-** La Secretaría de la Función Pública tomará conocimiento de los actos o hechos presuntamente constitutivos de infracciones que cometan los licitantes o proveedores a través, entre

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
denuncia. Las autoridades competentes podrán tomar conocimiento de las presuntas infracciones que cometan las personas sujetas a esta Ley, entre otros, a través de los siguientes medios: I. CompraNet, por medio del apartado de denuncias establecido en dicho sistema; II. Denuncia formulada por las instituciones públicas contratantes o cualquier otra autoridad, las cuales deberán remitirla a la Secretaría o, cuando corresponda, a las autoridades a que se refieren las fracciones II a la XI del artículo 4 de esta Ley, acompañada de la documentación o información en que aquélla se sustente y demás elementos probatorios con los que, en su caso, se cuente; III. Denuncia de particulares en la que señalen, bajo protesta de decir verdad, las presuntas infracciones. La manifestación hecha con falsedad será sancionada en términos de la legislación penal aplicable; IV. Denuncias anónimas que se reciban a través de los medios establecidos para tal efecto, y V. Denuncia internacional formulada por un Estado	Pública la documentación comprobatoria de los hechos presumiblemente constitutivos de la infracción.	otros, de los medios siguientes: I. CompraNet, para lo cual las dependencias y entidades deberán registrar la falta de formalización de los contratos y las rescisiones de los mismos en un plazo máximo de diez días naturales contados a partir de la fecha en que se debió haber realizado la formalización correspondiente o de aquélla en que haya concluido la substanciación del procedimiento de rescisión, de conformidad con el artículo 54 de la Ley; II. Denuncia de las dependencias y entidades contratantes, en términos del párrafo cuarto del artículo 60 de la Ley, en los casos no comprendidos en la fracción anterior. En el supuesto de la fracción III del precepto invocado, dentro de la documentación comprobatoria que remitan, deberá encontrarse, en su caso, la que acredite el monto de los daños o perjuicios causados con motivo de la presunta infracción, haciendo el desglose y especificación de los conceptos de afectación de que se trate; III. Vista de cualquier otra autoridad mediante la cual informe de actos o hechos posiblemente constitutivos de infracción, agregando la documentación comprobatoria con que se cuente para acreditar la conducta irregular, y IV. Denuncia de particulares, en la que señalen bajo protesta de decir verdad los actos o hechos presuntamente sancionables. La manifestación de actos o hechos falsos será sancionada en términos de la legislación penal aplicable. **Artículo 115.-** Una vez que la Secretaría de la Función Pública tenga conocimiento de actos o hechos posiblemente constitutivos de infracción, según lo previsto en el artículo anterior, realizará las investigaciones y actuaciones que correspondan a fin de sustentar la imputación, para lo cual podrá requerir a las dependencias y entidades, a las autoridades que

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
extranjero u organismo u organización públicos internacionales, en la que se deberán precisar las presuntas infracciones y acompañar los elementos de prueba en que aquélla se sustente.		corresponda, a los particulares o, en su caso, solicitar a los licitantes o proveedores que aporten mayores elementos para su análisis. Las notificaciones relativas al procedimiento de sanción, así como aquéllas vinculadas con las investigaciones a que se refiere el párrafo anterior, podrán realizarse de acuerdo con lo previsto por el artículo 118 del presente Reglamento. Si desahogadas las investigaciones se concluye que existen elementos suficientes para sustentar la imputación al licitante o proveedor, se iniciará el procedimiento para imponer sanciones previsto en el Título Quinto de la Ley; de lo contrario, se acordará la improcedencia y el archivo del expediente. Cuando de las actuaciones previstas en este artículo se adviertan posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos, se dará vista a la autoridad de la Secretaría de la Función Pública competente en esa materia para que resuelva lo conducente.
Artículo 28.- Para la imposición de las sanciones administrativas previstas en esta Ley se tomarán en cuenta los elementos que a continuación se señalan: I. La gravedad de la infracción en que se incurra; II. Las circunstancias económicas del infractor. Para efectos de lo previsto en esta fracción, se podrá considerar la información de los contratos que el infractor tenga celebrados y estén registrados en CompraNet, o bien, si no se contara con esa información, se	**Artículo 61.-** La Secretaría de la Función Pública impondrá las sanciones considerando: I. Los daños o perjuicios que se hubieren producido con motivo de la infracción; II. El carácter intencional o no de la acción u omisión constitutiva de la infracción; III. La gravedad de la infracción, y IV. Las condiciones del infractor. En la tramitación del procedimiento para imponer las sanciones a que se refiere este Título, la Secretaría de la Función Pública deberá observar lo dispuesto por el Título Cuarto y demás aplicables de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, aplicando supletoriamente tanto el Código Civil Federal, como el Código Federal de Procedimientos Civiles.	

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
podrá considerar el monto del contrato, permiso, concesión o transacción comercial que dé origen al procedimiento administrativo sancionador de que se trate; III. Los antecedentes del infractor, incluido su comportamiento en contrataciones públicas de carácter federal previas o, en su caso, en transacciones comerciales internacionales; IV. El grado de participación del infractor; V. Los medios de ejecución; VI. La reincidencia en la comisión de las infracciones previstas en esta Ley, y VII. El monto del beneficio, lucro, o del daño o perjuicio derivado de la infracción, cuando éstos se hubieren causado. Para los efectos de la presente Ley, se considerará reincidente al infractor que habiendo sido declarado responsable de la comisión de alguna de las infracciones a que se refiere esta Ley, incurra nuevamente en una o varias de ellas, dentro de un lapso de diez años contados a partir de que surta efectos la notificación de la primera sanción		
Artículo 1.- La presente Ley es	**Artículo 62.-** La Secretaría de la Función Pública	

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
de orden público y de interés general y tiene por objeto: I. Establecer las responsabilidades y sanciones que deban imponerse a las personas físicas y morales, de nacionalidad mexicana y extranjeras, por las infracciones en que incurran con motivo de su participación en las contrataciones públicas de carácter federal previstas en esta Ley, así como aquéllas que deban imponerse a las personas físicas y morales de nacionalidad mexicana, por las infracciones en que incurran en las transacciones comerciales internacionales previstas en esta Ley, y II. Regular el procedimiento para determinar las responsabilidades y aplicar sanciones, y III. Establecer las autoridades federales competentes para interpretar y aplicar esta Ley. **Artículo 11.-** Todo servidor público tendrá la obligación de denunciar por escrito las acciones u omisiones que en ejercicio de sus funciones tuviere conocimiento y que pudieren ser sancionadas en términos de esta Ley. El incumplimiento de dicha obligación será motivo de las	aplicará las sanciones que procedan a quienes infrinjan las disposiciones de este ordenamiento, conforme a lo dispuesto por la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. La Secretaría de la Función Pública, en uso de las atribuciones que le confiere la Ley citada en el párrafo anterior, podrá abstenerse de iniciar los procedimientos previstos en ella, cuando de las investigaciones o revisiones practicadas se advierta que el acto u omisión no es grave, o no implica la probable comisión de algún delito o perjuicio patrimonial a la dependencia o entidad, o que el acto u omisión fue corregido o subsanado de manera espontánea por el servidor público o implique error	

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
sanciones previstas en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos o del ordenamiento legal aplicable de las entidades federativas, tratándose de contrataciones públicas federales que realicen dichas entidades federativas, los municipios, incluidos los entes públicos de unas y otros y los órganos político administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal.	manifiesto y en cualquiera de estos supuestos, los efectos que, en su caso, hubieren producido, desaparecieron o se hayan resarcido.	
Artículo 7.- Las responsabilidades y sanciones a que se refiere esta Ley se determinarán y aplicarán con independencia de las demás responsabilidades y sanciones previstas en los ordenamientos legales aplicables.	**Artículo 63.-** Las responsabilidades y las sanciones a que se refiere la presente Ley serán independientes de las de orden civil, penal o de cualquier otra índole que puedan derivar de la comisión de los mismos hechos.	
22.- Ley Federal de Competencia Económica. *23 de mayo de 2014.* **Artículo 12 (fracción XIX).-** Las atribuciones de la COFECE: … XIX. Opinar sobre la incorporación de medidas protectoras y promotoras en materia de libre concurrencia y competencia económica, así como en los procedimientos de licitaciones, entre otras, que	**Artículo 26 (quinto párrafo).-** En los procedimientos de contratación deberán establecerse los mismos requisitos y condiciones para todos los participantes, debiendo las dependencias y entidades proporcionar a todos los interesados igual acceso a la información relacionada con dichos procedimientos, a fin de evitar favorecer a algún participante. **Artículo 29 (segundo párrafo).-** Para la participación, adjudicación o contratación de adquisiciones, arrendamientos o servicios no se podrán establecer requisitos que tengan por objeto o efecto limitar el proceso de competencia y libre concurrencia. En ningún caso se deberán establecer requisitos o condiciones imposibles de cumplir. La	**Artículo 31 (tercer párrafo).-** El titular del Área requirente deberá indicar en la convocatoria a la licitación pública, invitación a cuando menos tres personas o solicitud de cotización, según corresponda, el nombre y los datos de identificación de la o las normas que deben cumplirse en el procedimiento de contratación respectivo, así como verificar que la inclusión de las normas o especificaciones señalados en el párrafo anterior no limita la libre participación y concurrencia de los interesados. **Artículo 32 (fracción I).-** Sólo podrá solicitarse que los licitantes cuenten con un sistema de gestión de la calidad en la producción de bienes o servicios,

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
realicen las autoridades públicas.	dependencia o entidad convocante tomará en cuenta las recomendaciones previas que, en su caso, emita la Comisión Federal de Competencia en términos de la Ley Federal de Competencia Económica.	cuando se verifique y se deje constancia en el expediente de lo siguiente: I. Que existen en el mercado al menos tres personas que cuentan con el sistema de gestión de calidad solicitado, lo cual se acreditará con la investigación de mercado que se realice previamente al inicio de un procedimiento de licitación pública o de invitación a cuando menos tres personas. Será responsabilidad del titular del Área requirente remitir al Área contratante, la investigación de mercado correspondiente, y **Artículo 39 (fracción II, inciso b).-** La convocatoria a la licitación pública y, cuando proceda, el Proyecto de convocatoria deberán contener los requisitos que señala el artículo 29 de la Ley y se elaborarán conforme al orden, apartados e información que a continuación se indican: … II. Objeto y alcance de la licitación pública, precisando: ... b) La indicación, en su caso, de que los bienes o servicios se agruparán en partidas, siempre y cuando no se limite la libre participación de cualquier interesado. Se entenderá que no se limita la libre participación, cuando con la investigación de mercado correspondiente al procedimiento de contratación, se constate la existencia de al menos cinco probables proveedores que pudieran cumplir integralmente con el agrupamiento a que se refiere el párrafo anterior; **Artículo 40.-** Las dependencias y entidades no podrán establecer en la convocatoria a la licitación pública requisitos que limiten la libre participación de los interesados, tales como: …

A) Marco normativo complementario y supletorio.

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
Artículo 53 (fracción IV).- Son ilícitas las prácticas monopólicas absolutas, consistentes en los contratos, convenios, arreglos o combinaciones entre Agentes Económicos competidores entre sí cuyo efecto sea: … IV. Establecer, concertar o coordinar posturas o la abstención en las licitaciones, entre otras.	**Artículo 34 (sexto párrafo).-** Los actos, contratos, convenios o combinaciones que lleven a cabo los licitantes en cualquier etapa del procedimiento de licitación deberán apegarse a lo dispuesto por la Ley Federal de Competencia Económica en materia de prácticas monopólicas y concentraciones, sin perjuicio de que las dependencias y entidades determinarán los requisitos, características y condiciones de los mismos en el ámbito de sus atribuciones. Cualquier licitante o el convocante podrá hacer del conocimiento de la Comisión Federal de Competencia, hechos materia de la citada Ley, para que resuelva lo conducente.	**Artículo 39 (fracción II, inciso e).-** La convocatoria a la licitación pública y, cuando proceda, el Proyecto de convocatoria deberán contener los requisitos que señala el artículo 29 de la Ley y se elaborarán conforme al orden, apartados e información que a continuación se indican: … II. Objeto y alcance de la licitación pública, precisando: ... e) Para el caso previsto en la fracción X del artículo 29 de la Ley, se deberá especificar el método que se utilizará para realizar las pruebas que permitan verificar el cumplimiento de las especificaciones de los bienes a adquirir o arrendar o servicios a contratar; la institución pública o privada que las realizará y el momento para efectuarlas, así como la unidad de medida con la cual se determinará el resultado mínimo que deberá obtenerse en las pruebas señaladas. Será responsabilidad del Área técnica determinar que los niveles de aceptación sean los adecuados para la dependencia o entidad y no se constituyan en un requisito que limite la libre participación de los interesados; **Artículo 40.-** Las dependencias y entidades no podrán establecer en la convocatoria a la licitación pública requisitos que limiten la libre participación de los interesados, tales como: I. Experiencia superior a un año, salvo en los casos debidamente justificados que autorice, en forma expresa, el titular del Área requirente, indicando las causas que motiven dicha autorización… **Artículo 44 (último párrafo).-** Cuando existan causas justificadas para no aceptar la presentación de proposiciones conjuntas, se requerirá la autorización escrita del titular del Área requirente, en la cual deberán precisarse las razones para ello,

A) Marco normativo complementario y supletorio.

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
		particularmente los aspectos relativos a que con tal determinación no se limita la libre participación. Dicha autorización deberá formar parte del expediente de contratación respectivo.
Artículo 9.- De la imposición de los precios máximos. **Artículo 12 (fracciones XVII y XXVII).-** Atribuciones de la COFECE: … XVII. Emitir Disposiciones Regulatorias exclusivamente para el cumplimiento de sus atribuciones, así como su estatuto orgánico. … XXVII. Establecer mecanismos de coordinación con Autoridades Públicas en materia de políticas de libre concurrencia y competencia económica. **Artículo 49 (fracción III).-** El programa anual de trabajo y el informe trimestral de actividades deberán hacer referencia, a los siguientes elementos: … III. Entre otras las consultas planteadas ante ésta.	**Artículo 39 (primer párrafo).-** Las dependencias y entidades podrán utilizar el abastecimiento simultáneo a efecto de distribuir entre dos o más proveedores las partidas de bienes o servicios, cuando así lo hayan establecido en la convocatoria a la licitación, siempre que con ello no restrinjan la libre participación. La dependencia o entidad convocante tomará en cuenta las recomendaciones previas que, en su caso, emita la Comisión Federal de Competencia, en términos de la Ley Federal de Competencia Económica.	**Artículo 39 (fracción II, incisos c) y h).-** c) En su caso, el precio máximo de referencia a partir del cual, sin excepción, los licitantes ofrezcan porcentajes de descuento como parte de su proposición, mismos que serán objeto de evaluación; h) Si la totalidad de los bienes o servicios materia de la licitación pública serán objeto del contrato que se adjudique a un solo licitante, o si se hará mediante el procedimiento de abastecimiento simultáneo, en cuyo caso deberá precisarse lo dispuesto en los artículos 29, fracción XII, y 39 de la Ley, e **Artículo 59.-** En las licitaciones públicas en las que se prevea la adjudicación del contrato mediante el procedimiento de abastecimiento simultáneo a que se refieren los artículos 29, fracción XII, y 39 de la Ley, las convocantes considerarán lo siguiente: …
23.- Ley Federal de las Entidades Paraestatales. *14 de mayo de 1986.* **Artículo 2.-** Son entidades paraestatales las que con tal carácter determina la LOAPF.	**Artículo 1 (fracciones IV y V).-** La presente Ley es de orden público y tiene por objeto reglamentar la aplicación del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de las adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y prestación de servicios de cualquier naturaleza, que	

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
Artículo 4.- Los fondos y fideicomisos públicos de fomento así como las entidades paraestatales que formen parte del sistema financiero, entre otros, quedan sujetas por cuanto a su constitución, organización, funcionamiento, control, evaluación y regulación a su legislación específica. **Articulo 12.-** La SHCP publicará anualmente en el DOF, la relación de las entidades paraestatales que formen parte de la APF. **Artículo 14.-** Son organismos descentralizados las personas jurídicas creadas conforme a lo dispuesto por la LOAPF y su objeto de las mismas. **Articulo 28.-** Son empresas de participación estatal mayoritaria las que determina la LOAPF. **Artículo 40.-** Serán considerados entidades paraestatales los fideicomisos públicos que establezca la APF, y se organicen de manera análoga a los organismos descentralizados o empresas de participación estatal mayoritaria, que tengan como propósito auxiliar al Ejecutivo mediante la realización de actividades prioritarias.	realicen: … IV. Los organismos descentralizados; V. Las empresas de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos en los que el fideicomitente sea el gobierno federal o una entidad paraestatal y	
24.- Ley Federal de Presupuesto y	**Artículo 1 (fracciones V, VI, segundo y cuarto párrafos).-** La presente Ley es de orden público y	

A) Marco normativo complementario y supletorio.

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
Responsabilidad Hacendaria. *30 de marzo de 2006.* **Artículo 1.-** Su objeto es reglamentar, entre otros, el artículo 134 de la CPEUM, en materia de programación presupuestación, aprobación, ejercicio, control y evaluación de los ingresos y egresos públicos federales. Segundo párrafo: criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas y equidad de género a observar en la administración de los recursos públicos federales.	tiene por objeto reglamentar la aplicación del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de las adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y prestación de servicios de cualquier naturaleza, que realicen:	
Artículo 4.- El gasto público federal comprende las erogaciones, entre otras, de entes autónomos, PGR, presidencia, dependencias y entidades.	I. Las unidades administrativas de la Presidencia de la República; II. Las Secretarías de Estado y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal; III. La Procuraduría General de la República;	
Artículo 8.- Participación estatal en empresas, sociedades y asociaciones en los términos de la LFEP. **Artículo 9.-** Fideicomisos públicos, definición y características.	V. Las empresas de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos en los que el fideicomitente sea el gobierno federal o una entidad paraestatal, y	
Artículo 82.- Convenios de coordinación para transferir recursos presupuestarios a las entidades federativas. **Artículo 83.-** Convenios de	VI. Las entidades federativas, los municipios y los entes públicos de unas y otros, con cargo total o parcial a recursos federales, conforme a los convenios que celebren con el Ejecutivo Federal. No quedan comprendidos para la aplicación de la	**Artículo 2 (segundo y último párrafos).-** Para efecto de lo previsto en la fracción VI del artículo 1 de la Ley, se considerará que existe convenio entre las entidades federativas, los municipios y los entes públicos de unas y otros con el Ejecutivo Federal,

A) Marco normativo complementario y supletorio.

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
reasignación, los recursos transferidos no pierden el carácter federal.	presente Ley los fondos previstos en el Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal.	cuando aquéllos acepten y reciban, por cualquier medio y concepto, de las dependencias y entidades recursos federales a cuyo cargo, total o parcial, llevarán a cabo la adquisición o arrendamiento de bienes o la contratación de la prestación de servicios de cualquier naturaleza. Las menciones que se hagan en el presente Reglamento a las dependencias y entidades se entenderán hechas, en lo conducente, a las entidades federativas, los municipios y los entes públicos de unas y otros, cuando éstos se ubiquen en el supuesto a que se refiere la fracción VI del artículo 1 de la Ley.
Artículo 5.- Autonomía presupuestaria de los poderes legislativo, judicial y los entes autónomos.	Las personas de derecho público de carácter federal con autonomía derivada de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como las entidades que cuenten con un régimen específico en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, aplicarán los criterios y procedimientos previstos en esta Ley, sólo en lo no previsto en los ordenamientos que los rigen y siempre que no se contrapongan con los mismos, sujetándose a sus propios órganos de control.	**Artículo 4.-** Se consideran comprendidas en el quinto párrafo del artículo 1 de la Ley, las contrataciones que realicen las dependencias y entidades con las personas de derecho público de carácter federal con autonomía derivada de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos…
Artículo 2 (fracciones XI, XII y XXXV.).- Definiciones de: … XI. Eficacia; XII. eficiencia; … XXXV. PEF.	Las adquisiciones, arrendamientos y servicios que se realicen por los Centros Públicos de Investigación con los recursos autogenerados de sus Fondos de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico previstos en la Ley de Ciencia y Tecnología, se regirán conforme a las reglas de operación de dichos fondos, a los criterios y procedimientos que en estas materias expidan los órganos de gobierno de estos Centros, así como a las disposiciones administrativas que, en su caso estime necesario expedir la Secretaría de la Función Pública o la Secretaría, en el ámbito de sus respectivas competencias, administrando dichos recursos con eficiencia, eficacia y honradez para satisfacer los objetivos a los que	

A) Marco normativo complementario y supletorio.

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
	estén destinados y asegurar al centro las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.	
Artículo 50.- Contratos plurianuales: justificación, autorización de la secretaria y autorización de PPS.	**Artículo 3 (fracciones VI y VIII).-** Para los efectos de esta Ley, entre las adquisiciones, arrendamientos y servicios, quedan comprendidos: .. VI. La prestación de servicios de largo plazo que involucren recursos de varios ejercicios fiscales, a cargo de un inversionista proveedor, el cual se obliga a proporcionarlos con los activos que provea por sí o a través de un tercero, de conformidad con un proyecto para la prestación de dichos servicios; …	
Artículo 62.- Contratación de servicios de asesoría, de asesorías, consultoría, estudios e investigaciones.	VIII. La contratación de consultorías, asesorías, estudios e investigaciones, y …	**Artículo 15 (primer y segundo párrafos).-** Para efectos del primer párrafo del artículo 19 de la Ley, la Oficialía Mayor o equivalente de las dependencias o entidades será responsable de concentrar y proporcionar a las unidades administrativas que lo soliciten, la información correspondiente a las consultorías, asesorías, estudios e investigaciones contratados por las mismas. Las entidades deberán remitir a su coordinadora de sector la información a que se refiere el tercer párrafo del artículo 19 de la Ley, en un plazo máximo de veinte días naturales, contados a partir de la fecha de firma del contrato, tratándose de la información relativa al objeto del mismo, o a partir de la fecha de la conclusión del servicio, tratándose de la información referente al resultado de las consultorías, asesorías, estudios o investigaciones contratados. **Artículo 83.-** En los contratos de servicios de consultorías, asesorías, estudios e investigaciones, o de servicios prestados por una persona física, se podrá pactar el precio unitario por hora de servicio y categoría de quienes lo realicen…

A) Marco normativo complementario y supletorio.

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
	Artículo 41 (fracciones X).- Las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán contratar adquisiciones, arrendamientos y servicios, sin sujetarse al procedimiento de licitación pública, a través de los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa, cuando: … X. Se trate de servicios de consultorías, asesorías, estudios o investigaciones, debiendo aplicar el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas, entre las que se incluirán instituciones públicas y privadas de educación superior y centros públicos de investigación. Sólo podrá autorizarse la contratación mediante adjudicación directa, cuando la información que se tenga que proporcionar a los licitantes para la elaboración de su proposición, se encuentre reservada en los términos establecidos en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental;	**Artículo 72 (fracción VIII, primer párrafo).-** Para los efectos de lo establecido en el artículo 41 de la Ley deberá considerarse, respecto de las fracciones de dicho precepto legal, lo que se cita a continuación: … VIII. Se entenderá por servicios de consultorías, asesorías, estudios o investigaciones a que se refiere la fracción X, los siguientes: a) Estandarizados: los que impliquen el desarrollo de soluciones o metodologías eficientes para resolver problemas comunes, recurrentes o de complejidad menor que se presentan en la Administración Pública Federal; b) Personalizados o a la medida: los que desarrollan soluciones o metodologías eficientes diseñadas o creadas ex profeso para resolver problemas específicos no comunes en la Administración Pública Federal, y c) Especializados: los relativos a trabajos que requieran alta especialización y se relacionen con un determinado sector o área del conocimiento, para desarrollar soluciones o metodologías eficientes que permitan resolver problemas complejos y que pueden tener un alto impacto social o económico.
Artículo 63 (fracción II).-… II. Racionalizar el gasto de los servicios de telefonía… arrendamientos.	**Artículo 3 (fracción IX).-** Para los efectos de esta Ley, entre las adquisiciones, arrendamientos y servicios, quedan comprendidos: … IX. En general, los servicios de cualquier naturaleza cuya prestación genere una obligación de pago para las dependencias y entidades, salvo que la contratación se encuentre regulada en forma específica por otras disposiciones legales. Corresponderá a la Secretaría de la Función Pública, a solicitud de la dependencia o entidad de que se trate, determinar si un servicio se ubica en la hipótesis de esta fracción.	

A) Marco normativo complementario y supletorio.

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
Artículo 3.- La interpretación de esta ley corresponde a la SHCP y a la SFP.	**Artículo 7 (primer párrafo).-** La Secretaría[3], la Secretaría de Economía y la Secretaría de la Función Pública, en el ámbito de sus respectivas competencias, estarán facultadas para interpretar esta Ley para efectos administrativos.	**Artículo 8.-** La Secretaría[4], la Secretaría de Economía y la Secretaría de la Función Pública, en el ámbito de sus respectivas competencias, estarán facultadas para interpretar la Ley y este Reglamento para efectos administrativos. Los criterios de interpretación que emitan, en términos de este párrafo, son obligatorios para las dependencias y entidades. Las opiniones que emitan las Secretarías mencionadas en el párrafo anterior, en el ámbito de sus atribuciones, derivadas de las consultas que les formulen las dependencias y entidades, no tendrán el carácter de criterio de interpretación de aplicación general ni de disposición administrativa, por lo que sólo podrán considerarse para el caso concreto a que se refiera la consulta de que se trate, sin que tal opinión pueda utilizarse en asuntos similares o análogos.
Artículo 61 (fracción VI).- Medidas para racionalizar el gasto conforme a un programa que considere: … VI. Estrategias para modernizar la Administración Pública Federal.	**Artículo 9 (primer párrafo).-** En materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, los titulares de las dependencias y los órganos de gobierno de las entidades serán los responsables de que, en la adopción e instrumentación de las acciones que deban llevar a cabo en cumplimiento de esta Ley, se observen criterios que promuevan la modernización y desarrollo administrativo, la descentralización de funciones y la efectiva delegación de facultades.	
Artículo 36.- Contratación de créditos externos.	**Artículo 10.-** En los casos de adquisiciones, arrendamientos o servicios financiados con fondos provenientes de créditos externos otorgados al gobierno federal o con su garantía por organismos financieros regionales o multilaterales, los procedimientos, requisitos y demás disposiciones para su contratación serán establecidos, con la	**Artículo 9.-** Las disposiciones, procedimientos y requisitos que emita la Secretaría de la Función Pública de conformidad con el artículo 10 de la Ley, se difundirán a través de CompraNet y se aplicarán, con apoyo de los agentes financieros designados como tales por la Secretaría, por las dependencias y entidades responsables de ejercer recursos otorgados

[3 y 4] En los términos del artículo 2 fracción primera de la LAASSP cuando se refiera a la Secretaria es la SHCP.

A) Marco normativo complementario y supletorio.

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
	opinión de la Secretaría, por la Secretaría de la Función Pública aplicando en lo procedente lo dispuesto por esta Ley y deberán precisarse en las convocatorias, invitaciones y contratos correspondientes.	al Gobierno Federal o con su garantía por organismos financieros regionales o multilaterales.
Artículo 63 (fracción III).-… III. Promover la contratación consolida.	**Artículo 17 (primer y cuarto párrafos).-** La Secretaría de la Función Pública, mediante disposiciones de carácter general, oyendo la opinión de la Secretaría de Economía, determinará, en su caso, los bienes, arrendamientos o servicios de uso generalizado que, en forma consolidada, podrán adquirir, arrendar o contratar las dependencias y entidades con objeto de obtener las mejores condiciones en cuanto a calidad, precio y oportunidad, y apoyar en condiciones de competencia a las áreas prioritarias del desarrollo.	**Artículo 13 (primer y último párrafos).-** Para la consolidación de adquisiciones, arrendamientos o servicios entre varias dependencias o entidades, bastará que los representantes de las respectivas áreas contratantes se coordinen y manifiesten formalmente su acuerdo para llevar a cabo la contratación bajo esta modalidad, debiendo dejar constancia por escrito de las decisiones y acuerdos que se adopten para tal fin.
Artículo 64 (fracción III).- El gasto de servicios personales comprende: III. Las primas de los seguros que se contraten en favor de los servidores públicos.	En materia de seguros que se contraten a favor de los servidores públicos de las dependencias, incluido el seguro de vida de los pensionados, la Secretaría implementará procedimientos de contratación consolidada y celebrará los contratos correspondientes. Las entidades podrán solicitar su incorporación a las contrataciones que se realicen para las dependencias, siempre y cuando no impliquen dualidad de beneficios para los servidores públicos.	La Secretaría, la Secretaría de Economía o la Secretaría de la Función Pública, podrán llevar a cabo acciones que promuevan la contratación consolidada de bienes o servicios de las dependencias y entidades, que les permita adquirir o arrendar bienes o contar con la prestación de servicios en las mejores condiciones.
Artículo 42 (fracciones V y VI).- Procedimiento para la aprobación de la LI y del PEF. V. PEF aprobado por la cámara de diputados al 15 de noviembre. VI. La LI y el PEF deben publicarse en el DOF.	**Artículo 20 (fracción III).-** Las dependencias y entidades formularán sus programas anuales de adquisiciones, arrendamientos y servicios, y los que abarquen más de un ejercicio presupuestal, así como sus respectivos presupuestos, considerando: …	
Artículo 44.- Distribución de los presupuestos aprobados; monto y calendarización del	III. La calendarización física y financiera de los recursos necesarios; …	**Artículo 18.-** Una vez que la Secretaría dé a conocer a las dependencias y entidades su calendario de presupuesto autorizado éstas, en términos del artículo

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
gasto federalizado.		25 de la Ley, podrán realizar los procedimientos de contratación respectivos. **Artículo 93.-** Las dependencias y entidades, de acuerdo con su disponibilidad presupuestaria y calendarización autorizada, podrán efectuar pagos progresivos a los proveedores previa verificación satisfactoria de los avances, de conformidad con lo establecido en la convocatoria a la licitación pública o en la invitación a cuando menos tres personas, así como en el contrato…
Artículo 106.- Los ejecutores del gasto deberán observar las disposiciones de la LFTAIPG.[5]	**Artículo 21 (primer párrafo).-** Las dependencias y entidades pondrán a disposición del público en general, a través de CompraNet y de su página en Internet, a más tardar el 31 de enero de cada año, su programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios correspondiente al ejercicio fiscal de que se trate, con excepción de aquella información que, de conformidad con las disposiciones aplicables, sea de naturaleza reservada o confidencial, en los términos establecidos en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.	**Artículo 72 (fracción VIII, segundo párrafo).-** Para los efectos de lo establecido en el artículo 41 de la Ley deberá considerarse, respecto de las fracciones de dicho precepto legal, lo que se cita a continuación: La contratación de los servicios señalados se podrá realizar mediante el procedimiento de adjudicación directa sólo cuando la información que se tenga que proporcionar a los licitantes para la elaboración de su proposición esté clasificada como reservada o confidencial en los términos establecidos en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, para lo cual deberá observarse lo siguiente[6]: …
Artículo 24.- La programación y presupuesto comprende: cumplimiento del PND, previsiones del gasto público de los tres poderes y entes autónomos. **Artículo 25.-** La programación y presupuesto anual del gasto público se realiza con apoyo de los anteproyectos y con base	**Artículo 14 (segundo párrafo).-** En el caso de licitación pública para la adquisición de bienes, arrendamientos o servicios que utilicen la evaluación de puntos y porcentajes, se otorgarán puntos en los términos de esta Ley, a personas con discapacidad o a la empresa que cuente con trabajadores con discapacidad en una proporción del cinco por ciento cuando menos de la totalidad de su planta de empleados, cuya antigüedad no sea inferior a seis meses, misma que se comprobará con el aviso de	**Articulo 14 (segundo párrafo).-** La celebración de los contratos marco no estará sujeta a los procedimientos de contratación previstos en la Ley. En dicha celebración, se atenderán los principios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado, mismos que deberán reflejarse en los contratos específicos señalados en el párrafo anterior. **Artículo 63 (último párrafo).-** A efecto de que los testigos sociales cumplan adecuadamente sus

[5] La LFTAIPG se encuentra abrogada y en su lugar se expidió la LFTAIP el 9 de mayo de 2016.

[6] El reglamento de la LAASSP al referirse a la LFTAIPG, únicamente hacer mención expresa a la contratación de servicios y no así a las adquisiciones o arrendamientos.

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
en PND, política de gasto público, evaluación de los avances, marco macroeconómico, programa financiero, acuerdos de concertación, convenios de coordinación, tipo y fuente de recursos. **Artículo 42 (fracción VII).-**… VII. Lineamientos de carácter general que aseguren el cumplimiento de los criterios establecidos en el segundo párrafo del artículo 1 de esta ley.	alta al régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social. Asimismo, se otorgarán puntos a las micros, pequeñas o medianas empresas que produzcan bienes con innovación tecnológica, conforme a la constancia correspondiente emitida por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, la cual no podrá tener una vigencia mayor a cinco años. De igual manera, se otorgarán puntos a las empresas que hayan aplicado políticas y prácticas de igualdad de género, conforme a la certificación correspondiente emitida por las autoridades y organismos facultados para tal efecto. **Artículo 24.-** La planeación, programación, presupuestación y el gasto de las adquisiciones, arrendamientos y servicios se sujetará a las disposiciones específicas del Presupuesto de Egresos de la Federación, así como a lo previsto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y demás disposiciones aplicables y los recursos destinados a ese fin se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia, honradez e imparcialidad para satisfacer los objetivos a los que fueren destinados. **Artículo 26 (primer y segundo párrafos).-** Las dependencias y entidades seleccionarán de entre los procedimientos que a continuación se señalan, aquél que de acuerdo con la naturaleza de la contratación asegure al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes: I. Licitación pública; II. Invitación a cuando menos tres personas, o III. Adjudicación directa. Las adquisiciones, arrendamientos y servicios se adjudicarán, por regla general, a través de licitaciones públicas, mediante convocatoria pública, para que	funciones, su participación en los procedimientos de contratación deberá comenzar a partir de los actos previos a que se refieren los incisos a) y b) de la fracción II del artículo 67 de este Reglamento, de tal manera que su actuación incida en mayor medida a la transparencia e imparcialidad de dichos procedimientos. En los casos en que la Secretaría de la Función Pública determine designar a un testigo social por el impacto de la contratación en los programas sustantivos de la dependencia o entidad, su participación deberá iniciar en cualquier momento previo a la emisión del fallo correspondiente. **Artículo 67 (fracción III).-** Para el debido ejercicio de las funciones señaladas en la fracción IV del artículo 26 Ter de la Ley, los testigos sociales deberán: … III. Proponer de acuerdo con su experiencia y considerando las disposiciones legales o administrativas vigentes, los aspectos que mejoren la igualdad de condiciones entre los licitantes, la calidad de las contrataciones, así como las acciones que promuevan la eficiencia, eficacia, imparcialidad, transparencia y el combate a la corrupción en las mismas; **Artículo 68 (segundo párrafo, fracción V).-** Al final de su participación en el procedimiento de contratación el testigo social emitirá el testimonio correspondiente, el cual será un documento público y deberá contener lo siguiente: … V. Sus conclusiones sobre el apego a las disposiciones jurídicas aplicables, la transparencia y la imparcialidad del procedimiento de contratación. **Artículo 69 (fracción II).-** La Secretaría de la Función Pública evaluará la actuación de los testigos sociales en los procedimientos de contratación conforme a lo siguiente:

A) Marco normativo complementario y supletorio.

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
	libremente se presenten proposiciones, solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad, crecimiento económico, generación de empleo, eficiencia energética, uso responsable del agua, optimización y uso sustentable de los recursos, así como la protección al medio ambiente y demás circunstancias pertinentes, de acuerdo con lo que establece la presente Ley.	… II. Se podrán realizar encuestas entre los licitantes, sobre la percepción de si la participación de los testigos sociales contribuye a promover la libre participación, inhibir actos de corrupción y fomentar la transparencia;
Artículo 23.- Ejercicio del presupuesto, sujeto estrictamente a los calendarios del presupuesto autorizado.	**Artículo 25 (primer, segundo y último párrafos).-** Las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán convocar, adjudicar o contratar adquisiciones, arrendamientos y servicios, con cargo a su presupuesto autorizado y sujetándose al calendario de gasto correspondiente.	**Artículo 18.-** Una vez que la Secretaría dé a conocer a las dependencias y entidades su calendario de presupuesto autorizado éstas, en términos del artículo 25 de la Ley, podrán realizar los procedimientos de contratación respectivos. **Artículo 71 (segundo párrafo).-** El documento suscrito por el titular del Área requirente señalado en el segundo párrafo del artículo 40 de la Ley… Al documento a que se refiere este artículo, se deberá acompañar la requisición o solicitud de contratación, acreditando la existencia de recursos para iniciar el procedimiento de contratación…
Artículo 35.- Autorización de la secretaria para contratar en el ejercicio fiscal siguiente y para contratos plurianuales. **Artículo 44.-** Distribución de los impuestos aprobados; monto y calendarización del gasto federalizado.	En casos excepcionales, previo a la autorización de su presupuesto, las dependencias y entidades podrán solicitar a la Secretaría su aprobación para convocar, adjudicar y formalizar contratos cuya vigencia inicie en el ejercicio fiscal siguiente de aquél en el que se formalizan…	**Artículo 92 (primer párrafo).-** Las modificaciones por ampliación de la vigencia de contratos de arrendamiento de bienes o de prestación de servicios que requieran la continuidad una vez concluido el ejercicio fiscal en el que originalmente terminó su vigencia no necesitarán la autorización de la Secretaría, siempre y cuando se trate de contratos cuya ampliación de vigencia no exceda el primer trimestre del ejercicio fiscal siguiente y resulte indispensable para no interrumpir la operación regular de las dependencias y entidades…
Artículo 32.- El PEF debe de proveer un capítulo específico de compromisos plurianuales de gasto derivados de	Para los efectos del párrafo anterior, las dependencias y entidades observarán lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. La información sobre	**Artículo 87.-** Cuando la contratación abarque más de un ejercicio fiscal, la garantía de cumplimiento del contrato podrá ser por el porcentaje que corresponda del monto total por erogar en el ejercicio fiscal de que

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
contrataciones públicas, teniendo preferencia: los compromisos excedentes no cubiertos; el servicio de las obligaciones derivadas de proyectos de infraestructura productiva de largo plazo. **Artículo 35.-** Autorización de la secretaria para contratar en el ejercicio fiscal siguiente y para contratos plurianuales. **Artículo 50.-** Contratos plurianuales: justificación, autorización de la secretaria y autorización de PPS.	estos contratos se difundirá a través de CompraNet. **Artículo 29 (fracción XI).-** La convocatoria a la licitación pública, en la cual se establecerán las bases en que se desarrollará el procedimiento y en las cuales se describirán los requisitos de participación, deberá contener: … XI. La indicación respecto a si la contratación abarcará uno o más ejercicios fiscales, si será contrato abierto, y en su caso, la justificación para no aceptar proposiciones conjuntas;	se trate, y deberá ser renovada cada ejercicio fiscal por el monto que se ejercerá en el mismo, la cual deberá presentarse a la dependencia o entidad contratante a más tardar dentro de los primeros diez días naturales del ejercicio fiscal que corresponda… **Artículo 39 (fracción I, inciso d).-** La convocatoria a la licitación pública y, cuando proceda, el Proyecto de convocatoria deberán contener los requisitos que señala el artículo 29 de la Ley y se elaborarán conforme al orden, apartados e información que a continuación se indican: I. Datos generales o de identificación de la licitación pública: … d) La indicación respecto a si la contratación abarcará uno o más ejercicios fiscales, o si se pagará con recursos del ejercicio fiscal inmediato posterior al año en que se hace la publicación, en los términos del segundo párrafo del artículo 25 de la Ley;
Artículo 49.- Los gastos de seguridad pública y nacional son de carácter estratégico.	**Artículo 41 (fracción IV).-** Las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán contratar adquisiciones, arrendamientos y servicios, sin sujetarse al procedimiento de licitación pública, a través de los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa, cuando: … IV. Se realicen con fines exclusivamente militares o para la armada, o su contratación mediante licitación pública ponga en riesgo la seguridad nacional o la seguridad pública, en los términos de las leyes de la materia. …	**Artículo 72 (fracciones IV y VIII).-** Para los efectos de lo establecido en el artículo 41 de la Ley deberá considerarse, respecto de las fracciones de dicho precepto legal, lo que se cita a continuación: … IV. Las dependencias o entidades integrantes del Consejo de Seguridad Nacional podrán sustentar las contrataciones que realicen con fundamento en el primer párrafo de la fracción IV, cuando los bienes o servicios que requieran se encuentren en la base de datos que administra el Comité Técnico del citado Consejo. En estos casos, la investigación de mercado se tendrá por realizada a través de la consulta que se formule a dicha base de datos y el escrito a que se refiere el segundo párrafo del artículo 40 de la Ley, será elaborado por el Área requirente conforme al modelo que haya autorizado dicho Comité, el cual debidamente requisitado obrará en el expediente de

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
		contratación respectivo. …
Artículo 55.- La TESOFE expide las disposiciones generales de las garantías y será la beneficiaria en el caso de las dependencias. **Artículo 56.-** Los ejecutores del gasto no otorgarán garantías para el cumplimiento de sus obligaciones.	**Artículo 48 (fracciones I y II).-** Los proveedores que celebren los contratos a que se refiere esta Ley deberán garantizar: I. Los anticipos que, en su caso, reciban. Estas garantías deberán constituirse por la totalidad del monto de los anticipos, y II. El cumplimiento de los contratos. …	
	Artículo 49 (fracciones I y II).- Las garantías que deban otorgarse conforme a esta Ley se constituirán en favor de: I. La Tesorería de la Federación, por actos o contratos que se celebren con las dependencias; II. Las entidades, cuando los actos o contratos se celebren con ellas, y …	**Artículo 81 (fracción II).-** Además de lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley, el contrato deberá: … II. Señalar que la garantía de cumplimiento se hará efectiva por el monto total de la obligación garantizada, salvo que en los contratos se haya estipulado su divisibilidad. En caso de que por las características de los bienes o servicios entregados éstos no puedan funcionar o ser utilizados por la dependencia o entidad por estar incompletos, la garantía siempre se hará efectiva por el monto total de la obligación garantizada; **Artículo 85 (tercer párrafo, fracción IV).-** En los contratos abiertos de adquisiciones, arrendamientos o servicios a que hace referencia el artículo 47 de la Ley, deberá atenderse lo siguiente: … IV. En caso de que se hubieren pactado las cantidades de bienes o servicios para cada orden de surtimiento, si la dependencia o entidad necesita de cantidades distintas a las pactadas, las mismas podrán suministrarse siempre y cuando el proveedor lo acepte, se formalice la modificación al contrato en los términos de lo dispuesto por el quinto párrafo del artículo 52 de la Ley y se realice el ajuste correspondiente a la garantía otorgada, observándose lo dispuesto por la fracción II del artículo 103 de este

A) Marco normativo complementario y supletorio.

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
		Reglamento, tratándose de fianza; **Artículo 87 (último párrafo).-** En el caso de entregas parciales de bienes o de prestación de servicios realizados, la garantía de cumplimiento podrá reducirse en forma proporcional a los bienes recibidos o a los servicios ya prestados. **Artículo 91 (último párrafo).-** Las modificaciones en monto, plazo o vigencia a los contratos conllevarán el respectivo ajuste a la garantía de cumplimiento cuando dicho incremento no se encuentre cubierto por la garantía originalmente otorgada, para lo cual deberá estipularse en el convenio modificatorio respectivo el plazo para entregar la ampliación de garantía, el cual no deberá exceder de diez días naturales siguientes a la firma de dicho convenio, así como la fecha de entrega de los bienes o de la prestación del servicio para las cantidades adicionales. Tratándose de fianza, el ajuste correspondiente se realizará conforme a lo dispuesto por la fracción II y el último párrafo del artículo 103 de este Reglamento. **Artículo 94 (último párrafo).-** El descuento señalado en el párrafo anterior no se considerará como una modificación al monto del contrato y, en consecuencia, o afectará a la garantía de cumplimiento del mismo. **Artículo 103 (fracción II).-** Los proveedores podrán otorgar las garantías a que se refiere la Ley y este Reglamento, en alguna de las formas previstas en el artículo 137 del Reglamento de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación en el caso de dependencias, o en las disposiciones aplicables tratándose de entidades. Cuando la forma de garantía sea mediante fianza, se observará lo siguiente: … II. En caso de otorgamiento de prórrogas o esperas al

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
		proveedor para el cumplimiento de sus obligaciones, derivadas de la formalización de convenios de ampliación al monto o al plazo del contrato, se deberá realizar la modificación correspondiente a la fianza;
Artículo 116.- Las sanciones e indemnizaciones tienen el carácter de créditos fiscales.	**Artículo 59 (primer párrafo).-** Los licitantes o proveedores que infrinjan las disposiciones de esta Ley, serán sancionados por la Secretaría de la Función Pública con multa equivalente a la cantidad de cincuenta hasta mil veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal elevado al mes, en la fecha de la infracción.	**Artículo 109 (primer párrafo).-** Se sancionará en términos del primer párrafo del artículo 59 de la Ley, a los licitantes que injustificadamente y por causas imputables a los mismos se abstengan de firmar contratos según lo previsto por el segundo párrafo del artículo 46 de dicho ordenamiento, cuando el monto de éstos exceda de cincuenta veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal elevado al mes.
Artículo 115.- Responsabilidad directa y subsidiaria de quienes causen daño o perjuicio a la Hacienda Pública Federal.	**Artículo 61 (primer párrafo).-** La Secretaría de la Función Pública impondrá las sanciones considerando: I. Los daños o perjuicios que se hubieren producido con motivo de la infracción; II. El carácter intencional o no de la acción u omisión constitutiva de la infracción; III. La gravedad de la infracción, y IV. Las condiciones del infractor.	
Artículo 112.- El incumplimiento de esta ley será sancionado conforme a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos en los términos del Título Cuarto de la CPEUM. **Artículo 114 (fracción VIII).-** Se sancionaran a los servidores públicos que incurran en: … VIII. Realicen acciones y omisiones que impidan el ejercicio eficiente, eficaz y oportuno de los recursos.	**Artículo 62 (primer párrafo).-** La Secretaría de la Función Pública aplicará las sanciones que procedan a quienes infrinjan las disposiciones de este ordenamiento, conforme a lo dispuesto por la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. **Artículo 75 (sexto párrafo).-** El desacato de las convocantes a las resoluciones y acuerdos que emita la Secretaría de la Función Pública en los procedimientos de inconformidad será sancionado de acuerdo a lo previsto en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.	**Artículo 130 (último párrafo).-** A los servidores públicos facultados para representar a las dependencias y entidades que, sin causa justificada, omitan dar contestación a la solicitud de conciliación o no asistan a las sesiones respectivas, se les prevendrá de la responsabilidad en que incurren, en términos del primer párrafo del artículo 62 de la Ley. La autoridad que conozca del caso deberá citar a una siguiente audiencia de conciliación.

A) Marco normativo complementario y supletorio.

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
Artículo 117.- Infracciones a esta ley, serán sancionadas penalmente. **Artículo 118.-** Las Sanciones e indemnizaciones de esta ley son independientes de las responsabilidades políticas, penales, administrativas o civiles.	**Artículo 63.-** Las responsabilidades y las sanciones a que se refiere la presente Ley serán independientes de las de orden civil, penal o de cualquier otra índole que puedan derivar de la comisión de los mismos hechos.	
25.- Ley Federal de Procedimiento Administrativo. *4 de agosto de 1994.* **Artículo 28 (primer párrafo).-** Las actuaciones y diligencias administrativas se practicarán en días y horas hábiles. **Artículo 35.-** Formas para realizar las notificaciones, citatorios, emplazamientos, requerimientos, solicitud de informes o documentos y las resoluciones administrativas. **Artículo 36.-** Las notificaciones personales se harán en el domicilio del interesado o en el último domicilio que la persona a quien se deba notificar haya señalado ante los órganos administrativos. **Artículo 37.-** Las notificaciones por edictos se realizarán haciendo publicaciones que contendrán un resumen de las resoluciones por notificar. **Artículo 38.-** Las notificaciones personales surtirán sus efectos	**Artículo 54 (fracciones I y II).-** Las dependencias y entidades podrán en cualquier momento rescindir administrativamente los contratos cuando el proveedor incurra en incumplimiento de sus obligaciones, conforme al procedimiento siguiente: I. Se iniciará a partir de que al proveedor le sea comunicado por escrito el incumplimiento en que haya incurrido, para que en un término de cinco días hábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes; II. Transcurrido el término a que se refiere la fracción anterior, la dependencia o entidad contará con un plazo de quince días para resolver, considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer el proveedor. La determinación de dar o no por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada, motivada y comunicada al proveedor dentro dicho plazo, y …	**Artículo 114 (fracción I).-** La Secretaría de la Función Pública tomará conocimiento de los actos o hechos presuntamente constitutivos de infracciones que cometan los licitantes o proveedores a través, entre otros, de los medios siguientes: I. CompraNet, para lo cual las dependencias y entidades deberán registrar la falta de formalización de los contratos y las rescisiones de los mismos en un plazo máximo de diez días naturales contados a partir de la fecha en que se debió haber realizado la formalización correspondiente o de aquélla en que haya concluido la substanciación del procedimiento de rescisión, de conformidad con el artículo 54 de la Ley;

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
el día en que hubieren sido realizadas. **Artículo 39.-** Toda notificación deberá efectuarse en el plazo máximo de diez días, a partir de la emisión de la resolución o acto que se notifique.		
Artículo 70.- Las sanciones administrativas deberán estar previstas en las leyes respectivas y podrán consistir en: I. Amonestación con apercibimiento; II. Multa; III. Multa adicional por cada día que persista la infracción; IV. Arresto hasta por 36 horas; V. Clausura temporal o permanente, parcial o total; y VI. Las demás que señalen las leyes o reglamentos. **Artículo 70-A.-** Es causa de responsabilidad el incumplimiento de esta Ley y serán aplicables las sanciones previstas en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. En todo caso se destituirá del puesto e inhabilitará cuando menos por un año para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público. **Artículo 71.-** En caso de reincidencia se duplicará la multa impuesta por la infracción	**Artículo 61 (último párrafo).-** En la tramitación del procedimiento para imponer las sanciones a que se refiere este Título, la Secretaría de la Función Pública deberá observar lo dispuesto por el Título Cuarto y demás aplicables de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, aplicando supletoriamente tanto el Código Civil Federal, como el Código Federal de Procedimientos Civiles.	

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
anterior, sin que su monto exceda del doble del máximo. **Artículo 72.-** Para imponer una sanción, la autoridad administrativa deberá notificar previamente al infractor del inicio del procedimiento, para que este dentro de los quince días siguientes exponga lo que a su derecho convenga y, en su caso aporte las pruebas con que cuente. **Artículo 73.-** La autoridad administrativa fundará y motivará su resolución, considerando: I. Los daños que se hubieren producido o puedan producirse; II. El carácter intencional o no de la acción u omisión constitutiva de la infracción; III. La gravedad de la infracción; y IV. La reincidencia del infractor. **Artículo 74.-** Una vez oído al infractor y desahogadas las pruebas ofrecidas y admitidas, se procederá, dentro de los diez días siguientes, a dictar por escrito la resolución que proceda, la cual será notificada en forma personal o por correo certificado. **Artículo 75.-** Las autoridades competentes harán uso de las medidas legales necesarias, incluyendo el auxilio de la		

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
fuerza pública, para lograr la ejecución de las sanciones y medidas de seguridad que procedan. **Artículo 76.-** Las sanciones administrativas podrán imponerse en más de una de las modalidades previstas en el Artículo 70 de esta Ley, salvo el arresto. **Artículo 77 (primer párrafo).-** Cuando en una misma acta se hagan constar diversas infracciones, en la resolución respectiva, las multas se determinarán separadamente así como el monto total de todas ellas. **Artículo 78.-** Las sanciones por infracciones administrativas se impondrán sin perjuicio de las penas que correspondan a los delitos en que, en su caso, incurran los infractores. **Artículo 79.-** La facultad de la autoridad para imponer sanciones administrativas prescribe en cinco años. Los términos de la prescripción serán continuos y se contarán desde el día en que se cometió la falta o infracción administrativa si fuere consumada o, desde que cesó si fuere continua. **Artículo 80 (primer párrafo).-** Cuando el infractor impugnare		

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
los actos de la autoridad administrativa se interrumpirá la prescripción hasta en tanto la resolución definitiva que se dicte no admita ulterior recurso.		
Artículo 83.- Los interesados afectados por los actos y resoluciones de las autoridades administrativas que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, podrán interponer el recurso de revisión o, cuando proceda, intentar la vía jurisdiccional que corresponda. En los casos de actos de autoridad de los organismos descentralizados federales, de los servicios que el Estado presta de manera exclusiva a través de dichos organismos y de los contratos que los particulares sólo pueden celebrar con aquéllos, que no se refieran a las materias excluidas de la aplicación de esta Ley, el recurso de revisión previsto en el párrafo anterior también podrá interponerse en contra de actos y resoluciones que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente. **Artículo 84.-** La oposición a los actos de trámite en un procedimiento administrativo deberá alegarse por los	**Artículo 74 (último párrafo).-** La resolución que ponga fin a la instancia de inconformidad o, en su caso, a la intervención de oficio podrá impugnarse por el inconforme o tercero interesado mediante el recurso de revisión previsto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, o bien, cuando proceda, ante las instancias jurisdiccionales competentes. **Artículo 75 (primer y quinto párrafos).-** La convocante acatará la resolución que ponga fin a la inconformidad en un plazo no mayor de seis días hábiles. Sólo podrá suspenderse la ejecución de las resoluciones mediante determinación de autoridad administrativa o judicial competente. … La resolución que ponga fin al incidente previsto en este artículo podrá impugnarse por el inconforme o tercero interesado mediante el recurso de revisión previsto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, o bien, cuando proceda, ante las instancias jurisdiccionales competentes. …	

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
interesados durante dicho procedimiento… **Artículo 85.-** El plazo para interponer el recurso de revisión será de quince días contado a partir del día siguiente a aquél en que hubiere surtido efectos la notificación de la resolución que se recurra. **Artículo 86.-** El escrito de interposición del recurso de revisión deberá presentarse ante la autoridad que emitió el acto impugnado y será resuelto por el superior jerárquico… **Artículo 87 (primer párrafo).-** La interposición del recurso suspenderá la ejecución del acto impugnado, siempre y cuando: I. Lo solicite expresamente el recurrente; II. Sea procedente el recurso; III. No se siga perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden público; IV. No se ocasionen daños o perjuicios a terceros, a menos que se garanticen éstos para el caso de no obtener resolución favorable; y V. Tratándose de multas, el recurrente garantice el crédito fiscal en cualesquiera de las formas prevista en el Código Fiscal de la Federación.		

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
Artículo 88.- El recurso se tendrá por no interpuesto y se desechará cuando: I. Se presente fuera de plazo; II. No se haya acompañado la documentación que acredite la personalidad del recurrente; y III. No aparezca suscrito por quien deba hacerlo, a menos que se firme antes del vencimiento del plazo para interponerlo. **Artículo 89.-** Se desechará por improcedente el recurso: I. Contra actos que sean materia de otro recurso y que se encuentre pendiente de resolución, promovido por el mismo recurrente y por el propio acto impugnado; II. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos del promovente; III. Contra actos consumados de un modo irreparable; IV. Contra actos consentidos expresamente; y V. Cuando se esté tramitando ante los tribunales algún recurso o defensa legal interpuesto por el promovente, que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto respectivo**.** **Artículo 90.-** Supuestos de sobreseimiento. **Artículo 91.-** La autoridad		

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
encargada de resolver el recurso podrá: I. Desecharlo por improcedente o sobreseerlo; II. Confirmar el acto impugnado; III. Declarar la inexistencia, nulidad o anulabilidad del acto impugnado o revocarlo total o parcialmente; y IV. Modificar u ordenar la modificación del acto impugnado o dictar u ordenar expedir uno nuevo que lo sustituya, cuando el recurso interpuesto sea total o parcialmente resuelto a favor del recurrente. **Artículo 92 (primer párrafo).-** La resolución del recurso se fundará en derecho y examinará todos y cada uno de los agravios hechos valer por el recurrente teniendo la autoridad la facultad de invocar hechos notorios; pero, cuando uno de los agravios sea suficiente para desvirtuar la validez del acto impugnado bastará con el examen de dicho punto. **Artículo 93 (primer párrafo).-** No se podrán revocar o modificar los actos administrativos en la parte no impugnada por el recurrente. **Artículo 94.-** El recurrente podrá esperar la resolución		

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
expresa o impugnar en cualquier tiempo la presunta confirmación del acto impugnado. **Artículo 95 (primer párrafo).-** La autoridad podrá dejar sin efectos un requerimiento o una sanción, de oficio o a petición de parte interesada, cuando se trate de un error manifiesto o el particular demuestre que ya había dado cumplimiento con anterioridad. **Artículo 96 (primer párrafo).-** Cuando hayan de tenerse en cuenta nuevos hechos o documentos que no obren en el expediente original derivado del acto impugnado, se pondrá de manifiesto a los interesados para que, en un plazo no inferior a cinco días ni superior a diez, formulen sus alegatos y presenten los documentos que estime procedentes.		
Artículo 15.- La Administración Pública Federal no podrá exigir más formalidades que las expresamente previstas en la ley. Las promociones deberán hacerse por escrito en el que se precisará el nombre, denominación o razón social de quién o quiénes promuevan, en su caso de su representante legal, domicilio para recibir	**Artículo 77.** En cualquier momento los proveedores o las dependencias y entidades podrán presentar ante la Secretaría de la Función Pública solicitud de conciliación, por desavenencias derivadas del cumplimiento de los contratos o pedidos.	**Artículo 128 (primer párrafo).-** El escrito de solicitud de conciliación que presente el proveedor o la dependencia o entidad, además de contener los elementos previstos en el artículo 15 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, deberá hacer referencia al objeto, vigencia y monto del contrato y, en su caso, a los convenios modificatorios, debiendo adjuntar copia de dichos instrumentos debidamente suscritos…

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
notificaciones, así como nombre de la persona o personas autorizadas para recibirlas, la petición que se formula, los hechos o razones que dan motivo a la petición, el órgano administrativo a que se dirigen y lugar y fecha de su emisión. El escrito deberá estar firmado por el interesado o su representante legal, a menos que no sepa o no pueda firmar, caso en el cual, se imprimirá su huella digital. El promovente deberá adjuntar a su escrito los documentos que acrediten su personalidad, así como los que en cada caso sean requeridos en los ordenamientos respectivos.		
26.- Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. *13 de marzo de 2002*. *Ley abrogada a partir del 19 de julio de 2017 por Decreto del 18 de julio de 2016.* **Artículo 8 (fracciones XI y XX).-** Obligaciones de los servidores públicos: XI. Excusarse de intervenir, por motivo de su encargo, en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de	**Artículo 50 (fracción I).-** Las dependencias y entidades se abstendrán de recibir proposiciones o adjudicar contrato alguno en las materias a que se refiere esta Ley, con las personas siguientes: I. Aquéllas en que el servidor público que intervenga en cualquier etapa del procedimiento de contratación tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquéllas de las que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o sus parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios	

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
negocios... XX. Abstenerse, en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, de celebrar o autorizar la celebración de pedidos o contratos relacionados con adquisiciones, arrendamientos y enajenación de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra pública o de servicios relacionados con ésta, con quien desempeñe un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o bien con las sociedades de las que dichas personas formen parte. Por ningún motivo podrá celebrarse pedido o contrato alguno con quien se encuentre inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público;	o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte durante los dos años previos a la fecha de celebración del procedimiento de contratación de que se trate; …	
Artículo 14 (primer párrafo).- Para la imposición de las sanciones administrativas se tomarán en cuenta los elementos propios del empleo, cargo o comisión que desempeñaba el servidor público cuando incurrió en la falta, que a continuación se refieren: I.- La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan,	**Artículo 61.-** La Secretaría de la Función Pública impondrá las sanciones considerando: I. Los daños o perjuicios que se hubieren producido con motivo de la infracción; II. El carácter intencional o no de la acción u omisión constitutiva de la infracción; III. La gravedad de la infracción, y IV. Las condiciones del infractor.	

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
en cualquier forma, las disposiciones de la Ley o las que se dicten con base en ella; II.- Las circunstancias socioeconómicas del servidor público; III.- El nivel jerárquico y los antecedentes del infractor, entre ellos la antigüedad en el servicio; IV.- Las condiciones exteriores y los medios de ejecución; V.- La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones, y VI.- El monto del beneficio, lucro, o daño o perjuicio derivado del incumplimiento de obligaciones. **Artículo 17 Bis.-** La Secretaría, el contralor interno o el titular del área de responsabilidades podrán abstenerse de iniciar el procedimiento disciplinario previsto en el artículo 21 de esta Ley o de imponer sanciones administrativas a un servidor público, cuando de las investigaciones o revisiones practicadas adviertan que se actualiza la siguiente hipótesis: Que por una sola vez, por un mismo hecho y en un período de un año, la actuación del servidor público, en la atención, trámite o resolución de asuntos a su cargo, está referida a una		

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
cuestión de criterio o arbitrio opinable o debatible, en la que válidamente puedan sustentarse diversas soluciones, siempre que la conducta o abstención no constituya una desviación a la legalidad y obren constancias de los elementos que tomó en cuenta el servidor público en la decisión que adoptó, o que el acto u omisión fue corregido o subsanado de manera espontánea por el servidor público o implique error manifiesto y en cualquiera de estos supuestos, los efectos que, en su caso, se hubieren producido, desaparecieron o se hayan resarcido.		
Artículo 3 (fracción III).- En el ámbito de su competencia, serán autoridades facultadas para aplicar la presente Ley: … III.- La Secretaría de la Función Pública; **Artículo 11.-** Las autoridades establecerán órganos y sistemas para determinar las responsabilidades derivadas del incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 8, así como para imponer las sanciones previstas en el presente capítulo. **Artículo 12.-** Los servidores	**Artículo 62 (primer párrafo).-** La Secretaría de la Función Pública aplicará las sanciones que procedan a quienes infrinjan las disposiciones de este ordenamiento, conforme a lo dispuesto por la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.	**Artículo 130 (último párrafo).-** A los servidores públicos facultados para representar a las dependencias y entidades que, sin causa justificada, omitan dar contestación a la solicitud de conciliación o no asistan a las sesiones respectivas, se les prevendrá de la responsabilidad en que incurren, en términos del primer párrafo del artículo 62 de la Ley. La autoridad que conozca del caso deberá citar a una siguiente audiencia de conciliación.

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
públicos de las secretarias que incurran en responsabilidad por incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 8 serán sancionados conforme al presente capítulo... **Artículo 13 (primer párrafo).-** Las sanciones por falta administrativa consistirá en: I.- Amonestación privada o pública; II.- Suspensión del empleo, cargo o comisión por un período no menor de tres días ni mayor a un año; III.- Destitución del puesto; IV.- Sanción económica, e V.- Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público. **Artículo 17.-** La Secretaría impondrá las sanciones correspondientes a los contralores internos y a los titulares de las áreas de auditoría, de quejas y de responsabilidades cuando se abstengan injustificadamente de investigar o sancionar a los infractores, o que al hacerlo no se ajusten a las disposiciones jurídicas o administrativas aplicables, así como cuando incurran en actos u omisiones que impliquen responsabilidad administrativa.		

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
Artículo 19.- Si la Secretaría o el contralor interno tuvieran conocimiento de hechos que impliquen responsabilidad penal, deberán denunciarlos ante el Ministerio Público o, en su caso, instar al área jurídica de la dependencia o entidad respectiva a que formule las querellas a que hubiere lugar, cuando así se requiera. **Artículo 20 (primer párrafo).-** Para el cumplimiento de sus atribuciones, la Secretaría, el contralor interno o los titulares de las áreas de auditoría, de quejas y de responsabilidades, llevarán a cabo investigaciones debidamente motivadas o auditorías respecto de las conductas de los servidores públicos que puedan constituir responsabilidades administrativas, para lo cual éstos, las dependencias o entidades deberán proporcionar la información y documentación que les sean requeridas. **Artículo 21.-** La Secretaría, el contralor interno o el titular del área de responsabilidades impondrán las sanciones administrativas a que se refiere este Capítulo mediante el siguiente procedimiento: I.- Citará al presunto responsable a una audiencia,		

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
notificándole que deberá comparecer personalmente a rendir su declaración en torno a los hechos que se le imputen y que puedan ser causa de responsabilidad en los términos de la Ley, y demás disposiciones aplicables. … II.- Concluida la audiencia, se concederá al presunto responsable un plazo de cinco días hábiles para que ofrezca los elementos de prueba que estime pertinentes y que tengan relación con los hechos que se le atribuyen; III.- Desahogadas las pruebas que fueren admitidas, la Secretaría, el contralor interno o el titular del área de responsabilidades resolverán dentro de los cuarenta y cinco días hábiles siguientes sobre la inexistencia de responsabilidad o impondrá al infractor las sanciones administrativas correspondientes y le notificará la resolución en un plazo no mayor de diez días hábiles. IV.- Durante la sustanciación del procedimiento la Secretaría, el contralor interno o el titular del área de responsabilidades, podrán practicar todas las diligencias tendientes a investigar la presunta		

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
responsabilidad del servidor público denunciado… V.- Previa o posteriormente al citatorio al presunto responsable, la Secretaría, el contralor interno o el titular del área de responsabilidades podrán determinar la suspensión temporal de su empleo, cargo o comisión, si a su juicio así conviene para la conducción o continuación de las investigaciones… **Artículo 25.-** Los servidores públicos que resulten responsables en los términos de las resoluciones administrativas que se dicten conforme a lo dispuesto por la Ley, podrán optar entre interponer el recurso de revocación o impugnarlas directamente ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. **Artículo 30 (primer párrafo).-** La ejecución de las sanciones administrativas se llevará a cabo de inmediato, una vez que sean impuestas por la Secretaría, el contralor interno o el titular del área de responsabilidades, y conforme se disponga en la resolución respectiva. **Artículo 31.-** Si el servidor público presunto responsable		

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
confesare su responsabilidad por el incumplimiento de las obligaciones a que hace referencia la Ley, se procederá de inmediato a dictar resolución, a no ser que quien conoce del procedimiento disponga la recepción de pruebas para acreditar la veracidad de la confesión…		
Artículo 7.- Será responsabilidad de los sujetos de la Ley ajustarse, en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, a las obligaciones previstas en ésta, a fin de salvaguardar los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que rigen en el servicio público.	**Artículo 63 (primer párrafo).-** Las responsabilidades y las sanciones a que se refiere la presente Ley serán independientes de las de orden civil, penal o de cualquier otra índole que puedan derivar de la comisión de los mismos hechos.	
Artículo 32 (primer párrafo).- Para el cumplimiento de las atribuciones que les confiere la Ley, la Secretaría, el contralor interno o los titulares de las áreas de auditoría, de quejas y de responsabilidades, podrán emplear los siguientes medios de apremio: I.- Multa de hasta veinte veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal, y II.- Auxilio de la fuerza pública.	**Artículo 75 (sexto párrafo).-** El desacato de las convocantes a las resoluciones y acuerdos que emita la Secretaría de la Función Pública en los procedimientos de inconformidad será sancionado de acuerdo a lo previsto en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.	**Artículo 115 (último párrafo).-** Cuando de las actuaciones previstas en este artículo se adviertan posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos, se dará vista a la autoridad de la Secretaría de la Función Pública competente en esa materia para que resuelva lo conducente.
27.- Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.	**Artículo 19 (penúltimo y último párrafo).-** La erogación para la contratación de servicios de consultorías, asesorías, estudios e investigaciones,	

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
9 de mayo de 2016. Título Cuarto. Información clasificada de los artículos 97 al 120. **Artículo 97 (primer párrafo).-** La clasificación es el proceso mediante el cual el sujeto obligado determina que la información en su poder actualiza alguno de los supuestos de reserva o confidencialidad… **Artículo 110.-** Supuestos de información reservada. I. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un propósito genuino y un efecto demostrable; II. Pueda menoscabar la conducción de las negociaciones y relaciones internacionales; III. Se entregue al Estado mexicano expresamente con ese carácter o el de confidencial por otro u otros sujetos de derecho internacional, excepto cuando se trate de violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad de conformidad con el derecho	requerirá de la autorización escrita del titular de la dependencia o entidad, o aquel servidor público en quién éste delegue dicha atribución, así como del dictamen del área respectiva, de que no se cuenta con personal capacitado o disponible para su realización. La delegación a que se refiere el párrafo anterior, en ningún caso podrá recaer en servidor público con nivel inferior al de director general en las dependencias o su equivalente en las entidades.[7]	

[7] "Se puede llevar a cabo mediante adjudicación directa cuando la información que se tenga que proporcionar a los participantes para elaborar su proposición, se encuentre reservada en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se cumpla con lo previsto en la fracción VIII del artículo 72 del RLAASSP" Gómez de Lara, Fernando, Comentarios a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y servicios del sector público, México, Novum, 2012, p. 53

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
internacional; IV. Pueda afectar la efectividad de las medidas adoptadas en relación con las políticas en materia monetaria, cambiaria o del sistema financiero del país; pueda poner en riesgo la estabilidad de las instituciones financieras susceptibles de ser consideradas de riesgo sistémico o del sistema financiero del país, pueda comprometer la seguridad en la provisión de moneda nacional al país, o pueda incrementar el costo de operaciones financieras que realicen los sujetos obligados del sector público federal; V. Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física; VI. Obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al cumplimiento de las leyes o afecte la recaudación de contribuciones; VII. Obstruya la prevención o persecución de los delitos; VIII. La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los Servidores Públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual		

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
deberá estar documentada; IX. Obstruya los procedimientos para fincar responsabilidad a los Servidores Públicos, en tanto no se haya dictado la resolución administrativa; X. Afecte los derechos del debido proceso; XI. Vulnere la conducción de los Expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado; XII. Se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como delitos y se tramiten ante el Ministerio Público, y XIII. Las que por disposición expresa de una ley tengan tal carácter, siempre que sean acordes con las bases, principios y disposiciones establecidos en la Ley General y esta Ley y no las contravengan; así como las previstas en tratados internacionales.		

A) Marco normativo complementario y supletorio.

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
	Artículo 21 (primer párrafo).- Las dependencias y entidades pondrán a disposición del público en general, a través de CompraNet y de su página en Internet, a más tardar el 31 de enero de cada año, su programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios correspondiente al ejercicio fiscal de que se trate, con excepción de aquella información que, de conformidad con las disposiciones aplicables, sea de naturaleza reservada o confidencial, en los términos establecidos en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. **Artículo 37 (tercer párrafo).-** En el fallo no se deberá incluir información reservada o confidencial, en los términos de las disposiciones aplicables. **Artículo 41 (fracción X, segundo párrafo).-** Las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán contratar adquisiciones, arrendamientos y servicios, sin sujetarse al procedimiento de licitación pública, a través de los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa, cuando: … X. Se trate de servicios de consultorías, asesorías, estudios o investigaciones… Sólo podrá autorizarse la contratación mediante adjudicación directa, cuando la información que se tenga que proporcionar a los licitantes para la elaboración de su proposición, se encuentre reservada en los términos establecidos en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; …	**Artículo 15 (primer párrafo).-** Para efectos del primer párrafo del artículo 19 de la Ley, la Oficialía Mayor o equivalente de las dependencias o entidades será responsable de concentrar y proporcionar a las unidades administrativas que lo soliciten, la información correspondiente a las consultorías, asesorías, estudios e investigaciones contratados por las mismas. **Artículo 72 (fracción VIII).-** Para los efectos de lo establecido en el artículo 41 de la Ley deberá considerarse, respecto de las fracciones de dicho precepto legal, lo que se cita a continuación: … VIII. Se entenderá por servicios de consultorías, asesorías, estudios o investigaciones a que se refiere la fracción X, los siguientes: a) Estandarizados: los que impliquen el desarrollo de soluciones o metodologías eficientes para resolver problemas comunes, recurrentes o de complejidad menor que se presentan en la Administración Pública Federal; b) Personalizados o a la medida: los que desarrollan soluciones o metodologías eficientes diseñadas o

A) Marco normativo complementario y supletorio.

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
		creadas ex profeso para resolver problemas específicos no comunes en la Administración Pública Federal, y c) Especializados: los relativos a trabajos que requieran alta especialización y se relacionen con un determinado sector o área del conocimiento, para desarrollar soluciones o metodologías eficientes que permitan resolver problemas complejos y que pueden tener un alto impacto social o económico.
	Artículo 56, (segundo y tercer párrafos, fracciones II, III; cuarto párrafo, inciso f).-… La administración del sistema electrónico de información pública gubernamental sobre adquisiciones, arrendamientos y servicios, estará a cargo de la Secretaría de la Función Pública, a través de la unidad administrativa que determine su Reglamento, en el cual las dependencias, entidades y los demás sujetos de esta Ley, deberán incorporar la información que ésta les requiera. El sistema a que se refiere el párrafo anterior, tendrá los siguientes fines: … II. Propiciar la transparencia y seguimiento de las adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, y III. Generar la información necesaria que permita la adecuada planeación, programación y presupuestación de las contrataciones públicas, así como su evaluación integral. … f) Los datos de los contratos suscritos, a que se refiere el artículo 7 fracción XIII, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; **Artículo 56 Bis (segundo párrafo).** El sistema integral de información contará, en los términos del Reglamento de esta Ley, con un registro único de	**Artículo 17.-** Los programas anuales de adquisiciones, arrendamientos y servicios deberán actualizarse, cuando proceda, durante los últimos cinco días hábiles de cada mes. **Artículo 49 (segundo párrafo).-** Las notificaciones a los licitantes respecto de los actos del procedimiento de contratación se realizarán a través de CompraNet. **Artículo 10.-** Para asegurar al Estado las mejores condiciones a que se refiere el artículo 26 de la Ley, los estudios de factibilidad previstos en el artículo 12 de la Ley, deben analizar la conveniencia para la adquisición, arrendamiento o arrendamiento con opción a compra de bienes, para lo cual se considerarán, entre otros aspectos, los costos de mantenimiento y consumibles que se tengan que pagar en cada caso. **Artículo 105.-** El registro único de proveedores señalado en el artículo 56 Bis de la Ley, que forma parte de CompraNet, se integrará con la información

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
	proveedores, el cual los clasificará de acuerdo, entre otros aspectos, por su actividad, datos generales, nacionalidad e historial en materia de contrataciones y su cumplimiento. Este registro deberá ser permanente y estar a disposición de cualquier interesado, salvo en aquellos casos que se trate de información de naturaleza reservada, en los términos establecidos en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.	que proporcionen los proveedores, así como con aquélla que incorporen los sujetos a que se refieren las fracciones I a VI del artículo 1 de la Ley, derivada de los procedimientos de contratación que lleven a cabo conforme a la Ley.
28.- Ley Federal del Derecho de Autor. *24 de diciembre de 1996.* **Artículo 5 (segundo párrafo).-** El reconocimiento de los derechos de autor y de los derechos conexos no requiere registro ni documento de ninguna especie ni quedará subordinado al cumplimiento de formalidad alguna. **Artículo 18.-** El autor es el único, primigenio y perpetuo titular de los derechos morales sobre las obras de su creación. **Artículo 83.-** Salvo pacto en contrario, la persona física o moral que comisione la producción de una obra o que la produzca con la colaboración remunerada de otras, gozará de la titularidad de los derechos patrimoniales sobre la misma. La persona que participe en la realización de la obra, en forma remunerada, tendrá el derecho a que se le mencione	**Artículo 41 (fracción I).-** Las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán contratar adquisiciones, arrendamientos y servicios, sin sujetarse al procedimiento de licitación pública, a través de los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa, cuando: I. No existan bienes o servicios alternativos o sustitutos técnicamente razonables, o bien, que en el mercado sólo existe un posible oferente, o se trate de una persona que posee la titularidad o el licenciamiento exclusivo de patentes, derechos de autor, u otros derechos exclusivos, o por tratarse de obras de arte; **Artículo 45 (fracción XX).-** El contrato o pedido contendrá, en lo aplicable, lo siguiente: … XX. La indicación de que en caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad estará a cargo del licitante o proveedor según sea el caso. Salvo que exista impedimento, la estipulación de que los derechos inherentes a la propiedad intelectual, que se	**Artículo 72 (fracción II).-** Para los efectos de lo establecido en el artículo 41 de la Ley deberá considerarse, respecto de las fracciones de dicho precepto legal, lo que se cita a continuación: … II. Para acreditar que en el mercado sólo existe un posible oferente, o se trata de una persona que posee la titularidad o el licenciamiento exclusivo de patentes, derechos de autor, u otros derechos exclusivos, a que hace referencia la fracción I, se deberán acompañar los documentos con los que se acredite tal situación, como son los registros, títulos, certificaciones, acuerdos comerciales, autorizaciones, designaciones, contratos de licenciamiento o cesión emitidos por o registrados ante las autoridades nacionales competentes en su caso, o conforme a las disposiciones o prácticas del país de origen, así como con los que se determine el alcance o implicaciones jurídicas de los derechos mencionados.

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
expresamente su calidad de autor, entre otros.	deriven de los servicios de consultorías, asesorías, estudios e investigaciones contratados, invariablemente se constituirán a favor de la dependencia o de la entidad, según corresponda, en términos de las disposiciones legales aplicables;	
29.- Ley Federal sobre Metrología y Normalización. *1 de julio de 1992* **Artículo 3 (fracciones X y X-A).-** Se entenderá por: … X. Norma mexicana: la que elabore un organismo nacional de normalización, o la Secretaría, en los términos de esta Ley, que prevé para un uso común y repetido reglas, especificaciones, atributos, métodos de prueba, directrices, características o prescripciones aplicables a un producto, proceso, instalación, sistema, actividad, servicio o método de producción u operación, así como aquellas relativas a terminología, simbología, embalaje, marcado o etiquetado; X-A. Norma o lineamiento internacional: la norma, lineamiento o documento normativo que emite un organismo internacional de normalización u otro organismo internacional relacionado con la materia, reconocido por el gobierno mexicano en los	**Artículo 20 (fracción VII).-** Las dependencias y entidades formularán sus programas anuales de adquisiciones, arrendamientos y servicios, y los que abarquen más de un ejercicio presupuestal, así como sus respectivos presupuestos, considerando: … VII. Las normas aplicables conforme a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización o, a falta de éstas, las normas internacionales;	**Artículo 31 (primer, segundo y último párrafos).-** En los procedimientos de contratación que realicen las personas las dependencias y entidades, deben exigir el cumplimiento de las normas mexicanas y a falta de estas las internacionales, de conformidad con la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. Si las normas a que se refiere el párrafo anterior no cubren los requerimientos técnicos, o bien, si sus especificaciones resultan inaplicables u obsoletas, la convocante podrá solicitar el cumplimiento de las normas de referencia o especificaciones a que se refiere el artículo 67 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, siempre que se acredite, en los términos del presente Reglamento, que no se limita la libre participación de los licitantes. … Tratándose de bienes de inversión, en la convocatoria a la licitación pública podrá requerirse que los licitantes entreguen copia simple del certificado expedido por las personas acreditadas, conforme a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. **Artículo 32 (segundo párrafo).-** Sólo podrá solicitarse que los licitantes cuenten con un sistema de gestión de la calidad en la producción de bienes o servicios, cuando se verifique y se deje constancia en el expediente de lo siguiente: … En los casos a que se refiere este artículo, el licitante deberá entregar, junto con su proposición, copia simple del certificado expedido por la persona acreditada conforme a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, en el que se establezca

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
términos del derecho internacional; **Artículo 40.-** Finalidad de las normas oficiales mexicanas. **Artículo 49.-** Cuando una norma oficial mexicana obligue al uso de materiales, equipos, procesos, métodos de prueba, mecanismos, procedimientos o tecnologías específicos, los destinatarios de las normas pueden solicitar la autorización a la dependencia que la hubiere expedido para utilizar o aplicar materiales, equipos, procesos, métodos de prueba, mecanismos, procedimientos o tecnologías alternativos. **Artículo 51-A.-** Las normas mexicanas son de aplicación voluntaria y su campo de aplicación puede ser nacional, regional o local. **Artículo 52.-** Todos los productos, procesos, métodos, instalaciones, servicios o actividades deberán cumplir con las normas oficiales mexicanas. **Artículo 53.-** Cuando un producto o servicio deba cumplir una determinada norma oficial mexicana, sus similares a importarse también deberán cumplir las especificaciones establecidas en dicha norma. **Artículo 54.-** Las normas		que cuenta con los sistemas de gestión de calidad, los cuales deberán amparar la totalidad del proceso productivo del bien o servicio requerido por la dependencia o entidad.

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
mexicanas, constituirán referencia para determinar la calidad de los productos y servicios y para la protección y orientación de los consumidores. **Artículo 67.-** Las entidades de la administración pública federal, deberán constituir comités de normalización para la elaboración de las normas de referencia conforme a las cuales adquieran, arrienden o contraten bienes o servicios, cuando las normas mexicanas o internacionales no cubran los requerimientos de las mismas.		
	Artículo 29 (fracción X).- La convocatoria a la licitación pública, en la cual se establecerán las bases en que se desarrollará el procedimiento y en las cuales se describirán los requisitos de participación, deberá contener: … X. Si para verificar el cumplimiento de las especificaciones solicitadas se requiere de la realización de pruebas, se precisará el método para ejecutarlas y el resultado mínimo que deba obtenerse, de acuerdo con la Ley Federal sobre Metrología y Normalización;	**Artículo 39 (fracciones II, inciso e) y VI inciso c).-** La convocatoria a la licitación pública y, cuando proceda, el Proyecto de convocatoria deberán contener los requisitos que señala el artículo 29 de la Ley y se elaborarán conforme al orden, apartados e información que a continuación se indican: … II. Objeto y alcance de la licitación pública, precisando: … e) Para el caso previsto en la fracción X del artículo 29 de la Ley, se deberá especificar el método que se utilizará para realizar las pruebas que permitan verificar el cumplimiento de las especificaciones de los bienes a adquirir o arrendar o servicios a contratar; la institución pública o privada que las realizará y el momento para efectuarlas, así como la unidad de medida con la cual se determinará el resultado mínimo que deberá obtenerse en las pruebas señaladas.

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
		VI. Documentos y datos que deben presentar los licitantes, entre los que se encuentran los siguientes: … c) La copia de los documentos mediante los cuales el licitante acreditará el cumplimiento de las normas, especificaciones o sistemas solicitados conforme a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y los artículos 31 y 32 de este Reglamento;
Artículo 3 (fracciones IV-A y XV-A).- Se entenderá por: **IV-A.** Evaluación de la conformidad: la determinación del grado de cumplimiento con las normas oficiales mexicanas o la conformidad con las normas mexicanas, las normas internacionales u otras especificaciones, prescripciones o características. **XV-A.** Personas acreditadas: los organismos de certificación, unidades de verificación, entre otros, reconocidos por una entidad de acreditación para la evaluación de la conformidad;	**Artículo 58 (primer párrafo).-** La Secretaría de la Función Pública podrá verificar la calidad de los bienes muebles a través de la propia dependencia o entidad de que se trate, o mediante las personas acreditadas en los términos que establece la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.	**Artículo 84 (último párrafo).-** Las dependencias y entidades deberán prever en la convocatoria a la licitación pública o en la invitación a cuando menos tres personas y en los contratos, la forma y términos en que se realizará la verificación de las especificaciones y la aceptación de los bienes y servicios, así como la conformidad del proveedor de que hasta en tanto ello no se cumpla, éstos no se tendrán por recibidos o aceptados. **Artículo 108.-** Con independencia de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 58 de la Ley, las dependencias y entidades deberán verificar la calidad de los bienes que hubieren adquirido o arrendado y, de ser necesario, de aquéllos que utilizarán para la prestación de un servicio. En caso de que no cuenten con el personal especializado o los elementos necesarios para efectuar la verificación, deberán contratar a las personas físicas o morales acreditadas para llevarla a cabo.
30.- Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, *27 de julio de 1931.* **Artículo 2.-** Las únicas monedas circulantes serán: a) Los billetes. b) Las monedas metálicas con características que señalen los decretos relativos. c) Las monedas metálicas	**Artículo 45 (fracción XIII).-** El contrato o pedido contendrá, en lo aplicable, lo siguiente: … XIII. Moneda en que se cotizó y se efectuará el pago respectivo, el cual podrá ser en pesos mexicanos o moneda extranjera de acuerdo a la determinación de la convocante, de conformidad con la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos; …	**Artículo 30.-** El análisis de la información obtenida en la investigación de mercado se efectuará considerando las mismas condiciones en cuanto a… la moneda a cotizar… **Artículo 37.-** La Secretaría de Economía publicará una relación de los casos en los que, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 28 de la Ley, los licitantes deberán manifestar, bajo protesta de decir verdad, que los precios que se presentan en su propuesta económica no se cotizan en condiciones de

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
conmemorativas. d) Derogado. e) Derogado. **Artículo 3.-** Los pagos en efectivo de obligaciones en moneda nacional cuyo importe comprenda fracciones de la unidad monetaria que no sean múltiplos de cinco centavos, se efectuarán ajustando el monto del pago, al múltiplo de cinco centavos más próximo a dicho importe. **Artículo 7 (primer párrafo).-** Las obligaciones de pago de cualquier suma en moneda mexicana se denominarán invariablemente en pesos y, en su caso, sus fracciones. Dichas obligaciones se solventarán mediante la entrega, por su valor nominal, de billetes del Banco de México o monedas metálicas de las señaladas en el artículo 2o. **Artículo 8 (primer y segundo párrafos).-** La moneda extranjera no tendrá curso legal en la República, salvo en los casos en que la Ley expresamente determine otra cosa. Las obligaciones de pago en moneda extranjera contraídas dentro o fuera de la República para ser cumplidas en ésta, se solventarán entregando el equivalente en		prácticas desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminación de precios o subsidios. Cuando las dependencias y entidades, a través de una licitación pública internacional pretendan adquirir algún bien que se encuentre en la relación de casos a que se refiere el párrafo anterior… En el escrito previsto en el párrafo anterior, el licitante señalará el precio promedio de su bien puesto en planta, prevaleciente en el mercado interno del país exportador, o de exportación a un país distinto de México, en un período de un año anterior a la fecha de presentación de la proposición y en la misma moneda de la propuesta con la que participa en la licitación pública. La omisión en la presentación del escrito de referencia será motivo para desechar la proposición del licitante. … **Artículo 39 (fracción II, inciso i, numeral 2).-** La convocatoria a la licitación pública y, cuando proceda, el Proyecto de convocatoria deberán contener… II. Objeto y alcance de la licitación pública, precisando: i) En el modelo de contrato, respecto de los requisitos a que se refiere el artículo 45 de la Ley, los siguientes aspectos según corresponda: 2. La fuente oficial que se tomará para llevar a cabo la conversión y la tasa de cambio o la fecha a considerar para hacerlo, en caso de pago en moneda extranjera;

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
moneda nacional, al tipo de cambio que rija en el lugar y fecha en que se haga el pago. Este tipo de cambio se determinará conforme a las disposiciones que para esos efectos expida el Banco de México en los términos de su Ley Orgánica. **Artículo 1.-** La unidad del sistema monetario de los Estados Unidos Mexicanos es el peso, con la equivalencia que por ley se señalará posteriormente.		**Artículo 64 (fracción I).-** Las solicitudes que formulen las dependencias y entidades para que se designe a un testigo social en un procedimiento de contratación, deberán enviarse por escrito a la Secretaría de la Función Pública, debiendo proporcionar la siguiente información: I. El monto estimado de la contratación en moneda nacional. **Artículo 81 (fracción V).-** Además de lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley, el contrato deberá: … V. Indicar que los anticipos que otorguen las dependencias y entidades deberán amortizarse proporcionalmente en cada uno de los pagos; su garantía deberá constituirse por el importe total del anticipo otorgado, en la misma moneda en la que se otorgue el anticipo de acuerdo con las disposiciones legales aplicables, la que se cancelará hasta que se haya realizado la amortización total;
31.- ⇒***Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.*** *29 de diciembre de 1976.* **Artículo 1.-** Establece las bases de organización de la Administración Pública Federal, centralizada y paraestatal.	**Artículo 1 (fracciones I, II, III, IV y V, segundo párrafo).-** La presente Ley es de orden público y tiene por objeto reglamentar la aplicación del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos	

⇒ Forma parte de las siete leyes que integran el Sistema Nacional Anticorrupción.

A) Marco normativo complementario y supletorio.

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
La Oficina de la Presidencia de la República, las Secretarías de Estado, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y los Órganos Reguladores Coordinados integran la Administración Pública Centralizada. **Artículo 2 (fracciones I, II y III).-** Dependencias de la Administración Pública Centralizada: I. Secretarías de Estado; II. Consejería Jurídica, y III. Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética a que hace referencia el artículo 28, párrafo octavo, de la Constitución. **Artículo 4.-** La función de consejero jurídico, estará a cargo de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. **Artículo 6.-** Para los efectos del Artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Presidente de la República acordará con todos los Secretarios de Estado y el Procurador General de la República. **Artículo 7.-** El Presidente de la República podrá convocar, directamente o a través del Secretario de Gobernación, a	Mexicanos en materia de las adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y prestación de servicios de cualquier naturaleza, que realicen: I. Las unidades administrativas de la Presidencia de la República; II. Las Secretarías de Estado y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal; III. La Procuraduría General de la República;	

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
reuniones de gabinete con los Secretarios de Estado y funcionarios de la Administración Pública Federal que el Presidente determine, a fin de definir o evaluar la política del Gobierno Federal en asuntos prioritarios de la administración; cuando las circunstancias políticas, administrativas o estratégicas del gobierno lo ameriten; o para atender asuntos que sean de la competencia concurrente de varias dependencias o entidades de la Administración Pública Federal. **Artículo 8.-** El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos contará con el apoyo directo de la Oficina de la Presidencia de la República. **Artículo 17.-** Para la más eficaz atención y eficiente despacho de los asuntos de su competencia, las Secretarías de Estado podrán contar con órganos administrativos desconcentrados. **Artículo 17 Bis.-** Las dependencias y entidades de la APF, podrán contar con delegaciones en las entidades federativas o, en su caso, en regiones geográficas que abarquen más de una entidad federativa.		

A) Marco normativo complementario y supletorio.

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
Artículo 26.- Para el despacho de los asuntos del orden administrativo, el Poder Ejecutivo de la Unión contará con las siguientes dependencias: … Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.		
Artículo 3 (fracción I).- El Poder Ejecutivo de la Unión se auxiliará en los términos de las disposiciones legales correspondientes, de las siguientes entidades de la administración pública paraestatal: I.- Organismos descentralizados; **Artículo 45.-** Son organismos descentralizados las entidades creadas por ley o decreto del Congreso de la Unión o por decreto del Ejecutivo Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios.	IV. Los organismos descentralizados;	
Artículo 3 (fracciones II y III).- El Poder Ejecutivo de la Unión se auxiliará en los términos de las disposiciones legales correspondientes, de las siguientes entidades de la administración pública paraestatal: … II.- Empresas de participación estatal, instituciones nacionales	V. Las empresas de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos en los que el fideicomitente sea el gobierno federal o una entidad paraestatal, y	

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
de crédito, organizaciones auxiliares nacionales de crédito e instituciones nacionales de seguros y de fianzas, y III.- Fideicomisos. **Artículo 46.-** Las empresas de participación estatal mayoritaria son: I. Sociedades nacionales de crédito. II. Cualquier otra sociedad que cumpla con los requisitos que señale la ley: A. Gobierno federal o entidades paraestatales con más del 50% del capital social. B. Que en su capital social haya títulos de serie especial que solo puedan ser suscritos por el gobierno federal; o C. El gobierno federal nombre a la mayoría del órgano de gobierno, designe al presidente o director general o pueda vetar los acuerdos del órgano de gobierno. Se asimilan a las empresas de participación estatal mayoritaria, las sociedades civiles así como las asociaciones civiles en las que la mayoría de los asociados sean dependencias o entidades de la Administración Pública Federal o servidores Públicos Federales que participen en razón de sus		**Artículo 4 (primer párrafo).-** Se consideran comprendidas en el quinto párrafo del artículo 1 de la Ley, las contrataciones que realicen las dependencias y entidades con las personas de derecho público de carácter federal con autonomía derivada de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o con las asociaciones y sociedades civiles asimiladas a que se refiere el último párrafo del artículo 46 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así como con municipios y órganos paramunicipales, cuando dichas personas funjan como proveedores.

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
cargos o alguna o varias de ellas se obliguen a realizar o realicen las aportaciones económicas preponderantes. **Artículo 47.-** Definición y características de los fideicomisos públicos.		
Artículo 22.- El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos podrá celebrar convenios de coordinación de acciones con los Gobiernos Estatales, y con su participación, en los casos necesarios, con los Municipios, satisfaciendo las formalidades legales que en cada caso procedan, a fin de favorecer el desarrollo integral de las propias entidades federativas.	VI. Las entidades federativas, los municipios y los entes públicos de unas y otros, con cargo total o parcial a recursos federales, conforme a los convenios que celebren con el Ejecutivo Federal. No quedan comprendidos para la aplicación de la presente Ley los fondos previstos en el Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal.	
Artículo 37 (fracciones I, II, IV, VII, IX, XIII, XIV, XXII, XXIV, XXV y XXVII).- A la Secretaría de la Función Pública corresponde el despacho de los siguientes asuntos: I. Organizar y coordinar el sistema de control interno y la evaluación de la gestión gubernamental; inspeccionar el ejercicio del gasto público federal y su congruencia con los presupuestos de egresos, así como concertar con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y validar los indicadores para la	Las personas de derecho público de carácter federal con autonomía derivada de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como las entidades que cuenten con un régimen específico en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, aplicarán los criterios y procedimientos previstos en esta Ley, sólo en lo no previsto en los ordenamientos que los rigen y siempre que no se contrapongan con los mismos, sujetándose a sus propios órganos de control.	

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
evaluación de la gestión gubernamental, en los términos de las disposiciones aplicables; II. Expedir las normas que regulen los instrumentos y procedimientos de control interno de la Administración Pública Federal, para lo cual podrá requerir de las dependencias competentes la expedición de normas complementarias para el ejercicio del control administrativo. Lo anterior, sin menoscabo de las bases y principios de coordinación y recomendaciones emitidas por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción; … IV. Coordinar y supervisar el sistema de control interno, establecer las bases generales para la realización de auditorías internas, transversales y externas; expedir las normas que regulen los instrumentos y procedimientos en dichas materias en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y en la Procuraduría General de la República, así como realizar las auditorías que se requieran en éstas, en sustitución o apoyo de sus propios órganos internos de		

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
control; … VII. Conducir las políticas, establecer las normas y emitir las autorizaciones y criterios correspondientes en materia de planeación y administración de recursos humanos, contratación del personal, Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, estructuras orgánicas y ocupacionales, de conformidad con las respectivas normas de control de gasto en materia de servicios personales; … IX. Fiscalizar directamente o a través de los órganos internos de control, que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y la Procuraduría General de la República cumplan con las normas y disposiciones en materia de sistemas de registro y contabilidad, contratación y remuneraciones de personal, contratación de adquisiciones, arrendamientos, arrendamiento financiero, servicios y ejecución de obra pública, conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles, almacenes y demás activos y recursos materiales de la		

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
Administración Pública Federal; … XIII. Colaborar en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción y del Sistema Nacional de Fiscalización, en el establecimiento de las bases y principios de coordinación necesarios, que permitan el mejor cumplimiento de las responsabilidades de sus integrantes; XIV. Implementar las acciones que acuerde el Sistema Nacional Anticorrupción, en términos de las disposiciones aplicables; … XXII. Definir la política de gobierno digital, gobierno abierto y datos abiertos en el ámbito de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal; … XXIV. Ejercer las facultades que la Constitución le otorga a los órganos internos de control para revisar, mediante las auditorías a que se refiere el presente artículo, el ingreso, manejo, custodia y ejercicio de recursos públicos federales; XXV. Implementar las políticas de coordinación que promueva el Comité Coordinador del Sistema Nacional		

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
Anticorrupción, en materia de combate a la corrupción en la Administración Pública Federal; XXVII. Seleccionar a los integrantes de los órganos internos de control, garantizando la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública, atrayendo a los mejores candidatos para ocupar los puestos, a través de procedimientos transparentes, objetivos y equitativos; **Artículo 44.-** Los titulares de los órganos internos de control de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y de sus áreas de auditoría, quejas y responsabilidades, serán responsables de mantener el control interno de la dependencia o entidad a la que se encuentren adscritos. Asimismo, tendrán como función apoyar la política de control interno y la toma de decisiones relativas al cumplimiento de los objetivos y políticas institucionales, así como al óptimo desempeño de servidores públicos y órganos, a la modernización continua y desarrollo eficiente de la gestión administrativa y al correcto manejo de los recursos públicos. Los órganos internos		

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
de control de las sociedades nacionales de crédito, así como aquéllos de otras entidades que cuenten con un régimen específico de control interno, se sujetarán a las funciones y organización establecidas en las disposiciones mediante las que se crea la respectiva entidad.		
Artículo 31 (fracciones XXIV, XXIX y XXX).- A la Secretaría de Hacienda y Crédito Público corresponde el despacho de los siguientes asuntos: … XXIV. Ejercer el control presupuestario de los servicios personales y establecer normas y lineamientos en materia de control del gasto en ese rubro; … XXIX. Conducir la política inmobiliaria de la Administración Pública Federal, salvo por lo que se refiere a las playas, zona federal marítimo terrestre, terrenos ganados al mar o cualquier depósito de aguas marítimas y demás zonas federales; administrar los inmuebles de propiedad federal cuando no estén asignados a alguna dependencia o entidad, así como llevar el registro público de la propiedad inmobiliaria federal y el	**Artículo 3 (fracciones III y VII).-** Para los efectos de esta Ley, entre las adquisiciones, arrendamientos y servicios, quedan comprendidos: .. III. Las adquisiciones de bienes muebles que incluyan la instalación, por parte del proveedor, en inmuebles que se encuentren bajo la responsabilidad de las dependencias y entidades, cuando su precio sea superior al de su instalación; … VII. La prestación de servicios de personas físicas, excepto la contratación de servicios personales subordinados o bajo el régimen de honorarios;	

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
inventario general correspondiente; XXX. Regular la adquisición, arrendamiento, enajenación, destino o afectación de los bienes inmuebles de la Administración Pública Federal y, en su caso, representar el interés de la Federación; expedir las normas y procedimientos para la formulación de inventarios, para la realización y actualización de los avalúos sobre dichos bienes, así como expedir normas técnicas, autorizar y, en su caso, proyectar, construir, rehabilitar, conservar o administrar, directamente o a través de terceros, los edificios públicos y, en general, los bienes inmuebles de la Federación;		
Artículo 31 (fracción XXXIV).- A la Secretaría de Hacienda y Crédito Público corresponde el despacho de los siguientes asuntos: … XXXIV. Los demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos. **Artículo 50 (primer párrafo).-**	**Artículo 7.-** La Secretaría[8], la Secretaría de Economía y la Secretaría de la Función Pública, en el ámbito de sus respectivas competencias, estarán facultadas para interpretar esta Ley para efectos administrativos. La Secretaría de la Función Pública dictará las	**Artículo 8.-** La Secretaría[9], la Secretaría de Economía y la Secretaría de la Función Pública, en el ámbito de sus respectivas competencias, estarán facultadas para interpretar la Ley y este Reglamento para efectos administrativos. Los criterios de interpretación que emitan, en términos de este párrafo, son obligatorios para las dependencias y entidades. Las opiniones que emitan las Secretarías mencionadas en el párrafo anterior, en el ámbito de sus atribuciones, derivadas de las

[8 Y 9] Si bien las facultades de los artículos 7 de la LAASSP y 8 del reglamento de la LAASSP no se encuentran contempladas de manera expresa en el artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, estan cubiertas de manera genérica por su artículo 31, fracción XXXIV.

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
Las relaciones entre el Ejecutivo Federal y las entidades paraestatales, para fines de congruencia global de la Administración Pública Paraestatal con el sistema nacional de planeación y con los lineamientos generales en materia de gasto, financiamiento, control y evaluación, se llevarán a cabo en la forma y términos que dispongan las leyes, por conducto de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, en el ámbito de sus respectivas competencias, sin perjuicio de las atribuciones que competan a la coordinadora del sector correspondiente. **Artículo 37 (fracciones VI, VII y XXI).-** A la Secretaría de la Función Pública corresponde el despacho de los siguientes asuntos: **…** VI. Organizar y coordinar el desarrollo administrativo integral en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y emitir las normas para que los recursos humanos, patrimoniales y los procedimientos técnicos de la misma, sean aprovechados y aplicados, respectivamente, con	disposiciones administrativas que sean estrictamente necesarias para el adecuado cumplimiento de esta Ley, tomando en cuenta la opinión de la Secretaría y, cuando corresponda, la de la Secretaría de Economía. Las disposiciones de carácter general se publicarán en el Diario Oficial de la Federación.	consultas que les formulen las dependencias y entidades, no tendrán el carácter de criterio de interpretación de aplicación general ni de disposición administrativa, por lo que sólo podrán considerarse para el caso concreto a que se refiera la consulta de que se trate, sin que tal opinión pueda utilizarse en asuntos similares o análogos.

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
criterios de eficacia, legalidad, eficiencia y simplificación administrativa; así como, realizar o encomendar las investigaciones, estudios y análisis necesarios sobre estas materias; VII. Conducir las políticas, establecer las normas y emitir las autorizaciones y criterios correspondientes en materia de planeación y administración de recursos humanos, contratación del personal, Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, estructuras orgánicas y ocupacionales, de conformidad con las respectivas normas de control de gasto en materia de servicios personales; … XXI. Establecer y conducir la política general de las contrataciones públicas reguladas por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, propiciando las mejores condiciones de contratación conforme a los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia, imparcialidad y honradez; emitir las normas, lineamientos,	La Secretaría de la Función Pública, en el ámbito de sus atribuciones, estará encargada de establecer las directrices conforme a las cuales se determinarán los perfiles de puesto de los servidores públicos correspondientes en materia de contrataciones públicas, así como las relativas a la capacitación para el adecuado desempeño de sus funciones en las materias a que alude esta Ley	**Artículo 62 (segundo párrafo, fracción VII).-** Los interesados acreditarán los requisitos mencionados en el párrafo anterior, con la documentación que en el mismo orden en que se describe en la fracción III del artículo 26 Ter de la Ley, se indica a continuación: … VII. Las constancias de haber participado en los cursos de capacitación en materia de contrataciones públicas objeto de la Ley y los Tratados correspondientes, que imparta la Secretaría de la Función Pública por sí o a través de terceros que ésta determine, y **Artículo 67 (fracción VI).-** Para el debido ejercicio de las funciones señaladas en la fracción IV del artículo 26 Ter de la Ley, los testigos sociales deberán: … VI. Acreditar los cursos de capacitación que determine la Secretaría de la Función Pública para actualizar sus conocimientos en la aplicación de la Ley y los Tratados. **Artículo 69 (fracción IV).-** La Secretaría de la Función Pública evaluará la actuación de los testigos sociales en los procedimientos de contratación conforme a lo siguiente: : … IV. Se considerarán los resultados de los exámenes que se apliquen a los testigos sociales en los cursos de capacitación que se impartan para actualizar sus conocimientos sobre la aplicación de la Ley y los Tratados.

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
manuales, procedimientos y demás instrumentos análogos que se requieran en materia de dichas contrataciones públicas. **Artículo 19.-** El titular de cada Secretaría de Estado expedirá los manuales de organización, de procedimientos y de servicios al público necesarios para su funcionamiento, los que deberán contener información sobre la estructura orgánica de la dependencia y las funciones de sus unidades administrativas, así como sobre los sistemas de comunicación y coordinación y los principales procedimientos administrativos que se establezcan. Los manuales y demás instrumentos de apoyo administrativo interno, deberán mantenerse permanentemente actualizados. Los manuales de organización general deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación, mientras que los manuales de procedimientos y de servicios al público deberán estar disponibles para consulta de los usuarios y de los propios servidores públicos, a través del registro electrónico que opera la Secretaría de la Función Pública. En cada una de las dependencias y entidades de la		

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
Administración Pública Federal, se mantendrán al corriente los escalafones de los trabajadores, y se establecerán los sistemas de estímulos y recompensas que determinen la ley y las condiciones generales de trabajo respectivas.		
Artículo 37 (fracciones VI y XXVI).- A la Secretaría de la Función Pública corresponde el despacho de los siguientes asuntos: **…** VI. Organizar y coordinar el desarrollo administrativo integral en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y emitir las normas para que los recursos humanos, patrimoniales y los procedimientos técnicos de la misma, sean aprovechados y aplicados, respectivamente, con criterios de eficacia, legalidad, eficiencia y simplificación administrativa; así como, realizar o encomendar las investigaciones, estudios y análisis necesarios sobre estas materias; … XXVI. Emitir normas, lineamientos específicos y manuales que, dentro del ámbito de su competencia, integren disposiciones y	**Artículo 9 (primer párrafo).-** En materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, los titulares de las dependencias y los órganos de gobierno de las entidades serán los responsables de que, en la adopción e instrumentación de las acciones que deban llevar a cabo en cumplimiento de esta Ley, se observen criterios que promuevan la modernización y desarrollo administrativo, la descentralización de funciones y la efectiva delegación de facultades. Las facultades conferidas por esta Ley a los titulares de las dependencias podrán ser ejercidas por los titulares de sus órganos desconcentrados, previo acuerdo delegatorio.	

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
criterios que impulsen la simplificación administrativa, para lo cual deberán tomar en consideración las bases y principios de coordinación y recomendaciones generales que emita el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción;		
Artículo 37 (fracción V).- A la Secretaría de la Función Pública corresponde el despacho de los siguientes asuntos: **…** V. Vigilar el cumplimiento, por parte de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y de la Procuraduría General de la República, de las disposiciones en materia de planeación, presupuestación, ingresos, financiamiento, inversión, deuda, patrimonio; **Artículo 50 (primer párrafo).-** Las relaciones entre el Ejecutivo Federal y las entidades paraestatales, para fines de congruencia global de la Administración Pública Paraestatal con el sistema nacional de planeación y con los lineamientos generales en materia de gasto, financiamiento, control y evaluación, se llevarán a cabo	**Artículo 18.-** En la planeación de las adquisiciones, arrendamientos y servicios que pretendan realizar sujetos a que se refiere las fracciones I a VI del artículo 1 de esta Ley, deberá ajustarse a: I. Los objetivos y prioridades del Plan Nacional de Desarrollo y de los programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales que correspondan, así como a las previsiones contenidas en sus programas anuales, y II. Los objetivos, metas y previsiones de recursos establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación o, en su caso, al presupuesto destinado a las contrataciones que los fideicomisos públicos no considerados entidades paraestatales prevean para el ejercicio correspondiente. **Artículo 24.-** La planeación, programación, presupuestación y el gasto de las adquisiciones, arrendamientos y servicios se sujetará a las disposiciones específicas del Presupuesto de Egresos de la Federación, así como a lo previsto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y demás disposiciones aplicables y los recursos destinados a ese fin se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia, honradez e imparcialidad para satisfacer los objetivos a los que fueren destinados.	**Artículo 16.-** Para efectos de lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley, los titulares de las dependencias y entidades, o bien los oficiales mayores o equivalentes, aprobarán el programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios. La planeación e integración de dicho programa y, en su caso, su presentación ante los titulares de las dependencias y entidades para su aprobación, será responsabilidad de los oficiales mayores o equivalentes, a partir de la información que les proporcionen las áreas requirentes, y deberá contener, como mínimo, la descripción y monto de los bienes, arrendamientos y servicios que representen por lo menos el ochenta por ciento del presupuesto total estimado, así como el monto aproximado de los bienes, arrendamientos y servicios que integran el porcentaje restante.

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
en la forma y términos que dispongan las leyes, por conducto de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, en el ámbito de sus respectivas competencias, sin perjuicio de las atribuciones que competan a la coordinadora del sector correspondiente.		
Artículo 19.- El titular de cada Secretaría de Estado expedirá los manuales de organización, de procedimientos y de servicios al público necesarios para su funcionamiento, los que deberán contener información sobre la estructura orgánica de la dependencia y las funciones de sus unidades administrativas, así como sobre los sistemas de comunicación y coordinación y los principales procedimientos administrativos que se establezcan. Los manuales y demás instrumentos de apoyo administrativo interno, deberán mantenerse permanentemente actualizados. Los manuales de organización general deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación, mientras que los manuales de procedimientos y de servicios al público deberán estar disponibles para consulta de los	**Artículo 22 (fracción VI).-** Las dependencias y entidades deberán establecer comités de adquisiciones, arrendamientos y servicios que tendrán las siguientes funciones: … VI. Elaborar y aprobar el manual de integración y funcionamiento del comité, en el cual se deberán considerar cuando menos las siguientes bases: a) Será presidido por el Oficial Mayor o equivalente; b) Los vocales titulares deberán tener un nivel jerárquico mínimo de director general o equivalente; c) El número total de miembros del Comité deberá ser impar, quienes invariablemente deberán emitir su voto en cada uno de los asuntos que se sometan a su consideración; d) El área jurídica y el órgano interno de control de la dependencia o entidad, deberán asistir a las sesiones del Comité, como asesor, con voz pero sin voto, debiendo pronunciarse de manera razonada en los asuntos que conozca el Comité. Los asesores titulares no podrán tener un nivel jerárquico inferior al de director general o equivalente, y e) El Comité deberá dictaminar en la misma sesión los asuntos que se presenten a su consideración; el Reglamento de esta Ley establecerá las bases conforme a las cuales los comités podrán de manera excepcional dictaminar los asuntos en una siguiente	

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
usuarios y de los propios servidores públicos, a través del registro electrónico que opera la Secretaría de la Función Pública. En cada una de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, se mantendrán al corriente los escalafones de los trabajadores, y se establecerán los sistemas de estímulos y recompensas que determinen la ley y las condiciones generales de trabajo respectivas. **Artículo 37 (fracciones I, II, IV, IX, XIII, XIV, XXII, XXIV, XV y XXVII).-** A la Secretaría de la Función Pública corresponde el despacho de los siguientes asuntos: I. Organizar y coordinar el sistema de control interno y la evaluación de la gestión gubernamental; inspeccionar el ejercicio del gasto público federal y su congruencia con los presupuestos de egresos, así como concertar con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y validar los indicadores para la evaluación de la gestión gubernamental, en los términos de las disposiciones aplicables; II. Expedir las normas que regulen los instrumentos y procedimientos de control	sesión.	

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
interno de la Administración Pública Federal, para lo cual podrá requerir de las dependencias competentes la expedición de normas complementarias para el ejercicio del control administrativo. Lo anterior, sin menoscabo de las bases y principios de coordinación y recomendaciones emitidas por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción; … IV. Coordinar y supervisar el sistema de control interno, establecer las bases generales para la realización de auditorías internas, transversales y externas; expedir las normas que regulen los instrumentos y procedimientos en dichas materias en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y en la Procuraduría General de la República, así como realizar las auditorías que se requieran en éstas, en sustitución o apoyo de sus propios órganos internos de control; … IX. Fiscalizar directamente o a través de los órganos internos de control, que las dependencias y entidades de la		

A) Marco normativo complementario y supletorio.

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
Administración Pública Federal y la Procuraduría General de la República cumplan con las normas y disposiciones en materia de sistemas de registro y contabilidad, contratación y remuneraciones de personal, contratación de adquisiciones, arrendamientos, arrendamiento financiero, servicios y ejecución de obra pública, conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles, almacenes y demás activos y recursos materiales de la Administración Pública Federal; … XIII. Colaborar en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción y del Sistema Nacional de Fiscalización, en el establecimiento de las bases y principios de coordinación necesarios, que permitan el mejor cumplimiento de las responsabilidades de sus integrantes; XIV. Implementar las acciones que acuerde el Sistema Nacional Anticorrupción, en términos de las disposiciones aplicables; … XXII. Definir la política de gobierno digital, gobierno abierto y datos abiertos en el		

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
ámbito de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal; … XXIV. Ejercer las facultades que la Constitución le otorga a los órganos internos de control para revisar, mediante las auditorías a que se refiere el presente artículo, el ingreso, manejo, custodia y ejercicio de recursos públicos federales; XXV. Implementar las políticas de coordinación que promueva el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, en materia de combate a la corrupción en la Administración Pública Federal; XXVII. Seleccionar a los integrantes de los órganos internos de control, garantizando la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública, atrayendo a los mejores candidatos para ocupar los puestos, a través de procedimientos transparentes, objetivos y equitativos; **Artículo 44.-** Los titulares de los órganos internos de control de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y de sus áreas de auditoría, quejas y responsabilidades, serán responsables de mantener el		

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
control interno de la dependencia o entidad a la que se encuentren adscritos. Asimismo, tendrán como función apoyar la política de control interno y la toma de decisiones relativas al cumplimiento de los objetivos y políticas institucionales, así como al óptimo desempeño de servidores públicos y órganos, a la modernización continua y desarrollo eficiente de la gestión administrativa y al correcto manejo de los recursos públicos. Los órganos internos de control de las sociedades nacionales de crédito, así como aquéllos de otras entidades que cuenten con un régimen específico de control interno, se sujetarán a las funciones y organización establecidas en las disposiciones mediante las que se crea la respectiva entidad.		
Artículo 19.- El titular de cada Secretaría de Estado expedirá los manuales de organización, de procedimientos y de servicios al público necesarios para su funcionamiento, los que deberán contener información sobre la estructura orgánica de la dependencia y las funciones de sus unidades administrativas, así como sobre	**Artículo 23 (fracción VIII).-** El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de la Función Pública, determinará las dependencias y entidades que deberán instalar comisiones consultivas mixtas de abastecimiento, en función del volumen, características e importancia de las adquisiciones, arrendamientos y servicios que contraten. Dichas comisiones tendrán por objeto: **…** VIII. Elaborar y aprobar el manual de integración y funcionamiento de la comisión, conforme a las bases	**Artículo 21 (fracción I).-** Para el ejercicio de sus funciones el Comité deberá: I. Aprobar los manuales de integración y funcionamiento de los subcomités que constituya para coadyuvar al cumplimiento de la Ley, de este Reglamento y demás disposiciones aplicables, determinando la materia competencia de cada uno, las áreas y los niveles jerárquicos de los servidores públicos que los integren, así como la forma y términos en que deberán informar al propio Comité de los asuntos que conozcan;

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
los sistemas de comunicación y coordinación y los principales procedimientos administrativos que se establezcan. Los manuales y demás instrumentos de apoyo administrativo interno, deberán mantenerse permanentemente actualizados. Los manuales de organización general deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación, mientras que los *manuales* de procedimientos y de servicios al público deberán estar disponibles para consulta de los usuarios y de los propios servidores públicos, a través del registro electrónico que opera la Secretaría de la Función Pública. En cada una de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, se mantendrán al corriente los escalafones de los trabajadores, y se establecerán los sistemas de estímulos y recompensas que determinen la ley y las condiciones generales de trabajo respectivas.	que expida la Secretaría de la Función Pública, y	**Artículo 26 (fracciones II y IV).-** Las comisiones consultivas mixtas de abastecimiento, previstas en el artículo 23 de la Ley, tendrán las siguientes funciones: … II. Autorizar la creación de subcomisiones o grupos de trabajo para atender y desarrollar los proyectos específicos acordados, así como aprobar el manual de integración y funcionamiento de los mismos; … IV. Aprobar, en su segunda sesión ordinaria, su manual de integración y funcionamiento. Las modificaciones que en su caso se propongan a dicho manual, podrán aprobarse en la sesión inmediata siguiente de la comisión. **Artículo 61 (tercer párrafo, fracción V).-** El Comité de Testigos Sociales tendrá las siguientes funciones: … V. Aprobar su manual de funcionamiento;
Artículo 37 (fracción XXIII).- A la Secretaría de la Función Pública corresponde el despacho de los siguientes asuntos: **…** XXIII. Formular y conducir en	**Artículo 40 (segundo párrafo).-** La selección del procedimiento de excepción que realicen las dependencias y entidades deberá fundarse y motivarse, según las circunstancias que concurran en cada caso, en criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia que resulten procedentes para obtener las mejores	

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
apego y de conformidad con las bases de coordinación que establezca el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, la política general de la Administración Pública Federal para establecer acciones que propicien la integridad y la transparencia en la gestión pública, la rendición de cuentas y el acceso por parte de los particulares a la información que aquélla genere; así como promover dichas acciones hacia la sociedad;	condiciones para el Estado. El acreditamiento del o los criterios en los que se funda; así como la justificación de las razones en las que se sustente el ejercicio de la opción, deberán constar por escrito y ser firmado por el titular del área usuaria o requirente de los bienes o servicios.	
Artículo 37 (fracciones I, II, IV, VII, IX, XIII, XIV, XXII, XXIV, XV y XXVII).- A la Secretaría de la Función Pública corresponde el despacho de los siguientes asuntos: I. Organizar y coordinar el sistema de control interno y la evaluación de la gestión gubernamental; inspeccionar el ejercicio del gasto público federal y su congruencia con los presupuestos de egresos, así como concertar con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y validar los indicadores para la evaluación de la gestión gubernamental, en los términos de las disposiciones aplicables; II. Expedir las normas que	**Artículo 26 Ter (segundo párrafo).-** En caso de que el testigo social detecte irregularidades en los procedimientos de contratación, deberá remitir su testimonio al área de quejas del órgano interno de control de la dependencia o entidad convocante y/o a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. **Artículo 36 Bis (último párrafo).-** De subsistir el empate entre las personas del sector señalado, la adjudicación se efectuará a favor del licitante que resulte ganador del sorteo que se realice en términos del Reglamento de esta Ley. En las licitaciones públicas que cuenten con la participación de un testigo social, éste invariablemente deberá ser invitado al mismo. Igualmente será convocado un representante del órgano interno de control de la dependencia o entidad de que se trate. **Artículo 37 (penúltimo y último párrafos).-** Cuando se advierta en el fallo la existencia de un error aritmético, mecanográfico o de cualquier otra naturaleza, que no afecte el resultado de la	**Artículo 7 (fracción III).-** Para los efectos de los actos y actividades reguladas en la Ley que se realicen a través de los fideicomisos públicos no considerados como entidad paraestatal, deberá observarse lo siguiente: … III. La información relativa a las contrataciones que corresponda enviar a la Secretaría de la Función Pública o a los órganos internos de control, será remitida por conducto de la dependencia que coordine la operación del fideicomiso; por la dependencia que con cargo a su presupuesto se hubieren aportado los recursos; por aquélla cuyos programas y proyectos se vean beneficiados, o por la entidad que funja como fideicomitente, de manera individual por cada fideicomiso. **Artículo 15 (último párrafo).-** Para efectos del primer párrafo del artículo 19 de la Ley, la Oficialía Mayor o equivalente de las dependencias o entidades será responsable de concentrar y proporcionar a las unidades administrativas que lo soliciten, la

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
regulen los instrumentos y procedimientos de control interno de la Administración Pública Federal, para lo cual podrá requerir de las dependencias competentes la expedición de normas complementarias para el ejercicio del control administrativo. Lo anterior, sin menoscabo de las bases y principios de coordinación y recomendaciones emitidas por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción; … IV. Coordinar y supervisar el sistema de control interno, establecer las bases generales para la realización de auditorías internas, transversales y externas; expedir las normas que regulen los instrumentos y procedimientos en dichas materias en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y en la Procuraduría General de la República, así como realizar las auditorías que se requieran en éstas, en sustitución o apoyo de sus propios órganos internos de control; … VII. Conducir las políticas, establecer las normas y emitir	evaluación realizada por la convocante, dentro de los cinco días hábiles siguientes a su notificación y siempre que no se haya firmado el contrato, el titular del área responsable del procedimiento de contratación procederá a su corrección, con la intervención de su superior jerárquico, aclarando o rectificando el mismo, mediante el acta administrativa correspondiente, en la que se harán constar los motivos que lo originaron y las razones que sustentan su enmienda, hecho que se notificará a los licitantes que hubieran participado en el procedimiento de contratación, remitiendo copia de la misma al órgano interno de control dentro de los cinco días hábiles posteriores a la fecha de su firma. Si el error cometido en el fallo no fuera susceptible de corrección conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior, el servidor público responsable dará vista de inmediato al órgano interno de control, a efecto de que, previa intervención de oficio, se emitan las directrices para su reposición. **Artículo 40 (cuarto párrafo).-** En estos casos, el titular del área responsable de la contratación, a más tardar el último día hábil de cada mes, enviará al órgano interno de control en la dependencia o entidad de que se trate, un informe relativo a los contratos formalizados durante el mes calendario inmediato anterior, acompañando copia del escrito aludido en este artículo y de un dictamen en el que se hará constar el análisis de la o las proposiciones y las razones para la adjudicación del contrato. No será necesario rendir este informe en las operaciones que se realicen al amparo del artículo 41 fracciones IV y XII, de este ordenamiento. **Artículo 43 (fracción II).-** El procedimiento de invitación a cuando menos tres personas se sujetará a lo siguiente: …	información correspondiente a las consultorías, asesorías, estudios e investigaciones contratados por las mismas. … Concluida la prestación del servicio, el titular del Área requirente deberá emitir en un plazo máximo de veinte días naturales, contados a partir de la fecha en que se haya recibido satisfactoriamente, un informe al titular de la dependencia o entidad, en el que, con base en los entregables pactados en el contrato, se indique el resultado obtenido y la forma en que contribuyeron al logro del objetivo para el cual se realizó la contratación. Una copia de este informe se deberá remitir al órgano interno de control. **Artículo 19 (tercer párrafo).-** El área jurídica y el órgano interno de control, en su carácter de asesores designarán, cada uno, a un servidor público para asistir a las sesiones del Comité, con voz pero sin voto, quien podrá entregar sus pronunciamientos razonados de manera escrita o hacerlos verbalmente, en la sesión correspondiente. **Artículo 46 (fracción V).-** La junta de aclaraciones, se llevará a cabo conforme a lo siguiente: … V. Será responsabilidad del titular del Área requirente y del titular del Área técnica, o bien sólo el de esta última cuando también tenga el carácter de Área requirente, que asista un representante de las mismas, con los conocimientos técnicos suficientes que permitan dar respuesta clara y precisa a los planteamientos de los licitantes, a las juntas de aclaraciones a los que fueron convocados. En caso de inasistencia del representante del Área técnica o del Área requirente, el servidor público que presida la junta de aclaraciones lo hará del conocimiento del titular del área de responsabilidades del órgano interno de control en la dependencia o entidad de que

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
las autorizaciones y criterios correspondientes en materia de planeación y administración de recursos humanos, contratación del personal, Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, estructuras orgánicas y ocupacionales, de conformidad con las respectivas normas de control de gasto en materia de servicios personales; … IX. Fiscalizar directamente o a través de los órganos internos de control, que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y la Procuraduría General de la República cumplan con las normas y disposiciones en materia de sistemas de registro y contabilidad, contratación y remuneraciones de personal, contratación de adquisiciones, arrendamientos, arrendamiento financiero, servicios y ejecución de obra pública, conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles, almacenes y demás activos y recursos materiales de la Administración Pública Federal; … XIII. Colaborar en el marco del Sistema Nacional	II. El acto de presentación y apertura de proposiciones podrá hacerse sin la presencia de los correspondientes licitantes, pero invariablemente se invitará a un representante del órgano interno de control en la dependencia o entidad;	se trate. … **Artículo 48 (fracción IV).-** Durante el desarrollo del acto de presentación y apertura de proposiciones se observará lo siguiente: … IV. Aún y cuando existan denuncias o presunción de falsedad en relación con la información presentada por un licitante, su proposición no deberá desecharse. El servidor público que presida el acto, cuando tenga conocimiento del hecho, lo comunicará al órgano interno de control que corresponda, conforme a lo dispuesto por el penúltimo párrafo del artículo 60 de la Ley. Si al licitante de que se trate se le adjudica el contrato correspondiente y de manera previa a la formalización del mismo la autoridad competente determina la falsedad de su información, la convocante deberá abstenerse de suscribir el citado contrato; **Artículo 54 (tercer párrafo).-** Cuando se requiera llevar a cabo el sorteo por insaculación, el Área contratante deberá girar invitación al órgano interno de control y al testigo social cuando éste participe en la licitación pública, para que en su presencia se lleve a cabo el sorteo; se levantará acta que firmarán los asistentes, sin que la inasistencia, la negativa o falta de firma en el acta respectiva de los licitantes o invitados invalide el acto. **Artículo 67 (fracciones IV y V, penúltimo párrafo).-** Para el debido ejercicio de las funciones señaladas en la fracción IV del artículo 26 Ter de la Ley, los testigos sociales deberán: … IV. Presentar informes previos a la Secretaría de la Función Pública, a las dependencias y entidades contratantes y al correspondiente órgano interno de control, cuando detecten irregularidades manifestando

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
Anticorrupción y del Sistema Nacional de Fiscalización, en el establecimiento de las bases y principios de coordinación necesarios, que permitan el mejor cumplimiento de las responsabilidades de sus integrantes; XIV. Implementar las acciones que acuerde el Sistema Nacional Anticorrupción, en términos de las disposiciones aplicables; … XXII. Definir la política de gobierno digital, gobierno abierto y datos abiertos en el ámbito de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal; … XXIV. Ejercer las facultades que la Constitución le otorga a los órganos internos de control para revisar, mediante las auditorías a que se refiere el presente artículo, el ingreso, manejo, custodia y ejercicio de recursos públicos federales; XXV. Implementar las políticas de coordinación que promueva el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, en materia de combate a la corrupción en la Administración Pública Federal; XXVII. Seleccionar a los		sus observaciones y recomendaciones, a efecto de que aquéllas puedan ser corregidas oportunamente; V. Atender y responder en forma oportuna y expedita cualquier requerimiento de información que, respecto del procedimiento de contratación que atestigua, les sea formulado por la Secretaría de la Función Pública o por los órganos internos de control, y … La participación del testigo social en los procedimientos de contratación será sin perjuicio del ejercicio de las facultades de inspección, vigilancia y fiscalización que tienen conferidas la Secretaría de la Función Pública, los órganos internos de control y la Auditoría Superior de la Federación. **Artículo 69 (fracciones I y III).-** La Secretaría de la Función Pública evaluará la actuación de los testigos sociales en los procedimientos de contratación conforme a lo siguiente: I. Se tomarán en cuenta los informes parciales y el testimonio de su participación, analizando que los mismos se apeguen a las disposiciones previstas en la Ley y este Reglamento y reflejen las condiciones bajo las cuales se desarrollaron dichos procedimientos conforme a la información que, en su caso, se obtenga de la dependencia o entidad de que se trate, de los licitantes y del órgano interno de control; … III. Cuando se considere necesario, se podrá solicitar información a las dependencias y entidades cuyos procedimientos de contratación fueron atestiguados por el testigo social de que se trate, así como al órgano interno de control, y **Artículo 77 (tercer párrafo).-** La inasistencia del representante invitado del órgano interno de control al acto de presentación y apertura de proposiciones, no será impedimento para continuar el procedimiento de

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
integrantes de los órganos internos de control, garantizando la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública, atrayendo a los mejores candidatos para ocupar los puestos, a través de procedimientos transparentes, objetivos y equitativos; **Artículo 44.-** Los titulares de los órganos internos de control de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y de sus áreas de auditoría, quejas y responsabilidades, serán responsables de mantener el control interno de la dependencia o entidad a la que se encuentren adscritos. Asimismo, tendrán como función apoyar la política de control interno y la toma de decisiones relativas al cumplimiento de los objetivos y políticas institucionales, así como al óptimo desempeño de servidores públicos y órganos, a la modernización continua y desarrollo eficiente de la gestión administrativa y al correcto manejo de los recursos públicos. Los órganos internos de control de las sociedades nacionales de crédito, así como aquéllos de otras entidades que cuenten con un régimen		invitación a cuando menos tres personas, siendo opcional para los licitantes su asistencia al acto. **Artículo 88 (fracciones I, III y último párrafo).-** Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley, respecto de las fracciones y párrafos de dicho precepto legal que a continuación se señalan, deberá considerarse lo siguiente: I. La autorización previa y específica para contratar con servidores públicos, o bien, con las sociedades de las que dichos servidores públicos formen parte, a que se refiere la fracción II, deberá ser solicitada por el licitante interesado ante el titular del órgano interno de control en la dependencia o entidad respectiva, en un plazo de cuando menos ocho días naturales previos al acto de presentación y apertura de proposiciones; en el caso del procedimiento de adjudicación directa, el interesado deberá realizar la solicitud señalada, el día hábil siguiente a aquél en el que recibió la solicitud de cotización. El órgano interno de control resolverá lo procedente, atendiendo a las características del objeto del contrato que se pretenda adjudicar, así como su correlación con las circunstancias que lo vinculan con los servidores públicos, y podrá tomar en cuenta todos aquellos elementos o circunstancias que resulten procedentes considerar. Toda solicitud extemporánea se tendrá por no formulada; **…** III. Las proposiciones de las personas que se ubiquen en el supuesto a que se refiere la fracción VII, serán desechadas de la partida en la que se presentaron, debiendo comunicar lo anterior al órgano interno de control para efectos de determinar si se actualiza lo dispuesto por la fracción IV del artículo 60 de la Ley, y … Cuando la dependencia o entidad tenga conocimiento que se actualiza lo dispuesto por la fracción IV del

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
específico de control interno, se sujetarán a las funciones y organización establecidas en las disposiciones mediante las que se crea la respectiva entidad.		artículo 60 de la Ley deberá comunicarlo al órgano interno de control en el plazo señalado en el penúltimo párrafo de ese mismo artículo. **Artículo 107.-** De conformidad con lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley, la Secretaría de la Función Pública y los órganos internos de control, con motivo de las auditorías, visitas o inspecciones que practiquen, podrán solicitar a los proveedores información y documentación relacionada con los contratos. Para estos efectos, en el contrato respectivo deberá indicarse que los licitantes ganadores deberán proporcionar la información que en su momento se requiera. Las solicitudes de información y documentación que requiera la Secretaría de la Función Pública o los órganos internos de control a los servidores públicos y a los proveedores deberán formularse mediante oficio, señalando el plazo que se otorga para su entrega, el cual se determinará considerando la naturaleza y la cantidad de fojas de dicha información y documentación, sin que en ningún caso pueda ser inferior a cinco días naturales. En el supuesto de que los servidores públicos o los proveedores consideren que el plazo otorgado es insuficiente, podrán solicitar la ampliación del mismo, señalando las razones que lo justifiquen. **Artículo 126.-** La presentación de la solicitud de conciliación y su atención por la Secretaría de la Función Pública o por el órgano interno de control cuando así lo acuerde el titular de dicha dependencia, no suspende los efectos del contrato o los actos derivados del mismo. No obstante lo señalado en el párrafo anterior, por acuerdo de las partes se podrá diferir el cumplimiento de una obligación o el ejercicio de un derecho hasta el término del procedimiento de conciliación. **Artículo 129.-** La Secretaría de la Función Pública o,

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
		en su caso, el órgano interno de control emitirá acuerdo por el que se admita a trámite la solicitud de conciliación y lo notificará a las partes, corriendo traslado a la que corresponda con copia de la solicitud de conciliación, solicitándole que dentro de un plazo no mayor a diez días hábiles, remita los argumentos con los que dé contestación a cada uno de los hechos y argumentos manifestados por el solicitante, anexando copia de la documentación relacionada con los mismos. En el caso de las dependencias y entidades, el traslado se realizará a través de su órgano interno de control, en caso de que éste no sea la autoridad que desahoga el procedimiento. Se notificará también la fecha y hora en la que se llevará a cabo la audiencia de conciliación, a la que asistirá un representante del órgano interno de control de la dependencia o entidad correspondiente, salvo el caso en que el procedimiento de conciliación sea desahogado por el órgano interno de control respectivo. **Artículo 131 (primer y tercer párrafos).-** Las audiencias de conciliación serán presididas por el servidor público de la Secretaría de la Función Pública o del órgano interno de control que sea competente, de conformidad con las disposiciones aplicables, quien deberá iniciar las sesiones, exponer los puntos comunes y de controversia, proporcionar la normatividad que regule los términos y condiciones contractuales, proponer acuerdos de conciliación, suspender o dar por terminada una sesión, citar a sesiones posteriores, así como dictar todas las determinaciones que se requieran durante el desarrollo de las mismas. … En caso de que sea necesario, la audiencia se podrá realizar en varias sesiones. Para ello, la Secretaría de la Función Pública o el órgano interno de control

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
		señalarán los días y horas en que tendrán verificativo. El procedimiento de conciliación deberá agotarse en un plazo no mayor de cuarenta días hábiles contados a partir de la fecha en que se haya celebrado la primera sesión, salvo que las partes acuerden un plazo mayor, por causas debidamente justificadas. **Artículo 132 (segundo y tercer párrafo).-** Los convenios celebrados en los procedimientos de conciliación podrán servir para efectos de solventar las observaciones de los órganos de control y fiscalización. Si las partes no llegan a un acuerdo respecto de la desavenencia, podrán designar a su costa, ante la propia Secretaría de la Función Pública o del órgano interno de control que desahoga el procedimiento, a un tercero o perito que emita su opinión sobre los puntos controvertidos, a efecto de lograr que las partes concilien sus intereses. **Artículo 136.-** La única documentación que la Secretaría de la Función Pública o el órgano interno de control estarán obligados a conservar, en términos del penúltimo párrafo del artículo 56 de la Ley, serán las actas que se levanten con motivo de las audiencias, así como en su caso, la de los convenios de conciliación.
Artículo 37 (fracciones III y XI).- A la Secretaría de la Función Pública corresponde el despacho de los siguientes asuntos: **…** III. Vigilar, en colaboración con las autoridades que integren el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, el cumplimiento de las normas de control interno	**Artículo 55 (primer párrafo).-** Las dependencias y entidades estarán obligadas a mantener los bienes adquiridos o arrendados en condiciones apropiadas de operación y mantenimiento, así como vigilar que los mismos se destinen al cumplimiento de los programas y acciones previamente determinados.	

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
y fiscalización, así como asesorar y apoyar a los órganos internos de control de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal; … XI. Designar y remover para el mejor desarrollo del sistema de control y evaluación de la gestión gubernamentales, delegados de la propia Secretaría ante las dependencias y órganos desconcentrados de la Administración Pública Federal centralizada y comisarios públicos de los órganos de vigilancia de las entidades de la Administración Pública Paraestatal y de la Procuraduría General de la República; así como normar y controlar su desempeño;		
Artículo 50 (primer párrafo).- Las relaciones entre el Ejecutivo Federal y las entidades paraestatales, para fines de congruencia global de la Administración Pública Paraestatal con el sistema nacional de planeación y con los lineamientos generales en materia de gasto, financiamiento, control y evaluación, se llevarán a cabo en la forma y términos que dispongan las leyes, por	**Artículo 56 (primer y tercer párrafo, fracciones II y III).-** La forma y términos en que las dependencias y entidades deberán remitir a la Secretaría de la Función Pública, a la Secretaría y a la Secretaría de Economía, la información relativa a los actos y los contratos materia de esta Ley, serán establecidos por dichas Secretarías, en el ámbito de sus respectivas atribuciones. La administración del sistema electrónico de información pública gubernamental sobre adquisiciones, arrendamientos y servicios, estará a cargo de la Secretaría de la Función Pública, a través de la unidad administrativa que determine su Reglamento, en el cual las dependencias, entidades y	**Artículo 63 (cuarto párrafo).-** A efecto de que los testigos sociales cumplan adecuadamente sus funciones, su participación en los procedimientos de contratación deberá comenzar a partir de los actos previos a que se refieren los incisos a) y b) de la fracción II del artículo 67 de este Reglamento, de tal manera que su actuación incida en mayor medida a la transparencia e imparcialidad de dichos procedimientos. En los casos en que la Secretaría de la Función Pública determine designar a un testigo social por el impacto de la contratación en los programas sustantivos de la dependencia o entidad, su participación deberá iniciar en cualquier momento previo a la emisión del fallo correspondiente.

A) Marco normativo complementario y supletorio.

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
conducto de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, en el ámbito de sus respectivas competencias, sin perjuicio de las atribuciones que competan a la coordinadora del sector correspondiente. **Artículo 37 (fracciones VII y XXIII).-** A la Secretaría de la Función Pública corresponde el despacho de los siguientes asuntos: **…** VIII. Realizar, por sí o a solicitud de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o la coordinadora de sector correspondiente, auditorías, revisiones y evaluaciones a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, con el objeto de examinar, fiscalizar y promover la eficiencia y legalidad en su gestión y encargo; **…** XXIII. Formular y conducir en apego y de conformidad con las bases de coordinación que establezca el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, la política general de la Administración Pública Federal para establecer acciones que propicien la integridad y la	los demás sujetos de esta Ley, deberán incorporar la información que ésta les requiera. El sistema a que se refiere el párrafo anterior, tendrá los siguientes fines: … II. Propiciar la transparencia y seguimiento de las adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, y III. Generar la información necesaria que permita la adecuada planeación, programación y presupuestación de las contrataciones públicas, así como su evaluación integral.	**Artículo 67 (fracción III).-** Para el debido ejercicio de las funciones señaladas en la fracción IV del artículo 26 Ter de la Ley, los testigos sociales deberán: … III. Proponer de acuerdo con su experiencia y considerando las disposiciones legales o administrativas vigentes, los aspectos que mejoren la igualdad de condiciones entre los licitantes, la calidad de las contrataciones, así como las acciones que promuevan la eficiencia, eficacia, imparcialidad, transparencia y el combate a la corrupción en las mismas; **Artículo 68 (segundo párrafo, fracción V).-** Al final de su participación en el procedimiento de contratación el testigo social emitirá el testimonio correspondiente, el cual será un documento público y deberá contener lo siguiente: … V. Sus conclusiones sobre el apego a las disposiciones jurídicas aplicables, la transparencia y la imparcialidad del procedimiento de contratación. **Artículo 69 (fracción II).-** La Secretaría de la Función Pública evaluará la actuación de los testigos sociales en los procedimientos de contratación conforme a lo siguiente: … II. Se podrán realizar encuestas entre los licitantes, sobre la percepción de si la participación de los testigos sociales contribuye a promover la libre participación, inhibir actos de corrupción y fomentar la transparencia;

A) Marco normativo complementario y supletorio.

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
transparencia en la gestión pública, la rendición de cuentas y el acceso por parte de los particulares a la información que aquélla genere; así como promover dichas acciones hacia la sociedad;		
Artículo 34 (fracción XXVI).- A la Secretaría de Economía corresponde el despacho de los siguientes asuntos: … XXVI. Registrar los precios de mercancías, arrendamientos de bienes muebles y contratación de servicios, que regirán para el sector público; dictaminar los contratos o pedidos respectivos; autorizar las compras del sector público en el país de bienes de procedencia extranjera, así como, conjuntamente con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, autorizar las bases de las convocatorias para realizar concursos internacionales, y **Artículo 37 (fracción VIII).-** A la Secretaría de la Función Pública corresponde el despacho de los siguientes asuntos: **…** VIII. Realizar, por sí o a solicitud de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o la	**Artículo 57.-** La Secretaría de la Función Pública, en el ejercicio de sus facultades, podrá verificar, en cualquier tiempo, que las adquisiciones, arrendamientos y servicios se realicen conforme a lo establecido en esta Ley o en otras disposiciones aplicables. La Secretaría de Economía, atento a sus facultades y atribuciones podrá verificar que los bienes cumplan con los requisitos relativos al grado de contenido nacional o a las reglas de origen o mercado y, en caso de que éstos no cumplan con dichos requisitos, informará a la Secretaría de la Función Pública. La Secretaría de la Función Pública podrá realizar las visitas e inspecciones que estime pertinentes a las dependencias y entidades que realicen adquisiciones, arrendamientos y servicios, e igualmente podrá solicitar a los servidores públicos y a los proveedores que participen en ellas todos los datos e informes relacionados con los actos de que se trate. **Artículo 58.-** La Secretaría de la Función Pública podrá verificar la calidad de los bienes muebles a través de la propia dependencia o entidad de que se trate, o mediante las personas acreditadas en los términos que establece la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. El resultado de las comprobaciones se hará constar en un dictamen que será firmado por quien haya hecho la comprobación, así como por el proveedor y el representante de la dependencia o entidad respectiva, si hubieren intervenido. La falta de firma	VIII. Realizar, por sí o a solicitud de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o la coordinadora de sector correspondiente, auditorías, revisiones y evaluaciones a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, con el objeto de examinar, fiscalizar y promover la eficiencia y legalidad en su gestión y encargo; **Artículo 107.-** De conformidad con lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley, la Secretaría de la Función Pública y los órganos internos de control, con motivo de las auditorías, visitas o inspecciones que practiquen, podrán solicitar a los proveedores información y documentación relacionada con los contratos. Para estos efectos, en el contrato respectivo deberá indicarse que los licitantes ganadores deberán proporcionar la información que en su momento se requiera. Las solicitudes de información y documentación que requiera la Secretaría de la Función Pública o los órganos internos de control a los servidores públicos y a los proveedores deberán formularse mediante oficio, señalando el plazo que se otorga para su entrega, el cual se determinará considerando la naturaleza y la cantidad de fojas de dicha información y documentación, sin que en ningún caso pueda ser inferior a cinco días naturales. En el supuesto de que los servidores públicos o los proveedores consideren que el plazo otorgado es insuficiente, podrán solicitar la ampliación del mismo, señalando las razones que lo justifiquen.

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
coordinadora de sector correspondiente, auditorías, revisiones y evaluaciones a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, con el objeto de examinar, fiscalizar y promover la eficiencia y legalidad en su gestión y encargo; … **Artículo 31 (fracción XII).-** A la Secretaría de Hacienda y Crédito Público corresponde el despacho de los siguientes asuntos: … XII. Organizar y dirigir los servicios aduanales y de inspección;	del proveedor no invalidará dicho dictamen.	**Artículo 108.-** Con independencia de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 58 de la Ley, las dependencias y entidades deberán verificar la calidad de los bienes que hubieren adquirido o arrendado y, de ser necesario, de aquéllos que utilizarán para la prestación de un servicio. En caso de que no cuenten con el personal especializado o los elementos necesarios para efectuar la verificación, deberán contratar a las personas físicas o morales acreditadas para llevarla a cabo.
Artículo 37 (fracciones XVI, XVIII y XIX).- A la Secretaría de la Función Pública corresponde el despacho de los siguientes asuntos: … XVI. Llevar y normar el registro de servidores públicos de la Administración Pública Federal, recibir y registrar las declaraciones patrimoniales y de intereses que deban presentar, así como verificar su contenido mediante las investigaciones que resulten pertinentes de acuerdo con las disposiciones aplicables. También registrará la	**Artículo 62.-** La Secretaría de la Función Pública aplicará las sanciones que procedan a quienes infrinjan las disposiciones de este ordenamiento, conforme a lo dispuesto por la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. La Secretaría de la Función Pública, en uso de las atribuciones que le confiere la Ley citada en el párrafo anterior, podrá abstenerse de iniciar los procedimientos previstos en ella, cuando de las investigaciones o revisiones practicadas se advierta que el acto u omisión no es grave, o no implica la probable comisión de algún delito o perjuicio patrimonial a la dependencia o entidad, o que el acto u omisión fue corregido o subsanado de manera espontánea por el servidor público o implique error manifiesto y en cualquiera de estos supuestos, los efectos que, en su caso, hubieren producido,	**Artículo 115 (primer y último párrafos).-** Una vez que la Secretaría de la Función Pública tenga conocimiento de actos o hechos posiblemente constitutivos de infracción, según lo previsto en el artículo anterior, realizará las investigaciones y actuaciones que correspondan a fin de sustentar la imputación, para lo cual podrá requerir a las dependencias y entidades, a las autoridades que corresponda, a los particulares o, en su caso, solicitar a los licitantes o proveedores que aporten mayores elementos para su análisis. … Cuando de las actuaciones previstas en este artículo se adviertan posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos, se dará vista a la autoridad de la Secretaría de la Función Pública competente en esa materia para que resuelva lo conducente.

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
información sobre las sanciones administrativas que, en su caso, les hayan sido impuestas; … XVIII. Conocer e investigar las conductas de los servidores públicos de la Administración Pública Federal que puedan constituir responsabilidades administrativas, así como substanciar los procedimientos correspondientes conforme a lo establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, por sí, o por conducto de los órganos internos de control que correspondan a cada área de la Administración Pública Federal; para lo cual podrán aplicar las sanciones que correspondan en los casos que no sean de la competencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y, cuando se trate de faltas administrativas graves, ejercer la acción de responsabilidad ante ese Tribunal; así como presentar las denuncias correspondientes ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y ante otras autoridades competentes, en términos de las disposiciones aplicables; XIX. Establecer mecanismos internos para la Administración	desaparecieron o se hayan resarcido.	

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
Pública Federal que prevengan actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas;		
Artículo 37 (fracción XV).- A la Secretaría de la Función Pública corresponde el despacho de los siguientes asuntos: **…** XV. Informar periódicamente al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, así como al Ejecutivo Federal, sobre el resultado de la evaluación respecto de la gestión de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y de la Procuraduría General de la República, así como del resultado de la revisión del ingreso, manejo, custodia y ejercicio de recursos públicos federales, y promover ante las autoridades competentes, las acciones que procedan para corregir las irregularidades detectadas;	**Artículo 63.-** Las responsabilidades y las sanciones a que se refiere la presente Ley serán independientes de las de orden civil, penal o de cualquier otra índole que puedan derivar de la comisión de los mismos hechos.	
Artículo 37 (fracción XVII).- A la Secretaría de la Función Pública corresponde el despacho de los siguientes asuntos: … XVII. Atender las quejas e inconformidades que presenten	**Artículo 65 (primer párrafo).-** La Secretaría de la Función Pública conocerá de las inconformidades que se promuevan contra los actos de los procedimientos de licitación pública o invitación a cuando menos tres personas que se indican a continuación: I. La convocatoria a la licitación, y las juntas de aclaraciones. En este supuesto, la inconformidad sólo podrá	**Artículo 116.-** Al escrito inicial de las inconformidades a que se refiere la fracción I del artículo 65 de la Ley, deberá acompañarse la manifestación a que se refiere el tercer párrafo del artículo 33 Bis de la Ley, con el acuse de recibo o sello de la dependencia o entidad correspondiente, o bien, la constancia que se obtenga de su envío en forma electrónica, a través de CompraNet.

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
los particulares con motivo de convenios o contratos que celebren con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y de la Procuraduría General de la República, salvo los casos en que otras leyes establezcan procedimientos de impugnación diferentes;	presentarse por el interesado que haya manifestado su interés por participar en el procedimiento según lo establecido en el artículo 33 Bis de esta Ley, dentro de los seis días hábiles siguientes a la celebración de la última junta de aclaraciones; II. La invitación a cuando menos tres personas. Sólo estará legitimado para inconformarse quien haya recibido invitación, dentro de los seis días hábiles siguientes; III. El acto de presentación y apertura de proposiciones, y el fallo. En este caso, la inconformidad sólo podrá presentarse por quien hubiere presentado proposición, dentro de los seis días hábiles siguientes a la celebración de la junta pública en la que se dé a conocer el fallo, o de que se le haya notificado al licitante en los casos en que no se celebre junta pública; IV. La cancelación de la licitación. En este supuesto, la inconformidad sólo podrá presentarse por el licitante que hubiere presentado proposición, dentro de los seis días hábiles siguientes a su notificación, y V. Los actos y omisiones por parte de la convocante que impidan la formalización del contrato en los términos establecidos en la convocatoria a la licitación o en esta Ley. En esta hipótesis, la inconformidad sólo podrá presentarse por quien haya resultado adjudicado, dentro de los seis días hábiles posteriores a aquél en que hubiere vencido el plazo establecido en el fallo para la formalización del contrato o, en su defecto, el plazo legal. …	La omisión de exhibir el documento referido en el párrafo anterior será motivo de prevención en términos de lo dispuesto por el penúltimo párrafo del artículo 66 de la Ley.

A) Marco normativo complementario y supletorio.

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
32.- ⇒Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. *29 de mayo de 2009.* **Artículo 1.-** El objeto de esta ley es organizar a la PGR para el despacho de los asuntos que al Ministerio Público de la Federación y al Procurador General de la República les confiere la CPEUM. La PGR ejercerá sus atribuciones respondiente a la satisfacción del interés social y del bien común… **Artículo 10 (fracción I BIS).-** Para el despacho de los asuntos que competen a la Procuraduría General de la República y al Ministerio Público de la Federación conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el presente ordenamiento y demás disposiciones aplicables, el Procurador General de la República se auxiliará de: … I Bis. Fiscales Especializados; **Artículo 9 (segundo párrafo).-** El Procurador General de la República, sin perjuicio de las facultades concedidas en esta ley al Fiscal Especializado en	**Artículo 1 (fracción III y penúltimo párrafo).-** La presente Ley es de orden público y tiene por objeto reglamentar la aplicación del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de las adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y prestación de servicios de cualquier naturaleza, que realicen: … III. La Procuraduría General de la República; **…** Los titulares de las dependencias y los órganos de gobierno de las entidades emitirán, bajo su responsabilidad y de conformidad con este mismo ordenamiento y los lineamientos generales que al efecto emita la Secretaría de la Función Pública, las políticas, bases y lineamientos para las materias a que se refiere este artículo.	

⇒ Forma parte de las siete leyes que integran el Sistema Nacional Anticorrupción.

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
materia de delitos relacionados con hechos de corrupción para expedir normas administrativas necesarias que rijan la actuación de dicha Fiscalía, emitirá los acuerdos, circulares, instructivos, bases y demás normas administrativas necesarias que rijan la actuación de las unidades administrativas y órganos técnicos y administrativos, centrales y desconcentrados, de la Procuraduría General de la República, así como de agentes del Ministerio Público de la Federación, agentes de la Policía Federal Ministerial, oficiales ministeriales, visitadores y peritos.		
Artículo 61 (fracción I).- Los agentes del Ministerio Público de la Federación, los agentes de la Policía Federal Ministerial y los peritos tendrán los derechos siguientes: I. Participar en los cursos de capacitación, actualización y especialización correspondientes, así como en aquellos que se acuerden con otras instituciones académicas, nacionales y del extranjero, que tengan relación con sus funciones, sin perder sus derechos y antigüedad, sujeto a las disposiciones	**Artículo 7 (tercer párrafo).-** La Secretaría de la Función Pública, en el ámbito de sus atribuciones, estará encargada de establecer las directrices conforme a las cuales se determinarán los perfiles de puesto de los servidores públicos correspondientes en materia de contrataciones públicas, así como las relativas a la capacitación para el adecuado desempeño de sus funciones en las materias a que alude esta Ley**.**	

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
presupuestales y a las necesidades del servicio; **Artículo 10 Ter (fracciones IV, V y VI).-** La Fiscalía Especializada en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción contará con las siguientes atribuciones: … IV. Contar con los agentes del Ministerio Público de la Federación y policías de investigación, miembros del servicio profesional de carrera, que le estarán adscritos y resulten necesarios para la atención de los casos que correspondan a la Fiscalía, sobre los que ejercerá mando directo en términos de lo dispuesto por esta ley y su reglamento. Para los efectos de lo dispuesto en esta fracción presentará solicitud debidamente sustentada y justificada ante el Consejo de Profesionalización, que resolverá lo conducente procurando que se guarde un equilibrio y proporcionalidad en la asignación del personal ministerial considerando los requerimientos operacionales de las diversas unidades administrativas y órganos desconcentrados de la institución y la disponibilidad		

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
presupuestaria; V. Proponer al Procurador General de la República el nombramiento de los agentes del Ministerio Público por designación especial que reúnan amplia experiencia profesional en la materia de corrupción, en términos de lo dispuesto por los artículos 37 y 38 de esta ley; VI. Proponer a la unidad administrativa competente el contenido teórico práctico de los programas de capacitación, actualización y especialización a que se refiere el artículo 33 de esta ley, respecto de los agentes del Ministerio Público adscritos a la Fiscalía Especializada; **Artículo 10 Quáter.-** Las fiscalías especializadas se equiparan jerárquica y administrativamente a una Subprocuraduría y sus titulares deberán ser ciudadanos mexicanos por nacimiento; tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación; contar, con antigüedad mínima de diez años, con título profesional de licenciado en derecho; gozar de buena reputación, y no haber sido condenado por delito doloso.		

A) Marco normativo complementario y supletorio.

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
Artículo 13 (fracción I, segundo párrafo).- El personal de la Procuraduría General de la República se organizará como sigue: … I… El Fiscal Especializado fundada y motivadamente, podrá solicitar al Consejo de Profesionalización la destitución de los agentes del Ministerio Público y de la policía que le estén adscritos cuando no cumplan con los requisitos para permanecer en su cargo.		
Artículo 10 Ter (fracciones XIII, XVII, XVIII y XIX).- La Fiscalía Especializada en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción contará con las siguientes atribuciones: … XIII. Diseñar e implementar proyectos, estudios y programas permanentes de información y fomento de la cultura de la denuncia y de la legalidad en materia de los hechos que la ley considera como delitos en materia de corrupción; … XVII. Coadyuvar con otras áreas competentes de la Procuraduría, en el desarrollo	**Artículo 9 (primer párrafo).-** En materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, los titulares de las dependencias y los órganos de gobierno de las entidades serán los responsables de que, en la adopción e instrumentación de las acciones que deban llevar a cabo en cumplimiento de esta Ley, se observen criterios que promuevan la modernización y desarrollo administrativo, la descentralización de funciones y la efectiva delegación de facultades.	

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
de herramientas de inteligencia con metodologías interdisciplinarias de análisis e investigación de las distintas variables criminales, socioeconómicas y financieras, para conocer la evolución de las actividades relacionadas con los hechos que la ley considera como delitos en materia de corrupción; XVIII. Generar sus propias herramientas metodológicas para el efecto de identificar los patrones de conducta que pudieran estar relacionados con operaciones con recursos de procedencia ilícita; XIX. Emitir guías y manuales técnicos, en conjunto con la Coordinación General de Servicios Periciales y la Unidad Especializada en Análisis Financiero para la formulación de dictámenes en materia de análisis fiscal, financiero y contable que requieran los agentes del Ministerio Público de la Federación en el cumplimiento de sus funciones de investigación y persecución de los hechos que la ley considera como delitos en materia de corrupción;		
Artículo 77.- Para todo lo no dispuesto en el presente capítulo o en el reglamento de	**Artículo 11.-** Serán supletorias de esta Ley y de las demás disposiciones que de ella se deriven, en lo que corresponda, el Código Civil Federal, la Ley Federal	

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
esta ley, serán aplicables supletoriamente las disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.	de Procedimiento Administrativo y el Código Federal de Procedimientos Civiles. Lo anterior sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 61 de la presente Ley.	
Artículo 10 Bis (penúltimo y último párrafo).- El titular de la Fiscalía Especializada en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción elaborará su anteproyecto de presupuesto para enviarlo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por conducto de la Procuraduría General de la República, para que se integre en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente que envíe para su aprobación a la Cámara de Diputados. En el Presupuesto de Egresos de la Federación se identificará el monto aprobado a esta Fiscalía para el respectivo ejercicio fiscal.	**Artículo 18 (fracción II).-** En la planeación de las adquisiciones, arrendamientos y servicios que pretendan realizar sujetos a que se refiere las fracciones I a VI del artículo 1 de esta Ley, deberá ajustarse a: … II. Los objetivos, metas y previsiones de recursos establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación o, en su caso, al presupuesto destinado a las contrataciones que los fideicomisos públicos no considerados entidades paraestatales prevean para el ejercicio correspondiente.	
Artículo 6.- Son atribuciones indelegables del Procurador General de la República: I. Comparecer ante cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión en los casos y bajo las condiciones que establecen los artículos 69 y 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En	**Artículo 21 (primer párrafo).-** Las dependencias y entidades pondrán a disposición del público en general, a través de CompraNet y de su página en Internet, a más tardar el 31 de enero de cada año, su programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios correspondiente al ejercicio fiscal de que se trate, con excepción de aquella información que, de conformidad con las disposiciones aplicables, sea de naturaleza reservada o confidencial, en los términos establecidos en la Ley Federal de Transparencia y	**Artículo 17.-** Los programas anuales de adquisiciones, arrendamientos y servicios deberán actualizarse, cuando proceda, durante los últimos cinco días hábiles de cada mes.

A) Marco normativo complementario y supletorio.

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
esas comparecencias deberá reservarse la información que ponga en riesgo alguna investigación, aquélla que conforme a la ley se encuentre sujeta a reserva y los datos confidenciales en términos de las normas aplicables; **Artículo 10 Bis (quinto párrafo).-** Su titular (Fiscalía especializada) presentará anualmente al Procurador General de la República un informe sobre actividades sustantivas y sus resultados, el cual será público, en términos de lo previsto en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y demás disposiciones aplicables en la materia. Dicho informe será remitido a su vez, al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción y al Senado de la República.	Acceso a la Información Pública Gubernamental.	
Artículo 10 Ter (fracción XII).- La Fiscalía Especializada en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción contará con las siguientes atribuciones: … XII. Fortalecer e implementar, en el ámbito de su competencia, mecanismos de cooperación y colaboración con	**Artículo 23 (fracción I).-** El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de la Función Pública, determinará las dependencias y entidades que deberán instalar comisiones consultivas mixtas de abastecimiento, en función del volumen, características e importancia de las adquisiciones, arrendamientos y servicios que contraten. Dichas comisiones tendrán por objeto: I. Propiciar y fortalecer la comunicación de las propias dependencias y entidades con los proveedores, a fin de lograr una mejor planeación de las adquisiciones,	

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
autoridades de los tres órdenes de gobierno para la investigación de los hechos que la ley considera como delitos en materia de corrupción;	arrendamientos y servicios;	
Artículo 5 (fracción IX).- Corresponde a la Procuraduría General de la República: … IX. Establecer medios de información sistemática y directa a la sociedad, para dar cuenta de sus actividades. En todo caso se reservará la información cuya divulgación pueda poner en riesgo las averiguaciones que realice el Ministerio Público de la Federación y mantendrá la confidencialidad de los datos personales, de conformidad con lo dispuesto por el Código Federal de Procedimientos Penales y demás normas aplicables; **Artículo 10 Ter (fracción XV).-** La Fiscalía Especializada en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción contará con las siguientes atribuciones: … XV. Requerir a las instancias de gobierno la información que resulte útil o necesaria para sus investigaciones, la que por ningún motivo le podrá ser	**Artículo 56 (primer y segundo párrafos).-** La forma y términos en que las dependencias y entidades deberán remitir a la Secretaría de la Función Pública, a la Secretaría y a la Secretaría de Economía, la información relativa a los actos y los contratos materia de esta Ley, serán establecidos por dichas Secretarías, en el ámbito de sus respectivas atribuciones. La administración del sistema electrónico de información pública gubernamental sobre adquisiciones, arrendamientos y servicios, estará a cargo de la Secretaría de la Función Pública, a través de la unidad administrativa que determine su Reglamento, en el cual las dependencias, entidades y los demás sujetos de esta Ley, deberán incorporar la información que ésta les requiera.	**Artículo 88 (fracción IV).-** Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley, respecto de las fracciones y párrafos de dicho precepto legal que a continuación se señalan, deberá considerarse lo siguiente: … IV. Se entenderá que el Oficial Mayor o equivalente de la dependencia o entidad cumple con lo dispuesto en el último párrafo, cuando ingrese a CompraNet la información de las personas a que hacen referencia las fracciones III, V y XIII de dicho artículo y en relación con aquéllas que señalan las demás fracciones, cuando se tenga conocimiento de la información que se prevé en las mismas; en ambos casos la información deberá incorporarse a CompraNet en un plazo de tres días hábiles, contados a partir de aquél en que disponga de dicha información. Asimismo, será responsable de dar de baja de CompraNet la información que de dichas personas haya difundido, cuando dejen de ubicarse en las hipótesis que motivaron su inclusión en dicho sistema electrónico de información pública gubernamental.

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
negada, incluso anteponiendo el secreto bancario, fiduciario o cualquiera otro de similar naturaleza;		
Artículo 10 Ter (fracciones XIV y XVI).- La Fiscalía Especializada en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción contará con las siguientes atribuciones: … XIV. Implementar mecanismos de colaboración con autoridades que ejerzan facultades de fiscalización a fin de fortalecer el desarrollo de las investigaciones; … XVI. Diseñar, integrar e implementar sistemas y mecanismos de análisis de la información fiscal, financiera y contable para que pueda ser utilizada por ésta y otras unidades competentes de la Procuraduría, en especial la relacionada con la investigación de los hechos que la ley considera como delitos en materia de corrupción;	**Artículo 57 (primer párrafo).-** La Secretaría de la Función Pública, en el ejercicio de sus facultades, podrá verificar, en cualquier tiempo, que las adquisiciones, arrendamientos y servicios se realicen conforme a lo establecido en esta Ley o en otras disposiciones aplicables.	
Artículo 21 (párrafo quinto).- Las faltas administrativas que cometan los servidores públicos de la Visitaduría General incluyendo a su titular, en términos de lo previsto en el régimen especial de la materia	**Artículo 62.** La Secretaría de la Función Pública aplicará las sanciones que procedan a quienes infrinjan las disposiciones de este ordenamiento, conforme a lo dispuesto por la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. La Secretaría de la Función Pública, en uso de las	**Artículo 46 (fracción V).-** La junta de aclaraciones, se llevará a cabo conforme a lo siguiente: … V. Será responsabilidad del titular del Área requirente y del titular del Área técnica, o bien sólo el de esta última cuando también tenga el carácter de Área requirente, que asista un representante de las

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
previsto en los Capítulos VIII y IX de esta ley, con excepción de las que se prevén en la Ley General de Responsabilidades Administrativas que corresponden al Órgano Interno de Control, serán investigadas y sustanciadas por el Procurador General de la República o por el servidor público en quien se delegue la facultad, quien podrá imponer las sanciones que correspondan. **Artículo 67.-** Las sanciones por incurrir en las causas de responsabilidad a que se refiere el artículo 62 de esta ley, serán: I. Amonestación pública o privada; II. Suspensión; III. Arresto, para agentes de la Policía Federal Ministerial, o IV. Remoción. **Artículo 68.-** La amonestación es el acto mediante el cual se le llama la atención al servidor público por la falta o faltas no graves cometidas en el desempeño de sus funciones y lo conmina a rectificar su conducta. La amonestación podrá ser pública o privada dependiendo de las circunstancias específicas de la falta y, en ambos casos, se comunicará por escrito al infractor, en cuyo	atribuciones que le confiere la Ley citada en el párrafo anterior, podrá abstenerse de iniciar los procedimientos previstos en ella, cuando de las investigaciones o revisiones practicadas se advierta que el acto u omisión no es grave, o no implica la probable comisión de algún delito o perjuicio patrimonial a la dependencia o entidad, o que el acto u omisión fue corregido o subsanado de manera espontánea por el servidor público o implique error manifiesto y en cualquiera de estos supuestos, los efectos que, en su caso, hubieren producido, desaparecieron o se hayan resarcido.	mismas, con los conocimientos técnicos suficientes que permitan dar respuesta clara y precisa a los planteamientos de los licitantes, a las juntas de aclaraciones a los que fueron convocados. En caso de inasistencia del representante del Área técnica o del Área requirente, el servidor público que presida la junta de aclaraciones lo hará del conocimiento del titular del área de responsabilidades del órgano interno de control en la dependencia o entidad de que se trate. … **Artículo 130 (segundo párrafo).-** A los servidores públicos facultados para representar a las dependencias y entidades que, sin causa justificada, omitan dar contestación a la solicitud de conciliación o no asistan a las sesiones respectivas, se les prevendrá de la responsabilidad en que incurren, en términos del primer párrafo del artículo 62 de la Ley. La autoridad que conozca del caso deberá citar a una siguiente audiencia de conciliación.

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
expediente personal se archivará una copia de la misma. Las amonestaciones serán consideradas en los procesos de ascenso del Servicio Profesional de Carrera Ministerial, Policial y Pericial. La acumulación de tres amonestaciones dará lugar a la suspensión. **Artículo 69.-** La suspensión es la interrupción temporal de los efectos del nombramiento, la cual podrá ser hasta por treinta días a juicio del superior jerárquico, cuando la falta cometida no amerite remoción. **Artículo 70.-** Procederá la remoción en los casos de infracciones graves a juicio de la Visitaduría General. En todo caso, se impondrá la remoción en los casos a que se refieren las fracciones IV, V, VII, VIII, XII, XIII, XV y XVI del artículo 63, y las fracciones V, VII, IX y XI del artículo 64 de esta ley. **Artículo 73.-** Las sanciones se impondrán tomando en cuenta los elementos siguientes: I. La gravedad de la responsabilidad en que se incurra; II. La necesidad de suprimir prácticas que vulneren el funcionamiento de la		

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
Procuraduría General de la República; III. La reincidencia del responsable; IV. El nivel jerárquico, el grado académico y la antigüedad en el servicio; V. Las circunstancias y medios de ejecución; VI. Las circunstancias socioeconómicas del servidor público, y VII. El monto del beneficio, daño o perjuicio económicos derivado del incumplimiento de obligaciones. **Artículo 10 Bis (sexto párrafo).-** El titular de la Fiscalía, al igual que su personal de confianza, agentes del Ministerio Público de la Federación, agentes de la Policía Federal Ministerial y peritos miembros del Servicio Profesional de Carrera o de designación especial estarán sujetos a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, así como al régimen especial de la materia previsto en esta ley. Su actuación será fiscalizada por la Auditoría Superior de la Federación, la Visitaduría General y el Órgano Interno de Control, conforme a sus respectivas competencias.		

A) Marco normativo complementario y supletorio.

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
Artículo 10 Ter (fracciones I, II y III).- La Fiscalía Especializada en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción contará con las siguientes atribuciones: I. Ejercer las atribuciones que la Constitución, las leyes, los Reglamentos y demás disposiciones jurídicas confieren al Ministerio Público de la Federación en lo relativo a los hechos que la ley considera como delitos en materia de corrupción, con excepción de los cometidos por servidores públicos de la Procuraduría General de la República, supuesto en el cual se estará a lo dispuesto en el artículo 21 de esta ley; II. Participar como integrante en el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, atendiendo las bases establecidas en el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la ley general correspondiente; III. Nombrar, previo acuerdo con el Procurador General de la República, a los titulares de las unidades administrativas y direcciones generales de la Fiscalía Especializada en materia de delitos relacionados		

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
con hechos de corrupción, salvo aquellas que no realicen funciones sustantivas, en cuyo caso, el nombramiento y su remoción serán exclusivos del Fiscal Especializado; **Artículo 80.-** El Órgano Interno de Control en la Procuraduría General de la República, dependiente de la Secretaría de la Función Pública, ejercerá sus atribuciones conforme a las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas que rigen la actuación de esa Secretaría de Estado. Las faltas administrativas en que incurran los servidores públicos de la Procuraduría General de la República que no encuadren en el régimen especial previsto en los Capítulos VIII y IX de esta ley, serán del conocimiento del Órgano Interno de Control en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. **Artículo 82.-** Se podrán imponer a los servidores públicos de la Procuraduría General de la República, por las faltas en que incurran en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, las sanciones disciplinarias previstas en los ordenamientos legales en		

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
materia de responsabilidades de los servidores públicos, mediante el procedimiento que en los mismos se establezcan. En los casos en que el órgano interno de control determine las sanciones de destitución o inhabilitación, se entenderá que conllevan la cancelación de la certificación a que se refiere el artículo 59 de esta ley. La cancelación de la certificación deberá registrarse en los términos la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.		
Artículo 3.- El Procurador General de la República intervendrá por sí o por conducto de agentes del Ministerio Público de la Federación en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la presente ley y las demás disposiciones aplicables. **Artículo 10 Bis (primero, segundo, tercer y cuarto párrafos).-** La Fiscalía Especializada en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción es el órgano con autonomía técnica y operativa para investigar y perseguir los hechos que la ley considera como delitos por hechos de	**Artículo 63.-** Las responsabilidades y las sanciones a que se refiere la presente Ley serán independientes de las de orden civil, penal o de cualquier otra índole que puedan derivar de la comisión de los mismos hechos.	

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
corrupción. Contará con el personal sustantivo, directivo, administrativo y auxiliar capacitados para el debido cumplimiento de sus funciones, así como con las unidades administrativas necesarias para el seguimiento de las investigaciones. La Fiscalía Especializada para el desarrollo de sus funciones se auxiliará de la unidad administrativa en materia de Servicios Periciales, la cual en su caso, deberá dar trámite y desahogo al peritaje solicitado en el término que al efecto establezca el Ministerio Público y que resulte acorde con la complejidad del peritaje a realizar. Asimismo, la Fiscalía contará con Agentes del Ministerio Público Especializados en combate a los hechos que la ley considera como delitos en materia de corrupción. … **Artículo 10 Ter (fracciones VII, VIII, IX, X y XI).-** La Fiscalía Especializada en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción contará con las siguientes atribuciones: …		

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
VII. Coordinar y supervisar la actuación de la policía de investigación en los términos de lo dispuesto en el artículo 21 Constitucional; VIII. Diseñar e implementar estrategias y líneas de acción para combatir los hechos que la ley considera como delitos en materia de corrupción; IX. Implementar planes y programas destinados a detectar la comisión de los hechos que la ley considera como delitos en materia de corrupción en el ámbito de su competencia. Dichos planes y programas deberán ser aprobados por el Procurador General de la República; X. Instrumentar mecanismos de colaboración con otras autoridades para la elaboración de estrategias y programas tendientes a combatir los hechos que la ley considera como delitos en materia de corrupción; XI. Emitir los acuerdos, circulares, instructivos, bases y demás normas administrativas necesarias que rijan la actuación de la Fiscalía en el ámbito de su competencia. Los acuerdos, circulares, instructivos, bases y demás normas administrativas emitidas		

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
por parte del Fiscal Especializado en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción, que sean necesarios para regular la actuación de la Fiscalía Especializada a su cargo en ningún caso podrán contradecir las normas administrativas emitidas por el Procurador General de la República. En caso de contradicción, se estará a lo dispuesto en el artículo 15 del Reglamento de esta ley, resolviendo la actualización, derogación o abrogación de la norma emitida por el fiscal especializado. En su caso, se propondrá al Procurador General de la República la actualización, derogación o abrogación de las normas expedidas por éste;		
33.- ⇒Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. *Nueva Ley publicada en el D.O.F.18 de julio de 2016.* **Artículo 23 (fracción XXV).-** Son facultades de la Junta de Gobierno y Administración, las siguientes: … XXV. Regular y supervisar las	**Artículo 9.-** En materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, los titulares de las dependencias y los órganos de gobierno de las entidades serán los responsables de que, en la adopción e instrumentación de las acciones que deban llevar a cabo en cumplimiento de esta Ley, se observen criterios que promuevan la modernización y desarrollo administrativo, la descentralización de funciones y la efectiva delegación de facultades. Las facultades conferidas por esta Ley a los titulares de las dependencias podrán ser ejercidas por los	**Artículo 3.-** Las políticas, bases y lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios a que se refiere el penúltimo párrafo del artículo 1 de la Ley, sólo deberán prever lo siguiente: I. Las áreas de la dependencia o entidad que aplicarán las disposiciones previstas en la Ley y el presente Reglamento; II. Los niveles jerárquicos de los servidores públicos que atenderán y se responsabilizarán de los diversos actos relacionados con los procedimientos de

⇒ Forma parte de las siete leyes que integran el Sistema Nacional Anticorrupción.

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
adquisiciones de bienes y servicios, las obras y los arrendamientos que contrate el Tribunal y comprobar que se apeguen a las leyes y disposiciones en dichas materias; **Artículo 38 (inciso B), fracción I).-** Las Salas Especializadas en materia de Responsabilidades Administrativas conocerán de: … B) Los procedimientos, resoluciones definitivas o actos administrativos, siguientes: Las que se dicten en materia administrativa sobre interpretación y cumplimiento de contratos de obras públicas, adquisiciones, arrendamientos y servicios celebrados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal; **Artículo 3 (fracción XII).-** El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: … XII. Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o	titulares de sus órganos desconcentrados, previo acuerdo delegatorio. **Artículo 15.-** Los actos, contratos y convenios que las dependencias y entidades realicen o celebren en contravención a lo dispuesto por esta Ley, serán nulos previa determinación de la autoridad competente. La solución de las controversias se sujetará a lo previsto por el Título Sexto de esta Ley, sin perjuicio de lo establecido en los tratados de que México sea parte**.** **Artículo 26 (octavo párrafo).-** La licitación pública inicia con la publicación de la convocatoria y, en el caso de invitación a cuando menos tres personas, con la entrega de la primera invitación; ambos procedimientos concluyen con la emisión del fallo o, en su caso, con la cancelación del procedimiento respectivo. **Artículo 37 (séptimo párrafo).-** Contra el fallo no procederá recurso alguno; sin embargo procederá la inconformidad en términos del Título Sexto, Capítulo Primero de esta Ley.	contratación a que hacen referencia la Ley y este Reglamento; III. La forma en que las dependencias y entidades deberán cumplir con los términos o plazos a que hacen referencia la Ley y este Reglamento, y IV. Los aspectos que se determinen en los lineamientos generales que emita la Secretaría de la Función Pública. Las dependencias y entidades divulgarán y mantendrán en forma permanente y actualizada en sus páginas de Internet, las políticas, bases y lineamientos a que se refiere este artículo. Las entidades que no cuenten con la infraestructura técnica necesaria para los efectos señalados, deberán hacerlo a través de la dependencia que funja como su coordinadora de sector. **Artículo 39 (fracción III, inciso d).-** La convocatoria a la licitación pública y, cuando proceda, el Proyecto de convocatoria deberán contener los requisitos que señala el artículo 29 de la Ley y se elaborarán conforme al orden, apartados e información que a continuación se indican: … III. Forma y términos que regirán los diversos actos del procedimiento de licitación pública, precisando entre otros aspectos, los siguientes: … d) Que una vez recibidas las proposiciones en la

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
resuelvan un expediente, en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; **Artículo 38 (inciso B, fracciones II y IV).-** Las Salas Especializadas en materia de Responsabilidades Administrativas conocerán de: … B) Los procedimientos, resoluciones definitivas o actos administrativos, siguientes: II. Las que nieguen la indemnización o que por su monto, no satisfagan al reclamante y las que impongan la obligación de resarcir daños y perjuicios pagados con motivo de la reclamación, en los términos de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado o de las leyes administrativas federales que contengan un régimen especial de responsabilidad patrimonial del Estado; …	**Artículo 38.-** Las dependencias y entidades procederán a declarar desierta una licitación, cuando la totalidad de las proposiciones presentadas no reúnan los requisitos solicitados o los precios de todos los bienes, arrendamientos o servicios ofertados no resulten aceptables. En los casos en que no existan proveedores nacionales, en las políticas, bases y lineamientos podrá establecerse un porcentaje menor al utilizado para determinar el precio no aceptable, sin que el mismo pueda ser inferior al cinco por ciento. Los resultados de la investigación y del cálculo para determinar la inaceptabilidad del precio ofertado se incluirán en el fallo a que alude el artículo 37 de esta Ley. Cuando se declare desierta una licitación o alguna partida y persista la necesidad de contratar con el carácter y requisitos solicitados en la primera licitación, la dependencia o entidad podrá emitir una segunda convocatoria, o bien optar por el supuesto de excepción previsto en el artículo 41 fracción VII de esta Ley. Cuando los requisitos o el carácter sea modificado con respecto a la primera convocatoria, se deberá convocar a un nuevo procedimiento. Las dependencias y entidades podrán cancelar una licitación, partidas o conceptos incluidos en éstas, cuando se presente caso fortuito; fuerza mayor; existan circunstancias justificadas que extingan la necesidad para adquirir los bienes, arrendamientos o servicios, o que de continuarse con el procedimiento se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a la propia dependencia o entidad. La determinación de dar por cancelada la licitación, partidas o conceptos, deberá	fecha, hora y lugar establecidos, éstas no podrán retirarse o dejarse sin efecto, por lo que deberán considerarse vigentes dentro del procedimiento de licitación pública hasta su conclusión; **Artículo 72 (fracción VI).-** Para los efectos de lo establecido en el artículo 41 de la Ley deberá considerarse, respecto de las fracciones de dicho precepto legal, lo que se cita a continuación: … VI. El supuesto a que se refiere la fracción VII, sólo resultará procedente cuando se mantengan los mismos requisitos cuyo incumplimiento se consideró como causa de desechamiento en la convocatoria a la licitación pública declarada desierta, incluidas las modificaciones derivadas de las juntas de aclaraciones correspondientes; dentro de dichos requisitos, se considerará la cantidad de bienes o servicios indicada en la convocatoria a la primera licitación pública. Lo anterior será aplicable para el caso de las partidas que se hayan declarado desiertas en una licitación pública;

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
IV. Las resoluciones definitivas por las que se impongan sanciones administrativas a los servidores públicos en términos de la legislación aplicable, así como contra las que decidan los recursos administrativos previstos en dichos ordenamientos. **Artículo 3 (fracción VIII).-** El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: … VIII. Las que se originen por fallos en licitaciones públicas y la interpretación y cumplimiento de contratos públicos, de obra pública, adquisiciones, arrendamientos y servicios celebrados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal centralizada y paraestatal, y las empresas productivas del Estado; así como, las que estén bajo responsabilidad de los entes públicos federales	precisar el acontecimiento que motiva la decisión, la cual se hará del conocimiento de los licitantes, y no será procedente contra ella recurso alguno, sin embargo podrán interponer la inconformidad en términos del Título Sexto, Capítulo Primero de esta Ley. Salvo en las cancelaciones por caso fortuito y fuerza mayor, la dependencia o entidad cubrirá a los licitantes los gastos no recuperables que, en su caso, procedan en términos de lo dispuesto por el Reglamento de esta Ley. **Artículo 44.** En las adquisiciones, arrendamientos y servicios deberá pactarse la condición de precio fijo. No obstante, en casos justificados se podrán pactar en el contrato decrementos o incrementos a los precios, de acuerdo con la fórmula o mecanismo de ajuste que determine la convocante previamente a la presentación de las proposiciones. Cuando con posterioridad a la adjudicación de un contrato se presenten circunstancias económicas de tipo general, como resultado de situaciones supervenientes ajenas a la responsabilidad de las partes, que provoquen directamente un aumento o reducción en los precios de los bienes o servicios aún no entregados o prestados o aún no pagados, y que por tal razón no pudieron haber sido objeto de consideración en la proposición que sirvió de base	**Artículo 80.-** Cuando en los contratos se requiera pactar incrementos o decrementos en los precios, de conformidad con lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 44 de la Ley, la dependencia o entidad establecerá en la convocatoria a la licitación pública y en las invitaciones a cuando menos tres personas, una fórmula o mecanismo de ajuste para todos los licitantes. …

A) Marco normativo complementario y supletorio.

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
cuando las leyes señalen expresamente la competencia del tribunal; **Artículo 35 (fracción I).-** Además de los juicios a que se refiere el artículo 3, las Salas Regionales conocerán de aquellos que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: … I. Las resoluciones definitivas relacionadas con la interpretación y cumplimiento de contratos públicos, obra pública, adquisiciones, arrendamientos y servicios celebrados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal;	para la adjudicación del contrato correspondiente, las dependencias y entidades deberán reconocer incrementos o requerir reducciones, de conformidad con las disposiciones que, en su caso, emita la Secretaría de la Función Pública. Tratándose de bienes o servicios sujetos a precios oficiales, se reconocerán los incrementos autorizados. **Artículo 45.**- El contrato o pedido contendrá, en lo aplicable, lo siguiente: I. El nombre, denominación o razón social de la dependencia o entidad convocante; II. La indicación del procedimiento conforme al cual se llevó a cabo la adjudicación del contrato; III. Los datos relativos a la autorización del presupuesto para cubrir el compromiso derivado del contrato; IV. Acreditación de la existencia y personalidad del licitante adjudicado; V. La descripción pormenorizada de los bienes, arrendamientos o servicios objeto del contrato adjudicado a cada uno de los licitantes en el procedimiento, conforme a su proposición; VI. El precio unitario y el importe total a pagar por los bienes, arrendamientos o servicios, o bien, la forma en que se determinará el importe total; VII. Precisión de si el precio es fijo o sujeto a ajustes y, en este último caso, la fórmula o condición en que se hará y calculará el ajuste, determinando expresamente el o los indicadores o medios oficiales que se utilizarán en dicha fórmula; VIII. En el caso de arrendamiento, la indicación de si éste es con o sin opción a compra; IX. Los porcentajes de los anticipos que, en su caso, se otorgarían, los cuales no podrán exceder del cincuenta por ciento del monto total del contrato; **…**	**Artículo 39 (fracción II, inciso i).-** La convocatoria a la licitación pública y, cuando proceda, el Proyecto de convocatoria deberán contener los requisitos que señala el artículo 29 de la Ley y se elaborarán conforme al orden, apartados e información que a continuación se indican: … II. Objeto y alcance de la licitación pública, precisando: … i) En el modelo de contrato, respecto de los requisitos a que se refiere el artículo 45 de la Ley, los siguientes aspectos según corresponda: 1. El plazo máximo en días naturales para la entrega de los bienes o la prestación de los servicios, el cual contará a partir de la fecha en que el proveedor reciba la requisición respectiva; … **Artículo 44 (penúltimo párrafo).-** En el supuesto de que se adjudique el contrato a los licitantes que presentaron una proposición conjunta, el convenio indicado en la fracción II de este artículo y las facultades del apoderado legal de la agrupación que formalizará el contrato respectivo, deberán constar en escritura pública, salvo que el contrato sea firmado por todas las personas que integran la agrupación que formula la proposición conjunta o por sus representantes legales, quienes en lo individual, deberán acreditar su respectiva personalidad, o por el apoderado legal de la nueva sociedad que se

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
Artículo 20.- Son facultades de la Tercera Sección las siguientes: I. Elegir al Presidente de la Tercera Sección de entre los Magistrados que la integran; II. Resolver el recurso de apelación que interpongan las partes en contra de las resoluciones dictadas por las Salas Especializadas en materia de Responsabilidades Administrativas;	**Artículo 48 (fracción II).-** Los proveedores que celebren los contratos a que se refiere esta Ley deberán garantizar: … II. El cumplimiento de los contratos.	constituya por las personas que integran la agrupación que formuló la proposición conjunta, antes de la fecha fijada para la firma del contrato, lo cual deberá comunicarse mediante escrito a la convocante por dichas personas o por su apoderado legal, al momento de darse a conocer el fallo o a más tardar en las veinticuatro horas siguientes. **Artículo 81.-** Además de lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley, el contrato deberá: I. Ser firmado en términos de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 44 de este Reglamento, cuando la proposición ganadora de la licitación pública haya sido presentada en forma conjunta por varias personas. … **Artículo 82.-** Las dependencias y entidades, en contrataciones iguales o superiores al equivalente a trescientas veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal, deberán formalizar las adquisiciones, arrendamientos y servicios a través de contratos, los cuales deberán contener, en lo aplicable, los elementos a que se refiere el artículo 45 de la Ley y lo previsto en el artículo 81 de este Reglamento…

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
III. Ejercer su facultad de atracción para resolver los procedimientos administrativos sancionadores por faltas graves, cuya competencia primigenia corresponda a las Salas Especializadas en materia de Responsabilidades Administrativas, siempre que los mismos revistan los requisitos de importancia y trascendencia; entendiendo por lo primero, que el asunto pueda dar lugar a un pronunciamiento novedoso o relevante en materia de Responsabilidades Administrativas; y, por lo segundo, que sea necesario sentar un criterio que trascienda la resolución del caso, a fin de que sea orientador a nivel nacional. El ejercicio de la facultad de atracción podrá ser solicitada por cualquiera de los Magistrados de la Sección Tercera, o bien por el Pleno de las Salas Especializadas en materia de Responsabilidades Administrativas, por mayoría de votos de sus integrantes; IV. Resolver el recurso de reclamación que proceda en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; V. Fijar jurisprudencia, con la aprobación de cinco		

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
precedentes en el mismo sentido no interrumpidos por otro en contrario; VI. Designar al Secretario Adjunto de la Tercera Sección, a propuesta del Presidente de la Sección; VII. Conocer de asuntos que le sean turnados para sancionar responsabilidades administrativas que la ley determine como graves en casos de servidores públicos y de los particulares que participen en dichos actos; VIII. Conocer del recurso por medio del cual se califica como grave la falta administrativa que se investiga contra un servidor público; XI. Imponer a los particulares que intervengan en actos vinculados con faltas administrativas graves, inhabilitación para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, así como posibles nombramientos o encargos públicos del orden federal, en las entidades federativas, municipios o demarcaciones territoriales, según corresponda; … **Artículo 38 (inciso B, fracción I).-** Las Salas Especializadas en materia de Responsabilidades Administrativas conocerán de:	**Artículo 53 Bis.-** Las dependencias y entidades podrán establecer en la convocatoria a la licitación, invitaciones a cuando menos tres personas y contratos, deducciones al pago de bienes o servicios	

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
… B) Los procedimientos, resoluciones definitivas o actos administrativos, siguientes: I. Las que se dicten en materia administrativa sobre interpretación y cumplimiento de contratos de obras públicas, adquisiciones, arrendamientos y servicios celebrados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal;	con motivo del incumplimiento parcial o deficiente en que pudiera incurrir el proveedor respecto a las partidas o conceptos que integran el contrato. En estos casos, establecerán el límite de incumplimiento a partir del cual podrán cancelar total o parcialmente las partidas o conceptos no entregados, o bien rescindir el contrato en los términos de este artículo. **Artículo 54 (primer y antepenúltimo párrafos).-** Las dependencias y entidades podrán en cualquier momento rescindir administrativamente los contratos cuando el proveedor incurra en incumplimiento de sus obligaciones, conforme al procedimiento siguiente: I. Se iniciará a partir de que al proveedor le sea comunicado por escrito el incumplimiento en que haya incurrido, para que en un término de cinco días hábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes; II. Transcurrido el término a que se refiere la fracción anterior, la dependencia o entidad contará con un plazo de quince días para resolver, considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer el proveedor. La determinación de dar o no por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada, motivada y comunicada al proveedor dentro dicho plazo, y III. Cuando se rescinda el contrato se formulará el finiquito correspondiente, a efecto de hacer constar los pagos que deba efectuar la dependencia o entidad por concepto de los bienes recibidos o los servicios prestados hasta el momento de rescisión. … La dependencia o entidad podrá determinar no dar por rescindido el contrato, cuando durante el procedimiento advierta que la rescisión del contrato pudiera ocasionar algún daño o afectación a las funciones que tiene encomendadas. En este	

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
	supuesto, deberá elaborar un dictamen en el cual justifique que los impactos económicos o de operación que se ocasionarían con la rescisión del contrato resultarían más inconvenientes. **Artículo 59.-** Los licitantes o proveedores que infrinjan las disposiciones de esta Ley, serán sancionados por la Secretaría de la Función Pública con multa equivalente a la cantidad de cincuenta hasta mil veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal elevado al mes, en la fecha de la infracción. Cuando los licitantes, injustificadamente y por causas imputables a los mismos, no formalicen contratos cuyo monto no exceda de cincuenta veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal elevado al mes, serán sancionados con multa equivalente a la cantidad de diez hasta cuarenta y cinco veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal elevado al mes, en la fecha de la infracción. **Artículo 60 (primer párrafo, fracciones I, II, III, IV y V).-** La Secretaría de la Función Pública, además de la sanción a que se refiere el primer párrafo del artículo anterior, inhabilitará temporalmente para	**Artículo 109.-** Se sancionará en términos del primer párrafo del artículo 59 de la Ley, a los licitantes que injustificadamente y por causas imputables a los mismos se abstengan de firmar contratos según lo previsto por el segundo párrafo del artículo 46 de dicho ordenamiento, cuando el monto de éstos exceda de cincuenta veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal elevado al mes. Los licitantes que injustificadamente y por causas imputables a ellos no formalicen dos o más contratos con cualquier dependencia o entidad, dentro del plazo de dos años, serán sancionados en términos del primer párrafo del artículo 59 de la Ley por lo que respecta al segundo y sucesivos contratos no firmados, y se les inhabilitará conforme a lo dispuesto por la fracción I del artículo 60 de la Ley. Se presumirá que la falta de firma del contrato por parte del licitante a quien se le adjudicó el mismo le es imputable a éste, salvo prueba en contrario que aporte durante el procedimiento administrativo sancionador con la que justifique dicha omisión. **Artículo 110.-** Cuando una instancia de inconformidad sea sobreseída o resuelta como infundada y en la misma se determine que se promovió para retrasar o entorpecer la contratación, se sancionará al inconforme con inhabilitación en términos de la fracción IV del artículo 60 de la Ley y multa de acuerdo con el primer párrafo del artículo 59 de la Ley**.**

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
	participar de manera directa o por interpósita persona en procedimientos de contratación o celebrar contratos regulados por esta Ley, a las personas que se encuentren en alguno de los supuestos siguientes: I. Los licitantes que injustificadamente y por causas imputables a los mismos no formalicen dos o más contratos que les haya adjudicado cualquier dependencia o entidad en el plazo de dos años calendario, contados a partir del día en que haya fenecido el término para la formalización del primer contrato no formalizado; II. Los proveedores a los que se les haya rescindido administrativamente un contrato en dos o más dependencias o entidades en un plazo de tres años; III. Los proveedores que no cumplan con sus obligaciones contractuales por causas imputables a ellos y que, como consecuencia, causen daños o perjuicios graves a la dependencia o entidad de que se trate; así como, aquellos que entreguen bienes o servicios con especificaciones distintas de las convenidas; IV. Las que proporcionen información falsa o que actúen con dolo o mala fe en algún procedimiento de contratación, en la celebración del contrato o durante su vigencia, o bien, en la presentación o desahogo de una solicitud de conciliación o de una inconformidad; V. Las que se encuentren en el supuesto de la fracción XII del artículo 50 de este ordenamiento, y VI. Aquéllas que se encuentren en el supuesto del segundo párrafo del artículo 74 de esta Ley. …	
Artículo 14.- Las Secciones Primera y Segunda estarán integradas cada una por cinco Magistrados de Sala Superior. La Sección Tercera se compondrá de tres Magistrados	**Artículo 61.-** La Secretaría de la Función Pública impondrá las sanciones considerando: I. Los daños o perjuicios que se hubieren producido con motivo de la infracción; II. El carácter intencional o no de la acción u omisión constitutiva de la infracción;	

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
de Sala Superior, quienes integrarán Pleno General. Por la naturaleza de su especialización no integrarán el Pleno Jurisdiccional, ni podrán ser designados como integrantes de la Junta de Gobierno y Administración. Esta Sección contará con Salas Especializadas en materia de Responsabilidades Administrativas que le estarán adscritas para imponer las sanciones a los servidores públicos por las responsabilidades administrativas que la ley determine como graves y a los particulares que participen en actos vinculados con dichas responsabilidades, así como fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos federales. El Presidente del Tribunal no integrará Sección, salvo cuando sea requerido para integrarla ante la falta de quórum, en cuyo caso presidirá las sesiones, o cuando la Sección se encuentre imposibilitada para elegir su Presidente, en cuyo caso el	III. La gravedad de la infracción, y IV. Las condiciones del infractor. En la tramitación del procedimiento para imponer las sanciones a que se refiere este Título, la Secretaría de la Función Pública deberá observar lo dispuesto por el Título Cuarto y demás aplicables de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, aplicando supletoriamente tanto el Código Civil Federal, como el Código Federal de Procedimientos Civiles.	

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
Presidente del Tribunal fungirá provisionalmente como Presidente de la Sección, hasta que se logre la elección.		
Artículo 4.- El Tribunal conocerá de las Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y Particulares Vinculados con Faltas Graves promovidas por la Secretaría de la Función Pública y los Órganos Internos de control de los entes públicos federales, o por la Auditoría Superior de la Federación, para la imposición de sanciones en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Así como fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Federal o al Patrimonio de los entes públicos federales. Bajo ninguna circunstancia se entenderá que la atribución del Tribunal para imponer sanciones a particulares por actos u omisiones vinculadas con faltas administrativas graves se contrapone o menoscaba la facultad que	**Artículo 62.-** La Secretaría de la Función Pública aplicará las sanciones que procedan a quienes infrinjan las disposiciones de este ordenamiento, conforme a lo dispuesto por la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. La Secretaría de la Función Pública, en uso de las atribuciones que le confiere la Ley citada en el párrafo anterior, podrá abstenerse de iniciar los procedimientos previstos en ella, cuando de las investigaciones o revisiones practicadas se advierta que el acto u omisión no es grave, o no implica la probable comisión de algún delito o perjuicio patrimonial a la dependencia o entidad, o que el acto u omisión fue corregido o subsanado de manera espontánea por el servidor público o implique error manifiesto y en cualquiera de estos supuestos, los efectos que, en su caso, hubieren producido, desaparecieron o se hayan resarcido.	

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
cualquier ente público posea para imponer sanciones a particulares en los términos de la legislación aplicable. **Artículo 13.-** La Primera y la Segunda Sección cuentan con competencia administrativa y fiscal, y la Tercera con competencia en responsabilidades administrativas. **Artículo 16 (fracción XI).-** Son facultades del Pleno General las siguientes: … XI. Cada cinco años, presentar el diagnóstico cualitativo y cuantitativo sobre el trabajo de las Salas Especializadas en materia de Responsabilidades Administrativas, el cual deberá ser remitido para su consideración al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, por conducto de su secretariado ejecutivo, a efecto de que el citado Comité, emita recomendaciones sobre la creación o supresión de Salas Especializadas en la materia, y **Artículo 37.-** El Tribunal contará con Salas Especializadas en materia de Responsabilidades Administrativas, cada una tendrá competencia respecto de		

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
las entidades que conformen las cinco circunscripciones administrativas, mismas que determinará el Pleno General a propuesta de la Junta de Gobierno y Administración, de acuerdo a estudios cualitativos y cuantitativos. **Artículo 38 (incisos A y B, fracción III).-** Las Salas Especializadas en materia de Responsabilidades Administrativas conocerán de: A) Los procedimientos y resoluciones a que se refiere el artículo 4 de esta Ley, con las siguientes facultades: I. Resolverán respecto de las faltas administrativas graves, investigadas y substanciadas por la Auditoría Superior de la Federación y los órganos internos de control respectivos, según sea el caso, ya sea que el procedimiento se haya seguido por denuncia, de oficio o derivado de las auditorías practicadas por las autoridades competentes; II. Impondrán sanciones que correspondan a los servidores públicos y particulares, personas físicas o morales, que intervengan en actos vinculados con faltas administrativas graves, con independencia de otro tipo de responsabilidades.		

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
Así como fincar a los responsables el pago de las cantidades por concepto de responsabilidades resarcitorias, las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Federal o al Patrimonio de los entes públicos federales, locales o municipales, y III. Dictar las medidas preventivas y cautelares para evitar que el procedimiento sancionador quede sin materia, y el desvío de recursos obtenidos de manera ilegal. **B)** Las Salas Especializadas en materia de Responsabilidades Administrativas conocerán de: … III. De las resoluciones definitivas que impongan sanciones administrativas a los servidores públicos en términos de la Ley General de Responsabilidades, así como contra las que decidan los recursos administrativos previstos en dicho ordenamiento, y		
Artículo 3 (fracción VIII).- El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y	**Artículo 65 (fracciones III y V).-** La Secretaría de la Función Pública conocerá de las inconformidades que se promuevan contra los actos de los procedimientos de licitación pública o invitación a cuando menos tres personas que se indican a continuación:	**Artículo 112.-** Cuando la Secretaría de la Función Pública haya inhabilitado a un proveedor con posterioridad a la emisión de un fallo en el que se le adjudicó un contrato, las dependencias y entidades formalizarán el contrato respectivo.

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
procedimientos que se indican a continuación: … VIII. Las que se originen por fallos en licitaciones públicas y la interpretación y cumplimiento de contratos públicos, de obra pública, adquisiciones, arrendamientos y servicios celebrados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal centralizada y paraestatal, y las empresas productivas del Estado; así como, las que estén bajo responsabilidad de los entes públicos federales cuando las leyes señalen expresamente la competencia del tribunal; …	… III. El acto de presentación y apertura de proposiciones, y el fallo. En este caso, la inconformidad sólo podrá presentarse por quien hubiere presentado proposición, dentro de los seis días hábiles siguientes a la celebración de la junta pública en la que se dé a conocer el fallo, o de que se le haya notificado al licitante en los casos en que no se celebre junta pública; … V. Los actos y omisiones por parte de la convocante que impidan la formalización del contrato en los términos establecidos en la convocatoria a la licitación o en esta Ley. En esta hipótesis, la inconformidad sólo podrá presentarse por quien haya resultado adjudicado, dentro de los seis días hábiles posteriores a aquél en que hubiere vencido el plazo establecido en el fallo para la formalización del contrato o, en su defecto, el plazo legal.	
Artículo 3 (fracción X).- El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: … X. Las que requieran el pago de garantías a favor de la Federación, las entidades federativas o los Municipios, así como de sus entidades paraestatales y las empresas productivas del Estado; …	**Artículo 70 (noveno párrafo).-** A partir de que haya causado estado la resolución que ponga fin a la instancia de inconformidad, podrá iniciarse incidente de ejecución de garantía, que se tramitará por escrito en el que se señalará el daño o perjuicio que produjo la suspensión de los actos, así como las pruebas que estime pertinentes.	**Artículo 23 (fracción IV).-** El informe trimestral a que se refiere la fracción IV del artículo 22 de la Ley, se suscribirá y presentará por el presidente del Comité en la sesión ordinaria inmediata posterior a la conclusión del trimestre de que se trate, el cual contendrá los siguientes aspectos: … IV. El estado que guardan las acciones para la ejecución de las garantías por la rescisión de los contratos, por la falta de reintegro de anticipos o por los defectos y vicios ocultos de los bienes o de la calidad de los servicios, así como en el caso de las dependencias, el estado que guarda el trámite para hacer efectivas las garantías correspondientes en términos de los artículos 143 y 144 del Reglamento de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación,

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
Artículo 35 (fracciones I, II y IV).- Además de los juicios a que se refiere el artículo 3, las Salas Regionales conocerán de aquellos que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: … II. Las dictadas por autoridades administrativas en materia de licitaciones públicas; … IV. Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, respecto de los supuestos descritos en los incisos anteriores de este artículo; **Artículo 38 (inciso B, fracciones III y IV).-** Las Salas Especializadas en materia de Responsabilidades Administrativas conocerán de: … B) Los procedimientos, resoluciones definitivas o actos administrativos, siguientes: III. De las resoluciones definitivas que impongan sanciones administrativas a los servidores públicos en términos de la Ley General de	**Artículo 72.-** Desahogadas las pruebas, se pondrán las actuaciones a disposición del inconforme y tercero interesado a efecto de que dentro del plazo de tres días hábiles formulen sus alegatos por escrito. Cerrada la instrucción, la autoridad que conozca de la inconformidad dictará la resolución en un término de quince días hábiles. **Artículo 73.-** La resolución contendrá: I. Los preceptos legales en que funde su competencia para resolver el asunto; II. La fijación clara y precisa del acto impugnado; III. El análisis de los motivos de inconformidad, para lo cual podrá corregir errores u omisiones del inconforme en la cita de los preceptos que estime violados, así como examinar en su conjunto los motivos de impugnación y demás razonamientos expresados por la convocante y el tercero interesado, a fin de resolver la controversia efectivamente planteada, pero no podrá pronunciarse sobre cuestiones que no hayan sido expuestas por el promovente; IV. La valoración de las pruebas admitidas y desahogadas en el procedimiento; V. Las consideraciones y fundamentos legales en que se apoye, y VI. Los puntos resolutivos que expresen claramente sus alcances y efectos, en congruencia con la parte considerativa, fijando cuando proceda las directrices para la reposición de actos decretados nulos o para la firma del contrato. Una vez que cause estado la resolución que ponga fin a la inconformidad, ésta será publicada en CompraNet. **Artículo 74.-** La resolución que emita la autoridad podrá: I. Sobreseer en la instancia; II. Declarar infundada la inconformidad;	y

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
Responsabilidades, así como contra las que decidan los recursos administrativos previstos en dicho ordenamiento, y IV. Las resoluciones definitivas por las que se impongan sanciones administrativas a los servidores públicos en términos de la legislación aplicable, así como contra las que decidan los recursos administrativos previstos en dichos ordenamientos. **Artículo 3 (fracciones XII y XIII).-** El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: … XII. Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; XIII. Las que resuelvan los recursos administrativos en contra de las resoluciones que se indican en las demás fracciones de este artículo; …	III. Declarar que los motivos de inconformidad resultan inoperantes para decretar la nulidad del acto impugnado, cuando las violaciones alegadas no resulten suficientes para afectar su contenido; IV. Decretar la nulidad total del procedimiento de contratación; V. Decretar la nulidad del acto impugnado, para efectos de su reposición, subsistiendo la validez del procedimiento o acto en la parte que no fue materia de la declaratoria de nulidad, y VI. Ordenar la firma del contrato, cuando haya resultado fundada la inconformidad promovida en términos del artículo 65, fracción V de esta Ley. En los casos de las fracciones I y II, cuando se determine que la inconformidad se promovió con el propósito de retrasar o entorpecer la contratación, se sancionará al inconforme, previo procedimiento, con multa en términos del artículo 59 de la presente Ley. Para ese efecto, podrá tomarse en consideración la conducta de los licitantes en anteriores procedimientos de contratación o de inconformidad. La resolución que ponga fin a la instancia de inconformidad o, en su caso, a la intervención de oficio podrá impugnarse por el inconforme o tercero interesado mediante el recurso de revisión previsto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, o bien, cuando proceda, ante las instancias jurisdiccionales competentes. La resolución que ponga fin a la instancia de inconformidad o, en su caso, a la intervención de oficio podrá impugnarse por el inconforme o tercero interesado mediante el recurso de revisión previsto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, o bien, cuando proceda, ante las instancias jurisdiccionales competentes. **Artículo 75 (quinto y sexto párrafos).-** La convocante acatará la resolución que ponga fin a la	

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
	inconformidad en un plazo no mayor de seis días hábiles. Sólo podrá suspenderse la ejecución de las resoluciones mediante determinación de autoridad administrativa o judicial competente. … La resolución que ponga fin al incidente previsto en este artículo podrá impugnarse por el inconforme o tercero interesado mediante el recurso de revisión previsto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, o bien, cuando proceda, ante las instancias jurisdiccionales competentes. El desacato de las convocantes a las resoluciones y acuerdos que emita la Secretaría de la Función Pública en los procedimientos de inconformidad será sancionado de acuerdo a lo previsto en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.	
Artículo 38 (inciso B, fracción I).- Las Salas Especializadas en materia de Responsabilidades Administrativas conocerán de: … B) Los procedimientos, resoluciones definitivas o actos administrativos, siguientes: I. Las que se dicten en materia administrativa sobre interpretación y cumplimiento de contratos de obras públicas, adquisiciones, arrendamientos y servicios celebrados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal;	**Artículo 80.-** Podrá convenirse compromiso arbitral respecto de aquellas controversias que surjan entre las partes por interpretación a las cláusulas de los contratos o por cuestiones derivadas de su ejecución, en términos de lo dispuesto en el Título Cuarto del Libro Quinto del Código de Comercio. No será materia de arbitraje la rescisión administrativa, la terminación anticipada de los contratos, así como aquellos casos que disponga el Reglamento de esta Ley. **Artículo 84.-** Las partes podrán convenir otros mecanismos de solución de controversias para resolver sus discrepancias sobre la interpretación o ejecución de los contratos.	
Artículo 1.- La presente Ley es de orden público e interés general y tiene por objeto determinar la integración,	**Artículo 85.-** Las controversias que se susciten con motivo de la interpretación o aplicación de los contratos celebrados con base en esta Ley, serán resueltas por los tribunales federales, en los casos en	

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
organización, atribuciones y funcionamiento del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa es un órgano jurisdiccional con autonomía para emitir sus fallos y con jurisdicción plena. Formará parte del Sistema Nacional Anticorrupción y estará sujeto a las bases establecidas en el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley General correspondiente y en el presente ordenamiento. Las resoluciones que emita el Tribunal deberán apegarse a los principios de legalidad, máxima publicidad, respeto a los derechos humanos, verdad material, razonabilidad, proporcionalidad, presunción de inocencia, tipicidad y debido proceso. **Artículo 3 (fracciones IV y XVI).-** El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: … IV. Las que impongan multas	que no se haya pactado cláusula arbitral o medio alterno de solución de controversias, o éstas no resulten aplicables.	

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
por infracción a las normas administrativas federales; … XVI. Las resoluciones definitivas por las que se impongan sanciones administrativas a los servidores públicos en términos de la legislación aplicable, así como contra las que decidan los recursos administrativos previstos en dichos ordenamientos, además de los órganos constitucionales autónomos;		
34.- Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. *30 de diciembre de 2002.* **Artículo 10 (fracción IX).-** La planeación y ejecución de las políticas y acciones de fomento para la competitividad de las MIPYMES debe atender los siguientes criterios: … IX. Promover que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y sus delegaciones en las Entidades Federativas y en el Distrito Federal realicen la planeación de sus adquisiciones de bienes, contratación de servicios y realización de obra pública para destinarlas a las MIPYMES de	**Artículo 8 (primer párrafo).-** Atendiendo a las disposiciones de esta Ley y a las demás que de ella emanen, la Secretaría de Economía dictará las reglas que deban observar las dependencias y entidades, derivadas de programas que tengan por objeto promover la participación de las empresas nacionales, especialmente de las micro, pequeñas y medianas. Adicionalmente, las dependencias y entidades deberán diseñar y ejecutar programas de desarrollo de proveedores de micro, pequeñas y medianas empresas nacionales para generar cadenas de proveeduría respecto de bienes y servicios que liciten regularmente. **Artículo 13 (segundo párrafo).-** Tratándose de bienes cuyo proceso de fabricación sea superior a sesenta días, las dependencias o entidades otorgarán en igualdad de circunstancias del diez al cincuenta por ciento de anticipo cuando se trate de micro, pequeña y medianas empresas nacionales, conforme a lo establecido en el Reglamento de esta Ley.	**Artículo 2 (fracción VII).-…** VII. MIPYMES: las micro, pequeñas y medianas empresas de nacionalidad mexicana a que hace referencia la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa; **Artículo 11.-** El porcentaje del anticipo a otorgar a las MIPYMES, en el supuesto a que hace referencia el segundo párrafo del artículo 13 de la Ley, deberá ser previsto por la dependencia o entidad en la convocatoria a la licitación pública, en la invitación a cuando menos tres personas o en la solicitud de cotización, para lo cual atenderán, entre otros factores, al monto de la contratación, al costo financiero del mercado y al tiempo de fabricación del bien de que se trate, procurando en todos los casos dar el mayor porcentaje posible. **Artículo 34.-** Las MIPYMES podrán participar con ese carácter en los procedimientos de contratación, cuando presenten a la dependencia o entidad convocante, copia del documento expedido por autoridad competente que determine su

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
manera gradual, hasta alcanzar un mínimo del 35%, conforme a la normativa aplicable.		estratificación como micro, pequeña o mediana empresa, o bien, un escrito en el cual manifiesten bajo protesta de decir verdad, que cuentan con ese carácter, utilizando para tal fin el formato que al efecto proporcione la convocante. **Artículo 35 (último párrafo).-** Las dependencias y entidades podrán llevar a cabo licitaciones públicas en las que únicamente puedan participar MIPYMES, siempre y cuando el monto estimado de la contratación sea menor al monto de los umbrales establecidos para los tratados de libre comercio que cuenten con un capítulo de compras del sector público. **Artículo 38 (fracciones II y VII).-** Para la aplicación de la modalidad de ofertas subsecuentes de descuento en las licitaciones públicas, se atenderá lo siguiente: … II. Cuando se trate de licitaciones públicas dirigidas a MIPYMES, o cuando de la investigación de mercado se advierta la participación individual de éstas con empresas que por su capacidad de producción o económica representen una competencia desigual, la dependencia o entidad se abstendrá de utilizar esta modalidad; … VII. Las MIPYMES podrán participar cuando realicen proposiciones conjuntas en términos del presente Reglamento. En el caso de que participen en la licitación pública de manera individual, no podrán presentar ofertas subsecuentes de descuento, sin que ello impida continuar con el procedimiento de contratación. **Artículo 76.-** Para fomentar el desarrollo y la participación de las MIPYMES, las dependencias y entidades deberán adjudicarles contratos relacionados con las operaciones comprendidas en

A) Marco normativo complementario y supletorio.

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
		los supuestos de excepción a la licitación pública a que se refiere el artículo 42 de la Ley, cuando menos el cincuenta por ciento del valor de las adquisiciones en cada ejercicio fiscal… **Artículo 106.-** La Secretaría de la Función Pública considerará las propuestas que formule la Comisión Intersecretarial de Compras y Obras de la Administración Pública Federal a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa para incorporar en CompraNet la información relativa a las contrataciones realizadas con las MIPYMES.
	Artículo 14 (segundo párrafo).- …Asimismo, se otorgarán puntos a las micros, pequeñas o medianas empresas que produzcan bienes con innovación tecnológica, conforme a la constancia correspondiente emitida por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, la cual no podrá tener una vigencia mayor a cinco años. De igual manera, se otorgarán puntos a las empresas que hayan aplicado políticas y prácticas de igualdad de género, conforme a la certificación correspondiente emitida por las autoridades y organismos facultados para tal efecto.	
	Artículo 36 Bis (segundo párrafo).- Para los casos señalados en las fracciones I y II de este artículo, en caso de existir igualdad de condiciones, se dará preferencia a las personas que integren el sector de micro, pequeñas y medianas empresas nacionales.	**Artículo 54 (primer párrafo).-** Si derivado de la evaluación de las proposiciones se obtuviera un empate entre dos o más proveedores en una misma o más partidas, de conformidad con el criterio de desempate previsto en el párrafo segundo del artículo 36 Bis de la Ley, se deberá adjudicar el contrato en primer término a las micro empresas, a continuación se considerará a las pequeñas empresas y en caso de no contarse con alguna de las anteriores, se adjudicará a la que tenga el carácter de mediana empresa.

A) Marco normativo complementario y supletorio.

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
35.- Ley sobre el Contrato de Seguro. *31 de agosto de 1935.* **Artículo 14.-** Los agentes que sean autorizados por una empresa de seguros para que ellos celebren contratos, podrán recibir las ofertas, rechazar las declaraciones escritas de los proponentes, cobrar las primas vencidas, extender recibos, así como proceder a la comprobación de los siniestros que se realicen. **Artículo 21.-** El contrato de seguro: I.- Se perfecciona desde el momento en que el proponente tuviere conocimiento de la aceptación de la oferta. II.- No puede sujetarse a la condición suspensiva de la entrega de la póliza o de cualquier otro documento en que conste la aceptación, ni tampoco a la condición del pago de la prima; III.- Puede celebrarse sujeto a plazo, a cuyo vencimiento se iniciará su eficacia para las partes. **Artículo 66.-** Tan pronto como el asegurado o el beneficiario en su caso, tengan conocimiento de la realización del siniestro y del derecho	**Artículo 5.-** Será responsabilidad de las dependencias y entidades contratar los servicios correspondientes para mantener adecuada y satisfactoriamente asegurados los bienes con que cuenten. Lo dispuesto en el párrafo anterior no será aplicable cuando por razón de la naturaleza de los bienes o el tipo de riesgos a los que están expuestos, el costo de aseguramiento represente una erogación que no guarde relación directa con el beneficio que pudiera obtenerse o bien, se constate que no exista oferta de seguros en el mercado para los bienes de que se trate. La Secretaría autorizará previamente la aplicación de la excepción.	**Artículo 6 (primer párrafo).-** En caso de pérdida total de un bien asegurado, como consecuencia de un siniestro, la dependencia o entidad deberá solicitar a la institución aseguradora, en los términos de las disposiciones aplicables, la reposición o recuperación o, en su caso, el pago respectivo, según convenga a la dependencia o entidad.

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
constituido a su favor por el contrato de seguro, deberán ponerlo en conocimiento de la empresa aseguradora. Salvo disposición en contrario de la presente ley, el asegurado o el beneficiario gozarán de un plazo máximo de cinco días para el aviso que deberá ser por escrito si en el contrato no se estipula otra cosa. **Artículo 67.-** Cuando el asegurado o el beneficiario no cumplan con la obligación que les impone el artículo anterior, la empresa aseguradora podrá reducir la prestación debida hasta la suma que habría importado si el aviso se hubiere dado oportunamente. **Artículo 68.-** La empresa quedará desligada de todas las obligaciones del contrato, si el asegurado o el beneficiario omiten el aviso inmediato con la intención de impedir que se comprueben oportunamente las circunstancias del siniestro. **Artículo 69.-** La empresa aseguradora tendrá el derecho de exigir del asegurado o beneficiario toda clase de informaciones sobre los hechos relacionados con el siniestro y por los cuales puedan determinarse las circunstancias de su realización y las		

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
consecuencias del mismo. **Artículo 70.-** Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluirían o podrían restringir dichas obligaciones. Lo mismo se observará en caso de que, con igual propósito, no le remitan en tiempo la documentación de que trata el artículo anterior. **Artículo 72.-** En todos los casos en que la dirección de las oficinas de las instituciones de seguros llegare a ser diferente de la que conste en la póliza expedida, deberán comunicar al asegurado la nueva dirección en la República para todas las informaciones y avisos que deban enviarse a la empresa aseguradora y para cualquiera otro efecto legal. **Artículo 73.-** Si la empresa no cumpliere con la obligación de que trata el artículo anterior, no podrá hacer uso de los derechos que el contrato o esta ley establezcan para el caso de la falta de aviso o de aviso tardío. **Artículo 74.-** El asegurado o		

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
sus causahabientes podrán dirigir las comunicaciones a la dirección indicada, a la empresa aseguradora directamente, o a cualquiera de sus agentes. **Artículo 75.-** Las sanciones establecidas para el caso de que el asegurado o sus causahabientes dejen de cumplir con alguna de sus obligaciones, no serán aplicables si en el incumplimiento no existió culpa de su parte. **Artículo 78.-** La empresa aseguradora responderá del siniestro aun cuando éste haya sido causado por culpa del asegurado, y sólo se admitirá en el contrato la cláusula que libere a la empresa en caso de culpa grave. **Artículo 79.-** La empresa responderá de las pérdidas y daños causados por las personas respecto a las cuales es civilmente responsable el asegurado; pero se admitirá en el contrato la cláusula de que trata el artículo anterior. **Artículo 80.-** Igualmente responderá siempre que el siniestro se cause en cumplimiento de un deber de humanidad.		

A) Marco normativo complementario y supletorio.

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
• **CÓDIGOS**		
36.- Código Civil Federal *en cuatro partes los días 26 de mayo, 14 de julio, 3 y 31 de agosto de 1928.* CAPITULO II. De los Bienes Muebles (artículos 752 al 763). **Artículo 752.-** Los bienes son muebles por su naturaleza o por disposición de la ley. **Artículo 753.-** Son muebles por su naturaleza, los cuerpos que pueden trasladarse de un lugar a otro, ya se muevan por sí mismos, ya por efecto de una fuerza exterior. **Artículo 754.-** Son bienes muebles por determinación de la ley, las obligaciones y los derechos o acciones que tienen por objeto cosas muebles o cantidades exigibles en virtud de acción personal. **Artículo 763.-** Los bienes muebles son fungibles o no fungibles.	**Artículo 3 (fracción I).-** Para los efectos de esta Ley, entre las adquisiciones, arrendamientos y servicios, quedan comprendidos: I. Las adquisiciones y los arrendamientos de bienes muebles; …	**Artículo 2 (fracción IV).-** Adicionalmente a las definiciones contenidas en el artículo 2 de la Ley, para los efectos de este Reglamento se entenderá por: … IV. Bienes: los que con la naturaleza de muebles considera el Código Civil Federal;
Artículo 16.- Los habitantes del Distrito Federal tienen obligación de ejercer sus actividades y de usar y disponer de sus bienes en forma que no perjudique a la colectividad, bajo las sanciones establecidas en este Código y en las leyes relativas.	**Artículo 11 (primer párrafo).-** Serán supletorias de esta Ley y de las demás disposiciones que de ella se deriven, en lo que corresponda, el Código Civil Federal, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el Código Federal de Procedimientos Civiles. **Artículo 12 Bis.** Para determinar la conveniencia de la adquisición de bienes muebles usados o reconstruidos, las dependencias y entidades deberán realizar un estudio de costo beneficio, con el que se	

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
	demuestre la conveniencia de su adquisición comparativamente con bienes nuevos… **Artículo 41 (fracción IX, segundo párrafo).-** Las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán contratar adquisiciones, arrendamientos y servicios, sin sujetarse al procedimiento de licitación pública, a través de los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa, cuando: IX… Asimismo, cuando se trate de bienes usados o reconstruidos en los que el precio no podrá ser mayor al que se determine mediante avalúo que practicarán las instituciones de crédito o terceros habilitados para ello conforme a las disposiciones aplicables, expedido dentro de los seis meses previos y vigente al momento de la adjudicación del contrato respectivo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 12 Bis de esta Ley; **Artículo 61 (último párrafo).-** En la tramitación del procedimiento para imponer las sanciones a que se refiere este Título, la Secretaría de la Función Pública deberá observar lo dispuesto por el Título Cuarto y demás aplicables de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, aplicando supletoriamente tanto el Código Civil Federal, como el Código Federal de Procedimientos Civiles.	
37.- Código de Comercio. *13 de diciembre de 1889.* LIBRO QUINTO. De los Juicios Mercantiles. Título Cuarto. Del Arbitraje Comercial. (Artículos 1415 al 1480). **Artículo 1416 (fracción I).-** Para los efectos del presente título se entenderá por:	**Artículo 80 (primer párrafo).-** Podrá convenirse compromiso arbitral respecto de aquellas controversias que surjan entre las partes por interpretación a las cláusulas de los contratos o por cuestiones derivadas de su ejecución, en términos de lo dispuesto en el Título Cuarto del Libro Quinto del Código de Comercio. **Artículo 81.-** El arbitraje podrá preverse en cláusula expresa en el contrato o por convenio escrito posterior a su celebración. En las políticas, bases y	**Artículo 137.-** El servidor público facultado para determinar la conveniencia de incluir la cláusula arbitral o firmar el convenio correspondiente, en los

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
I.- Acuerdo de arbitraje, el acuerdo por el que las partes deciden someter a arbitraje todas o ciertas controversias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto de una determinada relación jurídica, contractual o no contractual. El acuerdo de arbitraje podrá adoptar la forma de una cláusula compromisoria incluida en un contrato o la forma de un acuerdo independiente; **Artículo 1423.-** El acuerdo de arbitraje deberá constar por escrito, y consignarse en documento firmado por las partes o en un intercambio de cartas, télex, telegramas, facsímil u otros medios de telecomunicación que dejen constancia del acuerdo. La referencia hecha en un contrato a un documento que contenga una cláusula compromisoria, constituirá acuerdo de arbitraje siempre que dicho contrato conste por escrito y la referencia implique que esa cláusula forma parte del contrato.	lineamientos deberá establecerse el área o servidor público responsable para determinar la conveniencia de incluir dicha cláusula o firmar el convenio correspondiente.	términos del artículo 81 de la Ley, deberá tener nivel jerárquico de director general en las dependencias o equivalente en las entidades.
38.- Código Federal de Procedimientos Civiles. *24 de febrero de 1943.* Libro segundo. Contención. Título Primero. Juicio.	**Artículo 11 (primer párrafo).-** Serán supletorias de esta Ley y de las demás disposiciones que de ella se deriven, en lo que corresponda, el Código Civil Federal, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el Código Federal de Procedimientos	

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
Capítulo I. Demanda (artículos 322 al 326). Capítulo II. Emplazamiento (artículos 327 al 328). Capítulo III. Contestación de la demanda (artículos 329 al 336). Capítulo IV. Término probatorio (artículo 337 al 340). Capítulo V. Audiencia final de juicio (artículos 341 al 344). Capítulo VI. Sentencia (artículos 345 al 353). Capítulo VII. Sentencia ejecutoria (artículo 354 al 357).	Civiles. **Artículo 61 (último párrafo).-** En la tramitación del procedimiento para imponer las sanciones a que se refiere este Título, la Secretaría de la Función Pública deberá observar lo dispuesto por el Título Cuarto y demás aplicables de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, aplicando supletoriamente tanto el Código Civil Federal, como el Código Federal de Procedimientos Civiles.	
39.- Código Fiscal de la Federación. *31 de diciembre de 1981.* **Artículo 32 D.-** La APF, Centralizada y Paraestatal, así como la PGR, en ningún caso contratarán adquisiciones, arrendamientos, servicios u obra pública con los particulares que: I. Tengan a su cargo créditos fiscales firmes. II. Tengan a su cargo créditos fiscales determinados, firmes o no, que no se encuentren pagados o garantizados en alguna de las formas permitidas por este Código. III. No se encuentren inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes. IV. Habiendo vencido el plazo para presentar alguna	**Artículo 7 (primer y segundo párrafo).-** La Secretaría, la Secretaría de Economía y la Secretaría de la Función Pública, en el ámbito de sus respectivas competencias, estarán facultadas para interpretar esta Ley para efectos administrativos. La Secretaría de la Función Pública dictará las disposiciones administrativas que sean estrictamente necesarias para el adecuado cumplimiento de esta Ley, tomando en cuenta la opinión de la Secretaría y, cuando corresponda, la de la Secretaría de Economía. Las disposiciones de carácter general se publicarán en el Diario Oficial de la Federación.	**Artículo 8.-** La Secretaría, la Secretaría de Economía y la Secretaría de la Función Pública, en el ámbito de sus respectivas competencias, estarán facultadas para interpretar la Ley y este Reglamento para efectos administrativos. Los criterios de interpretación que emitan, en términos de este párrafo, son obligatorios para las dependencias y entidades. … **Artículo 39 (fracción VI, inciso j).-** La convocatoria a la licitación pública y, cuando proceda, el Proyecto de convocatoria deberán contener los requisitos que señala el artículo 29 de la Ley y se elaborarán conforme al orden, apartados e información que a continuación se indican: … VI. Documentos y datos que deben presentar los licitantes, entre los que se encuentran los siguientes: … j) El documento en el que conste el acuse de recepción de solicitud de opinión ante la autoridad fiscal competente, respecto del cumplimiento de sus obligaciones fiscales del licitante a quien se adjudique el contrato;

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
declaración, provisional o no, y con independencia de que en la misma resulte o no cantidad a pagar, ésta no haya sido presentada.		
40.- ⇒***Código Penal Federal.*** *14 de agosto de 1931*• **Artículo 212 (primer párrafo).-** Para los efectos de este Título y el subsecuente, es servidor público toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la Administración Pública Federal centralizada o en la del Distrito Federal, organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, organizaciones y sociedades asimiladas a éstas, fideicomisos públicos, empresas productivas del Estado, en los órganos constitucionales autónomos, en el Congreso de la Unión, o en el Poder Judicial Federal, o que manejen recursos económicos federales. Las disposiciones contenidas en el presente Título, son aplicables a los Gobernadores de los Estados, a los Diputados, a las Legislaturas.	**Artículo 1 (primer, segundo y tercer párrafos).-** La presente Ley es de orden público y tiene por objeto reglamentar la aplicación del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de las adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y prestación de servicios de cualquier naturaleza, que realicen: I. Las unidades administrativas de la Presidencia de la República; II. Las Secretarías de Estado y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal; III. La Procuraduría General de la República; IV. Los organismos descentralizados; V. Las empresas de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos en los que el fideicomitente sea el gobierno federal o una entidad paraestatal, y VI. Las entidades federativas, los municipios y los entes públicos de unas y otros, con cargo total o parcial a recursos federales, conforme a los convenios que celebren con el Ejecutivo Federal. No quedan comprendidos para la aplicación de la presente Ley los fondos previstos en el Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal. Las personas de derecho público de carácter federal con autonomía derivada de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como las entidades que cuenten con un régimen específico en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios,	

⇒ Forma parte de las siete leyes que integran el Sistema Nacional Anticorrupción.

• Las reformas publicadas en el decreto del 18 de julio de 2016, para la entrada en vigor del Sistema Nacional Anticorrupción, modifican el Título Décimo. Delitos por hechos de corrupción.

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
	aplicarán los criterios y procedimientos previstos en esta Ley, sólo en lo no previsto en los ordenamientos que los rigen y siempre que no se contrapongan con los mismos, sujetándose a sus propios órganos de control. Las adquisiciones, arrendamientos y servicios que contraten las empresas productivas del Estado y sus empresas productivas subsidiarias quedan excluidos de la aplicación de este ordenamiento.	
Artículo 223 (fracciones II, III, tercer y cuarto párrafo).- Comete el delito de peculado: **…** II.- El servidor público que ilícitamente utilice fondos públicos u otorgue alguno de los actos a que se refiere el artículo de uso ilícito de atribuciones y facultades con el objeto de promover la imagen política o social de su persona, la de su superior jerárquico o la de un tercero, o a fin de denigrar a cualquier persona; III.- Cualquier persona que solicite o acepte realizar las promociones o denigraciones a que se refiere la fracción anterior, a cambio de fondos públicos o del disfrute de los beneficios derivados de los actos a que se refiere el artículo de uso ilícito de atribuciones y facultades, y … Cuando el monto de lo distraído o de los fondos utilizados	**Artículo 24.-** La planeación, programación, presupuestación y el gasto de las adquisiciones, arrendamientos y servicios se sujetará a las disposiciones específicas del Presupuesto de Egresos de la Federación, así como a lo previsto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y demás disposiciones aplicables y los recursos destinados a ese fin se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia, honradez e imparcialidad para satisfacer los objetivos a los que fueren destinados.	

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
indebidamente no exceda del equivalente de quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización en el momento de cometerse el delito, o no sea valuable, se impondrán de tres meses a dos años de prisión y de treinta a cien días multa. Cuando el monto de lo distraído o de los fondos utilizados indebidamente exceda de quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización en el momento de cometerse el delito, se impondrán de dos años a catorce años de prisión y de cien a ciento cincuenta días multa. …		
Artículo 217 (fracción III).- Comete el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades: **…** III.- El servidor público que teniendo a su cargo fondos públicos, les dé una aplicación distinta de aquella a que estuvieren destinados o haga un pago ilegal.	**Artículo 25 (primer párrafo).-** Las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán convocar, adjudicar o contratar adquisiciones, arrendamientos y servicios, con cargo a su presupuesto autorizado y sujetándose al calendario de gasto correspondiente.	
Artículo 217 (fracción I, inciso B).- Comete el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades: I.- El servidor público que ilícitamente:	**Artículo 50 (fracciones I, II y XII).-** Las dependencias y entidades se abstendrán de recibir proposiciones o adjudicar contrato alguno en las materias a que se refiere esta Ley, con las personas siguientes: I. Aquéllas en que el servidor público que intervenga en cualquier etapa del procedimiento de contratación	**Artículo 39 (fracción VI, inciso e).-** La convocatoria a la licitación pública y, cuando proceda, el Proyecto de convocatoria deberán contener los requisitos que señala el artículo 29 de la Ley y se elaborarán conforme al orden, apartados e información que a continuación se indican:

A) Marco normativo complementario y supletorio.

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
… B) Otorgue permisos, licencias, adjudicaciones o autorizaciones de contenido económico; **Artículo 220 (fracción I, penúltimo y último párrafos).-** Comete el delito de ejercicio abusivo de funciones: I.- El servidor público que en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, ilícitamente otorgue por sí o por **interpósita** persona, contratos, concesiones, permisos, licencias, autorizaciones, franquicias, exenciones o efectúe compras o ventas o realice cualquier acto jurídico que produzca beneficios económicos al propio servidor público, a su cónyuge, descendiente o ascendiente, parientes por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado, a cualquier tercero con el que tenga vínculos afectivos, económicos o de dependencia administrativa directa, socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen parte; … Cuando la cuantía a que asciendan las operaciones a que hace referencia este artículo no exceda del equivalente a quinientas veces	tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquéllas de las que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o sus parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte durante los dos años previos a la fecha de celebración del procedimiento de contratación de que se trate; II. Las que desempeñen un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o bien, las sociedades de las que dichas personas formen parte, sin la autorización previa y específica de la Secretaría de la Función Pública;	… VI. Documentos y datos que deben presentar los licitantes, entre los que se encuentran los siguientes: … e) El escrito mediante el cual el licitante manifieste bajo protesta de decir verdad, que no se ubica en los supuestos establecidos en los artículos 50 y 60, antepenúltimo párrafo de la Ley; **Artículo 48 (fracción III y VIII, inciso a).-** Durante el desarrollo del acto de presentación y apertura de proposiciones se observará lo siguiente: … III. El servidor público que presida el acto, deberá recibir las proposiciones para su posterior evaluación, por lo que no podrá desechar ninguna de ellas durante dicho acto. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley, la recepción de la proposición se entenderá realizada una vez que ésta se analice durante su evaluación, debiéndose indicar en el fallo si la proposición fue desechada por incumplir la mencionada disposición legal; … VIII. Se requerirá a los licitantes que entreguen junto con el Sobre cerrado, los escritos siguientes: a) La declaración prevista en la fracción VIII del artículo 29 de la Ley, relativa a no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos por los artículos 50 y 60 de la misma;

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización en el momento de cometerse el delito, se impondrán de tres meses a dos años de prisión y de treinta a cien días multa. Cuando la cuantía a que asciendan las operaciones a que hace referencia este artículo exceda de quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización en el momento de cometerse el delito, se impondrán de dos años a doce años de prisión y de cien a ciento cincuenta días multa. **Artículo 222 (fracciones I y II).-** Cometen el delito de cohecho: I.- El servidor público que por sí, o por interpósita persona solicite o reciba ilícitamente para sí o para otro, dinero o cualquier beneficio, o acepte una promesa, para hacer o dejar de realizar un acto propio de sus funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión; II.- El que dé, prometa o entregue cualquier beneficio a alguna de las personas que se mencionan en el artículo 212 de este Código, para que haga u omita un acto relacionado con sus funciones, a su empleo, cargo o comisión,		

A) Marco normativo complementario y supletorio.

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
y **Artículo 223 (fracción I).-** Comete el delito de peculado: I.- Todo servidor público que para su beneficio o el de una tercera persona física o moral, distraiga de su objeto dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa perteneciente al Estado o a un particular, si por razón de su cargo los hubiere recibido en administración, en depósito, en posesión o por otra causa;		
Artículo 221 (fracción IV y último párrafo).- Comete el delito de tráfico de influencia: … IV.- Al particular que, sin estar autorizado legalmente para intervenir en un negocio público, afirme tener influencia ante los servidores públicos facultados para tomar decisiones dentro de dichos negocios, e intervenga ante ellos para promover la resolución ilícita de los mismos, a cambio de obtener un beneficio para sí o para otro. Al que cometa el delito de tráfico de influencia, se le impondrán de dos años a seis años de prisión y de treinta a cien días multa. **Artículo 222 (fracción III, segundo, cuarto y quinto párrafos).-** Cometen el delito	XII. Las que contraten servicios de asesoría, consultoría y apoyo de cualquier tipo de personas en materia de contrataciones gubernamentales, si se comprueba que todo o parte de las contraprestaciones pagadas al prestador del servicio, a su vez, son recibidas por servidores públicos por sí o por interpósita persona, con independencia de que quienes las reciban tengan o no relación con la contratación;	

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
de cohecho: … III.- El legislador federal que, en el ejercicio de sus funciones o atribuciones, y en el marco del proceso de aprobación del presupuesto de egresos respectivo, gestione o solicite: a) La asignación de recursos a favor de un ente público, exigiendo u obteniendo, para sí o para un tercero, una comisión, dádiva o contraprestación, en dinero o en especie, distinta a la que le corresponde por el ejercicio de su encargo; b) El otorgamiento de contratos de obra pública o de servicios a favor de determinadas personas físicas o morales. Se aplicará la misma pena a cualquier persona que gestione, solicite a nombre o en representación del legislador federal las asignaciones de recursos u otorgamiento de contratos a que se refieren los incisos a) y b) de este artículo. **…** Cuando la cantidad o el valor de la dádiva, de los bienes o la promesa no exceda del equivalente de quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización en el momento de cometerse el		

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
delito, o no sea valuable, se impondrán de tres meses a dos años de prisión y de treinta a cien días multa. Cuando la cantidad o el valor de la dádiva, los bienes, promesa o prestación exceda de quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización en el momento de cometerse el delito, se impondrán de dos a catorce años de prisión y de cien a ciento cincuenta días multa. … **Artículo 224.-** Se sancionará a quien con motivo de su empleo, cargo o comisión en el servicio público, haya incurrido en enriquecimiento ilícito. Existe enriquecimiento ilícito cuando el servidor público no pudiere acreditar el legítimo aumento de su patrimonio o la legítima procedencia de los bienes a su nombre o de aquellos respecto de los cuales se conduzca como dueño. Para efectos del párrafo anterior, se computarán entre los bienes que adquieran los servidores públicos o con respecto de los cuales se conduzcan como dueños, los que reciban o de los que dispongan su cónyuge y sus dependientes económicos		

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
directos, salvo que el servidor público acredite que éstos los obtuvieron por sí mismos. No será enriquecimiento ilícito en caso de que el aumento del patrimonio sea producto de una conducta que encuadre en otra hipótesis del presente Título. En este caso se aplicará la hipótesis y la sanción correspondiente, sin que dé lugar al concurso de delitos.		
Artículo 214 (fracción III).- Comete el delito de ejercicio ilícito de servicio público, el servidor público que: … III.- Teniendo conocimiento por razón de su empleo, cargo o comisión de que pueden resultar gravemente afectados el patrimonio o los intereses de alguna dependencia o entidad de la administración pública federal centralizada, organismos descentralizados, empresa de participación estatal mayoritaria, asociaciones y sociedades asimiladas a éstas y fideicomisos públicos, de empresas productivas del Estado, de órganos constitucionales autónomos, del Congreso de la Unión o del Poder Judicial, por cualquier acto u omisión y no informe por		**Artículo 114 (fracción II).-** La Secretaría de la Función Pública tomará conocimiento de los actos o hechos presuntamente constitutivos de infracciones que cometan los licitantes o proveedores a través, entre otros, de los medios siguientes: … II. Denuncia de las dependencias y entidades contratantes, en términos del párrafo cuarto del artículo 60 de la Ley, en los casos no comprendidos en la fracción anterior. En el supuesto de la fracción III del precepto invocado, dentro de la documentación comprobatoria que remitan, deberá encontrarse, en su caso, la que acredite el monto de los daños o perjuicios causados con motivo de la presunta infracción, haciendo el desglose y especificación de los conceptos de afectación de que se trate; **Artículo 115.-** Una vez que la Secretaría de la Función Pública tenga conocimiento de actos o hechos posiblemente constitutivos de infracción, según lo previsto en el artículo anterior, realizará las investigaciones y actuaciones que correspondan a fin de sustentar la imputación, para lo cual podrá requerir a las dependencias y entidades, a las autoridades que corresponda, a los particulares o, en su caso, solicitar a los licitantes o proveedores que aporten mayores

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
escrito a su superior jerárquico o lo evite si está dentro de sus facultades. Al que cometa alguno de los delitos a que se refieren las fracciones I y II de este artículo, se le impondrán de uno a tres años de prisión y de treinta a cien días multa. Al infractor de las fracciones III, IV, V y VI se le impondrán de dos a siete años de prisión y de treinta a ciento cincuenta días multa.		elementos para su análisis. Las notificaciones relativas al procedimiento de sanción, así como aquéllas vinculadas con las investigaciones a que se refiere el párrafo anterior, podrán realizarse de acuerdo con lo previsto por el artículo 118 del presente Reglamento. Si desahogadas las investigaciones se concluye que existen elementos suficientes para sustentar la imputación al licitante o proveedor, se iniciará el procedimiento para imponer sanciones previsto en el Título Quinto de la Ley; de lo contrario, se acordará la improcedencia y el archivo del expediente. Cuando de las actuaciones previstas en este artículo se adviertan posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos, se dará vista a la autoridad de la Secretaría de la Función Pública competente en esa materia para que resuelva lo conducente.
Artículo 212 (quinto párrafo).- Cuando el responsable tenga el carácter de particular, el juez deberá imponer la sanción de inhabilitación para desempeñar un cargo público, así como para participar en adquisiciones, arrendamientos, concesiones, servicios u obras públicas, considerando, en su caso, lo siguiente: I.- Los daños y perjuicios patrimoniales causados por los actos u omisiones; II.- Las circunstancias socioeconómicas del responsable; III.- Las condiciones exteriores y los medios de ejecución, y	**Artículo 60 (primer, segundo, tercer y último párrafos).** La Secretaría de la Función Pública, además de la sanción a que se refiere el primer párrafo del artículo anterior, inhabilitará temporalmente para participar de manera directa o por interpósita persona en procedimientos de contratación o celebrar contratos regulados por esta Ley, a las personas que se encuentren en alguno de los supuestos siguientes: I. Los licitantes que injustificadamente y por causas imputables a los mismos no formalicen dos o más contratos que les haya adjudicado cualquier dependencia o entidad en el plazo de dos años calendario, contados a partir del día en que haya fenecido el término para la formalización del primer contrato no formalizado; II. Los proveedores a los que se les haya rescindido administrativamente un contrato en dos o más dependencias o entidades en un plazo de tres años;	

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
IV.- El monto del beneficio que haya obtenido el responsable. ***…*** **Artículo 217 Bis.-** Al particular que, en su carácter de contratista, permisionario, asignatario, titular de una concesión de prestación de un servicio público de explotación, aprovechamiento o uso de bienes del dominio de la Federación, con la finalidad de obtener un beneficio para sí o para un tercero: I.- Genere y utilice información falsa o alterada, respecto de los rendimientos o beneficios que obtenga, y II.- Cuando estando legalmente obligado a entregar a una autoridad información sobre los rendimientos o beneficios que obtenga, la oculte. Al que cometa el delito a que se refiere el presente artículo, se le impondrán de tres meses a nueve años de prisión y de treinta a cien días multa.	III. Los proveedores que no cumplan con sus obligaciones contractuales por causas imputables a ellos y que, como consecuencia, causen daños o perjuicios graves a la dependencia o entidad de que se trate; así como, aquellos que entreguen bienes o servicios con especificaciones distintas de las convenidas; IV. Las que proporcionen información falsa o que actúen con dolo o mala fe en algún procedimiento de contratación, en la celebración del contrato o durante su vigencia, o bien, en la presentación o desahogo de una solicitud de conciliación o de una inconformidad; V. Las que se encuentren en el supuesto de la fracción XII del artículo 50 de este ordenamiento, y VI. Aquéllas que se encuentren en el supuesto del segundo párrafo del artículo 74 de esta Ley. La inhabilitación que se imponga no será menor de tres meses ni mayor de cinco años, plazo que comenzará a contarse a partir del día siguiente a la fecha en que la Secretaría de la Función Pública la haga del conocimiento de las dependencias y entidades, mediante la publicación de la circular respectiva en el Diario Oficial de la Federación y en CompraNet. Si al día en que se cumpla el plazo de inhabilitación a que se refiere el párrafo que antecede el sancionado no ha pagado la multa que hubiere sido impuesta en términos del artículo anterior, la mencionada inhabilitación subsistirá hasta que se realice el pago correspondiente.	**Artículo 99.-** Concluido el procedimiento de rescisión de un contrato se formulará y notificará el finiquito correspondiente, dentro de los veinte días naturales siguientes a la fecha en que se notifique la rescisión, a efecto de hacer constar los pagos que deban efectuarse y demás circunstancias del caso. Al efecto, deberá considerarse lo dispuesto en el inciso b) de la fracción I y en la fracción III del artículo 103 del presente Reglamento, ello sin perjuicio de lo dispuesto en la fracción III del artículo 60 de la Ley. **Artículo 88 (fracción III).-** Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley, respecto de las fracciones y párrafos de dicho precepto legal que a continuación se señalan, deberá considerarse lo siguiente: … III. Las proposiciones de las personas que se ubiquen en el supuesto a que se refiere la fracción VII, serán desechadas de la partida en la que se presentaron, debiendo comunicar lo anterior al órgano interno de control para efectos de determinar si se actualiza lo dispuesto por la fracción IV del artículo 60 de la Ley, y **Artículo 111.-** La publicación de la circular a que se refiere el párrafo segundo del artículo 60 de la Ley deberá realizarse en CompraNet y simultáneamente enviarse al Diario Oficial de la Federación para los mismos efectos. La inhabilitación surtirá efectos a partir de la publicación de la circular correspondiente en CompraNet. **Artículo 113.-** Para efectos de lo dispuesto por el tercer párrafo del artículo 60 de la Ley, el licitante o proveedor acreditará que ha pagado la multa que se le impuso, presentando a la Secretaría de la Función Pública el documento comprobatorio del pago correspondiente, a fin de que se publique en CompraNet que la inhabilitación ha dejado de surtir

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
Artículo 215 (fracción XI).- Cometen el delito de abuso de autoridad los servidores públicos que incurran en alguna de las conductas siguientes: … XI.- Cuando autorice o contrate a quien se encuentre inhabilitado por resolución firme de autoridad competente para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, siempre que lo haga con conocimiento de tal situación; Al que cometa el delito de abuso de autoridad en los términos previstos por las fracciones I a V y X a XII, se le impondrá de uno a ocho años de prisión y de cincuenta hasta cien días multa. Igual sanción se impondrá a las personas que acepten los nombramientos, contrataciones o identificaciones a que se refieren las fracciones X a XII. Al que cometa el delito de	En casos excepcionales, previa autorización de la Secretaría de la Función Pública, las dependencias y entidades podrán aceptar proposiciones de proveedores inhabilitados cuando resulte indispensable por ser éstos los únicos posibles oferentes en el mercado. **Artículo 61.-** La Secretaría de la Función Pública impondrá las sanciones considerando: I. Los daños o perjuicios que se hubieren producido con motivo de la infracción; II. El carácter intencional o no de la acción u omisión constitutiva de la infracción; III. La gravedad de la infracción, y IV. Las condiciones del infractor. En la tramitación del procedimiento para imponer las sanciones a que se refiere este Título, la Secretaría de la Función Pública deberá observar lo dispuesto por el Título Cuarto y demás aplicables de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, aplicando supletoriamente tanto el Código Civil Federal, como el Código Federal de Procedimientos Civiles.	efectos. En defecto de lo señalado en el párrafo anterior, los licitantes deberán agregar a sus proposiciones copia simple del documento comprobatorio de pago referido en el citado párrafo, el cual será tomado en consideración por la dependencia o entidad convocante durante la evaluación de las proposiciones.

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
abuso de autoridad en los términos previstos por las fracciones VI a IX, XIV, XV y XVI, se le impondrá de dos a nueve años de prisión, de setenta hasta cuatrocientos días multa y destitución e inhabilitación de dos a nueve años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.		
Artículo 213.- Para la individualización de las sanciones previstas en este Título, el juez tomará en cuenta, en su caso, el nivel jerárquico del servidor público y el grado de responsabilidad del encargo, su antigüedad en el empleo, sus antecedentes de servicio, sus percepciones, su grado de instrucción, la necesidad de reparar los daños y perjuicios causados por la conducta ilícita y las circunstancias especiales de los hechos constitutivos del delito. Sin perjuicio de lo anterior, la categoría de funcionario o empleado de confianza será una circunstancia que podrá dar lugar a una agravación de la pena **Artículo 212 (tercer, cuarto, sexto y séptimo párrafos).-** De manera adicional a dichas sanciones, se impondrá a los	**Artículo 62.-** La Secretaría de la Función Pública aplicará las sanciones que procedan a quienes infrinjan las disposiciones de este ordenamiento, conforme a lo dispuesto por la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. La Secretaría de la Función Pública, en uso de las atribuciones que le confiere la Ley citada en el párrafo anterior, podrá abstenerse de iniciar los procedimientos previstos en ella, cuando de las investigaciones o revisiones practicadas se advierta que el acto u omisión no es grave, o no implica la probable comisión de algún delito o perjuicio patrimonial a la dependencia o entidad, o que el acto u omisión fue corregido o subsanado de manera espontánea por el servidor público o implique error manifiesto y en cualquiera de estos supuestos, los efectos que, en su caso, hubieren producido, desaparecieron o se hayan resarcido. **Artículo 63.-** Las responsabilidades y las sanciones a que se refiere la presente Ley serán independientes de las de orden civil, penal o de cualquier otra índole que puedan derivar de la comisión de los mismos hechos.	

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
responsables de su comisión, la pena de destitución y la inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos, así como para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, concesiones de prestación de servicio público o de explotación, aprovechamiento y uso de bienes de dominio de la Federación por un plazo de uno a veinte años, atendiendo a los siguientes criterios: I.- Será por un plazo de uno hasta diez años cuando no exista daño o perjuicio o cuando el monto de la afectación o beneficio obtenido por la comisión del delito no exceda de doscientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, y II.- Será por un plazo de diez a veinte años si dicho monto excede el límite señalado en la fracción anterior. Para efectos de lo anterior, el juez deberá considerar, en caso de que el responsable tenga el carácter de servidor público, además de lo previsto en el artículo 213 de este Código, los elementos del empleo, cargo o comisión que desempeñaba cuando incurrió en el delito.		

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
… Sin perjuicio de lo anterior, la categoría de funcionario o empleado de confianza será una circunstancia que podrá dar lugar a una agravación de la pena Cuando los delitos a que se refieren los artículos 214, 217, 221, 222, 223 y 224, del presente Código sean cometidos por servidores públicos electos popularmente o cuyo nombramiento este sujeto a ratificación de alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, las penas previstas serán aumentadas hasta en un tercio. **Artículo 213-Bis.-** Cuando los delitos a que se refieren los artículos 215, 219 y 222 del presente Código, sean cometidos por servidores públicos miembros de alguna corporación policiaca, aduanera o migratoria, las penas previstas serán aumentadas hasta en una mitad. **Artículo 215 (fracción IX).-** Cometen el delito de abuso de autoridad los servidores públicos que incurran en alguna de las conductas siguientes: … IX.- Obtenga, exija o solicite sin derecho alguno o causa		

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
legítima, para sí o para cualquier otra persona, parte del sueldo o remuneración de uno o más de sus subalternos, dádivas u otros bienes o servicios; **Artículo 216.-** Cometen el delito de coalición de servidores públicos, los que teniendo tal carácter se coaliguen para tomar medidas contrarias a una ley, reglamento u otras disposiciones de carácter general, impedir su ejecución o para hacer dimisión de sus puestos con el fin de impedir o suspender la administración pública en cualquiera de sus ramas. No cometen este delito los trabajadores que se coaliguen en ejercicio de sus derechos constitucionales o que hagan uso del derecho de huelga. Al que cometa el delito de coalición de servidores públicos se le impondrán de dos años a siete años de prisión y multa de treinta a trescientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización en el momento de la comisión del delito. **Artículo 217 (fracción I, inciso D), I bis, incisos A) y B).-** Comete el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades:		

A) Marco normativo complementario y supletorio.

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
I.- El servidor público que ilícitamente: … D) Otorgue, realice o contrate obras públicas, adquisiciones, arrendamientos, enajenaciones de bienes o servicios, con recursos públicos; I. bis.- El servidor público que a sabiendas de la ilicitud del acto, y en perjuicio del patrimonio o del servicio público o de otra persona: A) Niegue el otorgamiento o contratación de las operaciones a que hacen referencia la presente fracción, existiendo todos los requisitos establecidos en la normatividad aplicable para su otorgamiento, o B) Siendo responsable de administrar y verificar directamente el cumplimiento de los términos de una concesión, permiso, asignación o contrato, se haya abstenido de cumplir con dicha obligación. Se impondrán las mismas sanciones previstas a cualquier persona que a sabiendas de la ilicitud del acto, y en perjuicio del patrimonio o el servicio público o de otra persona participe, solicite o promueva la perpetración de cualquiera de los delitos previstos en este		

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
artículo. Al que cometa el delito a que se refiere el presente artículo, se le impondrán de seis meses a doce años de prisión y de treinta a ciento cincuenta días multa. **Artículo 218 (cuarto y quinto párrafos).-** Comete el delito de concusión: el servidor público que con el carácter de tal y a título de impuesto o contribución, recargo, renta, rédito, salario o emolumento, exija, por sí o por medio de otro, dinero, valores, servicios o cualquiera otra cosa que sepa no ser debida, o en mayor cantidad que la señalada por la Ley. … Cuando la cantidad o el valor de lo exigido indebidamente no exceda del equivalente de quinientos días de Unidades de Medida y Actualización en el momento de cometerse el delito, o no sea valuable, se impondrán de tres meses a dos años de prisión y de treinta a cien días multa. Cuando la cantidad o el valor de lo exigido indebidamente exceda de quinientos días de Unidades de Medida y Actualización en el momento de cometerse el delito, se		

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
impondrán de dos años a doce años de prisión y multa de cien a ciento cincuenta días multa. **Artículo 219 (fracción I).-** Comete el delito de intimidación: I.- El servidor público que por sí, o por interpósita persona, utilizando la violencia física o moral, inhiba o intimide a cualquier persona para evitar que ésta o un tercero denuncie, formule querella o aporte información relativa a la presunta comisión de una conducta sancionada por la Legislación Penal o por la ***Ley General de Responsabilidades Administrativas***, y … Al que cometa el delito de intimidación se le impondrán de dos años a nueve años de prisión y de treinta a cien días multa.		
Artículo 216.- Cometen el delito de coalición de servidores públicos, los que teniendo tal carácter se coaliguen para tomar medidas contrarias a una ley, reglamento u otras disposiciones de carácter general, impedir su ejecución o para hacer dimisión de sus puestos con el fin de impedir o suspender la administración	**Artículo 75 (sexto párrafo).-** El desacato de las convocantes a las resoluciones y acuerdos que emita la Secretaría de la Función Pública en los procedimientos de inconformidad será sancionado de acuerdo a lo previsto en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.	**Artículo 115 (último párrafo).-** Una vez que la Secretaría de la Función Pública tenga conocimiento de actos o hechos posiblemente constitutivos de infracción, según lo previsto en el artículo anterior, realizará las investigaciones y actuaciones que correspondan a fin de sustentar la imputación, para lo cual podrá requerir a las dependencias y entidades, a las autoridades que corresponda, a los particulares o, en su caso, solicitar a los licitantes o proveedores que aporten mayores elementos para su análisis. …

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
pública en cualquiera de sus ramas. No cometen este delito los trabajadores que se coaliguen en ejercicio de sus derechos constitucionales o que hagan uso del derecho de huelga. Al que cometa el delito de coalición de servidores públicos se le impondrán de dos años a siete años de prisión y multa de treinta a trescientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización en el momento de la comisión del delito. **Artículo 219 (fracción I).-** Comete el delito de intimidación: I.- El servidor público que por sí, o por interpósita persona, utilizando la violencia física o moral, inhiba o intimide a cualquier persona para evitar que ésta o un tercero denuncie, formule querella o aporte información relativa a la presunta comisión de una conducta sancionada por la Legislación Penal o por la ***Ley General de Responsabilidades Administrativas***, y … Al que cometa el delito de intimidación se le impondrán de dos años a nueve años de		Cuando de las actuaciones previstas en este artículo se adviertan posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos, se dará vista a la autoridad de la Secretaría de la Función Pública competente en esa materia para que resuelva lo conducente.

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
prisión y de treinta a cien días multa.		

- ***REGLAMENTOS***

41.- Reglamento de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación. *15 de marzo de 1999.* **Artículo 17.-** La recaudación se inicia con la recepción de fondos, de certificados especiales, valores y, en su caso, de bienes y servicios recibidos como dación en pago, por los conceptos que señala la Ley de Ingresos de la Federación. **Artículo 50.-** La dación en pago de bienes o servicios a que se refiere la Ley podrá proponerse por los deudores de toda clase de créditos a favor del Gobierno Federal y podrá aceptarse discrecionalmente por la Secretaría, por conducto de la Tesorería.	**Artículo 41 (fracción XVIII).-** Las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán contratar adquisiciones, arrendamientos y servicios, sin sujetarse al procedimiento de licitación pública, a través de los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa, cuando: … XVIII. Se acepte la adquisición de bienes o la prestación de servicios a título de dación en pago, en los términos de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación;	
Artículo 137.- Se podrá garantizar el cumplimiento de obligaciones no fiscales en alguna de las formas siguientes: I. Depósito de dinero constituido a través de certificado o billete de depósito, II. Fianza otorgada por institución autorizada;	**Artículo 45 (fracción XI).-** El contrato o pedido contendrá, en lo aplicable, lo siguiente: … XI. Forma, términos y porcentaje para garantizar los anticipos y el cumplimiento del contrato;	**Artículo 23 (fracción IV).-** El informe trimestral a que se refiere la fracción IV del artículo 22 de la Ley, se suscribirá y presentará por el presidente del Comité en la sesión ordinaria inmediata posterior a la conclusión del trimestre de que se trate, el cual contendrá los siguientes aspectos: … IV. El estado que guardan las acciones para la ejecución de las garantías por la rescisión de los contratos, por la falta de reintegro de anticipos o por

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
III. Depósito de dinero constituido ante la Tesorería; IV. Cheque certificado o de caja expedido a favor de la Tesorería; V. Tratándose de reestructuras de créditos distintos a los fiscales ante la Tesorería, podrá otorgarse cualquiera de las garantías previstas en el presente artículo o en el Código Fiscal, y VI. Cualquier otra que en su caso autorice la Tesorería. **Artículo 139.-** La cancelación de las garantías será procedente: I. Realizados los actos o cumplidas las obligaciones, II. Con la adjudicación de los bienes o del contrato respectivo, y III. En cualquier otro caso previsto en las disposiciones legales. **Artículo 142.-** …integrará el expediente relativo a la garantía para su efectividad, de conformidad con las disposiciones aplicables, con los originales o copias certificadas de los documentos que a continuación se indican: I. Aquél en el que conste el crédito u obligación garantizada; II. Documento constitutivo de la		los defectos y vicios ocultos de los bienes o de la calidad de los servicios, así como en el caso de las dependencias, el estado que guarda el trámite para hacer efectivas las garantías correspondientes en términos de los artículos 143 y 144 del Reglamento de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación, y **Artículo 81 (fracción II y V).-** Además de lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley, el contrato deberá: … II. Señalar que la garantía de cumplimiento se hará efectiva por el monto total de la obligación garantizada, salvo que en los contratos se haya estipulado su divisibilidad. En caso de que por las características de los bienes o servicios entregados éstos no puedan funcionar o ser utilizados por la dependencia o entidad por estar incompletos, la garantía siempre se hará efectiva por el monto total de la obligación garantizada; … V. Indicar que los anticipos que otorguen las dependencias y entidades deberán amortizarse proporcionalmente en cada uno de los pagos; su garantía deberá constituirse por el importe total del anticipo otorgado, en la misma moneda en la que se otorgue el anticipo de acuerdo con las disposiciones legales aplicables, la que se cancelará hasta que se haya realizado la amortización total; **Artículo 87 (último párrafo).-** En el caso de entregas parciales de bienes o de prestación de servicios realizados, la garantía de cumplimiento podrá reducirse en forma proporcional a los bienes recibidos o a los servicios ya prestados. **Artículo 91 (último párrafo).-** Las modificaciones en monto, plazo o vigencia a los contratos conllevarán el respectivo ajuste a la garantía de cumplimiento

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
garantía; III. Justificante de la exigibilidad de la garantía, como resoluciones administrativas o judiciales definitivas y su notificación al obligado principal o al garante cuando así proceda, o acta de incumplimiento de obligaciones y liquidación por el monto de la obligación o crédito exigibles y sus accesorios legales, si los hubiere, y IV. Cualquier otro que motive la efectividad de la garantía **Artículo 143.-** La unidad encargada del control y vigilancia de la obligación o adeudo garantizado mediante fianza deberá remitir a la Tesorería la totalidad de la documentación señalada debidamente integrada, a más tardar en un plazo de treinta días naturales contados a partir de la fecha en que se verifique el incumplimiento por parte del obligado, y por lo tanto la garantía será exigible. **Artículo 144.-** Para hacer efectivas las fianzas otorgadas a favor de la Federación, una vez recibida la documentación a que se refiere el artículo 142 de este Reglamento, la Tesorería procederá conforme a lo		cuando dicho incremento no se encuentre cubierto por la garantía originalmente otorgada, para lo cual deberá estipularse en el convenio modificatorio respectivo el plazo para entregar la ampliación de garantía, el cual no deberá exceder de diez días naturales siguientes a la firma de dicho convenio, así como la fecha de entrega de los bienes o de la prestación del servicio para las cantidades adicionales. Tratándose de fianza, el ajuste correspondiente se realizará conforme a lo dispuesto por la fracción II y el último párrafo del artículo 103 de este Reglamento. **Artículo 103 (primer párrafo, segundo párrafo, fracciones II, IV y último párrafo).-** Los proveedores podrán otorgar las garantías a que se refiere la Ley y este Reglamento, en alguna de las formas previstas en el artículo 137 del Reglamento de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación en el caso de dependencias, o en las disposiciones aplicables tratándose de entidades. Cuando la forma de garantía sea mediante fianza, se observará lo siguiente: … II. En caso de otorgamiento de prórrogas o esperas al proveedor para el cumplimiento de sus obligaciones, derivadas de la formalización de convenios de ampliación al monto o al plazo del contrato, se deberá realizar la modificación correspondiente a la fianza; … IV. Cuando se requiera hacer efectivas las fianzas, las dependencias deberán remitir a la Tesorería de la Federación, dentro del plazo a que hace referencia el artículo 143 del Reglamento de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación, la solicitud donde se precise la información necesaria para identificar la obligación o crédito que se garantiza y los sujetos que se vinculan con la fianza, debiendo acompañar los

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
siguiente: I. Verificará el expediente respectivo comprobando que la documentación; II. En caso de que se detecten errores o faltantes en la documentación remitida, la Tesorería le requerirá a la autoridad correspondiente la documentación faltante; III. Procederá a formular y notificar el requerimiento de pago a la institución fiadora; IV. Después de notificada y dentro del plazo a que se refiere la fracción anterior, la institución fiadora deberá realizar el pago a favor de la Tesorería en las cuentas que esta última le indique. V. Si dentro del plazo señalado en la fracción III de este artículo la institución fiadora llegare a impugnar el requerimiento ante el Tribunal Fiscal de la Federación por considerarlo improcedente, se suspenderá temporalmente el procedimiento de ejecución. VI. La Tesorería deberá vigilar el cumplimiento de la sentencia firme que declare la procedencia del cobro.		documentos que soporten y justifiquen el cobro, de conformidad con lo dispuesto por el Reglamento del Artículo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, para el Cobro de Fianzas Otorgadas a Favor de la Federación, del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios Distintas de las que Garantizan Obligaciones Fiscales Federales a cargo de Terceros; tratándose de entidades la solicitud se remitirá al área correspondiente de la propia entidad.

A) Marco normativo complementario y supletorio.

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
Artículo 84.- En caso de incumplimiento del pago por parte del adquirente, el responsable de la enajenación solicitará a la Tesorería haga efectiva la garantía de cumplimiento y se deje sin efectos la adjudicación al ganador original.	**Artículo 48 (segundo párrafo).-** Para los efectos de este artículo, los titulares de las dependencias o los órganos de gobierno de las entidades, fijarán las bases, forma y porcentajes a los que deberán sujetarse las garantías que deban constituirse, considerando los antecedentes de cumplimiento de los proveedores en los contratos celebrados con las dependencias y entidades, a efecto de determinar montos menores para éstos, de acuerdo a los lineamientos que al efecto emita la Secretaría de la Función Pública…	**Artículo 81 (fracción VII).-** Además de lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley, el contrato deberá: … VII. Establecer, en el caso que se actualice el supuesto a que hace referencia el segundo párrafo del artículo 48 de la Ley y el primer párrafo del artículo 86 del presente Reglamento, el monto de la garantía de cumplimiento previsto en el procedimiento de contratación de que se trate y el porcentaje de reducción al mismo, así como la previsión de que las penas convencionales que se llegaren a aplicar se calcularán en términos de lo señalado en el segundo párrafo del artículo 86 de este Reglamento, y **Artículo 86.-** Las dependencias y entidades podrán reducir el porcentaje de la garantía de cumplimiento cuando el proveedor cuente con antecedentes de cumplimiento favorables en los términos previstos en el segundo párrafo del artículo 48 de la Ley y en los lineamientos que al efecto emita la Secretaría de la Función Pública con base en la información actualizada que se encuentre en el registro único de proveedores, tales como no estar sancionado por la Secretaría de la Función Pública, en los últimos cinco años y que no se le haya rescindido contrato alguno en el mismo periodo. En los casos señalados en el párrafo anterior, el monto máximo para la aplicación de penas convencionales se calculará considerando el monto de la garantía de cumplimiento establecido en el contrato, sin tomar en cuenta el porcentaje de reducción que se hubiere aplicado a dicha garantía. Tratándose de los procedimientos de contratación en los que se exceptúe de la presentación de garantía de cumplimiento de contrato en los términos de la Ley, en la invitación a cuando menos tres personas o en la solicitud de cotización deberá indicarse que en las proposiciones o cotizaciones no se deberán incluir los

A) Marco normativo complementario y supletorio.

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
		costos por dicho concepto. **Artículo 96 (tercer párrafo).-** En el caso de procedimientos de contratación en los que se exceptúe de la presentación de garantía de cumplimiento de contrato en términos de la Ley, el monto máximo de las penas convencionales por atraso será del veinte por ciento del monto de los bienes, arrendamientos o servicios entregados o prestados fuera del plazo convenido, salvo cuando se trate de licitaciones públicas que se ubiquen en el supuesto señalado en la fracción XI del artículo 41 de la Ley, en cuyo caso el monto máximo de las penas convencionales será del diez por ciento. **Artículo 105 (último párrafo).-** Los antecedentes que obren en el registro único de proveedores serán los que las dependencias y entidades deben considerar para determinar la reducción de montos de la garantía de cumplimiento a que hace referencia el segundo párrafo del artículo 48 de la Ley, atendiendo a los lineamientos que al efecto emita la Secretaría de la Función Pública.
Artículo 136.- Las garantías que se otorguen a favor del Gobierno Federal ante la Tesorería, autoridades judiciales y las que reciban las dependencias por contratos administrativos, en concursos de obras, adquisiciones, anticipos, permisos, autorizaciones, concesiones, prórrogas y otras obligaciones de naturaleza no fiscal, se regirán por la Ley, este Reglamento y demás disposiciones aplicables. **Artículo 93.-** La Tesorería	**Artículo 49.-** Las garantías que deban otorgarse conforme a esta Ley se constituirán en favor de: I. La Tesorería de la Federación, por actos o contratos que se celebren con las dependencias; II. Las entidades, cuando los actos o contratos se celebren con ellas, y III. Las Tesorerías de las entidades federativas o de los municipios, en los casos de los contratos celebrados al amparo de la fracción VI del artículo 1 de esta Ley. **Artículo 51 (tercer párrafo).-** Tratándose de pagos	

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
podrá autorizar el pago a plazos, ya sea diferido o en parcialidades, de los siguientes conceptos: I. Créditos fiscales a cargo de entidades sujetas a control presupuestal, II. Adeudos a favor del Gobierno Federal no derivados de créditos fiscales, cuya autorización se regirá por lo dispuesto en este Título, exigiéndose la garantía de su importe actualizado.	en exceso que haya recibido el proveedor, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el párrafo anterior…	
42.- Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. *26 de enero de 1990.* CAPITULO I Disposiciones Generales. (Artículos 1 al 4). CAPITULO II De la Constitución y Extinción de las Entidades. (Artículos 5 al 13). CAPITULO III De los Titulares de las Entidades. (Artículos 14 al 15). CAPITULO IV Del Órgano de Gobierno. (Artículos 16 al 21). CAPITULO V De la Operación de las Entidades. (Artículos 22 al 28). CAPITULO VI De la Vigilancia, Control y Evaluación de las Entidades.	**Artículo 1 (fracciones IV y V).-** La presente Ley es de orden público y tiene por objeto reglamentar la aplicación del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de las adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y prestación de servicios de cualquier naturaleza, que realicen: … IV. Los organismos descentralizados; V. Las empresas de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos en los que el fideicomitente sea el gobierno federal o una entidad paraestatal, y	

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
(Artículos 29 al 34). CAPÍTULO VII Del Registro Público de Organismos Descentralizados. (Artículos 35 al 46).		
43.- Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. *28 de junio de 2006.* **Artículo 8 C.-** Para la creación de empresas de participación estatal mayoritaria, las dependencias y entidades presentarán a la Secretaría un informe respecto del régimen jurídico, viabilidad económica y financiera y la procedencia jurídica de la participación. **Artículo 8 G.-** Cualquier recurso público que las dependencias y entidades otorguen a particulares con cargo al Presupuesto de Egresos, no deberá ser afectado por éstos a la constitución o aportación de Fideicomisos, salvo que cuente con previa autorización y otros requisitos. **Artículo 215.-** Requisitos que debe cumplir las dependencias y entidades que requieran constituir fideicomisos. **Artículo 217.**- Registro de Fideicomisos…a cargo de la secretaria mediante un sistema de control y transparencia de	**Artículo 1 (primer y segundo párrafos).-** La presente Ley es de orden público y tiene por objeto reglamentar la aplicación del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de las adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y prestación de servicios de cualquier naturaleza, que realicen: I. Las unidades administrativas de la Presidencia de la República; II. Las Secretarías de Estado y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal; III. La Procuraduría General de la República; IV. Los organismos descentralizados; V. Las empresas de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos en los que el fideicomitente sea el gobierno federal o una entidad paraestatal, y	**Artículo 1.-** El presente Reglamento tiene por objeto establecer las disposiciones que propicien el oportuno y estricto cumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

A) Marco normativo complementario y supletorio.

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
fideicomisos **Artículo 221.-** Reglas para la extinción de fideicomisos. **Artículo 56 (fracción IV, inciso d).-** Anteproyecto de presupuesto: IV. Destino del gasto: … d) Convenios de coordinación; **Artículo 223.-** Los programas federales en los que concurra recursos de las entidades federativas, no se les condicionará el monto ni el ejercicio de los recursos federales más allá de lo establecido en las reglas de operación o en los convenios correspondientes. **Artículo 224.-** Los requerimientos de las dependencias y entidades que suscriban convenios de coordinación para transferir recursos de sus presupuestos a las entidades federativas con el propósito de descentralizar o reasignar la ejecución de funciones, programas o proyectos federales y, en su caso, recursos humanos y materiales. **Artículo 226.-** Las dependencias y entidades deberán publicar toda la información relativa a la aplicación y ejercicio de los	VI. Las entidades federativas, los municipios y los entes públicos de unas y otros, con cargo total o parcial a recursos federales, conforme a los convenios que celebren con el Ejecutivo Federal. No quedan comprendidos para la aplicación de la presente Ley los fondos previstos en el Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal.	**Artículo 2 (segundo y último párrafos).-** Para efecto de lo previsto en la fracción VI del artículo 1 de la Ley, se considerará que existe convenio entre las entidades federativas, los municipios y los entes públicos de unas y otros con el Ejecutivo Federal, cuando aquéllos acepten y reciban, por cualquier medio y concepto, de las dependencias y entidades recursos federales a cuyo cargo, total o parcial, llevarán a cabo la adquisición o arrendamiento de bienes o la contratación de la prestación de servicios de cualquier naturaleza. Las menciones que se hagan en el presente Reglamento a las dependencias y entidades se entenderán hechas, en lo conducente, a las entidades federativas, los municipios y los entes públicos de unas y otros, cuando éstos se ubiquen en el supuesto a que se refiere la fracción VI del artículo 1 de la Ley. **Artículo 4.-** Se consideran comprendidas en el quinto párrafo del artículo 1 de la Ley, las contrataciones que realicen las dependencias y entidades con las personas de derecho público de carácter federal con autonomía derivada de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos…

A) Marco normativo complementario y supletorio.

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
recursos presupuestarios transferidos a través de convenios de coordinación en materia de centralización o reasignación, de conformidad con la LFTAIPG. **Artículo 60.-** La Secretaría integrará al proyecto de Presupuesto de Egresos los proyectos de presupuesto que le remitan los Poderes Legislativo y Judicial y los entes autónomos.	Las personas de derecho público de carácter federal con autonomía derivada de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como las entidades que cuenten con un régimen específico en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, aplicarán los criterios y procedimientos previstos en esta Ley, sólo en lo no previsto en los ordenamientos que los rigen y siempre que no se contrapongan con los mismos, sujetándose a sus propios órganos de control.	
Artículo 147 (fracción I).- Las dependencias que pretendan celebrar contratos plurianuales deberán: I. Solicitar la autorización de la Secretaría. **Artículo 300.-** Las dependencias y entidades deberán reportar la información que especifique la secretaría sobre los contratos de servicios de largo plazo.	**Artículo 3 (fracciones VI y IX).-** Para los efectos de esta Ley, entre las adquisiciones, arrendamientos y servicios, quedan comprendidos: … VI. La prestación de servicios de largo plazo que involucren recursos de varios ejercicios fiscales, a cargo de un inversionista proveedor, el cual se obliga a proporcionarlos con los activos que provea por sí o a través de un tercero, de conformidad con un proyecto para la prestación de dichos servicios;	
Artículo 30.- Los niveles de desagregación aplicables a las entidades que servirán para comunicar el presupuesto aprobado, observarán los siguiente: a) Gasto corriente: … ii) De operación que integra los	IX. En general, los servicios de cualquier naturaleza cuya prestación genere una obligación de pago para las dependencias y entidades, salvo que la contratación se encuentre regulada en forma específica por otras disposiciones legales. Corresponderá a la Secretaría de la Función Pública, a solicitud de la dependencia o entidad de que se trate, determinar si un servicio se ubica en la hipótesis de esta fracción.	**Artículo 5 (último párrafo).-** No quedan comprendidas en las contrataciones a que se refiere el párrafo anterior, las que lleven a cabo las sociedades nacionales de crédito con cargo a los recursos presupuestarios autorizados en los rubros de materiales y suministros, servicios generales e inversión física en bienes, en términos del artículo 30 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
capítulos de materiales y suministros y servicios generales. b) Gasto de capital: i) Inversión física.		
Artículo 3.- La interpretación de este Reglamento corresponde a la SHCP y a la SFP.	**Artículo 7 (primer párrafo).-** La Secretaría, la Secretaría de Economía y la Secretaría de la Función Pública, en el ámbito de sus respectivas competencias, estarán facultadas para interpretar esta Ley para efectos administrativos.	**Artículo 8.-** La Secretaría, la Secretaría de Economía y la Secretaría de la Función Pública, en el ámbito de sus respectivas competencias, estarán facultadas para interpretar la Ley y este Reglamento para efectos administrativos. Los criterios de interpretación que emitan, en términos de este párrafo, son obligatorios para las dependencias y entidades. Las opiniones que emitan las Secretarías mencionadas en el párrafo anterior, en el ámbito de sus atribuciones, derivadas de las consultas que les formulen las dependencias y entidades, no tendrán el carácter de criterio de interpretación de aplicación general ni de disposición administrativa, por lo que sólo podrán considerarse para el caso concreto a que se refiera la consulta de que se trate, sin que tal opinión pueda utilizarse en asuntos similares o análogos.
Artículo 54.- Las dependencias y entidades serán responsables de proponer y gestionar ante la Secretaría los programas y proyectos que serán financiados con crédito externo. **Artículo 55.-** El comité de crédito externo analizará el avance en el ejercicio de los programas y proyectos en ejecución. **Artículo 159.-** Los programas y proyectos financiados con crédito externo requerirán la aprobación de la Secretaría.	**Artículo 10.-** En los casos de adquisiciones, arrendamientos o servicios financiados con fondos provenientes de créditos externos otorgados al gobierno federal o con su garantía por organismos financieros regionales o multilaterales, los procedimientos, requisitos y demás disposiciones para su contratación serán establecidos, con la opinión de la Secretaría, por la Secretaría de la Función Pública aplicando en lo procedente lo dispuesto por esta Ley y deberán precisarse en las convocatorias, invitaciones y contratos correspondientes. **Artículo 28 (fracción III, inciso b).-** El carácter de las licitaciones públicas, será: III. Internacionales abiertas, en las que podrán	**Artículo 9.-** Las disposiciones, procedimientos y requisitos que emita la Secretaría de la Función Pública de conformidad con el artículo 10 de la Ley, se difundirán a través de CompraNet y se aplicarán, con apoyo de los agentes financieros designados como tales por la Secretaría, por las dependencias y entidades responsables de ejercer recursos otorgados al Gobierno Federal o con su garantía por organismos financieros regionales o multilaterales.

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
Artículo 160.- Las entidades que tengan previsto realizar adquisiciones en el exterior con recursos propios o crédito interno procurarán sustituir dichas fuentes de financiamiento por aquéllas que ofrezcan los países y proveedores del exterior mediante líneas de crédito externo disponibles en las instituciones financieras internacionales o en las instituciones de crédito nacionales. **Artículo 161.-** En los créditos externos que contraten las entidades éstas quedarán obligadas a cubrir con recursos propios el servicio de la deuda que los créditos generen. **Artículo 162.-** Las dependencias, con base en su presupuesto aprobado podrán utilizar el sistema de desembolsos establecido con los organismos financieros internacionales. **Artículo 164.-** Las dependencias solicitarán a los agentes financieros tramitar los desembolsos del crédito externo a fin de que éstos verifiquen que las contrataciones de bienes, obras y servicios cumplen con los requisitos exigidos por los	participar licitantes mexicanos y extranjeros, cualquiera que sea el origen de los bienes a adquirir o arrendar y de los servicios a contratar, cuando: … b) Así se estipule para las contrataciones financiadas con créditos externos otorgados al gobierno federal o con su aval.	

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
organismos financieros internacionales. **Artículo 165.-** Los agentes financieros remitirán trimestralmente a la Secretaría un reporte que refleje el ejercicio de los recursos de los programas y proyectos financiados total o parcialmente con crédito externo. **Artículo 166.-** Para que las dependencias puedan tener acceso a líneas de crédito bilateral deberán tener presupuestadas las adquisiciones que pretendan realizar. En los programas y proyectos en los que se requiera efectuar adquisiciones en el exterior, las dependencias deberán acudir a las instituciones de banca de desarrollo a fin de identificar al agente financiero más adecuado para utilizar las líneas de crédito bilateral, con excepción de las adquisiciones que ya cuenten con otras fuentes de financiamiento externo. **Artículo 167.-** Las dependencias deberán incluir e indicar en las bases de licitación y en los contratos comerciales que las adquisiciones serán pagadas al proveedor con recursos		

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
provenientes de crédito externo. **Artículo 168.-** La Tesorería, al recibir por el sistema de administración financiera federal las cuentas por liquidar certificadas, emitirá el formulario múltiple de pagos a nombre de la institución de crédito correspondiente. El costo financiero por el uso de crédito bilateral se cubrirá con cargo al ramo general correspondiente a deuda pública. **Artículo 169.-** Cuando el crédito bilateral no se ejerza, las dependencias solicitarán a la Tesorería la cancelación de los recursos consignados en la cuenta por liquidar certificada.		
Artículo 149.- En la celebración de contratos de arrendamiento financiero, las dependencias y entidades deberán cumplir los requisitos establecidos en las disposiciones generales que emita la Secretaría.	**Artículo 12.-** Las dependencias y entidades, previamente al arrendamiento de bienes muebles, deberán realizar los estudios de factibilidad a efecto de determinar la conveniencia para su adquisición, mediante arrendamiento con opción a compra.	**Artículo 10.-** Para asegurar al Estado las mejores condiciones a que se refiere el artículo 26 de la Ley, los estudios de factibilidad previstos en el artículo 12 de la Ley, deben analizar la conveniencia para la adquisición, arrendamiento o arrendamiento con opción a compra de bienes, para lo cual se considerarán, entre otros aspectos, los costos de mantenimiento y consumibles que se tengan que pagar en cada caso. **Artículo 30 (último párrafo).-** La investigación de mercado y su resultado deberán documentarse e integrarse al expediente de contratación correspondiente.
Artículo 130 (segundo párrafo).- La contratación de seguros a favor de los servidores públicos la	**Artículo 17 (último párrafo).-** En materia de seguros que se contraten a favor de los servidores públicos de las dependencias, incluido el seguro de vida de los pensionados, la Secretaría implementará	

A) Marco normativo complementario y supletorio.

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
Secretaría implementará procedimientos de contratación consolidada en términos de la LAASSP.	procedimientos de contratación consolidada y celebrará los contratos correspondientes. Las entidades podrán solicitar su incorporación a las contrataciones que se realicen para las dependencias, siempre y cuando no impliquen dualidad de beneficios para los servidores públicos.	
Artículo 21.- Los programas presupuestarios anuales se regirán por los objetivos nacionales, estrategias y prioridades del desarrollo integral y sustentable del país contenidos en el PND.	**Artículo 18.-** En la planeación de las adquisiciones, arrendamientos y servicios que pretendan realizar sujetos a que se refiere las fracciones I a VI del artículo 1 de esta Ley, deberá ajustarse a: I. Los objetivos y prioridades del Plan Nacional de Desarrollo y de los programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales que correspondan, así como a las previsiones contenidas en sus programas anuales, y II. Los objetivos, metas y previsiones de recursos establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación o, en su caso, al presupuesto destinado a las contrataciones que los fideicomisos públicos no considerados entidades paraestatales prevean para el ejercicio correspondiente.	**Artículo 7.-** Para los efectos de los actos y actividades reguladas en la Ley que se realicen a través de los fideicomisos públicos no considerados como entidad paraestatal, deberá observarse lo siguiente: I. Sus políticas, bases y lineamientos serán elaboradas y aprobadas por su comité técnico. A falta de éste, por la dependencia con cargo a cuyo presupuesto se aporten los recursos presupuestarios o que coordine la operación del fideicomiso o, en su defecto, por la entidad que funja como fideicomitente; II. La fiduciaria será responsable de llevar a cabo los procedimientos de contratación regulados por la Ley, así como suscribir invariablemente los contratos correspondientes, aún tratándose de los casos previstos en los párrafos segundo y tercero de esta fracción. En el contrato de fideicomiso respectivo, podrá estipularse que los procedimientos de contratación regulados por la Ley se llevarán a cabo por la dependencia con cargo a cuyo presupuesto se aportaron los recursos; por la que coordina la operación del fideicomiso; por aquélla cuyos programas y proyectos se vean beneficiados, o bien, por la entidad que funja como fideicomitente. En estos supuestos la dependencia o entidad podrá utilizar sus políticas, bases y lineamientos. Si la fiduciaria es una persona moral de derecho privado, los procedimientos de contratación regulados por la Ley se realizarán por la dependencia con cargo a cuyo presupuesto se hayan aportado los recursos;

A) Marco normativo complementario y supletorio.

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
		por la que coordine su operación, o por la entidad que funja como fideicomitente. Para efectos del penúltimo párrafo del artículo 41 de la Ley, la procedencia de las contrataciones que realice la fiduciaria que se ubiquen en alguno de los supuestos contenidos en las fracciones II, IV, V, VI, VII, IX, primer párrafo, XI, XII y XX de dicho precepto, se dictaminará por la persona que se señale en las políticas, bases y lineamientos del fideicomiso, o bien, por el Área contratante, cuando el procedimiento de contratación se realice por las dependencias o entidades a que se refiere la fracción I de este artículo, y III. La información relativa a las contrataciones que corresponda enviar a la Secretaría de la Función Pública o a los órganos internos de control, será remitida por conducto de la dependencia que coordine la operación del fideicomiso; por la dependencia que con cargo a su presupuesto se hubieren aportado los recursos; por aquélla cuyos programas y proyectos se vean beneficiados, o por la entidad que funja como fideicomitente, de manera individual por cada fideicomiso.
Artículo 61.- Publicado el decreto de presupuesto de egresos la secretaria publicara los requisitos de los calendarios de presupuesto conforme a lo siguiente: III. Criterios de calendarización: b) Bienes y servicios considerando la estimación de las fechas de pago que deriven de los contratos o pedidos.	**Artículo 20 (fracción III).-** Las dependencias y entidades formularán sus programas anuales de adquisiciones, arrendamientos y servicios, y los que abarquen más de un ejercicio presupuestal, así como sus respectivos presupuestos, considerando: … III. La calendarización física y financiera de los recursos necesarios; …	**Artículo 93.-** Las dependencias y entidades, de acuerdo con su disponibilidad presupuestaria y calendarización autorizada, podrán efectuar pagos progresivos a los proveedores previa verificación satisfactoria de los avances, de conformidad con lo establecido en la convocatoria a la licitación pública o en la invitación a cuando menos tres personas, así como en el contrato…
Artículo 25 (fracción IV, inciso a y b).- La estructura programática: …	**Artículo 24.-** La planeación, programación, presupuestación y el gasto de las adquisiciones, arrendamientos y servicios se sujetará a las disposiciones específicas del Presupuesto de Egresos	**Artículo 13 (último párrafo).-** La Secretaría, la Secretaría de Economía o la Secretaría de la Función Pública, podrán llevar a cabo acciones que promuevan la contratación consolidada de bienes o

A) Marco normativo complementario y supletorio.

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
IV. Indicador de desempeño; a) Eficacia. b) Eficiencia.	de la Federación, así como a lo previsto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y demás disposiciones aplicables y los recursos destinados a ese fin se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia, honradez e imparcialidad para satisfacer los objetivos a los que fueren destinados.	servicios de las dependencias y entidades, que les permita adquirir o arrendar bienes o contar con la prestación de servicios en las mejores condiciones. **Articulo 14 (segundo párrafo).-** La celebración de los contratos marco no estará sujeta a los procedimientos de contratación previstos en la Ley. En dicha celebración, se atenderán los principios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado, mismos que deberán reflejarse en los contratos específicos señalados en el párrafo anterior. **Artículo 63 (último párrafo).-** A efecto de que los testigos sociales cumplan adecuadamente sus funciones, su participación en los procedimientos de contratación deberá comenzar a partir de los actos previos a que se refieren los incisos a) y b) de la fracción II del artículo 67 de este Reglamento, de tal manera que su actuación incida en mayor medida a la transparencia e imparcialidad de dichos procedimientos. En los casos en que la Secretaría de la Función Pública determine designar a un testigo social por el impacto de la contratación en los programas sustantivos de la dependencia o entidad, su participación deberá iniciar en cualquier momento previo a la emisión del fallo correspondiente. **Artículo 67 (fracción III).-** Para el debido ejercicio de las funciones señaladas en la fracción IV del artículo 26 Ter de la Ley, los testigos sociales deberán: … III. Proponer de acuerdo con su experiencia y considerando las disposiciones legales o administrativas vigentes, los aspectos que mejoren la igualdad de condiciones entre los licitantes, la calidad de las contrataciones, así como las acciones que promuevan la eficiencia, eficacia, imparcialidad, transparencia y el combate a la corrupción en las mismas;

A) Marco normativo complementario y supletorio.

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
		Artículo 68 (segundo párrafo, fracción V).- Al final de su participación en el procedimiento de contratación el testigo social emitirá el testimonio correspondiente, el cual será un documento público y deberá contener lo siguiente: … V. Sus conclusiones sobre el apego a las disposiciones jurídicas aplicables, la transparencia y la imparcialidad del procedimiento de contratación. **Artículo 69 (fracción II).-** La Secretaría de la Función Pública evaluará la actuación de los testigos sociales en los procedimientos de contratación conforme a lo siguiente: … II. Se podrán realizar encuestas entre los licitantes, sobre la percepción de si la participación de los testigos sociales contribuye a promover la libre participación, inhibir actos de corrupción y fomentar la transparencia;
Artículo 8 (fracción II).- Las dependencias y entidades deberán: … II. Establecer los procedimientos administrativos que les permitan contar oportunamente con los recursos humanos, materiales y financieros, de conformidad con los calendarios de presupuesto aprobados.	**Artículo 25.-** Las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán convocar, adjudicar o contratar adquisiciones, arrendamientos y servicios, con cargo a su presupuesto autorizado y sujetándose al calendario de gasto correspondiente.	**Artículo 18.-** Una vez que la Secretaría dé a conocer a las dependencias y entidades su calendario de presupuesto autorizado éstas, en términos del artículo 25 de la Ley, podrán realizar los procedimientos de contratación respectivos. **Artículo 71 (segundo párrafo).-** El documento suscrito por el titular del Área requirente señalado en el segundo párrafo del artículo 40 de la Ley… Al documento a que se refiere este artículo, se deberá acompañar la requisición o solicitud de contratación, acreditando la existencia de recursos para iniciar el procedimiento de contratación…
Artículo 146.- Las dependencias y entidades podrán convocar, adjudicar y formalizar adquisiciones, arrendamientos, obras públicas y servicios que ejercerán en el	En casos excepcionales, previo a la autorización de su presupuesto, las dependencias y entidades podrán solicitar a la Secretaría su aprobación para convocar, adjudicar y formalizar contratos cuya vigencia inicie en el ejercicio fiscal siguiente de aquél en el que se formalizan. Los referidos contratos estarán sujetos a	**Artículo 92 (primer párrafo).-** Las modificaciones por ampliación de la vigencia de contratos de arrendamiento de bienes o de prestación de servicios que requieran la continuidad una vez concluido el ejercicio fiscal en el que originalmente terminó su vigencia no necesitarán la autorización de la

A) Marco normativo complementario y supletorio.

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
siguiente ejercicio fiscal con la previa autorización especial de la Secretaría.	la disponibilidad presupuestaria del año en el que se prevé el inicio de su vigencia, por lo que sus efectos estarán condicionados a la existencia de los recursos presupuestarios respectivos, sin que la no realización de la referida condición suspensiva origine responsabilidad alguna para las partes. Cualquier pacto en contrario a lo dispuesto en este párrafo se considerará nulo.	Secretaría, siempre y cuando se trate de contratos cuya ampliación de vigencia no exceda el primer trimestre del ejercicio fiscal siguiente y resulte indispensable para no interrumpir la operación regular de las dependencias y entidades, quedando sujetos el ejercicio y pago de dichas contrataciones a la disponibilidad presupuestaria del ejercicio fiscal siguiente, por lo que sus efectos estarán condicionados a la existencia de los recursos presupuestarios respectivos. El precio de los arrendamientos o servicios sujetos a la ampliación será igual al pactado originalmente.
Artículo 5 (fracción IV).- Solicitudes de autorización sin que se hubiere emitido respuesta, se entenderán resueltas en sentido afirmativo: III. Autorización especial para convocar, adjudicar y formalizar compromisos que iniciarán o continuarán en el siguiente ejercicio fiscal; IV. Contratos plurianuales. 35 a 41 Derogados (D.O.F. 5/11/2012). **Artículo 146 (segundo párrafo).-** Las modificaciones en monto o vigencia de contratos celebrados bajo el ámbito de la LAASSP, que requieran la continuidad una vez concluido un ejercicio fiscal, no necesitarán la autorización de la Secretaría, siempre y cuando no exceda el primer trimestre. **Artículo 147 (fracción I).-** Las	En las adquisiciones, arrendamientos y servicios, cuya vigencia rebase un ejercicio presupuestario, las dependencias o entidades deberán determinar tanto el presupuesto total como el relativo a los ejercicios de que se trate; en la formulación de los presupuestos de los ejercicios subsecuentes se considerarán los costos que, en su momento, se encuentren vigentes, y se dará prioridad a las previsiones para el cumplimiento de las obligaciones contraídas en ejercicios anteriores. Para los efectos del párrafo anterior, las dependencias y entidades observarán lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. La información sobre estos contratos se difundirá a través de CompraNet.	**Artículo 39 (fracción II, inciso i, numeral 7).-** La convocatoria a la licitación pública y, cuando proceda, el Proyecto de convocatoria deberán contener los requisitos que señala el artículo 29 de la Ley y se elaborarán conforme al orden, apartados e información que a continuación se indican: … II. Objeto y alcance de la licitación pública, precisando: … i) En el modelo de contrato, respecto de los requisitos a que se refiere el artículo 45 de la Ley, los siguientes aspectos según corresponda: 7. El desglose de los importes a ejercer en cada ejercicio, tratándose de contratos que abarquen más de un ejercicio fiscal; **Artículo 87 (primer párrafo).-** Cuando la contratación abarque más de un ejercicio fiscal, la garantía de cumplimiento del contrato podrá ser por el porcentaje que corresponda del monto total por erogar en el ejercicio fiscal de que se trate, y deberá ser renovada cada ejercicio fiscal por el monto que se ejercerá en el mismo, la cual deberá presentarse a la dependencia o entidad contratante a más tardar dentro de los primeros diez días naturales del ejercicio fiscal que

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
dependencias que pretendan celebrar contratos plurianuales deberán: I. Solicitar la autorización de la Secretaría. **Artículo 148.-** Las entidades que pretendan celebrar contratos plurianuales se sujetarán a la autorización de su titular.		corresponda. En el caso de fianza, la renovación señalada deberá realizarse conforme a lo dispuesto por la fracción II y el último párrafo del artículo 103 del presente Reglamento.
Artículo 66.- Las dependencias y entidades serán responsables de que los pagos efectuados con cargo a sus presupuestos se realicen con sujeción a los siguientes requisitos: I. Que correspondan a compromisos efectivamente devengados, con excepción de los anticipos previstos en las disposiciones aplicables; II. Que se efectúen dentro de los límites de los calendarios de presupuesto autorizados, y III. Que se encuentren debidamente justificados y comprobados con los documentos originales respectivos, entendiéndose por justificantes las disposiciones y documentos legales que determinen la obligación de hacer un pago y, por comprobantes, los documentos que demuestren la entrega de las sumas de dinero correspondientes…	**Artículo 38 (último párrafo).-** Salvo en las cancelaciones por caso fortuito y fuerza mayor, la dependencia o entidad cubrirá a los licitantes los gastos no recuperables que, en su caso, procedan en términos de lo dispuesto por el Reglamento de esta Ley. **Artículo 46 (tercer párrafo).-** El licitante a quien se hubiere adjudicado el contrato no estará obligado a suministrar los bienes, arrendamientos o prestar el servicio, si la dependencia o entidad, por causas imputables a la misma, no firma el contrato. En este supuesto, la dependencia o entidad, a solicitud escrita del licitante, cubrirá los gastos no recuperables en que hubiere incurrido para preparar y elaborar su proposición, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con la licitación de que se trate.	**Artículo 84 (sexto párrafo).-** Para efectos de lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 46 de la Ley, el proveedor que hubiere entregado bienes o prestado servicios total o parcialmente con fundamento en el primer párrafo de dicho precepto legal, podrá dejar de suministrar los bienes o prestar los servicios que falten y solicitar mediante escrito el pago de aquéllos que haya proporcionado y, en su caso, de los gastos no recuperables que resulten procedentes. **Artículo 101.-** Previa solicitud por escrito de los licitantes, el pago de los gastos no recuperables a que hacen referencia los artículos 38, último párrafo, y 46, tercer párrafo, de la Ley, será procedente cuando los mismos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con la licitación pública o el contrato no signado limitándose según corresponda…

A) Marco normativo complementario y supletorio.

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
Artículo 212.- Para efectos del registro presupuestario al cierre del ejercicio, las adquisiciones de bienes y servicios previstas en el PE que se realicen con cargo a las partidas correspondientes para gastos de seguridad pública y nacional que en forma específica contenga el Clasificador por objeto del gasto, se entenderán por devengados en el momento en el que se contraiga el compromiso de pago correspondiente.	**Artículo 41 (fracciones IV y X, segundo párrafo).-** Las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán contratar adquisiciones, arrendamientos y servicios, sin sujetarse al procedimiento de licitación pública, a través de los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa, cuando: … IV. Se realicen con fines exclusivamente militares o para la armada, o su contratación mediante licitación pública ponga en riesgo la seguridad nacional o la seguridad pública, en los términos de las leyes de la materia. … X… Sólo podrá autorizarse la contratación mediante adjudicación directa, cuando la información que se tenga que proporcionar a los licitantes para la elaboración de su proposición, se encuentre reservada en los términos establecidos en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental;	**Artículo 72 (fracciones IV y VIII).-** Para los efectos de lo establecido en el artículo 41 de la Ley deberá considerarse, respecto de las fracciones de dicho precepto legal, lo que se cita a continuación: … IV. Las dependencias o entidades integrantes del Consejo de Seguridad Nacional podrán sustentar las contrataciones que realicen con fundamento en el primer párrafo de la fracción IV, cuando los bienes o servicios que requieran se encuentren en la base de datos que administra el Comité Técnico del citado Consejo. En estos casos, la investigación de mercado se tendrá por realizada a través de la consulta que se formule a dicha base de datos y el escrito a que se refiere el segundo párrafo del artículo 40 de la Ley, será elaborado por el Área requirente conforme al modelo que haya autorizado dicho Comité, el cual debidamente requisitado obrará en el expediente de contratación respectivo. … VIII. Se entenderá por servicios de consultorías, asesorías, estudios o investigaciones a que se refiere la fracción X, los siguientes: a) Estandarizados: los que impliquen el desarrollo de soluciones o metodologías eficientes para resolver problemas comunes, recurrentes o de complejidad menor que se presentan en la Administración Pública Federal; b) Personalizados o a la medida: los que desarrollan soluciones o metodologías eficientes diseñadas o creadas ex profeso para resolver problemas específicos no comunes en la Administración Pública Federal, y c) Especializados: los relativos a trabajos que requieran alta especialización y se relacionen con un determinado sector o área del conocimiento, para desarrollar soluciones o metodologías eficientes que

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
		permitan resolver problemas complejos y que pueden tener un alto impacto social o económico.
Artículo 58.- La Secretaría formulará e integrará el proyecto de Presupuesto de Egresos con apoyo en los anteproyectos remitidos por las dependencias y entidades, conforme a lo siguiente: III. Al menos los siguientes anexos: e) Montos máximos para invitación restringida a cuando menos tres personas o adjudicación directa.	**Artículo 42 (primer, segundo y último párrafos).-** Las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán contratar adquisiciones, arrendamientos y servicios, sin sujetarse al procedimiento de licitación pública, a través de los de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa, cuando el importe de cada operación no exceda los montos máximos que al efecto se establecerán en el Presupuesto de Egresos de la Federación, siempre que las operaciones no se fraccionen para quedar comprendidas en los supuestos de excepción a la licitación pública a que se refiere este artículo. Si el monto de la operación corresponde a una invitación a cuando menos tres personas, la procedencia de la adjudicación directa sólo podrá ser autorizada por el oficial mayor o equivalente.	**Artículo 21 (fracción III).-** Para el ejercicio de sus funciones el Comité deberá: … III. Determinar los rangos de los montos máximos de contratación en que se ubica la dependencia o entidad de conformidad con el artículo 42 de la Ley, a partir del presupuesto autorizado a la dependencia o entidad para las adquisiciones, arrendamientos y servicios; **Artículo 73.-** Cuando en las dependencias y entidades existan áreas que por sí mismas realicen contrataciones, los montos máximos a que hace referencia el artículo 42 de la Ley se determinarán en función del recurso total autorizado que la dependencia o entidad de que se trate asigne a cada área para la adquisición y arrendamiento de bienes y la contratación de servicios. **Artículo 74.-** Para efectos del primer párrafo del artículo 42 de la Ley, se considerará que existe fraccionamiento de las operaciones, cuando en las contrataciones involucradas se presenten las siguientes circunstancias: I. Todas estén fundadas en el artículo 42 de la Ley y la suma de sus importes superen el monto máximo indicado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para cada procedimiento de excepción; II. Los bienes o servicios objeto de las contrataciones sean exactamente los mismos; III. Las operaciones se efectúen en un sólo ejercicio fiscal; IV. El Área contratante o el Área requirente pudieron prever las contrataciones en un sólo procedimiento, sin que se haya realizado de esta forma, y V. Las solicitudes de contratación se realicen por la misma Área requirente y el Área contratante sea la

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
	Para contratar adjudicaciones directas, cuyo monto sea igual o superior a la cantidad de trescientas veces el salario mínimo diario general vigente en el Distrito Federal, se deberá contar con al menos tres cotizaciones con las mismas condiciones, que se hayan obtenido en los treinta días previos al de la adjudicación y consten en documento en el cual se identifiquen indubitablemente al proveedor oferente.	misma, o bien, el Área requirente sea la misma y el Área contratante sea diferente. **Artículo 75 (primer párrafo).-** En el supuesto previsto en el último párrafo del artículo 42 de la Ley, cuando no sea posible contar con al menos tres cotizaciones, el Área contratante deberá acreditar que en la zona o región geográfica de que se trate, no existen al menos tres proveedores que puedan cotizar el bien o servicio con las condiciones o características requeridas.
Artículo 54 (primer párrafo).- Las dependencias y entidades serán responsables de proponer y gestionar ante la Secretaría los programas y proyectos que serán financiados con crédito externo, quien determinará la viabilidad del financiamiento y, en su caso, el monto y la fuente del mismo y, cuando corresponda, las condiciones financieras del crédito. **Artículo 78.-** Compromisos contraídos en moneda extranjera la CLC consignara el tipo de cambio estimado y el saldo se regularizara dentro de los siete días hábiles posteriores a la fecha en que se realizó el pago. **Artículo 61 A (tercer párrafo).-** El pago de las obligaciones contraídas por las dependencias y la ministración de fondos, se realizará por la Tesorería de acuerdo con los	**Artículo 45 (fracción XIII).-** El contrato o pedido contendrá, en lo aplicable, lo siguiente: … XIII. Moneda en que se cotizó y se efectuará el pago respectivo, el cual podrá ser en pesos mexicanos o moneda extranjera de acuerdo a la determinación de la convocante, de conformidad con la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos;	**Artículo 39 (fracción II, inciso i, numeral 2).-** La convocatoria a la licitación pública y, cuando proceda, el Proyecto de convocatoria deberán contener… … II. Objeto y alcance de la licitación pública, precisando: … i) En el modelo de contrato, respecto de los requisitos a que se refiere el artículo 45 de la Ley, los siguientes aspectos según corresponda: … 2. La fuente oficial que se tomará para llevar a cabo la conversión y la tasa de cambio o la fecha a considerar para hacerlo, en caso de pago en moneda extranjera. **Artículo 81 (fracción V).-** Además de lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley, el contrato deberá: … V. Indicar que los anticipos que otorguen las dependencias y entidades deberán amortizarse proporcionalmente en cada uno de los pagos; su garantía deberá constituirse por el importe total del anticipo otorgado, en la misma moneda en la que se otorgue el anticipo de acuerdo con las disposiciones legales aplicables, la que se cancelará hasta que se haya realizado la amortización total;

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
calendarios de presupuesto autorizados y las disponibilidades financieras de ésta. **Artículo 131 (párrafo primero fracción V).-** Cuando se trate de realizar actividades o funciones equivalentes a las que desempeñe el personal que ocupe una plaza presupuestaria, las dependencias y entidades podrán contratar servicios profesionales por honorarios con personas físicas con cargo al presupuesto de servicios personales, en los casos siguientes: V. Para programas o proyectos financiados con donativos provenientes del exterior o con crédito externo; **Artículo 163.-** La dependencia registrará en el sistema de administración financiera federal la cuenta por liquidar certificada, afectando su presupuesto disponible de acuerdo con la divisa extranjera al tipo de cambio que fije el Banco de México en la fecha de pago.		
Artículo 79 (fracción IV).- Las garantías que deban constituirse a favor de las dependencias y entidades por actos y contratos que celebren,	**Artículo 48 (fracción II y segundo párrafo).-** Los proveedores que celebren los contratos a que se refiere esta Ley deberán garantizar: … II. El cumplimiento de los contratos.	**Artículo 81 (fracciones II y VII).-** Además de lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley, el contrato deberá: … II. Señalar que la garantía de cumplimiento se hará

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
deberán sujetarse: IV. Tratándose de las garantías que deban otorgarse con base en la LAASSP, entre otras leyes, en razón de actos y contratos regulados por éstas, se sujetarán a las disposiciones que les sean aplicables. Los titulares de las dependencias o los órganos de gobierno de las entidades, dentro de las políticas, bases y lineamientos, fijarán la forma y porcentajes a los que deberán sujetarse las garantías que se constituyan.	**Artículo 49.-** Las garantías que deban otorgarse conforme a esta Ley se constituirán en favor de: I. La Tesorería de la Federación, por actos o contratos que se celebren con las dependencias; II. Las entidades, cuando los actos o contratos se celebren con ellas, y III. Las Tesorerías de las entidades federativas o de los municipios, en los casos de los contratos celebrados al amparo de la fracción VI del artículo 1 de esta Ley.	efectiva por el monto total de la obligación garantizada, salvo que en los contratos se haya estipulado su divisibilidad. En caso de que por las características de los bienes o servicios entregados éstos no puedan funcionar o ser utilizados por la dependencia o entidad por estar incompletos, la garantía siempre se hará efectiva por el monto total de la obligación garantizada; … VII. Establecer, en el caso que se actualice el supuesto a que hace referencia el segundo párrafo del artículo 48 de la Ley y el primer párrafo del artículo 86 del presente Reglamento, el monto de la garantía de cumplimiento previsto en el procedimiento de contratación de que se trate y el porcentaje de reducción al mismo, así como la previsión de que las penas convencionales que se llegaren a aplicar se calcularán en términos de lo señalado en el segundo párrafo del artículo 86 de este Reglamento, y **Artículo 85 (tercer párrafo, fracción IV).-** Las dependencias y entidades podrán celebrar contratos abiertos cuando cuenten con la autorización presupuestaria para cubrir el monto mínimo. … IV. En caso de que se hubieren pactado las cantidades de bienes o servicios para cada orden de surtimiento, si la dependencia o entidad necesita de cantidades distintas a las pactadas, las mismas podrán suministrarse siempre y cuando el proveedor lo acepte, se formalice la modificación al contrato en los términos de lo dispuesto por el quinto párrafo del artículo 52 de la Ley y se realice el ajuste correspondiente a la garantía otorgada, observándose lo dispuesto por la fracción II del artículo 103 de este Reglamento, tratándose de fianza; **Artículo 87 (último párrafo).-** En el caso de entregas

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
		parciales de bienes o de prestación de servicios realizados, la garantía de cumplimiento podrá reducirse en forma proporcional a los bienes recibidos o a los servicios ya prestados. **Artículo 91 (último párrafo).** Las modificaciones en monto, plazo o vigencia a los contratos conllevarán el respectivo ajuste a la garantía de cumplimiento cuando dicho incremento no se encuentre cubierto por la garantía originalmente otorgada, para lo cual deberá estipularse en el convenio modificatorio respectivo el plazo para entregar la ampliación de garantía, el cual no deberá exceder de diez días naturales siguientes a la firma de dicho convenio, así como la fecha de entrega de los bienes o de la prestación del servicio para las cantidades adicionales. Tratándose de fianza, el ajuste correspondiente se realizará conforme a lo dispuesto por la fracción II y el último párrafo del artículo 103 de este Reglamento. **Artículo 94 (último párrafo).-** El descuento señalado en el párrafo anterior no se considerará como una modificación al monto del contrato y, en consecuencia, no afectará a la garantía de cumplimiento del mismo.
	Artículo 48 (segundo párrafo).- Para los efectos de este artículo, los titulares de las dependencias o los órganos de gobierno de las entidades, fijarán las bases, forma y porcentajes a los que deberán sujetarse las garantías que deban constituirse, considerando los antecedentes de cumplimiento de los proveedores en los contratos celebrados con las dependencias y entidades, a efecto de determinar montos menores para éstos, de acuerdo a los lineamientos que al efecto emita la Secretaría de la Función Pública. En los casos señalados en las fracciones II, IV, V, XI y XIV del artículo 41 y 42 de esta Ley, el servidor público que deba firmar el	**Artículo 86.-** Las dependencias y entidades podrán reducir el porcentaje de la garantía de cumplimiento cuando el proveedor cuente con antecedentes de cumplimiento favorables en los términos previstos en el segundo párrafo del artículo 48 de la Ley y en los lineamientos que al efecto emita la Secretaría de la Función Pública con base en la información actualizada que se encuentre en el registro único de proveedores, tales como no estar sancionado por la Secretaría de la Función Pública, en los últimos cinco años y que no se le haya rescindido contrato alguno en el mismo periodo. En los casos señalados en el párrafo anterior, el

A) Marco normativo complementario y supletorio.

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
	contrato, bajo su responsabilidad, podrá exceptuar al proveedor, de presentar la garantía de cumplimiento del contrato respectivo.	monto máximo para la aplicación de penas convencionales se calculará considerando el monto de la garantía de cumplimiento establecido en el contrato, sin tomar en cuenta el porcentaje de reducción que se hubiere aplicado a dicha garantía. Tratándose de los procedimientos de contratación en los que se exceptúe de la presentación de garantía de cumplimiento de contrato en los términos de la Ley, en la invitación a cuando menos tres personas o en la solicitud de cotización deberá indicarse que en las proposiciones o cotizaciones no se deberán incluir los costos por dicho concepto. **Artículo 96 (tercer párrafo).-** En el caso de procedimientos de contratación en los que se exceptúe de la presentación de garantía de cumplimiento de contrato en términos de la Ley, el monto máximo de las penas convencionales por atraso será del veinte por ciento del monto de los bienes, arrendamientos o servicios entregados o prestados fuera del plazo convenido, salvo cuando se trate de licitaciones públicas que se ubiquen en el supuesto señalado en la fracción XI del artículo 41 de la Ley, en cuyo caso el monto máximo de las penas convencionales será del diez por ciento. **Artículo 103.-** Los proveedores podrán otorgar las garantías a que se refiere la Ley y este Reglamento, en alguna de las formas previstas en el artículo 137 del Reglamento de la Ley del Servicio de Tesorería dela Federación en el caso de dependencias, o en las disposiciones aplicables tratándose de entidades. Cuando la forma de garantía sea mediante fianza, se observará lo siguiente: I. La póliza de la fianza deberá contener, como mínimo, las siguientes previsiones: a) Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato;

A) Marco normativo complementario y supletorio.

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
		b) Que para cancelar la fianza, será requisito contar con la constancia de cumplimiento total de las obligaciones contractuales; c) Que la fianza permanecerá vigente durante el cumplimiento de la obligación que garantice y continuará vigente en caso de que se otorgue prórroga al cumplimiento del contrato, así como durante la substanciación de todos los recursos legales o de los juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva que quede firme, y d) Que la afianzador a acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas para la efectividad de las fianzas, aún para el caso de que proceda el cobro de indemnización por mora, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida. Tratándose de dependencias, el procedimiento de ejecución será el previsto en el artículo 95 de la citada Ley, debiéndose atender para el cobro de indemnización por mora lo dispuesto en el artículo 95 Bis de dicha Ley; II. En caso de otorgamiento de prórrogas o esperas al proveedor para el cumplimiento de sus obligaciones, derivadas de la formalización de convenios de ampliación al monto o al plazo del contrato, se deberá realizar la modificación correspondiente a la fianza; III. Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo del proveedor y éste efectúe la totalidad del pago en forma incondicional, las dependencias y entidades deberán cancelar la fianza respectiva, y IV. Cuando se requiera hacer efectivas las fianzas, las dependencias deberán remitir a la Tesorería de la Federación, dentro del plazo a que hace referencia el artículo 143 del Reglamento de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación, la

A) Marco normativo complementario y supletorio.

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
	Artículo 1 (penúltimo párrafo).- Los titulares de las dependencias y los órganos de gobierno de las entidades emitirán, bajo su responsabilidad y de conformidad con este mismo ordenamiento y los lineamientos generales que al efecto emita la Secretaría de la Función Pública, las políticas, bases y lineamientos para las materias a que se refiere este artículo. **Artículo 38 (segundo párrafo).-** En los casos en que no existan proveedores nacionales, en las políticas, bases y lineamientos podrá establecerse un porcentaje menor al utilizado para determinar el precio no aceptable, sin que el mismo pueda ser	solicitud donde se precise la información necesaria para identificar la obligación o crédito que se garantiza y los sujetos que se vinculan con la fianza, debiendo acompañar los documentos que soporten y justifiquen el cobro, de conformidad con lo dispuesto por el Reglamento del Artículo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, para el Cobro de Fianzas Otorgadas a Favor de la Federación, del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios Distintas de las que Garantizan Obligaciones Fiscales Federales a cargo de Terceros; tratándose de entidades la solicitud se remitirá al área correspondiente de la propia entidad. Las modificaciones a las fianzas deberán formalizarse con la participación que corresponda a la afianzadora, en términos de las disposiciones aplicables. **Artículo 105 (último párrafo).-** Los antecedentes que obren en el registro único de proveedores serán los que las dependencias y entidades deben considerar para determinar la reducción de montos de la garantía de cumplimiento a que hace referencia el segundo párrafo del artículo 48 de la Ley, atendiendo a los lineamientos que al efecto emita la Secretaría de la Función Pública. **Artículo 3 (fracción III).-** Las políticas, bases y lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios a que se refiere el penúltimo párrafo del artículo 1 de la Ley, sólo deberán prever lo siguiente: … III. La forma en que las dependencias y entidades deberán cumplir con los términos o plazos a que hacen referencia la Ley y este Reglamento, y

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
	inferior al cinco por ciento. Los resultados de la investigación y del cálculo para determinar la inaceptabilidad del precio ofertado se incluirán en el fallo a que alude el artículo 37 de esta Ley. **Artículo 50 (fracción XIII).-** Aquellos licitantes que injustificadamente y por causas imputables a ellos mismos, no hayan formalizado un contrato adjudicado con anterioridad por la convocante. Dicho impedimento prevalecerá ante la propia dependencia o entidad convocante por el plazo que se establezca en las políticas, bases y lineamientos a que se refiere el artículo 1 de esta Ley, el cual no podrá ser superior a un año calendario contado a partir del día en que haya fenecido el término establecido en la convocatoria a la licitación o, en su caso, por el artículo 46 de esta Ley, para la formalización del contrato en cuestión, y **Artículo 81.-** El arbitraje podrá preverse en cláusula expresa en el contrato o por convenio escrito posterior a su celebración. En las políticas, bases y lineamientos deberá establecerse el área o servidor público responsable para determinar la conveniencia de incluir dicha cláusula o firmar el convenio correspondiente.	**Artículo 137.-** El servidor público facultado para determinar la conveniencia de incluir la cláusula arbitral o firmar el convenio correspondiente, en los términos del artículo 81 de la Ley, deberá tener nivel jerárquico de director general en las dependencias o equivalente en las entidades.
Artículo 77.- Las dependencias serán responsables de calcular y efectuar los descuentos y retenciones a que dé lugar el pago de… adquisiciones y servicios… Deductivas y penas convencionales.	**Artículo 53 (primero párrafo).-** Las dependencias y entidades deberán pactar penas convencionales a cargo del proveedor por atraso en el cumplimiento de las fechas pactadas de entrega o de la prestación del servicio, las que no excederán del monto de la garantía de cumplimiento del contrato, y serán determinadas en función de los bienes o servicios no entregados o prestados oportunamente. En las operaciones en que se pactare ajuste de precios, la penalización se calculará sobre el precio ajustado.	**Artículo 81 (fracción VII).-** Además de lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley, el contrato deberá: … VII. Establecer, en el caso que se actualice el supuesto a que hace referencia el segundo párrafo del artículo 48 de la Ley y el primer párrafo del artículo 86 del presente Reglamento, el monto de la garantía de cumplimiento previsto en el procedimiento de contratación de que se trate y el porcentaje de reducción al mismo, así como la previsión de que las penas convencionales que se llegaren a aplicar se calcularán en términos de lo señalado en el segundo párrafo del artículo 86 de este Reglamento, y

A) Marco normativo complementario y supletorio.

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
		Artículo 85 (tercer párrafo, fracción I, segundo párrafo y fracción V).- En los contratos abiertos de adquisiciones, arrendamientos o servicios a que hace referencia el artículo 47 de la Ley, deberá atenderse lo siguiente: I… Las modificaciones a que se refiere el párrafo segundo de la fracción II del artículo 47 de la Ley podrán efectuarse sobre alguna o algunas partidas originalmente pactadas; … V. Las penalizaciones por atraso en la entrega de los bienes o de la prestación de servicios, serán determinadas en función de los bienes o servicios que se hayan entregado o prestado con atraso y se aplicarán sobre los montos que deban pagarse por cada orden de surtimiento emitida por la dependencia o entidad, exclusivamente sobre el valor de lo entregado o prestado con atraso y no por la totalidad del contrato, y **Artículo 86 (segundo párrafo).-** En los casos señalados en el párrafo anterior, el monto máximo para la aplicación de penas convencionales se calculará considerando el monto de la garantía de cumplimiento establecido en el contrato, sin tomar en cuenta el porcentaje de reducción que se hubiere aplicado a dicha garantía**.** **Artículo 96 (segundo y tercer párrafos).-** Las garantías que se otorguen para responder de las obligaciones a que hace referencia el segundo párrafo del artículo 53 de la Ley se sujetarán a los términos, plazo y condiciones establecidos en el propio contrato y son independientes a las penas convencionales que se mencionan en el párrafo anterior. En el caso de procedimientos de contratación en los que se exceptúe de la presentación de garantía de cumplimiento de contrato en términos de la Ley, el

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
		monto máximo de las penas convencionales por atraso será del veinte por ciento del monto de los bienes, arrendamientos o servicios entregados o prestados fuera del plazo convenido, salvo cuando se trate de licitaciones públicas que se ubiquen en el supuesto señalado en la fracción XI del artículo 41 de la Ley, en cuyo caso el monto máximo de las penas convencionales será del diez por ciento. **Artículo 100.-** En los casos en que en una partida o parte de la misma no sean entregados los bienes o el servicio objeto del contrato adjudicado no dé inicio y la pena convencional por atraso que proporcionalmente corresponda a la parte no entregada o prestada, rebase el monto de la pena prevista en el contrato, la dependencia o entidad, previa notificación al proveedor, podrá modificar el contrato correspondiente, cancelando las partidas de que se trate, o parte de las mismas cuando ello sea posible, aplicando al proveedor por dicha cancelación una cantidad equivalente a la pena convencional máxima por atraso que correspondería en el caso de que los bienes o servicios hubieran sido entregados o prestados en fecha posterior a la pactada, siempre y cuando la suma total del monto de las cancelaciones no rebase el diez por ciento del importe total del contrato. En el supuesto de que sea rescindido el contrato, no procederá la contabilización de la sanción por cancelación a que hace referencia el párrafo anterior, toda vez que se deberá hacer efectiva la garantía de cumplimiento. **Artículo 39 (fracción II, inciso i, numeral 4).-** La convocatoria a la licitación pública y, cuando proceda, el Proyecto de convocatoria deberán contener los requisitos que señala el artículo 29 de la Ley y se elaborarán conforme al orden, apartados e información que a continuación se indican:

A) Marco normativo complementario y supletorio.

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
	Artículo 53 Bis. Las dependencias y entidades podrán establecer en la convocatoria a la licitación, invitaciones a cuando menos tres personas y contratos, deducciones al pago de bienes o servicios con motivo del incumplimiento parcial o deficiente en que pudiera incurrir el proveedor respecto a las partidas o conceptos que integran el contrato. En estos casos, establecerán el límite de incumplimiento a partir del cual podrán cancelar total o parcialmente las partidas o conceptos no entregados, o bien rescindir el contrato en los términos de este artículo.	… II. Objeto y alcance de la licitación pública, precisando: … i) En el modelo de contrato, respecto de los requisitos a que se refiere el artículo 45 de la Ley, los siguientes aspectos según corresponda: … 4. Las deducciones que, en su caso, se aplicarán con motivo del incumplimiento parcial o deficiente en que pudiera incurrir el proveedor, en la entrega del bien o la prestación del servicio; **Artículo 97.-** Las deducciones al pago de bienes o servicios previstos en el artículo 53 Bis de la Ley serán determinadas en función de los bienes entregados o servicios prestados de manera parcial o deficiente. Dichas deducciones deberán calcularse hasta la fecha en que materialmente se cumpla la obligación y sin que cada concepto de deducciones exceda a la parte proporcional de la garantía de cumplimiento que le corresponda del monto total del contrato. Los montos a deducir se deberán aplicar en la factura que el proveedor presente para su cobro, inmediatamente después de que el Área requirente tenga cuantificada la deducción correspondiente.
Artículo 305.- La SFP por si o a través de los OIC's, podrá realizar auditorías y visitas a las dependencias y entidades para inspeccionar y vigilar el adecuado cumplimiento de la ley.	**Artículo 57 (primer y último párrafos).-** La Secretaría de la Función Pública, en el ejercicio de sus facultades, podrá verificar, en cualquier tiempo, que las adquisiciones, arrendamientos y servicios se realicen conforme a lo establecido en esta Ley o en otras disposiciones aplicables. … La Secretaría de la Función Pública podrá realizar las visitas e inspecciones que estime pertinentes a las dependencias y entidades que realicen adquisiciones, arrendamientos y servicios, e igualmente podrá	**Artículo 107.-** De conformidad con lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley, la Secretaría de la Función Pública y los órganos internos de control, con motivo de las auditorías, visitas o inspecciones que practiquen, podrán solicitar a los proveedores información y documentación relacionada con los contratos. Para estos efectos, en el contrato respectivo deberá indicarse que los licitantes ganadores deberán proporcionar la información que en su momento se requiera.

A) Marco normativo complementario y supletorio.

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
	solicitar a los servidores públicos y a los proveedores que participen en ellas todos los datos e informes relacionados con los actos de que se trate.	
Artículo 311 (fracción VI y último párrafo).- Para la realización de las auditorias y visitas se deberán observar las siguientes reglas: … VI. Las observaciones resultantes deberán solventarse por las dependencias y entidades en un plazo de 45 días hábiles. … Si como resultado de las auditorías se detectan irregularidades que afecten a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de las entidades, se procederá en los términos de las disposiciones aplicables.	**Artículo 62 (primer párrafo).-** La Secretaría de la Función Pública aplicará las sanciones que procedan a quienes infrinjan las disposiciones de este ordenamiento, conforme a lo dispuesto por la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. **Artículo 63.-** Las responsabilidades y las sanciones a que se refiere la presente Ley serán independientes de las de orden civil, penal o de cualquier otra índole que puedan derivar de la comisión de los mismos hechos.	**Artículo 130 (último párrafo).-** A los servidores públicos facultados para representar a las dependencias y entidades que, sin causa justificada, omitan dar contestación a la solicitud de conciliación o no asistan a las sesiones respectivas, se les prevendrá de la responsabilidad en que incurren, en términos del primer párrafo del artículo 62 de la Ley. La autoridad que conozca del caso deberá citar a una siguiente audiencia de conciliación.
44.- Reglamento de la Oficina de la Presidencia de la República. *02 de abril de 2013.* **Artículo 10 (fracción V).-** Corresponde a la Coordinación de Estrategia Digital Nacional: … V. Participar, en coordinación con las dependencias y entidades de la APF competentes, en la formulación de las especificaciones y estándares para las adquisiciones y	**Artículo 1 (fracción I).-** La presente Ley es de orden público y tiene por objeto reglamentar la aplicación del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de las adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y prestación de servicios de cualquier naturaleza, que realicen: I. Las unidades administrativas de la Presidencia de la República;	

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
arrendamientos de bienes o servicios de tecnologías de la información y comunicación;		
45.- Reglamento del artículo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas para el cobro de fianzas otorgadas a favor de la Federación, del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios, distintas de las que garantizan obligaciones fiscales federales a cargo de terceros. *15 de enero de 1991* **Artículo 1.-** Procedimiento para hacer efectivas las fianzas que hayan otorgado instituciones de fianzas a favor de la Federación… distintas de las que garantizan obligaciones fiscales federales a cargo de terceros.	**Artículo 48 (párrafo segundo).-** Para los efectos de este artículo, los titulares de las dependencias o los órganos de gobierno de las entidades, fijarán las bases, forma y porcentajes a los que deberán sujetarse las garantías que deban constituirse, considerando los antecedentes de cumplimiento de los proveedores en los contratos celebrados con las dependencias y entidades, a efecto de determinar montos menores para éstos, de acuerdo a los lineamientos que al efecto emita la Secretaría de la Función Pública…	**Artículo 103 (segundo párrafo, fracción IV).-** Cuando la forma de garantía sea mediante fianza, se observará lo siguiente: … IV. Cuando se requiera hacer efectivas las fianzas, las dependencias deberán remitir a la Tesorería de la Federación, dentro del plazo a que hace referencia el artículo 143 del Reglamento de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación, la solicitud donde se precise la información necesaria para identificar la obligación o crédito que se garantiza y los sujetos que se vinculan con la fianza, debiendo acompañar los documentos que soporten y justifiquen el cobro, de conformidad con lo dispuesto por el Reglamento del Artículo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, para el Cobro de Fianzas Otorgadas a Favor de la Federación, del Distrito Federal de los Estados y de los Municipios Distintas de las que Garantizan Obligaciones Fiscales Federales a cargo de Terceros; tratándose de entidades la solicitud se remitirá al área correspondiente de la propia entidad.
46.- Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública. *15 de abril de 2009.* **Artículo 1.-** La Secretaría de la Función Pública tiene a su cargo el ejercicio de las atribuciones que le confieren la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y demás legislación aplicable, así como los reglamentos, decretos,	**Artículo 2 (fracción II, segundo párrafo).-** Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por: … II. CompraNet… El sistema estará a cargo de la Secretaría de la Función Pública, a través de la unidad administrativa que se determine en su Reglamento, la que establecerá los controles necesarios para garantizar la inalterabilidad y conservación de la información que contenga; **Artículo 7.-** La Secretaría, la Secretaría de Economía y la Secretaría de la Función Pública, en el ámbito de sus respectivas competencias,	**Artículo 8.-** La Secretaría, la Secretaría de Economía y la Secretaría de la Función Pública, en el ámbito de sus respectivas competencias, estarán facultadas

A) Marco normativo complementario y supletorio.

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
acuerdos y órdenes del Presidente de la República. **Artículo 3 (apartado A fracciones IX, X XIII, XVI, XVII XXI, XXII, XXIII, XXIII.1, B, C, D y E).-** Al frente de la Secretaría estará el Secretario, quien para el desahogo de los asuntos de su competencia, se auxiliará de las unidades administrativas y de los servidores públicos que a continuación se indican: A. Unidades Administrativas: IX. Unidad de Política de Recursos Humanos de la Administración Pública Federal. X. Unidad de Políticas de Mejora de la Gestión Pública; XIII. Unidad de Auditoría Gubernamental: XVI. Unidad de Normatividad de Contrataciones Públicas: XVII. Unidad de Política de Contrataciones Públicas XXI. Dirección General de Denuncias e Investigaciones; XXII. Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial; XXIII. Dirección General de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas: XXIII.1 Dirección General Adjunta de Inconformidades: B. Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales;	estarán facultadas para interpretar esta Ley para efectos administrativos. La Secretaría de la Función Pública dictará las disposiciones administrativas que sean estrictamente necesarias para el adecuado cumplimiento de esta Ley, tomando en cuenta la opinión de la Secretaría y, cuando corresponda, la de la Secretaría de Economía. Las disposiciones de carácter general se publicarán en el Diario Oficial de la Federación. La Secretaría de la Función Pública, en el ámbito de sus atribuciones, estará encargada de establecer las directrices conforme a las cuales se determinarán los perfiles de puesto de los servidores públicos correspondientes en materia de contrataciones públicas, así como las relativas a la capacitación para el adecuado desempeño de sus funciones en las materias a que alude esta Ley. **Artículo 9 (primer párrafo).-** En materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, los titulares de las dependencias y los órganos de gobierno de las entidades serán los responsables de que, en la adopción e instrumentación de las acciones que deban llevar a cabo en cumplimiento de esta Ley, se observen criterios que promuevan la modernización y desarrollo administrativo, la descentralización de funciones y la efectiva delegación de facultades. **Artículo 56 (segundo párrafo).-** La administración del sistema electrónico de información pública gubernamental sobre adquisiciones, arrendamientos y servicios, estará a cargo de la Secretaría de la Función Pública, a través de la unidad administrativa que determine su Reglamento, en el cual las dependencias, entidades y los demás sujetos de esta Ley, deberán incorporar la información que ésta les requiera.	para interpretar la Ley y este Reglamento para efectos administrativos. Los criterios de interpretación que emitan, en términos de este párrafo, son obligatorios para las dependencias y entidades. Las opiniones que emitan las Secretarías mencionadas en el párrafo anterior, en el ámbito de sus atribuciones, derivadas de las consultas que les formulen las dependencias y entidades, no tendrán el carácter de criterio de interpretación de aplicación general ni de disposición administrativa, por lo que sólo podrán considerarse para el caso concreto a que se refiera la consulta de que se trate, sin que tal opinión pueda utilizarse en asuntos similares o análogos.

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
C. Delegados, Subdelegados y Comisarios Públicos; D. Titulares de Órganos Internos de Control y los de sus áreas de Auditoría, de Quejas y de Responsabilidades. **Artículo 34.-** Corresponderá a la Unidad de Normatividad de Contrataciones Públicas el ejercicio de … **Artículo 36.-** Atribuciones de la Dirección General Adjunta de Normatividad de Adquisiciones. **Artículo 37.-** Atribuciones de la Dirección General Adjunta de Normatividad de Bienes Muebles y de Apoyo en Contrataciones Públicas. **Artículo 38.-** Corresponderá a la Unidad de Política de Contrataciones Públicas el ejercicio de …		

- ***DECRETOS***

47.- DECRETO por el que se establecen diversas medidas en materia de adquisiciones, uso de papel y de la certificación de manejo sustentable de bosques por la Administración Pública Federal. *5 de septiembre de 2007.*	**Artículo 26 (segundo, tercer y cuarto párrafos).-** Las adquisiciones, arrendamientos y servicios se adjudicarán, por regla general, a través de licitaciones públicas, mediante convocatoria pública, para que libremente se presenten proposiciones, solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad, crecimiento económico, generación de empleo, eficiencia energética, uso responsable del agua, optimización y uso sustentable	

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
	de los recursos, así como la protección al medio ambiente y demás circunstancias pertinentes, de acuerdo con lo que establece la presente Ley. Tratándose de adquisiciones de madera, muebles y suministros de oficina fabricados con madera, deberán requerirse certificados otorgados por terceros previamente registrados ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que garanticen el origen y el manejo sustentable de los aprovechamientos forestales de donde proviene dicha madera. En cuanto a los suministros de oficina fabricados con madera, se estará a lo dispuesto en el Reglamento de la presente Ley. En las adquisiciones de papel para uso de oficina, éste deberá contener un mínimo de cincuenta por ciento de fibras de material reciclado o de fibras naturales no derivadas de la madera o de materias primas provenientes de aprovechamientos forestales manejados de manera sustentable en el territorio nacional que se encuentren certificadas conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior o de sus combinaciones y elaborados en procesos con blanqueado libre de cloro.	**Artículo 33 (primer párrafo).-** Para efectos de lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 26 de la Ley, se entenderá por suministros de oficina fabricados con madera, aquéllos que se elaboren con dicho material y se incorporen al inventario de las dependencias y entidades por ser necesarios para el desempeño de las funciones encomendadas a los servidores públicos.
48.- DECRETO que establece las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la Administración Pública Federal. *10 de diciembre de 2012.* ***49.- DECRETO por el que se modifica el diverso que***	**Artículo 1 (primer y último párrafos).-** La presente Ley es de orden público y tiene por objeto reglamentar la aplicación del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de las adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y prestación de servicios de cualquier naturaleza, que realicen: … Las dependencias y entidades se abstendrán de crear fideicomisos, otorgar mandatos o celebrar actos o cualquier tipo de contratos, que evadan lo previsto en este ordenamiento. **Artículo 9 (primer párrafo).-** En materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, los titulares	

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
establece las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la Administración Pública Federal. *30 de diciembre de 2013*[10] **Artículo 21.-** Las dependencias y entidades deberán, durante el ejercicio fiscal 2014, realizar las acciones respecto a los fideicomisos y mandatos públicos que coordinen. I. Incluir en el diagnóstico a que se refiere el artículo Quinto de este Decreto, un análisis sobre los fideicomisos y mandatos a su cargo, detallando el monto de sus disponibilidades, los recursos ejercidos … y los resultados alcanzados con los mismos; II. Extinguir los fideicomisos y terminar los mandatos que no estén creados por disposición de ley o decreto, o no se justifique su existencia … **Artículo 22.-** El importe de los ahorros que se obtengan como resultado de las medidas de austeridad y disciplina	de las dependencias y los órganos de gobierno de las entidades serán los responsables de que, en la adopción e instrumentación de las acciones que deban llevar a cabo en cumplimiento de esta Ley, se observen criterios que promuevan la modernización y desarrollo administrativo, la descentralización de funciones y la efectiva delegación de facultades. **Artículo 18 (fracción II).-** En la planeación de las adquisiciones, arrendamientos y servicios que pretendan realizar sujetos a que se refiere las fracciones I a VI del artículo 1 de esta Ley, deberá ajustarse a: … II. Los objetivos, metas y previsiones de recursos establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación o, en su caso, al presupuesto destinado a las contrataciones que los fideicomisos públicos no considerados entidades paraestatales prevean para el ejercicio correspondiente.	**Artículo 7.-** Para los efectos de los actos y actividades reguladas en la Ley que se realicen a través de los fideicomisos públicos no considerados como entidad paraestatal, deberá observarse lo siguiente: I. Sus políticas, bases y lineamientos serán elaboradas y aprobadas por su comité técnico. A falta de éste, por la dependencia con cargo a cuyo presupuesto se aporten los recursos presupuestarios o que coordine la operación del fideicomiso o, en su defecto, por la entidad que funja como fideicomitente; II. La fiduciaria será responsable de llevar a cabo los procedimientos de contratación regulados por la Ley, así como suscribir invariablemente los contratos correspondientes, aún tratándose de los casos previstos en los párrafos segundo y tercero de esta fracción. En el contrato de fideicomiso respectivo, podrá estipularse que los procedimientos de contratación regulados por la Ley se llevarán a cabo por la dependencia con cargo a cuyo presupuesto se aportaron los recursos; por la que coordina la operación del fideicomiso; por aquélla cuyos programas y proyectos se vean beneficiados, o bien, por la entidad que funja como fideicomitente. En estos supuestos la dependencia o entidad podrá utilizar sus políticas, bases y lineamientos. Si la fiduciaria es una persona moral de derecho

[10] Este decreto de 2013, modifica los artículos 21 y 22 del decreto de 2012, tal como se transcribe en el apartado.

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
presupuestal se destinarán preferentemente a los programas prioritarios del ejecutor de gasto que los genere, o a aquéllos programas presupuestarios que determine la SHCP.	**Artículo 24.-** La planeación, programación, presupuestación y el gasto de las adquisiciones, arrendamientos y servicios se sujetará a las disposiciones específicas del Presupuesto de Egresos de la Federación, así como a lo previsto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y demás disposiciones aplicables y los recursos destinados a ese fin se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia, honradez e imparcialidad para satisfacer los objetivos a los que fueren destinados.	privado, los procedimientos de contratación regulados por la Ley se realizarán por la dependencia con cargo a cuyo presupuesto se hayan aportado los recursos; por la que coordine su operación, o por la entidad que funja como fideicomitente. Para efectos del penúltimo párrafo del artículo 41 de la Ley, la procedencia de las contrataciones que realice la fiduciaria que se ubiquen en alguno de los supuestos contenidos en las fracciones II, IV, V, VI, VII, IX, primer párrafo, XI, XII y XX de dicho precepto, se dictaminará por la persona que se señale en las políticas, bases y lineamientos del fideicomiso, o bien, por el Área contratante, cuando el procedimiento de contratación se realice por las dependencias o entidades a que se refiere la fracción I de este artículo, y III. La información relativa a las contrataciones que corresponda enviar a la Secretaría de la Función Pública o a los órganos internos de control, será remitida por conducto de la dependencia que coordine la operación del fideicomiso; por la dependencia que con cargo a su presupuesto se hubieren aportado los recursos; por aquélla cuyos programas y proyectos se vean beneficiados, o por la entidad que funja como fideicomitente, de manera individual por cada fideicomiso. **Artículo 13 (último párrafo).-** La Secretaría, la Secretaría de Economía o la Secretaría de la Función Pública, podrán llevar a cabo acciones que promuevan la contratación consolidada de bienes o servicios de las dependencias y entidades, que les permita adquirir o arrendar bienes o contar con la prestación de servicios en las mejores condiciones. **Articulo 14 (segundo párrafo).-** La celebración de los contratos marco no estará sujeta a los procedimientos de contratación previstos en la Ley. En dicha celebración, se atenderán los principios de

A) Marco normativo complementario y supletorio.

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
	Artículo 40 (segundo párrafo).- La selección del procedimiento de excepción que realicen las dependencias y entidades deberá fundarse y motivarse, según las circunstancias que concurran en cada caso, en criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia que resulten procedentes para obtener las mejores condiciones para el Estado. El acreditamiento del o los criterios en los que se funda; así como la justificación de las razones en las que se sustente el ejercicio de la opción, deberán constar por escrito y ser firmado por el titular del área usuaria o requirente de los bienes o servicios.	economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado, mismos que deberán reflejarse en los contratos específicos señalados en el párrafo anterior. **Artículo 63 (último párrafo).-** A efecto de que los testigos sociales cumplan adecuadamente sus funciones, su participación en los procedimientos de contratación deberá comenzar a partir de los actos previos a que se refieren los incisos a) y b) de la fracción II del artículo 67 de este Reglamento, de tal manera que su actuación incida en mayor medida a la transparencia e imparcialidad de dichos procedimientos. En los casos en que la Secretaría de la Función Pública determine designar a un testigo social por el impacto de la contratación en los programas sustantivos de la dependencia o entidad, su participación deberá iniciar en cualquier momento previo a la emisión del fallo correspondiente. **Artículo 67 (fracción III).-** Para el debido ejercicio de las funciones señaladas en la fracción IV del artículo 26 Ter de la Ley, los testigos sociales deberán: … III. Proponer de acuerdo con su experiencia y considerando las disposiciones legales o administrativas vigentes, los aspectos que mejoren la igualdad de condiciones entre los licitantes, la calidad de las contrataciones, así como las acciones que promuevan la eficiencia, eficacia, imparcialidad, transparencia y el combate a la corrupción en las mismas; **Artículo 68 (segundo párrafo, fracción V).-…** Al final de su participación en el procedimiento de contratación el testigo social emitirá el testimonio correspondiente, el cual será un documento público y deberá contener lo siguiente: … V. Sus conclusiones sobre el apego a las

A) Marco normativo complementario y supletorio.

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
		disposiciones jurídicas aplicables, la transparencia y la imparcialidad del procedimiento de contratación. **Artículo 69 (fracción II).-** La Secretaría de la Función Pública evaluará la actuación de los testigos sociales en los procedimientos de contratación conforme a lo siguiente: … II. Se podrán realizar encuestas entre los licitantes, sobre la percepción de si la participación de los testigos sociales contribuye a promover la libre participación, inhibir actos de corrupción y fomentar la transparencia;
50.- DECRETO que tiene por objeto establecer la estructura, el funcionamiento y el control de los organismos subsidiarios de Petróleos Mexicanos. *21 de marzo de 2012*.	**Artículo 1 (tercer párrafo).-** Las adquisiciones, arrendamientos y servicios que contraten las empresas productivas del Estado y sus empresas productivas subsidiarias quedan excluidos de la aplicación de este ordenamiento.	
51.- Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017. *30 de diciembre de 2016.*	**Artículo 18 (fracción II).-** En la planeación de las adquisiciones, arrendamientos y servicios que pretendan realizar sujetos a que se refiere las fracciones I a VI del artículo 1 de esta Ley, deberá ajustarse a: … II. Los objetivos, metas y previsiones de recursos establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación o, en su caso, al presupuesto destinado a las contrataciones que los fideicomisos públicos no considerados entidades paraestatales prevean para el ejercicio correspondiente. **Artículo 24.-** La planeación, programación, presupuestación y el gasto de las adquisiciones, arrendamientos y servicios se sujetará a las disposiciones específicas del Presupuesto de Egresos de la Federación, así como a lo previsto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad	

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
	Hacendaria y demás disposiciones aplicables y los recursos destinados a ese fin se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia, honradez e imparcialidad para satisfacer los objetivos a los que fueren destinados.	
	Artículo 42 (primer y cuarto párrafos).- Las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán contratar adquisiciones, arrendamientos y servicios, sin sujetarse al procedimiento de licitación pública, a través de los de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa, cuando el importe de cada operación no exceda los montos máximos que al efecto se establecerán en el Presupuesto de Egresos de la Federación, siempre que las operaciones no se fraccionen para quedar comprendidas en los supuestos de excepción a la licitación pública a que se refiere este artículo. … La suma de las operaciones que se realicen al amparo de este artículo no podrá exceder del treinta por ciento del presupuesto de adquisiciones, arrendamientos y servicios autorizado a la dependencia o entidad en cada ejercicio presupuestario. La contratación deberá ajustarse a los límites establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación.	**Artículo 21 (fracción III).-** Para el ejercicio de sus funciones el Comité deberá: … III. Determinar los rangos de los montos máximos de contratación en que se ubica la dependencia o entidad de conformidad con el artículo 42 de la Ley, a partir del presupuesto autorizado a la dependencia o entidad para las adquisiciones, arrendamientos y servicios… **Artículo 73.-** Cuando en las dependencias y entidades existan áreas que por sí mismas realicen contrataciones, los montos máximos a que hace referencia el artículo 42 de la Ley se determinarán en función del recurso total autorizado que la dependencia o entidad de que se trate asigne a cada área para la adquisición y arrendamiento de bienes y la contratación de servicios. **Artículo 74 (fracción I).-** Para efectos del primer párrafo del artículo 42 de la Ley, se considerará que existe fraccionamiento de las operaciones, cuando en las contrataciones involucradas se presenten las siguientes circunstancias: I. Todas estén fundadas en el artículo 42 de la Ley y la suma de sus importes superen el monto máximo indicado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para cada procedimiento de excepción;

- ***ACUERDOS***

52.- ACUERDO por el que se crea con carácter permanente la Comisión Intersecretarial	**Artículo 8 (primer párrafo).-** Atendiendo a las disposiciones de esta Ley y a las demás que de ella emanen, la Secretaría de Economía dictará las reglas	**Artículo 2 (fracción VII).-** Adicionalmente a las definiciones contenidas en el artículo 2 de la Ley, para los efectos de este Reglamento se entenderá

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
de Compras y Obras de la Administración Pública Federal a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. *15 de enero de 2009.*	que deban observar las dependencias y entidades, derivadas de programas que tengan por objeto promover la participación de las empresas nacionales, especialmente de las micro, pequeñas y medianas. Adicionalmente, las dependencias y entidades deberán diseñar y ejecutar programas de desarrollo de proveedores de micro, pequeñas y medianas empresas nacionales para generar cadenas de proveeduría respecto de bienes y servicios que liciten regularmente.	por: … VII. MIPYMES: las micro, pequeñas y medianas empresas de nacionalidad mexicana a que hace referencia la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa; **Artículo 11.-** El porcentaje del anticipo a otorgar a las MIPYMES, en el supuesto a que hace referencia el segundo párrafo del artículo 13 de la Ley, deberá ser previsto por la dependencia o entidad en la convocatoria a la licitación pública, en la invitación a cuando menos tres personas o en la solicitud de cotización, para lo cual atenderán, entre otros factores, al monto de la contratación, al costo financiero del mercado y al tiempo de fabricación del bien de que se trate, procurando en todos los casos dar el mayor porcentaje posible. **Artículo 34.-** Las MIPYMES podrán participar con ese carácter en los procedimientos de contratación, cuando presenten a la dependencia o entidad convocante, copia del documento expedido por autoridad competente que determine su estratificación como micro, pequeña o mediana empresa, o bien, un escrito en el cual manifiesten bajo protesta de decir verdad, que cuentan con ese carácter, utilizando para tal fin el formato que al efecto proporcione la convocante. **Artículo 35 (último párrafo).-** Las dependencias y entidades podrán llevar a cabo licitaciones públicas en las que únicamente puedan participar MIPYMES, siempre y cuando el monto estimado de la contratación sea menor al monto de los umbrales establecidos para los tratados de libre comercio que cuenten con un capítulo de compras del sector público. **Artículo 38 (fracciones II y VII).-** Para la aplicación

A) Marco normativo complementario y supletorio.

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
		de la modalidad de ofertas subsecuentes de descuento en las licitaciones públicas, se atenderá lo siguiente… II. Cuando se trate de licitaciones públicas dirigidas a MIPYMES, o cuando de la investigación de mercado se advierta la participación individual de éstas con empresas que por su capacidad de producción o económica representen una competencia desigual, la dependencia o entidad se abstendrá de utilizar esta modalidad; … VII. Las MIPYMES podrán participar cuando realicen proposiciones conjuntas en términos del presente Reglamento. En el caso de que participen en la licitación pública de manera individual, no podrán presentar ofertas subsecuentes de descuento, sin que ello impida continuar con el procedimiento de contratación. **Artículo 76.-** Para fomentar el desarrollo y la participación de las MIPYMES, las dependencias y entidades deberán adjudicarles contratos relacionados con las operaciones comprendidas en los supuestos de excepción a la licitación pública a que se refiere el artículo 42 de la Ley, cuando menos el cincuenta por ciento del valor de las adquisiciones en cada ejercicio fiscal… **Artículo 106.-** La Secretaría de la Función Pública considerará las propuestas que formule la Comisión Intersecretarial de Compras y Obras de la Administración Pública Federal a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa para incorporar en CompraNet la información relativa a las contrataciones realizadas con las MIPYMES.
53.- ACUERDO por el que se dan a conocer las Reglas para la aplicación de las reservas de compras del	**Artículo 14 (primer párrafo).-** En los procedimientos de contratación de carácter internacional abierto, las dependencias y entidades optarán, en igualdad de condiciones, por el empleo de los recursos humanos	**Artículo 35 (primer y segundo párrafos).-** En la convocatoria a la licitación pública e invitación a cuando menos tres personas de carácter nacional, deberá establecerse como requisito de participación

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
sector público establecidas en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y para la determinación del contenido nacional en los procedimientos de contratación de obras públicas. *28 de septiembre de 2000.*	del país y por la adquisición y arrendamiento de bienes producidos en el país y que cuenten con el porcentaje de contenido nacional indicado en el artículo 28 fracción I, de esta Ley, los cuales deberán contar, en la comparación económica de las proposiciones, con un margen hasta del quince por ciento de preferencia en el precio respecto de los bienes de importación, conforme a las reglas que establezca la Secretaría de Economía, previa opinión de la Secretaría y de la Secretaría de la Función Pública. **Artículo 26 (último párrafo).-** La Secretaría de Economía, mediante reglas de carácter general y tomando en cuenta la opinión de la Secretaría de la Función Pública, determinará los criterios para la aplicación de las reservas, mecanismos de transición u otros supuestos establecidos en los tratados.	la entrega de un escrito en el que el licitante manifieste bajo protesta de decir verdad, que es de nacionalidad mexicana y, en el caso de adquisición de bienes, además manifestará que los bienes que oferta y entregará, serán producidos en México y contarán con el porcentaje de contenido nacional correspondiente. En el escrito a que se refiere el párrafo anterior, el licitante manifestará que en caso de que la Secretaría de Economía lo solicite, le proporcionará la información que permita verificar que los bienes ofertados son de producción nacional y cumplen con el porcentaje de contenido nacional requerido. **Artículo 36.-** En caso de que la dependencia o entidad convocante determine que una licitación pública que se ubique en el supuesto previsto en el inciso a) de la fracción II del artículo 28 de la Ley, puede tener el carácter de nacional, por existir oferta de origen nacional y reservas en los Tratados, deberá solicitar a la Secretaría de Economía, de conformidad con las reglas que emita con fundamento en el último párrafo del artículo 26 de la Ley, la inclusión y registro de dicho procedimiento en la reserva de los Tratados que correspondan.
	Artículo 28 (fracción II).- El carácter de las licitaciones públicas, será: … II. Internacional bajo la cobertura de tratados, en la que sólo podrán participar licitantes mexicanos y extranjeros de países con los que nuestro país tenga celebrado un tratado de libre comercio con capítulo de compras gubernamentales, cuando resulte obligatorio conforme a lo establecido en los tratados de libre comercio, que contengan disposiciones en materia de compras del sector público y bajo cuya cobertura expresa se haya convocado la licitación, de acuerdo a las reglas de origen que prevean los tratados y las	**Artículo 29 (segundo párrafo, fracciones VI y VII).-** La investigación de mercado podrá ser utilizada por la dependencia o entidad para lo siguiente: … VI. Elegir el procedimiento de contratación que podrá llevarse a cabo; VII. Determinar la conveniencia de aplicar alguna de las reservas contenidas en los capítulos de compras del sector público de los Tratados en relación al precio, cantidad, calidad y oportunidad de la proveeduría nacional; … **Artículo 37 (primer párrafo).-** La Secretaría de

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
	reglas de carácter general, para bienes nacionales que emita la Secretaría de Economía, previa opinión de la Secretaría de la Función Pública, y a) (Se deroga) b) (Se deroga)	Economía publicará una relación de los casos en los que, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 28 de la Ley, los licitantes deberán manifestar, bajo protesta de decir verdad, que los precios que se presentan en su propuesta económica no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminación de precios o subsidios. **Artículo 41 (fracción IV).-** Para la difusión del Proyecto de convocatoria a la licitación pública, deberá considerarse lo siguiente: … IV. Si la convocante lo estima conveniente, además de la difusión del Proyecto de convocatoria en CompraNet, podrá efectuar invitaciones para celebrar una reunión pública en la que los asistentes participen en la revisión del Proyecto de convocatoria y presenten sus comentarios, salvo que se trate de Proyectos de convocatoria para las licitaciones públicas a que se refiere el inciso a) de la fracción II del artículo 28 de la Ley…
54.- ACUERDO por el que se emiten diversos lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios y de obras públicas y servicios relacionados con las mismas *09 de septiembre de 2010.* a. De los Lineamientos Generales para la Expedición de Políticas, Bases y Lineamientos (Capítulo Primero)	**Artículo 1 (penúltimo párrafo).-** Los titulares de las dependencias y los órganos de gobierno de las entidades emitirán, bajo su responsabilidad y de conformidad con este mismo ordenamiento y los lineamientos generales que al efecto emita la Secretaría de la Función Pública, las políticas, bases y lineamientos para las materias a que se refiere este artículo.	**Artículo 3.-** Las políticas, bases y lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios a que se refiere el penúltimo párrafo del artículo 1 de la Ley, sólo deberán prever lo siguiente: I. Las áreas de la dependencia o entidad que aplicarán las disposiciones previstas en la Ley y el presente Reglamento; II. Los niveles jerárquicos de los servidores públicos que atenderán y se responsabilizarán de los diversos actos relacionados con los procedimientos de contratación a que hacen referencia la Ley y este Reglamento; III. La forma en que las dependencias y entidades deberán cumplir con los términos o plazos a que hacen referencia la Ley y este Reglamento, y

A) Marco normativo complementario y supletorio.

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
		IV. Los aspectos que se determinen en los lineamientos generales que emita la Secretaría de la Función Pública. Las dependencias y entidades divulgarán y mantendrán en forma permanente y actualizada en sus páginas de Internet, las políticas, bases y lineamientos a que se refiere este artículo…
b. De los Lineamientos para la Aplicación del Criterio de Evaluación de Proposiciones a través del Mecanismo de Puntos o Porcentajes en los Procedimientos de Contratación (Capítulo Segundo)	**Artículo 36 (segundo y tercer párrafos).-** En todos los casos las convocantes deberán verificar que las proposiciones cumplan con los requisitos solicitados en la convocatoria a la licitación; la utilización del criterio de evaluación binario, mediante el cual sólo se adjudica a quien cumpla los requisitos establecidos por la convocante y oferte el precio más bajo, será aplicable cuando no sea posible utilizar los criterios de puntos y porcentajes o de costo beneficio. En este supuesto, la convocante evaluará al menos las dos proposiciones cuyo precio resulte ser más bajo; de no resultar éstas solventes, se evaluarán las que les sigan en precio. Cuando las dependencias y entidades requieran obtener bienes, arrendamientos o servicios que conlleven el uso de características de alta especialidad técnica o de innovación tecnología, deberán utilizar el criterio de evaluación de puntos y porcentajes o de costo beneficio. …	**Artículo 51 (primer y segundo párrafos).-** Los criterios para evaluar la solvencia de las proposiciones, deberán guardar relación con los requisitos y especificaciones señalados en la convocatoria a la licitación pública para la integración de las propuestas técnicas y económicas. La aplicación del criterio de evaluación binario a que se refiere el segundo párrafo del artículo 36 de la Ley será procedente en aquellos casos en que la convocante no requiera vincular las condiciones que deberán cumplir los proveedores con las características y especificaciones de los bienes a adquirir o a arrendar o de los servicios a contratar porque éstos se encuentran estandarizados en el mercado y el factor preponderante que considera para la adjudicación del contrato es el precio más bajo. El Área contratante deberá justificar la razón por la que sólo puede aplicarse el criterio de evaluación binario y no el de puntos o porcentajes o de costo beneficio, dejando constancia en el expediente del procedimiento de contratación. **Artículo 52.-** Cuando la convocante determine utilizar el criterio de evaluación de puntos o porcentajes para la adquisición o arrendamiento de bienes o la contratación de servicios deberá establecer en la convocatoria a la licitación pública los rubros y subrubros de las propuestas técnica y económica que integran la proposición; la calificación numérica o de ponderación que puede alcanzarse u obtenerse en cada uno de ellos; el mínimo de puntaje o porcentaje

A) Marco normativo complementario y supletorio.

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
		que los licitantes deberán obtener en la evaluación de la propuesta técnica para continuar con la evaluación de la propuesta económica, y la forma en que los licitantes deberán acreditar el cumplimiento de los aspectos requeridos por la convocante en cada rubro o subrubro para la obtención de puntuación o ponderación. …
c. De los Lineamientos para la Reducción de los Montos de Garantías de Cumplimiento que deban Constituir los Proveedores y Contratistas (Capítulo Tercero)	**Artículo 48 (párrafo segundo).-** Para los efectos de este artículo, los titulares de las dependencias o los órganos de gobierno de las entidades, fijarán las bases, forma y porcentajes a los que deberán sujetarse las garantías que deban constituirse, considerando los antecedentes de cumplimiento de los proveedores en los contratos celebrados con las dependencias y entidades, a efecto de determinar montos menores para éstos, de acuerdo a los lineamientos que al efecto emita la Secretaría de la Función Pública…	**Artículo 81 (fracción VII).-** Además de lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley, el contrato deberá: … VII. Establecer, en el caso que se actualice el supuesto a que hace referencia el segundo párrafo del artículo 48 de la Ley y el primer párrafo del artículo 86 del presente Reglamento, el monto de la garantía de cumplimiento previsto en el procedimiento de contratación de que se trate y el porcentaje de reducción al mismo, así como la previsión de que las penas convencionales que se llegaren a aplicar se calcularán en términos de lo señalado en el segundo párrafo del artículo 86 de este Reglamento… **Artículo 86 (primer y segundo párrafos).-** Las dependencias y entidades podrán reducir el porcentaje de la garantía de cumplimiento cuando el proveedor cuente con antecedentes de cumplimiento favorables en los términos previstos en el segundo párrafo del artículo 48 de la Ley y en los lineamientos que al efecto emita la Secretaría de la Función Pública con base en la información actualizada que se encuentre en el registro único de proveedores, tales como no estar sancionado por la Secretaría de la Función Pública, en los últimos cinco años y que no se le haya rescindido contrato alguno en el mismo periodo. En los casos señalados en el párrafo anterior, el monto máximo para la aplicación de penas convencionales se calculará considerando el monto

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
		de la garantía de cumplimiento establecido en el contrato, sin tomar en cuenta el porcentaje de reducción que se hubiere aplicado a dicha garantía. **Artículo 105 (último párrafo).-** Los antecedentes que obren en el registro único de proveedores serán los que las dependencias y entidades deben considerar para determinar la reducción de montos de la garantía de cumplimiento a que hace referencia el segundo párrafo del artículo 48 de la Ley, atendiendo a los lineamientos que al efecto emita la Secretaría de la Función Pública.
d. De los Lineamientos para la Utilización de la Modalidad de Ofertas Subsecuentes de Descuentos en las Licitaciones Públicas Electrónicas (Capítulo Cuarto)	**Artículo 2 (fracción VIII).-** Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por: … VIII. Ofertas subsecuentes de descuentos: modalidad utilizada en las licitaciones públicas, en la que los licitantes, al presentar sus proposiciones, tienen la posibilidad de que, con posterioridad a la presentación y apertura del sobre cerrado que contenga su propuesta económica, realicen una o más ofertas subsecuentes de descuentos que mejoren el precio ofertado en forma inicial, sin que ello signifique la posibilidad de variar las especificaciones o características originalmente contenidas en su propuesta técnica; **Artículo 28 (quinto y sexto párrafos).-** En las licitaciones públicas se podrá utilizar la modalidad de ofertas subsecuentes de descuentos para la adquisición de bienes muebles o servicios cuya descripción y características técnicas puedan ser objetivamente definidas y la evaluación legal y técnica de las proposiciones de los licitantes se pueda realizar en forma inmediata, al concluir la celebración del acto de presentación y apertura de proposiciones, conforme a los lineamientos que expida la Secretaría de la Función Pública, siempre que las dependencias o entidades convocantes justifiquen debidamente el	**Artículo 38 (fracciones II y VII).-** Para la aplicación de la modalidad de ofertas subsecuentes de descuento en las licitaciones públicas, se atenderá lo siguiente: I. Se deberá acreditar que existe competencia suficiente respecto de los bienes o servicios de que se trate con la investigación de mercado que realice la dependencia o entidad;

A) Marco normativo complementario y supletorio.

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
	uso de dicha modalidad y que constaten que existe competitividad suficiente de conformidad con la investigación de mercado correspondiente.	
	Tratándose de licitaciones públicas en las que participen de manera individual micro, pequeñas y medianas empresas nacionales, no se aplicará la modalidad de ofertas subsecuentes de descuento. **Artículo 35 (último párrafo).-** Tratándose de licitaciones en las que se utilice la modalidad de ofertas subsecuentes de descuentos, después de la evaluación técnica, se indicará cuando se dará inicio a las pujas de los licitantes.	II. Cuando se trate de licitaciones públicas dirigidas a MIPYMES, o cuando de la investigación de mercado se advierta la participación individual de éstas con empresas que por su capacidad de producción o económica representen una competencia desigual, la dependencia o entidad se abstendrá de utilizar esta modalidad; … VII. Las MIPYMES podrán participar cuando realicen proposiciones conjuntas en términos del presente Reglamento. En el caso de que participen en la licitación pública de manera individual, no podrán presentar ofertas subsecuentes de descuento, sin que ello impida continuar con el procedimiento de contratación.
	Artículo 36 Bis (fracción III).- Una vez hecha la evaluación de las proposiciones, el contrato se adjudicará… III. A quien oferte el precio más bajo que resulte del uso de la modalidad de ofertas subsecuentes de descuentos, siempre y cuando la proposición resulte solvente técnica y económicamente.	
e. De los Lineamientos para Promover la Agilización del Pago a Proveedores (Capítulo Quinto)	**Artículo 45 (fracciones VI, XIV y XXII).-** El contrato o pedido contendrá, en lo aplicable, lo siguiente: … VI. El precio unitario y el importe total a pagar por los bienes, arrendamientos o servicios, o bien, la forma en que se determinará el importe total;	**Artículo 83 (primer y segundo párrafos).-** En los contratos de servicios de consultorías, asesorías, estudios e investigaciones, o de servicios prestados por una persona física, se podrá pactar el precio unitario por hora de servicio y categoría de quienes lo realicen, o bien, de conformidad con la fracción VI del artículo 45 de la Ley, se podrá establecer la forma en que se determinará el monto total a pagar por los

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
		servicios efectivamente prestados… En el contrato respectivo, las dependencias y entidades deberán establecer los mecanismos de comprobación, supervisión y verificación de los servicios contratados y efectivamente prestados, así como del cumplimiento de los requerimientos de cada entregable, lo cual será requisito para proceder al pago correspondiente.
	XIV. Plazo y condiciones de pago del precio de los bienes, arrendamientos o servicios, señalando el momento en que se haga exigible el mismo; …	**Artículo 94 (primer párrafo).-** Las dependencias y entidades, de acuerdo con su disponibilidad presupuestaria y calendarios autorizados, podrán establecer en la convocatoria a la licitación pública o en la invitación a cuando menos tres personas, así como en los contratos, la condición de pronto pago en favor de proveedores, misma que operará cuando éstos, a su elección, acepten el descuento en el precio de los bienes o servicios por el adelanto en el pago en relación con la fecha pactada. En estos casos, deberá indicarse el porcentaje de descuento aplicable por cada día de adelanto en el pago. **Artículo 108.-** Con independencia de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 58 de la Ley, las dependencias y entidades deberán verificar la calidad de los bienes que hubieren adquirido o arrendado y, de ser necesario, de aquéllos que utilizarán para la prestación de un servicio. En caso de que no cuenten con el personal especializado o los elementos necesarios para efectuar la verificación, deberán contratar a las personas físicas o morales acreditadas para llevarla a cabo.

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
	XXII. Los demás aspectos y requisitos previstos en la convocatoria a la licitación e invitaciones a cuando menos tres personas, así como los relativos al tipo de contrato de que se trate.	**Artículo 39 (fracción II, inciso i).-** La convocatoria a la licitación pública y, cuando proceda, el Proyecto de convocatoria deberán contener los requisitos que señala el artículo 29 de la Ley y se elaborarán conforme al orden, apartados e información que a continuación se indican: … II. Objeto y alcance de la licitación pública, precisando: … i) En el modelo de contrato, respecto de los requisitos a que se refiere el artículo 45 de la Ley, los siguientes aspectos según corresponda: 1. El plazo máximo en días naturales para la entrega de los bienes o la prestación de los servicios, el cual contará a partir de la fecha en que el proveedor reciba la requisición respectiva; 2. La fuente oficial que se tomará para llevar a cabo la conversión y la tasa de cambio o la fecha a considerar para hacerlo, en caso de pago en moneda extranjera; …
	Artículo 51 (primer y segundo párrafos).- La fecha de pago al proveedor estipulada en los contratos quedará sujeta a las condiciones que establezcan las mismas; sin embargo, no podrá exceder de veinte días naturales contados a partir de la entrega de la factura respectiva, previa entrega de los bienes o prestación de los servicios en los términos del contrato.	**Artículo 89 (primer y segundo párrafos).-** Para efectos de contabilizar el plazo a que hace referencia el primer párrafo del artículo 51 de la Ley, se tendrá como recibida la factura o el documento que reúna los requisitos fiscales correspondientes, a partir de que el proveedor los entregue a la dependencia o entidad junto con el bien o al momento de concluir la prestación total o parcial del servicio conforme a los términos del contrato celebrado y la dependencia o entidad los reciba a satisfacción en los términos de los lineamientos que emita la Secretaría de la Función Pública para promover la agilización del pago. Dentro del plazo mencionado en el párrafo anterior, la dependencia o entidad deberá requerir, en su caso, al proveedor la corrección de errores o deficiencias contenidos en la factura o en el documento que reúna

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
		los requisitos fiscales correspondientes; tramitar el pago de dicha factura o documento y realizar el pago al proveedor. **Artículo 93.-** Las dependencias y entidades, de acuerdo con su disponibilidad presupuestaria y calendarización autorizada, podrán efectuar pagos progresivos a los proveedores previa verificación satisfactoria de los avances, de conformidad con lo establecido en la convocatoria a la licitación pública o en la invitación a cuando menos tres personas, así como en el contrato. Estos pagos sólo resultarán procedentes cuando los avances correspondan a entregables que hayan sido debidamente devengados en términos de las disposiciones presupuestarias aplicables.
	En caso de incumplimiento en los pagos a que se refiere el párrafo anterior, la dependencia o entidad, a solicitud del proveedor, deberá pagar gastos financieros conforme a la tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales desde que se venció el plazo pactado, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición del proveedor.	**Artículo 96 (último párrafo).-** Sin perjuicio de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 51 de la Ley, en ningún caso se aceptará la estipulación de penas convencionales a cargo de las dependencias y entidades.
55.- ACUERDO por el que se establece la estratificación de las micro, pequeñas y medianas empresas. *30 de junio de 2009.*	**Artículo 8 (primer párrafo).-** Atendiendo a las disposiciones de esta Ley y a las demás que de ella emanen, la Secretaría de Economía dictará las reglas que deban observar las dependencias y entidades, derivadas de programas que tengan por objeto promover la participación de las empresas nacionales, especialmente de las micro, pequeñas y medianas. Adicionalmente, las dependencias y entidades deberán diseñar y ejecutar programas de desarrollo de proveedores de micro, pequeñas y medianas empresas nacionales para generar cadenas de	**Artículo 2 (fracción VII).-** Adicionalmente a las definiciones contenidas en el artículo 2 de la Ley, para los efectos de este Reglamento se entenderá por: … VII. MIPYMES: las micro, pequeñas y medianas empresas de nacionalidad mexicana a que hace referencia la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa; **Artículo 34.-** Las MIPYMES podrán participar con

A) Marco normativo complementario y supletorio.

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
	proveeduría respecto de bienes y servicios que liciten regularmente.	ese carácter en los procedimientos de contratación, cuando presenten a la dependencia o entidad convocante, copia del documento expedido por autoridad competente que determine su estratificación como micro, pequeña o mediana empresa, o bien, un escrito en el cual manifiesten bajo protesta de decir verdad, que cuentan con ese carácter, utilizando para tal fin el formato que al efecto proporcione la convocante. **Artículo 106.-** La Secretaría de la Función Pública considerará las propuestas que formule la Comisión Intersecretarial de Compras y Obras de la Administración Pública Federal a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa para incorporar en CompraNet la información relativa a las contrataciones realizadas con las MIPYMES.
56.- ACUERDO por el que se establecen las disposiciones en Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales. *16 de julio de 2010.* ***57.- ACUERDO por el que se modifica el diverso por el que se establecen las disposiciones en Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales, publicado el 16 de julio de 2010.*** *20 de julio de 2011 con modificaciones el 14 de enero de 2015.*	**Artículo 3 (fracción V).-** Para los efectos de esta Ley, entre las adquisiciones, arrendamientos y servicios, quedan comprendidos: … V. La reconstrucción y mantenimiento de bienes muebles; maquila; seguros; transportación de bienes muebles o personas, y contratación de servicios de limpieza y vigilancia;	**Artículo 72 (fracción IX).-** Para los efectos de lo establecido en el artículo 41 de la Ley deberá considerarse, respecto de las fracciones de dicho precepto legal, lo que se cita a continuación: … IX. Para efectos de la fracción XV, al escrito a que se refiere el segundo párrafo del artículo 40 de la Ley, deberá adjuntarse una relación de los bienes o servicios que se considere podrían utilizarse para prestar el servicio de mantenimiento y sus precios, lo anterior con la finalidad de conocer con anticipación el monto estimado que se haya autorizado a contratar… **Artículo 80 (cuarto párrafo).-** En el caso de prestación de servicios que requieran del uso intensivo de mano de obra, y ésta implique un costo superior al treinta por ciento del monto total del contrato, en la convocatoria a la licitación pública o en la invitación a cuando menos tres personas y en el contrato respectivo, las dependencias y entidades deberán establecer una fórmula de acuerdo con lo

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
	Artículo 5.- Será responsabilidad de las dependencias y entidades contratar los servicios correspondientes para mantener adecuada y satisfactoriamente asegurados los bienes con que cuenten. Lo dispuesto en el párrafo anterior no será aplicable cuando por razón de la naturaleza de los bienes o el tipo de riesgos a los que están expuestos, el costo de aseguramiento represente una erogación que no guarde relación directa con el beneficio que pudiera obtenerse o bien, se constate que no exista oferta de seguros en el mercado para los bienes de que se trate. La Secretaría autorizará previamente la aplicación de la excepción.	dispuesto en este artículo, o bien, el mecanismo de ajuste que reconozca el incremento a los salarios mínimos... **Artículo 6.-** En caso de pérdida total de un bien asegurado, como consecuencia de un siniestro, la dependencia o entidad deberá solicitar a la institución aseguradora, en los términos de las disposiciones aplicables, la reposición o recuperación o, en su caso, el pago respectivo, según convenga a la dependencia o entidad. La dependencia o entidad podrá convenir, por conducto del Oficial Mayor o equivalente, o bien, del área administrativa en la cual se delegue la facultad correspondiente, la recepción de bienes que sustituyan a los siniestrados y que se destinen al mismo objeto que éstos.
58.- ACUERDO por el que se establecen las disposiciones para el uso de medios remotos de comunicación electrónica, en el envío de propuestas dentro de las licitaciones públicas que celebren las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como en la presentación de las inconformidades por la misma vía. *09 de Agosto de 2000.*	**Artículo 2, (fracción II).-** Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por: … II. CompraNet: el sistema electrónico de información pública gubernamental sobre adquisiciones, arrendamientos y servicios, integrado entre otra información, por los programas anuales en la materia, de las dependencias y entidades; el registro único de proveedores; el padrón de testigos sociales; el registro de proveedores sancionados; las convocatorias a la licitación y sus modificaciones; las invitaciones a cuando menos tres personas; las actas de las juntas de aclaraciones, del acto de presentación y apertura de proposiciones y de fallo; los testimonios de los testigos sociales; los datos de los contratos y los convenios modificatorios; las adjudicaciones directas; las resoluciones de la instancia de inconformidad que hayan causado estado, y las notificaciones y avisos correspondientes…	

A) Marco normativo complementario y supletorio.

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
	Artículo 26 Bis (fracción II).- La licitación pública conforme a los medios que se utilicen, podrá ser: … II. Electrónica, en la cual exclusivamente se permitirá la participación de los licitantes a través de CompraNet, se utilizarán medios de identificación electrónica, las comunicaciones producirán los efectos que señala el artículo 27 de esta Ley. **Artículo 27 (primer y tercer párrafos).-** Las licitaciones públicas podrán llevarse a cabo a través de medios electrónicos, conforme a las disposiciones administrativas que emita la Secretaría de la Función Pública, en cuyo caso las unidades administrativas que se encuentren autorizadas por la misma, estarán obligadas a realizar todos sus procedimientos de licitación mediante dicha vía, salvo en los casos justificados que autorice la Secretaría de la Función Pública. …	**Artículo 46 (fracción II).-** La junta de aclaraciones, se llevará a cabo conforme a lo siguiente: … II. En las licitaciones públicas electrónicas, la convocante procederá a enviar, a través de CompraNet, las contestaciones a las solicitudes de aclaración recibidas, a partir de la hora y fecha señaladas en la convocatoria para la celebración de la junta de aclaraciones. Cuando en razón del número de solicitudes de aclaración recibidas o algún otro factor no imputable a la convocante y que sea acreditable, el servidor público que presida la junta de aclaraciones, informará a los licitantes si éstas serán enviadas en ese momento o si se suspenderá la sesión para reanudarla en hora o fecha posterior a efecto de que las respuestas sean remitidas. **Artículo 50 (primer párrafo).-** La proposición deberá ser firmada autógrafamente por la persona facultada para ello en la última hoja de cada uno de los documentos que forman parte de la misma, por lo que no podrá desecharse cuando las demás hojas que la integran o sus anexos carezcan de firma o rúbrica. En las proposiciones enviadas a través de medios remotos de comunicación electrónica, en sustitución de la firma autógrafa, se emplearán los medios de identificación electrónica que establezca la Secretaría de la Función Pública.

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
	La Secretaría de la Función Pública podrá aceptar la certificación o identificación electrónica que otorguen las dependencias y entidades, las entidades federativas, municipios y los entes públicos de unas y otros, así como terceros facultados por autoridad competente en la materia, cuando los sistemas de certificación empleados se ajusten a las disposiciones que emita la Secretaría de la Función Pública. **Artículo 30.-** La publicación de la convocatoria a la licitación pública se realizará a través de CompraNet y su obtención será gratuita...	**Artículo 42.-** La convocatoria a la licitación pública y, en su caso, sus modificaciones serán publicadas en CompraNet por las dependencias o entidades, en días hábiles y por una sola ocasión…
59.- ACUERDO por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado CompraNet. *28 de junio de 2011.*	**Artículo 2 (fracción II).-** Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por: … II. CompraNet: el sistema electrónico de información pública gubernamental sobre adquisiciones, arrendamientos y servicios, integrado entre otra información, por los programas anuales en la materia, de las dependencias y entidades; el registro único de proveedores; el padrón de testigos sociales; el registro de proveedores sancionados; las convocatorias a la licitación y sus modificaciones; las invitaciones a cuando menos tres personas; las actas de las juntas de aclaraciones, del acto de presentación y apertura de proposiciones y de fallo; los testimonios de los testigos sociales; los datos de los contratos y los convenios modificatorios; las adjudicaciones directas; las resoluciones de la instancia de inconformidad que hayan causado estado, y las notificaciones y avisos correspondientes…	
	Artículo 26 Bis (fracción II).- La licitación pública conforme a los medios que se utilicen, podrá ser: … II. Electrónica, en la cual exclusivamente se permitirá la participación de los licitantes a través de	**Artículo 46 (fracción II).-** La junta de aclaraciones, se llevará a cabo conforme a lo siguiente: … II. En las licitaciones públicas electrónicas, la convocante procederá a enviar, a través de

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
	CompraNet, se utilizarán medios de identificación electrónica, las comunicaciones producirán los efectos que señala el artículo 27 de esta Ley.	CompraNet, las contestaciones a las solicitudes de aclaración recibidas, a partir de la hora y fecha señaladas en la convocatoria para la celebración de la junta de aclaraciones. Cuando en razón del número de solicitudes de aclaración recibidas o algún otro factor no imputable a la convocante y que sea acreditable, el servidor público que presida la junta de aclaraciones, informará a los licitantes si éstas serán enviadas en ese momento o si se suspenderá la sesión para reanudarla en hora o fecha posterior a efecto de que las respuestas sean remitidas. **Artículo 50.-** La proposición deberá ser firmada autógrafamente por la persona facultada para ello en la última hoja de cada uno de los documentos que forman parte de la misma, por lo que no podrá desecharse cuando las demás hojas que la integran o sus anexos carezcan de firma o rúbrica. En las proposiciones enviadas a través de medios remotos de comunicación electrónica, en sustitución de la firma autógrafa, se emplearán los medios de identificación electrónica que establezca la Secretaría de la Función Pública. …
	Artículo 27 (primer y tercer párrafos).- Las licitaciones públicas podrán llevarse a cabo a través de medios electrónicos, conforme a las disposiciones administrativas que emita la Secretaría de la Función Pública, en cuyo caso las unidades administrativas que se encuentren autorizadas por la misma, estarán obligadas a realizar todos sus procedimientos de licitación mediante dicha vía, salvo en los casos justificados que autorice la Secretaría de la Función Pública. … La Secretaría de la Función Pública podrá aceptar la certificación o identificación electrónica que otorguen las dependencias y entidades, las entidades	

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
	federativas, municipios y los entes públicos de unas y otros, así como terceros facultados por autoridad competente en la materia, cuando los sistemas de certificación empleados se ajusten a las disposiciones que emita la Secretaría de la Función Pública.	
	Artículo 30.- La publicación de la convocatoria a la licitación pública se realizará a través de CompraNet y su obtención será gratuita… **Artículo 37 Bis.-** Las actas de las juntas de aclaraciones, del acto de presentación y apertura de proposiciones, y de la junta pública en la que se dé a conocer el fallo serán firmadas por los licitantes que hubieran asistido, sin que la falta de firma de alguno de ellos reste validez o efectos a las mismas, de las cuales se podrá entregar una copia a dichos asistentes, y al finalizar cada acto se fijará un ejemplar del acta correspondiente en un lugar visible, al que tenga acceso el público, en el domicilio del área responsable del procedimiento de contratación, por un término no menor de cinco días hábiles... Asimismo, se difundirá un ejemplar de dichas actas en CompraNet para efectos de su notificación a los licitantes que no hayan asistido al acto. Dicho procedimiento sustituirá a la notificación personal. **Artículo 56 (segundo y penúltimo párrafos).-** La administración del sistema electrónico de información pública gubernamental sobre adquisiciones, arrendamientos y servicios, estará a cargo de la Secretaría de la Función Pública, a través de la unidad administrativa que determine su Reglamento, en el cual las dependencias, entidades y los demás sujetos de esta Ley, deberán incorporar la información que ésta les requiera. … Las dependencias y entidades conservarán en forma	**Artículo 42.-** La convocatoria a la licitación pública y, en su caso, sus modificaciones serán publicadas en CompraNet por las dependencias o entidades, en días hábiles y por una sola ocasión. …

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
	ordenada y sistemática toda la documentación e información electrónica comprobatoria de los actos y contratos materia de dicho ordenamiento cuando menos por un lapso de tres años, contados a partir de la fecha de su recepción; excepto la documentación contable, en cuyo caso se estará en lo previsto por las disposiciones aplicables. **Artículo 66 (sexto y séptimo párrafos).-** En las inconformidades que se presenten a través de CompraNet, deberán utilizarse medios de identificación electrónica en sustitución de la firma autógrafa. En las inconformidades, la documentación que las acompañe y la manera de acreditar la personalidad del promovente, se sujetarán a las disposiciones técnicas que para tales efectos expida la Secretaría de la Función Pública, en cuyo caso producirán los mismos efectos que las leyes otorgan a los medios de identificación y documentos correspondientes.	
60.- ACUERDO por el que se establecen las Reglas para la realización de proyectos de prestación de servicios. *9 de abril de 2004.*	**Artículo 3 (fracción VI).-** Para los efectos de esta Ley, entre las adquisiciones, arrendamientos y servicios, quedan comprendidos: … VI. La prestación de servicios de largo plazo que involucren recursos de varios ejercicios fiscales, a cargo de un inversionista proveedor, el cual se obliga a proporcionarlos con los activos que provea por sí o a través de un tercero, de conformidad con un proyecto para la prestación de dichos servicios; …	

A) Marco normativo complementario y supletorio.

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
61.- ACUERDO por el que se establecen los Lineamientos Generales para las Campañas de Comunicación Social de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para el ejercicio fiscal 2015. *31 de diciembre de 2014.*	**Artículo 3 (fracción IX).-** Para los efectos de esta Ley, entre las adquisiciones, arrendamientos y servicios, quedan comprendidos: … IX. En general, los servicios de cualquier naturaleza cuya prestación genere una obligación de pago para las dependencias y entidades, salvo que la contratación se encuentre regulada en forma específica por otras disposiciones legales… **Artículo 13 (último párrafo).-** Las dependencias y entidades podrán, dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y motivadas, autorizar el pago de suscripciones, seguros o de otros servicios, en los que no sea posible pactar que su costo sea cubierto después de que la prestación del servicio se realice.	**Artículo 5.-** Conforme a lo dispuesto por la fracción IX del artículo 3 de la Ley, no resultan sujetos de la misma, los siguientes servicios: I. Los bancarios, cuya prestación se encuentre reservada a instituciones de crédito en términos de las disposiciones legales que regulan la prestación de éstos; II. Los de intermediación bursátil, custodia de valores y constitución de fideicomisos o de sociedades de inversión; III. Los prestados por notarios públicos cuando se sujeten al cobro de los aranceles previstos en los ordenamientos jurídicos correspondientes, …
Artículo 3 (fracciones XII y XVII).- En la formulación de las Estrategias, Programas y campañas que realicen las Dependencias y Entidades para el cumplimiento de los objetivos de comunicación, se considerará: XII. De conformidad con la normatividad interna de cada dependencia y entidad, es responsabilidad exclusiva de las Unidades de Comunicación Social o equivalentes, las contrataciones para la implementación de las	**Artículo 25.-** Las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán convocar, adjudicar o contratar adquisiciones, arrendamientos y servicios, con cargo a su presupuesto autorizado y sujetándose al calendario de gasto correspondiente. …	**Artículo 18.-** Una vez que la Secretaría dé a conocer a las dependencias y entidades su calendario de presupuesto autorizado éstas, en términos del artículo 25 de la Ley, podrán realizar los procedimientos de contratación respectivos. **Artículo 92 (primer párrafo).-** Las modificaciones por ampliación de la vigencia de contratos de arrendamiento de bienes o de prestación de servicios que requieran la continuidad una vez concluido el ejercicio fiscal en el que originalmente terminó su vigencia no necesitarán la autorización de la Secretaría, siempre y cuando se trate de contratos cuya ampliación de vigencia no exceda el primer trimestre del ejercicio fiscal siguiente y resulte indispensable… **Artículo 87.-** Cuando la contratación abarque más de

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
campañas, atenderán lo establecido en los artículos 25 y 56 de la LAASSP… XVII. En casos excepcionales y previa aprobación de la SHCP las Dependencias y Entidades podrán convocar, adjudicar y formalizar contratos cuya vigencia inicie en el Ejercicio Fiscal siguiente de aquel en el que se formalizan, de acuerdo con el artículo 25 de la LAASSP…	**Artículo 56 (primer párrafo).-** La forma y términos en que las dependencias y entidades deberán remitir a la Secretaría de la Función Pública, a la Secretaría y a la Secretaría de Economía, la información relativa a los actos y los contratos materia de esta Ley, serán establecidos por dichas Secretarías, en el ámbito de sus respectivas atribuciones.	un ejercicio fiscal, la garantía de cumplimiento del contrato podrá ser por el porcentaje que corresponda del monto total por erogar en el ejercicio fiscal de que se trate, y deberá ser renovada cada ejercicio fiscal por el monto que se ejercerá en el mismo… **Artículo 107 (segundo párrafo).-** Las solicitudes de información y documentación que requiera la Secretaría de la Función Pública o los órganos internos de control a los servidores públicos y a los proveedores deberán formularse mediante oficio, señalando el plazo que se otorga para su entrega, el cual se determinará considerando la naturaleza y la cantidad de fojas de dicha información y documentación…
62.- ACUERDO por el que se expide el protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas, otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones. *20 de agosto de 2015.* Considerando que el artículo 134 Constitucional establece que los recursos económicos de que dispongan la Federación, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados; principios que deben ser observados en el procedimiento de contratación pública…	**Artículo 1 (cuarto párrafo).-** Las adquisiciones, arrendamientos y servicios que se realicen por los Centros Públicos de Investigación con los recursos autogenerados de sus Fondos de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico previstos en la Ley de Ciencia y Tecnología, se regirán conforme a las reglas de operación de dichos fondos, a los criterios y procedimientos que en estas materias expidan los órganos de gobierno de estos Centros, así como a las disposiciones administrativas que, en su caso estime necesario expedir la Secretaría de la Función Pública o la Secretaría, en el ámbito de sus respectivas competencias, administrando dichos recursos con eficiencia, eficacia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados y asegurar al centro las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. **Artículo 16 (último párrafo).-** En los supuestos previstos en los párrafos primero y tercero de este artículo, para acreditar la aplicación de los principios dispuestos por esta Ley, tanto la justificación de la selección del proveedor, como de los bienes,	

A) Marco normativo complementario y supletorio.

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
	arrendamientos y servicios a contratar y el precio de los mismos, según las circunstancias que concurran en cada caso, deberá motivarse en criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia que aseguren las mejores condiciones para el Estado, lo cual constará en un escrito firmado por el titular del área usuaria o requirente, y el dictamen de procedencia de la contratación será autorizado por el titular de la dependencia o entidad, o aquel servidor público en quien éste delegue dicha función… **Artículo 24.-** La planeación, programación, presupuestación y el gasto de las adquisiciones, arrendamientos y servicios se sujetará a las disposiciones específicas del Presupuesto de Egresos de la Federación, así como a lo previsto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y demás disposiciones aplicables y los recursos destinados a ese fin se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia, honradez e imparcialidad para satisfacer los objetivos a los que fueren destinados. **Artículo 40 (segundo párrafo).-** La selección del procedimiento de excepción que realicen las dependencias y entidades deberá fundarse y motivarse, según las circunstancias que concurran en cada caso, en criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia que resulten procedentes para obtener las mejores condiciones para el Estado. El acreditamiento del o los criterios en los que se funda; así como la justificación de las razones en las que se sustente el ejercicio de la opción, deberán constar por escrito y ser firmado por el titular del área usuaria o requirente de los bienes o servicios. **•••**	**Artículo 14 (segundo párrafo).-** La celebración de los contratos marco no estará sujeta a los procedimientos de contratación previstos en la Ley. En dicha celebración, se atenderán los principios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado, mismos que deberán reflejarse en los contratos específicos señalados en el párrafo anterior. **Artículo 71 (fracción VII).-** El documento suscrito por el titular del Área requirente señalado en el segundo párrafo del artículo 40 de la Ley, que se someta a consideración del Comité o del titular de la dependencia o entidad, o al servidor público en quien éste delegue la función para dictaminar sobre la procedencia de la excepción a la licitación pública

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
		deberá contener como mínimo la información que a continuación se indica en el orden siguiente: … VII. La acreditación del o los criterios a que se refiere el segundo párrafo del artículo 40 de la Ley, en que se funde y motive la selección del procedimiento de excepción, según las circunstancias que concurran en cada caso, y
63.- ACUERDO que tiene por objeto emitir el Código de Ética de los servidores públicos del Gobierno Federal, las Reglas de Integridad para el ejercicio de la función pública, y los Lineamientos generales para propiciar la integridad de los servidores públicos y para implementar acciones permanentes que favorezcan su comportamiento ético, a través de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés. *20 de septiembre de 2015.*	**Artículo 1 (cuarto párrafo).-** Las adquisiciones, arrendamientos y servicios que se realicen por los Centros Públicos de Investigación con los recursos autogenerados de sus Fondos de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico previstos en la Ley de Ciencia y Tecnología, se regirán conforme a las reglas de operación de dichos fondos, a los criterios y procedimientos que en estas materias expidan los órganos de gobierno de estos Centros, así como a las disposiciones administrativas que, en su caso estime necesario expedir la Secretaría de la Función Pública o la Secretaría, en el ámbito de sus respectivas competencias, administrando dichos recursos con eficiencia, eficacia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados y asegurar al centro las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. **Artículo 16 (último párrafo).-** En los supuestos previstos en los párrafos primero y tercero de este artículo, para acreditar la aplicación de los principios dispuestos por esta Ley, tanto la justificación de la selección del proveedor, como de los bienes, arrendamientos y servicios a contratar y el precio de los mismos, según las circunstancias que concurran en cada caso, deberá motivarse en criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia que aseguren las mejores condiciones para el Estado, lo cual constará en un	

A) Marco normativo complementario y supletorio.

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
	escrito firmado por el titular del área usuaria o requirente, y el dictamen de procedencia de la contratación será autorizado por el titular de la dependencia o entidad, o aquel servidor público en quien éste delegue dicha función… **Artículo 24.-** La planeación, programación, presupuestación y el gasto de las adquisiciones, arrendamientos y servicios se sujetará a las disposiciones específicas del Presupuesto de Egresos de la Federación, así como a lo previsto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y demás disposiciones aplicables y los recursos destinados a ese fin se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia, honradez e imparcialidad para satisfacer los objetivos a los que fueren destinados. **Artículo 40 (segundo párrafo).-** La selección del procedimiento de excepción que realicen las dependencias y entidades deberá fundarse y motivarse, según las circunstancias que concurran en cada caso, en criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia que resulten procedentes para obtener las mejores condiciones para el Estado. El acreditamiento del o los criterios en los que se funda; así como la justificación de las razones en las que se sustente el ejercicio de la opción, deberán constar por escrito y ser firmado por el titular del área usuaria o requirente de los bienes o servicios.	**Artículo 14 (segundo párrafo).-** La celebración de los contratos marco no estará sujeta a los procedimientos de contratación previstos en la Ley. En dicha celebración, se atenderán los principios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado, mismos que deberán reflejarse en los contratos específicos señalados en el párrafo anterior. **Artículo 71 (fracción VII).-** El documento suscrito por el titular del Área requirente señalado en el segundo párrafo del artículo 40 de la Ley, que se someta a consideración del Comité o del titular de la dependencia o entidad, o al servidor público en quien éste delegue la función para dictaminar sobre la procedencia de la excepción a la licitación pública deberá contener como mínimo la información que a continuación se indica en el orden siguiente: … VII. La acreditación del o los criterios a que se refiere el segundo párrafo del artículo 40 de la Ley, en que se funde y motive la selección del procedimiento de

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
		excepción, según las circunstancias que concurran en cada caso, y

- ***MANUALES***

64.- Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. *9 de agosto de 2010 con reformas del 03 de febrero de 2016.* 4.1 Planeación.	Título primero. Disposiciones generales **(artículos 1 al 25).** Título segundo (Derogado). De la planeación, programación y presupuesto.	Título primero. Disposiciones generales. Capítulo I. Disposiciones generales **(artículos 1 al 18).** Capítulo II. Del comité **(artículos 19 al 23).** Capítulo III. De las comisiones consultivas mixtas de abastecimiento **(artículos 24 al 26).**
4.2 Contratación.	Título segundo. De los procedimientos de contratación. Capítulo I. Generalidades **(artículos 26 y 27).** Capítulo II. De la licitación pública **(artículos 28 al 39).** Capítulo III. De las excepciones a la licitación pública **(artículo 40 al 43).**	Título segundo. De los procedimientos de contratación. Capítulo I. Disposiciones generales **(artículos 27 al 34).** Capítulo II. De la licitación pública **(artículos 35 al 59).** Capítulo III. De los testigos sociales **(artículos 60 al 70).** Capítulo IV. De las excepciones a la licitación pública **(artículos 71 al 79).**
65.- Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Recursos Materiales y Servicios Generales. *16 de julio de 2010.*	**Artículo 3 (fracción IV y V).-** Para los efectos de esta Ley, entre las adquisiciones, arrendamientos y servicios, quedan comprendidos: … IV. La contratación de los servicios relativos a bienes muebles que se encuentren incorporados o adheridos a inmuebles, cuyo mantenimiento no implique modificación alguna al propio inmueble, y sea prestado por persona cuya actividad comercial corresponda al servicio requerido; V. La reconstrucción y mantenimiento de bienes muebles; maquila; seguros; transportación de bienes	**Artículo 6 (primer párrafo).-** En caso de pérdida total de un bien asegurado, como consecuencia de un

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
	muebles o personas, y contratación de servicios de limpieza y vigilancia; **Artículo 5.-** Será responsabilidad de las dependencias y entidades contratar los servicios correspondientes para mantener adecuada y satisfactoriamente asegurados los bienes con que cuenten. Lo dispuesto en el párrafo anterior no será aplicable cuando por razón de la naturaleza de los bienes o el tipo de riesgos a los que están expuestos, el costo de aseguramiento represente una erogación que no guarde relación directa con el beneficio que pudiera obtenerse o bien, se constate que no exista oferta de seguros en el mercado para los bienes de que se trate. La Secretaría autorizará previamente la aplicación de la excepción. **Artículo 20 (fracción VIII).-** Las dependencias y entidades formularán sus programas anuales de adquisiciones, arrendamientos y servicios, y los que abarquen más de un ejercicio presupuestal, así como sus respectivos presupuestos, considerando: … VIII. Los requerimientos de mantenimiento de los bienes muebles a su cargo, y	siniestro, la dependencia o entidad deberá solicitar a la institución aseguradora, en los términos de las disposiciones aplicables, la reposición o recuperación o, en su caso, el pago respectivo, según convenga a la dependencia o entidad. **Artículo 10.-** Para asegurar al Estado las mejores condiciones a que se refiere el artículo 26 de la Ley, los estudios de factibilidad previstos en el artículo 12 de la Ley, deben analizar la conveniencia para la adquisición, arrendamiento o arrendamiento con opción a compra de bienes, para lo cual se considerarán, entre otros aspectos, los costos de mantenimiento y consumibles que se tengan que pagar en cada caso. **Artículo 53 (fracción II).-** Cuando la convocante aplique el criterio de evaluación de costo beneficio, en la convocatoria a la licitación pública establecerá lo siguiente: **…** II. El método de evaluación del costo beneficio que se utilizará, el cual deberá ser medible y comprobable, considerando los conceptos que serán objeto de evaluación, tales como mantenimiento, operación, consumibles, rendimiento u otros elementos, vinculados con el factor de temporalidad o volumen de consumo, así como las instrucciones que deberá

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
	Artículo 41 (fracción XV).- Las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán contratar adquisiciones, arrendamientos y servicios, sin sujetarse al procedimiento de licitación pública, a través de los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa, cuando: … XV. Se trate de servicios de mantenimiento de bienes en los que no sea posible precisar su alcance, establecer las cantidades de trabajo o determinar las especificaciones correspondientes; **Artículo 55 (primer párrafo).-** Las dependencias y entidades estarán obligadas a mantener los bienes adquiridos o arrendados en condiciones apropiadas de operación y mantenimiento, así como vigilar que los mismos se destinen al cumplimiento de los programas y acciones previamente determinados.	tomar en cuenta el licitante para elaborar su proposición, y **Artículo 72 (fracción IX).-** Para los efectos de lo establecido en el artículo 41 de la Ley deberá considerarse, respecto de las fracciones de dicho precepto legal, lo que se cita a continuación: … IX. Para efectos de la fracción XV, al escrito a que se refiere el segundo párrafo del artículo 40 de la Ley, deberá adjuntarse una relación de los bienes o servicios que se considere podrían utilizarse para prestar el servicio de mantenimiento y sus precios, lo anterior con la finalidad de conocer con anticipación el monto estimado que se haya autorizado a contratar, y

- ***REGLAS***

66.- Reglas de Operación del Comité Técnico del Consejo de Seguridad Nacional. *10 de mayo de 2008 con reformas el 18 de mayo de 2011.*	**Artículo 26 Ter (penúltimo párrafo).-** Se podrá exceptuar la participación de los testigos sociales en aquéllos casos en que los procedimientos de contrataciones contengan información clasificada como reservada que pongan en riesgo la seguridad nacional, pública o la defensa nacional en los términos de las disposiciones legales aplicables.	**Artículo 65 (segundo párrafo, fracción VI).-** El contrato con el testigo social será abierto y deberá contener, además de lo previsto en el artículo 45 de la Ley, los siguientes aspectos: … VI. La obligación del testigo social para guardar la debida reserva y confidencialidad en caso de que durante su participación tenga acceso a información clasificada con tal carácter en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, sin perjuicio de lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 26 Ter de la Ley, y
	Artículo 40 (cuarto párrafo).- En estos casos, el titular del área responsable de la contratación, a más	**Artículo 23 (fracción I).-** El informe trimestral a que se refiere la fracción IV del artículo 22 de la Ley, se

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
	tardar el último día hábil de cada mes, enviará al órgano interno de control en la dependencia o entidad de que se trate, un informe relativo a los contratos formalizados durante el mes calendario inmediato anterior, acompañando copia del escrito aludido en este artículo y de un dictamen en el que se hará constar el análisis de la o las proposiciones y las razones para la adjudicación del contrato. No será necesario rendir este informe en las operaciones que se realicen al amparo del artículo 41 fracciones IV y XII, de este ordenamiento.	suscribirá y presentará por el presidente del Comité en la sesión ordinaria inmediata posterior a la conclusión del trimestre de que se trate, el cual contendrá los siguientes aspectos: I. Una síntesis sobre la conclusión y los resultados generales de las contrataciones realizadas con fundamento en los artículos 41 y 42 de la Ley, así como de las derivadas de licitaciones públicas;
	Artículo 41 (fracción IV).- Las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán contratar adquisiciones, arrendamientos y servicios, sin sujetarse al procedimiento de licitación pública, a través de los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa, cuando: … IV. Se realicen con fines exclusivamente militares o para la armada, o su contratación mediante licitación pública ponga en riesgo la seguridad nacional o la seguridad pública, en los términos de las leyes de la materia.	**Artículo 72 (fracción IV, primer párrafo).-** Para los efectos de lo establecido en el artículo 41 de la Ley deberá considerarse, respecto de las fracciones de dicho precepto legal, lo que se cita a continuación: … IV. Las dependencias o entidades integrantes del Consejo de Seguridad Nacional podrán sustentar las contrataciones que realicen con fundamento en el primer párrafo de la fracción IV, cuando los bienes o servicios que requieran se encuentren en la base de datos que administra el Comité Técnico del citado Consejo. En estos casos, la investigación de mercado se tendrá por realizada a través de la consulta que se formule a dicha base de datos y el escrito a que se refiere el segundo párrafo del artículo 40 de la Ley, será elaborado por el Área requirente conforme al modelo que haya autorizado dicho Comité, el cual debidamente requisitado obrará en el expediente de contratación respectivo.

A) Marco normativo complementario y supletorio.

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
67.- Reglas para la aplicación de las reservas contenidas en los capítulos o títulos de compras del sector público de los tratados de libre comercio suscritos por los Estados Unidos Mexicanos. *28 de diciembre 2010.*	**Artículo 4.-** La aplicación de esta Ley será sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados. **Artículo 26 (último párrafo).-** La Secretaría de Economía, mediante reglas de carácter general y tomando en cuenta la opinión de la Secretaría de la Función Pública, determinará los criterios para la aplicación de las reservas, mecanismos de transición u otros supuestos establecidos en los tratados.	**Artículo 36.-** En caso de que la dependencia o entidad convocante determine que una licitación pública que se ubique en el supuesto previsto en el inciso a) de la fracción II del artículo 28 de la Ley, puede tener el carácter de nacional, por existir oferta de origen nacional y reservas en los Tratados, deberá solicitar a la Secretaría de Economía, de conformidad con las reglas que emita con fundamento en el último párrafo del artículo 26 de la Ley, la inclusión y registro de dicho procedimiento en la reserva de los Tratados que correspondan.
	Artículo 28 (fracción II, inciso a).- El carácter de las licitaciones públicas, será: … II. Internacional bajo la cobertura de tratados, en la que sólo podrán participar licitantes mexicanos y extranjeros de países con los que nuestro país tenga celebrado un tratado de libre comercio con capítulo de compras gubernamentales, cuando resulte obligatorio conforme a lo establecido en los tratados de libre comercio, que contengan disposiciones en materia de compras del sector público y bajo cuya cobertura expresa se haya convocado la licitación, de acuerdo a las reglas de origen que prevean los tratados y las reglas de carácter general, para bienes nacionales que emita la Secretaría de Economía, previa opinión de la Secretaría de la Función Pública, y a) (Se deroga)	**Artículo 29 (segundo párrafo, fracciones VI y VII).-** La investigación de mercado podrá ser utilizada por la dependencia o entidad para lo siguiente: … VI. Elegir el procedimiento de contratación que podrá llevarse a cabo; VII. Determinar la conveniencia de aplicar alguna de las reservas contenidas en los capítulos de compras del sector público de los Tratados en relación al precio, cantidad, calidad y oportunidad de la proveeduría nacional; **Artículo 37 (primer párrafo).-** La Secretaría de Economía publicará una relación de los casos en los que, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 28 de la Ley, los licitantes deberán manifestar, bajo protesta de decir verdad, que los precios que se presentan en su propuesta económica no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminación de precios o subsidios. **Artículo 41 (fracción IV).-** Para la difusión del Proyecto de convocatoria a la licitación pública, deberá considerarse lo siguiente: …

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
		IV. Si la convocante lo estima conveniente, además de la difusión del Proyecto de convocatoria en CompraNet, podrá efectuar invitaciones para celebrar una reunión pública en la que los asistentes participen en la revisión del Proyecto de convocatoria y presenten sus comentarios, salvo que se trate de Proyectos de convocatoria para las licitaciones públicas a que se refiere el inciso a) de la fracción II del artículo 28 de la Ley, y
68.- Reglas para la aplicación del margen de preferencia en el precio de los bienes de origen nacional, respecto del precio de los bienes de importación, en los procedimientos de contratación de carácter internacional abierto que realizan las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. *28 de diciembre de 2010.*	**Artículo 14 (primer párrafo).-** En los procedimientos de contratación de carácter internacional abierto, las dependencias y entidades optarán, en igualdad de condiciones, por el empleo de los recursos humanos del país y por la adquisición y arrendamiento de bienes producidos en el país y que cuenten con el porcentaje de contenido nacional indicado en el artículo 28 fracción I, de esta Ley, los cuales deberán contar, en la comparación económica de las proposiciones, con un margen hasta del quince por ciento de preferencia en el precio respecto de los bienes de importación, conforme a las reglas que establezca la Secretaría de Economía, previa opinión de la Secretaría y de la Secretaría de la Función Pública.	**Artículo 35 (primer y segundo párrafo).-** En la convocatoria a la licitación pública e invitación a cuando menos tres personas de carácter nacional, deberá establecerse como requisito de participación la entrega de un escrito en el que el licitante manifieste bajo protesta de decir verdad, que es de nacionalidad mexicana y, en el caso de adquisición de bienes, además manifestará que los bienes que oferta y entregará, serán producidos en México y contarán con el porcentaje de contenido nacional correspondiente. En el escrito a que se refiere el párrafo anterior, el licitante manifestará que en caso de que la Secretaría de Economía lo solicite, le proporcionará la información que permita verificar que los bienes ofertados son de producción nacional y cumplen con el porcentaje de contenido nacional requerido.
	Artículo 26 (último párrafo).- La Secretaría de Economía, mediante reglas de carácter general y tomando en cuenta la opinión de la Secretaría de la Función Pública, determinará los criterios para la aplicación de las reservas, mecanismos de transición u otros supuestos establecidos en los tratados.	**Artículo 36.-** En caso de que la dependencia o entidad convocante determine que una licitación pública que se ubique en el supuesto previsto en el inciso a) de la fracción II del artículo 28 de la Ley, puede tener el carácter de nacional, por existir oferta de origen nacional y reservas en los Tratados, deberá solicitar a la Secretaría de Economía, de conformidad con las reglas que emita con fundamento en el último párrafo del artículo 26 de la Ley, la inclusión y registro de dicho procedimiento en la reserva de los Tratados que correspondan.

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
	Artículo 28 (fracción I).- El carácter de las licitaciones públicas, será: I. Nacional, en la cual únicamente podrán participar personas de nacionalidad mexicana y los bienes a adquirir sean producidos en el país y cuenten, por lo menos, con un cincuenta por ciento de contenido nacional, el que se determinará tomando en cuenta la mano de obra, insumos de los bienes y demás aspectos que determine la Secretaría de Economía mediante reglas de carácter general, o bien, por encontrarse debajo de los umbrales previstos en los tratados, o cuando habiéndose rebasado éstos, se haya realizado la reserva correspondiente. **Artículo 40 (último párrafo).-** A los procedimientos de contratación de invitación a cuando menos tres personas y de adjudicación directa, le será aplicable el carácter a que hacen referencia las fracciones I, II y III del artículo 28 de la presente Ley.	**Artículo 35.-** En la convocatoria a la licitación pública e invitación a cuando menos tres personas de carácter nacional, deberá establecerse como requisito de participación la entrega de un escrito en el que el licitante manifieste bajo protesta de decir verdad, que es de nacionalidad mexicana y, en el caso de adquisición de bienes, además manifestará que los bienes que oferta y entregará, serán producidos en México y contarán con el porcentaje de contenido nacional correspondiente. …
69.- Reglas para la celebración de licitaciones públicas internacionales bajo la cobertura de tratados de libre comercio suscritos por los Estados Unidos Mexicanos. *28 de diciembre de 2010.*	**Artículo 2 (fracción V).-** Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por: … V. Tratados: los convenios regidos por el derecho internacional público, celebrados por escrito entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y uno o varios sujetos de Derecho Internacional Público, ya sea que para su aplicación requiera o no la celebración de acuerdos en materias específicas, cualquiera que sea su denominación, mediante los cuales los Estados Unidos Mexicanos asumen compromisos; **Artículo 4.-** La aplicación de esta Ley será sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados.	
	Artículo 15 (segundo párrafo).- La solución de las controversias se sujetará a lo previsto por el Título Sexto de esta Ley, sin perjuicio de lo establecido en los tratados de que México sea parte.	

A) Marco normativo complementario y supletorio.

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
	Artículo 28 (fracción II, inciso a).- El carácter de las licitaciones públicas, será: … II. Internacional bajo la cobertura de tratados, en la que sólo podrán participar licitantes mexicanos y extranjeros de países con los que nuestro país tenga celebrado un tratado de libre comercio con capítulo de compras gubernamentales, cuando resulte obligatorio conforme a lo establecido en los tratados de libre comercio, que contengan disposiciones en materia de compras del sector público y bajo cuya cobertura expresa se haya convocado la licitación, de acuerdo a las reglas de origen que prevean los tratados y las reglas de carácter general, para bienes nacionales que emita la Secretaría de Economía, previa opinión de la Secretaría de la Función Pública y a) (Se deroga)	**Artículo 29 (segundo párrafo, fracciones VI y VII).-** La investigación de mercado podrá ser utilizada por la dependencia o entidad para lo siguiente: … VI. Elegir el procedimiento de contratación que podrá llevarse a cabo; VII. Determinar la conveniencia de aplicar alguna de las reservas contenidas en los capítulos de compras del sector público de los Tratados en relación al precio, cantidad, calidad y oportunidad de la proveeduría nacional; **Artículo 36.-** En caso de que la dependencia o entidad convocante determine que una licitación pública que se ubique en el supuesto previsto en el inciso a) de la fracción II del artículo 28 de la Ley, puede tener el carácter de nacional, por existir oferta de origen nacional y reservas en los Tratados, deberá solicitar a la Secretaría de Economía, de conformidad con las reglas que emita con fundamento en el último párrafo del artículo 26 de la Ley, la inclusión y registro de dicho procedimiento en la reserva de los Tratados que correspondan. **Artículo 37.-** La Secretaría de Economía publicará una relación de los casos en los que, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 28 de la Ley, los licitantes deberán manifestar, bajo protesta de decir verdad, que los precios que se presentan en su propuesta económica no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminación de precios o subsidios. **Artículo 41 (fracción IV).-** Para la difusión del Proyecto de convocatoria a la licitación pública, deberá considerarse lo siguiente: … IV. Si la convocante lo estima conveniente, además de la difusión del Proyecto de convocatoria en CompraNet, podrá efectuar invitaciones para celebrar

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
		una reunión pública en la que los asistentes participen en la revisión del Proyecto de convocatoria y presenten sus comentarios, salvo que se trate de Proyectos de convocatoria para las licitaciones públicas a que se refiere el inciso a) de la fracción II del artículo 28 de la Ley, y
70.- Reglas para la determinación, acreditación y verificación del contenido nacional de los bienes que se ofertan y entregan en los procedimientos de contratación, así como para la aplicación del requisito de contenido nacional en la contratación de obras públicas, que celebren las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. *14 de octubre de 2010.*	**Artículo 28 (fracción I, segundo párrafo).-** El carácter de las licitaciones públicas, será: I… La Secretaría de Economía mediante reglas de carácter general establecerá los casos de excepción correspondientes a dicho contenido, así como un procedimiento expedito para determinar el porcentaje del mismo, previa opinión de la Secretaría y de la Secretaría de la Función Pública. ...	**Artículo 35 (segundo párrafo).-** En el escrito a que se refiere el párrafo anterior, el licitante manifestará que en caso de que la Secretaría de Economía lo solicite, le proporcionará la información que permita verificar que los bienes ofertados son de producción nacional y cumplen con el porcentaje de contenido nacional requerido.
71.- Reglas para la obtención de la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social. *27 de febrero de 2015.* Están modificadas a través del Acuerdo ACDO.SA1.HCT.250315/62.P. DJ dictado por el H. Consejo Técnico, relativo a la autorización para modificar la Primera de las Reglas para la obtención de la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de	**Artículo 7 (primer y segundo párrafo).-** La Secretaría, la Secretaría de Economía y la Secretaría de la Función Pública, en el ámbito de sus respectivas competencias, estarán facultadas para interpretar esta Ley para efectos administrativos. La Secretaría de la Función Pública dictará las disposiciones administrativas que sean estrictamente necesarias para el adecuado cumplimiento de esta Ley, tomando en cuenta la opinión de la Secretaría y, cuando corresponda, la de la Secretaría de Economía. Las disposiciones de carácter general se publicarán en el Diario Oficial de la Federación.	**Artículo 8.-** La Secretaría, la Secretaría de Economía y la Secretaría de la Función Pública, en el ámbito de sus respectivas competencias, estarán facultadas para interpretar la Ley y este Reglamento para efectos administrativos. Los criterios de interpretación que emitan, en términos de este párrafo, son obligatorios para las dependencias y entidades. … **Artículo 39 (fracción VI, inciso j).-** La convocatoria a la licitación pública y, cuando proceda, el Proyecto de convocatoria deberán contener los requisitos que señala el artículo 29 de la Ley y se elaborarán conforme al orden, apartados e información que a continuación se indican: … VI. Documentos y datos que deben presentar los

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
seguridad social publicado el 3 de abril de 2015.		licitantes, entre los que se encuentran los siguientes: … j) El documento en el que conste el acuse de recepción de solicitud de opinión ante la autoridad fiscal competente, respecto del cumplimiento de sus obligaciones fiscales del licitante a quien se adjudique el contrato;

- ***LINEAMIENTOS***

72.- Lineamientos para la aplicación y seguimiento de las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la Administración Pública Federal. *30 de enero de 2013.* **20.-** Para disminuir costos y la obtención de ahorros, la contratación de los servicios, así como la adquisición y arrendamiento de bienes, se realizará preferentemente en forma consolidada. Para ello, las Dependencias y Entidades determinarán las líneas de acción.	**Artículo 9 (primer párrafo).-** En materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, los titulares de las dependencias y los órganos de gobierno de las entidades serán los responsables de que, en la adopción e instrumentación de las acciones que deban llevar a cabo en cumplimiento de esta Ley, se observen criterios que promuevan la modernización y desarrollo administrativo, la descentralización de funciones y la efectiva delegación de facultades. … **Artículo 17 (primer párrafo).-** La Secretaría de la Función Pública, mediante disposiciones de carácter general, oyendo la opinión de la Secretaría de Economía, determinará, en su caso, los bienes, arrendamientos o servicios de uso generalizado que, en forma consolidada, podrán adquirir, arrendar o contratar las dependencias y entidades con objeto de obtener las mejores condiciones en cuanto a calidad, precio y oportunidad, y apoyar en condiciones de competencia a las áreas prioritarias del desarrollo.	**Artículo 13 (primer párrafo).-** Para la consolidación de adquisiciones, arrendamientos o servicios entre varias dependencias o entidades, bastará que los representantes de las respectivas áreas contratantes se coordinen y manifiesten formalmente su acuerdo para llevar a cabo la contratación bajo esta modalidad, debiendo dejar constancia por escrito de las decisiones y acuerdos que se adopten para tal fin.

A) Marco normativo complementario y supletorio.

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
3.- Los Oficiales Mayores y sus homólogos o equivalentes que tengan a su cargo las funciones de programación, organización, presupuesto, entre otros, serán responsables de coordinar la observancia de los presentes Lineamientos en las Dependencias y Entidades.	**Artículo 24.-** La planeación, programación, presupuestación y el gasto de las adquisiciones, arrendamientos y servicios se sujetará a las disposiciones específicas del Presupuesto de Egresos de la Federación, así como a lo previsto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y demás disposiciones aplicables y los recursos destinados a ese fin se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia, honradez e imparcialidad para satisfacer los objetivos a los que fueren destinados.	
1.- Establecer los criterios y procedimientos específicos para la aplicación y seguimiento del Decreto que establece las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público.	**Artículo 40 (segundo párrafo).-** La selección del procedimiento de excepción que realicen las dependencias y entidades deberá fundarse y motivarse, según las circunstancias que concurran en cada caso, en criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia que resulten procedentes para obtener las mejores condiciones para el Estado. El acreditamiento del o los criterios en los que se funda; así como la justificación de las razones en las que se sustente el ejercicio de la opción, deberán constar por escrito y ser firmado por el titular del área usuaria o requirente de los bienes o servicios.	
2 (segundo párrafo).- La UPCP, con base en la determinación del Consejo de Seguridad Nacional definirá las instancias específicas de seguridad nacional que quedan exceptuadas de la aplicación de las medidas previstas en dicho ordenamiento.	**Artículo 41 (fracción IV).-** Las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán contratar adquisiciones, arrendamientos y servicios, sin sujetarse al procedimiento de licitación pública, a través de los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa, cuando: … IV. Se realicen con fines exclusivamente militares o para la armada, o su contratación mediante licitación pública ponga en riesgo la seguridad nacional o la seguridad pública, en los términos de las leyes de la materia.	**Artículo 72 (fracción IV, primer párrafo).-** Para los efectos de lo establecido en el artículo 41 de la Ley deberá considerarse, respecto de las fracciones de dicho precepto legal, lo que se cita a continuación: … IV. Las dependencias o entidades integrantes del Consejo de Seguridad Nacional podrán sustentar las contrataciones que realicen con fundamento en el primer párrafo de la fracción IV, cuando los bienes o servicios que requieran se encuentren en la base de datos que administra el Comité Técnico del citado Consejo. En estos casos, la investigación de mercado se tendrá por realizada a través de la consulta que se

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
	…	formule a dicha base de datos y el escrito a que se refiere el segundo párrafo del artículo 40 de la Ley, será elaborado por el Área requirente conforme al modelo que haya autorizado dicho Comité, el cual debidamente requisitado obrará en el expediente de contratación respectivo.
73.- Lineamientos para la contratación de los servicios de telefonía a larga distancia por parte de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. *07 de mayo de 1997.* [11]	**Artículo 3 (fracción IX).-** Para los efectos de esta Ley, entre las adquisiciones, arrendamientos y servicios, quedan comprendidos: … IX. En general, los servicios de cualquier naturaleza cuya prestación genere una obligación de pago para las dependencias y entidades, salvo que la contratación se encuentre regulada en forma específica por otras disposiciones legales. Corresponderá a la Secretaría de la Función Pública, a solicitud de la dependencia o entidad de que se trate, determinar si un servicio se ubica en la hipótesis de esta fracción.	
74.- Lineamientos para las adquisiciones de papel para uso de oficina por parte de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. *2 de octubre de 2009.*	**Artículo 26 (cuarto párrafo).-** En las adquisiciones de papel para uso de oficina, éste deberá contener un mínimo de cincuenta por ciento de fibras de material reciclado o de fibras naturales no derivadas de la madera o de materias primas provenientes de aprovechamientos forestales manejados de manera sustentable en el territorio nacional que se encuentren certificadas conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior o de sus combinaciones y elaborados en procesos con blanqueado libre de cloro.	

[11] Unidad de normatividad de contrataciones públicas en http://www.funcionpublica.gob.mx/unaopspf/unaop1.htm el 22 de octubre de 2016, a las 11:52 a.m.

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
• ***CRITERIOS NORMATIVOS***		
75.- Cálculo y determinación del porcentaje del treinta por ciento a que se refiere el artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público *(AD-01/2011). Noviembre de 2001, actualizado en enero de 2011.*	**Artículo 42 (cuarto párrafo).-** La suma de las operaciones que se realicen al amparo de este artículo no podrá exceder del treinta por ciento del presupuesto de adquisiciones, arrendamientos y servicios autorizado a la dependencia o entidad en cada ejercicio presupuestario. La contratación deberá ajustarse a los límites establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación.	**Artículo 76.-** Para fomentar el desarrollo y la participación de las MIPYMES, las dependencias y entidades deberán adjudicarles contratos relacionados con las operaciones comprendidas en los supuestos de excepción a la licitación pública a que se refiere el artículo 42 de la Ley, cuando menos el cincuenta por ciento del valor de las adquisiciones en cada ejercicio fiscal. La información relativa a dichas operaciones será cuantificada por las dependencias y entidades al registrarse en CompraNet.
76.- Criterio de interpretación de los artículos 22 fracción VI de la LAASSP y 19 de su Reglamento, para la Integración del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. *(AD-10/2010) noviembre de 2010*	**Artículo 22 (fracción VI).-** Las dependencias y entidades deberán establecer comités de adquisiciones, arrendamientos y servicios que tendrán las siguientes funciones: … VI. Elaborar y aprobar el manual de integración y funcionamiento del comité, en el cual se deberán considerar cuando menos las siguientes bases: a) Será presidido por el Oficial Mayor o equivalente; b) Los vocales titulares deberán tener un nivel jerárquico mínimo de director general o equivalente; c) El número total de miembros del Comité deberá ser impar, quienes invariablemente deberán emitir su voto en cada uno de los asuntos que se sometan a su consideración; d) El área jurídica y el órgano interno de control de la dependencia o entidad, deberán asistir a las sesiones del Comité, como asesor, con voz pero sin voto, debiendo pronunciarse de manera razonada en los asuntos que conozca el Comité. Los asesores titulares no podrán tener un nivel jerárquico inferior al de director general o equivalente, y e) El Comité deberá dictaminar en la misma sesión	**Artículo 19.-** El Comité estará integrado con un máximo de siete vocales titulares con derecho a voz y voto, quienes tendrán el carácter de miembros, y se conformará de la siguiente forma: I. El Oficial Mayor o su equivalente, quien lo presidirá, y II. Los vocales que deberán ser: a) El titular del área de programación y presupuesto o de finanzas o equivalente; b) El titular del Área contratante de la dependencia o entidad a nivel central, y c) Los servidores públicos que tengan relación o conocimiento con la generalidad de los asuntos materia del Comité, que no estén adscritos a la Oficialía Mayor o su equivalente, quienes serán designados por el titular de la dependencia o entidad o por el servidor público que éste determine, quien en ningún caso podrá ser el Oficial Mayor o equivalente. …

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
	los asuntos que se presenten a su consideración; el Reglamento de esta Ley establecerá las bases conforme a las cuales los comités podrán de manera excepcional dictaminar los asuntos en una siguiente sesión. Los integrantes del Comité con derecho a voz y voto, así como los asesores del mismo, podrán designar por escrito a sus respectivos suplentes, los que no deberán tener un nivel jerárquico inferior a director de área, y	
77.- Criterios generales para determinar la normatividad aplicable en los proyectos sujetos al programa para la modernización de los organismos operadores de agua (PROMAGUA) y otros similares apoyados con recursos de fondos federales para el desarrollo de infraestructura. *OP/01/2008. Agosto de 2008*	**Artículo 3 (fracción VI).-** Para los efectos de esta Ley, entre las adquisiciones, arrendamientos y servicios, quedan comprendidos: … VI. La prestación de servicios de largo plazo que involucren recursos de varios ejercicios fiscales, a cargo de un inversionista proveedor, el cual se obliga a proporcionarlos con los activos que provea por sí o a través de un tercero, de conformidad con un proyecto para la prestación de dichos servicios;	
78.- Determinación y asignación de la puntuación o unidades porcentuales en diversos rubros y subrubros, así como valoración de su acreditación, previstos en los Lineamientos para la aplicación del criterio de evaluación de proposiciones a través del mecanismo de puntos o porcentajes en los procedimientos de contratación regulados por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios	**Artículo 36 (segundo y tercer párrafos).-** En todos los casos las convocantes deberán verificar que las proposiciones cumplan con los requisitos solicitados en la convocatoria a la licitación; la utilización del criterio de evaluación binario, mediante el cual sólo se adjudica a quien cumpla los requisitos establecidos por la convocante y oferte el precio más bajo, será aplicable cuando no sea posible utilizar los criterios de puntos y porcentajes o de costo beneficio. En este supuesto, la convocante evaluará al menos las dos proposiciones cuyo precio resulte ser más bajo; de no resultar éstas solventes, se evaluarán las que les sigan en precio. Cuando las dependencias y entidades requieran obtener bienes, arrendamientos o servicios que	**Artículo 51 (primer y segundo párrafos).-** Los criterios para evaluar la solvencia de las proposiciones, deberán guardar relación con los requisitos y especificaciones señalados en la convocatoria a la licitación pública para la integración de las propuestas técnicas y económicas. La aplicación del criterio de evaluación binario a que se refiere el segundo párrafo del artículo 36 de la Ley será procedente en aquellos casos en que la convocante no requiera vincular las condiciones que deberán cumplir los proveedores con las características y especificaciones de los bienes a adquirir o a arrendar o de los servicios a contratar porque éstos se encuentran estandarizados en el mercado y el factor preponderante que considera para

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. *9 de enero de 2012.*	conlleven el uso de características de alta especialidad técnica o de innovación tecnología, deberán utilizar el criterio de evaluación de puntos y porcentajes o de costo beneficio. …	la adjudicación del contrato es el precio más bajo. El Área contratante deberá justificar la razón por la que sólo puede aplicarse el criterio de evaluación binario y no el de puntos o porcentajes o de costo beneficio, dejando constancia en el expediente del procedimiento de contratación. **Artículo 52.-** Cuando la convocante determine utilizar el criterio de evaluación de puntos o porcentajes para la adquisición o arrendamiento de bienes o la contratación de servicios deberá establecer en la convocatoria a la licitación pública los rubros y subrubros de las propuestas técnica y económica que integran la proposición; la calificación numérica o de ponderación que puede alcanzarse u obtenerse en cada uno de ellos; el mínimo de puntaje o porcentaje que los licitantes deberán obtener en la evaluación de la propuesta técnica para continuar con la evaluación de la propuesta económica, y la forma en que los licitantes deberán acreditar el cumplimiento de los aspectos requeridos por la convocante en cada rubro o subrubro para la obtención de puntuación o ponderación. …
79.- Divisibilidad o indivisibilidad de las obligaciones contractuales y aplicación total o proporcional de la garantía de cumplimiento de los contratos sujetos a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. *(AD-02/2011) Mayo de 2011*	**Artículo 45 (fracción XI).-** El contrato o pedido contendrá, en lo aplicable, lo siguiente: … XI. Forma, términos y porcentaje para garantizar los anticipos y el cumplimiento del contrato; **Artículo 48 (fracción II).-** Los proveedores que celebren los contratos a que se refiere esta Ley deberán garantizar: … II. El cumplimiento de los contratos. …	**Artículo 81 (fracción II).-** Además de lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley, el contrato deberá: … II. Señalar que la garantía de cumplimiento se hará efectiva por el monto total de la obligación garantizada, salvo que en los contratos se haya estipulado su divisibilidad. En caso de que por las características de los bienes o servicios entregados éstos no puedan funcionar o ser utilizados por la dependencia o entidad por estar incompletos, la garantía siempre se hará efectiva por el monto total de la obligación garantizada; **Artículo 87 (último párrafo).-** En el caso de entregas

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
		parciales de bienes o de prestación de servicios realizados, la garantía de cumplimiento podrá reducirse en forma proporcional a los bienes recibidos o a los servicios ya prestados. **Artículo 91 (último párrafo).-** Las modificaciones en monto, plazo o vigencia a los contratos conllevarán el respectivo ajuste a la garantía de cumplimiento cuando dicho incremento no se encuentre cubierto por la garantía originalmente otorgada, para lo cual deberá estipularse en el convenio modificatorio respectivo el plazo para entregar la ampliación de garantía, el cual no deberá exceder de diez días naturales siguientes a la firma de dicho convenio, así como la fecha de entrega de los bienes o de la prestación del servicio para las cantidades adicionales. Tratándose de fianza, el ajuste correspondiente se realizará conforme a lo dispuesto por la fracción II y el último párrafo del artículo 103 de este Reglamento. **Artículo 103 (primer y segundo párrafos, fracción IV).-** Los proveedores podrán otorgar las garantías a que se refiere la Ley y este Reglamento, en alguna de las formas previstas en el artículo 137 del Reglamento de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación en el caso de dependencias, o en las disposiciones aplicables tratándose de entidades. Cuando la forma de garantía sea mediante fianza, se observará lo siguiente: … IV. Cuando se requiera hacer efectivas las fianzas, las dependencias deberán remitir a la Tesorería de la Federación, dentro del plazo a que hace referencia el artículo 143 del Reglamento de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación, la solicitud donde se precise la información necesaria para identificar la obligación o crédito que se garantiza y los sujetos que se vinculan con la fianza, debiendo acompañar los

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
		documentos que soporten y justifiquen el cobro, de conformidad con lo dispuesto por el Reglamento del Artículo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, para el Cobro de Fianzas Otorgadas a Favor de la Federación, del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios Distintas de las que Garantizan Obligaciones Fiscales Federales a cargo de Terceros; tratándose de entidades la solicitud se remitirá al área correspondiente de la propia entidad. **Artículo 39 (fracción II, inciso i, numeral 5).-** La convocatoria a la licitación pública y, cuando proceda, el Proyecto de convocatoria deberán contener los requisitos que señala el artículo 29 de la Ley y se elaborarán conforme al orden, apartados e información que a continuación se indican: … II. Objeto y alcance de la licitación pública, precisando: … i) En el modelo de contrato, respecto de los requisitos a que se refiere el artículo 45 de la Ley, los siguientes aspectos según corresponda: … 5. El señalamiento de que la obligación garantizada será divisible o indivisible y que en caso de presentarse algún incumplimiento se harán efectivas las garantías que procedan;
80.- Garantía de Cumplimiento - Improcedencia de Requerirla a Instituciones de Seguros (AD-2/2010) *Noviembre de 2001, actualizado en diciembre de 2010.*	**Artículo 3 (fracción IX).-** Para los efectos de esta Ley, entre las adquisiciones, arrendamientos y servicios, quedan comprendidos: … IX. En general, los servicios de cualquier naturaleza cuya prestación genere una obligación de pago para las dependencias y entidades, salvo que la contratación se encuentre regulada en forma específica por otras disposiciones legales. Corresponderá a la Secretaría de la Función Pública,	

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
	a solicitud de la dependencia o entidad de que se trate, determinar si un servicio se ubica en la hipótesis de esta fracción. **Artículo 17 (último párrafo).-** En materia de seguros que se contraten a favor de los servidores públicos de las dependencias, incluido el seguro de vida de los pensionados, la Secretaría implementará procedimientos de contratación consolidada y celebrará los contratos correspondientes. Las entidades podrán solicitar su incorporación a las contrataciones que se realicen para las dependencias, siempre y cuando no impliquen dualidad de beneficios para los servidores públicos. **Artículo 45 (fracción XI).**- El contrato o pedido contendrá, en lo aplicable, lo siguiente: .. XI. Forma, términos y porcentaje para garantizar los anticipos y el cumplimiento del contrato; **Artículo 48 (fracción II).-** Los proveedores que celebren los contratos a que se refiere esta Ley deberán garantizar: … II. El cumplimiento de los contratos.	
81.- Incrementos en Contratos Abiertos (AD-03/2010). *Octubre de 2008 y actualizado en diciembre de 2010.*	**Artículo 47 (fracción II, segundo párrafo).-** Las dependencias y entidades podrán celebrar contratos abiertos para adquirir bienes, arrendamientos o servicios que requieran de manera reiterada conforme a lo siguiente: … II… Las dependencias y entidades con la aceptación del proveedor podrán realizar modificaciones a los contratos o pedidos hasta en un veinte por ciento de la cantidad o presupuesto máximo de alguna partida originalmente pactada, utilizando para su pago el presupuesto de otra u otras partidas previstas en el	**Artículo 85.-** Las dependencias y entidades podrán celebrar contratos abiertos cuando cuenten con la autorización presupuestaria para cubrir el monto mínimo. En la convocatoria a la licitación pública o en la invitación a cuando menos tres personas y en el contrato, atendiendo a la naturaleza y características de los bienes y servicios que se requieran, preferentemente se establecerá la cantidad mínima o máxima de bienes o servicios a contratar o la cantidad mínima o máxima del presupuesto que la dependencia o entidad podrá ejercer en cada orden de surtimiento con cargo al contrato…

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
	propio contrato, siempre que no resulte un incremento en el monto máximo total del contrato, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 52 de esta Ley. **Artículo 52 (primer párrafo).-** Las dependencias y entidades podrán, dentro de su presupuesto aprobado y disponible, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explícitas, acordar el incremento del monto del contrato o de la cantidad de bienes, arrendamientos o servicios solicitados mediante modificaciones a sus contratos vigentes, siempre que las modificaciones no rebasen, en conjunto, el veinte por ciento del monto o cantidad de los conceptos o volúmenes establecidos originalmente en los mismos y el precio de los bienes, arrendamientos o servicios sea igual al pactado originalmente. …	**Artículo 91.-** En los casos a que se refiere el párrafo primero del artículo 52 de la Ley, las dependencias y entidades podrán solicitar al proveedor incrementar la cantidad de bienes adquiridos o arrendados o de los servicios contratados, para que se entreguen o presten dentro del plazo originalmente convenido o, si el Área contratante lo considera conveniente, ampliar la vigencia del contrato. En caso de que el proveedor acepte, la dependencia o entidad convendrá con el mismo el incremento del monto del contrato.
82.- Penas Convencionales (AD-05/2010) *Octubre de 2008 y actualizado en diciembre de 2010.*	**Artículo 45 (fracción XIX).-** El contrato o pedido contendrá, en lo aplicable, lo siguiente: … XIX. Condiciones, términos y procedimiento para la aplicación de penas convencionales por atraso en la entrega de los bienes, arrendamientos o servicios, por causas imputables a los proveedores;	**Artículo 95.-** En los contratos se establecerán los casos concretos en los que procederá la aplicación de penas convencionales por atraso en la entrega de los bienes o en la prestación de los servicios. De igual manera, los contratos establecerán que el pago de los bienes, arrendamientos o servicios quedará condicionado, proporcionalmente, al pago que el proveedor deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso, en el entendido de que si el contrato es rescindido no procederá el cobro de dichas penas ni la contabilización de las mismas al hacer efectiva la garantía de cumplimiento. **Artículo 96.-** La pena convencional por atraso a que hace referencia el primer párrafo del artículo 53 de la Ley, se calculará de acuerdo con un porcentaje de penalización establecido en el contrato para tal efecto, aplicado al valor de los bienes, arrendamientos o servicios que hayan sido entregados o prestados con atraso y de manera proporcional al importe de la garantía de cumplimiento que corresponda a la partida de que se trate. La suma de todas las penas

A) Marco normativo complementario y supletorio.

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
		convencionales aplicadas al proveedor no deberá exceder el importe de dicha garantía. … **Artículo 97.-** Las deducciones al pago de bienes o servicios previstos en el artículo 53 Bis de la Ley serán determinadas en función de los bienes entregados o servicios prestados de manera parcial o deficiente. Dichas deducciones deberán calcularse hasta la fecha en que materialmente se cumpla la obligación y sin que cada concepto de deducciones exceda a la parte proporcional de la garantía de cumplimiento que le corresponda del monto total del contrato. …
	Artículo 53 (primer párrafo).- Las dependencias y entidades deberán pactar penas convencionales a cargo del proveedor por atraso en el cumplimiento de las fechas pactadas de entrega o de la prestación del servicio, las que no excederán del monto de la garantía de cumplimiento del contrato, y serán determinadas en función de los bienes o servicios no entregados o prestados oportunamente. En las operaciones en que se pactare ajuste de precios, la penalización se calculará sobre el precio ajustado. …	**Artículo 81 (fracción VII).-** Además de lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley, el contrato deberá: … VII. Establecer, en el caso que se actualice el supuesto a que hace referencia el segundo párrafo del artículo 48 de la Ley y el primer párrafo del artículo 86 del presente Reglamento, el monto de la garantía de cumplimiento previsto en el procedimiento de contratación de que se trate y el porcentaje de reducción al mismo, así como la previsión de que las penas convencionales que se llegaren a aplicar se calcularán en términos de lo señalado en el segundo párrafo del artículo 86 de este Reglamento, y **Artículo 85 (tercer párrafo, fracción I, segundo párrafo y fracción V).-** En los contratos abiertos de adquisiciones, arrendamientos o servicios a que hace referencia el artículo 47 de la Ley, deberá atenderse lo siguiente: I… Las modificaciones a que se refiere el párrafo segundo de la fracción II del artículo 47 de la Ley podrán efectuarse sobre alguna o algunas partidas originalmente pactadas;

A) Marco normativo complementario y supletorio.

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
		… V. Las penalizaciones por atraso en la entrega de los bienes o de la prestación de servicios, serán determinadas en función de los bienes o servicios que se hayan entregado o prestado con atraso y se aplicarán sobre los montos que deban pagarse por cada orden de surtimiento emitida por la dependencia o entidad, exclusivamente sobre el valor de lo entregado o prestado con atraso y no por la totalidad del contrato, y **Artículo 86 (segundo párrafo).-** En los casos señalados en el párrafo anterior, el monto máximo para la aplicación de penas convencionales se calculará considerando el monto de la garantía de cumplimiento establecido en el contrato, sin tomar en cuenta el porcentaje de reducción que se hubiere aplicado a dicha garantía**.** **Artículo 96 (segundo y tercer párrafos).-** Las garantías que se otorguen para responder de las obligaciones a que hace referencia el segundo párrafo del artículo 53 de la Ley se sujetarán a los términos, plazo y condiciones establecidos en el propio contrato y son independientes a las penas convencionales que se mencionan en el párrafo anterior. En el caso de procedimientos de contratación en los que se exceptúe de la presentación de garantía de cumplimiento de contrato en términos de la Ley, el monto máximo de las penas convencionales por atraso será del veinte por ciento del monto de los bienes, arrendamientos o servicios entregados o prestados fuera del plazo convenido, salvo cuando se trate de licitaciones públicas que se ubiquen en el supuesto señalado en la fracción XI del artículo 41 de la Ley, en cuyo caso el monto máximo de las penas convencionales será del diez por ciento. **Artículo 100.-** En los casos en que en una partida o parte de la misma no sean entregados los bienes o el

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
		servicio objeto del contrato adjudicado no dé inicio y la pena convencional por atraso que proporcionalmente corresponda a la parte no entregada o prestada, rebase el monto de la pena prevista en el contrato, la dependencia o entidad, previa notificación al proveedor, podrá modificar el contrato correspondiente, cancelando las partidas de que se trate, o parte de las mismas cuando ello sea posible, aplicando al proveedor por dicha cancelación una cantidad equivalente a la pena convencional máxima por atraso que correspondería en el caso de que los bienes o servicios hubieran sido entregados o prestados en fecha posterior a la pactada, siempre y cuando la suma total del monto de las cancelaciones no rebase el diez por ciento del importe total del contrato. En el supuesto de que sea rescindido el contrato, no procederá la contabilización de la sanción por cancelación a que hace referencia el párrafo anterior, toda vez que se deberá hacer efectiva la garantía de cumplimiento. **Artículo 39 (fracción II, inciso i, numeral 1).-** La convocatoria a la licitación pública y, cuando proceda, el Proyecto de convocatoria deberán contener los requisitos que señala el artículo 29 de la Ley y se elaborarán conforme al orden, apartados e información que a continuación se indican: … II. Objeto y alcance de la licitación pública, precisando: … i) En el modelo de contrato, respecto de los requisitos a que se refiere el artículo 45 de la Ley, los siguientes aspectos según corresponda: 1. El plazo máximo en días naturales para la entrega de los bienes o la prestación de los servicios, el cual contará a partir de la fecha en que el proveedor reciba

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
		la requisición respectiva;

- **CIRCULAR**

83.- CIRCULAR que contiene los lineamientos generales relativos a los aspectos de sustentabilidad ambiental para las adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público. *31 de octubre de 2007.*	**Artículo 26 (segundo, tercer y cuarto párrafos).-** Las adquisiciones, arrendamientos y servicios se adjudicarán, por regla general, a través de licitaciones públicas, mediante convocatoria pública, para que libremente se presenten proposiciones, solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad, crecimiento económico, generación de empleo, eficiencia energética, uso responsable del agua, optimización y uso sustentable de los recursos, así como la protección al medio ambiente y demás circunstancias pertinentes, de acuerdo con lo que establece la presente Ley.	
	Tratándose de adquisiciones de madera, muebles y suministros de oficina fabricados con madera, deberán requerirse certificados otorgados por terceros previamente registrados ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que garanticen el origen y el manejo sustentable de los aprovechamientos forestales de donde proviene dicha madera. En cuanto a los suministros de oficina fabricados con madera, se estará a lo dispuesto en el Reglamento de la presente Ley. En las adquisiciones de papel para uso de oficina, éste deberá contener un mínimo de cincuenta por ciento de fibras de material reciclado o de fibras naturales no derivadas de la madera o de materias primas provenientes de aprovechamientos forestales manejados de manera sustentable en el territorio nacional que se encuentren certificadas conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior o de sus combinaciones y elaborados en procesos con	**Artículo 33.-** Para efectos de lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 26 de la Ley, se entenderá por suministros de oficina fabricados con madera, aquéllos que se elaboren con dicho material y se incorporen al inventario de las dependencias y entidades por ser necesarios para el desempeño de las funciones encomendadas a los servidores públicos. …

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
	blanqueado libre de cloro.	

- **OFICIO-CIRCULAR**

84.- Oficio- circular dirigido a los Oficiales Mayores de las Dependencias y Homólogos de las Entidades Paraestatales, por medio del cual se les dan a conocer los formatos para la expedición de las garantías de cumplimiento, anticipo y demás aplicables a las adquisiciones, arrendamientos y servicios.	**Artículo 48 (primer párrafo).-** Los proveedores que celebren los contratos a que se refiere esta Ley deberán garantizar: I. Los anticipos que, en su caso, reciban. Estas garantías deberán constituirse por la totalidad del monto de los anticipos, y II. El cumplimiento de los contratos.	**Artículo 81 (fracción II).-** Además de lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley, el contrato deberá: II. Señalar que la garantía de cumplimiento se hará efectiva por el monto total de la obligación garantizada, salvo que en los contratos se haya estipulado su divisibilidad. En caso de que por las características de los bienes o servicios entregados éstos no puedan funcionar o ser utilizados por la dependencia o entidad por estar incompletos, la garantía siempre se hará efectiva por el monto total de la obligación garantizada; **Artículo 85 (párrafo tercero fracción IV).-** En caso de que se hubieren pactado las cantidades de bienes o servicios para cada orden de surtimiento, si la dependencia o entidad necesita de cantidades distintas a las pactadas, las mismas podrán suministrarse siempre y cuando el proveedor lo acepte, se formalice la modificación al contrato en los términos de lo dispuesto por el quinto párrafo del artículo 52 de la Ley y se realice el ajuste correspondiente a la garantía otorgada, observándose lo dispuesto por la fracción II del artículo 103 de este Reglamento, tratándose de fianza; **Artículo 87 (último párrafo).-** En el caso de entregas parciales de bienes o de prestación de servicios realizados, la garantía de cumplimiento podrá reducirse en forma proporcional a los bienes recibidos o a los servicios ya prestados. **Artículo 91 (último párrafo).-** Las modificaciones en monto, plazo o vigencia a los contratos conllevarán el respectivo ajuste a la garantía de

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
		cumplimiento cuando dicho incremento no se encuentre cubierto por la garantía originalmente otorgada, para lo cual deberá estipularse en el convenio modificatorio respectivo el plazo para entregar la ampliación de garantía, el cual no deberá exceder de diez días naturales siguientes a la firma de dicho convenio, así como la fecha de entrega de los bienes o de la prestación del servicio para las cantidades adicionales. Tratándose de fianza, el ajuste correspondiente se realizará conforme a lo dispuesto por la fracción II y el último párrafo del artículo 103 de este Reglamento. **Artículo 94 (último párrafo).-** El descuento señalado en el párrafo anterior no se considerará como una modificación al monto del contrato y, en consecuencia, no afectará a la garantía de cumplimiento del mismo. **Artículo 103 (segundo párrafo fracción II).-** Cuando la forma de garantía sea mediante fianza, se observará lo siguiente: … II. En caso de otorgamiento de prórrogas o esperas al proveedor para el cumplimiento de sus obligaciones, derivadas de la formalización de convenios de ampliación al monto o al plazo del contrato, se deberá realizar la modificación correspondiente a la fianza;
85.- Oficio - Circular No. SACN/300/148/2003. Relativo a la difusión de lineamientos de la Convención contra el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales de la Organización para la	**Artículo 62 (primer párrafo).-** La Secretaría de la Función Pública aplicará las sanciones que procedan a quienes infrinjan las disposiciones de este ordenamiento, conforme a lo dispuesto por la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. **Artículo 63.-** Las responsabilidades y las sanciones a que se refiere la presente Ley serán independientes de las de orden civil, penal o de cualquier otra índole	**Artículo 115 (primer y último párrafo).-** Una vez que la Secretaría de la Función Pública tenga conocimiento de actos o hechos posiblemente constitutivos de infracción, según lo previsto en el artículo anterior, realizará las investigaciones y actuaciones que correspondan a fin de sustentar la imputación, para lo cual podrá requerir a las dependencias y entidades, a las autoridades que corresponda, a los particulares o, en su caso, solicitar

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). *3 de septiembre de 2003.*	que puedan derivar de la comisión de los mismos hechos.	a los licitantes o proveedores que aporten mayores elementos para su análisis. … Cuando de las actuaciones previstas en este artículo se adviertan posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos, se dará vista a la autoridad de la Secretaría de la Función Pública competente en esa materia para que resuelva lo conducente.
86.- Oficio Circular No. SRACP/300/091/2012. ***Relativo a la participación de la Unidad de Normatividad de Contrataciones Públicas en los Comités.*** ***(Participación a petición expresa del OIC como asesor en los comités, no así en comisiones consultivas mixtas de abastecimiento).*** *14 de marzo de 2012.*	**Artículo 22 (fracción VI, inciso d) y último párrafo).-** Las dependencias y entidades deberán establecer comités de adquisiciones, arrendamientos y servicios que tendrán las siguientes funciones: … VI. Elaborar y aprobar el manual de integración y funcionamiento del comité, en el cual se deberán considerar cuando menos las siguientes bases: … d) El área jurídica y el órgano interno de control de la dependencia o entidad, deberán asistir a las sesiones del Comité, como asesor, con voz pero sin voto, debiendo pronunciarse de manera razonada en los asuntos que conozca el Comité. Los asesores titulares no podrán tener un nivel jerárquico inferior al de director general o equivalente, y … La Secretaría de la Función Pública podrá participar como asesor en los comités y subcomités a que se refiere este artículo, pronunciándose de manera fundada y motivada al emitir sus opiniones.	**Artículo 19 (quinto párrafo).-** La Secretaría de la Función Pública podrá designar a un servidor público para participar como asesor en los comités o subcomités que estime conveniente, quien tendrá derecho a voz pero no a voto. **Artículo 20 (fracción IV).-** Los participantes en el Comité tendrán las siguientes funciones: … IV. Los asesores: proporcionar de manera fundada y motivada la orientación necesaria en torno a los asuntos que se traten en el Comité, de acuerdo con las facultades que tenga conferidas el área que los haya designado, y **Artículo 22 (fracción VII).-** Las sesiones del Comité se celebrarán en los términos siguientes: … VII… Los asesores y los invitados, firmarán únicamente el acta como constancia de su asistencia o participación y como validación de sus comentarios…
87.- Oficio Circular No. UNAOPSPF/309/0743/2008. ***Emitido por la Titular de la Unidad de Normatividad de Adquisiciones, Obras Públicas, Servicios y Patrimonio Federal por el que***	**Artículo 7 (primer y segundo párrafos).-** La Secretaría, la Secretaría de Economía y la Secretaría de la Función Pública, en el ámbito de sus respectivas competencias, estarán facultadas para interpretar esta Ley para efectos administrativos. La Secretaría de la Función Pública dictará las disposiciones administrativas que sean estrictamente	**Artículo 8.-** La Secretaría, la Secretaría de Economía y la Secretaría de la Función Pública, en el ámbito de sus respectivas competencias, estarán facultadas para interpretar la Ley y este Reglamento para efectos administrativos. Los criterios de interpretación que emitan, en términos de este párrafo, son obligatorios para las dependencias y entidades.

A) Marco normativo complementario y supletorio.

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
se establece el procedimiento que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y las entidades federativas que realicen contrataciones con recursos federales, previo a la formalización de los contratos o pedidos que sean celebrados bajo el ámbito de las leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para verificar que los proveedores o contratistas están al corriente en sus obligaciones fiscales.	necesarias para el adecuado cumplimiento de esta Ley, tomando en cuenta la opinión de la Secretaría y, cuando corresponda, la de la Secretaría de Economía. Las disposiciones de carácter general se publicarán en el Diario Oficial de la Federación.	… **Artículo 39 (fracción VI, inciso j).-** La convocatoria a la licitación pública y, cuando proceda, el Proyecto de convocatoria deberán contener los requisitos que señala el artículo 29 de la Ley y se elaborarán conforme al orden, apartados e información que a continuación se indican: … VI. Documentos y datos que deben presentar los licitantes, entre los que se encuentran los siguientes: … j) El documento en el que conste el acuse de recepción de solicitud de opinión ante la autoridad fiscal competente, respecto del cumplimiento de sus obligaciones fiscales del licitante a quien se adjudique el contrato;
88.- Oficio Circular UPCP/308/0323/2009. Procedimiento de Captura y Envío de los Programas Anuales a la Secretaría de la Función Pública, emitido el 3 de diciembre de 2009 por el Titular de la Unidad de Política de Contrataciones Públicas de la citada Secretaría	**Artículo 20.-** Las dependencias y entidades formularán sus programas anuales de adquisiciones, arrendamientos y servicios, y los que abarquen más de un ejercicio presupuestal, así como sus respectivos presupuestos, considerando: I. Las acciones previas, durante y posteriores a la realización de dichas operaciones; II. Los objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo; III. La calendarización física y financiera de los recursos necesarios; IV. Las unidades responsables de su instrumentación; V. Sus programas sustantivos, de apoyo administrativo y de inversiones, así como, en su caso, aquéllos relativos a la adquisición de bienes para su posterior comercialización, incluyendo los	**Artículo 16.-** Para efectos de lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley, los titulares de las dependencias y entidades, o bien los oficiales mayores o equivalentes, aprobarán el programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios… **Artículo 17.-** Los programas anuales de adquisiciones, arrendamientos y servicios deberán actualizarse, cuando proceda, durante los últimos cinco días hábiles de cada mes.

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
	que habrán de sujetarse a procesos productivos; VI. La existencia en cantidad suficiente de los bienes; los plazos estimados de suministro; los avances tecnológicos incorporados en los bienes, y en su caso los planos, proyectos y especificaciones; VII. Las normas aplicables conforme a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización o, a falta de éstas, las normas internacionales; VIII. Los requerimientos de mantenimiento de los bienes muebles a su cargo, y IX. Las demás previsiones que deban tomarse en cuenta según la naturaleza y características de las adquisiciones, arrendamientos o servicios. **Artículo 21 (primer párrafo).-** Las dependencias y entidades pondrán a disposición del público en general, a través de CompraNet y de su página en Internet, a más tardar el 31 de enero de cada año, su programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios correspondiente al ejercicio fiscal de que se trate, con excepción de aquella información que, de conformidad con las disposiciones aplicables, sea de naturaleza reservada o confidencial, en los términos establecidos en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.	

- **DISPOSICIONES GENERALES**

89.- Disposiciones Generales a las que deberán sujetarse las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para su incorporación al Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C. Institución de Banca de	**Artículo 45 (fracción XIV).-** El contrato o pedido contendrá, en lo aplicable, lo siguiente: … XIV. Plazo y condiciones de pago del precio de los bienes, arrendamientos o servicios, señalando el momento en que se haga exigible el mismo; **Artículo 51 (primer y segundo párrafos).-** La fecha de pago al proveedor estipulada en los contratos quedará sujeta a las condiciones que establezcan las	**Artículo 83 (último párrafo).-** En el contrato respectivo, las dependencias y entidades deberán establecer los mecanismos de comprobación, supervisión y verificación de los servicios contratados y efectivamente prestados, así como del cumplimiento de los requerimientos de cada entregable, lo cual será requisito para proceder al pago correspondiente. **Artículo 89 (primer y segundo párrafos).-** Para efectos de contabilizar el plazo a que hace

A) Marco normativo complementario y supletorio.

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
Desarrollo. *25 de junio de 2010.*	mismas; sin embargo, no podrá exceder de veinte días naturales contados a partir de la entrega de la factura respectiva, previa entrega de los bienes o prestación de los servicios en los términos del contrato. En caso de incumplimiento en los pagos a que se refiere el párrafo anterior, la dependencia o entidad, a solicitud del proveedor, deberá pagar gastos financieros conforme a la tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales desde que se venció el plazo pactado, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición del proveedor.	referencia el primer párrafo del artículo 51 de la Ley, se tendrá como recibida la factura o el documento que reúna los requisitos fiscales correspondientes, a partir de que el proveedor los entregue a la dependencia o entidad junto con el bien o al momento de concluir la prestación total o parcial del servicio conforme a los términos del contrato celebrado y la dependencia o entidad los reciba a satisfacción en los términos de los lineamientos que emita la Secretaría de la Función Pública para promover la agilización del pago. Dentro del plazo mencionado en el párrafo anterior, la dependencia o entidad deberá requerir, en su caso, al proveedor la corrección de errores o deficiencias contenidos en la factura o en el documento que reúna los requisitos fiscales correspondientes; tramitar el pago de dicha factura o documento y realizar el pago al proveedor. **Artículo 93.-** Las dependencias y entidades, de acuerdo con su disponibilidad presupuestaria y calendarización autorizada, podrán efectuar pagos progresivos a los proveedores previa verificación satisfactoria de los avances, de conformidad con lo establecido en la convocatoria a la licitación pública o en la invitación a cuando menos tres personas, así como en el contrato. Estos pagos sólo resultarán procedentes cuando los avances correspondan a entregables que hayan sido debidamente devengados en términos de las disposiciones presupuestarias aplicables. **Artículo 94 (primer párrafo).-** Las dependencias y entidades, de acuerdo con su disponibilidad presupuestaria y calendarios autorizados, podrán establecer en la convocatoria a la licitación pública o en la invitación a cuando menos tres personas, así como en los contratos, la condición de pronto pago en

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
		favor de proveedores, misma que operará cuando éstos, a su elección, acepten el descuento en el precio de los bienes o servicios por el adelanto en el pago en relación con la fecha pactada. En estos casos, deberá indicarse el porcentaje de descuento aplicable por cada día de adelanto en el pago.

- **GUÍA**

90.- Guía General que regula el programa de acompañamiento preventivo en las contrataciones que realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.	**Artículo 7 (segundo párrafo).-** La Secretaría de la Función Pública dictará las disposiciones administrativas que sean estrictamente necesarias para el adecuado cumplimiento de esta Ley, tomando en cuenta la opinión de la Secretaría y, cuando corresponda, la de la Secretaría de Economía. Las disposiciones de carácter general se publicarán en el Diario Oficial de la Federación.	
91.- Guía para la calificación, aceptación y remisión de las garantías para su efectividad a la Tesorería de la Federación. *Septiembre de 2009.*	**Artículo 49.-** Las garantías que deban otorgarse conforme a esta Ley se constituirán en favor de: I. La Tesorería de la Federación, por actos o contratos que se celebren con las dependencias; …	**Artículo 103 (segundo párrafo, fracciones I y IV).-** Los proveedores podrán otorgar las garantías a que se refiere la Ley y este Reglamento, en alguna de las formas previstas en el artículo 137 del Reglamento de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación en el caso de dependencias, o en las disposiciones aplicables tratándose de entidades. Cuando la forma de garantía sea mediante fianza, se observará lo siguiente: I. La póliza de la fianza deberá contener, como mínimo, las siguientes previsiones: a) Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato; b) Que para cancelar la fianza, será requisito contar con la constancia de cumplimiento total de las obligaciones contractuales; … IV. Cuando se requiera hacer efectivas las fianzas, las dependencias deberán remitir a la Tesorería de la Federación, dentro del plazo a que hace referencia el

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
		artículo 143 del Reglamento de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación, la solicitud donde se precise la información necesaria para identificar la obligación o crédito que se garantiza y los sujetos que se vinculan con la fianza, debiendo acompañar los documentos que soporten y justifiquen el cobro, de conformidad con lo dispuesto por el Reglamento del Artículo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, para el Cobro de Fianzas Otorgadas a Favor de la Federación, del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios Distintas de las que Garantizan Obligaciones Fiscales Federales a cargo de Terceros; tratándose de entidades la solicitud se remitirá al área correspondiente de la propia entidad.

- **INSTRUCTIVO**

92.- Instructivo para la elaboración de la Liquidación de Adeudo y Acta Administrativa de Incumplimiento de Obligaciones emitido por la Tesorería de la Federación, mediante oficio 401-T-2754 del 21 de enero de 2010 y que como anexo forma parte de la Guía para la calificación, aceptación y remisión de las garantías para su efectividad a la Tesorería de la Federación. *21 de enero de 2010.*	**Artículo 49.-** Las garantías que deban otorgarse conforme a esta Ley se constituirán en favor de: I. La Tesorería de la Federación, por actos o contratos que se celebren con las dependencias; …	**Artículo 103 (segundo párrafo, fracciones I y IV).-** Los proveedores podrán otorgar las garantías a que se refiere la Ley y este Reglamento, en alguna de las formas previstas en el artículo 137 del Reglamento de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación en el caso de dependencias, o en las disposiciones aplicables tratándose de entidades. Cuando la forma de garantía sea mediante fianza, se observará lo siguiente: I. La póliza de la fianza deberá contener, como mínimo, las siguientes previsiones: a) Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato; b) Que para cancelar la fianza, será requisito contar con la constancia de cumplimiento total de las obligaciones contractuales; … IV. Cuando se requiera hacer efectivas las fianzas, las dependencias deberán remitir a la Tesorería de la Federación, dentro del plazo a que hace referencia el

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
		artículo 143 del Reglamento de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación, la solicitud donde se precise la información necesaria para identificar la obligación o crédito que se garantiza y los sujetos que se vinculan con la fianza, debiendo acompañar los documentos que soporten y justifiquen el cobro, de conformidad con lo dispuesto por el Reglamento del Artículo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, para el Cobro de Fianzas Otorgadas a Favor de la Federación, del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios Distintas de las que Garantizan Obligaciones Fiscales Federales a cargo de Terceros; tratándose de entidades la solicitud se remitirá al área correspondiente de la propia entidad.

- **OTRAS DISPOSICIONES**

93.- Miscelánea Fiscal para 2017, artículo 32-D. *23 de diciembre de 2016.* Incluye modificaciones de la Tercera Resolución de modificaciones a la Miscelánea Fiscal para 2017 y sus anexos 1-A y 3, publicadas en el DOF el 21 de septiembre de 2017.	**Artículo 7 (primer y segundo párrafos).-** La Secretaría, la Secretaría de Economía y la Secretaría de la Función Pública, en el ámbito de sus respectivas competencias, estarán facultadas para interpretar esta Ley para efectos administrativos. La Secretaría de la Función Pública dictará las disposiciones administrativas que sean estrictamente necesarias para el adecuado cumplimiento de esta Ley, tomando en cuenta la opinión de la Secretaría y, cuando corresponda, la de la Secretaría de Economía. Las disposiciones de carácter general se publicarán en el Diario Oficial de la Federación.	**Artículo 8.-** La Secretaría, la Secretaría de Economía y la Secretaría de la Función Pública, en el ámbito de sus respectivas competencias, estarán facultadas para interpretar la Ley y este Reglamento para efectos administrativos. Los criterios de interpretación que emitan, en términos de este párrafo, son obligatorios para las dependencias y entidades. … **Artículo 39 (fracción VI, inciso j).-** La convocatoria a la licitación pública y, cuando proceda, el Proyecto de convocatoria deberán contener los requisitos que señala el artículo 29 de la Ley y se elaborarán conforme al orden, apartados e información que a continuación se indican: … VI. Documentos y datos que deben presentar los licitantes, entre los que se encuentran los siguientes: … j) El documento en el que conste el acuse de recepción de solicitud de opinión ante la autoridad

A) Marco normativo complementario y supletorio.

NORMATIVIDAD	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
		fiscal competente, respecto del cumplimiento de sus obligaciones fiscales del licitante a quien se adjudique el contrato;
94.- Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.	**Artículo 18 (fracción I).-** En la planeación de las adquisiciones, arrendamientos y servicios que pretendan realizar sujetos a que se refiere las fracciones I a VI del artículo 1 de esta Ley, deberá ajustarse a: I. Los objetivos y prioridades del Plan Nacional de Desarrollo y de los programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales que correspondan, así como a las previsiones contenidas en sus programas anuales, y …	

B) Jurisprudencias y tesis aisladas afines.

JURISPRUDENCIAS Y TESIS AISLADAS	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
1.- Acto de autoridad para los efectos del amparo. Lo constituye la resolución que declara la nulidad de una licitación pública nacional dentro del recurso de inconformidad emitida por el Instituto Mexicano del Seguro Social. *Registro: 177389. Localización: 9ª. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; XXII, Septiembre de 2005; Pág. 1404; [T.A.]*	**Artículo 74 (primer párrafo fracciones IV, V y último párrafo).-** La resolución que emita la autoridad podrá: … IV. Decretar la nulidad total del procedimiento de contratación; V. Decretar la nulidad del acto impugnado, para efectos de su reposición, subsistiendo la validez del procedimiento o acto en la parte que no fue materia de la declaratoria de nulidad, … La resolución que ponga fin a la instancia de inconformidad o, en su caso, a la intervención de oficio podrá impugnarse por el inconforme o tercero interesado mediante el recurso de revisión previsto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, o bien, cuando proceda, ante las instancias jurisdiccionales competentes.	
2.- Adjudicación directa. Hipótesis que deben actualizarse para que una dependencia o entidad de la Administración Pública Federal pueda optar por ese procedimiento de contratación (legislación vigente en 2008). *Registro: 2002951; [TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 3; Pág. 1903;*	**Artículo 22 (fracción II).-** Las dependencias y entidades deberán establecer comités de adquisiciones, arrendamientos y servicios que tendrán las siguientes funciones: … II. Dictaminar previamente a la iniciación del procedimiento, sobre la procedencia de la excepción a la licitación pública por encontrarse en alguno de los supuestos a que se refieren las fracciones I, III, VIII, IX segundo párrafo, X, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII y XIX del artículo 41 de esta Ley…	**Artículo 21 (segundo párrafo).-** El Comité no dictaminará los siguientes asuntos: I. La procedencia de la contratación en los casos de excepción a que se refiere el penúltimo párrafo del artículo 41 de la Ley; II. Los procedimientos de contratación por monto que se fundamenten en el artículo 42 de la Ley, y III. Los asuntos cuyos procedimientos de contratación se hayan iniciado sin dictamen previo del Comité.
	Artículo 40 (primer párrafo).- En los supuestos que prevé el artículo 41 de esta Ley, las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán optar por no llevar a cabo el procedimiento de licitación pública y celebrar contratos a través de los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa.	**Artículo 71.-** El documento suscrito por el titular del Área requirente señalado en el segundo párrafo del artículo 40 de la Ley, que se someta a consideración del Comité o del titular de la dependencia o entidad, o al servidor público en quien éste delegue la función para dictaminar sobre la procedencia de la excepción a la licitación pública…

B) Jurisprudencias y tesis aisladas afines.

JURISPRUDENCIAS Y TESIS AISLADAS	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
	Artículo 41 (fracción I).- Las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán contratar adquisiciones, arrendamientos y servicios, sin sujetarse al procedimiento de licitación pública, a través de los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa, cuando: I. No existan bienes o servicios alternativos o sustitutos técnicamente razonables, o bien, que en el mercado sólo existe un posible oferente, o se trate de una persona que posee la titularidad o el licenciamiento exclusivo de patentes, derechos de autor, u otros derechos exclusivos, o por tratarse de obras de arte;	**Artículo 72 (fracciones I y II).-** Para los efectos de lo establecido en el artículo 41 de la Ley deberá considerarse, respecto de las fracciones de dicho precepto legal, lo que se cita a continuación: I. La inexistencia de bienes o servicios alternativos o sustitutos técnicamente razonables, a que se refiere la fracción I, se acreditará con la investigación de mercado, mediante la obtención de por lo menos tres escritos de empresas cuyas actividades comerciales o profesionales se encuentren directamente relacionadas con los bienes a adquirir o a arrendar o los servicios a contratar, en los que se haga constar la inexistencia de los bienes o servicios mencionados… II. Para acreditar que en el mercado sólo existe un posible oferente, o se trata de una persona que posee la titularidad o el licenciamiento exclusivo de patentes, derechos de autor, u otros derechos exclusivos, a que hace referencia la fracción I, se deberán acompañar los documentos con los que se acredite tal situación, como son los registros, títulos, certificaciones, acuerdos comerciales, autorizaciones, designaciones, contratos de licenciamiento o cesión emitidos por o registrados ante las autoridades nacionales competentes en su caso, o conforme a las disposiciones o prácticas del país de origen, así como con los que se determine el alcance o implicaciones jurídicas de los derechos mencionados. …

B) Jurisprudencias y tesis aisladas afines.

JURISPRUDENCIAS Y TESIS AISLADAS	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
	Artículo 42 (primer párrafo).- Las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán contratar adquisiciones, arrendamientos y servicios, sin sujetarse al procedimiento de licitación pública, a través de los de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa, cuando el importe de cada operación no exceda los montos máximos que al efecto se establecerán en el Presupuesto de Egresos de la Federación, siempre que las operaciones no se fraccionen para quedar comprendidas en los supuestos de excepción a la licitación pública a que se refiere este artículo.	**Artículo 73.-** Cuando en las dependencias y entidades existan áreas que por sí mismas realicen contrataciones, los montos máximos a que hace referencia el artículo 42 de la Ley se determinarán en función del recurso total autorizado que la dependencia o entidad de que se trate asigne a cada área para la adquisición y arrendamiento de bienes y la contratación de servicios. **Artículo 74 (fracción I).-** Para efectos del primer párrafo del artículo 42 de la Ley, se considerará que existe fraccionamiento de las operaciones, cuando en las contrataciones involucradas se presenten las siguientes circunstancias: I. Todas estén fundadas en el artículo 42 de la Ley y la suma de sus importes superen el monto máximo indicado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para cada procedimiento de excepción; …
3.- Adjudicación por convenio o transacción judicial, efectos de la. *Registro: 203544. Localización: 9ª. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; II, Diciembre de 1995; Pág. 488; [T.A.]*	**Artículo 41 (fracción XVIII).-** Las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán contratar adquisiciones, arrendamientos y servicios, sin sujetarse al procedimiento de licitación pública, a través de los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa, cuando: … XVIII. Se acepte la adquisición de bienes o la prestación de servicios a título de dación en pago, en los términos de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación;	

B) Jurisprudencias y tesis aisladas afines.

JURISPRUDENCIAS Y TESIS AISLADAS	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
4.- [12]Adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público. El artículo 2o., fracción XII, de la ley relativa, no genera inseguridad jurídica al no conocerse, de antemano, cuál será el precio conveniente en una licitación pública.[◊] *Registro: 160718; Época: Décima Época; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Libro II, Noviembre de 2011, Tomo 1; Materia(s): Constitucional; Tesis: 1a. CCXX/2011 (9a.); Página: 190* ***5.- [12]Adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público. El artículo 2o., fracción XII, de la ley relativa, que prevé el procedimiento para determinar el precio conveniente en una licitación pública, respeta la garantía de seguridad jurídica.[◊]***	**Artículo 2 (fracción XII).-** Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por: … XII. Precio conveniente: es aquel que se determina a partir de obtener el promedio de los precios preponderantes que resulten de las proposiciones aceptadas técnicamente en la licitación, y a éste se le resta el porcentaje que determine la dependencia o entidad en sus políticas, bases y lineamientos.	**Artículo 51 (apartado B, fracción III).-** Los criterios para evaluar la solvencia de las proposiciones, deberán guardar relación con los requisitos y especificaciones señalados en la convocatoria a la licitación pública para la integración de las propuestas técnicas y económicas. … B. El cálculo del precio conveniente únicamente se llevará a cabo cuando se requiera acreditar que un precio ofertado se desecha porque se encuentra por debajo del precio determinado conforme a la fracción XII del artículo 2 de la Ley. Para calcular cuándo un precio es conveniente, los responsables de hacer la evaluación económica aplicarán la siguiente operación: … III. Al promedio señalado en la fracción anterior se le restará el porcentaje fijado en las políticas, bases y lineamientos de las dependencias y entidades, el cual no podrá ser inferior al cuarenta por ciento, y … La convocante que, en términos de lo dispuesto en este artículo, deseche los precios por considerar que no son convenientes o determine que son no aceptables, no podrá adjudicar el contrato a los licitantes cuyas proposiciones contengan dichos precios, debiendo incorporar al fallo lo señalado en la fracción III del artículo 37 de la Ley.

[12] Tesis Aisladas relacionadas con números de registro 160716 y 160717, en cuanto a la garantía de seguridad jurídica, relativo al artículo 16 Constitucional.

[◊] Esta tesis corresponde al engrose A.R. 587/2011, que se encuentra desarrollado en el inciso I), a), ii), del Capítulo VI de la Tesis.

[12] Tesis Aisladas relacionadas con números de registro 160716 y 160718, en cuanto a la garantía de seguridad jurídica, relativo al artículo 16 Constitucional.

[◊] Esta tesis corresponde al engrose A.R. 587/2011, que se encuentra desarrollado en el inciso I), a), ii), del Capítulo VI de la Tesis.

B) Jurisprudencias y tesis aisladas afines.

JURISPRUDENCIAS Y TESIS AISLADAS	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
Época: Décima Época; Registro: 160717; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Libro II, Noviembre de 2011, Tomo 1; Materia(s): Constitucional; Tesis: 1a. CCXIX/2011 (9a.); Página: 190.		
6.- [12]Adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público. El artículo 36 bis, fracción II, de la ley relativa, al disponer que el precio ofertado no debe ser menor al precio conveniente, no viola la garantía de seguridad jurídica.◊ *Época: Décima; Registro: 160716; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Libro II, Noviembre de 2011, Tomo 1; Materia(s): Constitucional; Tesis: 1a. CCXXI/2011 (9a.); Página: 191.*	**Artículo 36 Bis (fracción II).-** Una vez hecha la evaluación de las proposiciones, el contrato se adjudicará al licitante cuya oferta resulte solvente, porque cumple con los requisitos legales, técnicos y económicos establecidos en la convocatoria a la licitación, y por tanto garantiza el cumplimiento de las obligaciones respectivas y, en su caso: I. La proposición haya obtenido el mejor resultado en la evaluación combinada de puntos y porcentajes, o bien, de costo beneficio; II. De no haberse utilizado las modalidades mencionadas en la fracción anterior, la proposición hubiera ofertado el precio más bajo, siempre y cuando éste resulte conveniente. Los precios ofertados que se encuentren por debajo del precio conveniente, podrán ser desechados por la convocante, y …	**Artículo 51 (apartados A y B).-** El cálculo de los precios no aceptables y los precios convenientes, sólo se realizará cuando se utilice el criterio de evaluación binario y al efecto se atenderá lo siguiente: A. El cálculo de los precios no aceptables se llevará a cabo únicamente cuando se requiera acreditar que un precio ofertado es inaceptable para efectos de adjudicación del contrato, porque resulta superior al porcentaje a que hace referencia la fracción XI del artículo 2 de la Ley, o para efectos de lo dispuesto en los incisos b) de la fracción II y a) de la fracción III del artículo 28 o primer y segundo párrafos del artículo 38 de la Ley. … B. El cálculo del precio conveniente únicamente se llevará a cabo cuando se requiera acreditar que un precio ofertado se desecha porque se encuentra por debajo del precio determinado conforme a la fracción XII del artículo 2 de la Ley. …

[12] Tesis Aisladas relacionadas con números de registro 160717 y 160718, en cuanto a la garantía de seguridad jurídica, relativo al artículo 16 Constitucional.

◊ Esta tesis corresponde al engrose A.R. 587/2011, que se encuentra desarrollado en el inciso I), a), ii), del Capítulo VI de la Tesis.

B) Jurisprudencias y tesis aisladas afines.

JURISPRUDENCIAS Y TESIS AISLADAS	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
7.- [13]Adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público. El artículo 50, fracción VI, de la ley relativa, publicada en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de enero de dos mil, no transgrede la garantía de libertad de trabajo prevista en el artículo 5o. De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.[◊] *Época: Novena Época; Registro: 188894; Instancia: Segunda Sala; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XIV, Septiembre de 2001; Materia(s): Constitucional, Administrativa; Tesis: 2a. CLXXIV/2001; Página: 516.*	**Artículo 50 (fracción VI).-** Las dependencias y entidades se abstendrán de recibir proposiciones o adjudicar contrato alguno en las materias a que se refiere esta Ley, con las personas siguientes: … VI. Aquellas que hayan sido declaradas sujetas a concurso mercantil o alguna figura análoga; ***Texto de la ley con las reformas del 4 de enero de 2000:*** **Artículo 50 (fracción VI).-** Las dependencias y entidades se abstendrán de recibir propuestas o celebrar contrato alguno en las materias a que se refiere esta Ley, con las personas siguientes: … VI. Aquellas que hayan sido declaradas en suspensión de pagos, estado de quiebra o sujetas a concurso de acreedores;	
8.- [14]Adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público. El artículo 59 de la ley relativa no permite a la autoridad administrativa determinar en	**Artículo 59.-** Los licitantes o proveedores que infrinjan las disposiciones de esta Ley, serán sancionados por la Secretaría de la Función Pública con multa equivalente a la cantidad de cincuenta hasta mil veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal elevado al mes, en la fecha de la infracción.	**Artículo 109.-** Se sancionará en términos del primer párrafo del artículo 59 de la Ley, a los licitantes que injustificadamente y por causas imputables a los mismos se abstengan de firmar contratos según lo previsto por el segundo párrafo del artículo 46 de dicho ordenamiento, cuando el monto de éstos

[13] Jurisprudencia relacionada con número de registro 178492 y Tesis Aisladas con números de registro 175160, 179274, 170561 y 190614, respecto al artículo 5° Constitucional relativo a no violar la garantía de trabajo.

[◊] Esta tesis se encuentra relacionada con el engrose A.R. 169/2001, mismo que se encuentra desarrollado en el inciso I, a), iii), del Capítulo VI de la Tesis.

[14] Tesis Aisladas relacionadas con números de registro 171251, 174892 y 190621, en cuanto al artículo 22 Constitucional, relativo a que quedan prohibidas… la multa excesiva… las penas inusitadas y transcendentales.

B) Jurisprudencias y tesis aisladas afines.

JURISPRUDENCIAS Y TESIS AISLADAS	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
forma discrecional las conductas que deben considerarse como infracciones y, por tanto, no viola el artículo 22 constitucional.◊ *Época: Novena Época; Registro: 171252; Instancia: Segunda Sala; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XXVI, Octubre de 2007; Materia(s): Constitucional, Administrativa; Tesis: 2a. CXLV/2007; Página: 439.* ***9.- [14]Adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público. El artículo 59 de la ley relativa no viola el numeral 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.***◊ *Época: Novena Época; Registro: 171251; Instancia: Segunda Sala; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su*	Cuando los licitantes, injustificadamente y por causas imputables a los mismos, no formalicen contratos cuyo monto no exceda de cincuenta veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal elevado al mes, serán sancionados con multa equivalente a la cantidad de diez hasta cuarenta y cinco veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal elevado al mes, en la fecha de la infracción. ***Texto de la ley con las reformas del 7 de julio de 2005:*** **Artículo 59.-** Los licitantes o proveedores que infrinjan las disposiciones de esta Ley, serán sancionados por la Contraloría con multa equivalente a la cantidad de cincuenta hasta mil veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal elevado al mes, en la fecha de la infracción. **Artículo 60 (fracción IV).-** La Secretaría de la Función Pública, además de la sanción a que se refiere el primer párrafo del artículo anterior, inhabilitará temporalmente para participar de manera directa o por interpósita persona en procedimientos de contratación	exceda de cincuenta veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal elevado al mes. Los licitantes que injustificadamente y por causas imputables a ellos no formalicen dos o más contratos con cualquier dependencia o entidad, dentro del plazo de dos años, serán sancionados en términos del primer párrafo del artículo 59 de la Ley por lo que respecta al segundo y sucesivos contratos no firmados, y se les inhabilitará conforme a lo dispuesto por la fracción I del artículo 60 de la Ley. Se presumirá que la falta de firma del contrato por parte del licitante a quien se le adjudicó el mismo le es imputable a éste, salvo prueba en contrario que aporte durante el procedimiento administrativo sancionador con la que justifique dicha omisión. **Artículo 88 (fracción III).-** Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley, respecto de las fracciones y párrafos de dicho precepto legal que a continuación se señalan, deberá considerarse lo

◊ Esta tesis corresponde al engrose A.R. 489/2007, que se encuentra desarrollado en el inciso N), a), i), del Capítulo VI de la Tesis.

[14] Tesis Aisladas relacionadas con números de registro 171252, 174892 y 190621, en cuanto al artículo 22 Constitucional, relativo a que quedan prohibidas… la multa excesiva… las penas inusitadas y transcendentales.

◊ Esta tesis corresponde al engrose A.R. 489/2007, que se encuentra desarrollado en el inciso N), a), i), del Capítulo VI de la Tesis.

B) Jurisprudencias y tesis aisladas afines.

JURISPRUDENCIAS Y TESIS AISLADAS	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
Gaceta; Tomo XXVI, Octubre de 2007; Materia(s): Constitucional, Administrativa; Tesis: 2a. CXLVI/2007; Página: 440. ***10.- [15]Adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público. El artículo 59 de la ley relativa no viola las garantías de legalidad y seguridad jurídica (legislación vigente a partir del 8 de julio de 2005).***[◊] *Época: Novena Época; Registro: 170563; Instancia: Segunda Sala; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XXVII, Enero de 2008; Materia(s): Constitucional, Administrativa; Tesis: 2a. CCIV/2007; Página: 571* ***11.- [15]Adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público. El***	o celebrar contratos regulados por esta Ley, a las personas que se encuentren en alguno de los supuestos siguientes: … IV. Las que proporcionen información falsa o que actúen con dolo o mala fe en algún procedimiento de contratación, en la celebración del contrato o durante su vigencia, o bien, en la presentación o desahogo de una solicitud de conciliación o de una inconformidad; **Artículo 61 (primer párrafo).-** La Secretaría de la Función Pública impondrá las sanciones considerando: I. Los daños o perjuicios que se hubieren producido con motivo de la infracción; II. El carácter intencional o no de la acción u omisión constitutiva de la infracción; III. La gravedad de la infracción, y IV. Las condiciones del infractor.	siguiente: … III. Las proposiciones de las personas que se ubiquen en el supuesto a que se refiere la fracción VII, serán desechadas de la partida en la que se presentaron, debiendo comunicar lo anterior al órgano interno de control para efectos de determinar si se actualiza lo dispuesto por la fracción IV del artículo 60 de la Ley, y … **Artículo 110.-** Cuando una instancia de inconformidad sea sobreseída o resuelta como infundada y en la misma se determine que se promovió para retrasar o entorpecer la contratación, se sancionará al inconforme con inhabilitación en términos de la fracción IV del artículo 60 de la Ley y multa de acuerdo con el primer párrafo del artículo 59 de la Ley.

[15] Tesis Aislada relacionada con el número de registro 171551 relativo a las garantías de legalidad y seguridad, establecidas en los artículos 14 y 16 constitucionales.

[◊] Esta tesis corresponde al engrose A.R. 984/2007, que se encuentra desarrollado en el inciso J), ii), del Capítulo VI de la Tesis.

[15] Tesis Aislada relacionada con el número de registro 170563 relativo a las garantías de legalidad y seguridad, establecidas en los artículos 14 y 16 constitucionales.

B) Jurisprudencias y tesis aisladas afines.

JURISPRUDENCIAS Y TESIS AISLADAS	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
artículo 59, en relación con el 60, fracción IV, y 61 de la ley relativa, al prever la imposición de una multa a los licitantes o proveedores que hayan proporcionado información falsa en algún procedimiento de contratación, no violan las garantías de seguridad jurídica y legalidad. *Época: Novena Época; Registro: 171551; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XXVI, Septiembre de 2007; Materia(s): Constitucional, Administrativa; Tesis: 1a. CCVII/2007; Página: 373.*		
12.- ◊Adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, El artículo 60, antepenúltimo párrafo, de la ley relativa no viola la garantía de seguridad jurídica.[16] *Registro: 170141.*	**Artículo 60 (antepenúltimo párrafo).-** Si al día en que se cumpla el plazo de inhabilitación a que se refiere el párrafo que antecede el sancionado no ha pagado la multa que hubiere sido impuesta en términos del artículo anterior, la mencionada inhabilitación subsistirá hasta que se realice el pago correspondiente.	**Artículo 113 (primer párrafo).-** Para efectos de lo dispuesto por el tercer párrafo[17] del artículo 60 de la Ley, el licitante o proveedor acreditará que ha pagado la multa que se le impuso, presentando a la Secretaría de la Función Pública el documento comprobatorio del pago correspondiente, a fin de que se publique en CompraNet que la inhabilitación ha dejado de surtir efectos.

◊ Esta Tesis se encuentra relacionada con el engrose A.R. 1091/2007, mismo que se encuentra desarrollado en el inciso B), ii), del Capítulo VI de la Tesis.

[16] El artículo 14 constitucional contiene la garantía de seguridad jurídica más amplia que en Derecho procede; consagrando las cuatro garantías de seguridad siguientes: a) irretroactividad de las normas, b) garantía de audiencia, c)exacta aplicación de la ley en materia penal y d) la legalidad jurisdiccional en materia civil y por extensión jurisprudencial en las materias administrativa, mercantil y fiscal.

[17] La indicación de tercer párrafo, se refiere al antepenúltimo párrafo del artículo 60 de la LAASSP. La garantía de la seguridad jurídica forma parte del artículo 14 y 16.

B) Jurisprudencias y tesis aisladas afines.

JURISPRUDENCIAS Y TESIS AISLADAS	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
Localización: 9ª. Época; 2ª. Sala; S.J.F. y su Gaceta; XXVII, Marzo de 2008; Pág. 277; [T.A.]		
13.- [18]Adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público. El artículo 60 de la ley relativa es congruente con el artículo 134 de la Constitución Federal (legislación vigente hasta el 7 de julio de 2005).◊ *Época: Novena; Registro: 175161; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XXIII, Mayo de 2006; Materia(s): Constitucional, Administrativa; Tesis: 1a. XCI/2006; Página: 266.* **14.- [13]*Adquisiciones,***	**Artículo 60 (fracción IV y antepenúltimo párrafo).-** La Secretaría de la Función Pública, además de la sanción a que se refiere el primer párrafo del artículo anterior, inhabilitará temporalmente para participar de manera directa o por interpósita persona en procedimientos de contratación o celebrar contratos regulados por esta Ley, a las personas que se encuentren en alguno de los supuestos siguientes: … IV. Las que proporcionen información falsa o que actúen con dolo o mala fe en algún procedimiento de contratación, en la celebración del contrato o durante su vigencia, o bien, en la presentación o desahogo de una solicitud de conciliación o de una inconformidad; … Si al día en que se cumpla el plazo de inhabilitación a que se refiere el párrafo que antecede el sancionado no ha pagado la multa que hubiere sido impuesta en términos del artículo anterior, la mencionada inhabilitación subsistirá hasta que se realice el pago	**Artículo 88 (fracción III).-** Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley, respecto de las fracciones y párrafos de dicho precepto legal que a continuación se señalan, deberá considerarse lo siguiente: … III. Las proposiciones de las personas que se ubiquen en el supuesto a que se refiere la fracción VII, serán desechadas de la partida en la que se presentaron, debiendo comunicar lo anterior al órgano interno de control para efectos de determinar si se actualiza lo dispuesto por la fracción IV del artículo 60 de la Ley, y … **Artículo 110.-** Cuando una instancia de inconformidad sea sobreseída o resuelta como infundada y en la misma se determine que se promovió para retrasar o entorpecer la contratación, se sancionará al inconforme con inhabilitación en términos de la fracción IV del artículo 60 de la Ley y multa de acuerdo con el primer párrafo del artículo 59

[18] Jurisprudencia relacionada con número de registro 162971 y Tesis Aisladas relacionadas con números de registro 172010, 2001223, 175366 y 175297, en cuanto al artículo 134 Constitucional, tercer párrafo, anteriormente segundo párrafo, establece que las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

◊ Esta tesis corresponde al engrose A.R. 316/2006, que se encuentra desarrollado en el inciso D), b), i), del Capítulo VI de la Tesis.

[13] Jurisprudencia relacionada con números de registro 178492 y Tesis Aisladas con números de registros 170561, 179274, 188894, y 190614, respecto al artículo 5° Constitucional relativo a no violar la garantía de trabajo.

B) Jurisprudencias y tesis aisladas afines.

JURISPRUDENCIAS Y TESIS AISLADAS	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
Arrendamientos y Servicios del Sector Público. El artículo 60 de la ley relativa es congruente con el artículo 5o. de la Constitución Federal (legislación vigente hasta el 7 de julio de 2005).[◊] *Época: Novena; Registro: 175160; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XXIII, Mayo de 2006; Materia(s): Constitucional, Administrativa; Tesis: 1a. LXXXIX/2006; Página: 265.* ***15.- [19]Adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público. El artículo 60 de la ley relativa no transgrede la garantía de audiencia (legislación vigente hasta el 7 de julio de 2005).***[◊] *Época: Novena; Registro: 175159; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta;*	correspondiente. ***Texto de la ley con las reformas del 7 de julio de 2005:*** **Artículo 60.-** La Secretaría de la Función Pública, además de la sanción a que se refiere el artículo anterior, inhabilitará temporalmente para participar en procedimientos de contratación o celebrar contratos regulados por esta Ley, a las personas que se encuentren en alguno de los supuestos siguientes: I. Los licitantes que injustificadamente y por causas imputables a los mismos no formalicen el contrato adjudicado por la convocante; II. Los proveedores que se encuentren en el supuesto de la fracción III del artículo 50 de este ordenamiento, respecto de dos o más dependencias o entidades; III. Los proveedores que no cumplan con sus obligaciones contractuales por causas imputables a ellos y que, como consecuencia, causen daños o perjuicios graves a la dependencia o entidad de que se trate; así como, aquellos que entreguen bienes o servicios con especificaciones distintas de las convenidas; IV. Las que proporcionen información falsa o que actúen con dolo o mala fe en algún procedimiento de contratación, en la celebración del contrato o durante su vigencia, o bien, en la presentación o desahogo de una queja en una audiencia de conciliación o de una inconformidad, y La inhabilitación que se imponga no será menor de tres meses ni mayor de cinco años, plazo que comenzará a	de la Ley.

◊ Esta tesis corresponde al engrose A.R. 316/2006, que se encuentra desarrollado en el inciso D), b), i), del Capítulo VI de la Tesis.

19 Jurisprudencia relacionada con número de registro 170983 y Tesis Aisladas con números de registro 189051, 189495 y 160715, en cuanto al artículo 14 Constitucional, segundo párrafo de la garantía de audiencia: nadie puede ser privado de la libertad, propiedad, posesiones o derechos sino mediante juicio.

◊ Esta tesis corresponde al engrose A.R. 316/2006, que se encuentra desarrollado en el inciso D), b), i), del Capítulo VI de la Tesis.

B) Jurisprudencias y tesis aisladas afines.

JURISPRUDENCIAS Y TESIS AISLADAS	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
Tomo XXIII, Mayo de 2006; Materia(s): Constitucional, Administrativa; Tesis: 1a. XC/2006; Página: 266	contarse a partir del día siguiente a la fecha en que la Contraloría la haga del conocimiento de las dependencias y entidades, mediante la publicación de la circular respectiva en el Diario Oficial de la Federación. Si al día en que se cumpla el plazo de inhabilitación a que se refiere el párrafo que antecede el sancionado no ha pagado la multa que hubiere sido impuesta en términos del artículo anterior, la mencionada inhabilitación subsistirá hasta que se realice el pago correspondiente. Las dependencias y entidades dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha en que tengan conocimiento de alguna infracción a las disposiciones de esta Ley, remitirán a la Contraloría la documentación comprobatoria de los hechos presumiblemente constitutivos de la infracción. En casos excepcionales, previa autorización de la Secretaría de la Función Pública, las dependencias y entidades podrán aceptar proposiciones de proveedores inhabilitados cuando resulte indispensable por ser éstos los únicos posibles oferentes en el mercado.	
16.- [20]Adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público. El artículo 60, fracción IV, de la ley relativa no viola el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (legislación vigente a partir	***Texto vigente del 28 de mayo de 2009:*** **Artículo 60 (fracción IV).-** La Secretaría de la Función Pública, además de la sanción a que se refiere el primer párrafo del artículo anterior, inhabilitará temporalmente para *participar de manera directa o por interpósita persona en procedimientos de contratación* o celebrar contratos regulados por esta Ley, a las personas que se encuentren en alguno de los supuestos siguientes:	**Artículo 88.-** Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley, respecto de las fracciones y párrafos de dicho precepto legal que a continuación se señalan, deberá considerarse lo siguiente: … III. Las proposiciones de las personas que se ubiquen en el supuesto a que se refiere la fracción VII, serán desechadas de la partida en la que se presentaron, debiendo comunicar lo anterior al órgano interno de

[20] El artículo 28 Constitucional se refiere a la prohibición de los monopolios y al derecho humano de acceso al mercado en condiciones de libre competencia y concurrencia.

B) Jurisprudencias y tesis aisladas afines.

JURISPRUDENCIAS Y TESIS AISLADAS	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
del 8 de julio de 2005).[◊] *Época: Novena Época; Registro: 170562; Instancia: Segunda Sala; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XXVII, Enero de 2008; Materia(s): Constitucional, Administrativa; Tesis: 2a. CCV/2007; Página: 572.* ***17.- [13]Adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público. El artículo 60, fracción IV, de la ley relativa no viola la garantía de libertad de trabajo (legislación vigente a partir del 8 de julio de 2005).***[◊] *Época: Novena Época; Registro: 170561; Instancia: Segunda Sala; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XXVII, Enero de 2008; Materia(s): Constitucional, Administrativa; Tesis: 2a. CCVI/2007; Página: 572.*	… IV. Las que proporcionen información falsa o que actúen con dolo o mala fe en algún procedimiento de contratación, en la celebración del contrato o durante su vigencia, o bien, en la presentación o desahogo de una solicitud de conciliación o de una inconformidad; ***Texto de la ley con las reformas del 7 de julio de 2005:*** **Artículo 60 (fracción IV).-** La Secretaría de la Función Pública, además de la sanción a que se refiere el artículo anterior, inhabilitará temporalmente para participar en procedimientos de contratación o celebrar contratos regulados por esta Ley, a las personas que se encuentren en alguno de los supuestos siguientes: … IV. Las que proporcionen información falsa o que actúen con dolo o mala fe en algún procedimiento de contratación, en la celebración del contrato o durante su vigencia, o bien, en la presentación o desahogo de una queja en una audiencia de conciliación o de una inconformidad, y	control para efectos de determinar si se actualiza lo dispuesto por la fracción IV del artículo 60 de la Ley, y … **Artículo 110.-** Cuando una instancia de inconformidad sea sobreseída o resuelta como infundada y en la misma se determine que se promovió para retrasar o entorpecer la contratación, se sancionará al inconforme con inhabilitación en términos de la fracción IV del artículo 60 de la Ley y multa de acuerdo con el primer párrafo del artículo 59 de la Ley.

◊ Esta tesis corresponde al engrose A.R. 984/2007, que se encuentra desarrollado en el inciso J), ii), del Capítulo VI de la Tesis.

[13] Jurisprudencia relacionada con número de registro 178492 y Tesis Aisladas con números de registro 175160, 179274, 188894 y 190614, respecto al artículo 5° Constitucional relativo a no violar la garantía de trabajo.

◊ Esta tesis corresponde al engrose A.R. 984/2007, que se encuentra desarrollado en el inciso J), ii), del Capítulo VI de la Tesis.

B) Jurisprudencias y tesis aisladas afines.

JURISPRUDENCIAS Y TESIS AISLADAS	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
18.- [21]***Adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público. El artículo 60, primer párrafo y fracción IV, de la ley relativa no transgrede el artículo 21 de la Constitución Federal.***[◊] *Época: Novena Época; Registro: 173632; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XXV, Enero de 2007; Materia(s): Constitucional, Administrativa; Tesis: 1a. V/2007; Página: 471*.	**Artículo 60 (fracción IV).-** La Secretaría de la Función Pública, además de la sanción a que se refiere el primer párrafo del artículo anterior, inhabilitará temporalmente para participar de manera directa o por interpósita persona en procedimientos de contratación o celebrar contratos regulados por esta Ley, a las personas que se encuentren en alguno de los supuestos siguientes: … IV. Las que proporcionen información falsa o que actúen con dolo o mala fe en algún procedimiento de contratación, en la celebración del contrato o durante su vigencia, o bien, en la presentación o desahogo de una solicitud de conciliación o de una inconformidad;	**Artículo 88 (fracción III).-** Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley, respecto de las fracciones y párrafos de dicho precepto legal que a continuación se señalan, deberá considerarse lo siguiente: … III. Las proposiciones de las personas que se ubiquen en el supuesto a que se refiere la fracción VII, serán desechadas de la partida en la que se presentaron, debiendo comunicar lo anterior al órgano interno de control para efectos de determinar si se actualiza lo dispuesto por la fracción IV del artículo 60 de la Ley, y … **Artículo 110.-** Cuando una instancia de inconformidad sea sobreseída o resuelta como infundada y en la misma se determine que se promovió para retrasar o entorpecer la contratación, se sancionará al inconforme con inhabilitación en términos de la fracción IV del artículo 60 de la Ley y multa de acuerdo con el primer párrafo del artículo 59 de la Ley.
19.- [◊]***Adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público. El artículo 65 de la ley relativa, al condicionar la procedencia del recurso de inconformidad a que el licitante asista a la junta de aclaraciones, viola la garantía de audiencia (texto***		**Artículo 117.-** Tratándose de licitaciones públicas internacionales bajo la cobertura de tratados, conforme a lo dispuesto por el artículo 4 de la Ley, el plazo para promover la inconformidad será de diez días hábiles. En los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas en las que se celebre junta de aclaraciones, el plazo para promover la inconformidad comenzará a partir del día siguiente al de la celebración de la última junta. En caso de que no se

[21] Tesis Aisladas relacionadas con números de registro 174894 y 174893, en cuanto al artículo 21, primer párrafo Constitucional, relativo a que no se viola en tanto la inhabilitación temporal no es una pena sino una sanción administrativa y es distinta a la multa o arresto que son atribuciones del MP y la policía para la investigación de delitos.

[◊] Esta tesis corresponde al engrose A.R. 1389/2006, que se encuentra desarrollado en el inciso J), iii), del Capítulo VI de la Tesis.

[◊] Esta tesis se encuentra relacionada con el engrose A.R. 626/2010, mismo que se encuentra desarrollado en el inciso I), a), i), del Capítulo VI de la Tesis.

B) Jurisprudencias y tesis aisladas afines.

JURISPRUDENCIAS Y TESIS AISLADAS	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de mayo de 2009). *Registro: 163700. Localización: 9ª. Época; 2ª. Sala; S.J.F. y su Gaceta; XXXII, Marzo de 2010; XXXII Pág. 377 [TA]*	**Artículo 65.-** La Secretaría de la Función Pública conocerá de las inconformidades que se promuevan contra los actos de los procedimientos de licitación pública o invitación a cuando menos tres personas que se indican a continuación: I. La convocatoria a la licitación, y las juntas de aclaraciones. En este supuesto, la inconformidad sólo podrá presentarse por el interesado que haya manifestado su interés por participar en el procedimiento según lo establecido en el artículo 33 Bis de esta Ley, dentro de los seis días hábiles siguientes a la celebración de la última junta de aclaraciones… **Artículo 67 (fracción I).-** La instancia de inconformidad es improcedente: I. Contra actos diversos a los establecidos en el artículo 65 de esta Ley; … **Artículo 71 (primer párrafo).-** La autoridad que conozca de la inconformidad la examinará y si encontrare motivo manifiesto de improcedencia, la desechará de plano. **Artículo 33 Bis.-** Para la junta de aclaraciones se considerará lo siguiente: El acto será presidido por el servidor público designado por la convocante, quién deberá ser asistido por un representante del área técnica o usuaria de los bienes, arrendamientos o servicios objeto de la contratación, a fin de que se resuelvan en forma clara y precisa las dudas y planteamientos de los licitantes relacionados con los aspectos contenidos en la convocatoria.	realice la junta de aclaraciones, el plazo se computará a partir del día siguiente al de la recepción de la invitación. **Artículo 46.-** La junta de aclaraciones, se llevará a cabo conforme a lo siguiente: I. En la fecha y hora establecida para la primera junta de aclaraciones en las licitaciones públicas presenciales, el servidor público que la presida procederá a dar contestación a las solicitudes de aclaración, mencionando el nombre del o los licitantes que las presentaron. La convocante podrá optar por dar contestación a dichas solicitudes de manera individual o de manera conjunta tratándose de aquéllas que hubiera agrupado por corresponder a un mismo punto o apartado de la convocatoria a la licitación pública… **Artículo 116.-** Al escrito inicial de las inconformidades a que se refiere la fracción I del artículo 65 de la Ley, deberá acompañarse la manifestación a que se refiere el tercer párrafo del artículo 33 Bis de la Ley, con el acuse de recibo o sello de la dependencia o entidad correspondiente, o bien, la constancia que se obtenga de su envío en forma electrónica, a través de CompraNet. La omisión de exhibir el documento referido en el párrafo anterior será motivo de prevención en términos de lo dispuesto por el penúltimo párrafo del artículo 66 de la Ley

B) Jurisprudencias y tesis aisladas afines.

JURISPRUDENCIAS Y TESIS AISLADAS	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
20.- [19]Adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público. El artículo 65 de la ley relativa, al obligar al licitante a que en el momento de la celebración de la junta de aclaraciones objete fundadamente los actos que considere ilícitos, viola el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.[◊] *Época: Novena Época; Registro: 170983; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XXVI, Noviembre de 2007; Materia(s): Constitucional, Administrativa; Tesis: 1a./J. 154/2007; Página: 5*.	**Artículo 65 (fracción I).-** La Secretaría de la Función Pública conocerá de las inconformidades que se promuevan contra los actos de los procedimientos de licitación pública o invitación a cuando menos tres personas que se indican a continuación: I. La convocatoria a la licitación, y las juntas de aclaraciones. En este supuesto, la inconformidad sólo podrá presentarse por el interesado que haya manifestado su interés por participar en el procedimiento según lo establecido en el artículo 33 Bis de esta Ley, dentro de los seis días hábiles siguientes a la celebración de la última junta de aclaraciones; ***Texto de la ley con las reformas del 7 de julio de 2005:*** **Artículo 65 (fracción I).-** Podrá interponerse inconformidad ante la Secretaría de la Función Pública por actos del procedimiento de contratación que contravengan las disposiciones que rigen las materias objeto de esta Ley, cuando dichos actos se relacionen con: I. La convocatoria, las bases de licitación o la junta de aclaraciones, siempre que el interesado haya adquirido las bases y manifestado su objeción, así como los argumentos y razones jurídicas que la funden, en la propia junta de aclaraciones.	**Artículo 116 (primer párrafo).-** Al escrito inicial de las inconformidades a que se refiere la fracción I del artículo 65 de la Ley, deberá acompañarse la manifestación a que se refiere el tercer párrafo del artículo 33 Bis de la Ley, con el acuse de recibo o sello de la dependencia o entidad correspondiente, o bien, la constancia que se obtenga de su envío en forma electrónica, a través de CompraNet.
21.- Adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público. La inconformidad prevista en el Artículo 65 de la ley relativa		**Artículo 117.-** Tratándose de licitaciones públicas internacionales bajo la cobertura de tratados, conforme a lo dispuesto por el artículo 4 de la Ley, el plazo para promover la inconformidad será de diez días hábiles.

[19] Tesis Aisladas relacionadas con números de registro 175159, 189495, 189051 y 160715, en cuanto al artículo 14 Constitucional, párrafo segundo de la garantía de audiencia: nadie puede ser privado de la libertad, propiedad, posesiones o derechos sino mediante juicio.

[◊] Esta tesis corresponde al engrose A.R. 967/2006, que se encuentra desarrollado en el inciso D), c), i), del Capítulo VI de la Tesis.

JURISPRUDENCIAS Y TESIS AISLADAS	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
no procede contra actos emitidos dentro del procedimiento de contratación por adjudicación directa (legislación vigente del 8 de julio de 2005 al 26 de junio de 2009). *[J]; 9a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXX, Noviembre de 2009; Pág. 421; Registro: 166036*	**Artículo 65.-** La Secretaría de la Función Pública conocerá de las inconformidades que se promuevan contra los actos de los procedimientos de licitación pública o invitación a cuando menos tres personas que se indican a continuación: I. La convocatoria a la licitación, y las juntas de aclaraciones. En este supuesto, la inconformidad sólo podrá presentarse por el interesado que haya manifestado su interés por participar en el procedimiento según lo establecido en el artículo 33 Bis de esta Ley, dentro de los seis días hábiles siguientes a la celebración de la última junta de aclaraciones… **Artículo 67 (fracción I).-** La instancia de inconformidad es improcedente: I. Contra actos diversos a los establecidos en el artículo 65 de esta Ley; … **Artículo 71 (primer párrafo).-** La autoridad que conozca de la inconformidad la examinará y si encontrare motivo manifiesto de improcedencia, la desechará de plano. **Artículo 33 Bis.-** Para la junta de aclaraciones se considerará lo siguiente: El acto será presidido por el servidor público designado por la convocante, quién deberá ser asistido por un representante del área técnica o usuaria de los bienes, arrendamientos o servicios objeto de la contratación, a	En los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas en las que se celebre junta de aclaraciones, el plazo para promover la inconformidad comenzará a partir del día siguiente al de la celebración de la última junta. En caso de que no se realice la junta de aclaraciones, el plazo se computará a partir del día siguiente al de la recepción de la invitación. **Artículo 46.-** La junta de aclaraciones, se llevará a cabo conforme a lo siguiente: I. En la fecha y hora establecida para la primera junta de aclaraciones en las licitaciones públicas presenciales, el servidor público que la presida procederá a dar contestación a las solicitudes de

JURISPRUDENCIAS Y TESIS AISLADAS	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
	fin de que se resuelvan en forma clara y precisa las dudas y planteamientos de los licitantes relacionados con los aspectos contenidos en la convocatoria.	aclaración, mencionando el nombre del o los licitantes que las presentaron. La convocante podrá optar por dar contestación a dichas solicitudes de manera individual o de manera conjunta tratándose de aquéllas que hubiera agrupado por corresponder a un mismo punto o apartado de la convocatoria a la licitación pública… **Artículo 116.-** Al escrito inicial de las inconformidades a que se refiere la fracción I del artículo 65 de la Ley, deberá acompañarse la manifestación a que se refiere el tercer párrafo del artículo 33 Bis de la Ley, con el acuse de recibo o sello de la dependencia o entidad correspondiente, o bien, la constancia que se obtenga de su envío en forma electrónica, a través de CompraNet. La omisión de exhibir el documento referido en el párrafo anterior será motivo de prevención en términos de lo dispuesto por el penúltimo párrafo del artículo 66 de la Ley.
22.- Adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público. La multa e inhabilitación temporal para licitantes ganadores previstas en los artículos 59 y 60, fracción I, de la ley relativa, son sanciones razonables.◊ *[TA]; 10a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 1; Pág. 477; Registro: 2001222*	**Artículo 59.-** Los licitantes o proveedores que infrinjan las disposiciones de esta Ley, serán sancionados por la Secretaría de la Función Pública con multa equivalente a la cantidad de cincuenta hasta mil veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal elevado al mes, en la fecha de la infracción. Cuando los licitantes, injustificadamente y por causas imputables a los mismos, no formalicen contratos cuyo monto no exceda de cincuenta veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal elevado al mes, serán sancionados con multa equivalente a la cantidad de diez hasta cuarenta y cinco veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal elevado al mes, en la fecha de la infracción.	**Artículo 109.-** Se sancionará en términos del primer párrafo del artículo 59 de la Ley, a los licitantes que injustificadamente y por causas imputables a los mismos se abstengan de firmar contratos según lo previsto por el segundo párrafo del artículo 46 de dicho ordenamiento, cuando el monto de éstos exceda de cincuenta veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal elevado al mes. … **Artículo 110.-** Cuando una instancia de inconformidad sea sobreseída o resuelta como infundada y en la misma se determine que se promovió para retrasar o entorpecer la contratación, se sancionará al inconforme con inhabilitación en términos de la fracción IV del artículo 60 de la Ley y

◊ Esta tesis corresponde al engrose A.R. 89/2012, que se encuentra desarrollado en el inciso D, inciso a) i, del Capítulo VI de la Tesis.

B) Jurisprudencias y tesis aisladas afines.

JURISPRUDENCIAS Y TESIS AISLADAS	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
	Artículo 60.- La Secretaría de la Función Pública, además de la sanción a que se refiere el primer párrafo del artículo anterior, inhabilitará temporalmente para participar de manera directa o por interpósita persona en procedimientos de contratación o celebrar contratos regulados por esta Ley, a las personas que se encuentren en alguno de los supuestos siguientes: I. Los licitantes que injustificadamente y por causas imputables a los mismos no formalicen dos o más contratos que les haya adjudicado cualquier dependencia o entidad en el plazo de dos años calendario, contados a partir del día en que haya fenecido el término para la formalización del primer contrato no formalizado; …	multa de acuerdo con el primer párrafo del artículo 59 de la Ley. **Artículo 88 (fracción IV).-** Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley, respecto de las fracciones y párrafos de dicho precepto legal que a continuación se señalan, deberá considerarse lo siguiente: … IV. Se entenderá que el Oficial Mayor o equivalente de la dependencia o entidad cumple con lo dispuesto en el último párrafo, cuando ingrese a CompraNet la información de las personas a que hacen referencia las fracciones III, V y XIII de dicho artículo y en relación con aquéllas que señalan las demás fracciones, cuando se tenga conocimiento de la información que se prevé en las mismas; en ambos casos la información deberá incorporarse a CompraNet en un plazo de tres días hábiles, contados a partir de aquél en que disponga de dicha información... **Artículo 109 (segundo párrafo).-** Los licitantes que injustificadamente y por causas imputables a ellos no formalicen dos o más contratos con cualquier dependencia o entidad, dentro del plazo de dos años, serán sancionados en términos del primer párrafo del artículo 59 de la Ley por lo que respecta al segundo y sucesivos contratos no firmados, y se les inhabilitará conforme a lo dispuesto por la fracción I del artículo 60 de la Ley.
23.- Adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público. La rescisión de un contrato administrativo decretada con fundamento en el Artículo 54 de la ley relativa,	**Artículo 26.-** Las dependencias y entidades seleccionarán de entre los procedimientos que a continuación se señalan, aquél que de acuerdo con la naturaleza de la contratación asegure al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes:	

B) Jurisprudencias y tesis aisladas afines.

JURISPRUDENCIAS Y TESIS AISLADAS	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
constituye un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, con independencia de que esa contratación haya tenido su origen en una licitación pública, invitación a cuando menos tres personas o adjudicación directa. *Registro: 166035; Localización: 9ª. Época; T.C.C.; S.J.F. y su gaceta; XXX, noviembre de 2009; Pág. 875; [T.A]*	I. Licitación pública; II. Invitación a cuando menos tres personas, o III. Adjudicación directa… **Artículo 41 (primer párrafo).-**. Las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán contratar adquisiciones, arrendamientos y servicios, sin sujetarse al procedimiento de licitación pública, a través de los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa, cuando: … **Artículo 45 (fracción XVI).-** El contrato o pedido contendrá, en lo aplicable, lo siguiente: XVI. Las causales para la rescisión de los contratos, en los términos previstos en esta Ley; **Artículo 54.-** Las dependencias y entidades podrán en cualquier momento rescindir administrativamente los contratos cuando el proveedor incurra en incumplimiento de sus obligaciones, conforme al procedimiento siguiente: I. Se iniciará a partir de que al proveedor le sea comunicado por escrito el incumplimiento en que haya incurrido, para que en un término de cinco días hábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes; II. Transcurrido el término a que se refiere la fracción anterior, la dependencia o entidad contará con un plazo de quince días para resolver, considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer el proveedor. La determinación de dar o no por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada, motivada y comunicada al proveedor dentro dicho plazo, y …	**Artículo 98 (primer párrafo).-** Los proveedores que por motivos diferentes al atraso en el cumplimiento de las fechas pactadas para la entrega de los bienes o la prestación del servicio, incumplan con sus obligaciones por cualquier otra causa establecida en el contrato, se sujetarán al procedimiento de rescisión del contrato, conforme al procedimiento establecido en el artículo 54 de la Ley. **Artículo 100 (segundo párrafo).-** En el supuesto de que sea rescindido el contrato, no procederá la contabilización de la sanción por cancelación a que hace referencia el párrafo anterior, toda vez que se deberá hacer efectiva la garantía de cumplimiento.

B) Jurisprudencias y tesis aisladas afines.

JURISPRUDENCIAS Y TESIS AISLADAS	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
24.- [19]***Adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público. Los artículos 2o., fracción XII y 36 Bis, fracción II, de la ley relativa, no violan la garantía de audiencia.***◊ *Época: Décima Época; Registro: 160715; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Libro II, Noviembre de 2011, Tomo 1; Materia(s): Constitucional; Tesis: 1a. CCXXII/2011 (9a.); Página: 192.*	**Artículo 2 (fracción XII).-** Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por: … XII. Precio conveniente: es aquel que se determina a partir de obtener el promedio de los precios preponderantes que resulten de las proposiciones aceptadas técnicamente en la licitación, y a éste se le resta el porcentaje que determine la dependencia o entidad en sus políticas, bases y lineamientos. **Artículo 36 Bis (fracción II).-** Una vez hecha la evaluación de las proposiciones, el contrato se adjudicará al licitante cuya oferta resulte solvente, porque cumple con los requisitos legales, técnicos y económicos establecidos en la convocatoria a la licitación, y por tanto garantiza el cumplimiento de las obligaciones respectivas y, en su caso: I. La proposición haya obtenido el mejor resultado en la evaluación combinada de puntos y porcentajes, o bien, de costo beneficio; II. De no haberse utilizado las modalidades mencionadas en la fracción anterior, la proposición hubiera ofertado el precio más bajo, siempre y cuando éste resulte conveniente. Los precios ofertados que se encuentren por debajo del precio conveniente, podrán ser desechados por la convocante, y …	**Artículo 51 (apartado B).-** Los criterios para evaluar la solvencia de las proposiciones, deberán guardar relación con los requisitos y especificaciones señalados en la convocatoria a la licitación pública para la integración de las propuestas técnicas y económicas. … B. El cálculo del precio conveniente únicamente se llevará a cabo cuando se requiera acreditar que un precio ofertado se desecha porque se encuentra por debajo del precio determinado conforme a la fracción XII del artículo 2 de la Ley. …
25.- [18]Adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público. Los artículos 59 y 60, fracción I,	**Artículo 46.-** Con la notificación del fallo serán exigibles los derechos y obligaciones establecidos en el modelo de contrato del procedimiento de contratación y obligará a la dependencia o entidad y a la persona a	**Artículo 84 (primer párrafo).-** Para la formalización de los contratos se deberá recabar, en primer término, la firma del servidor público de la dependencia o entidad de que se trate con las facultades necesarias

[19] Jurisprudencia relacionada con número de registro 170983 y Tesis Aisladas con números de registro 175159, 189495 y 189051, en cuanto al artículo 14 Constitucional, segundo párrafo de la garantía de audiencia: nadie puede ser privado de la libertad, propiedad, posesiones o derechos sino mediante juicio.

◊ Esta tesis corresponde al engrose A.R. 587/2011, que se encuentra desarrollado en el inciso I), a), ii), del Capítulo VI de la Tesis.

[18] Jurisprudencia relacionada con número de registro 162971 y Tesis Aisladas relacionadas con números de registro 172010, 175161, 175297 y 175366, en cuanto al artículo 134 Constitucional, párrafo cuarto, no violan los principios de eficiencia, eficacia y honradez. En las tesis solo señalaron esos tres principios, mientras que en el artículo mencionan además economía e imparcialidad.

B) Jurisprudencias y tesis aisladas afines.

JURISPRUDENCIAS Y TESIS AISLADAS	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
de la ley relativa que prevén multa e inhabilitación temporal para licitantes ganadores, no transgreden el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.[◊] *Época: Décima Época; Registro: 2001223; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 1; Materia(s): Constitucional, Administrativa; Tesis: 1a. CXLIII/2012 (10a.); Página: 477.*	quien se haya adjudicado, a firmar el contrato en la fecha, hora y lugar previstos en el propio fallo, o bien en la convocatoria a la licitación pública y en defecto de tales previsiones, dentro de los quince días naturales siguientes al de la citada notificación… Si el interesado no firma el contrato por causas imputables al mismo, conforme a lo señalado en el párrafo anterior, la dependencia o entidad, sin necesidad de un nuevo procedimiento, deberá adjudicar el contrato al participante que haya obtenido el segundo lugar… **Artículo 59.-** Los licitantes o proveedores que infrinjan las disposiciones de esta Ley, serán sancionados por la Secretaría de la Función Pública con multa equivalente a la cantidad de cincuenta hasta mil veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal elevado al mes, en la fecha de la infracción. Cuando los licitantes, injustificadamente y por causas imputables a los mismos, no formalicen contratos cuyo monto no exceda de cincuenta veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal elevado al mes, serán sancionados con multa equivalente a la cantidad de diez hasta cuarenta y cinco veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal elevado al mes, en la fecha de la infracción.	para celebrar dichos actos y posteriormente, se recabará la firma del proveedor. La fecha del contrato, será aquélla en la que el proveedor lo hubiere firmado. **Artículo 109.-** Se sancionará en términos del primer párrafo del artículo 59 de la Ley, a los licitantes que injustificadamente y por causas imputables a los mismos se abstengan de firmar contratos según lo previsto por el segundo párrafo del artículo 46 de dicho ordenamiento, cuando el monto de éstos exceda de cincuenta veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal elevado al mes. Los licitantes que injustificadamente y por causas imputables a ellos no formalicen dos o más contratos con cualquier dependencia o entidad, dentro del plazo de dos años, serán sancionados en términos del primer párrafo del artículo 59 de la Ley por lo que respecta al segundo y sucesivos contratos no firmados, y se les inhabilitará conforme a lo dispuesto por la fracción I del artículo 60 de la Ley. Se presumirá que la falta de firma del contrato por parte del licitante a quien se le adjudicó el mismo le es imputable a éste, salvo prueba en contrario que aporte durante el procedimiento administrativo

[◊] Esta tesis corresponde al engrose A.R. 89/2012, que se encuentra desarrollado en el inciso D), a) i, del Capítulo VI de la Tesis.

B) Jurisprudencias y tesis aisladas afines.

JURISPRUDENCIAS Y TESIS AISLADAS	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
	Artículo 60 (fracción I).- La Secretaría de la Función Pública, además de la sanción a que se refiere el primer párrafo del artículo anterior, inhabilitará temporalmente para participar de manera directa o por interpósita persona en procedimientos de contratación o celebrar contratos regulados por esta Ley, a las personas que se encuentren en alguno de los supuestos siguientes: I. Los licitantes que injustificadamente y por causas imputables a los mismos no formalicen dos o más contratos que les haya adjudicado cualquier dependencia o entidad en el plazo de dos años calendario, contados a partir del día en que haya fenecido el término para la formalización del primer contrato no formalizado; …	sancionador con la que justifique dicha omisión. **Artículo 110.-** Cuando una instancia de inconformidad sea sobreseída o resuelta como infundada y en la misma se determine que se promovió para retrasar o entorpecer la contratación, se sancionará al inconforme con inhabilitación en términos de la fracción IV del artículo 60 de la Ley y multa de acuerdo con el primer párrafo del artículo 59 de la Ley.
26.- [22]*Adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público. Los artículos 59 y 60, primer párrafo y fracción IV de este último, de la ley relativa respetan el principio de*	**Artículo 59.-** Los licitantes o proveedores que infrinjan las disposiciones de esta Ley, serán sancionados por la Secretaría de la Función Pública con multa equivalente a la cantidad de cincuenta hasta mil veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal elevado al mes, en la fecha de la infracción. Cuando los licitantes, injustificadamente y por causas	**Artículo 109.-** Se sancionará en términos del primer párrafo del artículo 59 de la Ley, a los licitantes que injustificadamente y por causas imputables a los mismos se abstengan de firmar contratos según lo previsto por el segundo párrafo del artículo 46 de dicho ordenamiento, cuando el monto de éstos exceda de cincuenta veces el salario mínimo general

[22] División de poderes se encuentra regulada en el artículo 49 Constitucional, relativo a los actos que despliega dicha dependencia (Secretaría de la Función Pública) en el ámbito administrativo, encuentran cobertura en la facultad Constitucional con que cuenta el titular del Poder Ejecutivo Federal, en términos de la fracción I del artículo 89 de la Carta Magna consistente en promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia; lo anterior, porque la mencionada Secretaría es un órgano auxiliar del Ejecutivo Federal y la imposición de una sanción administrativa es un acto de ejecución de la ley.

JURISPRUDENCIAS Y TESIS AISLADAS	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
división de poderes.[◊] *Época: Novena Época; Registro: 173631; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XXV, Enero de 2007; Materia(s): Constitucional, Administrativa; Tesis: 1a. IV/2007; Página: 472.*	imputables a los mismos, no formalicen contratos cuyo monto no exceda de cincuenta veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal elevado al mes, serán sancionados con multa equivalente a la cantidad de diez hasta cuarenta y cinco veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal elevado al mes, en la fecha de la infracción. **Artículo 60 (fracción IV).-** La Secretaría de la Función Pública, además de la sanción a que se refiere el primer párrafo del artículo anterior, inhabilitará temporalmente para participar de manera directa o por interpósita persona en procedimientos de contratación o celebrar contratos regulados por esta Ley, a las personas que se encuentren en alguno de los supuestos siguientes: … IV. Las que proporcionen información falsa o que actúen con dolo o mala fe en algún procedimiento de contratación, en la celebración del contrato o durante su vigencia, o bien, en la presentación o desahogo de	vigente en el Distrito Federal elevado al mes. Los licitantes que injustificadamente y por causas imputables a ellos no formalicen dos o más contratos con cualquier dependencia o entidad, dentro del plazo de dos años, serán sancionados en términos del primer párrafo del artículo 59 de la Ley por lo que respecta al segundo y sucesivos contratos no firmados, y se les inhabilitará conforme a lo dispuesto por la fracción I del artículo 60 de la Ley. Se presumirá que la falta de firma del contrato por parte del licitante a quien se le adjudicó el mismo le es imputable a éste, salvo prueba en contrario que aporte durante el procedimiento administrativo sancionador con la que justifique dicha omisión. **Artículo 110.-** Cuando una instancia de inconformidad sea sobreseída o resuelta como infundada y en la misma se determine que se promovió para retrasar o entorpecer la contratación, se sancionará al inconforme con inhabilitación en términos de la fracción IV del artículo 60 de la Ley y multa de acuerdo con el primer párrafo del artículo 59 de la Ley. **Artículo 88 (fracción III).-** Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley, respecto de las fracciones y párrafos de dicho precepto legal que a continuación se señalan, deberá considerarse lo siguiente: … III. Las proposiciones de las personas que se ubiquen en el supuesto a que se refiere la fracción VII, serán desechadas de la partida en la que se presentaron, debiendo comunicar lo anterior al órgano interno de control para efectos de determinar si se actualiza lo dispuesto por la fracción IV del artículo 60 de la Ley, y

[◊] Esta tesis corresponde al engrose A.R. 1389/2006, que se encuentra desarrollado en el inciso J), iii), del Capítulo VI de la Tesis.

B) Jurisprudencias y tesis aisladas afines.

JURISPRUDENCIAS Y TESIS AISLADAS	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
	una solicitud de conciliación o de una inconformidad;	
27.- Adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público. Para efectos de la adjudicación directa de un contrato celebrado sin sujetarse al procedimiento de licitación pública, conforme al supuesto previsto en el artículo 41, fracción I, de la ley relativa, es necesario que el particular acredite fehacientemente ante la autoridad correspondiente que posee la titularidad o licencia exclusiva de patentes, derechos de autor u otros derechos exclusivos, mediante la comprobación de su registro ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. *[TA]; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXXII, Agosto de 2010; Pág. 2201; Registro: 164182*	**Artículo 40 (párrafo primero).-** En los supuestos que prevé el artículo 41 de esta Ley, las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán optar por no llevar a cabo el procedimiento de licitación pública y celebrar contratos a través de los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa. **Artículo 41 (fracción I).-** Las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán contratar adquisiciones, arrendamientos y servicios, sin sujetarse al procedimiento de licitación pública, a través de los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa, cuando: I. No existan bienes o servicios alternativos o sustitutos técnicamente razonables, o bien, que en el mercado sólo existe un posible oferente, o se trate de una persona que posee la titularidad o el licenciamiento exclusivo de patentes, derechos de autor, u otros derechos exclusivos, o por tratarse de obras de arte; …	**Artículo 71.-** El documento suscrito por el titular del Área requirente señalado en el segundo párrafo del artículo 40 de la Ley, que se someta a consideración del Comité o del titular de la dependencia o entidad, o al servidor público en quien éste delegue la función para dictaminar sobre la procedencia de la excepción a la licitación pública, deberá contener como mínimo la información que a continuación se indica en el orden siguiente: … **Artículo 72 (fracciones I y II).-** Para los efectos de lo establecido en el artículo 41 de la Ley deberá considerarse, respecto de las fracciones de dicho precepto legal, lo que se cita a continuación: I. La inexistencia de bienes o servicios alternativos o sustitutos técnicamente razonables, a que se refiere la fracción I, se acreditará con la investigación de mercado, mediante la obtención de por lo menos tres escritos de empresas cuyas actividades comerciales o profesionales se encuentren directamente relacionadas con los bienes a adquirir o a arrendar o los servicios a contratar, en los que se haga constar la inexistencia de los bienes o servicios mencionados… II. Para acreditar que en el mercado sólo existe un posible oferente, o se trata de una persona que posee la titularidad o el licenciamiento exclusivo de patentes, derechos de autor, u otros derechos exclusivos, a que hace referencia la fracción I, se deberán acompañar los documentos con los que se acredite tal situación, como son los registros, títulos, certificaciones, acuerdos comerciales, autorizaciones, designaciones, contratos de licenciamiento o cesión emitidos por o registrados ante las autoridades nacionales competentes en su caso, o conforme a las disposiciones o prácticas del país de origen, así como

B) Jurisprudencias y tesis aisladas afines.

JURISPRUDENCIAS Y TESIS AISLADAS	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
		con los que se determine el alcance o implicaciones jurídicas de los derechos mencionados.
28.- [13]Adquisiciones y obras públicas. Los artículos 41, fracciones VI, VII Y XII y 88 de la ley relativa, que impiden que las dependencias reciban propuestas o celebren contratos con personas físicas o morales, o que éstas las realicen, cuando hubieran proporcionado información que resulte falsa, o que hayan actuado con dolo o mala fe en algún proceso para la adjudicación o celebración de un contrato o que se haya efectuado en contravención a la ley, no violan la garantía de libertad de trabajo consagrada en el artículo 5o. de la Constitución Federal. *Época: Novena Época; Registro: 190614; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XII, Diciembre de 2000; Materia(s): Constitucional, Administrativa;*	**Artículo 60 (fracción IV y segundo párrafo).-** La Secretaría de la Función Pública, además de la sanción a que se refiere el primer párrafo del artículo anterior, inhabilitará temporalmente para participar de manera directa o por interpósita persona en procedimientos de contratación o celebrar contratos regulados por esta Ley, a las personas que se encuentren en alguno de los supuestos siguientes: … IV. Las que proporcionen información falsa o que actúen con dolo o mala fe en algún procedimiento de contratación, en la celebración del contrato o durante su vigencia, o bien, en la presentación o desahogo de una solicitud de conciliación o de una inconformidad; … La inhabilitación que se imponga no será menor de tres meses ni mayor de cinco años, plazo que comenzará a contarse a partir del día siguiente a la fecha en que la Secretaría de la Función Pública la haga del conocimiento de las dependencias y entidades, mediante la publicación de la circular respectiva en el Diario Oficial de la Federación y en CompraNet**.** **T*exto de la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas del 30 de diciembre de 1993.***	**Artículo 88 (fracción III).-** Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley, respecto de las fracciones y párrafos de dicho precepto legal que a continuación se señalan, deberá considerarse lo siguiente: … III. Las proposiciones de las personas que se ubiquen en el supuesto a que se refiere la fracción VII, serán desechadas de la partida en la que se presentaron, debiendo comunicar lo anterior al órgano interno de control para efectos de determinar si se actualiza lo dispuesto por la fracción IV del artículo 60 de la Ley, y … **Artículo 110.-** Cuando una instancia de inconformidad sea sobreseída o resuelta como infundada y en la misma se determine que se promovió para retrasar o entorpecer la contratación, se sancionará al inconforme con inhabilitación en términos de la fracción IV del artículo 60 de la Ley y multa de acuerdo con el primer párrafo del artículo 59 de la Ley. **Artículo 111.-** La publicación de la circular a que se refiere el párrafo segundo del artículo 60 de la Ley deberá realizarse en CompraNet y simultáneamente enviarse al Diario Oficial de la Federación para los mismos efectos. La inhabilitación surtirá efectos a partir de la publicación de la circular correspondiente en CompraNet.

[13] Jurisprudencia relacionada con número de registro 178492 y Tesis Aisladas con números de registro 175160, 179274, 188894, y 170561, respecto al artículo 5° constitucional relativo a no violar la garantía de trabajo.

B) Jurisprudencias y tesis aisladas afines.

JURISPRUDENCIAS Y TESIS AISLADAS	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
Tesis: 1a. XLIX/2000; Página: 238	**Artículo 41 (fracciones VI, VII y XII).-** Las dependencias y entidades se abstendrán de recibir propuestas o celebrar contrato alguno en las materias a que se refiere esta Ley, con las personas físicas o morales siguientes: … VI. Aquéllas que hubieren proporcionado información que resulte falsa, o que hayan actuado con dolo o mala fe, en algún proceso para la adjudicación de un contrato, en su celebración, durante su vigencia o bien en la presentación o desahogo de una inconformidad; VII. Las que, en virtud de la información con que cuente la Contraloría, hayan celebrado contratos en contravención a lo dispuesto por esta Ley; … Las demás que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por disposición de ley. Artículo 88.- Los proveedores y contratistas que se encuentren en el supuesto de las fracciones V a VII del artículo 41, no podrán presentar propuestas ni celebrar contratos sobre las materias objeto de esta Ley, durante el plazo que establezca la Secretaría, el cual no será menor de seis meses ni mayor de dos años, contado a partir de la fecha en que la Secretaría lo haga del conocimiento de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.	
29.- [14]Adquisiciones y obras públicas. Los artículos 87, 90 y 91 de la ley relativa, que prevén la imposición de una multa por la infracción a las disposiciones contenidas en ella, no violan el artículo 22	**Artículo 59 (primer párrafo).-** Los licitantes o proveedores que infrinjan las disposiciones de esta Ley, serán sancionados por la Secretaría de la Función Pública con multa equivalente a la cantidad de cincuenta hasta mil veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal elevado al mes, en la fecha de la infracción.	**Artículo 109 (primer párrafo).-** Se sancionará en términos del primer párrafo del artículo 59 de la Ley, a los licitantes que injustificadamente y por causas imputables a los mismos se abstengan de firmar contratos según lo previsto por el segundo párrafo del artículo 46 de dicho ordenamiento, cuando el monto de éstos exceda de cincuenta veces el salario mínimo

[14] Tesis Aisladas relacionadas con números de registro 171252, 171251 y 174892, en cuanto al artículo 22 Constitucional, relativo a que quedan prohibidas… la multa excesiva… las penas inusitadas y transcendentales.

B) Jurisprudencias y tesis aisladas afines.

JURISPRUDENCIAS Y TESIS AISLADAS	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
de la Constitución Federal. *Época: Novena; Registro: 190621; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XII, Diciembre de 2000; Materia(s): Constitucional, Administrativa; Tesis: 1a. LI/2000; Página: 239*	**Artículo 61.-** La Secretaría de la Función Pública impondrá las sanciones considerando: I. Los daños o perjuicios que se hubieren producido con motivo de la infracción; II. El carácter intencional o no de la acción u omisión constitutiva de la infracción; III. La gravedad de la infracción, y IV. Las condiciones del infractor. En la tramitación del procedimiento para imponer las sanciones a que se refiere este Título, la Secretaría de la Función Pública deberá observar lo dispuesto por el Título Cuarto y demás aplicables de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, aplicando supletoriamente tanto el Código Civil Federal, como el Código Federal de Procedimientos Civiles. **Artículo 64.-** No se impondrán sanciones cuando se haya incurrido en la infracción por causa de fuerza mayor o de caso fortuito, o cuando se observe en forma espontánea el precepto que se hubiese dejado de cumplir. No se considerará que el cumplimiento es espontáneo cuando la omisión sea descubierta por las autoridades o medie requerimiento, visita, excitativa o cualquier otra gestión efectuada por las mismas, así como en el supuesto de la fracción IV del artículo 60 de esta Ley. ***Texto de la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas***	general vigente en el Distrito Federal elevado al mes. **Artículo 110.-** Cuando una instancia de inconformidad sea sobreseída o resuelta como infundada y en la misma se determine que se promovió para retrasar o entorpecer la contratación, se sancionará al inconforme con inhabilitación en términos de la fracción IV del artículo 60 de la Ley y multa de acuerdo con el primer párrafo del artículo 59 de la Ley.

JURISPRUDENCIAS Y TESIS AISLADAS	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
	del 30 de diciembre de 1993. **Artículo 87.-** Quienes infrinjan las disposiciones contenidas en esta Ley, serán sancionados por la Secretaría con multa equivalente a la cantidad de cincuenta a trescientas veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal elevado al mes, en la fecha de la infracción. **Artículo 90.-** La Secretaría impondrá las sanciones o multas conforme a los siguientes criterios: I. Se tomará en cuenta la importancia de la infracción, las condiciones del infractor y la conveniencia de eliminar prácticas tendientes a infringir, en cualquier forma, las disposiciones de esta Ley o las que se dicten con base en ella; II. Cuando sean varios los responsables, cada uno será sancionado con el total de la sanción o multa que se imponga; III. Tratándose de reincidencia, se impondrá otra sanción o multa mayor dentro de los límites señalados en el artículo 87, y IV. En el caso de que persista la infracción, se impondrán multas por cada día que transcurra. **Artículo 91.-** No se impondrán sanciones o multas cuando se haya incurrido en la infracción por causa de fuerza mayor o de caso fortuito, o cuando se observe en forma espontánea el precepto que se hubiese dejado de cumplir. No se considerará que el cumplimiento es espontáneo cuando la omisión sea descubierta por las autoridades o medie requerimiento, visita, excitativa o cualquier otra gestión efectuada por las mismas.	
30.- Autoridades administrativas, facultades de las. *[TA]; 5a. Época; 2a. Sala; S.J.F.; Tomo XXIX; Pág. 669,*	**Artículo 13 (último párrafo).-** Las dependencias y entidades podrán, dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y motivadas, autorizar el pago de suscripciones, seguros o de otros servicios, en los que	

B) Jurisprudencias y tesis aisladas afines.

JURISPRUDENCIAS Y TESIS AISLADAS	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
Registro: 337926.[23]	no sea posible pactar que su costo sea cubierto después de que la prestación del servicio se realice. **Artículo 22 (último párrafo).-** La Secretaría de la Función Pública podrá participar como asesor en los comités y subcomités a que se refiere este artículo, pronunciándose de manera fundada y motivada al emitir sus opiniones. **Artículo 54 (fracción II).-** Las dependencias y entidades podrán en cualquier momento rescindir administrativamente los contratos cuando el proveedor incurra en incumplimiento de sus obligaciones, conforme al procedimiento siguiente: … II. Transcurrido el término a que se refiere la fracción anterior, la dependencia o entidad contará con un plazo de quince días para resolver, considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer el proveedor. La determinación de dar o no por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada, motivada y comunicada al proveedor dentro dicho plazo, y **Artículo 73.-** La resolución contendrá: I. Los preceptos legales en que funde su competencia para resolver el asunto; II. La fijación clara y precisa del acto impugnado; III. El análisis de los motivos de inconformidad, para lo cual podrá corregir errores u omisiones del inconforme en la cita de los preceptos que estime violados, así como examinar en su conjunto los motivos de impugnación y demás razonamientos expresados por la convocante y el tercero interesado, a fin de resolver la controversia efectivamente planteada, pero no podrá pronunciarse sobre cuestiones que no hayan sido expuestas por el promovente;	

[23] Las autoridades administrativas no tienen más facultades que las que expresamente les conceden las leyes, y cuando dictan alguna determinación que no está debidamente fundada y motivada en alguna ley, debe estimarse que es violatoria de las garantías consignadas en el artículo 16 Constitucional.

B) Jurisprudencias y tesis aisladas afines.

JURISPRUDENCIAS Y TESIS AISLADAS	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
	IV. La valoración de las pruebas admitidas y desahogadas en el procedimiento; V. Las consideraciones y fundamentos legales en que se apoye, y VI. Los puntos resolutivos que expresen claramente sus alcances y efectos, en congruencia con la parte considerativa, fijando cuando proceda las directrices para la reposición de actos decretados nulos o para la firma del contrato. **Artículo 74 (fracciones I, II y III).-** La resolución que emita la autoridad podrá: I. Sobreseer en la instancia; II. Declarar infundada la inconformidad; III. Declarar que los motivos de inconformidad resultan inoperantes para decretar la nulidad del acto impugnado, cuando las violaciones alegadas no resulten suficientes para afectar su contenido;…	**Artículo 110.-** Cuando una instancia de inconformidad sea sobreseída o resuelta como infundada y en la misma se determine que se promovió para retrasar o entorpecer la contratación, se sancionará al inconforme con inhabilitación en términos de la fracción IV del artículo 60 de la Ley y multa de acuerdo con el primer párrafo del artículo 59 de la Ley.
31.- Cesión de derechos de crédito. Si fue precedida de un proceso de licitación, lo que debe notificarse legalmente al deudor es aquélla. *Registro: 166228. Localización: 9° Época; T. C. C.S.J.F. y su Gaceta; XXX, Octubre de 2009. Pág. 1375. [T.A.]*	**Artículo 46 (último párrafo).-** Los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos no podrán ser transferidos por el proveedor en favor de cualquier otra persona, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento de la dependencia o entidad de que se trate.	
32.- [18]Comercio y cuestiones relacionadas con el comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la Comunidad Europea. El artículo 25 de la decisión	**Artículo 14.-** En los procedimientos de contratación de carácter internacional abierto, las dependencias y entidades optarán, en igualdad de condiciones, por el empleo de los recursos humanos del país y por la adquisición y arrendamiento de bienes producidos en el país y que cuenten con el porcentaje de contenido	**Articulo 14 (segundo párrafo).-** La celebración de los contratos marco no estará sujeta a los procedimientos de contratación previstos en la Ley. En dicha celebración, se atenderán los principios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para

[18] Jurisprudencia relacionada con número de registro 162971 y Tesis Aisladas relacionadas con números de registro 172010, 2001223, 175161 y 175297, en cuanto al artículo 134 Constitucional.

B) Jurisprudencias y tesis aisladas afines.

JURISPRUDENCIAS Y TESIS AISLADAS	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
2/2000 del Consejo Conjunto del Acuerdo Interino relativo no viola el artículo 134 de la Constitución Federal.◊ *Época: Novena; Registro: 175366; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XXIII, Abril de 2006; Materia(s): Constitucional, Administrativa; Tesis: 1a. LXXVIII/2006; Página: 151*	nacional indicado en el artículo 28 fracción I, de esta Ley, los cuales deberán contar, en la comparación económica de las proposiciones, con un margen hasta del quince por ciento de preferencia en el precio respecto de los bienes de importación, conforme a las reglas que establezca la Secretaría de Economía, previa opinión de la Secretaría y de la Secretaría de la Función Pública. En el caso de licitación pública para la adquisición de bienes, arrendamientos o servicios que utilicen la evaluación de puntos y porcentajes, se otorgarán puntos en los términos de esta Ley, a personas con discapacidad o a la empresa que cuente con trabajadores con discapacidad en una proporción del cinco por ciento cuando menos de la totalidad de su planta de empleados, cuya antigüedad no sea inferior a seis meses, misma que se comprobará con el aviso de alta al régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social. Asimismo, se otorgarán puntos a las micros, pequeñas o medianas empresas que produzcan bienes con innovación tecnológica, conforme a la constancia correspondiente emitida por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, la cual no podrá tener una vigencia mayor a cinco años. De igual manera, se otorgarán puntos a las empresas que hayan aplicado políticas y prácticas de igualdad de género, conforme a la certificación correspondiente emitida por las autoridades y organismos facultados para tal efecto. **Artículo 26 (primer párrafo, fracción I y segundo párrafo).-** Las dependencias y entidades seleccionarán de entre los procedimientos que a continuación se señalan, aquél que de acuerdo con la naturaleza de la	el Estado, mismos que deberán reflejarse en los contratos específicos señalados en el párrafo anterior. **Artículo 35 (primer y segundo párrafo).-** En la convocatoria a la licitación pública e invitación a cuando menos tres personas de carácter nacional, deberá establecerse como requisito de participación la entrega de un escrito en el que el licitante manifieste bajo protesta de decir verdad, que es de nacionalidad mexicana y, en el caso de adquisición de bienes, además manifestará que los bienes que oferta y entregará, serán producidos en México y contarán con el porcentaje de contenido nacional correspondiente. En el escrito a que se refiere el párrafo anterior, el licitante manifestará que en caso de que la Secretaría de Economía lo solicite, le proporcionará la información que permita verificar que los bienes ofertados son de producción nacional y cumplen con el porcentaje de contenido nacional requerido. **Artículo 2 (fracción XI).-** Adicionalmente a las definiciones contenidas en el artículo 2 de la Ley, para los efectos de este Reglamento se entenderá por: …

◊ Esta tesis corresponde al engrose A.R. 1725/2004, que se encuentra desarrollado en el inciso B), i), del Capítulo VI de la Tesis.

B) Jurisprudencias y tesis aisladas afines.

JURISPRUDENCIAS Y TESIS AISLADAS	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
	contratación asegure al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes: I. Licitación pública; … Las adquisiciones, arrendamientos y servicios se adjudicarán, por regla general, a través de licitaciones públicas, mediante convocatoria pública, para que libremente se presenten proposiciones, solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad, crecimiento económico, generación de empleo, eficiencia energética, uso responsable del agua, optimización y uso sustentable de los recursos, así como la protección al medio ambiente y demás circunstancias pertinentes, de acuerdo con lo que establece la presente Ley.	XI. Sobre cerrado: cualquier medio que contenga la proposición del licitante, cuyo contenido sólo puede ser conocido en el acto de presentación y apertura de proposiciones en términos de la Ley.
33.- Competencia. Solo deriva de la ley no de un contrato. *[TA]; 8a. Época; T.C.C.; S.J.F.; Tomo III, Segunda Parte-2, Enero-Junio de 1989; Pág. 991; Registro: 229439.* *Tesis 193; Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917- 1985; tercera parte; Segunda Sala; págs., 314-315.* ***34.- Competencia concurrente. La opción ejercida por el actor es irrevocable.*** *Registro: 240063. 7a. Época;*	**Artículo 7.-** La Secretaría, la Secretaría de Economía y la Secretaría de la Función Pública, en el ámbito de sus respectivas competencias, estarán facultadas para interpretar esta Ley para efectos administrativos. La Secretaría de la Función Pública dictará las disposiciones administrativas que sean estrictamente necesarias para el adecuado cumplimiento de esta Ley, tomando en cuenta la opinión de la Secretaría y, cuando corresponda, la de la Secretaría de Economía. Las disposiciones de carácter general se publicarán en el Diario Oficial de la Federación. La Secretaría de la Función Pública, en el ámbito de sus atribuciones, estará encargada de establecer las directrices conforme a las cuales se determinarán los perfiles de puesto de los servidores públicos correspondientes en materia de contrataciones públicas, así como las relativas a la capacitación para el adecuado desempeño de sus funciones en las	**Artículo 8.-** La Secretaría, la Secretaría de Economía y la Secretaría de la Función Pública, en el ámbito de sus respectivas competencias, estarán facultadas para interpretar la Ley y este Reglamento para efectos administrativos. Los criterios de interpretación que emitan, en términos de este párrafo, son obligatorios para las dependencias y entidades. … **Artículo 39 (fracción VI, inciso j).-** La convocatoria a la licitación pública y, cuando proceda, el Proyecto de convocatoria deberán contener los requisitos que señala el artículo 29 de la Ley y se elaborarán conforme al orden, apartados e información que a continuación se indican: … VI. Documentos y datos que deben presentar los licitantes, entre los que se encuentran los siguientes: …

B) Jurisprudencias y tesis aisladas afines.

JURISPRUDENCIAS Y TESIS AISLADAS	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
3a. Sala; S.J.F.; Volumen 199-204, Cuarta Parte; Pág. 11. Tesis aislada (materia común). Competencia 102/84. Jueces Segundo de Distrito en el estado de Tabasco y Segundo de Primera Instancia de lo Civil de Villahermosa, Tabasco; 8 de julio de 1985. 5 votos; Ponente: Jorge Olivera Toro; Secretaría: Gilda Rincón Orta. Informe 1985, Tercer Sala; precedente que no constituye jurisprudencia; págs. 16- 17.	materias a que alude esta Ley. **Artículo 85.-** Las controversias que se susciten con motivo de la interpretación o aplicación de los contratos celebrados con base en esta Ley, serán resueltas por los tribunales federales, en los casos en que no se haya pactado cláusula arbitral o medio alterno de solución de controversias, o éstas no resulten aplicables. **Artículo 86.-** Lo dispuesto por este Capítulo se aplicará a las entidades sólo cuando sus leyes no regulen de manera expresa la forma en que podrán resolver sus controversias.	j) El documento en el que conste el acuse de recepción de solicitud de opinión ante la autoridad fiscal competente, respecto del cumplimiento de sus obligaciones fiscales del licitante a quien se adjudique el contrato;
35.- Contratos. Interpretación de los. *[J]; 6a. Época; 3a. Sala; Ap. 2000; Tomo IV, Civil, Jurisprudencia SCJN; Pág. 133. 163; Registro: 913105.*	**Artículo 45.-** El contrato o pedido contendrá, en lo aplicable, lo siguiente: I. El nombre, denominación o razón social de la dependencia o entidad convocante; II. La indicación del procedimiento conforme al cual se llevó a cabo la adjudicación del contrato; III. Los datos relativos a la autorización del presupuesto para cubrir el compromiso derivado del contrato; IV. Acreditación de la existencia y personalidad del licitante adjudicado; V. La descripción pormenorizada de los bienes, arrendamientos o servicios objeto del contrato adjudicado a cada uno de los licitantes en el procedimiento, conforme a su proposición; VI. El precio unitario y el importe total a pagar por los bienes, arrendamientos o servicios, o bien, la forma en que se determinará el importe total; VII. Precisión de si el precio es fijo o sujeto a ajustes y, en este último caso, la fórmula o condición en que se hará y calculará el ajuste, determinando expresamente el o los indicadores o medios oficiales que se utilizarán	**Artículo 81.-** Además de lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley, el contrato deberá: I. Ser firmado en términos de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 44 de este Reglamento, cuando la proposición ganadora de la licitación pública haya sido presentada en forma conjunta por varias personas. El contrato deberá estipular la forma en la que las personas que integran la proposición conjunta hayan acordado en el convenio respectivo, las partes objeto del contrato que corresponderá cumplir a cada uno, así como si quedarán obligados en forma solidaria o mancomunada respecto del cumplimiento del contrato; II. Señalar que la garantía de cumplimiento se hará efectiva por el monto total de la obligación garantizada, salvo que en los contratos se haya estipulado su divisibilidad. En caso de que por las características de los bienes o servicios entregados éstos no puedan funcionar o ser utilizados por la dependencia o entidad por estar incompletos, la

JURISPRUDENCIAS Y TESIS AISLADAS	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
	en dicha fórmula; VIII. En el caso de arrendamiento, la indicación de si éste es con o sin opción a compra; IX. Los porcentajes de los anticipos que, en su caso, se otorgarían, los cuales no podrán exceder del cincuenta por ciento del monto total del contrato; … **Artículo 80 (primer párrafo).-** Podrá convenirse compromiso arbitral respecto de aquellas controversias que surjan entre las partes por interpretación a las cláusulas de los contratos o por cuestiones derivadas de su ejecución, en términos de lo dispuesto en el Título Cuarto del Libro Quinto del Código de Comercio. **Artículo 84.-** Las partes podrán convenir otros mecanismos de solución de controversias para resolver sus discrepancias sobre la interpretación o ejecución de los contratos. **Artículo 85.-** Las controversias que se susciten con motivo de la interpretación o aplicación de los contratos celebrados con base en esta Ley, serán resueltas por los tribunales federales, en los casos en que no se haya pactado cláusula arbitral o medio alterno de solución de controversias, o éstas no resulten aplicables.	garantía siempre se hará efectiva por el monto total de la obligación garantizada; III. Establecer que el proveedor será el responsable de entregar los bienes y, en caso de ser de procedencia extranjera, se deberá indicar cuál de las partes asumirá la responsabilidad de efectuar los trámites de importación y pagar los impuestos y derechos que se generen con motivo de la misma; IV. Prever que en caso de discrepancia entre la convocatoria a la licitación pública, la invitación a cuando menos tres personas o la solicitud de cotización y el modelo de contrato, prevalecerá lo establecido en la convocatoria, invitación o solicitud respectiva; …
36.- Contratos administrativos. *[TA]; 5a. Época; 2a. Sala; S.J.F.; Tomo XXVIII; Pág.*	**Artículo 54 (fracciones I y II).-** Las dependencias y entidades podrán en cualquier momento rescindir administrativamente los contratos cuando el proveedor incurra en incumplimiento de sus obligaciones,	**Artículo 98.-** Los proveedores que por motivos diferentes al atraso en el cumplimiento de las fechas pactadas para la entrega de los bienes o la prestación del servicio, incumplan con sus obligaciones por

B) Jurisprudencias y tesis aisladas afines.

JURISPRUDENCIAS Y TESIS AISLADAS	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
1187; Registro: 338 114. Es evidente que el contratante no puede invocar lesión de sus derechos, porque la autoridad rescinda el contrato, sin forma de juicio.	conforme al procedimiento siguiente: I. Se iniciará a partir de que al proveedor le sea comunicado por escrito el incumplimiento en que haya incurrido, para que en un término de cinco días hábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes; II. Transcurrido el término a que se refiere la fracción anterior, la dependencia o entidad contará con un plazo de quince días para resolver, considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer el proveedor. La determinación de dar o no por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada, motivada y comunicada al proveedor dentro dicho plazo, y	cualquier otra causa establecida en el contrato, se sujetarán al procedimiento de rescisión del contrato, conforme al procedimiento establecido en el artículo 54 de la Ley. En cualquier momento la dependencia o entidad podrá rescindir administrativamente un contrato, para lo cual deberá llevar a cabo el procedimiento previsto en el artículo 54 de la Ley; motivando la rescisión en alguna de las causales previstas para tal efecto. Si es el proveedor quien decide rescindir el contrato será necesario que acuda ante la autoridad judicial federal y obtenga la declaración correspondiente. … **Artículo 114 (fracción I).-** La Secretaría de la Función Pública tomará conocimiento de los actos o hechos presuntamente constitutivos de infracciones que cometan los licitantes o proveedores a través, entre otros, de los medios siguientes: I. CompraNet, para lo cual las dependencias y entidades deberán registrar la falta de formalización de los contratos y las rescisiones de los mismos en un plazo máximo de diez días naturales contados a partir de la fecha en que se debió haber realizado la formalización correspondiente o de aquélla en que haya concluido la substanciación del procedimiento de rescisión, de conformidad con el artículo 54 de la Ley; **Artículo 95 (último párrafo).-** De igual manera, los contratos establecerán que el pago de los bienes, arrendamientos o servicios quedará condicionado, proporcionalmente, al pago que el proveedor deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso, en el entendido de que si el contrato es rescindido no procederá el cobro de dichas penas ni la contabilización de las mismas al hacer efectiva la garantía de cumplimiento.

JURISPRUDENCIAS Y TESIS AISLADAS	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
	III. Cuando se rescinda el contrato se formulará el finiquito correspondiente, a efecto de hacer constar los pagos que deba efectuar la dependencia o entidad por concepto de los bienes recibidos o los servicios prestados hasta el momento de rescisión.	**Artículo 99.-** Concluido el procedimiento de rescisión de un contrato se formulará y notificará el finiquito correspondiente, dentro de los veinte días naturales siguientes a la fecha en que se notifique la rescisión, a efecto de hacer constar los pagos que deban efectuarse y demás circunstancias del caso. Al efecto, deberá considerarse lo dispuesto en el inciso b) de la fracción I y en la fracción III del artículo 103 del presente Reglamento, ello sin perjuicio de lo dispuesto en la fracción III del artículo 60 de la Ley.
37.- [◊]Contratos administrativos. El artículo 1o., antepenúltimo párrafo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (publicada en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de enero de dos mil), en cuanto excluye de su ámbito de aplicación a los celebrados por las dependencias con las entidades, o entre entidades de la propia Administración Pública Federal o con alguna perteneciente a la Administración Pública estatal, es violatorio del artículo 134 de la Constitución Federal. *[TA]; 9a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XV, Abril de 2002; Pág. 579;*	**Artículo 1 (antepenúltimo párrafo).-** Los contratos que celebren las dependencias con las entidades, o entre entidades, y los actos jurídicos que se celebren entre dependencias, o bien los que se lleven a cabo entre alguna dependencia o entidad de la Administración Pública Federal con alguna perteneciente a la administración pública de una entidad federativa, no estarán dentro del ámbito de aplicación de esta Ley; no obstante, dichos actos quedarán sujetos a este ordenamiento, cuando la dependencia o entidad obligada a entregar el bien o prestar el servicio, no tenga capacidad para hacerlo por sí misma y contrate un tercero para su realización.	**Artículo 4.-** Se consideran comprendidas en el quinto párrafo del artículo 1 de la Ley, las contrataciones que realicen las dependencias y entidades con las personas de derecho público de carácter federal con autonomía derivada de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o con las asociaciones y sociedades civiles asimiladas a que se refiere el último párrafo del artículo 46 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así como con municipios y órganos paramunicipales, cuando dichas personas funjan como proveedores. …

[◊] Esta tesis se encuentra relacionada con el engrose A.R. 460/2001, mismo que se encuentra desarrollado en el inciso F), b), i), del Capítulo VI de la Tesis.

B) Jurisprudencias y tesis aisladas afines.

JURISPRUDENCIAS Y TESIS AISLADAS	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
Registro: 187274		
38.- Contratos administrativos. La circunstancia de que se haya concedido un amparo respecto de la abrogada Ley de Adquisiciones y Obras Públicas (Diario Oficial de la Federación de treinta de diciembre de mil novecientos noventa y tres), así como de los lineamientos que deberán observar las dependencias y entidades de la administración pública federal en los procedimientos de contratación de seguros de bienes patrimoniales y de personas, no impide jurídicamente que éstos puedan ser impugnados nuevamente por el mismo quejoso, pero como normatividad reglamentaria y dependiente de la vigente Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (Diario Oficial de la Federación de cuatro de enero de dos mil).◊	**Artículo 3 (fracción IX).-** Para los efectos de esta Ley, entre las adquisiciones, arrendamientos y servicios, quedan comprendidos: … IX. En general, los servicios de cualquier naturaleza cuya prestación genere una obligación de pago para las dependencias y entidades, salvo que la contratación se encuentre regulada en forma específica por otras disposiciones legales. Corresponderá a la Secretaría de la Función Pública, a solicitud de la dependencia o entidad de que se trate, determinar si un servicio se ubica en la hipótesis de esta fracción. **Artículo 5.-** Será responsabilidad de las dependencias y entidades contratar los servicios correspondientes para mantener adecuada y satisfactoriamente asegurados los bienes con que cuenten. Lo dispuesto en el párrafo anterior no será aplicable cuando por razón de la naturaleza de los bienes o el tipo de riesgos a los que están expuestos, el costo de aseguramiento represente una erogación que no guarde relación directa con el beneficio que pudiera obtenerse o bien, se constate que no exista oferta de seguros en el mercado para los bienes de que se trate. La Secretaría autorizará previamente la aplicación de la excepción. **Artículo 17 (último párrafo).-** En materia de seguros que se contraten a favor de los servidores públicos de las dependencias, incluido el seguro de vida de los pensionados, la Secretaría implementará procedimientos de contratación consolidada y celebrará los contratos correspondientes. Las entidades podrán	**Artículo 6 (primer párrafo).-** En caso de pérdida total de un bien asegurado, como consecuencia de un siniestro, la dependencia o entidad deberá solicitar a la institución aseguradora, en los términos de las disposiciones aplicables, la reposición o recuperación o, en su caso, el pago respectivo, según convenga a la dependencia o entidad.

◊ Esta tesis se encuentra relacionada con el engrose A.R. 460/2001, mismo que se encuentra desarrollado en el inciso F), b), i, del Capítulo VI de la Tesis.

B) Jurisprudencias y tesis aisladas afines.

JURISPRUDENCIAS Y TESIS AISLADAS	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
Época: Novena; Registro: 187273; Instancia: Segunda Sala; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XV, Abril de 2002; Materia(s): Administrativa; Tesis: 2a. XL/2002; Página: 580 ***39.- Contratos administrativos. Los lineamientos que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en los procedimientos de contratación de seguros de bienes patrimoniales y de personas (Diario Oficial de la Federación de cuatro de agosto de mil novecientos noventa y siete), originalmente creados como normatividad dependiente de la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas, de treinta de diciembre de mil novecientos noventa y tres, deben considerarse también como disposiciones "reglamentarias" de la vigente Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios***	solicitar su incorporación a las contrataciones que se realicen para las dependencias, siempre y cuando no impliquen dualidad de beneficios para los servidores públicos. **TRANSITORIO (TERCERO).-** Las disposiciones administrativas expedidas en esta materia, vigentes al momento de la publicación de este ordenamiento, se seguirán aplicando en todo lo que no se opongan a la presente Ley, en tanto se expiden las que deban sustituirlas.	

B) Jurisprudencias y tesis aisladas afines.

JURISPRUDENCIAS Y TESIS AISLADAS	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
del Sector Público (Diario Oficial de la Federación de cuatro de enero de dos mil).[◊] *Época: novena; Registro: 187272; Instancia: Segunda Sala; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XV, Abril de 2002; Materia(s): Administrativa; Tesis: 2a. XLI/2002; Página: 581*		
40.- ***Contratos administrativos. Se distinguen por su finalidad de orden público y por el régimen exorbitante del Derecho Civil a que están sujetos.*** *[TA]; 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XIII, Abril de 2001; Pág. 324; Registro: 189995*	**Artículo 1 (primer párrafo).-** La presente Ley es de orden público y tiene por objeto reglamentar la aplicación del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de las adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y prestación de servicios de cualquier naturaleza… **Artículo 45.-** El contrato o pedido contendrá, en lo aplicable, lo siguiente: I. El nombre, denominación o razón social de la dependencia o entidad convocante; II. La indicación del procedimiento conforme al cual se llevó a cabo la adjudicación del contrato; III. Los datos relativos a la autorización del presupuesto para cubrir el compromiso derivado del contrato; IV. Acreditación de la existencia y personalidad del licitante adjudicado; V. La descripción pormenorizada de los bienes, arrendamientos o servicios objeto del contrato adjudicado a cada uno de los licitantes en el procedimiento, conforme a su proposición; VI. El precio unitario y el importe total a pagar por los	**Artículo 1.-** El presente Reglamento tiene por objeto establecer las disposiciones que propicien el oportuno y estricto cumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. **Artículo 81.-** Además de lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley, el contrato deberá: I. Ser firmado en términos de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 44 de este Reglamento, cuando la proposición ganadora de la licitación pública haya sido presentada en forma conjunta por varias personas. El contrato deberá estipular la forma en la que las personas que integran la proposición conjunta hayan acordado en el convenio respectivo, las partes objeto del contrato que corresponderá cumplir a cada uno, así como si quedarán obligados en forma solidaria o mancomunada respecto del cumplimiento del contrato; II. Señalar que la garantía de cumplimiento se hará efectiva por el monto total de la obligación

[◊] Esta tesis se encuentra relacionada con el engrose A.R. 460/2001, mismo que se encuentra desarrollado en el inciso F), b), i), del Capítulo VI de la Tesis.

B) Jurisprudencias y tesis aisladas afines.

JURISPRUDENCIAS Y TESIS AISLADAS	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
	bienes, arrendamientos o servicios, o bien, la forma en que se determinará el importe total; VII. Precisión de si el precio es fijo o sujeto a ajustes y, en este último caso, la fórmula o condición en que se hará y calculará el ajuste, determinando expresamente el o los indicadores o medios oficiales que se utilizarán en dicha fórmula; VIII. En el caso de arrendamiento, la indicación de si éste es con o sin opción a compra; IX. Los porcentajes de los anticipos que, en su caso, se otorgarían, los cuales no podrán exceder del cincuenta por ciento del monto total del contrato; X. Porcentaje, número y fechas o plazo de las exhibiciones y amortización de los anticipos que se otorguen; XI. Forma, términos y porcentaje para garantizar los anticipos y el cumplimiento del contrato; XII. La fecha o plazo, lugar y condiciones de entrega; XIII. Moneda en que se cotizó y se efectuará el pago respectivo, el cual podrá ser en pesos mexicanos o moneda extranjera de acuerdo a la determinación de la convocante, de conformidad con la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos; XIV. Plazo y condiciones de pago del precio de los bienes, arrendamientos o servicios, señalando el momento en que se haga exigible el mismo; XV. Los casos en que podrán otorgarse prórrogas para el cumplimiento de las obligaciones contractuales y los requisitos que deberán observarse; XVI. Las causales para la rescisión de los contratos, en los términos previstos en esta Ley; XVII. Las previsiones relativas a los términos y condiciones a las que se sujetará la devolución y reposición de bienes por motivos de fallas de calidad o cumplimiento de especificaciones originalmente convenidas, sin que las sustituciones impliquen su	garantizada, salvo que en los contratos se haya estipulado su divisibilidad. En caso de que por las características de los bienes o servicios entregados éstos no puedan funcionar o ser utilizados por la dependencia o entidad por estar incompletos, la garantía siempre se hará efectiva por el monto total de la obligación garantizada; III. Establecer que el proveedor será el responsable de entregar los bienes y, en caso de ser de procedencia extranjera, se deberá indicar cuál de las partes asumirá la responsabilidad de efectuar los trámites de importación y pagar los impuestos y derechos que se generen con motivo de la misma; IV. Prever que en caso de discrepancia entre la convocatoria a la licitación pública, la invitación a cuando menos tres personas o la solicitud de cotización y el modelo de contrato, prevalecerá lo establecido en la convocatoria, invitación o solicitud respectiva; V. Indicar que los anticipos que otorguen las dependencias y entidades deberán amortizarse proporcionalmente en cada uno de los pagos; su garantía deberá constituirse por el importe total del anticipo otorgado, en la misma moneda en la que se otorgue el anticipo de acuerdo con las disposiciones legales aplicables, la que se cancelará hasta que se haya realizado la amortización total; VI. Prever, en su caso, la posibilidad de que las garantías de cumplimiento o de anticipo se puedan entregar por medios electrónicos, siempre que las disposiciones jurídicas aplicables permitan la constitución de las garantías por dichos medios; VII. Establecer, en el caso que se actualice el supuesto a que hace referencia el segundo párrafo del artículo 48 de la Ley y el primer párrafo del artículo 86 del presente Reglamento, el monto de la

B) Jurisprudencias y tesis aisladas afines.

JURISPRUDENCIAS Y TESIS AISLADAS	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
	modificación; XVIII. El señalamiento de las licencias, autorizaciones y permisos que conforme a otras disposiciones sea necesario contar para la adquisición o arrendamiento de bienes y prestación de los servicios correspondientes, cuando sean del conocimiento de la dependencia o entidad; XIX. Condiciones, términos y procedimiento para la aplicación de penas convencionales por atraso en la entrega de los bienes, arrendamientos o servicios, por causas imputables a los proveedores; XX. La indicación de que en caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad estará a cargo del licitante o proveedor según sea el caso. Salvo que exista impedimento, la estipulación de que los derechos inherentes a la propiedad intelectual, que se deriven de los servicios de consultorías, asesorías, estudios e investigaciones contratados, invariablemente se constituirán a favor de la dependencia o de la entidad, según corresponda, en términos de las disposiciones legales aplicables; XXI. Los procedimientos para resolución de controversias, distintos al procedimiento de conciliación previsto en esta Ley, y XXII. Los demás aspectos y requisitos previstos en la convocatoria a la licitación e invitaciones a cuando menos tres personas, así como los relativos al tipo de contrato de que se trate. Para los efectos de esta Ley, la convocatoria a la licitación, el contrato y sus anexos son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones. Las estipulaciones que se establezcan en el contrato no deberán modificar las condiciones previstas en la convocatoria a la licitación y sus juntas de aclaraciones; en caso de discrepancia, prevalecerá	garantía de cumplimiento previsto en el procedimiento de contratación de que se trate y el porcentaje de reducción al mismo, así como la previsión de que las penas convencionales que se llegaren a aplicar se calcularán en términos de lo señalado en el segundo párrafo del artículo 86 de este Reglamento, y VIII. Establecer la previsión de que una vez cumplidas las obligaciones del proveedor a satisfacción de la dependencia o entidad, el servidor público facultado procederá inmediatamente a extender la constancia de cumplimiento de las obligaciones contractuales para que se dé inicio a los trámites para la cancelación de las garantías de anticipo y cumplimiento del contrato. Las dependencias que lleven a cabo la cancelación de garantías, deberán comunicarlo a la Tesorería de la Federación dentro de los quince días hábiles siguientes a la cancelación.

JURISPRUDENCIAS Y TESIS AISLADAS	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
	lo estipulado en éstas. En la formalización de los contratos, podrán utilizarse los medios de comunicación electrónica que al efecto autorice la Secretaría de la Función Pública.	
41.- Contratos administrativos. *[TA]; 5a. Época; 2a. Sala; S.J.F.; Tomo XXVIII; Pág. 1188; Registro: 338 116.* Si la autoridad contratante, sin forma de juicio, declara rescindido el contrato, no puede alegarse como improcedencia del amparo, que el contratante puede ocurrir ante los tribunales para exigir el cumplimiento del contrato o su rescisión.	**Artículo 54 (fracciones I y II).-** Las dependencias y entidades podrán en cualquier momento rescindir administrativamente los contratos cuando el proveedor incurra en incumplimiento de sus obligaciones, conforme al procedimiento siguiente: I. Se iniciará a partir de que al proveedor le sea comunicado por escrito el incumplimiento en que haya incurrido, para que en un término de cinco días hábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes; II. Transcurrido el término a que se refiere la fracción anterior, la dependencia o entidad contará con un plazo de quince días para resolver, considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer el proveedor. La determinación de dar o no por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada, motivada y comunicada al proveedor dentro dicho plazo, y	**Artículo 98.-** Los proveedores que por motivos diferentes al atraso en el cumplimiento de las fechas pactadas para la entrega de los bienes o la prestación del servicio, incumplan con sus obligaciones por cualquier otra causa establecida en el contrato, se sujetarán al procedimiento de rescisión del contrato, conforme al procedimiento establecido en el artículo 54 de la Ley. En cualquier momento la dependencia o entidad podrá rescindir administrativamente un contrato, para lo cual deberá llevar a cabo el procedimiento previsto en el artículo 54 de la Ley; motivando la rescisión en alguna de las causales previstas para tal efecto. Si es el proveedor quien decide rescindir el contrato será necesario que acuda ante la autoridad judicial federal y obtenga la declaración correspondiente. … **Artículo 114 (fracción I).-** La Secretaría de la Función Pública tomará conocimiento de los actos o hechos presuntamente constitutivos de infracciones que cometan los licitantes o proveedores a través, entre otros, de los medios siguientes: I. CompraNet, para lo cual las dependencias y entidades deberán registrar la falta de formalización de los contratos y las rescisiones de los mismos en un plazo máximo de diez días naturales contados a partir de la fecha en que se debió haber realizado la formalización correspondiente o de aquélla en que haya concluido la substanciación del procedimiento de rescisión, de conformidad con el artículo 54 de la Ley; **Artículo 95 (último párrafo).-** De igual manera, los

B) Jurisprudencias y tesis aisladas afines.

JURISPRUDENCIAS Y TESIS AISLADAS	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
	III. Cuando se rescinda el contrato se formulará el finiquito correspondiente, a efecto de hacer constar los pagos que deba efectuar la dependencia o entidad por concepto de los bienes recibidos o los servicios prestados hasta el momento de rescisión.	contratos establecerán que el pago de los bienes, arrendamientos o servicios quedará condicionado, proporcionalmente, al pago que el proveedor deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso, en el entendido de que si el contrato es rescindido no procederá el cobro de dichas penas ni la contabilización de las mismas al hacer efectiva la garantía de cumplimiento. **Artículo 99.-** Concluido el procedimiento de rescisión de un contrato se formulará y notificará el finiquito correspondiente, dentro de los veinte días naturales siguientes a la fecha en que se notifique la rescisión, a efecto de hacer constar los pagos que deban efectuarse y demás circunstancias del caso. Al efecto, deberá considerarse lo dispuesto en el inciso b) de la fracción I y en la fracción III del artículo 103 del presente Reglamento, ello sin perjuicio de lo dispuesto en la fracción III del artículo 60 de la Ley.
42.- [19]Contratos administrativos de obra pública. El artículo 40, primer párrafo, de la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas (abrogada por el artículo segundo transitorio de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de enero de 2000), que faculta a las dependencias y entidades de la	**Artículo 54.-** Las dependencias y entidades podrán en cualquier momento rescindir administrativamente los contratos cuando el proveedor incurra en incumplimiento de sus obligaciones, conforme al procedimiento siguiente: I. Se iniciará a partir de que al proveedor le sea comunicado por escrito el incumplimiento en que haya incurrido, para que en un término de cinco días hábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes; II. Transcurrido el término a que se refiere la fracción anterior, la dependencia o entidad contará con un plazo de quince días para resolver, considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer el proveedor. La determinación de dar o no por rescindido	**Artículo 98.-** Los proveedores que por motivos diferentes al atraso en el cumplimiento de las fechas pactadas para la entrega de los bienes o la prestación del servicio, incumplan con sus obligaciones por cualquier otra causa establecida en el contrato, se sujetarán al procedimiento de rescisión del contrato, conforme al procedimiento establecido en el artículo 54 de la Ley. En cualquier momento la dependencia o entidad podrá rescindir administrativamente un contrato, para lo cual deberá llevar a cabo el procedimiento previsto en el artículo 54 de la Ley; motivando la rescisión en alguna de las causales previstas para tal efecto. Si es el proveedor quien decide rescindir el contrato será necesario que acuda ante la autoridad judicial federal

[19] Jurisprudencia relacionada con número de registro 170983 y Tesis Aisladas con números de registro 175159, 189051 y 160715, en cuanto al artículo 14 Constitucional, segundo párrafo de la garantía de audiencia: nadie puede ser privado de la libertad, propiedad, posesiones o derechos sino mediante juicio.

B) Jurisprudencias y tesis aisladas afines.

JURISPRUDENCIAS Y TESIS AISLADAS	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
administración pública federal para declarar su rescisión, no viola la garantía de audiencia.[◊] *Época: Novena; Registro: 189495; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XIII, Junio de 2001; Materia(s): Constitucional, Administrativa; Tesis: 1a. XLIX/2001; Página: 232*	el contrato deberá ser debidamente fundada, motivada y comunicada al proveedor dentro dicho plazo, y III. Cuando se rescinda el contrato se formulará el finiquito correspondiente, a efecto de hacer constar los pagos que deba efectuar la dependencia o entidad por concepto de los bienes recibidos o los servicios prestados hasta el momento de rescisión. Iniciado un procedimiento de conciliación las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán suspender el trámite del procedimiento de rescisión. Si previamente a la determinación de dar por rescindido el contrato, se hiciere entrega de los bienes o se prestaren los servicios, el procedimiento iniciado quedará sin efecto, previa aceptación y verificación de la dependencia o entidad de que continúa vigente la necesidad de los mismos, aplicando, en su caso, las penas convencionales correspondientes. La dependencia o entidad podrá determinar no dar por rescindido el contrato, cuando durante el procedimiento advierta que la rescisión del contrato pudiera ocasionar algún daño o afectación a las funciones que tiene encomendadas. En este supuesto, deberá elaborar un dictamen en el cual justifique que los impactos económicos o de operación que se ocasionarían con la rescisión del contrato resultarían más inconvenientes. Al no dar por rescindido el contrato, la dependencia o entidad establecerá con el proveedor otro plazo, que le permita subsanar el incumplimiento que hubiere motivado el inicio del procedimiento. El convenio modificatorio que al efecto se celebre deberá atender a las condiciones previstas por los dos últimos párrafos del artículo 52 de esta Ley. Cuando por motivo del atraso en la entrega de los	y obtenga la declaración correspondiente. La suspensión del procedimiento de rescisión o la determinación de no dar por rescindido el contrato en los supuestos a que se refieren los párrafos segundo y cuarto del artículo 54 de la Ley, así como la fijación del plazo para subsanar el incumplimiento del proveedor, será responsabilidad del Área requirente, debiendo quedar asentado dicho plazo en el convenio resultante de la conciliación o en el convenio modificatorio, en términos de los artículos 52, penúltimo y último párrafos, o 79, primer párrafo de la Ley, según corresponda.

[◊] Esta tesis se encuentra relacionada con el engrose A.R. 159/2000, mismo que se encuentra desarrollado en el inciso F), a), i), del Capítulo VI de la Tesis.

B) Jurisprudencias y tesis aisladas afines.

JURISPRUDENCIAS Y TESIS AISLADAS	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
	bienes o la prestación de los servicios, o el procedimiento de rescisión se ubique en un ejercicio fiscal diferente a aquél en que hubiere sido adjudicado el contrato, la dependencia o entidad convocante podrá recibir los bienes o servicios, previa verificación de que continúa vigente la necesidad de los mismos y se cuenta con partida y disponibilidad presupuestaria del ejercicio fiscal vigente, debiendo modificarse la vigencia del contrato con los precios originalmente pactados. Cualquier pacto en contrario a lo dispuesto en este artículo se considerará nulo. **Artículo 61 (último párrafo).-** En la tramitación del procedimiento para imponer las sanciones a que se refiere este Título, la Secretaría de la Función Pública deberá observar lo dispuesto por el Título Cuarto y demás aplicables de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, aplicando supletoriamente tanto el Código Civil Federal, como el Código Federal de Procedimientos Civiles.	
43.- [24]Contratos administrativos de obra pública. El artículo 40, párrafo primero, de la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas (abrogada por el artículo segundo transitorio de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de enero de 2000), que faculta a	**Artículo 54 (primer y último párrafos).-** Las dependencias y entidades podrán en cualquier momento rescindir administrativamente los contratos cuando el proveedor incurra en incumplimiento de sus obligaciones, conforme al procedimiento siguiente: I. Se iniciará a partir de que al proveedor le sea comunicado por escrito el incumplimiento en que haya incurrido, para que en un término de cinco días hábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes; II. Transcurrido el término a que se refiere la fracción anterior, la dependencia o entidad contará con un plazo de quince días para resolver, considerando los	**Artículo 98 (primer párrafo).-** Los proveedores que por motivos diferentes al atraso en el cumplimiento de las fechas pactadas para la entrega de los bienes o la prestación del servicio, incumplan con sus obligaciones por cualquier otra causa establecida en el contrato, se sujetarán al procedimiento de rescisión del contrato, conforme al procedimiento establecido en el artículo 54 de la Ley. **Artículo 100 (segundo párrafo).-** En el supuesto de que sea rescindido el contrato, no procederá la contabilización de la sanción por cancelación a que hace referencia el párrafo anterior, toda vez que se deberá hacer efectiva la garantía de cumplimiento.

[24] Tesis aislada relacionada con número de registro 189479, relativo al artículo 13 Constitucional, nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales.

JURISPRUDENCIAS Y TESIS AISLADAS	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
las dependencias y entidades para rescindirlos, no es una ley privativa.[◊] *Época: Novena Época; Registro: 189496; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XIII, Junio de 2001; Materia(s): Constitucional, Administrativa; Tesis: 1a. LI/2001; Página: 231* ***44.- [25]Contratos administrativos de obra pública. El artículo 40, primer párrafo, de la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas (abrogada por el artículo segundo transitorio de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de enero de 2000), que faculta a las dependencias y entidades para rescindirlos, no viola la garantía de acceso a la administración***	argumentos y pruebas que hubiere hecho valer el proveedor. La determinación de dar o no por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada, motivada y comunicada al proveedor dentro dicho plazo, y III. Cuando se rescinda el contrato se formulará el finiquito correspondiente, a efecto de hacer constar los pagos que deba efectuar la dependencia o entidad por concepto de los bienes recibidos o los servicios prestados hasta el momento de rescisión. … Cuando por motivo del atraso en la entrega de los bienes o la prestación de los servicios, o el procedimiento de rescisión se ubique en un ejercicio fiscal diferente a aquél en que hubiere sido adjudicado el contrato, la dependencia o entidad convocante podrá recibir los bienes o servicios, previa verificación de que continúa vigente la necesidad de los mismos y se cuenta con partida y disponibilidad presupuestaria del ejercicio fiscal vigente, debiendo modificarse la vigencia del contrato con los precios originalmente pactados. Cualquier pacto en contrario a lo dispuesto en este artículo se considerará nulo. **TRANSITORIO (SEGUNDO).-** Se abroga la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas. ***Texto de la Ley de Adquisiciones y Obra Pública:*** **Artículo 40.-** Las dependencias y entidades podrán rescindir administrativamente los contratos en caso de	

◊ Esta tesis se encuentra relacionada con el engrose A.R. 159/2000, mismo que se encuentra desarrollado en el inciso F), a), i), del Capítulo VI de la Tesis.
[25] Tesis Aislada relacionada con número de registro 190295, relativo al artículo 17 Constitucional de la garantía de acceso a la administración de justicia.

B) Jurisprudencias y tesis aisladas afines.

JURISPRUDENCIAS Y TESIS AISLADAS	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
de justicia.◊ *Época: Novena. Registro: 189494; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XIII, Junio de 2001; Materia(s): Constitucional, Administrativa; Tesis: 1a. XLVIII/2001; Página: 233*	incumplimiento de las obligaciones a cargo del proveedor o contratista.	
45.- Contratos administrativos, rescisión de los. *[J]; 5a. Época; Pleno; Ap. 1995; Tomo III, Parte SCJN; Pág. 32. 43; Registro: 390 933.*	**Artículo 54 (fracciones I y II).-** Las dependencias y entidades podrán en cualquier momento rescindir administrativamente los contratos cuando el proveedor incurra en incumplimiento de sus obligaciones, conforme al procedimiento siguiente: I. Se iniciará a partir de que al proveedor le sea comunicado por escrito el incumplimiento en que haya incurrido, para que en un término de cinco días hábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes; II. Transcurrido el término a que se refiere la fracción anterior, la dependencia o entidad contará con un plazo de quince días para resolver, considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer el proveedor. La determinación de dar o no por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada, motivada	**Artículo 98.-** Los proveedores que por motivos diferentes al atraso en el cumplimiento de las fechas pactadas para la entrega de los bienes o la prestación del servicio, incumplan con sus obligaciones por cualquier otra causa establecida en el contrato, se sujetarán al procedimiento de rescisión del contrato, conforme al procedimiento establecido en el artículo 54 de la Ley. En cualquier momento la dependencia o entidad podrá rescindir administrativamente un contrato, para lo cual deberá llevar a cabo el procedimiento previsto en el artículo 54 de la Ley; motivando la rescisión en alguna de las causales previstas para tal efecto. Si es el proveedor quien decide rescindir el contrato será necesario que acuda ante la autoridad judicial federal y obtenga la declaración correspondiente. … **Artículo 114 (fracción I).-** La Secretaría de la Función Pública tomará conocimiento de los actos o hechos presuntamente constitutivos de infracciones que cometan los licitantes o proveedores a través, entre otros, de los medios siguientes: I. CompraNet, para lo cual las dependencias y

◊ Esta tesis se encuentra relacionada con el engrose A.R. 159/2000, mismo que se encuentra desarrollado en el inciso F), a), i, del Capítulo VI de la Tesis.

B) Jurisprudencias y tesis aisladas afines.

JURISPRUDENCIAS Y TESIS AISLADAS	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
	y comunicada al proveedor dentro dicho plazo, y III. Cuando se rescinda el contrato se formulará el finiquito correspondiente, a efecto de hacer constar los pagos que deba efectuar la dependencia o entidad por concepto de los bienes recibidos o los servicios prestados hasta el momento de rescisión.	entidades deberán registrar la falta de formalización de los contratos y las rescisiones de los mismos en un plazo máximo de diez días naturales contados a partir de la fecha en que se debió haber realizado la formalización correspondiente o de aquélla en que haya concluido la substanciación del procedimiento de rescisión, de conformidad con el artículo 54 de la Ley; **Artículo 95 (último párrafo).-** De igual manera, los contratos establecerán que el pago de los bienes, arrendamientos o servicios quedará condicionado, proporcionalmente, al pago que el proveedor deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso, en el entendido de que si el contrato es rescindido no procederá el cobro de dichas penas ni la contabilización de las mismas al hacer efectiva la garantía de cumplimiento. **Artículo 99.-** Concluido el procedimiento de rescisión de un contrato se formulará y notificará el finiquito correspondiente, dentro de los veinte días naturales siguientes a la fecha en que se notifique la rescisión, a efecto de hacer constar los pagos que deban efectuarse y demás circunstancias del caso. Al efecto, deberá considerarse lo dispuesto en el inciso b) de la fracción I y en la fracción III del artículo 103 del presente Reglamento, ello sin perjuicio de lo dispuesto en la fracción III del artículo 60 de la Ley.
46.- Contratos, voluntad de las partes en los. *[TA]; 5a. Época; 3a. Sala; S.J.F.; Tomo XXXV; Pág. 1237; Registro: 362802. 12 de julio de 1932.* Tiene dos limitaciones forzosas, ineludibles: la primera, que se deriva del	**Artículo 45.-** El contrato o pedido contendrá, en lo aplicable, lo siguiente: I. El nombre, denominación o razón social de la dependencia o entidad convocante; II. La indicación del procedimiento conforme al cual se llevó a cabo la adjudicación del contrato; III. Los datos relativos a la autorización del presupuesto para cubrir el compromiso derivado del contrato; IV. Acreditación de la existencia y personalidad del	**Artículo 81.-** Además de lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley, el contrato deberá: I. Ser firmado en términos de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 44 de este Reglamento, cuando la proposición ganadora de la licitación pública haya sido presentada en forma conjunta por varias personas. El contrato deberá estipular la forma en la que las personas que integran la proposición conjunta hayan

JURISPRUDENCIAS Y TESIS AISLADAS	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
interés público que está por encima de la voluntad individual, y la segunda de la técnica jurídica, sobre la que tampoco puede prevalecer el capricho de los contratantes.	licitante adjudicado; V. La descripción pormenorizada de los bienes, arrendamientos o servicios objeto del contrato adjudicado a cada uno de los licitantes en el procedimiento, conforme a su proposición; VI. El precio unitario y el importe total a pagar por los bienes, arrendamientos o servicios, o bien, la forma en que se determinará el importe total; VII. Precisión de si el precio es fijo o sujeto a ajustes y, en este último caso, la fórmula o condición en que se hará y calculará el ajuste, determinando expresamente el o los indicadores o medios oficiales que se utilizarán en dicha fórmula; VIII. En el caso de arrendamiento, la indicación de si éste es con o sin opción a compra; IX. Los porcentajes de los anticipos que, en su caso, se otorgarían, los cuales no podrán exceder del cincuenta por ciento del monto total del contrato; … **Artículo 80 (primer párrafo).-** Podrá convenirse compromiso arbitral respecto de aquellas controversias que surjan entre las partes por interpretación a las cláusulas de los contratos o por cuestiones derivadas de su ejecución, en términos de lo dispuesto en el Título Cuarto del Libro Quinto del Código de Comercio. **Artículo 84.-** Las partes podrán convenir otros mecanismos de solución de controversias para resolver sus discrepancias sobre la interpretación o ejecución	acordado en el convenio respectivo, las partes objeto del contrato que corresponderá cumplir a cada uno, así como si quedarán obligados en forma solidaria o mancomunada respecto del cumplimiento del contrato; II. Señalar que la garantía de cumplimiento se hará efectiva por el monto total de la obligación garantizada, salvo que en los contratos se haya estipulado su divisibilidad. En caso de que por las características de los bienes o servicios entregados éstos no puedan funcionar o ser utilizados por la dependencia o entidad por estar incompletos, la garantía siempre se hará efectiva por el monto total de la obligación garantizada; III. Establecer que el proveedor será el responsable de entregar los bienes y, en caso de ser de procedencia extranjera, se deberá indicar cuál de las partes asumirá la responsabilidad de efectuar los trámites de importación y pagar los impuestos y derechos que se generen con motivo de la misma; IV. Prever que en caso de discrepancia entre la convocatoria a la licitación pública, la invitación a cuando menos tres personas o la solicitud de cotización y el modelo de contrato, prevalecerá lo establecido en la convocatoria, invitación o solicitud respectiva; …

JURISPRUDENCIAS Y TESIS AISLADAS	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
	de los contratos. **Artículo 85.-** Las controversias que se susciten con motivo de la interpretación o aplicación de los contratos celebrados con base en esta Ley, serán resueltas por los tribunales federales, en los casos en que no se haya pactado cláusula arbitral o medio alterno de solución de controversias, o éstas no resulten aplicables.	
47.- [13]***Controversia constitucional. Adquisiciones, arrendamientos, servicios y almacenes del estado de Nayarit. El artículo 34, fracción I, de la ley relativa, al excluir como participantes en las licitaciones públicas que realicen los órganos autorizados en la citada entidad a quienes estén relacionados con los servidores públicos que intervienen directa o indirectamente en los procedimientos de adquisición de bienes o servicios para el sector público, no contraviene el artículo 5o. de la Constitución Federal.***[◊] *Época: Novena; Registro:*	**Artículo 50 (fracción I).-** Las dependencias y entidades se abstendrán de recibir proposiciones o adjudicar contrato alguno en las materias a que se refiere esta Ley, con las personas siguientes: I. Aquéllas en que el servidor público que intervenga en cualquier etapa del procedimiento de contratación tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquéllas de las que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o sus parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte durante los dos años previos a la fecha de celebración del procedimiento de contratación de que se trate; …	**Artículo 39 (fracción VI, inciso e).-** La convocatoria a la licitación pública y, cuando proceda, el Proyecto de convocatoria deberán contener los requisitos que señala el artículo 29 de la Ley y se elaborarán conforme al orden, apartados e información que a continuación se indican: … VI. Documentos y datos que deben presentar los licitantes, entre los que se encuentran los siguientes: … e) El escrito mediante el cual el licitante manifieste bajo protesta de decir verdad, que no se ubica en los supuestos establecidos en los artículos 50 y 60, antepenúltimo párrafo de la Ley; **Artículo 48 (fracciones III y VIII, inciso a).-** Durante el desarrollo del acto de presentación y apertura de proposiciones se observará lo siguiente: **…** III. El servidor público que presida el acto, deberá recibir las proposiciones para su posterior evaluación, por lo que no podrá desechar ninguna de ellas durante dicho acto. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley, la recepción de la proposición se entenderá

[13] Tesis Aisladas relacionadas con números de registro 175160, 170561, 179274, 188894, y 190614, respecto al artículo 5° Constitucional relativo a no violar la garantía de trabajo.

[◊] Esta tesis corresponde al engrose C.C. 54/2003, que se encuentra desarrollado en el inciso C), i), del Capítulo VI de la Tesis.

B) Jurisprudencias y tesis aisladas afines.

JURISPRUDENCIAS Y TESIS AISLADAS	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
178492; Instancia: Pleno; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXI, Mayo de 2005; Materia(s): Constitucional; Tesis: P./J. 22/2005; Página: 1003.		realizada una vez que ésta se analice durante su evaluación, debiéndose indicar en el fallo si la proposición fue desechada por incumplir la mencionada disposición legal; … VIII. Se requerirá a los licitantes que entreguen junto con el Sobre cerrado, los escritos siguientes: a) La declaración prevista en la fracción VIII del artículo 29 de la Ley, relativa a no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos por los artículos 50 y 60 de la misma;
48.- [24]Dependencias y entidades de la administración pública. La facultad rescisoria contenida en el artículo 40, primer párrafo, de la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas (abrogada por el artículo segundo transitorio de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de enero de 2000), no les otorga la calidad de tribunales especiales prohibidos por el artículo 13 de la Constitución Federal.◊ *Época: Novena; Registro: 189479; Instancia: Primera*	**Artículo 54 (primer y último párrafos).-** Las dependencias y entidades podrán en cualquier momento rescindir administrativamente los contratos cuando el proveedor incurra en incumplimiento de sus obligaciones, conforme al procedimiento siguiente: I. Se iniciará a partir de que al proveedor le sea comunicado por escrito el incumplimiento en que haya incurrido, para que en un término de cinco días hábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes; II. Transcurrido el término a que se refiere la fracción anterior, la dependencia o entidad contará con un plazo de quince días para resolver, considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer el proveedor. La determinación de dar o no por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada, motivada y comunicada al proveedor dentro dicho plazo, y III. Cuando se rescinda el contrato se formulará el finiquito correspondiente, a efecto de hacer constar los pagos que deba efectuar la dependencia o entidad por concepto de los bienes recibidos o los servicios	**Artículo 98 (primer párrafo).-** Los proveedores que por motivos diferentes al atraso en el cumplimiento de las fechas pactadas para la entrega de los bienes o la prestación del servicio, incumplan con sus obligaciones por cualquier otra causa establecida en el contrato, se sujetarán al procedimiento de rescisión del contrato, conforme al procedimiento establecido en el artículo 54 de la Ley. **Artículo 100 (segundo párrafo).-** En el supuesto de que sea rescindido el contrato, no procederá la contabilización de la sanción por cancelación a que hace referencia el párrafo anterior, toda vez que se deberá hacer efectiva la garantía de cumplimiento.

[24] Tesis aislada relacionada con número de registro 189496, relativo al artículo 13 Constitucional, nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales.

◊ Esta tesis se encuentra relacionada con el engrose A.R. 159/2000, mismo que se encuentra desarrollado en el inciso F), a), i, del Capítulo VI de la Tesis.

B) Jurisprudencias y tesis aisladas afines.

JURISPRUDENCIAS Y TESIS AISLADAS	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
Sala; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XIII, Junio de 2001; Materia(s): Constitucional, Administrativa; Tesis: 1a. L/2001; Página: 235	prestados hasta el momento de rescisión. … Cuando por motivo del atraso en la entrega de los bienes o la prestación de los servicios, o el procedimiento de rescisión se ubique en un ejercicio fiscal diferente a aquél en que hubiere sido adjudicado el contrato, la dependencia o entidad convocante podrá recibir los bienes o servicios, previa verificación de que continúa vigente la necesidad de los mismos y se cuenta con partida y disponibilidad presupuestaria del ejercicio fiscal vigente, debiendo modificarse la vigencia del contrato con los precios originalmente pactados. Cualquier pacto en contrario a lo dispuesto en este artículo se considerará nulo. **TRANSITORIO (SEGUNDO).-** Se abroga la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas. ***Texto de la Ley de Adquisiciones y Obra Pública:*** **Artículo 40.-** Las dependencias y entidades podrán rescindir administrativamente los contratos en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo del proveedor o contratista.	
49.- Empresas de participación estatal. No son parte integrante de la federación. *[TA]; 7a. Época; T.C.C.; S.J.F.; Volumen 193-198, Sexta Parte; Pág. 202; Registro: 248 784.* ***50.- Empresa de***	**Artículo 1 (fracción V).-** La presente Ley es de orden público y tiene por objeto reglamentar la aplicación del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de las adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y prestación de servicios de cualquier naturaleza, que realicen: … V. Las empresas de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos en los que el fideicomitente sea el gobierno federal o una entidad paraestatal, y	**Artículo 98 (primer párrafo).-** Los proveedores que por motivos diferentes al atraso en el cumplimiento de las fechas pactadas para la entrega de los bienes o la prestación del servicio, incumplan con sus obligaciones por cualquier otra causa establecida en el contrato, se sujetarán al procedimiento de rescisión del contrato, conforme al procedimiento establecido en el artículo 54 de la Ley. **Artículo 100 (segundo párrafo).-** En el supuesto de que sea rescindido el contrato, no procederá la

JURISPRUDENCIAS Y TESIS AISLADAS	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
participación estatal mayoritaria de la Administración Pública Federal. No es persona moral oficial porque su patrimonio no es exclusivo del Estado. [*TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F.; Volumen 11, Pág. 2847; Registro: 2007601. Libro 11, Octubre de 2014, Tomo III.*		contabilización de la sanción por cancelación a que hace referencia el párrafo anterior, toda vez que se deberá hacer efectiva la garantía de cumplimiento.
51.- Fianzas otorgadas en contratos de obra pública. Son exigibles aun cuando en el medio impugnativo correspondiente no se haya reconocido, por resolución firme, la validez de la rescisión decretada por incumplimiento del obligado principal, salvo cuando el deudor principal obtenga la suspensión o cuando en la póliza se pacte lo contrario y la ley permita convenir sobre ese aspecto.◊ *Época: Novena; Registro: 176708; Instancia: Segunda Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XXII, Noviembre de*	**Artículo 48 (primer párrafo, fracción II).-** Los proveedores que celebren los contratos a que se refiere esta Ley deberán garantizar: … II. El cumplimiento de los contratos	**Artículo 81 (fracciones II y VII).-** Además de lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley, el contrato deberá: … II. Señalar que la garantía de cumplimiento se hará efectiva por el monto total de la obligación garantizada, salvo que en los contratos se haya estipulado su divisibilidad. En caso de que por las características de los bienes o servicios entregados éstos no puedan funcionar o ser utilizados por la dependencia o entidad por estar incompletos, la garantía siempre se hará efectiva por el monto total de la obligación garantizada; … VII. Establecer, en el caso que se actualice el supuesto a que hace referencia el segundo párrafo del artículo 48 de la Ley y el primer párrafo del artículo 86 del presente Reglamento, el monto de la garantía de cumplimiento previsto en el procedimiento de contratación de que se trate y el porcentaje de reducción al mismo, así como la previsión de que las penas convencionales que se llegaren a aplicar se

◊ Esta tesis corresponde al engrose C.T. 17/2005 PL, que se encuentra desarrollado en el inciso A), i), del Capítulo VI de la Tesis.

JURISPRUDENCIAS Y TESIS AISLADAS	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
2005; Materia(s): Administrativa; Tesis: 2a./J. 136/2005; Página: 49 ***52.- Fianzas para garantizar obligaciones derivadas de contratos de obra pública. Su caducidad debe computarse a partir de que la autoridad administrativa notifica la rescisión por causas imputables al contratista.***[◊] *Época: Novena; Registro: 177001; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XXII, Octubre de 2005; Materia(s): Civil; Tesis: 1a./J. 94/2005; Página: 254*		calcularán en términos de lo señalado en el segundo párrafo del artículo 86 de este Reglamento, y **Artículo 85 (segundo párrafo, fracción IV).-** Las dependencias y entidades podrán celebrar contratos abiertos cuando cuenten con la autorización presupuestaria para cubrir el monto mínimo. … IV. En caso de que se hubieren pactado las cantidades de bienes o servicios para cada orden de surtimiento, si la dependencia o entidad necesita de cantidades distintas a las pactadas, las mismas podrán suministrarse siempre y cuando el proveedor lo acepte, se formalice la modificación al contrato en los términos de lo dispuesto por el quinto párrafo del artículo 52 de la Ley y se realice el ajuste correspondiente a la garantía otorgada, observándose lo dispuesto por la fracción II del artículo 103 de este Reglamento, tratándose de fianza; **Artículo 87 (último párrafo).-** En el caso de entregas parciales de bienes o de prestación de servicios realizados, la garantía de cumplimiento podrá reducirse en forma proporcional a los bienes recibidos o a los servicios ya prestados. **Artículo 91 (último párrafo).** Las modificaciones en monto, plazo o vigencia a los contratos conllevarán el respectivo ajuste a la garantía de cumplimiento cuando dicho incremento no se encuentre cubierto por la garantía originalmente otorgada, para lo cual deberá estipularse en el convenio modificatorio respectivo el plazo para entregar la ampliación de garantía, el cual no deberá exceder de diez días naturales siguientes a la firma de dicho convenio, así como la fecha de entrega de los bienes o de la prestación del servicio para las cantidades

[◊] Esta tesis corresponde al engrose C.T. 29/2005- PS, que se encuentra desarrollado en el inciso H), i), del Capítulo VI de la Tesis.

B) Jurisprudencias y tesis aisladas afines.

JURISPRUDENCIAS Y TESIS AISLADAS	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
		adicionales. Tratándose de fianza, el ajuste correspondiente se realizará conforme a lo dispuesto por la fracción II y el último párrafo del artículo 103 de este Reglamento. **Artículo 94 (último párrafo).-** El descuento señalado en el párrafo anterior no se considerará como una modificación al monto del contrato y, en consecuencia, no afectará a la garantía de cumplimiento del mismo. **Artículo 103 (primer y segundo párrafos, fracción II).-** Los proveedores podrán otorgar las garantías a que se refiere la Ley y este Reglamento, en alguna de las formas previstas en el artículo 137 del Reglamento de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación en el caso de dependencias, o en las disposiciones aplicables tratándose de entidades. Cuando la forma de garantía sea mediante fianza, se observará lo siguiente: … II. En caso de otorgamiento de prórrogas o esperas al proveedor para el cumplimiento de sus obligaciones, derivadas de la formalización de convenios de ampliación al monto o al plazo del contrato, se deberá realizar la modificación correspondiente a la fianza;
	Artículo 54 (primer párrafo).- Las dependencias y entidades podrán en cualquier momento rescindir administrativamente los contratos cuando el proveedor incurra en incumplimiento de sus obligaciones, conforme al procedimiento siguiente: I. Se iniciará a partir de que al proveedor le sea comunicado por escrito el incumplimiento en que haya incurrido, para que en un término de cinco días hábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes;	**Artículo 98.-** Los proveedores que por motivos diferentes al atraso en el cumplimiento de las fechas pactadas para la entrega de los bienes o la prestación del servicio, incumplan con sus obligaciones por cualquier otra causa establecida en el contrato, se sujetarán al procedimiento de rescisión del contrato, conforme al procedimiento establecido en el artículo 54 de la Ley. En cualquier momento la dependencia o entidad podrá rescindir administrativamente un contrato, para lo cual deberá llevar a cabo el procedimiento previsto en el artículo 54 de la Ley; motivando la rescisión en

B) Jurisprudencias y tesis aisladas afines.

JURISPRUDENCIAS Y TESIS AISLADAS	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
	II. Transcurrido el término a que se refiere la fracción anterior, la dependencia o entidad contará con un plazo de quince días para resolver, considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer el proveedor. La determinación de dar o no por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada, motivada y comunicada al proveedor dentro dicho plazo, y III. Cuando se rescinda el contrato se formulará el finiquito correspondiente, a efecto de hacer constar los pagos que deba efectuar la dependencia o entidad por concepto de los bienes recibidos o los servicios prestados hasta el momento de rescisión. …	alguna de las causales previstas para tal efecto. Si es el proveedor quien decide rescindir el contrato será necesario que acuda ante la autoridad judicial federal y obtenga la declaración correspondiente. … **Artículo 114 (fracción I).-** La Secretaría de la Función Pública tomará conocimiento de los actos o hechos presuntamente constitutivos de infracciones que cometan los licitantes o proveedores a través, entre otros, de los medios siguientes: I. CompraNet, para lo cual las dependencias y entidades deberán registrar la falta de formalización de los contratos y las rescisiones de los mismos en un plazo máximo de diez días naturales contados a partir de la fecha en que se debió haber realizado la formalización correspondiente o de aquélla en que haya concluido la substanciación del procedimiento de rescisión, de conformidad con el artículo 54 de la Ley; **Artículo 95 (último párrafo).-** De igual manera, los contratos establecerán que el pago de los bienes, arrendamientos o servicios quedará condicionado, proporcionalmente, al pago que el proveedor deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso, en el entendido de que si el contrato es rescindido no procederá el cobro de dichas penas ni la contabilización de las mismas al hacer efectiva la garantía de cumplimiento. **Artículo 99.-** Concluido el procedimiento de rescisión de un contrato se formulará y notificará el finiquito correspondiente, dentro de los veinte días naturales siguientes a la fecha en que se notifique la rescisión, a efecto de hacer constar los pagos que deban efectuarse y demás circunstancias del caso. Al efecto, deberá considerarse lo dispuesto en el inciso b) de la fracción I y en la fracción III del artículo 103 del

B) Jurisprudencias y tesis aisladas afines.

JURISPRUDENCIAS Y TESIS AISLADAS	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
		presente Reglamento, ello sin perjuicio de lo dispuesto en la fracción III del artículo 60 de la Ley.
53.- Fundamentación y motivación. *[J]; 7a. Época; 2a. Sala; Ap. 1995; Tomo VI, Parte SCJN; Pág. 175260; Registro: 394216* ***54.- Fundamentación y motivación. Deben constar en el cuerpo de la resolución y no en documento distinto.*** *[J]; 7a. Época; 2a. Sala; Ap. 1995; Tomo VI, Parte SCJN; Pág. 177262; Registro: 394 218*	**Artículo 13 (último párrafo).-** Las dependencias y entidades podrán, dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y motivadas, autorizar el pago de suscripciones, seguros o de otros servicios, en los que no sea posible pactar que su costo sea cubierto después de que la prestación del servicio se realice. **Artículo 22 (último párrafo).-** La Secretaría de la Función Pública podrá participar como asesor en los comités y subcomités a que se refiere este artículo, pronunciándose de manera fundada y motivada al emitir sus opiniones. **Artículo 54 (fracción II).-** Las dependencias y entidades podrán en cualquier momento rescindir administrativamente los contratos cuando el proveedor incurra en incumplimiento de sus obligaciones, conforme al procedimiento siguiente: … II. Transcurrido el término a que se refiere la fracción anterior, la dependencia o entidad contará con un plazo de quince días para resolver, considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer el proveedor. La determinación de dar o no por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada, motivada y comunicada al proveedor dentro dicho plazo, y **Artículo 73.-** La resolución contendrá: I. Los preceptos legales en que funde su competencia para resolver el asunto; II. La fijación clara y precisa del acto impugnado; III. El análisis de los motivos de inconformidad, para lo cual podrá corregir errores u omisiones del inconforme en la cita de los preceptos que estime violados, así como examinar en su conjunto los motivos de impugnación y demás razonamientos expresados por	

B) Jurisprudencias y tesis aisladas afines.

JURISPRUDENCIAS Y TESIS AISLADAS	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
	la convocante y el tercero interesado, a fin de resolver la controversia efectivamente planteada, pero no podrá pronunciarse sobre cuestiones que no hayan sido expuestas por el promovente; IV. La valoración de las pruebas admitidas y desahogadas en el procedimiento; V. Las consideraciones y fundamentos legales en que se apoye, y VI. Los puntos resolutivos que expresen claramente sus alcances y efectos, en congruencia con la parte considerativa, fijando cuando proceda las directrices para la reposición de actos decretados nulos o para la firma del contrato. **Artículo 74 (fracciones I, II y III).-** La resolución que emita la autoridad podrá: I. Sobreseer en la instancia; II. Declarar infundada la inconformidad; III. Declarar que los motivos de inconformidad resultan inoperantes para decretar la nulidad del acto impugnado, cuando las violaciones alegadas no resulten suficientes para afectar su contenido;…	**Artículo 110.-** Cuando una instancia de inconformidad sea sobreseída o resuelta como infundada y en la misma se determine que se promovió para retrasar o entorpecer la contratación, se sancionará al inconforme con inhabilitación en términos de la fracción IV del artículo 60 de la Ley y multa de acuerdo con el primer párrafo del artículo 59 de la Ley.
55.- Fundamentación y motivación de los actos administrativos. *Registro: 216534. Localización: Octava Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito: Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 64, Abril de 1993. Página 43, Tesis: VI. 2°, J/248. Jurisprudencias. Materia (S): Administrativa.*	**Artículo 73.-** La resolución contendrá: I. Los preceptos legales en que funde su competencia para resolver el asunto; II. La fijación clara y precisa del acto impugnado; III. El análisis de los motivos de inconformidad, para lo cual podrá corregir errores u omisiones del inconforme en la cita de los preceptos que estime violados, así como examinar en su conjunto los motivos de impugnación y demás razonamientos expresados por la convocante y el tercero interesado, a fin de resolver la controversia efectivamente planteada, pero no podrá pronunciarse sobre cuestiones que no hayan sido expuestas por el promovente…	

B) Jurisprudencias y tesis aisladas afines.

JURISPRUDENCIAS Y TESIS AISLADAS	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
56.- Fundamentación y motivación. *[J]; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo III, Marzo de 1996; Pág. 769. VI.2o. J/43; Registro: 203143.* ***57.- Fundamentación y motivación. Violación formal y material.*** *[J]; 7a. Época; T.C.C.; Ap. 1995; Tomo III, Parte TCC; Pág. 493674; Registro: 391 564*	**Artículo 13 (último párrafo).-** Las dependencias y entidades podrán, dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y motivadas, autorizar el pago de suscripciones, seguros o de otros servicios, en los que no sea posible pactar que su costo sea cubierto después de que la prestación del servicio se realice. **Artículo 22 (último párrafo).-** La Secretaría de la Función Pública podrá participar como asesor en los comités y subcomités a que se refiere este artículo, pronunciándose de manera fundada y motivada al emitir sus opiniones. **Artículo 54 (fracción II).-** Las dependencias y entidades podrán en cualquier momento rescindir administrativamente los contratos cuando el proveedor incurra en incumplimiento de sus obligaciones, conforme al procedimiento siguiente: … II. Transcurrido el término a que se refiere la fracción anterior, la dependencia o entidad contará con un plazo de quince días para resolver, considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer el proveedor. La determinación de dar o no por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada, motivada y comunicada al proveedor dentro dicho plazo, y **Artículo 73.-** La resolución contendrá: I. Los preceptos legales en que funde su competencia para resolver el asunto; II. La fijación clara y precisa del acto impugnado; III. El análisis de los motivos de inconformidad, para lo cual podrá corregir errores u omisiones del inconforme en la cita de los preceptos que estime violados, así como examinar en su conjunto los motivos de impugnación y demás razonamientos expresados por la convocante y el tercero interesado, a fin de resolver la controversia efectivamente planteada, pero no podrá	

JURISPRUDENCIAS Y TESIS AISLADAS	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
	pronunciarse sobre cuestiones que no hayan sido expuestas por el promovente; IV. La valoración de las pruebas admitidas y desahogadas en el procedimiento; V. Las consideraciones y fundamentos legales en que se apoye, y VI. Los puntos resolutivos que expresen claramente sus alcances y efectos, en congruencia con la parte considerativa, fijando cuando proceda las directrices para la reposición de actos decretados nulos o para la firma del contrato. **Artículo 74 (fracciones I, II y III).-** La resolución que emita la autoridad podrá: I. Sobreseer en la instancia; II. Declarar infundada la inconformidad; III. Declarar que los motivos de inconformidad resultan inoperantes para decretar la nulidad del acto impugnado, cuando las violaciones alegadas no resulten suficientes para afectar su contenido;…	**Artículo 110.-** Cuando una instancia de inconformidad sea sobreseída o resuelta como infundada y en la misma se determine que se promovió para retrasar o entorpecer la contratación, se sancionará al inconforme con inhabilitación en términos de la fracción IV del artículo 60 de la Ley y multa de acuerdo con el primer párrafo del artículo 59 de la Ley.
58.- Gastos financieros. Es procedente condenar al pago de los mismos si se acredita el incumplimiento de los pagos de estimaciones y ajustes de costos, aun cuando las partes no lo hayan pactado expresamente en el contrato de obra pública (interpretación del artículo 69 de la Ley de Adquisiciones y Obras	**Artículo 51 (segundo párrafo).-** En caso de incumplimiento en los pagos a que se refiere el párrafo anterior, la dependencia o entidad, a solicitud del proveedor, deberá pagar gastos financieros conforme a la tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales…	

B) Jurisprudencias y tesis aisladas afines.

JURISPRUDENCIAS Y TESIS AISLADAS	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
Públicas).[◊] *Época: Novena; Registro: 170937; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XXVI, Noviembre de 2007; Materia(s): Administrativa; Tesis: 1a./J. 144/2007; Página: 118*		
59.- Inconformidad. El artículo 65, fracciones I y III, tercer párrafo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público no viola la garantía de acceso a la justicia (legislación vigente a partir del 8 de julio de 2005). *Registro: 174454; Localización: 9ª. Época; 2ª. Sala; S.J.F. y su Gaceta; XXIV, Agosto de 2006; Pág. 403; [T.A.]*	**Artículo 65 (fracciones I y V).-** La Secretaría de la Función Pública conocerá de las inconformidades que se promuevan contra los actos de los procedimientos de licitación pública o invitación a cuando menos tres personas que se indican a continuación: I. La convocatoria a la licitación, y las juntas de aclaraciones. En este supuesto, la inconformidad sólo podrá presentarse por el interesado que haya manifestado su interés por participar en el procedimiento según lo establecido en el artículo 33 Bis de esta Ley, dentro de los seis días hábiles siguientes a la celebración de la última junta de aclaraciones; … V. Los actos y omisiones por parte de la convocante que impidan la formalización del contrato en los términos establecidos en la convocatoria a la licitación o en esta Ley. En esta hipótesis, la inconformidad sólo podrá presentarse por quien haya resultado adjudicado, dentro de los seis días hábiles posteriores a aquél en que hubiere vencido el plazo establecido en el	**Artículo 116.-** Al escrito inicial de las inconformidades a que se refiere la fracción I del artículo 65 de la Ley, deberá acompañarse la manifestación a que se refiere el tercer párrafo del artículo 33 Bis de la Ley, con el acuse de recibo o sello de la dependencia o entidad correspondiente, o bien, la constancia que se obtenga de su envío en forma electrónica, a través de CompraNet. La omisión de exhibir el documento referido en el párrafo anterior será motivo de prevención en términos de lo dispuesto por el penúltimo párrafo del artículo 66 de la Ley.

◊ Esta tesis corresponde al engrose C.T. 86/2007- PS, que se encuentra desarrollado en el inciso D), d), i), del Capítulo VI de la Tesis.

JURISPRUDENCIAS Y TESIS AISLADAS	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
	fallo para la formalización del contrato o, en su defecto, el plazo legal. ***Texto de la ley con las reformas del 7 de julio de 2005:*** **Artículo 65 (fracción I y III).-…** I. La convocatoria, las bases de licitación o la junta de aclaraciones, siempre que el interesado haya adquirido las bases y manifestado su objeción, así como los argumentos y razones jurídicas que la funden, en la propia junta de aclaraciones. … III. Los actos y omisiones por parte de la convocante que impidan la formalización del contrato en los términos establecidos en las bases o en esta Ley	
60.- Inconformidad. La prevista en el artículo 95 de la abrogada Ley de Adquisiciones y Obras Públicas constituye un recurso en sede administrativa y no simplemente una denuncia de hechos.[◊] *Época: Novena; Registro: 189081; Instancia: Segunda Sala; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XIV, Agosto de 2001; Materia(s): Administrativa; Tesis: 2a. CXXXVII/2001;*	**Artículo 65.-** La Secretaría de la Función Pública conocerá de las inconformidades que se promuevan contra los actos de los procedimientos de licitación pública o invitación a cuando menos tres personas que se indican a continuación: I. La convocatoria a la licitación, y las juntas de aclaraciones. … II. La invitación a cuando menos tres personas. … III. El acto de presentación y apertura de proposiciones, y el fallo. … IV. La cancelación de la licitación. … V. Los actos y omisiones por parte de la convocante que impidan la formalización del contrato en los	**Artículo 116 (primer párrafo).-** Al escrito inicial de las inconformidades a que se refiere la fracción I del artículo 65 de la Ley, deberá acompañarse la manifestación a que se refiere el tercer párrafo del artículo 33 Bis de la Ley, con el acuse de recibo o sello de la dependencia o entidad correspondiente, o bien, la constancia que se obtenga de su envío en forma electrónica, a través de CompraNet. **Artículo 117 (primer párrafo).-** Tratándose de licitaciones públicas internacionales bajo la cobertura de tratados, conforme a lo dispuesto por el artículo 4 de la Ley, el plazo para promover la inconformidad será de diez días hábiles.

[◊] Esta tesis se encuentra relacionada con el engrose A.R. 219/2001, mismo que se encuentra desarrollado en el inciso D), e), i), del Capítulo VI de la Tesis.

B) Jurisprudencias y tesis aisladas afines.

JURISPRUDENCIAS Y TESIS AISLADAS	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
Página: 235	términos establecidos en la convocatoria a la licitación o en esta Ley. … **Artículo 66 (primer párrafo).-** La inconformidad deberá presentarse por escrito, directamente en las oficinas de la Secretaría de la Función Pública o a través de CompraNet. **Artículo 67.-** La instancia de inconformidad es improcedente: I. Contra actos diversos a los establecidos en el artículo 65 de esta Ley; II. Contra actos consentidos expresa o tácitamente; III. Cuando el acto impugnado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del procedimiento de contratación del cual deriva, y IV. Cuando se promueva por un licitante en forma individual y su participación en el procedimiento de contratación se hubiera realizado en forma conjunta.	**Artículo 39 (fracción VII).-** La convocatoria a la licitación pública y, cuando proceda, el Proyecto de convocatoria deberán contener los requisitos que señala el artículo 29 de la Ley y se elaborarán conforme al orden, apartados e información que a continuación se indican: … VII. Domicilio de las oficinas de la autoridad administrativa competente y la dirección electrónica de CompraNet, en que podrán presentarse inconformidades contra los actos de la licitación pública, y
61.- [26]Inconformidad prevista en la Ley de Adquisiciones,	**Artículo 65.-** La Secretaría de la Función Pública conocerá de las inconformidades que se promuevan contra los actos de los procedimientos de licitación	**Artículo 116.-** Al escrito inicial de las inconformidades a que se refiere la fracción I del artículo 65 de la Ley, deberá acompañarse la manifestación a que se

[26] Jurisprudencia relacionada con número de registro 2010357, en cuanto a la excepción del principio de definitividad ya que el artículo 65 de la LAASSP, crea una excepción al artículo 107 Constitucional, fracción IV, consiste en que antes de promover el amparo, el quejoso está obligado a agotar los recursos o medios de defensa que le concede la ley que rige el acto reclamado.

B) Jurisprudencias y tesis aisladas afines.

JURISPRUDENCIAS Y TESIS AISLADAS	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Contra su resolución procede el juicio de amparo indirecto.[◊] *Época: Novena Época; Registro: 162815; Instancia: Segunda Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XXXIII, Febrero de 2011; Materia(s): Común; Tesis: 2a./J. 28/2011; Página: 726.* [*]	pública o invitación a cuando menos tres personas que se indican a continuación: I. La convocatoria a la licitación, y las juntas de aclaraciones. En este supuesto, la inconformidad sólo podrá presentarse por el interesado que haya manifestado su interés por participar en el procedimiento según lo establecido en el artículo 33 Bis de esta Ley, dentro de los seis días hábiles siguientes a la celebración de la última junta de aclaraciones; II. La invitación a cuando menos tres personas. Sólo estará legitimado para inconformarse quien haya recibido invitación, dentro de los seis días hábiles siguientes; III. El acto de presentación y apertura de proposiciones, y el fallo. En este caso, la inconformidad sólo podrá presentarse por quien hubiere presentado proposición, dentro de los seis días hábiles siguientes a la celebración de la junta pública en la que se dé a conocer el fallo, o de que se le haya notificado al licitante en los casos en que no se celebre junta pública; IV. La cancelación de la licitación. En este supuesto, la inconformidad sólo podrá presentarse por el licitante que hubiere presentado proposición, dentro de los seis días hábiles siguientes a su notificación, y V. Los actos y omisiones por parte de la convocante	refiere el tercer párrafo del artículo 33 Bis de la Ley, con el acuse de recibo o sello de la dependencia o entidad correspondiente, o bien, la constancia que se obtenga de su envío en forma electrónica, a través de CompraNet. **Artículo 117 (primer párrafo).-** Tratándose de licitaciones públicas internacionales bajo la cobertura de tratados, conforme a lo dispuesto por el artículo 4 de la Ley, el plazo para promover la inconformidad será de diez días hábiles.

[◊] Esta tesis corresponde al engrose C.T. 409/2010, que se encuentra desarrollado en el inciso K), ii), del Capítulo VI de la Tesis.

[*] La jurisprudencia menciona: …recurso de revisión o el juicio contencioso administrativo, pues el término "podrá" permite válidamente concluir que el recurso de revisión ahí establecido es optativo respecto del juicio contencioso administrativo, por tanto, el análisis del principio de definitividad sólo cabe respecto de este último, en relación con el cual existe una excepción al indicado principio al contener la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo más requisitos para conceder la suspensión que la Ley de Amparo, como lo sostuvo esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 56/2007, de rubro: "Resoluciones administrativas impugnables ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. No es necesario agotar el juicio correspondiente, previamente al amparo, al prever el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo mayores requisitos para conceder la suspensión que los previstos en la ley que rige el juicio de garantías".

B) Jurisprudencias y tesis aisladas afines.

JURISPRUDENCIAS Y TESIS AISLADAS	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
	que impidan la formalización del contrato en los términos establecidos en la convocatoria a la licitación o en esta Ley. En esta hipótesis, la inconformidad sólo podrá presentarse por quien haya resultado adjudicado, dentro de los seis días hábiles posteriores a aquél en que hubiere vencido el plazo establecido en el fallo para la formalización del contrato o, en su defecto, el plazo legal. En todos los casos en que se trate de licitantes que hayan presentado proposición conjunta, la inconformidad sólo será procedente si se promueve conjuntamente por todos los integrantes de la misma.	
62.- [18]Inhabilitación temporal de licitantes o proveedores. El artículo 60, fracción IV, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público que prevé dicha sanción, no pugna con el artículo 134 de la Constitución Federal (legislación vigente a partir del 8 de julio de 2005).◊ *Época: Novena; Registro: 172010; Instancia: Segunda Sala; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XXVI, Julio de 2007; Materia(s): Constitucional,*	**Artículo 60 (fracción IV).-** La Secretaría de la Función Pública, además de la sanción a que se refiere el primer párrafo del artículo anterior, inhabilitará temporalmente para participar de manera directa o por interpósita persona en procedimientos de contratación o celebrar contratos regulados por esta Ley, a las personas que se encuentren en alguno de los supuestos siguientes: … IV. Las que proporcionen información falsa o que actúen con dolo o mala fe en algún procedimiento de contratación, en la celebración del contrato o durante su vigencia, o bien, en la presentación o desahogo de una solicitud de conciliación o de una inconformidad;	**Artículo 88 (fracción III).-** Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley, respecto de las fracciones y párrafos de dicho precepto legal que a continuación se señalan, deberá considerarse lo siguiente: … III. Las proposiciones de las personas que se ubiquen en el supuesto a que se refiere la fracción VII, serán desechadas de la partida en la que se presentaron, debiendo comunicar lo anterior al órgano interno de control para efectos de determinar si se actualiza lo dispuesto por la fracción IV del artículo 60 de la Ley, y … **Artículo 110.-** Cuando una instancia de inconformidad sea sobreseída o resuelta como infundada y en la misma se determine que se promovió para retrasar o entorpecer la contratación, se sancionará al inconforme con inhabilitación en términos de la fracción IV del artículo 60 de la Ley y

[18] Jurisprudencia relacionada con número de registro 162971 y Tesis Aisladas relacionadas con números de registro 2001223, 175161, 175297 y 175366, en cuanto al artículo 134 Constitucional, primer y tercer párrafos, no violan los principios de eficiencia, eficacia y honradez. En las tesis solo señalaron esos tres principios, mientras que en el artículo mencionan además economía e imparcialidad.

◊ Esta tesis corresponde al engrose A.R. 851/2006, que se encuentra desarrollado en el inciso D), a) ii), del Capítulo VI de la Tesis.

B) Jurisprudencias y tesis aisladas afines.

JURISPRUDENCIAS Y TESIS AISLADAS	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
Administrativa; Tesis: 2a. LXXIII/2007; Página: 377.	***Texto de la ley con las reformas del 7 de julio de 2005:*** **Artículo 60 (fracción IV).-** La Secretaría de la Función Pública, además de la sanción a que se refiere el artículo anterior, inhabilitará temporalmente para participar en procedimientos de contratación o celebrar contratos regulados por esta Ley, a las personas que se encuentren en alguno de los supuestos siguientes: … IV. Las que proporcionen información falsa o que actúen con dolo o mala fe en algún procedimiento de contratación, en la celebración del contrato o durante su vigencia, o bien, en la presentación o desahogo de una queja en una audiencia de conciliación o de una inconformidad, y	multa de acuerdo con el primer párrafo del artículo 59 de la Ley.
63.- [21]Inhabilitación temporal de proveedores o licitantes. El artículo 60, fracción IV, y antepenúltimo párrafo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que prevé dicha sanción, no viola el artículo 21, primer párrafo, de la Constitución Federal, por ser distinta a la multa o arresto (legislación vigente a partir del 8 de julio de 2005).◊	**Artículo 60 (fracción IV y antepenúltimo párrafo).-** La Secretaría de la Función Pública, además de la sanción a que se refiere el primer párrafo del artículo anterior, inhabilitará temporalmente para participar de manera directa o por interpósita persona en procedimientos de contratación o celebrar contratos regulados por esta Ley, a las personas que se encuentren en alguno de los supuestos siguientes: … IV. Las que proporcionen información falsa o que actúen con dolo o mala fe en algún procedimiento de contratación, en la celebración del contrato o durante su vigencia, o bien, en la presentación o desahogo de una solicitud de conciliación o de una inconformidad;	**Artículo 88 (fracción III).-** Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley, respecto de las fracciones y párrafos de dicho precepto legal que a continuación se señalan, deberá considerarse lo siguiente: … III. Las proposiciones de las personas que se ubiquen en el supuesto a que se refiere la fracción VII, serán desechadas de la partida en la que se presentaron, debiendo comunicar lo anterior al órgano interno de control para efectos de determinar si se actualiza lo dispuesto por la fracción IV del artículo 60 de la Ley, y … **Artículo 110.-** Cuando una instancia de

[21] Tesis Aisladas relacionadas con números de registro 173632 y 174894, en cuanto al artículo 21, primer párrafo Constitucional, relativo a que no se viola en tanto la inhabilitación temporal no es una pena sino una sanción administrativa y es distinta a la multa o arresto que son atribuciones del MP y la policía para la investigación de delitos.

◊ Esta tesis corresponde al engrose A.R. 851/2006, que se encuentra desarrollado en el inciso D), a), ii), del Capítulo VI de la Tesis.

B) Jurisprudencias y tesis aisladas afines.

JURISPRUDENCIAS Y TESIS AISLADAS	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
Época: Novena; Registro: 174893; Instancia: Segunda Sala; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XXIII, Junio de 2006; Materia(s): Constitucional, Administrativa; Tesis: 2a. LI/2006; Página: 322 **64.- [21]*Inhabilitación temporal de proveedores o licitantes. El artículo 60, fracción IV, y antepenúltimo párrafo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público no prevé una pena sino una sanción administrativa, por lo que no viola el artículo 21, primer párrafo, de la Constitución Federal (legislación vigente a partir del 8 de julio de 2005).◊*** *Época: Novena; Registro: 174894; Instancia: Segunda Sala; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XXIII, Junio de 2006; Materia(s): Constitucional,*	… Si al día en que se cumpla el plazo de inhabilitación a que se refiere el párrafo que antecede el sancionado no ha pagado la multa que hubiere sido impuesta en términos del artículo anterior, la mencionada inhabilitación subsistirá hasta que se realice el pago correspondiente. ***Texto de la ley con las reformas del 7 de julio de 2005:*** **Artículo 60.-** La Secretaría de la Función Pública, además de la sanción a que se refiere el artículo anterior, inhabilitará temporalmente para participar en procedimientos de contratación o celebrar contratos regulados por esta Ley, a las personas que se encuentren en alguno de los supuestos siguientes: I. Los licitantes que injustificadamente y por causas imputables a los mismos no formalicen el contrato adjudicado por la convocante; II. Los proveedores que se encuentren en el supuesto de la fracción III del artículo 50 de este ordenamiento, respecto de dos o más dependencias o entidades; III. Los proveedores que no cumplan con sus obligaciones contractuales por causas imputables a ellos y que, como consecuencia, causen daños o perjuicios graves a la dependencia o entidad de que se trate; así como, aquellos que entreguen bienes o servicios con especificaciones distintas de las convenidas; IV. Las que proporcionen información falsa o que actúen con dolo o mala fe en algún procedimiento de	inconformidad sea sobreseída o resuelta como infundada y en la misma se determine que se promovió para retrasar o entorpecer la contratación, se sancionará al inconforme con inhabilitación en términos de la fracción IV del artículo 60 de la Ley y multa de acuerdo con el primer párrafo del artículo 59 de la Ley.

[21] Tesis Aisladas relacionadas con números de registro 173632 y 174893, en cuanto al artículo 21, primer párrafo Constitucional, relativo a que no se viola en tanto la inhabilitación temporal no es una pena sino una sanción administrativa y es distinta a la multa o arresto que son atribuciones del MP y la policía para la investigación de delitos.

◊ Esta tesis corresponde al engrose A.R. 851/2006, que se encuentra desarrollado en el inciso D), a), ii), del Capítulo VI de la Tesis.

B) Jurisprudencias y tesis aisladas afines.

JURISPRUDENCIAS Y TESIS AISLADAS	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
Administrativa; Tesis: 2a. L/2006; Página: 321. ***65.- [14]Inhabilitación temporal de proveedores o licitantes. La prevista en el artículo 60, fracción IV, y antepenúltimo párrafo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público no es una pena y, por ende, no se rige por el artículo 22, primer párrafo, de la Constitución Federal (legislación vigente a partir del 8 de julio de 2005).◊*** *Época: Novena; Registro: 174892; Instancia: Segunda Sala; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XXIII, Junio de 2006; Materia(s): Constitucional, Administrativa; Tesis: 2a. LII/2006; Página: 323.*	contratación, en la celebración del contrato o durante su vigencia, o bien, en la presentación o desahogo de una queja en una audiencia de conciliación o de una inconformidad, y La inhabilitación que se imponga no será menor de tres meses ni mayor de cinco años, plazo que comenzará a contarse a partir del día siguiente a la fecha en que la Contraloría la haga del conocimiento de las dependencias y entidades, mediante la publicación de la circular respectiva en el Diario Oficial de la Federación. Si al día en que se cumpla el plazo de inhabilitación a que se refiere el párrafo que antecede el sancionado no ha pagado la multa que hubiere sido impuesta en términos del artículo anterior, la mencionada inhabilitación subsistirá hasta que se realice el pago correspondiente. Las dependencias y entidades dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha en que tengan conocimiento de alguna infracción a las disposiciones de esta Ley, remitirán a la Contraloría la documentación comprobatoria de los hechos presumiblemente constitutivos de la infracción. En casos excepcionales, previa autorización de la Secretaría de la Función Pública, las dependencias y entidades podrán aceptar proposiciones de proveedores inhabilitados cuando resulte indispensable por ser éstos los únicos posibles oferentes en el mercado.	
66.- Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los	**Artículo 54 (primer y último párrafos).-** Las dependencias y entidades podrán en cualquier	**Artículo 98 (primer párrafo).-** Los proveedores que por motivos diferentes al atraso en el cumplimiento de

[14] Tesis Aisladas relacionadas con números de registro 171252, 171251 y 190621, en cuanto al artículo 22 Constitucional, relativo a que quedan prohibidas… la multa excesiva… las penas inusitadas y transcendentales.

◊ Esta tesis corresponde al engrose A.R. 851/2006, que se encuentra desarrollado en el inciso D), a), ii), del Capítulo VI de la Tesis.

B) Jurisprudencias y tesis aisladas afines.

JURISPRUDENCIAS Y TESIS AISLADAS	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
Trabajadores del Estado. La rescisión de los contratos de obra pública que declare con fundamento en el artículo 40 de la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas (abrogada por el artículo segundo transitorio de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, publicada en el diario oficial de la federación el 4 de enero de 2000), tiene el carácter de acto de autoridad para efectos del juicio de amparo.[27] ◊ *Época: Novena; Registro: 189452; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XIII, Junio de 2001; Materia(s): Administrativa; Tesis: 1a. LII/2001; Página: 240*	momento rescindir administrativamente los contratos cuando el proveedor incurra en incumplimiento de sus obligaciones, conforme al procedimiento siguiente: I. Se iniciará a partir de que al proveedor le sea comunicado por escrito el incumplimiento en que haya incurrido, para que en un término de cinco días hábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes; II. Transcurrido el término a que se refiere la fracción anterior, la dependencia o entidad contará con un plazo de quince días para resolver, considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer el proveedor. La determinación de dar o no por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada, motivada y comunicada al proveedor dentro dicho plazo, y III. Cuando se rescinda el contrato se formulará el finiquito correspondiente, a efecto de hacer constar los pagos que deba efectuar la dependencia o entidad por concepto de los bienes recibidos o los servicios prestados hasta el momento de rescisión. … Cuando por motivo del atraso en la entrega de los bienes o la prestación de los servicios, o el procedimiento de rescisión se ubique en un ejercicio fiscal diferente a aquél en que hubiere sido adjudicado el contrato, la dependencia o entidad convocante podrá recibir los bienes o servicios, previa verificación de que continúa vigente la necesidad de los mismos y se cuenta con partida y disponibilidad presupuestaria del ejercicio fiscal vigente, debiendo modificarse la	las fechas pactadas para la entrega de los bienes o la prestación del servicio, incumplan con sus obligaciones por cualquier otra causa establecida en el contrato, se sujetarán al procedimiento de rescisión del contrato, conforme al procedimiento establecido en el artículo 54 de la Ley. **Artículo 100 (segundo párrafo).-** En el supuesto de que sea rescindido el contrato, no procederá la contabilización de la sanción por cancelación a que hace referencia el párrafo anterior, toda vez que se deberá hacer efectiva la garantía de cumplimiento.

[27] Artículo 103 Constitucional, los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; II. Por normas generales o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la autonomía de la Ciudad de México, y III. Por normas generales o actos de las autoridades de las entidades federativas que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal.

◊ Esta tesis se encuentra relacionada con el engrose A.R. 159/2000, mismo que se encuentra desarrollado en el inciso F), a), i), del Capítulo VI de la Tesis.

B) Jurisprudencias y tesis aisladas afines.

JURISPRUDENCIAS Y TESIS AISLADAS	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
	vigencia del contrato con los precios originalmente pactados. Cualquier pacto en contrario a lo dispuesto en este artículo se considerará nulo. **TRANSITORIO (SEGUNDO).-** Se abroga la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas. ***Texto de la Ley de Adquisiciones y Obra Pública:*** **Artículo 40.-** Las dependencias y entidades podrán rescindir administrativamente los contratos en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo del proveedor o contratista.	
67.- Interés jurídico. Sus acepciones tratándose de recursos e instancias administrativas. *Registro: 225766. Localización: 8ª. Época; T.C.C.; S.J.F.; Tomo V, Segunda parte-1, Enero a Junio de 1990; Pág. 264; [T.A.].*	**Titulo Sexto.** **De las Controversias.** **Capítulo Primero. De la Instancia de Inconformidad.** **Artículo 65 (primer párrafo).-** La Secretaría de la Función Pública conocerá de las inconformidades que se promuevan contra los actos de los procedimientos de licitación pública o invitación a cuando menos tres personas que se indican a continuación: I. La convocatoria a la licitación, y las juntas de aclaraciones. En este supuesto, la inconformidad sólo podrá presentarse por el interesado que haya manifestado su interés por participar en el procedimiento según lo establecido en el artículo 33 Bis de esta Ley, dentro de los seis días hábiles siguientes a la celebración de la última junta de Aclaraciones; II. La invitación a cuando menos tres personas. Sólo estará legitimado para inconformarse quien haya recibido invitación, dentro de los seis días hábiles siguientes; III. El acto de presentación y apertura de proposiciones,	**Artículo 116.-** Al escrito inicial de las inconformidades a que se refiere la fracción I del artículo 65 de la Ley, deberá acompañarse la manifestación a que se refiere el tercer párrafo del artículo 33 Bis de la Ley, con el acuse de recibo o sello de la dependencia o entidad correspondiente, o bien, la constancia que se obtenga de su envío en forma electrónica, a través de CompraNet. La omisión de exhibir el documento referido en el párrafo anterior será motivo de prevención en términos de lo dispuesto por el penúltimo párrafo del artículo 66 de la Ley.

B) Jurisprudencias y tesis aisladas afines.

JURISPRUDENCIAS Y TESIS AISLADAS	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
	y el fallo. En este caso, la inconformidad sólo podrá presentarse por quien hubiere presentado proposición, dentro de los seis días hábiles siguientes a la celebración de la junta pública en la que se dé a conocer el fallo, o de que se le haya notificado al licitante en los casos en que no se celebre junta pública; IV. La cancelación de la licitación. En este supuesto, la inconformidad sólo podrá presentarse por el licitante que hubiere presentado proposición, dentro de los seis días hábiles siguientes a su notificación, y V. Los actos y omisiones por parte de la convocante que impidan la formalización del contrato en los términos establecidos en la convocatoria a la licitación o en esta Ley. En esta hipótesis, la inconformidad sólo podrá presentarse por quien haya resultado adjudicado, dentro de los seis días hábiles posteriores a aquél en que hubiere vencido el plazo establecido en el fallo para la formalización del contrato o, en su defecto, el plazo legal. En todos los casos en que se trate de licitantes que hayan presentado proposición conjunta, la inconformidad sólo será procedente si se promueve conjuntamente por todos los integrantes de la misma. **Artículo 70 (primer y segundo párrafos).-** Se decretará la suspensión de los actos del procedimiento de contratación y los que de éste deriven, siempre que lo solicite el inconforme en su escrito inicial y se advierta que existan o pudieren existir actos contrarios a las disposiciones de esta Ley o a las que de ella deriven y, además, no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público.	**Artículo 120.-** En los casos en que se conceda la suspensión definitiva del acto impugnado en la inconformidad, dentro de los tres días hábiles siguientes al de la notificación del acuerdo respectivo, el inconforme garantizará los posibles daños y perjuicios que se puedan ocasionar con motivo de la suspensión, en alguna de las formas que establece el artículo 137 del Reglamento de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación.

JURISPRUDENCIAS Y TESIS AISLADAS	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
	En su solicitud el inconforme deberá expresar las razones por las cuales estima procedente la suspensión, así como la afectación que resentiría en caso de que continúen los actos del procedimiento de contratación. **Artículo 74 (último párrafo).-** La resolución que ponga fin a la instancia de inconformidad o, en su caso, a la intervención de oficio podrá impugnarse por el inconforme o tercero interesado mediante el recurso de revisión previsto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, o bien, cuando proceda, ante las instancias jurisdiccionales competentes. **Artículo 75 (primer y antepenúltimo párrafos).-** La convocante acatará la resolución que ponga fin a la inconformidad en un plazo no mayor de seis días hábiles. Sólo podrá suspenderse la ejecución de las resoluciones mediante determinación de autoridad administrativa o judicial competente. … La resolución que ponga fin al incidente previsto en este artículo podrá impugnarse por el inconforme o tercero interesado mediante el recurso de revisión previsto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, o bien, cuando proceda, ante las instancias jurisdiccionales competentes.	Si dentro del plazo descrito en el párrafo anterior, el interesado no exhibe la garantía respectiva ante la autoridad que conoce de la inconformidad, ésta acordará que ha fenecido el plazo para exhibirla. En caso de que el inconforme exhiba la garantía en el plazo a que se refiere el primer párrafo de este artículo, la autoridad que conoce de la inconformidad dará vista al tercero o terceros interesados, a efecto de que, dentro del plazo de tres días hábiles siguientes a aquél en que se notifique dicho proveído, otorgue contragarantía equivalente a la exhibida por el inconforme, supuesto en el cual la suspensión decretada dejará de surtir efectos. Si la garantía o contragarantía se otorga mediante fianza, en la póliza respectiva deberá señalarse lo previsto en el inciso d) de la fracción I del artículo 103 del presente Reglamento y que su exigibilidad está supeditada a que en los medios de impugnación procedentes se emita decisión firme respecto de la resolución de inconformidad.
68.- Interés jurídico en el amparo. Carece de él quien reclama actos llevados a cabo durante las etapas del procedimiento de licitación pública, si expresamente renunció a continuar participando en él antes de dictarse el fallo de adjudicación respectivo. *Registro: 172006,*	Capítulo Segundo De la Licitación Pública. Clasificación de las licitaciones públicas de acuerdo con su carácter. **(Artículo 28).** Requisitos de la convocatoria a la licitación. **(Artículo 29).**	**Artículos 29 (segundo párrafo, fracciones VI, VII, VIII, IX), 33 (segundo y tercer párrafos), 35-37, 38 (fracciones II y VII), 41 (fracción IV).** **Artículos 31 (tercer párrafo), 32 (fracción I), 39 (fracciones I inciso e, II inciso b, e, h, i; III inciso i IV, V, VI inciso c y d, VII; penúltimo párrafo), 35 (tercer párrafo), 40, 44 (último párrafo), 48 (fracción IV)49 (segundo párrafo), 51 (segundo**

B) Jurisprudencias y tesis aisladas afines.

JURISPRUDENCIAS Y TESIS AISLADAS	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
Localización: 9ª. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXVI, Julio de 2007; Pág. 2556; [T.A.]	Publicación de la convocatoria a la licitación. **(Artículo 30 y 31).** Plazos para la presentación de proposiciones. **(Artículo 32).** Modificación de la convocatoria. **(Artículo 33 y 33 Bis).** Requisitos para la presentación de proposiciones. **(Artículo 34).** Desarrollo del acto de presentación y apertura de proposiciones. **(Artículo 35).** Criterios de evaluación. **(Artículo 36).** Adjudicación y desempate. **(Artículo 36 Bis).** Requisitos del fallo y posible corrección. **(Artículo 37).** Requisitos y difusión de las actas. **(Artículo 37 Bis).** Licitación desierta y cancelada. **(Artículo 38).** Abastecimiento simultáneo. **(Artículo 39).**	**párrafo), 52, 53, 58 (último párrafo), 59 (fracción I), 81 y 85 (tercer párrafo).** **Artículo 42.** **Artículo 42 (último párrafo) y 43 (segundo párrafo).** **Artículos 45 (primer, segundo y tercer párrafos), 46 (fracción VII), 48 (fracciones VI, VII primer párrafo), y 49 (segundo párrafo).** **Artículos 2 (fracción XI), 44, 47 (primer y tercer párrafos), 49 y 50 (primer párrafo).** **Artículo 39 (fracción VII inciso f), 47 (séptimo, octavo, noveno y décimo párrafos), 48 (fracciones I, II, III, y último párrafo), y 50.** **Artículo 50 (segundo y tercer párrafos), 51 (primer y segundo párrafos), y 55).** **Artículos 38, 47 (séptimo y décimo párrafos), 48 (último párrafo), 51-54, y 57.** **Artículos 29, 30, 46 (fracción V), 47 (segundo párrafo), 49 (último párrafo), 51, 58 (primer y tercer párrafos), 72 (fracción VI), 78, 84 (tercer y quinto párrafos), 86 (último párrafo), y 125.** **Artículos 41 (fracción II), 49 (último párrafo), 51, 58 (primer párrafo), 72 (fracción VI), 78, 84 (sexto párrafo), 101 y 102 (último párrafo).**

B) Jurisprudencias y tesis aisladas afines.

JURISPRUDENCIAS Y TESIS AISLADAS	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
		Artículos 39 (fracción II, inciso c y h), y 59.
69.- Licitación. La falta de firmas de las autoridades que fungieron como "invitadas" al proceso respectivo, no genera su nulidad. *Registro: 183024. Localización: 9ª. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; XVIII, Octubre de 2003; Pág. 1044; [T.A.]*	**Artículo 43 (fracción II).-** El procedimiento de invitación a cuando menos tres personas se sujetará a lo siguiente: … II. El acto de presentación y apertura de proposiciones podrá hacerse sin la presencia de los correspondientes licitantes, pero invariablemente se invitará a un representante del órgano interno de control en la dependencia o entidad;	**Artículo 77 (tercer párrafo).-** La inasistencia del representante invitado del órgano interno de control al acto de presentación y apertura de proposiciones, no será impedimento para continuar el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas, siendo opcional para los licitantes su asistencia al acto.
70.- Licitación pública. El cumplimiento de sus bases es requisito indispensable para analizar las ofertas y adjudicar el contrato respectivo. *Registro. 911970. Tesis Aislada. Materia (s): Administrativa. Octava Época. Instancia: Tribunales Colegiados de circuito. Fuente: Apéndice 2000. Tomo III, Administrativa, P. R. T. CC. Tesis: 405. Página 382. Genealogía: Semanario Judicial de la Federación. Octava Época. Tomo XIV. Octubre de 1994. Página 318. Tribunales Colegiados de Circuitos, Tesis I.3º.A.372.A.* ***71.- Licitación pública. El cumplimiento de sus bases***	**Artículo 29.-** La convocatoria a la licitación pública, en la cual se establecerán las bases en que se desarrollará el procedimiento y en las cuales se describirán los requisitos de participación, deberá contener: I. El nombre, denominación o razón social de la dependencia o entidad convocante; II. La descripción detallada de los bienes, arrendamientos o servicios, así como los aspectos que la convocante considere necesarios para determinar el objeto y alcance de la contratación; III. La fecha, hora y lugar de celebración de la primera junta de aclaración a la convocatoria a la licitación, del acto de presentación y apertura de proposiciones y de aquella en la que se dará a conocer el fallo, de la firma del contrato, en su caso, la reducción del plazo, y si la licitación será presencial, electrónica o mixta y el señalamiento de la forma en la que se deberán presentar las proposiciones; IV. El carácter de la licitación y el idioma o idiomas, además del español, en que podrán presentarse las proposiciones. Los anexos técnicos y folletos en el o los idiomas que determine la	**Artículo 39.-** La convocatoria a la licitación pública y, cuando proceda, el Proyecto de convocatoria deberán contener los requisitos que señala el artículo 29 de la Ley…

B) Jurisprudencias y tesis aisladas afines.

JURISPRUDENCIAS Y TESIS AISLADAS	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
es requisito indispensable para analizar las ofertas y adjudicar el contrato respectivo. *Registro: 210243. Localización: 8ª, Época; T.C.C.; S.J.F.; XIV. Octubre de 1994; Pág. 318; [T.A.]*	convocante; V. Los requisitos que deberán cumplir los interesados en participar en el procedimiento, los cuales no deberán limitar la libre participación, concurrencia y competencia económica; VI. El señalamiento de que para intervenir en el acto de presentación y apertura de proposiciones, bastará que los licitantes presenten un escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, sin que resulte necesario acreditar su personalidad jurídica; VII. La forma en que los licitantes deberán acreditar su existencia legal y personalidad jurídica, para efectos de la suscripción de las proposiciones, y, en su caso, firma del contrato. Asimismo, la indicación de que el licitante deberá proporcionar una dirección de correo electrónico, en caso de contar con él; …	
72.- Licitación pública, etapas del procedimiento administrativo respectivo en su desarrollo cronológico. *Registro: 171994. Localización: 9ª. Época. T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; XXVI, Julio de 2007. Pág. 2651. [T.A.]*	**Artículo 26 (octavo párrafo).-** La licitación pública inicia con la publicación de la convocatoria y, en el caso de invitación a cuando menos tres personas, con la entrega de la primera invitación; ambos procedimientos concluyen con la emisión del fallo o, en su caso, con la cancelación del procedimiento respectivo. **Artículo 32 (primer párrafo).-** El plazo para la presentación y apertura de proposiciones de las licitaciones internacionales no podrá ser inferior a veinte días naturales, contados a partir de la fecha de publicación de la convocatoria en CompraNet. **Artículo 37 (sexto párrafo).-** Con la notificación del fallo por el que se adjudica el contrato, las obligaciones derivadas de éste serán exigibles, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en la fecha y términos señalados en el fallo.	**Artículo 42 (último párrafo).-** El día de publicación en CompraNet de la convocatoria a la licitación pública será el primer día para el cómputo del plazo para la presentación y apertura de proposiciones, y el día anterior a este acto será el último que se contabilizará para determinar los plazos a que se refieren los párrafos primero y segundo del artículo 32 de la Ley. **Artículo 43 (segundo párrafo).-** Tratándose de licitaciones públicas internacionales bajo la cobertura

B) Jurisprudencias y tesis aisladas afines.

JURISPRUDENCIAS Y TESIS AISLADAS	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
	Artículo 38 (cuarto párrafo).- Las dependencias y entidades podrán cancelar una licitación, partidas o conceptos incluidos en éstas, cuando se presente caso fortuito; fuerza mayor; existan circunstancias justificadas que extingan la necesidad para adquirir los bienes, arrendamientos o servicios, o que de continuarse con el procedimiento se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a la propia dependencia o entidad. La determinación de dar por cancelada la licitación, partidas o conceptos, deberá precisar el acontecimiento que motiva la decisión, la cual se hará del conocimiento de los licitantes, y no será procedente contra ella recurso alguno, sin embargo podrán interponer la inconformidad en términos del Título Sexto, Capítulo Primero de esta Ley. **Artículo 46 (primer párrafo).-** Con la notificación del fallo serán exigibles los derechos y obligaciones establecidos en el modelo de contrato del procedimiento de contratación y obligará a la dependencia o entidad y a la persona a quien se haya adjudicado, a firmar el contrato en la fecha, hora y lugar previstos en el propio fallo, o bien en la convocatoria a la licitación pública y en defecto de tales previsiones, dentro de los quince días naturales siguientes al de la citada notificación. Asimismo, con la notificación del fallo la dependencia o entidad realizará la requisición de los bienes o servicios de que se trate.	de tratados, el plazo entre la publicación de la convocatoria a la licitación pública y el acto de presentación y apertura de proposiciones, no podrá ser inferior a cuarenta días naturales, salvo en los casos de urgencia debidamente justificados por el titular del Área requirente y autorizados por el titular del Área contratante, en los cuales podrá reducirse a no menos de diez días naturales, conforme a las disposiciones de los Tratados y al penúltimo párrafo del artículo 32 de la Ley. **Artículo 49 (último párrafo).-** Las notificaciones a los licitantes respecto de los actos del procedimiento de contratación se realizarán a través de CompraNet.
73.- Licitación pública principios esenciales que rigen el procedimiento administrativo respectivo. *Registro: 171993. Localización; 9ª. Época.*	**Artículo 24.-** La planeación, programación, presupuestación y el gasto de las adquisiciones, arrendamientos y servicios se sujetará a las disposiciones específicas del Presupuesto de Egresos de la Federación, así como a lo previsto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad	

B) Jurisprudencias y tesis aisladas afines.

JURISPRUDENCIAS Y TESIS AISLADAS	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
T.C.C. S.J.F. y su Gaceta; XXVI, Julio de 2007. Pág. 2652; [T.A.] El procedimiento administrativo de licitación se rige por los siguientes principios esenciales: 1) Concurrencia, que asegura a la administración pública la participación de un mayor número de ofertas, lo cual permite tener posibilidades más amplias de selección y obtención de mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad, entre otras; 2) Igualdad, que es la posición que guardan los oferentes frente a la administración, así como la posición de cada uno de ellos frente a los demás; 3) Publicidad, que implica la posibilidad de que los interesados conozcan todo lo relativo a la licitación correspondiente, desde el llamado a formular ofertas hasta sus etapas conclusivas; y, 4) Oposición o contradicción, que deriva del principio de debido proceso que implica la intervención de los interesados en las discusiones de controversia	Hacendaria y demás disposiciones aplicables y los recursos destinados a ese fin se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia, honradez e imparcialidad para satisfacer los objetivos a los que fueren destinados. **Artículo 29 (fracción V).-** La convocatoria a la licitación pública, en la cual se establecerán las bases en que se desarrollará el procedimiento y en las cuales se describirán los requisitos de participación, deberá contener: … V. Los requisitos que deberán cumplir los interesados en participar en el procedimiento, los cuales no deberán limitar la libre participación, concurrencia y competencia económica. **Artículo 26 (primero, segundo, quinto, sexto, séptimo y octavo párrafos).-** Las dependencias y entidades seleccionarán de entre los procedimientos que a continuación se señalan, aquél que de acuerdo con la naturaleza de la contratación asegure al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes: I. Licitación pública; II. Invitación a cuando menos tres personas, o III. Adjudicación directa. Las adquisiciones, arrendamientos y servicios se adjudicarán, por regla general, a través de licitaciones públicas, mediante convocatoria pública, para que libremente se presenten proposiciones, solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad, crecimiento económico, generación de empleo, eficiencia	**Artículo 2 (fracción XI).-** Adicionalmente a las definiciones contenidas en el artículo 2 de la Ley, se entenderá por: … XI.- Sobre cerrado: cualquier medio que contenga la proposición del licitante, cuyo contenido sólo puede ser conocido en el acto de presentación y apertura de proposiciones en términos de la Ley. **Artículo 27.-** Las requisiciones que formule el Área

JURISPRUDENCIAS Y TESIS AISLADAS	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
de intereses de dos o más particulares, facultándolos para impugnar las propuestas de los demás y, a su vez, para defender la propia. ***74.- Licitación pública, su naturaleza jurídica.*** *Registro: 171992. Localización: 9ª. Época. T.C.C. S.J.F. y su Gaceta; XXVI, Julio de 2007. Pág. 2653. [T.A.]* La licitación pública consiste en un llamado que la administración pública hace a los particulares de forma impersonal para que le formulen ofertas a fin de llevar a cabo una contratación, lo que, de acuerdo con la doctrina, tiene dos consecuencias: a) Quien se presenta y formula una oferta debe ajustarse estrictamente a las condiciones fijadas en el llamado, quedando obligado a mantenerlas durante el plazo que en éste se establezca; y, b) La administración puede aceptar o rechazar las ofertas que se le hagan, sin responsabilidad alguna, siempre y cuando respete la	energética, uso responsable del agua, optimización y uso sustentable de los recursos, así como la protección al medio ambiente y demás circunstancias pertinentes, de acuerdo con lo que establece la presente Ley. … En los procedimientos de contratación deberán establecerse los mismos requisitos y condiciones para todos los participantes, debiendo las dependencias y entidades proporcionar a todos los interesados igual acceso a la información relacionada con dichos procedimientos, a fin de evitar favorecer a algún participante.	requirente para adquirir o arrendar bienes, deberán indicar la no existencia de bienes de las mismas características o, en su caso, el nivel de inventario de los mismos que haga necesario adquirir o arrendar dichos bienes… **Artículo 31 (tercer párrafo).-** El titular del Área requirente deberá indicar en la convocatoria a la licitación pública, invitación a cuando menos tres personas o solicitud de cotización, según corresponda, el nombre y los datos de identificación de la o las normas que deben cumplirse en el procedimiento de contratación respectivo, así como verificar que la inclusión de las normas o especificaciones señalados en el párrafo anterior no limita la libre participación y concurrencia de los interesados. **Artículo 32 (fracción I).-** Sólo podrá solicitarse que los licitantes cuenten con un sistema de gestión de la calidad en la producción de bienes o servicios, cuando se verifique y se deje constancia en el expediente de lo siguiente: I. Que existen en el mercado al menos tres personas que cuentan con el sistema de gestión de calidad solicitado, lo cual se acreditará con la investigación de mercado que se realice previamente al inicio de un procedimiento de licitación pública o de invitación a cuando menos tres personas. Será responsabilidad del titular del Área requirente remitir al Área contratante, la investigación de mercado correspondiente, y **Artículo 39 (fracción II, inciso b).-** La convocatoria a la licitación pública y, cuando proceda, el Proyecto de convocatoria deberán contener los requisitos que señala el artículo 29 de la Ley y se elaborarán conforme al orden, apartados e información que a

B) Jurisprudencias y tesis aisladas afines.

JURISPRUDENCIAS Y TESIS AISLADAS	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
legalidad del procedimiento. Así, aquel llamado implica un conjunto de actos que conforman un procedimiento preparatorio de la actividad contractual del Estado, por lo que la naturaleza jurídica de la licitación pública es la de un procedimiento administrativo integrado por una diversidad de actos administrativos y simples actos de la administración, como formas jurídicas preparatorias de su actividad contractual, de manera que su omisión invalida los contratos produciendo su nulidad absoluta o de pleno derecho, la que pueden invocar la propia administración, el particular contratante y los terceros interesados.	Previo al inicio de los procedimientos de contratación previstos en este artículo, las dependencias y entidades deberán realizar una investigación de mercado de la cual se desprendan las condiciones que imperan en el mismo, respecto del bien, arrendamiento o servicio objeto de la contratación, a efecto de buscar las mejores condiciones para el Estado.	continuación se indican: … II. Objeto y alcance de la licitación pública, precisando: ... b) La indicación, en su caso, de que los bienes o servicios se agruparán en partidas, siempre y cuando no se limite la libre participación de cualquier interesado. Se entenderá que no se limita la libre participación, cuando con la investigación de mercado correspondiente al procedimiento de contratación, se constate la existencia de al menos cinco probables proveedores que pudieran cumplir integralmente con el agrupamiento a que se refiere el párrafo anterior… **Artículo 40.-** Las dependencias y entidades no podrán establecer en la convocatoria a la licitación pública requisitos que limiten la libre participación de los interesados… **Artículo 28.-** Para efectos de lo dispuesto en el sexto párrafo del artículo 26 de la Ley, la investigación de mercado que realicen las dependencias y entidades deberá integrarse, de acuerdo con las características del bien o servicio a contratar, con información obtenida de cuando menos dos de las fuentes siguientes: I. La que se encuentre disponible en CompraNet; II. La obtenida de organismos especializados; de cámaras, asociaciones o agrupaciones industriales, comerciales o de servicios, o bien de fabricantes, proveedores, distribuidores o comercializadores del ramo correspondiente, y III. La obtenida a través de páginas de Internet, por vía telefónica o por algún otro medio, siempre y cuando se lleve registro de los medios y de la información que permita su verificación.

B) Jurisprudencias y tesis aisladas afines.

JURISPRUDENCIAS Y TESIS AISLADAS	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
		Para la debida integración de la investigación de mercado, en todos los casos deberá consultarse la información a que hace referencia la fracción I de este artículo. En el supuesto de que la información no se encuentre disponible en CompraNet, se deberá consultar la información histórica con la que cuente el Área contratante u otras áreas contratantes de la dependencia o entidad de que se trate. **Artículo 29.-** La investigación de mercado tendrá como propósito que las dependencias y entidades: I. Determinen la existencia de oferta de bienes y servicios en la cantidad, calidad y oportunidad requeridas por las mismas; II. Verifiquen la existencia de proveedores a nivel nacional o internacional … III. Conozcan el precio prevaleciente de los bienes, arrendamientos o servicios requeridos… … **Artículo 30.-** El análisis de la información obtenida en la investigación de mercado se efectuará considerando las mismas condiciones en cuanto a los plazos y lugares de entrega de los bienes o de la prestación de los servicios; la moneda a cotizar; la forma y términos de pago; las características técnicas de los bienes o servicios, y las demás circunstancias que resulten aplicables y que permitan la comparación objetiva entre bienes o servicios iguales o de la misma naturaleza. …. **Artículo 72 (fracción IV).-** Las dependencias o entidades integrantes del Consejo de Seguridad Nacional podrán sustentar las contrataciones que realicen con fundamento en el primer párrafo de la fracción IV, cuando los bienes o servicios que requieran se encuentren en la base de datos que

B) Jurisprudencias y tesis aisladas afines.

JURISPRUDENCIAS Y TESIS AISLADAS	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
	Las condiciones contenidas en la convocatoria a la licitación e invitación a cuando menos tres personas y en las proposiciones, presentadas por los licitantes no podrán ser negociadas. … La licitación pública inicia con la publicación de la convocatoria y, en el caso de invitación a cuando menos tres personas, con la entrega de la primera invitación; ambos procedimientos concluyen con la emisión del fallo o, en su caso, con la cancelación del procedimiento respectivo.	administra el Comité Técnico del citado Consejo. En estos casos, la investigación de mercado se tendrá por realizada a través de la consulta que se formule a dicha base de datos y el escrito a que se refiere el segundo párrafo del artículo 40 de la Ley, será elaborado por el Área requirente conforme al modelo que haya autorizado dicho Comité, … **Artículo 75 (último párrafo).-** Las solicitudes de cotización se podrán realizar a través de CompraNet o de los medios electrónicos autorizados por la Secretaría de la Función Pública. Cuando la adjudicación directa se efectúe a través de CompraNet o de los medios de referencia el cumplimiento del número mínimo de cotizaciones requeridas en la Ley se acreditará con el envío de la solicitud de cotización que realice la dependencia o entidad por esos medios, independientemente del número de cotizaciones que se reciban. … **Artículo 39 (fracción III, incisos d y f).-**… III.- Forma y términos que regirán los diversos actos del procedimiento de licitación pública, precisando entre otros aspectos, los siguientes: … d) Que una vez recibidas las proposiciones en la fecha, hora y lugar establecidos, éstas no podrán retirarse o dejarse sin efecto, por lo que deberán considerarse vigentes dentro del procedimiento de licitación pública hasta su conclusión; … f) Que los licitantes sólo podrán presentar una proposición por licitación pública;
75.- Licitaciones públicas. Derechos que derivan a favor de los particulares que	**Artículo 29 (fracción V).-** La convocatoria a la licitación pública, en la cual se establecerán las bases en que se desarrollará el procedimiento y en las cuales	**Artículo 31 (tercer párrafo).-** El titular del Área requirente deberá indicar en la convocatoria a la licitación pública, invitación a cuando menos tres

JURISPRUDENCIAS Y TESIS AISLADAS	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
participan en ellas.◊ *Época: Novena; Registro: 189052; Instancia: Segunda Sala; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XIV, Agosto de 2001; Materia(s): Administrativa; Tesis: 2a. CXXXVIII/2001; Página: 240.*	se describirán los requisitos de participación, deberá contener: … V. Los requisitos que deberán cumplir los interesados en participar en el procedimiento, los cuales no deberán limitar la libre participación, concurrencia y competencia económica; **Artículo 65.** La Secretaría de la Función Pública conocerá de las inconformidades que se promuevan contra los actos de los procedimientos de licitación pública o invitación a cuando menos tres personas que se indican a continuación: I. La convocatoria a la licitación, y las juntas de aclaraciones. … II. La invitación a cuando menos tres personas. … III. El acto de presentación y apertura de proposiciones, y el fallo. … IV. La cancelación de la licitación. … V. Los actos y omisiones por parte de la convocante que impidan la formalización del contrato en los términos establecidos en la convocatoria a la licitación o en esta Ley. …	personas o solicitud de cotización, según corresponda, el nombre y los datos de identificación de la o las normas que deben cumplirse en el procedimiento de contratación respectivo, así como verificar que la inclusión de las normas o especificaciones señalados en el párrafo anterior no limita la libre participación y concurrencia de los interesados. **Artículo 116 (primer párrafo).-** Al escrito inicial de las inconformidades a que se refiere la fracción I del artículo 65 de la Ley, deberá acompañarse la manifestación a que se refiere el tercer párrafo del artículo 33 Bis de la Ley, con el acuse de recibo o sello de la dependencia o entidad correspondiente, o bien, la constancia que se obtenga de su envío en forma electrónica, a través de CompraNet. **Artículo 117.-** Tratándose de licitaciones públicas internacionales bajo la cobertura de tratados, conforme a lo dispuesto por el artículo 4 de la Ley, el plazo para promover la inconformidad será de diez días hábiles.
76.- Licitaciones públicas. El artículo 31, Fracción V, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, al disponer que los anexos	**Artículo 29 (fracción IV).-** La convocatoria a la licitación pública, en la cual se establecerán las bases en que se desarrollará el procedimiento y en las cuales se describirán los requisitos de participación, deberá contener: …	**Artículo 39 (fracción I, inciso e).-**… I. Datos generales o de identificación de la licitación pública: … e) El o los idiomas, además del español, en que podrán presentarse las proposiciones, así como el

◊ Esta tesis se encuentra relacionada con el engrose A.R. 219/2001, mismo que se encuentra desarrollado en el inciso D), e), i), del Capítulo VI de la Tesis.

JURISPRUDENCIAS Y TESIS AISLADAS	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
técnicos y folletos que se adjunten a las propuestas técnica o económica pueden presentarse en el idioma del país de origen de los bienes o servicios, acompañados de una traducción simple al español e imponer esa carga a los licitantes en la elaboración de las bases, no contraviene el artículo 134 de la Constitución Federal. *Registro: 181931. Localización: 9ª. Época. T.C.C. S.J.F. y su Gaceta; XIX, Marzo de 2004; Pág. 1576; [T.A.]*	IV. El carácter de la licitación y el idioma o idiomas, además del español, en que podrán presentarse las proposiciones. Los anexos técnicos y folletos en el o los idiomas que determine la convocante;	o los idiomas permitidos para entregar los folletos y anexos técnicos de los bienes o servicios ofertados por el licitante;
77.- [18]Licitaciones públicas. Facultades que el artículo 134 de la Constitución Federal otorga a las entidades y dependencias para convocar a aquéllas.◊ *Época: Novena; Registro: 175297; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XXIII, Abril de 2006; Materia(s): Constitucional, Administrativa; Tesis: 1a.*	**Artículo 14.-** En los procedimientos de contratación de carácter internacional abierto, las dependencias y entidades optarán, en igualdad de condiciones, por el empleo de los recursos humanos del país y por la adquisición y arrendamiento de bienes producidos en el país y que cuenten con el porcentaje de contenido nacional indicado en el artículo 28 fracción I, de esta Ley, los cuales deberán contar, en la comparación económica de las proposiciones, con un margen hasta del quince por ciento de preferencia en el precio respecto de los bienes de importación, conforme a las reglas que establezca la Secretaría de Economía, previa opinión de la Secretaría y de la Secretaría de la Función Pública.	**Articulo 14 (segundo párrafo).-** La celebración de los contratos marco no estará sujeta a los procedimientos de contratación previstos en la Ley. En dicha celebración, se atenderán los principios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado, mismos que deberán reflejarse en los contratos específicos señalados en el párrafo anterior. **Artículo 35 (primer y segundo párrafo).-** En la convocatoria a la licitación pública e invitación a cuando menos tres personas de carácter nacional, deberá establecerse como requisito de participación la entrega de un escrito en el que el licitante manifieste bajo protesta de decir verdad, que es de

[18] Jurisprudencia relacionada con número de registro 162971 y Tesis Aisladas relacionadas con números de registro 172010, 2001223, 175161 y 175366, en cuanto al artículo 134 Constitucional, primer párrafo, no violan los principios de eficiencia, eficacia y honradez. En las tesis solo señalaron esos tres principios, mientras que en el artículo mencionan además economía y transparencia.

◊ Esta tesis corresponde al engrose A.R. 1725/2004, que se encuentra desarrollado en el inciso B), i), del Capítulo VI de la Tesis.

B) Jurisprudencias y tesis aisladas afines.

JURISPRUDENCIAS Y TESIS AISLADAS	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
LXXVII/2006; Página: 157.	En el caso de licitación pública para la adquisición de bienes, arrendamientos o servicios que utilicen la evaluación de puntos y porcentajes, se otorgarán puntos en los términos de esta Ley, a personas con discapacidad o a la empresa que cuente con trabajadores con discapacidad en una proporción del cinco por ciento cuando menos de la totalidad de su planta de empleados, cuya antigüedad no sea inferior a seis meses, misma que se comprobará con el aviso de alta al régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social. Asimismo, se otorgarán puntos a las micros, pequeñas o medianas empresas que produzcan bienes con innovación tecnológica, conforme a la constancia correspondiente emitida por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, la cual no podrá tener una vigencia mayor a cinco años. De igual manera, se otorgarán puntos a las empresas que hayan aplicado políticas y prácticas de igualdad de género, conforme a la certificación correspondiente emitida por las autoridades y organismos facultados para tal efecto. **Artículo 26 (primer párrafo, fracción I y segundo párrafo).-** Las dependencias y entidades seleccionarán de entre los procedimientos que a continuación se señalan, aquél que de acuerdo con la naturaleza de la contratación asegure al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes: I. Licitación pública; … Las adquisiciones, arrendamientos y servicios se adjudicarán, por regla general, a través de licitaciones públicas, mediante convocatoria pública, para que libremente se presenten proposiciones, solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles	nacionalidad mexicana y, en el caso de adquisición de bienes, además manifestará que los bienes que oferta y entregará, serán producidos en México y contarán con el porcentaje de contenido nacional correspondiente. En el escrito a que se refiere el párrafo anterior, el licitante manifestará que en caso de que la Secretaría de Economía lo solicite, le proporcionará la información que permita verificar que los bienes ofertados son de producción nacional y cumplen con el porcentaje de contenido nacional requerido. **Artículo 2 (fracción XI).-** Adicionalmente a las definiciones contenidas en el artículo 2 de la Ley, para los efectos de este Reglamento se entenderá por: … XI. Sobre cerrado: cualquier medio que contenga la proposición del licitante, cuyo contenido sólo puede ser conocido en el acto de presentación y apertura de proposiciones en términos de la Ley.

JURISPRUDENCIAS Y TESIS AISLADAS	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
	en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad, crecimiento económico, generación de empleo, eficiencia energética, uso responsable del agua, optimización y uso sustentable de los recursos, así como la protección al medio ambiente y demás circunstancias pertinentes, de acuerdo con lo que establece la presente Ley.	
78.- [19]Licitaciones públicas. Las autoridades administrativas que llevan a cabo los procedimientos relativos en los que el gobierno federal y el del Distrito Federal realicen adquisiciones, arrendamientos y enajenación de bienes, deben conceder a los licitantes afectados la garantía de audiencia.◊ *Época: Novena; Registro: 189051; Instancia: Segunda Sala; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XIV, Agosto de 2001; Materia(s): Constitucional, Administrativa; Tesis: 2a. CXXXIX/2001; Página: 241*	**Artículo 29 (fracción V).-** La convocatoria a la licitación pública, en la cual se establecerán las bases en que se desarrollará el procedimiento y en las cuales se describirán los requisitos de participación, deberá contener: … V. Los requisitos que deberán cumplir los interesados en participar en el procedimiento, los cuales no deberán limitar la libre participación, concurrencia y competencia económica; **Artículo 65.** La Secretaría de la Función Pública conocerá de las inconformidades que se promuevan contra los actos de los procedimientos de licitación pública o invitación a cuando menos tres personas que se indican a continuación: I. La convocatoria a la licitación, y las juntas de aclaraciones. … II. La invitación a cuando menos tres personas. … III. El acto de presentación y apertura de proposiciones, y el fallo. … IV. La cancelación de la licitación. …	**Artículo 31 (tercer párrafo).-** El titular del Área requirente deberá indicar en la convocatoria a la licitación pública, invitación a cuando menos tres personas o solicitud de cotización, según corresponda, el nombre y los datos de identificación de la o las normas que deben cumplirse en el procedimiento de contratación respectivo, así como verificar que la inclusión de las normas o especificaciones señalados en el párrafo anterior no limita la libre participación y concurrencia de los interesados. **Artículo 116 (primer párrafo).-** Al escrito inicial de las inconformidades a que se refiere la fracción I del artículo 65 de la Ley, deberá acompañarse la manifestación a que se refiere el tercer párrafo del artículo 33 Bis de la Ley, con el acuse de recibo o sello de la dependencia o entidad correspondiente, o bien, la constancia que se obtenga de su envío en forma electrónica, a través de CompraNet. **Artículo 117.-** Tratándose de licitaciones públicas internacionales bajo la cobertura de tratados, conforme a lo dispuesto por el artículo 4 de la Ley, el plazo para promover la inconformidad será de diez días hábiles.

[19] Jurisprudencia relacionada con número de registro 170983 y Tesis Aisladas con números de registros 175159, 189495 y 160715, en cuanto al artículo 14 Constitucional, segundo párrafo de la garantía de audiencia: nadie puede ser privado de la libertad, propiedad, posiciones o derechos sino mediante juicio.

◊ Esta tesis se encuentra relacionada con el engrose A.R. 219/2001, mismo que se encuentra desarrollado en el inciso D), e), i), del Capítulo VI de la Tesis.

B) Jurisprudencias y tesis aisladas afines.

JURISPRUDENCIAS Y TESIS AISLADAS	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
	V. Los actos y omisiones por parte de la convocante que impidan la formalización del contrato en los términos establecidos en la convocatoria a la licitación o en esta Ley. …	
79.- [13]Licitación pública internacional. El artículo 28, último párrafo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, al establecer que podrá negarse la participación a extranjeros cuando con el país del cual sean nacionales no se tenga celebrado un tratado y aquél no conceda un trato recíproco a los licitantes, proveedores, bienes o servicios mexicanos, no transgrede el artículo 5o. de la Constitución Federal.◊ *Época: Novena; Registro: 179274; Instancia: Segunda Sala; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XXI, Febrero de 2005; Materia(s): Constitucional,*	**Artículo 28 (fracción II y último párrafo).-** … II. Internacional bajo la cobertura de tratados, en la que sólo podrán participar licitantes mexicanos y extranjeros de países con los que nuestro país tenga celebrado un tratado de libre comercio con capítulo de compras gubernamentales, cuando resulte obligatorio conforme a lo establecido en los tratados de libre comercio, que contengan disposiciones en materia de compras del sector público y bajo cuya cobertura expresa se haya convocado la licitación, de acuerdo a las reglas de origen que prevean los tratados y las reglas de carácter general, para bienes nacionales que emita la Secretaría de Economía, previa opinión de la Secretaría de la Función Pública, y … Tratándose de licitaciones públicas en las que participen de manera individual micro, pequeñas y medianas empresas nacionales, no se aplicará la modalidad de ofertas subsecuentes de descuento. Nota: La parte que señala la tesis ya no tiene un equivalente en la LAASSP vigente. ***Texto de la ley con las reformas del 13 de junio de 2003:*** **Artículo 28 (último párrafo).-** Podrá negarse la	**Artículo 29 (segundo párrafo, fracciones VI y VII).-** La investigación de mercado podrá ser utilizada por la dependencia o entidad para lo siguiente: … VI. Elegir el procedimiento de contratación que podrá llevarse a cabo; VII. Determinar la conveniencia de aplicar alguna de las reservas contenidas en los capítulos de compras del sector público de los Tratados en relación al precio, cantidad, calidad y oportunidad de la proveeduría nacional **Artículo 37.-** La Secretaría de Economía publicará una relación de los casos en los que, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 28 de la Ley, los licitantes deberán manifestar, bajo protesta de decir verdad, que los precios que se presentan en su propuesta económica no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminación de precios o subsidios. **Artículo 41 (fracción IV).-** Para la difusión del Proyecto de convocatoria a la licitación pública, deberá considerarse lo siguiente: … IV. Si la convocante lo estima conveniente, además de la difusión del Proyecto de convocatoria en

[13] Jurisprudencia relacionada con número de registro: 178492 y Tesis Aisladas con números de registro 175160, 170561, 188894, y 190614, respecto al artículo 5° Constitucional relativo a no violar la garantía de trabajo.

◊ Esta tesis corresponde al engrose A.R 1520/2004, que se encuentra desarrollado en el inciso G), i), del Capítulo VI de la Tesis.

B) Jurisprudencias y tesis aisladas afines.

JURISPRUDENCIAS Y TESIS AISLADAS	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
Administrativa; Tesis: 2a. XXII/2005; Página: 346	participación a extranjeros en licitaciones internacionales, cuando con el país del cual sean nacionales no se tenga celebrado un tratado y ese país no conceda un trato recíproco a los licitantes, proveedores, bienes o servicios mexicanos.	CompraNet, podrá efectuar invitaciones para celebrar una reunión pública en la que los asistentes participen en la revisión del Proyecto de convocatoria y presenten sus comentarios, salvo que se trate de Proyectos de convocatoria para las licitaciones públicas a que se refiere el inciso a) de la fracción II del artículo 28 de la Ley…
80.- ◊Licitación pública internacional. El artículo 28, último párrafo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, al establecer que podrá negarse la participación a extranjeros cuando con el país del cual sean nacionales no se tenga celebrado un tratado y aquél no conceda un trato recíproco a los licitantes, proveedores, bienes o servicios mexicanos, no trasgrede el artículo 134 de la Constitución Federal. *Registro. 179273. Localización: 9ª. Época; 2ª. Sala; S.J.F. y su Gaceta; XXI, Febrero de 2005; Pág. 347; [T.A.]*	**Artículo 4.-** La aplicación de esta Ley será sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados. **Artículo 26 (último párrafo).-** La Secretaría de Economía, mediante reglas de carácter general y tomando en cuenta la opinión de la Secretaría de la Función Pública, determinará los criterios para la aplicación de las reservas, mecanismos de transición u otros supuestos establecidos en los tratados. **Artículo 28 (fracción II, segundo párrafo).-** El carácter de las licitaciones públicas, será… II. Internacional bajo la cobertura de tratados, en la que sólo podrán participar licitantes mexicanos y extranjeros de países con los que nuestro país tenga celebrado un tratado de libre comercio con capítulo de compras gubernamentales, cuando resulte obligatorio conforme a lo establecido en los tratados de libre comercio, que contengan disposiciones en materia de compras del sector público y bajo cuya cobertura expresa se haya convocado la licitación, de acuerdo a las reglas de origen que prevean los tratados y las reglas de carácter general, para bienes nacionales que emita la Secretaría de Economía, previa opinión de la	**Artículo 36 (primer párrafo).-** En caso de que la dependencia o entidad convocante determine que una licitación pública que se ubique en el supuesto previsto en el inciso a) de la fracción II del artículo 28 de la Ley, puede tener el carácter de nacional, por existir oferta de origen nacional y reservas en los Tratados, deberá solicitar a la Secretaría de Economía, de conformidad con las reglas que emita con fundamento en el último párrafo del artículo 26 de la Ley, la inclusión y registro de dicho procedimiento en la reserva de los Tratados que correspondan. **Artículo 29 (segundo párrafo, fracciones VI y VII).-** La investigación de mercado podrá ser utilizada por la dependencia o entidad para lo siguiente: … VI. Elegir el procedimiento de contratación que podrá llevarse a cabo; VII. Determinar la conveniencia de aplicar alguna de las reservas contenidas en los capítulos de compras del sector público de los Tratados en relación al precio, cantidad, calidad y oportunidad de la proveeduría nacional; **Artículo 37 (primer párrafo).-** La Secretaría de Economía publicará una relación de los casos en los que, de conformidad con el segundo párrafo del

◊ Esta tesis corresponde al engrose A.R 1520/2004, que se encuentra desarrollado en el inciso G), i), del Capítulo VI de la Tesis.

B) Jurisprudencias y tesis aisladas afines.

JURISPRUDENCIAS Y TESIS AISLADAS	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
	Secretaría de la Función Pública, y a) (Se deroga) b) (Se deroga) En los supuestos de licitación previstos en las fracciones II y III de este artículo, la Secretaría de Economía, mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación, determinará los casos en que los participantes deban manifestar ante la convocante que los precios que presentan en su propuesta económica no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminación de precios o subsidios.	artículo 28 de la Ley, los licitantes deberán manifestar, bajo protesta de decir verdad, que los precios que se presentan en su propuesta económica no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminación de precios o subsidios. **Artículo 41 (fracción IV).-** Para la difusión del Proyecto de convocatoria a la licitación pública, deberá considerarse lo siguiente: … IV. Si la convocante lo estima conveniente, además de la difusión del Proyecto de convocatoria en CompraNet, podrá efectuar invitaciones para celebrar una reunión pública en la que los asistentes participen en la revisión del Proyecto de convocatoria y presenten sus comentarios, salvo que se trate de Proyectos de convocatoria para las licitaciones públicas a que se refiere el inciso a) de la fracción II del artículo 28 de la Ley…
81.- Nulidad, juicio de. Carga probatoria. *[TA]; 8a. Época; T.C.C.; S.J.F.; Tomo XIV, Diciembre de 1994; Pág. 411. II. 3o. 86 A; Registro: 209787* Que el acto administrativo sea perfecto, significa que puede producir efectos, a menos que se demuestre su ilegalidad, a través de los medios de defensa previstos en la propia ley, porque adolezca de vicios.	**Artículo 74 (fracciones III, IV y V).-** La resolución que emita la autoridad podrá: … III. Declarar que los motivos de inconformidad resultan inoperantes para decretar la nulidad del acto impugnado, cuando las violaciones alegadas no resulten suficientes para afectar su contenido; IV. Decretar la nulidad total del procedimiento de contratación; V. Decretar la nulidad del acto impugnado, para efectos de su reposición, subsistiendo la validez del procedimiento o acto en la parte que no fue materia de la declaratoria de nulidad, y	
82.- [25]Obras públicas. Los artículos 40 de la Ley de	**Artículo 54 (primer y último párrafos).-** Las dependencias y entidades podrán en cualquier	**Artículo 98.-** Los proveedores que por motivos diferentes al atraso en el cumplimiento de las fechas

[25] Tesis Aislada relacionada con número de registro 189494, relativo al artículo 17 Constitucional de la garantía de acceso a la administración de justicia.

B) Jurisprudencias y tesis aisladas afines.

JURISPRUDENCIAS Y TESIS AISLADAS	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
Adquisiciones y Obras Públicas y 52, fracción II, de su reglamento, que facultan a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para declarar la rescisión de los contratos relativos, no violan los artículos 14 y 17 de la Constitución General de la República.[◊] *Época: Novena; Registro: 190295; Instancia: Segunda Sala; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XIII, Febrero de 2001; Materia(s): Constitucional, Administrativa; Tesis: 2a. IV/2001; Página: 292*	momento rescindir administrativamente los contratos cuando el proveedor incurra en incumplimiento de sus obligaciones, conforme al procedimiento siguiente: I. Se iniciará a partir de que al proveedor le sea comunicado por escrito el incumplimiento en que haya incurrido, para que en un término de cinco días hábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes; II. Transcurrido el término a que se refiere la fracción anterior, la dependencia o entidad contará con un plazo de quince días para resolver, considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer el proveedor. La determinación de dar o no por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada, motivada y comunicada al proveedor dentro dicho plazo, y III. Cuando se rescinda el contrato se formulará el finiquito correspondiente, a efecto de hacer constar los pagos que deba efectuar la dependencia o entidad por concepto de los bienes recibidos o los servicios prestados hasta el momento de rescisión. … Cuando por motivo del atraso en la entrega de los bienes o la prestación de los servicios, o el procedimiento de rescisión se ubique en un ejercicio fiscal diferente a aquél en que hubiere sido adjudicado el contrato, la dependencia o entidad convocante podrá recibir los bienes o servicios, previa verificación de que continúa vigente la necesidad de los mismos y se cuenta con partida y disponibilidad presupuestaria del ejercicio fiscal vigente, debiendo modificarse la vigencia del contrato con los precios originalmente pactados. Cualquier pacto en contrario a lo dispuesto en este artículo se considerará nulo.	pactadas para la entrega de los bienes o la prestación del servicio, incumplan con sus obligaciones por cualquier otra causa establecida en el contrato, se sujetarán al procedimiento de rescisión del contrato, conforme al procedimiento establecido en el artículo 54 de la Ley. **Artículo 100 (segundo párrafo).-** En el supuesto de que sea rescindido el contrato, no procederá la contabilización de la sanción por cancelación a que hace referencia el párrafo anterior, toda vez que se deberá hacer efectiva la garantía de cumplimiento.

[◊] Esta tesis se encuentra relacionada con el engrose A.R. 225/99, mismo que se encuentra desarrollado en el inciso F), a), ii), del Capítulo VI de la Tesis.

B) Jurisprudencias y tesis aisladas afines.

JURISPRUDENCIAS Y TESIS AISLADAS	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
83.- Pacto comisorio. *[TA]; 6a. Época; 3a. Sala; S.J.F.; Volumen I, Cuarta Parte; Pág. 119; Registro: 273118* El pacto comisorio expreso es legítimo y en virtud de él y diversamente a lo que acontece con el tácito en que en el incumplimiento se requiere la declaración judicial para lograr la rescisión, el contrato se resuelve automáticamente por el solo efecto del incumplimiento y sin intervención de los tribunales…	**Artículo 54 (fracciones I y II).-** Las dependencias y entidades podrán en cualquier momento rescindir administrativamente los contratos cuando el proveedor incurra en incumplimiento de sus obligaciones, conforme al procedimiento siguiente: I. Se iniciará a partir de que al proveedor le sea comunicado por escrito el incumplimiento en que haya incurrido, para que en un término de cinco días hábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes; II. Transcurrido el término a que se refiere la fracción anterior, la dependencia o entidad contará con un plazo de quince días para resolver, considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer el proveedor. La determinación de dar o no por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada, motivada y comunicada al proveedor dentro dicho plazo, y	**Artículo 98.-** Los proveedores que por motivos diferentes al atraso en el cumplimiento de las fechas pactadas para la entrega de los bienes o la prestación del servicio, incumplan con sus obligaciones por cualquier otra causa establecida en el contrato, se sujetarán al procedimiento de rescisión del contrato, conforme al procedimiento establecido en el artículo 54 de la Ley. En cualquier momento la dependencia o entidad podrá rescindir administrativamente un contrato, para lo cual deberá llevar a cabo el procedimiento previsto en el artículo 54 de la Ley; motivando la rescisión en alguna de las causales previstas para tal efecto. Si es el proveedor quien decide rescindir el contrato será necesario que acuda ante la autoridad judicial federal y obtenga la declaración correspondiente. … **Artículo 114 (fracción I).-** La Secretaría de la Función Pública tomará conocimiento de los actos o hechos presuntamente constitutivos de infracciones que cometan los licitantes o proveedores a través, entre otros, de los medios siguientes: I. CompraNet, para lo cual las dependencias y entidades deberán registrar la falta de formalización de los contratos y las rescisiones de los mismos en un plazo máximo de diez días naturales contados a partir de la fecha en que se debió haber realizado la formalización correspondiente o de aquélla en que haya concluido la substanciación del procedimiento de rescisión, de conformidad con el artículo 54 de la Ley; **Artículo 95 (último párrafo).-** De igual manera, los contratos establecerán que el pago de los bienes, arrendamientos o servicios quedará condicionado, proporcionalmente, al pago que el proveedor deba efectuar por concepto de penas convencionales por

B) Jurisprudencias y tesis aisladas afines.

JURISPRUDENCIAS Y TESIS AISLADAS	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
	III. Cuando se rescinda el contrato se formulará el finiquito correspondiente, a efecto de hacer constar los pagos que deba efectuar la dependencia o entidad por concepto de los bienes recibidos o los servicios prestados hasta el momento de rescisión.	atraso, en el entendido de que si el contrato es rescindido no procederá el cobro de dichas penas ni la contabilización de las mismas al hacer efectiva la garantía de cumplimiento. **Artículo 99.-** Concluido el procedimiento de rescisión de un contrato se formulará y notificará el finiquito correspondiente, dentro de los veinte días naturales siguientes a la fecha en que se notifique la rescisión, a efecto de hacer constar los pagos que deban efectuarse y demás circunstancias del caso. Al efecto, deberá considerarse lo dispuesto en el inciso b) de la fracción I y en la fracción III del artículo 103 del presente Reglamento, ello sin perjuicio de lo dispuesto en la fracción III del artículo 60 de la Ley.
84.- [26]***Principio de definitividad. Es innecesario agotar la inconformidad prevista en el artículo 65 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público previo a promover el juicio de amparo indirecto, al actualizarse una excepción al citado principio.*** *Época: Décima; Registro: 2010357; Instancia: Segunda Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 24,*	**Artículo 65.-** La Secretaría de la Función Pública conocerá de las inconformidades que se promuevan contra los actos de los procedimientos de licitación pública o invitación a cuando menos tres personas que se indican a continuación: I. La convocatoria a la licitación, y las juntas de aclaraciones. … II. La invitación a cuando menos tres personas. … III. El acto de presentación y apertura de proposiciones, y el fallo. … IV. La cancelación de la licitación. … V. Los actos y omisiones por parte de la convocante que impidan la formalización del contrato en los	**Artículo 116 (primer párrafo).-** Al escrito inicial de las inconformidades a que se refiere la fracción I del artículo 65 de la Ley, deberá acompañarse la manifestación a que se refiere el tercer párrafo del artículo 33 Bis de la Ley, con el acuse de recibo o sello de la dependencia o entidad correspondiente, o bien, la constancia que se obtenga de su envío en forma electrónica, a través de CompraNet. **Artículo 117 (primer párrafo).-** Tratándose de licitaciones públicas internacionales bajo la cobertura de tratados, conforme a lo dispuesto por el artículo 4 de la Ley, el plazo para promover la inconformidad será de diez días hábiles.

[26] Jurisprudencia relacionada con número de registro 162815, en cuanto a la excepción del principio de definitividad ya que el artículo 65 de la LAASSP, crea una excepción al artículo 107 Constitucional, fracción IV, consiste en que antes de promover el amparo, el quejoso está obligado a agotar los recursos o medios de defensa que le concede la ley que rige el acto reclamado.

B) Jurisprudencias y tesis aisladas afines.

JURISPRUDENCIAS Y TESIS AISLADAS	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
Noviembre de 2015, Tomo II; Materia(s): Común; Tesis: 2a./J. 144/2015 (10a.); Página: 1113.◊	términos establecidos en la convocatoria a la licitación o en esta Ley. … **Artículo 66 (primer párrafo).-** La inconformidad deberá presentarse por escrito, directamente en las oficinas de la Secretaría de la Función Pública o a través de CompraNet. **Artículo 67.-** La instancia de inconformidad es improcedente: I. Contra actos diversos a los establecidos en el artículo 65 de esta Ley; II. Contra actos consentidos expresa o tácitamente; III. Cuando el acto impugnado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del procedimiento de contratación del cual deriva, y IV. Cuando se promueva por un licitante en forma individual y su participación en el procedimiento de contratación se hubiera realizado en forma conjunta.	**Artículo 39 (fracción VII).-** La convocatoria a la licitación pública y, cuando proceda, el Proyecto de convocatoria deberán contener los requisitos que señala el artículo 29 de la Ley y se elaborarán conforme al orden, apartados e información que a continuación se indican: … VII. Domicilio de las oficinas de la autoridad administrativa competente y la dirección electrónica de CompraNet, en que podrán presentarse inconformidades contra los actos de la licitación pública, y
85.- Prueba, los tratados internacionales. No están sujetos a. *Registro: 224632; Tesis Aislada. Materia (s): Administrativa, Constitucional.*	**Artículo 15 (último párrafo).-** La solución de las controversias se sujetará a lo previsto por el Título Sexto de esta Ley, sin perjuicio de lo establecido en los tratados de que México sea parte.	

◊ Esta tesis se encuentra relacionada con el engrose C.T. 162/2015, mismo que se encuentra desarrollado en el inciso K), i), del Capítulo VI de la Tesis.

B) Jurisprudencias y tesis aisladas afines.

JURISPRUDENCIAS Y TESIS AISLADAS	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
Octava Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: VI, Segunda Parte- 1, Julio a Diciembre de 1990. Página 236.		
86.- Revisión en sede administrativa. El artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo establece la opción de impugnar los actos que se rigen por tal ordenamiento a través de ese recurso o mediante el juicio seguido ante el Tribunal Fiscal de la Federación. *[J]; 9a. Época; 2a. Sala; Ap. Act. 2001; Tomo III, Administrativa, Jurisprudencia SCJN; Pág. 25. 16; Registro: 920362.*	**Artículo 74 (último párrafo).-** La resolución que ponga fin a la instancia de inconformidad o, en su caso, a la intervención de oficio podrá impugnarse por el inconforme o tercero interesado mediante el recurso de revisión previsto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, o bien, cuando proceda, ante las instancias jurisdiccionales competentes.	
87.- Suspensión. La prevista en el artículo 99 de la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas, no obliga a la autoridad de amparo. *Registro: 197648, Localización: 9ª. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; VI, Octubre de 1997; pág. 799; [T.A.]*	**Artículo 70 (primer párrafo).-** Se decretará la suspensión de los actos del procedimiento de contratación y los que de éste deriven, siempre que lo solicite el inconforme en su escrito inicial y se advierta que existan o pudieren existir actos contrarios a las disposiciones de esta Ley o a las que de ella deriven y, además, no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público.	**Artículo 119.-** De conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley, la suspensión del acto impugnado en la inconformidad y la de los que de éste deriven se deberá solicitar en el escrito inicial de inconformidad.
88.- Suspensión. Noción de orden público y su finalidad.	**Artículo 70 (primer y último párrafos).-** Se decretará la suspensión de los actos del procedimiento de	**Artículo 119.-** De conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley, la suspensión del acto

B) Jurisprudencias y tesis aisladas afines.

JURISPRUDENCIAS Y TESIS AISLADAS	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
[TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 2; Pág. 1575; Registro: 2002421.	contratación y los que de éste deriven, siempre que lo solicite el inconforme en su escrito inicial y se advierta que existan o pudieren existir actos contrarios a las disposiciones de esta Ley o a las que de ella deriven y, además, no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. … Si la autoridad que conoce de la inconformidad advierte manifiestas irregularidades en el procedimiento de contratación impugnado, podrá decretar de oficio la suspensión sin necesidad de solicitud ni garantía del inconforme, siempre que con ello no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. El acuerdo relativo contendrá las consideraciones y fundamentos legales en que se apoye para decretarla. **Artículo 76 (tercer párrafo).-** De estimarlo procedente, podrá decretarse la suspensión de los actos del procedimiento de contratación y los que de éste deriven, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del artículo 70 de esta Ley.	impugnado en la inconformidad y la de los que de éste deriven se deberá solicitar en el escrito inicial de inconformidad. **Artículo 120 (primer, segundo y tercer párrafos).-** En los casos en que se conceda la suspensión definitiva del acto impugnado en la inconformidad, dentro de los tres días hábiles siguientes al de la notificación del acuerdo respectivo, el inconforme garantizará los posibles daños y perjuicios que se puedan ocasionar con motivo de la suspensión, en alguna de las formas que establece el artículo 137 del Reglamento de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación. Si dentro del plazo descrito en el párrafo anterior, el interesado no exhibe la garantía respectiva ante la autoridad que conoce de la inconformidad, ésta acordará que ha fenecido el plazo para exhibirla. En caso de que el inconforme exhiba la garantía en el plazo a que se refiere el primer párrafo de este artículo, la autoridad que conoce de la inconformidad dará vista al tercero o terceros interesados, a efecto de que, dentro del plazo de tres días hábiles siguientes a aquél en que se notifique dicho proveído, otorgue contragarantía equivalente a la exhibida por el inconforme, supuesto en el cual la suspensión decretada dejará de surtir efectos.
89.- Suspensión en el amparo. Al concederla respecto de la inhabilitación temporal a una persona para participar en procedimientos de licitación y celebrar contratos con la administración pública, no debe confundirse ni	**Artículo 60.-** La Secretaría de la Función Pública, además de la sanción a que se refiere el primer párrafo del artículo anterior, inhabilitará temporalmente para participar de manera directa o por interpósita persona en procedimientos de contratación o celebrar contratos regulados por esta Ley, a las personas que se encuentren en alguno de los supuestos siguientes: I. Los licitantes que injustificadamente y por causas imputables a los mismos no formalicen dos o más contratos que les haya adjudicado cualquier	**Artículo 109 (segundo párrafo).-** Los licitantes que injustificadamente y por causas imputables a ellos no formalicen dos o más contratos con cualquier dependencia o entidad, dentro del plazo de dos años, serán sancionados en términos del primer párrafo del artículo 59 de la Ley por lo que respecta al segundo y sucesivos contratos no firmados, y se les inhabilitará conforme a lo dispuesto por la fracción I del artículo 60 de la Ley.

B) Jurisprudencias y tesis aisladas afines.

JURISPRUDENCIAS Y TESIS AISLADAS	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
equipararse la afectación al orden público y al interés social con la relativa al interés de la Administración Pública. *Registro: 173162; Localización: 9ª. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; XXV, Febrero de 2007; Pág. 1898; [T.A.]*	dependencia o entidad en el plazo de dos años calendario, contados a partir del día en que haya fenecido el término para la formalización del primer contrato no formalizado; II. Los proveedores a los que se les haya rescindido administrativamente un contrato en dos o más dependencias o entidades en un plazo de tres años; III. Los proveedores que no cumplan con sus obligaciones contractuales por causas imputables a ellos y que, como consecuencia, causen daños o perjuicios graves a la dependencia o entidad de que se trate; así como, aquellos que entreguen bienes o servicios con especificaciones distintas de las convenidas; IV. Las que proporcionen información falsa o que actúen con dolo o mala fe en algún procedimiento de contratación, en la celebración del contrato o durante su vigencia, o bien, en la presentación o desahogo de una solicitud de conciliación o de una inconformidad; V. Las que se encuentren en el supuesto de la fracción XII del artículo 50 de este orden amiento, y VI. Aquéllas que se encuentren en el supuesto del segundo párrafo del artículo 74 de esta Ley. La inhabilitación que se imponga no será menor de tres meses ni mayor de cinco años, plazo que comenzará a contarse a partir del día siguiente a la fecha en que la Secretaría de la Función Pública la haga del conocimiento de las dependencias y entidades, mediante la publicación de la circular respectiva en el Diario Oficial de la Federación y en CompraNet. Si al día en que se cumpla el plazo de inhabilitación a que se refiere el párrafo que antecede el sancionado no ha pagado la multa que hubiere sido impuesta en términos del artículo	**Artículo 110.-** Cuando una instancia de inconformidad sea sobreseída o resuelta como infundada y en la misma se determine que se promovió para retrasar o entorpecer la contratación, se sancionará al inconforme con inhabilitación en términos de la fracción IV del artículo 60 de la Ley y multa de acuerdo con el primer párrafo del artículo 59 de la Ley. **Artículo 112.-** Cuando la Secretaría de la Función Pública haya inhabilitado a un proveedor con posterioridad a la emisión de un fallo en el que se le adjudicó un contrato, las dependencias y entidades formalizarán el contrato respectivo.

JURISPRUDENCIAS Y TESIS AISLADAS	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
	anterior, la mencionada inhabilitación subsistirá hasta que se realice el pago correspondiente. Las dependencias y entidades dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha en que tengan conocimiento de alguna infracción a las disposiciones de esta Ley, remitirán a la Secretaría de la Función Pública la documentación comprobatoria de los hechos presumiblemente constitutivos de la infracción. En casos excepcionales, previa autorización de la Secretaría de la Función Pública, las dependencias y entidades podrán aceptar proposiciones de proveedores inhabilitados cuando resulte indispensable por ser éstos los únicos posibles oferentes en el mercado.	
90.- [18]Suspensión en el amparo. Debe negarse contra los efectos y consecuencias de la inhabilitación temporal para participar en procedimientos de licitación o para celebrar contratos públicos.◊ *Época: Novena; Registro: 162971; Instancia: Segunda Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta;*	**Artículo 59 (primer párrafo).-** Los licitantes o proveedores que infrinjan las disposiciones de esta Ley, serán sancionados por la Secretaría de la Función Pública con multa equivalente a la cantidad de cincuenta hasta mil veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal elevado al mes, en la fecha de la infracción.	**Artículo 109.-** Se sancionará en términos del primer párrafo del artículo 59 de la Ley, a los licitantes que injustificadamente y por causas imputables a los mismos se abstengan de firmar contratos según lo previsto por el segundo párrafo del artículo 46 de dicho ordenamiento, cuando el monto de éstos exceda de cincuenta veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal elevado al mes. Los licitantes que injustificadamente y por causas imputables a ellos no formalicen dos o más contratos con cualquier dependencia o entidad, dentro del plazo de dos años, serán sancionados en términos del primer párrafo del artículo 59 de la Ley por lo que respecta al segundo y sucesivos contratos no firmados, y se les inhabilitará conforme a lo dispuesto

[18] Tesis Aisladas relacionadas con números de registro; 172010, 175161, 175297, 2001223 y 175366, en cuanto al artículo 134 Constitucional, párrafo primero, no violan los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.

◊ Esta tesis corresponde al engrose C.T. 279/2010, que se encuentra desarrollado en el inciso J), i), del Capítulo VI de la Tesis.

B) Jurisprudencias y tesis aisladas afines.

JURISPRUDENCIAS Y TESIS AISLADAS	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
Tomo XXXIII, Enero de 2011; Materia(s): Común; Tesis: 2a./J. 157/2010; Página: 1402.[*]	**Artículo 60 (primer y último párrafos).-** La Secretaría de la Función Pública, además de la sanción a que se refiere el primer párrafo del artículo anterior, inhabilitará temporalmente para participar de manera directa o por interpósita persona en procedimientos de contratación o celebrar contratos regulados por esta Ley, a las personas que se encuentren en alguno de los supuestos siguientes: I. Los licitantes que injustificadamente y por causas imputables a los mismos no formalicen dos o más contratos que les haya adjudicado cualquier dependencia o entidad en el plazo de dos años calendario, contados a partir del día en que haya fenecido el término para la formalización del primer contrato no formalizado; II. Los proveedores a los que se les haya rescindido administrativamente un contrato en dos o más dependencias o entidades en un plazo de tres años;	por la fracción I del artículo 60 de la Ley. Se presumirá que la falta de firma del contrato por parte del licitante a quien se le adjudicó el mismo le es imputable a éste, salvo prueba en contrario que aporte durante el procedimiento administrativo sancionador con la que justifique dicha omisión. **Artículo 110.-** Cuando una instancia de inconformidad sea sobreseída o resuelta como infundada y en la misma se determine que se promovió para retrasar o entorpecer la contratación, se sancionará al inconforme con inhabilitación en términos de la fracción IV del artículo 60 de la Ley y multa de acuerdo con el primer párrafo del artículo 59 de la Ley.

[*] En el criterio menciona el artículo 134 Constitucional: Debe negarse la suspensión solicitada en el amparo contra los efectos y consecuencias de la inhabilitación temporal para participar en procedimientos de licitación o para celebrar contratos públicos en términos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, pues de concederse se contravendrían las disposiciones de orden público que desarrollan las bases y principios establecidos en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos…

B) Jurisprudencias y tesis aisladas afines.

JURISPRUDENCIAS Y TESIS AISLADAS	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
	III. Los proveedores que no cumplan con sus obligaciones contractuales por causas imputables a ellos y que, como consecuencia, causen daños o perjuicios graves a la dependencia o entidad de que se trate; así como, aquellos que entreguen bienes o servicios con especificaciones distintas de las convenidas; IV. Las que proporcionen información falsa o que actúen con dolo o mala fe en algún procedimiento de contratación, en la celebración del contrato o durante su vigencia, o bien, en la presentación o desahogo de una solicitud de conciliación o de una inconformidad; V. Las que se encuentren en el supuesto de la fracción XII del artículo 50 de este ordenamiento, y VI. Aquéllas que se encuentren en el supuesto del segundo párrafo del artículo 74 de esta Ley. … En casos excepcionales, previa autorización de la Secretaría de la Función Pública, las dependencias y entidades podrán aceptar proposiciones de proveedores inhabilitados cuando resulte indispensable por ser éstos los únicos posibles oferentes en el mercado	
91.- Suspensión en el amparo. Procede concederla respecto de la inhabilitación temporal a una persona para participar en procedimientos de licitación y celebrar contratos con la Administración Pública, ya que al diferir su ejecución se evitan los daños y perjuicios de imposible reparación que pudieran ocasionarse con ella.	**Artículo 59.-** Los licitantes o proveedores que infrinjan las disposiciones de esta Ley, serán sancionados por la Secretaría de la Función Pública con multa equivalente a la cantidad de cincuenta hasta mil veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal elevado al mes, en la fecha de la infracción. Cuando los licitantes, injustificadamente y por causas imputables a los mismos, no formalicen contratos cuyo monto no exceda de cincuenta veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal elevado al mes, serán sancionados con multa equivalente a la cantidad de diez hasta cuarenta	**Artículo 109 (primer párrafo).-** Se sancionará en términos del primer párrafo del artículo 59 de la Ley, a los licitantes que injustificadamente y por causas imputables a los mismos se abstengan de firmar contratos según lo previsto por el segundo párrafo del artículo 46 de dicho ordenamiento, cuando el monto de éstos exceda de cincuenta veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal elevado al mes. **Artículo 110.-** Cuando una instancia de inconformidad sea sobreseída o resuelta como infundada y en la misma se determine que se promovió para retrasar o entorpecer la contratación, se sancionará al inconforme con inhabilitación en

B) Jurisprudencias y tesis aisladas afines.

JURISPRUDENCIAS Y TESIS AISLADAS	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
Registro: 173160; Localización: Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXV. Febrero de 2007. Página 1900. Tesis: I.4°.A.555 A. Tesis Aislada. Materia (s): Administrativa.	y cinco veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal elevado al mes, en la fecha de la infracción	términos de la fracción IV del artículo 60 de la Ley y multa de acuerdo con el primer párrafo del artículo 59 de la Ley…
	Artículo 60 (fracción I).- La Secretaría de la Función Pública, además de la sanción a que se refiere el primer párrafo del artículo anterior, inhabilitará temporalmente para participar de manera directa o por interpósita persona en procedimientos de contratación o celebrar contratos regulados por esta Ley, a las personas que se encuentren en alguno de los supuestos siguientes: I. Los licitantes que injustificadamente y por causas imputables a los mismos no formalicen dos o más contratos que les haya adjudicado cualquier dependencia o entidad en el plazo de dos años calendario, contados a partir del día en que haya fenecido el término para la formalización del primer contrato no formalizado…	**Artículo 88 (fracción IV).-** Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley, respecto de las fracciones y párrafos de dicho precepto legal que a continuación se señalan, deberá considerarse lo siguiente: … IV. Se entenderá que el Oficial Mayor o equivalente de la dependencia o entidad cumple con lo dispuesto en el último párrafo, cuando ingrese a CompraNet la información de las personas a que hacen referencia las fracciones III, V y XIII de dicho artículo y en relación con aquéllas que señalan las demás fracciones, cuando se tenga conocimiento de la información que se prevé en las mismas; en ambos casos la información deberá incorporarse a CompraNet en un plazo de tres días hábiles, contados a partir de aquél en que disponga de dicha información. **Artículo 109 (segundo párrafo).-** Los licitantes que injustificadamente y por causas imputables a ellos no formalicen dos o más contratos con cualquier dependencia o entidad, dentro del plazo de dos años, serán sancionados en términos del primer párrafo del artículo 59 de la Ley por lo que respecta al segundo y sucesivos contratos no firmados, y se les inhabilitará conforme a lo dispuesto por la fracción I del artículo 60 de la Ley.
92.- Tratados internacionales: Se ubican jerárquicamente por encima de las leyes federales y en segundo plano respecto de la Constitución Federal.	**Artículo 4.-** La aplicación de esta Ley será sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados.	
	Artículo 26 (último párrafo).- La Secretaría de Economía, mediante reglas de carácter general y tomando en cuenta la opinión de la Secretaría de la Función Pública, determinará los criterios para la	**Artículo 36 (primer párrafo).-** En caso de que la dependencia o entidad convocante determine que una licitación pública que se ubique en el supuesto previsto en el inciso a) de la fracción II del artículo 28

B) Jurisprudencias y tesis aisladas afines.

JURISPRUDENCIAS Y TESIS AISLADAS	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
Registro: 192867; Tesis Aislada. Materia (s): Constitucional. Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: X, Noviembre de 1999. Tesis: P.LXXVII/99. Página 46.	aplicación de las reservas, mecanismos de transición u otros supuestos establecidos en los tratados. **Artículo 28 (fracción II, segundo párrafo).-** El carácter de las licitaciones públicas, será… II. Internacional bajo la cobertura de tratados, en la que sólo podrán participar licitantes mexicanos y extranjeros de países con los que nuestro país tenga celebrado un tratado de libre comercio con capítulo de compras gubernamentales, cuando resulte obligatorio conforme a lo establecido en los tratados de libre comercio, que contengan disposiciones en materia de compras del sector público y bajo cuya cobertura expresa se haya convocado la licitación, de acuerdo a las reglas de origen que prevean los tratados y las reglas de carácter general, para bienes nacionales que emita la Secretaría de Economía, previa opinión de la Secretaría de la Función Pública, y a) (Se deroga) b) (Se deroga) En los supuestos de licitación previstos en las fracciones II y III de este artículo, la Secretaría de Economía, mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación, determinará los casos en que los participantes deban manifestar ante la convocante que los precios que presentan en su propuesta económica no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminación de precios o subsidios.	de la Ley, puede tener el carácter de nacional, por existir oferta de origen nacional y reservas en los Tratados, deberá solicitar a la Secretaría de Economía, de conformidad con las reglas que emita con fundamento en el último párrafo del artículo 26 de la Ley, la inclusión y registro de dicho procedimiento en la reserva de los Tratados que correspondan. **Artículo 29 (segundo párrafo, fracciones VI y VII).-** La investigación de mercado podrá ser utilizada por la dependencia o entidad para lo siguiente: … VI. Elegir el procedimiento de contratación que podrá llevarse a cabo; VII. Determinar la conveniencia de aplicar alguna de las reservas contenidas en los capítulos de compras del sector público de los Tratados en relación al precio, cantidad, calidad y oportunidad de la proveeduría nacional; **Artículo 37 (primer párrafo).-** La Secretaría de Economía publicará una relación de los casos en los que, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 28 de la Ley, los licitantes deberán manifestar, bajo protesta de decir verdad, que los precios que se presentan en su propuesta económica no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminación de precios o subsidios. **Artículo 41 (fracción IV).-** Para la difusión del Proyecto de convocatoria a la licitación pública, deberá considerarse lo siguiente: … IV. Si la convocante lo estima conveniente, además de la difusión del Proyecto de convocatoria en CompraNet, podrá efectuar invitaciones para celebrar una reunión pública en la que los asistentes participen en la revisión del Proyecto de convocatoria y

B) Jurisprudencias y tesis aisladas afines.

JURISPRUDENCIAS Y TESIS AISLADAS	LAASSP	REGLAMENTO DE LA LAASSP
		presenten sus comentarios, salvo que se trate de Proyectos de convocatoria para las licitaciones públicas a que se refiere el inciso a) de la fracción II del artículo 28 de la Ley…

ANEXO 2. PROFESIONALIZACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS.

La Secretaría de Función Pública tiene como objeto, señalado en su página, actualizar y desarrollar los conocimientos de carácter normativo de los servidores públicos cuyas funciones se relacionen con las contrataciones públicas que se financian con recursos federales o bien, con créditos de organismos financieros internacionales, así como las relacionadas con el registro, afectación, disposición final y baja de bienes muebles, almacenes e inventarios.

Por lo que realiza cursos para la capacitación de los servidores públicos, como ejemplo:


SFP

Sistema de Inscripciones

25 de Abril de 2017

Subsecretaría de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas

Calendario de Cursosx

Ficha Tecnica	Identificación	Curso	Enero	Feb.	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Horarios
		CURSO BÁSICO DE COMPRANET (DIRIGIDO A ÁREAS DE CONTRATACIÓN)	13	2											
		AJUSTE DE COSTOS DIRECTOS A LOS PRECIOS UNITARIOS (DIRIGIDO A SERVIDORES PÚBLICOS QUE INTERVENGAN EN CONTRATACIONES PÚBLICAS)								11					
		MODIFICACIÓN DE CONTRATOS EN LA LAASSP (DIRIGIDO A SERVIDORES PÚBLICOS QUE INTERVENGAN EN CONTRATACIONES PÚBLICAS)				7				25					
		MODIFICACIÓN DE CONTRATOS EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS (DIRIGIDO A SERVIDORES PÚBLICOS QUE INTERVENGAN EN CONTRATACIONES PÚBLICAS)						16							

		REVISION DE COSTOS INDIRECTOS Y DEL FINANCIAMIENTO EN LOS P.U. (DIRIGIDO A SERVIDORES PÚBLICOS QUE INTERVENGAN EN CONTRATACIONES PÚBLICAS)				12					29				
		EL TESTIGO SOCIAL EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA (DIRIGIDO A SERVIDORES PÚBLICOS QUE INTERVENGAN EN CONTRATACIONES PÚBLICAS)			24										
		RECISIÓN DE CONTRATOS EN LA LEY DE OBRA PÚBLICA (DIRIGIDO A SERVIDORES PÚBLICOS QUE INTERVENGAN EN CONTRATACIONES PÚBLICAS)					26								
		SISTEMA DE PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS (SPAR) (DIRIGIDO A USUARIOS DEL SISTEMA, ES NECESARIO CONTAR CON NÚMERO DE USUARIO Y CONTRASEÑA)		24		28		30		25	29		24	8		
		ACCIONES DE CONTROL EN LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA APF (DIRIGIDO A OIC´S)		27				12							
		MEJORES PRÁCTICAS EN CONTRATACIONES PÚBLICAS (DIRIGIDO A SERVIDORES PÚBLICOS DE LA APF QUE INTERVENGAN EN CONTRATACIONES PÚBLICAS)					25		6						
		CONTRATACIONES CONSOLIDADAS (DIRIGIDO A ÁREAS CONTRATANTES O REQUIRENTES Y OIC´S)		21			22			21		19			
		USO DE CONTRATOS MARCO (DIRIGIDO A ÁREAS CONTRATANTES O REQUIRENTES Y OIC´S)		22			18			17		18			
		OFERTAS SUBSECUENTES DE DESCUENTOS (DIRIGIDO A ÁREAS CONTRATANTES O REQUIRENTES Y OIC´S)		15		19		14				17			
		TALLER DE HERRAMIENTAS ECONÓMICAS APLICADAS A LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS (DIRIGIDO A ÁREAS CONTRATANTES O REQUIRENTES Y OIC´S)		13		20		19		23					

		CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA BAJO LA CONDICIÓN DE PAGO A PRECIO ALZADO (DIRIGIDO A SERVIDORES PÚBLICOS QUE INTERVENGAN EN CONTRATACIONES PÚBLICAS)						21						
		CONTRATACION DE OBRA PÚBLICA BAJO LA CONDICIÓN DE PAGO A PRECIOS UNITARIOS (DIRIGIDO A SERVIDORES PÚBLICOS QUE INTERVENGAN EN CONTRATACIONES PÚBLICAS)					29								
		CAPÍTULO DE COMPRAS EN LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO (DIRIGIDO A SERVIDORES PÚBLICOS QUE INTERVENGAN EN CONTRATACIONES PÚBLICAS)								22					
		CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (APF, ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y PERSONAL ADSCRITO AL OIC, QUE INTERVENGAN EN CONTRATACIONES PÚBLICAS)		3			11			18			17			
33		INVESTIGACIÓN DE DENUNCIAS POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES Y POR FALTAS ADMINISTRATIVAS (DIRIGIDO A TOIC,TQ,TR, TA, ASÍ COMO DE SU PERSONAL AUXILIAR)		16		28		15		24		19				
		CONTRATACION DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS (APF, ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y PERSONAL ADSCRITO AL OIC, QUE INTERVENGAN EN CONTRATACIONES PÚBLICAS)		17								6				
		SISTEMA INTEGRAL DE QUEJAS Y DENUNCIAS CIUDADANAS (DIRIGIDO A SERVIDORES PÚBLICOS ADSCRITOS AL ÁREA DE QUEJAS DEL OIC Y QUE CUENTEN CON CLAVE DE ACCESO AL SIDEC)		23		27		22		24		25				
		EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR EN CONTRATACIONES PÚBLICAS (DIRIGIDO A SERVIDORES PÚBLICOS DE LA APF, OIC Y PERSONAL ADSCRITO AL OIC)						28								
		CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS (DIRIGIDO A OIC´S)							14						
		EL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIONES (DIRIGIDO A SERVIDORES PÚBLICOS DE LA APF, OIC Y PERSONAL ADSCRITO AL OIC)								28						
		LA INSTANCIA DE INCONFORMIDAD (DIRIGIDO A SERVIDORES PÚBLICOS DE LA APF, OIC Y PERSONAL ADSCRITO AL OIC).										30				

		DISPOSICIONES APLICABLES A LAS CONTRATACIONES FINANCIADAS CON CRÉDITOS EXTERNOS (DIRIGIDO A SERVIDORES PÚBLICOS QUE INTERVENGAN EN CONTRATACIONES PÚBLICAS)				21									
		DISPOSICIONES APLICABLES A LAS CONTRATACIONES FINANCIADAS CON CRÉDITOS EXTERNOS (DIRIGIDO A OIC´S)						9							
		INVESTIGACIÓN DE MERCADO EN LA LAASSP (DIRIGIDO A SERVIDORES PÚBLICOS QUE INTERVENGAN EN CONTRATACIONES PÚBLICAS)			3						23				
		INVESTIGACION DE MERCADO PARA LA OBRA PUBLICA (DIRIGIDO A SERVIDORES PUBLICOS QUE INTERVENGAN EN CONTRATACIONES PÚBLICAS)			17							10			
		CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS EN LA LAASSP (DIRIGIDO A SERVIDORES PÚBLICOS QUE INTERVENGAN EN CONTRATACIONES PÚBLICAS)					14					24			
		MECANISMOS DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS PARA OBRA PÚBLICA (DIRIGIDO A SERVIDORES PÚBLICOS QUE INTERVENGAN EN CONTRATACIONES PÚBLICAS)					19								
		OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS BAJO EL ESQUEMA DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN (DIRIGIDO A PERSONAL ADSCRITO A OIC´S)	26	22	30	24	25	28	27		25		27		